REPARTO QUEJA 040-2022-00226-01 DRA ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 20/09/2023 10:33

Para:Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>;**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

2 archivos adjuntos (484 KB)

F11001310304020220022601Caratula20230920103014.pdf; 8134.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha : 20/sept./2023

GRUPO RECURSOS DE QUEJA

CD. DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
001	8134	20/sept./2023

REPARTIDO AL DOCTOR (A)
ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

IDENTIFICACIO	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
1047421564	JOSE DANIEL GUARDO CARRASQUILLA		01
89020075671	BANCO PICHINCHA S.A.		02

OBSERVACIONES: 11001310304020220022601

BOG305SR
dlopezr

FUNCIONARIO DE REPARTO

11001310304020220022601

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **ADRIANA SAAVEDRA LOZADA**

Procedencia : 040 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310304020220022601
Instancia : Segunda Instancia
Clase de Juicio : Verbal
Recurso : Queja
Grupo : 32
Repartido_Abonado : REPARTIDO
Demandante : JOSE DANIEL GUARDO CARRASQUILLA
Demandado : BANCO PICHINCHA S.A.
Fecha de reparto : 20/09/2023

C U A D E R N O : 2

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Juzgado 40 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de septiembre de 2023 9:53
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: APELACIÓN AUTO Y QUEJA PROCESO 2022-00226

JUZGADO CUARENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 10 N° 14-33 Piso 2 Bogotá – Teléfono: 2863585
Email: ccto40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Doctor
OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.

E.S.D.

Un cordial saludo,

A través de la presente se remite cuaderno del expediente digitalizado, para el correspondiente trámite.

11001-31-03-040-2022-00226-00

Gracias por la colaboración prestada.

Atentamente,

JUAN CAMILO GÓMEZ PENAGOS
Asistente Judicial
JUZGADO CUARENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 10 N° 14-33 Piso 2 Bogotá – Teléfono: 2863585
Email: ccto40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

LINK EXPEDIENTE:

11001-31-03-040-2022-00226-00

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: Recurso de Súplica

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 15:28

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (10 MB)
archivo adjunto 1.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: juan jimmy bernal jaramillo <jimmybernalr1@hotmail.com>
Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 15:16
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Recurso de Súplica

Buenas tardes

HONORABLES
MAGISTRADOS SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF. RECURSO DE SUPLICA
Proceso Verbal. Apelación de Sentencias
Numero 11001-31-03-041-2017-00463-00
De José Leonardo Moreno Canon
Contra Luz Stella Bernal Jaramillo y o
Juan Jimmy Bernal Jaramillo

Yo Juan Jimmy Bernal Jaramillo mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, obrando como apoderado de Luz Stella Bernal Jaramillo y actuando en causa propia en el expediente de la referencia, con todo respeto me permito interponer recurso de suplica contra el auto de fecha 6 de septiembre de 2.023 mediante el cual fue negado el recurso de reposición.

PETICIONES

1. Formalmente me permito solicitar a este honorable Tribunal de la Sala Civil, modificar el auto de fecha 6 de septiembre de 2.023 mediante el cual negó el recurso de Reposición, presentado por el suscrito contra la providencia de fecha 18 de Agosto de 2.023 que declaro desierto el recurso de apelación.

Como consecuencia de la interposición del recurso de suplica, ruego a usted ordenar que el expediente pase al despacho del Magistrado que siga su turno, para que actúe como ponente en la resolución del recurso impetrado.

Les solicito muy comedidamente y con el respeto que se merecen a tan alta corporación, verifiquen el expediente en la parte de pruebas y van a comprobar los motivo de inconformidad por este sentencia.

SUSTENTACION DEL RECURSO

Me permito sustentar el recurso de suplica en los siguientes términos:

PRIMERO: Con fecha 6 de septiembre de 2.023, el honorable Tribunal de la Sala Civil de la Ciudad de Bogotá, considero no reponer el auto de fecha 18 de Agosto de 2.023, por el cual declaraba desierto el recurso de Apelación.

SEGUNDO: esta alta corporación declaro desierto el recurso de apelación interpuesto por el suscrito contra la providencia de fecha 7 de Junio de 2.023 emitida por el juzgado 41 civil del Circuito de Bogotá,

TERCERO: Como podrá observarse, el escrito de sustentación aparece en el termino de ejecutoria de la sentencia elaborada en el juzgado 41 Civil del

Circuito por escrito. Claramente sustentado, dando las razones y motivos contundentes además de pruebas por la cual solicite el recurso de apelación.

CUARTA: Radique el día 28 de agosto de 2.023, ante el honorable Magistrado Del Tribunal de la Sala Civil de Bogotá, recurso de Reposición, que lamentablemente el día 6 de septiembre de 2.023, no fue tenido en cuenta.

QUINTO: Por las anteriores razones, solicito, de la manera mas respetuosa. Proceder a modificar el auto de fecha 6 de septiembre de 2.023 mediante el cual no repone el auto que declara desierto el recurso de reposición, elaborado por el honorable Tribunal de la Sala Civil y en su lugar ordene el tramite que por ley corresponde, razón por la cual se interpone el presente recurso de suplica.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho los artículos 331 y 332 del C.G.P y demás normas que sean concordantes.

PRUEBAS

Solicito se tengan como tales la actuación surtida por esta corporación

COMPETENCIA

Es de competencia de esta alta corporación, sala civil, por encontrarse aquí el tramite del recurso y además por la misma naturaleza del recurso de suplica, por proceder contra un auto que por su esencia es aplicable, dictado por el magistrado ponente, tal como lo describe el articulo 73 del Código General del Proceso

NOTIFICACIONES

Las notificaciones serán recibidas en la direcciones anotadas en el escrito de reposición

Doy las gracias a tan honorable magistrado y me suscribo

Atentamente

Juan Jimmy Bernal Jaramillo
C.C. No 79.947.160 de Bogotá D.C.
T.P. No 122254 del C S de la J
Cel 3108744601
Jimmybernalr1@hotmail.com

REPARTO QUEJA 042-2019-00802-01 DR RICARDO ACOSTA BUITRAGO

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 19/07/2023 9:48

Para:Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

6 archivos adjuntos (760 KB)

2019-802 OFICIO TRIBUNAL recurso DE QUEJA Of. (1320).pdf; Certificación de envio de Expediente DIGITAL al H. TRIBUNAL, para surir (RECURSO de QUEJA, 2019-802).pdf; 2019-802 OFICIO TRIBUNAL apelación DEVOLUTIVO Of. (1321).pdf; Certificación de envio de Expediente DIGITAL al H. TRIBUNAL, para surir (RECURSO de APELACIÓN, 2019-802).pdf; 11001310304220190080201.pdf; 6209.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha : 19/jul./2023

GRUPO RECURSOS DE QUEJA

CD. DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
013	6209	19/jul./2023

REPARTIDO AL DOCTOR (A)
RICARDO ACOSTA BUITRAGO

IDENTIFICACIO	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
41791745	DEIBY SORAYA POVEDA MORA		01
41627387	PAULINA SILVA DE BAUTISTA		02

OBSERVACIONES: 11001310304220190080201

BOG305SR
dlopezr

FUNCIONARIO DE REPARTO

11001310304220190080201

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **RICARDO ACOSTA BUITRAGO**

Procedencia : 042 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310304220190080201

Instancia : Segunda Instancia

Clase de Juicio : Verbal

Recurso : Queja

Grupo : 32

Repartido_Abonado : REPARTIDO

Demandante : DEIBY SORAYA POVEDA MORA

Demandado : PAULINA SILVA DE BAUTISTA

Fecha de reparto : 19/07/2023

C U A D E R N O : 2

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 42 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de julio de 2023 8:05
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Remisión oficios No. 1320 y 1321

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARENTA Y DOS (42) CIVIL DEL CIRCUITO
CARRERA 10ª N° 14-33- Piso 13° TELÉFONO 2 82 46 79 **BOGOTA D.C.**

Email: ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Señores**:**
H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.
<*SALA CIVIL***> -REPARTO-**.
rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.go

REF**:**
PROCESO **:** VERBAL
<Pertenencia por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio>
No. 11001-31-03-042-**2019**-00**802**-00
DEMANDANTE(*S*) **:** DEIBY SORAYA POVEDA MORA.
DEMANDADO(*S*) **:** JOSÉ GERMAN GUTIERREZ SILVA,
PAULINA SILVA DE BAUTISTA **y** OTROS.

Comunicole que este Despacho Judicial, dispuso surtir dos [02] RECURSOS ante esa H. Corporación, así**:**
1). DE QUEJA conforme consta en el oficio remisorio No. 1320 de 17 de julio 2023.
2). DE APELACIÓN en el efecto DEVOLUTIVO, conforme da cuenta el oficio remisorio No. 1321 de 17 de julio 2023.

Por lo demás, se remite el link del expediente: 11001310304220190080200

El Secretario,



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARENTAY DOS CIVIL DEL CIRCUITODE BOGOTÁ, D. C.CARRERA 10 No. 14-33 - Piso 13. TEL. 2824679.
ccto42bt2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Fecha: Bogotá, D.C.,17 de julio de 2023.

Oficio No. 1320

Señor
Secretario Sala Civil
TRIBUNAL SUPERIORDE BOGOTÁ -SALA CIVIL-
Bogotá, D.C.

RADICACIÓN DEL PROCESO:11001-31-03-042-2019-00802-00

TIPO DE PROCESO: VERBAL.

CLASEY SUBCLASE DE PROCESO: PERTENENCIA.

EFECTO DEL RECURSO: DE QUEJA.

CLASE DE PROVIDENCIA RECURRIDA: AUTO____X__SENTENCIA _____

FECHA DE LA PROVIDENCIA: 03 DE MARZO DE 2023, **QUE DENEGÓ EL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto contra el proveído de 09 DE DICIEMBRE 2022, **NUMERALES "2."** y **"3."**, **QUE NEGÓ LA SOLICITUD DE: SUSPENSIÓN POR PREJUDICIALIDAD** y **DE SUCESIÓN PROCESAL**, en su orden.

FOLIOS Y CUADERNO DE LA PROVIDENCIA: CUADERNO 1, **ARCHIVO DENOMINADO**, **en su orden:** 0084AutoResuelveRecurso **y** 0079AutoResuelveSolicitudes,

NUMERO DE CUADERNOSY FOLIOS REMITIDOS: 03 CUADERNO, CONSTANTES DE:CUADERNO **1** CON 804 FOLIOS DIGITALES, CUADERNO **2** CON 74 FOLIOS DIGITALES, CUADERNO **3** CON 43 FOLIOS DIGITALES.

DEMANDANTE(S): DEIBY SORAYA POVEDA MORA, C.C: 41.791.745 DE Bogotá, CORREO ELECTRONICO: hectorisauro@gmail.com, gustavobquez@gmail.com.

APODERADO: HECTOR ISAURO VARGAS RODRIGUEZ, C.C. No. 3.058.545 DE GUATAVITA Y T.P. 93811 DEL C. S. DE LA J., CORREO ELECTRONICO: hectorisauro@gmail.com, gustavobquez@gmail.com,

DEMANDADO(S): PAULINA SILVA DE BAUTISTA, C.C. No. 41.627.387 de Bogotá D.C., CORREO ELECTRÓNICO: distribucionesbogota@hotmail.es, abogadospmc@gmail.com,

JESÚS ELENA SILVA C.C. No. 41.525.526 de Bogotá D.C., CORREO ELECTRÓNICO: fabimedinasi50@gmail.com, distribucionesbogota@hotmail.es.

DELFINA CAMPOS SILVA DE GUTIERREZ C.C. No. 41.691.523 de Bogotá D.C., CORREO ELECTRÓNICO: florgutierrez_21@hotmail.com.

GERMAN CAMPOS GUTIERREZ C.C. No. 5.882.980 de Chaparral Tolima, CORREO ELECTRÓNICO: abogadospmc@gmail.com,

CONSUELO GUTIERREZ SILVA C.C. 52.126.746 No., CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

JOSE GERMAN GUTIERREZ SILVA C.C. No. 80.439.775, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

CARLOS EDUARDO GUTIERREZ SILVA C.C. No. 79.769.920, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

ALFREDO GUTIERREZ SILVA C.C. No. 1.032.376.619, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

ADRIANA MARIA GUTIERREZ SILVA C.C. No. 53.092.555, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

OSCAR IVAN GUTIERREZ SILVA C.C. No. 1.010.175.583, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

APODERADO: YEFERSSON PÉREZ SANDOVAL, C.C. 1 1.024.518.641 de Bogotá D.C., y T.P. 344536 DEL C. S DE LA J., DIRECCIÓN: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com

APODERADO: ELIAS MORENO RODRIGUEZ, C.C. 17.159.290 de Bogotá D.C., y T.P. 26938 DEL C. S DE LA J., DIRECCIÓN: abogadospmc@gmail.com

APODERADO: ALEXANDER AMAYA MARTINEZ, C.C. 79.283.457 de Bogotá D.C., y T.P 103630 DEL C. S DE LA J., DIRECCIÓN: abogadospmc@gmail.com y CURADOR AD LITEM DR. ERNESTO VILLEGAS DUQUE, C. C: 16.646.884 DE BOGOTÁ Y T.P 40053 DEL C. S DE LA J. DIRECCIÓN: evillegas@zvabogados.com.

ENVÍO A ESA H. CORPORACIÓN, **POR PRIMERA VEZ**, EL PROCESO DE LA REFERENCIA.



Secretario

OBSERVACIONES:

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL TRIBUNAL

RECIBIDO EN LA FECHA: _____

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARENTAY DOS CIVIL DEL CIRCUITODE BOGOTÁ, D. C.CARRERA 10 No. 14-33 - Piso 13. TEL. 2824679.
ccto42bt2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Fecha: Bogotá, D.C.,17 de julio de 2023.

Oficio No. 1321

Señor
Secretario Sala Civil
TRIBUNAL SUPERIORDE BOGOTÁ -SALA CIVIL-
Bogotá, D.C.

RADICACIÓN DEL PROCESO:11001-31-03-042-2019-00802-00

TIPO DE PROCESO: VERBAL.

CLASEY SUBCLASE DE PROCESO: PERTENENCIA.

EFECTO DEL RECURSO: **DEVOLUTIVO.**

CLASE DE PROVIDENCIA RECURRIDA: AUTO____X__SENTENCIA _____

FECHA DE LA PROVIDENCIA: 20 DE ABRIL 2023 **QUE RACHAZO DE PLANO EL INCIDENTE DE NULIDAD.**

FOLIOS Y CUADERNO DE LA PROVIDENCIA: CUADERNO 3, **ARCHIVO DENOMINADO:** 002AutoResuelveSolicitud.

NUMERO DE CUADERNOSY FOLIOS REMITIDOS: 03 CUADERNO CONSTANTES DE: CUADERNO **1** CON 804 FOLIOS DIGITALES, CUADERNO **2** CON 74 FOLIOS DIGITALES, CUADERNO **3** CON 43 FOLIOS DIGITALES.

DEMANDANTE(S): DEIBY SORAYA POVEDA MORA, C.C: 41.791.745 DE Bogotá, CORREO ELECTRONICO: hectorisauro@gmail.com, gustavobquez@gmail.com.

APODERADO: HECTRO ISAURO VARGAS RODRIGUEZ, C.C. No. 3.058.545 DE GUATAVITA Y T.P. 93811 DEL C. S. DE LA J., CORREO ELECTRONICO: hectorisauro@gmail.com, gustavobquez@gmail.com,

DEMANDADO(S): PAULINA SILVA DE BAUTISTA, C.C. No. 41.627.387 de Bogotá D.C., CORREO ELECTRÓNICO: distribucionesbogota@hotmail.es, abogadospmc@gmail.com,

JESUS ELENA SILVA C.C. No. 41.525.526 de Bogotá D.C., CORREO ELECTRÓNICO: fabimedinasi50@gmail.com, distribucionesbogota@hotmail.es.

DELFINA CAMPOS SILVA DE GUTIERREZ C.C. No. 41.691.523 de Bogotá D.C., CORREO ELECTRÓNICO: florgutierrez_21@hotmail.com.

GERMAN CAMPOS GUTIERREZ C.C. No. 5.882.980 de Chaparral Tolima, CORREO ELECTRÓNICO: abogadospmc@gmail.com,

CONSUELO GUTIERREZ SILVA C.C. 52.126.746 No., CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

JOSE GERMAN GUTIERREZ SILVA C.C. No. 80.439.775, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

CARLOS EDUARDO GUTIERREZ SILVA C.C. No. 79.769.920, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

ALFREDO GUTIERREZ SILVA C.C. No. 1.032.376.619, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

ADRIANA MARIA GUTIERREZ SILVA C.C. No. 53.092.555, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

OSCAR IVAN GUTIERREZ SILVA C.C. No. 1.010.175.583, CORREO ELECTRÓNICO: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com,

APODERADO: YEFERSSON PÉREZ SANDOVAL, C.C. 1 1.024.518.641 de Bogotá D.C., y T.P. 344536 DEL C. S DE LA J., DIRECCIÓN: grupoiurex@gmail.com, yperezs01@gmail.com

APODERADO: ELIAS MORENO RODRIGUEZ, C.C. 17.159.290 de Bogotá D.C., y T.P. 26938 DEL C. S DE LA J., DIRECCIÓN: abogadospmc@gmail.com

APODERADO: ALEXANDER AMAYA MARTINEZ, C.C. 79.283.457 de Bogotá D.C., y T.P 103630 DEL C. S DE LA J., DIRECCIÓN: abogadospmc@gmail.com y CURADOR AD LITEM DR. ERNESTO VILLEGAS DUQUE, C. C: 16.646.884 DE BOGOTÁ Y T.P 40053 DEL C. S DE LA J. DIRECCIÓN: evillegas@zvabogados.com.

ENVÍO A ESA H. CORPORACIÓN, **POR PRIMERA VEZ**, EL PROCESO DE LA REFERENCIA.



Secretario

OBSERVACIONES:
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL TRIBUNAL **RECIBIDO EN LA FECHA:** _____ **FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE** _____

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO RV: SUATENTACION APELACIÓN PROCESO 11001310304420170026901

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 08/09/2023 10:28

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (62 KB)

APELACION SENTENCIA PROCESO 11001310304420170026901.docx;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: SINALCO SAS <sinalcoltda@hotmail.com>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 10:21
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUATENTACION APELACIÓN PROCESO 11001310304420170026901

ALIRIO HERNANDO SANCHEZ GARZON
ABOGADO
DIRECCION: CARRERA 7 No. 17-51 OFICINA 308
BOGOTA D.C.
CEL.: 314 237 88 25
E-MAIL: sinalcoltda@hotmail.com



HONORABLES

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

E. S. D.

MAGISTRADO PONENTE: DR. RICARDO ACOSTA BUITRAGO

REF.: PROCESO EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO, ENTABLADO POR MARIA DORIS VACA BUIITRAGO.

DEMANDANTES: GLADYS DE LA TORRE BOCANEGRA Y CARLOS EDUARDO BOCANEGRA DE LA TORRE

DEMANDADOS: CARLOS GUILLERMO LIEVANO ARAOZ Y OTROS.

RADICADO. 11001310304420170026901

ALIRIO HERNANDO SÁNCHEZ GARZÓN, mayor de edad, con domicilio profesional en la Carrera 7 No. 17-51 Oficina 308 de Bogotá, correo electrónico sinalcoltda@hotmail.com, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.449.294 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 47.637 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de los demandaos SONIA LILIANA LIEVANO ARAOZ Y CARLOS GUILLERMO LIEVANO ARAOZ, mayores de edad, de nacionalidad colombiana, identificados con las cédulas de ciudadanía Números 41.653.614 de Bogotá y 19.457.714 de Bogotá, respectivamente , domiciliados y residentes en la ciudad de Bogotá, por medio del presente escrito me dirijo Respetuosamente a los Honorables Magistrados , con el fin de sustentar recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 06 de junio de 2023, a fin de se revoque dicha providencia y en su lugar se declare probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, de conformidad con los siguientes argumentos:

Mediante documento privado de fecha 01 de febrero de 2012, contrato de arrendamiento de comercio, que obra en el proceso, GLADYS DE LA TORRE BOCANEGRA, ARLOSEDUARDO BOCANEGRA DE LA TORRE, concedieron en arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle

106 No. 21-31 de Bogotá, LOTE 3 MANZANA X SECTOR 1 URBANIZACIÓN NAVARRA, Matricula inmobiliaria No. 50N- 315320, a mis poderdantes SONIA LILIANA LIEVANO ARAOZ, CARLOS GUILLERMO LIEVANO ARAOZ TORRE y LILIA ARAOZ DE LIEVANO ya fallecida.

Con base en el contrato de arrendamiento antes mencionado, los arrendadores GLADYS DE LA TORRE BOCANEGRA, CARLOS DUARDO BOCANEGRA DE LA TORRE, iniciaron un proceso de restitución de inmueble arrendado contra mis poderdantes SONIA LILIANA LIEVANO ARAOZ, CARLOS GUILLERMO LIEVANO ARAOZ TORRE y LILIA ARAOZ DE LIEVANO ya fallecida, proceso radicado con el Número 11001313044201700269 00, cuyo trámite correspondió al Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá.

El día 17 de mayo de 2017 , mediante el auto admisorio de la demanda , se trabo la litis e inicio un debate judicial , dentro del proceso de Restitución de Inmueble Arrendado anteriormente mencionado.

Después de más de dos años de contienda judicial , en audiencia correspondiente al artículo 372 del C.G.P., celebrada el día 17 de junio de 2019, el Juzgado dio por terminado en Proceso, aceptando el acuerdo conciliatorio a que llegaron las partes, consistente en conciliar la totalidad de las pretensiones y las excepciones formuladas a la demanda.

En la conciliación celebrada por las partes el día 17 de junio de 2019, la cual genero la terminación del proceso, los demandantes dispusieron que el 75 % de las sumas de dinero que recibieran por concepto de pago del canon de arrendamiento hasta el día 31 de enero de 2020, le fueran cancelados a la señora demandante GLADYS DE LA TORRE BOCANEGRA, y el 25% restante le fuera cancelado a señora MARÍA DORIS VACA BUITRAGO.

Los demandantes GLADYS DE LA TORRE BOCANEGRA y CARLOS

EDUARDO BOCANEGRA DE LA TORRE, nunca realizaron cesión de derechos del contrato de arrendamiento celebrado sobre el inmueble ubicado en la Calle 106 No. 21-31 de Bogotá, LOTE 3 MANZANA X SECTOR 1 URBANIZACIÓN NAVARRA, Matricula inmobiliaria No. 50N-315320, ni tampoco realzaron cesión de derechos litigiosos sobre el proceso radicado con el Número 11001313044201700269 00, a favor de la señora MARÍA DORIS VACA BUITRAGO, es decir, a pesar de que dispusieron que un porcentaje de los cánones de arrendamiento le fueran cancelados a la señora VACA BUITRAGAO, conservaron siempre la calidad de ARRENDADORES Y DEMANDANTES, desde el momento de iniciación del demanda hasta la terminación del proceso.

Es claro que los arrendadores y demandantes GLADYS DE LA TORRE

BOCANEGRA y CARLOS EDUARDO BOCANEGRA DE LA TORRE, dispusieron en la conciliación que el 25 % de los dineros correspondientes al canon de arrendamiento le fueran cancelados a la señora MARÍA DORIS VACA BUITRAGO, es decir que esta última estaba facultada para recibir el pago de ese 25%, pero al no habérsele cedido derechos sobre el contrato de arrendamiento , ni habérsele cedido derechos litigiosos sobre el proceso Número 11001313044201700269 00,no está legitimada en la cusa para iniciar ningún tipo de acción legal ,mucho menos la ejecutiva para el reconocimiento y cobro de estas sumas de dinero, mucho menos de la cláusula penal pactada en un documento donde no es parte ,ni cesionaria de derechos, carece de legitimación en la causa no la tiene y nuca la podrá tener, por ningún medio, ni en ninguna instancia judicial, porque el proceso y contrato de arrendamiento del cual emanan los derechos ya se encuentra terminado desde el día 17 de junio del 2019, adicionalmente la cláusula penal , esta contenida en un documento firmado con posterioridad a la terminación del proceso , el cual no tiene ninguna validez, ni aplicación.

La legitimación en la causa consiste en la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien debe responderle, es decir, la identidad de la persona del actor con la persona a la cual se le concede la acción - legitimación activa- y la identificación de la persona del demandado contra la persona frente a la cual es concedida la acción - legitimación pasiva -. Este presupuesto de la acción es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, la cual ésta ausente no constituye impedimento para desatar el fondo del litigio, sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor, pues sí se reclama un derecho por quien no es titular o frente a quién no es el llamado a responder, debe negarse la pretensión del demandante en sentencia que tenga fuerza juzgada material a fin de terminar definitivamente el litigio, que es lo que debe hacerse en el caso que nos ocupa, pues la demandante MARÍA DORIS VACA BUITRAGO no esta legitimada en la causa , no goza de la facultad o titularidad para demandar a mis poderdantes, por una causa o derecho controvertido.

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto, mediante una decisión o fallo. En tal sentido, es una forma especial de poner fin al proceso, siendo el tercero que dirige esta clase de conciliación el Juez de la causa, quien además de proponer fórmulas de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, que es exactamente lo que sucedió en el caso que nos ocupa.

Terminado el Proceso de restitución de inmueble arrendado mediante un mecanismo alternativo de resolución de conflictos , el único

documento que presta mérito ejecutivo y que puede ser tenido en cuenta como base de una ejecución es el Acta de Conciliación , ahora bien , el hecho de que la parte demandante haya dispuesto que parte de sus derechos económicos se le pagaran a un tercero, en este caso MARÍA DORIS VACA BUITRAGO, eso en ningún momento le da la calidad de parte, ni la enviste o faculta para demandar.

El acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada, es decir que los acuerdos adelantados, en este caso ante el Señor Juez, aseguran que lo consignado en ellos no sea de nuevo objeto de debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Esta Conciliación es un acto jurisdiccional, porque la decisión final, que el Señor Juez avalo mediante un acta de conciliación, tiene la fuerza vinculante de una Sentencia y esta sentencia no puede ser modificada por un documento privado de las partes, como aquí se pretende.

Esta Acta de Conciliación sigue incólume y vigente ,nunca ha sido atacada ,ni declarada judicialmente su nulidad, está plenamente amparada, blindada por el principio de la seguridad jurídica, adicionalmente por cuanto la referida actuación no versa sobre objeto o causa ilícita y las partes eran plenamente capaces para conciliar.

El día 31 de enero de 2020, las partes, sin tener en cuenta sus apoderados, hecho que era necesario pues se trataba de una actuación ante un juez de la categoría Civil Circuito, donde por el ius Postulandi, tenían que actuar a través de abogado, presentaron escrito denominado “MODIFICACIÓN FECHA DE ENTREGA DE INMUEBLE”, pretendiendo en forma inadmisible modificar el Acta de Conciliación, valga decir la Sentencia, en el cual establecían una nueva fecha para la entrega del inmueble el 31 de enero de 2022,dejando expresamente pactado que la prórroga de la entrega no constituía un nuevo contrato de arrendamiento , pero no solo eso sino que supuestamente modificaban el contrato de arrendamiento base del proceso de restitución ,contrato ya legalmente terminado, prorrogándolo por dos años más , estableciendo el canon de arrendamiento, los incrementos, la cláusula penal, deudor solidario, fecha y forma de pago , merito ejecutivo.

Desde luego este documento no fue tenido en cuenta por el Juzgado, que en su momento manifestó en forma contundente que el proceso ya fue terminado mediante acta del 17 de junio de 2019, luego carece absolutamente de validez y no produce efectos jurídicos.

No puede entenderse prorrogado un contrato de arrendamiento, cuando el proceso y contrato ya se encontraban legalmente terminados, si era del caso establecer canon de arrendamiento, incrementos, cláusula penal, deudor solidario, merito ejecutivo, día de entrega, fecha y forma

de pago, debían haber celebrado un nuevo contrato de arrendamiento, pero no lo hicieron, es más, consignaron que el escrito no constituía un nuevo contrato de arrendamiento.

Entonces si no firmaron nuevo contrato de arrendamiento y el contrato base del proceso de restitución de inmueble arrendado, era imposible de prorrogar porque ya se encontraba terminado tanto el contrato como el proceso, consecuencialmente el documento denominado "MODIFICACIÓN FECHA DE ENTREGA DE INMUEBLE", carece de validez absoluta y no produce efectos jurídicos, por lo tanto, mal puede la demandante MARIA DORIS VACA BUIITRAGO, iniciar acción ejecutiva por obligaciones contenidas en el escrito antes mencionado, además por cuanto ya lo tratamos suficientemente, carece de legitimación en la causa, pues nunca se le cedieron derechos sobre el contrato de arrendamiento, ni se le cedieron derechos litigiosos.

Ahora , mucho tiempo después , el señor Juez, en forma inexplicable aduce que el documento que modifico la conciliación ,valga decir que modifico la sentencia, se le puso en conocimiento de las partes y no se interpuso ningún recurso en su contra que por lo tanto quedo en firme, respecto a lo cual manifestamos que contra dicho documento no procedía ningún recurso por la sencilla razón que el proceso ya se encontraba terminado, este sería el único caso en que después de encontrarse ejecutoriada , se modifique la providencia o actuación que da por terminado un proceso judicial, nótese que en auto notificado por estado el 10 de febrero de 2020 el Juez 44 Civil del Circuito de Bogotá manifestó:… " Obre en autos la documental visible a folios 590 a 592 , en conocimiento de las partes su llegada y agregación. Se le Pone en conocimiento a las partes que el proceso ya fue terminado mediante acta del 17 de junio de 2019… ", es decir nunca se corrió traslado ,porque no se podía correr traslado de dicho documento, por cuanto el proceso ya se encontraba terminado, para que ahora el señor juez venga a decir que quedo en firme, algo que nunca podía quedar en firme ,por no tener ninguna validez ,ni aplicación.

El señor Juez manifiesta que no se tachó de falso el documento que modifico la conciliación y pues claro no se podía tachar de falso un documento que efectivamente lo firmaron varias personas, cosa muy diferente es que ese documento tenga validez para modificar una Conciliación con carácter de sentencia que dio por terminado un proceso. Entonces claramente se puede predicar la inexistencia de obligaciones contenidas en escrito presentado por las partes al juzgado el día 31 de enero de 2020, al carecer de validez y no producir efectos jurídicos. Si el documento presentado como ya se dijo no podía modificar la Conciliación, mucho menos podía modificar un contrato de arrendamiento que ya se había dado por terminado legalmente en la misma conciliación.

No sobra agregar como se manifestó claramente en el proceso que respecto a la demandante se puede predicar válidamente que se presenta falta de legitimación en la causa por activa, ausencia de causales para demandar y cobro de lo no debido, toda vez que uno no puede demandar sin tener la calidad de parte para hacerlo y sin que respecto a las obligaciones que pretende cobrar exista un sustento legal, pues aquí todas las obligaciones emanan única y exclusivamente de un proceso de restitución de inmueble arrendado, de una conciliación , actuaciones judiciales en las cuales ella nunca fue parte , nunca se le cedieron derechos sobre el contrato de arrendamiento objeto del proceso ,ni litigiosos por parte de los demandantes.

Solicito comedidamente a los Honorables Magistrados , que, en el momento de dictar Sentencia de Segunda Instancia, sean tenidos en cuenta los argumentos esbozados en el presente escrito para que se revoque la sentencia de primera instancia y se declaren probadas las excepciones de mérito interpuestas por la parte demandada.

De los Honorable Magistrados ,

Atentamente,



ALIRIO HERNANDO SÁNCHEZ GARZÓN

C.C. No. 19.449.294 BOGOTÁ

T.P. No. 47.637 del C.S. J.

E-mail : sinalcoltda@hotmail.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CHAVARRO MAHECHA RV: SUSTENTACION APELACION Rad.: 11001310304520180003901

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 04/09/2023 8:51

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (828 KB)
APELACION_SENTENCIA_2_SUSTENTACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 8:24
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: joseforerob@gmail.com <joseforerob@gmail.com>
Asunto: RV: SUSTENTACION APELACION Rad.: 11001310304520180003901

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: Jose M Forero <joseforerob@gmail.com>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 8:22

Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTACION APELACION Rad.: 11001310304520180003901

Respetuosamente adjunto escrito de SUSTENTACIÓN DE APELACIÓN en proceso de la referencia
11001310304520180003901
Agradezco adjuntar la expediente y ACUSAR RECIBO
GRACIAS
josemforerob

PUERTO FORERO & ASOCIADOS
Abogados Especializados
Asesores

Administrativo – Ambiental – Comercial - Tributario - Penal – Electoral

HONORABLES
MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
E. S. D.

Ref.: SUSTENTACION APELACION SENTENCIA
Dda.: PERTENCIA/RECONVENCION
PROCESO ORDINARIO
DTE: ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO
DDO: ISABEL BAUTISTA DE FORERO
No. de Rad.: 2018-0039

JOSE M. FORERO BAUTISTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Fusagasugá, abogado titulado con T. P. No. 20118 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi propio nombre y representación en mi calidad de demandado y demandante en RECONVECION, estando dentro del término consagrado en el Artículo 14 del Decreto 806 de 2020, hoy Articulo 12 de la Ley 1213 de 2022, respetuosamente sustento el recurso de apelación solicitado por el suscrito demandado y demandante en reconvención y concedido por la señora Juez 46 Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, contra la sentencia dictada el día 26 de Abril de 2023 y mediante la cual, niega las pretensiones de la demanda principal y declara no probados los hechos de la demanda de RECONVENCION, sin además ordenar lo consecuente a su decisión en la demanda principal, como la condena en costas y perjuicios ocasionados; la cancelación de los registros de medidas: ni la entrega del bien objeto del proceso al demandado, sin tener en cuentas las excepciones de fondo presentadas como fundamento de los perjuicios recibidos y de acuerdo a las siguientes

Causas del Recurso:

a – Haber declarado no probados los supuestos de hecho de la demanda de Reconvención presentada por el demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA dentro del presente proceso de pertenencia, existiendo abundante prueba testimonial e indiciaria que los confirman.

b – No haberse ordenado la cancelación de los registros de medidas cautelares; la entrega del bien trabajo; ni condenado al demandado en costas del proceso ni en perjuicios a pesar de no haber probado el demandante, siendo de su resorte, los elementos necesarios para decretar la posición alegada, tales como la tenencia del bien con “ánimo de señor y dueño”; la inexistencia “de violencia” en su posesión “quieta y pacífica”; la “buena fe” de su posesión existiendo prueba testimonial y documental en contrario que confirma la clandestinidad y la

inexistencia de estos elementos necesarios para la declaratoria de pertenencia por posesión, y en consecuencia, no haberse tenido en cuanta lo prescrito en el Articulo 961 t ss. del Código Civil; procediendo en consecuencia a sustentar la apelación interpuesta, en la siguiente forma:

1 – DE LA SENTENCIA

1.1. La señora juez en la sentencia declara no probados los hechos que alegados y probados testimonial e indiciariamente confirman la existencia de un "contrato de comodato" entre los tenedores del inmueble objeto de la pertenencia y el demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA, inmueble trabado en un proceso de SUCESION en donde al demandante ROBER ENRIQUE SOLER FORERO no se le acepto la oposición realizada dentro de la diligencia de secuestro allí realizada.

1.2. La señora Juez 46 Civil del Circuito de Bogotá, dicto sentencia negando la pretensión de la demanda al no haberse podido establecer la continuidad de la presunta posesión alegada en la demanda, pues al tiempo alegado en ella se interponía la posesión ejercida por mi señora madre hasta el día de su fallecimiento; la tenencia real y efectiva ejercida por su hermana Martha Consuelo Moncaleano que al parecer fue de más de quince años[1]; y, la tenencia que ejerció el señor HAROLD SOLER FORERO de quien quedo establecido, vivió como comodatario por un tiempo indeterminado en el inmueble objeto de este proceso, después de haber sido sacado de ese inmueble por mi propia madre, hecho que el suscrito ignoraba; tenencia que ejerció hasta el día de su fallecimiento que ocurrió al parecer antes del año 2015 como fecha en que, coincidencialmente fue desplazada violentamente por el demandante Robert Enrique Soler su medio hermana la comodataria y arrendataria Martha Consuelo Moncaleano.

1.3. La sentencia dictada en este proceso a pesar de negar las pretensiones de la demanda, sin considerar las excepciones de fondo presentadas, **no ordena la restitución del inmueble al demandado ni la cancelación de las medidas preventivas adoptadas** por el Juzgado que, en su oportunidad, fueren registradas y que hoy en día afectan el dominio del inmueble trabado en el presente proceso de pertenencias, cancelación que se debió decretar tal como se ordena en el Código General del Proceso[2]

1.4. La sentencia no considera las excepciones de fondo presentadas por el demandado en su contestación, a excepción de la prescripción de la acción ordinaria en consideración con el tiempo alegado en la demanda (**1995 a 2017**), negando la existencia de la prescripción de la acción solicitada; pronunciándose tímidamente al respecto de otras excepciones que, conduciendo a la sanción del usurpador, textualmente se interpusieron en la

[1] 1999 a 2015.- Despojada de su tenencia y/o posesión hoy haces más de ocho (8) años.
[2] **LIBRO CUARTO, MEDIDAS CAUTELARES Y CAUCIONES, TÍTULO I, MEDIDAS CAUTELARES, CAPÍTULO I, Normas Generales,** Arts., 590, 591

contestación de la demanda.

1.5. La sentencia olvida, a pesar de su decisión, ordenar la cancelación de las medidas preventivas registradas y la entrega del inmueble al demandado.

Queda en firme, en consecuencia, **el derecho de dominio y la posesión que por sucesión se le otorgo a favor del demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA**, con la aprobación de la PARTICION dentro del proceso de sucesión de ISABEL BAUTISTA VDA DE FORERO Radicado bajo el No. 11001311000520160091300 tramitado por el Juzgado 5º de familia tal como y como consta en ese proceso como prueba decretada, traslada y agregada al presente expediente, en donde en diligencia de secuestro el demandante ROBERT ENRIQUE SOLER se opone por POSESION **como presunto heredero**, hoy tenedor comodatario del inmueble objeto de la sucesión, **OPOSICIÓN** que, se repite, le fue negada por el señor Juez 5º de Familia dentro del proceso mencionado.

2 - SINTESIS DEL PRESENTE PROCESO

2.1. No obstante, la existencia de proceso de Sucesión abierto y radicado día 31 de Agosto de **2016**, se inicia paralelamente el presente proceso de **solicitud de pertenencia** presentada clandestinamente por uno de los presuntos herederos y plurales tenedores del inmueble señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO** en contra de la causante ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d.), el día 11 de Mayo de **2018**; demanda que correspondió conocer al Juzgado 45 Civil del Circuito de la Ciudad de Bogotá, y por traslado de competencia de acuerdo a lo ordenado por el artículo 121 del C.G.P., al Juzgado 46 ibidem.[3]

2.2. La demanda de pertenencia fue presentada en contra de mi señora madre la causante **ISABEL BAUTISTA DE FORERO** (q.e.p.d.), por el presunto heredero ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO pero inadmitida, se dirigió en contra del heredero deferido por la ley JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA e INDETERMINADOS **sin mencionar a los restantes comuneros tenedores conocidos** a pesar de ser sus hermanos con los cuales convivio en vida de mi señora madre y ser tenedores comodatarios reales del inmueble objeto del litigio, desobedeciendo lo ordenado por el señor Juez en su auto de inadmisión sobre sobre los "*determinados, si los conoce*"[4] en un acto de fraude procesal ya denunciado.

---

[3] El demandante presento poder en el Juzgado5o de Familia el día 13 de Octubre de 2017
[4] Folio 34 05-Marzo-2018 - Proceso Pertenencia 2018-0039

"….

1. Dirija la demanda en contra de los herederos determinados, si los conoce y los indeterminados de la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO. Al respecto téngase en cuenta que mediante documento obrante a folio 22 se acredita el fallecimiento de la mencionada señora y por tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones.

.."

2.3. El demandante pretende obtener el dominio del inmueble a que se refiere la presente demanda, por prescripción adquisitiva extraordinaria, **al haber presuntamente poseído tal inmueble desde el año de 1995,** fecha que, según su dicho, la posesión le fue transferida por la muerte de su progenitora Ana Isabel Forero de Soler, quien según el demandante Robert Soler ostentaba la posesión de tal inmueble, desconociendo flagrantemente la posesión de mi madre, la causante, tergiversando tal fecha con la única intención de desconocer el compromiso existente entre los presuntos herederos y el heredero principal JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA realizado días después del fallecimiento de mi señora madre.

2.4. En consecuencia, el suscrito demandado presento DEMANDA DE RECONVENCIÓN solicitando la terminación de un contrato de comodato existente entre las partes, con la consecuente entrega del bien inmueble trabado en este proceso, habiendo sido negada esa pretensión por falta de prueba ignorando que se trata de un "contrato real y gratuito" que se perfecciona solo con la entrega y que siendo principal no tiene requisito alguno ante la existencia de la tradición que lo perfecciona, desconociendo la prueba testimonial existente, la cual resulta clara, contundente y conteste con la prueba indiciaria existente en el presente proceso.

2.5. Solicitada la "prescripción extintiva de la acción" fue negada, por cuanto no se pudo, según la sentencia, determinar el termino de posesión alegado, cuando un estudio juicio nos indica que según lo consignado en la demanda han transcurrido más de veintitrés años de la presunta posesión alegada, sin que caprichosamente se pueda reformar el "petitum de la demanda" para negar la "prescripción de la acción ordinaria" pues se violaría el debido proceso y el derecho de defensa del demandado.

2.6. No obstante, el indicio indica que la presunta posesión la ejerce violentamente el demandado a partir del desplazamiento que por la fuerza hiciere de su propia hermana quien en ese momento tuviere la doble condición de comodataria y arrendataria del inmueble, aprovechando el fallecimiento de su hermano HAROLD SOLER que como co-comodatario ejercía la tenencia del inmueble.[5]

2.7. Sin embargo, la señora Juez dicta sentencia en contra del demandante ROBERT SOLER FORERO, no accediendo a lo solicitado en las excepciones presentadas ni en la demanda de reconvención, por no haberse podido determinar, según el concepto de la señora juez, el tiempo de su presunta posesión, cuando ésta, sin necesidad de dilucidar su término, se encuentra viciada por la falta del *"animus",* la violencia y la mala fe ejercida y demostrada por el demandante, no existiendo prueba proveniente del demandante que indique la existencia de estos ineludibles requisitos.

---

[5] Cfr.: Folio 85 del expediente digitalizado "AUDIENCIA DE CONCILIACION" como prueba traslada

2.8. La sentencia no condena ni en costas, ni en perjuicios a pesar de estar probado la violencia y deslealtad filial ejercida por el demandante **Robert Soler Forero** en contra del demandado y de los comuneros tenedores; el estado de **ruina del inmueble** dado en comodato y probado por el juzgado; el incumplimiento del comodato al no haber residido en el lugar cambiando su destinación, amén del rompimiento de la promesa de "vivir en paz" como causa y origen del permiso otorgado por el heredero principal, aspectos que tímidamente toca la sentencia, sin profundizar en sus consideraciones ni asignarle consecuencia jurídica alguna.
*

2.9. No se ordena la Cancelación de los Registros ordenados como medidas Cautelares, dentro del presente proceso, tal como lo indica la lógica y el procedimiento al fallar en contra de las peticiones del demandante.

2.10. No declara, a quien le corresponde la posesión y el dominio del inmueble trabado en el proceso, dejando en el limbo uno de los elementos esenciales de la propiedad y objeto del proceso, tornándose contradictoria en ese aspecto con lo decidido por el señor Juez 5º de Familia.

2.11. No ordena, la entrega del inmueble a su demandado opositor, como consecuencia de la decisión, ni señala un periodo perentorio para su entrega. como consecuencia lógica de la sentencia.

2.12. No condena al demandante al pago de los perjuicios ocasionados a pesar de estar probado el contrato de comodato existente entre las partes y la mala fe del demandante con su marrullera y clandestina actuación al demandar solo a la causante ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d) sin mencionar al heredero principal, como tampoco a los **comuneros bien conocidos por él y ocupantes del inmueble,** desatendiendo la advertencia que le hiciera el señor juez al inadmitir esta demanda[6]; la violencia ejercida en contra de uno de la arrendataria y comunera MARTHA CONSUELO MONCALEANO, su hermana; y, el grave deterioro del inmueble que anula su pretensión de "*señor y dueño*" hecha por el demandante; todo, después de presentarse al proceso de sucesión y solicitar su inclusión como heredero.

---

[6] Folio 34 del Expediente Digital. Dirigir la demanda contra los herederos determinados, si los conoce…

> 1. Dirija la demanda en contra de los herederos determinados, si los conoce y los indeterminados de la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO. Al respecto téngase en cuenta que mediante documento obrante a folio 22 se acredita el fallecimiento de la mencionada señora y por tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones.

3 - DE LA PRUEBA INDICIARIA

El haberse "*desaparecido*" el demandante en reconvención José Milcíades Forero Bautista por un largo tiempo del inmueble causado en sucesión por su madre y comprobarse la presencia de tenedores ligados familiarmente y con presuntos derechos sucesorales en este inmueble, es un indicio contingente que puede significar:

a) La tenencia y posesión del bien inmueble en cabeza de comuneros que, desde la muerte de la presunta causante Ana Isabel Forero (q.e.p.d.) madre del demandante, ejercieron la posesión de buena fe, en forma pacífica con ánimo de señor y dueño; **tal como NO fue probado; o,**

b) La existencia de tenedores autorizados por el heredero legal, para el uso gratuito de un inmueble que lo releva de las obligaciones de conservación, mantenimiento y pago se servicios y de impuestos como obligaciones inherentes a su uso, consecuencia de una entrega o tradición voluntaria y altruista a personas de "buena fe" del bien inmueble trabado en el presente proceso, en su razón a una presunta solidaridad familiar.

Al quedar huérfana de prueba la naturaleza de la "tenencia por posesión" ejercida por el demandante y solicitada por éste, queda probado, la hipótesis b) con los siguientes hechos probados:

3.1. El no pago de ningún impuesto y el aparente abandono del inmueble por parte del demandado JOSE M FORERO BAUTISTA, que se explica por la "omisión del ejercicio de actos de mera facultad y mera tolerancia" a que tiene derecho el comodante, sin efectos sobre su posesión de acuerdo con la ley, lo que conllevaría a una tenencia pacifica proporcionada voluntariamente por el comodante a sus comodatarios, con la existencia de título no traslativo de dominio.

3.2. La apertura del proceso de Sucesión de la causante ISABEL FORERO BAUTISTA (q.e.p.d.) por parte del comodante a nombre propio y con reconocimiento expreso de los presuntos herederos[7] por representación considerados como comodatarios, califica la buena fe del demandado en este proceso JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA.

3.3. La presentación procesal de estos comodatarios, Rober Soler y Martha Moncaleano a la sucesión reclamando su inclusión como tales, reconociendo a la causante y al heredero principal, indican sin lugar a dudas su condición de presuntos herederos comodatarios y no de poseedores, destacándose su lucha jurídica por su reconocimiento como herederos, utilizando los recursos ordinarios y extraordinarios

[7] Cfr.: Folio 14 y 22c del proceso digital de sucesión de ISABELBAUTISTA DE FORERO

consagrados por la ley; e incluso, haber llamado a engaño al señor Juez[8] que reconociera al hoy demandante Robert Soler como heredero, para revocar posteriormente su decisión tal como consta dentro del proceso sucesorio, hecho que en la misma forma fue denunciado.

3.4. El haber buscado la testigo y comodataria MARTHA MONCALEANO FORERO, como está probado, el concurso del heredero JOSE M FORERO BAUTISTA, para hacerlo comparecer ante la fiscalía a declarar a su favor es el reconocimiento expreso de su autoridad como comodante y arrendador de la solicitante, pues su testimonio ratificaría[9] la naturaleza de su tenencia y el usufructo de la que era despojada.[10]

3.5. En la misma forma, la búsqueda sin éxito realizada por el señor Harold Soler Forero[11] en la época en que fue despojada de la tenencia la señora Martha Consuelo Moncaleano, a mi antiguo sitio de residencia de la cual me había alejado por el año 2013, no tenía otro objetivo sino el buscar ayuda en mi autoridad como comodante al no ser incluido dentro de la presente demanda de pertenencia.

3.6. El haber firmado la testigo y tenedora MARTHA MONCALEANO FORERO un contrato de arrendamiento "gratuito"[12], para justificar documentalmente la tenencia del inmueble ante la violencia sistemática ejercida por su medio hermano demandante Robert Enrique Soler, indica la autoridad que ejercía el comodante dejando en claro la naturaleza de su tenencia con título no traslativo de dominio.

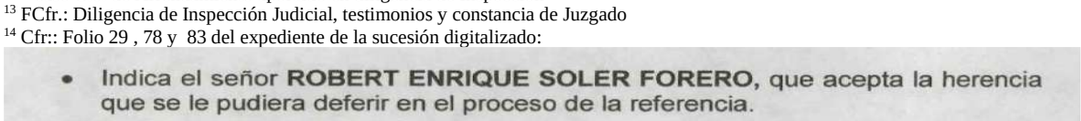
3.7. La explotación económica del inmueble trabado en el presente proceso por parte del demandante Robert Soler, frente a su ruinoso estado de conservación[13], indica que la tenencia que ejercía el demandante era con fines de lucro y explotación del inmueble y no de conservación con "*ánimo de señor o dueño*".

3.8. La presencia en dos oportunidades del comodatario ROBERT ENRIQUE SOLER en la sucesión entablada por el comodante, ACEPTANDO la herencia[14] y reclamando su partición en la sucesión indica el reconocimiento de la causante y del heredero, reconocimiento del dominio que desde luego le impide usucapir, tonándose contradictorio con la presente acción.

3.9. El "fraude procesal"[15] que realizo el demandante **Robert Soler Forero** al obtener su reconocimiento como heredero, calidad que fue revocada

---

[8] Fraude procesal
[9] Cfr.: Denuncia Penal elevada por Martha Consuelo Moncaleano contra el demandante Robert Soler
[10] Véase parte final del archivo 00023.MTS (00024.MTS) de diligencia presencial de Inspección al inmueble llevada a cabo el día 11 de Abril de 2023.
[11] Cfr.: Declaración del señor Jenaro Puerto en diligencia de Inspección
[12] Véase Cto. de Arrendamiento aportado en diligencia de Inspección
[13] FCfr.: Diligencia de Inspección Judicial, testimonios y constancia de Juzgado
[14] Cfr:: Folio 29 , 78 y 83 del expediente de la sucesión digitalizado:


- Indica el señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO**, que acepta la herencia que se le pudiera deferir en el proceso de la referencia.

[15] Denuncia penal Rad.: 2906000396202312446

por el señor Juez de familia al caer en cuenta del engaño, indica el desespero del demandante por el consciente conocimiento de su situación jurídica con respecto a sus derechos sucesorales y la naturaleza de la tenencia del inmueble objeto de este proceso.[16]

3.10. La denuncia penal presentada por la arrendataria y comodataria MARTHA CONSUELO MONCALEANO, denota la violencia en la posesión ejercida por el demandante y establece la fecha de su pretendida posesión fraudulenta.[17]

4. CAUSAS Y FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE APELACION

4.1. De la Demanda de Reconvención

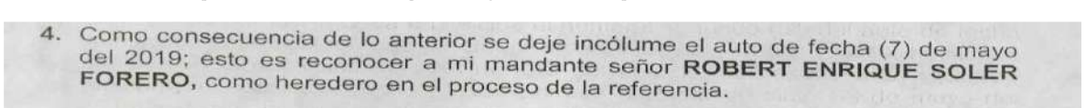
4.1.1. Haberse negado lo solicitado en la demanda de RECONVENCION por falta de pruebas de un contrato consensual sinalagmático que se perfeccionó con la entrega del inmueble objeto del presente proceso, siendo un contrato principal gratuito que no necesita de otro acto o ingrediente jurídico para subsistir.

El Código civil, en su artículo 2200, define el *comodato o préstamo* de uso, como *"un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso",* agregando que se "*perfecciona por la tradición de la cosa"* no exigiendo ninguna otra solemnidad.

En principio queda probado el contrato de comodato, por la tenencia probada de la cosa entregada, pues se probó que la cosa está en poder del demandante y de sus hermanos comunes comodatarios; habiendo sido demandados en reconvención, por lo que se cumple el requisito formal de la tenencia en su poder al igual que, la tenencia gratuita por parte de los otros comuneros lo que determinaría su responsabilidad solidaria.

En cuanto a la real existencia del comodato y sus efectos, los testimonios correspondientes a la señora Andrea del Pilar Forero Moya, Andrés Puerto Valencia, Martha Consuelo Moncaleano, Jaime Martínez, Disnoris Martínez, dejados de percibir y valorar por la señora Juez prueban "el hecho a probar", no solo por su claro contenido testimonial sino por los indicios existentes, los cuales debidamente probados tal como están, son concordantes y consecuentes, con lo

[16] Véase.: Folio 97 del expediente de la sucesión digitalizado y anexado como prueba trasladada:


4. Como consecuencia de lo anterior se deje incólume el auto de fecha (7) de mayo del 2019; esto es reconocer a mi mandante señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** como heredero en el proceso de la referencia.

[17] Vease denuncia penal aportada al presente proceso como prueba trasladada

relatado en estos testimonios.

Efectivamente, los testigos Jenaro Puerto Valencia y Andrea del Pilar Forero Moya, afirman contundentemente que los señores Harold Soler y Robert Soler, se presentaron a mi apartamento, días después del fallecimiento de mi progenitora, con el fin de definir que se iba a hacer con la casa de mi señora madre, alegando que no tenían donde vivir, lo que era cierto, dejando entrever que se creían sucesores por representación, siendo lo más importante entender que, según esos testimonios, palabras más o palabras menos, el suscrito demandado les permitió seguir viviendo en la casa de mi madre con la condición de que tuvieran un comportamiento adecuado especialmente respecto de su medio hermana Martha Consuelo Moncaleano con quien siempre tenían problemas de convivencia, compromiso que, por sí solo, no desnaturaliza el comodato.

Días después del fallecimiento de mi señora madre, ante la queja de la presunta heredera Martha Moncaleano hecha personalmente al suscrito sobre los problemas de convivencia con sus hermanos; para asegurarle su tenencia le firme un contrato gratuito de arrendamiento, documento que descansa en el proceso, y se lo entregue para que fuera firmado por los otros hermanos a quienes se les había concedido días antes, el uso gratuito del bien inmueble dejado por mi señora madre, ratificándole el usufruto de un local que mi madre en vida le había concedido y que efectivamente disfrutaba, hasta cuando fuere despojada, tal como lo señala la prueba existente.

Los anteriores testimonios, quedan probado en su contenido factico, con los siguientes indicios:

Primero: Las relaciones del comodante con los comodatarios siguieron normalmente, hasta el punto que el suscrito demandado, cuando tuvo oportunidad, le proporciono trabajo al hoy demandante, hecho que acepta el demandante a pesar de mentir que no se le había pagado y que, si había concurrido a mi apartamento *"era para cobrarme",* lo que no es cierto máxime cuando la señora juez le pregunto que si existía demanda laboral en mi contra con respuesta negativa, afirmación tendenciosa que tiene por objeto cubrirse en caso de comprobarse su presencia en mi apartamento.[18]

Segundo: La señora Martha Consuelo Moncaleano firmo contrato de arrendamiento que, aun cuando fue gratuito, indica la naturaleza de su tenencia, documento que descansa en el presente proceso, siendo prueba documental indicadora, a pesar de haber terminado la declarante en compinches con su victimario dentro de la sucesión a la cual pretendieron acceder, firmando conjuntamente tutela en contra de señor Juez 5º de Familia, tal como lo demuestra el proceso de sucesión arrimado como prueba trasladada.

Tercero: Quedo probado que los problemas entre los hermanos Soler Forero y Moncaleano Forero persistieron por un largo tiempo, hasta cuando ésta fue desplazada por su propio hermano quien al final, se apoderó del local que ésta usufructuaba por permiso de la causante Isabel Bautista de Forero (q.e.p.d.), hurtando las pertenecías que esta dejara en el sitio donde vivía y

[18] Cfr. Testimonio de Robert Soler Forero – Archivo 0020-MTS

ejercía el usufructo en la desesperación de su violento desplazamiento, tal como lo revela su propio testimonio y lo prueba su denuncia penal arrimada al presente proceso[19] como prueba trasladada.

Cuarto: Quedó probado que la tenedora Martha Consuelo Moncaleano Forero, busco refugio en José Milcíades Forero Bautista, el hoy demandado, a quien consideraba como principal heredero del inmueble que ocupaba, y en consecuencia, éste declaro ante la Fiscalía General de la Nación sobre la naturaleza de la tenencia ejercida por la denunciante y su injusto desplazamiento, según constan en diligenciamiento de denuncia arrimada al presente proceso como prueba trasladada. Queda igualmente probado, que la posesión "violenta" alegada por el demandante, la ejerce a partir del desplazamiento de la comodataria y arrendataria Martha Consuelo Moncaleano como se deduce de la lectura del acta de CONCILIACION realizada dentro de la denuncia penal[20]

Quinto: Quedo probado con el "Acta de Conciliación" realizada en la fiscalía general de la nación como consecuencia de la denuncia presentada por Martha Moncaleano, que tal persona fue desplazada porque estaba "ejerciendo posesión"[21] sin que hubiera testamento alguno, afirmación y reclamación hecha por el denunciado Robert Enrique Soler ante autoridad competente.

Sexto. Quedo probado que el demandante Robert Soler a partir del fallecimiento de mi madre ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d.) no habitó, ni ha habitado hasta la fecha el inmueble que reclama en posesión, tal como quedo plasmado en los testimonios recogidos, pero principalmente en la constancia que dejó la juez en la diligencia de Inspección realizada por el Juzgado, ejerciendo la simple tenencia otorgada por el demandado violando el compromiso de "vivir en paz", tratando de engañar al juzgado en cuanto al sitio de su residencia, tal como se puede percibir. Por el contrario, quedó probado la tenencia y residencia ejercida por Martha Consuelo Moncaleano desde el año 2000 hasta el año 2014 cuando fue despojada por el demandante, su hermano Robert Soler, y la del comodatario Harold Soler Forero, quien ocupara el inmueble una vez fallecida mi señora madre, sin haber sido tenido en cuenta dentro de este proceso por reticencia y mala fe del demandante Rober Soler, siendo en la misma forma comodatario y tenedor en la fecha de presentación de esta demanda.

Séptimo: Quedó probado que el comodatario ROBERT ENRIQUE SOLER no uso el inmueble para "vivir en sana paz" como era su obligación de acuerdo a la condición del permiso concedido gratuitamente, sino que se dedicó a explotarlo económicamente, dejándolo deteriorar gravemente en actitud contraria a la que le correspondía ejercer a un poseedor de buena fe con "*ánimo de señor o dueño*" ejerciendo además, violencia en contra de sus comunes tenedores.

---

[19] *Copia de la denuncia No. 110016000050201522111 6 y su trámite, instaurada por Martha Moncaleano Forero*
[20] Ver: Folio 85 Cuaderno Principal – OneDrive_1_18-4-2023_1
[21] Cfr.: Denuncia penal *No.110016000050201522111 6 – Acta de Conciliación*

Octavo: Quedo probado, que el origen de la tenencia ejercida por el demandante no fue la transmisión de la posesión ejercida por su señora madre Ana Isabel Forero de Soler; afirmación tendenciosa y de mala fe para descartar el comodato existente como génesis de su tenencia, siendo necesario concluir, sin que exista aprueba en contrario que ésta tenencia fue adquirida por el demandante Solero Forero con el permiso dado a ciencia y conciencia por el heredero principal José Milcíades Forero Bautista, tal como lo reconoce y acepta la tenedora Martha Consuelo Moncaleano y tácitamente lo aceptó el heredero Harold Soler Forero (q.e.p.d.).

Noveno: Con el expediente virtual de la sucesión tramitada por el señor Juez 5º de Familia, arrimada al presente proceso, queda probado que el demandante en pertenencia, reconoce a la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO como causante de la sucesión en la que pretende ser reconocido y al demandado José Milcíades Forero Bautista como su heredero, pues en ella su actuación se reduce a buscar su reconocimiento como heredero aceptando la herencia,[22] pero al percibir que no iba a ser reconocido, decidió presentar paralelamente tendenciosa demanda de pertenencia en "contra solo de la causante" Isabel Bautista de Forero (q.e.p.d.) quien que por obvias razones, no podía defenderse.

No se tuvo en cuenta, como lo señala la prueba documental comentada, que existe una renuncia tacita a la prescripción adquisitiva, si del estudio del acervo probatorio se tuviera como probado que el termino para prescribir estuviese cumplido, pues al presentarse a un juicio de sucesión con aceptación de la herencia con o sin beneficio de inventario[23] es señal inequívoca que reconoce a la causante y al heredero como propietarios, negando cualquier acto de posesión tal como lo resolvió el señor Juez de Familia negando su oposición.

Así lo considera el art. 2514 del C. C. sobre renuncia de la prescripción.

> ***Art. 2514. RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA PRESCRIPCION>.*** *La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.*
>
> *Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos.*

(subrayamos)

[22] En la demanda presentada por el Robert Soler en el proceso de sucesión se lee:

- Indica el señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** que acepta la herencia que se le pudiera deferir en el proceso de la referencia.

[23] Folio 83 Proceso de Sucesión digitalizado

La señora Juez en su sentencia, al no tener en cuenta los anteriores hechos probados, no aplico lo preceptuado en el artículo 954 del C.C. en concordancia con el 2202 y ss.*ibidem*, que hablan de la responsabilidad del comodatario que debió de ser declarada en la sentencia como consecuencia legal y necesaria de su decisión, lo que justifica esta apelación.

> **4.1.2.** Se debatió que el suscrito demandado, a partir de la muerte de la causante no hizo presencia en el inmueble, mintiendo el demandante cuando afirma que tampoco lo hacía en vida de mi señora madre, lo que lógicamente no es cierto, sin considerar que la omisión de actos de mera facultad y mera tolerancia, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna, siendo que al contrario, este es un verdadero indicio de la existencia del contrato de comodato verbal, pues significa que el comodante considero que inmueble estaba en poder de personas que, inspirando confianza, no era necesario ejercer inspección alguna sobre el inmueble, por parte del comodante.

Lo anterior, está probado además por la declaración de Martha Consuelo Moncaleano persona con presunta vocación de heredera que probó hasta la saciedad su tenencia y usufructo desde el año de fallecimiento de mi señora madre, hasta cuando el demandante ejerciendo la violencia que fuere denunciada ante la fiscalía; la desplazó quedándose además con sus haberes, a pesar de lo cual, la desplazada siguió cobrando los arrendamientos del local que tenía arrendado hasta cuando el demandante Robert Enrique Soler logro por la fuerza despojarla en su totalidad de sus derechos y arrendar por cuenta propia el local que mi madre antes de su fallecimiento le había concedido en usufructo, tal como dramáticamente lo relata en su testimonio Martha Consuelo Moncaleano y lo corrobora la testigo[24] que durante más de diez años le pago arriendo a la persona así violentada.

> **4.1.3.** No se tuvieron en cuentas las especiales reglas que consagra la ley para la adquisición de bienes comerciales por la figura de la “prescripción extraordinaria”, la cual, no exige prueba documental alguna, pero si ciertos requisitos que, al no quedar probada su existencia, impide la declaración de la prescripción solicitada, máximo cuando el demandante abandona la obligación de probar como carga procesal.

Efectivamente, quedó probado al contrario, aun cuando la sentencia no lo reconoce por falta de un estricto análisis probatorio de la prueba indiciaria confrontada con la prueba testimonial que existe un título de mera tenencia que hace presumir la “mala fe en el demandante”, sin que se hubiere podido probar por parte de éste que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio; amen de haber quedado probado sin reticencia alguna que su tenencia y la alegada posesión **es el producto de un actuar violento y**

[24] 11001310304520180003900-20230426_112356-ROCIO CASTILLO

clandestino, pudiéndose determinar el tiempo de su tenencia y el ejercicio de su violenta posesión a partir del desplazamiento a que fue sometida la arrendataria comodataria declarante Martha Moncaleano Forero y del marrullero y tendencioso olvido que de sus propios hermanos hiciera el demandante en esta demanda de pertenencia no habiéndolos citado a este proceso a pesar de ser sabedor de su interés como presuntos "herederos por representación" y la tenencia real que ellos tenían del inmueble en el momento de presentación de esta demanda**, lo que indica su mala fe y la clandestinidad en su actuar a menos que aquellos se hayan abstenido de defraudar con una demanda fraudulenta.**

No se menciona en la sentencia que el demandante Robert Soler, presento demanda de pertenencia solo en contra de la causante ya fallecida, lo que prueba su marulla y mala fe, habiendo tenido que corregir la demanda por fuerza de ley, incluyendo solamente a quien se había notificado José Milcíades Forero Bautista, guardando sospechoso silencio con respecto a los dos comuneros restantes, reteniendo la verdad a pesar de la "exigencia judicial" contenida en el auto que inadmite esta demanda[25].

4.1.4. Haberse descalificado los testimonios que prueban la naturaleza de la tenencia del demandante Robert Soler, sin tener en cuenta los **indicios existentes que ratifican la veracidad de la existencia del comodato** que, en demanda de reconvención, se solicitó dar por terminado.

La señora Juez en su sentencia, equivocadamente interpreta los testimonios de los declarantes Jenaro Andrés Puerto y Andrea del Pilar Forero Moya, sin dar cuenta del porqué de su afirmación, errando gravemente en su análisis con respecto a las normas de la "sana Critica", cuando estos testigos, como ningún otro, coinciden en un todo con los indicios existentes en el proceso lo que revela su verdad y su certeza, en la medida que su relato es preciso, responsivo y razonado, encontrándose respaldado en otros muchos elementos probatorios.

No se entiende el por qué la señora juez tergiversando gravemente el dicho de un testigo afirmando en su sentencia que, con respecto a la declaración de Andrea Forero; la testigo dijo ***"no tener conocimiento de la generación del contrato de comodato pues no estuvo presente"*** (?) pues esta aseveración no es de la testigo como se puede corroborar (1:55 – Archivo 2) en donde se desprende que jamás se dijo lo afirmado por la juez, **correspondiendo esta desafortunada afirmación únicamente a una lamentable equivocación de la funcionaria, tal vez, como consecuencia del escaso termino que se dio para dictar sentencia.**

25

1. Dirija la demanda en contra de los herederos determinados, si los conoce y los indeterminados de la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO. Al respecto téngase en cuenta que mediante documento obrante a folio 22 se acredita el fallecimiento de la mencionada señora y por tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones.

Erra nuevamente la señora juez, en el análisis del testimonio del señor Andrés Jenaro Puerto, ya no en cuanto a su contenido sino en cuanto a su interpretación, consecuencia y valor la legal; pues no es cierto como lo afirma la juez en su análisis que, ***"la declaración que por sí sola no tiene la virtualidad o connotación de acreditar la existencia de un contrato de comodato como se indica en la demanda al no demostrarse las condiciones legales y específicas que rigieron dicho acuerdo (?)"*** pues ignora la señora Juez que el COMODATO es un contrato consensual que se perfecciona con la entrega del bien, cuya entrega está suficientemente probada, no habiendo razón para negar su existencia, máximo cuando el declarante es claro, preciso, responsivo y razonado encontrándose respaldado su dicho con otros elementos probatorios existentes, especialmente por la prueba indiciaria de innegable existencia, lo que desafortunadamente no tuvo en cuenta la sentencia apelada, al exigir "***demostrarse las condiciones legales y específicas que rigieron dicho acuerdo*****",** sin que se pueda atinar a que "condiciones legales y específicas" se refiere la sentencia.

Las arandelas que pueda tener esta clase de contratos como "***condiciones legales y específicas";*** obligaciones o derechos accesorios o subsidiarios de las partes, no inciden en la existencia misma del contrato, siempre que se encuentre probada la entrega y la gratuidad como elementos esenciales para su existencia y reconocimiento al tratarse de un contrato principal que existe por sí solo, lo cual se encuentra probado suficientemente en el presente proceso, no solo con la prueba testimonial, sino con la indiciaria existente que son hechos probados que le dan al testimonio por su coincidencia, la certeza de su contenido, por lo que no se entiende a que se refiere la señora Juez cuando manifiesta "**al no *demostrarse las condiciones legales y específicas que rigieron dicho acuerdo*,** pues las condiciones legales que lo rigen, son la entrega y la gratuidad, elementos suficientemente demostrados.

Esto por cuanto el comodato es un contrato unilateral y consensual de préstamo de uso, por el que una de las partes (comodante), entrega a la otra (comodatario) una cosa no fungible para que use de ella durante un tiempo que, de no haberse pacto, queda en libertad el comodante de solicitar su terminación y restitución del bien, tal como se solicitó en la demanda de reconvención, sin que se le pueden exigir otras "condiciones legales específicas" que rijan el acuerdo, pues el comodato es un contrato que se reduce al préstamo gratuito de un bien y su entrega cuya tenencia probada, lo perfecciona.

La restitución del inmueble, sea con la declaratoria de prescripción de la acción**;** la negación de las pretensiones de usucapión por falta de requisitos exigidos por la ley; o. con la prueba de la existencia del contrato de comodato, es un hecho irreversible que no puede desconocer la sentencia, por estar atado a su decisión.

Efectivamente al no quedar probada la posesión o usucapión demandada, el uso, disfrute y disposición como elementos de la propiedad no pueden quedar en el limbo jurídico, obligándose en consecuencia y sin razón a la parte vencedora a iniciar un proceso de entrega, siendo que, por el contrario, se debe decretar la restitución del bien trabado, decretando un plazo perentorio para su realización tal

como se solicito en la demanda de reconvención y al unísono con lo resuelto por el juez de familia que tramitara el proceso de sucesión0

4.2. - DE LA PERTENENCIA

Siendo la pertenencia una figura jurídica de especial impacto social, deben quedar los requisitos exigidos por la ley, exquisitamente probados para la declaratoria por prescripción adquisitiva del dominio y su posesión, uso y disfrute, prueba cuya carga legalmente le corresponde al demandante.

Veamos si aquí se cumplen, sin observación alguna:

4.2.1. El Artículo 762 del C.C., prescribe:

"ARTÍCULO 762. *La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.*

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo."

Efectivamente, quien pretende la posesión debe tener el "*animus de señor o dueño"*, que se traduce necesariamente en el mantenimiento, conservación y cuidado de la cosa poseída.

La corte constitucional ha dicho que: "*La posesión es ''la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño''. De aquí se desprenden sus dos elementos esenciales: el corpus y el animus. El corpus es el cuerpo de la posesión, esto es el elemento material, objetivo, los hechos físicamente considerados con que se manifiesta la subordinación en que una cosa se encuentra respecto del hombre. El animus, por su parte, es el elemento interno o subjetivo, es el comportarse ''como señor y dueño'' del bien cuya propiedad se pretende.''*

(subrayamos)

Es decir, que se deberá probar la posesión del bien por hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como la conservación del bien en condiciones dignas, el cuidado de sus pisos, baños, cocinas, paredes y cielos rasos y otros de igual significación, como pago de servicios e impuestos, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión "*conditio sine qua non"* que demuestran la existencia de un dominio dentro de un lapso de tiempo determinado por la ley.

Los diferentes testigos que tuvieron la oportunidad de conocer la casa en vida de su propietaria original, la causante, presentes en la diligencia de Inspección Judicial extrañaron el lamentable estado en que se encontraba el interior del inmueble, el cual, al parecer, no fue objeto de ningún mantenimiento desde el

fallecimiento de mi señora madre ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d.) la causante, amenazando ruina como algunos testigos lo catalogaron.

Así lo dejo como constancia el perito que, contratado por el mismo demandante no tuvo otra alternativa que diagnosticar el mal estado de la edificación, circunstancia que la señora juez presente en el lugar de la inspección, hubo de dejar la respectiva constancia dentro de la Audiencia de Inspección del Inmueble.

Dio la impresión que el demandante solo "maquillaba" los dos locales, como parte del inmueble que podía explotar económicamente, los que por fuerza de la razón aparentemente se encontraban en buen estado, pues diagnosticados sus pisos, se encontraron deteriorados y al parecer nunca fueron ni mantenidos ni cambiados.

Como la norma en comento define que *"La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño",* se necesitaría un titánico esfuerzo jurídico para declarar la posesión de un inmueble, que al parecer se conserva original, pero en ruinas, lo que indica que efectivamente fue prestado gratuitamente, pero abusivamente manejado con interés muy diferente al de su conservación como señor y dueño: Su "explotación económica" tendrá como consecuencia un "enriquecimiento sin causa"

4.2.2. Concepto y Definición:

El Artículo 673 del Código Civil define:

> ***"Art. 673.*** *Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.*
>
> *De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el Libro* De la sucesión por causa de muerte*, y al final de este Código."*

Efectivamente, tal como indica la demanda, el señor ROBERT SOLER FORERO al no obtener eco en la demanda de sucesión, pretende adquirir el dominio de un bien trabado en un proceso de sucesión, mediante la figura de la *"prescripción extraordinaria*", por cuanto no acredita título alguno para el efecto de solicitarla por vía ordinaria, estando la carga de la prueba como de su obligación, prueba que trato de llevar al proceso con dos testigos que nada dijeron al respecto, pues por el contrario lo denominaron "administrador" del inmueble, pero reconociendo a mi madre como una "señora regañona" que usaba delantal y propietaria del inmueble, cuando otra señala a Martha Moncaleano como la propietaria, siendo esa misma testigo la que le pago arrendamiento por mas de diez años a la presunta propietaria.[26]

******

4.2.3. Por su parte el Art. 2512 del C.C. prescribe:

> ***"Art. 2512.*** *La* prescripción *es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse*

[26] Cfr. Testimonio de **ROCIO CASTILLO CASTILLO** (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00

> *ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales.*
>
> *Se* prescribe *una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción."*

La tenencia del inmueble, **queda establecida según la demanda impetrada**, en un término de más de 23 años (1995 a 2018) fecha del fallecimiento de Isabel Forero Bautista (1995) madre del demandante y transmisora de la posesión, y la presentación de la demanda de pertenencia (2018), tiempo más que suficiente para la **prescripción de la "acción ordinaria"** de pertenencia, tal como se alegó en la contestación de la demanda; amén de la previa solicitud por parte del demandante Robert Enrique Soler ante el Juez 5º de Familia de reconocimiento como heredero dentro de proceso de sucesión de la causante Isabel Bautista vda. de Forero, lo que lo pone fuera del alcance jurídico de lo prescrito en la norma transcrita con anterioridad.

La "prescripción de la acción" fue solicitada por el demandado José Milcíades Forero Bautista como Excepción Previa, como también como excepción de fondo en la contestación de la demanda, petición que fue negada en la sentencia que se impugna.

Por otro lado, tenemos:

4.2.4. El artículo 2514 del C. C. nos informa:

> ***"Art. 2514.*** *La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.*
>
> ***Renúnciase tácitamente****, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos. "*
>
> ***(subrayamos y destacamos)***

El señor **ROBERT SOLER FORERO** y su tenedora comunitaria **MARTHA CONSUELO GALEANO FORERO**, reconocieron dentro del proceso de sucesión que se arrimó al presente proceso como prueba trasladada, el derecho de la demandada principal **ISABEL BAUTISTA vda. DE FORERO** (q.e.p.d.) como causante y de **JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA** como su único heredero reconocido**; al presentasen a la sucesión y solicitar su inclusión como presuntos herederos,** habiéndose cumplido en consecuencia la renuncia tácita a su derecho de "prescripción adquisitiva" al reconocer a la causante y al heredero diferido, sus derechos y el consecuente dominio sobre el inmueble trabado en la sucesión; habiendo sido negada tal inclusión por el señor Juez 5º de Familia por falta de legitimidad por pasiva, decisión que fue apelada, pero confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá.[27]

[27] Cfr.: **11001311000520160091300**

Esta decisión fue tutelada por la señora MARTHA CONSUELO MONCALEANO FORERO en evidente contubernio con el demandante ROBERT SOLER FORERO como consta en la **Rad.: 11001221000020220077700** del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, entidad jurisdiccional que negó las pretensiones de los tutelantes, pero **que indica, sin lugar a dudas, la renuncia alegada en el presente escrito** y regida **por el** *art. 2514 del C. C. arriba transcrito.*

Aun cuando la tutelante Martha Consuelo Moncaleano alega no haber sido notificada para el proceso de sucesión, lo cierto es que se presentó, siendo entonces extraña su afirmación, pues en honor a la verdad, fue ella quien me proporciono parte de la documentación para la apertura de la sucesión, el nombre de los testigos y su dirección para ser citados en este proceso, y, por lo tanto, habiendo estado pendiente del desarrollo de ese proceso.

Se ha criticado que el suscrito, jamás volvió después de la muerte de su progenitora por el inmueble que mi señora madre construyo, disfruto y poseyó durante toda su vida, ni la visitaba en vida, tratando de configurar fallidamente una causal de indignidad, pero cuya explicación la da la norma que a continuación se transcribe, amén de ser un hecho indiciario probado que, por el contrario, indica la existencia del comodato alegado en la demanda de reconvención por la confianza depositada en su tenedores comodatarios, al presuntamente existir una adecuada administración que, al final, resulto un fraude por la administración personalizada ejecutada sobre el inmueble que por confianza y familiaridad se entregó en comodato.

El Artículo 2530 del Código Civil, prescribe:

> ***"Art. 2520.*** *La omisión de actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna.*
>
> *Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique.*
>
> *Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto.*
>
> *Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro."*
>
> *(subrayamos)*

Para contrarrestar esta afirmación, no se tuvo en cuenta que los testigos declaran que, viviendo la hermana de mi madre y su familia al respaldo de su casa de habitación, muchas veces concurrí junto con mi familia a la visita de mi tía, lo que es fácil suponer que cuando esto ocurría, iba o venia de visitar a mis padres.

Esto no tiene importancia para las resultas de este proceso, pero estoy en la

necesidad y obligación moral de hacer claridad, ante la mentira, incuria y deslealtad del demandante.

4.2.5. Omisión de actos de mera facultad y tolerancia

Efectivamente, designados por familiaridad, altruismo y confianza los comodatarios por voluntad del demandado en este proceso, sobraba mi presencia, pues era fácil suponer que, si se utiliza un inmueble gratuitamente, se está en la obligación moral de mantenerlo habitable y pagar los servicios y los correspondientes impuestos, por ser el comodatario el que los causa en su uso gratuito, máxime cuando abusivamente se cambia la finalidad del permiso por una rentable explotación económica; explotación económica que únicamente se le había permitido por parte de mi madre a la arrendataria Martha Consuelo Moncaleano, derecho del cual fue ilícitamente despojada.

La apertura de la sucesión por parte del demandado en este proceso y a la que fueron convocados **todos los tenedores del inmueble** tal como consta en la demanda de sucesión, es una reacción del heredero principal José Milcíades Forero Bautista ante el incumplimiento de lo pactado en contrato consensual de comodato que, por ser un contrato unilateral, no tiene prescripción y pude terminarse unilateralmente a voluntad de quien lo concedió.

Es de aclarar que esta acción sucesoria se interpone, antes de enterarme que Isabel Forero de Soler, no era hija de mi señora madre, situación que, al parecer, si conocían los presuntos “herederos por representación”, como lo indica y confirma la acción “paralela” de pertenencia por prescripción que interpusiera solo uno de los presuntos herederos y comodatarios, frente a la imposibilidad de probar su legitimidad en el proceso de sucesión.

4.2.6. Requisitos de la posesión

Por otro lado, para adquirir la prescripción adquisitiva de un bien la ley exige el cumplimiento de las siguientes reglas, cuya prueba está a cargo del demandante:

El artículo 2531 del C. C. ordena:

Art. 2531. *El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria****, bajo las reglas*** ***que van a expresarse:***

1ª. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno.

2.ª. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio.

3.ª. Pero la ***existencia de un título de mera tenencia****, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:*

> *1.ª Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción*.
>
> 2.ª Que el que alegue la prescripción **pruebe** haber poseído **sin violencia clandestinidad**, **ni interrupción** por el mismo espacio de tiempo. "
>
> *(subrayamos y destacamos)*

De acuerdo a la descrito en la norma transcrita, columna vertebral de este derecho, pues impone las reglas necesarias para decretar la "prescripción extraordinaria del dominio" que por solicitud expresa de reconocimiento no es necesario la existencia de título alguno, **sino la contabilización del tiempo ininterrumpido** exigido por la ley para obtener la "prescripción adquisitiva" más el lleno de todos y cada uno los requisitos impuestos por la norma arriba transcrita.

Si aritméticamente se comprobara la existencia de los tiempos, dependiendo de su suma aritmética de años de tenencia y acorde con su petición, se estaría dentro de la prescripción adquisitiva, siempre y cuando que la solicite quien **pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción**, prueba que brilla en el presente proceso por su ausencia, existiendo, por el contrario, prueba de "**violencia, clandestinidad e interrupción**" no controvertida por el demandante.

Si se reclama la prescripción del derecho de dominio en forma extraordinaria, comporta una presunción de derecho como lo es la buena fe; buena fe que subsiste sin no se probare la mala fe.

En consecuencia, al excepcionante de esta clase de prescripción, al contrario de la carga probatoria de "**sin violencia, clandestinidad ni interrupción"** a cargo del demandante**,** le correspondería **probar la mala fe** en que incurrió el demandante a usucapir en contra del demandado, de lo cual sobra prueba en el presente proceso, empezando en primer lugar, por el "**consciente olvido**" de determinar y llamar a sus propios hermanos al presente proceso, lo que indica su pretendida y lograda clandestinidad; en segundo lugar, **la violencia ejercida** en contra de la arrendataria y comodataria, hermana del demandante, para apoderarse de la posesión que terminara en denuncia penal; en tercer lugar, **su comparecencia al proceso de sucesión** reconociendo causante y heredero; en cuarto lugar, **presentar demanda paralela** de pertenencia estando compareciendo al proceso de sucesión, lo que resulta totalmente contradictorio y de mala fe; en quinto lugar, **la negligencia y falta de cuidado** en la conservación del bien a pesar de su explotación económica que resulta legalmente negativa a la pretensión de dominio, sin mencionar la existencia de un **título de mera tenencia** con efectos jurídicos establecidos en el ámbito de la prescripción adquisitiva que niega el demandante, pero que testimonial e indiciariamente se encuentra probado; terminando este recuento con el fallido intento de **demandar a la causante ya fallecida** con la malsana ilusión de no tener contraparte, actitud diligentemente contrarrestada por el señor Juez primigenio de este proceso, obligándolo a dirigir la demanda contra el heredero reconocido y sus determinados "si los conocía" condición **que maliciosamente no cumplió**.

Queda suficientemente probado, que la posesión alegada por el demandante Robert Enrique Soler Forero es de mala fe al abusivamente aprovecharse de un permiso de uso, para en su imaginario convertirlo en posesión y demandar su pertenencia; no habiendo probado, que tal posesión la ejerció sin violencia, ni que fue ininterrumpida como lo destaca la sentencia que se apela; ni que la ejerció públicamente como lo prueba la subsanación de esta demanda donde el demandante Rober Soler guarda silencio con respecto a los comodatarios y presuntes herederos tenedores sus hermanos, pretendiendo demandar solamente la inerme y fallecida causante, desconociendo a sus hermanos y al heredero principal, con el protervo, ilícito y significativo propósito de no tener contraparte en el presente proceso.

Queda además establecida su mala fe, cuando se presenta a una sucesión aceptando la herencia, engañando al señor juez a falta de la certificación de su legitimidad como heredero e inicia paralelamente proceso de pertenencia, tratando en la misma forma de engañar al juez, lo que en las dos oportunidades momentáneamente lo consigue, pero al final fue descubierto en sus ilícitos propósitos.

Por el contrario, si se examina la prueba con el rigor necesario, el comodato siendo un contrato consensual que para su prueba, solo la ley exige la entrega o tradición del bien al comodatario, vemos como la tenencia ejercida por el comodante ROBERT SOLER FORERO y los demás comuneros, se ejerció sin ninguna oposición, como consecuencia de la entrega altruista, voluntaria y de buena fe que el heredero principal le hiciera a los presuntos herederos por representación, amén del despojo violento de que fue víctima la arrendataria y comunera MARTHA CONSUELO MONCALEANO y que denunciara ante la Fiscalía General de la Nación, como consta en prueba allegada y a la cual dramáticamente se refirió en este proceso dentro de la audiencia de Inspección realizada por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá.[28]

Esta entrega del inmueble en comodato a los comuneros Robert Soler Forero, Harold Soler Forero y Martha Consuelo Moncaleano Forero, se deduce con certeza, no solamente por la existencia de los testimonios claros y consecuentes rendidos por el señor Jenaro Andrés Puerto Valencia y la señora Andrea del Pilar Forero Moya, sino como resultado del análisis en conjunto de todos y cada uno de los demás testigos, y especialmente, de los hechos indicadores tales como, la actual tenencia del inmueble en cabeza de uno de los comuneros que prueba la entrega; la ausencia por varios años del heredero principal y su falta de interés en la suerte del bien objeto del presente proceso, que indica, y no otra cosa, la confianza del comodante depositada en los comodatarios; y, la ayuda solicitada por la comodataria Martha Consuelo Moncaleano en el momento de ser desplazada.

Para decir lo contrario, se necesitaría la prueba a cargo del demandante de cómo obtuvo la tenencia o posesión, posesión que, habiendo tratado de explicarla el

[28] Archivos 00023 de la Audiencia Presencial realizada por el Juzgad 46 Civil del Cto. de Bogotá, el día once de abril de 2023.

demandante mediante la consignación en su demanda de un hecho falso, resulto ser una farsa tendiente a desvirtuar el comodato, pues no era posible que obtuviera la posesión cedida por su madre Ana Isabel Forero de Soler, cuando mi madre, la propietaria inscrita ejerció posesión hasta el día de su fallecimiento como lo demuestra la prueba recaudada.

El llamado de auxilio de la señora Martha Consuelo Moncaleano comodataria y su afanosa búsqueda del arrendador y heredero principal José Milcíades Forero Bautista cuando se vio despojada violentamente de su tenencia, significa la autoridad que por su calidad, podía ejercer el comodante ante el violento y abusivo comunero comodatario ROBERT SOLER FORERO, obteniendo tal como sucedió, su intervención ante la fiscalía para declarar y apoyar su tenencia; existiendo así mismo un hecho indicador, consistente en la existencia de un documento firmado por el comodante José M Forero Bautista a favor de la comodataria MARTHA CONSUELO MONCALEANO de un contrato de arrendamiento gratuito a su nombre; y las reiteradas visitas del señor Harold Soler Forero a mi apartamento, pero que, sin que se supiera su objetivo, es fácil de imaginar su situación:

¡También era víctima del desalmado usurpador!

La contratación laboral que hiciere el hoy demandado José Milcíades Forero Bautista con el hoy aspirante ROBERT SOLER a usucapir para desarrollar labores en una mina que administraba, relación laboral que acepta expresamente el demandante en su declaración rendida en audiencia presencial, indica la relación amistosa y la confianza existente entre el comodante heredero y el comodatario demandante cuando gozaba de vivienda gratis, antes de que fuera tocado por la codicia, la deslealtad y la falta de amor filial, como consecuencia seguramente de un pésimo y mal intencionado asesoramiento.

Pero los requisitos legales para usucapir se tornan exigentes cuando, en la segunda circunstancia exigida por el Numeral 3º del artículo en comento[29] exige que "… el que ***alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción*** por el mismo espacio de tiempo", aspecto que los testigos solicitados por el demandante Robert Soler a quien le correspondía la carga de la prueba, nada dicen sobre el supuesto de hecho de la norma comentada.

Como se lee Honorables magistrados la **carga de la prueba** de haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción **corresponde al demandante** y no al demandado, demandante que no hace esfuerzo alguno para probar "el supuesto de hecho" de la norma que regula la posesión, presentando unos testigos que "debidamente preparados", incurrieron en graves errores contrarios a la prueba indiciaria existente.

Así las cosas, las pruebas testimoniales presentadas (dos) por el demandante, en ningún momento nos indican que haya poseído "*sin violencia, clandestinidad, ni*

[29] "2.ª *Que el que alegue la prescripción **pruebe** haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo." (subrayamos)*

interrupción" pues sus declarantes nada dicen al respecto, como tampoco existe prueba documental que así lo indique, pues por el contrario riñen con la realidad procesal.

Por el contrario, las declaraciones solicitadas y recepcionadas en la demanda de RECONVENCION, empezando por el testimonio rendido por la comodataria comunitaria MARTHA CONSUELO MONCALEANO FORERO están saturadas de la violencia ejercida por el comodatario ROBERT SOLER FORERO, hecho que es corroborado dramáticamente por testigos imparciales **no tachados**[30], dignos de credibilidad por su imparcialidad, su espontaneidad, coincidencia y correspondencia con todos los hechos probados en el proceso.

Aun cuando la señora Juez menciono la existencia de esta violencia, no le dio trascendencia ni le atribuyo sus consecuencias jurídicas dejando en el limbo no solamente la entrega del inmueble usurpado; sino que tampoco, ordenó cancelar los registros de las medidas cautelares, y lo más grave, no condeno al demandante en perjuicios, ni siquiera en costas del proceso, como si el demandado José Milcíades Forero Bautista no hubiere sufrido ningún perjuicio como consecuencia de la codicia, deslealtad, temeridad y mala fe del demandante Robert Soler Forero; y como si la traición a la familia no fuera un hecho de los más abominables, dolorosos y repudiables, máximo cuando se extiende la mano sin interés para que coman y vivan sin preocupación y lo que recibe es un mordisco que amputa sus derechos y cuyo remedio encontró en la cirugía jurídica que los restablece, pero por ahora, sin el rigor necesario.

Hasta los animales más feroces respetan esta loable circunstancia, cuando de comer les dan… y si muerden a sus benefactores no lo hacen con la violencia experimentada en este proceso.

5. DE LAS PRUEBAS RECOLECTADAS

De acuerdo con la DEMADA PRINCIPAL, su contestación y la demanda de RECONVENCIÓN, se decretaron y realizaron las siguientes pruebas testimoniales, existiendo además prueba indiciara que, en su conjunto, prueba la existencia del supuesto de hecho contenido en la ley para decretar el éxito de la demanda de RECONVENCION y de las excepciones presentadas a la demanda, pruebas que la señora juez, desafortunadamente no valoro debidamente.

5.1. DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

[30] Ver declaración de **DISNORIS BAUTISTA VERA**: (11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30) ; y de **ROCIO CASTILLO CASTILLO** (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00 A O:45:00)

No obstante, y a sabiendas que cualquiera de las partes podría tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco; sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados tal como sucedió que algunos testigos fueron tachados en el presente caso; hay que tener en cuenta que el objeto a probar son relaciones que están dentro del ámbito familiar y que por lo tanto, su valor probatorio no puede descartarse por el hecho de que quien lo rinde afirme ser familiar de cualquiera de las partes, sino que es necesario estudiar su espontaneidad, consistencia y coherencia y sobre todo, su coincidencia con las demás pruebas documentales o indiciarias, lo que exige un estudio comparativo del dicho del testigo con la prueba documental recaudada y el hecho indiciario existente, ejercicio que no realizo la señora juez, seguramente por la premura del tiempo y su deseo de definir rápidamente esta situación por el tiempo que llevaba el proceso en su poder y acosada por la reiterada insinuación de aplicación del Artículo 121 del C.G.P., en sus incisos finales.

Es necesario hacer notar que la tacha realizada a los testigos consistió en su parentesco y presunto interés en las resultas del proceso, y no en la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio; ni en la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración; como tampoco en manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios; ni en el carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad probada y realizada por él; o por las contradicciones en el contenido de la declaración.

En el presente caso, ninguno de los testigos de la parte demandada y reivindicante, tachados o no, es contradictorio con la prueba documental ni indiciaria como lo veremos más adelante, sino que, por el contrario, es coincidente con todos los aspectos probados en el presente proceso, debiéndose destacar, que los testigos no familiares citados por el suscrito demandado, sus nombres fueron proporcionados por la testigo Martha Consuelo Moncaleano que, tal como se puede percibir no conocían al demandado.

Por el contrario, la parte demandante miente con respecto a la prueba documental, pues desde su demanda afirma tener la posesión desde la muerte de su señora madre **ANA ISABEL FORERO DE SOLER** trastocando la fecha de su fallecimiento con el de la causante, solo con el fin de contrarrestar la prueba del contrato del comodato que naciera con la muerte de mi madre, pudiéndose además, calificar su actuar de mezquino y desleal al no vincular directamente a las personas determinadas como se lo insinúo el señor Juez que inadmite la presente demanda como lo eran los presuntos sucesores y tenedores comodatarios conocidos, decidiendo demandar solamente a mi madre ya fallecida la cual no se hubiera podido defender sino es por la acuosidad del señor juez que inadmite la demanda, ordenando notificar a los determinados “**si los conoce**”, lo que fue corregido parcialmente por el demandante pero olvidándose maliciosamente de sus hermanos que también, siendo interesados, eran tenedores determinables, violándose desde un comienzo la publicidad de su posesión alegada, **siendo en consecuencia viciada su petición no solo por la violencia ejercida contra uno de los comuneros, sino por la clandestinidad ejercida al entablar**

silenciosamente esta acción.[31]

La prueba documental contradice la afirmación sobre el lapso de tiempo de posesión, pues el fallecimiento de la causante se produce cinco años después del fallecimiento de la presunta y prematura "heredera trasmisora" madre del demandante; amen de la existencia de comodatarios y presuntos herederos determinables que vivieron y acompañaron toda una vida al demandante y a la causante, sin que hubieren sido citados como determinados en el presente proceso en un insólito acto de deslealtad, pero que habiéndose enterado con posterioridad resolvieron no actuar dentro del presente proceso seguramente por no creerse poseedor de los derechos aquí alegados.

Además, el contrato de arrendamiento en cabeza de la comodataria Martha Consuelo Moncaleano y su tenencia probada por mas de quince años, impiden que nazca la posesión alegada, pues adquirida violentamente, solo puede contarse a partir del año 2015 fecha en que fuere desplazada la legal tenedora tantas veces citada, Martha Consuelo Moncaleano.

Por otro lado, uno de sus testigos presentados por el demandante, afirma que éste **ejercía la tenencia del inmueble como administrador** sin precisar de quien, y el otro testigo de los dos presentados, no logra concretar la calidad del poseedor, siendo además su testimonio contradictorio con la realidad que consta en el proceso, expresada fielmente por el resto de testigos.

Veamos entonces los testimonios presentados y su relevancia probatoria.:

5.1.1. De la Prueba Testimonial presentada por el demandado:

A) Declaración del señor Jenaro **ANDRES PUERTO VALENCIA**, **(11001310304520180003900-20230426_145636 - MM 3:40 a 15:30**) quien para el efecto, en resumen declara que, después de la muerte de la causante ISABEL BAUTISTA DE FORERO, mi madre; los dos presuntos sucesores se presentaron al apartamento en donde vivía el heredero legal de la sucesión, para inquirirle sobre que hacían con la casa en donde ellos habitaron toda la vida, por lo que el demandado señor FORERO BAUTISTA les dijo que podían seguir viviendo ahí siempre y cuando su comportamiento fuera el adecuado.

Este testimonio es concordante con el segundo indicio **"b)** La existencia de tenedores autorizados por el heredero legal**"** y explica la no presencialidad del demando ni se su familia, en el inmueble objeto de este proceso, una

[31] C.C. **Art. 774.** Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lujar o a nombre de otro.

Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente.

Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella.
(destacamos - subrayamos)

vez acaecida la muerte de la causante.

Así podríamos preguntarnos ¿por qué el demandado en pertenencia, siguió dándole trabajo al demandante en prescripción adquisitiva tal como lo afirmo el propio demandante en declaración rendida, y por qué, según lo manifestó el testigo Jenaro Andrés Puerto, el señor HAROLD SOLER FORERO siguió visitando al demandante según los mensajes recibidos en la portería del edificio en donde el demandado José Milcíades residía?[32]

B) Declaración de la señora - DISNORIS BAUTISTA **(11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30)** quien, para el efecto, en resumen, declara:

En forma conmovedora, explica los maltratos a que fue sometida la tenedora y/o presunta poseedora MARTHA MONCALEANO FORERO, medio hermana del demandante y la violencia ejercida por ROBERT SOLER FORERO sobre ella, hasta el punto de hacerla abandonar el inmueble en compañía de su esposo y de sus hijos, todo porque siendo su esposo un militar no podía responderle a los insultos y agresiones del demandante en razón a las consecuencias que sufriría de acuerdo al "estatuto que lo rige" como militar en ejercicio, hechos violentos que la misma Martha Moncaleano nos permite conocer.

Indica, además, que fue esta testigo y no como equivocadamente el suscrito demandado lo quiso probar con el testimonio de Jaime Martínez su señor padre, la persona que le suministro a Martha Moncaleano la forma de encontrar al suscrito demandado para pedirle ayuda, lo que prueba efectivamente el "animus de tenedora" del inmueble, y de paso, el compromiso de su padre Jaime Martínez con la verdad, al negar rotundamente que él no había suministrado la forma de encontrar al heredero demandado José Milcíades Forero Bautista.

Esta testigo DISNORIS BAUTISTA es acorde en un todo con lo declarado por la señora Martha Moncaleano Forero, aun cuando no supo explicar si esta era tenedora o poseedora, excusándose de su ignorancia respecto al significado jurídico del término "poseedor".[33]

C) Declaración de la señora ROCIO CASTILLO CASTILLO (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00 A O:45:00)

La señora **ROCIO CASTILLO CASTILLO**, nos da cuenta de la calidad de

[32] **Nota;** Se puede comparar y analizar su espontaneidad, coherencia y certeza, observando el testimonio grabado en el archivo referenciado **(11001310304520180003900-20230426_145636 - MM 3:40 a 15:30**)

[33] Vease **(11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30 a 1:19:48)**

tenedora y usufructuaria que la señora MARTHA CONSUELO MONCALEANO FORERO ejercía sobre el inmueble trabado en el presente proceso, indicando el tiempo que la señora MONCALEANO FORERO ejerció este usufructo y tenencia **con en el cobro de cánones de arrendamiento** por más de doce años a la arrendataria ROCIO CASTILLO CASTILLO. Fue el propio demandante ROBERT SOLER FORERO que le manifestó a la testigo que la propietaria del local era su hermana MARTHA CONSUELO con la que debía de hablar para efectos de su arrendamiento, reconociendo la comunidad existente entre los tenedores y el usufructo a favor de su media hermana que posteriormente violentó.

Narro la violencia ejercida contra su arrendadora, violencia que extendió a su arrendataria ROCIO CASTILLO CASTILLO quien acepta que su arrendadora le comento que el local se lo había dejado su abuelita. Afirma que el señor ROBERT SOLER no vivía en la referida casa mientras ella tuvo el local en arrendamiento; la única que vivía ahí era MARTHA aceptando que también vivía HAROLD SOLER. Afirma que no podría decir si MARTHA era la dueña o no.[34]

D) Declaracion de Andrea del Pilar Forero Moya (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 1:50:00 a 2:17:30)

La testigo Andrea del Pilar Forero Moya, siendo descriptiva en uno de los partes de su declaración manifiesta que: *"la casa totalmente deteriorada en ruinas es una lástima que mantengan esa casa así"* significando en general el lamentable estado de deterioro de la casa trabada en el presente proceso. Ratifica la calidad de los ocupantes de la casa cuando manifiesta que ellos (los hermanos soler forero) estuvieron en el apartamento de mi padre, fue Robert y fue Harold, básicamente fueron a preguntar si podían quedarse a vivir en la casa y que, qué iban a ser con la casa, que si podían seguir viviendo ahí habiendo solucionado mi padre afirmativamente este petición, *"siempre y cuando existiera comunidad entre ellos, estuvieran tranquilos, estuvieran en paz, que no pelearan, que no hicieran esos escándalos que acostumbraban o decían que hacían"*, *"dijeron que sí, que hacían compromiso de convivencia"* manifestó que mi papa gerenciaba unas minas de esmeralda y entonces ellos hacían arreglos allá" y manifiesta que "ellos no pagaban arriendo, ni nada, ellos vivían ahí pero pagan los servicios, arriendo no"

Manifiesta que, tal como es cierto, la señora Martha Moncaleano no estuvo en el apartamento de su padre, pues con ella, como se manifiesta en este escrito, posteriormente se firmó contrato de arredramiento, autorizándola para permanecer en esa casa de habitación en compañía de sus hermanos.

Como coherente, desinteresado e ilustrativo puede catalogarse este testimonio[35] **contrario a lo expresado en la sentencia**, siendo concordante con la prueba testimonial, documental e indiciaria que reposa en el presente proceso.

[34] Cfr.: Declaración de la señora ROCIO CASTILLO CASTILLO (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00 A O:45:00)
[35] Declaración de Andrea del Pilar Forero Moya (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 1:50:00 a 2:17:30)

E) Declaración de Jaime Martínez (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 2:23:00 a)

"Conocí la casa por dentro" conocí la casa como ordenadita hasta la fecha en que murió mi tía era ordenada" "el día de la diligencia me pareció desastroso" "da como angustia, da tristeza ver una casa totalmente destruida" "sé que el propietario es José, José M Forero José Milcíades Forero" "usted es la única persona que se conoce como heredero"

En resumen, para efectos del proceso de pertenencia, al testigo le consta el estado de conservación de la casa en vida de mi madre y el estado desastroso de ese inmueble en el momento de la diligencia de Inspección, y que el propietario es José M Forero Bautista pues es el heredero conocido. Niega que la señora Martha le haya pedido el teléfono mío, siendo verdad, pues en ese aspecto el suscrito se había equivocado de testigo, pues como se verá, quien le suministro mi teléfono a Martha para contactarme y contarme lo sucedido con su tenencia y reclamar mi ayuda, fue la señora Disnoris Martínez[36] tal como se comprueba al examinar este testimonio, el cual, para comprobar su calidad, veracidad e intensidad, debe oírse en su totalidad.[37]

5.1.2. TESTIMONIOS PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE

A) Declaración de DIEGO HERNAN FINO MORALES (11001310304520180003900-20230426_112356-MMM 0:55:20 a 1:19:48)

Este testigo ni niega ni agrega hechos a los conocidos en el presente proceso. Solo, como hecho importante, habla que el demandante es el administrador de ese inmueble, pero sin que logre definir de quien era Administrador.

Sobre la salida de la señora Martha Moncaleano del inmueble objeto de este proceso, infamemente la justifica. Supo que mi madre tuvo una hija de nombre ISABEL, pero por razones explicables, no sabe que también tuvo otro hijo de quien manifestó no haber visto nunca, ni haber oído de él, lo que es extraño pues mi madre era muy orgullosa de su hijo; a todo el mundo le comentaba de su existencia, pero eso testigo lamentablemente no lo conocía seguramente obedeciendo órdenes dadas en la preparación de su declaración.

Contrario a lo afirmado por los demás testigos afirma que ROBERT SOLER vivió ahí hasta "hace cinco años" pero a Martha no se acuerda de haberla visto ahí, desde hace más de 12 años, pero extrañamente, no sabe el por qué se fue (?).

Estaba preparado para falsear la verdad!

Afirma con una mendacidad que llama la atención que, el arrendador del local que

[36] Declaración de la señora - DISNORIS BAUTISTA **(11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30)**
[37] **Declaración de Jaime Martínez (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 2:23:00 a)**

usufructuaba la señora Marta Moncaleano fue el señor ROBERT SOLER FORERO.[38] lo que con facilidad se entiende no ser cierto, pues con certeza la arrendataria **ROCIO CASTILLO CASTILLO, declara lo contrario.**

B) Declaración de RAFAEL LOPEZ ESPITIA (11001310304520180003900-20230426_112356 mm 1:22:00 a 1:44:00)

Este testigo incurre en serias contradicciones con los demás testigos lo que implica un juicioso y especial estudio de su testimonio, que lo interprete con autoridad, por lo que lo dejo al concepto de los Honorables Magistrados.

Hasta aquí las pruebas del demandante que nada prueban, de lo que por ley, procesalmente le correspondía probar.

6 - SOLICITUD DE PRUEBAS

Aun cuando fueron decretadas y arrimadas al presente proceso, las pruebas hoy solicitadas, extrañamente no se encuentran en el archivo digital completas, por lo que solicito a los Honorables Magistrados:

6.1 – Solicitar el expediente digital radicado con el Numero **10013110005 20160091300** al Juzgado 5 del Circuito de Familia, cuya prueba traslada fue decretada, con la advertencia que debe proveerse con la digitalización e hipervínculos **de todos y cada uno los documentos tramitados en ese proceso**, en especial todos los autos interlocutorios dictados de ese proceso.

La anterior prueba para constatar la fallida participación del demandante señor Rober Soler Forero y Martha Consuelo Moncaleano en ese proceso, lo que origino la presentación de esta demanda.

6.2 – Solicitar a la Fiscalía General de la Nación copia del Proceso Penal radicado bajo el *No. 110016000502015221116* con la advertencia que la "DILIGENCIA DE CONCILIACION" debe ser parte integrante de las copias del proceso y la declaración en el rendida por el testigo Jose Milciades Forero Bautista.

La anterior prueba para constatar el reconocimiento y la explicación que diera el demandante Robert Soler por su participación en los hechos denunciados por Martha Consuelo Moncaleano, **acta de conciliación** que se borró (?) de las pruebas arrimadas por la Fiscalía. NO obstante a ultima hora se localiza el

[38] **DIEGO HERNAN FINO MORALES (11001310304520180003900-20230426_112356-MMM 0:55:20 a 1:19:48)**

"Acta de Conciliación" echada de menos, en el folio 85 del expediente digital.

7 – PETICION

Si el Honorable Tribunal considera que no se encuentra los presupuestos necesarios para declarar la **prescripción de la acción impetrada**, subsidiariamente le solicito **se revoque parcialmente la sentencia apelada y en su lugar se hagan las siguientes o parecidas declaraciones:**

A) Confirmar parcialmente la sentencia que niega las pretensiones contenidas en la demanda principal instaurada contra la señora ISABEL FORERO BAUTISTA (q.e.p.d.) como propietaria inscrita del inmueble; hoy inscrita a nombre del heredero único José Milcíades Forero Bautista.

B) Tener por probados los hechos contenidos en la demanda de reconvención y en consecuencia dar por terminado el contrato de comodato existente entre las partes.

C) Ordenar la entrega el inmueble al comodante demandante en RECONVECION señor José Milcíades Forero Bautista y/o al demandado en el presente proceso fijando un plazo perentorio para su entrega.

D) CANCELAR las medidas cautelares decretadas en el presente proceso.

E) Condenar en perjuicios al demandante señor ROBER SOLER FORERO, a favor del demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA los cuáles serán liquidas por los medios legales.

F) Condenar en costas al demandado ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO. Liquídense por secretaria.

De los Honorables Magistrados, con respeto



JOSE M. FORERO BAUTISTA
C. de C. No. 17.087.102 DE BOGOTA
T. P. No. 20.118 del C.S.J

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: Pertenencia 45 - 2018 - 00039

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 07/09/2023 15:22

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (343 KB)
SUSTENTACION APELACION SENTENCIA PROCESO DECLARATIVO JUZG. 46 C. CTO. 45-2018-039.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 15:19
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: henry gley garzon londoño <hgleyg@hotmail.com>
Asunto: RV: Pertenencia 45 - 2018 - 00039

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: henry gley garzon londoño <hgleyg@hotmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 15:17

Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Pertenencia 45 - 2018 - 00039

Honorable Magistrado:
Doctor Jaime Chavarro Mahecha

Adjunto con el presente memorial que contiene la sustentación del recurso de apelación del proceso de la referencia.

Atentamente:

HENRY GLEY GARZÓN LONDOÑO
Abogado

Honorable Magistrado:
Doctor Jaime Chavarro Mahecha
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil
E. S. D.

secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia:	Proceso Pertenencia por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de dominio
Demandante:	Robert Enrique Soler Forero
Demandados:	Milciades Forero y demás personas indeterminadas
Radicado:	**45 – 2018 – 0039**

Asunto: Sustentación Recurso de Apelación

HENRY GLEY GARZÓN LONDOÑO, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.475.963 expedida en Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. T. P. 168.878 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación del señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** demandante en el proceso de la referencia, estando dentro del término de ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso, por medio del presente escrito me dirijo muy respetuosamente ante su despacho con el fin de sustentar el recurso de apelación, de la sentencia del pasado día veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), notificada en audiencia el mismo día, mes y año, por la señora Jueza Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito de Bogotá.

La sentencia.

Sea del caso rememorar la decisión de la señora Jueza Cuarenta y Seis (46) Civil del Circuito de Bogotá, la cual tiene como sustento tres (3) puntos centrales a saber: la incoherencia por la pérdida de la primera copia de la escritura pública, la manifestación de indicar que lo que se pretende es eludir los términos de prescripción y por último el enriquecimiento sin causa.

Manifiesto al Honorable Magistrado que la sustentación se hará bajo los mismos términos en que se presentaron los reparos a la decisión del A quo.

En la sentencia recurrida, al pronunciarse de fondo en el asunto de la referencia, la señora Juez, se niegan las pretensiones de la demanda.

i) Con respecto a determinar el espacio temporal en que el demandante entra en posesión del bien inmueble objeto de usacapión.

Manifiesta la señora Jueza, que en la demanda se indica que la posesión se inicia por la señora **Ana Isabel Forero de Soler,** el numeral cuarto (4°) de la demanda se indica que el demandante señor **Robert Enrique Soler Forero,** entró en posesión del bien inmueble el día once (11) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999), fecha en la cual según las pruebas aportadas tanto por el demandante como por la parte demandada, es la fecha en que falleció la propietaria inscrita señora **Isabel Bautista de Forero.** Siendo concordantes con lo anterior y muy claro se dijo en la demanda para la fecha de presentación de la misma, habían transcurrido más de dieciocho (18) años, es decir independientemente de si falleció primero la madre del demandante, hecho acaecido en el año de 1995, el límite temporal para contar el término de inicio de la posesión es la fecha de fallecimiento de la señora **Isabel Bautista de Forero,** por cuanto es está la fecha asumida en la demanda como inicio de la posesión, que habiendo pasado más de dieciocho (18) años, ninguna persona se presentó a reclamar un mejor derecho sobre el inmueble objeto del presente proceso. Es decir el requisito de temporalidad se encuentra plenamente probado.

Dicho lo anterior, se encuentra probado y se da cumplimiento al requisito del término de tiempo que exige la Ley, con el fin de acceder a la prescripción adquisitiva de dominio del bien inmueble objeto del presente proceso.

ii) Frente al hecho de indicar que se acreditó parcialmente los actos de señor y dueño.

Indica la señora Juez, que el demandante señor **Robert Enrique Soler Forero,** logro probar parcialmente los actos de señor y dueño con el aporte de algunos elementos de juicio, como lo son los diferentes recibos de pago que efectivamente logran acreditar los gastos en que ha tenido que incurrir el mencionado para efectos de lograr mantener el inmueble libre de deudas fiscales, y el pago de servicios públicos que asumió para garantizar el respectivo goce y disfrute de la cosa, es decir que la señora Juez, reconoce que el demandante, sin embargo a pesar que se tiene probado estos hechos y que determinan verdaderos actos de señor y dueño la señora Juez, indica que las pretensiones invocadas se encuentran llamadas al fracaso por los hechos que se indicarán más adelante.

Lo anterior no lleva a concluir que si los actos de señor y dueño se encuentran probados, no se entiende porque la señora Jueza manifiesta

que se prueba parcialmente la posesión. Si bien es cierto la señora Martha Moncaleano, trata de desvirtuar este hecho, lo hace con documentos que no formaron parte del debate probatorio, toda vez que fueron presentados y se corre traslado, pero no es posible verificar la veracidad de esos documentos. Dicho esto, Honorable Magistrado se debe tener por su señoría que los actos de señor y dueño fueron totalmente probados, de tal suerte que no se aportan pruebas por ninguna persona que controviertan fehacientemente la posesión.

iii) Frente a que el demandante no logro acreditar el instante exacto en que entro a poseer el inmueble objeto de usucapión.

Manifiesta la señora Juez, que se lograron acreditar diferentes hechos que controvierten lo manifestado por el demandante señor **Robert Enrique Soler Forero,** a saber:

Quedó demostrado que la propietaria inscrita señora **Isabel Bautista de Forero,** falleció en el año mil novecientos noventa y nueve (1999), es decir con posterioridad a la fecha de fallecimiento de la progenitora del demandante señora **Ana Isabel Forero de Soler,** en el año mil novecientos noventa y cinco (1995), quedando así demostrado que resultaría improcedente sumar a la posesión del demandante la ejercida por su antecesora. Sin embargo, no se realizó un estudio juicioso de los hechos de la demanda en la que revisada con detenimiento, allí se indica y lo reitero que el demandante señor **Robert Enrique Soler Forero,** entro en posesión del bien inmueble con el fallecimiento de la propietaria, **el día once (11) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999),** fecha de fallecimiento de la propietaria inscrita señora **Isabel Bautista de Forero.** De donde por deducción se tiene que para la fecha de la demanda el tiempo de posesión supera los dieciocho (18) años y así se indica con claridad en la demanda. Tanto es así que es el propio demandante que con la demanda aporta el Registro de Defunción de la señora **Isabel Bautista de Forero,** así lo ratificó el demandante en el interrogatorio y así lo reconoce la señora Juez en sus consideraciones. Lo cual a pesar de no sumar la posesión a la de su progenitora, el término de posesión se cuenta desde la fecha de fallecimiento de la propietaria inscrita.

En este punto es contradictoria la posición de la señora Jueza, toda vez que en primer término manifiesta que el término de temporalidad se encuentra probado **(léase i),** sin embargo aquí indica que es controversial, sin embargo de lo manifestado por la señora Jueza, se tiene que independientemente de lo expuesto en su motivación se encuentra probado el espacio temporal de la posesión.

iv) Con respecto a la coposesión.

La señora Juez, incluye un tema que no fue debatido ni probado en el proceso de la referencia, y es el de la coposesión, señora Juez y Honorables Magistrados, no se entiende de donde la señora Juez, entra a considerar la coposesión si ninguna de las partes la alegó, como lo referí en la recusación, la señora Juez estuvo actuando en defensa de unos derechos no alegados por la señora **Martha Moncaleano,** pues a pesar de haber conocido de la presente demanda no se hizo parte, tal y como la misma testigo lo refirió no se hizo parte esperando que el doctor **Milciades Forero,** le reconociera algún derecho tanto en el proceso de sucesión adelantado por el doctor **Forero,** como en el asunto de la referencia. Entonces no se entiende como la señora Juez, consideró este asunto si ninguna de las partes la alegó, y de otra parte la señora **Martha Moncaleano,** al no hacerse parte no puede alegar coposesión.

En este punto Honorable Magistrado, debemos tener presente que la señora Jueza se tomó atribuciones que la Ley no le ha concedido, que no fue propuesto ni en la demanda ni en la contestación de la demanda, como tampoco en la demanda de reconvención, por lo que no le es dable a la señora Jueza, pronunciarse sobre un tema que nada tiene que ver con el objeto de la demanda.

De otro lado, la señora **Martha Moncaleano,** no fue parte del proceso, ella misma en su testimonio manifestó que no hizo parte del proceso, y además dio a entender una componenda con el señor **Milciades Forero,** cuando manifestó que ella no hizo parte del proceso porque había hablado con su tío **Milciades,** el cual le había prometido que le iba a ayudar con el proceso. Allí mismo se dijo por parte del señor **Milciades,** que efectivamente le iba a ayudar y sin embarga en apariencia todo fue una farsa, que se utilizó para tratar de desvirtuar la posesión que ejerce mi poderdante señor **Robert Enrique Soler Forero,** sobre el bien objeto del presente asunto.

Debe entenderse que el señor **Milciades Forero,** a pesar de ser abogado y conocer los procedimientos de la sucesión nunca lo hizo, con un argumento traído de los cabellos, en el sentido de indicar que porque le había entregado el bien en arrendamiento a la señora **Martha Moncaleano,** dicho que desvirtuado por la misma testigo, motivo por el cual se tiene plenamente probado que mi poderdante es quien ha ejercido la posesión del bien inmueble sin reclamo ni oposición de ninguna otra persona. Obsérvese como a pesar de que la señora **Isabel Bautista de Forero,** fallece en mil novecientos noventa y nueve (1999), el señor **Milciades Forero,** promueve la sucesión solamente hasta el año dos mil dieciséis

(2016), esto es decir diecisiete (17) años después de haber adquirido el derecho como heredero.

v) Con respecto a la violencia entre hermanos.

Se indica por la señora Juez, que la testigo señora **Martha Moncaleano,** indicó que tuvo que abandonar el inmueble por hechos de maltrato, asegurando además que una vez se fue del inmueble dejó en arriendo uno de los locales perdurando el mismo por aproximadamente diez (10) años, quien según su dicho su abuela la señora **Isabel Bautista de Forero,** le había otorgado el derecho de cobrar esos arriendos. Se dice que la señora **Gloria Castillo,** fue la arrendaría y además es testigo en este proceso.

Finalmente indica la señora Juez, que la señora **Martha Moncaleano,** fue despojada de su derecho violentamente, sin embargo al cotejar los testimonio se puede establecer que son concordantes los tiempos de la supuesta violencia, además la señora Juez, se refiere a una denuncia penal por la supuesta violencia, la cual no es contundente, teniendo en cuenta que dicha denuncia fue archivada por la Fiscalía General de la Nación, por **conducta atípica,** que en el derecho penal significa: *conducta susceptible de valoración jurídica que no se recoge ni adecúa a ningún tipo penal establecido en las leyes.* (Anexo como prueba sobreviniente la consulta de la base de datos del sistema penal acusatorio – Spoa)

Es decir que la supuesta denuncia que fue montada en contra de mi poderdante señor **Robert Enrique Soler Forero,** no constituye fuente de violencia en el ejercicio de la posesión que tiene y ejerce el aquí demandante.

De otra parte, los testigos citados por el tercero interviniente doctor **Milciades Forero,** no fungieron como testigos del citante, sino que parecían testigos de la **Martha Moncaleano,** quien no es parte de este proceso. Se observa claramente que es una especie de revanchismo con el demandante y además contra la persona que los cito como testigos, quienes junto con las otras testigos del tercero interviniente, fueron muy contradictorios incluso en la supuesta violencia que se ejerció contra la señora **Martha Moncaleano,** hechos que no se lograron demostrar contrario a lo manifestado por la señora Juez, y que como se dijo anteriormente, también se ve a todas luces que fue una componenda entre la testigo y el señor **Milciades Forero.**

Y es que si se valora lo demostrado en el proceso, el señor **Milciades Forero,** trató primero de constituir sin pruebas un supuesto comodato, que además fue desvirtuado por la testigo señora **Martha Moncaleano,** y por

otro lado en la declaración que rindió manifestó que había celebrado contrato de arrendamiento con la misma testigo, hecho que también fue desvirtuado por la testigo.

En conclusión Honorable Magistrado, en el presente asunto, se tiene que fueron probados todos los elementos de la posesión. Se concluye lo anterior una vez analizadas las pruebas de forma integral, tanto interrogatorios de parte, como documentales, testimoniales y la inspección judicial, allí se demostró que el demandante señor **Robert Enrique Soler Forero,** reúne los requisitos exigidos por la Ley para adquirir por el modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva, el dominio del bien inmueble pretendido.

Basado en lo anteriormente referenciado, con el debido respeto solicito al Honorable Magistrado, revocar la sentencia apelada y en sede de instancia dictar sentencia en el sentido de acceder a las pretensiones incoadas en la demanda, declarando que mi mandante señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** ha adquirido por el modo de la prescripción extraordinaria de dominio el bien inmueble objeto del presente proceso, se ordene la inscripción de la sentencia en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Consecuencialmente condenar a la parte demandada al pago de costas, gastos y agencias en derecho en las dos instancias.

En estos términos dejo plasmada la sustentación del recurso de apelación.

Del Honorable Magistrado, atentamente:

HENRY GLEY GARZÓN LONDOÑO
C. C. No. 19.475.963 de Bogotá
T. P. 168.878 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CHAVARRO MAHECHA RV: APELACION RAD.: 11001310304520180003901

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 04/09/2023 8:49

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (821 KB)
APELACION_SENTENCIA_2_SUSTENTACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 8:23
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: joseforerob@gmail.com <joseforerob@gmail.com>
Asunto: RV: APELACION RAD.: 11001310304520180003901

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: Jose M Forero <joseforerob@gmail.com>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 8:07
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: robertesoler@hotmail.com <robertesoler@hotmail.com>
Asunto: APELACION RAD.: 11001310304520180003901

BUENOS DIAS
Respetuosamente adjunto escrito de sustentación de APELACIÓN en proceso de la referencia
Cordial Saludo
josemforerob

PUERTO FORERO & ASOCIADOS
Abogados Especializados
Asesores

Administrativo – Ambiental – Comercial - Tributario - Penal – Electoral

HONORABLES
MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
E. S. D.

Ref.: SUSTENTACION APELACION SENTENCIA
Dda.: PERTENCIA/RECONVENCION
PROCESO ORDINARIO
DTE: ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO
DDO: ISABEL BAUTISTA DE FORERO
No. de Rad.: 2018-0039

JOSE M. FORERO BAUTISTA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Fusagasugá, abogado titulado con T. P. No. 20118 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi propio nombre y representación en calidad de demandado y demandante en RECONVECION, estando dentro del término consagrado en el Artículo 14 del Decreto 806 de 2020, hoy Articulo 12 de la Ley 1213 de 2022, respetuosamente sustento el recurso de apelación solicitado por el suscrito demandado y demandante en reconvención y concedido por la señora Juez 46 Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, contra la sentencia dictada el día 26 de Abril de 2008 y mediante la cual, niega las pretensiones de la demanda principal, sin ordenar lo consecuente a su decisión como la condena en costas y perjuicios ocasionados y la entrega del bien objeto del proceso al demandado, sin tener en cuentas las excepciones de fondo presentadas como fundamento de los perjuicios recibidos y de acuerdo a las siguientes

Causas del Recurso

a – Haberse declarado no probados los supuestos de hecho de la demanda de Reconvención presentada por el demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA dentro del presente proceso de pertenencia, existiendo abundante prueba testimonial e indiciaria que los confirman.

b – No haberse condenado al demandado en costas del proceso ni en perjuicios a pesar de no haber probado el demandante, siendo de su resorte, los elementos necesarios para alegar la posición, tales como la tenencia del bien con “ánimo de señor y dueño”; la inexistencia “de violencia” en su posesión “quieta y pacifica”; la “buena fe” de su posesión existiendo prueba testimonial y documental en contrario que confirma la clandestinidad y la inexistencia de estos elementos necesarios para la declaratoria de pertenencia por posesión, y en consecuencia, no haberse tenido en cuanta lo prescrito en el Articulo 964 del Código Civil; procediendo a sustentar la apelación interpuesta, en la siguiente forma:

1 – DE LA SENTENCIA

1.1. La señora juez en la sentencia declara no probados los hechos que alegados y probados testimonial e indiciariamente confirman la existencia de un "contrato de comodato" entre los tenedores del inmueble objeto de la pertenencia trabado en proceso de sucesión, en donde al demandante ROBER ENRIQUE SOLER FORERO no se le acepto la oposición realizada como poseedor dentro de la diligencia de secuestro.

1.2. La señora Juez 46 Civil del Circuito de Bogotá, dicto sentencia negando la pretensión de la demanda al no haberse podido establecer la continuidad de la presunta posesión alegada en la demanda, pues al tiempo alegado en ella se interponía la posesión ejercida por mi señora madre hasta el día de su fallecimiento; la tenencia real y efectiva ejercida por su hermana Martha Consuelo Moncaleano que al parecer fue de más de quince años[1]; y, la tenencia que ejerció el señor HAROLD SOLER FORERO de quien quedo establecido, vivió como comodatario por un tiempo indeterminado en el inmueble objeto de este proceso, después de haber sido sacado del inmueble por mi propia madre, hecho que el suscrito ignoraba; tenencia que ejerció hasta el día de su fallecimiento que ocurrió al parecer después del año 2014 como fecha en que, coincidencialmente fue desplazada violentamente por el demandante Robert Enrique Soler su medio hermana la comodataria y arrendataria Martha Consuelo Moncaleano.

1.3. La sentencia dictada en este proceso a pesar de negar las pretensiones de la demanda, sin considerar las excepciones de fondo presentadas, **no ordena la restitución del inmueble al demandado ni la cancelación de las medidas preventivas adoptadas** por el Juzgado que, en su oportunidad, fueren registradas y que hoy en día afectan el dominio del inmueble trabado en el presente proceso de pertenencias, cancelación que se debió decretar tal como se ordena en el Código General del Proceso[2]

1.4. La sentencia no considera las excepciones de fondo presentadas por el demandado en su contestación, a excepción de la prescripción de la acción ordinaria en consideración con el tiempo alegado en la demanda (**1995 a 2017**), negando su existencia; pronunciándose tímidamente al respecto de otras excepciones que, conduciendo a la sanción del usurpador, textualmente se interpusieron en la contestación de la demanda.

1.5. La sentencia olvida, a pesar de su decisión, ordenar la cancelación de las medidas preventivas registradas y la entrega del inmueble al demandado.

---

[1] 1999 a 2015.- Despojada de su tenencia y/o posesión hoy haces más de ocho (8) años.

[2] **LIBRO CUARTO, MEDIDAS CAUTELARES Y CAUCIONES, TÍTULO I, MEDIDAS CAUTELARES, CAPÍTULO I, Normas Generales,** Arts., 590, 591

Queda en firme, en consecuencia, **el derecho de dominio y la posesión que por sucesión se le otorgo a favor del demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA**, con la aprobación de la PARTICION dentro del proceso de sucesión de ISABEL BAUTISTA VDA DE FORERO Radicado bajo el No. 11001311000520160091300 tramitado por el Juzgado 5º de familia tal como y como consta en ese proceso como prueba decretada, traslada y agregada al presente expediente, en donde en diligencia de secuestro el demandante ROBERT ENRIQUE SOLER se opone por POSESION **como presunto heredero**, hoy tenedor comodatario del inmueble objeto de la sucesión, **OPOSICIÓN** que, se repite, le fue negada por el señor Juez 5º de Familia dentro del proceso mencionado.

2 - SINTESIS DEL PRESENTE PROCESO

2.1. No obstante, la existencia de proceso de Sucesión abierto y radicado día 31 de Agosto de **2016**, se inicia paralelamente el presente proceso de **solicitud de pertenencia** presentada clandestinamente por uno de los presuntos herederos y plurales tenedores del inmueble señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO** en contra de la causante ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d.), el día 11 de Mayo de **2018**; demanda que correspondió conocer al Juzgado 45 Civil del Circuito de la Ciudad de Bogotá, y por traslado de competencia de acuerdo a lo ordenado por el artículo 121 del C.G.P., al Juzgado 46 ibidem.[3]

2.2. La demanda de pertenencia fue presentada en contra de mi señora madre la causante **ISABEL BAUTISTA DE FORERO** (q.e.p.d.), por el presunto heredero ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO pero inadmitida, se dirigió en contra del heredero deferido por la ley JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA e INDETERMINADOS **sin mencionar a los restantes comuneros** tenedores conocidos a pesar de ser sus hermanos con los cuales convivio en vida de mi señora madre y ser tenedores comodatarios reales del inmueble objeto del litigio, desobedeciendo lo ordenado por el señor Juez en su auto de inadmisión sobre sobre los "*determinados, si los conoce*"[4] en un acto de fraude procesal ya denunciado.

2.3. El demandante pretende obtener el dominio del inmueble a que se refiere la presente demanda, por prescripción adquisitiva extraordinaria, **al haber presuntamente poseído tal inmueble desde el año de 1995,** fecha que, según su dicho, la posesión le fue transferida por la muerte de su progenitora Ana Isabel

[3] El demandante presento poder en el Juzgado5o de Familia el día 13 de Octubre de 2017
[4] Folio 34 05-Marzo-2018 - Proceso Pertenencia 2018-0039
"….

1. Dirija la demanda en contra de los herederos determinados, si los conoce y los indeterminados de la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO. Al respecto téngase en cuenta que mediante documento obrante a folio 22 se acredita el fallecimiento de la mencionada señora y por tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones.

.."

Forero de Soler, quien según el demandante Robert Soler ostentaba la posesión de tal inmueble, desconociendo flagrantemente la posesión de mi madre, la causante, tergiversando tal fecha con la única intención de desconocer el compromiso existente entre los presuntos herederos y el heredero principal JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA realizado días después del fallecimiento de mi señora madre.

2.4. En consecuencia, el suscrito demandado presento demanda de reconvención solicitando la terminación de un contrato de comodato existente entre las partes, con la consecuente entrega del bien inmueble trabado en este proceso, habiendo sido negada esa pretensión por falta de prueba ignorando que se trata de un "contrato real y gratuito" que se perfecciona solo con la entrega y que siendo principal no tiene requisito alguno ante la existencia de la tradición que lo perfecciona, desconociendo la prueba testimonial existente, la cual resulta clara, contundente y conteste con la prueba indiciaria existente en el presente proceso.

2.5. Solicitada la "prescripción extintiva de la acción" fue negada, por cuanto no se pudo, según la sentencia, determinar el termino de posesión alegado, cuando un estudio juicio nos indica que según lo consignado en la demanda han transcurrido más de veintitrés años de la presunta posesión alegada, sin que caprichosamente se pueda reformar el "petitum de la demanda" para negar la "prescripción de la acción ordinaria" pues se violaría el debido proceso y el derecho de defensa del demandado.

2.6. No obstante, el indicio indica que la presunta posesión la ejerce violentamente el demandado a partir del desplazamiento que por la fuerza hiciere de su propia hermana quien en ese momento tuviere la doble condición de comodataria y arrendataria del inmueble, aprovechando el fallecimiento de su hermano HAROLD SOLER que como co-comodatario ejercía la tenencia del inmueble.[5]

2.7. Sin embargo, la señora Juez dicta sentencia en contra del demandante ROBERT SOLER FORERO, no accediendo a lo solicitado en las excepciones presentadas ni en la demanda de reconvención, por no haberse podido determinar, según el concepto de la señora juez, el tiempo de su presunta posesión, cuando ésta, sin necesidad de dilucidar su término, se encuentra viciada por la falta del *"animus",* la violencia y la mala fe ejercida y demostrada por el demandante, no existiendo prueba proveniente del demandante que desvirtúe la existencia negativa de estos ineludibles requisitos.

2.8. La sentencia no condena ni en costas, ni en perjuicios a pesar de estar probado la violencia y deslealtad filial ejercida por el demandante **Robert Soler Forero** en contra del demandado y de los comuneros poseedores; el estado de **ruina del inmueble** dado en comodato y probado por el juzgado; el incumplimiento del comodato al no haber residido en el lugar cambiando su

---

[5] Cfr.: Folio 85 del expediente digitalizado "AUDIENCIA DE CONCILIACION" como prueba traslada

destinación, amén del rompimiento de la promesa de "vivir en paz" como causa y origen del permiso otorgado por el heredero principal, aspectos que tímidamente toca la sentencia, sin profundizar en sus consideraciones ni asignarle consecuencia jurídica alguna.

2.9. No se ordena la Cancelación de los Registros ordenados como medidas Cautelares, dentro del presente proceso, tal como lo indica la lógica y el procedimiento al fallar en contra de las peticiones del demandante.

2.10. No declara, a quien le corresponde la posesión y el dominio del inmueble trabado en el proceso, dejando en el limbo uno de los elementos esenciales de la propiedad y objeto del proceso, tornándose contradictoria y reticente en ese aspecto con lo decidido por el señor Juez 5º de Familia.

2.11. No ordena, la entrega del inmueble a su demandado opositor, como consecuencia de la decisión, ni señala un periodo perentorio para su entrega. como consecuencia lógica de la sentencia.

2.12. No condena al demandante al pago de los perjuicios ocasionados a pesar de estar probado el contrato de comodato existente entre las partes y la mala fe del demandante con su marrullera y clandestina actuación al demandar solo a la causante ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d) sin mencionar al heredero principal, como tampoco a los **comuneros bien conocidos por él y ocupantes del inmueble,** desatendiendo la advertencia que le hiciera el señor juez al inadmitir esta demanda[6]; la violencia ejercida en contra de uno de los comuneros y arrendataria MARTHA CONSUELO MONCALEANO, su hermana; y, el grave deterioro del inmueble que anula su pretensión de "*señor y dueño*" hecha por el demandante.

3 - DE LA PRUEBA INDICIARIA

El haberse "*desaparecido*" el demandante en reconvención José Milcíades Forero Bautista por un largo tiempo del inmueble causado en sucesión por su madre y comprobarse la presencia de tenedores ligados familiarmente y con presuntos derechos sucesorales en este inmueble, es un indicio contingente que puede significar:

---

[6] Folio 34 del Expediente Digital. Dirigir la demanda contra los herederos determinados, si los conoce…

> 1. Dirija la demanda en contra de los herederos determinados, si los conoce y los indeterminados de la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO. Al respecto téngase en cuenta que mediante documento obrante a folio 22 se acredita el fallecimiento de la mencionada señora y por tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones.

a) La tenencia y posesión del bien inmueble en cabeza de comuneros que, desde la muerte de la presunta causante Ana Isabel Forero (q.e.p.d.) madre del demandante, ejercieron la posesión de buena fe, en forma pacífica con ánimo de señor y dueño; **tal como NO fue probado; o,**

b) La existencia de tenedores autorizados por el heredero legal, para el uso gratuito de un inmueble que lo releva de las obligaciones de conservación, mantenimiento y pago se servicios y de impuestos como obligaciones inherentes a su uso, consecuencia de una entrega o tradición voluntaria y altruista a personas de "buena fe" del bien inmueble trabado en el presente proceso.

Al quedar la naturaleza de la "tenencia por posesión" ejercida por el demandante huérfana de la prueba a cargo de este, quedaría probado, la hipótesis b) con los siguientes hechos probados:

3.1. El no pago de ningún impuesto y el aparente abandono del inmueble por parte del demandado JOSE M FORERO BAUTISTA, que se explica por la "omisión del ejercicio de actos de mera facultad y mera tolerancia" a que tiene derecho el comodante, sin efectos sobre su posesión de acuerdo con la ley, lo que conllevaría a una tenencia pacifica proporcionada voluntariamente por el comodante a sus comodatarios, sin la existencia de título traslativo de dominio.

3.2. La apertura del proceso de Sucesión de la causante ISABEL FORERO BAUTISTA (q.e.p.d.) por parte del comodante a nombre propio y con reconocimiento expreso de los presuntos herederos[7] por representación considerados como comodatarios, califica la buena fe del demandado en este proceso JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA.

3.3. La presentación procesal de estos comodatarios a la sucesión reclamando su inclusión como tales, reconociendo a la causante y al heredero principal, indican sin lugar a dudas su condición de presuntos herederos comodatarios y no de poseedores, destacándose su lucha jurídica por su reconocimiento como herederos, utilizando los recursos ordinarios y extraordinarios consagrados por la ley; e incluso, haber llamado a engaño al señor Juez[8] que reconociera al hoy demandante como heredero, para revocar posteriormente su decisión tal como consta dentro del proceso sucesorio, hecho que en la misma forma fue denunciado.

3.4. El haber buscado la testigo y comodataria MARTHA MONCALEANO FORERO, como está probado, el concurso del heredero JOSE M

[7] Cfr.: Folio 14 y 22c del proceso digital de sucesión de ISABELBAUTISTA DE FORERO
[8] Fraude procesal

FORERO BAUTISTA, para hacerlo comparecer ante la fiscalía a declarar a su favor es el reconocimiento expreso de su autoridad como comodante y arrendador, pues su testimonio ratificaría[9] la naturaleza de su tenencia y el usufructo de la que era despojada.[10]

3.5. En la misma forma, la búsqueda sin éxito realizada por el señor Harold Soler Forero[11] en la época en que fue despojada de la tenencia la señora Martha Consuelo Moncaleano, a mi antiguo sitio de residencia de la cual me había alejado por el año 2013, no tenía otro objetivo sino el buscar ayuda en mi autoridad como comodante al no ser incluido dentro de la presente demanda de pertenencia.

3.6. El haber firmado la testigo y tenedora MARTHA MONCALEANO FORERO un contrato de arrendamiento "gratuito"[12], para justificar documentalmente la tenencia del inmueble ante la violencia sistemática ejercida por su medio hermano demandante Robert Enrique Soler, indica la autoridad que ejercía el comodante dejando en claro la naturaleza de su tenencia con título no traslativo de dominio.

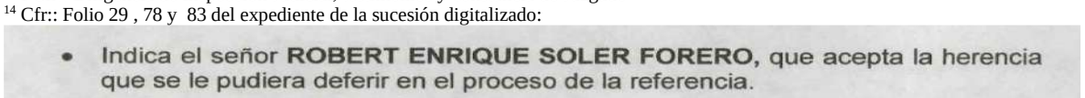
3.7. La explotación económica del inmueble trabado en el presente proceso, frente a su ruinoso estado de conservación[13], indica que la tenencia que ejercía el demandante era con fines de lucro y explotación del inmueble y no de conservación con "*ánimo de señor o dueño*".

3.8. La presencia en dos oportunidades del comodatario ROBERT ENRIQUE SOLER en la sucesión entablada por el comodante, ACEPTANDO la herencia[14] y reclamando su partición en la sucesión indica el reconocimiento de la causante y del heredero, reconocimiento que desde luego le impide usucapir, tonándose contradictorio con la presente acción.

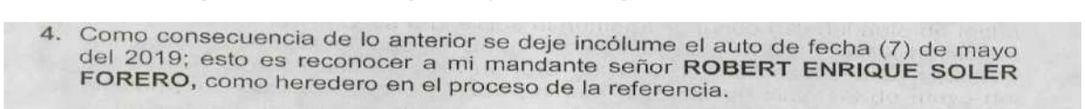
3.9. El "fraude procesal"[15] que realizo el demandante **Robert Soler Forero** al obtener su reconocimiento como heredero, calidad que fue revocada por el señor Juez de familia al caer en cuenta de su engaño, indica el desespero del demandante por el consciente conocimiento de su situación jurídica con respecto a sus derechos sucesorales y la naturaleza de la tenencia del inmueble objeto de este proceso.[16]

---

[9] Cfr.: Denuncia Penal elevada por Martha Consuelo Moncaleano contra el demandante Robert Soler
[10] Véase parte final del archivo 00023.MTS (00024.MTS) de diligencia presencial de Inspección al inmueble llevada a cabo el día 11 de Abril de 2023.
[11] Cfr.: Declaración del señor Jenaro Puerto en diligencia de Inspección
[12] Véase Cto. de Arrendamiento aportado en diligencia de Inspección
[13] FCfr.: Diligencia de Inspección Judicial, testimonios y constancia de Juzgado
[14] Cfr:: Folio 29 , 78 y 83 del expediente de la sucesión digitalizado:


• Indica el señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** que acepta la herencia que se le pudiera deferir en el proceso de la referencia.

[15] Denuncia penal Rad.: 2906000396202312446
[16] Véase.: Folio 97 del expediente de la sucesión digitalizado y anexado como prueba trasladada:


4. Como consecuencia de lo anterior se deje incólume el auto de fecha (7) de mayo del 2019; esto es reconocer a mi mandante señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** como heredero en el proceso de la referencia.

3.10. La denuncia penal presentada por la arrendataria y comodataria MARTHA CONSUELO MONCALEANO, denota la violencia en la posesión ejercida por el demandante y establece la fecha de su pretendida posesión fraudulenta.[17]

4. CAUSAS Y FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE APELACION

4.1. De la Demanda de Reconvención

4.1.1. Haberse negado lo solicitado en la demanda de RECONVENCION por falta de pruebas de un contrato consensual sinalagmático que se perfeccionó con la entrega del inmueble objeto del presente proceso, siendo un contrato principal gratuito que no necesita de otro acto o ingrediente jurídico para subsistir.

El Código civil, en su artículo 2200, define el *comodato o préstamo* de uso, como *"un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso",* agregando que se "*perfecciona por la tradición de la cosa"* no exigiendo ninguna otra solemnidad.

En principio queda probado el contrato de comodato, por la tenencia probada de la cosa entregada, pues se probó que la cosa está en poder del demandante y de sus hermanos comunes comodatarios; habiendo sido demandados en reconvención, por lo que se cumple el requisito formal de la tenencia en su poder al igual que, la tenencia gratuita por parte de los otros comuneros lo que determinaría su responsabilidad solidaria.

En cuanto a la real existencia del comodato y sus efectos, los testimonios correspondientes a la señora Andrea del Pilar Forero Moya, Andrés Puerto Valencia, Martha Consuelo Moncaleano, Jaime Martínez, Disnoris Martínez, dejados de percibir y valorar por la señora Juez prueban "el hecho a probar", no solo por su claro contenido testimonial sino por los indicios existentes, los cuales debidamente probados tal como están, son concordantes y consecuentes, con estos lo relatado en estos testimonios.

Efectivamente, los testigos Jenaro Puerto Valencia y Andrea del Pilar Forero Moya, afirman contundentemente que los señores Harold Soler y Robert Soler, se presentaron a mi apartamento, días después del fallecimiento de mi progenitora, con el fin de definir que se iba a hacer con la casa de mi señora madre, alegando que no tenían donde vivir, lo que era cierto, dejando entrever que se creían sucesores por representación, siendo lo más importante entender que, según esos testimonios, palabras más o palabras menos, el suscrito demandado les permitió

[17] Vease denuncia penal aportada al presente proceso como prueba trasladada

seguir viviendo en la casa de mi madre con la condición de que tuvieran un comportamiento adecuado especialmente respecto de su medio hermana Martha Consuelo Moncaleano con quien siempre tenían problemas de convivencia, compromiso que por sí solo, no desnaturaliza el comodato.

Días después del fallecimiento de mi señora madre, ante la queja de la presunta heredera Martha Moncaleano hecha personalmente al suscrito sobre los problemas de convivencia con sus hermanos; para asegurarle su tenencia le firme un contrato gratuito de arrendamiento, documento que descansa en el proceso, y se lo entregue para que fuera firmado por los otros hermanos a quienes se les había concedido, días antes, el uso gratuito del bien inmueble dejado por mi señora madre, ratificándole el usufruto de un local que mi madre en vida le había concedido y que efectivamente disfrutaba, hasta cuando fuera despojada, tal como lo señala la prueba existente.

Los anteriores testimonios, quedan probado en su contenido factico, con los siguientes indicios:

Primero: Las relaciones del comodante con los comodatarios siguieron normalmente, hasta el punto que el suscrito demandado, cuando tuvo oportunidad, le proporciono trabajo al hoy demandante, hecho que acepta el demandante a pesar de mentir que no se le había pagado y que, si había concurrido a mi apartamento *"era para cobrarme",* lo que no es cierto máxime cuando la señora juez le pregunto que si existía demanda laboral en mi contra con respuesta negativa, afirmación tendenciosa que tiene por objeto cubrirse en caso de comprobarse su presencia en mi apartamento.[18]

Segundo: La señora Martha Consuelo Moncaleano firmo contrato de arrendamiento que, aun cuando fue gratuito, indica la naturaleza de su tenencia, documento que descansa en el presente proceso, siendo prueba documental indicadora, a pesar de haber terminado la declarante en compinches con su victimario dentro de la sucesión a la cual pretendieron acceder, firmando conjuntamente tutela en contra de señor Juez 5º de Familia, tal como lo demuestra el proceso de sucesión arrimado como prueba trasladada.

Tercero: Quedo probado que los problemas entre los hermanos Soler Forero y Moncaleano Forero persistieron por un largo tiempo, hasta cuando ésta fue desplazada por su propio hermano quien al final, se apoderó del local que ésta usufructuaba por permiso de la causante Isabel Bautista de Forero (q.e.p.d.), hurtando las pertenecías que esta dejara en el sitio donde vivía y ejercía el usufructo en la desesperación de su violento desplazamiento, tal como lo revela su propio testimonio y lo prueba su denuncia penal arrimada al presente proceso[19] como prueba trasladada.

Cuarto: Quedó probado que la tenedora Martha Consuelo Moncaleano Forero, busco refugio en José Milcíades Forero Bautista, el hoy demandado, a quien consideraba como principal heredero del inmueble que ocupaba, y como consecuencia, éste declaro ante la Fiscalía General de la Nación sobre la naturaleza de la tenencia ejercida por la denunciante y su injusto

[18] Cfr. Testimonio de Robert Soler Forero – Archivo 0020-MTS
[19] *Copia de la denuncia No. 110016000050201522111 6 y su trámite, instaurada por Martha Moncaleano Forero*

desplazamiento, según constan en diligenciamiento de denuncia arrimada al presente proceso como prueba trasladada. Queda igualmente probado, que la posesión "violenta" alegada por el demandante, la ejerce a partir del desplazamiento de la comodataria y arrendataria Martha Consuelo Moncaleano como se deduce de la lectura del acta de CONCILIACION realizada dentro de la denuncia penal[20]

Quinto: Quedo probado con el "Acta de Conciliación" realizada en la fiscalía general de la nación como consecuencia de la denuncia presentada por Martha Moncaleano, que tal persona fue desplazada porque estaba "ejerciendo posesión"[21] sin que hubiera testamento alguno, afirmación y reclamación hecha por el denunciado Robert Enrique Soler ante autoridad competente.

Sexto. Quedo probado que el demandante Robert Soler a partir del fallecimiento de mi madre ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d.) no habitó, ni ha habitado hasta la fecha el inmueble que reclama en posesión, tal como quedo plasmado en los testimonios recogidos, pero principalmente en la constancia que dejó la juez en la diligencia de Inspección realizada por el Juzgado, ejerciendo la simple tenencia otorgada por el demandado violando el compromiso de "vivir en paz", tratando de engañar al juzgado en cuanto al sitio de su residencia, tal como se puede percibir. Por el contrario, quedó probado la tenencia y residencia ejercida por Martha Consuelo Moncaleano desde el año 2000 hasta el año 2014 cuando fue despojada por el demandante, su hermano Robert Soler, y la del comodatario Harold Soler Forero, quien ocupara el inmueble una vez fallecida mi señora madre, sin haber sido tenido en cuenta dentro de este proceso por reticencia y mala fe del demandante Rober Soler, siendo en la misma forma comodatario y tenedor en la fecha de presentación de esta demanda.

Séptimo: Quedó probado que el comodatario ROBERT ENRIQUE SOLER no uso el inmueble para "vivir en sana paz" como era su obligación de acuerdo a la condición del permiso concedido gratuitamente, sino que se dedicó a explotarlo económicamente, dejándolo deteriorar gravemente en actitud contraria a la que le correspondia ejercer a un poseedor de buena fe con "*ánimo de señor o dueño*" ejerciendo además, violencia en contra de sus comunes tenedores.

Octavo: Quedo probado, que el origen de la tenencia ejercida por el demandante no fue la transmisión de la posesión ejercida por su señora madre Ana Isabel Forero de Soler; afirmación tendenciosa y de mala fe para descartar el comodato existente como génesis de su tenencia, siendo necesario concluir, sin que exista aprueba en contrario que ésta fue adquirida con el permiso dado a ciencia y conciencia por el heredero principal José Milcíades Forero Bautista, tal como lo reconoce y acepta la tenedora Martha Consuelo Moncaleano y tácitamente lo aceptó el heredero Harold

[20] Ver: Folio 85 Cuaderno Principal – OneDrive_1_18-4-2023_1
[21] Cfr.: Denuncia penal *No.110016000050201522111 6 – Acta de Conciliación*

Soler Forero (q.e.p.d.).

Noveno: Con el expediente virtual de la sucesión tramitada por el señor Juez 5º de Familia, arrimada al presente proceso, queda probado que el demandante en pertenencia, reconoce a la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO como causante de la sucesión en la que pretende ser reconocido y al demandado José Milcíades Forero Bautista como su heredero, pues en ella su actuación se reduce a buscar su reconocimiento como heredero aceptando la herencia,[22] pero al percibir que no iba a ser reconocido, decidió presentar paralelamente tendenciosa demanda de pertenencia en "contra solo de la causante" Isabel Bautista de Forero (q.e.p.d.) quien que por obvias razones, no podía defenderse.

No se tuvo en cuenta, como lo señala la prueba documental comentada, que existe una renuncia tacita a la prescripción adquisitiva, si del estudio del acervo probatorio se tuviera como probado que el termino para prescribir estuviese cumplido, pues al presentarse a un juicio de sucesión con aceptación de la herencia con o sin beneficio de inventario[23] es señal inequívoca que reconoce a la causante y al heredero como propietarios, negando cualquier acto de posesión tal como lo resolvió el señor Juez de Familia.

Así lo considera el art. 2514 del C. C. sobre renuncia de la prescripción.

> ***Art. 2514. RENUNCIA EXPRESA Y TACITA DE LA PRESCRIPCION>.*** *La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.*
>
> *Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos.*
>
> *(subrayamos)*

La señora Juez en su sentencia, al no tener en cuenta los anteriores hechos probados, no aplico lo preceptuado en el artículo 2202 y ss. del Código Civil, que hablan de la responsabilidad del demandante que debió de ser declarada en la sentencia como consecuencia legal y necesaria de su decisión, lo que justifica esta apelación.

4.1.2. Se debatió que el suscrito demandado, a partir de la muerte de la

[22] En la demanda presentada por el Robert Soler en el proceso de sucesión se lee:

- Indica el señor **ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO,** que acepta la herencia que se le pudiera deferir en el proceso de la referencia.

[23] Folio 83 Proceso de Sucesión digitalizado

causante no hizo presencia en el inmueble, mintiendo el demandante cuando afirma que tampoco lo hacía en vida de mi señora madre, lo que lógicamente no es cierto, sin considerar que la omisión de actos de mera facultad y mera tolerancia, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna, siendo que al contrario, este es un verdadero indicio de la existencia del contrato de comodato verbal, pues significa que el demandado considero que inmueble estaba en poder de personas que, inspirando confianza, no era necesario ejercer inspección alguna sobre el inmueble, por parte del comodante.

Lo anterior, está probado además por la declaración de Martha Consuelo Moncaleano persona con presunta vocación de heredera que probó hasta la saciedad su tenencia y usufructo desde el año de fallecimiento de mi señora madre, hasta cuando el demandante ejerciendo la violencia que fuere denunciada ante la fiscalía; la desplazó quedándose además con sus haberes, a pesar de lo cual, la desplazada siguió cobrando los arrendamientos del local que tenía arrendado hasta cuando el demandante Robert Enrique Soler logro por la fuerza despojarla en su totalidad de sus derechos y arrendar por cuenta propia el local que mi madre antes de su fallecimiento le había concedido en usufructo, tal como dramáticamente lo relata en su testimonio Martha Consuelo Moncaleano y lo corrobora la testigo[24] que durante más de diez años le pago arriendo a la persona así violentada.

4.1.3. No se tuvieron en cuentas las especiales reglas que consagra la ley para la adquisición de bienes comerciales por la figura de la “prescripción extraordinaria”, la cual, no exige prueba documental alguna, pero si ciertos requisitos que, al no quedar probada su existencia, impide la declaración de la prescripción solicitada, máximo cuando se abandona por el demandante la obligación de probar como carga procesal.

Efectivamente, quedó probado al contrario, aun cuando la sentencia no lo reconoce por falta de un estricto análisis probatorio de la prueba indiciaria confrontada con la prueba testimonial que, existe un título de mera tenencia que hace presumir la “mala fe en el demandante”, sin que se hubiere podido probar por parte de éste que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio; amen de haber quedado probado sin reticencia alguna que, su tenencia y alegada posesión **es el producto de un actuar violento y clandestino**, pudiéndose determinar el tiempo de su tenencia y el ejercicio de su violenta posesión a partir del desplazamiento a que fue sometida la arrendataria comodataria declarante Martha Moncaleano Forero y del marrullero y tendencioso olvido que de sus propios hermanos hiciera el demandante en esta demanda de pertenencia no habiéndolos citado a este proceso a pesar de ser sabedor de su interés como presuntos “herederos por representación” y la tenencia real que ellos tenían del inmueble en el momento de presentación de esta demanda**, lo que indica su mala fe y la clandestinidad en su actuar.**

[24] 11001310304520180003900-20230426_112356-ROCIO CASTILLO

No se menciona en la sentencia que el demandante Robert Soler, presento demanda de pertenencia solo en contra de la causante ya fallecida, lo que prueba su marulla y mala fe, habiendo tenido que corregir la demanda por fuerza de ley, incluyendo solamente a quien se había notificado José Milcíades Forero Bautista, guardando sospechoso silencio con respecto a los dos comuneros restantes, reteniendo la verdad a pesar de la "exigencia judicial" contenida en el auto que inadmite esta demanda[25].

4.1.4. Haberse descalificado los testimonios que prueban la naturaleza de la tenencia del demandante Robert Soler, sin tener en cuenta los **indicios existentes que ratifican la veracidad de la existencia del comodato** que en demanda de reconvención, se solicitó dar por terminado.

La señora Juez en su sentencia, equivocadamente interpreta los testimonios de los declarantes Jenaro Andrés Puerto y Andrea del Pilar Forero Moya, sin dar cuenta del porqué de su afirmación, errando gravemente en su análisis con respecto a las normas de la "sana Critica", cuando estos testigos, como ningún otro, coinciden en un todo con los indicios existentes en el proceso lo que revela su verdad y su certeza, en la medida que su relato es preciso, responsivo y razonado, encontrándose respaldado en otros muchos elementos probatorios.

No se entiende el por qué la señora juez tergiversando gravemente el dicho de un testigo afirmando en su sentencia que, con respecto a la declaración de Andrea Forero; la testigo dijo ***"no tener conocimiento de la generación del contrato de comodato pues no estuvo presente"*** (?) pues esta aseveración no es de la testigo como se puede corroborar (1:55 – Archivo 2) en donde se desprende que jamás se dijo lo afirmado por la juez, **correspondiendo esta desafortunada afirmación únicamente a una lamentable equivocación de la funcionaria, tal vez, como consecuencia del escaso termino que se dio para dictar sentencia.**

Erra nuevamente la señora juez, en el análisis del testimonio del señor Andrés Jenaro Puerto, ya no en cuanto a su contenido sino en cuanto a su interpretación, consecuencia y valor la legal; pues no es cierto como lo afirma la juez en su análisis que, ***"la declaración que por sí sola no tiene la virtualidad o connotación de acreditar la existencia de un contrato de comodato como se indica en la demanda al no demostrarse las condiciones legales y específicas que rigieron dicho acuerdo (?)"*** pues ignora la señora Juez que el COMODATO es un contrato consensual que se perfecciona con la entrega del bien, cuya entrega gratuita está suficientemente probada, no habiendo razón para

---

[25]

1. Dirija la demanda en contra de los herederos determinados, si los conoce y los indeterminados de la señora ISABEL BAUTISTA DE FORERO. Al respecto téngase en cuenta que mediante documento obrante a folio 22 se acredita el fallecimiento de la mencionada señora y por tanto no puede ser sujeto de derechos y obligaciones.

negar su existencia, máximo cuando el declarante es claro, preciso, responsivo y razonado encontrándose respaldado su dicho con otros elementos probatorios existentes, especialmente por la prueba indiciaria de innegable existencia, lo que desafortunadamente no tuvo en cuenta la sentencia apelada, al exigir "***demostrarse las condiciones legales y específicas que rigieron dicho acuerdo*****",** sin que se pueda atinar a que "condiciones legales y específicas" se refiere la sentencia.

Las arandelas que pueda tener esta clase de contratos como "***condiciones legales y específicas";*** obligaciones o derechos accesorios o subsidiarios de las partes, no inciden en la existencia misma del contrato, siempre que se encuentre probada la entrega y la gratuidad como elementos esenciales para su existencia y reconocimiento al tratarse de un contrato principal que existe por sí solo, lo cual se encuentra probado suficientemente en el presente proceso, no solo con la prueba testimonial, sino con la indiciaria existente que son hechos probados que le dan al testimonio por su coincidencia, la certeza de su contenido, por lo que no se entiende a que se refiere la señora Juez cuando manifiesta "**al no *demostrarse las condiciones legales y específicas que rigieron dicho acuerdo*,** pues las condiciones legales que lo rigen, son la entrega y la gratuidad, elementos suficientemente demostrados.

Esto por cuanto el comodato es un contrato unilateral y consensual de préstamo de uso, por el que una de las partes (comodante), entrega a la otra (comodatario) una cosa no fungible para que use de ella durante un tiempo que, de no haberse pacto, queda en libertad el comodante de solicitar su terminación y restitución del bien, tal como se solicitó en la demanda de reconvención, sin que se le pueden exigir otras "condiciones legales específicas" que rijan el acuerdo, pues el comodato es un contrato que se reduce al préstamo gratuito de un bien y su entrega cuya tenencia probada, lo perfecciona.

> **4.1.5.** No haberse ordenado la inmediata restitución del inmueble al demandado, como consecuencia de una decisión que niega las pretensiones de la demanda al no haberse reconocido la existencia de la "prescripción adquisitiva" solicitada, ni valorar acertadamente la prueba de la existencia del contrato de comodato que justifica y explica la tenencia del inmueble por parte del demandante.

La restitución del inmueble, sea con la declaratoria de prescripción de la acción**;** la negación de las pretensiones de usucapión por falta de requisitos exigidos por la ley; o. con la prueba de la existencia del contrato de comodato, es un hecho irreversible que no puede desconocer la sentencia, por estar atado a su decisión.

Efectivamente al no quedar probada la posesión o usucapión demandada, el uso, disfrute y disposición como elementos de la propiedad no pueden quedar en el limbo jurídico, obligándose en consecuencia y sin razón a la parte vencedora a iniciar un proceso de entrega, siendo que, por el contrario, se debe decretar la restitución del bien trabado, decretando un plazo perentorio para su realización tal como se solicito en la demanda de reconvención.

4.2. - DE LA PERTENENCIA

Siendo la pertenencia una figura jurídica de especial impacto social, deben quedar los requisitos exigidos por la ley, exquisitamente probados para la declaratoria por prescripción adquisitiva del dominio y su posesión, uso y disfrute, prueba cuya carga legalmente le corresponde al demandante.

Veamos si aquí se cumplen, sin observación alguna:

4.2.1. El Artículo 762 del C.C., prescribe:

"ARTÍCULO 762. *La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.*

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo."

Efectivamente, quien pretende la posesión debe tener el "*animus de señor o dueño"*, que se traduce necesariamente en el mantenimiento, conservación y cuidado de la cosa poseída.

La corte constitucional ha dicho que: "*La posesión es "la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño". De aquí se desprenden sus dos elementos esenciales: el corpus y el animus. El corpus es el cuerpo de la posesión, esto es el elemento material, objetivo, los hechos físicamente considerados con que se manifiesta la subordinación en que una cosa se encuentra respecto del hombre. El animus, por su parte, es el elemento interno o subjetivo, es el comportarse "como señor y dueño" del bien cuya propiedad se pretende."*

(subrayamos)

Es decir, que se deberá probar la posesión del bien por hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como la conservación del bien en condiciones dignas, el cuidado de sus pisos, baños, cocinas, paredes y cielos rasos y otros de igual significación, como pago de servicios e impuestos, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión "*conditio sine qua non"* que demuestran la existencia de un dominio dentro de un lapso de tiempo determinado por la ley.

Los diferentes testigos que tuvieron la oportunidad de conocer la casa en vida de su propietaria original, la causante, presentes en la diligencia de Inspección Judicial extrañaron el lamentable estado en que se encontraba el interior del inmueble, el cual, al parecer, no fue objeto de ningún mantenimiento desde el fallecimiento de mi señora madre ISABEL BAUTISTA DE FORERO (q.e.p.d.) la causante, amenazando ruina como algunos testigos lo catalogaron.

Así lo dejo como constancia el perito que, contratado por el mismo demandante no tuvo otra alternativa que diagnosticar el mal estado de la edificación, circunstancia

que la señora juez presente en el lugar de la inspección, hubo de dejar la respectiva constancia dentro de la Audiencia de Inspección del Inmueble.

Dio la impresión que el demandante solo "maquillaba" los dos locales, como parte del inmueble que podía explotar económicamente, los que por fuerza de la razón aparentemente se encontraban en buen estado, pues diagnosticados sus pisos, se encontraron deteriorados y al parecer nunca fueron ni mantenidos ni cambiados.

Como la norma en comento define que *"La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño",* se necesitaría un titánico esfuerzo jurídico para declarar la posesión de un inmueble, que al parecer se conserva original, pero en ruinas, lo que indica que efectivamente fue prestado gratuitamente, pero abusivamente manejado con interés muy diferente al de su conservación como señor y dueño: Su "explotación económica" que tendrá como consecuencia un "enriquecimiento sin causa".

4.2.2. Concepto y Definición:

El Artículo 673 del Código Civil define:

> ***"Art. 673.*** *Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.*
>
> *De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el Libro* De la sucesión por causa de muerte*, y al final de este Código."*

Efectivamente, tal como indica la demanda, el señor ROBERT SOLER FORERO al no obtener eco en la demanda de sucesión, pretende adquirir el dominio de un bien determinado, mediante la figura de la *"prescripción extraordinaria*", por cuanto no acredita título alguno para el efecto de solicitarla por vía ordinaria, estando la carga de la prueba como de su obligación, prueba que trato de llevar al proceso con dos testigos que nada dijeron al respecto, pues por el contrario lo denominaron "administrador" del inmueble, pero reconociendo a mi madre como una señora regañona que usaba delantal y propietaria del inmueble, el mismo demandante según una testigo señala a Martha Moncaleano como la propietaria, siendo esa misma testigo la que le pago arrendamiento por mas de diez años a la presunta propietaria.[26]

4.2.3. Por su parte el Art. 2512 del C.C. prescribe:

> ***"Art. 2512.*** *La* prescripción *es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales.*
>
> *Se* prescribe *una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción."*

[26] Cfr. Testimonio de **ROCIO CASTILLO CASTILLO** (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00

La tenencia del inmueble, **queda establecida según la demanda impetrada**, en un término de más de 23 años (1995 a 2018) fecha del fallecimiento de Isabel Forero Bautista (1995) madre del demandante y transmisora de la posesión, y la presentación de la demanda de pertenencia (2018), tiempo más que suficiente para la **prescripción de la "acción ordinaria"** de pertenencia, tal como se alegó en la contestación de la demanda; amén de la previa solicitud por parte del demandante Robert Enrique Soler ante el Juez 5º de Familia de reconocimiento como heredero dentro de proceso de sucesión de la causante Isabel Bautista vda. de Forero, lo que lo pone fuera del alcance jurídico de lo prescrito en la norma transcrita con anterioridad.

La "prescripción de la acción" fue solicitada por el demandado José Milcíades Forero Bautista como Excepción Previa, como también como excepción de fondo en la contestación de la demanda, petición que fue negada en la sentencia que se impugna.

Por otro lado, tenemos:

4.2.4. El artículo 2514 del C. C. nos informa:

> ***"Art. 2514.*** *La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.*
>
> ***Renúnciase tácitamente****, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos. "*
>
> ***(subrayamos y destacamos)***

El señor **ROBERT SOLER FORERO** y su tenedora comunitaria **MARTHA CONSUELO GALEANO FORERO**, reconocieron dentro del proceso de sucesión que se arrimó al presente proceso como prueba trasladada, el derecho de la demandada principal **ISABEL BAUTISTA vda. DE FORERO** (q.e.p.d.) como causante y de **JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA** como su único heredero reconocido**; al presentasen a la sucesión y solicitar su inclusión como presuntos herederos,** habiéndose cumplido en consecuencia la renuncia tácita a su derecho de "prescripción adquisitiva" al reconocer a la causante y al heredero diferido, sus derechos y el consecuente dominio sobre el inmueble trabado en la sucesión; habiendo sido negada tal inclusión por el señor Juez 5º de Familia por falta de legitimidad por pasiva, decisión que fue apelada, pero confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá.[27]

[27] Cfr.: **11001311000520160091300**

Esta decisión fue tutelada por la señora MARTHA CONSUELO MONCALEANO FORERO en evidente contubernio con el demandante ROBERT SOLER FORERO como consta en la **Rad.: 11001221000020220077700** del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, entidad jurisdiccional que negó las pretensiones de los tutelantes, pero **que indica, sin lugar a dudas, la renuncia alegada en el presente escrito** y regida **por el** *art. 2514 del C. C. arriba transcrito.*

Aun cuando la tutelante Martha Consuelo Moncaleano alega no haber sido notificada para el proceso de sucesión, lo cierto es que se presentó, siendo entonces extraña su afirmación, pues en honor a la verdad, fue ella quien me proporciono parte de la documentación para la apertura de la sucesión, el nombre de los testigos y su dirección para ser citados en este proceso, y, por lo tanto, habiendo estado pendiente del desarrollo de ese proceso.

Se ha criticado que el suscrito, jamás volvió después de la muerte de su progenitora por el inmueble que mi señora madre construyo, disfruto y poseyó durante toda su vida, ni la visitaba en vida, tratando de configurar fallidamente una causal de indignidad, pero cuya explicación la da la norma que a continuación se transcribe, amén de ser un hecho indiciario probado que, por el contrario, indica la existencia del comodato alegado en la demanda de reconvención por la confianza depositada en su tenedores comodatarios, al presuntamente existir una adecuada administración que, al final, resulto un fraude por la administración personalizada ejecutada sobre el inmueble que por confianza y familiaridad se entregó en comodato.

El Artículo 2530 del Código Civil, prescribe:

> ***"Art. 2520.*** *La omisión de actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesión, ni dan fundamento a prescripción alguna.*
>
> *Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique.*
>
> *Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto.*
>
> *Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro."*
>
> *(subrayamos)*

Para contrarrestar esta afirmación, no se tuvo en cuenta que los testigos declaran que, viviendo la hermana de mi madre y su familia al respaldo de su casa de habitación, muchas veces concurrí junto con mi familia a la visita de mi tía, lo que es fácil suponer que cuando esto ocurría, iba o venia de visitar a mis padres.

Esto no tiene importancia para las resultas de este proceso, pero estoy en la necesidad y obligación moral de hacer claridad, ante la mentira, incuria y deslealtad del demandante.

4.2.5. Omisión de actos de mera facultad y tolerancia

Efectivamente, designados por familiaridad, altruismo y confianza los comodatarios por voluntad del demandado en este proceso, sobraba mi presencia, pues era fácil suponer que, si se utiliza un inmueble gratuitamente, se está en la obligación moral de mantenerlo habitable y pagar los servicios y los correspondientes impuestos, por ser el comodatario el que los causa en su uso gratuito, máxime cuando abusivamente se cambia la finalidad del permiso por una rentable explotación económica; explotación económica que únicamente se le había permitido por parte de mi madre a la arrendataria Martha Consuelo Moncaleano, derecho del cual fue ilícitamente despojada.

La apertura de la sucesión por parte del demandado en este proceso y a la que fueron convocados **todos los tenedores del inmueble** tal como consta en la demanda de sucesión, es una reacción del heredero principal José Milcíades Forero Bautista ante el incumplimiento de lo pactado en contrato consensual de comodato que, por ser un contrato unilateral, no tiene prescripción y pude terminarse unilateralmente a voluntad de quien lo concedió.

Es de aclarar que esta acción sucesoria se interpone, antes de enterarme que Isabel Forero de Soler, no era hija de mi señora madre, situación que, al parecer, si conocían los presuntos "herederos por representación", como lo indica y confirma la acción "paralela" de pertenencia por prescripción que interpusiera solo uno de los presuntos herederos y comodatarios, frente a la imposibilidad de probar su legitimidad en el proceso de sucesión.

4.2.6. Requisitos de la posesión

Por otro lado, para adquirir la prescripción adquisitiva de un bien la ley exige el cumplimiento de las siguientes reglas, cuya prueba está a cargo del demandante:

El artículo 2531 del C. C. ordena:

Art. 2531. *El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria****, bajo las reglas que van a expresarse:***

1ª. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno.

2.ª. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio.

3.ª. Pero la ***existencia de un título de mera tenencia****, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:*

1.ª Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción.

> 2.ª Que el que alegue la prescripción **pruebe** haber poseído **sin violencia** **clandestinidad**, **ni interrupción** por el mismo espacio de tiempo. “
>
> *(subrayamos y destacamos)*

De acuerdo a la descrito en la norma transcrita, columna vertebral de este derecho, pues impone las reglas necesarias para decretar la “prescripción extraordinaria del dominio” que por solicitud expresa de reconocimiento no es necesario la existencia de título alguno, **sino la contabilización del tiempo ininterrumpido** exigido por la ley para obtener la “prescripción adquisitiva” más el lleno de todos y cada uno los requisitos impuestos por la norma arriba transcrita.

Si aritméticamente se comprobara la existencia de los tiempos, dependiendo de su suma aritmética de años de tenencia y acorde con su petición, se estaría dentro de la prescripción adquisitiva, siempre y cuando que la solicite quien **pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción**, prueba que brilla en el presente proceso por su ausencia, existiendo, por el contrario, prueba de “**violencia, clandestinidad e interrupción**” no controvertida por el demandante.

Si se reclama la prescripción del derecho de dominio en forma extraordinaria, comporta una presunción de derecho como lo es la buena fe; buena fe que subsiste sin no se probare la mala fe.

En consecuencia, al excepcionante de esta clase de prescripción, al contrario de la carga probatoria de “**sin violencia, clandestinidad ni interrupción”** a cargo del demandante**,** le correspondería **probar la mala fe** en que incurrió el demandante a usucapir en contra del demandado, de lo cual sobra prueba en el presente proceso, empezando en primer lugar, por el “**consciente olvido**” de determinar y llamar a sus propios hermanos al presente proceso, lo que indica su pretendida y lograda clandestinidad; en segundo lugar, **la violencia ejercida** en contra de la arrendataria y comodataria, hermana del demandante, para apoderarse de la posesión que terminara en denuncia penal; en tercer lugar, **su comparecencia al proceso de sucesión** reconociendo causante y heredero; en cuarto lugar, **presentar demanda paralela** de pertenencia estando compareciendo al proceso de sucesión, lo que resulta totalmente contradictorio y de mala fe; en quinto lugar, **la negligencia y falta de cuidado** en la conservación del bien a pesar de su explotación económica que resulta legalmente negativa a la pretensión de dominio, sin mencionar la existencia de un **título de mera tenencia** con efectos jurídicos establecidos en el ámbito de la prescripción adquisitiva que niega el demandante, pero que testimonial e indiciariamente se encuentra probado; terminando este recuento con el fallido intento de **demandar a la causante ya fallecida** con la malsana ilusión de no tener contraparte, actitud diligentemente contrarrestada por el señor Juez primigenio de este proceso, obligándolo a dirigir la demanda contra el heredero reconocido y sus determinados “si los conocía” condición **que maliciosamente no cumplió**.

Queda suficientemente probado, que la posesión alegada por el demandante Robert Enrique Soler Forero es de mala fe al abusivamente aprovecharse de un permiso de uso, para en su imaginario convertirlo en posesión y demandar su pertenencia; no habiendo probado, que tal posesión la ejerció sin violencia, ni que

fue ininterrumpida como lo destaca la sentencia que se apela; ni que la ejerció públicamente como lo prueba la subsanación de esta demanda donde el demandante Rober Soler guarda silencio con respecto a los comodatarios y presuntes herederos tenedores sus hermanos, pretendiendo demandar solamente la inerme y fallecida causante, desconociendo a sus hermanos y al heredero principal, con el protervo, ilícito y significativo propósito de no tener contraparte en el presente proceso.

Queda además establecida su mala fe, cuando se presenta a una sucesión aceptando la herencia, engañando al señor juez a falta de la certificación de su legitimidad como heredero e inicia paralelamente proceso de pertenencia, tratando en la misma forma de engañar al juez, lo que en las dos oportunidades momentáneamente lo consigue, pero al final fue descubierto en sus ilícitos propósitos.

Por el contrario, si se examina la prueba con el rigor necesario, el comodato siendo un contrato consensual que para su prueba, solo la ley exige la entrega o tradición del bien al comodatario, vemos como la tenencia ejercida por el comodante ROBERT SOLER FORERO y los demás comuneros, se ejerció sin ninguna oposición, como consecuencia de la entrega altruista, voluntaria y de buena fe que el heredero principal le hiciera a los presuntos herederos por representación, amén del despojo violento de que fue víctima la arrendataria y comunera MARTHA CONSUELO MONCALEANO y que denunciara ante la Fiscalía General de la Nación, como consta en prueba allegada y a la cual dramáticamente se refirió en este proceso dentro de la audiencia de Inspección realizada por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá.[28]

Esta entrega del inmueble en comodato a los comuneros Robert Soler Forero, Harold Soler Forero y Martha Consuelo Moncaleano Forero, se deduce con certeza, no solamente por la existencia de los testimonios claros y consecuentes rendidos por el señor Jenaro Andrés Puerto Valencia y la señora Andrea del Pilar Forero Moya, sino como resultado del análisis en conjunto de todos y cada uno de los demás testigos, y especialmente, de los hechos indicadores tales como, la actual tenencia del inmueble en cabeza de uno de los comuneros que prueba la entrega; la ausencia por varios años del heredero principal y su falta de interés en la suerte del bien objeto del presente proceso, que indica, y no otra cosa, la confianza del comodante depositada en los comodatarios; y, la ayuda solicitada por la comodataria Martha Consuelo Moncaleano en el momento de ser desplazada.

Para decir lo contrario, se necesitaría la prueba a cargo del demandante de cómo obtuvo la tenencia o posesión, posesión que, habiendo tratado de explicarla el demandante mediante la consignación en su demanda de un hecho falso, resulto ser una farsa tendiente a desvirtuar el comodato, pues no era posible que obtuviera la posesión cedida por su madre Ana Isabel Forero de Soler, cuando mi

[28] Archivos 00023 de la Audiencia Presencial realizada por el Juzgad 46 Civil del Cto. de Bogotá, el día once de abril de 2023.

madre, la propietaria inscrita ejerció posesión hasta el día de su fallecimiento como lo demuestra la prueba recaudada.

El llamado de auxilio de la señora Martha Consuelo Moncaleano comodataria y su afanosa búsqueda del arrendador y heredero principal José Milcíades Forero Bautista cuando se vio despojada violentamente de su tenencia, significa la autoridad que por su calidad, podía ejercer el comodante ante el violento y abusivo comunero comodatario ROBERT SOLER FORERO, obteniendo tal como sucedió, su intervención ante la fiscalía para declarar y apoyar su tenencia; existiendo así mismo un hecho indicador, consistente en la existencia de un documento firmado por el comodante José M Forero Bautista a favor de la comodataria MARTHA CONSUELO MONCALEANO de un contrato de arrendamiento gratuito a su nombre; y las reiteradas visitas del señor Harold Soler Forero a mi apartamento, pero que, sin que se supiera su objetivo, es fácil de imaginar su situación:

¡También era víctima del desalmado usurpador!

La contratación laboral que hiciere el hoy demandado José Milcíades Forero Bautista con el hoy aspirante ROBERT SOLER a usucapir para desarrollar labores en una mina que administraba, relación laboral que acepta expresamente el demandante en su declaración rendida en audiencia presencial, indica la relación amistosa y la confianza existente entre el comodante heredero y el comodatario demandante cuando gozaba de vivienda gratis, antes de que fuera tocado por la codicia, la deslealtad y la falta de amor filial, como consecuencia seguramente de un pésimo y mal intencionado asesoramiento.

Pero los requisitos legales para usucapir se tornan exigentes cuando, en la segunda circunstancia exigida por el Numeral 3º del artículo en comento[29] exige que "… el que ***alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción*** por el mismo espacio de tiempo", aspecto que los testigos solicitados por el demandante Robert Soler a quien le correspondía la carga de la prueba, nada dicen sobre el supuesto de hecho de la norma comentada.

Como se lee Honorables magistrados la **carga de la prueba** de haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción **corresponde al demandante** y no al demandado, demandante que no hace esfuerzo alguno para probar "el supuesto de hecho" de la norma que regula la posesión, presentando unos testigos que "debidamente preparados", incurrieron en graves errores contrarios a la prueba indiciaria existente.

Así las cosas, las pruebas testimoniales presentadas (dos) por el demandante, en ningún momento nos indican que haya poseído "*sin violencia, clandestinidad, ni interrupción*" pues sus declarantes nada dicen al respecto, como tampoco existe prueba documental que así lo indique, pues por el contrario riñen con la realidad procesal.

---

[29] "2.ª *Que el que alegue la prescripción **pruebe** haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo." (subrayamos)*

Por el contrario, las declaraciones solicitadas y recepcionadas en la demanda de RECONVENCION, empezando por el testimonio rendido por la comodataria comunitaria MARTHA CONSUELO MONCALEANO FORERO están saturadas de la violencia ejercida por el comodatario ROBERT SOLER FORERO, hecho que es corroborado dramáticamente por testigos imparciales **no tachados**[30], dignos de credibilidad por su imparcialidad, su espontaneidad, coincidencia y correspondencia con todos los hechos probados en el proceso.

Aun cuando la señora Juez menciono la existencia de esta violencia, no le dio trascendencia ni le atribuyo sus consecuencias jurídicas dejando en el limbo no solamente la entrega del inmueble usurpado; sino que tampoco, ordenó cancelar los registros de las medidas cautelares, y lo más grave, no condeno al demandante en perjuicios, ni siquiera en costas del proceso, como si el demandado José Milcíades Forero Bautista no hubiere sufrido ningún perjuicio como consecuencia de la codicia, deslealtad, temeridad y mala fe del demandante Robert Soler Forero; y como si la traición a la familia no fuera un hecho de los más abominables, dolorosos y repudiables, máximo cuando se extiende la mano sin interés para que coman y vivan sin preocupación y lo que recibe es un mordisco que amputa sus derechos y cuyo remedio encontró en la cirugía jurídica que los restablece, pero por ahora, sin el rigor necesario.

Hasta los animales más feroces respetan esta loable circunstancia, cuando de comer les dan… y si muerden a sus benefactores no lo hacen con la violencia experimentada en este proceso.

5. DE LAS PRUEBAS RECOLECTADAS

De acuerdo con la DEMADA PRINCIPAL, su contestación y la demanda de RECONVENCIÓN, se decretaron y realizaron las siguientes pruebas testimoniales, existiendo además prueba indiciara que, en su conjunto, prueba la existencia del supuesto de hecho contenido en la ley para decretar el éxito de la demanda de RECONVENCION y de las excepciones presentadas a la demanda, pruebas que la señora juez, desafortunadamente no valoro debidamente.

5.1. DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

No obstante, y a sabiendas que cualquiera de las partes podría tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que

[30] Ver declaración de **DISNORIS BAUTISTA VERA**: (11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30) ; y de **ROCIO CASTILLO CASTILLO** (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00 A O:45:00)

afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco; sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados tal como sucedió que algunos testigos fueron tachados en el presente caso; hay que tener en cuenta que el objeto a probar son relaciones que están dentro del ámbito familiar y que por lo tanto, su valor probatorio no puede descartarse por el hecho de que quien lo rinde afirme ser familiar de cualquiera de las partes, sino que es necesario estudiar su espontaneidad, consistencia y coherencia y sobre todo, su coincidencia con las demás pruebas documentales o indiciarias, lo que exige un estudio comparativo del dicho del testigo con la prueba documental recaudada y el hecho indiciario existente, ejercicio que no realizo la señora juez, seguramente por la premura del tiempo y su deseo de definir rápidamente esta situación por el tiempo que llevaba el proceso en su poder y acosada por la reiterada insinuación de aplicación del Artículo 121 del C.G.P., en sus incisos finales.

Es necesario hacer notar que la tacha realizada a los testigos consistió en su parentesco y presunto interés en las resultas del proceso, y no en la naturaleza inverosímil o increíble del testimonio; ni en la capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración; como tampoco en manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios; ni en el carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad probada y realizada por él; o por las contradicciones en el contenido de la declaración.

En el presente caso, ninguno de los testigos de la parte demandada y reivindicante, tachados o no, es contradictorio con la prueba documental ni indiciaria como lo veremos más adelante, sino que, por el contrario, es coincidente con todos los aspectos probados en el presente proceso, debiéndose destacar, que los testigos no familiares citados por el suscrito demandado, sus nombres fueron proporcionados por la testigo Martha Consuelo Moncaleano que, tal como se puede percibir no conocían al demandado.

Por el contrario, la parte demandante miente con respecto a la prueba documental, pues desde su demanda afirma tener la posesión desde la muerte de su señora madre **ANA ISABEL FORERO DE SOLER** trastocando la fecha de su fallecimiento con el de la causante, solo con el fin de contrarrestar la prueba del contrato del comodato que naciera con la muerte de mi madre, pudiéndose además, calificar su actuar de mezquino y desleal al no vincular directamente a las personas determinadas como se lo insinúo el señor Juez que inadmite la presente demanda como lo eran los presuntos sucesores y tenedores comodatarios conocidos, decidiendo demandar solamente a mi madre ya fallecida la cual no se hubiera podido defender sino es por la acuosidad del señor juez que inadmite la demanda, ordenando notificar a los determinados "**si los conoce**", lo que fue corregido parcialmente por el demandante pero olvidándose maliciosamente de sus hermanos que también, siendo interesados, eran tenedores determinables, violándose desde un comienzo la publicidad de su posesión alegada, **siendo en consecuencia viciada su petición no solo por la violencia ejercida contra uno de los comuneros, sino por la clandestinidad ejercida al entablar silenciosamente esta acción.**[31]

[31] C.C. **Art. 774.** Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lujar o a nombre de otro.

La prueba documental contradice la afirmación sobre el lapso de tiempo de posesión, pues el fallecimiento de la causante se produce cinco años después del fallecimiento de la presunta y prematura "heredera trasmisora" madre del demandante; amen de la existencia de comodatarios y presuntos herederos determinables que vivieron y acompañaron toda una vida al demandante y a la causante, sin que hubieren sido citados como determinados en el presente proceso en un insólito acto de deslealtad, pero que habiéndose enterado con posterioridad resolvieron no actuar dentro del presente proceso seguramente por no creerse poseedor de los derechos aquí alegados.

Además, el contrato de arrendamiento en cabeza de la comodataria Martha Consuelo Moncaleano y su tenencia probada por mas de quince años, impiden que nazca la posesión alegada, pues adquirida violentamente, solo puede contarse a partir del año 2015 fecha en que fuere desplazada la legal tenedora tantas veces citada, Martha Consuelo Moncaleano.

Por otro lado, uno de sus testigos presentados por el demandante, afirma que éste **ejercía la tenencia del inmueble como administrador** sin precisar de quien, y el otro testigo de los dos presentados, no logra concretar la calidad del poseedor, siendo además su testimonio contradictorio con la realidad que consta en el proceso, expresada fielmente por el resto de testigos.

Veamos entonces los testimonios presentados y su relevancia probatoria.:

5.1.1. De la Prueba Testimonial presentada por el demandado:

A) Declaración del señor Jenaro **ANDRES PUERTO VALENCIA**, **(11001310304520180003900-20230426_145636 - MM 3:40 a 15:30**) quien para el efecto, en resumen declara que, después de la muerte de la causante ISABEL BAUTISTA DE FORERO, mi madre; los dos presuntos sucesores se presentaron al apartamento en donde vivía el heredero legal de la sucesión, para inquirirle sobre que hacían con la casa en donde ellos habitaron toda la vida, por lo que el demandado señor FORERO BAUTISTA les dijo que podían seguir viviendo ahí siempre y cuando su comportamiento fuera el adecuado.

Este testimonio es concordante con el segundo indicio **"b)** La existencia de tenedores autorizados por el heredero legal**"** y explica la no presencialidad del demando ni se su familia, en el inmueble objeto de este proceso, una vez acaecida la muerte de la causante.

Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente.

Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella.
(destacamos - subrayamos)

Así podríamos preguntarnos ¿por qué el demandado en pertenencia, siguió dándole trabajo al demandante en prescripción adquisitiva tal como lo afirmo el propio demandante en declaración rendida, y por qué, según lo manifestó el testigo Jenaro Andrés Puerto, el señor HAROLD SOLER FORERO siguió visitando al demandante según los mensajes recibidos en la portería del edificio en donde el demandado José Milcíades residía?[32]

B) Declaración de la señora - DISNORIS BAUTISTA **(11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30)** quien, para el efecto, en resumen, declara:

En forma conmovedora, explica los maltratos a que fue sometida la tenedora y/o presunta poseedora MARTHA MONCALEANO FORERO, medio hermana del demandante y la violencia ejercida por ROBERT SOLER FORERO sobre ella, hasta el punto de hacerla abandonar el inmueble en compañía de su esposo y de sus hijos, todo porque siendo su esposo un militar no podía responderle a los insultos y agresiones del demandante en razón a las consecuencias que sufriría de acuerdo al “estatuto que lo rige” como militar en ejercicio, hechos violentos que la misma Martha Moncaleano nos permite conocer.

Indica, además, que fue esta testigo y no como equivocadamente el suscrito demandado lo quiso probar con el testimonio de Jaime Martínez su señor padre, la persona que le suministro a Martha Moncaleano la forma de encontrar al suscrito demandado para pedirle ayuda, lo que prueba efectivamente el “animus de tenedora” del inmueble, y de paso, el compromiso de su padre Jaime Martínez con la verdad, al negar rotundamente que él no había suministrado la forma de encontrar al heredero demandado José Milcíades Forero Bautista.

Esta testigo DISNORIS BAUTISTA es acorde en un todo con lo declarado por la señora Martha Moncaleano Forero, aun cuando no supo explicar si esta era tenedora o poseedora, excusándose de su ignorancia respecto al significado jurídico del término “poseedor”.[33]

C) Declaración de la señora ROCIO CASTILLO CASTILLO (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00 A O:45:00)

La señora **ROCIO CASTILLO CASTILLO**, nos da cuenta de la calidad de tenedora y usufructuaria que la señora MARTHA CONSUELO MONCALEANO FORERO ejercía sobre el inmueble trabado en el presente proceso, indicando el tiempo que la señora MONCALEANO FORERO ejerció este usufructo y tenencia

[32] **Nota;** Se puede comparar y analizar su espontaneidad, coherencia y certeza, observando el testimonio grabado en el archivo referenciado **(11001310304520180003900-20230426_145636 - MM 3:40 a 15:30**)

[33] Vease **(11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30 a 1:19:48)**

con en el cobro de cánones de arrendamiento por más de doce años a la arrendataria ROCIO CASTILLO CASTILLO. Fue el propio demandante ROBERT SOLER FORERO que le manifestó a la testigo que la propietaria del local era su hermana MARTHA CONSUELO con la que debía de hablar para efectos de su arrendamiento, reconociendo la comunidad existente entre los tenedores y el usufructo a favor de su media hermana que posteriormente violentó.

Narro la violencia ejercida contra su arrendadora, violencia que extendió a su arrendataria ROCIO CASTILLO CASTILLO quien acepta que su arrendadora le comento que el local se lo había dejado su abuelita. Afirma que el señor ROBERT SOLER no vivía en la referida casa mientras ella tuvo el local en arrendamiento; la única que vivía ahí era MARTHA aceptando que también vivía HAROLD SOLER. Afirma que no podría decir si MARTHA era la dueña o no.[34]

D) Declaracion de Andrea del Pilar Forero Moya (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 1:50:00 a 2:17:30)

La testigo Andrea del Pilar Forero Moya, siendo descriptiva en uno de los partes de su declaración manifiesta que: *"la casa totalmente deteriorada en ruinas es una lástima que mantengan esa casa así"* significando en general el lamentable estado de deterioro de la casa trabada en el presente proceso. Ratifica la calidad de los ocupantes de la casa cuando manifiesta que ellos (los hermanos soler forero) estuvieron en el apartamento de mi padre, fue Robert y fue Harold, básicamente fueron a preguntar si podían quedarse a vivir en la casa y que, qué iban a ser con la casa, que si podían seguir viviendo ahí habiendo solucionado mi padre afirmativamente este petición, *"siempre y cuando existiera comunidad entre ellos, estuvieran tranquilos, estuvieran en paz, que no pelearan, que no hicieran esos escándalos que acostumbraban o decían que hacían"*, *"dijeron que sí, que hacían compromiso de convivencia"* manifestó que mi papa gerenciaba unas minas de esmeralda y entonces ellos hacían arreglos allá" y manifiesta que "ellos no pagaban arriendo, ni nada, ellos vivían ahí pero pagan los servicios, arriendo no"

Manifiesta que, tal como es cierto, la señora Martha Moncaleano no estuvo en el apartamento de su padre, pues con ella, como se manifiesta en este escrito, posteriormente se firmó contrato de arredramiento, autorizándola para permanecer en esa casa de habitación en compañía de sus hermanos.

Como coherente, desinteresado e ilustrativo puede catalogarse este testimonio[35] **contrario a lo expresado en la sentencia**, siendo concordante con la prueba testimonial, documental e indiciaria que reposa en el presente proceso.

E) Declaración de Jaime Martínez (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 2:23:00 a)

[34] Cfr.: Declaración de la señora ROCIO CASTILLO CASTILLO (11001310304520180003900-20230426_112356 - mm 0:17:00 A O:45:00)
[35] Declaración de Andrea del Pilar Forero Moya (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 1:50:00 a 2:17:30)

> "Conocí la casa por dentro" conocí la casa como ordenadita hasta la fecha en que murió mi tía era ordenada" "el día de la diligencia me pareció desastroso" "da como angustia, da tristeza ver una casa totalmente destruida" "sé que el propietario es José, José M Forero José Milcíades Forero" "usted es la única persona que se conoce como heredero"

En resumen, para efectos del proceso de pertenencia, al testigo le consta el estado de conservación de la casa en vida de mi madre y el estado desastroso de ese inmueble en el momento de la diligencia de Inspección, y que el propietario es José M Forero Bautista pues es el heredero conocido. Niega que la señora Martha le haya pedido el teléfono mío, siendo verdad, pues en ese aspecto el suscrito se había equivocado de testigo, pues como se verá, quien le suministro mi teléfono a Martha para contactarme y contarme lo sucedido con su tenencia y reclamar mi ayuda, fue la señora Disnoris Martínez[36] tal como se comprueba al examinar este testimonio, el cual, para comprobar su calidad, veracidad e intensidad, debe oírse en su totalidad.[37]

5.1.2. TESTIMONIOS PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE

A) Declaración de DIEGO HERNAN FINO MORALES (11001310304520180003900-20230426_112356-MMM 0:55:20 a 1:19:48)

Este testigo ni niega ni agrega hechos a los conocidos en el presente proceso. Solo, como hecho importante, habla que el demandante es el administrador de ese inmueble, pero sin que logre definir de quien era Administrador.

Sobre la salida de la señora Martha Moncaleano del inmueble objeto de este proceso, infamemente la justifica. Supo que mi madre tuvo una hija de nombre ISABEL, pero por razones explicables, no sabe que también tuvo otro hijo de quien manifestó no haber visto nunca, ni haber oído de él, lo que es extraño pues mi madre era muy orgullosa de su hijo; a todo el mundo le comentaba de su existencia, pero eso testigo lamentablemente no lo conocía seguramente obedeciendo órdenes dadas en la preparación de su declaración.

Contrario a lo afirmado por los demás testigos afirma que ROBERT SOLER vivió ahí hasta "hace cinco años" pero a Martha no se acuerda de haberla visto ahí, desde hace más de 12 años, pero extrañamente, no sabe el por qué se fue (?).

Estaba preparado para falsear la verdad!

Afirma con una mendacidad que llama la atención que, el arrendador del local que usufructuaba la señora Marta Moncaleano fue el señor ROBERT SOLER FORERO.[38] lo que con facilidad se entiende no ser cierto, pues con certeza la arrendataria **ROCIO CASTILLO CASTILLO, declara lo contrario.**

---

[36] Declaración de la señora - DISNORIS BAUTISTA **(11001310304520180003900-20230426_145636- MM 30:00 55:30)**
[37] **Declaración de Jaime Martínez (11001310304520180003900-20230426_112356- mm 2:23:00 a)**
[38] **DIEGO HERNAN FINO MORALES (11001310304520180003900-20230426_112356-MMM 0:55:20 a 1:19:48)**

B) Declaración de RAFAEL LOPEZ ESPITIA (11001310304520180003900-20230426_112356 mm 1:22:00 a 1:44:00)

Este testigo incurre en serias contradicciones con los demás testigos lo que implica un juicioso y especial estudio de su testimonio, que lo interprete con autoridad, por lo que lo dejo al concepto de los Honorables Magistrados.

Hasta aquí las pruebas del demandante que nada prueban, de lo que por ley, procesalmente le correspondía probar.

6 - SOLICITUD DE PRUEBAS

Aun cuando fueron decretadas y arrimadas al presente proceso, las pruebas hoy solicitadas, extrañamente no se encuentran en el archivo digital completas, por lo que solicito a los Honorables Magistrados:

6.1 – Solicitar el expediente digital radicado con el Numero **10013110005 20160091300** al Juzgado 5 del Circuito de Familia, cuya prueba traslada fue decretada, con la advertencia que debe proveerse con la digitalización e hipervínculos **de todos y cada uno los documentos tramitados en ese proceso**, en especial todos los autos interlocutorios dictados de ese proceso.

La anterior prueba para constatar la fallida participación del demandante señor Rober Soler Forero y Martha Consuelo Moncaleano en ese proceso, lo que origino la presentación de esta demanda.

6.2 – Solicitar a la Fiscalía General de la Nación copia del Proceso Penal radicado bajo el *No. 110016000502015221116* con la advertencia que la “DILIGENCIA DE CONCILIACION” debe ser parte integrante de las copias del proceso y la declaración en el rendida por el testigo Jose Milciades Forero Bautista.

La anterior prueba para constatar el reconocimiento y la explicación que diera el demandante Robert Soler por su participación en los hechos denunciados por Martha Consuelo Moncaleano, **acta de conciliación** que se borró (?) de las pruebas arrimadas por la Fiscalía. NO obstante a ultima hora se localiza el “Acta de Conciliación” echada de menos, en el folio 85 del expediente digital.

7 – PETICION

Si el Honorable Tribunal considera que no se encuentra los presupuestos necesarios para declarar la **prescripción de la acción impetrada**, subsidiariamente le solicito **se revoque parcialmente la sentencia apelada y en su lugar se hagan las siguientes o parecidas declaraciones:**

A) Negar las pretensiones contenidas en la demanda principal instaurada contra la señora ISABEL FORERO BAUTISTA (q.e.p.d.) como propietaria inscrita del inmueble; hoy inscrita a nombre del heredero único José Milcíades Forero Bautista.

B) Tener por probados los hechos contenidos en la demanda de reconvención y en consecuencia dar por terminado el contrato de comodato existente entre las partes.

C) Ordenar la entrega el inmueble al comodante demandante en RECONVECION señor José Milcíades Forero Bautista y/o al demandado en el presente proceso fijando un plazo perentorio para su entrega. CANCELAR las medidas cautelares decretadas en el presente proceso.

D) Condenar en perjuicios al demandante señor ROBER SOLER FORERO, a favor del demandado JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA los cuáles serán liquidas por los medios legales.

E) Condenar en costas al demandado ROBERT ENRIQUE SOLER FORERO. Liquídense por secretaria.

De los Honorables Magistrados, con respeto



JOSE M. FORERO BAUTISTA
C. de C. No. 17.087.102 DE BOGOTA
T. P. No. 20.118 del C.S.J

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AGRAY VARGAS RV: INCIDENTE DE NULIDAD PROCESO 11001310304520210001401

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 19/07/2023 16:53

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (371 KB)

INCIDENTE DE NULIDAD PROCESO ASESORAMIENTO INTERNACIONAL.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AGRAY VARGAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Andrea Sierra <andreasierra.abogada@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de julio de 2023 15:49
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: INCIDENTE DE NULIDAD PROCESO 11001310304520210001401

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ESD

Referencia Proceso Ejecutivo 11001310304520210001401 Demandante Asesoramiento Internacional Demandado Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS

Asunto-. Incidente de Nulidad.

Andrea Sierra Veloza, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada de la sociedad Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS, demandada en el proceso de la referencia me permito adjuntar incidente de nulidad para su conocimiento y fines pertinentes.

--
ANDREA SIERRA VELOZA
Abogada
Calle 98 No. 70 91 Oficina 708

Edificio Vardi
8053101- 3003234423

Bogotá D.C., 19 de julio de 2023

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ESD

Referencia Proceso Ejecutivo 11001310304520210001401
Demandante Asesoramiento Internacional
Demandado Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS

Asunto-. Incidente de Nulidad.

Leidy Andrea Sierra Veloza, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada de la sociedad Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS., solicito se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto proferido el 6 de julio de 2023, inclusive, por configurarse las causales 6 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, esto es "Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado" y "*Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado*… tenía como a continuación se pasa exponer:

Dispone nuestro estatuto procedimental que las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el secretario en cuya inserción debe determinarse, la clase de proceso, los nombres de las partes, la fecha de la providencia. Para el efecto, también deberá adjuntarse la respectiva providencia.

No obstante, lo anterior, la secretaria del Tribunal pretendió fijar en el estado el proceso de referencia equivocando los datos del mismo, lo que impidió tener acceso a la providencia y por ende ejercer, los derechos procesales que me asisten. Sobre el particular, nótese que dispuso que la parte demandante es **ANA CLEMENCIA CORONADO** y no **ASESORAMIENTO INTERNACIONAL**, luego no había razón alguna para verificar las decisiones notificadas, aunado al hecho que tampoco era posible ya que como es de público conocimiento, desde el miércoles 12 de julio el micrositio ha presentado fallas y no ha permitido ingresar a revisar estados ni providencias.

Atendiendo a lo anterior, envié un dependiente para auscultar respecto el estado actual del proceso en la secretaria del Tribunal, hallando que el recurso había sido admitido el 6 de julio de la presente vigencia, empero a ello, reitero que los datos en la inserción del respectivo listado no concuerdan olvidando la información consignada en los estados debe ser fidedigna máxime si de notificaciones se trata, para así garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción que le asiste a las partes.

II. Fundamentos De Derecho

Como fundamentos jurídicos se invocan numeral 8 los artículos 133 y el 295 del Código General del Proceso el cual al tenor literal señala:

Artículo 295. Notificaciones por estado: Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él deberá constar:

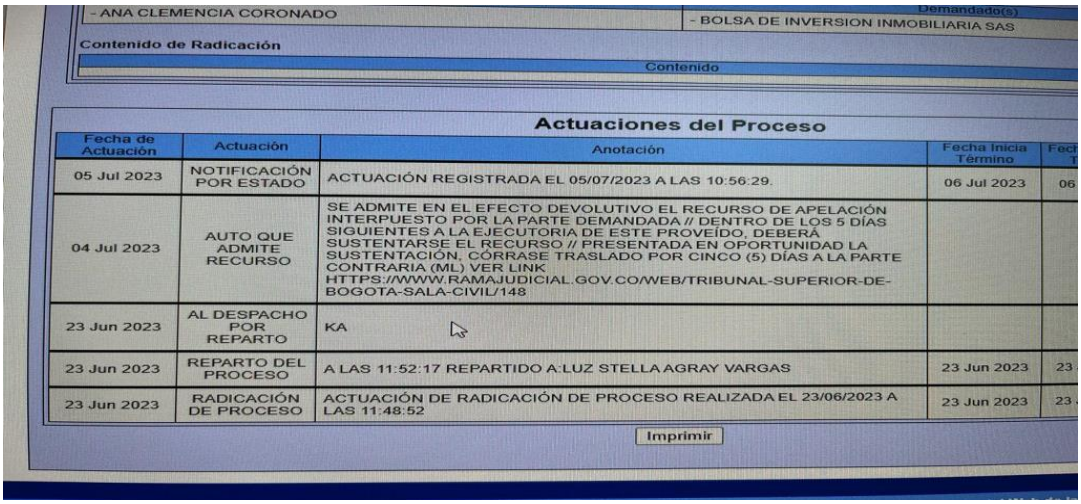
1. La determinación de cada proceso por su clase.
2. La indicación de ***los nombres del demandante*** y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión "y otros". (subrayado, cursiva y negrita fuera de texto).

Y demás normas pertinentes, concordantes y aplicables al presente asunto.

III. Pruebas

Documentales:

- Fotografía de los estados tomada directamente del sistema despacho de la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.



- ANA CLEMENCIA CORONADO | Demandado(s): - BOLSA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS

Contenido de Radicación

Contenido

Actuaciones del Proceso

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fec
05 Jul 2023	NOTIFICACIÓN POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 05/07/2023 A LAS 10:56:29.	06 Jul 2023	06
04 Jul 2023	AUTO QUE ADMITE RECURSO	SE ADMITE EN EL EFECTO DEVOLUTIVO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA // DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE ESTE PROVEÍDO, DEBERÁ SUSTENTARSE EL RECURSO // PRESENTADA EN OPORTUNIDAD LA SUSTENTACIÓN, CÓRRASE TRASLADO POR CINCO (5) DÍAS A LA PARTE CONTRARIA (ML) VER LINK HTTPS://WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/WEB/TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-BOGOTA-SALA-CIVIL/148		
23 Jun 2023	AL DESPACHO POR REPARTO	KA		
23 Jun 2023	REPARTO DEL PROCESO	A LAS 11:52:17 REPARTIDO A:LUZ STELLA AGRAY VARGAS	23 Jun 2023	23
23 Jun 2023	RADICACIÓN DE PROCESO	ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 23/06/2023 A LAS 11:48:52	23 Jun 2023	23

Imprimir

IV. Notificaciones

La suscrita en la Secretaría de su despacho o en la en la Calle 98 No. 70-91, oficina 708 Centro Empresarial Pontevedra Edificio Vardi de la ciudad de Bogotá D.C., o en el correo electrónico andreasierra.abogada@gmail.com

Respetuosamente

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No. 1.018.412.347 de Bogotá
T. P No. 207.417 del C.S de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYALA PULGARIN RV: TRASLADO NULIDAD PROCESO 2021-0014

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 05/09/2023 8:26

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

2 archivos adjuntos (667 KB)
INCIDENTE DE NULIDAD PROCESO ASESORAMIENTO INTERNACIONAL (3).pdf; AUTO CORRIGE NOMBRE DEL DEMANDANTE.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYALA PULGARIN

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Andrea Sierra <andreasierra.abogada@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 8:11
Para: anaclemencia1012@hotmail.com <anaclemencia1012@hotmail.com>
Cc: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: TRASLADO NULIDAD PROCESO 2021-0014

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ESD

Referencia Proceso Ejecutivo 11001310304520210001401 Demandante Asesoramiento Internacional Demandado Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS

Asunto-. Incidente de Nulidad.

Andrea Sierra Veloza, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada de la sociedad Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS, demandada en el proceso de la referencia me permito adjuntar incidente de nulidad a la apoderada del demandante conforme el auto notificado en el estado de hoy 5 de septiembre de la presente anualidad.

--
ANDREA SIERRA VELOZA
Abogada
Calle 98 No. 70 91 Oficina 708
Edificio Vardi
8053101- 3003234423

Bogotá D.C., 19 de julio de 2023

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ESD

Referencia Proceso Ejecutivo 11001310304520210001401
Demandante Asesoramiento Internacional
Demandado Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS

Asunto-. Incidente de Nulidad.

Leidy Andrea Sierra Veloza, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada de la sociedad Bolsa de Inversión Inmobiliaria SAS., solicito se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto proferido el 6 de julio de 2023, inclusive, por configurarse las causales 6 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, esto es "Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado" y "*Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado*… tenía como a continuación se pasa exponer:

Dispone nuestro estatuto procedimental que las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el secretario en cuya inserción debe determinarse, la clase de proceso, los nombres de las partes, la fecha de la providencia. Para el efecto, también deberá adjuntarse la respectiva providencia.

No obstante, lo anterior, la secretaria del Tribunal pretendió fijar en el estado el proceso de referencia equivocando los datos del mismo, lo que impidió tener acceso a la providencia y por ende ejercer, los derechos procesales que me asisten. Sobre el particular, nótese que dispuso que la parte demandante es **ANA CLEMENCIA CORONADO** y no **ASESORAMIENTO INTERNACIONAL**, luego no había razón alguna para verificar las decisiones notificadas, aunado al hecho que tampoco era posible ya que como es de público conocimiento, desde el miércoles 12 de julio el micrositio ha presentado fallas y no ha permitido ingresar a revisar estados ni providencias.

Atendiendo a lo anterior, envié un dependiente para auscultar respecto el estado actual del proceso en la secretaria del Tribunal, hallando que el recurso había sido admitido el 6 de julio de la presente vigencia, empero a ello, reitero que los datos en la inserción del respectivo listado no concuerdan olvidando la información consignada en los estados debe ser fidedigna máxime si de notificaciones se trata, para así garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción que le asiste a las partes.

II. Fundamentos De Derecho

Como fundamentos jurídicos se invocan numeral 8 los artículos 133 y el 295 del Código General del Proceso el cual al tenor literal señala:

Artículo 295. Notificaciones por estado: Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el secretario. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él deberá constar:

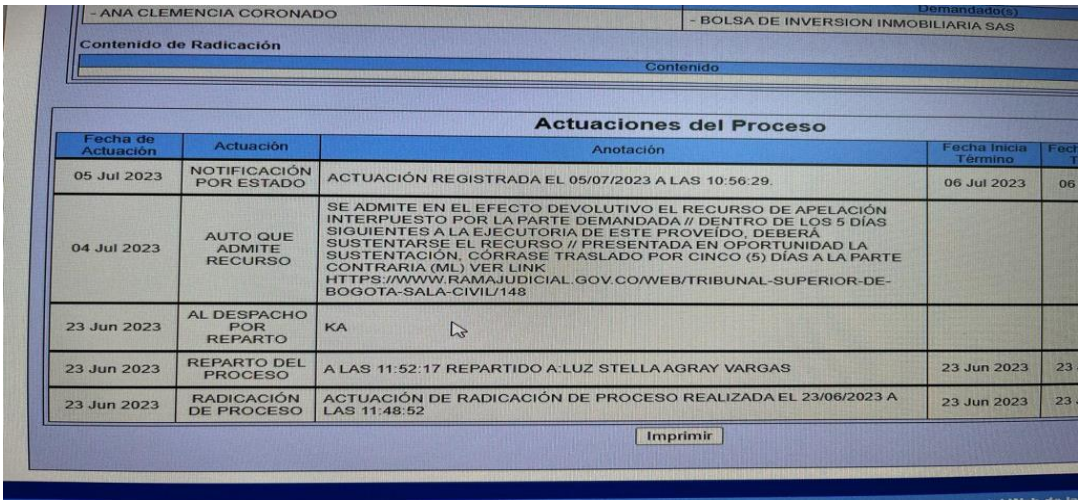
1. La determinación de cada proceso por su clase.
2. La indicación de ***los nombres del demandante*** y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión "y otros". (subrayado, cursiva y negrita fuera de texto).

Y demás normas pertinentes, concordantes y aplicables al presente asunto.

III. Pruebas

Documentales:

- Fotografía de los estados tomada directamente del sistema despacho de la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.



- ANA CLEMENCIA CORONADO | Demandado(s): - BOLSA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS

Contenido de Radicación

Contenido

Actuaciones del Proceso

Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fec
05 Jul 2023	NOTIFICACIÓN POR ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 05/07/2023 A LAS 10:56:29.	06 Jul 2023	06
04 Jul 2023	AUTO QUE ADMITE RECURSO	SE ADMITE EN EL EFECTO DEVOLUTIVO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA // DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE ESTE PROVEÍDO, DEBERÁ SUSTENTARSE EL RECURSO // PRESENTADA EN OPORTUNIDAD LA SUSTENTACIÓN, CÓRRASE TRASLADO POR CINCO (5) DÍAS A LA PARTE CONTRARIA (ML) VER LINK HTTPS://WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/WEB/TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-BOGOTA-SALA-CIVIL/148		
23 Jun 2023	AL DESPACHO POR REPARTO	KA		
23 Jun 2023	REPARTO DEL PROCESO	A LAS 11:52:17 REPARTIDO A:LUZ STELLA AGRAY VARGAS	23 Jun 2023	23
23 Jun 2023	RADICACIÓN DE PROCESO	ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 23/06/2023 A LAS 11:48:52	23 Jun 2023	23

Imprimir

IV. Notificaciones

La suscrita en la Secretaría de su despacho o en la en la Calle 98 No. 70-91, oficina 708 Centro Empresarial Pontevedra Edificio Vardi de la ciudad de Bogotá D.C., o en el correo electrónico andreasierra.abogada@gmail.com

Respetuosamente

LEIDY ANDREA SIERRA VELOZA
C.C. No. 1.018.412.347 de Bogotá
T. P No. 207.417 del C.S de la J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001 31 03 **045 2021 000014** 01.

Revisada la actuación se dispone:

PRIMERO: ORDENAR, que por Secretaría se corrija en el sistema de gestión judicial [Siglo XXI] y en el expediente la caratula con el fin de indicar correctamente quien funge como parte actora en el presente asunto.

SEGUNDO: Una vez cumplido lo anterior y surtido el traslado de la nulidad propuesta por la parte demandada en los términos del artículo 134 del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 110 *ibídem.*

TERCERO: REQUERIR al extremo pasivo de la acción con el fin de que proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 14 del artículo 78 del estatuto procesal en cita, esto es, remitir copia a su contraparte de todo memorial que sea radicado ante el Despacho y acreditar dicha actuación.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

REPARTO QUEJA 047-2022-00006-01 DR JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 13/09/2023 2:53 PM

Para:**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**;Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (484 KB)

F11001310304720220000601Caratula20230913145056.pdf; 7954.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha : 13/sept./2023

GRUPO RECURSOS DE QUEJA

CD. DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
018	7954	13/sept./2023

REPARTIDO AL DOCTOR (A)

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA

IDENTIFICACIO	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
2412761	HECTOR JULIO GUERRERO		01
86000256661	SOCIEDAD FLOTA LA MACARENA SA		02

OBSERVACIONES: 11001310304720220000601

BOG305SR
dlopezr

FUNCIONARIO DE REPARTO

11001310304720220000601

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA**

Procedencia : 047 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310304720220000601
Instancia : Segunda Instancia
Clase de Juicio : Verbal
Recurso : Queja
Grupo : 32
Repartido_Abonado : REPARTIDO
Demandante : HECTOR JULIO GUERRERO PACHON
Demandado : FLOTA LA MACARENA SA
Fecha de reparto : 13/09/2023

C U A D E R N O : 2

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,



KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 47 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j47cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 9:48
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE///NO SE ACSUA ERCIBIDO///RV: RECURSO DE QUEJA PROCESO No. 2022-00006

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO
RADICACION: No. 11001 31 03 047 **2022 00006** 00

Buenos días,

Subsanada y corregida las anotaciones descritas en el correo de "DEVOLUCÍON EXPEDIENTE" remitimos nuevamente el LINK del proceso referido a fin de que se tramite el recurso de que concedido.

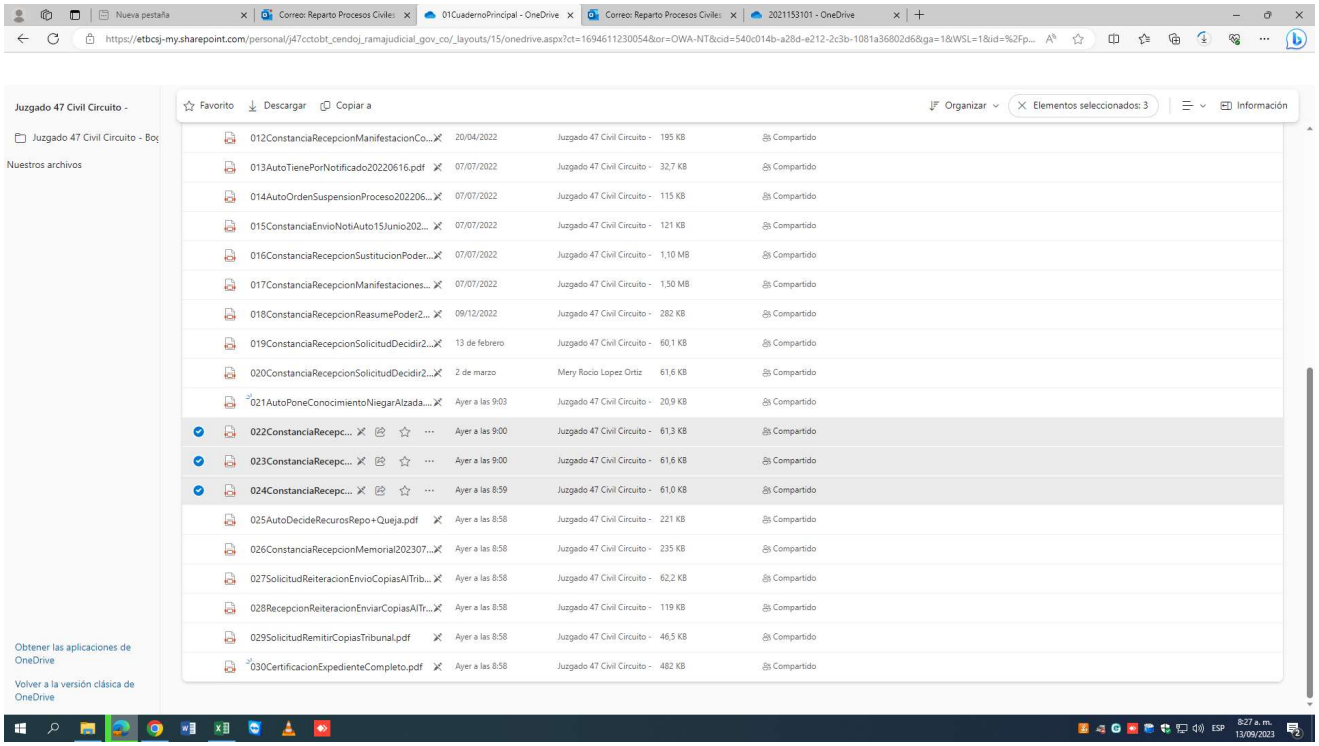
11001310304720220000600

Atentamente,

Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá
Carrera 9 No. 11-45 Piso 6º Edificio Virrey Torre Central

Las notificaciones por correo electrónico son realizadas de conformidad con la el Articulo 197 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Artículo 612 del Código General del Proceso; a saber: las entidades Públicas de todos los niveles, las Privadas que cumplan Funciones Públicas y el Ministerio Público, (o directamente a las personas naturales según el caso) deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 8:34
Para: Juzgado 47 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j47cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE///NO SE ACSUA ERCIBIDO///RV: RECURSO DE QUEJA PROCESO No. 2022-00006



Cordial saludo. No se acusa recibido. Sírvanse incorporar el escrito por el cual se invoca el recurso de queja interpuesto, pues se observa que solo se incorporaron constancias electrónicas de recepción, mas no el escrito del mismo. Sírvanse proceder

JAIME HILDEBRANDO VEGA CARRIZALES
CITADOR IV - SECRETARÍA SALA CIVIL TSB

De: Juzgado 47 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j47cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 8:00
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO DE QUEJA PROCESO No. 2022-00006

Señor
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO
RADICACION: No. 11001 31 03 047 **2022 00006** 00

Por medio del presente se envía el link del proceso citado en la referencia y el oficio de remisión, con su respectiva constancia, a fin de surtir recurso de **QUEJA.**

De igual forma se adjunta el formato del índice electrónico de acuerdo a los protocolos de digitalización, todo lo anterior en el siguiente link: 11001310304720220000600

Atentamente,

Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá
Carrera 9 No. 11-45 Piso 6º Edificio Virrey Torre Central

Las notificaciones por correo electrónico son realizadas de conformidad con la el Articulo 197 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Artículo 612 del Código General del Proceso; a saber: las entidades Públicas de todos los niveles, las Privadas que cumplan Funciones Públicas y el Ministerio Público, (o directamente a las personas naturales según el caso) deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

LINK DEL PROCESO 047 -2022-006 01 DR ISAZA 11001310304720220000601

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: DESCORRO TRASLADO RADICADO No 11001310305020200028501

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 04/09/2023 16:51

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (3 MB)

RECURSO APELACIÓN RAD 2020-00285-01.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

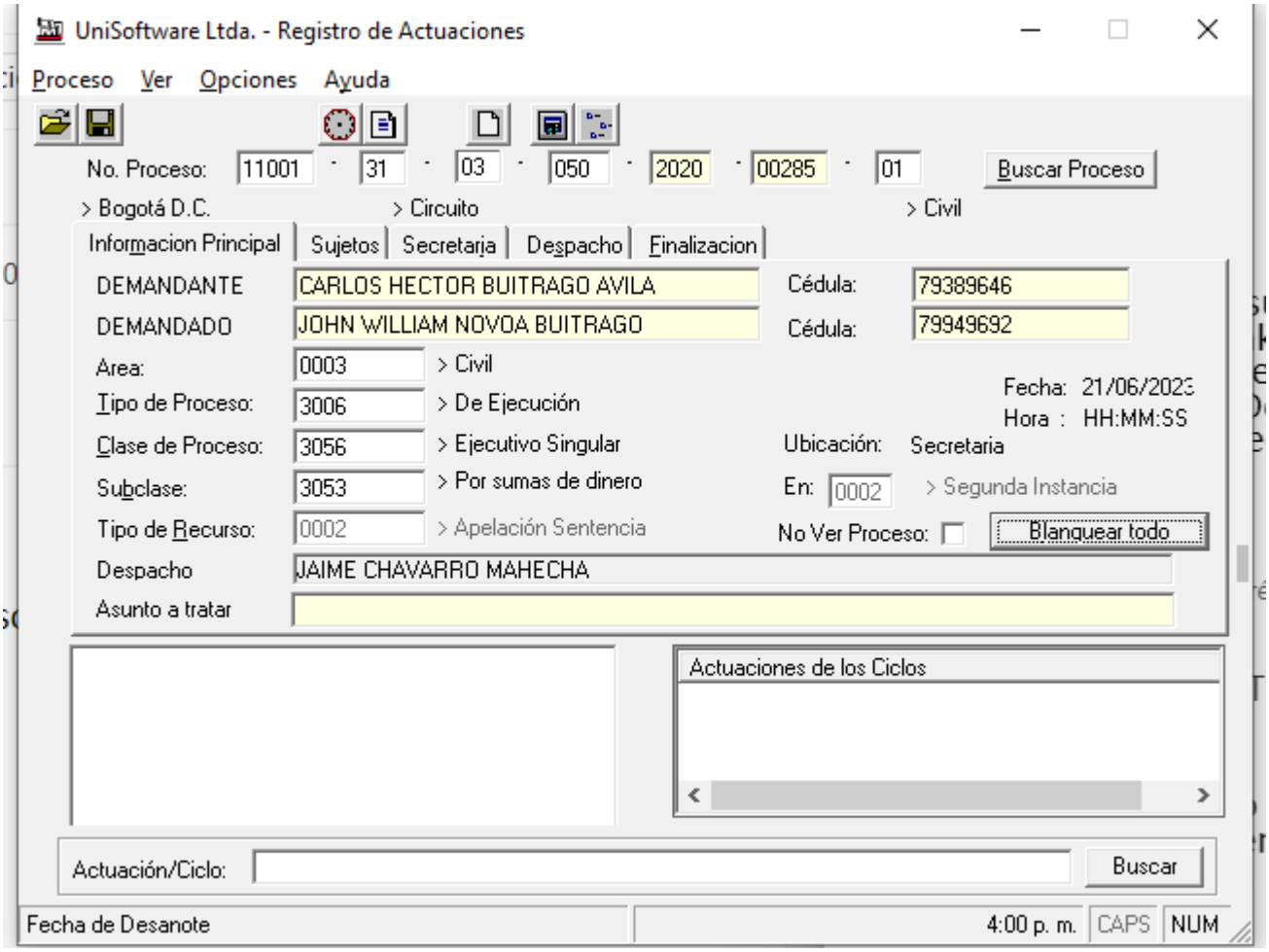
Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones Tutelas Secretaria Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogotá <ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 16:01
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: alvaro-rincon@hotmail.com <alvaro-rincon@hotmail.com>
Asunto: RV: DESCORRO TRASLADO RADICADO No 11001310305020200028501

Cordial saludo

Por competencia remito escrito dirigido a proceso civil en referencia para los fines pertinentes.



Por favor CONFIRMAR recibido del presente mensaje así como los archivos adjuntos y archivos compartidos por google drive sí los hay.

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DEL PRESENTE CORREO Y SU

ANEXO, CON NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO.

RESPUESTAS UNICAMENTE AL

CORREO ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

GLADYS CASALLAS LAVERDE

CITADOR IV
Sala Civil - Tribunal Superior de Bogotá
(571) 423 33 90 Ext. 8354
ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: ALVARO ANTONIO RINCON LOBO <alvaro-rincon@hotmail.com>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 3:44 p. m.
Para: Notificaciones Tutelas Secretaria Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogotá <ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: DESCORRO TRASLADO RADICADO No 11001310305020200028501

Cordialmente,

Abo. ÁLVARO ANTONIO RINCÓN LOBO

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C. – SALA CIVIL
Honorable Magistrado Ponente
Doctor: **JAIME CHAVARRO MAHEHCA**

PROCESO EJECUTIVO No. 1100131030502020-00285-01
De: CARLOS HECTOR BUITRAGO AVILA
Vs: JOHN WILLIAM NOVOA BUITRAGO

ALVARO ANTONIO RINCÓN LOBO, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.035.001 de González (Cesar) y T.P. No. 63.563 del C.S. de la J., actuando como apoderado del señor **CARLOS HECTOR BUITRAGO AVILA,** demandante en el proceso ejecutivo No. 2020-285, me permito Sustentar el RECURSO DE APELACION de conformidad con el artículo 322 del C.G.P., contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023, por el JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.

PETICION

Solicito muy respetuosamente al HONORABLE MAGISTRADO PONENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C., Sala Civil se sirva revocar la parte resolutiva de la sentencia proferida por el JUZGADO 50 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C., el día 30 de mayo de 2023 y en su defecto reconocer las pretensiones de la demanda conforme a lo ordenado en el Auto que libro mandamiento de pago.

SUSTENTO DEL RECURSO

1.- El señor **CARLOS HECTOR BUITRAGO AVILA,** por medio del apoderado Judicial inicia Proceso Ejecutivo con el fin de obtener el pago de una obligación por parte del señor **JOHN WILLIAM NOVOA BUITRAGO,** representado en un título valor pagare.

2.- la parte demandada señor **JOHN WILLIAM NOVOA BUITRAGO,** da contestación a la demanda y formula excepciones tacha de falsedad, inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva, en su oportunidad procesal la parte actora da contestación a cada una de ellas, ratificándose en las pretensiones de la demanda.

3.- En el interrogatorio de parte realizada al señor **CARLOS HECTOR BUITRAGO AVILA,** fue muy claro al manifestarse ratificando sobre el préstamo realizado al aquí demandado y que tenía la capacidad económica para prestarle el dinero al demandado en razón que en la declaración de renta del año 2020 y presentada en el año 2021, exhibida en la audiencia se puede apreciar que tiene un patrimonio de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.200.000), los dineros facilitados al aquí demandado fueron declarados en hoja adherida a la declaración de renta y además realizaba negocios de compraventa de inmuebles y carros, afirmaciones corroboradas por los testigos de la parte demandada.

4.- En el interrogatorio de parte y declaración de rentas se pudo constatar que el demandado **JOHN WILLIAM NOVOA BUITRAGO,** tiene pasivos por CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), lo cual se demuestra que para el año que le prestaron el dinero, si tenía necesidades económicas y además

el demandado para el 11 de julio de 2020 realizo un préstamo de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), al señor **PEDRO ENRIQUE NOVOA ORTIZ,** la cual se acredita con la hipoteca de la escritura 409 de julio 11 de 2020, prueba aportada en el momento de descorrer la contestación de la demanda, prueba que tampoco fue tenida en cuenta por el Juez de Conocimiento.

5.- El Articulo 422 del C.G. Del P., nos dice de manera clara que pueden demandarse Ejecutivamente obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él..., como es el caso que nos ocupa pues los títulos valores base de la ejecución por su autonomía no requieren de otra prueba para su cobro, aquí la parte demandada tiene la carga de la prueba frente al mérito coercitivo de los títulos valores que no es otro que el ejecutado **JOHN WILLIAM NOVOA BUITRAGO,** debió probar su defensa lo cual no hizo en el trámite del presente proceso.

6.- Los testimonios de los señores **JONH HENRY NOVOA BUITRAGO** y **YENY NOVOA BUITRAGO,** no son creíbles teniendo en cuenta de su parentesco con el demandado pues son hermanos tal como regula el artículo 211 del C.G.P.

7.- El fallador de instancia al momento de proferir sentencia no le dio valor probatorio al Título Valor, solo tuvo en cuenta unos testimonios que en la práctica no tenían conocimiento del dinero dado en préstamo, y solo se limitaron que a referir hechos que no tenían ninguna incidencia en los hechos de la demanda.

8.- Mediante auto de fecha 6 de febrero de 2023, que abrió a pruebas, decreto entre otras y a favor de la parte demandada dictamen pericial debido a la tacha, prueba que no fue practicada a pesar que el despacho la había ordenado, esta prueba fue desistia por la parte pasiva en razón que no se arrimó al proceso en el término dado por el Juzgado de conocimiento, el nombre del perito para la práctica de la misma, por lo tanto la excepción de tacha de falsedad no prosperaba como excepción por la prueba idónea es la experticia conforme lo ordena el articulo 270 del C.G.P.

9.- Al proferir el fallo correspondiente no tuvo en cuenta los artículos del código de comercio artículo 619 que nos habla entre otras cosas "*los titulo valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellas incorpora*" ... el artículo 622 que nos habla de la carta de instrucciones cuando se firma un documento en blanco pues existen tenedores de buena fe como el presente caso.

10.- Se ha dejado de aplicar normas relevantes al caso como los artículos 211 y 270 de C.G.P., y además no se ha tenido en cuenta en el fallo la autonomía de los títulos valores en razón que por su fuerza no requiere de otra prueba para su efectividad.

11.- El aquí demandado a dicho reiteradamente en el interrogatorio de parte que él había sido representante legal de las empresas y por lo tanto dejaba documentos firmados en blanco, lo cual no es cierto tal como aparece en los certificados de existencia y representación legal, aportados por la parte demandante en el momento que se descorre la contestación de la demanda, pues en la misma funge como representante legal la señora **ROSALBA BUITRAGO AVILA,** por lo tanto no se puede ni se debe tener como cierto, lo aquí afirmado por el demandado **JOHN WILLIAM NOVOA BUITRAGO.**

12.- En el Auto que abrió a pruebas tuvo en cuenta las pruebas documentales aportadas como el pagaré, la escritura No. 409 del 11 de julio de 2020 de la Notaria 80 de Bogotá, donde se prueba del préstamo realizado por la pasiva a favor del señor **PEDRO ENRIQUE NOVOA ORTIZ,** en los certificados de existencia y representación legal la señora **ROSALBA BUITRAGO AVILA,** fue la liquidadora y obra como represéntate legal, promesas de compraventa, estas pruebas no fueron tenidas en cuenta por el AQUO, al fallar el presente proceso es decir no le dio aplicación al artículo 164 del C.G.P, que nos habla de la necesidad de las pruebas.

13.- No se le dio aplicación al artículo 176 del C.G.P, sobre la apreciación de la prueba por que los testimonios y pruebas aportadas por la parte pasiva no probaron las excepciones formuladas y además no se practicó el testimonio de la señora **ROSALBA BUITRAGO AVILA,** pedida por la parte demandada y también desistieron de la misma, teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda la parte pasiva dice que el documento en blanco lo pudo haber entregado la señora **ROSALBA BUITRAGO AVILA.**

NOTA BENE:

A pesar que en estos momentos no se pueden aportar pruebas me permito anexar para conocimiento del MAGISTRADO PONENTE, copia del certificado de existencia y representación legal de la EMPRESA MAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA, con Nit: 900.200.201-7, donde aparece como representante legal la señora **ROSALBA BUITRAGO AVILA.**

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO RINCON LOBO
C.C. No. 5.035.001 de González (Cesar)
T.P. No. 63.563 del C.S. de la J.

* *

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO ESPECIAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA

****
LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPAÑIA.
****

CERTIFICA

MATRICULA: 01771373
N.I.T.: 000009002002017
NOMBRE: MAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO HISTORICO DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA:

CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000054 DEL 14 DE ENERO DE 2008 DE NOTARÍA 52 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE FEBRERO DE 2008 CON EL NO. 01188652 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000054 DEL 14 DE ENERO DE 2008 DE NOTARÍA 52 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EL 6 DE FEBRERO DE 2008 CON EL NO. 01188652 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
BUITRAGO AVILA ROSALBA	C.C. 000000051641176
SUBGERENTE	
BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO	C.C. 000000079473701

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 001 DEL 22 DE ENERO DE 2008 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NO. 01188653 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO	C.C. 000000079473701

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

SUBGERENTE
BUITRAGO AVILA ROSALBA C.C. 000000051641176

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 006 DEL 27 DE MAYO DE 2009 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EL 5 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NO. 01303147 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACIÓN

GERENTE
BUITRAGO AVILA ROSALBA C.C. 000000051641176

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 13 DEL 31 DE JULIO DE 2020 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 2020 CON EL NO. 02609234 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACIÓN

LIQUIDADOR
BUITRAGO AVILA ROSALBA C.C. 000000051641176

CERTIFICA:

QUE EL ACTA NO. 13 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 31 DE JULIO DE 2020, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, FUEINSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 2020 BAJO EL NO. 02609235 DEL LIBRO IX.

CERTIFICA:

QUE, EN CONSECUENCIA, Y CONFORME A LOS REGISTROS QUE APARECEN EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA LIQUIDADA.

CERTIFICA:

QUE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS REFERENTES A NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES, FUERON INSCRITOS EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EN LAS FECHAS DE REGISTROS INDICADAS EN CADA UNO DE ELLOS, PARA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL/JURIDICA, SUCURSAL, AGENCIA O ESTABLECIMIENTO **
** DE COMERCIO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 7,200

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

República de Colombia
Rama Judicial

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil - Secretaria

LIQUIDACIÓN DE COSTAS

PROCESO No 11001220300020220106900

MAGISTRADO(A) Dra. MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

11 de septiembre de 2023.- En la fecha procedo a efectuar la liquidación de costas ordenada en providencia anterior, así:

AGENCIAS EN DERECHO:	$ 2.320.000,oo =
OTROS:	$ DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS
	==========
TOTAL:	$2.320.000,oo =

SON: DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS .-

P/ El Secretario.

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, En la fecha se fija el presente proceso en lista por el término legal para efectos del traslado a las partes de la anterior liquidación de costas, por el lapso de tres días que vencen el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , conforme lo prevé el artículo 366 del Código General del Proceso y artículo 110 ibídem.

P/ El Secretario

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Judicial

Señores:

JUEZ PRIMERO (1ro) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
HONORABLE SALA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF. **ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023**

PROCESO: **PERTENENCIA URBANA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO**

DEMANDANTE: **ALDEMAR RODRIGUEZ DUARTE**

DEMANDADOS**: HEREDEROS DETERMINADOS DE MARÍA ERNESTINA RAMOS RUÍZ (q.e.p.d) señores; MARIA NELLY RAMOS PIÑEROS, CARMEN JULIA RAMOS PIÑEROS, MARIA TEMILDA RAMOS PIÑEROS ZANDRA RAMOS PIÑEROS, JOSÉ LEONIDAS RAMOS PIÑEROS y herederos Indeterminados. De igual forma se dirige contra los Herederos Indeterminados de WILSON NELSON GONZALEZ RAMOS (q.e.p.d) y PERSONAS INDETERMINADAS**.

RADIACDO**:** **11001310300120190018700**

ALFONSO PULIDO BRAVO, ciudadano colombiano, Abogado en ejercicio, identificado con la **CC No. 6.910.693** de Pauna (Boyacá) y **T. P No. 280.119** del C.S de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado judicial de la parte apelante dentro del proceso de la referencia, a través del presente escrito y oportunamente, me permito presentar sustentación al Recurso de Apelación presentado contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2023 emitida por el Juzgado primero (1), civil de Circuito de la ciudad de Bogotá, recurso admitido por su Despacho y el cual debe ser sustentado por escrito, esto de acuerdo a lo establecido en audiencia del día 27 junio de 2023, notificado por estados el día 27 de junio de 2023. Sustentación que hago en los siguientes términos:

1. **RAZONES DE INCOFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA APELADA, SOBRE LOS REPAROS CONCRETOS**

De conformidad con lo establecido en el artículo 322 numeral 3 inciso 2° del Código General del Proceso, me permito presentar las inconformidades que le asisten a mi poderdante, respecto al fallo emitido en sentencia de fecha 27 de junio del año 2023, por el Juzgado primero Civil de Circuito de la ciudad de Bogotá D.C.

1. Las inconformidades se encuentran sustentadas en lo siguiente:

GREEN GROUP PULIDO & CIA S.A.S, Av. Calle 19 No. 5 -51 Oficina 403 Edificio Valdés Bogotá D.C., Teléfono; 3203640078, Fijo, 2811982, Correo Electrónico; gerencia. greengroup@hotmail.com

A. EN LA NO PRESENTACIÓN DE LOS RECIBOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS ANTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEL PREDIO OBJETO A USUCAPIR

Si bien es cierto que los recibos de los años anteriores a la presentación de la demanda, no se presentaron por motivo que mi poderdante el señor ALDEMAR RODRIGUEZ DUARTE no los encontró, esto no quiere decir que sea objeto de la negar la posesión a sabiendas que no hay prueba contraria que hayan sido pagados por otra persona distinta a él, toda vez que el inmueble a la presentación de la demanda se encontraba y se encuentra a PAZ y SALVO por concento de Impuesto predial del predio ubicado en **Carrera. 81 A No. 57 H - 03** Barrio Clas de la Localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá D.C., identificado con la matricula Inmobiliaria Número. **No 50S- 358410** de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de la ciudad Bogotá, y Chip Catastral **No. AAA0048MUBR** de la Oficina de Catastro de la Ciudad de Bogotá D.C. según pronunciamiento por el Tribunal Superior sala 2 decisión civil, Medellín 9 de agosto de 2021, sentencia No. 019 05308-31-03-001-2015-00084-01, de fecha 9 de agosto 2021, manifiesta; si bien la jurisprudencia tiene establecido que el pago del impuesto predial es un mero acto de administración que no puede entenderse como prueba exclusiva y excluyente de actos de posesión, razón por la cual no es una causal a que mi poderdante se le niegue el derecho de la posesión del predio objeto por el proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio

B. ACREDITACIÓN DE LA POSESIÓN DEL PREDIO A USUCAPIR DESDE LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008

Es de manifestar a su Honorable Despacho que mi mandante como se ha dicho y que no es un hecho extraño, y se tiene por demostrado que mi poderdante el señor ALDEMAR RODRIGUEZ DUARTE, comenzó a ejercer actos de señor y dueño, desde el 30 de noviembre del año 2008, razón que se da, por el motivo por el cual antes del fallecimiento de la señora MARIA ERNESTINA RAMOS RUIZ (q.e.p.d), (21 de noviembre del año 2008), a sabiendas que ella se encontraba Hospitalizada, el predio ya se encontraba en abandono y descubierto, facilitando para que personas habitantes de la calle entraran a usarlo como refugio para el consumo de drogas, y se corrobora con las pruebas rendidas en el testimonio por la Doctora Sonia Salamanca, quien manifesto que la última vez que hizo la inspección al predio fue en el año 2008. Año en el cual mi poderdante manifesto que comenzó a colocar unas tejas de zinc, como cerramiento al predio para evitar a que personas extrañas entraran a ocuparlo. Es decir que son 11 años de posesión a la fecha de radicada la demanda 24 de abril del año 2019, tiempo suficiente para ser adjudicado por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

C. INFORMIDAD A QUE NO SE DECRETÓ DE OFICIO EL TESTIMONIO DE LA DOCTORA ADRIANA SOTELO ROJAS, TRABAJADORA SOCIAL

En virtud del testimonio de la Doctora Adriana Sotelo Rojas, no fue decretado de oficio, por tal razón NO se debe ser tenido en cuenta dicho testimonio.

GREEN GROUP PULIDO & CIA S.A.S, Av. Calle 19 No. 5 -51 Oficina 403 Edificio Valdés Bogotá D.C., Teléfono; 3203640078, Fijo, 2811982, Correo Electrónico; gerencia. greengroup@hotmail.com

Por otra parte hay tres versiones rendidas por la Dra. Adriana Sotelo donde no dan la creabilidad de lo manifestado donde dice:

1. Que el señor Aldemar Rodríguez quería recibir en arriendo el inmueble objeto de esta Litis, pero como se pudo evidenciar no hay un contrato firmado por mi poderdante el señor Aldemar Rodríguez, con el señor Wilson Nelson González Ramos y que haya sido allegado al expediente y decretado como prueba, toda vez que mi mandante manifestó no haber firmado ningún tipo de contrato de arrendamiento, razones que no dan la certeza por no haber allegado el documento. Artículos. 165, 167, 169, 171 y 173 C.G.P.

2. Manifiesta la Dra. Adriana que los dineros eran cancelados por el señor Aldemar Rodríguez a las cuentas bancarias; Banco Caja social y Banco Av Villas, cuentas bancarias a nombre del señor Wilson Nelson González Ramos, versión que deja en duda, toda vez que a dichas cuentas bancarias **NO** aparecen dineros consignados por el señor Aldemar Rodríguez, puesto que mi mandante Aldemar no realizó ninguna consignación, de la misma manera en el informe que fue rendido por estos bancos al Juzgado primero Civil de Circuito de Bogotá, de acuerdo a la solicitud realizada de manera oficiosa por el juzgado y se pudo corroborar que no parecen consignaciones de dinero. Artículos. 165, 167, 169, 171 y 173 C.G.P.

3. De otra parte, dentro del interrogatorio rendido por la Dra. Adriana Sotelo, al juzgado 1 civil de circuito de Bogotá, en las preguntas que formule a la doctora Adriana le pregunté ¿cómo le consta del contrato firmado con el señor Aldemar Rodríguez Y Wilson Nelson y el valor pactado por el canon de arrendamiento?, Manifesto que no le Consta, razón que dejan duda toda vez que mi poderdante Aldemar nunca firmo ningún contrato y que la parte demandada debía de haberlo aportado para que se tenga como prueba

manifiesta la doctora Adriana que para el año 2016 que ella fue al predio observó que dentro del predio hacían herraduras para equinos y que existía una empresa metal-mecánica, es decir que mi poderdante venía ejerciendo la posesión de dicho inmueble.

Se puede determinar que es un comentario de oídas que no dan la certeza de los dichos en su interrogatorio, razón que no da lugar a la creabilidad de lo supuesto dicho, por no allegar el contrato de arrendamiento, facturas de los pagos de arrendamiento y mucho menos que en la certificación o estratos bancarios no se encuentran o reflejan consignaciones realizadas por el valor de los contratos que supuestamente había acordado, dichos valores que mencionaron dentro del proceso son; $ 300.000, $ 325.000, $350.000 y $ 1.500.000 de lo que genera duda. Artículos. 165, 167, 169, 171 y 173 C.G.P.

Razón por el cual presento mi inconformismo donde las preguntas que le hice, a la Dra. Adriana dijo **NO** tener soporte a su dicho, que **NO** le costaba si había recibido plata por concepto de arriendo, y de no encontrarse consignaciones hechas por mi mandante Aldemar Rodríguez a las cuentas bancarias del señor Wilson Nelson González.

GREEN GROUP PULIDO & CIA S.A.S, Av. Calle 19 No. 5 -51 Oficina 403 Edificio Valdés Bogotá D.C., Teléfono; 3203640078, Fijo, 2811982, Correo Electrónico; gerencia. greengroup@hotmail.com

En virtud de lo antes mencionado, respetuosamente me permito solicitarles a ustedes HONORABLE SALA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C., lo siguiente:

PETICIÓN ESPECIAL

1. Solicito se sirvan **REVOCAR** el numeral 1 de la sentencia recurrida de fecha 27 de junio del año 2023, proferida por el Juzgado Primero Civil de Circuito de Bogotá D.C.

2. DECRETAR favorable las pretensiones de la demanda de **PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO** a favor de mi poderdante ALDEMAR RODRÍGUEZ DUARTE

Honorables magistrados,

Sin otro particular,

Cordialmente,

ALFONSO PULIDO BRAVO
C.C. No. 6.910.693 de Pauna – Boyacá
T.P. No. 280.119 del C.S de la Judicatura
GREEN GROUP PULIDO & CIA S.A.S
Representante Legal

correo electrónico; gerencia.greengroup@hotmail.com
alfonsopulido20@hotmail.com
Teléfono: 320-3640078
Dirección; AV. Calle 19 No. 5-51 oficina 406 edif. Valdés

RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023 PROCESO DE PERTENECIA 2019-0187 DE ALDEMAR RODRIGUEZ DUARTE

ALFONSO PULIDO <alfonsopulido20@hotmail.com>

Vie 30/06/2023 15:04

Para:Juzgado 01 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;ALFONSO PULIDO <alfonsopulido20@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (899 KB)

RECURSO DE APELACION SENTECIA 27 DE JUNIO 2023 -2019-187.pdf;

Señores:

JUEZ PRIMERO (1ro) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
HONORABLE SALA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF. **ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE FECHA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2023**

PROCESO: **PERTENENCIA URBANA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO**

DEMANDANTE: **ALDEMAR RODRIGUEZ DUARTE**

DEMANDADOS**:** **HEREDEROS DETERMINADOS DE MARÍA ERNESTINA RAMOS RUÍZ (q.e.p.d) señores; MARIA NELLY RAMOS PIÑEROS, CARMEN JULIA RAMOS PIÑEROS, MARIA TEMILDA RAMOS PIÑEROS ZANDRA RAMOS PIÑEROS, JOSÉ LEONIDAS RAMOS PIÑEROS y herederos Indeterminados. De igual forma se dirige contra los Herederos Indeterminados de WILSON NELSON GONZALEZ RAMOS (q.e.p.d) y PERSONAS INDETERMINADAS**.

RADIACDO**:** **11001310300120190018700**

ALFONSO PULIDO BRAVO, ciudadano colombiano, Abogado en ejercicio, identificado con la **CC No. 6.910.693** de Pauna (Boyacá) y **T. P No. 280.119** del C.S de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado judicial de la parte apelante dentro del proceso de la referencia, a través del presente escrito y oportunamente, me permito presentar sustentación al Recurso de Apelación presentado contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2023 emitida por el Juzgado primero (1), civil de Circuito de la ciudad de Bogotá, recurso admitido por su Despacho y el cual debe ser sustentado por escrito, esto de acuerdo a lo establecido en audiencia del día 27 junio de 2023, notificado por estados el día 27 de junio de 2023. Sustentación que hago en los siguientes términos:

FAVOR DAR ACUSO DE RECIBIDO

ALFONSO PULIDO BRAVO

ABOGADO ESPECIALIZADO EN NOTARIADO Y REGISTRO

alfonsopulido20@hotmail.com

Av. calle 19 No. 5-51 oficina 406 Edificio Valdés - Bogotá D.C.

3203640078

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: Rad. 11001-31-99-001-2022-60999-01 Sustentación del Recurso de Apelación - POP UP BURO S.A.S.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 16:11

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (395 KB)

Rad. 2022-60999-01 Sustentación del Recurso de Apelación.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Felipe Abello <felipe@abelloabogados.com>
Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 16:05
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: María Claudia Martínez Beltrán <mcmartinez@dlapipermb.com>; Alyson Bayona <alyson.bayona@abelloabogados.com>; Juan Gabriel Bayona <juan.bayona@abelloabogados.com>; "Paula Andrea Avendaño Illidge" <paulaa.avendano@urosario.edu.co>
Asunto: Rad. 11001-31-99-001-2022-60999-01 Sustentación del Recurso de Apelación - POP UP BURO S.A.S.

H. Magistrados
SALA CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Atn. H. Magistrado Jaime Chavarro Mahecha
Enviado por correo electrónico:
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Re: Proceso declarativo de infracción de derechos de propiedad industrial y preventiva o de prohibición de competencia desleal de **POP UP BURO S.A.S.** en contra de **TEG EXPO S.A.S.**

Rad: 11001-31-99-001-2022-60999-01

Asunto: Sustentación del recurso de apelación

FELIPE ABELLO MONSALVO, obrando en mi calidad reconocida de apoderado judicial de **POP UP BURO S.A.S.** (en adelante la "Demandante"), según poder que obra en el expediente, por medio del presente

mensaje de datos **ALLEGO MEMORIAL DE SUSTENTACIÓN DEL EL RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la Demandante, en contra de la sentencia de primera instancia (en adelante la "Sentencia Recurrida") proferida en audiencia por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 8 de junio de 2023 y que consta en el acta de audiencia No. 2277, en los términos del adjunto.

De los H. Magistrados, atentamente,

ABELLO
Abogados

Felipe Abello Monsalvo
Socio
abelloabogados.com
(+57) 601 937 22 77
(+57) 312 448 12 76
Cra. 10 No. 97a-13 T A-506
Bogotá D.C.,Colombia



ABELLO
Abogados

H. Magistrados
SALA CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Atn. H. Magistrado Jaime Chavarro Mahecha
Enviado por correo electrónico:
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Re: Proceso declarativo de infracción de derechos de propiedad industrial y preventiva o de prohibición de competencia desleal de **POP UP BURO S.A.S.** en contra de **TEG EXPO S.A.S.**

Rad: 11001-31-99-001-2022-60999-01

Asunto: Sustentación del recurso de apelación

FELIPE ABELLO MONSALVO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad reconocida de apoderado judicial de **POP UP BURO S.A.S.** (en adelante la "Demandante"), según poder que obra en el expediente, por medio del presente memorial me permito **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la Demandante, en contra de la sentencia de primera instancia (en adelante la "Sentencia Recurrida") proferida en audiencia por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 8 de junio de 2023 y que consta en el acta de audiencia No. 2277, en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD

El presente memorial de sustentación de recurso de apelación es oportuno, en los términos del inciso segundo del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, según el cual, "*ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes*".

Así las cosas, como el auto que admite el recurso de apelación fue notificado por estado fechado del 31 de agosto de 2023 y la ejecutoria de este, según lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 302 del Código General del Proceso, ocurre *tres (3) días después de notificado,* se tiene que el término de 5 días del que trata el inciso 2° del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, para sustentar el recurso, precluye el 12 de septiembre de 2023. Por lo tanto, la presente sustentación se presenta oportunamente.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ES INCONGRUENTE – NO EXISTE RELACIÓN FÁCTICA NI JURÍDICA ENTRE LO SOLICITADO POR LA DEMANDADA EN SU EXCEPCIÓN Y LO CONCEDIDO POR EL DESPACHO EN LA SENTENCIA

El H. Tribunal encontrará que la Sentencia Recurrida es incongruente, por cuanto declaró la prescripción extintiva de todos los actos de competencia desleal aducidos por mi representada en la reforma de la demanda, aun cuando la parte demandada no expuso con claridad los sustentos fácticos y jurídicos que justificaran la prosperidad de dicha excepción.

Debe recordarse que tratándose de las excepciones que no pueden ser declaradas de oficio por el juez, como lo es la excepción de prescripción, este debe ceñirse a los precisos términos expuestos por el demandado.

Lo anterior debido a que el artículo 282 del Código General del Proceso, establece que, "*cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.*"

Ahora, el entendimiento de la H. Corte Suprema de Justicia, sobre esta disposición contenida en el artículo 282 del Código General del Proceso, que limita los poderes oficiosos del juez en materia del reconocimiento de la excepción de prescripción, es que el excepcionante debe fundamentar con suficiencia los aspectos fácticos y jurídicos que soportan la excepción de prescripción y el juez en consecuencia no puede decidir sino de conformidad con esos precisos términos:

> *"(…) cuando se trata de excepciones que no pueden declararse de oficio (…), por cuanto emanan de circunstancias que podrían originar una pretensión autónoma que el demandado puede renunciar a ejercer como tal, es, de un lado, forzoso proponerla y, de otro,* ***ineludible alegar y probar el hecho o hechos que la constituyen, y en los cuales pudiera deducirse que invocara el excepcionante para atacar la existencia de la acción o reclamar su extinción, si alguna vez hubiese existido, por cuanto si no es obligación del juzgador declararla de oficio, cuando encuentre probado el hecho que la estructura, tampoco es deber suyo declararla por hechos o circunstancias no propuestos por el excepcionante comoquiera que de no ser así, la precitada restricción carecería de función alguna[1]***"

Aunado a lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia ha sostenido también que es una carga procesal del demandado que propone la excepción, la de identificar con estrictez los hechos que configuran la excepción y es deber del juez fallar de acuerdo con los hechos que propone el demandado en la excepción y no de conformidad con otros hechos, so pena de contravenir el postulado de la congruencia:

> *"****Quiere decir que la expresión del sustento fáctico de la excepción constituye una carga procesal cuya realización ha de ser observada con estrictez, pues, de no ser así, y en relación con aquella que en determinado evento hubiera sido formulada y que solo sea declarable a petición de parte, no podrá el juzgador despacharla con estribo en hechos distintos a los aducidos para el efecto, so pena de resolverla de forma oficiosa y en contravía del artículo 282 ibidem que impone su necesaria y apropiada alegación****.*
>
> *Por tanto,* ***tratándose de la excepción de prescripción, solo en el evento en que haya sido oportunamente expuesta y esté provista de sustento factual, podrá el fallador adentrarse a resolverla, para lo cual deberá limitarse a verificar si la modalidad rogada está configurada y así declararlo; de lo contrario, deberá desestimarla****,* ***sin que en este último evento pueda basarse en otros hechos y, a partir de ellos, reconocer una diversa a la planteada****, no solo porque entre una y otra pudieran haber hondas diferencias sustanciales en cuanto a su punto de partida o dies a quo, así como respecto del término de configuración, o también en cuanto al criterio objetivo, subjetivo e hibrido que rija a cada especie,* ***sino porque al proceder de esa manera desbordará el campo de decisión trazado por los contendores y, por consiguiente, quebrará el postulado de***

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC – 1297 del 6 de junio de 2022, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, Rad. 76001-31-03-004-2013-00011-01

<u>la congruencia que, en lo fáctico, lo obliga a respetar los contornos demarcados en la demanda y su contestación, al ser los que, salvo en el caso de las excepciones que puede reconocer por su propia iniciativa, fijan los linderos de la decisión</u>.[2]"

Bajo los planteamientos expuestos, basta con dilucidar los términos en los que la Demandada propuso la excepción de prescripción, para advertir que su propuesta fue genérica, sin explicación del sustento fáctico que la soportara y la Superintendencia, por su parte, declaró próspera la excepción, omitiendo que no hubo un análisis por parte del excepcionante de cómo se configuró la prescripción de los actos de competencia desleal que se relacionaron en la reforma de la demanda.

Nótese que en la reforma de la demanda mi representada solicitó dentro de las pretensiones declarativas, que se declarara que la Demandada incurrió en los siguientes actos de competencia desleal:

> *"**3.7.** Que se declare que **TEG EXPO S.A.S.**, incurrió en el acto de confusión de competencia desleal conforme con lo establecido en el artículo 259 literal a) de la Decisión 486 del 2000 y el artículo 10 de la Ley 256 de 1996."*
>
> *"**3.9.** Que se declare que **TEG EXPO S.A.S.**, incurrió en el acto desleal de imitación, conforme con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 256 de 1996. "*
>
> *"**3.11**. Que, se declare que **TEG EXPO S.A.S.**, incurrió en el acto desleal de desviación de la clientela, conforme con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 256 de 1996."*
>
> *"**3.13.** Que, se declare que **TEG EXPO S.A.S.**, incurrió en el acto desleal de explotación de la reputación ajena, conforme con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996."*

Por su parte, la Demandada en su excepción de prescripción expuso:

> *En el caso concreto, se alega en la demanda que "Posterior al registro de la marca color PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190 (abril de 2020) TEG EXPO S.A.S. presentó un cambio significativo en la forma de presentar las distintas ediciones de la Feria Eva, los stands y publicidad en torno a esta pues, ya no giraba en torno a colores que variaban con cada nueva edición sino a un único color, el rosado."y que es el uso del color rosado el causante, o el originario de las conductas de competencia desleal en las que afirma, incurrió la Demandada (confusión, imitación, desviación de la clientela y explotación de la reputación ajena)*
>
> *Como se demuestra en las Pruebas No. 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.6, TEG EXPO ha hecho uso público de colores en distintas tonalidades de rosado desde su primera edición, mayo de 2017, y ahora al uso de dichos colores se le pretende atribuir el carácter de desleal por parte de la Demandante. Teniendo en cuenta que, a partir del escrito de la demanda, la Demandante considera a TEG EXPO su competidora directa, y dado el gran cubrimiento de las Ferias Eva por parte de los medios de comunicación masiva, es claro que el conocimiento de la Demandante del uso que hiciera TEG EXPO de los colores mencionados se produjo al mismo tiempo en que se realizó la primera edición de la Feria Eva, y no en 2020, como afirma la Demandante que sucedió. Por lo tanto, en cuanto a la prescripción ordinaria se refiere, esta*

[2] Ídem.

empezó a contar el 4 mayo de 2017 con el conocimiento del uso de los colores, y operó el 4 mayo de 2019.

En cuando a la prescripción extraordinaria, ésta también habría operado en la medida en que el 4 de mayo de 2017 se celebró por primera vez la Feria Eva y, a partir de ese momento se habría empezado a adelantar el acto de supuesta competencia desleal, quedando extinta la acción el 4 de mayo de 2020. Por lo anterior, el plazo de prescripción para iniciar una acción habría acaecido ya, pues han pasado más de tres (3) años desde la realización del acto. Esta acción, pues, se presentó 1 año, 10 meses y 12 días tarde.

Aunado a lo anterior, la Superintendencia no advirtió, ni la demandada tampoco, que el acto de competencia desleal de confusión en el presente asunto, está ligado a la propiedad industrial, en los términos del artículo 259 literal a) de la Decisión 486 del 2000.

Lo anterior es relevante en tanto que, si el acto de confusión está ligado a la propiedad industrial, es necesario que se tenga el derecho sobre la propiedad industrial (16 de abril de 2020), porque de lo contrario el demandante carecería de legitimación en la causa por activa para incoar la acción por dicha vía procesal.

Es bien sabido que la legitimación en la causa para ejercer una acción, es un presupuesto procesal para poder dictar sentencia de fondo en ejercicio de una determinada acción y dicha legitimidad en la causa es una cuestión sustancial que depende de que quien demande, sea quien ostente el derecho o el interés debatido en el litigio tal como lo ha entendido la H. Corte Suprema de Justicia:

"La legitimación en la causa como presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión, es decir, como condición de la acción judicial, ha sido considerada una cuestión propia del derecho sustancial, pues alude a la materia debatida en el litigio.

La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos -ha dicho la Sala- de que "se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado[3]*..."*
(Énfasis agregado)

Entonces resulta claro que el término de prescripción corre única y exclusivamente a favor del legitimado y en todo caso exige la realización del acto de competencia desleal, lo que para el presente caso debe implicar que para que opere la prescripción debió pasar más de dos años desde que la persona tuvo conocimiento de que la conducta se cometió (sin olvidar que es necesario que la conducta ocurra) y en todo caso por el paso de tres años contados a partir de la comisión de la conducta. Tal como lo ha reconocido la H. Corte Suprema de Justicia:

"En el ámbito nacional, la figura legis hace cesar las acciones y los derechos ajenos por la inacción de su titular durante el tiempo que prevé el ordenamiento positivo, el cual corre desde su exigibilidad[4]*"*

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC 11358 del 5 de septiembre de 2018, M.P. Ariel Salazar Ramírez, Rad. T 1100102030002018-02414-00

[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC – 1297 del 6 de junio de 2022, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque, Rad. 76001-31-03-004-2013-00011-01

Bajo esos parámetros, se tiene que la conducta solamente pudo ser cometida después de otorgado el registro, es decir del 16 abril de 2020, porque es a partir de allí que mi representada se puede entender legitimada para proteger y reclamar los derechos que se derivan de dicho registro marcario. Por otro lado, el término de dos años feneció el 16 de abril de 2022, momento para el cual ya se habría interpuesto la demanda y en consecuencia el término de prescripción, del acto de confusión derivado de la infracción marcaria se encontraba interrumpido en virtud del artículo 94 del Código General del Proceso, situación que no analizó el despacho ni tampoco la parte demandada.

Así las cosas, es claro que el excepcionante en su excepción no analizó el término de prescripción del acto de competencia desleal de confusión ligado a la propiedad industrial del que trata el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000 y la Superintendencia de Industria y Comercio validó dicho medio exceptivo, sin advertir que el referido acto de competencia desleal no podía reclamarse a la demandada, sin que existiera un registro marcario previo, pues demandar un acto de competencia desleal ligado a la propiedad industrial, sin tener un derecho sobre ella, conllevaría indefectiblemente a una falta de legitimación en la causa por activa.

II. EL DESPACHO SE EQUIVOCA AL EXIGIR QUE LA INFRACCIÓN MARCARIA SE LIMITE A SIGNOS DISTINTIVOS IDÉNTICOS, PUES ESE ENTENDIMIENTO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 155 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000.

Como lo podrá observar el H. Tribunal, la Superintendencia erró al considerar que la infracción marcaria, con respecto a marcas de color (un color delimitado a una forma), solo se presenta ante signos idénticos, lo que configura un entendimiento contrario al artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, pues debe recordarse, que el literal "d" se refiere, sin distinción alguna, al derecho que tiene el titular de una marca registrada, de impedir que se use en el comercio una marca similar o idéntica.

Tal entendimiento se encuentra apoyado por las interpretaciones prejudiciales del H. TJCAN, pues este ha señalado que para constatar una infracción de marca, en este tipo de signos distintivos, aplica igualmente el criterio de similitud de identidad:

> *"La comparación debe ser un proceso «sucesivo» y de impresión de conjunto. Es decir, un análisis integral de los signos en conflicto, tal como sería efectuado por los consumidores en el mercado.* ***Para tal efecto, se deberá verificar si la tonalidad (o matiz) del color y la forma (o posición) que lo contiene, correspondientes al signo distintivo o empaque del presunto infractor****,* ***vistos en conjunto, resultan «idénticos» o «similares» a la marca de color delimitado por una forma****. En caso de duda respecto de la «similitud», deberá tomarse en cuenta la apreciación en conjunto de los demás elementos diferenciadores presentes, con el objeto de confirmar o descartar la presencia de alguno de los riesgos aludidos y la consecuente existencia o no de una infracción marcaria*[5]*."* (Énfasis agregado)

Por su parte, la misma Superintendencia de Industria y Comercio, ha sostenido que la protección de la marca, independientemente de si se trata de una de color o no, otorga los mismos derechos a su titular, incluyendo el de impedir que un tercero use "*en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto*

[5] Tribunal Judicial de la Comunidad Andina de Naciones, Interpretación Prejudicial 619 IP - 2019, Interpretación Prejudicial 04 IP – 2021.

de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro":

> *"Ahora bien, es claro que, si el empresario logra* ***el registro de una marca de color ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta con la misma protección otorgada a los titulares de otros tipos de marcas (…). Esto, si tenemos en cuenta que el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 no contempla restricciones sobre su aplicación en función del tipo de marca cuya infracción se alega***[6] *(…)"* (Énfasis agregado)

Ahora, en la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia, la Superintendencia indicó:

> *"Si bien el accionado utiliza un color o colores rosados para identificar un servicio denominado feria EVA (…) lo cierto es que no hay evidencia de que el uso del color rosa se encuentre contenido en una estrella pentagonal (…)*
>
> *No existe evidencia de forma alguna que permita establecer que el uso del color rosa se encuentre contenido en una estrella ,o en al menos una estrella pentagonal, lo anterior no es menos valido bajo el supuesto que aquellas publicaciones contenidas en el escrito de demanda, aun cuando se tratan de figuras geométricas contenidas en campos de color rosa, es evidente que no se trata de un polígono estrellado de 5 vértices sino a otras figuras geométricas como cristales de nieve o copos de nieve, cuya estructura corresponde a un prisma hexagonal, o estrellas de cuatro puntas conocidas como tetragramas*[7]*."*

Contrastado lo anterior, es evidente que el a quo erró en considerar que el éxito de la pretensión declarativa de infracción marcaria, en lo que respecta a las marcas de color, como la que atañe a este proceso, solamente se presenta tratándose de colores y formas idénticas, al exigirle a mi representada que el uso en el mercado de su marca registrada deba circunscribirse a un uso idéntico en color y forma, aun cuando el literal "d" del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, refiere que el uso infractor puede ser similar.

Así, por ejemplo, la infracción marcaria que ha cometido TEG EXPO S.A.S. quedó demostrada en el proceso cuando utilizó en el comercio para la feria EVA, distintas formas similares a la registrada por mi representada, con el mismo propósito y con colores similares, situación que además tuvo la virtud de generar confusión, tal como quedó demostrado a través de testimonio de Martha Soto, quien relató al despacho como varios expositores consignaron a la cuenta bancaria de BURÓ, aun cuando tenían la intención de participar en la feria EVA. El a quo se desgastó en argumentar diferencias entre una estrella hexagonal y los tetragramas, para concluir que no eran idénticas, cuando lo establecido por la Decisión 486 de 2000, es justamente que esas similitudes generen confusión y/o riesgo de asociación al consumidor.

Aunado, el despacho erró al considerar que para que exista la infracción, era necesario que el color fuera idéntico, e incluso refirió a la necesidad de una prueba técnica para establecer que los colores eran los mismos, aun cuando el artículo 155 de la Decisión 486 protege al titular de un registro marcario,

---

[6] Superintendencia de Industria y Comercio, Auto No. 960 del 11 de enero de 2019, Expediente Rad. 2018 – 308488.

[7] Link del expediente digitalizado, Archivo "2260999-20230609-1604", minuto 10 al minuto 11:20, contenido en la carpeta denominada "051 – Acta 2277 Audiencia", de la carpeta 44.22 – 60999 SUSPENSIVO"

otorgándole el derecho de impedir a terceros usos idénticos y/o similares. Al respeto la Superintendencia indicó:

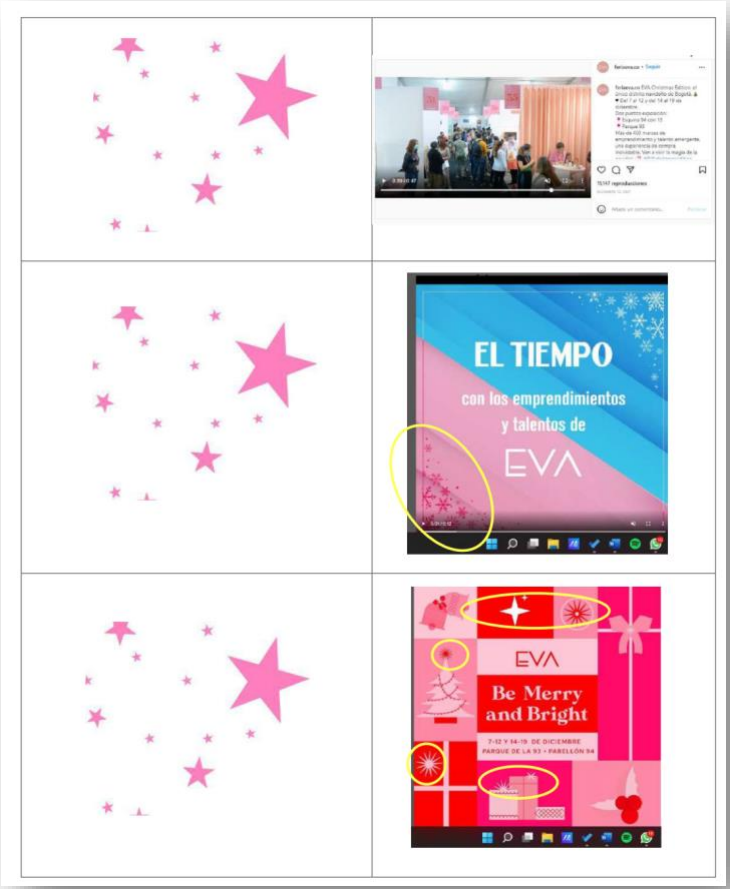
> "(…)*no existe evidencia que los colores implementados por su contraparte correspondan a aquel que pretendería reivindicar o incluso, a alguno en particular. Cuestión que de forma alguna puede considerarse a partir del simple ejercicio subjetivo de la comparación visual, pues este código, en particular, los códigos de color tienen unas gamas de tonalidad e intensidad que difícilmente pueden ser descritas o estandarizadas a simple vista, lo que requiere indefectiblemente la presencia de una prueba técnica para tal efecto*[8]"

Lo anterior supondría que, en criterio del juez de la Superintendencia, para la existencia de una infracción marcaria entre las marcas tradicionales nominativas o denominativas, solo existiría en caso de que una prueba técnica demostrara si la tipografía es o no idéntica.

Por su parte, al expediente fue allegado con la reforma de la demanda, una comparación en la que se establece claramente la existencia de un uso similar en el mercado, del signo distintivo registrado, pues la demandada si bien no utilizó de forma idéntica el signo registrado (en cuanto a forma y color), el uso si puede considerarse similar, frente a su forma y color así:

IMAGEN EN LA SIGUIENTE PÁGINA

[8] Link del expediente digitalizado, Archivo "2260999-20230609-1604", minuto 11:45 a minutos 12:27, contenido en la carpeta denominada "051 – Acta 2277 Audiencia", de la carpeta 44.22 – 60999 SUSPENSIVO"



(Página 21 Reforma de la Demanda)

Incluso, reitero, el uso infractor por parte de la demandada, causó en el caso concreto, una confusión en el público, tal como lo refiere el testimonio de la señora Martha Soto, quien relató a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha habido eventos en los que los mismos expositores confundidos con respecto a la feria en la que acuden a exponer, han consignado a BURO queriendo consignar en EVA:

> *"Tengo varios expositores, hace poco inclusive, uno de ellos consignó en la cuenta nuestra, creyendo que estaba participando en la feria EVA y no en BURO, nosotros obviamente devolvemos el dinero*[9]*"*

Finalmente, es dable entender que la excepción de prescripción propuesta, dirigida a atacar la totalidad de las pretensiones, no debió ser concedida, sin siquiera un estudio de fondo y ceñido a los precisos términos expuestos por el excepcionante e incluso desechando las normas comunitarias de aplicación preferente que regulan el asunto de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, tal como lo pasaré a exponer a continuación.

[9] Link del expediente digitalizado, Archivo "2260999 – 20230530 – 936" Minuto 18:56 a minuto 19:09, de la subcarpeta "044 – video audiencia", de la carpeta "44.22 – 60999 – Suspensivo"

III. EL DESPACHO DECLARÓ LA PRESCRIPCIÓN DEL ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN DEL ARTÍCULO 258 Y 259 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000, A PESAR DE QUE DICHO ACTO ESTÁ LIGADO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El H. Tribunal podrá encontrar que la Superintendencia de Industria y Comercio, erró al considerar que la acción de competencia desleal por actos de confusión ligado a la propiedad industrial estaba prescrita, pues contó el término de prescripción sin tener en cuenta que mi representada solamente obtuvo el registro marcario el 16 de abril de 2020 y que, con anterioridad a dicha fecha, mi representada carecía de legitimación en la causa por activa para solicitar a la administración de justicia una condena a la demandada por esta vía procesal, pues para ello es necesario tener un derecho de propiedad industrial sobre la marca.

En apoyo a la anterior tesis, el H. TJCAN ha indicado que el legitimado por activa para incoar la acción de competencia desleal, vinculada a la propiedad industrial, debe ser titular de un derecho de propiedad industrial:

> *"El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial,* ***es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido***[10]*."*

Lo anterior quiere decir, que no era posible para mi representada incoar la acción de competencia desleal de confusión, ligada a la propiedad industrial, con anterioridad al 16 de abril de 2020, puesto que operaría una falta de legitimación en la causa por activa, pues es claro que para ejercer la acción se requiere gozar de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido, situación que solamente ocurrió con posterioridad al 16 de abril de 2020.

Ahora, debe entenderse por legitimación en la causa por activa, *como el presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión, es decir, como condición de la acción judicial, ha sido considerada una cuestión propia del derecho sustancial, pues alude a la materia debatida en el litigio*[11].

También es sabido que la prescripción corre en contra de la persona que desidiosamente optó por no hacer valer un derecho dentro del término que la ley indica, queriendo decir con ello que es una consecuencia lógica que, para que opere la prescripción de un derecho, primero hay que tenerlo, tal como lo indica el artículo 2512 del Código Civil:

> ***"ARTÍCULO 2512.*** *La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos,* ***por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales****."*(Énfasis agregado)

---

[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCAN), Interpretación Prejudicial 49 IP – 2009.

[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC 11358 del 5 de septiembre de 2018, M.P. Ariel Salazar Ramírez, Rad. T 1100102030002018-02414-00

Continuando, la Superintendencia indicó en su sentencia, pasando por alto que dentro de las pretensiones de la demanda, se encontraba como solicitud, que se declarara la existencia del acto de competencia desleal de confusión, ligado a la propiedad industrial y que para ello era necesario contar con un derecho protegido:

> *"La acción de competencia desleal no se supedita a la infracción de un signo marcario, porque son acciones que pueden ser paralelas, pero no son génisis indefectible de la competencia desleal. Es incorrecto pensar que la obtención o no de un registro, habilita para accionar la acción de competencia desleal y ello porque los intereses y finalidades de cada acción son distintos[12]."*

Finalmente, resulta lógico que la prescripción de la acción no puede correr en contra de quien no está legitimado para proponer la acción, pues no podía POP UP BURO S.A.S. intentar una acción por competencia desleal que está ligada al uso de una marca registrada, con anterioridad a la fecha en la que se otorgó a favor de esta el registro marcario, porque es a partir de esa fecha que mi representada podía oponerse legítimamente a la confusión que generó en el mercado la demandada, al utilizar signos similares a los registrados para ofrecer servicios que se encuentran bajo la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, la clase 35.

IV. EL DESPACHO NO VALORÓ EL TESTIMONIO DE MARTHA SOTO QUIEN RELATÓ AL DESPACHO LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA CONFUSIÓN – FALTA DE VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA Y VALORACION DEFICIENTE

El H. Tribunal encontrará que la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró el testimonio de Martha Soto, quien en su testimonio indicó cómo en el presente caso, la demandada originó una confusión en el público y decidió desestimar las pretensiones de la demanda, en específico el acto de competencia desleal de confusión ligado a la propiedad industrial.

La H. Corte Suprema de Justicia, ha entendido por valoración conjunta de la prueba, como un deber del funcionario judicial que consiste en la actividad intelectual de analizar la totalidad de los elementos probatorios, como presupuesto para dictar sentencia de fondo, pues no puede haber sentencia sin valoración probatoria:

> *"La apreciación conjunta de la prueba* ***consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homogéneo, sobre el cual habrá de edificar su fallo****, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son[13]."* (Énfasis agregado).

[12] Link del expediente digitalizado, Archivo "2260999-20230609-1604", Minutos 16:02 a minutos 16:35, contenido en la carpeta denominada "051 – Acta 2277 Audiencia", de la carpeta 44.22 – 60999 SUSPENSIVO".

[13] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC – 21575 del 15 de diciembre de 2017, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, Rad. 0500022130002017-00242-01.

Ahora, en el presente asunto, encuentra el suscrito que la Superintendencia no hizo referencia alguna en su sentencia al testimonio de Martha Soto, a pesar de que este establece con claridad , la existencia del acto de competencia desleal de confusión, al afirmar:

> *"Tengo varios expositores, hace poco inclusive, uno de ellos consignó en la cuenta nuestra, creyendo que estaba participando en la feria EVA y no en BURO, nosotros obviamente devolvemos el dinero[14]"*

También indicó el testigo, en respuesta a la pregunta del despacho, consistente en indicar "*si el pago que hizo uno de los expositores se debió o tuvo usted conocimiento de alguna justificación para haber incurrido en dicho error"* y la testigo manifestó:

> *"Se equivocó creyendo que era la feria EVA y no la feria BURO (…) pidieron excusas indicando que se habían equivocado de feria, eso ya varias veces nos ha pasado, no solo en consignaciones sino también a través de llamadas.[15]"*

Dicho esto, no se entienden las razones por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró el referido testimonio, con el fin de analizar si en el presente caso existía confusión ligada a la propiedad industrial como un acto de competencia desleal. No debe olvidarse, que si bien el juez es el encargado de asignarle el valor probatorio a las pruebas, de conformidad con la sana crítica, este debe apreciar el conjunto de elementos probatorios oportuna y legalmente allegados al proceso:

> *"En Colombia, según el principio de valoración racional de la prueba, implantado por mandato del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente,* ***es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicción para obtener, de todos ellos, un resultado homogéneo o único, sobre el cual habrá de fundar su decisión final****.*
>
> *Tal obligación legal -lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulación del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasión se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimación global de todas las articuladas, "examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles[16]".* (Énfasis agregado)

Concluyendo, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró de manera conjunta las pruebas obrantes en el expediente, en especial el testimonio de Martha Soto en lo que respecta a la confusión, a pesar de que su dicho, en este preciso punto, no fue desestimado ni desacreditado por la contraparte.

---

[14] Link del expediente digitalizado, Archivo "2260999 – 20230530 – 936" Minuto 18:56 a minuto 19:09, de la subcarpeta "044 – video audiencia", de la carpeta "44.22 – 60999 – Suspensivo"

[15] Link del expediente digitalizado, Archivo "2260999 – 20230530 – 936" Minutos 21:00 a minutos 21:31, de la subcarpeta "044 – video audiencia", de la carpeta "44.22 – 60999 – Suspensivo"

[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC – 21575 del 15 de diciembre de 2017, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, Rad. 0500022130002017-00242-01.

ABELLO
Abogados

SOLICITUDES

PRIMERA: **REVOCAR** el numeral primero de la sentencia proferida en audiencia del 9 de junio de 2023.

SEGUNDA: DECLARAR no probada la excepción de mérito denominada "*No existe proceder alguno que se enmarque en las conductas censuradas por la decisión 486 de 2000*"

TERCERA: CONCEDER la pretensión de infracción marcaria de mi representada en los términos expuestos en la reforma de la demanda.

CUARTA: **DECLARAR NO PROBADA** la excepción de mérito denominada "*Prescripción de la Acción por competencia desleal*". Y en su lugar que se avoque el estudio de las pretensiones relacionadas con los actos de competencia desleal, en especial al relacionado con el acto de competencia desleal de confusión ligado a la infracción marcaria en los términos de la Decisión 486 de 2000.

QUINTA: **REVOCAR** el numeral tercero de la sentencia proferida en audiencia del 9 de junio de 2023.

Atentamente,



FELIPE ABELLO
C.C. No. 1.032.406.286
T.P. No. 235.464. del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: Exp. 110013199 001 2022 68850 01. Sustentación Recurso de Apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 8/09/2023 4:00 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (246 KB)

Sustentación Recurso de Apelación.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Eliana R. Cuellar <elianar.cuellarc@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 15:51
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Exp. 110013199 001 2022 68850 01. Sustentación Recurso de Apelación

Honorable Magistrado
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
Ciudad

Proceso:	Verbal – Competencia Desleal
Radicado:	2022-68850-01
	Segunda Instancia
Demandante:	Juan Esteban Sánchez Romero
Demandados:	Fabián Enrique Valencia Becerra y Alba Cristina Moreno Murillo

ELIANA ROCÍO CUELLAR CIFUENTES, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.010.199.029 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio con tarjeta profesional número 262.459 del C.S.J., obrando en nombre y representación de **JUAN ESTEBAN SANCHEZ ROMERO**, de forma muy atenta y a la luz de lo normado en el inciso segundo y siguientes del numeral tercero del artículo 322 del CGP, me dirijo a su Despacho con el fin de sustentar el recurso de apelación interpuesto en el momento procesal oportuno.

Cordialmente,



Eliana Cuellar Cifuentes
Derecho de los negocios y procesal
+57 310 554 61 17 | elianar.cuellarc@gmail.com

Honorable Magistrado
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
Ciudad

Proceso:	Verbal – Competencia Desleal
Radicado:	2022-68850-01 Segunda Instancia
Demandante:	Juan Esteban Sánchez Romero
Demandados:	Fabián Enrique Valencia Becerra y Alba Cristina Moreno Murillo

Ref.: Sustentación Recurso de Apelación
Contra Sentencia 7 de Junio de 2023 (Acta No. 2223)

ELIANA ROCÍO CUELLAR CIFUENTES, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.010.199.029 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio con tarjeta profesional número 262.459 del C.S.J., obrando en nombre y representación de **JUAN ESTEBAN SANCHEZ ROMERO**, colombiano, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.429.280, de forma muy atenta y a la luz de lo normado en el inciso segundo y siguientes del numeral tercero del artículo 322 del CGP, me dirijo a su Despacho con el fin de sustentar el recurso de apelación interpuesto en el momento procesal oportuno.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD CON LA SENTENCIA APELADA

I. Respecto del Análisis Realizado por el Ad Quo Para Declarar la Prosperidad de la Excepción de Falta de Legitimación en la Causa por Activa.

Conforme a lo indicó el Juzgador en la Sentencia del 7 de Junio de 2023 (Acta No. 2223), la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, se acogió favorablemente a razón de que el señor Juan Esteban Sánchez Romero no demostró, en ninguna etapa procesal, su participación y/o su intención de participar en el mercado de expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento y el comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, razonamiento que se adoptó conforme a las siguientes consideraciones:

a. El contrato de arrendamiento suscrito del 13 de octubre de 2017 de el inmueble ubicado en la calle 41 No. 13ª – 09 en la ciudad de Bogotá D.C., fue suscrito entre Servivic Ltda y

Juan Bautista Gonzales Ronchaquira, por lo cual consta para el Despacho que fue suscrito por un tercero ajeno al presente litigio.

b. Que el establecimiento de comercio donde el demandante Juan Esteban Sánchez tenía la copropiedad fue cerrado para mayo de 2020.

c. La inexistencia en el expediente de acuerdos o compromisos para que el establecimiento de comercio retomara actividades o fuera nuevamente puesto en marcha después de que cesara la emergencia sanitaria consecuencia de la propagación del Covid-19.

d. La omisión en la renovación del registro de matrícula mercantil del establecimiento de comercio Bar Donde Cris y J desde el año 2021.

En vista de lo anterior, se aprecia un defecto en la valoración probatoria que se expondrá a continuación:

Sea lo primero mencionar, que la legitimación en la causa por activa tiene un componente subjetivo relativo también al ámbito de aplicación de la legislación de competencia desleal; pues además de participar en cualquier orden en el mercado, sin necesidad de exigir la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, debe vislumbrarse la atribución de perjuicio o amenaza a los intereses económicos del actor por cuenta de los actos de competencia desleal, para estructurar siquiera legitimación de hecho y posteriormente acreditar la legitimación material proveniente de la prueba del mencionado perjuicio o amenaza.

El perjuicio a los intereses económicos del señor Sánchez Romero, se dejó en evidencia a través del escrito de demanda y el interrogatorio de parte, quien afirmó que efectuó una inversión en un establecimiento de comercio y en una adecuación de un local comercial, que desarrolló la actividad comercial de expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento y el comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco y que el establecimiento de comercio tuvo que suspender actividades, mas no cerrar, como erróneamente quedó plasmado en la sentencia, a razón de las medidas de orden nacional con ocasión del Covid-19 y, que estando dentro del término para retomar actividades, la señora Cristina arbitrariamente aperturó un establecimiento de comercio en el mismo local comercial y en idénticas condiciones a como se había dejado para la fecha de suspensión de actividades, y que **fue precisamente por el actuar de la señora Moreno Murillo que aquel vio frustrada su intención de continuar ejerciendo su actividad comercial.**

Al mismo tenor, manifestó que decidió iniciar la acción de competencia desleal porque aun después de intentar acercamientos directos con el extremo demandado sin tener éxito, **encontraba contrario a las sanas costumbres mercantiles que tuviera que iniciar desde cero o**

hacer inversiones iniciales en un nuevo establecimiento, cuando ya había consolidado un establecimiento de comercio con nombre y trayectoria.

En suma, la legitimación en la causa por activa material se divisa en el juramento estimatorio, fungiendo como medio probatorio, donde se discriminó el perjuicio en cabeza del señor Sánchez Romero.

Siguiendo el hilo hasta aquí expuesto, una valoración probatoria de todas las manifestaciones efectuadas por el señor Sánchez Romero en línea con lo expuesto por el extremo demandado en el interrogatorio de parte, permite concluir que el actor si tenía intención de participar en el comercio y que siempre pretendió hacerlo con el establecimiento de comercio que no cerró o culminó actividades sino que tuvo que suspenderlas por el caso fortuito y fuerza mayor originadas en la pandemia, una vez la situación que enfrentaba el mercado retornara a su normalidad y que son justamente las conductas de competencia desleal las que le impiden ese retorno al desarrollo habitual de su actividad comercial, acarreándole un perjuicio económico y material.

En lo atinente a que el contrato de arrendamiento sobre el local comercial en el que operaba el *Bar Donde Cris y J*, denominado previamente *Corazón Contento*, estaba suscrito entre Servivic Ltda. y Juan Ronchaquira, situación que es cierta y que tal como se manifestó en el escrito de demanda como en el interrogatorio del señor Sánchez tuvo lugar debido a la imposibilidad del señor Sánchez de cumplir los requisitos que exigía la inmobiliaria para continuar con el arriendo del local comercial como se venía ostentando por parte de los anteriores propietarios de *Corazón Contento*, lo cual lo llevó a acudir a su socio comercial, el señor Juan Ronchaquira, para poder continuar en el local comercial sin afectar la trayectoria del mismo.

La situación fáctica de acudir a socios comerciales o a terceros que cumplan con los requerimientos formales para acceder a un contrato de arriendo con una inmobiliaria no es un hecho aislado en el desarrollo del mercado inmobiliario del país, sino que por el contrario es una recurrente costumbre en el ámbito mercantil y, por lo tanto, **no es óbice para desacreditar la legitimación en la causa por activa, pues no fue objeto de discusión que la ocupación del local comercial era ejercida por el establecimiento de comercio BAR DONDE CRIS Y J y que es a razón de su existencia y posterior reemplazo irregular en el desarrollo de las actividades de dicho establecimiento que tiene lugar el prejuicio en cabeza del señor Sánchez por actos de competencia desleal.**

Frente al cierre del establecimiento, se reitera, así como se hizo a lo largo de las etapas procesales que, en mayo de 2020, **no hubo un cierre, sino una suspensión de actividades por parte del establecimiento a razón de la pandemia originada en el Virus del Covid-19**, y que la normal operación del establecimiento de comercio se vio frustrada para el señor Sánchez debido al proceder, contrario a las sanas costumbres mercantiles, de los demandados, como se ilustró suficientemente en renglones anteriores; dan cuenta de la intención del señor Sánchez de

continuar con la actividad comercial del establecimiento su negativa a cancelar la matrícula mercantil del establecimiento.

Se sustentó también por el juzgador que no se logró demostrar la existencia de un acuerdo para reanudar las actividades del establecimiento de comercio *Bar Donde Cris y J*, pero no se ahondó en que como manifestó el señor Sánchez, si existió un acuerdo verbal al respecto y prueba de ellos es la documentación que permaneció en el local y los muebles y enseres que integraban el establecimiento y que no todos eran de propiedad de proveedores, que las mesas y las sillas son una inversión de parte de los propietarios del establecimiento de comercio como se indicó por parte del señor Valencia Becerra y el señor Sánchez Romero; resultaría poco convencional que el arrendador del local comercial hubiera permitido la permanencia de muebles y enseres en su propiedad inmueble si no existiera un acuerdo verbal de que se retomaría el arriendo del local cuando la situación nacional lo permitiera.

Por último, integra también la parte motiva de la sentencia, en respaldo de la declaración de falta de legitimación por activa, que el señor Sánchez no había renovado, para el año 2021, la matrícula del establecimiento de comercio *Bar Donde Cris y J*, sin percatarse que la razón por la cual se inició esta instancia procesal fue por la imposibilidad del señor Sánchez de poder retornar a la explotación de su establecimiento de comercio en las mismas condiciones en las que lo venía haciendo, hasta antes de la declaración de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, a razón de las acciones de competencia desleal desplegadas por el extremo demandado.

En todo caso, de haber renovado la matrícula mercantil del establecimiento de comercio habría incurrido en falsedad en documento público, pues, en contra de su voluntad, su establecimiento de comercio no podía seguir operando en la dirección que lo hizo por más de seis años y, su capacidad económica le impedía efectuar nuevamente inversiones iniciales para el desarrollo de su actividad, aunado a que el ya había hecho inversiones económica para abrir el establecimiento de comercio BAR DONDE CRIS Y J y de tiempo en la consolidación de su reputación.

Tal como lo indica el juzgador, la inscripción en el registro mercantil tiene como objetivo la publicidad de existencia de la actividad comercial mas no es un elemento constitutivo del establecimiento de comercio, no es una condición sine qua non de su existencia, por lo cual, si bien no se renovó la matrícula mercantil del mismo, porque no se podría consagrar en ella dirección distinta a la inicial, la misma no es prueba circunstancial de la intención del señor Sánchez de participar en el mercado, pues aquel ha acudido a la instancia jurisdiccional para que se reconozca que por razones de competencia desleal no ha podido dar continuidad a su actividad comercial, y por ende la sola ausencia de la renovación de matrícula mercantil, no es un fundamento objetivo para determinar que el señor Juan Esteban no tenía intención de participar en el mercado.

II. Respecto de la Ausencia de una Valoración Integral y En Conjunto del Recaudo Probatorio

Observa este extremo apelante la configuración de una **inadecuada valoración del recaudo probatorio** referente a su valoración en conjunto. En primer lugar, frente a las observaciones en cuanto a la calidad que le asiste a la señora Alba Cristina Moreno Murillo, pues de una revisión, a través de las reglas de la sana crítica, de las manifestaciones del señor Valencia Becerra (demandado) en su interrogatorio, es sencillo colegir que la señora Moreno si representaba sus intereses en el establecimiento y que por ende, coadministraba el mismo; pues menciona, entre otros: *a)* que la razón por la cual efectuó la inversión en el establecimiento de comercio que posteriormente se convertiría en el *Bar Donde Cris y* J, fue por su cercanía con la señora Cristina; *b)* nunca se refiere a la existencia de un acuerdo con el señor Sánchez para delegar funciones en aquella, sino que él (Fabian Valencia) voluntaria y unilateralmente las impartió, hasta el punto de que era ella quien recibía los ingresos que le corresponderían por su participación en el establecimiento de comercio; *c)* que él tenía su empleo y que no estaba al tanto del establecimiento, pero que Cristina le comunicaba todo cuanto ocurría, entre otros aspectos.

En segundo lugar, aunado a las manifestaciones del señor Valencia Becerra en su interrogatorio, se encuentra que la parte demanda no exhibió los documentos decretados mediante Auto No. 54765 del 17 de mayo de 2023, ni expuso, en la oportunidad procesal pertinente, justa causa para hacerlo, por lo cual el Despacho determinó que al momento de dictar sentencia se le aplicarían las consecuencias procesales dispuestas en el artículo 267 del Código General del Proceso**"**, esto es, tener por ciertos todos los hechos que quien pidió la exhibición, pretendía probar. **Hechos que para el caso concreto son, la calidad de coadministradora de la señora Moreno Murillo por representar durante toda la relación comercial los intereses del señor Valencia Becerra y los literales a y b del acápite de juramento estimatorio.**

Paralelamente, de los interrogatorios de parte del extremo demandado, se desprenden contradicciones de la señora Moreno Murillo y el señor Valencia Becerra, así:

- **A.** En lo tocante a el monto de las inversiones pues manifiestan montos que aunque aproximados son significativamente diferentes entre sí y entre lo plasmado en la contestación de la demanda;
- **B.** La calidad en la que actuó la señora Moreno en el desarrollo de la relación comercial con el señor Sánchez, pues el señor Valencia manifiesta que él se acercaba frecuentemente al local, pero paralelamente indica que por su trabajo no podía acercarse al local y que era Cristina quien le informaba sobre las condiciones del negocio, igualmente el señor Valencia nunca menciona ningún tipo de acuerdo de ninguna índole al que haya llegado con el señor Sánchez para el manejo del establecimiento comercial. Resultaría absurdo aceptar que el señor Valencia Becerra hizo una inversión de alta magnitud para dejar sus resultas al alea

y/o sin control, lo cierto es que el manejo de su inversión siempre se efectuó a través de la señora Moreno Murillo, quien como ambos manifiestan, le informaba todo y recibía sus utilidades o ganancias para pagar un préstamo bancario y para pagarse ella misma;

C. La fecha de inicio de actividades por parte de la señora Moreno Murillo y;

D. La negación de la ocurrencia de la reunión de arreglo directo entre la señora Moreno y el señor Sánchez, pues señala la señora Moreno que nunca existió tal reunión, para finalmente aceptar que si tuvo lugar la reunión y que la misma únicamente tuvo por fin que el señor Sánchez le dijera que ella era una tercera, lo cual además de diferir de la realidad no sería lógico si el señor Sánchez fue quien convocó la reunión y posteriormente decidió acudir a instancias jurisdiccionales para resolver el mismo conflicto.

Todo lo anterior trae implícita también la pretensión del extremo demandado de hacer incurrir en error al juzgador, afirmando que la señora Cristina fungía como una simple colaboradora del establecimiento y no como quien representaba los intereses del señor Valencia y, por ende, coadministraba el referido establecimiento.

III. Respecto del Yerro Procesal Para la Integración del Objeto del Litigio

Por último, en esta etapa procesal es válido mencionar que el ente juzgador no le dio la importancia que merecían los testimonios solicitados en el escrito de demanda, si bien fueron negados a razón de una falencia procesal por cuanto se mencionó su calidad mas no su objeto concreto, de los escritos de demanda y contestación se desprende la importancia de su valoración por parte del juzgador para integrar el objeto del litigio, en el sentido que:

i) el Señor Juan Bautista González Ronchaquira en su testimonio aseveraría las razones que lo llevaron a fungir como arrendatario del local comercial en el que operaba el establecimiento de comercio BAR DONDE CRIS Y J y daría cuenta también de quien se encargaba de sufragar el valor del canon de arrendamiento;

ii) la declaración del señor Joaquín Jiménez Molina en su calidad de propietario del local comercial del asunto que aquí nos ocupa, le imprimiría veracidad al acuerdo que existió entre las partes para retomar el funcionamiento del establecimiento de comercio BAR DONDE CRIS Y J una vez el Gobierno Nacional así lo permitiera, se ocuparía también de reiterar las razones por las cuales el mobiliario permaneció en el local de su propiedad y, por último, podría manifestar que fue la señora Moreno Murillo quien le solicitó, en perjuicio del señor Sánchez, que procediera a rentarle el local comercial directamente a ella; y

iii) Roger Roberto Rengifo Mejía en su testimonio expondría circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que la señora Moreno Murillo retomó, en perjuicio del señor Sánchez, el funcionamiento del establecimiento de comercio e informó a la clientela del

mismo que había adquirido válidamente los derechos del establecimiento por parte del señor Juan Sánchez para su operación.

Así las cosas, aquellos debieron ser decretados de oficio a la luz de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que ha exaltado que la facultad de decretar "pruebas de oficio" es un "poder deber" del juzgador, más que una posibilidad a la cual puede acudir a mero título discrecional; toda vez que mediante el decreto de pruebas de oficio "se propende a la expedición de sentencias acordes con la legalidad, la justicia y la verdad, presupuestos axiológicos basilares que son menester en aras de atender el impostergable y sempiterno deber de dar íntegra y cabal preeminencia al derecho sustancial". (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela STC16909-2016, rad. 2016-03288. M.P. Margarita Cabello Blanco; 23 nov. 2016).

Conforme a lo hasta aquí expuesto, solicito al Honorable Tribunal mediante decisión del presente recurso de apelación, se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar reconozca las siguientes:

PRETENSIONES

1. Que se declare que Fabián Enrique Valencia Becerra y Alba Cristina Moreno Murillo incurrieron en los actos de competencia desleal de desviación de clientela, de confusión y de explotación de la reputación ajena.

2. Que se ordene a Fabián Enrique Valencia Becerra y Alba Cristina Moreno Murillo cesar los referidos actos de competencia desleal.

3. Que se condene a Fabián Enrique Valencia Becerra y Alba Cristina Moreno Murillo a indemnizar al señor Juan Esteban Sánchez Romero por el valor de $143.664.928.oo M/Cte., así:

a) $44.760.528.oo M/Cte. por concepto de daño emergente, esto es el detrimento económico que sufrió el patrimonio del señor Sánchez Romero con ocasión de los actos de competencia desleal desplegados por los demandados, valor que se discrimina así: $24.760.528.oo M/Cte. a razón del valor actual, conforme a los porcentajes anuales de inflación, de la inversión inicial que efectuó el señor Sánchez en el 2017 cuando adquirió su participación en el establecimiento de comercio denominado Corazón Contento; y $20.000.000.oo M/Cte. derivados de la inversión en adecuaciones locativas y mejoras necesarias para el correcto funcionamiento de la actividad comercial que se pretendía ejecutar y en mobiliario (mesas, sillas, equipos, etc); los costos de adecuaciones y compra

de inmobiliario hacen parte de la información que, como administradora del BAR DONDE CRIS Y J, debe aportar la señora Alba Cristina Moreno Murillo.

b) $68.904.000.oo M/Cte. por concepto de lucro cesante, esto es, los ingresos que ha dejado de percibir el señor Sánchez Romero debido a la imposibilidad de operar el establecimiento de comercio BAR DONDE CRIS Y J, como se venía haciendo previo a las medidas estatales a razón del Covid-19, a partir de octubre de 2020.

c) $30.000.000.oo M/Cte. por concepto de daño extrapatrimonial a otros bienes e intereses jurídicos reconocidos por el ordenamiento, tales como la honra, la reputación comercial, imagen comercial y la posición en el mercado del señor Juan Sánchez todo lo cual se vio altamente afectando con el actuar de los demandados.

4. Que se condene a Fabián Enrique Valencia Becerra y Alba Cristina Moreno Murillo en costas.

Atentamente,



ELIANA ROCÍO CUELLAR CIFUENTES
C.C. 1.010.199.029 de Bogotá D.C.
T.P. 262.459 del CSJ

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYAZO PERNETH RV: Sustentación Recurso Apelación radicado 2019-0015701 Ar Construcciones S.A.S vs Disepil Megapress S.A.S.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 5/09/2023 2:34 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (2 MB)
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN AR CONSTRUCCIONES-DISEPIL MEGAPRESS final ser-rev.mpl.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYAZO PERNETH

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Sergio Fajardo <sergiofajardo@lfalegal.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 13:44
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Ricardo Hidalgo Varela <RHidalgo@arconstrucciones.com>; administracion@disepilmegapress.com <administracion@disepilmegapress.com>; jaidume@hotmail.com <jaidume@hotmail.com>; mpatricialondonoj@lfalegal.com <mpatricialondonoj@lfalegal.com>; asesorlegal2@lfalegal.com <asesorlegal2@lfalegal.com>
Asunto: Sustentación Recurso Apelación radicado 2019-0015701 Ar Construcciones S.A.S vs Disepil Megapress S.A.S.

Inicio del mensaje reenviado:

De: Sergio Fajardo <sergiofajardo@lfalegal.com>
Asunto: Sustentación Recurso Apelación radicado 2019-0015701 Ar Construcciones S.A.S vs Disepil Megapress S.A.S.
Fecha: 5 de septiembre de 2023, 1:34:14 p.m. COT
Para: secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, secsctribsupbta2@cendoj.ramajudical.gov.co
Cc: Ricardo Hidalgo Varela <RHidalgo@arconstrucciones.com>, administracion@disepilmegapress.com, jaidume@hotmail.com, Ángela Ovalle Rizzo

<asesorlegal3@lfalegal.com>, Maria Patricia Londono
<mpatricialondonoj@lfalegal.com>

Londoño-Fajardo
& Asociados S.A.S.

Honorable Magistrada
Dra. Stella María Ayazo Perneth
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Civil
E.S.D.

Ref: Sustentación Recurso Apelación radicado 2019-0015701 Ar Construcciones S.A.S vs Disepil Megapress S.A.S.

De conformidad con lo ordenado mediante auto notificado por estado del pasado 30 de agosto de 2023 dentro del proceso de la referencia, en mi condición de apoderado de Ar Construcciones S.AS., demandante y apelante en el proceso, dentro del término legal anexo escrito en veinte (20) hojas con el cual doy cumplimiento con lo ordenado por el despacho, efectuando la correspondiente sustentación del recurso.

De conformidad con el ordenamiento legal vigente anexo copia a todas las partes en el proceso.

Cordialmente,

SERGIO FAJARDO MALDONADO
Calle 123 No. 7 - 51/57. Oficina 1202
Tels. PBX.- 7559333
Bogotá, D.C.- Colombia, Sur América

Este mensaje contiene información confidencial y es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario no deberá difundir, distribuir o copiar este e-mail. Su reproducción, lectura o uso está prohibido a cualquier persona o entidad diferente, sin autorización previa por escrito. Si ha recibido esta

comunicación por error por favor avísenos inmediatamente vía e-mail y borre este e-mail de su sistema. La transmisión vía e-mail no está garantizada de ser libre de errores, de manera tal que la información puede ser interceptada, alterada, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta o contener virus. El remitente no acepta responsabilidad por errores u omisiones que se presenten en el contenido del presente mensaje y que surjan como resultado de la transmisión vía e-mail. El presente e-mail tiene propósitos informativos y no puede ser considerado como una solicitud de ofrecer o comprar ningún bien o garantías o instrumentos financieros relacionados. Toda la información de éste mensaje está amparada por la reserva profesional entre abogado y cliente. POR FAVOR CONFIRMAR ESTE E-MAIL POR EL MISMO MEDIO.

Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2023

Honorable Magistrada
Dra. STELLA MARIA AYAZO PERNETH
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.- SALA CIVIL
E. S. D.

Asunto:	**SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN**
PROCESO:	**DECLARATIVO DE MAYOR CUANTÍA**
RADICADO:	**2019-0015701**
DEMANDANTE:	**AR CONSTRUCCIONES S.A.S.**
DEMANDADO:	**DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.**

SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN.

SERGIO FAJARDO MALDONADO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.207 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 89.218 del C. S. de la J., en calidad de apoderado especial de la sociedad **AR CONSTRUCCIONES S.A.S.,** sociedad identificada con el NIT. 900.378.893-8, representada legalmente por **JOHANN RICARDO HIDALGO VARELA,** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.944.755 de Bogotá, procedo a presentar sustentación del recurso de apelación de conformidad con lo ordenado por la Honorable Magistrada mediante estado del día treinta (30) de agosto de 2023 contra el fallo de primera (1ra) instancia proferido por el Juzgado Segundo (2°) Civil del Circuito presidido por el Señor Juez OSCAR GABRIEL CELY FONSECA y notificado por estado el día veintitrés (23) de marzo de 2023 en todas y cada una de sus partes, por las razones que se exponen a continuación:

1.- EL JUEZ INCURRIÓ EN UN EVIDENTE DESCONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE DISEPIL MEGAPRESS S.A.S. POR LA EJECUCIÓN DEFECTUOSA EN EL HINCADO DE PILOTES.

Desconoce con el fallo el *a-quo,* que resultaron probados dentro del proceso los tres elementos que soportan las pretensiones de responsabilidad contractual, a saber: (i) La inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido; (ii) Una relación entre las partes derivada de un negocio jurídico y; (iii) La existencia de un daño cierto, personal y directo, debidamente probado.

En la sentencia que se apela, el señor Juez analizó en forma deficiente y parcial los elementos de la responsabilidad, a pesar de que, tal y como se evidencia en la página 14 de la sentencia, anunció que haría el estudio de la acreditación de cada uno de los requisitos que configuran los presupuestos axiológicos de la responsabilidad civil contractual:

> *Así las cosas, el Despacho, en estricto ceñimiento del material probatorio recaudado dentro de la oportunidad procesal pertinente, procede a estudiar la acreditación de cada uno de los requisitos que configuran los presupuestos axiológicos de la acción ejercitada (responsabilidad civil contractual), conforme a las siguientes consideraciones:*

No obstante, el anunciado análisis de cada uno de los requisitos es ausente en las consideraciones del fallo que se apela, de tal suerte que el juez de primera instancia simplemente niega la prosperidad de las pretensiones y condena en costas a mi representada con base en un estudio incompleto de las pruebas aportadas y practicadas y del sustento fáctico y jurídico del proceso, tal y como se observa en la página 17 de la sentencia:

> *Bajo este tenor, con sustento en las razones precedentes, resulta palmario advertir que al no acreditarse el cumplimiento del primero de los presupuestos axiológicos de la acción de responsabilidad civil contractual es decir, inejecución o ejecución tardía del contrato (incumplimiento culposo), no puede abrirse paso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, por tanto, se negará el petitum y se condenará en costas a la parte demandante, en favor de la demandada, según lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.*

En este caso la responsabilidad civil de la demandada, **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**. se derivó del incumplimiento contractual en su obligación principal la cual se concretó con la deficiente ejecución del proceso constructivo que era de su responsabilidad, habiendo omitido las buenas prácticas en la ejecución del contrato de cimentación de la obra, pues **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**., como contratista profesional en el ramo debió actuar con el mayor grado de profesionalismo y diligencia y con los más altos estándares en la ejecución de sus obras, lo que evidentemente no sucedió, pues no es posible argumentar ser un profesional en el hincado de pilotes y luego manifestar que no es su responsabilidad su correcto funcionamiento.

Quedó demostrado en el proceso, pero fue a su vez totalmente desconocido por el juez de primera instancia, que la demandada ejecutó en forma defectuosa y parcial el contrato, puesto que un porcentaje de los pilotes de cimentación profunda no cumplían con lo exigido por la norma sismo resistente[1](Testimonio del ingeniero de suelos Alfonso Uribe Sardiña, Minuto 1:30:35 de la videograbación). Es claro,

[1] De conformidad con la declaración del testigo Alfonso Uribe Sardiña tomada el 19 de octubre de 2021 quien fue el profesional encargado de realizar el estudio de suelos y análisis de cimentación, "la norma NSR 10 que es la que nos obliga a cumplir con sus requerimientos establecer que en este tipo de pilotes hincados se debe alcanzar la profundidad de diseño y además su ubicación a nivel de cimentación debe cumplir también con los requisitos que establece la norma. Adicionalmente establece cuál es el desplome o pérdida de verticalidad máxima de los elementos que para pilotes hincados es el 6% de su longitud, eso es de obligatorio cumplimiento según la norma" (Minuto 1:30:35 de la videograbación).
Igualmente declaró que: "en cuanto a la longitud que corresponde a la longitud de diseño que aparece en el estudio de suelos, un buen número de pilotes no cumplieron esa longitud, otros si alcanzaron la profundidad de diseño, otros no. En cuanto a su ubicación en planta al excavar al tercer sótano, también hubo un buen número de pilotes que no estaban en su posición de diseño y estaban por fuera de la norma." (Minuto 1:31:28 de la videograbación)

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

además, que la demandada conocía tanto desde el inicio como con posterioridad a la suscripción del contrato, cuáles eran los lineamientos legales que debían seguirse en el hincado de pilotes, por lo tanto, no puede ser de recibo de la H. Magistrada el argumento del *a-quo* mediante el cual da la razón a la demandada escudándose en que la labor para la que fue contratada se limitaba únicamente a hincar los pilotes sin importar la calidad *"por una supuesta previsión contractual",* que, de ser interpretada como lo interpreta el a-quo, sería claramente abusiva y de mala fe, infiriendo que la obligación del contratista era construir unos elementos, sin importar si estos cumplían o no con la norma sismo-resistente, y con las condiciones de calidad exigidas por el estudio de suelos que era parte integrante del contrato suscrito entre las partes, desconociendo las pruebas documentales, contradiciéndose en su dicho e interpretando de forma arbitraria y descontextualizada los términos contractuales acordados.

Si se hace un análisis del contrato suscrito[2] , claramente éste dispone que los pilotes deben cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el estudio de suelos[3], y a diferencia de los manifestado por el juez de primera instancia, no es cierto que no deberían cumplir con la verticalidad y profundidad exigida por la norma, sino que por el contrario, lo que establecía la norma contractual, es que en caso de desviación del pilote, (DENTRO DE LOS MÁRGENES PERMITIDOS EN LA NORMA), sería de responsabilidad del contratante las obras adicionales para integrarlos con la estructura del edificio, circunstancia totalmente diferente a lo que ocurrió en el caso específico, que quedó demostrado en las bitácoras de obra, en los testimonios técnicos de los ingenieros que acompañaron la obra en su ejecución, es decir, el Ingeniero Supervisor Técnico e Ingeniero de Suelos, quienes advirtieron durante el desarrollo de las obras, que hubo pilotes que no cumplían con las especificaciones técnicas. Esto no sólo quedó plenamente demostrado con dichas pruebas documentales, sino con las pruebas técnicas periciales[4] que ni siquiera fueron analizadas en el fallo atacado, circunstancia desconcertante porque nos preguntamos ¿cómo es posible qué en un proceso de características técnicas como este, el juez no haga ni siquiera referencia a las pruebas técnicas oportuna y legalmente aportadas en el proceso y que no fueron desestimadas?

Adicionalmente, tampoco el a-quo analiza las razones por las cuales se contrató a la empresa **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**, quien en consideración a ser un profesional en el ramo de la construcción de pilotaje, era precisamente a quien por su experiencia y profesionalismo[5], se le debería exigir los mayores niveles de diligencia en su actividad, más cuando de la cimentación de una edificación de más de 30 pisos, depende la vida de miles de personas, circunstancia esencial en la toma de decisión en relación con la contratación del profesional, pues como lo manifestó el testigo Jorge Hernán Pinto en su declaración al informar al despacho que fue precisamente la experiencia de la sociedad demandada en la construcción de múltiples proyectos, la razón por la cual el comité de compras tomó la decisión

---

[2] Prueba 6.9 aportada con la demanda: Contrato de Obra CTO-960001

[3] Tal y como se demostró mediante las pruebas 6.4 a 6.7 aportadas con la demanda, y que comprueban que todos los planos le fueron entregados a DISEPIL y son el fundamento técnico que ellos debían cumplir en la elaboración e hincado de pilotes: Aquí se determinó, la ubicación de los pilotes a hincar (plano No. 5), la estratificación de
suelos (AUS-10236-2), la longitud, el diámetro, las características técnicas de las juntas, así como el nivel mínimo de la cota de Diseño para el hincado de pilotes tipo 1 (Plano No. 78)

[4] Prueba 6.47 aportada con la demanda

[5] Experiencia y profesionalismo demostrados mediante las pruebas 6.1 a 6.3 aportadas con la demanda inicial.

de aceptar la propuesta de **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**[6]-, y que la intención, desde el momento de la suscripción del contrato era la de asegurar el éxito en el funcionamiento de los pilotes, situación que claramente no ocurrió ya que la demandada no solo incumplió el contrato sino también las normas de sismo resistencia vigentes y, en consecuencia, ejecutó de forma defectuosa la labor para la que fue contratada tal y como lo manifestó en su declaración el testigo técnico Edgar Fajardo quien era supervisor técnico del proyecto Torre Imperial en diligencia del 19 de octubre de 2021,y que sostuvo que la demandada no cumplió con la labor para la que fue contratada porque "*se debían hacer pilotes a determinada profundidad y en determinada posición y no llegaron a la profundidad y muchos de ellos tampoco quedaron debidamente posicionados,(…).El responsable de esas obras era el piloteador Disepil Megapress*[7]*".*

De otra parte, el desconocimiento del material probatorio, el cual analizado en su contexto,- pruebas periciales aportadas[8], estudios técnicos[9], testimonios técnicos[10] y pruebas documentales[11]-, le permitían al fallador de primera instancia, tener absoluta certeza, sobre el incumplimiento del contrato, y el cumplimiento deficiente, incluso confesado[12] por la misma representante legal de la demandada, la señora Sandra Carolina Díaz Morales en su declaración del cuatro (4) de marzo de 2020, quien a minuto 1:44:00-1:45:00, ante la pregunta acertiva en relación a que si es cierto, si o no, que de los 57 pilotes tipo 1 y 1 cinco hincados por Disepil, no alcanzaron la profundidad de diseño, ni el margen de tolerancia otorgado por el especialista, ni cumplieron con los estándares de calidad dispuestos en la norma sismorresistente, respondió, "Es cierto que no cumplieron (y aclaró) …" y a minuto 1:55:17-1:55:43 ante la pregunta de si era cierto, si o no, de que hacían falta 5 pilotes tipo 1 y 54 pilotes por hincar, contestó, "Si es comunicación emitida por mi, digo que si, es cierto", confesiones y pruebas que sin duda alguna demostraban la responsabilidad del contratista, que al edificarse dentro de un contrato de obra del cual se derivan obligaciones "de resultado", era inadmisible la supuesta exoneración de responsabilidad argumentada por el a-quo, sin hacer el análisis probatorio y legal exigido por las normas de orden público aplicables, en desconocimiento de la responsabilidad presunta y de la responsabilidad derivada

---

[6] Diligencia del 19 de octubre de 2021, testigo Jorge Hernán Pinto. Ver minuto 2:12:09 de la videograbación de la audiencia.

[7] Situación demostrada mediante su declaración del testigo Edgar Fajardo supervisor técnico del proyecto Torre Imperial en diligencia del 19 de octubre de 2021, quien sostuvo que la demandada no cumplió con la labor para la que fue contratada: "No porque se debían hacer pilotes a determinada profundidad y en determinada posición y no llegaron a la profundidad y muchos de ellos tampoco quedaron debidamente posicionados, entonces no. El responsable de esas obras era el piloteador Disepil Megapress" (Minuto 43:36 de la videograbación)

[8] Prueba 6.47 aportada con la demanda inicial. [8] Prueba técnica documental 6.27 de las aportadas en la demanda de Salazar Ferro Ingenieros, sobre continuidad , estática y resistencia de los pilotes, Prueba 6.16 Aportada con la demanda, documental bitácora del Suelista Alfonso Uribe Sardiña y el peritaje técnico obrante a folios 1128 a 1214 del expediente, emitido por el Ingeniero Eduardo Martínez.

[9] Prueba técnica documental 6.27 de las aportadas en la demanda de Salazar Ferro Ingenieros, sobre continuidad, estática y resistencia de los pilotes, Prueba 6.16 Aportada con la demanda, documental bitácora del Suelista Alfonso Uribe Sardiña y el peritaje técnico obrante a folios 1128 a 1214 del expediente, emitido por el Ingeniero Eduardo Martínez.

[10] Pruebas 6.40 a 6.47 aportadas con la demanda inicial.

[11] Pruebas 6.1 a 6.37 aportadas con la demanda inicial.

[12] Prueba de confesión regulada en el artículo 191 del CGP, que le daba certeza al juez de primera instancia sobre los hechos y su ocurrencia, desconocidos en su fallo.

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

de las obligaciones de resultado contempladas en nuestro ordenamiento Civil (Artículos 2059 y 2060 del Código Civil)[13],[14].

Por consiguiente, sin prueba alguna de la diligencia por parte del demandado, el a-quo, en abierta violación de la normatividad vigente, las pruebas obrantes en el proceso, y desconociendo la majestad de su función deja de lado la obligación de aplicar la ley a fin de resolver en forma justa el caso, generando inequidad total con su decisión, por haber desechado las pretensiones de manera injusta y sin sustento legal y fáctico.

2.- ERROR Y DESCONOCIMIENTO DE LA LEY POR PARTE DEL A-QUO AL NO APRECIAR EN CONJUNTO EL MATERIAL PROBATORIO APORTADO POR LA DEMANDANTE AR CONSTRUCCIONES S.A.S

El *a-quo* infringió su deber de valorar en conjunto todas las pruebas aportadas por mi representada al proceso, pues en su fallo es evidente que no realizó la valoración de las más de cuarenta pruebas entre documentales, testimonios, y periciales que permitieron evidenciar que la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**., no cumplió con la totalidad de la fabricación e hincado de los pilotes Tipo 1 tal y como lo manifestó el testigo técnico, ingeniero de suelos, Alfonso Uribe Sardiña en diligencia del 19 de octubre de 2021 quien indicó que *"llegó un momento en que ya no se podía hacer más con los pilotes hincados, era un buen número de elementos los que no llegaban a la profundidad de diseño"*[15].

Debe resaltarse que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29 establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En concordancia, el Código General del Proceso en su artículo 176 dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las

---

[13] Sobre el particular el tratadista Javier Tamayo Jaramillo, en su tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, página 529, expresa: "Uno de los contratos de mayor ocurrencia en la vida diaria es el de la confección de obra material, tal como sucede con los ebanistas, carpinteros, escultores, constructores, etc. En todos estos contratos predomina la obra de mano sobre el intelecto, lo que no obsta para que en muchos de ellos se requiera una gran capacidad intelectual por parte del deudor que se compromete a realizar la obra. En líneas generales, puede afirmarse que en casi todos estos contratos la obligación contraída por el deudor es de resultado, pues, en el orden normal de las cosas, ninguna dificultad tiene el deudor para realizar la obra que ha sido encomendada por el acreedor". Y como se evidencia con el caso particular, y las pruebas obrantes en el proceso en especial el contrato suscrito, las partes acordaron en forma clara la hechura de los pilotes de acuerdo con la normatividad vigente.

[14] Corte Suprema de Justicia Sentencia 20001-3103-005-2005-00025-01 del 5 de noviembre de 2013 con Ponencia del Magistrado Arturo Solarte Rodríguez, establece el criterio para hacer la distinción entre obligaciones de medio y resultado, el cual se identifica en razón de la aleatoriedad de la finalidad esperada, y como es natural en una obra civil de esta envergadura, no puede haber un aleas alrededor de la seguridad y cimentación de una estructura de más de treinta pisos habitadas por personas con sus familias.

[15] Puntualmente, en su declaración el testigo Alfonso Uribe Sardiña en diligencia del 19 de octubre de 2021 sostuvo que: "al excavar el tercer sótano, la ubicación de diseño de los pilotes hincados no correspondía a la real, estaban ubicados en otro sitio, y esto obligó a que fuera necesario hacer pilotes adicionales , en este caso se llaman micropilotes, descender una maquina allá hasta el tercer sótano, para hacer los micropilotes faltantes para hacer la carga establecida" (Minuto 1:40:27 de la videograbación). Igualmente sostuvo que "llegó un momento en que ya no se podía hacer más con los pilotes hincados, era un buen número de elementos los que no llegaban a la profundidad de diseño" (Minuto 1:41:40 de la videograbación).

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba[16] .

De igual forma, la jurisprudencia considera que la valoración racional de las pruebas debe hacerse conforme a las reglas de la sana critica, la cual trasciende las reglas estrictamente procesales, puesto que la obligación legal de que el juez motive razonadamente las decisiones que adopta no se satisface simplemente con el cumplimiento de las formalidades. No puede el juez olvidar que las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso son un medio para alcanzar la verdad de los hechos que interesan, puesto que las decisiones que sacrifican su contenido de verdad por rendir homenaje al eficientismo instrumental son materialmente injustas[17].

Así las cosas, resulta totalmente desconcertante que pese al gran número de pruebas que se aportaron al proceso por parte de mi representada **AR CONSTRUCCIONES S.A.S**, el juez haya hecho un estudio tan superficial como para determinar que ninguna de ellas era suficiente para reconocer en su favor las pretensiones, y que por el contrario, el escaso y deficiente número de pruebas aportado por la demandada (incluyendo un testimonio que fue tachado por el suscrito por el claro interés del testigo en las resultas del proceso), haya sido suficiente para que el juez fundara su decisión de ausencia de responsabilidad contractual de **DISEPIIL MEGAPRESS S.AS.** y que como consecuencia no se configurara la existencia del daño.

3.- CON LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, EL A-QUO INTERPRETA DE FORMA EQUIVOCADA CLÁUSULAS ACCESORIAS DEL CONTRATO, COMO EXONERATIVAS DE RESPONSABILIDAD, EN ABIERTA CONTRADICCIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y NORMAS DE ORDEN PÚBLICO APLICABLES.

Pasó por alto el *a-quo* en el fallo de primera instancia realizar un estudio juicioso respecto de la cláusula denominada "*OBSERVACIONES GENERALES",* como si fuera una supuesta cláusula exonerativa de responsabilidad, porque así fue invocada por parte de la demandada y bajo la cual pretendió eximirse del cumplimiento contractual que fue resumido en forma clara en las cláusulas primera y octava del contrato en relación con su objeto y con las obligaciones del contratista, puesto que darle validez en los términos interpretados por el a-quo, a dicha cláusula no solo se aparta de la interpretación sistemática del contrato, del espíritu contractual, y de la verdadera intención que tuvieron las partes a la hora de suscribir el contrato, sino que además, es una estipulación contractual, de interpretarse así, ventajosa, abiertamente injusta, desprovista de los elementos mínimos del principio de la buena fe, desleal y además, cuyo objeto es ilícito.

---

[16] Al respecto, la Corte Suprema de Justicia sostiene que: *"Nuestro sistema procesal civil se enmarca en la tradición racionalista continental–europea, según la cual la averiguación de la verdad como presupuesto de la justicia material es el principal objetivo institucional del proceso. Verdad y justicia deben ir*
siempre de la mano, pues tan absurda e inútil es la justicia sin verdad, como ésta sin aquélla. La pretensión de racionalidad de la decisión judicial a través del descubrimiento de la verdad y la materialización de la justicia está incorporada en el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial sobre los ritos (art. 228 C.P.). El aludido principio fue consagrado en el estatuto adjetivo, al expresar que «el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial» (art. 4º C.P.C.; art. 11 C.G.P) Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC-91932917, M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez

[17] Ibidem.

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

Brilla por su ausencia en el fallo impugnado un análisis del operador judicial respecto de las llamadas *"Observaciones Generales"* del contrato suscrito entre las partes y que fueron invocadas por la demandada como *"cláusulas exonerativas de la responsabilidad"*, y que en últimas terminaron siendo lo que en nuestra legislación civil se conocen como *"cláusulas leoninas"* puesto que aquellas otorgaron a **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**., una ventaja desproporcionada o desequilibrada en perjuicio de mi representada **A.R CONSTRUCCIONES S.A.S**. Estas cláusulas por regla general son nulas y deben ser eliminadas del contrato tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[18].

---

[18] Respecto de las cláusulas exonerativas o limitativas de la responsabilidad, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria en Sentencia STC 11843 de 2019. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona fue enfática al establecer que:

La "culpa" grave o el dolo no se puede limitar o exonerar contractualmente, desquiciando normas imperativas o de orden público, fundamento también de la prohibición de condonar el dolo futuro. De ser así, las partes, o quién ejerza la posición dominante, estarían prestas a incluir disposiciones de ese tenor, en desmedro del orden público y de los principios y valores rectores de nuestro ordenamiento jurídico o del orden constitucional.

Esa interpretación, simplemente implicaría, tener por válida, sin consideración alguna, toda cláusula limitativa o restrictiva de la responsabilidad, en los contratos de equiparable interés para los convencionistas, bajo la égida de que el legislador catalogó como "culpa leve", todo actuar negligente de los implicados, al margen de la magnitud de ese descuido.

Ello, por cuanto, de tiempo atrás esta Corte ha estimado que ese tipo de restricciones a la "responsabilidad" contractual, no resulta aplicable, tratándose de la "culpa grave o dolo", así:

"(…) Desde el año de 1936 en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se ha desarrollado con algún detalle, y con base en las reglas generales sobre obligaciones y contratos, el tema de la validez de las cláusulas de limitación y exclusión de la responsabilidad de las partes, y se han establecido límites a este tipo de pactos. En los primeros pronunciamientos sobre el tema (cas. civ. sentencias de 9 de diciembre de 1936, G.J. XLIV, pp. 405 y ss. y de 15 de julio de 1938, G.J. XLVII, pp. 68 y ss.), la Sala reconoció que a las partes de un contrato les asiste derecho a pactar un grado de responsabilidad distinto del ordinario para efectos de aligerar o disminuir sus riesgos en caso de inejecución de sus obligaciones. Sin embargo, ya desde entonces, sostuvo que dicha facultad no es omnímoda, pues no les está permitido a las partes pactar la exclusión total de su responsabilidad. Ello no sólo contradiría el concepto de la "obligación", sino también el espíritu de distintas normas del Código Civil que sancionan tales cláusulas con nulidad, como los artículos 1895, 1522, 63 y 1604. Se consideró, ab initio que, en tales cláusulas va envuelta una condonación del dolo futuro de una de las partes, pues al pactarse su irresponsabilidad, implícitamente se está tolerando que sea negligente en la ejecución de sus obligaciones (…)".

"(…) Al respecto, en la sentencia de 9 de diciembre de 1936, la Corte precisó que, [l]a eficacia o ineficacia de las cláusulas de irresponsabilidad en los contratos ha sido cuidadosamente estudiada por los autores, sea desde el punto de vista de la culpa, sea desde el de la carga de los riesgos, y ellas han dado lugar a la tesis llamada de la inversión de la carga de la prueba. No obstante la cuestión de la validez y efecto de las cláusulas de no responsabilidad, es todavía objeto de vivas discusiones […] el art. 1604 del C. C. al precisar la responsabilidad general que corresponde al deudor según la naturaleza de los contratos que celebre y al dar la norma para la carga de la prueba de las obligaciones contractuales, permite a las partes estipular expresamente una responsabilidad especial y modificar consecuencialmente la regla sobre la prueba del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones. Relacionando tal precepto con los arts. 63 y 1522, siempre se ha entendido que el deudor no puede estipular la exención de su responsabilidad en caso de que la inejecución de su obligación [se debía al dolo o a su culpa grave (…)".

"(…) Más adelante (cas.civ. sentencia de 6 de marzo de 1972, G.J. CXLII, pp. 98 y ss.), la Corte admitió bajo condiciones estrictas la exclusión de la responsabilidad de alguna de las partes cuando refiera a culpa leve y levísima. Dijo entonces, "que evidentemente las cláusulas de irresponsabilidad cuya presencia no es rara hoy en ciertos tipos de contratos, son absolutamente nulas y por ende ineficaces cuando mediante ellas el obligado pretende eximirse de responsabilidad por su culpa grave, la que en materia civil se asimila al dolo según las voces del artículo 63 del Código Civil, desde luego que el 1522 de la misma obra le niega validez a la condonación del dolo futuro y el 1523 Ibidem estatuye que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Tratándose de la culpa leve y levísima, en cambio, los contratantes pueden lícitamente acordar, y en estos eventos su convención es plenamente eficaz, la atenuación y aun la supresión de la responsabilidad civil

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

En este sentido, no podían ser de recibo del señor Juez de ninguna forma,-como tampoco lo pueden ser en esta instancia para la H. Magistrada- los argumentos de la demandada respecto a que las disposiciones contenidas en el acápite del contrato denominado como *"observaciones generales"* constituían una especie de cláusula exonerativa de la responsabilidad de **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**., en la correcta ejecución del contrato, puesto que no puede perderse de vista que su obligación no era de medio, sino de resultado[19], y que para lograr la correcta ejecución del hincado de los pilotes debía, no solo contar con la maquinaria adecuada, (situación que se demostró, no ocurrió tal y como se expuso en el hecho 28 de la demanda y cómo se demostró con el testimonio del señor Edgar Fajardo[20]), sino también conocer las condiciones del suelo[21] y los planos -como en efecto conocía- y como quedó demostrado mediante pruebas 6.4 a 6.7 y 6.16 a 6.20 aportadas con la demanda y las cuales se enuncian a continuación:

i) Plano No. 5 (versión 4) de planta de localización de pilotes hincado yos de la Torre Imperial (Elaborado por Aycardi Ingenieros Civiles S.A.S);
ii) Plano No. 78 (versión 1) sobre el corte típico de pilotes hincados tipo 1,2,3 y 4 de la Torre Imperial (Elaborado por Aycardi Ingenieros Civiles S.A.S);
iii) Plano No. 79 (versión 2) Pilote tipo 5, pantalla pre-excavada y barrete de la obra Torre Imperial (Elaborado por Aycardi Ingenieros Civiles S.A.S);
iv) Plano AUS-10236-2 sobre perfiles estratigráficos y localización de perforaciones de la obra Torre Imperial (elaborado por Alfonso Uribe Sardiña y CIA S.A.);
v) Bitácora del suelista Alfonso Uribe Sardiña;
vi) Actas más relevantes del comité de obra del Proyecto Torre Imperial;
vii) Planos de colocación de pilotes "informe de avance de pilotes tipo 1" elaborado por el Ingeniero Diego Rodríguez, director de obra del edificio Torre Imperial;
viii) Trazabilidad de los pilotes, realizada por el demandado Disepil Megapress S.A.S;

Además, la demandada debía dar cumplimiento a normas de orden público, como lo es el caso del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Por lo tanto, el desconocimiento de la

---

que la ley, como norma supletoria de la voluntad expresa de las partes, consagra para estos dos grados de culpa"

[19] Basta con remitirse al testimonio rendido por el arquitecto Jorge Hernán Pinto el día 19 de octubre de 2021, -quien fue además la persona que suscribió el contrato por parte de AR Construcciones S.AS-, para tener total certeza de que en el contrato no cabía posibilidad alguna de que la obligación de Disepil Megapress S.A.S., fuera únicamente de medio, pues tal y cómo expresó, la obligación era "hacer la obra" (Minuto 2:36:43 de la videograbación)

[20] Al respecto, el testigo en su declaración del 19 de octubre de 2021 expresó que: "nuevos no eran los equipos, si ocasionalmente les fallaba algo, si había momentos de tiempo en los que la actividad se detenía porque le estaban haciendo algún tipo de intervención al equipo" (Minuto 41:28 de la videograbación).

[21] En efecto, en su declaración, el testigo Edgar Fajardo supervisor técnico del proyecto Torre Imperial en diligencia del 19 de octubre de 2021, sostuvo que "Sí ellos tenían en su poder los planos estructurales asociados a los pilotes, pues la planta de localización de los pilotes, los corte y detalles de los pilotes porque pues con eso ejecutaban los pilotes, o sea hacían el armado de acero de refuerzo, hacían el vaciado de concreto, las dimensiones de los mismos, y pues sí el estudio de suelo si o si lo tenían no solo en el tema de este proyecto sino en todos los proyectos en los que nosotros hemos participado como supervisión técnica pues es un requisito fundamental para que quien vaya a ejecutar la actividad del pilotaje sea del tipo que sea pues tenga conocimiento previo del suelo de ahí sale el tema de con qué equipo voy a trabajar, cual es la sentencia que voy a ejecutar, en fin todo lo que ya pues el conocimiento propio o la experiencia de quien vaya a ejecutar la actividad de pilotaje debe contemplar." (Minuto 40:08 de la videograbación)

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

responsabilidad civil de la demandada hecha por el juez al fallar, se traduce en últimas al reconocimiento de que mediante este tipo de cláusulas, las partes pueden sustraerse del cumplimiento incluso de normas de orden público, en desmedro del mismo orden público y de los principios y valores rectores de nuestro ordenamiento jurídico o del orden constitucional, contrariando de forma evidente y expresa las mismas normas de orden civil y la jurisprudencia de las altas cortes.

Resulta por otra parte visible y ostensiva la mala fe del contratista en la ejecución del contrato, pues da a entender con su defensa (avalada mediante el fallo impugnado), que pretendía eximirse de la responsabilidad de hincar correctamente los pilotes incluso (a pesar de lo estipulado en su objeto (cláusula primera y en las cláusula octava y décima de las obligaciones particulares)[22] , desde el momento mismo de la suscripción del contrato, pues como lo indicó el testigo Jorge Hernán Pinto, no fue sino hasta que mi representada tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato, que **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** le ofreció emplear una máquina con mayores capacidades a las ya utilizadas para hincar los pilotes, los cuales además, ya se habían consolidado y corrían el riesgo de partirse[23].

Yerra igualmente el juez de primera instancia y se aparta deliberadamente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, al no declarar como nula dicha estipulación contractual no solo por ser una cláusula exonerativa de responsabilidad del dolo futuro, sino además por tratarse de una cláusula cuyo objeto es ostensiblemente ilícito y que, por lo tanto, no tiene vocación para producir efectos legales.

En consecuencia, la cláusula de "*observaciones generales"* no debió ser interpretada como cláusula exonerativa de responsabilidad, en la forma aplica por el juez 02 Civil del Circuito, pues su aval y aplicación, conlleva en últimas, a permitir que en nuestro ordenamiento jurídico cláusulas exonerativas de la responsabilidad por dolo futuro nazcan a la vida jurídica y produzcan efectos a todas luces perjudiciales y negativos para los contratantes que, de buena fe, las suscriben.

Por el contrario, como le fue señalado al a-quo en los alegatos presentados por la parte demandante, dicha cláusula fue incorporada por el contratista, razón por la cual se debe interpretar cualquier vacío existente en contra del predisponente (Artículo 1624 del Código Civil), y la única posible interpretación de la cláusula denominada "observaciones generales" según los artículos 1618, 1619, 1620, 1621, 1622 y 1623 del Código Civil, integrada con los principios de finalidad y buena fe, es que de la desviación que allí se trata (numeral primero de la cláusula sexta) es de aquellos pilotes que cumpliendo con la norma, (véase obligaciones y objeto contractual), pero que se encuentren dentro de las desviaciones permitidas en los márgenes legales (norma sismo resistente) o a la profundidad autorizada por el ingeniero de suelos, quien era el único autorizado por las partes para aceptar o rechazar un pilote (numeral 2 de la misma cláusula sexta de condiciones

[22] Prueba 6.9 aportada con la demanda.
[23] Esta situación también se encuentra demostrada mediante el testimonio del arquitecto Jorge Hernán Pinto, quien en diligencia del 19 de octubre de 2021, le puso de presente al despacho que una vez AR Construcciones se vio en la obligación de cancelar unilateralmente el contrato con Disepil Megapress S.A.S, "ellos después me ofrecieron que tenían una máquina que era con unas características superiores de carga para que la dejáramos entrar para continuar el trabajo, técnicamente a mí me pareció un error porque ya se habían consolidado esos pilotes y someterlos a una fuerza exagerada podrían partirse, doblarse y uno sin saber lo que pasó allá por debajo del terreno pues era un riesgo" (Minuto 2:05:27 de la videograbación).

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

especiales)[24], le corresponderían al contratante las obras adicionales para integrar los pilotes (permitidos por la norma y el estudio de suelos) a la estructura del edificio, pero en nada, dicha cláusula estipulaba que los pilotes rechazados por deficiente calidad e incumplimiento normativo, igual tendrían que ser aceptados y recibidos, pues claramente las cláusulas primera, octava y décima establecen la obligación de resultado de entregar los trabajos, es decir los pilotes, bajo los estándares técnicos y de calidad exigidos por la norma sismo resistente, y lo que quedó absolutamente demostrado en el proceso, fue que parte de los pilotes no cumplieron con las condiciones técnicas y de calidad exigidas por el contrato y la norma imperativa que lo gobierna, todo esto corroborado por los testimonios técnicos y las pruebas técnicas efectuadas por las empresas de ingeniería de mayor reconocimiento del país (obrantes en el expediente), lo que conlleva necesariamente al cumplimiento deficiente y parcial del contrato, y por ende generador de responsabilidad contractual, y no como equivocadamente se interpreta por el a-quo (violando todos los criterios legales de interpretación contractual), como una supuesta cláusula exonerativa de responsabilidad. Pues nos preguntamos, ¿qué sentido tendría contratar una obra que no cumplía con su finalidad?, ¿Cómo es posible interpretar que ambas partes contratantes estaban suscribiendo un contrato bilateral y oneroso, para hacer unas obras que no funcionaran, y que no fueran permitidas por la ley?

Por tanto, la única interpretación posible de dicha cláusula es precisamente aquella que dispone que las correcciones de integración de la estructura de un pilote desviado, pero que sirviera de acuerdo con los márgenes dispuestos en la norma, serían por cuenta del contratante, y no como cláusula exonerativa de responsabilidad plena, según la interpretación del a-quo.

3.- EL A-QUO DESCONOCIÓ Y DIO POR NO ACREDITADO, ESTANDÓLO, LA EXISTENCIA DE DAÑOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) CAUSADOS A MI REPRESENTADA.

Desconoció por completo el juez de primera instancia que se cumplieron los presupuestos señalados por la Ley y la jurisprudencia para la configuración de la responsabilidad civil contractual, ya que quedó ampliamente demostrado que **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.** generó un empobrecimiento a mi representada pues se vio obligada a asumir costos y sumas destinadas a la contratación de nuevos profesionales y a la reposición de los pilotes construidos de manera defectuosa por la demandada.

Al respecto señala la Corte Suprema de Justicia, que el daño contractual, al igual que cualquier otro, debe exhibir como notas características para que habilite la pretensión indemnizatoria, las de: i) ser cierto, ii) subsistente, iii) personal, y, iv) afectar un interés licito. Elementos que evidentemente fueron pasados por alto en el fallo de primera instancia y que se evidenciaron en el caso concreto de la siguiente forma:

i) El daño es presente y cierto producido por la ejecución parcial e imperfecta de las obligaciones asumidas por **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**., lo que obligó a mi representada a asumir una serie de gastos considerables para poder terminar las obras de pilotaje de 58 pilotes tipo 1 que presentaron defectos y rechazos.

[24] Prueba 6.9 aportada con la demanda

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

Esta situación quedó incluso evidenciada mediante el peritaje financiero aportado por mi representada y sustentado debidamente en audiencia (prueba obrante a folios 1369 a 1511), en el cual se estableció el monto de las sumas por los perjuicios que se le causaron a mi representada por conceptos de daño emergente y lucro cesante.

ii) El daño es antijuridico, por cuanto las expectativas legítimamente emanadas del contrato suscrito entre las partes le permitían a mi representada tener una certeza sobre los beneficios económicos que obtendría por la venta de las unidades inmobiliarias resultantes de la construcción del Edificio Torre Imperial.

iii) Igualmente quedó probado, aunque desconocido por el juez de primera instancia que el daño es personal, por cuanto las obligaciones a las que se comprometió la demandada redundaban en beneficio de los intereses de mi representada en su calidad de contratante, y, por ende, es quien tiene la legitimidad por activa para la solicitud de la correspondiente indemnización presentada y tasada en el escrito de la demanda.

En efecto, la demandada no logró desvirtuar en el transcurso del proceso los daños causados a mi representada, y que correspondieron al defecto constructivo en la cimentación del edificio para lo cual fue contratada la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**[25]. Dentro del proceso quedó plenamente demostrado mediante todo el material probatorio aportado que la demandada ejecutó de forma parcial y defectuosa los pilotes de cimentación del edificio Torre Imperial puesto que un porcentaje de los dichos pilotes de cimentación profunda no cumplían con lo exigido en la norma sismo-resistente vigente, y que además es una norma de orden público, así lo declaró el testigo técnico ingeniero supervisor independiente, señor Edgar Fajardo, supervisor técnico del proyecto Torre Imperial quien indicó que la importancia del cumplimiento de la norma sismo resistente en este proyecto radicaba en que *"la cimentación era considerable a una buena cantidad de pilotes y de vigas significativas, entonces la cimentación como tal de la edificación busca garantizar primero que todo lo que se está desarrollando hacia arriba tenga esa estabilidad tanto para una carga vertical para el peso propio como para las cargas o fuerzas de sismo y también esa cimentación garantiza una adecuada interacción del suelo con la estructura porque finalmente cuando viene ese sismo lo primero que va a recibirlo es su cimentación, entonces de ahí la importancia de que la cimentación se haga de manera adecuada*"[26].

---

[25] Tal y como lo declaró el testigo Edgar Fajardo supervisor técnico del proyecto Torre Imperial en diligencia del 19 de octubre de 2021, "(…) durante el proceso de cimentación se observaron una serie de pilotes hincados que quedaron desplazados que estaban afectados, entonces fue necesario durante esa etapa de cimentación hacer la construcción de unos elementos adicionales unos micropilotes unos dados uno cabezales para vincular esos nuevos pilotes a la cimentación del edificio porque como les comentaba ahorita de esa cimentación depende todo lo que hay de ahí para arriba y también de garantizar esa interacción adecuada entre el suelo y la estructura en el momento en que se presente un sismo" (Minuto 20:11 de la videograbación)

[26] Tal y como lo declaró el testigo Edgar Fajardo supervisor técnico del proyecto Torre Imperial en diligencia del 19 de octubre de 2021 la importancia de la norma sismo resistente en este proyecto radicaba en "que la cimentación era considerable a una buena cantidad de pilotes y de vigas significativas, entonces la cimentación como tal de la edificación busca garantizar primero que todo lo que se está desarrollando hacia arriba tenga esa estabilidad tanto para una carga vertical para el peso propio como para las cargas o fuerzas de sismo y también esa cimentación garantiza una adecuada interacción del suelo con la estructura porque finalmente cuando viene ese sismo lo primero que va a recibirlo es su cimentación, entonces de ahí la importancia de que la cimentación se haga de manera adecuada" (Minuto 19:11 de la videograbación)

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

De otra parte, es claro que aquellas obras de *"Fabricación e hincado de pilotes del proyecto Torre Imperial (DIR)*" contempladas en el contrato[27] debieron realizarse de acuerdo con las obligaciones asumidas por el contratista de conformidad con la cláusula décima del contrato de obra CTO 960001, así como de aquellas obligaciones emanadas de la ley para este tipo de estructuras (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente), situación que evidentemente no se dio.

En este orden de ideas, y de conformidad con la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el vínculo contractual surgido del licito ejercicio de la autonomía de la voluntad encuentra su fundamento en la necesidad de satisfacer oportuna y adecuadamente las prestaciones que de él dimanan. En tal virtud, las conductas que afecten esa finalidad y, por ende, quebranten los deberes asumidos por las partes, riñen con la función de dicha relación, en cuya virtud se abre paso la posibilidad de sancionar tal infracción por la senda de la denominada "responsabilidad contractual", la cual se define, en sentido amplio, como la obligación de resarcir el daño causado al acreedor derivada del incumplimiento[28].

Así las cosas, el señor juez ha debido partir de la base de los elementos constitutivos que dan lugar al reconocimiento del daño, analizarlos uno a uno con base en las pruebas aportadas al proceso, y los testimonios practicados, para así, llegar a la inequívoca conclusión de que al existir responsabilidad civil contractual de la demanda, esta debía resarcir los daños y perjuicios ocasionados a **AR CONSTRUCCIONES** con ocasión del contrato celebrado para el hincado de pilotes del proyecto Torre Imperial.

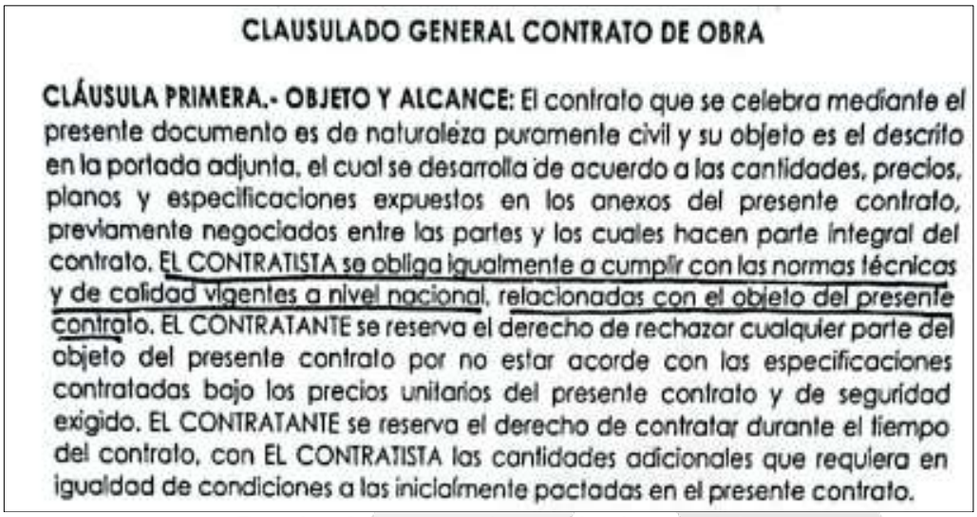
4.- EL *A-QUO* INCURRE EN DESCONOCIMIENTO Y VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 1604 DEL CÓDIGO CIVIL EN VIRTUD DEL RÉGIMEN DE CULPA PRESUNTA.

El juez de primera instancia incurre en un absoluto desconocimiento y por tanto, violación del régimen de culpa presunta contemplado en el artículo 1604 del Código Civil que dispone que: *"La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega"*, apartado que, como ya se mencionó hace referencia al régimen de presunción de culpas, y que según la Corte Suprema de Justicia se aplica en materia contractual cuando existe una obligación especial de resultado, de igual forma, insiste en que la presunción de culpa en la responsabilidad civil contractual no encuentra cabida por criterios como el de la guarda de la cosa, o el ejercicio de la actividad peligrosa, propios de la extracontractual; sino por la existencia de una obligación especial de resultado, máxime si corresponde a una clasificada como seguridad, de manera que existiendo esta, su incumplimiento da lugar a presumir culpa del contratante omisivo[29].

Al respecto debe ponerse de presente que la obligación de seguridad bien puede aparecer de forma explícita en el texto del contrato, de forma implícita o incluso estar consagrada en norma especial. En el presente caso, esa obligación especial

[27] Contrato No. CTO-960001 del 26 de noviembre de 2014 suscrito entre A.R CONSTRUCCIONES S.A.S y DISEPIL MEGAPRESS S.A.S
[28] Corte Suprema de Justicia-Sentencia SC 2142 de 2019, M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta
[29] Corte Suprema de Justicia, sentencia SC1819-2019, M.P. Dr. Luis Alonso Rico Puerta.

además de encontrarse contenida de forma explícita en el contrato CTO-960001 de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2014 suscrito por las partes, como se evidencia:



CLAUSULADO GENERAL CONTRATO DE OBRA

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El contrato que se celebra mediante el presente documento es de naturaleza puramente civil y su objeto es el descrito en la portada adjunta, el cual se desarrolla de acuerdo a las cantidades, precios, planos y especificaciones expuestos en los anexos del presente contrato, previamente negociados entre las partes y los cuales hacen parte integral del contrato. EL CONTRATISTA se obliga igualmente a cumplir con las normas técnicas y de calidad vigentes a nivel nacional, relacionadas con el objeto del presente contrato. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar cualquier parte del objeto del presente contrato por no estar acorde con las especificaciones contratadas bajo los precios unitarios del presente contrato y de seguridad exigido. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de contratar durante el tiempo del contrato, con EL CONTRATISTA las cantidades adicionales que requiera en igualdad de condiciones a las inicialmente pactadas en el presente contrato.

(Prueba 6.9 aportada con la demanda)

También se encuentra contenida precisamente en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 que establece los requisitos que se deben cumplir en la fabricación e hincado de pilotes, razón por la cual el nexo causal es evidente en cuanto a la transgresión del régimen normativo que impone la obligación de seguridad en estas actividades. Es decir que el nexo causal está dado entre el incumplimiento del deber impuesto por la norma al contratista en ejecución de la labor contratada.

Igualmente omitió el juez tener en cuenta que la obligación adquirida por la demandada era de resultado, no de medio como pretende hacerlo ver en el fallo impugnado, pues ¿qué sentido tendría suscribir un contrato de fabricación e hincado de pilotes dejando en plena libertad al contratista para que ejecute como quiera, sin importar si queda bien o mal[30], y más aún sin importar si cumple con las normas esenciales para la estabilidad de cualquier edificio?[31]

De otra parte, en el transcurso de proceso mi representada logró demostrar la falta de diligencia de **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**, mientras que la demandada no aportó prueba alguna de su diligencia, como le correspondía hacerlo en virtud del mandato del inciso 3° del artículo 1604 del Código Civil.

---

[30] Precisamente, en su declaración del día 19 de octubre de 2019, el testigo Jorge Hernán Pinto fue enfático al señalar que en ningún momento en términos contractuales se pactó ni se expresó de ninguna manera que no era importante cumplir con la normativa y con el correcto hincado de los pilotes: "Era super importante el cumplimiento normativo, ese proyecto creo que era en NSR 98 que era la norma que nos regia y superimportante cumplir con las normas y con la estabilidad y cero riesgo, nosotros nunca trabajamos en AR con 1% de riesgo, más bien con un 5 o 7% de sobre seguridad"(Minuto 2:13:50 de la videograbación de la diligencia). Igualmente manifestó que "el objeto del contrato era el de ellos hacer su pilotaje que es el objeto social y el equipo y la gente que tienen cumpliendo las características. (…) no podíamos permitir que ellos lo dejaran a medias, ellos debían y era el objeto del contrato hacer el pilotaje bien hecho" (Minuto 2:15:02 de la videograbación de la diligencia)

[31] Igualmente, en su declaración el testigo Edgar Fajardo del día 19 de octubre de 2019 aclaró al despacho que "es fundamental que los pilotes cumplan con los criterios de profundidad, de posicionamiento, de continuidad y de verticalidad. Sí hay unas tolerancias normativas, pero no pueden salirse de esa tolerancia y si o si tienen que cumplir. (…) Hay una normatividad vigente para eso" (Minuto 24:00 de la videograbación de la diligencia).

Por tanto, aceptar la tesis expuesta en el fallo impugnada resulta desequilibrada, atentatoria de normas de orden público, y riesgosa, pues podría generar un precedente nefasto para la seguridad ciudadana, y sería equivalente a señalar que los ingenieros no deben cumplir con el resultado de construir viviendas seguras de conformidad con la normatividad vigente para las personas que han puesto todo su capital y sueños en tener una vivienda, pues como lo indicó el testigo Jorge Hernán Pinto *"es que un solo pilote que falte ya pone en riesgo un asentamiento del edificio, el edificio puede inclinarse porque no está bien soportado, puede empezar a presentar fisuras. UN solo pilote. Los pilotes se deben hacer completos y cómo deben ser (…) en la cimentación, eso no es jugando* [32]. **6. CON LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SE CONFIGURA UNA VÍA DE HECHO POR INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 281 DEL C.G.P.**

Resulta evidente que en la sentencia el *a-quo* no se pronunció sobre todas las pretensiones de la demanda, las cuales eran:

[32] Testimonio rendido por el testigo Jorge Hernán Pinto en diligencia del 19 de octubre de 2021. Ver minuto 2:31:24 de la videograbación.

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

II. PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

1. Declarativas:

1.1. Que se declare que la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** incumplió el contrato de obra No. CTO-960001 suscrito con la sociedad **AR CONSTRUCCIONES S.A.S.,** el día veintiséis (26) de noviembre de 2014.

1.2. Que como consecuencia del incumplimiento contractual, se declare que la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** está obligada al pago de la cláusula penal dispuesta en la cláusula decima octava del Contrato de obra No. CTO-960001 suscrito por las partes el día veintiséis (26) de noviembre de 2014.

1.3. Que como consecuencia del incumplimiento contractual, se declare que la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** ha causado daños y perjuicios a la sociedad **AR CONSTRUCCIONES S.A.S.,** en la modalidad de daño emergente y lucro cesante en todas sus categorías reconocidas por la ley, debiendo resarcir los perjuicios probados que superen el valor de la cláusula penal de conformidad con lo dispuesto en la ley y en concordancia con lo que se logre probar dentro del proceso.

1.4. Que se declare la actualización a su valor presente, de la totalidad de las condenas que se impongan a la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.**

Con fundamento en las pretensiones declarativas enunciadas anteriormente, solicito se acceda a las siguientes pretensiones:

2

2. Condenatorias:

2.1. Se condene a la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** al pago de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($351.236.459),** correspondientes a la penalidad pactada en la cláusula decima octava del Contrato de obra No. CTO-960001, en virtud del incumplimiento y/o la deficiente calidad de los trabajos ejecutados por la sociedad demandada.

2.2. Se condene a la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** a pagar los daños y perjuicios causados a la sociedad **AR CONSTRUCCIONES S.A.S.,** por concepto de todo daño material en cualquiera de sus modalidades que se logre probar y excedan el valor de la cláusula penal, así:

a) Por concepto de Daño emergente: Al pago de la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.361.520.796) M/CTE,** o la suma que resulte probada, por mayor o por menor valor dentro del trámite procesal.

b) Por concepto de Lucro cesante: Al pago de la suma de **UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS**

($1.869.964.727) M/CTE, o la suma que resulte probada, por mayor o por menor valor dentro del trámite procesal.

Así como tampoco explicó de forma detallada y suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, o en este caso a todos. El juez de primera instancia tampoco se pronunció respecto de ninguna de las excepciones

propuestas por la demandada en su contestación y en todo caso, no explicó si alguna de ella se halló probada como lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso, lo que resulta una violación a la garantía del derecho fundamental del debido proceso de mi representada dentro del proceso.

En efecto, nuestra legislación procesal civil contempla el principio de congruencia como una regla procesal, que obliga al juez a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y las peticiones que se hacen en la demanda, y las excepciones planteadas por la demandada en su contestación.

De conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello[33].

En este sentido resulta evidente que la sentencia aquí impugnada no tiene la debida coherencia y que los fundamentos de la decisión final no guardan relación entre lo pretendido, lo probado y lo excepcionado, pues el juez infringió su deber de resolver todos los aspectos ante él expuestos, así como su obligación de explicar las razones por las cuales no entró al fondo de las pretensiones lo que configura una vía de hecho por inaplicación de los preceptos legales.

5.- EL A-QUO INCURRE EN UN DEFECTO SUSTANTIVO EN LA MODALIDAD DE INSUFICIENCIA EN LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN Y EN UN DEFECTO FÁCTICO POR NO HABERSE VALORADO LAS PRUEBAS DEBIDAMENTE SOLICITADAS O RECAUDADAS EN EL CURSO DEL PROCESO.

El último, pero no menos importante y otro de los motivos de apelación de la sentencia proferida por el Juzgado 02 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia, consiste en la configuración clara y expresa de dos de los defectos que incluso la jurisprudencia constitucional ha considerado de tal relevancia, que dan lugar a la interposición de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 superior en contra de decisiones judiciales: i) el defecto sustantivo en la

---

[33] La Sala Cuarta de Revisión del alto tribunal constitucional, profirió la sentencia T-1274 de 2008, en la que estableció lo siguiente:
"… Al respecto la jurisprudencia constitucional ha sostenido que mediante el principio de congruencia se busca que la sentencia tenga la debida coherencia, de modo que los fundamentos de la decisión judicial finalmente adoptada sean conocidos desde el momento de la demanda y durante el desarrollo del proceso, para garantizar así el ejercicio del derecho al debido *proceso y a la defensa*
(…)la incongruencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de hecho, ya que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez "es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa", a tal grado que "la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante", esto es, "carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso"

modalidad de insuficiencia en la motivación de la decisión, y ii) defecto fáctico por no haberse valorado las pruebas debidamente solicitadas o recaudadas en el curso del proceso.

A continuación, abordaré ambos defectos, demostrando además cómo es completamente evidente su configuración en el fallo apelado y que debe ser revocado por la H. Magistrada:

i) Respecto del defecto sustantivo en la modalidad de insuficiencia en la motivación de la decisión: la jurisprudencia constitucional unificada mediante sentencia SU128 de 2021[34] recopilando las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005, definió la falta de motivación de las decisiones judiciales como la ausencia de sustento argumentativo o la irrelevancia de las consideraciones aplicadas para dirimir la controversia. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual el fallador se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración[35].

De igual forma, la jurisprudencia constitucional[36] ha reiterado que las decisiones judiciales deben contar con unas consideraciones suficientes para no ser arbitrarias y que además deben tener en cuenta los alegatos de las partes y analizar el conjunto del material probatorio que se presente. En consecuencia, se tiene que el deber de motivación de los fallos de los jueces se constituye en una de las "debidas garantías" del debido proceso.

El fallo emitido por el Juzgado Segundo (2°) Civil del Circuito de Bogotá, es absolutamente carente de análisis desde un punto de vista imparcial, pues no se tuvieron en cuenta los alegatos presentados por mi representada en su debida oportunidad procesal, así como tampoco se analizó ni se valoró en conjunto el material probatorio aportado -como se ha explicará más adelante-, presentando en consecuencia una argumentación insuficiente y superficial, dándole incluso validez a una cláusula exonerativa de responsabilidad de dolo futuro, y reduciendo el asunto a que *"(…)AR Construcciones, se comprometió a asumir la contratación de obras necesarias y complementarias a fin de llevar a feliz término la cimentación del proyecto"*[37].

Así pues, contrario a lo argumentado en la sentencia por el señor Juez 02 Civil Circuito de Bogotá, de una lectura e interpretación sistemática y lógica del contrato, resulta claro que la intención del numeral 2 del acápite de *"Observaciones generales"* del contrato, no hacía referencia -cómo equívocamente pretende hacerse ver con el fallo de primera instancia que se impugna- a que mi representada tuviese que asumir la reconstrucción e hincado de nuevos pilotes como consecuencia de la irresponsabilidad y ejecución imperfecta de las obras a cargo de la demandada, sino a que se obligaba a asumir las obras complementarias o

[34] Corte Constitucional, sentencia SU-128/2021, M.P. Dra. Cristina Pardo Schlesinger.
[35] Precisamente, en sentencia C-391 de 2017 la Corte determinó que toda función pública está sometida a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, por lo que, los operadores judiciales están en la obligación de motivar adecuadamente las sentencias, con el fin que la misma sea razonable y proporcional, y así evitar el ejercicio arbitrario de la autoridad
[36] Corte Constitucional, Sentencia SU-635 de 2015. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37] Página 15 de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo (2°) Civil del Circuito de Bogotá, el 23 de marzo de 2023.

adecuaciones necesarias, entendiendo por complementario, según la Real Academia Española de la Lengua, aquello que "sirve para completar o perfeccionar algo"[38], no para rehacerlo como en efecto tuvo que hacerlo mi representada teniendo que contratar a otros profesionales para hacer lo que la demandada no hizo[39].

ii) Respecto del defecto fáctico por no haberse valorado las pruebas debidamente solicitadas o recaudadas en el curso del proceso: Es evidente también, que se configuró con el fallo de primera instancia, un defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, también conocido y definido por el alto tribunal constitucional como "dimensión negativa", la cual tiene lugar cuando el funcionario judicial al momento de valorar la prueba niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[40].

En este orden de ideas, se tiene entonces que el supuesto fáctico por indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en el supuesto en el cual el funcionario judicial no valora las pruebas debidamente aportadas en el proceso. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha expuesto que este defecto, ocurre cuando el juez, en el ejercicio de su facultad de valoración, deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del proceso, ignora sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente efectúa un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido fáctico del elemento probatorio[41].

Tal y como lo podrá observar la H. Magistrada en el expediente, al proceso se aportaron más de cuarenta pruebas entre documentales, testimonios técnicos, y periciales que permitieron evidenciar que la sociedad **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S.,** no cumplió con la totalidad de la fabricación e hincado de los pilotes Tipo 1, cuya profundidad debía ser de 65 metros desde la cota de diseño, como se evidencia específicamente en las siguientes pruebas obrantes en el expediente:

i) Documentación de trazabilidad de hincado de pilotes (prueba obrante a folios 147 a 209)
ii) Bitácora de obra (prueba obrante a folios 36 a 104 del expediente)
iii) CD Videograbación de hincado a presión (prueba obrante en folio 106)

---

[38] https://dle.rae.es/complementario

[39] Al respecto, el testigo Jorge Hernán Pinto, en diligencia del 19 de octubre de 2021, manifestó que la corrección de la desviación de los pilotes pactada en el contrato y las obras adicionales hacían referencia a desviaciones normales del pilotaje, sobre esto, puntualizó "Sobre la norma (…) la norma tierne unos parámetros que dice de acuerdo a la altura máximo se puede desplazar o inclinar un pilote tanto, y hay que ensanchar una viga, un dado, cualquier elemento estructural para poder acoger bien esa desviación y esas obras las hace el constructor pero sin salirse de la norma" (Minuto 2:33:40 de la videograbación). Es decir que la intención contractual era sencillamente cubrir el riesgo de las obras de las desviaciones naturales más no aquellas que estaban por fuera de la variación normativa. Igualmente puntualizó que AR Construcciones nunca habría aceptado una condición como contratantes en la cual se aceptaran pilotes por fuera de la norma sismo resistente.

[41] Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

iv) Testimonio del arquitecto Jorge Hernán Pinto[42].

v) Testimonio del señor Edgar Fajardo ingeniero encargado de realizar la supervisión técnica del proyecto Torre Imperial[43].

vi) Testimonio del señor Alfonso Uribe Sardiña profesional encargado de realizar el estudio de suelos y análisis de cimentación del proyecto Torre Imperial, quien indicó que, en ejecución del contrato, los pilotes llegaron a ser disminuidos por parte de la demandada incluso en 10 y 12 metros:

> *"Yo hice a través de mi empresa el estudio de suelos para la cimentación del proyecto, posteriormente cuando se inició la construcción tal y como se acostumbra empecé a realizar visitas a la obra y empezaron a haber problemas en la instalación de los pilotes que se habían recomendado y así habían sido diseñados con una profundidad de 65 metros cuando se empezó la instalación de estos pilotes, que son unos elementos pre fabricados que se ubican a presión, los pilotes no alcanzaban la profundidad de diseño, por lo tanto se realizaron un buen número de visitas y de conceptos técnicos por parte mía y de mi empresa dando recomendaciones. Primero cuando los pilotes no se lograban instalar se solicitó que los pilotes tuvieran una punta diferente para que se facilitara el proceso, posteriormente en la instalación de los pilotes que empezaron a quedar cortos y por lo tanto no funcionaban técnicamente, como solución de cimentación se solicitó realizar unas pruebas a ver si los pilotes podían quedar más cortos y las pruebas dieron como resultado que no era así y que igual había que llevarlos a las profundidades de diseño. Los pilotes estaban diseñados con una profundidad de 65 metros, se aceptó que los pilotes tuvieran profundidades menores hasta 62 metros, 3 metros menos, pero en ningún caso 10- 12 metros como estaba resultando en el proceso de instalación."*[44]

Pruebas que en todo caso no fueron valoradas y estudiadas de manera objetiva, siguiendo las reglas de la lógica y la sana critica, por lo que es claro que el fallo de primera instancia se limitó a hacer un análisis superficial y evidentemente deficiente no solo de las normas aplicables y de los precedentes jurisprudenciales, sino también de las pruebas aportadas al proceso, desconociéndole a mi representada el derecho de indemnización que le asiste en virtud de los perjuicios generados por

---

[42] En su declaración el testigo Jorge Hernán Pinto en diligencia del 19 de octubre de 2021 indicó que: " al poco momento, llevábamos una semana larguita empezaron que esos pilotes no llegaban al punto de diseño, (…) se llamó al suelista, el doctor Uribe, se le comentó y él hizo sus cálculos y dijo no, mínimo debe llegar, creo que es a 62 metros los pilotes, no 65, podemos utilizar todos los márgenes de seguridad, no arriesgarnos porque en una cimentación de un edificio, en ese momento el más alto de Suba no podían correr riesgos, en una empresa como AR que lleva 40 y pico de años en el mercado, no se podía decir deje eso así. Entonces no se lograban esas distancias, y empezó todo el equipo a trabajar en la búsqueda de la solución al problema, una era sacarle punta al primer pilote para que fuer abriendo camino para que entrara más fácil, no sirvió, ellos decían que el suelo no servía, que era demasiado duro, pero cuando ellos cotizaron ellos recibieron el estudio de suelos que hizo el doctor Uribe y ahí aparecen todos los sustratos que tiene el terreno hasta 80-100 metros y ellos conocían eso." (Minuto 2:01:30 de la videograbación)

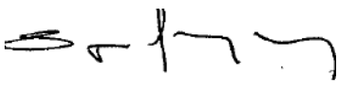
[43] En efecto, en su declaración, el testigo Edgar Fajardo supervisor técnico del proyecto Torre Imperial en diligencia del 19 de octubre de 2021, sostuvo que: "Fueron bastantes los que no llegaron, que se hubiera evidenciado durante el proceso de hinca fueron bastantes lo que no llegaron, que estaban cortos de la profundidad en dos, tres, cuatro metros y hasta más" "(…) si fue un número significativo porque pues a nivel de cimentación después de hacer los sótanos si encontramos una cantidad significativa de pilotes que fue necesario reemplazar por micropilotes " (Minuto 25:46 de la videograbación)

[44] Diligencia del 19 de octubre de 2021 Ver minuto 1:24:56 de la videograbación.

el incumplimiento contractual por parte **DISEPIL MEGAPRESS S.A.S**, y configurando en consecuencia un defecto fáctico por no haberse valorado las pruebas debidamente solicitadas o recaudadas en el curso del proceso.

De esta manera han sido expuestas de forma clara y precisa los argumentos por los cuales mi representada, la sociedad **AR CONTRUCCIONES S.A.S.,** no se encuentra conforme con la decisión proferida y que además configuran graves defectos que atentan no solo contra el ordenamiento jurídico sino contra el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, solicito, respetuosamente, H. Magistrada, se sirva revocar la sentencia concurrida, dictando en su lugar la que en derecho deba remplazarla.

Honorable Magistrada,



SERGIO FAJARDO MALDONADO
C.C. 80.424.207 de Bogotá
T.P. 89.218 del C.S de la J.

Calle 123 # 7 - 51/57 Oficina 1202
info@lfalegal.com
Tel: (57) 1 755 93 33
www.lfalegal.com
Bogotá D.C - Colombia - Sur América

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ RV: Recurso de súplica contra auto del 5 de septiembre de 2023 - PROCESO verbal. - Radicado No. 002201900288 04

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 08/09/2023 16:59

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (125 KB)

RECURSO DE SÚPLICA CONTRA AUTO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 QUE NEGÓ LA PRÁCTICA DE PRUEBAS.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: adiaz@dhalegal.com <adiaz@dhalegal.com>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 16:56
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: 'Andrés Díaz' <adiaz@dhalegal.com>
Asunto: Recurso de súplica contra auto del 5 de septiembre de 2023 - PROCESO verbal. - Radicado No. 002201900288 04

Bogotá D.C., septiembre 8 de 2023

DOCTOR
MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
E.S.D.

REFERENCIA: Recurso de súplica contra el auto del 5 de septiembre de 2023 notificado en estado del 6 de septiembre de 2023

PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04

DEMANDANTE: MARTHA OMAIRA CÁRDENAS CASTELBLANCO
DEMANDADOS: INVERSIONES CARI S.A.S., PRADERA GROUP S.A.S., LUIS BERNARDO CARDENAS CASTELBLANCO, OMAR DIONISIO CARDENAS CASTELBLANCO Y OTROS

En mi calidad de apoderado de la parte demandante en el proceso antes identificado adjunto memorial del asunto para el trámite pertinente.

Cordialmente,



ANDRÉS ALEJANDRO DÍAZ HUERTAS
C.C. 80.017.345 de Bogotá.
T.P. 122336 del C.S.J.

www.dhalegal.com
https://www.facebook.com/dhalegal
https://twitter.com/home

Bogotá D.C., septiembre 8 de 2023

DOCTOR
MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
E.S.D.

REFERENCIA: Recurso de súplica contra el auto del 5 de septiembre de 2023 notificado en estado del 6 de septiembre de 2023

PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04

DEMANDANTE: MARTHA OMAIRA CÁRDENAS CASTELBLANCO
DEMANDADOS: INVERSIONES CARI S.A.S., PRADERA GROUP S.A.S., LUIS BERNARDO CARDENAS CASTELBLANCO, OMAR DIONISIO CARDENAS CASTELBLANCO Y OTROS

ANDRÉS ALEJANDRO DÍAZ HUERTAS, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado judicial de la parte demandante en el proceso arriba identificado, con fundamento en el artículo 331 del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral 3 del artículo 321 del mismo Código, interpongo recurso de súplica contra el auto del 5 de septiembre de 2023, notificado el 6 de septiembre del mismo año, por el cual negó el decreto y la práctica de pruebas en segunda instancia.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

I. SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE APORTACIÓN DE LAS PRUEBAS PEDIDAS

El magistrado sustanciador afirmó en la parte final del auto impugnado lo siguiente:

“Resta decir que la parte interesada tampoco allegó los documentos que solicitó, ni copia de la solicitud que debió plantear a quienes los tienen, como lo exigen los artículos 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del CGP. Por esta otra razón, tampoco es viable el decreto de pruebas”.

No le asiste razón al magistrado en esta afirmación, por cuanto si se revisa la bandeja de entrada del correo electrónico de la Secretaría de la Sala Civil del tribunal de Bogotá, se podrá constatar que el día 25 de agosto de 2023 el suscrito apoderado remitió dos correos electrónicos así:

1. Correo electrónico del 25 de agosto a las 10:25 a.m. cuyo asunto fue “Solicitud práctica de pruebas en segunda instancia - PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04”, y cuyo destinatario fue la cuenta de correo

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Con este correo iban seis (6) archivos adjuntos, uno con la solicitud de pruebas, y otros cinco (5) con las distintas pruebas que se solicitó fueran decretadas, y en el cuerpo del correo con un enlace de Google Drive que dirigía a la prueba de la grabación de la reunión ordinaria de asamblea de accionistas de PRADERA GROUP S.A.S. del 28 de marzo del año 2023.

2. Correo electrónico del 25 de agosto a las 10:33 a.m. cuyo asunto fue "RV: Solicitud práctica de pruebas en segunda instancia - PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04", y cuyos destinatarios fueron los siguientes correos de las demás partes en el proceso Uberfle@gmail.com; rubencalixto59@gmail.com; cardenaslacou@gmail.com; luisb731@hotmail.com; lualcari94@hotmail.com; hotelganadero.gaitan@hotmail.com; mango1324@yahoo.es; mccltica@hotmail.com; flore0812@gmail.com; con copia del correo a la dirección electrónica de la Secretaría del Tribunal secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Este segundo correo, remitido ocho (8) minutos después que el primero, solo llevaba como adjunto la solicitud de pruebas, y fue simplemente un reenvío del primer correo para cumplir con el deber de poner en conocimiento de las demás partes del proceso el memorial de solicitud de pruebas.

Como se puede corroborar directamente en la bandeja de entrada del correo electrónico de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, y en el correo del 25 de agosto de 2023 a las 10:25 que reenvío en seguida de la presentación de este recurso, es claro que sí se aportaron las pruebas solicitadas en segunda instancia, contrario a lo aseverado por el magistrado sustanciador en su auto del 5 de septiembre de 2023, razón por la cual dicha afirmación no puede servir de argumento para negar las pruebas pedidas.

Es más, solicito al magistrado en turno a quien corresponda resolver el presente recurso de súplica, que revise y tenga en cuenta las pruebas allegadas con el correo del 25 de agosto a las 10:25 a.m., pues del análisis de las mismas podrá constatar la prosedencia, pertinencia y conducencia de su decreto por configurarse las causales de los numerales 3 y 4 del artículo 327 del Código General del Proceso.

II. SOBRE LA NO CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

A este respecto dijo el magistrado en el auto aquí recurrido:

"Como no se configura ninguna de las hipótesis previstas en los numerales 3º y 4º de artículo 327 del C.G.P., se niegan las pruebas pedidas por la parte demandante. En efecto, la misma petición reconoce que se trata de medios probatorios vinculados al cumplimiento de las decisiones adoptadas en la sentencia apelada, lo que descarta que su propósito sea probar hechos sobrevinientes o de documentos que

no pudieron aportarse en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria".

Para dilucidar si le asiste razón o no al magistrado para negar las pruebas solicitadas, es preciso recordar lo qué establecen los numerales 3 y 4 del artículo 327 del Código General del Proceso, a saber:

"3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria".

Si se analiza rigurosamente la causal del numeral 3 antes transcrita, se puede concluir que la misma simplemente se refiere a que las pruebas solicitadas en segunda instancia, se dirijan a demostrar hechos ocurridos después de la última oportunidad probatoria que se tuvo en la primera instancia para pedir pruebas. La causal no dice que esos hechos deban tener o no relación con lo decidido en el fallo de primera instancia, es decir, no prohíbe que las pruebas que se soliciten se encaminen a acreditar hechos que guarden relación directa con las decisiones adoptadas por el ad quo.

Al no establecer la norma tal prohibición, es claro que las pruebas que se pidan en segunda instancia pueden estar llamadas a demostrar hechos relativos a las consecuencias que se deriven del fallo impugnado en apelación.

Es así como en el caso bajo estudio, las pruebas que se piden no solo demuestran hechos ocurridos después de la última oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, lo que acredita el único presupuesto de la causal del numeral 3, sino que permitirán dilucidar precisamente el recurso de apelación interpuesto por el suscrito apoderado de la parte demandante el que principalmente versa sobre la reforma de las consecuencias de las nulidades determinadas en la sentencia del 7 de junio de 2023, en aras de una verdadera justicia efectiva como lo ordena la constitución. Mantener la negativa del decreto de pruebas constituye precisamente una limitación al derecho de defensa de mi representada, ya que sin esas pruebas no será tan fácil definir los alcances de las declaratorias de nulidad absoluta que es lo que se busca con la apelación.

En efecto, pruebas como el certificado de defunción, el acta 24 de junta de socios de PRADERA GROUP S.A.S., la grabación de la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2023, apuntan a comprobar la nueva composición accionaria de dicha compañía y quienes son los que ahora tomarán decisiones sobre los alcances de las nulidades, que no son otros que los dos demandados que fueron encontrados responsables de violar el régimen de administradores sociales por la realización de

actos de conflicto de intereses, los señores LUIS BERNARDO y OMAR DIONISIO CARDENAS CASTELBLANCO.

Y pruebas como los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 de PRADERA GROUP S.A.S. y el informe de derecho de inspección del 29 de marzo del 2023, se dirigen a probar hechos económicos directamente relacionados con las consecuencias de las nulidades, como los valores que la referida sociedad haya pagado o aún adeude a quienes hicieron parte de los distintos contratos y actos jurídicos declarados nulos por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá.

Ahora bien, tampoco es cierto, como lo sostuvo el magistrado sustanciador, que no se hubiese presentado la causal del numeral 4 del artículo 327, pues no cabe duda alguna que los documentos que se piden como prueba, claramente no podían aportarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito porque los hechos generadores de los mismos no se habían producido. Es el caso del certificado de defunción de MARTHA OMAIRA CASTELBLANCO DE CÁRDENAS que tan solo podía emitirse cuando esta hubiere fallecido; los estados financieros tan solo se podían hacer al cierre del ejercicio contable del 2022 porque así lo ordenan las normas contables; la asamblea ordinaria de accionistas tan solo se podía efectuar en marzo del 2023, y por ende los documentos que dan cuenta de ella como la grabación y el acta 24 solo se producirían cuando dicha reunión efectivamente se hubiere realizado; y el informe de derecho de inspección solo podía generarse cuando se hubiese dado el plazo legal o estatutaria para que la accionista demandante hubiere ejercido el derecho de inspección. Claramente existió fuerza mayor que imposibilitaba que en la primera instancia en las oportunidades para pedir pruebas se hubieren presentado los documentos que ahora se piden en la segunda.

III. PETICION

Solicito al magistrado que conozca del presente recurso de súplica, que revoque lo decidido en el auto del 5 de septiembre de 2023, para en su lugar acceder al decreto y práctica de las pruebas solicitadas en correo del 25 de agosto de 2023.

Atentamente,

ANDRÉS ALEJANDRO DÍAZ HUERTAS
C.C. 80.017.345 de Bogotá.
T.P. 122336 del C.S.J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ RV: Recurso de súplica contra auto del 5 de septiembre de 2023 - PROCESO verbal. - Radicado No. 002201900288 04

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 08/09/2023 16:59

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (125 KB)

RECURSO DE SÚPLICA CONTRA AUTO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 QUE NEGÓ LA PRÁCTICA DE PRUEBAS.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: adiaz@dhalegal.com <adiaz@dhalegal.com>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 16:56
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: 'Andrés Díaz' <adiaz@dhalegal.com>
Asunto: Recurso de súplica contra auto del 5 de septiembre de 2023 - PROCESO verbal. - Radicado No. 002201900288 04

Bogotá D.C., septiembre 8 de 2023

DOCTOR
MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
E.S.D.

REFERENCIA: Recurso de súplica contra el auto del 5 de septiembre de 2023 notificado en estado del 6 de septiembre de 2023

PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04

DEMANDANTE: MARTHA OMAIRA CÁRDENAS CASTELBLANCO
DEMANDADOS: INVERSIONES CARI S.A.S., PRADERA GROUP S.A.S., LUIS BERNARDO CARDENAS CASTELBLANCO, OMAR DIONISIO CARDENAS CASTELBLANCO Y OTROS

En mi calidad de apoderado de la parte demandante en el proceso antes identificado adjunto memorial del asunto para el trámite pertinente.

Cordialmente,



ANDRÉS ALEJANDRO DÍAZ HUERTAS
C.C. 80.017.345 de Bogotá.
T.P. 122336 del C.S.J.

www.dhalegal.com
https://www.facebook.com/dhalegal
https://twitter.com/home

Bogotá D.C., septiembre 8 de 2023

DOCTOR
MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
SALA CIVIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
E.S.D.

REFERENCIA: Recurso de súplica contra el auto del 5 de septiembre de 2023 notificado en estado del 6 de septiembre de 2023

PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04

DEMANDANTE: MARTHA OMAIRA CÁRDENAS CASTELBLANCO
DEMANDADOS: INVERSIONES CARI S.A.S., PRADERA GROUP S.A.S., LUIS BERNARDO CARDENAS CASTELBLANCO, OMAR DIONISIO CARDENAS CASTELBLANCO Y OTROS

ANDRÉS ALEJANDRO DÍAZ HUERTAS, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado judicial de la parte demandante en el proceso arriba identificado, con fundamento en el artículo 331 del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral 3 del artículo 321 del mismo Código, interpongo recurso de súplica contra el auto del 5 de septiembre de 2023, notificado el 6 de septiembre del mismo año, por el cual negó el decreto y la práctica de pruebas en segunda instancia.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

I. SOBRE LA SUPUESTA FALTA DE APORTACIÓN DE LAS PRUEBAS PEDIDAS

El magistrado sustanciador afirmó en la parte final del auto impugnado lo siguiente:

“Resta decir que la parte interesada tampoco allegó los documentos que solicitó, ni copia de la solicitud que debió plantear a quienes los tienen, como lo exigen los artículos 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del CGP. Por esta otra razón, tampoco es viable el decreto de pruebas”.

No le asiste razón al magistrado en esta afirmación, por cuanto si se revisa la bandeja de entrada del correo electrónico de la Secretaría de la Sala Civil del tribunal de Bogotá, se podrá constatar que el día 25 de agosto de 2023 el suscrito apoderado remitió dos correos electrónicos así:

1. Correo electrónico del 25 de agosto a las 10:25 a.m. cuyo asunto fue “Solicitud práctica de pruebas en segunda instancia - PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04”, y cuyo destinatario fue la cuenta de correo

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Con este correo iban seis (6) archivos adjuntos, uno con la solicitud de pruebas, y otros cinco (5) con las distintas pruebas que se solicitó fueran decretadas, y en el cuerpo del correo con un enlace de Google Drive que dirigía a la prueba de la grabación de la reunión ordinaria de asamblea de accionistas de PRADERA GROUP S.A.S. del 28 de marzo del año 2023.

2. Correo electrónico del 25 de agosto a las 10:33 a.m. cuyo asunto fue "RV: Solicitud práctica de pruebas en segunda instancia - PROCESO verbal. – Radicado No. 002201900288 04", y cuyos destinatarios fueron los siguientes correos de las demás partes en el proceso Uberfle@gmail.com; rubencalixto59@gmail.com; cardenaslacou@gmail.com; luisb731@hotmail.com; lualcari94@hotmail.com; hotelganadero.gaitan@hotmail.com; mango1324@yahoo.es; mccltica@hotmail.com; flore0812@gmail.com; con copia del correo a la dirección electrónica de la Secretaría del Tribunal secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Este segundo correo, remitido ocho (8) minutos después que el primero, solo llevaba como adjunto la solicitud de pruebas, y fue simplemente un reenvío del primer correo para cumplir con el deber de poner en conocimiento de las demás partes del proceso el memorial de solicitud de pruebas.

Como se puede corroborar directamente en la bandeja de entrada del correo electrónico de la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, y en el correo del 25 de agosto de 2023 a las 10:25 que reenvío en seguida de la presentación de este recurso, es claro que sí se aportaron las pruebas solicitadas en segunda instancia, contrario a lo aseverado por el magistrado sustanciador en su auto del 5 de septiembre de 2023, razón por la cual dicha afirmación no puede servir de argumento para negar las pruebas pedidas.

Es más, solicito al magistrado en turno a quien corresponda resolver el presente recurso de súplica, que revise y tenga en cuenta las pruebas allegadas con el correo del 25 de agosto a las 10:25 a.m., pues del análisis de las mismas podrá constatar la prosedencia, pertinencia y conducencia de su decreto por configurarse las causales de los numerales 3 y 4 del artículo 327 del Código General del Proceso.

II. SOBRE LA NO CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

A este respecto dijo el magistrado en el auto aquí recurrido:

"Como no se configura ninguna de las hipótesis previstas en los numerales 3º y 4º de artículo 327 del C.G.P., se niegan las pruebas pedidas por la parte demandante. En efecto, la misma petición reconoce que se trata de medios probatorios vinculados al cumplimiento de las decisiones adoptadas en la sentencia apelada, lo que descarta que su propósito sea probar hechos sobrevinientes o de documentos que

no pudieron aportarse en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria".

Para dilucidar si le asiste razón o no al magistrado para negar las pruebas solicitadas, es preciso recordar lo qué establecen los numerales 3 y 4 del artículo 327 del Código General del Proceso, a saber:

"3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.

4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria".

Si se analiza rigurosamente la causal del numeral 3 antes transcrita, se puede concluir que la misma simplemente se refiere a que las pruebas solicitadas en segunda instancia, se dirijan a demostrar hechos ocurridos después de la última oportunidad probatoria que se tuvo en la primera instancia para pedir pruebas. La causal no dice que esos hechos deban tener o no relación con lo decidido en el fallo de primera instancia, es decir, no prohíbe que las pruebas que se soliciten se encaminen a acreditar hechos que guarden relación directa con las decisiones adoptadas por el ad quo.

Al no establecer la norma tal prohibición, es claro que las pruebas que se pidan en segunda instancia pueden estar llamadas a demostrar hechos relativos a las consecuencias que se deriven del fallo impugnado en apelación.

Es así como en el caso bajo estudio, las pruebas que se piden no solo demuestran hechos ocurridos después de la última oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, lo que acredita el único presupuesto de la causal del numeral 3, sino que permitirán dilucidar precisamente el recurso de apelación interpuesto por el suscrito apoderado de la parte demandante el que principalmente versa sobre la reforma de las consecuencias de las nulidades determinadas en la sentencia del 7 de junio de 2023, en aras de una verdadera justicia efectiva como lo ordena la constitución. Mantener la negativa del decreto de pruebas constituye precisamente una limitación al derecho de defensa de mi representada, ya que sin esas pruebas no será tan fácil definir los alcances de las declaratorias de nulidad absoluta que es lo que se busca con la apelación.

En efecto, pruebas como el certificado de defunción, el acta 24 de junta de socios de PRADERA GROUP S.A.S., la grabación de la reunión ordinaria del 30 de marzo de 2023, apuntan a comprobar la nueva composición accionaria de dicha compañía y quienes son los que ahora tomarán decisiones sobre los alcances de las nulidades, que no son otros que los dos demandados que fueron encontrados responsables de violar el régimen de administradores sociales por la realización de

actos de conflicto de intereses, los señores LUIS BERNARDO y OMAR DIONISIO CARDENAS CASTELBLANCO.

Y pruebas como los estados financieros a 31 de diciembre de 2022 de PRADERA GROUP S.A.S. y el informe de derecho de inspección del 29 de marzo del 2023, se dirigen a probar hechos económicos directamente relacionados con las consecuencias de las nulidades, como los valores que la referida sociedad haya pagado o aún adeude a quienes hicieron parte de los distintos contratos y actos jurídicos declarados nulos por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá.

Ahora bien, tampoco es cierto, como lo sostuvo el magistrado sustanciador, que no se hubiese presentado la causal del numeral 4 del artículo 327, pues no cabe duda alguna que los documentos que se piden como prueba, claramente no podían aportarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito porque los hechos generadores de los mismos no se habían producido. Es el caso del certificado de defunción de MARTHA OMAIRA CASTELBLANCO DE CÁRDENAS que tan solo podía emitirse cuando esta hubiere fallecido; los estados financieros tan solo se podían hacer al cierre del ejercicio contable del 2022 porque así lo ordenan las normas contables; la asamblea ordinaria de accionistas tan solo se podía efectuar en marzo del 2023, y por ende los documentos que dan cuenta de ella como la grabación y el acta 24 solo se producirían cuando dicha reunión efectivamente se hubiere realizado; y el informe de derecho de inspección solo podía generarse cuando se hubiese dado el plazo legal o estatutaria para que la accionista demandante hubiere ejercido el derecho de inspección. Claramente existió fuerza mayor que imposibilitaba que en la primera instancia en las oportunidades para pedir pruebas se hubieren presentado los documentos que ahora se piden en la segunda.

III. PETICION

Solicito al magistrado que conozca del presente recurso de súplica, que revoque lo decidido en el auto del 5 de septiembre de 2023, para en su lugar acceder al decreto y práctica de las pruebas solicitadas en correo del 25 de agosto de 2023.

Atentamente,

ANDRÉS ALEJANDRO DÍAZ HUERTAS
C.C. 80.017.345 de Bogotá.
T.P. 122336 del C.S.J.

MEMORIAL PARA REAGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ RV: Recurso de reposición y apelación. PROCESO EJECUTIVO No. 11001-3103-003-2019-0629-01

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 10:32

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

5 archivos adjuntos (1 MB)

Reposición auto que declara desierto.pdf; Apelación sentencia.pdf; Gmail - Apelación auto que ordena seguir adelante - Ejecutivo No. 2019-0629.pdf; liquidacion factura mesfix.pdf; 12Feb2020 - Reporte en centrales Mesfix .pdf;

MEMORIAL PARA REAGISTRAR DR ALVAREZ GOMEZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Milena Ayala <mayala.trabajo@gmail.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 10:13
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Asociación Provivienda de Chía <proviviendachia@gmail.com>; Gerencia Baku <gerencia@bakuai.co>; juanmi.franco1099@gmail.com <juanmi.franco1099@gmail.com>
Asunto: Recurso de reposición y apelación. PROCESO EJECUTIVO No. 11001-3103-003-2019-0629-01

Honorable Magistrado
JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado Sustanciador
Sala de Decisión Civil
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
E.S.D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO No. 11001-3103-003-**2019-0629**-01
DTES: DAVID OSWALDO ROJAS CONCHA Y OTROS
DDO: ASOCIACIÓN PROVIVIENDA Y OTRO

Cordial saludo.

En mi calidad de apoderada de los demandados, allego con la presente recurso de reposición y en subsidio, apelación en contra del auto que declara desierto el recurso de apelación , proferido por su despacho el pasado 6 de septiembre de 2023, junto con sus anexos.

Del señor juez,

Atentamente,

Libia Milena Ayala Royero
C.C. No. 52.533.992 de Bogotá
T.P. No. 117. 546 del C.S. de la J.

Honorable Magistrado
JAIME CHAVARRO MAHECHA
Magistrado Sustanciador
Sala de Decisión Civil
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
E.S.D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO No. 11001-3103-003-**2019-0629**-01
DTES: DAVID OSWALDO ROJAS CONCHA Y OTROS
DDO: ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS No. 2 DE CHÍA

LIBIA MILENA AYALA ROYERO, también mayor de edad y residente en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.533.992 de Bogotá, abogada en ejercicio con tarjeta profesional No. 117.546 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando conforme al poder a mí conferido por el ingeniero **CARLOS ALBERTO MUÑOZ CARVAJAL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.798 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad **BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.**, identificada con NIT 900.523.990-6 y por la señora **NAZARETH OCHOA**, mayor de edad, domiciliada y residente en el municipio de Chía (Cundinamarca), identificada con cédula de ciudadanía No. 41.696.362, en mi calidad de representante legal de la **ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS No. 2 DE CHÍA**, identificada con NIT 832.007.289-1, por medio del presente escrito y estando dentro del término conferido por su despacho, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN en contra del auto que DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA proferido por su despacho dentro del proceso de la referencia el 6 de septiembre de 2023, con fundamento en lo siguiente:

1. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Su despacho funda la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, en que la suscrita no descorrió el traslado contenido en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 dentro de los 5 días siguientes al auto de fecha 5 de junio de 2023 mediante el cual se admitió el recurso de apelación.

No obstante lo anterior, estando en término para ello, la suscrita interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el a quo el pasado 16 de septiembre de 2022, presentando junto con el recurso la sustentación correspondiente y anexando las pruebas en las cuales se soportó el mismo. Debido a la oportunidad en que se interpuso, el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá concedió el citado recurso y lo remitió oportunamente al Tribuna Superior de Bogotá Sala Civil.

El 5 de junio de 2023, el Magistrado de conocimiento admitió la apelación y la suscrita efectivamente no descorrió el traslado como quiera que las razones y pruebas en que se fundó habían sido expuestas en detalle y anexadas en el escrito de apelación, mediante correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2022, tal como lo prueban los documentos anexos.

Como quiera que el numeral 1 del artículo 322 del Código General del Proceso establece:

> ***"ARTÍCULO 322. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS.*** *El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas:*
>
> *1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos.*
>
> *La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado (…).*
>
> *Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su*

finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado". (subrayado fuera de texto)

Así las cosas, las razones de la inconformidad fueron clara y suficientemente expresadas en el recurso interpuesto, por tal razón el juez de primera instancia lo admitió y le dio trámite, por tanto, y estando dicho documento junto con sus anexos en el expediente, se hacía innecesario volver a presentar el mismo escrito detallando las razones de la inconformidad, ya que el requisito exigido por la norma citada fue satisfecho mediante el recurso interpuesto en debida forma y oportunidad el pasado 16 de septiembre de 2022.

Afirma la norma que el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso contra una sentencia que no se hubiera sustentado, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues se encuentra plenamente sustentado.

2. PETICIONES

Como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho:

1. REVOCAR el auto de fecha 6 de septiembre de 2023 mediante el cual se declara desierto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juez 3º Civil del Circuito de Bogotá.

2. Y en su lugar, RESOLVER de fondo el recurso de apelación interpuesto en oportuna y debida forma.

3. PRUEBAS Y ANEXOS

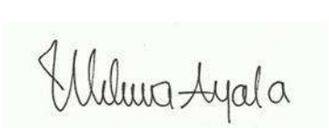
Solicito respetuosamente a su despacho, tener como pruebas las allegadas al proceso con el recurso de reposición al mandamiento de pago, con la contestación de la demanda dentro del presente proceso y las siguientes:

- Correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2022 radicado ante el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá.
- Escrito de recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.
- Comunicación de fecha 12 de febrero de 2022 expedido por los demandantes.
- Liquidación expedida por Mesfix el 15 de mayo de 2018.

Agradezco su atención y colaboración.

Del señor juez,

Atentamente,



LIBIA MILENA AYALA ROYERO
C. C. No.52.533.992 de Bogotá
T. P. No.117.546 C. S. de la J.

Señor
JUEZ 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E.S.D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO No. 2019-0629
DTES: DAVID OSWALDO ROJAS CONCHA Y OTROS
DDO: ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS No. 2 DE CHÍA

LIBIA MILENA AYALA ROYERO, también mayor de edad y residente en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.533.992 de Bogotá, abogada en ejercicio con tarjeta profesional No. 117.546 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando conforme al poder a mí conferido por el ingeniero **CARLOS ALBERTO MUÑOZ CARVAJAL**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.778.798 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad **BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.**, identificada con NIT 900.523.990-6 y por la señora **NAZARETH OCHOA**, mayor de edad, domiciliada y residente en el municipio de Chía (Cundinamarca), identificada con cédula de ciudadanía No. 41.696.362, en mi calidad de representante legal de la **ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS No. 2 DE CHÍA**, identificada con NIT 832.007.289-1, por medio del presente escrito y estando dentro del término conferido por su despacho, me permito APELAR EL AUTO QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN proferido por su despacho dentro del proceso de la referencia el 12 de septiembre de 2022, con fundamento en lo siguiente:

1. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Al parecer de la suscrita, el juez de primera instancia yerra en la apreciación de las pruebas y en las consideraciones en que fundamenta su auto que ordena seguir adelante con la ejecución, debido a una interpretación errónea de los fundamentos de hecho y de las excepciones formuladas por la suscrita, lo que constituye una vía de hecho, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que textualmente ha afirmado:

> *"Las "vías de hecho" implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela".* (Corte Constitucional Fallo de tutela T-518 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)

Paso a explicar a continuación los yerros cometidos por el a quo en la apreciación probatoria y en las consideraciones del fallo proferido:

1.1. Frente a la excepción a la acción cambiaria fundada en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente (artículo 784 No. 4 C.Co.)

Se fundó la citada excepción en el artículo 774 del Código de Comercio, que reza textualmente:

> ***"Artículo 774. Requisitos de la factura.*** *La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes(…):*
>
> *3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.*
>
> *No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.*
>
> *En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada.*

Calle 12 B No. 9 – 13 Oficina 205
Email: mayala.trabajo@gmail.com
Teléfono 3123502041
Bogotá D. C., Colombia

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas". (subrayado fuera de texto)

Derivando la excepción en el hecho de que la factura base de la presente acción no cuenta con la constancia del estado de pago del precio y por tanto, no cumple con la totalidad de los requisitos que la ley le exige.

Al respecto, el a quo desestima la presente excepción con fundamento en que la factura ya había sido aceptada por la ASOCIACIÓN mediante comunicación obrante a folios 46 y 47 de fecha 18 de mayo de 2018 y que no se había reclamado sobre su contenido dentro de los 3 días siguientes a su recepción.

Así mismo, vale aclarar que en su momento no se atacó el título por considerar que correspondía a la realidad del momento, ya que a la fecha de firma del documento (tal como el despacho lo reconoce) el título valor no se había vencido y los abonos no se habían realizado aún. Sin embargo, una vez fue notificada la demanda, los demandados atacaron la literalidad del título precisamente con la misma excepción, mediante recurso de reposición al mandamiento de pago, siendo éste el medio idóneo para hacerlo.

Unido a lo anterior, afirma el despacho que a la fecha de vencimiento de la obligación contenida en la factura demandada (1 de julio de 2018) no se habían realizado los abonos y por ello, no era posible dejar constancia en el texto de la factura, lo que se considera una aseveración equivocada, toda vez que el título original reposa aún hasta la fecha en cabeza de los demandantes y particularmente de la sociedad por intermedio de la cual se realizó la operación de factoring. Esto implica que entre el vencimiento de la factura (1 de julio de 2018) y la fecha de interposición de la demanda (19 de septiembre de 2019) ya se había realizado la totalidad de los abonos al pago de la obligación reconocidos por los demandantes y por su despacho, y por tanto, los mismos debían haber sido incorporados en el cuerpo del título, tal como lo ordena la norma citada. Es errado afirmar que solo debían haberse incluido los abonos realizados hasta el vencimiento de la factura, ya que el legislador no lo restringe en el tiempo, pero si hubiera una fecha límite para hacerlo, sería evidentemente la de la interposición de la demanda, es decir, que se sobreentendería que solo deben estar incluidos en el texto de la factura los abonos realizados hasta esa fecha y el fundamento de ello está precisamente en las atribuciones de literalidad y autonomía del título.

Más gravoso aún es el hecho de que los demandantes por intermedio de su apoderado, hayan omitido al momento de demandar indicar en la demanda además de los abonos realizados, el hecho de que el valor realmente aprobado a la sociedad BAKU AI S.A.S. como resultado de la operación de factoring aceptada por la ASOCIACIÓN demandada fue la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($291.447.416), tal como consta en el documento que obra a folios 46 y 47 y de los cuales, una vez realizados los descuentos propios de la operación de factoring, se convirtieron en un desembolso real por valor de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($210.180.066). Lo cual no fue tenido en cuenta por el a quo al momento de fallar y al denegar la citada excepción, a pesar de haberse aprobado las pruebas que lo demuestran.

También existe un reconocimiento expreso de los demandantes al reconocer y allegar al expediente el reconocimiento de los abonos, pero **únicamente** al momento del traslado de las excepciones de mérito y no con la demanda, como debió haber ocurrido.

En consecuencia de lo anterior, es errónea la negativa de la excepción a la acción cambiaria **fundada en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente**.

1.2. Frente a la excepción a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo.

Al parecer de la suscrita, yerra el a quo en la descalificación de la presente excepción a la acción cambiaria toda vez que le da el tratamiento de un endoso simple de la factura, más no tiene en cuenta que el negocio jurídico que dio origen al título que se ejecuta por medio de la presente acción es una operación de factoring, tal como se describe en el documento de aceptación de la misma que obra a folios 46 y 47, en el cual se detalla que la ASOCIACIÓN acepta los servicios prestados por BAKU AI, así como acepta el contenido de la factura y se obliga al pago a MESFIX S.A. del valor neto de la misma, cual es la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($291.447.416), ya que en el mismo documento se describen los conceptos que no son exigibles en la factura de acuerdo con el contrato de obra que dio origen inicialmente a la expedición de la factura, que a su vez fue negociada en operación de factoring.

Tal como se detalla en la comunicación obrante a folios 46 y 47, el valor de la Factura No. 100 es la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($447.348.297,54), pero de la misma se descuentan algunos cargos propios, tales como el IVA ($2.930.902,65), la RETENCIÓN EN LA FUENTE ($1.234.064,26) y OTRAS RETENCIONES, correspondientes para el caso en la amortización del anticipo y a la retegarantía pactados con la sociedad BAKU por razón del contrato de obra celebrado entre las partes ($157.597.720,06). Así las cosas, aplicándose los descuentos citados al valor bruto de la factura, la intermediaria para la operación de factoring MESFIX S.A. declara que el valor neto de la factura negociada es la suma de $291.447.416 y esta es la suma base de la operación de factoring.

En las consideraciones del fallo emitido por el a quo se evidencia que el argumento para desestimar esta excepción es el hecho de que la ASOCIACIÓN haya aceptado el contenido de la factura mediante el documento obrante a folios 46 y 47, mas de acuerdo con lo explicado en la contestación y en el presente, es claro que la ASOCIACIÓN acepta el valor bruto de la factura, pero se obliga a pagar el valor neto que sirve como base para la operación de factoring y ese es precisamente el sentido y la intención de MESFIX S.A. al poner de presente en dicha comunicación los valores de la factura debidamente discriminados.

Es claro que las operaciones de factoring no son comunes en nuestro sistema jurídico y pueden generar confusión, por ello y tal vez para dar mayor claridad a su despacho de lo que se pretendió explicar en la contestación y se reitera en el presente recurso, allego liquidación realizada por la sociedad MESFIX S.A. en la que se detallan los valores de la operación de factoring y porqué en ningún momento la sociedad desembolsó a favor de BAKU AI S.A.S. el valor bruto de la factura e incluso, ni siquiera el valor neto reconocido por la ASOCIACIÓN, sino la suma de $210.236.449, ya que al valor neto se le realizaron los descuentos propios y anticipados de la operación de factoring (comisiones, devoluciones, 4 x 1000, costo financiero, etc) únicamente el valor que se reporta y fue recibido mediante transferencia en la cuenta del Banco de Bogotá, cuyo extracto se aportó como prueba con la contestación.

Así las cosas, es claro que el negocio jurídico que dio lugar a la presente acción es una operación de factoring y no un endoso simple de una factura, por tanto, si bien sigue existiendo el atributo de la literalidad en el título, es imprescindible que la misma contenga el estado del pago, ya que en ninguna operación de factoring se desembolsa al beneficiario el valor bruto de la factura, sino las sumas verdaderamente cobrables menos los descuentos propios y anticipados de la operación.

Y en el presente asunto, aunque el despacho no se detuvo al análisis de ello, vale aclarar que la presente excepción se presenta en contra de los demandantes, quienes actúan como inversionistas dentro de la operación de factoring y por tanto, tienen pleno conocimiento de lo que aquí se alega, ya que conocen a la perfección el tipo de inversión que realizan por intermedio del operador MESFIX.

1.3. Frente a la excepción de cobro de lo no debido

La formulación de la excepción es clara en afirmar que los demandantes cobran lo no debido porque formulan las pretensiones de la demanda por valor de $450.279.200, cuando son plenamente conscientes de que el verdadero valor que estaban obligados a pagar los demandados con cargo a la Factura No. 100 era la suma de $210.236.449, por las razones que ya se expusieron, ya que corresponde al valor neto de la factura menos los descuentos propios de la operación de factoring, y fue la suma realmente desembolsada por MESFIX como fruto de dicha operación el 30 de mayo de 2018, tal como se prueba con el extracto que obra en el expediente.

Así las cosas, es claramente imprecisa la afirmación que realiza el a quo al considerar que la suscrita fundaba la excepción de cobro de lo no debido en un supuesto abono realizado por los deudores por valor de $210.236.449 que no fue probado, cuando la formulación de la excepción desestimada no lo menciona de ninguna manera, más aún cuando el mismo despacho en el párrafo 12 de las mismas consideraciones afirma que lo alegado por la suscrita es que el valor de las pretensiones debería corresponder con el valor efectivamente desembolsado por MESFIX y no por el valor bruto de la factura.

Este error craso en la apreciación de las pruebas y en el contenido de la excepción propuesta que resulta desestimándola, le ocasiona un grave e irremediable perjuicio a mis poderdantes, toda vez que la consecuencia de ello es que la sentencia los condena de forma definitiva al pago de una suma de dinero muy superior a la realmente adeudada.

De hecho, la actuación de los demandantes al reportar a su despacho los abonos realizados, solo al momento del traslado de las excepciones de mérito, ya es prueba suficiente de que al momento de interponer la demanda se estaba cobrando lo no debido, pues debían haberse reportado los abonos en el cuerpo de la factura y haberse reconocido en el escrito demandatorio. Por este simple hecho y unido a los argumentos ampliamente expuestos, es claro que yerra gravemente el a quo al desestimar la presente excepción.

1.4. Frente a las excepciones de temeridad y mala fe.

Tal como se detalló en la formulación de la excepción, es claro que los demandantes iniciaron la presente acción alegando hechos contrarios a la realidad, tal como lo establece el artículo 79 del Código General del Proceso, pues por una parte está ejecutando la factura por su valor bruto sin tener en cuenta el negocio jurídico que le dio origen, los descuentos propios de la operación de factoring y sin indicar los abonos que los deudores han hecho al pago de la deuda.

Así las cosas y como quiera que se encuentran probados los hechos temerarios y de mala fe adelantados por el accionante y corroborados con su reconocimiento posterior de los abonos realizados, procedía la declaratoria de prosperidad de la excepción propuesta junto con las consecuencias que de ella se derivan.

Como consecuencia de lo anterior, reitero mi solicitud de denegar las pretensiones de la presente acción.

PRUEBAS Y ANEXOS

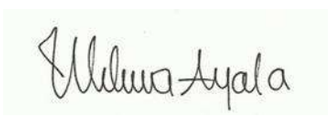
Solicito respetuosamente a su despacho, tener como pruebas las allegadas al proceso con el recurso de reposición al mandamiento de pago, con la contestación de la demanda dentro del presente proceso y las siguientes:

- Liquidación realizada por MESFIX en mayo de 2018 exponiendo el detalle de la operación de factoring.
- Carta de MESFIX a la ASOCIACIÓN PROVIVIENDA con fecha 12 de febrero de 2020 en donde reporta la realidad de la deuda a la fecha.

Agradezco su atención y colaboración.

Del señor juez,

Atentamente,



LIBIA MILENA AYALA ROYERO
C. C. No.52.533.992 de Bogotá
T. P. No.117.546 C. S. de la J.

Gmail **Milena Ayala <mayala.trabajo@gmail.com>**

Apelación auto que ordena seguir adelante - Ejecutivo No. 2019-0629

2 mensajes

Milena Ayala <mayala.trabajo@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 8:17
Para: j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cc: Asociación Provivienda de Chía <proviviendachia@gmail.com>, Gerencia Baku <gerencia@bakuai.co>, juanmi.franco1099@gmail.com

Señor
Juez Tercero Civil del Circuito de Bogotá D.C.
E. S. D.

Demandante: DAVID OSWALDO ROJAS CONCHOA Y OTROS
Demandado: BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. Y OTROS
Referencia: Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía
Radicado: 2019 - 00629

Cordial saludo.

En mi calidad de apoderada de los demandados, allego con la presente recurso de apelación en contra del auto que ordena seguir adelante con la ejecución, proferido por su despacho el pasado 12 de septiembre de 2022.

Del señor juez,

Atentamente,

Libia Milena Ayala Royero
C.C. No. 52.533.992 de Bogotá
T.P. No. 117. 546 del C.S. de la J.

3 adjuntos

Apelación sentencia.pdf
543K

liquidacion factura mesfix.pdf
48K

12Feb2020 - Reporte en centrales Mesfix .pdf
497K

Milena Ayala <mayala.trabajo@gmail.com> 8 de septiembre de 2023, 12:28
Para: Milena Ayala <mayala.trabajo@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Milena Ayala** <mayala.trabajo@gmail.com>
Fecha: El vie, 16 de sep. de 2022 a la(s) 8:17 a.m.
Asunto: Apelación auto que ordena seguir adelante - Ejecutivo No. 2019-0629
Para: <j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Asociación Provivienda de Chía <proviviendachia@gmail.com>, Gerencia Baku <gerencia@bakuai.co>, <juanmi.franco1099@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Apelación sentencia.pdf
543K

liquidacion factura mesfix.pdf
48K

12Feb2020 - Reporte en centrales Mesfix .pdf
497K

LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS
NIT	NI900523990
BANCO	BOGOTA
CUENTA	337017412
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
TELEFONO	, 7425962
EMAIL	GERENCIA@BAKUAI.CO
NOMBRE CONTACTO	CARLOS ALBERTO MUÑOZ CARVAJAL
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN DEL PAGADOR

RAZON SOCIAL	ASOCIACION PROVIVIENDA CENTRO DE
NIT	NI832007289-1
DIRECCION	CR10A #3-56
TELEFONO	, 8638060
EMAIL	proviviendachia@gmail.com
NOMBRE CONTACTO	NAZARETH OCHOA
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN DE PLATAFORMA

NUMERO SUBASTA	575

*Los valores mostrados son aproximados, podrán cambiar según las fechas de pago de la operación, las condiciones de mercado y/o el comportamiento de pago de la relación comercial.

INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN*

VALOR NETO DE LA OPERACIÓN	$291,447,416
FECHA DESEMBOLSO APROX	15-May-18
FECHA PROPUESTA PAGO	5-Sep-18
DIAS DE LA OPERACIÓN	113
PORCENTAJE DE ANTICIPO	75%

ANTICIPO BRUTO A EMISOR	$218,585,562
	DEDUCCIONES
COMISIÓN DE CORRETAJE	$5,828,948
IVA COMISIÓN DE CORRETAJE	$1,107,500
PAYU (IVA incluido)	$17,850
THOMAS GREG MTI (IVA incluido)	$32,912
PTG ABOGADOS (IVA incluido)	$19,338
4X1000 ANTICIPO	$874,342
4X1000 PAGO	$1,165,790
DEVOLUCIÓN RETENCIÓN FUENTE 11%	-$641,184
DEVOLUCIÓN RETENCIÓN ICA 9.66x1000	$0
ANTICIPO NETO A EMISOR	$210,180,066
SALDO BRUTO	$72,861,854
	DEDUCCIONES
COSTO FINANCIERO APROX* (Descuento Comercial)	$18,171,139
SALDO NETO (Garantía al pago)	$54,690,715
TOTAL	$291,447,416

DESCUENTO REGULAR		DESCUENTO MORA	
MV	EA	MV	EA
2.34%	32.05%	2.20%	29.80%

Bogotá, febrero 12 de 2020

Señores,

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS NO. 2 DE CHÍA
NIT 832007289-1
Atn: NAZARETH OCHOA - Representante Legal
Carrera 10A # 3-56
CHÍA

REF: Reporte negativo a cargo de ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS NO. 2 DE CHÍA

Nos permitimos comunicarles que se encuentran en mora frente a las obligaciones adquiridas a través de MERCADO DE RECURSOS FINANCIEROS MESFIX S.A.S. y PTG ABOGADOS S.A.S. en virtud del incumplimiento en el pago de las **facturas No. 100,** por ustedes aceptadas y negociadas a través de la Plataforma MFX, toda vez que la fecha de vencimiento que **fue el día 5 de Septiembre de 2018**, fecha en la cual ustedes debieron haber pagado la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS **M/CTE ($291.447.416,oo).** y del cual solo se ha recibido un abono parcial por lo cual relacionamos el detalle del saldo pendiente por cancelar a la fecha:

SUB	PAGADOR	FACTURAS	FECHA DE PAGO EST	MORA	VALOR	ABONO	SALDO
575	ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CENTRO DE INQUILINOS N° 2 DE CHÍA	100	09/05/18	625	$291.447.416	$126.100.000	$165.347.416

En atención a lo anterior, y con base en la autorización por ustedes otorgada el día 16 de Mayo de 2018, de manera previa a la negociación de la factura de la referencia, procederemos a registrar en la Base de Datos de **DATACRÉDITO** unidad de Negocio de Experian Colombia S.A.S. la Información Negativa que refleja el estado actual de su obligación en mora, dentro de los **VEINTE (20)** días calendario siguientes al envío de la presente comunicación.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, le solicitamos ponerse al día y pagar sus obligaciones de manera inmediata o aportar constancia de este dentro del término con el fin de evitar el referido reporte en DATACRÉDITO.

Esta comunicación se genera con la finalidad expresada en el mismo artículo 12 de la mencionada Ley, es decir, con el fin de que usted pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación y la fecha de exigibilidad.

Atentamente,

FELIPE TASCON

Felipe Tascón Ortiz
Representante Legal MESFIX S.A.S.
NIT. 900.7211.870-1

Scanned by CamScanner

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA RODRIGUEZ ESLAVA RV: BERKLEY / SEGURIDAD MODERNA / 11001319900320220450201 / RECURSO DE REPOSICIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 13/09/2023 12:36

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (219 KB)
0913_Recurso_Reposición_agz_ASG.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA RODRIGUEZ ESLAVA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Arturo Sanabria Gomez <asanabria@sanabriagomez.com>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 12:16
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Notificaciones Judiciales SGA <notificacionesjudiciales@sanabriagomez.com>; juridico.hgomez@gmail.com <juridico.hgomez@gmail.com>; grupocompiles@grupocompiles.com <grupocompiles@grupocompiles.com>; gerencia@seguridadmoderna.com <gerencia@seguridadmoderna.com>; contable@miroal.com <contable@miroal.com>
Asunto: BERKLEY / SEGURIDAD MODERNA / 11001319900320220450201 / RECURSO DE REPOSICIÓN

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Dra. SANDRA CECILIA RODRIGUEZ ESLAVA

REFERENCIA:	**PROCESO DECLARATIVO VERBAL**
DEMANDANTE:	**SEGURIDAD MODERNA COLOMBIANA LTDA.**
DEMANDADOS:	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
RADICADO:	**11001319900320220450201**

ASUNTO: **RECURSO DE REPOSICIÓN**

ARTURO SANABRIA GÓMEZ, apoderado de **BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**, presento un recurso de reposición.

Arturo Sanabria Gómez
Socio

SANABRIA GÓMEZ
ABOGADOS

Calle 98 No. 9 A - 21 Oficina 303
Tel. 571 3003874
asanabria@sanabriagomez.com

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Dra. Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

DEMANDANTE:	**SEGURIDAD MODERNA COLOMBIANA LTDA.**
DEMANDADO:	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
RADICADO:	**11001319900320220450201**

ASUNTO: **RECURSO DE REPOSICIÓN**

ARTURO SANABRIA GÓMEZ, apoderado de **BERKLEY INTERNATIONAL DE SEGUROS COLOMBIA S.A.** ("**BERKLEY**"), presento recurso de reposición contra el auto del 7 de septiembre de 2023, notificado el 8 de septiembre de 2023.

SOLICITUD

Le solicito al Tribunal Superior de Bogotá (el "Tribunal") que revoque el auto del 7 de septiembre de 2023 y declare desierto el recurso de apelación de Seguridad Moderna Ltda. ("**SEGURIDAD MODERNA**").

FUNDAMENTOS

1. Inaplicabilidad del precedente

El auto del 2 de agosto de 2023, proferido por el Tribunal, dispuso que, si no existía sustentación de la apelación, el recurso sería declarado desierto. Esta

consideración no hizo más que replicar la disposición del artículo 14 de la Ley 2213 de 2022, según la cual "*el apelante **deberá** sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes (…) Si no se sustenta oportunamente el recurso, **se declarará desierto***". (Subrayo y resalto).

Pues bien, en el auto del 7 de septiembre de 2023, el Tribunal decidió no tener por desierta la apelación porque la sustentación, según el Tribunal, se había presentado en primera instancia. Como motivación, citó la Sentencia STC16147 de 2022, en la que la Corte Suprema de Justicia consideró que existía excesivo ritual manifiesto por declarar desierta una apelación que no había sido sustentada.

Este precedente es cierto y reiterado. En efecto, a pesar de constantes salvamentos de voto, existe una clara línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido que incluye, además de la citada Sentencia STC16147 de 2022, las sentencias STC10263 de 2022, STC3508 de 2022, STC9226 de 2022 y STC11186 de 2022.

Sin embargo, toda la línea jurisprudencial parte del supuesto de que, efectivamente, existió una sustentación detallada en primera instancia y que el excesivo ritual manifiesto había consistido en requerir al apelante para que presentara, otra vez, la misma sustentación:

- En la consideración nro. 3 de la Sentencia STC16147 de 2022, la Corte Suprema de Justicia explicó que no era exigible presentar una nueva sustentación "*a pesar de que había atendido esa carga ante el a quo*".

- En la consideración nro. 2 de la Sentencia STC10263 de 2022, la Corte Suprema de Justicia explicó que una sustentación sí había sido presentada después de los reparos y que el excesivo ritual manifiesto consistía en

considerar que solo podía presentarse dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la admisión.

- En la consideración nro. 5 de la Sentencia STC3508 de 2022, la Corte Suprema de Justicia explicó que sí había existido sustentación en primera instancia "*en el que explicó **detalladamente** cada una de las inconformidades por las que estimaba que debía revocarse la providencia cuestionada*". (Subrayo y resalto).

- En la consideración nro. 5 de la Sentencia STC9226 de 2022, la Corte Suprema de Justicia reiteró literalmente lo dicho en la STC3508 de 2022: "*sustentó la alzada, documento en el que explicó **detalladamente** cada una de las inconformidades por las que estimaba que debía revocarse la providencia cuestionada*". (Subrayo y resalto).

- En la consideración nro. 4 de la Sentencia STC11186 de 2022, la Corte Suprema de Justicia, otra vez, reiteró literalmente lo dicho en la STC3508 de 2022: "*sustentó la alzada, documento en el que explicó **detalladamente** cada una de las inconformidades por las que estimaba que debía revocarse la providencia cuestionada*". (Subrayo y resalto).

Igualmente, de la lectura de todas esas sentencias se puede concluir que el excesivo ritual manifiesto no fue haber declarado desierto el recurso cuando no se había sustentado, sino haber requerido al apelante para que radicara por segunda vez una sustentación que ya había presentado.

Pues bien, eso no es lo que está ocurriendo en la apelación de **SEGURIDAD MODERNA** por el simple hecho de que el documento que **SEGURIDAD MODERNA** aportó en primera instancia **no es una sustentación**.

Como bien los indica la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, la sustentación de la apelación consiste en explicar "*detalladamente*" los reparos del apelante con la sentencia en primera instancia.

Al respecto, la Sentencia SU418 de 2019 de la Corte Constitucional (citada en la Sentencia STC16147 de 2022, en la que se fundamentó el auto del 7 de septiembre de 2023), explicó que el sentido de la sustentación era evitar que el apelante "*probara suerte ante el juez superior*" y, en cambio, debiera explicar, previamente, los elementos que dieran cuenta de que la primera instancia había incurrido en error:

> *"La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada".*

El documento con la apelación de **SEGURIDAD MODERNA** obra en la carpeta de primera instancia del expediente digital con el nombre "098 Presentación Recurso". Es un documento de catorce páginas que tiene la siguiente estructura:

1. Página 1: Encabezado, datos de identificación y solicitud de que se revoque la sentencia.
2. Página 2: Oportunidad y segunda solicitud de revocación de la sentencia.
3. Páginas 2 a 4: Hechos.
4. Páginas 4 a 12: Consideraciones.
5. Página 13: Segunda reiteración de la solicitud de revocación de la sentencia.

6. Páginas 13 a 14: Notificaciones y firma.

En el acápite de "Consideraciones" (páginas 2 a 4) **SEGURIDAD MODERNA** mencionó cuatro consideraciones: **(i)** señaló que **BERKLEY** había interpretado su propia póliza de forma contraria al consumidor; **(ii)** repitió someramente que **BERKLEY** sí había pagado unos bienes hurtados y no otros; **(iii)** transcribió normas y jurisprudencia acerca de la responsabilidad civil contractual y **(iv)** transcribió normas del Código de Comercio y mencionó que **BERKLEY** debió haberlas cumplido.

En ninguna parte de ese documento se puede leer o encontrar una sola crítica a la sentencia en primera instancia.

Solo existe una reiteración de algunos argumentos ya despachados en primera instancia que, no sobra decirlo, es superficial y su extensión no se debe a una argumentación detallada de cómo la primera instancia los valoró equivocadamente, sino a una transcripción abstracta de sentencias, de normas y de doctrina, sin relevancia al caso concreto. Eso no es una sustentación.

En suma, a diferencia de los casos del precedente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de marras no existe sustentación y, por eso, el término de cinco días era esencial para que **SEGURIDAD MODERNA** explicara "*detalladamente*" sus inconformidades con la sentencia en primera instancia a la que, reitero, ni siquiera hizo mención en el documento.

Por tanto, si al documento presentado en primera instancia se le atribuye el valor de una sustentación, **SEGURIDAD MODERNA** solamente estaría, en palabras de la Corte Constitucional, "*probando suerte*" ante la segunda instancia.

2. Consideraciones adicionales

Por otra parte, es importante tener en cuenta dos hechos:

Primero, tan claro es que el documento presentado por **SEGURIDAD MODERNA** no es una sustentación que, por eso mismo, el auto admisorio el Tribunal le corrió traslado al apelante para que sustentara.

Si ese documento tenía el carácter de sustentación, el Tribunal debió haber tenido la apelación sustentada prematuramente y correrle traslado a **BERKLEY** para la oposición de inmediato. Correr traslado para radicar una sustentación ya presentada iría en contra de la economía procesal y, ahí sí, sería un excesivo ritual manifiesto, que es lo que el Tribunal intenta evitar.

Segundo, en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, todas las sentencias citadas concedieron la tutela de personas naturales en casos especialmente delicados para sus derechos fundamentales y su propiedad.

Las sentencias STC3508 de 2022 y STC9226 corresponden a procesos relativos a prescripción adquisitiva. La sentencia STC11186 de 2022 trató un proceso de simulación de compraventa de inmueble. La sentencia STC10263 de 2022 trató un proceso de una persona natural ante el Juez Promiscuo del Circuito de Saravena por una demanda de responsabilidad civil extracontractual en la que no tuvo acceso a determinadas providencias. La Sentencia STC16147 de 2022 trató un proceso ejecutivo de una empresa de servicios públicos domiciliarios contra una persona natural.

Lejos de esos hechos, **SEGURIDAD MODERNA** es una persona jurídica, está vigilada por la Superintendencia de Vigilancia, celebra frecuentemente contratos, es parte de Fenalco y de la Red de Apoyo de la Policía Nacional, como consta en la carta del 15 de julio de 2022, y está demandado a **BERKLEY** por responsabilidad civil contractual.

Por consiguiente, el grado de diligencia exigible a **SEGURIDAD MODERNA** para sustentar adecuada y oportunamente una apelación es mayor que el exigible a las personas protegidas por la línea de tutela de la Corte Suprema de Justicia.

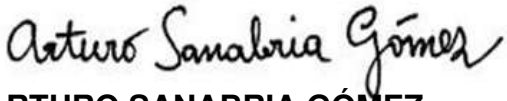
Además, **SEGURIDAD MODERNA** ha mostrado un profundo desinterés en este proceso. Cuando radiqué la solicitud de declarar desierta la apelación, copié a **SEGURIDAD MODERNA** y a su apoderado. Ellos ni siquiera descorrieron el traslado.

3. Interrupción del término de traslado

Según el cuarto inciso del artículo 118 del Código General del Proceso, "*cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, este se interrumpirá*".

El segundo resuelve del auto del 7 de septiembre de 2023 concedió el término de cinco días para la oposición a la apelación. Por tanto, este recurso interrumpe ese término y, si se niega la reposición, deberá volverse a correr traslado para la réplica.

Respetuosamente,



ARTURO SANABRIA GÓMEZ
C.C. 79.451.316 Btá.
T.P. 64454 C. S. de la J.

REPARTO QUEJA 005-2013-00011-02 DR JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 10:15 AM

Para:**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**;Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

4 archivos adjuntos (750 KB)

08ConstanciaRecepcionDecisionTribunal20230425 (1).pdf; 001AutoObedezcaseYCumplase.pdf; 11001310300520130001102.pdf; 7881.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

Rama Judicial
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO
ASIGNACION POR CONOCIMIENTO PREVIO

11001310300520130001102

FECHA DE IMPRESION 12/09/2023 PAGINA 1

GRUPO **RECURSOS DE QUEJA**

REPARTIDO AL MAGISTRADO	DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS	004	7881	12/09/2023

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	PARTE
41165136	MARIA DEL CARMEN LINARES BABATIVA	DEMANDANTE
86000621265	FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBI	DEMANDADO

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
PRESIDENTE

Elaboró: dlopezr
BOG305SR

11001310300520130001102

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS**

Procedencia : 005 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310300520130001102
Instancia : Segunda Instancia
Clase de Juicio : Verbal
Recurso : Queja
Grupo : 32
Repartido_Abonado : ABONADO
Demandante : MARIA DEL CARMEN LINARES BABATIVA
Demandado : FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS
Fecha de reparto : 12/09/2023

C U A D E R N O : 3

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 47 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j47cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 9:49
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO DE QUEJA PROCESO 05-2013-00011

Señor
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO
RADICACION: No. 11001 31 03 005 **2013 00011** 00

Por medio del presente se envía el link del proceso citado en la referencia y el oficio de remisión, con su respectiva constancia, a fin de surtir recurso de **QUEJA.**

De igual forma se adjunta el formato del índice electrónico de acuerdo a los protocolos de digitalización, todo lo anterior en el siguiente link: 11001310300520130001100

Atentamente,

Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá
Carrera 9 No. 11-45 Piso 6º Edificio Virrey Torre Central

Las notificaciones por correo electrónico son realizadas de conformidad con la el Articulo 197 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Artículo 612 del Código General del Proceso; a saber: las entidades Públicas de todos los niveles, las Privadas que cumplan Funciones Públicas y el Ministerio Público, (o directamente a las personas naturales según el caso) deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

11001310300520130001102 LINK DEL PROCESO 005 -2013 00011 -02 DR FERREIRA

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: Descorre Traslado Recurso de Apelacion.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 05/09/2023 17:08

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (206 KB)
RECURSO DE APELACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Peñaloza Gonzales <pyg.abogados726@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 16:58
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Julian Peña Reyes <notificacionesjudiciales@cafesalud.com.co>; Notificaciones Judiciales Medimás <notificacionesjudiciales@medimas.com.co>; gerencia.general@hortopedico.com <gerencia.general@hortopedico.com>; drrbiof@yahoo.com <drrbiof@yahoo.com>
Asunto: Descorre Traslado Recurso de Apelacion.

SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Magistrado ponente: JAIME CHAVARRO MAHECHA

Referencia proceso Verbal de Mayor Cuantía.
11001310300620190055602
Naturaleza del proceso: Responsabilidad Civil

Demandante ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ***

Demandados. ***CAFESALUD EPS*** *hoy* ***MEDIMAS EPS, S.A.S****, Nit 901097473-5 y al* ***HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S****. Y de* ***RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL*** *Contra el Dr.* ***MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR.***

ANDRÉS CAMILO PEÑALOZA OVALLE, *mayor de edad, con domicilio en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.731.082 expedida en Bogotá, D.C., y Tarjeta Profesional Nº 245.253 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando de conformidad con las facultades conferidas por mi poderdante, la señora* ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ,*** *Me permito presentar el siguiente escrito a fin descorrer traslado para la sustentación del recurso de alzada elevado ante el juzgado 6 civil del circuito de Bogotá D.C. y de conformidad con lo señalado por su despacho mediante auto calendado el 30 de agosto de 2023.*

SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA D.C.

Magistrado ponente: JAIME CHAVARRO MAHECHA

Referencia proceso Verbal de Mayor Cuantía. 11001310300620190055602

Naturaleza del proceso: Responsabilidad Civil

Demandante ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ***

Demandados. ***CAFESALUD EPS*** *hoy* ***MEDIMAS EPS, S.A.S****, Nit 901097473-5 y al* ***HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S****. Y de* ***RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL*** *Contra el Dr.* ***MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR.***

ANDRÉS CAMILO PEÑALOZA OVALLE, *mayor de edad, con domicilio en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.731.082 expedida en Bogotá, D.C., y Tarjeta Profesional N° 245.253 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando de conformidad con las facultades conferidas por mi poderdante, el señor* ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ,*** *Me permito presentar el siguiente escrito a fin descorrer traslado para la sustentación del recurso de alzada elevado ante el juzgado 6 civil del circuito de Bogotá D.C. y de conformidad con lo señalado por su despacho mediante auto calendado el 30 de agosto de 2023.*

Ref. SUSTENTACION DE RECURSO DE ALZADA.

Me permito formular recurso de apelación. Atendiendo a las siguientes inconformidades y razones.

Al sentir del suscrito, el despacho de primera instancia erra al no encontrar como probada la responsabilidad de las demandadas en los hechos que impulsan el actuar de la demandante lo anterior toda vez que al realizar un análisis practico del caso y del material probatorio que se acompaña en el expediente, encontraremos que contrario al razonamiento del ad quo, las demandadas han incurrido en una serie de errores y omisiones que han materializado un daño en la integridad física y metal de la demandante, a saber y sobre los errores que se prenden sean considerados mediante el presente recurso encontraremos los siguientes.

Que sobre el análisis del elemento de culpa en el actuar del doctor mauro enrique rubio Fuenmayor y el hospital ortopédico S.A.S. el despacho ha debido tener en consideración y brindar del correcto valor probatorio, al hecho que en ninguna de las documentales arrimadas por las demandadas se encuentre registro de las siguientes; consentimiento informado del paciente, de notas operatorias, ordenes medicas preoperatorias, registro radiográfico, notas del anestesiólogo y demás documentas requeridas para realizar el procedimiento operatorio, hecho que fue ratificado por la señora ***AURA NELLY LEMUS*** *al resolver sobre su interrogatorio y en el que fue enfática al señalar que ella nunca tuvo conocimiento de la operación, asi como tampoco de la forma en que se practicaría ni que le fue solicitada en manera alguna su aprobación para dar curso a la intervención quirúrgica realizada en pasado 10 de junio de 2016 la cual estuvo a cargo el* ***DR. RUBIO FUENMAYOR.***

Hecho que por sí mismo y que de conformidad con la doctrina y las normas concordantes flagela los derechos del paciente y transgrede la normativa y los protocolos adoptados para la realización de procedimiento operatorio luego y como asi lo indica la ley 23 de 1981 al referirse a las relaciones médico-pacientes en sus artículos 14, 15 y 18 es obligación del Galeano

pedir consentimiento a su paciente para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que a su consideración se deban realizar, ello previendo evitar exponerlo riesgos injustificados.

> *"Artículo 14. – El médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata".*
>
> *"Artículo 15. - El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que pueden afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente.*

No obstante, y aunado a lo anterior es menester recordar que por virtud de la resolución 1995 de 1999 expedida por el ministerio de salud es obligación de parte de los prestadores de servicio de dejar una memoria escrita perdurable de los tratamientos y procedimientos de cada usuario con apego a las exigencias de ley y en cumplimiento a las disposiciones que de la misma resolución se desprenden. Luego al no existir dicho registro se constituye en culpa del agente prestador, luego si la historia clínica es abordada como prueba para acreditar el cumplimiento de las cargas asumidas por la demandada, entenderemos que lo que allí no aparezca anotado, sencillamente no ocurrió, Razón por la cual no es procedente abordar la teoría del ad quo y señalar que los procedimientos y servicios prestados por el ***HOSPITAL ORTOPÉDICO S.A.S.*** *se ajustan a la doctrina y a la praxis médica.*

Hecho que además se encuentra ratificado por el mismo ***DR. EDGAR AUGUSTO HERNÁNDEZ PERDOMO****, testigo de la demandada, al señalar que del estudio del material obrante en el historial clínico de la paciente no se encuentra registro previo a la segunda intervención operatoria realizada por el mismo. Para precisar el Galeano señala no encontrar registro de ninguna de la siguientes; consentimiento informado del paciente, notas operatorias del primer médico tratante, ordenes medicas preoperatorias, registro radiográfico, notas del anestesiólogo y en general ninguna que pueda dar fe de la condición previa en la que la señora* ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ*** *se encontraba previo a la intervención realizada por el* ***DR. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR****. No obstante, y cabe señalar que, al preguntársele por la importancia del registro radiográfico, el mismo testigo señalo que este es indispensable para evaluar la condición del paciente y es extraño no encontrar dicho material al interior de la historia clínica no obstante es este el que pauta las condiciones del tratamiento y del procedimiento operatorio.*

Luego y asi como lo ha señalado en jurisprudencia de la misma sala civil de la corte suprema en radico (SC7110-2017; 24/05/2017) la ausencia del consentimiento informado es causal suficiente para indilgar responsabilidad en las actuaciones del médico y con ello la responsabilidad por los daños ocasionados, se ha dicho que la mera omisión de este elemento conlleva por sí misma a la declaración de culpa y responsabilidad del mismo médico tratante. Luego vulnera no solo el derecho a la autonomía, sino que además lacera su derecho a la información y a las garantías mínimas del paciente como lo son la comunicación, el respeto, el conocimiento y la decisión. Así las cosas, cabe resaltar que al tomar a mutuo propio la decisión sobre si operar o ¡no! Es el hospital mediante sus funcionarios, en este caso el ***DR. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR*** *quienes asumen la culpa de los daños*

ocasionados a mi mandante no solo durante el evento presente, sino también a futuro, luego recordemos que según la misma sala civil de la corte suprema el daño indemnizable deber ser cierto, pero no necesariamente actual.

Lo anterior abordando la culpa desde el punto de vista objetivo, luego si bien pudiere ser cierto que las actuaciones desplegadas por el ***DR. RUBIO FUENMAYOR*** *se encontraban encaminadas a mejorar la condición de mi mandante y que las mismas fueren consideras como necesarias por la praxis médica. No lo es menos que en el ámbito jurídico se ha producido un daño y que dicho daño es imputable y guarda íntima relación con el procedimiento operatorio practicado a la señora* ***AURA NELLY LEMUS****., procedimiento que como y ya se ha mencionado se practicó sin su consentimiento y del cual nunca recibió la información ni la instrucción clara, oportuna y suficiente sobre las secuelas y los daños que pudieren resultar como producto de la practica quirúrgica, evento que vicio de pleno su conocimiento y el derecho a decidir sobre su propia integridad física.*

Así las cosas, cabe resaltar que las condiciones y protocolos para la realización de todos los procedimientos operatorios se encuentran fijados por el ministerio de protección social y que dichos lineamientos forman parte integral de control y la guía de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención de salud, preconceptos que incluyen entre otros garantizar que el consentimiento informado sea un acto profesional, que del mismo se realice registro en el historial médico del paciente y que este último cuente con la instrucción he información suficiente para llegar a la decisión sobre si practicar o no el procedimiento o tratamiento del cual se encuentre pendiente.

En Colombia, la corte constitucional en su sentencia T-401/94 estableció que "toda persona tiene derecho a tomar decisiones que determinen el curso de su vida, esta posibilidad es una manifestación del principio general de libertad, consagrado en la carta de derechos como uno de los postulados esenciales del ordenamiento político constitucional" es así como la prerrogativa de contar con el consentimiento informado del paciente subyace en el tópico de respetar la libertad del individuo y de la determinación de su competencia para decidir sobre su integridad física tan a presente como a futuro le sea posible.

De esta forma entenderemos que al privar a la señora ***AURA NELLY LEMUS*** *de este derecho, se ha vulnerado no solo uno de sus mínimos legales como lo es su derecho a la libertad sino además del ejercer la toma decisiones sobre su propia persona, lo anterior bajo el espectro del engaño, actuación que ha viciado su consentimiento y que reviste de responsabilidad a los extremos demandados.*

Luego cabe señalar que si bien es cierto el procedimiento fue realizado por el ***DR. RUBIO FUENMAYOR*** *y que dé él, es de quien se predicare la responsabilidad del actuar médico, no lo es menos, que conforme al material probatorio arrimado al despacho se encuentra que de conformidad con la contestación emitida por la secretaria distrital de salud el señor* ***MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR*** *no contaba con las licencias y/o permisos necesarios para ejercer su profesión dentro del territorio nacional hasta el pasado primero de marzo de 2106. Hecho que resulta relevante en el entendido que el mismo profesional fue quien realizo las labores de seguimiento, diagnóstico y control de los padecimientos de la demandante desde el año de 2015. Anualidad para la cual el* ***Dr. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR*** *se encontraba imposibilitado para ejercer dichas funciones esto como y según lo ratifica el mismo ministerio de salud y*

protección social, solo están habilitados los profesionales que se encuentren inscritos al registro único nacional del talento humano en salud (Re THUS).

En igual sentido cabe resaltar que para la fecha en que el ***Dr. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR****. Fue contratado por la entidad prestadora de servicios de salud* ***HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S.*** *el mismo no contaba con registro en el (Re THUS) de tal forma que la misma empresa prestadora se encontraría inmersa en el hecho, toda vez que fue por su omisión y/o negligencia que el* ***Dr. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR*** *pudo ejercer de forma ilícita su profesión al no contar con los requisitos mínimos para desempeñar sus labores en territorio nacional así como lo indica el artículo 23 de la ley 1164 de 2007.*

De esta manera no es coherente señalar que el ***HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S*** *se encuentre libre de responsabilidad por los hechos ocurridos y materia de debate en presente asunto, luego y como se acaba de señalar son ellos los encargados de verificar las credenciales y el cabal cumplimiento de los deberes legales de su personal, así y como lo resulta la inscripción al sistema (Re THUS) y la validación de los títulos y experiencia que su personal ostenta., cabe recordar que y como así lo señala la resolución 4343 de 2012 expedida por el ministerio de salud y protección social, todo paciente tiene derecho a ser atendido por personal médico idóneo y calificado para dar tratamiento a sus dolencias, así las cosas es preciso señalar que la idoneidad del médico tratante el* ***Dr. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR*** *se encuentra comprometida legalmente no obstante y como lo señala la ley 1164 de 2007, solo los profesiones adscritos al sistema (Re THUS) están calificados para ejercer la profesión de medicina en el territorio nacional.*

Frente a la mala praxis y los errores cometidos dentro del procedimiento, podemos destacar además de los previamente señalados, que el

diagnostico emitido por el ***Dr. MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR*** *carece de registro radiográfico y adolece además de no contar la técnica quirúrgica ni el abordaje medico propuesto para la ejecución de la operación realizada, siendo estos últimos según y como lo describió el* ***DR EDGAR AUGUSTO HERNANDEZ PERDOMO****, parámetros necesarios para realizar un correcto diagnóstico de la patología de base y del procedimiento operatorio. No obstante, y de conformidad con lo afirmado por el mismo experto medico llegar a un resultado sin contar con la previa evaluación y registro radiográfico adolece de un error en la valuación de la patología de base y puede confluir en futuros errores al abordar la metodología que se aplica en los procedimientos operatorios.*

De esta forma entenderemos que como resultado y en ausencia de estos prerrequisitos resulta improcedente afirmar incluso para el mismo ***DR EDGAR AUGUSTO HERNÁNDEZ PERDOMO*** *que la metodología y el diagnostico aplicado a mi mandate fuere el correcto para su caso en concreto, error de base en el que se funda la teoría del daño causado a la señora* ***AURA NELLY LEMUS*** *luego y si bien es cierto que para la práctica médica el abordaje medico adoptado para la operación se encuentra documentado y aceptado para la atención de este tipo de patologías, no lo es menos que para dicha operación y según lo relatado por el especialista el* ***DR EDGAR AUGUSTO*** *existen más de 100 métodos posibles para realizar la intervención a la que fue sometida la hoy demandante la señora* ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ****., lo que y por aplicación del indicio probatorio resulta en prueba más que suficiente para indicar que los procedimientos realizados a la señora* ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ*** *no fueron los correctos para realizar la corrección de su patología, hecho que resulta evidente a la luz de que dicha patología aún persiste en el tiempo y que se encuentra descrita en su historial médico como patología de base desde el año de 2016 hasta la*

actualidad. padecimientos ocasionados por la mala praxis del procedimiento operatorio y motivo por el cual mi mandante a la actualidad suma más de mil días de incapacidades relacionadas a su patología de inicio la cual se asocia como la operación para la corrección del HALLUX VALGUS DE PIE DERECHO. Operación que ha producido desde sus entonces incontables padecimientos a mi cliente entre los cuales se encuentra la supuración y excreción de materia en heridas abiertas, infecciones y dolores, asociados a su pie, el impedimento de caminar o desplazarse sin ayuda o con asistencia de herramientas entre muchas otras que ya fueron descritas por en el testimonio de la señora ***AURA NELLY LEMUS****.*

2. que en igual sentido el despacho a omitido hacer estudio o consideración del hecho que para la fecha en que el ***DR. MAURO ENRIQUE RUBIO*** *inicio con los tratamientos, revisión y diagnóstico de la demandante, Este mismo no se encontraba inscrito al sistema rethus. registro único nacional de talento humano en salud. Y que por este motivo él no se encontraba calificado ni autorizado para ejercer la profesión de medicina en el territorio nacional. Hecho que por sí solo vulnera los derechos de mi mandante a ser tratada, diagnosticada y operada por el personal médico competente y autorizado, de conformidad con la resolución 4343 de 2012 emitida por el ministerio de salud. Esto último sin olvidarnos de la ilegalidad de este mismo hecho, luego cabe resaltar que Si una persona ejerce una especialidad médico quirúrgica y no hay registro en el ReTHUS, estará ejerciendo ilegalmente la profesión. Esta inscripción solo aplica para las profesiones y ocupaciones en salud que se consideran talento humano en el sector.*

Por lo tanto, que un especialista esté registrado, les permitirá a los usuarios mantenerse correctamente informados sobre la libre elección del prestador de servicios de salud.

"De esta forma garantizamos el pleno ejercicio del derecho a la salud y el Gobierno nacional cumple su misión de planear y estimar las necesidades de talento humano en salud en cada territorio"

No obstante, recordemos que es deber de las entidades prestadoras y promotoras de salud el verificar este requisito y constatar que el personal médico contratado conste con los mínimos legales para ejercer su profesión., esto a fin de garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los pacientes.

De otro lado quiero hacer énfasis en el hecho que, para fecha en que se realizaron los procedimientos operatorios el hospital ortopédico, si contaba con especialista de pie. Esto último contrario a las afirmaciones realizadas por sus representantes al señalar en un principio que esta especialidad no existía, sino además que la misma puede ser practicada por cualquier especialista en ortopedia., hecho que fue desmentido por el mismo ***DR.EDGAR AUGUSTO HERNANDEZ****, al indicar que no solo si existe la especialización si no y que pese a que por practica o costumbre se habitué que los profesionales en ortopédica realicen estos procedimientos, lo cierto es que no cuentan con la idoneidad profesional para realizar estos procedimientos.*

En igual forma cabe resaltar que se encuentran una serie de fallas asociadas a la prestación del servicio médico y que están relacionadas con la praxis y con los protocolos médicos instituidos para estas prácticas, luego y como lo señalo en su testimonio el mismo Dr. ***DR.EDGAR AUGUSTO HERNANDEZ****, resultaba necesario contar con registro radiográfico para determinar*

correctamente la patología y el diagnostico de base de la demandante, registro que no solo no obra al expediente, si no que nunca fue suministrado por las demandadas pese a las múltiples peticiones elevadas por la demandante, peticiones que si constan al plenario. De igual forma tengamos en cuenta que tampoco se ha suministrado prueba que demuestre el abordaje médico o la técnica quirúrgica practicada por el ***DR. RUBIO FUEN MAYOR****. No obstante, al contestar sobre esta interrogante el* ***DR. EDGAR AUGUSTO HERNANDEZ*** *no solo aduce que no se encuentra en el historial médico, sino que además sus apreciaciones se basan únicamente en las anotaciones provenientes del resumen medico posoperatorio, recalcando además que esta información ha debido encontrarse en la historia clínica del paciente, pues así lo dictan los protocolos médicos.*

Ahora si en virtud a la carga probatoria lo que se pretende es que la parte activa del proceso suministrara dicha información, he de permitirme recordar al despacho que de conformidad con el mismo artículo 167 del C.G.P. es la parte que se encuentre en mejor posición la llamada a suministra y arrimar la documental de la que se hace referencia, no obstante, cabe resaltar que de conformidad con lo señalado por la resolución 1995 de 1999. La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en la presente resolución, sin perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes.

Razón por la cual no se podrá alegar la falta de diligencia o inacción de la parte demandante a la hora de hacer recaudo de dicho material. Luego y como ya lo he mencionado la demandante ha elevado en diversas oportunidades las solicitudes y reclamaciones necesarias para hacer el recaudo probatorio, mismo que y en comento fue negado oficiosamente por el AD QUO. Desestimando las previas actuaciones y el actuar negligente

y el suministro parcializado de la información solicitada a las demandadas pese a encontrarse ellas en mejor posición para allegar el material que conforma la historia clínica de la paciente.

Sobre el nexo de causalidad he de señar al despacho que este elemento se encuentra plenamente demostrado y que la documental arrimada al despacho da fe de este hecho, no obstante observaremos como el historial clínico previo a la intervención realizada por el señor ***MAURO ENRIQUE FUEN MAYOR,*** *da fe, de que mi mandante no contaba con la patología descrita como algún valgas, de manera previa a realizarse los controles médicos asignados con el especialista asi como de igual manera se encontrara que dicha patología ha persistido en el tiempo desde el año de 2016 hasta el presente. Es decir, por un periodo de casi 8 años, comportamiento que y según como señalo el mismo Dr.* ***DR. EDGAR AUGUSTO HERNANDEZ*** *es anormal para procedimientos correctivos de ortopedia y que pese a tener complicaciones estas mismas no se pueden asociar a una traumatología compuesta durante un lapso de tiempo tan extendido. De esta forma resultaba imperante que el despacho hiciera un minucioso estudio del caso, para entender que, a causa de los malos procedimientos practicados a mi mandante, se le ha causado un daño que cuenta con registro histórico suficiente como para abordar la documental como prueba inicial del hecho. Luego como y ya lo he mencionado basta con cotejar la condición médica del demandante previo a realizar el procedimiento operatorio con el historial médico posterior a la fecha de la operación, Para entender que algo no salió bien con su intervención médica.*

Es por todo lo anterior que centrar la discusión sobre el supuesto de la existencia de un daño, resulta inconducente, toda vez que y como así lo ha demostrado al material probatorio arrimado al despacho que se puede dar fe de este hecho y demostrar a cabalidad los efectos de la mala praxis.

No obstante, la praxis médica se orienta en función de los principios de beneficencia y no maleficencia del paciente. El desarrollo de las técnicas galénicas supone la experimentación y la investigación científica en favor de la población y de los futuros pacientes. Propósitos de la profesión médica. Prohibición de someter al paciente a riesgos injustificados. Estudio en proceso de responsabilidad médica contractual contra médico de confianza, Según y como lo señala la sentencia de la sala civil en radicado No (SC7110-2017; 24/05/2017)

Luego véase su señoría como la orientación de los procedimientos realizados a mi mandante ni siquiera dan cumplimiento al más básico de los derechos fundamentales del paciente, como lo es el ser informado.

PRETENSIONES DEL RECURSO

Por las anteriores razones se solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia proferida por el despacho del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá D.C. –en la que niega las pretensiones de la demandante por no encontrar como probados los presupuestos de la existencia de responsabilidad que se busca declarar.

> ***PRIMERO**: que se revoque la sentencia dictada por el juzgado 6 civil del circuito de BOGOTA D.C. calendada en pasado 18 abril de 2023.*
>
> ***SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior **DECLARESE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL**- y **CONDENESE** al pago de los perjuicios descritos en el acápite del Juramento Estimatorio del escrito de demanda a las demandadas **MEDIMAS EPS** y **HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S**. En virtud de los daños ocasionados a la demandante.*

***TERCERO**: ÓRNESE, la indexación de las sumas (de los perjuicios condenados, como daño emergente- lucro cesante- daño Moral- daño futuro-daño de la vida en relación) hasta el momento del pago, junto con los respectivos intereses de mora.*

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

***PRIMERO**: **DECLASERE** la responsabilidad civil extracontractual del médico **MAURO ENRIQUE RUBIO FUENMAYOR** con registro medico No.1240121112.*

***SEGUNDO:** Que como consecuencia de lo anterior **CONDENESE** al pago de los perjuicios descritos en el Juramento Estimatorio del escrito de demanda.*

***TERCERO: DECLARESE** la responsabilidad civil contractual del **HOSPITAL ORTOPEDICO S.A.S**.*

***CUARTO:** Como consecuencia de lo anterior **CONDENESE** al pago de los perjuicios descritos en el Juramento Estimatorio del escrito de demanda.*

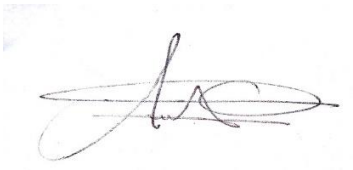
NOTIFICACIONES

El suscrito apoderado,

- *El suscrito abogado, las recibe en la Calle 135ª No. 101ª – 58 oficina 726 de la ciudad de Bogotá D.C., número telefónico 301-735-0998 correo electrónico pyg.abogados726@gmail.com*

- ***AURA NELLY LEMUS RAMIREZ*** *las recibe en la Calle 135ª No 101-58 de la ciudad de Bogotá D.C., número telefónico 301-735-0998 correo electrónico acpotrabajo@gmail.com*

Del señor Juez con toda atención.



ANDRES CAMILO PEÑALOZA OVALLE
C.C. No. 1.020.731.082 De Bogotá D.C.
T.P No 245.253 del C. S de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR FERREIRA VARGAS RV: REFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEMANDANTES: DIANA ALEJANDRA ESPINOSA MOLANO Y OTROS DEMANDADOS: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y OTROS RADICADO: 11001310300620190074701

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 3:26 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (209 KB)

ANDINO - Memorial (sustentacion Apelacion).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR FERREIRA VARGAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Naranjo Abogados <naranjoabogados2023@gmail.com>
Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 15:14
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Margarita Parrado Velasquez <mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: jparraq@cable.net.co <jparraq@cable.net.co>; julio.gonzalez@ppulegal.com <julio.gonzalez@ppulegal.com>; nicolas.uribe@vivasuribe.com <nicolas.uribe@vivasuribe.com>; gabriel.vivas@vivasuribe.com <gabriel.vivas@vivasuribe.com>
Asunto: REFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEMANDANTES: DIANA ALEJANDRA ESPINOSA MOLANO Y OTROS DEMANDADOS: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y OTROS RADICADO: 11001310300620190074701 ASUNTO: SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PR...

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2023

Honorable Magistrado,
JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES: DIANA ALEJANDRA ESPINOSA MOLANO, FRANCY ELENA MOLANO VILLAMIZAR, IRMA DEL PILAR MOLANO, IRMA SOFIA VILLAMIZAR DE MOLANO Y LUIS

CARLOS HERRAN MOLANO
DEMANDADOS: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PH Y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
RADICADO: 11001310300620190074701

ASUNTO: SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

CARLOS EDUARDO NARANJO FLÓREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.583.099 de Medellín y Tarjeta Profesional 33.269 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante al interior del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, de forma respetuosa, allega a su Despacho sustentación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá.

Cordialmente,
Carlos E. Naranjo Flórez

NARANJO VALLEJO ABOGADOS

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2023

Honorable Magistrado,
JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEMANDANTES: DIANA ALEJANDRA ESPINOSA MOLANO, FRANCY ELENA MOLANO VILLAMIZAR, IRMA DEL PILAR MOLANO, IRMA SOFIA VILLAMIZAR DE MOLANO Y LUIS CARLOS HERRAN MOLANO
DEMANDADOS: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PH Y CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
RADICADO: 11001310300620190074701

ASUNTO: SUTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

CARLOS EDUARDO NARANJO FLÓREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 71.583.099 de Medellín y Tarjeta Profesional 33.269 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante al interior del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, de forma respetuosa, allega a su Despacho sustentación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá, de conformidad con los siguientes:

I. HECHOS

1) Irma del Pilar Molano y otros, por intermedio de apoderado, interpusieron demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra del Centro Comercial y de Negocios Andino PH, Fortox Security, Axa Colpatria Seguros S.A. y Chubb Seguros Colombia S.A., por los daños ocasionados el 17 de junio de 2017 en las instalaciones del Centro Comercial y de Negocios Andino PH.

- El proceso, por reparto, correspondió al Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá.

2) El 18 de octubre de 2019 el Despacho profirió por medio del cual admitió la demanda.

3) El Centro Comercial y de Negocios Andino PH, por intermedio de apoderado, contestó la demanda al proponer las excepciones de: **i)** falta de legitimación en la causa por pasiva, **ii)** no se cumplen los presupuestos necesarios que dan lugar a la

responsabilidad civil extracontractual: no imputabilidad física del hecho, **iii)** causa extrada: hecho de un tercero, **iv)** prejudicialidad, **v)** Andino es victima del atentado: no está llamado a reparar, **vi)** el daño carece de certeza, además se pretende un doble pago por el mismo concepto, y **vii)** mala fe.

Adicionalmente, también se propuso una oposición al juramento estimatorio de la demanda.

4) Fortox S.A., por intermedio de apoderado, contestó la demanda al proponer las excepciones de: **i)** hecho exclusivo de un tercero, los responsables son los criminales que instalaron el artefacto explosivo, **ii)** hecho de un tercero, los llamados a responder son la Policía Nacional o las Fuerzas Militares, **iii)** ausencia de culpa, **iv)** indebida tasación y liquidación de los daños supuestamente sufridos por los demandantes, **v)** ausencia de nexo causal, y **vi)** los demandantes pretenden cobrar los mismos perjuicios en dos procesos distintos.

Adicionalmente, también se propuso una oposición al juramento estimatorio de la demanda y formuló llamamiento en garantía contra Axa Colpatria Seguros S.A.

5) Axa Colpatria Seguros S.A., por intermedio de apoderado, contestó la demanda al proponer las excepciones de: **i)** inexistencia de toda forma de responsabilidad civil – ausencia de acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad, **ii)** ausencia de responsabilidad por una causa extraña – hecho exclusivo de un tercero, **iii)** ausencia de acreditación de los perjuicios pretendidos, **iv)** tasación excesiva de los eventuales e hipotéticos perjuicios sufridos por la demandante, **v)** enriquecimiento sin causa y pago de lo no debido, **vi)** ausencia de cobertura por inexistencia de responsabilidad de Fortox Security S.A. y por ende de siniestro, y **vii)** ausencia de cobertura bajo el contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 8001083787 de actos de sabotaje o terrorismo.

Adicionalmente, también se propuso una oposición al juramento estimatorio de la demanda.

6) Chubb Seguros Colombia S.A., por intermedio de apoderado, contestó la demanda al proponer las excepciones de: **i)** inexistencia de toda forma de responsabilidad civil – ausencia de acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad, **ii)** ausencia de responsabilidad por una causa extraña – hecho exclusivo de un tercero, **iii)** ausencia de acreditación de los perjuicios pretendidos, **iv)** tasación excesiva de los eventuales e hipotéticos perjuicios sufridos por la demandante, **v)** enriquecimiento sin causa y pago de lo no debido, **vi)** ausencia de cobertura por inexistencia de responsabilidad del Centro Comercial y de Negocios Andino P.H. y por ende de siniestro, y **vii)** ausencia de cobertura bajo el contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 23553 de actos de sabotaje o terrorismo.

Adicionalmente, también se propuso una oposición al juramento estimatorio de la demanda.

7) El 25 de marzo de 2021 el Despacho profirió Auto por medio del cual admitió el llamamiento en garantía formulado por Fortox S.A. en contra de Axa Colpatria Seguros S.A.

8) La parte demandante, por intermedio de apoderado, descorrió la totalidad de las excepciones y objeciones a juramento estimatorio formuladas por los apoderados de la parte demandada.

9) El 28 de septiembre de 2021 el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá profirió, en desarrollo de audiencia, sentencia de primera instancia en el sentido de:

> "*PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones propuestas por el Centro Comercial y de Negocios Andino P.H.(FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, NO SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL- NO IMPUTABILIDA FISICA DEL HECHO, CAUSA EXTRAÑA- HECHO DE UN TERCERO, EL CENTRO COMERCIAL ANDINO ES VICTIMA DEL ATENTADO); Fortox Security Group (HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, HECHO DE UN TERCERO, AUSENCIA DE CULPA, AUSENCIA DE NEXO CAUSAL, LOS DEMANDANTES PRETENDEN COBRAR DOBLEMENTE PERJUICIOS; Chubb Seguros Colombia S.A.,(INEXISTENCIA DE TODA FORMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL-NO ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR UNA CAUSA EXTRAÑA- HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y PAGO DE LO NO DEBIDO); Axxa Colpatria Seguros S.A.(INEXISTENCIA DE TODA FORMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL-NO ACREDITACION DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR UNA CAUSA EXTRAÑA- HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y PAGO DE LO NO DEBIDO).*
>
> *SEGUNDO: NEGAR todas las pretensiones de la demanda principales y subsidiarias*".

- La providencia fue notificada en estrados.

10) El 29 de septiembre de 2021 la parte demandante, en desarrollo de audiencia, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

- Al respecto, se realizaron reparos breves, tendientes a fundamentar las razones de disenso con la sentencia, consistentes en que:

- El *a quo* omitió la valoración de las pruebas, obrantes en el expediente del proceso, que demuestran los fallos en el esquema de seguridad de Fortox Security para el Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017.

- El hecho dañoso hubiere sido previsible y resistible de no haber existido fallos en el esquema de seguridad de Fortox Security para el Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017.

- La negligencia del Centro Comercial Andino y su empresa de seguridad para aquel entonces, Fortox Security, es equiparable a la culpa grave y, por tanto, acarrean responsabilidad por los perjuicios ocasionados el 17 de junio de 2017.

11) El 29 de septiembre de 2021 el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá profirió, en desarrollo de audiencia, Auto que concedió el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, se ordenó el envío del expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

12) El 30 de agosto de 2023 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá profirió Auto por medio del cual se admitió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá y, en consecuencia, se otorgó a la parte demandante un término de 5 días, a partir de la ejecutoria del Auto, para sustentar la apelación por escrito.

- La providencia fue notificada por Estado Electrónico el 31 de agosto de 2023.

II. OPORTUNIDAD

Al tener en cuenta que el Auto que concedió el recurso de apelación, en segunda instancia, fue notificado por Estado Electrónico el 31 de agosto de 2023, la parte interesada se encuentra dentro del término para presentar su respectiva sustentación y procede a radicarla ante el Despacho.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá mencionó, en su sentencia de primera instancia, que no era posible imputarle responsabilidad a la parte demandada, en razón a los sucesos ocurridos el 17 de junio de 2017 en las instalaciones del Centro Comercial y de Negocios Andino PH, por cuanto opera la figura de la "irresistibilidad" como una causal para el rompimiento del nexo de causalidad entre la culpa del hecho generador -responsabilidad- del daño y el daño como tal; pues, en palabras del Despacho: "*no podemos apartarnos de que el hecho generador es un acto terrorista* (…) *y, de otro lado, que la empresa o el Centro Comercial Andino no observó una conducta descuidada,*

negligente o mucho menos cómplice con estas actividades terroristas porque, en principio, lo que se ha probado para la época de los acontecimientos, tenía establecido o vigente un contrato de vigilancia suscrito con una compañía, en este caso Fortox Security, para esos fines de la vigilancia según las necesidades que rutinariamente que, de consuno, venían estableciendo con la compañía de vigilancia y las demás directivas del Centro Comercial que estimaron que estando habilitada la compañía de vigilancia mediante la vigencia de unas certificaciones de unas licencias de funcionamiento que se probó tenían; es decir, no era cualquier particular o cualquier simple exmilitar o cualquier persona del común el que estuviera prestando allí sus servicios. Por el contrario, lo que se ha demostrado acá es que esta compañía goza de todas las certificaciones y está habilitada para la prestación de las distintas modalidades servicio de seguridad y vigilancia, como lo son los armados, que en efecto los tenía, tenía 4 ese día, los sin armas, los de punto fijo, y los móviles; de tal forma que entonces por lo menos el alcance de la prueba da cuenta de que el Centro Comercial, para sus necesidades habituales de seguridad, y como lo venían trayendo de tiempos atrás, inclusive con esta misma compañía, pues eran los requerimientos de seguridad para esa época. No se observa entonces tampoco que este atentado hubiese sido provocado con la participación de miembros de la propiedad horizontal, de su personal, ni tampoco con complicidad o con favorecimientos o descuidos especiales del cuerpo de vigilancia así establecido (texto transcrito sic de grabación de audiencia -parte 3- que obra en el expediente del proceso).

Sin embargo, el *a quo* echó totalmente de menos aquellas deficiencias del sistema de seguridad de Fortox Security que, de no haber existido para aquel 17 de junio de 2017 en el Centro Comercial Andino, habrían podido impedir el acaecimiento de la explosión que ocasionó los daños y perjuicios reclamados en el presente proceso.

En síntesis, se considera que el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá, en su sentencia de primera instancia, omitió la valoración probatoria de piezas documentales que demuestran, sin lugar a duda, numerosas fallas de Fortox Security en su esquema de seguridad para el Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017; actuaciones tan negligentes que, en materia civil extracontractual, se equiparan al dolo y, para el caso concreto, se hacen acreedoras de responsabilidad por los daños y perjuicios que fueron causados a las victimas de la mencionada explosión.

A) SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

El artículo 2341 del Código Civil establece que: "*aquel que ha cometido con culpa un daño a otro está obligado a indemnizar los perjuicios que se deriven de ello, estableciendo así el régimen de responsabilidad extracontractual*". Motivo por el cual, para el caso concreto, al tener en cuenta que la parte demandante no guardaba una relación contractual con la parte demandada, es necesario que se demuestre: "*(i) el perjuicio padecido, (ii) el **hecho** intencional o **culposo atribuible al demandado**, y (iii)*

la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores"[1] (subrayas y negrillas por fuera del texto).

Por tal motivo, al tener en cuenta que en el transcurso de la primera instancia no se negó la existencia del perjuicio padecido por la parte demandante, por cuanto fue debidamente probado, este escrito de sustentación se centrará en resaltar los medios probatorios omitidos por el *a quo* que demuestran, sin lugar a duda, un hecho culposo atribuible al demandado (reflejado en varias fallas del esquema de seguridad del Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017) y, consecuentemente, la existencia de un nexo adecuado de causalidad (reflejado en que las fallas del esquema de seguridad del Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017 fueron de tal envergadura que pudieron evitar la ocurrencia del hecho dañoso).

B) SOBRE EL HECHO CULPOSO

La culpa, como ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[2], "*asume el papel de factor o de criterio de imputación, esto es, la responsabilidad no se estructura sin culpa, o sea, no es suficiente el quebranto de un derecho o de un interés legítimo,* ***es menester la falta de diligencia, por*** *acción u* ***omisión (culpa in omittendo) noción ab initio remitida a la de negligencia****, imprudencia o impericia, siendo el acto culposo moralmente reprochable, la responsabilidad su sanción y la reparación del daño la penitencia a la conducta negligente*" (subrayas y negrillas por fuera del texto).

En esa medida, para el caso concreto, es necesario traer de presente las múltiples irregularidades del esquema de seguridad del Centro Comercial Andino ocurridas el 17 de junio de 2017; pues, en ellas se ve reflejado, sin lugar a duda, una falta de diligencia, por omisión, respecto a la obligación de vigilancia y cuidado que la parte demandada tenía sobre el bien inmueble y las personas que allí se encontraban:

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security **NO** cumplían, para el 17 de junio de 2017, con los mínimos establecidos en el Decreto 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada) ni en la Guía para la Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (emitida por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Vigilancia en el año 2008) para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017,

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 06 de abril de 2001. Rad 5502.
[2] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 24 de agosto de 2009. M.P. William Namén Vargas.

NO realizaba de forma sistemática el análisis/medición de riesgos del bien inmueble para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): el Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, nombró a una persona inexperta en el cargo de "gerente del contrato" para la ejecución del contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): el Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, **NO** tenía certeza respecto a la determinación/clasificación del nivel del riesgo del bien inmueble.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): el Jefe de Operaciones de la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, **NO** demostró tener experticia en la realización de análisis de riesgos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): el Director de Seguridad del Centro Comercial Andino, para el 17 de junio de 2017, **NO** contaba con la idoneidad requerida para el cargo.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, experimentaba deficiencias en relación con la conducción de la operación de seguridad para las instalaciones del bien inmueble, respecto al servicio de vigilancia y seguridad privada.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, experimentaba fallas en relación con los turnos de los guardas y personal de seguridad.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, **NO** demostró la certificación y/o especialización "en Grandes Superficies" de la mayoría de su personal de seguridad; es decir, la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada en el bien inmueble era de carácter general y **NO** especializado.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017,

NO demostró la presentación y/o registro de la totalidad de informes y/o minutas ante los operadores de medios tecnológicos a cargo del Centro Comercial Andino.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, **NO** contaban con operadores de medios tecnológicos actualizados en el manejo de la video vigilancia del bien inmueble para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, experimentaban graves fallas con relación a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad con medio canino en el bien inmueble; pues, **NO** existió un cumplimiento estricto a la normatividad que regula este tipo de servicio por parte de la empresa de seguridad Fortox Security.

- Demostrado en Dictamen Pericial (Henry Vargas Polania): El Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, por falta de conocimiento en el tema del servicio de caninos, por intermedio del Gerente del Contrato y del Director de Seguridad, **OMITIERON** exigir el cumplimiento estricto de la normatividad que regula el servicio de vigilancia y seguridad con medio canino en el bien mueble; es decir, **NO** se cumplió con la normativa vigente en aquel entonces, respecto al servicio de vigilancia y seguridad con medio canino, lo cual generó la prestación de un servicio no adecuado y generó vulnerabilidades en la seguridad de las instalaciones (**contaban con caninos con reentrenamiento vencido - manejadores caninos con certificación vencida - caninos especializados en explosivos siendo manejados por personal sin especialidad en explosivos – caninos con sobrecarga laboral**).

De esta forma, es evidente la manera en que tanto el Centro Comercial Andino, como la empresa de seguridad Fortox Security, para el 17 de junio de 2017, experimentaban fallas graves en el esquema dispuesto parala prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el bien inmueble; una situación que, sin lugar a duda, representó la prestación de un servicio no adecuado y, consecuentemente, la generación de vulnerabilidades en la seguridad de las instalaciones. Lo cual, según la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, da lugar a la configuración de una falta de diligencia por omisión (*culpa in omittendo*), remitida a la negligencia e imprudencia, que se entiende en un acto culposo moralmente reprochable, merecedor de responsabilidad como sanción.

C) SOBRE EL NEXO ADECUADO DE CAUSALIDAD ENTRE FACTORES:

El nexo adecuado de causalidad es entendido como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. De esta manera, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina han indicado que, para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto.

Este concepto, que indudablemente hace necesaria la consideración de distintos factores, en principio debe partir de: **i)** una necesidad de vigilancia y seguridad privada (sustentada en el análisis del riesgo del Centro Comercial y de Negocios Andino PH), **ii)** el deber de seguridad de este, y **iii)** las disposiciones del Decreto 356 de 1994, la norma internacional ISO310000, la jurisprudencia colombiana, entre otros. Los cuales permiten deducir que existe un deber de protección frente al derecho fundamental de la seguridad personal; el cual fue, en este caso concreto, quebrantado por faltar a la negligencia respecto de dos sujetos distintos que deben ser considerados solidariamente responsables.

El contrato para la prestación del servicio de vigilancia y de seguridad privada, celebrado entre el Centro Comercial Andino y la empresa de seguridad Fortox Security, establece en su clausulas de obligaciones un deber de información necesario para la eficiente prestación del servicio, dentro del cual pueden estar inmersas las consideraciones individuales de cada parte respecto de si el servicio tiene falencias, es insuficiente o inoperante conforme cambios contextuales. Y, de igual forma, establece que el contratante tiene el deber de levantar un acta de satisfacción; obligación que denota la necesidad de poner en consideración si el ejercicio de vigilancia se está llevado a cabo de manera eficaz.

Sin embargo, a pesar de estas obligaciones, como bien ha quedado demostrado en el acápite anterior, en su gran mayoría gracias al Dictamen Pericial rendido por Henry Vargas Polania, no se tiene conocimiento alguno de que la parte demandada hubiere considerado la posibilidad de gestionar una seguridad apta o medianamente diligente para prevenir el acaecimiento de cualquier agresión en contra del Centro Comercial Andino.

Al dejarse en claro que fue la negligencia un factor determinante para la generación del hecho dañoso, y de que de haberse actuado diligentemente esto no habría ocurrido, es importante señalar que no sería el primer caso de negligencia en la materia; pues, como bien desarrolló la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de agosto de 2018 (Rad. No. 37719), aunque sea operante la responsabilidad del Estado, la empresa de seguridad guarda responsabilidad y, de quererse, puede imputarse responsabilidad por el hecho de no haber ejercido eficazmente su deber de seguridad y vigilancia conforme el artículo 74 del Decreto 356 de 1994.

De esta forma, el nexo de causalidad en el presente caso, se encuentra sujeto a dos consideraciones, que fueron ampliamente demostradas en el acervo probatorio del expediente: **i)** la posibilidad de atribuir responsabilidad a una empresa de seguridad privada por un atentado terrorista, y **ii)** la posibilidad de que tanto el Centro Comercial, como la empresa de seguridad, hubieren podido realizar lo suficiente para evitar la ocurrencia del hecho dañoso.

A partir de las numerosas fallas y deficiencias de seguridad demostradas en el expediente del proceso, resulta evidente una negligencia reiterada por parte del Centro Comercial Andino, y su empresa de seguridad Fortox Security, respecto a la prestación del servicio de vigilancia y de seguridad privada al bien inmueble.

De esta forma, al tener en cuenta la segunda consideración anteriormente mencionada, surge la interrogante acerca de la posibilidad de que la parte demandante hubiere podido realizar lo suficiente para evitar la ocurrencia del hecho dañoso; es decir, además de poder prestar un servicio diligente, sin fallas y/o deficiencias, la posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad contratadas conforme a las sistemáticas evaluaciones y/o mediciones del riesgo que se encontraban en la obligación legal de realizar.

En esa medida, es de resaltar que, tal como se demostró en el Dictamen Pericial, ni el Centro de Comercial Andino, ni la empresa de seguridad Fortox Security, pese a estar en la obligación legal de cumplir rigurosamente los requisitos necesarios para la correcta prestación de un servicio de vigilancia y seguridad privada, para el 17 de junio de 2017: **i) NO** realizaban de forma sistemática un análisis y/o medición de riesgos del bien inmueble, **ii) NO** tenían certeza respecto a la determinación y/o clasificación del nivel del riesgo del bien inmueble, y **iii) NO** contaban con un Jefe de Operaciones que tuviere experiencia en la realización de análisis de riesgos; todas ellas situaciones que, además de ser notablemente negligentes, dan lugar, sin duda alguna, a una **imposibilidad de que la parte demandada pudiere prever y/o implementar mejoras en su esquema de seguridad** para evitar la ocurrencia de un hecho dañoso como el acaecido el 17 de junio de 2017.

En otras palabras, debido a la notable negligencia de la parte demandada, respecto a los mínimos deberes en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada (sistemático análisis/evaluación de riesgo del inmueble), se imposibilitó al Centro Comercial y a la propia Empresa de Seguridad de prever nuevas situaciones de riesgo y, con ello, la imposibilidad de implementar mejoras en el esquema de seguridad que pudieron prever la ocurrencia de un hecho dañoso como el acaecido el 17 de junio de 2017.

Es de aclarar que el Centro Comercial Andino, y la empresa de seguridad Fortox Security, **SI** hubieren podido realizar lo suficiente para evitar la ocurrencia del hecho dañoso mediante la implementación de mejoras en el esquema de seguridad que se tenía sobre el bien inmueble. Sin embargo, como ya se ha reiterado, ello fue imposibilitado por la

misma parte demandada debido a las deficiencias en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada; en específico, el deber de analizar sistemáticamente el riesgo del inmueble, un deber que, como quedó demostrado en el Dictamen Pericial que obra en el acervo probatorio del expediente, no estaba siendo cumplido para el 17 de junio de 2017.

Adicionalmente, muestra de ello reside en el Otrosí firmado por el Centro Comercial Andino con la empresa de seguridad Fortox Securiry posterior ocurrencia del hecho dañoso; pues, como bien se detalla allí, la implementación de mejoras en el esquema de seguridad, tendientes a evitar y/o prevenir la ocurrencia de riesgos similares a los del 17 de junio de 2017 para el bien inmueble, si eran posibles; aunque, lastimosamente, no siendo implementados de forma oportuna debido a la negligencia de no realizar sistemáticamente el análisis del riesgo del bien inmueble.

A partir de todo lo anterior, se tienen por acreditados la totalidad de los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la parte demandada por los perjuicios derivados del hecho dañoso ocurrido el 17 de junio de 2017 en las instalaciones del Centro Comercial Andino: **i)** el perjuicio padecido (perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a Irma del Pilar Molano y familiares), **ii)** el hecho culposo atribuible al demandado (negligencia respecto a los deberes en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada), y **iii)** la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores (imposibilidad de prever y/o implementar mejoras en el esquema de seguridad del Centro Comercial Andino que habrían evitado la ocurrencia del hecho dañoso).

Y, por tal motivo, de forma respetuosa, se solicita al Honorable Magistrado:

IV. SOLICITUDES

1) **REVOCAR** la sentencia de primera instancia proferida 28 de septiembre de 2021 por el Juzgado 06 Civil del Circuito de Bogotá al interior del proceso de la referencia.

Y, en su lugar,

2) **ACCEDER** a la totalidad de las pretensiones elevadas por la parte demandante al interior del proceso de la referencia.

V. NOTIFICACIONES

En virtud de la Ley 2213 de 2022, el suscrito apoderado **CARLOS EDUARDO NARANJO FLÓREZ** recibirá notificaciones en la Calle 64 No. 4A - 41 en la ciudad de Bogotá, y en el correo electrónico **naranjoabogados2023@gmail.com**

NARANJO VALLEJO ABOGADOS

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO NARANJO FLÓREZ
CC. No. 71.583.099 de Medellín
T.P. 33.269 C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: Respuesta automática: Solicitud del link del proceso No 2021-07901

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 05/09/2023 9:44

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: lucero masmela <lumascas123@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 9:17
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: Respuesta automática: Solicitud del link del proceso No 2021-07901

Sustentación del Recurso de Reposición, Subsidio Apelación Proceso No No 2021-07901

sustentación del recurso de reposición Magdalen...

Buenos Días;

Envío la sustentación del recurso de apelación del proceso en referencia.

Cordialmente;

Lucero Másmela Castellanos
Abogada

El vie, 1 sept 2023 a la(s) 08:00, Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota (secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co) escribió:

> *Hola, gracias por contactarse con la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.*
>
> *Debido a la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la atención es preferentemente virtual. Revisaremos su correo electrónico a fin de darle el trámite respectivo lo más pronto posible en virtud de la gran cantidad de correos electrónicos que se recepcionan.*

Recuerda que nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y que ***todos los correos electrónicos recibidos de lunes a viernes después de las 5:00 p.m., así como los fines de semana****,* ***se tendrán como recibidos a las 8:00 a.m. del siguiente día hábil*** *para su trámite.*

No olvide nuestros correos electrónicos de contacto:

PROCESOS CIVILES	*secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co*
ACCIONES DE TUTELA Y TRÁMITES ADMISNITRATIVOS	*secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co*

Si desea remitir un correo electrónico para ***REPARTO*** *debe dirigirlo* ***única y exclusivamente*** *a las siguientes cuentas electrónicas,* ***teniendo en cuenta el asunto*** *(****tutelas*** *ó* ***civiles****):*

REPARTO PROCESOS CIVILES	*rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co*
REPARTO TUTELAS	*rtutelasctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co*

Así mismo, recordamos que el link del micrositio de la Secretaría en el portal web de la Rama Judicial para consultar los AVISOS DE SALA, AVISOS NOTIFICATORIOS, ESTADOS ELECTRÓNICOS y TRASLADOS ELECTRÓNICOS es https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil

Nuestras líneas telefónicas de contacto son:

PBX 6013532666
LÍNEA NACIONAL GRATUITA 018000110194
Extensiones: 88349 - 88378 - 88350 - 88353 - 88379

Que tenga un feliz día.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil 148
E. S. D.

Ref: SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN SUBSIDIO APELACIÓN CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO DE PERTENENCIA No 2021-00079

Respetado Magistrado;

Teniendo en cuenta que en el recurso se hace observa claramente que la Juez de primera estancia no tuvo en cuenta varias pruebas que la parte demandante quizo aportar en audiencia y la Juez expresó que no recibiría pruebas, violando claramente el debido proceso, por esta razón citaremos los elementos estructurales de la acción de pertenencia, lo cual y de acuerdo a lo expresado por la Señora Juez en donde desestima dando por no probadas las mejoras realizadas en el inmueble ubicado en la Cll 68 B No 72ª-22, las cuales mencionaré a continuación y se soportaran adecuadamente:

SOPORTES DE MEJORAS REALIZADAS EN EL INMUEBLE DESDE EL AÑO 2010 A 2023				
FECHA	**TERCERO A QUIEN SE LE CANCELÓ**	**NIT DEL TERCERO**	**CONCEPTO**	**VALOR**
10/11/2010	RECICLAJE EL REAL	35403783-6	COMPRA DE 32 TEJAS DE ZINC. 14 TUBOS DE PVC, 1 CHIPA DE VARILLA DE MEDIA	139.000
8/07/2011	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE 2 METROS DE MALLA, 1 TUBO DE SILICONA Y 1 KILO DE CEMENTO	19.500
10/02/2012	PUNTO CERAMICO	901658031-1	COMPRA DE UNA CAJA CREMA SELECTA, UNA PESA EXPRES	79.500
9/09/2013	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE TAPIZANTE	10.000
12/09/2013	VIDRIOS SAENZ	79645401	COMPRA DE 18 VIDRIOS X 4MM, 7 SILICONA DOW CANING	702.000
21/07/2013	EZEQUIEL CARRASCO	19084548	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO, SEGUNDO PISO	18.500.000
14/02/2014	RACORTORNILLOS LA BOYACÁ	19000549-9	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VER FACTURA No 0974	3.150.500
20/02/2014	ISAAC ARACA PRADA	3249042	CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TUBERÍAS, POSTURA DE LLAVES DE AGUA.	400.000
13/10/2014	ESTRUCTURADOS	900793105-1	PENDEÓN Y DISEÑO	50.000
18/08/2015	EZEQUIEL CARRASCO	19084548	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE GARAGE DE 2,60 X 2,20 Y UNA PUERTA EXTERIOR	3.200.000

SOPORTES DE MEJORAS REALIZADAS EN EL INMUEBLE DESDE EL AÑO 2010 A 2023				
FECHA	**TERCERO A QUIEN SE LE CANCELÓ**	**NIT DEL TERCERO**	**CONCEPTO**	**VALOR**
			DE 200X080	
18/09/2016	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE POLISOMBRA	6.000
6/02/2017	SURTIPLAST CT SAS	900231017-0	COMPRA DE TEJAS	220.000
18/03/2020	DOBLADORA CARVAJAL LTDA	800164244-6	COMPRA DE TABLERO VERONA MARCO SENCILLO	90.000
26/02/2021	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE TINER	20.000
17/06/2021	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE UN BULTO DE CEMENTO Y LONA PEQUEÑA	19.000
13/11/2021	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	BROCHA Y ESTUCO	11.500
1/07/2022	FERRETERIA LA OPORTUNIDAD	900497580	COMPRA DE ALAMBRE DE PUA TORNADO, GRAPA CERCA DE 1Y1	149.159
9/07/2022	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	7.000
24/11/2022	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE BROCHA Y PINTURA	60.000
10/03/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE DOS BULTOS DE CAL Y OTROS MATERIALES	30.000
20/03/2023	VIDRIOS SAENZ	79645401	INSTALACIÓN DE 30MTROS DE PVC	900.000
28/03/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	5.000
31/03/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	6.000
2/04/2023	FERREDEPOSITO LEON VARGAS	52334775-2	COMPRA DE UNA CAJA DE PUNTILLA	11.500
2/04/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE UN BULTO DE DEMENTO	32.000
8/04/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE LONA Y OTROS MATERIALES	22.500
10/04/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE UNA BOTELLA DE TINER	6.000
11/04/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE UN CODO, ACOPLE, 1 KILO DE CEMENTO	7.100
15/04/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE 1 BULTO DE PEGACOR	11.000

SOPORTES DE MEJORAS REALIZADAS EN EL INMUEBLE DESDE EL AÑO 2010 A 2023				
FECHA	**TERCERO A QUIEN SE LE CANCELÓ**	**NIT DEL TERCERO**	**CONCEPTO**	**VALOR**
15/04/2023	PUNTO FERRETERO LEÓN	1030565078-9	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	6.500
21/04/2023	CIMAXCOL SAS	901354071-0	COMPRA DE TECHO PVC, ESQUINEROS, OMEGA NAL, VOGUETA, ANGULO	556.705
22/04/2023	CIMAXCOL SAS	901354071-1	COMPRA DE TECHO PVC, ESQUINEROS, OMEGA NAL, VOGUETA, ANGULO	225.549
TOTAL GASTOS POR MEJORAS				**28.653.013**

De acuerdo a la relación anterior se estima que entre los años 2010 al 2023, los poseedores del inmueble soportan mejoras realizadas en el inmueble por valor de $28.653.013.

También anexamos los pagos realizados por la cancelación del impuesto predial de los año 2010 a 2023:

IMPUESTOS PREDIALES CANCELADOS		
AÑO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
2010	30/09/2011	512.000
2011	30/09/2011	566.000
2012	25/04/2012	423.000
2013	19/04/2013	503.000
2014	11/04/2014	598.000
2015	19/06/2015	870.000
2016	13/04/2016	770.000
2017	6/04/2017	886.000
2018	22/03/2018	1.019.000
2019	4/03/2019	1.138.000
2020	2/03/2020	1.238.000
2021	23/02/2021	1.257.000
2022	4/03/2022	1.279.000
2023	20/02/2023	1.392.000
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		**12.451.000**

Se anexa el estado de cuentas de los pagos realizados por el impuesto predial desde el año 1994 hasta el año 2023, donde se evidencia que los poseedores del inmueble han cancelado el impuesto, tanto en vida de la Señora Zoila Rosa Ramírez y después de su muerte. (Se anexan certificados del estado de cuentas y los formularios de impuestos pagados de los años: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022, 2023.

Se logró establecer que en el año 2017, los poseedores del inmueble debieron pagar también impuesto de valorización por beneficio local, cancelado el 01 de mayo de 2017, por $232.180. (se anexa soporte del pago de impuesto por valorización año 2017).

Seguidamente aclararé las siguientes situaciones:

1. Ahora bien con relación a los hechos No 1-2-3 de la Demanda, donde se manifiesta que no hacen referencia a actos de señor y dueño, es necesario aclarar que estos hechos se refieren a la forma de como fue adquirida la propiedad por parte del Señor: Alfonso Víctor Rodríguez Villalba (q.e.p.d.).

2. Con relación el hecho No 4, de la demanda, lo que se da a entender es que la propiedad ha venido cancelando los impuestos de renta y complementarios y además aunque los demandantes en los años 1974,1975 y 1976, eran unos niños, aparecen en la declaración como personas a cargo del Señor Alfonso Víctor Rodríguez Villalba (q.e.p.d.), no como se interpretó en la audiencia que ellos estuviesen pagando dicho impuesto.

3. Frente al hecho No 5 de la demanda en donde se dijo que la Señora Zoila Rosa Ramírez (q.e.p.d.), en calidad de compañera permanente del Señor Alfonso Víctor Rodríguez Villalba (q.e.p.d.), instauró un proceso en el cual el Juzgado 31 de familia, mediante sentencia del 2 de agosto de 2017, expresa la existencia de una Unión Marital de Hecho, se anexa copia de dicha sentencia.

4. De igual manera los hechos No 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, se relacionan a los actos de señores y dueños que han realizado la Señora Magdalena Rodríguez Ramirez y su hermano, tales como dos contratos de arredramientos firmado con Angi Lizeth Gaitán, firmado el 15 de septiembre de 2019, cuyo canon actualmente es de $250.000 y Anderson Sosa Gaitán, firmado el 24 de abril de 2022, cuyo canon actualmente es de $250.000 y las mejoras que ascienden a $ 28.653.013, las cuales no se tuvieron en cuenta en primera estancia.

5. De igual manera aclaró que la Señora Juez preguntó a los testigos si conocían que se hubiesen tramitado los permisos para construir, cuando claramente se deduce que las mejoras al inmueble se realizaron cada vez que los poseedores podían, ya que por sus actividades laborales, se visualiza que no tienen un ingreso fijo, sino que con sus pocos ingresos, lograron mejorar la propiedad, lo cual se ha desconocido en la sentencia de primera estancia.

6. Ahora bien como en la sentencia de primera estancia, se establece que los soportes aportados NO son suficientes para evidenciar las mejoras realizadas y como la Poseedora Magdalena Rodriguez Ramírez, en su testimonio, quizo entregar más facturas y documentos relacionados con dicha situación la Señora Juez, se negó rotundamente a recibirlos aduciendo que ya había pasado la oportunidad, incurriendo en una indebida valoración probatoría: ***"… Ocurre cuando el funcionario judicial al momento de valorar la prueba niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite la valoración de pruebas determinantes para***

identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia…".

Además de los hechos anteriores en donde claramente se describen las situaciones, vuelvo a anexar todos los documentos que en su momento no fueron valorados en primera instancia y son el sustento de éste recurso.

Respetuosamente;



LUCERO MÁSMELA CASTELLANOS
Abogada

ANEXOS

1. Soporte de las mejoras realizadas en el inmuebles (25 folios).

2. Soportes de los pagos de impuesto predial y valorización (11 folios).

3. Contratos de arrendamientos actuales (4 folios)

Magdalem Rodriguez.	**COMPROBANTE DE VENTA**	**No.**		
	ORDEN DE COMPRA	**DIA** 10	**MES** 11	**AÑO** 2010
Vendido a: C.39540760	Vendido por:			
Direccion:	Condiciones de Pago:			
Ciudad:	Teléfono:			

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
32	tejas cle. Sin	$ 2000	64000=
14	tubos pvc por 4mts	2500=	35000=
1	chipa de varilla de pecha	40.000	40.000=
	Cancelado		$ 134000=

RECICLAJE EL REAL
COMPRA Y VENTA
MATERIALES RECICLABLES
NIT. 35403783-6
Tel. 438 3761 Dir. Cra 76 No. 66-54

SON:	**SUB-TOTAL**	139000=
	TOTAL $	

ACEPTADA (DEUDOR)	VENDEDOR
C.C. o NIT	C.C. o NIT

FECHA

DIA	MES	AÑO
8	07	2018

☐ CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN
☐ ORDEN DE PEDIDO ☐ REMISIÓN

SEÑOR(ES): Victor Alfonso Ramirez

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____

C.C. / NIT: _____ FORMA DE PAGO _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. unitario	Valor TOTAL
2	Motor 40lb		9000
1	Tubo Silicona		8500
1	Hilo Cemento		2000
	N.t: 1030.565.078-9		

PUNTO FERRETERO LEÓN CANCELADO 310 808 4770

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 19500

Punto Ceramico

DISEÑOS Y DECORACIONES La 72

SAN LORENZO · cerámica italia · ALFAGRES · GRIVAL

TELÉFONOS : 320 826 4790 - 320 942 1922 TEL. 601 407 8835 DIR: CALLE72 #83-15

NOMBRE: MAGDALENA Rodriguez C.C: _____

DIRECCIÓN: _____ CEL: 3142622388

EMAIL: _____ TEL: _____

REMISION

Nº 0404

FECHA

DIA	MES	AÑO
10	02	2012

CANT.	DESCRIPCIÓN.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	caja . Crema selecta	36000.	65.500.
1	Pega express .	14.000	14000 .
	Nit: 901.658031-1		

OBSERVACIONES :

SUB. TOTAL $	79.500.
TRANSPORTE $	
TOTAL $	

ABONO : | SALDO: | VENDEDOR:

EL MATERIAL SOLO SE ENTREGA MAXIMO A 5 MTS DE DONDE LLEGUE EL CARRO, SIEMPRE EN EL PRIMER PISO

FERRETERÍA - ELÉCTRICOS

Régimen No responsable de IVA

PAVCO Luminex Pintuco

ARENA - CEMENTO - MIXTO - LADRILLO - BLOQUE
ELECTRICOS - VARILLA - PINTURA - HERRAMIENTA

PEDIDO

FECHA: 09 09 2013

CUENTE:

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Acolden	$	10.000
2	tapizate		

PUNTO FERRETERO LEON
NIT. 1.030.565.078-9
Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real
Cel: 322 779 1700 - 320 430 9171

RECIBÍ

TOTAL $ 10.000

Impreso por: FERNANDO RESTREPO - Cel: 315 318 56 85

CEMEX Eternit GRIVAL Sika tesa

VIDRIOS SAENZ
ALUMINIO Y VIDRIO
CALLE 36 SUR No. 69A - 39
TEL.: 230 41 57 - CEL.: 320 890 20 27
vidriosaenz@hotmail.com
Nit: 79.645.401

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	9	2013

SEÑOR (ES) Magdalena Rodriguez

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
18	Vidrios x 4mm Diferentes Medidas instalados		$655.000=
7	Silicona Dow Corning		$ 47.000=
			$ 702.000=

VIDRIOS SAENZ
ALUMINIO Y VIDRIO
CALLE 36 SUR No. 69A - 39
TEL.: 230 41 57 - CEL.: 320 890 20 27
vidriosaenz@hotmail.com

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 702.000=

CONFORME EL COMPRADOR	VENDEDOR

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CO- 04542367

CONTRATO CIVIL DE OBRA

No.

Obra No.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 21-07-2013

CONTRATANTE: Magdalena Rodriguez Ramirez

Nombre e identificación 39.540.760

Dirección Calle 68B # 72 A 22 Teléfono 314 262 2388

Fax Dirección Electrónica anyiidonna086@gmail.com

CONTRATISTA:

Nombre e identificación Ezequiel Carrasco Mendoz | 19.084.548

Dirección Calle 66 A # 77-16 Teléfono 322 735 33 89

Fax Dirección Electrónica

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL $
Construcción de Apartamento	5 Areas (2 habitaciones Sala, Cocina Baño, y un Local).	Global	18.500.000

PRECIO TOTAL: $ 18.500.000

FORMA DE PAGO: Pagos Parciales de Acuerdo al abance de la obra.

FECHA DE INICIACIÓN: 21-07-2013 FECHA DE ENTREGA: 27-10-2013

GARANTÍAS DE EL CONTRATISTA	CLASE	VALOR $	VIGENTE HASTA
Manejo de Anticipo			
Cumplimiento			
Responsabilidad Civil			
Estabilidad (Conservación)			
Seguro Colectivo de Vida			
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales			

PLANOS ENTREGADOS A EL (LA) CONTRATISTA:

SANCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL (LA) CONTRATISTA:

A su cargo ( ) salarios mínimos diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL (LA) CONTRATANTE, y a su favor ( ) salarios mínimos diarios por cada día de anticipación en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL (LA) CONTRATANTE. Además de las estipulaciones ya acordadas en este documento, EL (LA) CONTRATANTE y EL (LA) CONTRATISTA convienen las siguientes: **PRIMERA.** - EL (LA) CONTRATISTA se obliga para con EL (LA) CONTRATANTE a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por EL (LA) CONTRATANTE y, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. EL (LA) CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas. **SEGUNDA.** - EL (LA) CONTRATISTA entregará la obra a EL (LA) CONTRATANTE en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo ni constitución en mora a lo cual renuncia EL (LA) CONTRATISTA, la sanción antes prevista en este contrato cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. Si EL (LA) CONTRATISTA entrega la obra anticipadamente a plena satisfacción de EL (LA) CONTRATANTE, tendrá derecho a que EL (LA) CONTRATANTE le pague, junto con el valor de liquidación final, la bonificación acordada en este contrato. **TERCERA.** - El (LA) CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. **CUARTA.** - Sin la garantía de manejo y cumplimiento EL (LA) CONTRATANTE sólo entregará anticipos a EL (LA) CONTRATISTA en proporción al avance de los trabajos, y a juicio de aquel (la). **QUINTA.** - Las garantías de manejo y cumplimiento podrán hacerse efectivas por EL (LA) CONTRATANTE tan pronto verifique que ha habido incumplimiento de EL (LA) CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, ni constitución en mora, a lo cual renuncia desde ya EL (LA) CONTRATISTA. **SEXTA.** - El (LA) CONTRATISTA, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales, con la garantía de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder EL (LA) CONTRATISTA a EL (LA) CONTRATANTE los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos, los fabricantes o proveedores. No

7 702124 011162 >

LEGIS

Todos los derechos Reservados

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS. Ley 23 de 1982 y demás normas sobre derechos de autor.

será exigible a EL (LA) CONTRATISTA la garantía de estabilidad, si EL (LA) CONTRATANTE da a la obra o a sus partes destinación inadecuada, o permite que personas diferentes a EL (LA) CONTRATISTA, o a sus técnicos, ejecuten modificaciones o reparaciones en ellas. SÉPTIMA. - El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL (LA) CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo de éste (a); pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL (LA) CONTRATANTE podrá retener, de los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas necesarias para ello. El (LA) CONTRATISTA exhibirá, a solicitud de EL (LA) CONTRATANTE y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero, en todo caso, EL (LA) CONTRATANTE conserva la facultad de repetir cualquier suma que por estos conceptos deba pagar. OCTAVA. - Antes de iniciar la obra EL (LA) CONTRATISTA obtendrá una póliza de seguros colectivo de vida para su personal y lo afiliará a la entidad promotora de salud que escoja y a las demás entidades que por Ley deba hacerlo. De lo contrario, EL (LA) CONTRATANTE, a su libre determinación, procederá a obtener la póliza y a efectuar las afiliaciones, cargando el valor de las primas y los aportes o cotizaciones al precio de este contrato. NOVENA. - Puesto que EL (LA) CONTRATISTA tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera el pago de salarios ni prestaciones sociales a su favor ni a favor de los empleados que contrate, por parte de EL (LA) CONTRATANTE. Antes bien, deberá responder en forma inmediata en caso que EL (LA) CONTRATANTE sea condenado (a) o llamado (a) a juicio por alguna reclamación de los empleados de EL (LA) CONTRATISTA. DÉCIMA. - El (LA) CONTRATISTA responderá de los daños que él (ella) o sus dependientes ocasionen a terceros. DÉCIMA PRIMERA. - Cuando surjan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. DÉCIMA SEGUNDA. - EL (LA) CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte de EL (LA) CONTRATISTA si es persona natural, o disolución o liquidación si se trata de sociedad; b) Incumplimiento de EL (LA) CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones en este contrato; y c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna. DÉCIMA TERCERA. - Toda ampliación del plazo de ejecución de la obra o de vigencia de las garantías, salvo cuando dicha ampliación obedezca a culpa o disposición de EL (LA) CONTRATANTE, deberá ser autorizada por éste (a) en forma escrita. DÉCIMA CUARTA. - Los materiales necesarios para la ejecución de la obra serán suministrados por:

DECIMA QUINTA. - Cualquier modificación a este contrato deberá hacerse por escrito con las firmas de las dos (2) partes.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día ( ), del mes de , del año ( ).

EL CONTRATANTE

Magdalena Luguez R.

C.C. o NIT. No. 39.5 760

TESTIGO

Horacio Cardoso P.

C.C. o NIT. No. 32490 42

EL CONTRATISTA

C.C. o NIT. No. 1 90 54546

TESTIGO

Camilo Gomez

C.C. o NIT. No. 1014190317

RACORTORNILLOS LA BOYACÁ

TORNILLOS, MILIMÉTRICOS" G2,G5,G8, IMPORTADOS BRISTOL, INOXIDABLE, RACORES, CORREAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES, PARTES ELÉCTRICAS - SERVICIO ELÉCTRICO

VENTAS POR MAYOR Y DETAL

Av. Boyaca No. 34 - 16 Sur
Tels.: 450 50 10 - 494 08 36 Bogotá D.C.

COTIZACIÓN - 0974

Cliente: Victor alfonso		Día: 14	Mes: 02	Año: 14
Direccion:		Teléfono:		
Ciudad: Bogot	Forma de Pago: Efectivo	Vendedor:		

CANT.	DESCRIPCION		VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30	Tubo PVC 3/4		8500	255.000=
80	codos PVC 3/4	45°	900	72.000=
4	Pegante PVC		12500	50.000=
6	cinte teflon		400	3000=
30	codos 3/4 PVC		800	24.000
20	uniones 3/4 PVC		800	24.000=
50	bultos Cemento Argos		23.000=	1'150.000
1	viaje Arena Amarilla		230000	230.000
1	viaje Arena Rio		250.000	250.000
1	viaje mixto		280.000	280.000-
5	canecas pintura blanca pabon		130.000=	650.000=
4	rodillos + Roner MP tools		20.000	80.000
6	brochas 3"		6000	18.000=
5	Registro 1/2 bola		7500	37500=

FIRMA Y SELLO

RACORTORNILLOS LA BOYACA NIT 19.000.549-9 CANCELADO

TOTAL $ 3'150.500=

Nit: 19.000.549-9

MINERVA

CO- 04918004

CONTRATO CIVIL DE OBRA

No. Obra No.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Dia 20 02 - 2014

CONTRATANTE:

Nombre e identificación Magdalena Rodriguez

Dirección Cll 68 BN 72A22 Bolaca Real Teléfono 3142622388

Fax Dirección Electrónica

CONTRATISTA: Isaac Araca. Prada.

Nombre e identificación 3249042 El Colegio

Dirección Kr 10 N 6-81 Teléfono 3213041166

Fax Dirección Electrónica

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL $
Cambios de tuveria Galvanisado a puc. posturas de llaves agua cambios	51 Metros	400.000	400.000

PRECIO TOTAL: $ 400.000

FORMA DE PAGO: anticipo $100.000 terminacion 300.000

FECHA DE INICIACIÓN: 20 02 2014. FECHA DE ENTREGA: 25 02 2014

GARANTÍAS DE EL CONTRATISTA	CLASE	VALOR $	VIGENTE HASTA
Manejo de Anticipo			
Cumplimiento Cumplio	Obra de Mano.	400.000	
Responsabilidad Civil			
Estabilidad (Conservación)			
Seguro Colectivo de Vida			
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales			

PLANOS ENTREGADOS A EL (LA) CONTRATISTA:

SANCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL (LA) CONTRATISTA:

A su cargo ( ) salarios mínimos diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL (LA) CONTRATANTE, y a su favor ( ) salarios mínimos diarios por cada día de anticipación en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL (LA) CONTRATANTE. Además de las estipulaciones ya acordadas en este documento, EL (LA) CONTRATANTE y EL (LA) CONTRATISTA convienen las siguientes: **PRIMERA.** - EL (LA) CONTRATISTA se obliga para con EL (LA) CONTRATANTE a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por EL (LA) CONTRATANTE y, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. EL (LA) CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas. **SEGUNDA.** - EL (LA) CONTRATISTA entregará la obra a EL (LA) CONTRATANTE en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo ni constitución en mora a lo cual renuncia EL (LA) CONTRATISTA, la sanción antes prevista en este contrato cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. Si EL (LA) CONTRATISTA entrega la obra anticipadamente a plena satisfacción de EL (LA) CONTRATANTE, tendrá derecho a que EL (LA) CONTRATANTE le pague, junto con el valor de liquidación final, la bonificación acordada en este contrato. **TERCERA.** - El (LA) CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. **CUARTA.** - Sin la garantía de manejo y cumplimiento EL (LA) CONTRATANTE sólo entregará anticipos a EL (LA) CONTRATISTA en proporción al avance de los trabajos, y a juicio de aquel (la). **QUINTA.** - Las garantías de manejo y cumplimiento podrán hacerse efectivas por EL (LA) CONTRATANTE tan pronto verifique que ha habido incumplimiento de EL (LA) CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, ni constitución en mora, a lo cual renuncia desde ya EL (LA) CONTRATISTA. **SEXTA.** - El (LA) CONTRATISTA, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales, con la garantía de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder EL (LA) CONTRATISTA a EL (LA) CONTRATANTE los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos, los fabricantes o proveedores. No

7 702124 011162 >

legis

Todos los derechos Reservados

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

será exigible a EL (LA) CONTRATISTA la garantía de estabilidad, si EL (LA) CONTRATANTE da a la obra o a sus partes destinación inadecuada, o permite que personas diferentes a EL (LA) CONTRATISTA, o a sus técnicos, ejecuten modificaciones o reparaciones en ellas. **SÉPTIMA.** - El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL (LA) CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo de éste (a); pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL (LA) CONTRATANTE podrá retener, de los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas necesarias para ello. El (LA) CONTRATISTA exhibirá, a solicitud de EL (LA) CONTRATANTE y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero, en todo caso, EL (LA) CONTRATANTE conserva la facultad de repetir cualquier suma que por estos conceptos deba pagar. **OCTAVA.** - Antes de iniciar la obra EL (LA) CONTRATISTA obtendrá una póliza de seguros colectivo de vida para su personal y lo afiliará a la entidad promotora de salud que escoja y a las demás entidades que por Ley deba hacerlo. De lo contrario, EL (LA) CONTRATANTE, a su libre determinación, procederá a obtener la póliza y a efectuar las afiliaciones, cargando el valor de las primas y los aportes o cotizaciones al precio de este contrato. **NOVENA.** - Puesto que EL (LA) CONTRATISTA tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizarla con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera el pago de salarios ni prestaciones sociales a su favor ni a favor de los empleados que contrate, por parte de EL (LA) CONTRATANTE. Antes bien, deberá responder en forma inmediata en caso que EL (LA) CONTRATANTE sea condenado (a) o llamado (a) a juicio por alguna reclamación de los empleados de EL (LA) CONTRATISTA. **DÉCIMA.** - El (LA) CONTRATISTA responderá de los daños que él (ella) o sus dependientes ocasionen a terceros. **DÉCIMA PRIMERA.** - Cuando surjan graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. **DÉCIMA SEGUNDA.** - EL (LA) CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte de EL (LA) CONTRATISTA si es persona natural, o disolución o liquidación si se trata de sociedad; b) Incumplimiento de EL (LA) CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones en este contrato; y c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna. **DÉCIMA TERCERA.** - Toda ampliación del plazo de ejecución de la obra o de vigencia de las garantías, salvo cuando dicha ampliación obedezca a culpa o disposición de EL (LA) CONTRATANTE, deberá ser autorizada por éste (a) en forma escrita. **DÉCIMA CUARTA.** - Los materiales necesarios para la ejecución de la obra serán suministrados por:

DECIMA QUINTA. - Cualquier modificación a este contrato deberá hacerse por escrito con las firmas de las dos (2) partes.

CLÁUSULAS ADICIONALES:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día ( ), del mes de , del año ( ).

EL CONTRATANTE

Magdalena Rodrigues

39540760 B/to

C.C. o NIT. No.

TESTIGO Zoila Rosa 20.27794

C.C. o NIT. No.

EL CONTRATISTA

C.C. o NIT. No 3249042

TESTIGO

C.C. o NIT. No.

Nit:900.793.105-1

ORDEN DE PRODUCCION

es-tructura2os
avisos y módulos publicitarios s.a.s.

Nº 0580

Fecha: 13 10 2014.

Tel: 351 41 79 - Cel: 310 215 49 05 - 313 317 99 23
Dir: Cra. 29 No.10-86
E-mail:estructuradosdiseno@hotmail.com

Señor(es): magdalena Rodriguez | Nit/C.C.:

Dirección: | E-mail:

Telefono; 3142622388 | Ref:

Especificaiones	Vr.Unitario	Vr.Total
Impresión pendon y diseño		80.000

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en la cantidad y descripcion de la presente Orden de Produccion
TODO TRABAJO SE INICIA CON EL 50% Y SE ENTREGA ESTANDO COMPLETAMENTE CANCELADO

Acepta.

Firma /C.C.

Vendedor

Firma

ABONO 30.000
SALDO 50.000
TOTAL 80.000

es-tructura2os avisos y módulos publicitarios s.a.s.

Bogotá, agosto 18 de 2015

CUENTA DE COBRO

MAGDALENA RODRIGUEZ
Calle 68 B # 72 A – 22

DEBE A:

EZEQUIEL CARRASCO
CC. 19.084.548

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($3.200.000)

Por concepto de:

Fabricación e instalación de 1 Puerta de Garage de 2.60 x 220 y 1 Puerta Exterior de 200x080.

Cordialmente,

EZEQUIEL CARRASCO
CC. 19.084.548

SURTIPLAST CT SAS

ROLLOS Y BOLSAS DE POLIETILENO EN ALTA Y BAJA DENSIDAD

ALMACÉN CARVAJAL: Calle 35 sur Nº 69-27
Tel.: 703 6159 - 703 5661
E-mail: ventas@surtiplastct.com

DIA 6 | MES 09 | AÑO 2017

ORDEN DE SALIDA

Nº 1058

Cliente: Nit 900.231017-0

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	
1.22	0 adan bres	220000
1.	Tejas con Soga	

Recibido y Aceptado:

NOMBRE Y C.C.

REVISE SU PEDIDO, DESPUÉS DE RETIRADO DEL ALMACÉN NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Entregado por:

220000

FERRETERÍA ELECTRICOS

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES): Magdalena Rodriguez

NIT.

CIUDAD

TEL:

DIRECCIÓN:

FECHA: DIA 18 | MES 09 | AÑO 16

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Metros polisombra		5000
2	chapas blancas		1000
	Nit: 1.030.565.098-9		

Observaciones

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 6000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO DE VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE JULIO DE

FERRETERÍA ELECTRICOS

FIRMA Y SELLO

CANCELADO
PUNTO FERRETERO LEÓN
310 308 4770

Dobladora Carvajal LTDA

Calle 35 Sur 70 - 07
Tels: 2991317- 4521891- 4517990
BOGOTÀ D.C - COLOMBIA
www.dobladoracarvajal.com
ventas@dobladoracarvajal.com

TABLEROS ESTAMPADOS, FERRETERIA, PERFILES Y ROLADOS, CORTE LÁSER, PUNZONADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, DOBLADORA Y CORTADORA CNC

NIT:. 800.164.244-6 IVA REGIMEN COMÙN
RES. DIAN 18763002320570 DE 2019-12-02 HASTA 2021-12-02 PREFIJO C DEL 100001 HASTA 120000 AUTORIZA FACTURA ELECTRÒNICA ICA - ACTIVIDAD ECONÒMICA: 2598. - TARIFA 11.04X1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTO RETENEDORES

CUFE:
b395d377235b9e799211ebfe4c3155e815 2c95549558a860371ea8dd86b82c4f52fad83e8a9d95b8a0b193771aa003e1

FACTURA DE VENTA No. C- 102248

NOMBRE:	CEDULA/NIT	TELEFONO:	BARRIO:
ZOILA ROSA RAMIREZ	20277941	3142622388	

RAZON SOCIAL:	DIRECCION:
ZOILA ROSA RAMIREZ	CL 68 B 72 A 22

CIUDAD:	ZONA:	VENDEDOR:	FECHA FACTURA:	VENCE:
BOGOTA		4	18/03/2020 12:00 a.m.	18-March-2020

ARTICULO	DESCRIPCION	UND	V/R UNITARIO	V/R DESC	VALOR TOTAL
T100384	TABLERO VERONA MARCO SENCILLO CAL20 175.4 X 72.5 PESTAÑA 1.5 + PINTURA COBRE MARTILLADO OSCURO	1.00	75,630.25	0.00	75,630.25

Dobladora Carvajal ENTREGADO

Dobladora Carvajal CANCELADO

Observaciones:

TOTAL 90.000 ABONO 65.000 10-03-20 SALDO 25.000 18-03-20
Basado en Pedidos de cliente 7960.

Pagos:

Banco de Bogotá, cuenta corriente 027000553
Bancolombia, cuenta corriente 99663467145
BBVA, cuenta ahorros 0187000200186515
Colpatria, cuenta corriente 1005153014

SUB-TOTAL	75,630.25
DESCUENTO	0.00
IVA	14,369.75
RETE/IVA	
RTE/FTE	
RETE/ICA	
TOTAL	90,000.00

Son:
noventa mil Pesos

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el ART. 774 del código de comercio: En caso de mora se causará el interés máximo legal vigente.

Recibido por:
Nombre:
Cedula: Sello

Condiciones para cambios: 30 dias para cambio a partir de la fecha de compra. Se debe traer la factura original. El producto y los empaques del mismo deben estar en optimas condiciones y completos. No se hacen devoluciones de dinero. No se hacen cambios de productos sobre medida.

Autorizo a Dobladora Carvajal LTDA a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias,

Apreciado Cliente; una vez se entregue su pedido, usted tiene máximo tres días hábiles para reclamar el material dejado en consignación, cumplido este plazo, si no reclama su material, Dobladora Carvajal no se hace responsable por el mismo, por lo tanto no habrá derecho a reclamo alguno.

13 | 11 | 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESACRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BROCHA		4.000
1/4	ESTUCO		7.500
	Nit: 1.030565.078-9		

PUNTO FERRETERO LEON
CANCELADO
310 808 4770

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. TOTAL $ 11 500

---

26 | 2 | 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

SEÑOR(ES): VICTOR ALFONSO

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESACRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TIMBRE INALAMBRICO		20.000
	Nit: 1030.565.078-9		

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. TOTAL $ 20.000

---

17 | 6 | 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES): ALFONSO RODRIGUEZ

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1/2	BULTO CEMENTO		14.000
1	LCHA PERA		5.000
	Nit. 1030.565.078-9		

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. TOTAL $ 19.000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7e24e2e22bcb015f08da160a2c2996a121089476520555dca4a0f007874d5a69816bce5c22853134274cc52277248f19

Número de Factura: OP-11215
Fecha de Emisión: 01/07/2022
Fecha de Vencimiento: 01/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA LA OPORTUNIDAD S.A.S
Nombre Comercial: FERRETERIA LA OPORTUNIDAD S.A.S
Nit del Emisor: 900497580
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15 11 33
Teléfono / Móvil: 3132515208
Correo: ferreterialaoportunidadsas@hotmail.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MAGDALENA RODRIGUEZ RMIREZ
Nombre Comercial: MAGDALENA RODRIGUEZ RMIREZ
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 39540760
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 68 B # 72 A -28
Teléfono / Móvil: 3142622388
Correo: anyilizethgaitan@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10016045	ALAMBRE PUA TORNADO 400 MT CL.16,5	NIU	1,00	$ 141.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.823,44	19.00			$ 141.176,00
2	70030003	GRAPA CERCA DE 1 Y 1 1/4 CORSAN *800GR	NIU	1,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.516,77	19.00			$ 7.983,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

FERRETERÍA ELECTRICOS

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES):

NIT. CIUDAD

FECHA: DIA MES AÑO 09 | 07 | 22

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Xe Lesabon		4000
1	1 lbr brala plastica		3000
	Nit: 1.030.565.078-9		

PUNTO FERRETERO LEÓN
NIT. 1.030.565.078-9
Cra. 71 A No. 67A-44 Boyacá Real
Cel: 322 779 1700 320 130 9171

Observaciones

SUB-TOTAL $ 7000

TOTAL $

FERRETERÍA - ELÉCTRICOS

Régimen No responsable de IVA

PAVCO *Luminex* Pintuco

ARENA - CEMENTO - MIXTO - LADRILLO - BLOQUE
ELECTRICOS - VARILLA - PINTURA - HERRAMIENTA

PEDIDO

FECHA 24 | 11 | 2022

CLIENTE:

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Brocha 1''		30000
1	Concentrado azul.		3000
	Nit: 1.030.565.078-9		
RECIBÍ		TOTAL $	33000

PUNTO FERRETERO LEÓN
NIT. 1.030.565.078-9
Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real
Cel. 322 779 1700 - 320 430 9171

Impreso por FERNANDO RESTREPO Cel. 315 318 98 85

Eternit® GRIVAL tesa

PUNTO FERRETERO LEÓN

Carol Daniela León Contreras
NIT. 1.030.565.078-9 Régimen simplificado
Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real
Cel: 322 779 1700 - 320 430 9171

FACTURA DE VENTA No.
20943

STANLEY GRIVAL GRICOL Gerfor SYLVANIA

Señor (s): Agapitus Rodrigues	Fecha: 10 marzo 2023
Forma de pago:	Nit: 39540760
Dirección:	Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Bolsas de		26000
2	Focos ahorrador blanco		4000

PUNTO FERRETERO LEÓN
CANCELADO
310 808 4770

Esta factura de venta constituye como título valor para todo efecto legal (Ley 1231 de 17/07/08 Art. 1al 9)

TOTAL $ 30.000

Punto Ferretero León

ACEPTADA

Firma y sello del cliente

VIDRIOS SAENZ
ALEMINIO Y VIDRIO
CALLE 36 SUR No. 69A - 39
TEL.: 230 41 57 - CEL.: 320 890 20 27
vidriosaenz@hotmail.com

Nit: 79.645.401

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA

DIA	MES	AÑO
20	3	2023

SEÑOR (ES) Magdalena Rodriguez.

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DETALLE	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
	instalacion de 30mts pvc.	$	900.000

VIDRIOS SAENZ
ALEMINIO Y VIDRIO
CALLE 36 SUR No. 69A - 39
TEL.: 230 41 57 - CEL.: 320 890 20 27
vidriosaenz@hotmail.com

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 900.000=

CONFORME EL COMPRADOR	VENDEDOR

Ciudad y Fecha: 31/03/23	COMPROBANTE DE VENTA
Señor(a):	No.
Dirección:	
Tel.: Forma de Pago:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bolillo llaneros		6000

PUNTO FERRETERO LEÓN CANCELADO 310 808 4770

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ART. 616 -2 E. T.)

TOTAL $ 6000

Nit: 1.030.565.078-9

Firma de Recibido

Firma Vendedor

¡SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

Ciudad y Fecha: 28 03 23	COMPROBANTE DE VENTA
Señor(a):	No.
Dirección:	
Tel.: Forma de Pago:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	pirgumh		5000

PUNTO FERRETERO LEÓN CANCELADO 310 808 4770

Nit: 1.030.565.078-9

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ART. 616 -2 E. T.)

TOTAL $ 5000

Firma de Recibido

Firma Vendedor

¡SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

02 04 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES): Magdalena Rodríguez

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bulto cemento		32000

PUNTO FERRETERO LEÓN NIT. 1.030.565.078-9 Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real Cel: 322 779 1700 - 320 430 9171

Nit: 1.030.565.078-9

DEPOSITO Y FERRETERIA

MATERIALES ELECTRICOS

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Ferredeposito LEÓN VARGAS NIT. 52.334.775-2 Calle 66 A No. 77-55 Cel. 322 301 07 48 / 313 457 90 22

COMPROBANTE DE VENTA

3 04 23

Cliente: Victor Alfonso Nit:

Dirección: Tel:

Forma de Pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	caja puntilla		5000
1	caja punt s.c.		6500

CEMEX Eternit Sika PAVCO STANLEY Security Solutions BLACK & DECKER

10 09 23

NOMBRE: Sra Magdalena

DIRECCIÓN: TEL

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Botella aflimmer		6000

PUNTO FERRETERO LEÓN
NIT. 1.030.565.078-9
Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real
Cel: 322 779 1700 - 320 430 9171

Firma Autorizada:

C.C.

TOTAL 6000

Documento soporte de compraventa
(Art. 616-2 ET)

FERRETERÍA - ELÉCTRICOS

Régimen No responsable de IVA

PAVCO Luminex Pintuco

ARENA - CEMENTO - MIXTO - LADRILLO - BLOQUE
ELECTRICOS - VARILLA - PINTURA - HERRAMIENTA

PEDIDO

FECHA 08 09 23

CLIENTE:

DIRECCIÓN: NIT:

CIUDAD: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Lona Roja		5000
1	Kg Cemento		4000
3	Mt tubo 1/2		12.000
3	Accesorios PVC		15.00

PUNTO FERRETERO LEÓN
NIT. 1.030.565.078-9
Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real
Cel: 322 779 1700 - 320 430 9171

N.t: 1.030-565078-9

RECIBI

11	04	23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES): MAGDALENA RODRIGUEZ

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CODO 1/2		600
1	UNION 1/2		500
1	ACOPLE		4.000
1	4g CEMENTO BLANCO		2.000

PUNTO FERRETERO LEON
NIT. 1.030.565.078-9
Cra. 74 A No. 67A-42 - Boyacá Real
Cel: 322 779 1700 - 320 330 91..

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL $ 7.100

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	04	23

☐ CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN
☐ ORDEN DE PEDIDO ☐ REMISIÓN

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. unitario	Valor TOTAL
1	BULTO PEGACOR		11.000
	Nit: 1.030. 565.078-9		

PUNTO FERRETERO LEÓN
CANCELADO
310 308 4770

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	04	23

☐ CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN
☐ ORDEN DE PEDIDO ☐ REMISIÓN

SEÑOR(ES): MAGDALENA

DIRECCIÓN: ______ CIUDAD: ______

C.C. / NIT: ______ FORMA DE PAGO ______

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. unitario	Valor TOTAL
1	Disco		6.500
	Nit:1.030.565.078-9		

PUNTO FERRETERO LEÓN
CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 6500

BOGOTA DC
Quiriguá: Carrera 92 N° 80e - 15
Tel: 9322014 Cel: 3217567664
Santa Helenita: Calle 72 N° 83 -31
Tel: 7669195 Cel: 3212532490
Spring: Av. Calle 130 N° 46a - 12
Tel: 9600900 Cel: 3000000000
BARRANQUILLA
San roque: Calle 30 N° 33 -122
Tel: 3855739 Cel: 3004666435

CIMAXCOL SAS
NIT : 901,354,071 - 0
CRA 72A 71 58
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3113463747 3113463747
cimaxcol@gmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 6,90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E1 3884

Cliente	MAGDALENA RODRIGUEZ RAMIREZ		
NIT	39,540,760 - 8 Id. Extranjero:	**Teléfono**	3142622388
Dirección	CL 68B 72A 22 BRR BOYACA REAL	**Vendedor**	WILLIAM ARMANDO MERA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	MAGDALENA1284@HOTMAIL.COM		0
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-21	09:46:42
Expedición	2023-04-21	09:47:04
Vencimiento	2023-04-21	

Bodega	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	TECHO PVC PLV 25 BLANCO BRILLANTE	25.29	12,184.87	308,155.46
1	ESQUINERO JX020 M BLANCA MATE	23.80	1,836.03	43,697.40
1	OMEGA NAL	14.00	3,361.34	47,058.82
1	VIGUETA NAL	10.00	3,361.34	33,613.45
1	ANGULO NAL	14.00	2,521.01	35,294.12

Total Bruto	467,819.25
IVA	88,885.66
Total a Pagar	**$ 556.704,91**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Boyaca | Efectivo | 556.704,91 | Cuota 1 Vence el 2023-04-21

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Setecientos Cuatro Pesos M/Cte Con 91/100

OBSERVACIONES

CIMAXCOL SAS
NIT. 901.354.071-0

POR FAVOR VERIFIQUE LA MERCANCÍA. DESPUÉS DE FIRMADA LA FACTURA SE ENTIENDE COMO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA _____

Firma Elaborado por : CAJA BOYACA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764038722569 **aprobado en** 2022-10-30 **vigente** 12 Meses. **prefijo** E1 **desde el número** 3112 **al** 20000

CUFE:f44bc02292772c3bdd3b729234fc2665644 3b0ca8b836df0bc233e148e898a95a7d48d917b344cfb474ef0e415ef5580

COPIA

Abono = 350.000
Saldo = 416.704 con transporte
+$39.000 = 455.700

BOGOTA DC
Quiriguá: Carrera 92 N° 80a - 15
Tel: 9122014 Cel: 3217567654
Santa Helenita: Calle 72 N° 83 -31
Tel: 7489195 Cel: 3212532490
Spring: Av. Calle 130 N° 46a - 12
Tel: 0000000 Cel: 3000000000
BARRANQUILLA
San roque: Calle 30 N° 33 -122
Tel: 3855739 Cel: 3004556435

CIMAXCOL SAS
NIT : 901,354,071 - 0
CRA 72A 71 58
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3113463747 3113463747
cimaxcol@gmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 6,90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E1 3884

Fecha y Hora de Factura			
Generación	2023-04-21	09:46:42	
Expedición	2023-04-21	09:47:04	
Vencimiento	2023-04-21		

Cliente	MAGDALENA RODRIGUEZ RAMIREZ		**Teléfono**	3142622388
NIT	39,540,760 - 8 Id. Extranjero:		**Vendedor**	WILLIAM ARMANDO MERA
Dirección	CL 68B 72A 22 BRR BOYACA REAL		**Centro Costo**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA			
Correo	MAGDALENA1284@HOTMAIL.COM			
Order Reference Prefijo			**Numero**	

Bodega	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	TECHO PVC PLV 25 BLANCO BRILLANTE	25.29	12,184.87	308,155.46
1	ESQUINERO JX020 M BLANCA MATE	23.80	1,836.03	43,697.40
1	OMEGA NAL	14.00	3,361.34	47,058.82
1	VIGUETA NAL	10.00	3,361.34	33,613.45
1	ANGULO NAL	14.00	2,521.01	35,294.12

Total Bruto	467,819.25
IVA	88,885.66
Total a Pagar	**$ 556.704,91**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Boyaca	Efectivo	556.704,91	Cuota 1 Vence el 2023-04-21

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Setecientos Cuatro Pesos M/Cte Con 91/100

OBSERVACIONES

CIMAXCOL SAS
NIT. 901.354.071-0

POR FAVOR VERIFIQUE LA MERCANCÍA. DESPUÉS DE FIRMADA LA FACTURA SE ENTIENDE COMO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA _____

Firma Elaborado por : CAJA BOYACA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764038722569 **aprobado en** 2022-10-30 **vigente** 12 Meses. **prefijo** E1 **desde el número** 3112 **al** 20000

CUFE:f44bc02292772c3bdd3b729234fc26656443b0ca8b836df0bc233e148e698a95a7d48d917b344cfb474ef0e415ef5580

COPIA

Abono = 350.000
Saldo = 416.704 con transporte
+$39.000 = 455.700

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

Formulario No.

AÑO GRAVABLE 2011	Formulario para declaración Sugerida del Impuesto Predial Unificado	20112010130088829 79 201

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0061LPSY	2. MATRICULA INMOBILIARIA 1244031	3. CEDULA CATASTRAL 68B 72A 36
4. DIRECCION CL 68B 72A 22		

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO		C. TARIFA Y EXENCIÓN			
5. TERRENO (m2) 118.00	6. CONSTRUCCIÓN (m2) 186.77	7. TARIFA 6	8. AJUSTE 66,000.00	9. EXENCION .00	

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ	11. IDENTIFICACIÓN CC 53255
12. DIRECCION DE NOTIFICACION CL 68 B 72 A 22	13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001

FECHAS LIMITES DE PAGO		HASTA 27/SEP/2011	HASTA 30/SEP/2011
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALUO (Base Gravable)	AA	83,064,000	83,064,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	432,000	432,000
16. SANCIONES	VS	107,000	107,000
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	0	0
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	432,000	432,000
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	539,000	539,000
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	539,000	539,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	0	0
22. INTERES DE MORA	IM	26,000	27,000
23. TOTAL A PAGAR	TP	565,000	566,000
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SI ☐ NO ☒ Mi aporte debe destinarse al proyecto No.			
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	43,000	43,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	608,000	609,000

Banco de Bogotá
Bogotá D.C. Dirección Distrital de Impuestos 2
01082030057930
(415)7707202600018(8020)01082030057930

SELLO O TIMBRE

Banco de Bogotá
082 Av 68 La Estrada
DOXPD8203 Horario Normal
Valor Cheque 43,000.00
Valor Efectivo 566,000.00
Valor Total:566,000.00
213T Impuestos Distritales

Banco de Bogotá
082-OFICINA
30 SEP 2011
CAJERO 3
RECIBIDO CON PAGO

CONTRIBUYENTE

5/201 120172 1/2 01349421196

AÑO GRAVABLE **2015**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario sugerido del Impuesto predial unificado

Formulario No. **2015201011609951522**

No. de referencia del recaudo **15010725421** **201**

223304

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP **AAA0061LPSY** | 2. MATRÍCULA INMOBILIARIA **050C01244031** | 3. CÉDULA CATASTRAL **68B 72A 36**

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO **CL 68B 72A 22**

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO | **C. TARIFA Y EXENCIÓN**

5. TERRENO (M^2) **118** | 6. CONSTRUCCIÓN (M^2) **186.77** | 7. TARIFA **6** | 8. AJUSTE **85,000** | 9. EXENCIÓN **0**

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL **ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ VILLALBA** | 11. IDENTIFICACIÓN **CC 53255**

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **CL 68B 72A 22** | 13. CÓDIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta **10/ABR/2015**	Hasta **19/JUN/2015**
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	163,496,000	163,496,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	896,000	896,000
16. SANCIONES	VS	0	0
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	105,000	105,000
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	791,000	791,000
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	791,000	791,000
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	791,000	791,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	79,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	712,000	791.000
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	79,000	79,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	791,000	870,000

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SÍ ☐ NO ☐ Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE **2015**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario sugerido del Impuesto predial unificado

Formulario No. **2015201011609951522**

No. de referencia del recaudo **15010725421** **201**

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Y DEL CONTRIBUYENTE

1. CHIP **AAA0061LPSY** | 2. DIRECCIÓN DEL PREDIO **CL 68B 72A 22**

3. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL **ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ VILLALBA** | 4. IDENTIFICACIÓN **CC 53255**

FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta **10/ABR/2015**	Hasta **19/JUN/2015**
B. PAGO			
5. TOTAL A PAGAR	TP	712,000	791,000
C. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
6. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	791,000	870,000

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá SÍ ☐ NO ☐ Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

SIN PAGO VOLUNTARIO

(415)7707202600856(8020)15010725421011848078(3900)0000000712000(96)20150410

(415)7707202600856(8020)15010725421061386756(3900)0000000791000(96)20150619

CON PAGO VOLUNTARIO

(415)7707202600856(8020)15010725421105196204(3900)0000000791000(96)20150410

(415)7707202600856(8020)15010725421123454098(3900)0000000870000(96)20150619

D. FIRMA DEL DECLARANTE

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. ☐ C.E. ☐ No.

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

AÑO GRAVABLE	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	Factura Impuesto Predial Unificado	No. Referencia Recaudo 17015468519	401
2017			Factura Número: 20172010416730309378	Código QR Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0061LP8Y	CL 68B 72A 22	050C01244031

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN	7. CALIDAD	8. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	9. MUNICIPIO
CC	53255	Herederos de ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ	PROPIETARIO	CL 68B 72A 22	BOGOTA, D.C.

10. * Herederos determinados e indeterminados

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

11. AVALUO CATASTRAL	12. DESTINO HACENDARIO	13. TARIFA	14. % EXENCIÓN
181,210,000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES	6.1	0

15. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO
1,105,000	121,000	984,000

D. PAGO

DESCRIPCIÓN		HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)	HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)
18. VALOR A PAGAR	VP	984,000	984,000
19. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	98,000	0
20. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
21. TOTAL A PAGAR	TP	886,000	984,000
E. PAGO CON PAGO VOLUNTARIO			
22. PAGO VOLUNTARIO	AV	98,000	98,000
23. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	984,000	1,082,000

HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa) HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)

☐ FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)170154685191691923350(3900)000000000984000(96)20170407

☐ FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)170154685191938481230(3900)000000001082000(96)20170616

☒ HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)

(415)7707202600856(8020)170154685190316838020(3900)000000000886000(96)20170407

☐ HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)

(415)7707202600856(8020)170154685190939385590(3900)000000000984000(96)20170616

ORIGINAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (BAT)

Banco de Bogotá
275-OF. PORTAL DE LA 80
06 ABR 2017
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

SELLO

Banco de Bogota 275 Portal de la 00
BOW727502 ****3288 Horario Normal
06/04/2017 7:27 AM Tran:187
C127530011G933 60968057
Valor Efectivo:886,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
TC o ND o CCONT:0.00
Valor Total:886,000.00
2144 Impuestos Distritales

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE
2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia Recaudo: 19011402142 — **401**

Factura Número: 20192010416128325 48

CÓDIGO QR Indicaciones de uso y respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0061LPSY	CL 68B 72A 22	050C01244031

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	53255	Herederos determinados e indeterminados de ALFONSO VICT	100	PROPIETARIO	CL 68B 72A 22	11001

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
207,189,000	61-RESIDENCIAL	6.1 x Mil	0	0

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1,264,000	0	1,264,000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 05/ABR/2019	HASTA 21/JUN/2019
20. VALOR A PAGAR	VP	1,264,000	1,264,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	126,000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1,138,000	1,264,000
E. PAGO ADICIONAL CON APORTE VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	126,000	126,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1,264,000	1,390,000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 05/ABR/2019

☐ FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)19011402142168355076(3900)00000001264000(96)20190405

HASTA 21/JUN/2019

☐ FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)19011402142131784186(3900)00000001390000(96)20190621

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 05/ABR/2019

☒

(415)7707202600856(8020)19011402142096262674(3900)00000001138000(96)20190405

HASTA 21/JUN/2019

☐

(415)7707202600856(8020)19011402142058733123(3900)00000001264000(96)20190621

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

Bta DC Direccion Distrital de Impuestos
048 20190403 13:10 SC B19 D 96262674
EF 1,138,000.00PIN 0540848403290
FORMU 19011402142 Recibido con Pago
52048010141011 AV VILLAS

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE

2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Factura
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo **20012691531** | **401**

Factura Número: 2020201041624778461

Código QR Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0061LPSY	CL 68B 72A 22	050C01244031

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	53255	Herederos de ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ	100	PROPIETARIO	CL 68B 72A 22	BOGOTA, D.C. (Bogota,

11. * Herederos determinados e indeterminados

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALUO CATASTRAL	232,269,000	13. DESTINO HACENDARIO	61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES	14. TARIFA	6.1	15. % EXENCIÓN	0	16. % EXCLUSIÓN	
17. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	1,417,000	18. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	41,000			19. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO			1,376,000

D. PAGO

DESCRIPCIÓN		HASTA 03/04/2020 (dd/mm/aaaa)	HASTA 19/06/2020 (dd/mm/aaaa)
20. VALOR A PAGAR	VP	1,376,000	1,376,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	138,000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1,238,000	1,376,000
E. PAGO CON PAGO VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	138,000	138,000
TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1,376,000	1,514,000

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA 03/04/2020 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600856(8020)200126915311264058l5(3900)0000001376000(96)20200403

☐ HASTA 19/06/2020 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

(415)7707202600656(8020)200126915311343713l5(3900)0000001514000(96)20200619

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

☐ HASTA 03/04/2020 (dd/mm/aaaa)

(415)7707202600856(8020)200126915310783068B3(3900)0000001238000(96)20200403

☐ HASTA 19/06/2020 (dd/mm/aaaa)

(415)7707202600856(8020)200126915310289465l2(3900)0000001376000(96)20200819

SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION (SAT)

SELLO

Ate DC Direccion Distrital de Impuestos
000 20200302 14:10 3C 1032 0 78306883
EF 1,238,000.00PIM 0145B587B43285
FORMU 20012691531 Recibido con Pago
5204801016497l AV VILLAS

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE
2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Declaración de Autoliquidación Electrónica con Asistencia Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo	101
21019495535	

Formulario Número:	2021301010106557291	Código QR Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	AAA0061LPSY	2. DIRECCIÓN	CL 68B 72A 22	3. MATRICULA INMOBILIARIA	1244031

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7.% PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	53255	ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ VILLALBA	100	PROPIETARIO	CL 68B 72A 22	BOGOTA, D.C. (Bogo

11. Y OTROS

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

12. AVALUO CATASTRAL	233,756,000	13. DESTINO HACENDARIO	61-RESIDENCIALES URBANOS Y	14. TARIFA	6.1	15. % EXENCIÓN	0	16. % EXCLUSIÓN	0
17. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	1,426,000	18. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	29,000			19. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO		1,397,000	

		HASTA 23/04/2021 (dd/mm/aaaa)	HASTA 18/06/2021 (dd/mm/aaaa)
20. SANCIÓN	VS	0	0
D. SALDO A CARGO			
21. TOTAL SALDO A CARGO	HA	1,397,000	1,397,000
E. PAGO			
22. VALOR A PAGAR	VP	1,397,000	1,397,000
23. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	140,000	0
24. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
25. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
26. TOTAL A PAGAR	TP	1,257,000	1,397,000
F. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporto voluntariamente un 10% adicional al		SI [ ] NO [X] Mi aporte debe destinarse al [ ]	
27. PAGO VOLUNTARIO	AV	0	0
28. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1,257,000	1,397,000

GENERAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

Fecha pago: 23/04/2021 14:04:10
Sucursal: 068 - CENTRO DE PAGOS PLAZA AMERICA
Caja: 002 Usuario: 9
Referencia: 21019495535 Adhesivo: 07588020035254
Valor: $ 1,257,000.00 RECIBIDO CON PAGO
Antes de retirarse favor validar el valor pagado

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE

2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Declaración de Autoliquidación Electrónica con Asistencia Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo	101
22010647126	

Formulario Número:	2022301010108908046	Código QR Indicaciones de uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0061LPSY	CL 68B 72A 22	1244031

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACION	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7.% PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	53255	ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ VILLALBA	100	PROPIETARIO	CL 68B 72A 22	BOGOTA, D.C. (Bogota,

11. Y OTROS

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

12. AVALÚO CATASTRAL	232,963,000	13. DESTINO HACENDARIO	61-RESIDENCIALES URBANOS Y	14. TARIFA	6.1	15. % EXENCIÓN 0	16. % EXCLUSIÓN 0
17. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	1,421,000	18. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	0	19. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO	1,421,000		

		HASTA 06/03/2022 (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
20. SANCIÓN	VS	0	
D. SALDO A CARGO			
21. TOTAL SALDO A CARGO	HA	1,421,000	
E. PAGO			
22. VALOR A PAGAR	VP	1,421,000	
23. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	142,000	
24. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	
25. INTERÉS DE MORA	IM	0	
26. TOTAL A PAGAR	TP	1,279,000	
F. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporto voluntariamente un 10% adicional al		SI [ ] NO [X] Mi aporte debe destinarse al [ ]	
27. PAGO VOLUNTARIO	AV	0	
28. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1,279,000	

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

DAVIVIENDA
04 MAR. 2022
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

AÑO GRAVABLE
2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 23012496251 | 401

Factura Número: 20230010418249615 82 | CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0061LPSY	CL 68B 72A 22	050C01244031

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	53255	ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ VILLALBA	100	PROPIETARIO	CL 68B 72A 22	BOGOTA, D.C.

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
253.595.000	61-RESIDENCIALES URBANOS Y R	6,1	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1.547.000	0	1.547.000

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 12/05/2023	HASTA 14/07/2023
20. VALOR A PAGAR	VP	1.547.000	1.547.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	155.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1.392.000	1.547.000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	155.000	155.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.547.000	1.702.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 12/05/2023

☐ BOGOTA SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856(8020)23012496251147792456(3900)0000001547000(96)20230512

HASTA 14/07/2023

☐ BOGOTA SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856(8020)23012496251159662674(3900)0000001702000(96)20230714

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 12/05/2023

☐

(415)7707202600856(8020)23012496251055324524(3900)0000001392000(96)20230512

HASTA 14/07/2023

☐

Magdalo Rodriguez
39540760

(415)7707202600856(8020)23012496251040133473(3900)0000001547000(96)20230714

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

51-712 H.N.
20 FEB,- 2023
RECIBIDO CON PAGO

CONTRIBUYENTE

TU CONTRIBUCIÓN VALE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano
NIT: 899.999.081-6

Valorización por Beneficio Local

CUENTA DE COBRO ACUERDO 523 DE 2013
Cobro Vigencia Año 1 de 1

Fecha de Emisión: 01-MAY-2017

Cuenta de Cobro No: 013293048

1. Información Básica

Dirección del Predio	Dirección Correspondencia	Nombre del Propietario o Poseedor
CL 68B 72A 22	CL 68B 72A 22	ALFONSO VICTOR RODRIGUEZ

Sujeto Tribu o	Chip	Matrícula Inmobiliaria	Codigo Zona de Influencia	Contribución Total
005603100300000000	AAA0061LPSY	050C01244031	AC523-02	$232,180

Area de Terreno Por Uso	Pisos o Densidad	Estrato	Nivel Geoeconómico	Grado de Beneficio	Código Uso	Uso
118.00	3	3		2	1100	Residencial

CONTRIBUYENTE

2. Estado Actual

Valor Vigencia	N° Cuotas Vigencia	N°Cuota a Pagar

3. Tasas de Interés Aplicadas en la Liquidación de la Deuda

	EA	EM
Intereses de Financiación	22.33	1.69
Intereses de Mora	33.50	2.44

4. Información de la Deuda

Saldo Vigencia	Valor Cuota Vigencia	Cuotas Pagadas Vigencia	Cuotas Pendientes Vigencia	Saldo en Mora	Mora Desde Año	Mes	Día
				224,110	2015	01	29

5. Opciones de Pago

Concepto	Capital	Intereses Financiación	Intereses de Mora	Ajustes 100	Total a Pagar	Pague Hasta
Pago Por Cuotas o Abonos						
Pago Total Deuda	224,110	0	56,478	12	280,600	31/05/2017

Importante: Lea la información al respaldo

BOGOTÁ

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
ESTADO DE CUENTA DETALLADO POR PREDIO

09/05/2023 15:19:44

predial

INFORMACION ACTUAL DEL PREDIO

PREDIO	CL 68B 72A 22
CHIP	AAA0068UPSY
MATRICULA INMOBILIARIA	50C-1871
CEDULA CATASTRAL	68B 72A 36

Reporte detallado del 01/01/1998 *al* 08/09/2023

Fecha Activación 01/01/1998 *Fecha Inactivación*

Tasa de Interes Vigente 11.41 % Anual

MOVIMIENTO DE CUENTA					DECLARACIÓN AUTOAVALÚO			DISTRIBUCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS							SALDO PENDIENTE DE PAGO			DEUDA	
AÑO	TIPO DOC	ATENDIDO	ESTADO	DOCUMENTO ESPECIFICO	FECHA PRESENTA	IMPUESTO LIQUIDA	SANCION LIQUIDA	INTERES PAGADO SEC	INTERES PAGADO IP	SANCION	INTERESES	DESCUENTOS ATDI	DESCUENTOS CO	DESCUENTOS TDI	IMPUESTO	SANCION	INTERESES	IMPUESTO	SANCION
1998																			
1999																			
2000																			
2001																			
2002																			
2003																			
2004																			
2005																			
2006																			
2007																			
2008																			
2009																			
2010																			
2011																			
2012																			
2013																			
2014																			
2015																			
2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			

BOGOTÁ

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
ESTADO DE CUENTA DETALLADO POR PREDIO

09/05/2023 13:19:44

predial

INFORMACION ACTUAL DEL PREDIO

PREDIO	CL 68B 73A 22
CHIP	AAA0[illegible]
MATRICULA INMOBILIARIA	[illegible]
CEDULA CATASTRAL	[illegible]

Reporte detallado del	[illegible]	*al*	[illegible]
Fecha Activación	[illegible]	*Fecha Inactivación*	
Tasa de Interes Vigente	[illegible]		

AÑO	TIPO DOC.	STICKER	ESTADO	IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE	FECHA PRESENTAC	IMPUESTO LIQUID.	SANCION LIQUID.	TOTAL PAGADO SDH	TOTAL PAGADO TF	SANCION	INTERESES	DESCUENTOS ADPB	DESCUENTOS DP	DESCUENTOS DH	IMPUESTO	SANCION	INTERESES	DESCUENTO	TOTAL DEUDA	SALDO A FAVOR
[illegible]	DEC.	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2017	FCL	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2018	FCL	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2019	FCL	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2020	FCL	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2021	DEC.	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2022	DEC.	[illegible]	ACT	CC-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2023	[illegible]																			

TOTAL ... [illegible]

[illegible]

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

W- 09449554

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Bogota D.C. 15/09/2019

ARRENDADOR (ES): Alfonso Rodriguez

Nombre e identificación Victor Alfonso Rodriguez

Nombre e identificación

ARRENDATARIO (S):

Nombre e identificación Angi Lizeth Cartán

Nombre e identificación 1072701378

Dirección del inmueble: Calle 68B # 72 A22

Precio o canon: 200000 doscientos mil pesos ($)

Avalúo Catastral: ($)

Término de duración del contrato Indefinido ( ) Año (s)

Fecha de iniciación del contrato: Dia 15/09/2019 ( ), Mes

Año ( )

El inmueble consta de los servicios de: Agua, luz, Gas

Cuyo pago corresponde a:

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo convienen las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente contrato, el (los) arrendador (es) se obliga (n) a conceder a el (los) arrendatario (s) el goce del inmueble urbano destinado a vivienda cuyos linderos se determinan en la cláusula décima quinta de este contrato junto con los demás elementos que figuran en inventario separado firmado por las partes, y el (los) arrendatario (s), a pagar por este goce el canon o renta estipulado. **SEGUNDA.- PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO:** El (Los) arrendatario (s) se obliga (n) a pagar a el (los) arrendador (es) por el goce del inmueble y demás elementos, el precio o canon acordado en , la suma de 200.000 Doscientos mil pesos ($) dentro de los primeros Cuatro (4) dias de cada período contractual, a el (los) arrendador (es) o a su orden. El canon podrá ser incrementado anualmente de acuerdo con el porcentaje autorizado legalmente. Si el canon se pagare en cheque, el canon se considera satisfecho en la fecha de pago sólo una vez que el banco haga el respectivo abono siempre y cuando el cheque haya sido presentado en tiempo para su pago al respectivo banco. **TERCERA. - DESTINACION:** El (Los) arrendatario (s) se compromete (n) a darle al inmueble el uso para vivienda de él (ellos) y su (s) familia (s), y no podrá (n) darle otro uso, ni ceder, ni transferir el arrendamiento sin la autorización escrita de el (los) arrendador (es). El incumplimiento de esta obligación, dará derecho a el (los) arrendador (es) para dar por terminado este contrato y exigir la entrega del inmueble. En caso de cesión o subarriendo por parte de el (los) arrendatario (s), el (los) arrendador (es) podrá dar por terminado el contrato y exigir la entrega del inmueble, o podrá (n) celebrar un nuevo contrato de arriendo con los usuarios reales, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados a los cuales renuncia (n) expresamente el (los) arrendatario (s). **CUARTA. - RECIBO Y ESTADO:** El (Los) arrendatario (s) declara (n) que ha (n) recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado, conforme al inventario que se adjunta, el cual hace parte de este contrato; en el mismo se determinan los servicios, cosas y usos conexos. El (Los) arrendatario (s) se obliga (n) a la terminación del contrato a devolver al (los) arrendador (es) el inmueble en el mismo estado que se recibió, salvo el deterioro proveniente del transcurso del tiempo y el uso legítimo del bien arrendado. **QUINTA. - REPARACIONES:** El (los) arrendatario (s) tendrá (n) a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la Ley y no podrá (n) realizar otras sin el consentimiento escrito de el (los) arrendador (es). En caso que el (los) arrendatario (s) realice (n) reparaciones indispensables no locativas que se causen sin su culpa, a menos que las partes acuerden otra cosa, podrá (n) el (los) arrendatario (s) descontar el costo de las reparaciones del valor de la renta, sin que tales descuentos excedan el treinta por ciento (30%) del valor de la misma. Si el costo de las reparaciones fuere mayor, el (los) arrendatario (s) puede (n) descontar periódicamente hasta el treinta por ciento (30%) del valor de la renta, hasta completar el costo total. **SEXTA. - OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES:** a) De el (los) arrendador (es): **1.** El (Los) arrendador (es) hará (n) entrega material del inmueble a el (los) arrendatario (s) el dia ( ), del mes de del año ( ) , en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y pondrá (n) a su disposición los servicios, cosas y usos conexos convenidos en el presente contrato, mediante inventario, del cual hará entrega a el (los) arrendatario (s), así como copia del contrato con firmas originales. En caso que el (los) arrendador (es) no suministre (n) a el (los) arrendatario (s) copia del contrato con firmas originales, será (n) sancionado (s) por la autoridad competente con multas equivalentes a tres (3) mensualidades de arrendamiento. **2.** Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. **3.** Librará (n) a el (los) arrendatario (s) de toda turbación en el goce del inmueble. **4.** Hacer las reparaciones necesarias del bien objeto del arriendo, y las locativas pero sólo cuando estas provinieren de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. **Parágrafo.** Cuando sea procedente, por tratarse de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal el (los) arrendador (es) hará (n) entrega a el (los) arrendatario (s) de una copia del reglamento interno de propiedad horizontal al que se encuentre sometido el inmueble. **5.** Cuando se trate de vivienda compartida, mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas y servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuibles a el (los) arrendatario (s), y garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. **6.** Expedir comprobante escrito en el que conste la fecha, cuantía y período al cual corresponde el pago del arrendamiento, so pena que sea (n) obligado (s), en caso de renuencia, por la autoridad competente. **7.** Las demás obligaciones contenidas en la ley. **b) De el (los) arrendatario(s): 1.** Pagar a el (los) arrendador (es) en el lugar y término convenido en la cláusula segunda del presente contrato, el precio del arrendamiento. Si el (los) arrendador (es) se rehúsa (n) a recibir el canon o renta, el (los) arrendatario (s) cumplirá (n) su obligación consignando dicho pago en la forma prevista en el artículo 10 de la ley 820 de 2003. **2.** Gozar del inmueble según los términos y espíritu de este contrato. **3.** Velar y cuidar por la conservación del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daño o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones del caso. **4.** Cumplir con las normas consagradas en el reglamento de propiedad horizontal, si estuviere sometido a dicho régimen. **5.** Restituir el inmueble a la terminación del contrato, en el estado en que le (s) fue entregado salvo el deterioro natural causado por el tiempo y el uso legítimo y poniéndolo a disposición de el (los) arrendador (es). El (Los) arrendatario (s) restituirá (n) el inmueble con todos los servicios públicos domiciliarios totalmente al día y a paz y salvo con las empresas prestadoras del servicio, y se obliga (n) a cancelar las facturas debidas que lleguen posteriormente pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso el (los) arrendador (es) será (n) responsable (s) por el pago de servicios o conexiones o acometidas que fueren directamente contratadas por el (los) arrendatario (s), salvo pacto expreso entre las partes. **6.** No hacer mejoras al inmueble distintas de las locativas, sin autorización de el (los) arrendador (es). Si las hiciere (n) serán de propiedad de este. **7.** El (Los) arrendador (es) se obliga (n) a promover y el (los) arrendatario (s) se comprometen a permitir la Revisión Técnica Reglamentaria de las instalaciones de gas natural realizada por la empresa y de los elementos que de este servicio dependan, y entregando al arrendador el documento donde consta el servicio, si el inmueble tiene este servicio público. Será de cargo de el (los) arrendador (es) el costo de dicha revisión y del reemplazo o reparación de los equipos según recomendación, y si estos fueron de el (los) arrendatarios este (os) deberá sufragar dicho (s) costo (s). **SÉPTIMA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Son causales de terminación unilateral del contrato, las de ley y especialmente las siguientes: **I. Por parte de el (los) arrendador (es):** 1. La no cancelación por parte de el (los) arrendatario (s) del precio del canon y reajustes dentro del término estipulado del mismo. **2.** La no cancelación de los servicios públicos que ocasione la

7 702124 012978 <

legis

Todos los derechos

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

del contrato o del goce del inmueble, o el cambio de destinación del inmueble sin consentimiento expreso de el (los) arrendador (es). 4. Las mejoras, cambios y ampliaciones que se hagan al inmueble sin autorización expresa de el (los) arrendador (es) o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte de el (los) arrendatario (s). 5. La incursión reiterada de el (los) arrendatario (s) en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen alguna contravención, debidamente comprobados ante la autoridad de policía. 6. La violación por el (los) arrendatario (s) de las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a este régimen. 7. El (Los) arrendador (es), con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la ley 820 de 2003 podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido a el (los) arrendatario (s) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el (los) arrendatario (s) estará (n) obligado (s) a restituir el inmueble. 8. El (Los) arrendador (es) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución, previo aviso escrito a el (los) arrendatario (s) a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor a tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento: a) Cuando el (los) propietario (s) o poseedor (es) del inmueble necesitare (n) ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor a un (1) año; b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación; c) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa; d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de ejecución. En este último caso el (los) arrendador(es) deberá (n) indemnizar a el (los) arrendatario (s) con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento. Cuando se trate de las causas previstas en los literales a), b) y c), el (los) arrendador (es) acompañará (n) al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por la compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor de el (los) arrendatario (s) por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de restitución. Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el procedimiento establecido en el artículo 23 de la ley 820 de 2003. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. **II. Por parte de el (los) arrendatario (s):** 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada de el (los) arrendador (es) o porque incurra (n) en mora en los pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el (los) arrendatario (s) podrá (n) optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le corresponda hacer como arrendatario (s). 2. La incursión reiterada de el (los) arrendador (es) en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal por el (los) arrendatario (s) del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policiva. 3. El desconocimiento por parte de el (los) arrendador (es) de los derechos reconocidos a el (los) arrendatario (s) por la Ley o el contrato. 4. El (los) arrendatario (s) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido a el (los) arrendador (es) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento y siguiendo el procedimiento que trata el artículo 25 de la ley 820 de 2003. Cumplidas estas condiciones el (los) arrendador (es) estará (n) obligado (s) a recibir el inmueble; si no lo hiciere (n), el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente con el procedimiento del artículo 24 de la ley 820 de 2003, sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. 5. El (Los) arrendatario (s) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando de (n) previo aviso escrito a el (los) arrendador (es) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el (los) arrendatario (s) no estará (n) obligado (s) a invocar causal alguna diferente a su plena voluntad, ni deberá (n) indemnizar a el (los) arrendador (es). De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. **Parágrafo:** No obstante, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato sin pago de indemnización alguna. **OCTAVA. - MORA:** Cuando el (los) arrendatario (s) incumpliere (n) el pago de la renta en la oportunidad, lugar y forma acordada en la cláusula segunda, el (los) arrendador (es) podrá (n) hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmente la restitución del inmueble. **NOVENA - CLÁUSULA PENAL:** Salvo lo que la ley disponga para ciertos casos, el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato, la constituirá en deudora de la otra por la suma de ( ) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha del incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del pago de la renta y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. En caso de mora en el pago del canon de arriendo, el (los) arrendador (es) podrá (n) cobrar ejecutivamente el valor de los cánones debidos, la pena aquí pactada, los servicios dejados de pagar por el (los) arrendatario (s), la indemnización de perjuicios, bastando para ello la sola afirmación del incumplimiento y estimación de los perjuicios y la presentación de este contrato. El (Los) arrendatario (s) renuncia (n) desde ya a cualquier tipo de constitución en mora que la ley exija para que le sea exigible la pena e indemnización que trata esta cláusula. **DÉCIMA - PRÓRROGA:** El presente contrato se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y, que el arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados por la Ley (Art.6. Ley 820 de 2003). **DÉCIMA PRIMERA - GASTOS:** Los gastos que cause la firma del presente contrato serán a cargo de:

DÉCIMA SEGUNDA - DERECHO DE RETENCIÓN: En todos los casos en los cuales el (los) arrendador (es) deba (n) indemnizar a el (los) arrendatario (s), este (os) no podrá (n) ser privado (s) del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el importe de ella por parte de el (los) arrendador (es). **DÉCIMA TERCERA - COARRENDATARIOS:** Para garantizar a el (los) arrendador (es) el cumplimiento de sus obligaciones, el(los) arrendatario (s) tiene (n) como coarrendatario (s) a mayor y vecino de , identificado (a) con y mayor y vecino de , identificado (a) con , quien (es) declara (n) que se obliga (n) solidariamente con el (los) arrendador (es) durante el término de duración del contrato y el de sus prórrogas y por el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste (os). **DÉCIMA CUARTA.** El (Los) arrendatario (s) faculta (n) expresamente a el (los) arrendador (es) para llenar en este documento el espacio en blanco destinado a los linderos. **DÉCIMA QUINTA. - LINDEROS DEL INMUEBLE:**

DECIMA SEXTA: Las partes firmantes señalan las siguientes direcciones para recibir notificaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día 15 (09), del mes de Septiembre del año (2019).

ARRENDADOR Victor

C.C o NIT. No 79095470

ARRENDATARIO

Anyi Gaitan.

C.C o NIT. No 1072701378.

ARRENDATARIO ( ) COARRENDATARIO ( )

cl 3219855879

COARRENDATARIO

C.C o NIT. No

C.C o NIT. No

Marque con una equis (X)

DOCUMENTOS nessan

AA-85156

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA No.

Ciudad y fecha del contrato Bogotá 24/04/2022

Arrendatarios Magdalena Rodriguez

Codeudor: Andersson Sosa Caitán

Tomamos en arriendo a Una habitacion un(a) ubicado(a) en la Calle 68 B# 72 A22 (Boyaca real) y comprendido bajo los siguientes linderos especiales: Con sus respectivos Servicios. Agua, Luz, Gas. Cocina y baño.

CLAUSULAS

1a. El plazo de este contrato será por Renovable cada año)meses a partir del día 24 ( )del mes de 04 del año(en letras) Veinti dos(2022)) hasta el día 24 ( )del mes de 04 del año(en letras) Dos mil Veintitres ( ), fecha en la cual el Arrendatario se obliga a devolver al Arrendador el inmueble en buen estado y a PAZ Y SALVO por todo concepto junto con los elementos descritos en el inventario anexo debidamente firmado por las partes, y que hace parte integral de este contrato. 2a. El canon será de 200.000 Doscientos mil Pesos ($) mensuales pagaderos dentro de los 5 Cinco ( )primeros días de cada mes, por anticipado en la siguiente dirección Calle 68 B # 72 A22. Del Arrendador o a su orden, canon que pagarán los Arrendatarios durante la vigencia del presente contrato. 3a. El término estipulado en el presente contrato será renovable de común acuerdo y por escrito, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y, que el Arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados por la ley. 4a. Los servicios de serán por cuenta del Y el cumplimiento y obligación de pagar dichos servicios se regirán según lo establecido en el artículo 15 de la ley 820 de 2003, cumpliendo las reglamentaciones que haga el gobierno al respecto. Igualmente el Arrendatario pagará a quien corresponda la cuota de administración (para bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal), de la misma forma cumplir con las normas y reglas de convivencia consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y las que expida el gobierno en protección de los derechos de los vecinos; el Arrendador hace entrega de una copia de las normas respectivas como establece el artículo 8 de la ley 820. PARÁGRAFO: El Arrendatario no podrá instalar lineas telefónicas adicionales, o cualquier otro servicio a nombre de los Arrendadores sin la aprobación Previa y escrita del ARRENDADOR. 5a. El inmueble se arrienda para destinarlo exclusivamente a vivienda. Igualmente esta obligado el ARRENDATARIO, a no usarlo para El ocultamiento de Personas, expendio o Almacenamiento de sustancias alucinógenas o Cualquierotro Elemento que atente contra la salud y la ley vigente. 6a. Las Partes , en cualquier tiempo, y de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato de vivienda urbana. 7a. SON CAUSALES PARA QUE EL ARRENDADOR PUEDA PEDIR UNILATERALMENTE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LAS SIGUIENTES: a) La no cancelación por parte del Arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. b) La no cancelación de los servicios públicos, que cause la desconexión o pérdida del servicio, o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo del Arrendatario. c) El subarriendo total o parcial, la cesión del contrato o del goce del inmueble, cambio de destinación del mismo por parte del Arrendatario, sin la expresa autorización del Arrendador. d) La incursión reiterada del Arrendatario y

www.nessan.com.co
2 0188969

autoridad policiva. e) La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin la debida autorización del Arrendador o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte del Arrendatario. f) La violación por parte del Arrendatario a las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal, cuando se trate de viviendas sometidas a ese régimen. g) El Arrendador podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el Arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. 8a. El Arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, previo aviso escrito al Arrendatario a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento, invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de restitución: a) Cuando el propietario o poseedor del inmueble necesitare ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor de un año. b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. c)Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro (4) años de ejecución. El Arrendador deberá indemnizar al Arrendatario con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento. Cuando se trate de las causales previstas en los literales a), b) y c) el Arrendador acompañará al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por una compañía de seguros autorizada, constituida a favor del Arrendatario por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada durante los seis (6)meses siguientes a la restitución. Cuando se trate del literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el mismo procedimiento establecido en el artículo 23 de la ley 820. 9a. CAUSALES PARA QUE EL ARRENDATARIO PUEDA PEDIR UNILATERALMENTE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: a) suspensión de la prestación de servicios públicos por acción premeditada del Arrendador, o porque incurra en mora en pagos que estuvieren a su cargo. b) El desconocimiento por parte del Arrendador de derechos reconocidos al Arrendatario por la ley. c) El Arrendatario podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al Arrendador a través del servicio postal autorizado, con una ántelación no menor a tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el Arrendador estará obligado a recibir el inmueble, si no lo hiciere,el Arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin prejuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. 10a.El Arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas , siempre y cuando dé previo aviso escrito al Arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el Arrendatario no estará obligado a invocar causal alguna diferente a la de su plena voluntad, ni deberá indemnizar al Arrendador. 11a. El valor de las indemnizaciones que establecen los artículos 23 y 25 de la ley 820, se hará con base en la renta vigente a la fecha del preaviso. 12a. Si muere uno de los Arrendatarios, el Arrendador puede acogerse al art.1434 del C. Civil respecto de uno cualquiera de sus herederos a su elección y seguir con el juicio sin demandar ni notificar a los demás. 13a. Los Arrendatarios aceptan desde ahora cualquier cesión total o parcial que el Arrendador haga de este contrato. 14a. El Arrendador queda autorizado por los Arrendatarios para determinar los linderos, llenando los espacios disponibles para este objeto. 15a. Las reparaciones locativas efectuadas por el Arrendatario sin previa autorización escrita del Arrendador serán propiedad del Arrendador y no podrán retirarlas ni exigir reembolso ni indemnización alguna. 16a .Las modificaciones a este contrato, tendrán valor solo si se hacen en forma expresa y por escrito. Los Arrendatarios pagarán los gastos que ocasione este contrato.. 17a. CLÁUSULA PENAL Con el incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento por parte de los Arrendatarios, el Arrendador podrá exigir la suma de ($), sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 18a. Tanto para los Arrendadores como para los Arrendatarios este contrato se rige por todos los derechos, obligaciones, disposiciones, y reglamentaciones que consagra la ley 820 de 2003, al igual que las disposiciones consagradas en el Capítulos II y III, Título XXVI,Libro 4 del Código Civil, y las demás leyes que lo regulen.

CLÁUSULAS ADICIONALES: Si se requieren clausulas adicionales se hará en Hojas anexas debidamente firmadas por las partes que suscriben este contrato. Igualmente acuerdan las partes que cualquier copia autenticada ante notario de Este Contrato tendrá el mismo valor que el Original para efectos legales y extrajudiciales.

Para constancia se firma el presente contrato en la ciudad de _____ a los _____ (__)días del mes de _____ del año(en letras) _____ (_____). Siguen las firmas

Arrendador Magdelvo Rodriguez R
Nombre 39540760
C.C./NIT 3142622388
Dirección/ Tel./Cel.
Correo electrónico

Arrendatario H
Nombre
C.C./NIT _____
Dirección/Tel./Cel.
Correo electrónico

Arrendatario Anderssón Sosa...
Nombre 1000 591 172
C.C./NIT
Dirección/Tel./Cel. 3134156671
Correo electrónico

Codeudor _____
Nombre
C.C./NIT
Dirección/ Tel./Cel.
Correo electrónico

Nota: Las direcciones que aquí aparecen, son las suministradas por los arrendatarios, arrendadores, codeudores o fiadores según el caso para recibir las notificaciones judiciales y extrajudiciales. Igualmente tienen la obligación de informar por escrito el cambio de las mismas

LINK AUDIENCIA SUSTENTACIÓN APELACIÓN:

44VideoAudiencia373.mp4

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ISAZA DAVILA RV: Recurso de Reposición - Proceso Rad. 11001 3103 007 2020 00010 01.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 4:00 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (989 KB)

RECURSO REPOSICIÓN NIEGA CASACION MAS CERTIF.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ISAZA DAVILA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Rodrigo Durán - M&D Abogados <rodrigo.duran@medellinduran.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 15:54
Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; dionisioaraujo@hotmail.com <dionisioaraujo@hotmail.com>; Luisa Fernanda Niño Carrillo <luisanino.legal@Outlook.com>
Cc: Juan José Sotelo - M&D Abogados <juan.sotelo@medellinduran.com>; Jefferson Coronado - M&D Abogados <Jefferson.Coronado@medellinduran.com>
Asunto: Recurso de Reposición - Proceso Rad. 11001 3103 007 2020 00010 01.

Honorables Magistrados

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

M.P. **Dr. JOSE ALFONO ISAZA DÁVILA**

secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por correo electrónico

REFERENCIA:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía
RADICADO NO.:	11001 3103 007 2020 00010 01.
DEMANDANTE:	GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
DEMANDADO:	PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
ASUNTO:	Recurso de reposición contra el Auto proferido el 29 de agosto de 2023.

Respetado doctor **ISAZA DÁVILA:**

RODRIGO ANTONIO DURÁN BUSTOS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.385.385 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 57.699 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de **GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.** (en adelante "**GASES DE LA GUAJIRA**"), obrando en los términos del artículo 318 del Código General del Proceso (en adelante "C.G.P."), me dirijo a su honorable despacho con el propósito de presentar **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del auto proferido el 29 de agosto de 2023.

Se anexa al presente mensaje de datos: (i) recurso de reposición; (ii) poder especial a mi conferido.

Cordialmente,

Rodrigo Antonio Durán Bustos

Socio Fundador
MEDELLÍN & DURÁN ABOGADOS
www.medellinduran.com
Calle 33 # 6B – 24 piso 7 y 8
PBX: (+57) 601 340 02 80
Bogotá D.C.

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

11 de septiembre, Bogotá D.C.

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SALA CIVIL

M.P. **JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA**

secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por correo electrónico

REFERENCIA:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía
RADICADO NO.:	11001 3103 007 2020 00010 01.
DEMANDANTE:	GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
DEMANDADO:	PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
ASUNTO:	Recurso de reposición contra el Auto proferido el 29 de agosto de 2023.

Respetados Magistrados:

RODRIGO ANTONIO DURÁN BUSTOS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.385.385 de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 57.699 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de **GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.** (en adelante "**GASES DE LA GUAJIRA**"), , obrando en los términos del artículo 318 del Código General del Proceso (en adelante "C.G.P."), de forma respetuosa presento **recurso de reposición** contra la decisión adoptada en el Auto del 29 de agosto de 2023 por el Tribunal Superior del Distritito Judicial de Bogotá – Sala Civil (en adelanta "El Tribunal", a través del cual, se negó el recurso extraordinario de casación, actuación que procedo a realizar en los siguientes términos:

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

I. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD

1. Mediante auto del 29 de agosto de 2023, notificado en estado electrónico del 6 de septiembre del año, el Tribunal denegó el recurso extraordinario de casación interpuesto por el suscrito contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023.

2. El artículo 318 del Código General del Proceso dispone que:

"*(…) el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (…) Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.*
PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente".

3. El auto que negó el recurso extraordinario de casación cobró ejecutoria el 7 de septiembre de 2023, por lo que el término de tres (3) días para sustentar el recurso vencen el once (11) del mismo mes.

4. Así las cosas, al momento de radicación del presente recurso de reposición, el mismo se entiende presentado de manera oportuna.

5. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo del artículo 318 mencionado, en caso de que, a juicio de este interprete se haya seleccionado de manera errónea el recurso a promover, solicito respetuosamente que, se tramite el mismo de conformidad con los criterios y reglas procedentes que considere el Tribunal.

II. LA DECISIÓN RECURRIDA

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Con Auto de 29 de agosto de 2023, el Tribunal decidió denegar el recurso extraordinario de casación interpuesto por el suscrito contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. La sentencia recurrida no es susceptible de dicho remedio, en la medida en que la parte recurrente carece del interés para tal fin, el cual, de conformidad con el artículo 338 del Código General del Proceso, debe exceder el equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Las pretensiones del demandante cuya valorización asciende a la suma de $480.000.000, junto con la indexación e intereses moratorios, no excede el mínimo exigido en el artículo 338 del Código General del Procedo.

3. De acuerdo con lo solicitado en las pretensiones principales de la demanda, no es posible calcular el interés para el recurso extraordinario, por cuanto en esas peticiones no se precisaron cifras concretas que especifiquen guarismos dinerarios definidos, utilizando expresiones tales como "*hasta el límite de la suma asegurada*".

4. De conformidad con la demanda y lo demostrado en el proceso, el eventual desmedro económico de la demandante quedó limitado a $480.000.000, suma pagada el 24 de diciembre de 2019 a los trabajadores de los contratistas José Alberto Fuentes Acosta y José Alberto Fuentes Acosta S.A.S., junto con el cálculo de los intereses moratorios.

5. Los intereses moratorios comerciales de $480.000.000, a partir del día siguiente en que se hizo el pago a los trabajadores (25 de diciembre de 2019), hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia (30 de junio de 2023), son $458.686.494,94, para un total de $938.686.494,94 (ver liquidación anexa), monto que no supera el límite mínimo para recurrir en casación.

6. No se puede aceptar la hipótesis de liquidar intereses moratorios comerciales al capital indexado, por cuanto se vulnerarían los topes legales de intereses al agregarle indexación a esos réditos, que son los máximos permitidos.

III. OBJETO DEL RECURSO

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Este recurso tiene como propósito que se revoque la decisión adoptada relacionada con no conceder el recurso extraordinario de casación presentado contra la sentencia de 30 de junio de 2023 y, en consecuencia, se conceda el mismo, de conformidad con los argumentos jurídicos que se proceden a desarrollar a continuación.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Con el respeto que nos caracteriza por las decisiones de los jueces de la República, nos apartamos de lo resuelto por El Tribunal, por las siguientes razones:

1. La parte que represento sí cumple con el interés legítimo para ser admitido el recurso extraordinario de casación, esto por cuanto, acredita los requisitos establecidos en el artículo 337 y 338 del Código General del Proceso.

2. Para efectos de justificación de lo anterior, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

2.1. El artículo 338 del Código General del Proceso dispone que:

> *"**Artículo 338. Cuantía del interés para recurrir.** Cuando las pretensiones sean **esencialmente económicas**, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a **un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)**. Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil (…)"*. Negrilla y subraya fuera del texto.

2.2. A partir de la anterior disposición, y en línea con lo manifestado por la Corte Constitucional, en sentencia C – 213 de 2017[1], en la cual se realizó un control de

[1] Para mayor información ver: Corte Constitucional, Sentencia C-213 de 2017: "*El primer inciso del artículo 338 del que hace parte la expresión demandada tiene, a juicio de la Corte, tres contenidos normativos importantes. Dos de ellos se desprenden directamente de su texto, al paso que el tercero se sigue de una interpretación sistemática que se apoya en las finalidades vinculadas al cambio legislativo en materia de casación y en una interpretación sistemática de la disposición*".

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

constitucionalidad respecto de esa disposición, se desprende que, las partes procesales están legitimadas para ejercer el recurso extraordinario de casación cuando acredite cualquiera de los siguientes supuestos:

- El primero, cuando se trate de pretensiones ***esencialmente económicas*****,** el accionante deberá acreditar que el valor actual de la resolución desfavorable sea superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.[2]

- El segundo, cuando se trate de acciones populares y de grupo, se excluye el interés económico para recurrir[3].

- El tercero, derivado de una interpretación sistemática realizada por la Corte Constitucional, en relación la finalidad en el cambio legislativo en materia de casación y, una interpretación sistemática de la disposición misma[4], ambas relacionadas con aquellas pretensiones que no son esencialmente de contenido económico, caso en el cual, el Tribunal no deberá tener en cuenta el monto mínimo exigido.

2.3. De acuerdo con lo anterior, la regulación incorporada en el Código General del proceso, además de incorporar el elemento económico en las pretensiones que son esencialmente de esa naturaleza, excluye de ese requerimiento **no sólo las sentencias que se pronuncien sobre pretensiones que no sean esencialmente**

---

[2] Ibídem: "*i) El primer contenido (i) prescribe que en los casos en los cuales las pretensiones sean esencialmente económicas el recurso procede si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente supera mil salarios mínimos legales mensuales vigentes*".

[3] Ibídem: "*El segundo (ii) establece un grupo de decisiones respecto de las cuales, bajo ninguna circunstancia, se requiere valorar la cuantía de la resolución desfavorable del recurrente. Se trata de las sentencias dictadas en el curso de acciones de grupo, acciones populares y las relativas al estado civil*".

[4] Ibídem. "*A juicio de la Corte, un tercer contenido (iii) dispone que en los casos de pretensiones no esencialmente económicas debe prescindirse de cualquier valoración de la cuantía (…) No le corresponde a la Corte establecer en esta oportunidad el significado preciso y definitivo de la expresión "cuando las pretensiones sean esencialmente económicas" del primer inciso del artículo 338 del Código General del Proceso. Sin embargo, lo que sí resulta claro y se integra al análisis que en esta oportunidad se efectúa, es que aquellas pretensiones que no sean fundamentalmente económicas, tal y como ocurre por ejemplo con las que tienen por objeto la declaración de responsabilidad civil pero que no traen aparejada una pretensión patrimonial sino una solicitud de reparación simbólica, artística o de no repetición[39] -conforme a las novedosas tendencias del régimen de responsabilidad que se ha venido abriendo paso- no se encontrarán sometidas a la exigencia de demostración de la cuantía para recurrir.*

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

económicas, sino también aquellas que resulten de las acciones populares, de grupo y las correspondientes al estado civil.

Así las cosas, bajo el entendimiento de la Corte Constitucional, con la reforma introducida en el Código General del Proceso el legislador extendió a otros casos la procedencia del recurso extraordinario de casación, con el objetivo de hacer posible que la Corte Suprema de Justicia pueda pronunciarse sin límite alguno de cuantía.

3. Para el caso en concreto, se está ante la configuración del primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del Proceso, relacionado con pretensiones esencialmente de orden económico, sin perjuicio de que subsidiariamente se solicite la aplicación del supuesto tercero del mencionado del artículo, tal cual como se procede a explicar a continuación:

3.1. Contrario a lo manifestado por el Despacho, el interés legítimo para presentar el recurso extraordinario de casación, reflejado en el agravio patrimonial que sufre mi representada con la decisión adoptada por el Tribunal, sí supera la suma de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.2. Lo anterior, se encuentra demostrado no sólo en el perjuicio acreditado en la sentencia de primera instancia, confirmada por el Tribunal, la cual asciende a la suma de $ 480.000.000, sino también, de la sumatoria que se debe realizar con ocasión de la indexación, los intereses y los diferentes riesgos asegurados en los contratos de póliza aportados, los cuales se hacen efectivos una vez se declare el incumplimiento por parte del CONTRATISTA, permitiendo reclamar los mismos a este.

Se destaca que en los contratos de seguro suscritos se contempla la posibilidad de reclamar lo honorarios de profesionales.

3.3. Entre los diferentes riesgos asegurados, se destaca no sólo la responsabilidad patronal por parte del CONTRATISTA, sino también todos los costos y gastos que implica ejercer las acciones que en derecho le corresponden a mi representado para hacer valer los derechos acá vulnerados, específicamente, la posibilidad de cobrar todos los honorarios causados por profesionales para atender esta situación.

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

3.4. Por minúscula que pueda llegar a ser la anterior situación, no se puede desconocer que, de acuerdo con la complejidad del caso y las pretensiones de este, se requiere de un equipo profesional y técnico para dar frente a esta situación, quienes en su debido derecho cobran sus respectivos honorarios, los cuales deben ser asumidos por el demandado y nos por mi representada, al encontrarse incorporados dentro de los riesgos detallados en las mencionadas pólizas.

3.5. De igual forma, las pretensiones invocadas se sujetan al monto máximo asegurado, justamente porque se incorporan riesgos no determinados pecuniariamente en este momento, pero determinables al agotarse todos los mecanismos judiciales que tiene mi representado para hacer valer sus derechos, como son, entre otros, los honorarios de los profesionales contratados para resolver la situación.

De esta forma, al tratarse de un conjunto de pretensiones de diferente naturaleza, cuya concreción genera el derecho a reclamar el reconocimiento de un derecho y, en consecuencia, el pago de distintas obligaciones pecuniarias no es posible presentar una cifra exacta relacionada con el agravio sufrido, sino por el contrario, pretender el máximo monto asegurado, previo definir la concreción de los distintos riesgos contemplados en los contratos de seguro.

3.6. El máximo monto asegurado supera el mínimo exigido por el artículo 338 del Código General del Proceso, acreditándose el valor requerido para la procedencia del recurso de casación presentado.

4. Ahora bien, en cuanto a la postura relacionada con la imposibilidad de tener en cuenta los intereses moratorios y la indexación del capital adeudado, es necesario precisar que los conceptos de indexación e intereses moratorios son diferentes, obedecen a circunstancias fácticas y jurídicas disímiles, veamos:

4.1. La primera, indexación tiene por objeto actualizar la deuda a valores reales a la fecha en que se declara su existencia y se imputa un pago, por cuanto el valor inicial de la deuda ha sido afectado por la pérdida del valor de la moneda (inflación) con

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

el paso del tiempo; la segunda, hace referencia al interés que se ha de pagar por no cancelar oportunamente una deuda (Art. 1608 del Código Civil)[5].

4.2. Si bien es cierto que la figura de los intereses moratorios trae consigo un componente de "*actualización monetaria*" por la depreciación sufrida por el paso del tiempo y la pérdida de oportunidad del uso del dinero, también lo es, que en Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección monetaria[6].

4.3. La razón de ser de los intereses moratorios obedece, en su esencia, a una sanción contra el deudor que no cumple con las prestaciones a su cargo (Véase, por ejemplo, artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo).

4.4. Por el contrario, la naturaleza de la indexación de capital escapa por completo del ámbito subjetivo o de comportamiento del deudor, pues busca mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda, mas no resarcir o imputar daño a un extremo contractual[7].

4.5. A modo de ejemplo, en materia tributaria, la Corte Constitucional ha precisado que los intereses moratorios pueden tener doble naturaleza u objeto, (i) una relativa a la compensación del detrimento patrimonial sufrido por el acreedor en virtud de la tardanza del deudor; y otra, (ii) la actualización de la deuda[8].

4.6. Esta doble naturaleza depende, prima facie, de la voluntad de las partes al momento de establecer la aplicación o no de los intereses moratorios. Por ejemplo,

---

[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de agosto de 2017. Rad. 50034. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2017/09/SP13300-201750034.pdf.
[6] Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2010. Rad. 73319-31-03-002-2001-00161.01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/03/13-05-10-7331931030022001-00161-01.pdf
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-231 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

en materia civil y comercial, la jurisprudencia sí ha admitido que se liquiden, de manera concomitante, intereses moratorios e indexación de capital[9].

4.7. En ambos eventos, se admite dicha posibilidad al entender que las tasas de interés moratorio allí contempladas no incluyen de suyo el proceso de indexación.

4.8. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el interés moratorio que se calcula, en paralelo a la indexación de capital, se impone en virtud de la ley para sancionar al deudor incumplido, conminando a su cumplimiento so pena de aumento en los valores adeudados, más aún cuando se trata de prestaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales.

4.9. En ese orden, dado que la ley que contempla dicho interés moratorio no incorpora en su cuerpo literal la inclusión de la indexación como uno de los fines de aquel, mal haría el intérprete en asumir que dicho proceso de actualización se entiende incorporado en la tasa de interés moratoria.

4.10. Para el presente caso, tanto la indexación como los intereses moratorios cumplen una función diferente y por lo tanto, deben ser reconocidos dentro de la liquidación a realizar; diferente sería la situación con los intereses corrientes, los cuales si están destinados a cubrir el detrimento patrimonial del mismo.

4.11. En ese sentido, para el presente caso, en el supuesto de que el Despacho considere que el mismo es uno de los contemplados en el primer presupuesto del artículo 338 del Código General del Proceso, para calcular el interés legítimo, deberá tenerse en cuenta, no sólo las pretensiones de orden económico incorporadas en la demanda, sino también, la indexación del capital, los intereses moratorios y la causación de los demás riesgos materializados en las pólizas de los contratos de seguro, como son, entre otros, los honorarios profesionales.

[9] Escobar, J. (2016). Las disimilitudes de las latas cortes en la liquidación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias en Colombia, en Revista Con-texto, n.º 45, pp. 117-141. doi: https://doi.org/10.18601/01236458.n45.07

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

4.12. La anterior situación, acredita el mínimo exigido por el artículo 338 del Código General del Proceso para proceder con la admisión del recurso extraordinario de casación presentado.

Para mayor claridad del Despacho, se aporta certificación suscrita por representante legal, acreditando el interés legitimo requerido, incluyendo los costos y gastos asumidos por mi representada, los cuales están desagregados en el capital, su indexación, intereses moratorios. Por su parte, a dicho valor, es necesario sumar los honorarios de los profesionales requeridos para este caso, los cuales se causaron para el ejercicio de este derecho y que se encuentran cubiertos por las pólizas de seguro.

4.13. Los anteriores valores, equivalen en su totalidad a las siguientes sumas:

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Gases de La Guajira
NIT: 892.115.036 - 6

1000-2023-000085

Riohacha, 11 de septiembre de 2023

GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO

EL SUSCRITO FUNCIONARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE GASES DE LA GUAJIRA S. A. E.S. P., ACTUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y, POR ENDE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTA SOCIEDAD, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICA Y HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

La liquidación de costos y gastos asumidos en el marco del proceso adelantado por GASES DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., contra LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, para efectos de demostrar la cuantía e interés legítimo para presentar el recurso extraordinario de casación y demás actos que se requieran, de conformidad con lo exigido en el artículo 338 del Código General del Proceso, es por el monto de:

- MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($1,417,520,812.01).

Adicionalmente por conceptos de representaciones asesorías y honorarios de profesionales de diversa índole la suma de:

- DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).

A la presente certificación se le anexa relación pormenorizada de las sumas antedichas. Firma quien hace constar, en Riohacha, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CAMILO JOSÉ OVALLE DAZA
C.C. No. 1.136.885.711 de Bogotá
Representante Legal

VIGILADO PUBLICA S.A.S.P.S. REG. NUIR 2 44001000 2

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

5. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, posición jurídica en la cual nos mantenemos y soportamos este recurso, en el supuesto en el que el Tribunal considere que no se encuentra acreditado el interés legítimo para el primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del Proceso, debe tenerse en cuenta que, las pretensiones del proceso no son exclusivamente de contenido patrimonial, por el contrario, son de naturaleza mixta porque pretenden la declaratoria de un derecho y su respectiva reparación, dando aplicación al tercer supuesto desarrollado por la jurisprudencia constitucional.

6. Para mayor claridad del Despacho, a continuación, se transcribe la totalidad de pretensiones invocadas en la demanda:

- *"PRIMERA: Que se declare la existencia y la validez del contrato de seguro celebrado entre el señor JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA, en su propio nombre, y la empresa aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por medio del cual el primero tomó la póliza de seguro de cumplimiento sector privado No. 3007450, con respecto al contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150135".*

- *"SEGUNDA. Que se declare, a su vez, que dicha póliza de cumplimiento sector privado No. 3007450 afianza el pago de las contingencias laborales (salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones) surgidas en ejecución del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, celebrado entre JOSE ALBERTO FUENTES y GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P".*

- *"TERCERA. Que se reconozca que el incumplimiento de las obligaciones laborales en cabeza de JOSÉ ALBERTO FUENTES surgidas en ejecución del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, es un hecho constitutivo de siniestro en los términos de la mencionada póliza de cumplimiento del sector privado No. 3007450".*

- *"CUARTA. Que, en consecuencia, se conmine a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a favor de GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., todas aquellas sumas de dinero a las cuales la sociedad que apodero resulte condenada en los procesos que en su contra sean promovidos por los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES, que*

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

prestaron sus servicios en la ejecución del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, hasta el límite de la suma asegurada".

- *"QUINTA. PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRINCIPAL: En subsidio de la PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL, para el evento de que en el curso del proceso se demuestre que se logró transigir y/o conciliar con los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES, sus pretensiones laborales derivadas de la ejecución de laboras en desarrollo del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, se condene a la demandada a pagar la suma de COP 52.800.000, o la que se compruebe en juicio, sin exceder la suma asegurada".*

- *"SEXTA. Que se declare la existencia y la validez del contrato de seguro celebrado entre el señor JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA, en su calidad de representante legal de JOSÉ ALBERTO FUENTES S.A.S. y la empresa aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por medio del cual el primero tomó la póliza de seguro de cumplimiento sector privado No. 3007643, con respecto al contrato de mantenimiento y servicios en instalaciones existentes No. 44-1-150136".*

- *"SÉPTIMA. Que se declare, a su vez, que dicha póliza de cumplimiento del sector privado No. 3007643 afianza el pago de las contingencias laborales (salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones) surgidas en ejecución del contrato de mantenimiento y servicio de instalaciones existentes No. 44-1-150136, celebrado entre JOSÉ ALBERTO FUENTES S.A.S. y GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P."*

- *"OCTAVA. Que se reconozca que el incumplimiento de las obligaciones laborales en cabeza de EL CONTRATISTA surgidas en ejecución del contrato de mantenimiento y servicio en instalaciones existentes No. 44-1-150136 es un hecho constitutivo de siniestro en los términos de la mencionada póliza de cumplimiento sector privado No. 3007643".*

- *"NOVENA. Que, en consecuencia, se conmine a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a favor de EL CONTRATANTE todas aquellas sumas de dinero a las cuales resulte condenada en los procesos que en su contra sean promovidos por los trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES S.A.S., que prestaron sus servicios en la ejecución del mantenimiento y servicio en instalaciones existentes No. 44-1-150136, hasta el límite de la suma asegurada".*

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

- *"DÉCIMA (SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL): En subsidio de la PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL, para el evento de que en el curso del proceso se demuestre que se logró transigir y/o conciliar con los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA S.A.S., sus pretensiones laborales derivadas de la ejecución de laboras en desarrollo del contrato No. 44-1-150136, se condene a la demandada a pagar la suma de $ 427.200.000, o la que se compruebe en juicio, sin exceder de la suma asegurada".*

- *"DÉCIMA PRIMERA. Que se condene a la demandada a pagar intereses moratorios a la tasa prevista por el artículo 1080 del Código de Comercio, esto es el interés bancario corriente aumentado en la mitad, desde el vencimiento del plazo allí señalado, sobre las condenas que se impongan a la sociedad demandad en acogimiento de las pretensiones anteriores".*

- *"DÉCIMA SEGUNDA. PRIMERA SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA PRINCIPAL. En subsidio de la pretensión anterior, solicito se condene a la demandada a pagar intereses moratorios a la tasa prevista por el artículo 1080 del Código de Comercio, esto es el interés bancario corriente aumentado en la mitad, desde la fecha en que la sociedad que apodere hubiere efectuado el pago de la suma transada y/o conciliada con los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA Y/O JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA S.A.S.".*

- *"DÉCIMA TERCERA. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA PRINCIPAL. En subsidio de la pretensión anterior, solicito se condene a la demandada al pago de la condigna corrección monetaria desde el acaecimiento de los siniestros ocurridos al amparo de las pólizas de seguro de cumplimiento No. 3007450 y 3007643, y de los correspondientes intereses de mora desde la notificación del auto admisorio de la presente demanda hasta la fecha en la cual se produzca el pago respectivo, a la tasa máxima legal".*

- *"DÉCIMA CUARTA. Solicito se condene a la demandada al pago de las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho".*

7. A partir de lo anterior, se desprende que, la intención y propósito de las pretensiones incorporadas en el escrito de la demanda no sólo tienen como propósito el reparo de un agravio económico sufrido por mi representado, sino por el contrario, que se declare la

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

existencia de un derecho, de una situación de incumplimiento y la causación de un daño y un perjuicio a reparar.

8. La anterior situación, implica la existencia de pretensiones mixtas, unas de orden económico y otras de orden declarativo, las cuales el Despacho desconoció por completo al considerar que el presente caso gira en torno únicamente a pretensiones esencialmente pecuniarias.

Se destaca que, las pretensiones de índole económico se encuentran detalladas de manera subsidiaria a las principales, por tal razón, mal haría este Despacho en considerar que este caso es de contenido exclusivamente económico.

9. En tal sentido, erró el honorable Tribunal al considerar que no se acreditó el interés legítimo en la cuantía de las pretensiones, pues para el presente caso, se está ante la existencia de pretensiones de contenido declarativo, que trascienden la esfera económica, junto con otras adicionales que pretenden reparar el daño y perjuicio causado.

10. En línea con lo expuesto anteriormente, se resaltan los argumentos expuestos por el Despacho relacionados con la ausencia de una cifra concreta que acredite el interés legítimo para solicitar el recurso extraordinario de casación, justamente para acreditar y demostrar todo lo contrario a lo entendido por el Despacho, esto es, que se está ante la presencia de un caso de aquellos contemplados en el tercer supuesto del artículo 338 del Código General del Proceso y, no del primero como lo entiende el Tribunal.

En línea coherente y argumentativa con lo aquí expuesto, este caso no se trata meramente de un proceso de contenido económico, sino por el contrario, tal y como se mencionó, se está ante una situación de contenido mixto, cuyas pretensiones son declarativas y otras de orden patrimonial, escapándose del primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del Proceso y, encuadrándose dentro de el tercer supuesto de creación jurisprudencial.

La anterior situación genera la imposibilidad de determinar el agravio económico, pues la intención de mi representado trasciende esas esferas, hasta el punto de solicitar que se declare una serie de incumplimientos que no son de contenido patrimonial, de ahí

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

que surja la dificultad e imposibilidad de determinar una cifra exacta, tal y como lo reconoce el Despacho.

11. Teniendo en cuenta todo lo anterior, a manera de resumen de lo manifestado, se tiene que, el presente caso debe tratarse de conformidad con el primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código de Comercio, relacionado con el interés legítimo y la cuantía mínima a acreditar, para lo cual, debe tenerse en cuenta la sumatoria de las demás sumas esgrimidas, esto es, el pago de los honorarios de profesionales, indexación y los intereses moratorios.

En caso de no considerar la postura presentada, debe tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en sentencia C-213 de 2017, se debe aplicar el tercer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del proceso, relacionado con la procedencia del recurso extraordinario de casación, para procesos cuyas pretensiones no son esencialmente de orden económico, sino que se excluyen del mismo o son mixtas.

V. SOLICITUD

Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos a lo largo del presente escrito, solicitamos respetuosamente del Honorable **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL – SALA CIVIL**, se sirva revocar la decisión adoptada el 29 de agosto de 2023, y en consecuencia, conceda el recurso extraordinario de casación.

VI. ANEXOS

De acuerdo con lo manifestado, se anexa Certificación suscrita por representante legal de mi representada, donde se acredita la liquidación pecuniaria para tener en cuenta el interés legítimo a acreditar de conformidad con el artículo 338 del Código de Comercio.

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Cordialmente,



RODRIGO ANTONIO DURÁN BUSTOS

C.C. No. 19.385.385 de Bogotá D.C.

T.P. No. 57.699 del C.S. de la J.

Apoderado Gases de la Guajira

1000-2023-000085

Riohacha, 11 de septiembre de 2023

GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO

EL SUSCRITO FUNCIONARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE GASES DE LA GUAJIRA S. A. E.S. P., ACTUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y, POR ENDE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTA SOCIEDAD, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICA Y HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

La liquidación de costos y gastos asumidos en el marco del proceso adelantado por GASES DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., contra LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, para efectos de demostrar la cuantía e interés legítimo para presentar el recurso extraordinario de casación y demás actos que se requieran, de conformidad con lo exigido en el artículo 338 del Código General del Proceso, es por el monto de:

- MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($1,417,520,812.01).

Adicionalmente por conceptos de representaciones asesorías y honorarios de profesionales de diversa índole la suma de:

- DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).

A la presente certificación se le anexa relación pormenorizada de las sumas antedichas. Firma quien hace constar, en Riohacha, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CAMILO JOSÉ OVALLE DAZA
C.C. No. 1.136.885.711 de Bogotá
Representante Legal

VIGILADO POR LA S.S.P.D. REG. NUIR 2 - 44001000-2

Saldo	$ 618,635,838.15			
Fecha Inicial	25/12/2019	31/12/2019	7	
Fecha Final	07/07/2023	01/07/2023	7	
	Dias	TMLV E.A.	TMLV D.V.	Intereses
dic-19	7	44.04%	0.10%	4,331,677
ene-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-20	29	44.04%	0.10%	17,945,518
mar-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ago-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
sep-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
oct-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
nov-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
dic-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ene-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-21	28	44.04%	0.10%	17,326,707
mar-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ago-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
sep-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
oct-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
nov-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
dic-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ene-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-22	28	44.04%	0.10%	17,326,707
mar-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ago-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
sep-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
oct-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
nov-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
dic-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ene-23	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-23	28	44.04%	0.10%	17,326,707
mar-23	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-23	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-23	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-23	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-23	7	44.04%	0.10%	4,331,677
	1,291			798,884,974
				$ 1,417,520,812.01

VIGILADO POR LA S.S.P.D. REG. NUIR 2 - 44001000 2

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN Sb2TjcDP1k

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANóNIMA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 892115036-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : RIOHACHA
DOMICILIO : RIOHACHA

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 5174
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 28 DE 1982
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 23 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 201,032,297,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 15 NRO. 14C-33
MUNICIPIO / DOMICILIO: 44001 - RIOHACHA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7273464
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gasguajira@gasguajira.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 15 NRO. 14C-33
MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA
TELÉFONO 1 : 7273464
CORREO ELECTRÓNICO : notificacionesjudiciales@gasguajira.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : notificacionesjudiciales@gasguajira.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : D3520 - PRODUCCION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

CERTIFICA – AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 566 DEL 07 DE JULIO DE 1980 OTORGADA POR Notaria Unica de Riohacha DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 59 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ENERO DE 1982, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P..

CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 892 DEL 22 DE JUNIO DE 1990 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 508 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 1990, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-154	19810401	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-1200	19810805
EP-96	19820308	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-282	19820209
EP-278	19820531	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-545	19870604
EP-837	19870812	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-807	19870819
EP-668	19880721	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-55	19880724
EP-235	19890310	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-119	19890313
EP-251	19890316	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-140	19890316
EP-847	19900611	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-466	19900611
EP-892	19900622	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-508	19900622
EP-892	19900622	NOTARIA UCA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-511	19900622
EP-1212	19900904	NOTARIA UCA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-835	19900907
EP-914	19910726	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-759	19910729
EP-1085	19920707	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-690	19920714
EP-898	19940519	NOTARIA UCA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-1832	19940523
EP-605	19941229	NOTARIA SEGUNDA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2006	19941230
EP-605	19950201	NOTARIA 2DA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2029	19950201
EP-957	19950620	NOTARIA PRIMERA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2236	19950620
EP-979	19960711	NOTARIA 1ERA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2532	19960715
AC-74	20050317	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	RIOHACHA	RM09-13369	20050517
EP-239	20080318	NOTARIA SEGUNDA	RIOHACHA	RM09-15176	20080319
EP-566	20100601	NOTARIA SEGUNDA	RIOHACHA	RM09-16982	20100611
EP-1266	20101118	NOTARIA SEGUNDA	RIOHACHA	RM09-17280	20101119
AC-97	20131219	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	RIOHACHA	RM09-20745	20140103
AC-362	20150227	JUNTA DIRECTIVA	BARRANQUILLA	RM09-21987	20150414

CERTIFICA – VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, TENDRÁ POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE RIOHACHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, COMO TAMBIÉN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO GASGUAJIRA S.A., E.S.P., DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES PRINCIPALES: A) CONSTRUIR Y OPERAR GASODUCTOS, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ESTACIONES DE REGULACIÓN, MEDICIÓN O COMPRESIÓN Y EN GENERAL CUALQUIER OBRA NECESARIA PARA EL MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES EN CUALQUIER ESTADO. B) FABRICAR, ENSAMBLAR, COMPRAR, VENDER, COMERCIALIZAR ELEMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE GASES COMBUSTIBLES. C) EXTRAER, ALMACENAR, TRANSFORMAR, TRATAR, TRANSPORTAR, COMPRAR Y DISTRIBUIR GASES COMBUSTIBLES. D) CELEBRAR CON LOS USUARIOS EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. E) FIJAR, LIQUIDAR, FACTURAR Y RECAUDAR LAS TARIFAS POR SUS SERVICIOS Y ESTABLECER EL PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LOS BIENES Y OBRAS ACCESORIAS A ESTOS, CIÑÉNDOSE A LA LEY Y A LAS DECISIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. F) PERCIBIR Y ADMINISTRAR SUBSIDIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE REGLAMENTARIOS Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES. G) ASOCIARSE, APORTAR O SUSCRIBIR ACCIONES EN SOCIEDADES QUE TENGAN POR LOS MISMOS SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PODRÁ ASOCIARSE, CONSORCIARSE, Y FORMAR UNIONES TEMPORALES CON DESARROLLAR TAL ACTIVIDAD. H) PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN LOS CAMPOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, EXPLOTAR Y DIVULGAR LOS RESULTADOS Y AVANCES OBTENIDOS CONFORMES A LAS NORMAS PERTINENTES Y CELEBRAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON ENTIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS. 1) GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES QUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL EJECUTE LA SOCIEDAD "E2 ENERGÍA EFICIENTE SA. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS." J) SUSCRIBIR

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA COFINANCIAR EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR RED DE TUBERÍAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, BAJO ESQUEMAS EN LOS CUALES LAS EMPRESAS COLABORADORAS DE LOS CONVENIOS ASUMAN LOS RIESGOS COMERCIALES Y, POR SU PARTE, LA COMPAÑÍA PRESTE SU INFRAESTRUCTURA. K) PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS NUEVAS Y EXISTENTES Y CENTROS DE MEDICIÓN, PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES. 1) FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE TERCEROS, DE CUALQUIER CLASE DE BIENES, SERVICIOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO ENUNCIADO, LA EMPRESA PODRÁ PROMOVER Y FUNDAR FÁBRICAS, ALMACENES, AGENCIAS, DEPÓSITOS O ESTABLECIMIENTOS, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTÍA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL SIEMPRE QUE SEA A FIN CON EL OBJETO PRINCIPAL, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, CELEBRAR CONTRATO DE MUTUO, SEGURO, TRANSPORTE, AGENCIA, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN Y DEMÁS CONTRATOS COMERCIALES; CONCURRIR A LICITACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y CONTRATACIÓN DIRECTA; CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE CUALQUIER ESPECIE QUE DESARROLLEN OBJETOS SIMILARES O QUE LE PERMITAN EJECUTAR SUS ACTIVIDADES SOCIALES EN FORMA MÁS AMPLIA Y TÉCNICA QUE LE FACILITEN LA COMPLEMENTACIÓN Y MEJOR DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, Y EN DICHAS SOCIEDADES PODRÁ APORTAR BIENES DE SU PROPIEDAD E INCLUSIVE FUSIONARSE CON ELLAS SI LAS CONVENIENCIAS ASÍ LO INDICAN.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.121,00	5.238.345,00	381,80
CAPITAL SUSCRITO	1.565.356.710,00	4.099.939,00	381,79999995122
CAPITAL PAGADO	1.565.356.710,00	4.099.939,00	381,79999995122

CERTIFICA – ACLARACIÓN INFORMACION DE CAPITALES, PATRIMONIOS Y SOCIOS

QUE, POR ESCRITURA PUBLICA NO. 239 DEL 18 DE MARZO DE 2008, OTORGADA POR LA NOTARIA SEGUNDA DE RIOHACHA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2008, BAJO EL NUMERO 15176 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE INSCRIBIO LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.: MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 8 °. DERECHO DE PREFERENCIA. Y SE AGREGA EL PARÁGRAFO: POR EL TERMINO DE SESENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DOCE (12) DE MARZO DE 2008, ES DECIR, DESDE EL 12 DE MARZO HASTA EL 12 DE MAYO DE 2008, SE LEVANTA EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA – SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 33769 DEL 08 DE JULIO DE 1998 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 752 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE AGOSTO DE 1998, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

SITUACION DE CONTROL DE LA CASA MATRIZ GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. CO N EL 76.59

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.

IDENTIFICACION : 8901016912

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO : RIOHACHA
PAIS : Colombia

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA – PRINCIPALES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	DAVILA MARTINEZ RAMON	CC 8,688,998

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	TAUTIVA MANCERA CAMILO	CC 79,880,600

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	MAZENETH DAVILA CARLOS	CC 79,506,291

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	CUELLO NAVARRO MARIO ALBERTO	CC 72,274,141

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	MARTINEZ APARICIO DE LA ESPRIELLA GABRIEL EDUARDO	CC 72,003,703

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA – SUPLENTES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	SANDOVAL SALGADO ROSANA ISABEL	CC 32,786,458

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	VALDERRAMA HERNANDEZ JOSE JOAQUIN	CC 79,277,375

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	LOPEZ HERNANDEZ JUAN CAMILO	CC 80,101,887

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023,

FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	VALENCIA ZUÑIGA SILVANA PATRICIA	CC 22,549,044

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	MARRUGO CAEZ ALBERTO ENRIQUE	CC 73,006,780

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 482 DEL 13 DE JUNIO DE 2023 DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37029 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	OVALLE DAZA CAMILO JOSE	CC 1,136,885,711

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 362 DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21987 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	CABELLO CARLOS AUGUSTO	CC 79,568,089

POR ACTA NÚMERO 421 DEL 20 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29074 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OVALLE DAZA CAMILO JOSE	CC 1,136,885,711

POR ACTA NÚMERO 421 DEL 20 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29074 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ACOSTA MANZUR ALBERTO ADOLFO	CC 72,042,585

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON DOS (2) SUPLENTES QUE LO REEMPLAZARAN EN SU ORDEN, EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO ABSOLUTO. SON FUNCIONES ESPECIALES DEL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS QUE DESARROLLEN SU OBJETO, DE ACUERDO CON LOS LIMITES DETERMINADO POR LA JUNTA DIRECTIVA; B) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE, HASTA POR LA SUMA EQUIVALENTE A 150 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES Y SOLICITAR CUANDO LA NATURALEZA O LA CUANTÍA DEL ACTO LO REQUIERA, LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y FAVORABLE DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE; C) PRESENTAR BALANCES ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA; D) DELEGAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ALGUNA O ALGUNAS DE SUS FUNCIONES O ATRIBUCIONES; E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS; F) INFORMAR DETALLADAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA Y EN SU CASO AL REVISOR FISCAL, SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRAR LOS DATOS EN INFORMES QUE SOLICITEN; G) CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA; H) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA A EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE ACUERDO A LA

PLANTA DE PERSONAL APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA; I) MANEJAR E INVERTIR, SEGÚN LAS DIRECTRICES SEÑALADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA; J) LLEVAR BAJO SU CUIDADO LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD; K) LAS DEMÁS QUE SEAN SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE ADSCRIBA LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTOS DE CARÁCTER GENERAL, QUE DEBERÁN SER DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL CUANDO QUIERA QUE SEA NECESARIO LOGRAR SU OPONIBILIDAD A TERCEROS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR OFICIO NÚMERO 4813 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33067 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CASTILLO RODRIGUEZ TATIANA MARGARITA	CC 1,045,673,148	230153-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR OFICIO NÚMERO 1 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33421 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	DIAZ CARDONA MELISSA ANDREA	CC 1,047,485,899	256742-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** GASES DE LA GUAJIRA
MATRICULA : 5175
FECHA DE MATRICULA : 19800724
FECHA DE RENOVACION : 20230323
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
DIRECCION : CR 15 NRO. 14C-33
MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA
TELEFONO 1 : 7273464
CORREO ELECTRONICO : gasguajira@gasguajira.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : D3520 - PRODUCCION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 201,032,297,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $134,939,116,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : D3520

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN Sb2TjcDP1k

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=30 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Sb2TjcDP1k

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



EL SECRETARIO
JOEL MANJARREZ CUESTA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ISAZA DAVILA RV: Recurso de Reposición - Proceso Rad. 11001 3103 007 2020 00010 01.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 4:00 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (989 KB)

RECURSO REPOSICIÓN NIEGA CASACION MAS CERTIF.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ISAZA DAVILA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Rodrigo Durán - M&D Abogados <rodrigo.duran@medellinduran.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 15:54
Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; dionisioaraujo@hotmail.com <dionisioaraujo@hotmail.com>; Luisa Fernanda Niño Carrillo <luisanino.legal@Outlook.com>
Cc: Juan José Sotelo - M&D Abogados <juan.sotelo@medellinduran.com>; Jefferson Coronado - M&D Abogados <Jefferson.Coronado@medellinduran.com>
Asunto: Recurso de Reposición - Proceso Rad. 11001 3103 007 2020 00010 01.

Honorables Magistrados

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

M.P. **Dr. JOSE ALFONO ISAZA DÁVILA**

secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por correo electrónico

REFERENCIA:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía
RADICADO NO.:	11001 3103 007 2020 00010 01.
DEMANDANTE:	GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
DEMANDADO:	PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
ASUNTO:	Recurso de reposición contra el Auto proferido el 29 de agosto de 2023.

Respetado doctor **ISAZA DÁVILA:**

RODRIGO ANTONIO DURÁN BUSTOS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.385.385 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 57.699 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de **GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.** (en adelante "**GASES DE LA GUAJIRA**"), obrando en los términos del artículo 318 del Código General del Proceso (en adelante "C.G.P."), me dirijo a su honorable despacho con el propósito de presentar **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra del auto proferido el 29 de agosto de 2023.

Se anexa al presente mensaje de datos: (i) recurso de reposición; (ii) poder especial a mi conferido.

Cordialmente,

Rodrigo Antonio Durán Bustos

Socio Fundador
MEDELLÍN & DURÁN ABOGADOS
www.medellinduran.com
Calle 33 # 6B – 24 piso 7 y 8
PBX: (+57) 601 340 02 80
Bogotá D.C.

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

11 de septiembre, Bogotá D.C.

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SALA CIVIL

M.P. **JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA**

secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por correo electrónico

REFERENCIA:	Proceso declarativo verbal de mayor cuantía
RADICADO NO.:	11001 3103 007 2020 00010 01.
DEMANDANTE:	GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
DEMANDADO:	PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
ASUNTO:	Recurso de reposición contra el Auto proferido el 29 de agosto de 2023.

Respetados Magistrados:

RODRIGO ANTONIO DURÁN BUSTOS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.385.385 de Bogotá D.C., portador de la tarjeta profesional No. 57.699 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de **GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.** (en adelante "**GASES DE LA GUAJIRA**"), , obrando en los términos del artículo 318 del Código General del Proceso (en adelante "C.G.P."), de forma respetuosa presento **recurso de reposición** contra la decisión adoptada en el Auto del 29 de agosto de 2023 por el Tribunal Superior del Distritito Judicial de Bogotá – Sala Civil (en adelanta "El Tribunal", a través del cual, se negó el recurso extraordinario de casación, actuación que procedo a realizar en los siguientes términos:

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

I. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD

1. Mediante auto del 29 de agosto de 2023, notificado en estado electrónico del 6 de septiembre del año, el Tribunal denegó el recurso extraordinario de casación interpuesto por el suscrito contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023.

2. El artículo 318 del Código General del Proceso dispone que:

"*(…) el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (…) Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.*
PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente".

3. El auto que negó el recurso extraordinario de casación cobró ejecutoria el 7 de septiembre de 2023, por lo que el término de tres (3) días para sustentar el recurso vencen el once (11) del mismo mes.

4. Así las cosas, al momento de radicación del presente recurso de reposición, el mismo se entiende presentado de manera oportuna.

5. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo del artículo 318 mencionado, en caso de que, a juicio de este interprete se haya seleccionado de manera errónea el recurso a promover, solicito respetuosamente que, se tramite el mismo de conformidad con los criterios y reglas procedentes que considere el Tribunal.

II. LA DECISIÓN RECURRIDA

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Con Auto de 29 de agosto de 2023, el Tribunal decidió denegar el recurso extraordinario de casación interpuesto por el suscrito contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2023, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. La sentencia recurrida no es susceptible de dicho remedio, en la medida en que la parte recurrente carece del interés para tal fin, el cual, de conformidad con el artículo 338 del Código General del Proceso, debe exceder el equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Las pretensiones del demandante cuya valorización asciende a la suma de $480.000.000, junto con la indexación e intereses moratorios, no excede el mínimo exigido en el artículo 338 del Código General del Procedo.

3. De acuerdo con lo solicitado en las pretensiones principales de la demanda, no es posible calcular el interés para el recurso extraordinario, por cuanto en esas peticiones no se precisaron cifras concretas que especifiquen guarismos dinerarios definidos, utilizando expresiones tales como "*hasta el límite de la suma asegurada*".

4. De conformidad con la demanda y lo demostrado en el proceso, el eventual desmedro económico de la demandante quedó limitado a $480.000.000, suma pagada el 24 de diciembre de 2019 a los trabajadores de los contratistas José Alberto Fuentes Acosta y José Alberto Fuentes Acosta S.A.S., junto con el cálculo de los intereses moratorios.

5. Los intereses moratorios comerciales de $480.000.000, a partir del día siguiente en que se hizo el pago a los trabajadores (25 de diciembre de 2019), hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia (30 de junio de 2023), son $458.686.494,94, para un total de $938.686.494,94 (ver liquidación anexa), monto que no supera el límite mínimo para recurrir en casación.

6. No se puede aceptar la hipótesis de liquidar intereses moratorios comerciales al capital indexado, por cuanto se vulnerarían los topes legales de intereses al agregarle indexación a esos réditos, que son los máximos permitidos.

III. OBJETO DEL RECURSO

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Este recurso tiene como propósito que se revoque la decisión adoptada relacionada con no conceder el recurso extraordinario de casación presentado contra la sentencia de 30 de junio de 2023 y, en consecuencia, se conceda el mismo, de conformidad con los argumentos jurídicos que se proceden a desarrollar a continuación.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Con el respeto que nos caracteriza por las decisiones de los jueces de la República, nos apartamos de lo resuelto por El Tribunal, por las siguientes razones:

1. La parte que represento sí cumple con el interés legítimo para ser admitido el recurso extraordinario de casación, esto por cuanto, acredita los requisitos establecidos en el artículo 337 y 338 del Código General del Proceso.

2. Para efectos de justificación de lo anterior, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

2.1. El artículo 338 del Código General del Proceso dispone que:

> *"**Artículo 338. Cuantía del interés para recurrir.** Cuando las pretensiones sean **esencialmente económicas**, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a **un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)**. Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil (…)"*. Negrilla y subraya fuera del texto.

2.2. A partir de la anterior disposición, y en línea con lo manifestado por la Corte Constitucional, en sentencia C – 213 de 2017[1], en la cual se realizó un control de

[1] Para mayor información ver: Corte Constitucional, Sentencia C-213 de 2017: "*El primer inciso del artículo 338 del que hace parte la expresión demandada tiene, a juicio de la Corte, tres contenidos normativos importantes. Dos de ellos se desprenden directamente de su texto, al paso que el tercero se sigue de una interpretación sistemática que se apoya en las finalidades vinculadas al cambio legislativo en materia de casación y en una interpretación sistemática de la disposición*".

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

constitucionalidad respecto de esa disposición, se desprende que, las partes procesales están legitimadas para ejercer el recurso extraordinario de casación cuando acredite cualquiera de los siguientes supuestos:

- El primero, cuando se trate de pretensiones ***esencialmente económicas*****,** el accionante deberá acreditar que el valor actual de la resolución desfavorable sea superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.[2]

- El segundo, cuando se trate de acciones populares y de grupo, se excluye el interés económico para recurrir[3].

- El tercero, derivado de una interpretación sistemática realizada por la Corte Constitucional, en relación la finalidad en el cambio legislativo en materia de casación y, una interpretación sistemática de la disposición misma[4], ambas relacionadas con aquellas pretensiones que no son esencialmente de contenido económico, caso en el cual, el Tribunal no deberá tener en cuenta el monto mínimo exigido.

2.3. De acuerdo con lo anterior, la regulación incorporada en el Código General del proceso, además de incorporar el elemento económico en las pretensiones que son esencialmente de esa naturaleza, excluye de ese requerimiento **no sólo las sentencias que se pronuncien sobre pretensiones que no sean esencialmente**

---

[2] Ibídem: "*i) El primer contenido (i) prescribe que en los casos en los cuales las pretensiones sean esencialmente económicas el recurso procede si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente supera mil salarios mínimos legales mensuales vigentes*".

[3] Ibídem: "*El segundo (ii) establece un grupo de decisiones respecto de las cuales, bajo ninguna circunstancia, se requiere valorar la cuantía de la resolución desfavorable del recurrente. Se trata de las sentencias dictadas en el curso de acciones de grupo, acciones populares y las relativas al estado civil*".

[4] Ibídem. "*A juicio de la Corte, un tercer contenido (iii) dispone que en los casos de pretensiones no esencialmente económicas debe prescindirse de cualquier valoración de la cuantía (…) No le corresponde a la Corte establecer en esta oportunidad el significado preciso y definitivo de la expresión "cuando las pretensiones sean esencialmente económicas" del primer inciso del artículo 338 del Código General del Proceso. Sin embargo, lo que sí resulta claro y se integra al análisis que en esta oportunidad se efectúa, es que aquellas pretensiones que no sean fundamentalmente económicas, tal y como ocurre por ejemplo con las que tienen por objeto la declaración de responsabilidad civil pero que no traen aparejada una pretensión patrimonial sino una solicitud de reparación simbólica, artística o de no repetición[39] -conforme a las novedosas tendencias del régimen de responsabilidad que se ha venido abriendo paso- no se encontrarán sometidas a la exigencia de demostración de la cuantía para recurrir.*

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

económicas, sino también aquellas que resulten de las acciones populares, de grupo y las correspondientes al estado civil.

Así las cosas, bajo el entendimiento de la Corte Constitucional, con la reforma introducida en el Código General del Proceso el legislador extendió a otros casos la procedencia del recurso extraordinario de casación, con el objetivo de hacer posible que la Corte Suprema de Justicia pueda pronunciarse sin límite alguno de cuantía.

3. Para el caso en concreto, se está ante la configuración del primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del Proceso, relacionado con pretensiones esencialmente de orden económico, sin perjuicio de que subsidiariamente se solicite la aplicación del supuesto tercero del mencionado del artículo, tal cual como se procede a explicar a continuación:

3.1. Contrario a lo manifestado por el Despacho, el interés legítimo para presentar el recurso extraordinario de casación, reflejado en el agravio patrimonial que sufre mi representada con la decisión adoptada por el Tribunal, sí supera la suma de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.2. Lo anterior, se encuentra demostrado no sólo en el perjuicio acreditado en la sentencia de primera instancia, confirmada por el Tribunal, la cual asciende a la suma de $ 480.000.000, sino también, de la sumatoria que se debe realizar con ocasión de la indexación, los intereses y los diferentes riesgos asegurados en los contratos de póliza aportados, los cuales se hacen efectivos una vez se declare el incumplimiento por parte del CONTRATISTA, permitiendo reclamar los mismos a este.

Se destaca que en los contratos de seguro suscritos se contempla la posibilidad de reclamar lo honorarios de profesionales.

3.3. Entre los diferentes riesgos asegurados, se destaca no sólo la responsabilidad patronal por parte del CONTRATISTA, sino también todos los costos y gastos que implica ejercer las acciones que en derecho le corresponden a mi representado para hacer valer los derechos acá vulnerados, específicamente, la posibilidad de cobrar todos los honorarios causados por profesionales para atender esta situación.

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

3.4. Por minúscula que pueda llegar a ser la anterior situación, no se puede desconocer que, de acuerdo con la complejidad del caso y las pretensiones de este, se requiere de un equipo profesional y técnico para dar frente a esta situación, quienes en su debido derecho cobran sus respectivos honorarios, los cuales deben ser asumidos por el demandado y nos por mi representada, al encontrarse incorporados dentro de los riesgos detallados en las mencionadas pólizas.

3.5. De igual forma, las pretensiones invocadas se sujetan al monto máximo asegurado, justamente porque se incorporan riesgos no determinados pecuniariamente en este momento, pero determinables al agotarse todos los mecanismos judiciales que tiene mi representado para hacer valer sus derechos, como son, entre otros, los honorarios de los profesionales contratados para resolver la situación.

De esta forma, al tratarse de un conjunto de pretensiones de diferente naturaleza, cuya concreción genera el derecho a reclamar el reconocimiento de un derecho y, en consecuencia, el pago de distintas obligaciones pecuniarias no es posible presentar una cifra exacta relacionada con el agravio sufrido, sino por el contrario, pretender el máximo monto asegurado, previo definir la concreción de los distintos riesgos contemplados en los contratos de seguro.

3.6. El máximo monto asegurado supera el mínimo exigido por el artículo 338 del Código General del Proceso, acreditándose el valor requerido para la procedencia del recurso de casación presentado.

4. Ahora bien, en cuanto a la postura relacionada con la imposibilidad de tener en cuenta los intereses moratorios y la indexación del capital adeudado, es necesario precisar que los conceptos de indexación e intereses moratorios son diferentes, obedecen a circunstancias fácticas y jurídicas disímiles, veamos:

4.1. La primera, indexación tiene por objeto actualizar la deuda a valores reales a la fecha en que se declara su existencia y se imputa un pago, por cuanto el valor inicial de la deuda ha sido afectado por la pérdida del valor de la moneda (inflación) con

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

el paso del tiempo; la segunda, hace referencia al interés que se ha de pagar por no cancelar oportunamente una deuda (Art. 1608 del Código Civil)[5].

4.2. Si bien es cierto que la figura de los intereses moratorios trae consigo un componente de "*actualización monetaria*" por la depreciación sufrida por el paso del tiempo y la pérdida de oportunidad del uso del dinero, también lo es, que en Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección monetaria[6].

4.3. La razón de ser de los intereses moratorios obedece, en su esencia, a una sanción contra el deudor que no cumple con las prestaciones a su cargo (Véase, por ejemplo, artículo 141 del Código Sustantivo del Trabajo).

4.4. Por el contrario, la naturaleza de la indexación de capital escapa por completo del ámbito subjetivo o de comportamiento del deudor, pues busca mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda, mas no resarcir o imputar daño a un extremo contractual[7].

4.5. A modo de ejemplo, en materia tributaria, la Corte Constitucional ha precisado que los intereses moratorios pueden tener doble naturaleza u objeto, (i) una relativa a la compensación del detrimento patrimonial sufrido por el acreedor en virtud de la tardanza del deudor; y otra, (ii) la actualización de la deuda[8].

4.6. Esta doble naturaleza depende, prima facie, de la voluntad de las partes al momento de establecer la aplicación o no de los intereses moratorios. Por ejemplo,

---

[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de agosto de 2017. Rad. 50034. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2017/09/SP13300-201750034.pdf.
[6] Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2010. Rad. 73319-31-03-002-2001-00161.01. M.P. Edgardo Villamil Portilla. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/03/13-05-10-7331931030022001-00161-01.pdf
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-231 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

en materia civil y comercial, la jurisprudencia sí ha admitido que se liquiden, de manera concomitante, intereses moratorios e indexación de capital[9].

4.7. En ambos eventos, se admite dicha posibilidad al entender que las tasas de interés moratorio allí contempladas no incluyen de suyo el proceso de indexación.

4.8. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el interés moratorio que se calcula, en paralelo a la indexación de capital, se impone en virtud de la ley para sancionar al deudor incumplido, conminando a su cumplimiento so pena de aumento en los valores adeudados, más aún cuando se trata de prestaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales.

4.9. En ese orden, dado que la ley que contempla dicho interés moratorio no incorpora en su cuerpo literal la inclusión de la indexación como uno de los fines de aquel, mal haría el intérprete en asumir que dicho proceso de actualización se entiende incorporado en la tasa de interés moratoria.

4.10. Para el presente caso, tanto la indexación como los intereses moratorios cumplen una función diferente y por lo tanto, deben ser reconocidos dentro de la liquidación a realizar; diferente sería la situación con los intereses corrientes, los cuales si están destinados a cubrir el detrimento patrimonial del mismo.

4.11. En ese sentido, para el presente caso, en el supuesto de que el Despacho considere que el mismo es uno de los contemplados en el primer presupuesto del artículo 338 del Código General del Proceso, para calcular el interés legítimo, deberá tenerse en cuenta, no sólo las pretensiones de orden económico incorporadas en la demanda, sino también, la indexación del capital, los intereses moratorios y la causación de los demás riesgos materializados en las pólizas de los contratos de seguro, como son, entre otros, los honorarios profesionales.

[9] Escobar, J. (2016). Las disimilitudes de las latas cortes en la liquidación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias en Colombia, en Revista Con-texto, n.º 45, pp. 117-141. doi: https://doi.org/10.18601/01236458.n45.07

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

4.12. La anterior situación, acredita el mínimo exigido por el artículo 338 del Código General del Proceso para proceder con la admisión del recurso extraordinario de casación presentado.

Para mayor claridad del Despacho, se aporta certificación suscrita por representante legal, acreditando el interés legitimo requerido, incluyendo los costos y gastos asumidos por mi representada, los cuales están desagregados en el capital, su indexación, intereses moratorios. Por su parte, a dicho valor, es necesario sumar los honorarios de los profesionales requeridos para este caso, los cuales se causaron para el ejercicio de este derecho y que se encuentran cubiertos por las pólizas de seguro.

4.13. Los anteriores valores, equivalen en su totalidad a las siguientes sumas:

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Gases de La Guajira
NIT: 892.115.036 - 6

1000-2023-000085

Riohacha, 11 de septiembre de 2023

GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO

EL SUSCRITO FUNCIONARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE GASES DE LA GUAJIRA S. A. E.S. P., ACTUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y, POR ENDE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTA SOCIEDAD, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICA Y HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

La liquidación de costos y gastos asumidos en el marco del proceso adelantado por GASES DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., contra LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, para efectos de demostrar la cuantía e interés legítimo para presentar el recurso extraordinario de casación y demás actos que se requieran, de conformidad con lo exigido en el artículo 338 del Código General del Proceso, es por el monto de:

- MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($1,417,520,812.01).

Adicionalmente por conceptos de representaciones asesorías y honorarios de profesionales de diversa índole la suma de:

- DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).

A la presente certificación se le anexa relación pormenorizada de las sumas antedichas. Firma quien hace constar, en Riohacha, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CAMILO JOSÉ OVALLE DAZA
C.C. No. 1.136.885.711 de Bogotá
Representante Legal

VIGILADO PUBLICA S.A.S.P.S. REG. NUIR 2 44001000 2

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

5. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, posición jurídica en la cual nos mantenemos y soportamos este recurso, en el supuesto en el que el Tribunal considere que no se encuentra acreditado el interés legítimo para el primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del Proceso, debe tenerse en cuenta que, las pretensiones del proceso no son exclusivamente de contenido patrimonial, por el contrario, son de naturaleza mixta porque pretenden la declaratoria de un derecho y su respectiva reparación, dando aplicación al tercer supuesto desarrollado por la jurisprudencia constitucional.

6. Para mayor claridad del Despacho, a continuación, se transcribe la totalidad de pretensiones invocadas en la demanda:

- *"PRIMERA: Que se declare la existencia y la validez del contrato de seguro celebrado entre el señor JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA, en su propio nombre, y la empresa aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por medio del cual el primero tomó la póliza de seguro de cumplimiento sector privado No. 3007450, con respecto al contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150135".*

- *"SEGUNDA. Que se declare, a su vez, que dicha póliza de cumplimiento sector privado No. 3007450 afianza el pago de las contingencias laborales (salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones) surgidas en ejecución del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, celebrado entre JOSE ALBERTO FUENTES y GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P".*

- *"TERCERA. Que se reconozca que el incumplimiento de las obligaciones laborales en cabeza de JOSÉ ALBERTO FUENTES surgidas en ejecución del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, es un hecho constitutivo de siniestro en los términos de la mencionada póliza de cumplimiento del sector privado No. 3007450".*

- *"CUARTA. Que, en consecuencia, se conmine a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a favor de GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., todas aquellas sumas de dinero a las cuales la sociedad que apodero resulte condenada en los procesos que en su contra sean promovidos por los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES, que*

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

prestaron sus servicios en la ejecución del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, hasta el límite de la suma asegurada".

- *"QUINTA. PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRINCIPAL: En subsidio de la PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL, para el evento de que en el curso del proceso se demuestre que se logró transigir y/o conciliar con los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES, sus pretensiones laborales derivadas de la ejecución de laboras en desarrollo del contrato de construcción de internas acometidas y otros No. 44-1-150134, se condene a la demandada a pagar la suma de COP 52.800.000, o la que se compruebe en juicio, sin exceder la suma asegurada".*

- *"SEXTA. Que se declare la existencia y la validez del contrato de seguro celebrado entre el señor JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA, en su calidad de representante legal de JOSÉ ALBERTO FUENTES S.A.S. y la empresa aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por medio del cual el primero tomó la póliza de seguro de cumplimiento sector privado No. 3007643, con respecto al contrato de mantenimiento y servicios en instalaciones existentes No. 44-1-150136".*

- *"SÉPTIMA. Que se declare, a su vez, que dicha póliza de cumplimiento del sector privado No. 3007643 afianza el pago de las contingencias laborales (salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones) surgidas en ejecución del contrato de mantenimiento y servicio de instalaciones existentes No. 44-1-150136, celebrado entre JOSÉ ALBERTO FUENTES S.A.S. y GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P."*

- *"OCTAVA. Que se reconozca que el incumplimiento de las obligaciones laborales en cabeza de EL CONTRATISTA surgidas en ejecución del contrato de mantenimiento y servicio en instalaciones existentes No. 44-1-150136 es un hecho constitutivo de siniestro en los términos de la mencionada póliza de cumplimiento sector privado No. 3007643".*

- *"NOVENA. Que, en consecuencia, se conmine a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a favor de EL CONTRATANTE todas aquellas sumas de dinero a las cuales resulte condenada en los procesos que en su contra sean promovidos por los trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES S.A.S., que prestaron sus servicios en la ejecución del mantenimiento y servicio en instalaciones existentes No. 44-1-150136, hasta el límite de la suma asegurada".*

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

- *"DÉCIMA (SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL): En subsidio de la PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL, para el evento de que en el curso del proceso se demuestre que se logró transigir y/o conciliar con los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA S.A.S., sus pretensiones laborales derivadas de la ejecución de laboras en desarrollo del contrato No. 44-1-150136, se condene a la demandada a pagar la suma de $ 427.200.000, o la que se compruebe en juicio, sin exceder de la suma asegurada".*

- *"DÉCIMA PRIMERA. Que se condene a la demandada a pagar intereses moratorios a la tasa prevista por el artículo 1080 del Código de Comercio, esto es el interés bancario corriente aumentado en la mitad, desde el vencimiento del plazo allí señalado, sobre las condenas que se impongan a la sociedad demandad en acogimiento de las pretensiones anteriores".*

- *"DÉCIMA SEGUNDA. PRIMERA SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA PRINCIPAL. En subsidio de la pretensión anterior, solicito se condene a la demandada a pagar intereses moratorios a la tasa prevista por el artículo 1080 del Código de Comercio, esto es el interés bancario corriente aumentado en la mitad, desde la fecha en que la sociedad que apodere hubiere efectuado el pago de la suma transada y/o conciliada con los ex trabajadores de JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA Y/O JOSÉ ALBERTO FUENTES ACOSTA S.A.S.".*

- *"DÉCIMA TERCERA. SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA PRINCIPAL. En subsidio de la pretensión anterior, solicito se condene a la demandada al pago de la condigna corrección monetaria desde el acaecimiento de los siniestros ocurridos al amparo de las pólizas de seguro de cumplimiento No. 3007450 y 3007643, y de los correspondientes intereses de mora desde la notificación del auto admisorio de la presente demanda hasta la fecha en la cual se produzca el pago respectivo, a la tasa máxima legal".*

- *"DÉCIMA CUARTA. Solicito se condene a la demandada al pago de las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho".*

7. A partir de lo anterior, se desprende que, la intención y propósito de las pretensiones incorporadas en el escrito de la demanda no sólo tienen como propósito el reparo de un agravio económico sufrido por mi representado, sino por el contrario, que se declare la

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

existencia de un derecho, de una situación de incumplimiento y la causación de un daño y un perjuicio a reparar.

8. La anterior situación, implica la existencia de pretensiones mixtas, unas de orden económico y otras de orden declarativo, las cuales el Despacho desconoció por completo al considerar que el presente caso gira en torno únicamente a pretensiones esencialmente pecuniarias.

Se destaca que, las pretensiones de índole económico se encuentran detalladas de manera subsidiaria a las principales, por tal razón, mal haría este Despacho en considerar que este caso es de contenido exclusivamente económico.

9. En tal sentido, erró el honorable Tribunal al considerar que no se acreditó el interés legítimo en la cuantía de las pretensiones, pues para el presente caso, se está ante la existencia de pretensiones de contenido declarativo, que trascienden la esfera económica, junto con otras adicionales que pretenden reparar el daño y perjuicio causado.

10. En línea con lo expuesto anteriormente, se resaltan los argumentos expuestos por el Despacho relacionados con la ausencia de una cifra concreta que acredite el interés legítimo para solicitar el recurso extraordinario de casación, justamente para acreditar y demostrar todo lo contrario a lo entendido por el Despacho, esto es, que se está ante la presencia de un caso de aquellos contemplados en el tercer supuesto del artículo 338 del Código General del Proceso y, no del primero como lo entiende el Tribunal.

En línea coherente y argumentativa con lo aquí expuesto, este caso no se trata meramente de un proceso de contenido económico, sino por el contrario, tal y como se mencionó, se está ante una situación de contenido mixto, cuyas pretensiones son declarativas y otras de orden patrimonial, escapándose del primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del Proceso y, encuadrándose dentro de el tercer supuesto de creación jurisprudencial.

La anterior situación genera la imposibilidad de determinar el agravio económico, pues la intención de mi representado trasciende esas esferas, hasta el punto de solicitar que se declare una serie de incumplimientos que no son de contenido patrimonial, de ahí

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

que surja la dificultad e imposibilidad de determinar una cifra exacta, tal y como lo reconoce el Despacho.

11. Teniendo en cuenta todo lo anterior, a manera de resumen de lo manifestado, se tiene que, el presente caso debe tratarse de conformidad con el primer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código de Comercio, relacionado con el interés legítimo y la cuantía mínima a acreditar, para lo cual, debe tenerse en cuenta la sumatoria de las demás sumas esgrimidas, esto es, el pago de los honorarios de profesionales, indexación y los intereses moratorios.

En caso de no considerar la postura presentada, debe tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en sentencia C-213 de 2017, se debe aplicar el tercer supuesto contemplado en el artículo 338 del Código General del proceso, relacionado con la procedencia del recurso extraordinario de casación, para procesos cuyas pretensiones no son esencialmente de orden económico, sino que se excluyen del mismo o son mixtas.

V. SOLICITUD

Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos a lo largo del presente escrito, solicitamos respetuosamente del Honorable **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL – SALA CIVIL**, se sirva revocar la decisión adoptada el 29 de agosto de 2023, y en consecuencia, conceda el recurso extraordinario de casación.

VI. ANEXOS

De acuerdo con lo manifestado, se anexa Certificación suscrita por representante legal de mi representada, donde se acredita la liquidación pecuniaria para tener en cuenta el interés legítimo a acreditar de conformidad con el artículo 338 del Código de Comercio.

M&D
Medellín
Durán
Abogados

315 335 3977
[+571] 340 0280
Calle 33 No. 6B-24 | Pisos 7 y 8
www.medellinduran.com

Cordialmente,



RODRIGO ANTONIO DURÁN BUSTOS

C.C. No. 19.385.385 de Bogotá D.C.

T.P. No. 57.699 del C.S. de la J.

Apoderado Gases de la Guajira

1000-2023-000085

Riohacha, 11 de septiembre de 2023

GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO

EL SUSCRITO FUNCIONARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE GASES DE LA GUAJIRA S. A. E.S. P., ACTUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y, POR ENDE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTA SOCIEDAD, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO CERTIFICA Y HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

La liquidación de costos y gastos asumidos en el marco del proceso adelantado por GASES DE LA GUAJIRA S.A., E.S.P., contra LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, para efectos de demostrar la cuantía e interés legítimo para presentar el recurso extraordinario de casación y demás actos que se requieran, de conformidad con lo exigido en el artículo 338 del Código General del Proceso, es por el monto de:

- MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($1,417,520,812.01).

Adicionalmente por conceptos de representaciones asesorías y honorarios de profesionales de diversa índole la suma de:

- DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).

A la presente certificación se le anexa relación pormenorizada de las sumas antedichas. Firma quien hace constar, en Riohacha, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

CAMILO JOSÉ OVALLE DAZA
C.C. No. 1.136.885.711 de Bogotá
Representante Legal

VIGILADO POR LA S.S.P.D. REG. NUIR 2 - 44001000-2

Saldo	$ 618,635,838.15			
Fecha Inicial	25/12/2019	31/12/2019	7	
Fecha Final	07/07/2023	01/07/2023	7	
	Dias	TMLV E.A.	TMLV D.V.	Intereses
dic-19	7	44.04%	0.10%	4,331,677
ene-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-20	29	44.04%	0.10%	17,945,518
mar-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ago-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
sep-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
oct-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
nov-20	30	44.04%	0.10%	18,564,329
dic-20	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ene-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-21	28	44.04%	0.10%	17,326,707
mar-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ago-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
sep-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
oct-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
nov-21	30	44.04%	0.10%	18,564,329
dic-21	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ene-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-22	28	44.04%	0.10%	17,326,707
mar-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ago-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
sep-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
oct-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
nov-22	30	44.04%	0.10%	18,564,329
dic-22	31	44.04%	0.10%	19,183,140
ene-23	31	44.04%	0.10%	19,183,140
feb-23	28	44.04%	0.10%	17,326,707
mar-23	31	44.04%	0.10%	19,183,140
abr-23	30	44.04%	0.10%	18,564,329
may-23	31	44.04%	0.10%	19,183,140
jun-23	30	44.04%	0.10%	18,564,329
jul-23	7	44.04%	0.10%	4,331,677
	1,291			798,884,974
				$ 1,417,520,812.01

VIGILADO POR LA S.S.P.D. REG. NUIR 2 - 44001000 2

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN Sb2TjcDP1k

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANóNIMA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 892115036-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : RIOHACHA
DOMICILIO : RIOHACHA

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 5174
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 28 DE 1982
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 23 DE 2023
ACTIVO TOTAL : 201,032,297,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 15 NRO. 14C-33
MUNICIPIO / DOMICILIO: 44001 - RIOHACHA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 7273464
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gasguajira@gasguajira.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 15 NRO. 14C-33
MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA
TELÉFONO 1 : 7273464
CORREO ELECTRÓNICO : notificacionesjudiciales@gasguajira.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : notificacionesjudiciales@gasguajira.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : D3520 - PRODUCCION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

CERTIFICA – AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 566 DEL 07 DE JULIO DE 1980 OTORGADA POR Notaria Unica de Riohacha DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 59 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ENERO DE 1982, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P..

CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 892 DEL 22 DE JUNIO DE 1990 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 508 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 1990, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-154	19810401	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-1200	19810805
EP-96	19820308	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-282	19820209
EP-278	19820531	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-545	19870604
EP-837	19870812	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-807	19870819
EP-668	19880721	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-55	19880724
EP-235	19890310	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-119	19890313
EP-251	19890316	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-140	19890316
EP-847	19900611	NOTARIA UCA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-466	19900611
EP-892	19900622	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-508	19900622
EP-892	19900622	NOTARIA UCA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-511	19900622
EP-1212	19900904	NOTARIA UCA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-835	19900907
EP-914	19910726	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-759	19910729
EP-1085	19920707	NOTARIA UNICA	RIOHACHA	RM09-690	19920714
EP-898	19940519	NOTARIA UCA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-1832	19940523
EP-605	19941229	NOTARIA SEGUNDA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2006	19941230
EP-605	19950201	NOTARIA 2DA. DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2029	19950201
EP-957	19950620	NOTARIA PRIMERA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2236	19950620
EP-979	19960711	NOTARIA 1ERA DE RIOHACHA	RIOHACHA	RM09-2532	19960715
AC-74	20050317	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	RIOHACHA	RM09-13369	20050517
EP-239	20080318	NOTARIA SEGUNDA	RIOHACHA	RM09-15176	20080319
EP-566	20100601	NOTARIA SEGUNDA	RIOHACHA	RM09-16982	20100611
EP-1266	20101118	NOTARIA SEGUNDA	RIOHACHA	RM09-17280	20101119
AC-97	20131219	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	RIOHACHA	RM09-20745	20140103
AC-362	20150227	JUNTA DIRECTIVA	BARRANQUILLA	RM09-21987	20150414

CERTIFICA – VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, TENDRÁ POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE RIOHACHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, COMO TAMBIÉN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO GASGUAJIRA S.A., E.S.P., DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES PRINCIPALES: A) CONSTRUIR Y OPERAR GASODUCTOS, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ESTACIONES DE REGULACIÓN, MEDICIÓN O COMPRESIÓN Y EN GENERAL CUALQUIER OBRA NECESARIA PARA EL MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES EN CUALQUIER ESTADO. B) FABRICAR, ENSAMBLAR, COMPRAR, VENDER, COMERCIALIZAR ELEMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL MANEJO DE GASES COMBUSTIBLES. C) EXTRAER, ALMACENAR, TRANSFORMAR, TRATAR, TRANSPORTAR, COMPRAR Y DISTRIBUIR GASES COMBUSTIBLES. D) CELEBRAR CON LOS USUARIOS EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. E) FIJAR, LIQUIDAR, FACTURAR Y RECAUDAR LAS TARIFAS POR SUS SERVICIOS Y ESTABLECER EL PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LOS BIENES Y OBRAS ACCESORIAS A ESTOS, CIÑÉNDOSE A LA LEY Y A LAS DECISIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. F) PERCIBIR Y ADMINISTRAR SUBSIDIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE REGLAMENTARIOS Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES. G) ASOCIARSE, APORTAR O SUSCRIBIR ACCIONES EN SOCIEDADES QUE TENGAN POR LOS MISMOS SERVICIOS O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PODRÁ ASOCIARSE, CONSORCIARSE, Y FORMAR UNIONES TEMPORALES CON DESARROLLAR TAL ACTIVIDAD. H) PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN LOS CAMPOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, EXPLOTAR Y DIVULGAR LOS RESULTADOS Y AVANCES OBTENIDOS CONFORMES A LAS NORMAS PERTINENTES Y CELEBRAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON ENTIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS. 1) GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES QUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL EJECUTE LA SOCIEDAD "E2 ENERGÍA EFICIENTE SA. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS." J) SUSCRIBIR

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA COFINANCIAR EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR RED DE TUBERÍAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, BAJO ESQUEMAS EN LOS CUALES LAS EMPRESAS COLABORADORAS DE LOS CONVENIOS ASUMAN LOS RIESGOS COMERCIALES Y, POR SU PARTE, LA COMPAÑÍA PRESTE SU INFRAESTRUCTURA. K) PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS NUEVAS Y EXISTENTES Y CENTROS DE MEDICIÓN, PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES. 1) FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE TERCEROS, DE CUALQUIER CLASE DE BIENES, SERVICIOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO ENUNCIADO, LA EMPRESA PODRÁ PROMOVER Y FUNDAR FÁBRICAS, ALMACENES, AGENCIAS, DEPÓSITOS O ESTABLECIMIENTOS, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTÍA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL SIEMPRE QUE SEA A FIN CON EL OBJETO PRINCIPAL, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, CELEBRAR CONTRATO DE MUTUO, SEGURO, TRANSPORTE, AGENCIA, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN Y DEMÁS CONTRATOS COMERCIALES; CONCURRIR A LICITACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y CONTRATACIÓN DIRECTA; CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN SOCIEDADES DE CUALQUIER ESPECIE QUE DESARROLLEN OBJETOS SIMILARES O QUE LE PERMITAN EJECUTAR SUS ACTIVIDADES SOCIALES EN FORMA MÁS AMPLIA Y TÉCNICA QUE LE FACILITEN LA COMPLEMENTACIÓN Y MEJOR DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, Y EN DICHAS SOCIEDADES PODRÁ APORTAR BIENES DE SU PROPIEDAD E INCLUSIVE FUSIONARSE CON ELLAS SI LAS CONVENIENCIAS ASÍ LO INDICAN.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.121,00	5.238.345,00	381,80
CAPITAL SUSCRITO	1.565.356.710,00	4.099.939,00	381,79999995122
CAPITAL PAGADO	1.565.356.710,00	4.099.939,00	381,79999995122

CERTIFICA – ACLARACIÓN INFORMACION DE CAPITALES, PATRIMONIOS Y SOCIOS

QUE, POR ESCRITURA PUBLICA NO. 239 DEL 18 DE MARZO DE 2008, OTORGADA POR LA NOTARIA SEGUNDA DE RIOHACHA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE MARZO DE 2008, BAJO EL NUMERO 15176 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE INSCRIBIO LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.: MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 8 °. DERECHO DE PREFERENCIA. Y SE AGREGA EL PARÁGRAFO: POR EL TERMINO DE SESENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DOCE (12) DE MARZO DE 2008, ES DECIR, DESDE EL 12 DE MARZO HASTA EL 12 DE MAYO DE 2008, SE LEVANTA EL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA – SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 33769 DEL 08 DE JULIO DE 1998 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 752 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE AGOSTO DE 1998, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

SITUACION DE CONTROL DE LA CASA MATRIZ GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. CO N EL 76.59

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.

IDENTIFICACION : 8901016912

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : GASES DE LA GUAJIRA S.A. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO. GASGUAJIRA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO : RIOHACHA
PAIS : Colombia

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA – PRINCIPALES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	DAVILA MARTINEZ RAMON	CC 8,688,998

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	TAUTIVA MANCERA CAMILO	CC 79,880,600

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	MAZENETH DAVILA CARLOS	CC 79,506,291

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	CUELLO NAVARRO MARIO ALBERTO	CC 72,274,141

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	MARTINEZ APARICIO DE LA ESPRIELLA GABRIEL EDUARDO	CC 72,003,703

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA – SUPLENTES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	SANDOVAL SALGADO ROSANA ISABEL	CC 32,786,458

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	VALDERRAMA HERNANDEZ JOSE JOAQUIN	CC 79,277,375

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	LOPEZ HERNANDEZ JUAN CAMILO	CC 80,101,887

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023,

FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	VALENCIA ZUÑIGA SILVANA PATRICIA	CC 22,549,044

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 126 DEL 16 DE MARZO DE 2023 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MAYO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	MARRUGO CAEZ ALBERTO ENRIQUE	CC 73,006,780

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 482 DEL 13 DE JUNIO DE 2023 DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37029 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	OVALLE DAZA CAMILO JOSE	CC 1,136,885,711

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 362 DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21987 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	CABELLO CARLOS AUGUSTO	CC 79,568,089

POR ACTA NÚMERO 421 DEL 20 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29074 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OVALLE DAZA CAMILO JOSE	CC 1,136,885,711

POR ACTA NÚMERO 421 DEL 20 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 29074 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ACOSTA MANZUR ALBERTO ADOLFO	CC 72,042,585

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON DOS (2) SUPLENTES QUE LO REEMPLAZARAN EN SU ORDEN, EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO ABSOLUTO. SON FUNCIONES ESPECIALES DEL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS QUE DESARROLLEN SU OBJETO, DE ACUERDO CON LOS LIMITES DETERMINADO POR LA JUNTA DIRECTIVA; B) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE, HASTA POR LA SUMA EQUIVALENTE A 150 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES Y SOLICITAR CUANDO LA NATURALEZA O LA CUANTÍA DEL ACTO LO REQUIERA, LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y FAVORABLE DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE; C) PRESENTAR BALANCES ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA; D) DELEGAR PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ALGUNA O ALGUNAS DE SUS FUNCIONES O ATRIBUCIONES; E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS; F) INFORMAR DETALLADAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA Y EN SU CASO AL REVISOR FISCAL, SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRAR LOS DATOS EN INFORMES QUE SOLICITEN; G) CONSTITUIR MANDATARIOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA; H) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA A EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE ACUERDO A LA

PLANTA DE PERSONAL APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA; I) MANEJAR E INVERTIR, SEGÚN LAS DIRECTRICES SEÑALADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA; J) LLEVAR BAJO SU CUIDADO LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD; K) LAS DEMÁS QUE SEAN SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE ADSCRIBA LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTOS DE CARÁCTER GENERAL, QUE DEBERÁN SER DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL CUANDO QUIERA QUE SEA NECESARIO LOGRAR SU OPONIBILIDAD A TERCEROS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR OFICIO NÚMERO 4813 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33067 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 01 DE OCTUBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CASTILLO RODRIGUEZ TATIANA MARGARITA	CC 1,045,673,148	230153-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR OFICIO NÚMERO 1 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 DE REUNION EXTRAORDINARIA DE RIOHACHA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33421 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	DIAZ CARDONA MELISSA ANDREA	CC 1,047,485,899	256742-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** GASES DE LA GUAJIRA
MATRICULA : 5175
FECHA DE MATRICULA : 19800724
FECHA DE RENOVACION : 20230323
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
DIRECCION : CR 15 NRO. 14C-33
MUNICIPIO : 44001 - RIOHACHA
TELEFONO 1 : 7273464
CORREO ELECTRONICO : gasguajira@gasguajira.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : D3520 - PRODUCCION DE GAS; DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERIAS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 201,032,297,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $134,939,116,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : D3520

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN Sb2TjcDP1k

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=30 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación Sb2TjcDP1k

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



EL SECRETARIO
JOEL MANJARREZ CUESTA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Jaider Morales Ortiz

Abogado U. Gran Colombia - Armenia

DOCTOR
ALBERTO ENRIQUE ARIZA VILLA
JUZGADO CUARENTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
E.S.D.

REFERENCIA: PRESCPRICION DE EFECTOS PRECONTRACUALES 110013103009-2014-00122-00
DEMANDANTE: JAVIER FERNANDO MORENO LOPEZ**.**
DEMANDADO: PABLO EMILIO SILVA RIVERA

ASUNTO: RECURSO DE QUEJA

JAIDER MORALES ORTIZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.315.859 de Girardot, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 77.773 del C.S.J.; obrando en mi condición de apoderado judicial del señor JAVIER FERNANDO MORENO LOPEZ; por medio del presente memorial, me permito interponer recurso de RECURSO DE QUEJA, en contra del auto de fecha 04 de octubre del 2022, por medio del cual no se repone el auto de fecha 9 de noviembre del 2021 y a su vez se niega el recurso de apelación contra la providencia antes dicha, con fundamento en los argumentos que expondré de la siguiente manera:

PETICIÓN

1. Solicito, Señor Juez Revocar el auto de fecha 04 de octubre del 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarenta y ocho civil del Circuito de Bogotá, no repone el auto de fecha 9 de noviembre del 2021 y a su vez se niega el recurso de apelación y en su lugar se decida de fondo el recurso de reposición o en su defecto se conceda el recurso de apelación contra la mencionada providencia (09 de noviembre de 2021).
2. De manera subsidiaria, en caso de proseguir el mismo criterio y no resolver de fondo el recurso de reposición o de no concederse el recurso de apelación, solicito a su despacho expedir, con destino al Tribunal Superior de Bogotá -. Sala Civil, copia de la providencia impugnada para efectos del trámite del recurso de queja.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Me permito sustentar el recurso con base en las siguientes consideraciones:

Primero. Es de advertir que el suscrito libelista, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del auto de fecha 09 de noviembre de 2021, mediante el cual se liquidan las costas procesales que fueron impuestas en audiencia del 08 de octubre de 2021.

Segundo. Dicha providencia fue expedida el día 09 de noviembre de 2021 y notificada por estado el día 10 de noviembre de 2021.

NOTIFÍQUESE,

CONSTANCIA SECRETARIAL La presente providencia se notifica en ESTADO No. 115 del 10 de noviembre de 2021.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECHA 10-11-2021 Y A LA HORA DE LAS 8 AM, SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TERMINO LEGAL DE UN DIA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

GINA NORBELY CERON QUIROGA
SECRETARIO

Así las cosas, los términos de ejecutoria empieza el día 11 de noviembre de 2021 hasta el 16 de noviembre de 2021.

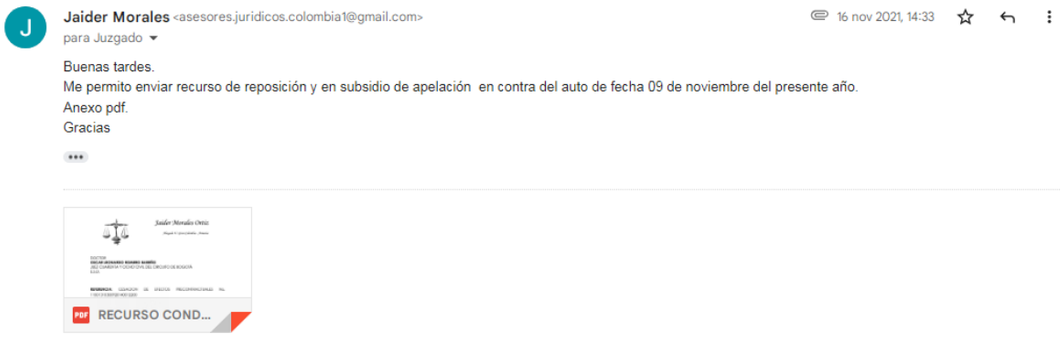
Tercero. Tal y como se expone en el auto del día 04 de octubre de 2022, el suscrito procedió a enviar mediante correo electrónico el día 15 de noviembre de 2021 (19:41), pero pasa por alto este despacho el correo electrónico enviado el día 16 de noviembre de 2021 (14:33) el recurso de reposición y en subsidio de apelación.

RECURSO REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACION- CONDENA AGENCIAS EN DERECHO

Jaider Morales <asesores.juridicos.colombia1@gmail.com> lun, 15 nov 2021, 19:41
para Juzgado

Buenas noches.
Me permito radicar recurso de reposición en subsidio de apelación, en contra del auto de fecha 09 de noviembre del 2021. Se adjunta en formato pdf.
Por favor acusar recibido.
Muchas gracias.



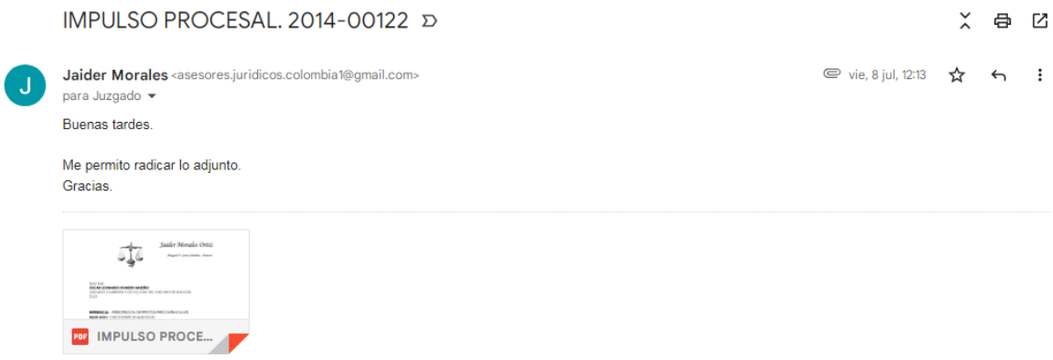


Cuarto. Es de advertir que el termino para la interposición de recurso alguno, vencía el día 16 de noviembre de 2021 y no como erradamente lo argumenta el despacho (15 de noviembre de 2021), pues se tiene claro que el día 15 de noviembre de 2021 fue ***FESTIVO y por ende no es día hábil judicial.***



Quinto. Así las cosas, considera respetuosamente el suscrito que el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto de fecha 09 de noviembre de 2021 fue interpuesto dentro del término para ello, por lo que no se puede cercenar el estudio y la resolución del mismo por un error al momento de efectuar el cálculo de los términos de ejecutoria.

Sexto. Es de advertir que para la resolución del recurso tantas veces mencionado, transcurrieron más de 7 meses sin obtener respuesta al mismo por lo que con el fin de agilizar la actuación procesal remití solicitud de impulso procesal el día 08 julio de 2022 (12:13) y 3 meses después, se manifiesta que no se repone el auto por haberse interpuesto de manera extemporánea y se declara improcedente el recurso de apelación subsidiario por correr la suerte del de reposición.



DERECHO

Invoco como fundamento de derecho lo preceptuado en los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 321 del mismo estatuto.

PRUEBAS

Solicito tener como prueba las actuaciones procesales surtidas en el proceso de la referencia, en especial los autos de fecha, 09 de noviembre del 2021, 04 de octubre del 2022 y correos enviados por el suscrito de fecha 15 y 16 de noviembre de 2021.

ANEXOS

Me permito anexar copia del presente escrito para archivo del juzgado.

COMPETENCIA

Por encontrarse usted conociendo del proceso de la referencia, es competente para conocer del recurso de reposición interpuesto. Para conocer del recurso de queja es competente la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a la cual deberán remitírsele copia de la providencia impugnada.

NOTIFICACIONES

- El suscrito en la Secretaría del Juzgado o en la calle 13 No. 11-13 Girardot
- Las partes procesales en las direcciones aportadas en el proceso.

Jaider Morales Ortiz

Abogado U. Gran Colombia - Armenia

Atentamente;



JAIDER MORALES ORTIZ
C.C. No. 11.315.859 de Girardot.
T.P. No. 77.773 del C.S.J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARENTA Y OCHO (48) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 14-33 piso 15 Teléfono 2823911
Edificio Hernando Morales Molina
J48cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ORDINARIO
Demandante: JAVIER FERNANDO MORENO LOPEZ
Demandado: JAVIER EMILIO SILVA RIVERA
Radicado: 11001310300920140012200
Providencia: CONCEDE QUEJA

Atendiendo a lo solicitado el despacho, DISPONE:

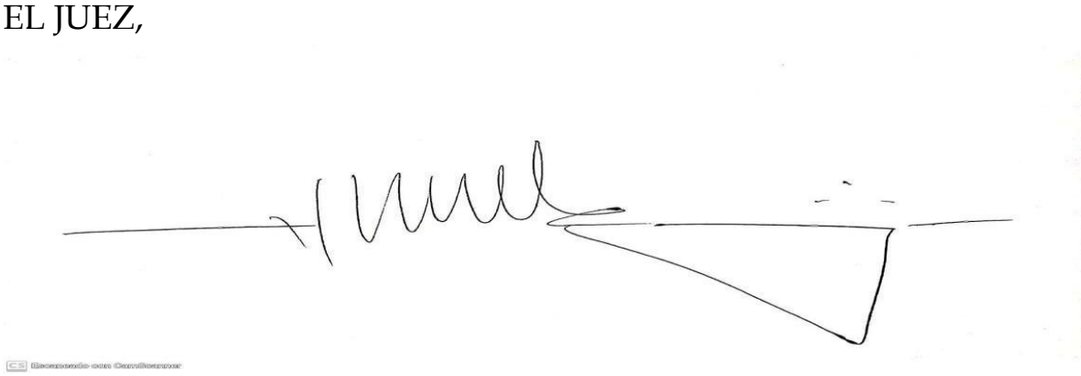
1. CONCEDER el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante para ante la vista *ad quem*, para lo de su competencia.

2. Advertir al recurrente que no hay necesidad de cancelar expensas procesales en razón a la digitalización del expediente.

3. Remítase el expediente digital al Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil, déjense las correspondientes constancias.

4. Cumplido lo anterior, ingrese nuevamente el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
EL JUEZ,



ALBERTO ENRIQUE ARIZA VILLA.
M:.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrada Sustanciadora: **ADRIANA AYALA PULGARÍN**

Radicación:	11001 31 **03 009 2014 00122** 04.
Clase:	Verbal
Demandante:	Cecilia López de Moreno.
Demandados:	Pablo Emilio Silva Rivera.

Se resuelve el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, en contra del auto proferido el 4 de octubre de 2022 por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad, a través del cual denegó el recurso de apelación formulado contra el auto del 9 de noviembre de 2021, mediante el que se aprobó la liquidación de costas efectuada por la secretaría del juzgado, por extemporáneo.

ANTECEDENTES

1. Frente a esta última determinación, dicho extremo procesal interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, toda vez que, consideró que, si bien es cierto, el artículo 365 del C.G.P., consagra que la condena en costas procede en los procesos donde se haya generado controversia y que estas se asignaran como carga a la parte vencida, también lo es que, en el caso que nos ocupa y tal como lo

concibió el fallador, los sujetos procesales tanto en la demanda principal como en la de reconvención, de igual forma hubo allanamiento del extremo pasivo, además analizando, la naturaleza, calidad y duración del proceso, no hubo controversia. El recurso horizontal como el vertical se negó, con fundamento en que, ambos eran extemporáneos *"además de resultar improcedente el recurso vertical, porque la decisión objeto de reparo no se encuentra enlistada como apelable en el artículo 321 del Código General del Proceso, así como tampoco en norma especial"*[1].

2. El censor argumentó que, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra del auto de fecha 09 de noviembre de 2021, notificado por estado del día siguiente hábil 10 de noviembre, mediante el cual se liquidan las costas procesales que fueron impuestas en audiencia del 08 de octubre de esa anualidad, por lo que, los términos de ejecutoria empieza el día 11 de noviembre hasta el 16 de noviembre, sin embargo, el día 15 de ese mes y año se radicó los mencionados recursos.

3. Mediante auto calendado 7 de julio del año en curso, la Juez de primer grado concedió el recurso de queja[2].

CONSIDERACIONES

1. Liminarmente debe precisarse que el recurso ordinario de queja tiene **únicamente** por objeto que el juez de segunda instancia determine la procedibilidad de la apelación que el inferior hubiere negado, con el fin que de ser así, la conceda.

Resulta imperioso memorar que existe un criterio de taxatividad que señala expresamente cuáles son los autos pasibles de revisión por parte del superior, acudiendo para ello a un selecto listado de providencias que conforme ha

[1] *PDF 31 Cuaderno principal.*
[2] *PDF 43 ibídem.*

puntualizado la jurisprudencia, constituye "*un númerus clausus no susceptible de extenderse, ni aún so pretexto de analogía, por el juez a casos no contemplados en la ley*"[3], salvo, claro está, que alguna regla especial lo prevea frente a determinadas decisiones.

2. Descendiendo al caso *sub judice,* de entrada, se advierte que se declarará mal negada la alzada, conforme pasará a exponerse:

2.1. El auto que concita la atención de esta Corporación corresponde al que aprobó la liquidación de costas, las cuales se efectuaron bajo los lineamientos del Código General del Proceso, pues tal como lo prevé en su numeral 1º del artículo 625, el trámite de la referencia hizo tránsito de legislación.

Conforme lo señala el numeral 5º del artículo 366 del estatuto procesal en cita la liquidación de costas efectuada por la Secretaría, así como la suma fijada como agencias en derecho *"solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo"*, por lo que en principio el auto recurrido si es objeto del recurso de alzada.

Ahora, la controversia gravita en torno a la extemporaneidad del recurso vertical, para ello, baste decir que sobre este aspecto el artículo 322 del C.G.P. establece que cuando este se interpone contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres días siguientes a su notificación por estado.

En el caso *sub judice*, el auto que aprobó la liquidación de costas fue proferido el 9 de noviembre de 2021, se notificó por estado el día siguiente es decir el día 10 del mismo mes y año, por lo que los términos de ejecutoria trascurrieron el día 11, 12 y 16, pues 13,14 y 15 correspondieron a los días: sábado, domingo y lunes

[3] *Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 4 de junio de 1998.*

festivo, en ese orden y, como quiera que el memorial contentivo de la impugnación se radicó el último día de ejecutoria, el mismo resulta oportuno.

2.2. Bajo ese panorama, no existe duda de, una parte, que el recurso de reposición y en subsidio apelación, contrario a lo estimado por el juzgador de primera instancia fueron presentados dentro del término legal dispuesto para tal efecto y, de otra, que, de acuerdo al canon normativo citado en precedencia, procede la apelación contra el auto cuestionado.

3. Por lo anterior, como se declarará mal denegada la alzada, se ordenará a Secretaría que dé apertura a un nuevo consecutivo para tramitar el recurso de apelación, sin que haya lugar a condenar en costas por salir avante la queja impetrada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C. – SALA CIVIL**,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR MAL DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto proferido el 4 de octubre de 2017 por el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad, conforme se explicó; en su lugar, se admite dicha censura en el efecto devolutivo.

SEGUNDO: Comuníquese lo así resuelto al funcionario de conocimiento. Ofíciese.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme este proveído, por Secretaría dese apertura a un nuevo consecutivo en segunda instancia, con el fin de tramitar la *"apelación de auto"* frente a la decisión cuestionada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado Por:
Adriana Ayala Pulgarin
Magistrado
Sala 017 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ebeb6653253a8fb055ed9edee03dfca017fb1bd5258a7c3aa20d57470c0489c7**
Documento generado en 07/09/2023 03:11:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPARTO QUEJA 012-2020-00409-01 DRA SANDRA CECILIA RODRIGUEZ ESLAVA

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 14/09/2023 11:23

Para:**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**;Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (599 KB)
054Oficio1151Queja202000409.pdf; F11001310301220200040901Caratula20230914111534.pdf; 7972.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha : 14/sept./2023

GRUPO RECURSOS DE QUEJA

CD. DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
006	7972	14/sept./2023

REPARTIDO AL DOCTOR (A)
SANDRA CECILIA RODRIGUEZ ESLAVA

IDENTIFICACIO	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
91013611	REINALDO TABERA CUBIDES		01
1076646647	DORA PATRICIA PACHON RODRIGUEZ Y OTROS		02

OBSERVACIONES: 11001310301220200040901

BOG305SR
dlopezr

FUNCIONARIO DE REPARTO

11001310301220200040901

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **SANDRA CECILIA RODRIGUEZ ESLAVA**

Procedencia : 012 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310301220200040901

Instancia : Segunda Instancia

Clase de Juicio : Verbal

Recurso : Queja

Grupo : 32

Repartido_Abonado : REPARTIDO

Demandante : REINALDO TABERA CUBIDES

Demandado : DORA PATRICIA PACHON RODRIGUEZ Y OTROS

Fecha de reparto : 14/09/2023

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 12 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 9:26
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REMITO RECUROS DE QUEJA PROCESO 2020-00409

Buen día;

Por medio del adjunto remito recurso de queja concedida en el proceso 2020-00409

Cordialmente;

NELSON FERNANDO PARRA AVILA
Escribiente

11001310301220200040900

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

LINK EXPEDIENTE:

11001310301220200040900

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: Proceso 2003-00712-01 - Ordinario - Sustentación recurso de apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 11/09/2023 10:36

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (192 KB)
SUSTENTACION APELACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: HERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS <herreraabogados@hotmail.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 10:28
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Gabriel Pardo <gpardo@spjlaw.com>; isaacdevis@devisabogados.com <isaacdevis@devisabogados.com>
Asunto: Proceso 2003-00712-01 - Ordinario - Sustentación recurso de apelación

Proceso 2003-00712-01 - Ordinario
Demandante: ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y otros
Demandado: CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL
Asunto: Sustentación recurso de apelación

Atentamente,

FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ
T.P. 55.660 del C.S. de la J.

Señores Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sala Civil de Decisión
E. S. D.

Referencia: Proceso 2003-00712-01 - Ordinario
Demandante: **ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y otros**
Demandado: **CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL**
Asunto: Sustentación recurso de apelación

FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ, obrando en mi condición de apoderado de las demandantes **ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y MARÍA CAMILA CAICEDO HOYOS** dentro del proceso distinguido con el número que se cita en la referencia, de manera atenta me dirijo a usted, en atención a lo ordenado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objeto de manifestarle que, mediante el presente escrito, procedo a sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que puso fin a la primera instancia, de la siguiente forma:

FRENTE A LA NEGATIVA A PROFERIR CONDENA POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES:

El *a quo* negó las pretensiones relacionadas con la condena al pago de perjuicios materiales a favor de mis mandantes, por considerar que no se logró probar dentro del proceso la cuantía de los señalados perjuicios.

Como lo ha determinado la jurisprudencia en multiplicidad de decisiones, [1] en casos como el presente, en el que las demandantes

[1] Entre muchas otras sentencias SC123925-2016 de set. 30 de 2016 y SC9193-2017 de jun. 28 de 2017 con ponencia del H. Magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC5686-2018 de dic. 19 de 2018 con ponencia de la H. Magistrada Margarita Cabello Blanco, SC15996-2106 de nov. 29 de 2016 con ponencia del H. Magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y las

eran la cónyuge y la hija menor –en ese momento– de la víctima, los perjuicios materiales a su favor se presumen, a lo menos, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal vigente, con base en la presunción de que cualquier persona económicamente activa –como lo era la víctima– quien al momento de su fallecimiento contaba con 36 años y 10 meses de edad, devenga a lo menos la retribución anotada, es decir, un salario mínimo legal vigente.

En relación con la demandante Alexandra Hoyos Cuartas, se practicaron dentro del proceso dos testimonios, los de los señores DAVID BUSTAMANTE ANGARITA (fl. 299 C. 1) y JAIME ANTONIO ARROYO PULIDO (fl. 302 C.1), que no fueron tachados por la demandada y que merecen entonces toda credibilidad, de los cuales se desprende con toda claridad que ella, en su condición de cónyuge del señor CÉSAR AUGUSTO CAICEDO CRUZ, dependía económicamente de este al momento de su fallecimiento.

En relación con la demandante María Camila Caicedo Hoyos, hija de la víctima, menor de edad al momento de su fallecimiento, tales perjuicios materiales se presumen y por ende no requieren de prueba.

Debido a lo anotado, erró gravemente el *a quo* al negar la condena al pago de perjuicios materiales a favor de mis mandantes, lo que amerita la revocación de la sentencia en este punto, profiriendo la respectiva condena por el concepto indicado, conforme a la fórmula determinada por la jurisprudencia para el cálculo de tales perjuicios.

FRENTE A LA NEGATIVA DE PROFERIR CONDENA POR CONCEPTO DE PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN A

---

sentencias de 13 de abril de 2023 dictada dentro del proceso con radicación 1999-22581-02 con Ponencia de la H. Magistrada María Patricia Cruz Miranda y de mayo 17 de 2023 dictada dentro del proceso con radicación 2020-0325-01 con Ponencia del H. Magistrado Luis Roberto Suárez González, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión.

FAVOR DE MIS MANDANTES:

Frente a la solicitud presentada por el suscrito de adicionar la sentencia en el sentido de proferir condena de oficio a favor de mis mandantes y a cargo de la demandada por concepto de perjuicios a la vida de relación, el *a quo* se pronunció manifestando lo siguiente:

> *«baste con señalar que indistintamente de la época en que se haya formulado la demanda, no resulta viable entrar a su análisis y menos a su reconocimiento, ya que si se obra de esa manera, se desconoce el principio de congruencia que regulaba para entonces el artículo 305 del C. de P.C., máxime si se tiene en cuenta que la jurisprudencia nada ha dicho referente a posibles efectos retroactivos en dicha materia».*

Sobre este particular se manifiesta que las condenas de oficio, como las relacionadas con el perjuicio a la vida de relación en casos como el presente, precisamente obedecen a su no inclusión dentro del *petitum,* pues si ello fuera así la condena ya no sería de oficio. En este caso, entonces, la condena no desconocería el principio de congruencia.

Ahora bien, la reseña jurisprudencial que se hizo en el escrito de solicitud de adición de la sentencia se refiere a la posición jurisprudencial de reconocer de oficio el pago de perjuicios a la vida de relación en casos como el presente, no a efectos retroactivos de la decisión, tal y como lo ha precisado la Corte, entre muchas otras, en la sentencia STC16743-2019 de 11 de diciembre de 2019 de la Sala de Casación Civil, con ponencia del H. Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona.

En suma, lo que se evidencia de la decisión es que el *a quo* no comprendió el alcance de la petición de condena de oficio al pago de perjuicio a la vida de relación a favor de mis mandantes, que se

solicita por la vía de la decisión del recurso de apelación.

FRENTE A LA DECISIÓN DE IMPONER CONDENA POR PERJUICIOS MORALES EN CUANTÍA INFERIOR A LA DETERMINADA POR LA JURISPRUDENCIA VIGENTE:

Como se anotó al momento de interponer el recurso de apelación contra la sentencia que puso fin a la primera instancia, en el mismo memorial en el que se solicitó la aclaración y adición de ella, de forma inexplicable el *a quo* desconoció también los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales existentes, que determinan la cuantía de los perjuicios morales a favor del cónyuge y/o hijos de una persona fallecida en un monto equivalente a la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, dadas las especiales circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena proferida dentro del presente proceso, solicito que los perjuicios morales a favor de mis mandantes se establezcan en un monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En los anteriores términos presento la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Señores Magistrados,



FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIERREZ
cn=FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIERREZ, o, ou, email=herreraabogados@hotmail.com, c=CO
2023.09.11 10:24:46 -05'00'

FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ
C.C. 16.655.712 de Cali
T.P. 55.660 del C.S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: Proceso 2003-00712-01 - Ordinario - Sustentación recurso de apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 11/09/2023 10:36

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (192 KB)
SUSTENTACION APELACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: HERRERA Y ASOCIADOS ABOGADOS <herreraabogados@hotmail.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 10:28
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Gabriel Pardo <gpardo@spjlaw.com>; isaacdevis@devisabogados.com <isaacdevis@devisabogados.com>
Asunto: Proceso 2003-00712-01 - Ordinario - Sustentación recurso de apelación

Proceso 2003-00712-01 - Ordinario
Demandante: ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y otros
Demandado: CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL
Asunto: Sustentación recurso de apelación

Atentamente,

FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ
T.P. 55.660 del C.S. de la J.

Señores Magistrados
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sala Civil de Decisión
E. S. D.

Referencia: Proceso 2003-00712-01 - Ordinario
Demandante: **ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y otros**
Demandado: **CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL**
Asunto: Sustentación recurso de apelación

FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ, obrando en mi condición de apoderado de las demandantes **ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y MARÍA CAMILA CAICEDO HOYOS** dentro del proceso distinguido con el número que se cita en la referencia, de manera atenta me dirijo a usted, en atención a lo ordenado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con el objeto de manifestarle que, mediante el presente escrito, procedo a sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que puso fin a la primera instancia, de la siguiente forma:

FRENTE A LA NEGATIVA A PROFERIR CONDENA POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES:

El *a quo* negó las pretensiones relacionadas con la condena al pago de perjuicios materiales a favor de mis mandantes, por considerar que no se logró probar dentro del proceso la cuantía de los señalados perjuicios.

Como lo ha determinado la jurisprudencia en multiplicidad de decisiones, [1] en casos como el presente, en el que las demandantes

[1] Entre muchas otras sentencias SC123925-2016 de set. 30 de 2016 y SC9193-2017 de jun. 28 de 2017 con ponencia del H. Magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC5686-2018 de dic. 19 de 2018 con ponencia de la H. Magistrada Margarita Cabello Blanco, SC15996-2106 de nov. 29 de 2016 con ponencia del H. Magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y las

eran la cónyuge y la hija menor –en ese momento– de la víctima, los perjuicios materiales a su favor se presumen, a lo menos, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal vigente, con base en la presunción de que cualquier persona económicamente activa –como lo era la víctima– quien al momento de su fallecimiento contaba con 36 años y 10 meses de edad, devenga a lo menos la retribución anotada, es decir, un salario mínimo legal vigente.

En relación con la demandante Alexandra Hoyos Cuartas, se practicaron dentro del proceso dos testimonios, los de los señores DAVID BUSTAMANTE ANGARITA (fl. 299 C. 1) y JAIME ANTONIO ARROYO PULIDO (fl. 302 C.1), que no fueron tachados por la demandada y que merecen entonces toda credibilidad, de los cuales se desprende con toda claridad que ella, en su condición de cónyuge del señor CÉSAR AUGUSTO CAICEDO CRUZ, dependía económicamente de este al momento de su fallecimiento.

En relación con la demandante María Camila Caicedo Hoyos, hija de la víctima, menor de edad al momento de su fallecimiento, tales perjuicios materiales se presumen y por ende no requieren de prueba.

Debido a lo anotado, erró gravemente el *a quo* al negar la condena al pago de perjuicios materiales a favor de mis mandantes, lo que amerita la revocación de la sentencia en este punto, profiriendo la respectiva condena por el concepto indicado, conforme a la fórmula determinada por la jurisprudencia para el cálculo de tales perjuicios.

FRENTE A LA NEGATIVA DE PROFERIR CONDENA POR CONCEPTO DE PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN A

---

sentencias de 13 de abril de 2023 dictada dentro del proceso con radicación 1999-22581-02 con Ponencia de la H. Magistrada María Patricia Cruz Miranda y de mayo 17 de 2023 dictada dentro del proceso con radicación 2020-0325-01 con Ponencia del H. Magistrado Luis Roberto Suárez González, ambas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión.

FAVOR DE MIS MANDANTES:

Frente a la solicitud presentada por el suscrito de adicionar la sentencia en el sentido de proferir condena de oficio a favor de mis mandantes y a cargo de la demandada por concepto de perjuicios a la vida de relación, el *a quo* se pronunció manifestando lo siguiente:

> *«baste con señalar que indistintamente de la época en que se haya formulado la demanda, no resulta viable entrar a su análisis y menos a su reconocimiento, ya que si se obra de esa manera, se desconoce el principio de congruencia que regulaba para entonces el artículo 305 del C. de P.C., máxime si se tiene en cuenta que la jurisprudencia nada ha dicho referente a posibles efectos retroactivos en dicha materia».*

Sobre este particular se manifiesta que las condenas de oficio, como las relacionadas con el perjuicio a la vida de relación en casos como el presente, precisamente obedecen a su no inclusión dentro del *petitum,* pues si ello fuera así la condena ya no sería de oficio. En este caso, entonces, la condena no desconocería el principio de congruencia.

Ahora bien, la reseña jurisprudencial que se hizo en el escrito de solicitud de adición de la sentencia se refiere a la posición jurisprudencial de reconocer de oficio el pago de perjuicios a la vida de relación en casos como el presente, no a efectos retroactivos de la decisión, tal y como lo ha precisado la Corte, entre muchas otras, en la sentencia STC16743-2019 de 11 de diciembre de 2019 de la Sala de Casación Civil, con ponencia del H. Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona.

En suma, lo que se evidencia de la decisión es que el *a quo* no comprendió el alcance de la petición de condena de oficio al pago de perjuicio a la vida de relación a favor de mis mandantes, que se

solicita por la vía de la decisión del recurso de apelación.

FRENTE A LA DECISIÓN DE IMPONER CONDENA POR PERJUICIOS MORALES EN CUANTÍA INFERIOR A LA DETERMINADA POR LA JURISPRUDENCIA VIGENTE:

Como se anotó al momento de interponer el recurso de apelación contra la sentencia que puso fin a la primera instancia, en el mismo memorial en el que se solicitó la aclaración y adición de ella, de forma inexplicable el *a quo* desconoció también los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales existentes, que determinan la cuantía de los perjuicios morales a favor del cónyuge y/o hijos de una persona fallecida en un monto equivalente a la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, dadas las especiales circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena proferida dentro del presente proceso, solicito que los perjuicios morales a favor de mis mandantes se establezcan en un monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En los anteriores términos presento la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Señores Magistrados,



FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIERREZ
cn=FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIERREZ, o, ou, email=herreraabogados@hotmail.com, c=CO
2023.09.11 10:24:46 -05'00'

FRANCISCO IGNACIO HERRERA GUTIÉRREZ
C.C. 16.655.712 de Cali
T.P. 55.660 del C.S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: 11001310301320030071201 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO DEL 29 DE MAYO DE 2023

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 17:09

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (705 KB)

NOGAL SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN 2003-712 EL NOGAL (1).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: HUGO HERNANDO ROSALES CABALLERO <hrosales@devisabogados.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 16:47
Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: herreraabogados@hotmail.com <herreraabogados@hotmail.com>; gpardo@spjlaw.com <gpardo@spjlaw.com>; isaacdevis@devisabogados.com <isaacdevis@devisabogados.com>
Asunto: 11001310301320030071201 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO DEL 29 DE MAYO DE 2023

Señor Magistrado
Germán Valenzuela Valbuena
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
E. S. D.

Referencia: *Proceso Ordinario*
Demandante: *ALEXANDRA HOYOS CUARTA Y OTROS*
Demandados: *CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL*
Radicado No. ***110013103-013-2003-00712-01***

Asunto: *Sustentación del recurso de apelación contra fallo del 29 de mayo de 2023.*

Respetado señor Magistrado.

ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS, abogado en ejercicio, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma y portador de la Tarjeta Profesional No. 57.995 del C.S.J., actuando en desarrollo del poder que me han conferido **JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO**, **LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH**, **JUANA MUÑOZ PRADO, FELIPE MUÑOZ PRADO, CATALINA ARANGO SALAZAR y CAMILA ARANGO ARANGO**, por medio del presente, sustentamos el recurso de apelación en contra de la sentencia del 29 de mayo de 2023.

Anexo archivo pdf con lo del asunto.

--

DEVIS GRANADOS
ABOGADOS ASOCIADOS
Haga clic para agregar título

Hugo Rosales Caballero
Abogado
Cra. 12 A no. 77 A – 52 oficina 604
PBX (57-1) 3215040
www.devisabogados.com
Bogotá D.C - Colombia

*Asesorías en Derecho de las Telecomunicaciones y de los Servicios Públicos * Tribunales de Arbitramento *Derecho Constitucional y Acciones Constitucionales * Asesoría en Contratos * Derecho Civil y Comercial *Competencia Desleal *Derecho Administrativo *Derecho de los Usuarios

La información, escrita o gráfica, contenida en este correo electrónico y en sus anexos, es estrictamente confidencial y reservada y solo incumbe a la persona o empresa a la cual se encuentra expresamente dirigido. Si U.d., o su empresa no es el destinatario autorizado o recibe este mensaje por error, le rogamos destruirlo o devolverlo a nosotros. Cualquier retención, difusión, distribución o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables, en especial, pero sin limitarse a ella, al privilegio cliente – abogado.

The preceding email message (including any attachments) contains information that may be confidential, be protected by the attorney – client or other applicable laws, or constitute nonpublic information. It is intended to be conveyed only to the designated recipient(s). If you are not an intended recipient of this message, please notify the sender by replying to this message and then delete it from your system. Use, dissemination, distribution or reproduction of this message by unintended recipient is not authorized and may be unlawful.

DEVIS GRANADOS
ABOGADOS ASOCIADOS
E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

Bogotá D.C., a los 11 días del mes septiembre de 2023.

Señor Magistrado
Germán Valenzuela Valbuena
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
E. S. D.

Referencia: *Proceso Ordinario*
Demandante: *ALEXANDRA HOYOS CUARTA Y OTROS*
Demandados: *CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL*
Radicado No. ***110013103-013-2003-00712-01***

Asunto: *Sustentación del recurso de apelación contra fallo del 29 de mayo de 2023.*

Respetado señor Magistrado.

ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS, abogado en ejercicio, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma y portador de la Tarjeta Profesional No. 57.995 del C.S.J., actuando en desarrollo del poder que me han conferido **JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO**, **LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH**, **JUANA MUÑOZ PRADO, FELIPE MUÑOZ PRADO, CATALINA ARANGO SALAZAR y CAMILA ARANGO ARANGO**, por medio del presente, interponemos recurso de apelación en contra de algunos apartes de la sentencia del 29 de mayo de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Para efectos de brindar la mayor claridad sobre este recurso, procedo continuación a enunciar su contenido y alcance generales:

I. OPORTUNIDAD DE LA SUSTENTACIÓN.

II. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.

IV. CONCLUSIONES.

I. OPORTUNIDAD DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Toda vez que el auto que admitió el recurso de apelación fue notificado el 30 de agosto de 2023, se tiene que los tres (3) días del término de ejecutoría y los cinco (5) días que otorgó su Despacho por medio de dicho auto tenemos que el término para presentar vence el día de hoy, 11 de septiembre de 2023, por lo cual la presente sustentación al recurso de apelación se presenta en tiempo.

II. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Conforme a lo ensenado por el derecho procesal general, el recurso de apelación "*tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión*" [1]

Al respecto sostiene el doctor Hernando Morales Molina que:

> *"mediante la apelación, el proceso decidido por el juez inferior es llevado a uno superior, quien tiene el mismo conocimiento pleno que el primer juez y lo examina en todos los aspectos que podrían ser objeto de examen por parte de aquél. El conocimiento recae sobre la relación decidida en primera instancia, que el segundo juez viene a ser llamado a declarar ex novo, a base del material la providencia apelada, si se opta por la concepción revisora de la apelación.*

[1] Artículo 320 del CGP

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

La curte dice sobre el recurso de apelación: "Por virtud del sistema procedimental de las dos instancias se origina el recurso de apelación, que es el más importante de los medios legales para la impugnación de las decisiones judiciales, y de acuerdo con el derecho procesal el resultado de la apelación, cuando el recurso no tiene buen éxito, es la confirmación de la resolución apelada, o su revocación o su reforma cuando el recurso prospera, pero en este caso con el pronunciamiento por parte de la superioridad jerárquica de la correspondiente resolución sustitutiva de la reformada o revocada" LX. 143)[2]

Bajo estos entendidos, y, en síntesis, procede en este momento incoar y sustentar ante el presente Despacho, el recurso de que se trata.

Como comentario general sea menester manifestar que estamos de acuerdo en términos generales con la condena que el Juez de primera instancia con toda justicia y razón, impuso a la demandada, dados los extraordinarios niveles de negligencia, descuido y desgreño de esa entidad en lo que refiere a los mecanismos de selección de sus socios y seguridad en general de sus visitantes y asociados, entre otros.

Empero, estimamos con el mayor respeto, que la sentencia merece algunos reproches por no abordar algunos puntos vitales para mis mandantes o por abordar y decidir algunos puntos de manera errónea.

En ese sentido entonces debe ser entendido nuestro recurso como orientado a que la sentencia se adicione o corrija en algunos temas puntuales no abarcados o mal decididos en la sentencia de primera instancia.

A continuación, pasaremos a detallar los puntos objeto de nuestra inconformidad.

[2] MORALES MOLINA Hernando. Curso de derecho procesal civil editorial ABC. Novena Edición 1985 pag. 569

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.

3.1. EL JUEZ NO TUVO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL MOMENTO DE PROFERIR EL FALLO PUESTO QUE NO SE PRONUNCIÓ FRENTE A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

Este agravio que vemos en la sentencia lo sustentaremos a su muy respetado Despacho manifestándole que el fallo de primera instancia no fue congruente y tampoco tuvo en cuenta las pretensiones realizadas desde un principio en el escrito de demanda, pues a todas luces está transgrediendo los más mínimos principios fundamentales del derecho procesal, pues fue ineficiente e ineficaz al momento de proferir el fallo que fue apelado y hoy está siendo sustentado.

De todos modos queremos manifestarle a su Despacho que el *a-quo* no tuvo en este punto en cuenta lo que en derecho procesal es conocido como el principio de congruencia, mismo que ha sido desarrollado por la jurisprudencia, definiéndolo como aquel sobre el cual el juez debe tomar la decisión del caso que se presente en concreto con base en los hechos, pretensiones y excepciones que fueron solicitadas y probadas a lo largo del proceso, de manera tal que exista una relación entre lo resuelto y lo planteado y probado por las partes en cada una de las etapas del litigio.

Señor Magistrado, es totalmente claro que este primer agravio que presentamos en el recurso de apelación y que hoy sustentamos en el presente escrito, va encaminado al notable yerro que tuvo el *a-quo* al decidir de fondo en primera instancia el presente proceso, pues lamentablemente en su decisión no falló la totalidad de las pretensiones, anotándose que además de que no lo hizo, ni siquiera manifestó la causal para no haberlo hecho.

Su Señoría, el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta la totalidad de las pretensiones de los escritos de demanda en donde los demandantes son la señora LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH y sus hijos JUANA MUÑOZ PRADO y FELIPE MUÑOZ PRADO, esposa e hijos de SERGIO

ALEJANDRO MUÑOZ SALAME (Q.E.P.D); el señor JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO esposo de LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO (Q.E.P.D) y la señora CATALINA ARANGO SALAZAR y su hija MARIA CAMILA ARANGO ARANGO, esposa e hija del señor JORGE ANDRÉS ARANGO GARAVITO (Q.E.P.D), con ocasión del atentado ocurrido el 7 de febrero de 2003 dentro de las instalaciones de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, en el cual fueron víctimas fatales de este suceso.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al principio de congruencia señala lo siguiente:

> *"El principio de congruencia es un límite al poder decisorio del fallador, que impone que haya correspondencia entre lo resuelto y lo que oportunamente plantearon los litigantes como materia de la controversia, sin perjuicio de las facultades oficiosas atribuidas por normas especiales."*[3]

De lo anteriormente mencionado, se puede reflejar la finalidad del principio de congruencia, el cual no es otro que el de poner un límite al poder decisorio del fallador, mismo que debe corresponder con lo resuelto y planteado por las partes a lo largo del proceso. Así mismo, la misma Corporación ha sostenido que el principio de congruencia es cardinal del conjunto de garantías contenidas en otro principio fundamental, como lo es del debido proceso, planteándolo de la siguiente manera:

> *"la congruencia de la sentencia es principio cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, que evita el exceso o el defecto de esa decisión respecto del marco jurídico de lo que compete resolver, (…) bajo cuyo tenor el juez debe sujetar la solución del conflicto a los hechos y las pretensiones de la demanda o demás oportunidades autorizadas, así como las defensas frente a esta última, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio.*

[3] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil SC4257-2020. 9 de noviembre de 2020. M.P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación, acatar la congruencia implica que debe haber armonía entre lo pedido y lo resistido"[4]

Teniendo en cuenta lo expuesto de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de congruencia, tenemos que al mismo se le da vital importancia, a tal punto de categorizarlo como cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, principio constitucional que garantía el debido desarrollo del proceso para las partes; la Corte Constitucional sobre el principio de congruencia ha dicho lo siguiente:

El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.[5]

Su Señoría, es claro que dentro de la parte resolutiva de la sentencia, el fallador de primera instancia omite fallar sobre muchas pretensiones que fueron solicitadas dentro de los escritos de demanda correspondientes para cada uno de mis mandantes, ahora nos disponemos a mostrar a su Despacho las pretensiones de las demandas de cada uno de mis mandantes que no fueron falladas por el Despacho de primera instancia y en la cual se sustenta el recurso de apelación interpuesto:

[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil SC22036-2017. 19 de diciembre de 2027. M.P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
[5] Corte Constitucional. Sentencia T-455 de 2016. M.P Alejandro Linares Cantillo

- **Respecto de lo pretendido por la señora LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH y sus hijos JUANA MUÑOZ PRADO y FELIPE MUÑOZ PRADO, esposa e hijos de SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ SALAME (Q.E.P.D).**

Las pretensiones de mis mencionadas representadas y que no se tuvieron en cuenta en el fallo proferido fueron las siguientes:

> *"**Quinta:** Reconózcase intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de Precios al Consumidor, desde la ejecutoria de la sentencia hasta su cumplimiento por el pago total.*
>
> ***Sexta:** Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar todas las sumas de dinero que del presente proceso se deriven y resultan a su cargo, debidamente actualizadas o indexadas.*
>
> ***Séptima:** Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar las costas del proceso y agencias en derecho, al tenor de lo dispuesto por los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil"*

- **Respecto de lo pretendido por el señor JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO esposo de LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO (Q.E.P.D).**

Las pretensiones de mi representado y que no se tuvieron en cuenta en el fallo proferido fueron las siguientes:

> *"**SEGUNDA:** Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a indemnizar y pagar a JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO, la totalidad de los daños y perjuicios materiales, incluidos daño emergente y lucro cesante, causados por la muerte de la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO, en la cuantía de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.00), o la que resulte de las bases que se demuestren en el proceso, debidamente reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.*

Dentro de los daños y perjuicios materiales, se incluirá:

1. El valor de la frustración o privación de la ayuda económica que venía reconociendo e iba a recibir de su esposa, de no haber sucedido su muerte.

2. El valor de los restantes ingresos íntegros que la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO, hubiera percibido durante el tiempo faltante de supervivencia probable, que usaría, como en efecto lo hizo en vida, en el mejor establecimiento de su familia y esposo.

3. En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios del capital representativo de la indemnización (compensación por falta de uso principal) que, según el artículo 1615 del Código Civil, se les está debiendo desde el 7 de febrero de 2003, y se pagarán junto con aquél en pesos de valor constante.

CUARTA: *Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, al resarcimiento y pago al demandante, de los daños y perjuicios que se le causaron, incluyendo los relativos a los bienes de su personalidad y los de contragolpe o rebote, de conformidad con lo que se pruebe y resulte de las bases del proceso, y en la cuantía que se acredite, debidamente reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.*

QUINTA: *Reconózcanse intereses aumentados con la variación promedio mensual del Índice de Precios al Consumidor, desde la ejecutoria de la sentencia hasta su cumplimiento por el pago total.*

SEXTA: *Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar todas las sumas de dinero que del presente proceso se deriven y resultan a su cargo, debidamente actualizadas o indexadas.*

SÉPTIMA: *Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar las costas del proceso y agencias en derecho, al tenor de lo dispuesto por los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.*

- **Respecto de lo pretendido por la señora CATALINA ARANGO SALAZAR y su hija MARIA CAMILA ARANGO ARANGO, esposa e hija del señor JORGE ANDRÉS ARANGO GARAVITO (Q.E.P.D).**

Sobre mis mandantes Catalina Arango y Camila Arango omitió el *a-quo* todas aquellas pretensiones que se solicitaron en el escrito de demanda y las cuales

de acuerdo con el acervo probatorio se deben de tener como probadas y particularmente a la pretensión de actualizar el dinero objeto de condena.

Para concluir, de acuerdo con lo anterior y en aras de sustentar el recurso de apelación interpuesto, podemos evidenciar su Señoría, que el fallador de la sentencia proferida el 29 de mayo de 2023, no tuvo en cuenta el principio cardinal de congruencia, pues como es evidente, en el mencionado fallo, se omitieron varias, por no decir muchas, de las pretensiones solicitadas por mis representados sin evidenciar que dicha omisión se realizara en virtud de una razón o argumento de peso, avalada por la jurisprudencia o en el material probatorio obrante en el expediente. En efecto, según todo el abundante material probatorio aportado por las partes dentro de los cuales se incluyen pruebas documentales, testimoniales, periciales y demás, se pudo demostrar y concluir la responsabilidad de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL dentro de los hechos motivo del proceso en cuestión, para lo cual, luego de hacerse establecido la responsabilidad de la parte demandada en el presente caso, el despacho debió tener en cuenta las demás pretensiones esgrimidas contenidas en los respectivos escritos de la demanda que se acumularon; pero como vemos, esto no sucedió, no se realizó pronunciamiento respectivo por parte del fallador de primera instancia; o por el contrario, se realizaron apreciaciones inicuas y vagas, v.gr aquella que se realizó un párrafo en donde el despacho motivó erróneamente que entre mi representado, el señor JULIO MARTÍN OTÁLORA y quien fuese su cónyuge, la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO (Q.E.P.D) no existía una dependencia económica.

Esto no solamente es incongruente, sino que son manifestaciones especulativas del Despacho, pues, por ejemplo, no existe sustento alguno que permita soportar la afirmación de que mi representado JULIO MARTÍN OTALORA no dependiera económicamente de su esposa fallecida, pues dentro del expediente existe (como lo sustentaré en el siguiente acápite) prueba de que él si dependía o co-dependía de su esposa.

Además de lo anterior, el fallo apelado y que hoy es sustentado, va en contravía de los derechos a ser reparados integralmente que notablemente de acuerdo con la jurisprudencia[6] aplicable a este caso, le asisten a mis mandantes los derechos objetivos solicitados.

Señor Magistrado, es usted quien debe de enmendar el error que tuvo el *a-quo* al proferir el fallo de primera instancia en lo concerniente a decidir sobre la totalidad de las pretensiones solicitadas en los escritos de demanda correspondiente para cada uno de mis mandantes.

3.2. SUSTENTACIÓN DEL ERROR DEL A QUO CONCERNIENTE A QUE NO CONDENA AL DEMANDADO A INDEMNIZAR MATERIALMENTE A JULIO MARTÍN OTALORA PORQUE SUPUESTAMENTE NO DEPENDÍA ECONOMICAMENTE DE SU ESPOSA.

Para sustentar este agravio evidenciado en el fallo que es apelado y que hoy se sustenta, tenemos que el Despacho en dicha decisión no condenó al demandado a pagar a mi mandante lo concerniente a las pretensiones sobre la indemnización patrimonial, este argumento simplemente lo fundamentó sin prueba alguna porque supuestamente el señor Julio Martín Otalora no dependía económicamente de su esposa fallecida.

Su señoría, tenemos que para sustentar ese yerro, es una apreciación netamente subjetiva del fallador sin soporte legal o jurisprudencial y que pues carece de prueba alguna.

En efecto, tenemos que contrario a lo que manifiesta el fallador, la dependencia económica, no es una condición *sine qua non* por el cual el cónyuge *supérstite* de las personas que mueren en los casos idénticos o similares al que se debate en el presente litigio deje de recibir una indemnización por los daños patrimoniales, lucro cesante y daño emergente, ocasionados a las

[6] Sentencia Corte Suprema de Justicia SC4427-2020 MP Octavio Augusto Tejeiro Duque

víctimas, por ello nos apartamos de lo dicho por el juez de instancia cuando de manera vaga y sin fundamento, manifiesta:

> 5.5.3.1. El anterior demandante en el líbelo demandatorio manifestó que el lucro cesante que solicitaba y que devengaba su esposa fallecida, era para compartirlo en vida, en ningún momento expusiera una dependencia económica de la misma y de ahí que el despacho considere que los perjuicios pedidos por concepto de lucro cesante no se le pueden reconocer, pues ya que, al no existir la dependencia en comento, su reclamación deviene improcedente.

Pero de una manera contraria a los escasos y desenfundados argumentos del Juez de primera instancia, tenemos que la jurisprudencia si ha reconocido los derechos patrimoniales de daño emergente y lucro cesante al cónyuge *supérstite* en casos análogos como el presente, veamos:

> *"**La dependencia económica,** lo ha interpretado la jurisprudencia de esta corporación también en el sentido de que quien la alega, reciba ayuda de su pareja para el sostenimiento del hogar común y, en particular, de los hijos de los dos, **de modo que ante el fallecimiento de ella -la pareja-, aquél deja de percibir dicho aporte** y, por consiguiente, queda avocado a asumir en su totalidad la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar, **obligación que deberá cumplir, como es lógico suponerlo, procurando que todos sus integrantes, en lo posible, preserven el nivel de vida que traían desde antes, lo que ostensiblemente deja ver el detrimento que sobreviene a su patrimonio, pues para el logro de ese objetivo se impondrá a él destinar, en mayor proporción o, como en muchos casos acontece, en su totalidad, los ingresos propios que recibe, lo que a la vez se traducirá en una menor capacidad económica para atender sus necesidades o gastos personales o**, según fuere el caso, para el ahorro, reducción ésta última que, proyectada en el tiempo, implicará que más adelante carezca de una base económica, o que la que pudiere llegar a tener fuere de menor*

envergadura, que le garantice los recursos para su manutención, con todo lo que de una situación como esa se desprende."[7]

Así mismo, en posterior sentencia, la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, ha manifestado y reiterado que para que se configure el derecho a la reparación, la regla general es que se debe de probar la dependencia económica, **pero esta regla tiene su respectiva excepción**, veamos:

En cuanto hace a la segunda modalidad aludida - lucro cesante-, cuando la causa de su producción es el fallecimiento de una persona, la jurisprudencia nacional ha precisado que el derecho a la reparación surge, en primer término, de la dependencia económica existente entre la víctima y quien reclama la indemnización. Al respecto, esta Corporación ha explicado que 'lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, (…), es la dependencia económica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento'.

Y en segundo lugar, de la circunstancia de que el solicitante, ***pese a no depender de la víctima, pues en vida de ésta obtenía ingresos propios, recibiera de ella ayuda económica periódica, cuya privación, por ende, merece ser igualmente resarcida.*** *Sobre este aspecto, la Corte ha señalado que '[d]ebe precisarse y quedar claro que las personas mayores e incluso las ya casadas que reciban ingresos provenientes de su renta de capital o de su trabajo, tienen legítimo derecho a obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que les cause el súbito fallecimiento de la persona de la cual recibían una ayuda económica de manera periódica, con prescindencia de los ingresos propios, y así mismo todas aquellas personas que tenían intereses ciertos y legítimos o la suficiente titularidad que se pueden ver menoscabados por la ocurrencia del hecho lesivo*

[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Radicación N.° 11001-3103-004-2002-01011-01, 28 de febrero de dos mil trece 2013. M.P. Arturo Solarte Rodríguez

imputable a la persona demandada'.(Apartes subrayados, citas de la sentencia Cas. Civ., del 5 de octubre de 1999, expediente No 5229)

Así mismo en sentencia SC15996-2016 la Corte Suprema de Justicia se refirió frente a que el cónyuge supérstite no necesariamente tiene que depender económicamente del cónyuge que fallece para recibir una indemnización a causa de la muerte de este último, veamos:

> *"Cuando se demanda la indemnización del daño, en su modalidad de lucro cesante, proveniente del fallecimiento de una persona, la misma emerge, en principio de la dependencia económica del peticionario con la víctima, circunstancia que a aquella incumbe acreditar;* ***pero igualmente, es viable su reconocimiento a quienes, a pesar de contar con ingresos propios, percibían de ella asistencia económica habitual, y en tal evento, igualmente al respectivo beneficiario le incumbe demostrar esa condición****."*[8] *(negrilla y subraya fuera de texto)*

Para sustentar la argumentación frente al yerro en la sentencia de primera instancia, tenemos que es clara la misma Corte Suprema de Justicia al manifestar que no importa que en una familia los dos cónyuges realicen aportes económicos, pues de todos modos, estos tienen un estilo de vida que preservar, y cuando uno de los dos fallece, existe indudablemente un desequilibrio económico, el cual el supérstite no está obligado a soportar, *máxime* si el fallecimiento de su cónyuge es imputable por la acción u omisión de un tercero, en este caso el Club el Nogal, el cual debe de reparar a mi mandante.

La dependencia económica hace parte de los efectos patrimoniales que surgen desde la existencia misma de la sociedad conyugal al momento de contraer matrimonio, esto teniendo en cuenta que el matrimonio es un contrato

[8] Corte Suprema de Justicia Sentencia SC15996-2016 Radicación N°1101-31-03-018-2005-00488-01 Luis Alonso Rico Puerta

solemne donde de acuerdo con el artículo 113 del Código Civil, los cónyuges deciden unirse de forma libre y de mutuo consentimiento, con el propósito de vivir juntos, procrear y auxiliarse.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente los efectos patrimoniales del matrimonio indicando lo siguiente:

> *"La celebración de este contrato, en razón a su carácter bilateral, genera derechos e impone deberes recíprocos entre los contrayentes, que pueden ser de tipo personal, que se generan a partir de la unión conyugal, y patrimonial, que se refieren a la constitución de la sociedad conyugal."*

Su Señoría, teniendo en cuenta lo mencionado, el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta que **si existió** una dependencia económica entre el señor JULIO MARTÍN OTALORA y su esposa, la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO. Al incurrir en este error el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta que la dependencia económica no aplica exclusivamente cuando uno de los cónyuges requiere de manera indispensable de los ingresos que tenga el otro cónyuge, sino que es aplicable también dicha dependencia por el hecho de la existencia misma del matrimonio en donde como consecuencia de la sociedad conyugal, ambos cónyuges aportan en común o co-dependencia parte de su patrimonio para sostener un determinado estilo de vida a preservar, y cuando uno de los dos cónyuges fallece, existe indefectiblemente un desequilibrio económico, el cual el supérstite no está obligado a soportar y menos tratándose de un suceso como lo fue el atentado en la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL.

Su Señoría, el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta que en el expediente si existía prueba válida que daba cuenta de que el señor Julio Martín Otalora aunque no dependía en 100% de su señora esposa, si lo hacía en un gran porcentaje; es aquí como es totalmente viable sustentar el recurso de apelación, manifestando que el Despacho de primera instancia incurrió en error al argumentar que no se demostró la dependencia económica, pues no estudió o pasó por alto el informe pericial practicado por el Dr. ALVARO

HINESTROZA SALCEDO donde se determinó el valor de los perjuicios materiales o de carácter patrimonial causados al señor JULIO MARTÍN OTALORA con ocasión del atentado terrorista ocurrido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones de la demandada; ello pues la prueba fue clara en determinar que la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO destinaba un 80% de sus ingresos totales mensuales para el mantenimiento del hogar, prueba que se tuvo que tener en cuenta al momento de resolver la primera instancia, pero como vemos su señoría, esto no fue así, es por esto que en el recurso de apelación que presentamos era fundamental poner de presente este yerro en el que incurrió dicho fallador, así entonces que en virtud de ello solicitamos a su Despacho que subsane dicho error haciendo la efectiva condena al demandado en cuanto a los daños materiales causados a mi mandante JULIO MARTÍN OTÁLORA los cuales existen y están efectivamente probados.

3.3. EL FALLADOR DE PRIMERA INSTANCIA TASÓ LA INDEMNIZACIÓN POR LOS PERJUICIOS MORALES DESCONOCIENDO LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.

Para sustentar este yerro en el que incurrió el fallador de primera instancia tenemos que, para la tasación de los prejuicios extrapatrimoniales, denominados también como morales, existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico diferentes tablas encaminadas a formalizar y estandarizar este tipo de perjuicios que son difíciles de tasar para cada caso en concreto, pues los daños morales o extrapatrimoniales son casi imposibles de tasar, pues no se puede medir en dinero el valor del dolor que se sufre luego de la muerte de un ser querido, es por esto que los órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativo, en cuanto al concepto de perjuicio moral y su indemnización la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

"La indemnización por perjuicios morales es de cierta manera simbólica "(…) y sólo significa una forma de satisfacción o una afirmación de parte de la justicia en aras del derecho vulnerado (…)"

Se trata pues, de abrirle "al querellante una nueva fuente de alivio y bienestar.

***El hecho de que a falta de normativa explícita que determine la forma de cuantificar el daño moral, el precedente judicial del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene un cierto carácter vinculante, para cuya separación es menester que el juez ofrezca razones suficientes de su distanciamiento**." [9] (negrilla y subraya fuera de texto)*

Así mismo también lo ha manifestado el Consejo de Estado pues este órgano manifiesta que:

"Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo." [10]

Esta misma jurisprudencia del Consejo de Estado manifiesta de manera muy clara la línea que se tiene para tasar una indemnización por perjuicio moral a favor de los familiares de una víctima mortal, y en la cual existe alguna responsabilidad por parte de alguna entidad, veamos:

*"**En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:***

[9] Corte Suprema de Justicia Sentencia SC4124-2021 Radicación 05001-31-03-009-2010-00185-01. Francisco Ternera Barrios

[10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 26.251.

<u>Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.</u>

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…)

<u>Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva»"</u> [11].

Su Señoría, es claro que el Despacho de primera instancia no tuvo en cuenta estos estándares jurisprudenciales para determinar la indemnización para cada uno de mis mandantes concernientes al daño extrapatrimonial.

Tenemos entonces que yendo al caso concreto, tenemos que el fallo que se apeló y que hoy se sustenta, dentro de los yerros que hemos manifestado en el

[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 26.251.

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3215040
Bogotá, D.C. - Colombia.

recurso de apelación y en la presente sustentación, omitió aplicar la jurisprudencia antes citada con las condenas que se deben aplicar para este tipo de situaciones, pues como muy bien se manifiesta, existen decisiones jurisprudenciales de carácter vinculante en cuanto a las tasaciones de indemnización por perjuicios morales referente en este tipo de casos análogos al que hoy nos ocupa en este proceso, así las cosas, el yerro es totalmente evidente pues así falló el Despacho de primera instancia:

> **TERCERO:** Condenar a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar a las demandantes ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y su hija MARIA CAMILA CAICEDO HOYOS la suma de **$50'000.000** y **$70'000.000**, respectivamente por concepto de perjuicios morales.
>
> A favor del señor JULIO MARTIN OTALORA CANO la suma de: **$50'000.000** por concepto de perjuicios morales.
> A favor de la señora LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH por concepto de lucro cesante consolidado (en adelante L.C.C.) el valor de **$1.534'324.283** y por perjuicios morales **$50'000.000**, para JUANA MUÑOZ PRADO un L.C.C. de **$372'375.885** y por concepto de perjuicios morales **$70'000.000** para FELIPE MUÑOZ PRADO un L.C.C. de **$339'092.654** y **$70'000.000** por concepto de perjuicios morales.
> Respecto a la señora CATALINA ARANGO SALAZAR por concepto de L.C.C. el valor de **$1.502'007.410;** y por perjuicios morales **$50'000.000**, para CAMILA ARANGO ARANGO un L.C.C. de **$917'058.430** y **$70'000.000** por perjuicios morales.

Es totalmente evidente que el Despacho de primera instancia incurrió en error al tasar la condena por concepto de perjuicios morales por la pérdida de sus seres queridos, pues el valor en que tuvo que ser condenado el Club el Nogal por este concepto tuvo que ser equivalente a 100 SMMLV tal y como lo ordena la jurisprudencia y no como lo hizo el fallador en la sentencia apelada.

La tasación por los perjuicios morales se debe de tasar para cada uno de mis mandantes a lo equivalente a 100 SMMLV para cada uno pues, como muy bien lo manifiesta la jurisprudencia anteriormente citada la cual resuelve un

caso análogo al que se trata en el presente proceso, esta debe de ser la tasación para los familiares del nivel 1 de cercanía afectiva, veamos:

> ***Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.***

- Tenemos que para la señora **Constanza Prado Restovich y sus hijos Juana Muñoz Prado y Felipe Muñoz Prado**, como muy bien se manifestó desde el escrito de demanda, estos convivían los cuatro en un mismo hogar de manera armónica, con ayuda mutua e ininterrumpida en familia por ser la señora Luz Constanza la esposa y Juana Muñoz Prado y Felipe Muñoz Prado hijos, hasta que el 7 de febrero de 2023 falleció el señor **SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ SALAME,** tenemos entonces que la relación con del señor Muñoz Salame con la señora Prado era de carácter conyugal y con sus hijos Juana y Felipe eran paterno filiales, es por esto que la indemnización por perjuicios morales para cada uno de ellos, debe de ser de 100 SMMLV y no como erradamente lo tasó sin fundamento alguno el fallo de primera instancia.

- Tenemos que para el señor **Julio Martín Otalora**, también se tendría que volver a tasar la condena impuesta por perjuicios morales a favor de él, lo anterior, a que como muy bien se manifestó dentro del escrito de demanda y como se probó dentro del trámite del proceso, el señor Otalora era el esposo de la señora **LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO** además, ellos convivían juntos en su hogar de manera armónica con ayuda mutua e ininterrumpida, es por esto que la indemnización por perjuicios morales para él, debe de ser de 100 SMMLV y no como erradamente lo tasó sin fundamento alguno el fallo de primera instancia.

- Tenemos que para **Catalina Arango Salazar** y su hija **Camila Arango Arango** como muy bien se manifestó desde el escrito de demanda, estos convivían los tres en un mismo hogar de manera armónica, con ayuda mutua e ininterrumpida en familia por ser la señora Catalina esposa y la señorita Camila la hija del señor **JORGE ANDRES ARANGO GARAVITO**, es por esto que la indemnización por perjuicios morales para cada uno de ellos, debe de ser de 100 SMMLV y no como erradamente lo tasó sin fundamento alguno el fallo de primera instancia.

De acuerdo con lo anterior, es más que claro debe de ser su Despacho quien corrija este error del fallador de primera instancia, condenando al demandado a pagar a mis representados los perjuicios morales de acuerdo con los argumentos anteriormente presentados.

IV. SOBRE EL APORTE DE PRUEBAS TOTALMENTE INVIABLES Y EXTEMPORANEAS POR PARTE DE LA DEMANDADA EN SU ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Su Señoría, es totalmente claro y evidente que dentro de nuestra legislación procesal existen algunas etapas en donde las partes pueden aportar pruebas, estas son las de la demanda, contestación de la demanda, en el escrito en donde se descorre el traslado del escrito de la demanda y excepcionalmente en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, veamos:

> *"**ARTÍCULO 12.*** **APELACIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIA.** *El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia se tramitará así:*
>
> *Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas,* ***dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso.*** *El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.*

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso."

Tenemos su Señoría que hablando de oportunidades y términos judiciales la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

"Los términos procesales "constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia". Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes." [12]

Verificando lo estrictamente ordenado por el artículo 12 de la ley 2213 de 2022 anteriormente citado, tenemos que es totalmente claro que es imposible aportar por las partes pruebas que no hayan sido solicitadas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación , tenemos entonces que las pruebas aportadas por el Club el Nogal denominadas: RESOLUCIÓN SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 de la JEP, Concepto Jurídico de Jorge Santos Ballesteros y la sentencia del Consejo de Estado del 30 de marzo de 2022 son totalmente extemporáneas y ajenas a la litis, a lo cual solicitamos desde este mismo momento a su Despacho, no decretarlas, excluirlas del expediente y como tal que tampoco sean tenidas en cuenta dentro del proceso al momento de resolver el recurso de apelación.

[12] Corte Constitucional Sentencia C-012 de 2002 MP Jaime Araujo Rentería

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3215040
Bogotá, D.C. - Colombia.

V. CONCLUSIONES

Como queda evidenciado con todos los argumentos expuestos, y las pruebas obrantes en el expediente, existen razones de sobra para mantener la responsabilidad del Club el Nogal dentro del presente proceso.

Pero además, también tenemos razones de sobra para solicitar que las condenas impuestas sean revocadas parcialmente, en el sentido de que sean revisadas por su Despacho para que las mismas sean falladas de acuerdo a las pretensiones de la demanda y en el caso del señor Julio Martín Otalora, la demandada también sea condenada a pagar las sumas equivalentes al daño emergente y lucro cesante.

En este orden de ideas, a continuación, se hará un breve y somero resumen de las principales conclusiones a las que obligatoriamente arribamos después de hacer un estudio concienzudo de las normas y lo pretendido en el escrito de demanda:

1. Era una obligación del *A quo* fallar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, pues así lo manifiesta la ley y la jurisprudencia, para lo cual, los valores objeto de condena deben de ser actualizados, y además debe la demandada ser condenada al pago de los intereses moratorios tal y como se solicitó en el escrito de demanda, o de acuerdo al principio de favorabilidad, lo que más le convenga a mis mandantes.

2. El señor Julio Martín Otalora por el solo hecho de ser cónyuge de la señora Luisa quien falleció en los atentados del Club el Nogal, tiene sobrado derecho a la indemnización, por los argumentos que se manifestaron a lo largo y ancho del presente escrito, pues como lo manifiesta la jurisprudencia, no es necesario probar la dependencia económica, pero como muy bien se probó, el señor Julio y la señora Luisa convivían y tenían ayuda mutua económica.

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

3. El fallador de primera instancia tasó mal los perjuicios morales de todos mis mandantes, pues no aplicó las tablas y valores ya establecidos desde la jurisprudencia para este tipo de casos, pues por concepto de indemnización por perjuicios morales a cada uno de ellos se les debe de entregar 100 SMMLV.

En estos términos queda sustentado el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2018 dentro del proceso del asunto.

De su respetado Despacho.

Atentamente,

Firmado digitalmente
por ISAAC ALFONSO
DEVIS GRANADOS
Fecha: 2023.09.11
16:44:00 -05'00'

ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS
C. C. No. 79.378.126 de Bogotá D.C.
T. P. No. 57.995 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: 11001310301320030071201 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO DEL 29 DE MAYO DE 2023

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 17:09

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (705 KB)

NOGAL SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN 2003-712 EL NOGAL (1).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: HUGO HERNANDO ROSALES CABALLERO <hrosales@devisabogados.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 16:47
Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: herreraabogados@hotmail.com <herreraabogados@hotmail.com>; gpardo@spjlaw.com <gpardo@spjlaw.com>; isaacdevis@devisabogados.com <isaacdevis@devisabogados.com>
Asunto: 11001310301320030071201 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA FALLO DEL 29 DE MAYO DE 2023

Señor Magistrado
Germán Valenzuela Valbuena
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
E. S. D.

Referencia: *Proceso Ordinario*
Demandante: *ALEXANDRA HOYOS CUARTA Y OTROS*
Demandados: *CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL*
Radicado No. ***110013103-013-2003-00712-01***

Asunto: *Sustentación del recurso de apelación contra fallo del 29 de mayo de 2023.*

Respetado señor Magistrado.

ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS, abogado en ejercicio, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma y portador de la Tarjeta Profesional No. 57.995 del C.S.J., actuando en desarrollo del poder que me han conferido **JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO**, **LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH**, **JUANA MUÑOZ PRADO, FELIPE MUÑOZ PRADO, CATALINA ARANGO SALAZAR y CAMILA ARANGO ARANGO**, por medio del presente, sustentamos el recurso de apelación en contra de la sentencia del 29 de mayo de 2023.

Anexo archivo pdf con lo del asunto.

--

DEVIS GRANADOS
ABOGADOS ASOCIADOS
Haga clic para agregar título

Hugo Rosales Caballero
Abogado
Cra. 12 A no. 77 A – 52 oficina 604
PBX (57-1) 3215040
www.devisabogados.com
Bogotá D.C - Colombia

*Asesorías en Derecho de las Telecomunicaciones y de los Servicios Públicos * Tribunales de Arbitramento *Derecho Constitucional y Acciones Constitucionales * Asesoría en Contratos * Derecho Civil y Comercial *Competencia Desleal *Derecho Administrativo *Derecho de los Usuarios

La información, escrita o gráfica, contenida en este correo electrónico y en sus anexos, es estrictamente confidencial y reservada y solo incumbe a la persona o empresa a la cual se encuentra expresamente dirigido. Si U.d., o su empresa no es el destinatario autorizado o recibe este mensaje por error, le rogamos destruirlo o devolverlo a nosotros. Cualquier retención, difusión, distribución o copia no autorizada de este correo se encuentra prohibida y sancionada por las leyes aplicables, en especial, pero sin limitarse a ella, al privilegio cliente – abogado.

The preceding email message (including any attachments) contains information that may be confidential, be protected by the attorney – client or other applicable laws, or constitute nonpublic information. It is intended to be conveyed only to the designated recipient(s). If you are not an intended recipient of this message, please notify the sender by replying to this message and then delete it from your system. Use, dissemination, distribution or reproduction of this message by unintended recipient is not authorized and may be unlawful.

DEVIS GRANADOS
ABOGADOS ASOCIADOS
E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

Bogotá D.C., a los 11 días del mes septiembre de 2023.

Señor Magistrado
Germán Valenzuela Valbuena
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
E. S. D.

Referencia: *Proceso Ordinario*
Demandante: *ALEXANDRA HOYOS CUARTA Y OTROS*
Demandados: *CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL*
Radicado No. ***110013103-013-2003-00712-01***

Asunto: *Sustentación del recurso de apelación contra fallo del 29 de mayo de 2023.*

Respetado señor Magistrado.

ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS, abogado en ejercicio, mayor y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma y portador de la Tarjeta Profesional No. 57.995 del C.S.J., actuando en desarrollo del poder que me han conferido **JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO**, **LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH**, **JUANA MUÑOZ PRADO, FELIPE MUÑOZ PRADO, CATALINA ARANGO SALAZAR y CAMILA ARANGO ARANGO**, por medio del presente, interponemos recurso de apelación en contra de algunos apartes de la sentencia del 29 de mayo de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Para efectos de brindar la mayor claridad sobre este recurso, procedo continuación a enunciar su contenido y alcance generales:

I. OPORTUNIDAD DE LA SUSTENTACIÓN.

II. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.

IV. CONCLUSIONES.

I. OPORTUNIDAD DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Toda vez que el auto que admitió el recurso de apelación fue notificado el 30 de agosto de 2023, se tiene que los tres (3) días del término de ejecutoría y los cinco (5) días que otorgó su Despacho por medio de dicho auto tenemos que el término para presentar vence el día de hoy, 11 de septiembre de 2023, por lo cual la presente sustentación al recurso de apelación se presenta en tiempo.

II. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Conforme a lo ensenado por el derecho procesal general, el recurso de apelación "*tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión*" [1]

Al respecto sostiene el doctor Hernando Morales Molina que:

> *"mediante la apelación, el proceso decidido por el juez inferior es llevado a uno superior, quien tiene el mismo conocimiento pleno que el primer juez y lo examina en todos los aspectos que podrían ser objeto de examen por parte de aquél. El conocimiento recae sobre la relación decidida en primera instancia, que el segundo juez viene a ser llamado a declarar ex novo, a base del material la providencia apelada, si se opta por la concepción revisora de la apelación.*

[1] Artículo 320 del CGP

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

La curte dice sobre el recurso de apelación: "Por virtud del sistema procedimental de las dos instancias se origina el recurso de apelación, que es el más importante de los medios legales para la impugnación de las decisiones judiciales, y de acuerdo con el derecho procesal el resultado de la apelación, cuando el recurso no tiene buen éxito, es la confirmación de la resolución apelada, o su revocación o su reforma cuando el recurso prospera, pero en este caso con el pronunciamiento por parte de la superioridad jerárquica de la correspondiente resolución sustitutiva de la reformada o revocada" LX. 143)[2]

Bajo estos entendidos, y, en síntesis, procede en este momento incoar y sustentar ante el presente Despacho, el recurso de que se trata.

Como comentario general sea menester manifestar que estamos de acuerdo en términos generales con la condena que el Juez de primera instancia con toda justicia y razón, impuso a la demandada, dados los extraordinarios niveles de negligencia, descuido y desgreño de esa entidad en lo que refiere a los mecanismos de selección de sus socios y seguridad en general de sus visitantes y asociados, entre otros.

Empero, estimamos con el mayor respeto, que la sentencia merece algunos reproches por no abordar algunos puntos vitales para mis mandantes o por abordar y decidir algunos puntos de manera errónea.

En ese sentido entonces debe ser entendido nuestro recurso como orientado a que la sentencia se adicione o corrija en algunos temas puntuales no abarcados o mal decididos en la sentencia de primera instancia.

A continuación, pasaremos a detallar los puntos objeto de nuestra inconformidad.

[2] MORALES MOLINA Hernando. Curso de derecho procesal civil editorial ABC. Novena Edición 1985 pag. 569

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.

3.1. EL JUEZ NO TUVO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL MOMENTO DE PROFERIR EL FALLO PUESTO QUE NO SE PRONUNCIÓ FRENTE A LA TOTALIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

Este agravio que vemos en la sentencia lo sustentaremos a su muy respetado Despacho manifestándole que el fallo de primera instancia no fue congruente y tampoco tuvo en cuenta las pretensiones realizadas desde un principio en el escrito de demanda, pues a todas luces está transgrediendo los más mínimos principios fundamentales del derecho procesal, pues fue ineficiente e ineficaz al momento de proferir el fallo que fue apelado y hoy está siendo sustentado.

De todos modos queremos manifestarle a su Despacho que el *a-quo* no tuvo en este punto en cuenta lo que en derecho procesal es conocido como el principio de congruencia, mismo que ha sido desarrollado por la jurisprudencia, definiéndolo como aquel sobre el cual el juez debe tomar la decisión del caso que se presente en concreto con base en los hechos, pretensiones y excepciones que fueron solicitadas y probadas a lo largo del proceso, de manera tal que exista una relación entre lo resuelto y lo planteado y probado por las partes en cada una de las etapas del litigio.

Señor Magistrado, es totalmente claro que este primer agravio que presentamos en el recurso de apelación y que hoy sustentamos en el presente escrito, va encaminado al notable yerro que tuvo el *a-quo* al decidir de fondo en primera instancia el presente proceso, pues lamentablemente en su decisión no falló la totalidad de las pretensiones, anotándose que además de que no lo hizo, ni siquiera manifestó la causal para no haberlo hecho.

Su Señoría, el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta la totalidad de las pretensiones de los escritos de demanda en donde los demandantes son la señora LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH y sus hijos JUANA MUÑOZ PRADO y FELIPE MUÑOZ PRADO, esposa e hijos de SERGIO

ALEJANDRO MUÑOZ SALAME (Q.E.P.D); el señor JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO esposo de LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO (Q.E.P.D) y la señora CATALINA ARANGO SALAZAR y su hija MARIA CAMILA ARANGO ARANGO, esposa e hija del señor JORGE ANDRÉS ARANGO GARAVITO (Q.E.P.D), con ocasión del atentado ocurrido el 7 de febrero de 2003 dentro de las instalaciones de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, en el cual fueron víctimas fatales de este suceso.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al principio de congruencia señala lo siguiente:

> *"El principio de congruencia es un límite al poder decisorio del fallador, que impone que haya correspondencia entre lo resuelto y lo que oportunamente plantearon los litigantes como materia de la controversia, sin perjuicio de las facultades oficiosas atribuidas por normas especiales."*[3]

De lo anteriormente mencionado, se puede reflejar la finalidad del principio de congruencia, el cual no es otro que el de poner un límite al poder decisorio del fallador, mismo que debe corresponder con lo resuelto y planteado por las partes a lo largo del proceso. Así mismo, la misma Corporación ha sostenido que el principio de congruencia es cardinal del conjunto de garantías contenidas en otro principio fundamental, como lo es del debido proceso, planteándolo de la siguiente manera:

> *"la congruencia de la sentencia es principio cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, que evita el exceso o el defecto de esa decisión respecto del marco jurídico de lo que compete resolver, (…) bajo cuyo tenor el juez debe sujetar la solución del conflicto a los hechos y las pretensiones de la demanda o demás oportunidades autorizadas, así como las defensas frente a esta última, sin desmedro de lo que ha de resolverse de oficio.*

[3] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil SC4257-2020. 9 de noviembre de 2020. M.P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de esta corporación, acatar la congruencia implica que debe haber armonía entre lo pedido y lo resistido"[4]

Teniendo en cuenta lo expuesto de acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de congruencia, tenemos que al mismo se le da vital importancia, a tal punto de categorizarlo como cardinal del conjunto de garantías del debido proceso, principio constitucional que garantía el debido desarrollo del proceso para las partes; la Corte Constitucional sobre el principio de congruencia ha dicho lo siguiente:

El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.[5]

Su Señoría, es claro que dentro de la parte resolutiva de la sentencia, el fallador de primera instancia omite fallar sobre muchas pretensiones que fueron solicitadas dentro de los escritos de demanda correspondientes para cada uno de mis mandantes, ahora nos disponemos a mostrar a su Despacho las pretensiones de las demandas de cada uno de mis mandantes que no fueron falladas por el Despacho de primera instancia y en la cual se sustenta el recurso de apelación interpuesto:

[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil SC22036-2017. 19 de diciembre de 2027. M.P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
[5] Corte Constitucional. Sentencia T-455 de 2016. M.P Alejandro Linares Cantillo

- **Respecto de lo pretendido por la señora LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH y sus hijos JUANA MUÑOZ PRADO y FELIPE MUÑOZ PRADO, esposa e hijos de SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ SALAME (Q.E.P.D).**

Las pretensiones de mis mencionadas representadas y que no se tuvieron en cuenta en el fallo proferido fueron las siguientes:

> *"**Quinta:** Reconózcase intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de Precios al Consumidor, desde la ejecutoria de la sentencia hasta su cumplimiento por el pago total.*
>
> ***Sexta:** Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar todas las sumas de dinero que del presente proceso se deriven y resultan a su cargo, debidamente actualizadas o indexadas.*
>
> ***Séptima:** Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar las costas del proceso y agencias en derecho, al tenor de lo dispuesto por los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil"*

- **Respecto de lo pretendido por el señor JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO esposo de LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO (Q.E.P.D).**

Las pretensiones de mi representado y que no se tuvieron en cuenta en el fallo proferido fueron las siguientes:

> *"**SEGUNDA:** Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a indemnizar y pagar a JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO, la totalidad de los daños y perjuicios materiales, incluidos daño emergente y lucro cesante, causados por la muerte de la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO, en la cuantía de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.00), o la que resulte de las bases que se demuestren en el proceso, debidamente reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.*

Dentro de los daños y perjuicios materiales, se incluirá:

1. El valor de la frustración o privación de la ayuda económica que venía reconociendo e iba a recibir de su esposa, de no haber sucedido su muerte.

2. El valor de los restantes ingresos íntegros que la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO, hubiera percibido durante el tiempo faltante de supervivencia probable, que usaría, como en efecto lo hizo en vida, en el mejor establecimiento de su familia y esposo.

3. En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios del capital representativo de la indemnización (compensación por falta de uso principal) que, según el artículo 1615 del Código Civil, se les está debiendo desde el 7 de febrero de 2003, y se pagarán junto con aquél en pesos de valor constante.

CUARTA: *Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, al resarcimiento y pago al demandante, de los daños y perjuicios que se le causaron, incluyendo los relativos a los bienes de su personalidad y los de contragolpe o rebote, de conformidad con lo que se pruebe y resulte de las bases del proceso, y en la cuantía que se acredite, debidamente reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.*

QUINTA: *Reconózcanse intereses aumentados con la variación promedio mensual del Índice de Precios al Consumidor, desde la ejecutoria de la sentencia hasta su cumplimiento por el pago total.*

SEXTA: *Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar todas las sumas de dinero que del presente proceso se deriven y resultan a su cargo, debidamente actualizadas o indexadas.*

SÉPTIMA: *Condénese a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar las costas del proceso y agencias en derecho, al tenor de lo dispuesto por los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.*

- **Respecto de lo pretendido por la señora CATALINA ARANGO SALAZAR y su hija MARIA CAMILA ARANGO ARANGO, esposa e hija del señor JORGE ANDRÉS ARANGO GARAVITO (Q.E.P.D).**

Sobre mis mandantes Catalina Arango y Camila Arango omitió el *a-quo* todas aquellas pretensiones que se solicitaron en el escrito de demanda y las cuales

de acuerdo con el acervo probatorio se deben de tener como probadas y particularmente a la pretensión de actualizar el dinero objeto de condena.

Para concluir, de acuerdo con lo anterior y en aras de sustentar el recurso de apelación interpuesto, podemos evidenciar su Señoría, que el fallador de la sentencia proferida el 29 de mayo de 2023, no tuvo en cuenta el principio cardinal de congruencia, pues como es evidente, en el mencionado fallo, se omitieron varias, por no decir muchas, de las pretensiones solicitadas por mis representados sin evidenciar que dicha omisión se realizara en virtud de una razón o argumento de peso, avalada por la jurisprudencia o en el material probatorio obrante en el expediente. En efecto, según todo el abundante material probatorio aportado por las partes dentro de los cuales se incluyen pruebas documentales, testimoniales, periciales y demás, se pudo demostrar y concluir la responsabilidad de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL dentro de los hechos motivo del proceso en cuestión, para lo cual, luego de hacerse establecido la responsabilidad de la parte demandada en el presente caso, el despacho debió tener en cuenta las demás pretensiones esgrimidas contenidas en los respectivos escritos de la demanda que se acumularon; pero como vemos, esto no sucedió, no se realizó pronunciamiento respectivo por parte del fallador de primera instancia; o por el contrario, se realizaron apreciaciones inicuas y vagas, v.gr aquella que se realizó un párrafo en donde el despacho motivó erróneamente que entre mi representado, el señor JULIO MARTÍN OTÁLORA y quien fuese su cónyuge, la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO (Q.E.P.D) no existía una dependencia económica.

Esto no solamente es incongruente, sino que son manifestaciones especulativas del Despacho, pues, por ejemplo, no existe sustento alguno que permita soportar la afirmación de que mi representado JULIO MARTÍN OTALORA no dependiera económicamente de su esposa fallecida, pues dentro del expediente existe (como lo sustentaré en el siguiente acápite) prueba de que él si dependía o co-dependía de su esposa.

Además de lo anterior, el fallo apelado y que hoy es sustentado, va en contravía de los derechos a ser reparados integralmente que notablemente de acuerdo con la jurisprudencia[6] aplicable a este caso, le asisten a mis mandantes los derechos objetivos solicitados.

Señor Magistrado, es usted quien debe de enmendar el error que tuvo el *a-quo* al proferir el fallo de primera instancia en lo concerniente a decidir sobre la totalidad de las pretensiones solicitadas en los escritos de demanda correspondiente para cada uno de mis mandantes.

3.2. SUSTENTACIÓN DEL ERROR DEL A QUO CONCERNIENTE A QUE NO CONDENA AL DEMANDADO A INDEMNIZAR MATERIALMENTE A JULIO MARTÍN OTALORA PORQUE SUPUESTAMENTE NO DEPENDÍA ECONOMICAMENTE DE SU ESPOSA.

Para sustentar este agravio evidenciado en el fallo que es apelado y que hoy se sustenta, tenemos que el Despacho en dicha decisión no condenó al demandado a pagar a mi mandante lo concerniente a las pretensiones sobre la indemnización patrimonial, este argumento simplemente lo fundamentó sin prueba alguna porque supuestamente el señor Julio Martín Otalora no dependía económicamente de su esposa fallecida.

Su señoría, tenemos que para sustentar ese yerro, es una apreciación netamente subjetiva del fallador sin soporte legal o jurisprudencial y que pues carece de prueba alguna.

En efecto, tenemos que contrario a lo que manifiesta el fallador, la dependencia económica, no es una condición *sine qua non* por el cual el cónyuge *supérstite* de las personas que mueren en los casos idénticos o similares al que se debate en el presente litigio deje de recibir una indemnización por los daños patrimoniales, lucro cesante y daño emergente, ocasionados a las

[6] Sentencia Corte Suprema de Justicia SC4427-2020 MP Octavio Augusto Tejeiro Duque

víctimas, por ello nos apartamos de lo dicho por el juez de instancia cuando de manera vaga y sin fundamento, manifiesta:

> 5.5.3.1. El anterior demandante en el líbelo demandatorio manifestó que el lucro cesante que solicitaba y que devengaba su esposa fallecida, era para compartirlo en vida, en ningún momento expusiera una dependencia económica de la misma y de ahí que el despacho considere que los perjuicios pedidos por concepto de lucro cesante no se le pueden reconocer, pues ya que, al no existir la dependencia en comento, su reclamación deviene improcedente.

Pero de una manera contraria a los escasos y desenfundados argumentos del Juez de primera instancia, tenemos que la jurisprudencia si ha reconocido los derechos patrimoniales de daño emergente y lucro cesante al cónyuge *supérstite* en casos análogos como el presente, veamos:

> *"**La dependencia económica,** lo ha interpretado la jurisprudencia de esta corporación también en el sentido de que quien la alega, reciba ayuda de su pareja para el sostenimiento del hogar común y, en particular, de los hijos de los dos, **de modo que ante el fallecimiento de ella -la pareja-, aquél deja de percibir dicho aporte** y, por consiguiente, queda avocado a asumir en su totalidad la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar, **obligación que deberá cumplir, como es lógico suponerlo, procurando que todos sus integrantes, en lo posible, preserven el nivel de vida que traían desde antes, lo que ostensiblemente deja ver el detrimento que sobreviene a su patrimonio, pues para el logro de ese objetivo se impondrá a él destinar, en mayor proporción o, como en muchos casos acontece, en su totalidad, los ingresos propios que recibe, lo que a la vez se traducirá en una menor capacidad económica para atender sus necesidades o gastos personales o**, según fuere el caso, para el ahorro, reducción ésta última que, proyectada en el tiempo, implicará que más adelante carezca de una base económica, o que la que pudiere llegar a tener fuere de menor*

envergadura, que le garantice los recursos para su manutención, con todo lo que de una situación como esa se desprende."[7]

Así mismo, en posterior sentencia, la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, ha manifestado y reiterado que para que se configure el derecho a la reparación, la regla general es que se debe de probar la dependencia económica, **pero esta regla tiene su respectiva excepción**, veamos:

En cuanto hace a la segunda modalidad aludida - lucro cesante-, cuando la causa de su producción es el fallecimiento de una persona, la jurisprudencia nacional ha precisado que el derecho a la reparación surge, en primer término, de la dependencia económica existente entre la víctima y quien reclama la indemnización. Al respecto, esta Corporación ha explicado que 'lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, (…), es la dependencia económica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento'.

Y en segundo lugar, de la circunstancia de que el solicitante, ***pese a no depender de la víctima, pues en vida de ésta obtenía ingresos propios, recibiera de ella ayuda económica periódica, cuya privación, por ende, merece ser igualmente resarcida.*** *Sobre este aspecto, la Corte ha señalado que '[d]ebe precisarse y quedar claro que las personas mayores e incluso las ya casadas que reciban ingresos provenientes de su renta de capital o de su trabajo, tienen legítimo derecho a obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que les cause el súbito fallecimiento de la persona de la cual recibían una ayuda económica de manera periódica, con prescindencia de los ingresos propios, y así mismo todas aquellas personas que tenían intereses ciertos y legítimos o la suficiente titularidad que se pueden ver menoscabados por la ocurrencia del hecho lesivo*

[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Radicación N.° 11001-3103-004-2002-01011-01, 28 de febrero de dos mil trece 2013. M.P. Arturo Solarte Rodríguez

imputable a la persona demandada'.(Apartes subrayados, citas de la sentencia Cas. Civ., del 5 de octubre de 1999, expediente No 5229)

Así mismo en sentencia SC15996-2016 la Corte Suprema de Justicia se refirió frente a que el cónyuge supérstite no necesariamente tiene que depender económicamente del cónyuge que fallece para recibir una indemnización a causa de la muerte de este último, veamos:

> *"Cuando se demanda la indemnización del daño, en su modalidad de lucro cesante, proveniente del fallecimiento de una persona, la misma emerge, en principio de la dependencia económica del peticionario con la víctima, circunstancia que a aquella incumbe acreditar;* ***pero igualmente, es viable su reconocimiento a quienes, a pesar de contar con ingresos propios, percibían de ella asistencia económica habitual, y en tal evento, igualmente al respectivo beneficiario le incumbe demostrar esa condición****."*[8] *(negrilla y subraya fuera de texto)*

Para sustentar la argumentación frente al yerro en la sentencia de primera instancia, tenemos que es clara la misma Corte Suprema de Justicia al manifestar que no importa que en una familia los dos cónyuges realicen aportes económicos, pues de todos modos, estos tienen un estilo de vida que preservar, y cuando uno de los dos fallece, existe indudablemente un desequilibrio económico, el cual el supérstite no está obligado a soportar, *máxime* si el fallecimiento de su cónyuge es imputable por la acción u omisión de un tercero, en este caso el Club el Nogal, el cual debe de reparar a mi mandante.

La dependencia económica hace parte de los efectos patrimoniales que surgen desde la existencia misma de la sociedad conyugal al momento de contraer matrimonio, esto teniendo en cuenta que el matrimonio es un contrato

[8] Corte Suprema de Justicia Sentencia SC15996-2016 Radicación N°1101-31-03-018-2005-00488-01 Luis Alonso Rico Puerta

solemne donde de acuerdo con el artículo 113 del Código Civil, los cónyuges deciden unirse de forma libre y de mutuo consentimiento, con el propósito de vivir juntos, procrear y auxiliarse.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencialmente los efectos patrimoniales del matrimonio indicando lo siguiente:

> *"La celebración de este contrato, en razón a su carácter bilateral, genera derechos e impone deberes recíprocos entre los contrayentes, que pueden ser de tipo personal, que se generan a partir de la unión conyugal, y patrimonial, que se refieren a la constitución de la sociedad conyugal."*

Su Señoría, teniendo en cuenta lo mencionado, el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta que **si existió** una dependencia económica entre el señor JULIO MARTÍN OTALORA y su esposa, la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO. Al incurrir en este error el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta que la dependencia económica no aplica exclusivamente cuando uno de los cónyuges requiere de manera indispensable de los ingresos que tenga el otro cónyuge, sino que es aplicable también dicha dependencia por el hecho de la existencia misma del matrimonio en donde como consecuencia de la sociedad conyugal, ambos cónyuges aportan en común o co-dependencia parte de su patrimonio para sostener un determinado estilo de vida a preservar, y cuando uno de los dos cónyuges fallece, existe indefectiblemente un desequilibrio económico, el cual el supérstite no está obligado a soportar y menos tratándose de un suceso como lo fue el atentado en la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL.

Su Señoría, el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta que en el expediente si existía prueba válida que daba cuenta de que el señor Julio Martín Otalora aunque no dependía en 100% de su señora esposa, si lo hacía en un gran porcentaje; es aquí como es totalmente viable sustentar el recurso de apelación, manifestando que el Despacho de primera instancia incurrió en error al argumentar que no se demostró la dependencia económica, pues no estudió o pasó por alto el informe pericial practicado por el Dr. ALVARO

HINESTROZA SALCEDO donde se determinó el valor de los perjuicios materiales o de carácter patrimonial causados al señor JULIO MARTÍN OTALORA con ocasión del atentado terrorista ocurrido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones de la demandada; ello pues la prueba fue clara en determinar que la señora LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO destinaba un 80% de sus ingresos totales mensuales para el mantenimiento del hogar, prueba que se tuvo que tener en cuenta al momento de resolver la primera instancia, pero como vemos su señoría, esto no fue así, es por esto que en el recurso de apelación que presentamos era fundamental poner de presente este yerro en el que incurrió dicho fallador, así entonces que en virtud de ello solicitamos a su Despacho que subsane dicho error haciendo la efectiva condena al demandado en cuanto a los daños materiales causados a mi mandante JULIO MARTÍN OTÁLORA los cuales existen y están efectivamente probados.

3.3. EL FALLADOR DE PRIMERA INSTANCIA TASÓ LA INDEMNIZACIÓN POR LOS PERJUICIOS MORALES DESCONOCIENDO LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.

Para sustentar este yerro en el que incurrió el fallador de primera instancia tenemos que, para la tasación de los prejuicios extrapatrimoniales, denominados también como morales, existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico diferentes tablas encaminadas a formalizar y estandarizar este tipo de perjuicios que son difíciles de tasar para cada caso en concreto, pues los daños morales o extrapatrimoniales son casi imposibles de tasar, pues no se puede medir en dinero el valor del dolor que se sufre luego de la muerte de un ser querido, es por esto que los órganos de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativo, en cuanto al concepto de perjuicio moral y su indemnización la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

"La indemnización por perjuicios morales es de cierta manera simbólica "(…) y sólo significa una forma de satisfacción o una afirmación de parte de la justicia en aras del derecho vulnerado (…)"

Se trata pues, de abrirle "al querellante una nueva fuente de alivio y bienestar.

***El hecho de que a falta de normativa explícita que determine la forma de cuantificar el daño moral, el precedente judicial del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene un cierto carácter vinculante, para cuya separación es menester que el juez ofrezca razones suficientes de su distanciamiento**." [9] (negrilla y subraya fuera de texto)*

Así mismo también lo ha manifestado el Consejo de Estado pues este órgano manifiesta que:

"Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo." [10]

Esta misma jurisprudencia del Consejo de Estado manifiesta de manera muy clara la línea que se tiene para tasar una indemnización por perjuicio moral a favor de los familiares de una víctima mortal, y en la cual existe alguna responsabilidad por parte de alguna entidad, veamos:

*"**En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:***

[9] Corte Suprema de Justicia Sentencia SC4124-2021 Radicación 05001-31-03-009-2010-00185-01. Francisco Ternera Barrios

[10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 26.251.

<u>Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.</u>

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

(…)

<u>Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva»"</u> [11].

Su Señoría, es claro que el Despacho de primera instancia no tuvo en cuenta estos estándares jurisprudenciales para determinar la indemnización para cada uno de mis mandantes concernientes al daño extrapatrimonial.

Tenemos entonces que yendo al caso concreto, tenemos que el fallo que se apeló y que hoy se sustenta, dentro de los yerros que hemos manifestado en el

[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 26.251.

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3215040
Bogotá, D.C. - Colombia.

recurso de apelación y en la presente sustentación, omitió aplicar la jurisprudencia antes citada con las condenas que se deben aplicar para este tipo de situaciones, pues como muy bien se manifiesta, existen decisiones jurisprudenciales de carácter vinculante en cuanto a las tasaciones de indemnización por perjuicios morales referente en este tipo de casos análogos al que hoy nos ocupa en este proceso, así las cosas, el yerro es totalmente evidente pues así falló el Despacho de primera instancia:

> **TERCERO:** Condenar a la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL, a pagar a las demandantes ALEXANDRA HOYOS CUARTAS y su hija MARIA CAMILA CAICEDO HOYOS la suma de **$50'000.000** y **$70'000.000**, respectivamente por concepto de perjuicios morales.
>
> A favor del señor JULIO MARTIN OTALORA CANO la suma de: **$50'000.000** por concepto de perjuicios morales.
> A favor de la señora LUZ CONSTANZA PRADO RESTOVICH por concepto de lucro cesante consolidado (en adelante L.C.C.) el valor de **$1.534'324.283** y por perjuicios morales **$50'000.000**, para JUANA MUÑOZ PRADO un L.C.C. de **$372'375.885** y por concepto de perjuicios morales **$70'000.000** para FELIPE MUÑOZ PRADO un L.C.C. de **$339'092.654** y **$70'000.000** por concepto de perjuicios morales.
> Respecto a la señora CATALINA ARANGO SALAZAR por concepto de L.C.C. el valor de **$1.502'007.410;** y por perjuicios morales **$50'000.000**, para CAMILA ARANGO ARANGO un L.C.C. de **$917'058.430** y **$70'000.000** por perjuicios morales.

Es totalmente evidente que el Despacho de primera instancia incurrió en error al tasar la condena por concepto de perjuicios morales por la pérdida de sus seres queridos, pues el valor en que tuvo que ser condenado el Club el Nogal por este concepto tuvo que ser equivalente a 100 SMMLV tal y como lo ordena la jurisprudencia y no como lo hizo el fallador en la sentencia apelada.

La tasación por los perjuicios morales se debe de tasar para cada uno de mis mandantes a lo equivalente a 100 SMMLV para cada uno pues, como muy bien lo manifiesta la jurisprudencia anteriormente citada la cual resuelve un

caso análogo al que se trata en el presente proceso, esta debe de ser la tasación para los familiares del nivel 1 de cercanía afectiva, veamos:

> ***Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.***

- Tenemos que para la señora **Constanza Prado Restovich y sus hijos Juana Muñoz Prado y Felipe Muñoz Prado**, como muy bien se manifestó desde el escrito de demanda, estos convivían los cuatro en un mismo hogar de manera armónica, con ayuda mutua e ininterrumpida en familia por ser la señora Luz Constanza la esposa y Juana Muñoz Prado y Felipe Muñoz Prado hijos, hasta que el 7 de febrero de 2023 falleció el señor **SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ SALAME,** tenemos entonces que la relación con del señor Muñoz Salame con la señora Prado era de carácter conyugal y con sus hijos Juana y Felipe eran paterno filiales, es por esto que la indemnización por perjuicios morales para cada uno de ellos, debe de ser de 100 SMMLV y no como erradamente lo tasó sin fundamento alguno el fallo de primera instancia.

- Tenemos que para el señor **Julio Martín Otalora**, también se tendría que volver a tasar la condena impuesta por perjuicios morales a favor de él, lo anterior, a que como muy bien se manifestó dentro del escrito de demanda y como se probó dentro del trámite del proceso, el señor Otalora era el esposo de la señora **LUISA FERNANDA SOLARTE ANGULO** además, ellos convivían juntos en su hogar de manera armónica con ayuda mutua e ininterrumpida, es por esto que la indemnización por perjuicios morales para él, debe de ser de 100 SMMLV y no como erradamente lo tasó sin fundamento alguno el fallo de primera instancia.

- Tenemos que para **Catalina Arango Salazar** y su hija **Camila Arango Arango** como muy bien se manifestó desde el escrito de demanda, estos convivían los tres en un mismo hogar de manera armónica, con ayuda mutua e ininterrumpida en familia por ser la señora Catalina esposa y la señorita Camila la hija del señor **JORGE ANDRES ARANGO GARAVITO**, es por esto que la indemnización por perjuicios morales para cada uno de ellos, debe de ser de 100 SMMLV y no como erradamente lo tasó sin fundamento alguno el fallo de primera instancia.

De acuerdo con lo anterior, es más que claro debe de ser su Despacho quien corrija este error del fallador de primera instancia, condenando al demandado a pagar a mis representados los perjuicios morales de acuerdo con los argumentos anteriormente presentados.

IV. SOBRE EL APORTE DE PRUEBAS TOTALMENTE INVIABLES Y EXTEMPORANEAS POR PARTE DE LA DEMANDADA EN SU ESCRITO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Su Señoría, es totalmente claro y evidente que dentro de nuestra legislación procesal existen algunas etapas en donde las partes pueden aportar pruebas, estas son las de la demanda, contestación de la demanda, en el escrito en donde se descorre el traslado del escrito de la demanda y excepcionalmente en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación, veamos:

> *"**ARTÍCULO 12.*** **APELACIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIA.** *El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia se tramitará así:*
>
> *Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas,* ***dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalados en el artículo 327 del Código General del Proceso.*** *El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.*

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijará fecha y hora para la realización de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictará sentencia. La sentencia se dictará en los términos establecidos en el Código General del Proceso."

Tenemos su Señoría que hablando de oportunidades y términos judiciales la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

"Los términos procesales "constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia". Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes." [12]

Verificando lo estrictamente ordenado por el artículo 12 de la ley 2213 de 2022 anteriormente citado, tenemos que es totalmente claro que es imposible aportar por las partes pruebas que no hayan sido solicitadas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación , tenemos entonces que las pruebas aportadas por el Club el Nogal denominadas: RESOLUCIÓN SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 de la JEP, Concepto Jurídico de Jorge Santos Ballesteros y la sentencia del Consejo de Estado del 30 de marzo de 2022 son totalmente extemporáneas y ajenas a la litis, a lo cual solicitamos desde este mismo momento a su Despacho, no decretarlas, excluirlas del expediente y como tal que tampoco sean tenidas en cuenta dentro del proceso al momento de resolver el recurso de apelación.

[12] Corte Constitucional Sentencia C-012 de 2002 MP Jaime Araujo Rentería

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3215040
Bogotá, D.C. - Colombia.

V. CONCLUSIONES

Como queda evidenciado con todos los argumentos expuestos, y las pruebas obrantes en el expediente, existen razones de sobra para mantener la responsabilidad del Club el Nogal dentro del presente proceso.

Pero además, también tenemos razones de sobra para solicitar que las condenas impuestas sean revocadas parcialmente, en el sentido de que sean revisadas por su Despacho para que las mismas sean falladas de acuerdo a las pretensiones de la demanda y en el caso del señor Julio Martín Otalora, la demandada también sea condenada a pagar las sumas equivalentes al daño emergente y lucro cesante.

En este orden de ideas, a continuación, se hará un breve y somero resumen de las principales conclusiones a las que obligatoriamente arribamos después de hacer un estudio concienzudo de las normas y lo pretendido en el escrito de demanda:

1. Era una obligación del *A quo* fallar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, pues así lo manifiesta la ley y la jurisprudencia, para lo cual, los valores objeto de condena deben de ser actualizados, y además debe la demandada ser condenada al pago de los intereses moratorios tal y como se solicitó en el escrito de demanda, o de acuerdo al principio de favorabilidad, lo que más le convenga a mis mandantes.

2. El señor Julio Martín Otalora por el solo hecho de ser cónyuge de la señora Luisa quien falleció en los atentados del Club el Nogal, tiene sobrado derecho a la indemnización, por los argumentos que se manifestaron a lo largo y ancho del presente escrito, pues como lo manifiesta la jurisprudencia, no es necesario probar la dependencia económica, pero como muy bien se probó, el señor Julio y la señora Luisa convivían y tenían ayuda mutua económica.

E-mail: devisabogados@devisabogados.com
www.devisabogados.com
Cra. 12A No. 77A - 52 Of. 604.
PBX: 3219040
Bogotá, D.C. - Colombia.

3. El fallador de primera instancia tasó mal los perjuicios morales de todos mis mandantes, pues no aplicó las tablas y valores ya establecidos desde la jurisprudencia para este tipo de casos, pues por concepto de indemnización por perjuicios morales a cada uno de ellos se les debe de entregar 100 SMMLV.

En estos términos queda sustentado el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2018 dentro del proceso del asunto.

De su respetado Despacho.

Atentamente,

Firmado digitalmente
por ISAAC ALFONSO
DEVIS GRANADOS
Fecha: 2023.09.11
16:44:00 -05'00'

ISAAC ALFONSO DEVIS GRANADOS
C. C. No. 79.378.126 de Bogotá D.C.
T. P. No. 57.995 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: M.P., Dr. Germán Valenzuela Valbuena / Alexandra Hoyos Cuartas y otros vs. Club El Nogal / Rad. 11001310301320030071202 (procesos acumulados) / Sustentación recurso de apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 9:58

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

4 archivos adjuntos (4 MB)

Sustentacion recurso apelacion caso Club el Nogal sept-2023 VF.pdf; Anexo 1 - sentencia CE responsabilidad atentado Club El Nogal marzo-2022.pdf; Anexo 2 - 667243643-JEP-cataloga-como-crimen-de-guerra-atentado-en-El-Nogal.pdf; Anexo 3 - Concepto Legal Temas de Responsabilidad Civil (Jorge Santos Ballesteros).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Gabriel Pardo <gpardo@spjlaw.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 9:49
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: herreraabogados@hotmail.com <herreraabogados@hotmail.com>; benderrsr@hotmail.com <benderrsr@hotmail.com>; devisabogados@devisabogados.com <devisabogados@devisabogados.com>; epardo@spjlaw.com <epardo@spjlaw.com>
Asunto: M.P., Dr. Germán Valenzuela Valbuena / Alexandra Hoyos Cuartas y otros vs. Club El Nogal / Rad. 11001310301320030071202 (procesos acumulados) / Sustentación recurso de apelación

11 de septiembre de 2023

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
MP: DR: GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
E. S. D.
Enviado por correo electrónico a: secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Proceso Ordinario (declarativo)

Demandante: Alexandra Hoyos Cuartas y otros
Demandado: Corporación Club El Nogal
Rad.: 11001310301320030071202 (procesos acumulados)
Asunto: **Sustentación recurso de apelación**

GABRIEL PARDO OTERO, en mi condición de apoderado principal de la Corporación Club el Nogal, de manera oportuna, me permito sustentar el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia fechada el 29 de mayo de 2023, solicitando que el H. Tribunal Superior de Bogotá proceda a revocarla y, en consecuencia, a absolver de responsabilidad a mi representada.

Adjunto se remiten el memorial contentivo de la sustentación, así como los tres anexos que en el mismo se indican.

En copia incluyo a los apoderados de la parte actora.

Notificaciones y comunicaciones electrónicas: gpardo@spjlaw.com y también epardo@spjlaw.com

Muy atentamente,

GABRIEL PARDO OTERO
C.C. 437570
T.P. 12.938

Nota: En virtud de lo preceptuado por el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022, el presente memorial no requiere de '*firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos*'.

11 de septiembre de 2023

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
MP: DR: GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
E. S. D.
Enviado por correo electrónico a: secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Proceso Ordinario (declarativo)
Demandante: Alexandra Hoyos Cuartas y otros
Demandado: Corporación Club El Nogal
Rad.: 11001310301320030071202 (procesos acumulados)
Asunto: **Sustentación recurso de apelación**

GABRIEL PARDO OTERO, en mi condición de apoderado principal de la Corporación Club el Nogal, de manera oportuna[1], me permito sustentar el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia fechada el 29 de mayo de 2023, solicitando que el H. Tribunal Superior de Bogotá proceda a revocarla y, en consecuencia, a absolver de responsabilidad a mi representada.

I. CUESTION PREVIA.

La Corporación Club El Nogal reitera sus más sinceras condolencias y su sentimiento de solidaridad para con las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003. Mi representada también fue víctima de estos hechos y, por esa misma razón, comparte el dolor y la angustia que ese negro 7 de febrero produjo en tantos hogares. Sea esta la oportunidad para dejar constancia de ello y, además, para indicar que la defensa que aquí se ejerce en nada opaca los sentimientos de solidaridad y el profundo respeto por los accionantes y sus seres queridos.

En el curso del proceso mi representada demostró cabalmente la total e indefectible ausencia de responsabilidad civil de su parte. Ciertamente, como podrá observarse en la presente sustentación, no concurren en este caso, ni por asomo, los presupuestos que se requieren para proferir una condena de indemnización, particularmente en lo que se refiere al factor de atribución (culpa o negligencia) y a la relación de causalidad. Lo propio incluso desde el fundamento mismo de la responsabilidad civil, esto es, desde la óptica de la justicia correctiva y la antijuridicidad. Así mismo, es jurídicamente errado establecer a cargo del Club una obligación de seguridad que el *a quo* califica de resultado en su fallo y como tal extraña a la responsabilidad civil extracontractual invocada como fundamento de las demandas decididas en primera instancia y, por si fuera poco, imprimirle tal categoría a un deber general y abstracto de comportamiento señalado por los estatutos de la Corporación demandada con base en un análisis interpretativo descontextualizado y carente de razonabilidad y proporcionalidad.

[1] El auto admisorio del recurso de apelación fue notificado por estado electrónico del 30 de agosto de 2023. Por lo tanto, el término para sustentar el recurso de alzada vence el 11 de septiembre de 2023, razón por la cual este escrito se radica de manera oportuna ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En materia de derecho de daños impera el principio *'casum sentit dominus',* por virtud del cual, *prima facie,* cada individuo debe soportar las consecuencias lesivas de que sea víctima en su vivir cotidiano[2], particularmente en eventos de terrorismo al que todos estamos expuestos. Ciertamente, la intervención de la responsabilidad civil, aún en los regímenes más estrictos, es una intervención marginal, en el sentido de que, en principio, es cada individuo quien debe cargar con los perjuicios que sufra sobre sus bienes o sobre su patrimonio[3], cuestión ésta última que es ratificada por normas como el artículo 2341 del Código Civil colombiano o, incluso, por novísimos instrumentos en materia de daños, como son, a modo de ejemplo, los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (artículo 1:101) y el difundido Marco Común de Referencia (Libro VI – artículo 1:101).

La consecuencia lógica de lo anterior es, entonces, que solamente en determinadas hipótesis definidas por el ordenamiento, el daño padecido por un sujeto puede ser trasladado al patrimonio de otro, esto es, puede serle imputado para efectos de que proceda a indemnizarlo. Puesto en otros términos, mientras que no concurran los presupuestos o razones que prevé el derecho de la responsabilidad, el daño que sufrió un determinado individuo deberá ser asumido por ese individuo y no podrá trasladarse o endilgarse a un sujeto diferente[4].

Ahora, como es sabido, dentro de los mencionados presupuestos, además de la existencia de un daño que sea cierto y directo –como se afirma, por regla general, en la doctrina-, es preciso que concurran el factor de atribución de responsabilidad que, en casos como este, está dado por la culpa o el dolo, y la relación de causalidad. A falta de cualquiera de los anteriores, no puede condenarse a la responsabilidad del sujeto al que se le pretende endilgar[5].

Pues bien, esto es justamente lo que sucede frente a los hechos del caso que aquí se analiza. A diferencia de lo sostenido en las diferentes demandas que integran el presente contradictorio, el material probatorio no da cuenta de que la Corporación Club El Nogal hubiere incurrido en culpa alguna –particularmente en lo tocante con las revisiones de seguridad- ni, tampoco, de que su proceder hubiere sido el detonante causal de los perjuicios que se reclaman. Muy por el contrario, en el expediente obran pruebas suficientes de la diligencia con que actuó mi representada y de la configuración de una causa extraña, que es la que generó los perjuicios en el caso de marras. Por esa razón, ninguna responsabilidad puede imputársele al Club El Nogal, lo que conduce a que se imponga su exoneración y se revoque la sentencia recurrida.

---

[2] Cfr.: Moisset De Espanés, *Et.Al.,* Responsabilidad por daños. T.I. 1990. p.101; Le Tourneau, Philippe. La responsabilité civile. Dalloz. París. 2004. p.409.

[3] De Ángel Yagüez, Ricardo. La responsabilidad civil. Bilbao. 1989. pp.324 y ss.

[4] Cfr. Pascual Estevil, Luís. Hacia un concepto actual de responsabilidad civil. Bosch. Barcelona. 1989. pp.68-70.

[5] Como bien lo ha indicado la jurisprudencia, "… para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona –natural o jurídica- se requiere, como bien es sabido, que haya cometido una culpa (lato sensu) y que de ésta sobrevengan perjuicios al reclamante. O sea la concurrencia de los tres elementos que la doctrina predominante ha sistematizado bajo los rubros de culpa, daño y relación de causalidad entre aquella y éste…" (Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia de junio 10 de 1963). Sobre este particular, dos autores son especialmente elocuentes en torno a la necesidad de la concurrencia de los denominados –en forma desafortunada-, elementos axiológicos de la responsabilidad, a saber: Santos Ballesteros, Instituciones de responsabilidad civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2008. pp.22-49; Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Op.Cit., pp.187 y ss. Desde el punto de vista comparado, lo anterior es constantemente reiterado. Al respecto, vid. Le Tourneau, Philippe. La responsabilidad civil. Legis. Bogotá. 2007.

II. BREVE REFERENCIA A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 45 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

La sentencia de primera instancia señaló que los distintos integrantes de la parte actora presentaron demanda judicial en contra de mi representada con el objeto de que a esta se le declare "… *civil y extracontractualmente responsable por los daños y perjuicios que se le ocasionaron …*" por el fallecimiento de César Augusto Caicedo Cruz (q.e.p.d.), Luisa Fernanda Solarte Angulo (q.e.p.d.), Sergio Alejandro Muñoz Salame (q.e.p.d.) y Jorge Andrés Arango Garavito (q.e.p.d.).

Luego de efectuar algunas observaciones sobre la responsabilidad civil contractual y aquella de estirpe contractual, el Despacho señaló que en ambos escenarios "*deben acreditarse suficientemente los siguientes elementos: A) la ocurrencia del hecho dañino; B) el daño causado; C) la relación de causalidad entre el hecho y el daño, además; D) la culpa del demandado y E) el monto del daño o perjuicio causado. Esos elementos deben estar debidamente probados, si se quiere acoger en todo o en parte las súplicas introductorias*".

Posteriormente, el *a quo* inició el análisis del caso particular señalando que se encuentra demostrado el fallecimiento de las personas indicadas precedentemente en el atentado terrorista ocurrido el 7 de febrero de 2003, así como los grados de parentesco con los demandantes.

Sentado lo anterior, la sentencia continuó con el estudio del asunto y encontró responsable a la demandada con fundamento en las siguientes consideraciones:

- El señor Juez de primera instancia indicó que dentro de las obligaciones del Club El Nogal se encontraba "*… el deber de seguridad frente a sus socios, personas amparadas por acciones empresariales e invitados", obligación de resultado al comprometerse y velar por garantizarles una estadía en condiciones de seguridad dentro del Club*".

- Según la providencia objeto de apelación, al ser catalogada como una obligación de resultado, la demandada solo podía excusar su responsabilidad demostrando la presencia de una causa extraña (caso fortuito, fuerza mayor, hecho o culpa de la víctima o el hecho de un tercero), "*quedando en un segundo plano el haber actuado con diligencia o cuidado, lo cual de por si no lo exime de cumplir con dicha obligación de seguridad*".

- Para el *a quo,* en el caso de autos no se configuraron los elementos constitutivos de una causa extraña, vale decir la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

- En lo que tiene que ver con el hecho exclusivo del tercero, el Despacho señaló que el mismo no se encuentra configurado frente al atentado terrorista del 7 de febrero de 2003 pues consideró que "*concurrió con el hecho defectuoso de la obligación de seguridad por parte del Club, convirtiendo el proceder de la demandada en una culpa concurrente, lo de (sic) que desemboca en que se esté en presencia de una obligación solidaria tal y como lo establece el artículo 1571 del C. Civil*".

- Finalmente, la providencia procedió con el cálculo de los perjuicios frente a cada uno de los procesos acumulados, accediendo en todos al daño moral y en dos de ellos a la petición de indemnización por concepto de lucro cesante. Así mismo, se condenó en costas a mi representada y en la parte resolutiva

se indicó el valor de las agencias en derecho concedidas en favor de cada demandante.

III. DESARROLLO DE LOS REPAROS PRESENTADOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los reparos que fueron formulados en primera instancia en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, planteados con la interposición del recurso de apelación, razón por la cual emplearemos el mismo orden utilizado en el respectivo escrito:

1. PRIMER REPARO: INDEBIDA APLICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO – LAS OBLIGACIONES DE RESULTADO SON PROPIAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTRACTUAL.

La sentencia de primera instancia señaló que el presente caso se enmarca dentro de la responsabilidad civil extracontractual. No obstante ello, para la resolución del asunto aplicó un régimen jurídico propio de la responsabilidad civil contractual. En efecto, el Juzgado estimó que mi mandante era responsable frente a los actores por la infracción de una obligación contenida en sus estatutos sociales y, además, categóricamente concluyó que era de resultado y no de medios.

Lo anterior es un claro yerro en la sustentación de la sentencia de primera instancia, toda vez que la jurisprudencia patria, con buen tino, ha admitido la distinción entre obligaciones de medios y de resultado, pero en el campo de la responsabilidad contractual.

Para ratificar lo anterior, es de mencionar que en sentencia de fecha 5 de noviembre de 2013, la Corte puntualizó sobre este el particular:

> *"5.3. La clasificación de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado no se encuentra consagrada en las codificaciones que siguieron el hito planteado por el derecho francés con el Code Civil en 1804, y fue desarrollada por los juristas de principios del siglo veinte para solucionar algunas dificultades encontradas en orden a determinar las diferentes tipologías que puede asumir el contenido de la obligación, para definir la forma en la que se puede dar cumplimiento al compromiso asumido por el deudor, así como para comprender adecuadamente los requisitos exigibles en materia de responsabilidad contractual, específicamente el relacionado con la prueba de la culpa como factor de atribución de la responsabilidad, así como la posibilidad de acreditar o no la diligencia empleada como medio al alcance del deudor para exonerarse de la obligación indemnizatoria.*
>
> *"En Francia, particularmente, la adopción de esta clasificación, allí atribuida a los planteamientos del jurista René Demogue, tuvo como propósito armonizar las disposiciones contenidas en los artículos 1137 y 1147 del Código Civil, en cuanto a la admisibilidad de la prueba de la diligencia o cuidado como mecanismo para obtener la exoneración del deudor en diversos supuestos de responsabilidad contractual.*
>
> *"En el contexto antes descrito, y con especial referencia a las obligaciones de hacer, se ha señalado, en términos simples, que en algunas ocasiones el compromiso del deudor consiste en desplegar una conducta, actividad o comportamiento, con diligencia, sin garantizar que el acreedor obtenga un logro concreto o específico –*

obligaciones de medio o de medios-, al paso que en otros eventos la satisfacción del titular del derecho de crédito estará dada porque con el comportamiento debido se obtenga un resultado o efecto preciso y determinado –obligaciones de resultado-.

"5.4. En el planteamiento clásico de la teoría se consideró que el criterio de distinción para establecer si se está en presencia de una u otra clase de obligaciones, luego de evaluar, obviamente, la voluntad de las partes, se encuentra en la aleatoriedad del resultado esperado. En ese sentido, se señaló que en las obligaciones de medio el azar o el acaso es parte constitutiva de su contenido, y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación diligente del deudor, mientras que, por el contrario, en las obligaciones de resultado lo contingente está presente en una mínima proporción, de manera que la conducta del obligado debe ser suficiente para obtener el logro esperado por el titular del derecho de crédito.

"En la actualidad, como un desarrollo de las ideas antes esbozadas y sin perjuicio de que se puedan considerar varios factores para adoptar la determinación respectiva (cfr. art. 5.1.5. de los Principios Unidroit), el criterio más aceptado para distinguir uno y otro tipo de obligación se encuentra en la incidencia que en el concepto de cumplimiento pueda tener el que con la conducta debida se realice el interés primario del acreedor, es decir, que éste efectivamente obtenga el resultado útil o la finalidad práctica que espera lograr. ***En algunas obligaciones, el deudor asume el compromiso de desarrollar una conducta determinada en favor del acreedor, con el propósito de satisfacer el resultado esperado por éste; no obstante, si tal resultado también depende de factores cuyo control es ajeno al comportamiento del deudor, v.gr. elementos aleatorios o contingentes, la obligación, en dichos eventos, es de medio o de medios****, y el deudor cumple su compromiso si obra con la diligencia que corresponda, aunque no se produzca la satisfacción del interés primario del acreedor. Por su parte, en otras obligaciones, las de resultado, el interés primario del titular del derecho crediticio sí se puede obtener con el comportamiento o conducta debida, toda vez que en ellas la presencia del componente aleatorio o de azar es exigua, y, por ende, el deudor sí puede garantizar que el acreedor obtenga el resultado o logro concreto que constituye dicho interés primario.*

"Ahora bien, no se puede desconocer que el comportamiento del deudor, teniendo presente que la obligación es una relación de cooperación para la satisfacción de necesidades, siempre estará enderezado a la realización del interés del acreedor: v.gr., el médico siempre tendrá como finalidad de su actuación la curación del paciente y el ingeniero se trazará como propósito de su conducta contractual la adecuada y completa culminación y entrega de la obra encargada. Lo que ocurre es que en el primer caso, el médico no puede garantizar que el resultado esperado y querido se realice, pues no se encuentra totalmente a su alcance que ello ocurra (existen circunstancias físicas, anímicas, ambientales, etc., que pueden condicionar y determinar el resultado esperado), mientras que en el contrato de obra, por regla general, para el deudor es factible lograr u obtener que el acreedor reciba efectivamente la obra encargada. En la obligación de medio el deudor cumplirá su deber de conducta desplegando la actividad o comportamiento esperado, aun cuando no se obtenga el resultado o fin práctico perseguido por el acreedor; por el contrario, si la obligación es de resultado, sólo habrá cumplimiento si el acreedor obtiene el logro o propósito concreto en el que fundó sus expectativas.

"5.5. Es suficientemente conocido que la jurisprudencia civil acogió la distinción entre obligaciones de medio y de resultado en las sentencias de 30 de noviembre de 1935 (G.J. 1905 y 1906) y de 31 de mayo de 1938 (G.J. 1936, págs. 566 y ss.), como una clasificación complementaria a la de dar, hacer y no hacer, y con un énfasis particular respecto de su trascendencia para solucionar los problemas de la prueba de la culpa en la responsabilidad civil contractual. Señaló la Corte en esta última ocasión que "[s]entado que al acreedor incumbe en términos generales la

prueba de la culpa contractual, se distingue para los efectos de su rigor entre las obligaciones de resultado y la obligaciones de medios. Siendo -el incumplimiento del contrato- un hecho, todos los medios de prueba son hábiles para establecerlo. Por lo tanto, cuando la obligación es de resultado, es suficiente la prueba del contrato (…) porque prácticamente, en el momento de la valoración del material probatorio, queda demostrada la culpa del deudor ante la ausencia de toda prueba en contrario. La prueba de lo contrario en esta clase de obligaciones no libera al deudor si se refiere a la ausencia de culpa sino que debe versar sobre el caso fortuito, la fuerza mayor o la existencia de una causa extraña que no le sea imputable (…). Respecto de la obligación de medios, se hace indispensable para el demandante, no sólo acreditar la existencia del contrato, sino afirmar también cuáles fueron los actos de inejecución, porque el demandado no podría de otra manera contrarrestar los ataques que le dirige el actor, debido precisamente a la naturaleza de su prestación que es de lineamientos esfumados. Afirmado el acto de inejecución, incumbe al demandado la prueba de su diligencia y cuidado, conforme al inciso 3° del art. 1604, prueba suficiente para liberarlo, porque en esta clase de obligaciones basta para exonerar al deudor de su responsabilidad acreditando cualquiera de esos dos elementos (…)".

"En términos generales, el planteamiento original de la Corte se ha mantenido hasta el presente, destacándose en los pronunciamientos de la Corporación la trascendencia de la clasificación de que se trata, particularmente respecto de la determinación del contenido de las obligaciones, para la definición de su cumplimiento o incumplimiento, así como en lo atinente a su influencia en las cargas probatorias de las partes.

"No obstante, la Sala no es ajena a la evolución que al respecto se ha presentado en el derecho contemporáneo, en donde no pocas críticas se le han realizado, por la amplitud y generalidad que se le pretende dar, porque su origen se encuentra en la necesidad de solucionar problemas legislativos existentes en algunos países europeos que no necesariamente se presentan en estas latitudes, por la dificultad que en ocasiones existe para encuadrar las obligaciones en uno u otro tipo, o, incluso, por el surgimiento en la doctrina de otras clases de obligaciones, como las de garantía o las de seguridad, que difícilmente se ubican en los dos moldes tradicionales.

"Pero, a pesar de las observaciones antes reseñadas, estima la Corte que la clasificación de las obligaciones en de medio y de resultado sigue siendo una herramienta útil para el juzgador en orden a determinar el comportamiento que deben asumir ***los contratantes*** *y contribuye a encontrar criterios aplicables a la definición de las cargas probatorias en la responsabilidad civil* ***contractual.*** *Sin embargo, como también lo ha señalado la Sala luego de censurar indebidas generalizaciones, lo fundamental está en identificar el contenido y alcance del contrato celebrado en el caso concreto, así como los particulares deberes de prestación que de él hayan surgido"* (se subraya y resalta).

En este orden de ideas, como ha quedado visto, la clasificación de las obligaciones de medio y de resultado ha sido admitida por la Corte en el terreno contractual. Por lo tanto, resulta claro que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, toda vez que empleó un régimen jurídico indebido para la resolución de la controversia judicial, cuestión que necesariamente vicia la conclusión a la que llegó el *a quo*.

En lo que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual, las obligaciones de resultado han sido consideradas en un plano excepcional y limitado, cuando quiera que se está en presencia del desarrollo de actividades peligrosas. Al respecto, en concepto emitido por el Dr. Jorge Santos Ballesteros, profesor universitario, doctrinante en temas de responsabilidad civil y exmagistrado de la

Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Sala Civil de la misma corporación, que se adjunta como parte de la presente sustentación, claramente se indicó lo siguiente:

> *"Es importante precisar, como lo hace la Corte Suprema en la sentencia de 11 de septiembre de 2002, que la jurisprudencia siempre ha tenido el tino de no confundir una y otra responsabilidad, "porque no es indiferente el régimen legal ni la naturaleza de la acción, ni las consecuencias de una u otra, como tampoco lo concerniente a la prueba, al tratamiento de la culpa o a los términos de prescripción'.*
>
> *"4.6.2. A juicio de la Corte Suprema, por lo demás, la responsabilidad civil 'Tradicionalmente ha sido concebida en una dimensión dual, esto es, contractual y extracontractual. La primera se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. La segunda surge de incumplir el mandato legal y genérico de no causar daño a otro, previsto en el artículo 2341 del Código Civil. Se produce sin previo pacto y por virtud de un encuentro fortuito entre los relacionados con el daño; en otros términos, de un hecho jurídico que puede ser una conducta punible (hecho jurídico humano voluntario ilícito) o un ilícito civil (hecho jurídico humano involuntario ilícito), siempre al margen de un incumplimiento obligacional previo y vinculante. La función esencial de ambos tipos de responsabilidad es la reparación de un perjuicio causado injustamente; sin embargo, en sistemas jurídicos como el nuestro, cada uno de ellos tiene su propio ámbito normativo, tanto en lo puramente sustancial como en algunos aspectos de orden procesal. Así, mientras la contractual tiene su fuente legal en los preceptos 1602 a 1604 del Código Civil, que pueden calificarse de rectoras en esta precisa materia, además de los términos pactados por las partes del acuerdo, la convención o el contrato, sin perjuicio de las reglas sobre la materia; en la extracontractual, en cambio, su marco regulatorio lo contienen los artículos 2341 a 2358 ejusdem. Como se vé, son dos regímenes jurídicos enteramente distintos, con sus propias regulaciones normativas, a pesar de lo cual su identificación no está exenta de debates en casos concretos, lo que ha dado lugar a las denominadas "zonas grises" que revelan insuficiencia de cada una de estas modalidades de responsabilidad civil, si se les considera en su rígida estructura tradicional. Precisamente por ello, tal estado de cosas ha dado lugar a figuras como la denominada "obligación de seguridad" en materia negocial. En sana lógica, no parece procedente juzgar un asunto cuyo rango atañe puramente a este último, con las reglas que corresponden a la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, la complejidad propia de la dinámica social, económica y jurídica de hoy, ha dado lugar a examinar con mayor detenimiento los ámbitos propios de cada una de las referidas tipologías de la responsabilidad civil, hallando que no todos los elementos de aquella le pertenecen de modo exclusivo; tal es el caso de la presunción de culpa'.*[6]
>
> *"4.6.3. Por supuesto que en la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, surgen obligaciones de resultado a cargo del guardián de la actividad, entendiendo por tal, según la Corte Suprema, 'la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño, un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control'*[7] *Por consiguiente, el agente responsable por daños originados en actividades peligrosas tiene un deber jurídico, verdadera obligación de custodia, que recae sobre las cosas empleadas o utilizadas, deber Jurídico que conlleva la necesidad de conservar las cosas en estado de no generar perjuicios y de no producir peligros para los terceros. En esta clase de daños surge por supuesto una obligación se seguridad.*
>
> *"4.6.4. Por lo demás, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, la determinación de si una actividad – sin cosas o con cosas, inactivas o en movimiento – es peligrosa lo dicta por lo general la razón natural, y no es por consiguiente una suposición a la*

[6] SC 1819 de 28 de mayo de 2019.

[7] Cas. Civ., 4 de junio de 1992. Gaceta Judicial, t. CCXVI, n° 2455, pág. 506

que se llega sin más. La actividad peligrosa es pues, aquella que, según la Corte Suprema, genera más probabilidades de daño y capacidad de destrozo mayor, y cuyos efectos se vuelven incontrolables".

"5.3. Ante todo, se advierte que, en este evento, no se está en presencia del desarrollo de una actividad peligrosa, aserto que brota con la sola lectura del objeto social de la Corporación Club El Nogal, por lo que es indubitable la ausencia de las características propias para que la actividad desarrollada por la Corporación demandada se repute como peligrosa[8].

"5.4. Por consiguiente, no es dable deducir la existencia o estructuración de una obligación de seguridad, con contornos propios y definidos, como lo hace el juzgado de instancia, de los estatutos de la Corporación, ni menos que esta supuesta obligación se enmarque en una responsabilidad extracontractual, pues esto equivale a desconocer el ámbito y los contornos de una y otra responsabilidad, como ya se ha puesto de presente".

Así las cosas, resulta claro que la sentencia de primera instancia efectuó una aplicación indebida del régimen jurídico al caso de autos, razón por la cual debe ser revocada. Se insiste, en el presente caso no puede endilgarse una obligación de resultado en cabeza de el Club El Nogal pues ellas son propias de la responsabilidad contractual o, de manera excepcional y limitada, de la responsabilidad extracontractual en el marco del desarrollo de actividades peligrosas, lo cual no es aplicable a mi representada, conforme ya ha sido definido judicialmente.

2. SEGUNDO REPARO[9]: INDEBIDA APRECIACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN EN CABEZA DEL CLUB EL NOGAL / ELLA CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE MEDIOS Y NO DE RESULTADO.

Dentro del fundamento aducido por el juez de primera instancia para declarar la responsabilidad del Club el Nogal en el presente caso, se indicó que éste había incumplido con su obligación de seguridad, derivada de los estatutos sociales, a la que se le atribuyó el carácter de obligación de resultado, según se acotó previamente.

La obligación que se desprende de la lectura de los estatutos sociales del Club el Nogal da lugar a una razonable obligación de medio, atada al objeto social del Club y en atención a su naturaleza privada, que, como es natural, se enmarca en el parámetro general de conducta aplicable a esta clase de establecimientos, esto es, totalmente ajena a una obligación de resultado, pues la responsabilidad que surge a su cargo estará regida y, desde luego, reservada a una falta a la diligencia debida.

La sentencia recurrida se fundamenta en los Estatutos del Club, particularmente, en el numeral V del artículo 55 que establece como funciones del gerente del Club El Nogal, "*velar por la seguridad de las personas en el Club y por los bienes de la corporación*". En ese sentido, toma tal previsión, cuya naturaleza es de carácter general y abstracto e infiere, a partir de allí, la existencia de una obligación que cataloga como de resultado, sin mayores consideraciones en relación con el contenido y alcance de la misma.

---

[8] Así quedó asentado además en la sentencia de casación SC9788-2015 de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), que constituye, por consiguiente, un precedente judicial.

[9] Se formula sin perjuicio del primer reparo.

Al respecto es importante señalar, en primer lugar, que es cierto que el Club El Nogal consagra en sus estatutos una previsión relacionada con la protección de los individuos que hacen parte del mismo. Sin embargo, dicha previsión debe ser entendida en su justa dimensión. La formulación genérica que allí se hace refleja justamente que el compromiso asumido por el Club El Nogal no corresponde a una arquetípica obligación, con las características de concreción y ejecución propias de este tipo de figuras, sino que, en realidad, se trata de un deber genérico de comportamiento que, en esa medida, compromete la actuación de mi representada pero se circunscribe estrictamente a los medios que razonablemente están a su disposición y, naturalmente, a las posibilidades jurídicas y fácticas en cuyo marco mi representada operaba, especialmente comparada con establecimientos similares sin descontextualizarla y de conformidad con las circunstancias del momento que no hacían previsible la perpetración de un atentado terrorista contra un club social como el que ocurrió el 7 de febrero de 2003, el cual no tenía precedente alguno en Colombia, ni estaba precedido de amenazas dirigidas a mi poderdante.

Puesto en otros términos, como el fundamento de la sentencia de primera instancia parte de la existencia de una obligación de seguridad que se estimó como de resultado, hay que resaltar que el contenido del débito que sustentó la decisión no es lo suficientemente concreto y específico como para alcanzar el *status* propio de una obligación de tal naturaleza. En realidad, se trata de un deber que, en su condición de tal, implica una prestación genérica, que no puede tratarse como se trata una obligación de resultado.

Eso es justamente lo que sucede con el deber en cabeza del Club El Nogal. Es cierto que la Corporación debe velar por el bienestar y por la seguridad de sus socios y, en general, de las personas que se encuentran en sus instalaciones. Sin embargo, de allí no puede derivarse una arquetípica obligación de resultado, con las características de concreción y especificidad necesarias para ello. En efecto, la propia formulación que de este débito contienen los estatutos, permite entrever que se trata de un deber genérico de comportamiento cuyo alcance no puede ser extendido al punto de una obligación de resultado. Al llevarlo a tal nivel, la sentencia desfiguró los estatutos en esta materia, ya que, en últimas, la prestación que se le atribuyó al Club rebasó la de velar por el bienestar y la seguridad de quienes se encuentran en sus instalaciones para, en su lugar, convertirla en una obligación de resultado frente a actos terroristas perpetrados por organizaciones criminales que el propio Estado no ha podido reprimir, teniendo bajo su exclusivo resorte la seguridad y el monopolio del uso de las armas. El enfoque de la sentencia de primera instancia, dicho sea con todo respeto, desborda toda razonabilidad e impone unas cargas excesivas en cabeza de los particulares, las cuales son completamente ajenas al objeto social del Club[10].

Puesto en otros términos, si se analiza bien la prestación que figura en los estatutos del Club El Nogal, se encuentra que lo que allí se plasma no es una obligación por la que se asume un resultado específico, sino una formulación claramente genérica sin especificidad concreta.

Es más: si se considera jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, se encuentra que la prestación de seguridad que se le atribuye a mi representada, no puede ser calificada, bajo ninguna circunstancia, como una prestación de resultado, sino solamente como uno deber genérico de comportamiento. En efecto, la jurisprudencia de la citada corporación tiene establecido que para determinar si un débito es de medios o de resultado, se

[10] El cual incluso fue expresamente citado en la sentencia al señalar que el Club El Nogal es un "establecimiento de '*naturaleza cultural, social y deportiva, dirigido fundamentalmente a hombres y mujeres de empresa de trabajo'*".

> "… *suelen tomar en consideración (…) diversos criterios, habida cuenta de la insuficiencia o complejidad de uno solo de ellos; afloran entonces pautas tales como la aleatoriedad del fin último perseguido por el acreedor, conforme a la cual suele considerarse la obligación de seguridad como un mero deber general de prudencia en aquellas hipótesis en las que la conducta del deudor se orienta a la "satisfacción de un interés de obtención incierta", vale decir, cuando la consecución del desenlace deseado por el acreedor no depende ordinariamente, ni de manera exclusiva de la diligencia del deudor, pues puede acontecer que a pesar de su esmerado empeño no se obtenga el desenlace querido por aquél, por causa de la frecuente intervención de factores de distinta estirpe que se escapan a su control. Contrariamente, si son mínimas las circunstancias azarosas que pueden frustrar el propósito anhelado por el acreedor, ese "riesgo despreciable" permite atribuirle al deudor una obligación de seguridad determinada o de resultado. Del mismo modo, y estrechamente ligada con lo anteriormente dicho, la participación más o menos activa del acreedor en el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor ha sido otro de los criterios tenidos en cuenta para efectos de resaltar la anotada distinción, de modo que si aquél (el acreedor) juega un papel eminentemente pasivo en los hechos es posible entender que el deber de seguridad a cargo del deudor suba de punto, inclusive, hasta poder ser calificado como obligación determinada o de resultado, al paso que si interviene activamente, dado que disminuye el poder de control del deudor, se podría estar ante una obligación genérica de prudencia o diligencia. Más adelante se verá cómo este criterio ha sido tenido en cuenta por esta Corporación en circunstancias similares a las de este asunto. En todo caso, valga la pena subrayarlo, suele decirse que si la obligación de que se trate no es susceptible de una graduación "de más o de menos", no puede concebirse como de mera prudencia y diligencia …"*[11] (se subraya).

Nótese entonces cómo se acude a dos criterios predominantes para establecer la naturaleza de un débito como de resultado o de medios: (i) la aleatoriedad o lo azarosa que resulta la obtención del resultado por parte del deudor, toda vez que si están presentes –en el sentido, por ejemplo, de que intervienen factores extraños-, mal podría afirmarse que ese deudor está obligado al resultado –ya que ello sería casi como obligarlo a lo imposible-; y, (ii) la participación más o menos activa del acreedor, en la medida en que si éste tiene una injerencia importante en la realización de la prestación, tampoco resultaría razonable que se cargue al deudor con la absoluta consecución del resultado.

---

[11] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de octubre de 2005. Exp. 14491. En dicha ocasión –que, por lo demás, demuestra que en Colombia existe relativa aceptación de la distinción entre los medios y los resultados-, se afirmó además que "…dada la innegable dificultad de elaborar soluciones dogmáticas generales y abstractas e, inclusive, la de establecer un criterio único o uniforme, corresponderá al juzgador analizar las particularidades de cada caso con miras a adoptar cualquiera de tales pautas que considere idónea para distinguir si la obligación de seguridad a cargo del deudor contiene únicamente un deber genérico de diligencia o, por el contrario, el de evitar cualquier accidente **en el cumplimiento del contrato** que lesione a la persona del acreedor o a sus bienes, todo esto, claro está, cuando las partes o la ley no lo señalen expresamente …" (Ibíd). Ahora bien, no sobra advertir que son disímiles los criterios para determinar si una prestación es de medios o de resultado. Se han acudido a aspectos como la intención de los contratantes, la naturaleza intrínseca de la actuación debida o la equidad. Emilio Betti, por ejemplo, señala que la consabida naturaleza intrínseca permitirá determinar si "… la prestación no consiste en el simple despliegue de una actividad, pues lo que es debido es el resultado útil del propio obrar. Si ese resultado falta, por más grande que haya podido ser el esfuerzo desplegado por el deudor, no hay cumplimiento del contrato (…) faltando el resultado, falta también la prestación …" (Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones. Tomo I. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1960. p.39). Allí se miran aspectos como la aleatoriedad de la prestación, como factor decisivo para determinar la tipología frente a la cual se está. Sin embargo, ello tampoco ha estado exento de debates. Boris Starck, por ejemplo, sostiene que el parámetro de la aleatoriedad no corresponde la realidad: "… la repartición de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado es hecha por los tribunales en función de numerosos criterios. El *alea* puede ser considerado, en ciertos casos, en asocio de otros factores que intervienen. El examen de la jurisprudencia hace ver que la intención de las partes y la economía general del contrato, juegan frecuentemente un papel determinante …" (Starck, Boris. Obligations. p.406). En fin, otros, por su parte, acuden a la equidad como criterio determinante (Cfr. Fraga, Jordano. Obligaciones de medios y de resultado. Op.Cit., p.10).
Obsérvese que el análisis doctrinal está referido a la responsabilidad contractual.

Pues bien, si se analiza a la luz de lo anterior la obligación del Club El Nogal, se observa que en modo alguno puede concluirse que ella sea una obligación de resultado. Y ello es así por cuanto la aleatoriedad de un posible ataque terrorista es significativa, particularmente si se tienen en cuenta las diferentes formas que para la época adoptaba el crimen organizado. En ese sentido, la esfera de control del deudor era abiertamente restringida y, por esa misma razón, se limitaba a poner los medios razonables a su disposición operantes en esa época. Lo anterior, con más veras, si se tiene en cuenta la sofisticación del actuar terrorista existente para el momento en que ocurrieron los hechos –como imprevisible e irresistiblemente lo tuvo que soportar mi representada-, circunstancia que definitivamente hacía que las posibilidades de control efectivo del terrorismo por parte de un organismo privado como es la Corporación Club El Nogal, fueran prácticamente nulas.

En adición a lo anterior, debe señalarse que ni de la lectura aislada de la disposición estatuaria a la que hizo referencia la sentencia de primera instancia, ni de la lectura integrada de los estatutos, ni por la naturaleza privada y social del Club, se puede concluir válidamente, sin transgredir la sana crítica, la razonabilidad y la proporcionalidad, que el deber que le corresponde al Club el Nogal equivale a una obligación de resultado.

El deber contenido en el artículo 55 literal v de los estatutos, debe ser leído de forma sistemática con lo que también dispone el artículo 14 de los mismos, al señalar:

> *"Artículo 14. Son obligaciones de los Corporados o Socios de El Club, en cualquiera de sus categorías:*
>
> *(...)*
>
> *"PARÁGRAFO. **El Club tomará las medidas que estén a su alcance para hacer segura la estadía de cuantos lo visiten**. Sin embargo, los socios aceptan que algunas de las actividades que cumplirán en sus instalaciones suponen cierto riesgo, que asumen por su cuenta. Tales son: la piscina, el gimnasio, los aeróbicos, el polígono (...), y en general todas las facilidades deportivas. El club no tendrá responsabilidad alguna por daño o accidente causado por culpa de quien lo sufra o por circunstancia fortuita o de fuerza mayor"* (Negrilla fuera del texto original).

La redacción de dicha disposición confirma que, conforme a su objeto social, el Club el Nogal no está instituido para asegurar, a toda costa, la seguridad de las personas que ingresan a sus instalaciones, sino que se enfoca en las actividades prestadas por el Club, cuestión que enfatiza la condición de deber genérico de conducta a su cargo, que no es, no debe ni puede serlo, de obligación de resultado.

Téngase en cuenta, además, que dicho deber genérico se encuentra previsto para situaciones que se encuentren en el control del Club, esto es, garantizar el mantenimiento y buen estado de la infraestructura física, contar con los elementos de seguridad debidos (botiquines de primeros auxilios, extintores, entre otros), tener previstos planes de evacuación ante distintas contingencias (incendios, terremotos…), etc., pero no para condiciones completamente externas, como un atentado terrorista, conducta delictiva completamente ajena al Club que para él revistió, además, la calidad de imprevisible e irresistible, según se indicará más adelante, por lo que no puede comprometer su responsabilidad.

Por todo lo anterior, es dable entonces concluir que el deber a cargo del Club El Nogal no podía catalogarse como una obligación de resultado. Su contenido, así como la aleatoriedad de su consecución, conducen a la indefectible conclusión de que este era un deber de diligencia y prudencia. Un deber genérico de comportamiento que, en su condición de tal, supone que el régimen aplicable a la

presente controversia es el de la culpa probada. En consecuencia, el pretender enmarcar el deber de mi representada como una obligación de resultado conlleva a una desnaturalización del mismo, consecuencia de una interpretación indebida e irrazonable del juez de primera instancia, la cual deberá ser corregida por el *ad quem* para, en su lugar, negar las pretensiones del libelo introductorio.

3. TERCER REPARO: LA SENTENCIA IMPLICA UNA CARGA EXCESIVA PARA LOS PARTICULARES FRENTE A ATENTADOS TERRORISTAS, QUIENES NO ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE ASUMIRLA.

No puede trasladarse una obligación propia del Estado a una entidad civil, cuyo objeto social es completamente ajeno a la protección de personas a nivel policivo, militar, de inteligencia, contrainteligencia, etc.

Al respecto puede tenerse en cuenta que, por el atentado terrorista perpetrado por las FARC el 7 de febrero de 2003, se formularon distintas demandas de responsabilidad en contra del Estado [Fiscalía General de la Nación el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Policía Nacional y el Ministerio de Defensa]. El asunto fue resuelto de forma definitiva por el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, en la que se reconoció que el atentado obedeció a un hecho exclusivo de un tercero y que no podía imputársele responsabilidad al Estado por dicho hecho. Si ello es así, mucho menos puede considerarse que el Club el Nogal, como particular que es, tuviera la obligación de repeler la agresión y evitar sus consecuencias destructivas y de intencional daño cuando el mismo Estado no se encontraba en el deber ni en la capacidad de prevenirlo o reprimirlo.

No puede equipararse el deber constitucional de seguridad en cabeza del Estado, quien detenta el monopolio del ejercicio de la fuerza y la obligación de proteger a la ciudadanía con el deber propio de una entidad de derecho privado destinada a labores sociales y deportivas. Resulta a todas luces desproporcionado endilgar a mi representada la obligación de anticipar y reprimir cualquier ataque terrorista que pudiese presentarse, máxime considerando que dicha pretensión no es exigible ni al mismo Estado, como lo estableció el Consejo de Estado en la referida sentencia del 30 de marzo de 2022:

> *"La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades militares estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de ataques sucedan. El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades"*[12].

Es, pues, evidente que si la previsión y contención del ataque terrorista que da lugar al presente proceso no le puede ser endilgada al Estado, quien, a la postre, cuenta con entidades profesionales y equipos altamente especializados para dicho propósito, mucho menos ella resulta ser atribuible a un particular como el Club el

[12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque.

Nogal. Un razonamiento contrario, como el que contiene el fallo atacado, obedece, a no dudarlo, a un análisis desmesurado, huérfano de asidero jurídico.

Bajo este entendido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado en materia de atentados terroristas al señalar que, en dichos eventos, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, esto es, un sistema de culpa probada. Este evento resulta relevante a efectos de señalar que no resulta viable, aún para el Estado, asumir un deber de seguridad con la connotación de obligación de resultado[13].

Si la anterior doctrina es aplicable frente al Estado, quien tiene por disposición constitucional la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos y habitantes de Colombia, ¿Cómo puede trasladarse razonable y válidamente a El Nogal, club social sin ánimo de lucro, una obligación de protección como la que se esboza en el fallo recurrido?

Téngase en cuenta, adicionalmente, que los señores Julio Martín Otálora Cano, Luz Constanza Prado Restovich, Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado participaron en el referido proceso judicial fallado por el Consejo de Estado, cuestión que refuerza el hecho consistente en que el atentado terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003 tiene su causa en el hecho del tercero, razón por la cual no resulta jurídicamente viable, como tampoco aceptable, desplazar la responsabilidad en cabeza del Club El Nogal por estos hechos. En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que pretender que el Club El Nogal, quien también fue víctima del atentado terrorista, sea el centro de imputación de responsabilidad en este caso implicaría no solo una absoluta desconexión jurídica, sino, además, una carga excesiva en cabeza de los particulares. Se insiste: ¡si el Estado no es responsable por los hechos perpetrados en la noche del 7 de febrero de 2003 por las FARC, mucho menos lo puede ser un particular (en este caso, el Club El Nogal)!

Es más: en reciente providencia la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el atentado terrorista cometido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club El Nogal constituía un crimen de guerra. Al respecto, la JEP manifestó lo siguiente:

> *"41. (…) la explosión ocurrida el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá fue planeada y realizada por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Es así como luego de examinar los elementos de juicio vertidos en el proceso, el juzgador concluyó que "está demostrado que el secretariado de las FARC (sic) [ordenó] el atentado contra el club El nogal, conducta que fue planeada y dirigida por el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', quien era el enlace directo con la dirigencia del grupo alzado en armas". Conforme a esta conclusión el juzgador estableció que "los miembros del secretariado de las FARC (sic) tuvieron conocimiento y voluntad de los resultados típicos que se ocasionaron […] pues contaban a su disposición con la columna móvil 'Teófilo Forero' la cual había preparado hombres con conocimiento en explosivos y con la firme convicción de realizar atentados terroristas. …*
>
> *"42. Conforme a lo anterior, es posible para este despacho advertir que el conflicto armado fue la causa directa o indirecta de esta conducta punible ocurrida el 7 de*

[13] El Consejo de Estado en sentencia del 27 de marzo de 2014 señaló: "***pues a las autoridades estatales no puede exigírseles lo imposible, como adoptar medidas fuera de su alcance en cuanto a recursos económicos se refiere para repeler la acción de mentes desquiciadas y criminales****; con las limitaciones que tiene la administración en países como el nuestro, no se puede pedir que para cada ciudadano o frente a cada bien que pudiera resultar vulnerado, se disponga de un agente policial o vigilancia especial con el objeto de contrarrestar los atentados de la delincuencia organizada, so pena de resultar comprometida la responsabilidad patrimonial de la administración"* (Negrilla fuera del texto original).

febrero de 2003, que este contexto influyó en los autores, en su decisión de cometerla, en la capacidad para hacer el atentado y en la selección del objetivo…

"44. De acuerdo con el literal a del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no podrán ser objeto de amnistía, entre otros, aquellas conductas consideradas graves crímenes de guerra. Por ello, en este caso se pasará a realizar un examen de la conducta en la que participaron HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a la luz de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) con el propósito de verificar si es viable continuar con el trámite de amnistía o es necesario declarar su no amnistiabilidad, al menos de forma preliminar. El DIH es el marco jurídico que regula la conducta de las partes que participan en hostilidades y la protección a las personas y bienes que no participan en ese escenario.

"45. En primer lugar, se analizarán los principios de distinción y precaución en el caso concreto y, en segundo lugar, se hará un examen del ataque en contra del Club el Nogal a la luz de la prohibición de ataques indiscriminados por el Estatuto de Roma y las normas del DIH compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"46. En lo que refiere al primer asunto, se tiene en cuenta que el principio de distinción constituye un fundamento del DIH. A este principio se refieren las primeras normas de DIH compiladas por el CICR, así la Norma 1 indica que "[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados".

"47. Este principio se ha consagrado en normas de los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo Adicional II 1977 a estos convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13 reglamenta la protección general de la población civil respecto de operaciones militares y establece "[n]o serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".

"48. Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8.2.e).i) consagra como crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales el "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.". En ese orden, los ataques permitidos en el marco del DIH deben dirigirse exclusivamente en contra de objetivos militares; así lo consagra la Norma 7 del DIH del CICR. Al respecto, la Norma 8 del DIH indica que los bienes que pueden ser considerados objetivos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida".

"49. En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil. …

"61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO

*ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad **por constituir graves crímenes de guerra…**"*[14] *(se destaca).*

Así las cosas, resulta claro que no puede endilgarse la responsabilidad a un particular, en este caso el Club el Nogal, **por un atentado terrorista que reviste la condición de crimen de guerra**[15]. Declarar a la demandada responsable por los hechos que dan base a la presente acción judicial representa un escenario abiertamente desproporcionado en relación con las cargas que debe asumir un particular, quien, no se olvide, también fue directamente afectado por el acto terrorista que se calificó como acto de guerra. Un particular afectado por un conflicto no es responsable patrimonialmente por las consecuencias de daño que sufran otras personas en virtud de crímenes de guerra.

Los anteriores razonamientos, pues, deben conducir al Tribunal Superior de Bogotá a revocar la sentencia de primera instancia pues la decisión recurrida implica una carga excesiva para los particulares frente a atentados terroristas, quienes no están en la obligación de asumirla, máxime cuando los mismos constituyen crímenes de guerra.

4. CUARTO REPARO: EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ES EL DE CULPA PROBADA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DEL CLUB EL NOGAL / AUSENCIA DEL ELEMENTO CULPA / ACTUACIÓN DILIGENTE DEL CLUB EL NOGAL.

4.1. El régimen aplicable al caso de autos es el de culpa probada; estándar de conducta; medidas de seguridad; referencias iniciales.

La sentencia de primera instancia se equivocó en el régimen de responsabilidad aplicable al caso de autos; la definición de este proceso debe analizarse a la luz del régimen de responsabilidad por culpa probada. En efecto, como regla general dentro del sistema jurídico colombiano, se tiene que la culpa debe probarse por quien la invoca[16]. Así las cosas, el régimen de responsabilidad civil es predominantemente subjetivo, manteniendo el régimen objetivo de responsabilidad como un caso excepcional y bajo parámetros legales y jurisprudencialmente

---

[14] Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.

[15] Respecto a la definición de un crimen de guerra la Corte Constitucional al momento de realizar el control sobre la Ley aprobatoria del Estatuto de Roma señaló: *"El artículo 8 del Estatuto consagra los crímenes de guerra, categoría que recoge violaciones a los principios y usos fundamentales de la guerra consagradas en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, de Ginebra de 1925, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales, así como definiciones consagradas en otras normas convencionales sobre el uso de ciertas armas de guerra.*
[…]
*1) Infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, en otras palabras que los actos que a continuación se señalan, se cometan contra los heridos, enfermos, náufragos de las fuerzas armadas, prisioneros de guerra o **civiles:***
i) Matar intencionalmente;
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar contra la integridad física o la salud;" (Se destaca).

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda.

[16] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 1967.

definidos. Esto da lugar a que, ante la ausencia del desarrollo de actividades peligrosas[17], el régimen de culpa aplicable al *sub lite* es el de culpa probada.

Así, solo puede endilgase responsabilidad a la Corporación Club El Nogal si se verifica una acción u omisión culposa y relevante en cabeza de ésta última y de cara a la necesaria y consecuente causación de daño derivada de tal omisión. En ese sentido, debe analizarse la actuación del Club frente al estándar de conducta exigible para dilucidar, a partir de allí, si efectivamente se incumplió. **En este caso, dicho estándar de conducta está dado por el proceder que habría adoptado una corporación como el Club El Nogal para la época en que ocurrieron los hechos**. De este modo, únicamente si se evidencia que el Club El Nogal no adoptó las medidas que habrían tomado sus pares en aquella época, se podrá concluir que actuó culposamente.

Se insiste: el régimen de responsabilidad que impera en este caso es, a no dudarlo, el de la culpa probada. No existen fundamentos o razones por las cuales pueda afirmarse que el Club El Nogal está sujeto a un régimen de culpa presunta y, mucho menos, a uno de responsabilidad objetiva.

Por lo anterior, resulta indispensable considerar primeramente los elementos estructurales que deben presentarse para que resulte jurídicamente factible la declaratoria de responsabilidad civil en cabeza de una persona particular: un daño, una culpa y un nexo causal entre estos. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 2341 de nuestro Código Civil *"el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido"*. En relación con el elemento culpa, debe indicarse que el sistema de responsabilidad que rige la actuación del Club el Nogal en el presente evento es la de culpa probada, según se acotó, que se desprende del ya mencionado artículo 2341 del Código Civil, por lo que para pretender endilgar la responsabilidad a mi representada deberá acreditarse que ésta obró fuera del deber de diligencia que le asistía para la época, comparado con la conducta adoptada por sus pares.

A este respecto recuérdese que la culpa, como factor subjetivo de atribución de responsabilidad civil, consiste en un *error de conducta tal que no habría sido cometido por una persona prudente y diligente, situada en las mismas circunstancias que aquel cuya conducta se evalúa*[18]. De este modo, para encontrar probada la culpa de mi representada en el caso de autos, el demandante tenía la carga de demostrar que su actuar no encajaba en el estándar de conducta que le era exigible a este tipo de entidad.

Como bien fue señalado en la contestación de la demanda, en los alegatos de primera instancia y reconocido expresamente en la sentencia de primera instancia que se recurre, la Corporación Club el Nogal cumplía con todos los estándares de

---

[17] Téngase en cuenta que el Club El Nogal no ejerce actividades peligrosas, según lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada en proceso en que fue parte y se adujeron por la actora los mismos hechos del presente litigio: *"La actividad desarrollada por la opositora no es peligrosa, como se extrae de su objeto social, sin que las particulares condiciones de seguridad personal de los socios o invitados, por los cargos que desempeñan, tengan alguna incidencia en ese sentido"* (Sentencia de 29 de julio de 2015. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez).

Por ello, resulta claro que mi representada no se encontraba en ejercicio de una actividad peligrosa y, en consecuencia, el régimen de responsabilidad aplicable no es el derivado del artículo 2346 del Código Civil, de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas, sino el de culpa probada propio del artículo 2341 del mismo código, según se acotó.

[18] Cfr. Alessandri Rodríguez, Arturo. Derecho Civil. Teoría de las Obligaciones. El Esfuerzo. Santiago de Chile. 1981, p.8; Weill, Alex y Terré, François. Droit Civil. Les obligations. Dalloz. París. 1980. Num.395.

seguridad razonables implementados por los establecimientos de similares condiciones para la época. Es más, superaba con creces las medidas de seguridad implementadas en ese entonces por otros clubes y centros comerciales de la capital del país, razón por la cual es equivocado señalar que existió una culpa concurrente en cabeza de mi representada.

Téngase en cuenta que el Club El Nogal no incurrió en negligencia alguna respecto de sus sistemas de vigilancia y control de seguridad. Ciertamente, para el desarrollo de su objeto social y para este específico efecto, el Club contaba para la época de los hechos con un apreciable número de empleados y personal suministrado por contratistas con conocimientos específicos, especializados y altamente técnicos. Dentro de tales contratistas, El Nogal tenía personal de vigilancia suministrado por una firma especializada en la prestación de este tipo de servicios de seguridad que cumplía con los protocolos y procedimientos establecidos por el Club. De hecho, el sistema con el que contaba el Club El Nogal para el año 2003, era reconocido como el mejor y más completo, tanto por los otros clubes sociales de la ciudad, como por empresas de similar naturaleza que utilizaban los servicios de este tipo y por la Aseguradora de Riesgos Profesionales -ARP Liberty- en su informe respecto del siniestro.

Como puede comprobarse con las distintas pruebas allegadas al proceso y que serán indicadas con mayor detenimiento posteriormente, el Club el Nogal adoptó, entre otras medidas, porterías de acceso vehicular; soporte canino y técnico (circuito integrado de televisión); contratación de personal especializado e infraestructura de última tecnología.

Lo anterior confirma y prueba plenamente la diligencia debida con que el Club El Nogal adoptó, para la época del atentado terrorista, en relación con el esquema de seguridad implementado y el apoyo tecnológico y humano que tenía a su cargo para desarrollarlo. **Es que nada habría impedido la explosión del carro bomba en las instalaciones del Club El Nogal aun así hubiese sido detectado que el vehículo se encontraba cargado con explosivos**. Basta una lectura a las distintas pruebas testimoniales que fueron practicadas para concluir las siguientes aseveraciones:

- El Club El Nogal tenía implementadas las citadas medidas de seguridad, como de manera afirmativa y concluyente lo declararon distintos testigos[19], a los que, precisamente, hace alusión la sentencia de primera instancia que se recurre, medidas que superaban las de sus pares.

- El vehículo fue cargado con explosivos de manera planeada para que no fueran detectados visualmente por los guardias de seguridad, ni olfativamente por el canino que pudiera actuar para ese efecto en las rondas

[19] Entre otros, en el expediente obran como prueba las declaraciones de varios testigos que afirmaron categóricamente que El Nogal era un Club "modelo" en materia de medidas de seguridad, comparado con otras instituciones de similar naturaleza, lo que descarta, *in radice,* que se pudiera hablar de la existencia de alguna culpa, impericia o negligencia en cabeza de mi representada. Así, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva de Unicentro, el gerente del Gun Club, el gerente del Club Metropolitan y dos expertos en la industria de seguridad, fueron claros y contundentes a este respecto, por lo que la valoración adecuada y razonable de estas pruebas, ineludiblemente habría conllevado al *a quo* a considerar que las medidas de seguridad de mi representada eran más que razonables, pues superaban ampliamente las que se podrían encontrar en cualquier otro establecimiento de similares características en nuestro país.

A su vez, pueden tenerse en cuenta los testimonios de Fernando Ruíz Llano (ex Presidente de la Junta Directiva del Club El Nogal), Fernando Zarta Arizabaleta (representante legal de Mapfre Seguros para la época), Carlos Eduardo Balaguera (abogado y consultor en materia de seguridad) y del informe rendido por la ARP Liberty, los cuales daban cuenta de las sobresalientes condiciones de seguridad con las que contaba el Club para la época del atentado.

realizadas[20]. Sobre este último particular, hay que tener en cuenta y en especial consideración que para la época del atentado ni siquiera existía regulación sobre procedimientos y estándares técnicos de seguridad con caninos. El Club El Nogal, a diferencia de sus pares, y como medida disuasiva, contaba con este elemento, el cual no era exigible desde un punto de vista regulatorio, como tampoco de conducta debida.

- **El vehículo cargado con explosivos fue detonado por control remoto desde el exterior de las instalaciones del Club El Nogal, por lo que nada ni nadie habría podido intervenir para que no fuera accionado en el parqueadero o en la portería de acceso. De haberse producido la detonación en este último punto de la edificación, el desastre hubiera sido de consecuencias muy superiores a las que lamentablemente acontecieron, según declaraciones rendidas por Alejandro Pérez Silva (ingeniero civil, Magister Diseño en Ingeniería Civil) y Luis Enrique García Reyes (ingeniero civil de la Universidad de los Andes y master *in science* de la universidad de Illinois de Estados Unidos), quienes realizaron los cálculos y diseño de la estructura y sede del Club El Nogal con su empresa Proyectos y Diseños Ltda., para la construcción del mismo.**

Por lo anterior y según se observa con el recuento probatorio que se presenta a continuación, la condena impuesta en primera instancia deberá ser revocada por el *ad quem*, para proceder a negar las pretensiones de la demanda.

Con todo, antes de proceder a la exposición del mencionado material probatorio, es oportuno precisar, para efectos de las pruebas a las que se hará referencia en lo sucesivo, que ellas corresponden a las aportadas o practicadas en los diferentes procesos que se acumularon en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Descongestión mediante auto del 7 de julio de 2010 (Folio 981, cuaderno principal -subcarpeta 03CdPrinciaplContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital). Ahora bien: teniendo en cuenta lo señalado por el *a quo* en el auto del 22 de abril de 2013, debe entenderse que tales medios demostrativos constituyen pruebas idóneas para los aquí intervinientes ya que, como se indicó en primera instancia, todos ellas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas desde el momento mismo de la acumulación. Ciertamente, en los términos del citado auto del 22 de abril de 2013 se indicó que "*… habida cuenta que las pruebas judiciales que obran establecidas en las actuaciones que aquí yacen acumuladas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas por unos y otros intervinientes procesales desde el momento mismo en que se admitió y se llevó a cabo la acumulación de procesos, lo que no implicaba o hacía necesario volver a resolver de cara a cada cuestión particular …*" (folio 463 a 468 cuaderno principal -subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital). Es claro, pues, que con ocasión de la citada providencia, la cual fue notificada a todos los intervinientes y cobró legal ejecutoria frente a ellos, debe entenderse que las pruebas obrantes en el expediente antes y después de la acumulación tienen tal calidad y, en esa medida, deben ser valoradas por el *ad quem*[21].

Para mayor claridad sobre este asunto, podrán tenerse en cuenta las siguientes actuaciones procesales:

---

[20] A este respecto, podrá tenerse en cuenta, entre otros, la declaración de Jairo Arturo Parra Cuadrado, Jefe de la Unidad de Explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

[21] Como es natural, esto es predicable de todas las pruebas del expediente, esto es, de las que se refieren a la diligencia, la causalidad, los perjuicios, entre otras.

- Por medio de auto de 10 de octubre de 2011, notificado por estado el 1 del mismo mes y año, el Juzgado 15 Civil del Circuito de Descongestión corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (foliatura anterior 1051, foliatura nueva 110, cuaderno principal – subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Frente a ese auto, el Club El Nogal interpuso recurso de reposición solicitando que, en su lugar, "*se ordene poner en conocimiento de las partes las distintas pruebas allegadas al expediente*" (folio 111 cuaderno principal – subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- También, el Club el Nogal al momento de descorrer el traslado del recurso de reposición y en subsidio apelación formulado por el apoderado de los demandantes Julio Martín Otálora Cano y Luz Constanza Prado contra el auto del 10 de octubre de 2011, señaló: "*Lo que procede en el caso que nos ocupa, tal como fue señalado en el recurso de reposición interpuesto por mi representada contra el auto de 10 de octubre de 2011, consiste en correr traslado a las partes de las pruebas que se encuentran practicadas e incorporadas en los procesos acumulados*" (folios 131-132 cuaderno principal –subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- El Despacho, en providencia fechada el 17 de noviembre de 2011, resolvió en el sentido de que " *las documentales que obran en el plenario, se habrán de entender como agregadas al proceso, pudiendo las partes efectuar pronunciamiento sobre aquellas siempre que lo consideren pertinente, sin que por el hecho de no existir una mención formal que ordene poner en conocimiento de los sujetos dichos elementos se pueda predicar que estos no forman parte del proceso, máxime cuando han sido solicitados decretados conforme a los ritos procesales que gobiernan su trámite*". No hizo referencia el Juzgado a los demás medios de prueba obrantes en el expediente (folios 133-137 cuaderno principal –subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Posteriormente, el 17 de septiembre de 2012, El Nogal solicitó al despacho poner en conocimiento las pruebas testimoniales practicadas en los procesos acumulados y, adicionalmente, pidió requerir a las partes para que se pronuncien respecto de estas (folio 429 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- El 11 de diciembre de 2012 el Club el Nogal solicitó al despacho resolver la anterior solicitud (fl. 429) que fue radicada el 17 de septiembre de 2012 (folio 436 cuaderno principal – subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Mediante auto del 4 de febrero de 2013, el Juzgado 15 Civil del Circuito de Descongestión resolvió la solicitud planteada por el Club el Nogal en los siguientes términos: "*En relación a la solicitud visible a Fl.429 del expediente es de tener en cuenta que por existir plena identidad respecto de la parte demandada en todas las actuaciones aquí acumuladas, es más que evidente que todas las pruebas que han sido recaudadas, fueron o estuvieron en posibilidad de ser debidamente conocidas y rebatidas por el extremo demandado durante su adjunción procesal, y con mayor razón a lo largo del proceso, lo que por ende antes que obedecer a un umbral legalista, se ajusta*

a los principios constitucionales que rigen la aplicación del derecho en estas materias". Esto es, se refirió únicamente al "extremo demandado" pero no hubo pronunciamiento sobre las demás partes del proceso (folios 437-438 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Contra esta decisión el Club El Nogal interpuso recurso de reposición, radicado el 11 de febrero de 2013, en el que se señaló: "*frente al extremo activo es necesario que el Juzgado se pronuncie sobre la contradicción de los testimonios, teniendo en cuenta el cabal y completo conocimiento que de los mismos han tenido LAS PARTES, así como el manifiesto desinterés de dichos demandantes sobre la aludida contradicción que se sustenta en su elocuente silencio sobre el tema*", señalando que de no acceder a esta petición se requiriera a los apoderados de los demandantes para que "*indiquen si requieren de la ratificación de alguno de los testimonios en los que no hayan participado, so pena de que se entiendan controvertidos y se proceda a alegar de conclusión*" (folio 439-441 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Por último, mediante auto del 22 de abril de 2013, el despacho resolvió el recurso impetrado por mi representada el 11 de febrero de 2013 y señaló: "*De igual modo y en cuanto concierne a la solicitud impetrada por la pasiva, hay que tener en cuenta que las pruebas judiciales que obran establecidas en las actuaciones que aquí yacen acumuladas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas por unos y otros intervinientes procesales desde el momento mismo en que se admitió y llevó a cabo la acumulación de procesos, lo que no implicaba o hacía necesario volver a resolver de cara a cada cuestión en particular, por cuanto lisa y llanamente ello equivaldría a reabrir y en forma injustificada una y otra actuación lo que de así haberse considerado haría interminable su resolución*" (folios 463-648 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

Esta providencia fue notificada por estado el 24 de abril de 2013 y contra la misma no se interpusieron recursos, por lo que la decisión cobró ejecutoria el 29 de abril de la misma anualidad[22].

Resulta, entonces, diáfano que la totalidad de las pruebas recaudadas y practicadas en los procesos acumulados pueden y deben ser valoradas de forma integral por el *ad quem,* en tanto las mismas fueron incorporadas regularmente y así fue reconocido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Descongestión.

4.2. <u>Ausencia de responsabilidad civil en cabeza del Club El Nogal; ausencia del elemento culpa; actuación diligente del Club El Nogal.</u>

Si algo resulta claro en el material probatorio del presente proceso es que la Corporación Club El Nogal no violó, en modo alguno, los parámetros de diligencia, pericia y cuidado que le eran exigibles. Se procede, entonces, a exponer la

[22] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil (aplicable al momento en que se profirió la decisión), que al respecto señala: *"**<u>ARTÍCULO 331. EJECUTORIA.</u>** Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva".*

evidencia que da cuenta de la diligencia de mi representada, con lo cual se descarta el elemento de culpa y, por contera, cualquier tipo de responsabilidad de mi representada frente al atentado terrorista perpetrado por las FARC.

El Club El Nogal no incurrió en negligencia alguna respecto de sus sistemas de vigilancia y control de seguridad. Ciertamente, para el desarrollo de su objeto social, el Club contaba para la época de los hechos con un apreciable número de empleados y personal suministrado por contratistas con conocimientos específicos, especializados y altamente técnicos, que hacen posible una esmerada atención a la gran cantidad de personas que visitan sus instalaciones. Dentro de los contratistas, El Nogal tenía un personal de vigilancia suministrado por una firma especializada en la prestación de este tipo de servicios que, para la fecha del lamentable insuceso, estaba cumpliendo con todos los protocolos y procedimientos establecidos por el Club. De hecho, el sistema con el que contaba el Club El Nogal para 2003, era reconocido como el mejor y más completo, tanto por los otros clubes sociales de la ciudad, como por empresas de similar naturaleza que utilizaban los servicios de éste y por la Aseguradora de Riesgos Profesionales -ARP Liberty- en su informe respecto del siniestro.

En el expediente obran como prueba las declaraciones de varios testigos que afirmaron categóricamente que El Nogal era un Club "modelo" en materia de medidas de seguridad, comparado con otras instituciones de similar naturaleza, lo que descarta, *in radice,* que se pudiera hablar de la existencia de alguna culpa, impericia o negligencia en cabeza de mi representada. Así, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva de Unicentro, el gerente del Gun Club, el gerente del Club Metropolitan y dos expertos en la industria de seguridad, fueron claros y contundentes a este respecto. En efecto:

- En el testimonio de HERNÁN MONTOYA (Fl. 339 – 343 C1 Exp. 2003-712), Presidente junta directiva UNICENTRO y socio muy activo de la Corporación Club El Nogal, se deja constancia de la rigurosidad y pericia del sistema de seguridad del Club El Nogal. Dice el testimonio:

> **"**Se deja la constancia de que trata el numeral 2 del Art. 228 del C de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales de versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual **CONTESTO: He sido presidente de la junta directiva de Unicentro, corno también miembro de las juntas directivas de los clubes Guaymaral, la Pradera de Potosí, Anapoima Club Campestre. Para la época del atentado de febrero de 2003 era miembro de la junta directiva del Club Guaymaral y vicepresidente de la junta directiva del Club la Pradera de Potosí, así mismo era presidente de la junta directiva del Centro comercial Unicentro. Igualmente era socio de la CORPORACION CLUB EL NOGAL. Casi todos los días para la época del atentado visitaba las instalaciones del CLUB EL NOGAL. Las instalaciones, del CLUB EL NOGAL, tienen y tenían para la época sistemas de seguridad bastante sofisticados, comparados con el resto de Clubes sociales y Centros comerciales de la ciudad, por ejemplo, poseía y posee unos sistemas de circuito cerrado de televisión, con tecnología de punta, así como unos muy bien dispuestos controles para accesos peatonales y vehiculares, incluyendo aparatos para detección de explosivos, y armas. (…) en ningún club social hasta ese momento o por lo menos, los que yo frecuentaba, implementaban este tipo de revisión, es decir guía y canino, por cuanto en los demás clubes, solamente bastaba, identificamos con el carné respectivo. No conocí equipos, y procedimientos en Colombia, que se usaran para acceder a las instalaciones, de algún Club social.** No se usaban. Posteriormente al atentado del 7 de febrero, conocí de estudios, profundos y sofisticados, que se hicieron tanto en el NOGAL, como en otros clubes sociales y Centro comerciales, para prevenir

atentados como el ya mencionado. Ya que las precauciones se incrementaron y los procedimientos se volvieron más complejos, para el ingreso. Hoy por hoy, se hace una doble revisión vehicular, por parte del guía con su canino así como la utilización de sistemas que permiten detectar rastros de materiales explosivos, a través de sistemas electrónicos complejos. Se concede la palabra al Apoderado de la parte demanda, para que interrogue, concedido manifestó: PREGUNTADO: Cuales eran las medidas de seguridad, que tenían implementadas Unicentro, para febrero de 2003. **CONTESTO: Unicentro desde su inicio hace 30 año, (sic) ha diseñado esquemas de seguridad importantes, para la época del atentado del CLUB EL NOGAL, Unicentro recibía, aproximadamente 15000 mil vehículos diarios, en sus 18 porterías, a demás de el acceso de 100.000 personas aproximadamente a pie y simplemente dejábamos entrar los vehículos, sin revisiones puntuales de guías y caninitos, por cuanto el volumen de ingreso de vehículos no lo permitía, sin embargo cuando estaban ya los vehículos parqueados en el parqueadero, recorríamos, con vigilantes guía y caninos toda la zona, en busca de detectar posibles explosivos.** PREGUNTADO: Haciendo una comparación objetiva de las medidas de seguridad, implementadas por Unicentro, para febrero de 2003, con las del CLUB EL NOGAL, para la época, que apreciación le merecen estas últimas. **CONTESTO: Los procedimientos del CLUB EL NOGAL, para el 7 de Febrero de 2003, eran notablemente más efectivas y con dispositivos más confiables, que el control que se hacia en Unicentro. Si se pudieran calificar en cuanto a eficiencia de uno a diez, yo diría que el CLUB EL NOGAL, tenería (sic) nueve, y Unicentro seis.** (…) PREGUNTADO: en su conocimiento en los clubes sociales y Centros Comerciales que frecuentaba, previo al 7 de febrero de 2003, en alguno de ellos se utilizaba, sistemas electrónicos para la detección de rastros de materiales explosivos. **CONTESTO: No, que yo haya sabido.** PREGUNTADO: Mientras ha ocupado el cargo de presidente de la junta directiva de Unicentro, han tenido la oportunidad de detectar carros bomba, en caso afirmativo, indique en que época y como ello posible. CONTESTO: No mientras he estado en la presidencia de la junta, hace unos 18 años, detectamos un vehículo con explosivos en el parqueadero de Unicentro, que fue desactivado por lo organismos de seguridad de Estado. Se detecto, por que amaneció un vehículo dentro del parqueadero, cosa inusual y procedimos a alertar a las autoridades sobre este hecho. El apoderado de la parte demandada manifiesta, que no desea interrogar más a la testigo. Seguidamente se le concede la palabra al apoderado de la parte demandante, concedida expreso: (…) PREGUNTADO: Acorde con su respuesta anterior y otras que ha dado al despacho, infórmenos su criterio objetivo, respecto de este tipo de revisión, precisando si ha incidido de manera directa, en que el centro Comercial Unicentro, no halla sido objeto de ningún atentado terrorista, con explosivos, durante el tiempo que usted ha sido presidente de su junta directiva. **CONTESTO: Creo, que los dispositivos usados, por Unicentro durante mi presidencia, objetivamente hablando han sido efectivos. No descartamos la posibilidad de que pueda existir un atentado terrorista con explosivos, en el centro Comercial y pongo como ejemplo la carga explosiva que estallo hace menos de un año, en el corazón de las fuerzas militares de Colombia, en el CANTON NORTE, precisamente en la escuela SUPERIOR DE GUERRA, donde se supone deberían existir todos los dispositivos para que esto no sucediera,** (…) PREGUNTADO: Afirmo en una respuesta inicial, que los caninos destacados en el CLUB EL NOGAL, para al (sic) fecha del atentado, eran entrenados para la detección de explosivos. Infórmenos como conoció de tal entrenamiento. CONTESTO: La compañía que prestaba los servicios de seguridad y vigilancia en el NOGAL, era o había sido la misma que contrato UNICENTRO, para las mismas labores, es decir CANINOS PROFESIONALES, y digo que conocí de su entrenamiento por que fueron varias las demostraciones que nos hicieron durante su permanencia en Unicentro y en la cual, demostraron así mismo, la efectividad, en la detección de explosivos dentro de los varios simulacros que se hicieron, dentro de esos simulacros se incluyeron vehículos automotores. PREGUNTADO: Asistió usted al CLUB EL NOGAL, el día del atentado terrorista, de que se da cuanta en al (sic) proceso, y en caso afirmativo infórmenos como fue el procedimiento de revisión de los automotores para la detección de explosivos. **CONTESTO. Estuve creo que en dos oportunidades, el 7 de febrero de 2003, en el club y los procedimientos,**

de seguridad al acceso vehicular, fueron los mismos de siempre. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de JOAQUIN RICAURTE JARAMILLO (Fl. 349 a 351 C1 Exp. 2003-712), gerente general del GUN CLUB de Bogotá, también es claro en cuanto al alto grado de sofisticación y pericia con que se hacían las revisiones en el Club El Nogal, contrario a toda noción de culpa. Por lo demás, deja también claro que los posibles ataques terroristas no eran una situación previsible para los clubes de la época, lo que matiza también el examen de diligencia. Dice el testigo que:

"PREGUNTADO SOBRE CENERALES DE LEY: Es mi nombre JOAQUIN RICAURTE JARAMILLO, tengo la C.C. No. 79.146.984 DE Usaquén, Nací en Bogotá, soy casado, tengo 51 años. **Soy hotelero de profesión, soy Gerente General del GUN CLUB**, desde el año 1991 (…).

Se deja la constancia de que trata el numeral 2º. Del Artículo 228 del C. de P.C. indicándole sucintamente al deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración haga un relato claro y detallado de lo que le conste sobre el particular, sobre lo cual CONTESTO. **Si, si conocía el CLUB EL NOGAL, lo visité varias veces aproximadamente unas 15 oportunidades, donde se observaban unas medidas de seguridad muy buenas en su momento**, (…). Antes del atentado. El GUN CLUB y e (sic) CLUB EL NOGAL, tenían unas medidas de seguridad para poder ingresar a los mismos. Esto nos diferencia de cualquier hotel o restaurante donde los comensales ingresan libremente. Debido a que los clubes son exclusivos se realiza un registro de cada uno de los invitados que ingresan al Club. **En su momento las medidas de seguridad que se hacían en los clubes como EL NOGAL, EL GUN, EL JOCKEY, eran unas medidas prestadas por personas externas de vigilancia privada en cada uno de los accesos al club, después del triste incidente del CLUB EL NOGAL, en lo que se refiere al GUN CLUB, se reforzó las medidas de seguridad, tanto en seguridad humana como equipos y cámaras, en mi experiencia como Gerente de estos clubes en 16 años, nunca habíamos tenido amenazas ni intentos de carros bomba como lo que se vivió en el CLUB EL NOGAL.**

(…) PREGUNTADO: Considera usted, en su condición de Gerente de clubes de alta categoría, con una amplia trayectoria como la ha indicado, adecuados los sistemas de seguridad que se empleaban en la CORPORACION CLUB EL NOGAL para la época del atentado, adecuados, dada la especial condición, para nadie desconocida, de las personas que a el asistían como invitados y socios, pertenecientes a las altas esferas de la vida social, económica y política del país, atendida la circunstancia especial de violencia generada de vieja data por las organizaciones guerrilleras, paramilitares y relacionadas con el tráfico de drogas. **CONTESTO:** Si, teniendo en cuenta lo que usted menciona de la calidad de visitantes de nuestros Clubes, TANTO EL NOGAL, como EL GUN, **el club que más había invertido en tecnología en el tema no solo de operación sino de seguridad, era EL CLUB EL NOGAL, debido a que es un Club hecho o construido con a (sic) ultima tecnología en lo que a club se refiere, era para nosotros un ejemplo en todo su diseño y organización, Yo fui Gerente del JOCKEY CLUB del año 82 al 88 y en el GUN CLUB del 91 a la fecha, 14 años.** PREGUNTADO: Indique al Juzgado si en alguna oportunidad se trato en las reuniones de gerentes de clubes de esa categoría en esta ciudad, el tema relacionado, concretamente con la posibilidad de ingreso de material explosivo a las instalaciones de los mismos, con fines de perpetrar atentados contra las personas que allí se encontraran y contra las edificaciones, antes del mes de febrero de 2003. **CONTESTO: No, en las reuniones que se llevaban a cabo con ASOGECLUB, nunca se tocó el tema que usted anteriormente menciona.** Se concede la palabra al apoderado de la demandada. PREGUNTADO POR EL MISMO: (…) PREGUNTADO: Por favor ilustre al juzgado sobre la afectación que genero el atentado al CLUB EL NOGAL en torno a las medidas de seguridad de ingreso al Club que usted Gerencia y en general a los clubes sobre los que tenga conocimiento. **CONTESTO: Después del atentado del CLUB EL NOGAL en el tema de**

seguridad en el caso nuestro nos tocó dar un vuelco de 360 grados en el tema de seguridad y el ingreso de socios e invitados. Llegamos a cotizar equipos electrónicos para la revisión de los carros que ingresan a los parqueaderos del club y de los diferentes equipos de control para los invitados que ingresan al club, pero lamentablemente, debido a la falta de experiencia en el manejo de estos se resolvió la contratación de guías caninos con perros antiexplosivos, que como ya lo dije anteriormente, no utilizábamos. Debido a que en el país no habían equipos para esta clase de análisis de explosivos como de revisión, nos tocó usar personal humano y de perros, no habían equipos, empezaron a utilizar equipos como pesas para pesar los vehículos y por medio de un Software controlar el peso original del carro y había alguna variación entrar a revisar profundamente el vehículo, lo tuvimos en demostración pero lamentablemente estos equipos no funcionaron. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si usted tiene o tuvo conocimiento de atentados explosivos a clubes sociales con anterioridad al 7 de febrero de 2003. **CONTESTO: No, como lo dije anteriormente, jamás tuvimos o en el caso mío ninguna amenaza de esta índole en nuestras instalaciones.**

(…) **PREGUNTADO: A raíz de las visitas permanentes de las personalidades que usted acaba de mencionar, recibió usted por parte de las autoridades recomendaciones especiales en torno a las medidas de seguridad que tenía adoptadas el GUN CLUB, antes de 7 de febrero de 2003. CONTESTO: No, solo cuando eran personalidades del alto Gobierno como Presidente o primera Dama, donde, con un tiempo prudencial antes de la visita de estos al Club, enviaban una avanzada para verificar la seguridad del Club, en los otros casos, de las personalidades ingresaban sin ninguna medida de seguridad adicional**. (…)" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de JOSE DANIEL GALVIS VALDERRAMA (Fl. 344-348 C1. Exp. 2003-712), gerente del METROPOLITAN CLUB, en el cual se confirma lo señalado en las declaraciones anteriores.

"(...) PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: **Si, soy socio del Club, y conozco la historia del Club, soy socio desde 1999 o 2000, no recuerdo la fecha exacta, y había sido usuario del Club cunado (sic) trabajaba en el Banco Uconal, y era usuario de la acción empresarial, tengo nexos con el Club porque fui gerente del CLUB METROPOLITAN, entre enero de 2001 y marzo o abril de 2003, y como tal compartía mucha información y había colegaje con las directivas del CLUB EL NOGAL**. Se deja la constancia de que trata el numeral 2º. del Artículo 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente al deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, sobre lo cual CONTESTO: **En primer lugar como usuario del CLUB EL NOGAL, antes del 7 de febrero de 2003, consideraba que las medidas de seguridad y el acceso al CLUB EL NOGAL, era muy dispendioso, engorroso, aburrido, dado que implicaba someterse a una requisa del vehículo, aceptar que unos perros olfatearan el interior de la cabina del carro, pasar por detector de metales, en fin, daba pereza a veces ir al CLUB EL NOGAL, y contrastaba a otros clubes, que yo frecuentaba, incluso el que yo manejaba, en los cuales bastaba la sola presentación del carné, y a veces sin el si podía acceder, sin que se le revisara a uno el vehículo, no pasaba uno por detector de metales, no habían circuitos cerrados de televisión ni en el CLUB METROPILITAN, ni otros que yo frecuentaba como EL GUN, EL JOCKEY, GUAYMARAL, y mucho menos los de fuera de Bogotá, entonces puedo afirmar, que de lejos el CLUB EL NOGAL, para la época del atentado, y desde su fundación, era el más completo en sistema de seguridad, preventivos y correctivos. En detalle puedo decir que el CLUB METROPOLITAN, no tenía antes del 7 de febrero del 2003 medidas de seguridad tales como, circuito cerrado de televisión, perros antiexplosivos, sensores de humo, sistema de huella digital, señalización de evacuación, luces de emergencia, planes de simulacros, capacitación de emergencias, botiquines de seguridad, temas todos estos que hasta después del atentado del CLUB EL NOGAL, se fueron implantando paulatinamente en el METROPILITAN y en otros clubes sociales.**

Incluso recuerdo que en dos oportunidades visité el área de seguridad del CLUB EL NOGAL, para observar el funcionamiento y tratar de tomar de la experiencia de ellos, datos de proveedores y sistemas preventivos que pudieran servirnos para ser implementados en el club que yo dirigía, También quisiera hacer énfasis, que en cuanto a la selección de socios en el club METROPOLITAN, bastaba que un socio activo presentara a un candidato para ser aceptado, mientras que en el club EL NOGAL, había varios filtros para obtener la calidad de socio,. PREGUNTADO: Precise si tiene conocimiento de las medidas adoptadas por los directivos de la corporación CLUB EL NOGAL, para que una persona natural o jurídica accediera a la calidad de socio, para la época inmediatamente anterior al atentado terrorista del que ha hablado. **CONTESTO: En detalle exacto no lo conocí, sin embargo se me exigió cuando fui a hacer socio carta de recomendación de dos socios activos, y recuerdo que verificaron mis datos por que llamaron al sitio de mi trabajo y me enteré que se pasó por dos comités antes de que se me aceptara como socio por allá en el año 1999 o 2000.** Se concede de la palabra al apoderado de la parte demandada. PREGUNTADO POR EL MISMO. (…) PREGUNTADO: Informe al juzgado si usted tiene conocimiento de atentados con explosivos a clubes sociales en Colombia con anterioridad al 7 de Febrero de 2003. En caso afirmativo precise al juzgado los eventos de esa naturaleza que usted conozca. **CONTESTO: En absoluto tengo conocimientos de atentados contra clubes sociales antes del 7 de febrero de 2003.** PREGUNTADO: Informe al juzgado de que tipo de personalidades asistían con frecuencia al CLUB METROPILITAN que usted gerenciaba con anterioridad al 7 de febrero de 2003 **CONTESTO: Los asistentes al CLUB METROPILITAN, abarcaban desde el presidente de la República, Ministros, Cuerpo Diplomático, Autoridades civiles, Militares, Religiosos, Farándula, hasta Presidentes de Multinacionales, y empresarios en general.** PREGUNTADO: Que tipo de eventos realizaba el CLUB METROPILITAN en sus instalaciones durante la gestión Gerencial que usted desarrolló para esa institución. **CONTESTO: El CLUB efectuaba eventos, tanto para socios como para no socios, tales como conferencias, matrimonios, aniversarios, para 400 o 500 personas, que incluso podrían involucrar hospedaje.** (…) PREGUNTADO: Durante la época en que usted fue gerente del CLUB METROPILITA (sic), recibió recomendaciones especiales en torno a las medidas de seguridad que tenía adoptadas esa institución. **CONTESTO: En ningún momento tuve de parte, ni de los directivos ni de los usuarios del Club, ningún tipo de observación, recomendación o sugerencia, en materia de seguridad, tan solo después del atentado del CLUB EL NOGAL, se iniciaron planes preventivos, encabezados por la misma Junta directiva del Club, en resumen puedo decir que la historia se partió en dos, en materia de seguridad en los clubes sociales, después del atentado del CLUB EL NOGAL.**

- El testimonio de LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA (Fl. 326 a 330 C1 Exp. 2003-712), ex Coronel de la Policía y gerente de una empresa de seguridad denominada ISVI LIMITADA[23], en el que se dijo que:

  PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: Si, soy, socio desde hace diecinueve años y he prestado algunos servicios de asesoría en seguridad recientemente al mismo Club. Se deja la constancia de que se trata el numeral 2° del Art. 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que se consta sobre el particular, a lo cual **CONTESTO: Si tenía de los sistemas que operaban en el club, puesto que allí abogábamos ejecutivos las compañías que protegíamos o llevábamos a cabo varios eventos que requerían de un máximo nivel de seguridad. Los sistemas de seguridad que operaban para esa época consistían en circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, constituidos tanto por personal de vigilancia como por**

[23] ISVI LIMITADA, es una empresa de seguridad que se encarga de prestar servicios de seguridad a varias compañías petroleras e industriales, personas naturales o jurídicas, de carácter nacional o extranjeras.

caninos y procedimientos de control del tipo de personal que podían ingresar al CLUB. Los sistemas de circuito cerrado de televisión, permitían identificar a las personas que ingresaban al CLUB por diferentes accesos, sino que supervisaban que el personal de la vigilancia estuviera cumpliendo las misiones que se les habían asignado. Los perros olfateaban vehículos o paquetes que ingresaban también por la (sic) diferentes porterías y una red de vigilantes que controlaba tanto la parte perimetrica como los controles de ingreso de personas o salida de elementos.

(…) PREGUNTADO. Refiera al juzgado, de que tiempo data su experiencia en temas de seguridad, señalando concretamente si hay un ámbito especial de ella, en la que tenga mayores conocimientos y experiencia. CONTESTO: Mi experiencia en aspectos de seguridad data de 25 años como oficial de la policía y 25 años como asesor de seguridad en empresas nacionales y multinacionales como la Occidental, Petrobrás, BP, Texas, Chevrom, Corferias, varios laboratorios y empresas industriales tanto de Bogotá como de otras ciudades. Soy certificado como CPP, significa Profesional Certificado en Protección por la American Society Of Security de los Estados Unidos, director del Instituto de Seguridad Integral Sicurex durante 20 años y profesor de cátedras de seguridad en las Universidades Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali, Pontificia Bolivariana de Medellín, Universidad de Cartagena. Mi campo específico ha sido el de la seguridad integral, o sea, el relacionado con la seguridad de personas, bienes y servicios, que incluye tanto los aspectos de seguridad física, lógica y sicológica. (…) PREGUNTADO. Para la época de los hechos visitaba usted las instalaciones del CLUB EL NOGAL en esta ciudad. En caso afirmativo en que calidad lo hacía y con que frecuencia concurría. **CONTESTO: En mi calidad de socio, fui de los fundadores, fui de los primeros socios, concurría normalmente dos veces por mes, pero en mi calidad de asesor en seguridad lo hacía con mayor frecuencia para revisar las posibilidades de riesgo o vulnerabilidades que pudieran presentarse para las personas que protegía o para los eventos que tenía que cubrir como asesor de seguridad, (…).**

PREGUNTADO: dado que no es desconocido para la mayoría de los habitantes de esta ciudad, que tanto quienes accedían a la CORPORACION CLUB EL NOGAL, en calidad de socios, e igualmente, de invitados a sus instalaciones, pertenecían a las altas esferas de la vida social, económica y política, cuál es su opinión concreta sobre los sistemas de seguridad que empleaba esa entidad para el día 7 de febrero de 2003, habida las circunstancias espacialísima de perturbación social que ha vivido y vive la patria desde ya hace tiempo por la combatiente actitud de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y aquellas que tienen que ver con el narcotráfico. **CONTESTO: Para antes de esa fecha los dispositivos de seguridad del club sobrepasaban por su calidad a cualquier otro de similares circunstancias en el País, pues como se recordará en el Club, no solamente se revisaban los vehículos, se indagaba por las identidades de las personas, se hacían los recorridos de control por todo el interior de las instalaciones, sino que se desarrollaba una serie de actividades en el interior de las instalaciones que satisfacían el nivel de amenaza que podría existir para esa época. Precisamente a raíz de los acontecimientos del Clun (sic), fue que se hizo conciencia del grado de violencia que podría afectar a ciertas instalaciones en el País, lo cual llevo a endurecer todas las medidas de seguridad tanto en edificios públicos y privados, más o menos como sucedió en los estados unidos después de los ataques a las torres gemelas, hasta ese momento no había sospecha de nivel de agresión del terrorismo hacía ese tipo de instalaciones. (…)**

PREGUNTADO. En respuesta anterior, usted hizo alusión a varias importantes empresas nacionales y multinacionales a las cuales usted le prestaba su asesoría en seguridad. Los ejecutivos de esas importantes empresas visitaban la CORPORACION CLUB EL NOGAL y en caso afirmativo que opinión daba usted como experto en seguridad para que ellos accedieran con tranquilidad a las instalaciones del CLUB. **CONTESTO. Después de mis visitas al CLUB e indagar por el estado de la seguridad, expresaba la conveniencia de las medidas de protección que autorizaban la asistencia de mis clientes a las instalaciones del CLUB. Nunca encontré alguna situación que me llevara a opinar negativamente respecto de la posibilidad de visita de alguno de mis**

protegidos. PREGUNTADO. Con ocasión se la visita de esos ejecutivos que laboraban para las empresas que usted prestaba asesoría en seguridad o con ocasión de eventos que implicara la asistencia o permanencia de los mismos en las instalaciones del CLUB EL NOGAL, se efectuaban por parte de la compañía de seguridad suya inspecciones previas a las visitas de los mencionados ejecutivos. **CONTESTO. Sí, efectuábamos inspecciones sobre los dispositivos de seguridad y nunca hayamos vulnerabilidades que permitieran sospechar de una atentado de esa magnitud.** PREGUNTADO. Efectúo usted con alguna anterioridad al 7 de febrero de 2003, como experto en seguridad, algún tipo de recomendación en esta materia a la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo informe al despacho en que consistieron esas recomendaciones y si el CLUB procedió a implementarlas. **CONTESTO: No hubo necesidad de hacer recomendaciones especiales, puesto que el grado de seguridad comparativamente con el de otros clubes era superior y hasta ese momento no dejaba nada que desear. (…)**
PREGUNTADO. En respuesta anterior, también a una pregunta formulada por el despacho usted hizo referencia a que para la época de los hechos no existían en el País detectores de explosivos, podría precisarle al despacho que tipo de detectores de explosivos existen en este momento que puedan garantizar que no ingrese un carro bomba a las instalaciones de una dependencia pública o privada. **CONTESTO. Hasta donde tengo conocimiento al momento no existe en ninguna parte del mundo un elemento que pueda garantizar el no ingreso de un material explosivo dentro de una rutina de tráfico público, los sistemas que actualmente muestran mayor eficacia son susceptibles aun de ser vulnerados, no solamente por el medio ambiente si no por contaminantes que portan los vehículos y que hacen que su prueba no sea el cien por ciento garantizada.**
PREGUNTADO: Tuvo usted conocimiento de cual fue el comportamiento de los empleados del club que se encontraban en las instalaciones del mismo el día del atentado terrorista, fundamentalmente enfocado a la evacuación de las personas que allí se encontraban ese día. **CONTETO. Por indagaciones que realice con personal de mi empresa que se encontraba la noche de los acontecimientos en el CLUB, tuve conocimiento que el personal obro conforme a los planes para manejo de emergencias que disponía el club y que su conducto (sic) fue meritoria pues, a pesar de los riesgos que corrían a sumieron (sic) una actitud de socorro y de atención que no dejaba nada que desear y lo cual permitió atenuar muchos de los efectos que hubieran podido ocurrir después del estallido de la bomba.** PREGUNTADO. Esa conducta o ese comportamiento que asumieron los empleados de la CORPORACION CLUB EL NOGAL, tiene algún grado de relevancia para efectos de analizar en nivel de seguridad de un establecimiento. **CONTESTO: Tiene una espacial relevancia, puesto que denota el grado de concientización que se le había impartido al personal para responder de la manera como lo hicieron.** PREGUNTADO: Los ejecutivos de las empresas a los que usted prestaba seguridad, asistían a otros clubes de la ciudad de Bogotá del nivel de la CORPORACION DEL CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo, como eran las medidas de seguridad de esas instituciones para la época en que ocurrieron los hechos. **CONTESTO: Mis clientes, frecuentaban otros clubes como el club de los lagartos, el Jockey Club, el club metropolitan, club militar, club de ejecutivos, club de golf, cuyas medidas de seguridad eran similares pero de inferior calidad a la que se ofrecía en el NOGAL, pues no había el celo como se desarrollaban los controles de ingreso o las rondas al interior del club e incluso no recuerdo que hayan tenido para esta época servicios caninos."** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de SONIA BEATRIZ ANDRADE DE BURGOS (Fl 852- 858 C2 Exp. 2005-176), experta en seguridad, consultora de seguridad privada y trabajó para la empresa de seguridad denominada ISVI LIMITADA. De su declaración cumple destacar los siguientes aspectos: (i) que el esquema de seguridad del Club para la época del atentado era muy completo, incluso superaba el esquema de seguridad de muchas entidades del mismo tipo; (ii) el alcance del terrorismo es ilimitado, es por ello que no existe un mecanismo de seguridad completamente infalible que garantice la frustración de un atentado; (iii) el comportamiento de

los empelados del Club El Nogal en la atención de la emergencia fue ejemplar, con lo cual se evidencia la solidez del esquema de seguridad del Club; (iv) la obligación de seguridad es de medio y no de resultado; (v) el atentado del Club El Nogal constituyó un hito en materia de seguridad en Colombia; y (vi) los grupos terroristas escogen su blanco no dependiendo de la facilidad en su realización sino en el impacto que se pueda generar en la comunidad. Para una mayor ilustración, a continuación se transcribe algunos apartes de la declaración rendida por la testigo:

> "GENERALES DE LEY. CONTESTO: Es mi nombre SONIA BEATRIZ ANDRADE DE BURGOS, me identifico con la C.C. No 41.532.233 de Bogotá, tengo 55 años de edad, soy separada, soy natural de Bogotá, soy odontóloga, **soy consultora de seguridad privada, en este momento independiente, desde el año noventa y cuatro trabajo en seguridad, soy especializada en alta dirección en seguridad de la Universidad Alcalá De Henares de España, Administradora de Seguridad de la Universidad Javeriana y de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Colombia, con certificación CPP de la American Society For Industrial Security de los Estados Unidos**, resido en la Calle 71 Bis No 125-35 Casa de esta Cuidad. (…) PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: No, solamente he ido al CLUB por invitación y por aspectos profesionales. Trabajaba con la empresa ISVI LIMITADA, entre el año noventa y cuatro y dos mil tres, allí me dedicaba a los estudios de seguridad y análisis de riesgos para personas e instalaciones. Para estructurar los esquemas de protección de nuestros clientes como el Banco Santander, Hocol, Norton Gruomonp, cuando ellos necesitaban reunirse o visitar algún sitio debíamos hacer unas inspecciones previas de seguridad y emitir conceptos verbales, los conceptos nunca son escritos en el caso de inspección por seguridad. Esas inspecciones eran porque nuestros protegidos asistían al NOGAL, unos en calidad de socios y otros en calidad de invitados. ISVI era socia del CLUB y como tal organizaba eventos de capacitación para sus clientes y abiertos, para personas que no eran clientes de ISVI. Se deja la constancia de que trata el numeral 2º. del Art. 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual CONTESTO: La inspección, consiste en un recorrido de observación para evaluar las condiciones de seguridad de las instalaciones y los eventos que iban a realizar en el club. La seguridad del CLUB EL NOGAL, tenía un esquema de protección que estaba conformado por seguridad humana, de una empresa de seguridad reconocida y legal, la empresa se llama ATEMPI, ellos lo que tenían eran guardas que hacían control perimetral y control de acceso vehicular. Igualmente, había un sistema de control de acceso para las personas, había previa identificación y se debía llegar con invitación o acompañado de un socio. Los socios firmaban un libro, los invitados quedaban registrados en el libro, también cuando se hacía un evento se tenía que enviar la lista con anterioridad. (…) Había un circuito cerrado de televisión y caninos, no se cuantos perros tenían. La seguridad en Colombia cambio, una cosa era antes del siniestro del CLUB y otra después del siniestro del CLUB, el procedimiento que se aplicaba en ese momento en el CLUB, **era un procedimiento más estricto del que se hacía en el Común, de lugares similares que podrían tener el mismo nivel de riesgo. (…)**
>
> PREGUNTADA. Indíquele al despacho, que opinión en su calidad de experta, le merecen las medidas de seguridad que tenía implementado del CLUB EL NOGAL para la época del atentado terrorista (7 de febrero de 2003), haciendo para ello una comparación objetiva de dichas medidas con las que tenían implementadas otras instituciones que usted haya conocido de la misma naturaleza. **CONTESTO: El CLUB EL NOGAL, siempre ha sido considerado en el medio de la seguridad como una instalación de alta condición de seguridad. Para la época de los hechos y aún hoy sigue siendo escogido como un lugar donde se pueden generar unas condiciones de seguridad aceptadas por los expertos como buenas, la razón que me merece esta calificación es que para la época de los hechos el análisis de la seguridad se basaba en la probabilidad de la ocurrencia de los hechos, no se conocían evidencias específicas que**

mostraran antecedentes de hechos similares en instalaciones privadas, por eso los riesgos de atentado en ese tipo de instalaciones se calificaban con porcentajes medios o bajos, después de los eventos del CLUB EL NOGAL y las torres gemelas, se entró a valorar el concepto de posibilidad que es mucho más amplia, ahora tenemos que pensar en lo probable o improbables, antes no se hacía así. Al momento en que se hacía la valoración no se pensaba en un atentado terrorista de esa naturaleza. PREGUNTADA. Infórmele al despacho, si antes de ocurrido el atentado terrorista en el CLUB EL NOGAL, la empresa de seguridad para la que usted trabajaba, le vetaba a sus protegidos la asistencia a determinados sitios o eventos, por razones de seguridad. En caso afirmativo, indíquenos si el CLUB EL NOGAL, fue objeto de veto para que los ejecutivos protegidos por su empresa visitaran sus instalaciones. **CONTESTO: Si se vetaban algunos sitios por recomendaciones de la empresa ISVI, por recomendaciones de las empresas contratantes o por la embajada Americana y otras Embajadas, pero el CLUB EL NOGAL, nunca estuvo incluido en ese veto, que yo lo supiera, al contrario, en los eventos de seguridad, de profesionales de seguridad, se presentaba como una opción de elección para personas de alto riesgo. (…)**

PREGUNTADA. Tiene usted conocimiento de hechos en el País en los cuales se haya podido detectar y desmantelar un carro bomba y en caso afirmativo, cuales fueron los mecanismos de seguridad que permitieron la detección de los mismos. **CONTESTO**. Tengo conocimiento por referencias indirectas que se realizan durante los conversatorios y capacitaciones sobre terrorismo y amenazas de bomba y por información de los medios de comunicación. **Generalmente, los positivos se logran por denuncias de informantes, se habla de un intento de ingresar a la Fiscalía el vehículo de una Fiscal que había sido cargado con explosivos y fue detectado por un informante que aviso, eso lo cuentan en las capacitaciones, no me consta directamente. El explosivo se mimetiza en lugares obviamente poco inspeccionables y los procedimientos que se aplican tienen un nivel racionabilidad, es decir no podemos desbaratar un vehículo para saber si tiene un explosivo. Lo otro es que no hay sistemas ni medios de seguridad vulnerables, repito, la seguridad no puede garantizar los medios y los procedimientos es para hacer un aseguramiento de variables, pero pueden quedar por fuera muchas variables, por fuera del análisis la inversión en seguridad es limitada y lo mismo la competencia, nosotros en seguridad privada tenemos un límite del que no nos podemos salir. Ayer en batallón de artillería de Usme, detectaron un carro bomba que había superado el primer anillo y lo descubrieron por un informante.** PREGUNTADA. Tuvo usted conocimiento de cual fue el comportamiento de los empleados del club el día del atentado terrorista, tendiente a evacuar a las personas que se encontraban en sus instalaciones con el objeto de preservar la vida e integridad de los que allí se encontraba. **CONTESTO. Sí, la reacción motorizada de la empresa ISVI tuvo la oportunidad de llegar muy pronto al NOGAL, estamos ubicados en la Calle 78 con carrera 11, igualmente escoltas de nuestra empresa asignados al servicio del Banco Santander que se encontraban en el CLUB en el momento del atentado y siempre han destacado el comportamiento de los empleados del CLUB durante y después del atentado. (…)**

PREGUNTADA: El tipo de conductas asumidas por los empleados del CLUB, muestra algún grado de importancia para efectos del análisis de seguridad de un establecimiento. **CONTESTO. Definitivamente sí, el compromiso de los emplcados es componente fundamental de la cultura de la seguridad que es la base del éxito de la seguridad. Ese nivel de respuesta puede demostrar niveles de concientización logrados a través de procesos sistemáticos. (…)**

PREGUNTADO POR EL DESPACHO. Desea agregar algo más a su declaración. **CONTESTO: Deseo reiterar que para el momento del atentado el CLUB DEL NOGAL, contaba con un sistema de seguridad acorde a lo establecido para esa época, que había conciencia de tener un responsable específico en seguridad, que no era usual para esa época en los clubes y en estos sitios y que había un criterio de seguridad en las personas que hacían los contratos para los eventos. (…)"** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de FERNANDO LONDOÑO HOYOS (Fl. 859 a 868 C2 Exp. 2005-176), Presidente de la Junta Directiva de la Promotora del Club El Nogal durante casi todo el tiempo que duró su construcción. En su declaración resaltó que el tema de la seguridad siempre fue una prioridad para el Club El Nogal, incluso desde su fundación. Y fue precisamente en función de dicha prioridad que el esquema de seguridad montado para el Club siempre sobresalió entre los esquemas de seguridad montados en otros clubes nacionales e internacionales. Sobre el particular sostuvo el testigo:

  "PREGUNTADO: Con anterioridad a la tragedia que menciona, qué tipo de vinculación tuvo usted con la corporación club el nogal. CONTESTO. Yo fui presidente de la junta directiva de la Promotora del Club el Nogal durante casi todo el tiempo de la construcción de su edificio. (…) PREGUNTADO: Tuvo usted conocimiento de los sistemas de seguridad que se implementaron en el momento de la construcción de la sede que menciona y que fue objeto de atentado. CONTESTO: Si. En la Junta de la promotora nos ocupamos de todo el sistema de seguridad de los equipos y del edificio mismo, tales como, alarmas contra incendio, estructuras antisísmicas, seguridad de los sistemas eléctricos e hidráulicos, etc. Cuando empezamos a contratar el personal para la corporación nos ocupamos de todo el sistema de seguridad del club, en sus distintos aspectos. Además de las medidas de la seguridad física de la planta, organizamos un departamento de seguridad que estuvo a cargo de un especialista, mayor retirado de la policía, quien tuvo el diseño de todo el sistema de seguridad, tanto en sus aspectos internos como en la seguridad externa o periférica del club. (…) En eso fuimos particularmente exigentes. **Creo que sería muy difícil encontrar otra institución que hubiera hecho mayores esfuerzos por conseguir que las personas que visitaban el club y los empleados estuvieran en un ambiente de seguridad plena en todos los aspectos**. (…) PREGUNTADO: Describa en su conocimiento cuáles eran las políticas y procedimientos de seguridad implementados en el Club el Nogal para la fecha de ocurrencia del atentado el 7 de febrero de 2003. CONTESTO. Supongo que eran los mismos vigentes en mayo del año anterior, cuando deje de se presidente del club y casi no volví a visitarlo. Como lo dije al principio la seguridad era casi una obsesión para nosotros. (…) El mantenimiento de todos nuestros equipos eléctricos, electrónicos, hidráulicas, era hasta donde se puede, perfectos, teníamos un equipo dirigido por un excelente ingeniero, que comprendía expertos en electrónica, electricistas y personal capaz para atender cualquier dificultad. (…). **PREGUNTADO: Comparativamente con otros clubes sociales de Bogotá, como calificaría usted las medidas de seguridad que había implementado el club el Nogal para la fecha del atentado terrorista. CONTESTO: Insisto en que me refiero siempre a mayo de 2002, que es lo que me consta. Nuestras medidas de seguridad, en todos los órdenes, superaban largamente las que estuvieran vigentes en cualquier club del país y de Suramérica. Voy a explicarle por qué estoy tan seguro de lo que le digo. Para garantizar la excelencia en todos sus aspectos, emprendimos la tarea de conseguir la calificación ISO 9002, con ICONTEC, lo que nos exigía que todos los departamentos y servicios del club pasaran un examen riguroso de confiabilidad. Tuvimos una grata sorpresa cuando la señora gerente del club y la auditora de gestión, una empleada que hay en muy pocas instituciones en Colombia y que verifica el cumplimiento de todas las reglas operativas de servicios, asistieron a una reunión de clubes de toda América en los Estados Unidos. Allá se supo que el único club de toda América que tenía calificación ISO 9002, era el club el nogal de Bogotá. Después de nosotros, sé que otros clubes colombianos estaban en la misma tarea y les prestamos la asistencia ayuda para esa difícil prueba. Por eso puedo asegurarle que en el tema en que usted me pregunta éramos pioneros y estábamos más avanzados que cualquier otro club colombiano.**" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de FERNANDO RUÍZ LLANO (Fl. 808 a 811 C1A Exp. 2003-712), ex Presidente de la Junta Directiva del Club El Nogal, quien describió los sistemas de seguridad con que contaba el Club El Nogal, los cuales, según el

testigo, eran sobresalientes en comparación con el utilizado por otros clubes. De igual manera hizo el declarante un análisis del caso concreto y especificó que el nivel de sofisticación utilizado por los terroristas sirvió para burlar el elaborado esquema de seguridad que tenía el Club, y que, como muestra de ello, en el registro de los videos de seguridad se observa que el vehículo utilizado para perpetuar el atentado fue revisado de manera debida. Para una mayor ilustración, estos son unos de los apartes de la declaración rendida por el señor Ruíz:

> "PREGUNTADO POR EL DESPACHO: sabe usted por qué fue citado a este despacho. CONTESTO: Si, para rendir testimonio sobre los hechos de febrero de 2002, en el club el Nogal, sobre estos hechos manifiesto: En febrero de 2002, yo era el presidente de la junta directiva del club el nogal; **el sistema de seguridad del club para esa época era superior a los estándares normales para otros clubes, contaba con cámaras de seguridad, seguridad canina, supervisores de seguridad con un jefe que dependía directamente de la gerencia general del club**; lo importante era el conjunto y lo podríamos llamar que este conjunto hacía que la seguridad fuera disuasiva. PREGUNTADO: Cuál era el propósito de la seguridad canina. CONTESTO: La seguridad canina hacía parte del todo en materia de seguridad e iba encaminada a determinar sustancias que por su olor pudieran detectarse. (…) **PREGUNTADO: La formación en el aspecto de seguridad de los empleados del club tuvo impacto o relevancia en la disminución de las víctimas fatales una vez ocurrido el atentado. CONTESTO: Si, la formación en aspectos de seguridad llevó a que el día del siniestro los empleados salvaran muchas vidas. PREGUNTADO: Para la época del atentado los otros clubes sociales que frecuentaba adelantaba chequeo visual de vehículos con apoyo de caninos como lo hacía el club el nogal. CONTESTO: No, para la época del atentado los clubes que frecuentaba no realizaban chequeo visual con apoyo de caninos. (…) PREGUNTADO: En su conocimiento de las investigaciones penales presentada a raíz del atentado tuvo usted conocimiento de si los terroristas mezclaban las sustancias explosivas con otras sustancias olorosas con el fin de hacer ineficaz el apoyo de seguridad canina. CONTESTO: Si, dentro del expediente, existe una declaración creo recordar que de una persona de apellido Murillo en la que narra como la mezcla con otras sustancias en este caso creo recordar con otras sustancias hacía ineficaz el trabajo de los perros. (…) EL DESPACHO PREGUNTA: Desea agregar o corregir algo: Tal vez en la parte de la seguridad, se me olvidó comentar la revisión manual de los baúles de los vehículos que ingresaban al club como parte procedimiento. En el caso del vehículo que entro ese día con los explosivos de acuerdo a la gerente general del club que vio la filmación en la fiscalía fue revisado y abierto su baúl.**" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- El testimonio de FERNANDO ZARTA ARIZABALETA (Fl. 334 a 337 C1. Exp. 2003-712), quien para la época de los hechos era el representante legal de MAPFRE SEGUROS -compañía que tuvo a su cargo la gestión del siniestro acaecido en el Club El Nogal-. En su declaración, el señor Zarta manifiesta que:

> "PREGUNTADO No.4: dentro de la conducta del club a la que usted ha hecho referencia, le pediría el favor de que precisara si con ocasión de la investigación del siniestro que adelantó el ajustador de seguro designado para ello, éste reportó a MAPFRE algún grado de negligencia por parte del club en materia de seguridad, entendiendo por esta los aspectos relativos al ingreso del carro bomba, y a la evacuación de las víctimas y de personas que se encontraban en la edificación, que en su gran mayoría salvaron sus vidas después del atentado? CONTESTO: **La respuesta es negativa, toda vez, que el ajustador designado al efecto no manifestó en ninguno de sus informes negligencia u omisión del club en punto a la seguridad de sus instalaciones y de las personas que lo frecuentaban en uso de sus servicios** …".

- El testimonio de CARLOS EDUARDO BALAGUERA (Fl. 462 a 465 C1A Exp. 2003-712), abogado y consultor en materia de seguridad, Jefe de Seguridad de

Cafam, quien tuvo la oportunidad de conocer muy bien el sistema de seguridad ofrecido por el Club El Nogal por haber coordinado en diversas ocasiones distintos eventos en las instalaciones del aludido Club. En su declaración se resalta, en primer lugar, cómo las condiciones de seguridad del Club El Nogal superaban las ofrecidas por otros clubes; en segundo lugar, la gran trascendencia que tuvo el atentado en materia de seguridad; en tercer lugar, el excelente manejo que le dieron los empleados del Club a la atención de la emergencia; y en cuarto lugar, que no existe en el mundo un sistema de seguridad totalmente infalible y menos cuando los atentados son perpetuados con altos niveles de sofisticación y técnica como lo fue el atentado del Club El Nogal, como sigue:

> "Preguntado sobre sus generales de ley manifestó: (…) soy abogado y consultor en seguridad (…). PREGUNTADO: Sabe Usted por qué fue citado a este despacho. Haga un relato de lo que le conste. CONTESTÓ. Fui invitado a rendir un concepto técnico especializado en relación con los sistemas de seguridad con los que contaba el Club El Nogal para la época del atentado terrorista (…). Los sistemas de seguridad con los que contaba el Club para la época del atentado, como usuario corporativo en razón a que en mi calidad de jefe de seguridad de Cafam tuve que coordinar en esas instalaciones varios eventos de la compañía incluso en varios de ellos contamos con la presencia de la primera dama de la nación, miembros del cuerpo diplomático e importantes empresarios del país. Para cada uno de estos eventos cumpliendo con los protocolos de seguridad se evaluaba antes y durante en evento las condiciones de los sistemas de protección del Club que para la época consistían en un circuito cerrado de televisión, cerca de 40 vigilantes y guías caninos para el control del ingreso vehicular, en líneas generales **este club ofrecía uno de los estándares más altos comparado con otros importantes clubes de la capital**. Quiero resaltar que al Club El Nogal asistían y lo hacen actualmente importantes personalidades de la vida política, como el Presidente de la República y Ministros del despacho entre otros, quienes cuentan con equipos altamente profesionales de seguridad quienes auditan en forma profesional y exhaustiva, valga la redundancia las condiciones de riesgo y los medios de protección, sin ese requisito no podrían asistir estos personajes. Podemos decir además que estas llamadas auditorías de seguridad al club se hacían periódicamente por organismos de seguridad del Estado y del sector privado también, vale recordar y fue publicado en los medios de información que para la época del atentado se encontraba hospedada en el hotel del Club El Nogal, la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ quien para ese entonces ocupaba el cargo de Ministra de Defensa, cargo de alto riesgo. (…) PREGUNTADO: Con anterioridad a esa fecha [fecha del atentado] cuántas veces cumplió con las funciones de seguridad que menciona y cuál fue la más cercana a ese hecho. CONTESTO: Antes del atentado en unas 6 oportunidades en un período de 4 o 5 años realicé labores encaminadas a verificar los niveles de riesgo y protección del Club especialmente en lo relacionado con el evento "Premio Mujer Cafam" reunión anual que se hizo durante unos 5 años en dicho Club y la última vez pocos meses antes del atentado. PREGUNTADO. Cuando se iban a realizar los eventos que usted menciona, usted como jefe de seguridad de Cafam, exactamente qué hacía con relación al sistema de seguridad del Club El Nogal. CONTESTÓ. La labor de seguridad de un jefe, de un departamento que cumple estas funciones es coordinar la labor de un equipo especializado en las labores de evaluación de riesgos y prestación de los servicios de protección, igualmente representaba la de hacer un recorrido por las instalaciones para verificar en el terreno estas condiciones inclusive en ocasiones se hizo de manera discreta al acompañar al equipo organizador sin mencionar el rol de seguridad para garantizar una mayor objetividad en este análisis. El orden es el siguiente: Primero, se participa en las reuniones de organización del evento en donde se determina quienes van a participar, horarios, invitados especiales, vehículos, temas de protocolo y una vez conocidos estos temas en línea general los organizadores del evento, en este caso Cafam interactúan con los coordinadores del Club el Nogal para los temas de logística, donde el tema de seguridad es un capítulo especial en el cual, se determinan vías de acceso, personal de apoyo, control de visitantes, vías de evacuación, seguridad de la presidencia de la república, todos estos temas en coordinación con el personal de seguridad del

Club. (…). PREGUNTADO. Informe al despacho cuál es su experiencia profesional en materia de seguridad y cómo ha acreditado esta experiencia ante las autoridades competentes en el país. CONTESTÓ. Actualmente cuento con la credencial de consultor expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 14 años de experiencia en el campo de la seguridad empresarial, profesional certificado en protección por la Asociación Americana de la Industria, ASIS, he adelantado cursos en estas materias en Israel, España y USA., Igualmente soy docente de la Universidad Sergio Arboleda en posgrados de recursos humanos y conferencista en temas de seguridad integral. He sido presidente en varias oportunidades de la Asociación de Jefes de Seguridad de Centros Comerciales y grandes superficies de Bogotá. PREGUNTADO. Si tuvo la oportunidad de conocer el comportamiento de los empleados del Club con ocasión del atentado en las tareas de evacuación y salvamento, indique al despacho qué nivel de conciencia sobre seguridad integral denotó en el comportamiento de dichos empleados. **CONTESTÓ. El atentado del Club lo puedo catalogar y varios colegas coinciden en lo mismo, como un hito en la historia de la seguridad de Bogotá y por tal razón ha sido un caso estudio y análisis de los profesionales del gremio y se ha reconocido como el actuar de los empleados del Club, varios de ellos brigadistas permitió salvar varias vidas humanas que se encontraban en la instalación, podemos decir que sin esta labor heroica de estas personas las pérdidas hubieran podido ser mayores**. **PREGUNTADO. Sírvase ilustrar al despacho si el manejo y los procedimientos relativos a la seguridad en el país se modificaron sustancialmente a raíz del atentado y en qué sentido. CONTESTÓ. Como lo referí anteriormente, estos hechos relacionados con el atentado significaron partir en dos la historia de la seguridad en Bogotá y en las grandes ciudades del país. Esta situación obligó a las empresas importantes de la ciudad, ejemplo, Centros Comerciales, Supermercados, Clubes y demás que pudieran ser blanco del actuar terrorista a revisar y reforzar en algunos casos estos sistemas de protección.** PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho, cuál o cuáles instrumentos de seguridad son los más idóneos para detectar el ingreso de explosivos. CONTESTÓ. En el campo de la seguridad se combinan diferentes componentes para construir y consolidar un sistema de protección. En este campo principalmente están los guardas de seguridad, los circuitos cerrados de televisión y en el campo de detección de explosivos se encuentran los perros entrenados y equipos más sofisticados que detectan partículas de componentes que pueden integrar una bomba. **No existe en el mundo un sistema 100% infalible, en este atentado participó uno de los grupos terroristas más avanzados del mundo quienes utilizaron técnicas para la construcción de carro – bomba provenientes del IRA de Irlanda.** PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si conoce el dato de la clase de explosivo que hicieron detonar en el Club El Nogal y qué cantidad del mismo se utilizó para ello. CONTESTÓ. La respuesta exacta a es pregunta sólo la podrían contestar los cerebros del atentado, lo que si le puedo decir y ha sido divulgado por los entes investigadores es que **el explosivo utilizado en buena parte incluía ANFO y el cual fue incorporado dentro de los elementos o partes del vehículo, un trabajo bastante sofisticado y de alta peligrosidad.**" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- En fin, téngase en cuenta también el informe rendido por la administradora de riesgos profesionales a la que le correspondió el caso –ARP Liberty-, sobre el atentado terrorista sufrido por el CLUB EL NOGAL, cuyos apartes más significativos transcribimos como corroboración de las declaraciones precedentes (Fl.548-550 C2 Exp. 2005-0176):

"(...) **4. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE Y/O INCIDENTE.**

"1. Una explosión ocurrida a las 8:15 p.m. del viernes 7 de febrero en las instalaciones del club El Nogal de Bogotá, ubicado entre las calles 78 y 79 con Carrera Séptima, dejó por lo menos 35 personas muertas y aproximadamente 200 heridas.

"2. Como consecuencia del atentado terrorista fueron reconocidos los cuerpos de los señores VER LISTADO ANEXO (...).

"5. DESCRIPCION DE LOS HECHOS.

"1. En efecto, en la fecha y hora antes mencionadas se consumó en el interior del Club el Nogal una explosión exclusivamente atribuible a un atentado terrorista, bajo la modalidad de carro bomba, causando, según ya se dijo, la muerte y lesiones en su salud a muchas personas, así como daños a la propiedad de la Corporación y a los bienes de las personas que allí se encontraban en ese momento.

"2. Dicho acto Terrorista, del cual fue víctima El Club, produjo la muerte de 10 empleados de la Corporación, así como un gran número de heridos, con diferentes grados de severidad, quienes estaban realizando labores en varias actividades propias del club, tales como parqueo, recepción, seguridad, cocina, restaurante, taberna, bolos, gimnasio y servicios generales.

"3. Dadas las características del atentado, se inició por parte de las autoridades competentes las investigaciones correspondientes, que a la fecha se adelantan, por la Fiscalía General de la Nación.

"6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION.

"1. Los trabajadores VER LISTADO ANEXO, identificados con cédulas de ciudadanía No. VER LISTADO ANEXO, se encontraban vinculados a la Empresa Corporación Club El Nogal, con la descripción del Cargo: VER LISTADO ANEXO. (funciones estipuladas en las competencias), y según consta en el Contrato Laboral Firmado por las partes. (VER LISTADO ANEXO).

"2. En el momento del accidente (Explosión), desempeñaba funciones propias de su cargo (ejecución de órdenes y tareas asignadas), en las instalaciones y/o perímetros asignados y dentro del horario laboral establecido.

"3. Se califica como ACCIDENTE DE TRABAJO por OCASIÓN.

- "VIOLENCIA LABORAL CAUSADA POR HECHOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA.

"**7. RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION.**

"1. Se deja constancia de que para la fecha del atentado terrorista, la Corporación Club El Nogal disponía de uno de los mejores sistemas de seguridad integral que estaba conformado por un plan general de seguridad en los aspectos de prevención, emergencia y evacuación. **Para su implementación, se contaba con una dotación de alta sofisticación técnica (sistema de grabación digital, sistemas contra incendios, radios y alarmas), así como con el soporte de una firma de vigilancia especializada, la cual fue objeto de un proceso de selección, de cara a las distintas compañías que participaron en una licitación privada que hizo el Club. Como mecanismo de seguridad complementaria y de excepcional empleo para un club social en la fecha en que ocurrieron los hechos, el Nogal contaba con un soporte de seguridad canina.**

"2. **No obstante lo anterior, un atentado terrorista como el perpetrado contra el Club, que no tenía antecedentes en el país, dada su destructiva y cobarde naturaleza,** ilustró al club El Nogal para realizar una revisión detallada de los procedimientos y sistemas de seguridad, medida que comparte esta ARP con el objeto de:

"A. Continuar el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Integral del Club.

"B. Continuar dentro del Programa de Salud Ocupacional, con el manejo integral del Plan de Emergencias, Planes de Contingencia y Plan de Manejo de Crisis.

"C. Continuar con programa de información a empleados, socios e invitados, en temas como evacuación, sistema de alarmas, zonas de circulación y detección precoz de posibles emergencias (paquetes extraños y/o mal ubicados, personas desconocidas, comportamientos extraños, etc.)

"D. Continuar con la capacitación y mantenimiento de las Brigadas de Emergencia.

"E. Continuar el protocolo de manejo de contratistas y en especial en el proceso de reconstrucción el cumplimiento de las normas y procedimientos de salud ocupacional.

"F. Perseverar, durante la etapa de Reconstrucción de Instalaciones del Club, en las siguientes actividades: Capacitación continuada del personal operativo en: Seguridad en Obras de Construcción, Trabajo en Alturas, Manejo de Herramientas Manuales, Uso de Elementos de Protección Personal, Trabajo en Espacios Confinados, Movimiento de Cargas, Prevención, Atención y Mitigación de Emergencias, entre otros. Programas de Inspecciones Planeadas, Programas de Señalización y delimitación de Áreas.

"G. Continuar con la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente referente a las labores de construcción, sistemas de protección a la propiedad y las personas". (Las negrillas y subrayados son nuestros).

Las pruebas anteriormente reseñadas dan cuenta de la pericia y diligencia con que procedió la Corporación Club El Nogal. Como expresamente lo señalan las declaraciones antes transcritas, el sistema de seguridad que utilizaba mi representaba para la época del atentado terrorista, era bastante superior al estándar de seguridad de que se valían los demás clubes. El autorizado dicho de los testigos -Presidente de la Junta Directiva del Centro Comercial Unicentro, el del gerente del Gun Club y ex-gerente del Jockey Club, el del ex-gerente del Club Metropolitan y el de dos expertos en la industria de la seguridad privada-, describe, de manera uniforme, las medidas de seguridad que regían para ese tipo de establecimientos antes del 7 de febrero de 2003, fecha del atentado terrorista, y su comparación con las que en ese entonces tenía adoptadas el Club El Nogal, para concluir que las de éste último eran bastante más sofisticadas y rigurosas: portería de control para el acceso vehicular, de socios e invitados; soporte canino y técnico (circuito integrado de televisión); contratación de personal muy especializado e infraestructura de última tecnología.

Adicionalmente declaran que atentados como el que sufrió el Club el Nogal no tenía precedentes en la ciudad de Bogotá ni en el resto del país. Que las diferentes avanzadas de seguridad practicadas por entidades de seguridad estatal (por visitas del Presidente, Ministros del Despacho y otros altos funcionarios del Gobierno) y privada (por visitas de presidentes de compañías y entidades nacionales y extranjeras, de distintas actividades, embajadores, etc.) nunca ofrecieron duda sobre la seguridad del Club y su implementación. Por el contrario, fueron calificadas siempre por distintos expertos en seguridad participantes en ellas como sobresalientes, en comparación con sus entidades pares (otros clubes del mismo nivel y centros comerciales). Que el atentado terrorista del Club El Nogal, dividió la seguridad del país en dos y dio lugar a cambios y nuevas regulaciones tendientes a progresar en esa materia. Que toda medida de seguridad es susceptible de ser vulnerada y no ofrece nunca el resultado deseado con su implementación por rigurosa y severa que sea.

Así, no es dudoso que mi representada no solo cumplía en aquella época con las medidas de seguridad estándares de los clubes sociales bogotanos –que, en rigor,

era el estándar de conducta exigible a mi representada, a la luz del parámetro de diligencia antes acuñado-, sino que las superaba ampliamente. Se demostró suficientemente, pues, su diligencia en este tema[24].

Lo anterior, por lo demás, es también corroborado por las pruebas documentales. Así, por ejemplo, en la diligencia de inspección judicial que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá llevó a cabo en las instalaciones del Club El Nogal (diligencia que se surtió el 12 de octubre de 2006, en el proceso instaurado por Luz Constanza Prado e hijos contra mi representada), se pudo encontrar copiosa documentación que daba cuenta de las medidas de seguridad adoptadas por la Corporación Club El Nogal en relación, por ejemplo, con el servicio de vigilancia privada prestado por ATEMPI, el uso de caninos proveídos por la empresa Caninos Ltda., los equipos de seguridad y el personal encargado de la misma.

También se pueden encontrar en el expediente varios documentos emanados de la Fiscalía General de la Nación que acreditan el correcto funcionamiento de las cámaras de video que registraban el ingreso de los vehículos al Club y que prestaban soporte a todo el sistema de seguridad con que contaba El Nogal para el 7 de febrero de 2.003, así como la correcta actualización de las bitácoras de ingreso de personas. Sobre el particular se destacan:

- La respuesta del 8 de julio de 2005 de la Fiscalía General de la Nación al derecho de petición del Club el Nogal para que se confirme que las cámaras de video instaladas en los accesos vehiculares al Club funcionaron normalmente el día del atentado terrorista. En dicho documento se lee que:

  > "El análisis de los discos duros de vídeo — imágenes de monitoreo del El Club El Nogal, fueron de gran importancia para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los acontecimientos aquí investigados, así mismo orientaron la investigación hacia el descubrimiento de la identidad de los presuntos responsables del atentado terrorista".

- Lo dicho en el documento citado se corrobora con lo expresado por la Fiscalía General de la Nación en la resolución de acusación del 19 de julio de 2004 cuyo aparte también se transcribe:

  > "(...) Respecto de **este acontecimiento, debe recordarse que en los controles de ingreso al Club, quedó registrado que inicialmente ingresó, media hora antes, JHON FREDDY y, con posterioridad, lo hizo OSWALDO,** con una identidad y carnet de socio falsas a bordo del Megane rojo; indicando todo que el primero ubicó el campero Toyota Land Cruiser, 4.5, azul marfil, modelo 2001, de placa BXN 261, en el sitio donde debía efectuarse la explosión, para luego, cuando ingresó su. tío OSWALDO, mover ese carro, cediéndole el espacio al Reanult Mégane Rojo cargado con los explosivos, **que fuera detonado cuando estas dos personas acababan de descender de los vehículos, sin darles los quince a veinte minutos que les habían anunciado para escabullirse del Club antes de la explosión.** Respecto de FERNANDO, no se sabe por qué no ingresó, como dicen los testigos, dado que sí permaneció cerca del Club, como se pudo establecer por la celda o panel que transfirió llamada celular de éste con OSWALDO, minutos antes

[24] Todo sistema de seguridad, por bueno que sea, no es perfecto y está llamado a ser burlado por los delincuentes. ¿Qué mejor prueba de este aserto que el ataque terrorista contra el Pentágono de los EUA y la torres gemelas en Nueva York? Así lo resaltaron los testigos expertos en materia de seguridad, los señores Luis Enrique La Rotta y Sonia Andrade, quienes afirmaron que no existe un sistema infalible capaz de detener un atentado terrorista; como muestra de ello, las instalaciones propias del Estado, tales como la Fiscalía o las Fuerzas Militares, no escapan de los estragos del terrorismo; **Incluso, se ha establecido que los sistemas de seguridad resultan inoperantes al momento de tratar de detectar un artefacto explosivo, pues sólo a través de otros medios, tales como la intervención oportuna de un informante, es posible percibir la inminencia de un ataque de este tipo.**

de la explosión y cuando ya tanto el piloto como el coche -bomba estaban en el interior del edificio objeto del ataque.(...)" (resaltado y subrayado fuera de texto)

Lo transcrito en las páginas precedentes confirma y prueba plenamente la diligencia debida con que el Club El Nogal procedió la noche del atentado terrorista en materia de seguridad, razón por la cual procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia. No puede, pues, endilgársele al Club que represento, una de las muchas víctimas del atentado terrorista, responsabilidad alguna por los eventuales daños materiales y morales sufridos por los demandantes. Ninguno de los antecedentes del caso permiten imputarle al Club la autoría del daño. Por el contrario, ellos ponen de presente el particular esmero con que actuó mi representada en temas atinentes a la seguridad de sus socios y de terceros, hasta el punto de haber reforzado sus propias medidas de seguridad con los servicios de personas particularmente entrenadas para esos efectos y de contar con documentados procedimientos de seguridad integral avalados y verificados por una aseguradora de riesgos profesionales de amplia trayectoria nacional e internacional.

Ahora bien, para evitar cualquier equívoco, es preciso hacer una breve referencia a dos informes que obran en el expediente y que ameritan algunas precisiones específicas:

a. En primer lugar, el informe rendido por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, fechado el 14 de diciembre de 2004 y por medio del cual se daba respuesta a los oficios 1658 y 2008 que, en su momento, expidió el Juzgado Trece Civil del Circuito para el proceso iniciado por Alexandra Hoyos Duque y María Camila Caicedo Hoyos en contra de mi representada. En ese informe se afirma que "… contando con un buen entrenamiento del equipo cinofilo (guía y perro), en condiciones normales tiene que ser detectada (la carga explosiva) ya que la cantidad de sustancia es muy significativa …" (Fl.142) (subrayado y paréntesis no originales). Esto pareciera ser contradictorio frente a lo que se viene sosteniendo en la presente alegación. Sin embargo, no es así. Y no lo es porque mediante informe del 11 de mayo de 2005 de la Fiscalía General de la Nación –en respuesta al oficio No.0315 del Juzgado Trece Civil del Circuito-, se aclaró la anterior afirmación en el sentido de que la posibilidad de detección del explosivo se condicionaba a circunstancias normales que, entre otras, incluyen que "… el vehículo no contenga ninguna sustancia que distorsione el olor del explosivo dificultándose su detección" (Fl.470 a 473 C1A Exp. 2003-712). En este caso, está demostrado que ello fue justamente lo que sucedió: como ya se puso de presente, los terroristas alteraron el olor del explosivo, con lo cual su detección se hizo imposible. En ese sentido, no puede decirse que era factible identificar la carga en el vehículo empleado por las FARC, como quiera que, en realidad, se estaba bajo una circunstancia de anormalidad que no lo permitía.

b. En segundo lugar, el informe elaborado también por el DAS (funcionario John Jairo Marín Barragán), para el proceso de Luz Constanza Prado e Hijas contra mi representada, e identificado con la referencia DGO.SIE.PJU.EXPL 737644-4 (Fl.1213 a 1218 C3 Exp. 2005-176). Este informe señala, de manera por demás escueta y superficial, que el personal de seguridad y los caninos del Club El Nogal debían estar en posibilidad de detectar la carga explosiva que se detonó el 7 de febrero de 2003. En concreto, sostiene que la inclinación del vehículo, dado el peso de los explosivos, permitía su fácil identificación; además, señala que caninos suficientemente entrenados habrían estado en capacidad de identificar los 250 kilogramos de mezcla de C4 y nitrato de amonio; para cerrar, asevera entonces que una implementación *adecuada* de las medidas de seguridad habría permitido

minimizar o contrarrestar el atentado terrorista de que fue víctima mi representada.

Pues bien, frente a este informe, **que no dictamen**, a la luz de las severas exigencias legales que deben tenerse en consideración para que tenga la virtualidad de ser calificado como tal –que fue oportunamente objetado por error grave (Fl.1276 a 1290 C3 Exp. 2005-176)-, debe decirse que la absoluta carencia de rigor técnico y de fundamento conduce indefectiblemente a que no deba ser valorado por el Tribunal al que respetuosa y comedidamente me dirijo. Ciertamente, sus conclusiones no solamente se derivan de la transcripción y análisis de pruebas ajenas al presente proceso, sino que, como podrá observarlo el sentenciador, desconocen de forma palmaria y ostensible toda una serie de variables que estuvieron involucradas en los hechos del Club El Nogal y que simplemente se pretermiten para efectos de las pruebas de que da cuenta dicho informe.

De hecho, con el propósito de no trascribir el texto de la objeción presentada contra el citado informe, es importante simplemente señalar tres aspectos que no dejan de llamar la atención: a) en primer lugar, la inexistencia de un razonamiento técnico que soporte las conclusiones del funcionario del DAS. Podrá observarse que sus conclusiones provienen de aseveraciones que, por decir lo menos, son lacónicas y se basan en meras intuiciones, para nada fundamentadas en la técnica o la ciencia. Todo lo contrario: son el producto del querer caprichoso del susodicho técnico, que simplemente se ocupó de afirmar sin fundamentar; b) además, el contenido de su escueto informe de cuatro folios, contradice abiertamente lo establecido en el resto de probanzas a las que ya se ha hecho alusión en el presente alegato y que, con pleno rigor técnico, experiencia y conocimiento de causa, destacan la imposibilidad de detectar los explosivos y la diligencia de la Corporación Club El Nogal. Ninguna credibilidad se le puede atribuir a un informe cuando, sin dar razones, va en contra del criterio de personal especializado y conocedor del sector; mucho menos cuando incluso va en contra del propio criterio expuesto en otros informes del DAS, como el enunciado en el punto inmediatamente anterior (informe del 14 de diciembre de 2004, referido en la letra *a, supra*).

Dentro de la mencionada objeción mi representada trajo a colación distintos argumentos que desvirtuaban la credibilidad del informe presentado por el técnico del DAS. Entre ellos, se recuerdan en este escrito, los siguientes:

i) Que los puntos a y b[25] de informe se respondieron *“mediante la "trascripción" de los resultados de una investigación realizada en otro proceso relacionado con el atentado del Club El Nogal sin especificar en qué consistió la solicitud de la prueba efectuada en su momento ni los detalles básicos del proceso para el que fue elaborada la supuesta investigación”*[26]*;* por lo cual *“no se tiene certeza de si lo solicitado en su momento en el otro proceso guarda relación con la solicitud de la*

[25] Correspondientes a las preguntas:

“*a) Si un vehículo Renault Megane cargado con cerca de 250 kilogramos de una mezcla de C4 y nitrato de amonio, que vaya ocupado por una sola persona, sufre alguna alteración física exterior que pueda ser notada a simple*
vista.
b) Si un vehículo Renault Megane cargado con cerca de 250 kilogramos de una mezcla de C4 y nitrato de amonio, sería detectado normalmente por perros especializados en labores anti explosivos”. Fl. 529 (antes 113) Exp. 2005-176.

[26] Objeción por error grave; Fl. 1276 Exp.2005-176.

prueba que en la presente oportunidad nos ocupa ni cuales fueron las objeciones formuladas en su momento en contra de dicho informe, para efectos de poder verificar hasta qué punto podría considerarse válida la "trascripción" que efectúa el perito. Por otra parte, tampoco se tiene certeza cual fue la "trascripción realizada, en la medida en que no se utilizaron comillas"[27].

ii) El informe concluyó que, en las pruebas realizadas en 2006, el personal de seguridad privada y los caninos podrían detectar una carga de explosivos similar a la empleada en el atentado. Frente a este punto se indicó que el dictamen no tuvo en cuenta las condiciones que rodearon el caso del Club el Nogal, en tanto el explosivo empleado en el atentado del 7 de febrero de 2003 era de muy difícil detección aún a pesar de las superiores condiciones de seguridad con las que contaba mi representada y que fueron ampliamente probadas en el proceso.

iii) El mencionado informe no tuvo en cuenta que la regulación de los caninos en materia de seguridad, especialmente los de búsqueda de explosivos, se dio con ocasión del atentado sufrido en las instalaciones del Club el Nogal. Por ello, *"el funcionario del DAS incurre en sendos y gravísimos errores al contestar varias de los puntos solicitados (por ejemplo, el punto "c" "d", "e", "h" e "*), en la medida en que no se tiene en cuenta, o por lo menos no se precisa, que hay que distinguir entre las exigencias normativas en materia de entrenamientos y procedimientos de vigilancia y seguridad canina para la época del atentado (7 de febrero de 2003) y las exigencias previstas en la actualidad"*[28].

iv) A su vez, mi representada puntualizó que los elementos dispuestos para realizar las pruebas sobre la posibilidad de detección de los artefactos explosivos no representan las condiciones que en su momento fueron dadas en el atentado del Club El Nogal. De tal suerte que i) el vehículo utilizado en las pruebas no corresponde con el empleado en el atentado (Renault Megane) ni se explica si es justificable el cambio sobre el mismo; ii) en el atentado la carga de los explosivos de distribuyó en distintos puntos a lo largo del vehículo, mientras que en las pruebas realizadas la carga fue colocada en un mismo punto; iii) al momento de realizar las pruebas no se tuvo en cuenta la utilización de elementos o sustancias destinadas a distraer o dificultar las labores de detección por parte de los caninos (cuestión que se encuentra acreditada en el caso de autos).

Por todo lo anterior, este informe no tiene, ni por asomo, la virtualidad de ser considerado como dictamen y, mucho menos aún, derruir o desvirtuar las demás pruebas que se practicaron en el curso del proceso y que, de manera conteste, inequívoca y uniforme, dejan claro que mi representada actuó con plena diligencia y esmero.

De hecho, conviene destacar el testimonio técnico rendido por el señor Jairo Arturo Parra Cuadrado ante el Juzgado 13 Civil del Circuito. En esta declaración, el señor Parra Cuadrado, en su calidad de Jefe de la Unidad de Explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –y, de contera, de jefe del funcionario que suscribe el informe DGO.SIE.PJU.EXPL 737644-4-, deja claro que era prácticamente imposible detectar el explosivo que fue detonado en el Club El Nogal y, en consecuencia, que ninguna

[27] *Ibídem.*

[28] Objeción por error grave; Fl. 1286 Exp. 2005-176.

negligencia le es atribuible a la Corporación Club El Nogal. Sostuvo el mencionado testigo que:

"PREGUNTADO No. 1: Indíquele al Despacho cuál es su experiencia en el desarrollo de las labores de antiexplosivos o investigación de antiexplosivos? **CONTESTO**: Desde el año 85 me desempeño como técnico en antiexplosivos y son 19 años ejerciendo como técnico en desactivación y pos-investigación. **PREGUNTADO No. 2:** Dígale al Despacho si usted participó de las labores de pos-investigación que se llevaron a cabo con ocasión del atentado perpetrado en el CLUB EL NOGAL DE BOGOTA, el día 7 de febrero de 2003? **CONTESTO:** Sí, participamos como auxiliadores o colaboradores al grupo de explosivos del CTI, y a la fiscal que conoció el caso y nuestra labor fue tratar de desarrollar búsquedas de evidencias, fue por espacio más o menos de cinco días, y todo lo que se halló en ese lugar para tratar de identificar el tipo de artefacto, ubicación del mismo, y posibles autores, todo le fue entregado al CTI que fue quien continuó la investigación, y esa fue nuestra función de colaboración, pero no continuamos con la investigación (...). **PREGUNTADO No. 4:** Indíquele al Despacho en relación con el atentado en mención, qué tipo de información llegó a su conocimiento acerca de la modalidad del atentado, cantidad de explosivo utilizado u otros factores relacionados con él? **CONTESTO:** En la pos-investigación que se realizó se logró determinar que se trataba de un vehículo RENAULT MEGANE, en este momento no recuerdo bien el color, creo que rojo, ya que muchas de las partes del miso fueron encontradas esparcidas, y que posteriormente de haber escogido muchas de ellas, se llegó a ese tipo de conclusión, en cuanto a la cantidad de explosivo y sistema utilizado en el momento no pudimos determinarlo porque no teníamos los informes de laboratorio que nos indicaran los resultados del mismo, y así haciendo un cálculo de los daños podíamos llegar a calcular que cantidad aproximada se utilizó, se que el CTI continuó con la investigación y lograron obtener algunas trazas de explosivos, y creo que ellos determinaron la cantidad que se utilizó. PREGUNTADO No. 5: Indíquele al Despacho si de acuerdo con su experiencia como técnico anti-explosivos un vehículo RENAULT MEGANE cargado con 20 arrobas del explosivo ANFO presentaría alguna alteración física detectables a simple vista, cuando esta siendo ocupado por dos personas de talla normal. **CONTESTO: Si el vehículo presenta algunas caletas ubicadas en puntos estratégicos tales como espaldar, tableros de las puertas, espacio del mamparo contra incendios del vehículo, o sea, el espacio que hay entre el motor y la cabina del vehículo, no presentaría ningún tipo de anormalidad ya que tuvimos la oportunidad de atender un caso en el barrio SUBA donde se encontró un vehículo de similares características y a este le habían hecho una caleta en el espaldar de la silla trasera, que si no era analizada cuidadosamente no era de fácil detección. PREGUNTADO No. 6:** Al hacer referencia a alteración física en la pregunta anterior, me refería al hecho de que un vehículo de las condiciones descritas, cargado con 20 arrobas de explosivos, aun en las condiciones descritas por usted, no esta más cerca del piso que un vehículo que no contenga la carga en mención. **CONTESTO: Como lo dije anteriormente cuando se ubica en los puntos que describí el peso queda muy bien repartido y efectivamente alcanza a presentar un acercamiento hacía el suelo, pero que lo descubriría una persona que esté entrenada y que tenga algo de malicia y conozca el nivel normal de este tipo de vehículos; en cuanto a peso excesivo si se hubiese colocado en un solo punto si tendría que presentar ese tipo de acercamiento del chasis al suelo que sería de fácil detección. PREGUNTADO No. 7:** Indíquele al Despacho hasta que cantidad del explosivo denominado ANFO es posible ubicar en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE, en los sitios que usted hizo referencia en respuesta anterior? **CONTESTO:** La verdad pecaría si le diera una cantidad exacta, ya que personalmente no hemos hecho la prueba de cuanto podríamos nosotros encaletar en estos sitios, pero imagino que estos si tuvieron esa cantidad a al cual el Doctor hace referencia, que supongo es la cantidad deben calcularlos expertos del CTI quienes fueron los que continuaron con la investigación, la debieron de haber tomado conociendo el dictamen del laboratorio, los elementos de prueba encontrados en el lugar de la explosión y cálculos efectuados por ellos mismos en un vehículo de similares características. **PREGUNTADO No. 8**: De acuerdo con su experiencia es posible ubicar veinte arrobas del explosivo conocido

como ANFO en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE en los sitios en que usted indico en respuesta anterior sin que ello sea detectable a simple vista? **CONTESTO: Si es posible; en alguna ocasión, y estoy hablando de conocimiento propio, tuvimos un caso en donde un RENAULT CUATRO ubicaron en la parte de atrás y el cual fue desactivo afortunadamente 200 kilos de BENCLO, y realmente no es un espacio muy grande el que tiene un RENAULT CUATRO, por lo cual pienso que si es posible,** no se como tendrían ese carro ese día, porque en algunas modalidades que nosotros también hemos encontrado es que también acostumbran a rellenar las sillas, pero en el caso que hace referencia el Doctor que es el atentado al NOGAL no le podría yo afirmar que ese vehículo tenía esa cantidad ya que nosotros no continuamos con la investigación, pero si lo puede decir el grupo de explosivos del CTI quienes fueron los que culminaron la investigación. (...). En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien manifiesta: **PREGUNTADO No. 1:** Señor PARRA: en consideración a su experiencia y conocimiento técnico en materia de explosivo, podría usted ilustrar al Juzgado sobre los progresos en conocimientos, estrategia, y nivel tecnología de la FARC y ELN comparándolo con los inicios de estos grupos al margen de la ley en esa materia? **CONTESTO**: **Cuando yo me inicie en el campo de los explosivos en el año 85, teníamos bombas relativamente sencillas, las cuales eran ubicadas en puntos donde pudiesen hacer daño a organismos gubernamentales, y muchas de ellas eran bombas activadas mediante sistema in eléctrico, para hacer claridad al despacho me refiero a explosivo, una cápsula detonante in eléctrica, un pedazo de mecha lenta o de seguridad, y lo único que tenían que hacer era aplicar una chispa o fuego y dependiendo del largo de la mecha daban tiempo para retirase y colocarse en un punto de seguridad mientras la detonación, eran sistemas que no necesitaban de ningún tipo de tecnología, o utilizaban un reloj despertador bastante grande que en muchas ocasiones lográbamos nosotros desactivar debido a que le colocaban mucho tiempo; hoy en día utilizan ingenieros para realizar sus propias tarjetas para la activación de artefactos explosivos, para lo cual nos hemos visto obligados a capacitarnos mucho más para poder sobrepasar ese nivel y así lograr neutralizar ese tipo de elementos. PREGUNTADO No. 2:** Dada su participación en la investigación que se desarrollo por parte del DAS con posterioridad a la explosión del carro bomba en el club EL NOGAL, infórmele al Juzgado cuál fue el resultado que se obtuvo con ocasión de las pesquisas y delaciones de las personas capturadas con ocasión del mismo? **CONTESTO:** Lo que nosotros normalmente hacemos en estos casos es la parte técnica, la parte investigativa la realiza el grupo de seguridad publica y antiterrorismo; pero por lo que se adelantaba ese día se decía que era el mismo sitio donde se había preparado el carro para el atentado de EL NOGAL, y me estoy refiriendo al allanamiento efectuado en el barrio SUBA, donde se encontró un RENAUL MEGANE **con una caleta en la parte del espaldar de la silla trasera con un forro que lo hacía pasar como si fuera parte de la silla, al igual que el alojamiento normal donde va la batería había sido retirada de ahí y dejado ese espacio vacío que es a lo que yo hacía referencia cuando hablaba del mamparo contra incendios, y la batería que iba alojada ahí ubicada a un costado en la parte frontal del vehículo**, en cuanto a la investigación en si no la tenemos. **PREGUNTADO No. 3:** Quisiera preguntarle señor PARRA sobre qué influencia tienen los elementos de sorpresa e indefensión, entre otros, en el objetivo que persiguen los delincuentes que pretenden colocar un carro bomba. **CONTESTO:** en cuanto a mi concepto personal y tratándose de un club donde imagino que existía un monitoreo de la entrada de los vehículos, donde imagino existían unos guías caninos en detección de explosivos, y donde si la persona que va a ingresar este tipo de elemento es concordial, efectivamente se le hace una revisión pero con la ventaja de que al ser socio, esa revisión no se tan exhaustiva y si el elemento o artefacto esta bien camuflado puede pasar desapercibido. **PREGUNTADO No. 4:** Qué grado de éxito tienen este tipo de acciones criminales a nivel nacional según la experiencia que usted ha tenido? **CONTESTO**: Yo pienso que un alto porcentaje por lo que anteriormente describí (...) **PREGUNTADO No. 6:** Dentro de la experiencia que usted ha tenido en el DAS en materia de atentados con explosivos, informe al Juzgado si conoce eventos de esta naturaleza perpetrados contra clubes sociales.

CONTESTO: <u>Contra clubes sociales no</u>, o no recuerdo en este momento (...)" (resaltados nuestros).

Presentada la anterior argumentación no es dudoso, entonces, que la Corporación Club El Nogal contaba con medidas de seguridad altamente calificadas. Cosa distinta es que, debido al nivel de sofisticación utilizado por los terroristas, ni con esmerada diligencia podría detectarse la presencia de los explosivos. Ciertamente, los terroristas calcularon y planearon el montaje del carro bomba de modo tal que burlara los más sofisticados sistemas de seguridad: introdujeron los explosivos de manera disimulada y balanceada a lo largo y ancho de la carrocería del automóvil con el cual se perpetró el ilícito[29] y emplearon mecanismos de engaño para el instinto olfativo de los caninos entrenados para esos efectos. De este modo, ni aún con pericia, el Club El Nogal podía defenderse[30], lo que no incide solamente desde la perspectiva de la diligencia, sino también de la causalidad, como se apreciará en un punto ulterior.

En este punto resulta relevante destacar que a la fecha de los hechos no existía regulación relacionada con el uso de caninos para vigilancia. Es más: la misma tan solo surgió con posterioridad a la ocurrencia del atentado terrorista que tuvo lugar el 7 de febrero de 2003. En efecto, esta materia fue regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de las Resoluciones 025993[1] y 026013[2] del 1 de diciembre de 2003, esto es, con posterioridad al 7 de febrero de 2003. De tal suerte que no resulta admisible imponer cargas a mi representada o exigirle actuar conforme a un estándar de conducta que ni siquiera se encontraba regulado para el momento en que ocurrieron los hechos.

Esa particular y especialísima sevicia y habilidad de los terroristas impidió que las medidas de seguridad implementadas por mi representada detectaran el ingreso del carro bomba. Así, el problema no era de culpa. Era la consecuencia inevitable de la invencible sofisticación de los terroristas. **<u>De hecho, como consta en las</u>**

---

[29] Es determinante en cuanto a la distribución balanceada del explosivo dentro del vehículo utilizado lo manifestado como conocimiento de primera mano por Jairo Arturo Parra Cuadrado en su testimonio rendido el 1 de febrero de 2005 ante el Juzgado 13 Civil del Circuito (diligencia que se aporta mediante el presente escrito), pues se explica como encontraron las autoridades el explosivo camuflado en el carro bomba gemelo dispuesto para ser utilizado en contra del Hospital Militar: **"Si el vehículo presenta algunas caletas ubicadas en puntos estratégicos tales como espaldar, tableros de las puertas, espacio del mamparo contra incendios del vehículo, o sea el espacio que hay entre el motor y la cabina del vehículo…"** Esta distribución tenía como fin único hacer imperceptible la existencia de la carga explosiva e impedir su detección mediante inspección visual.

[30] **Tome nota el despacho lo manifestado por el terrorista Alipio Murillo, a cargo del montaje de los carros bomba, en sus declaraciones ante la Fiscalía respecto de la utilización de aceite y ajo machacado para distraer el olfato del apoyo canino. (Ver en particular la declaración rendida el 24 de abril de 2003 a folios 619 al 623 C2 Exp. 2005 - 176). Véase sobre el particular, incidencia de la alteración del olor del explosivo, lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación en el informe técnico del 11 de mayo de 2005 aportado mediante el presente escrito.**

[31] *"Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones para el desarrollo de los programas de capacitación y entrenamiento del ciclo de Manejador Canino y de Adiestramiento de Caninos, y se fijan los requisitos y normas para las escuelas y departamentos de capacitación en la modalidad del área canina".*

A su vez, dentro del acápite "Considerando" de esta resolución se indicó: *"Que en virtud de la creación de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana conformadas por las personas, empresas y servicios de vigilancia y seguridad privada, se hace necesario capacitarlas a fin de apoyar a la fuerza pública en la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo"*.

[32] *"Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medio canino y se adoptan disposiciones en materia de carnetización y registro de caninos".*

declaraciones rendidas por los señores ingenieros ALEJANDRO PEREZ SILVA y LUIS ENRIQUE GARCÍA REYES, si se hubiese detectado la bomba en el ingreso del vehículo Renault Megane a las instalaciones del Club El Nogal y, como estaba previsto, los terroristas la hubiesen detonado en ese lugar, las consecuencias habrían sido mucho peores: el incendio de los tanques cercanos habría agravado las consecuencias del siniestro. De este modo, no puede afirmarse que mi representada fue negligente o que incurrió en impericia o error de conducta alguno, como pretenden hacerlo ver los accionantes.

4.3. La selección y admisión de los socios no se encontraba a cargo de la Junta Directiva del Club El Nogal

De otro lado, aunque no resulta de particular relevancia para el análisis de responsabilidad, como tampoco se erigiría como causal para su declaratoria, la sentencia de primera instancia incurrió en error al señalar de manera general que la Junta Directiva del Club El Nogal controlaba la admisión de los socios. A este respecto, habrá de tenerse en cuenta que la selección y admisión de los socios se encontraba a cargo de la Promotora Club el Nogal, persona jurídica independiente y sin ningún tipo de relación de subordinación con mi representada.

De este hecho dejan constancia, entre otros, los testimonios de Fernando Londoño Hoyos y Fernando Ruíz Llano, y el interrogatorio de parte absuelto por Luke Pujana Angota. En lo que se refiere a éste último, a modo de ejemplo, allí la señora Pujana Angota, gerente del Club El Nogal para la época de los hechos, deja constancia de que "… la promotora Club El Nogal fue la entidad desarrolladora del proyecto y la encargada de colocar los derechos en los actuales socios del club el nogal …" (Fl. 788 a 790 C1A Exp. 2003-712).

De hecho, obran en el expediente distintos documentos que acreditan que el ingreso como socio al Club El Nogal de Invernar Invernaderos Ltda., y la aceptación de los dos beneficiarios designados por ésta para usufructuar la acción respectiva, fue surtida directamente por la Promotora Club El Nogal. Ello es corroborado también por la carta que remitió la Corporación Club El Nogal a la sociedad Invernar Invernaderos Ltda., el 18 de septiembre de 2002, mediante la cual *comunicaba* que *"... la Junta Directiva de la Promotora Club El Nogal S.A. en Liquidación, impartió su aprobación a la solicitud que ustedes presentaron como socios del Club El Nogal ..."* (Fl.283 C1A. Exp. 2003-712), de donde se infiere de manera clara que fue la Promotora y no mi representada quien concedió dicha autorización, lo que es también confirmado por la carta del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual el liquidador de la Promotora Club El Nogal especifica que fue esa sociedad la que impartió autorización a favor de Invernar Invernaderos Ltda.

Es más: en varias certificaciones como las arriba citadas y como la expedida el 2 de agosto de 2001, el Club El Nogal informa que el trámite para acceder a una acción empresarial de dicha Corporación debía adelantarse ante la Promotora Club El Nogal, la cual, debe reiterarse, constituye una persona jurídica distinta del Club El Nogal. Lo anterior debido a que para el año 2002 y 2003 la Promotora Club El Nogal era dueña de los derechos y de las acciones que se encontraban inactivas y por vender. En consecuencia, era esta misma empresa la encargada de vender las prenotadas acciones, señalar los requisitos para el ingreso de socios y proceder con la compilación y confirmación de la información pertinente.

En el caso de marras, ese fue el trámite que se surtió: la Promotora Club El Nogal vendió directamente a la sociedad Invernar Invernaderos Ltda., la acción empresarial y solicitó la información básica que se pedía a todo interesado en pertenecer al Club con el propósito de considerar y aprobar el ingreso de un nuevo

socio del Club. Este mismo procedimiento se empleó para aceptar la solicitud de Invernar Invernaderos Ltda. y el del resto de los socios admitidos con anterioridad.

Así las cosas, la gestión que pretende atribuírsele a mi representada, fue realmente realizada por una sociedad diferente y completamente independiente, respecto de la cual no existía subordinación alguna, razón por la cual no puede atribuírsele responsabilidad por las actuaciones de dicha sociedad.

4.4. Conclusión del presente acápite.

En conclusión, las pruebas testimoniales y documentales transcritas corroboran la indiscutible veracidad de los siguientes hechos:

- Que el Club el Nogal contaba con un sistema de seguridad altamente calificado y estructurado que cumplía a cabalidad con los parámetros de diligencia que eran razonables para la época.

- Que las medidas de seguridad con que contaba el Club superaban los estándares de seguridad de otras instituciones privadas de igual o similar naturaleza y objeto, por lo cual, en estricto rigor, se puede afirmar que eran medidas que superaban el estándar de comportamiento exigible a mi representada.

- Que las medidas de seguridad con que contaba el Club El Nogal para la época de los hechos funcionaron adecuadamente el día del atentado. (cámaras de video, revisión de vehículos, vigilancia interna y externa, soporte canino, etc).

- Que los terroristas emplearon para ejecutar su acto criminal altos niveles de sofisticación destinados a burlar la seguridad de El Nogal, los cuales excedían aún a la más esmerada diligencia, que fue la empleada por mi representada.

- La ausencia de antecedentes de atentados terroristas perpetuados de manera semejante en contra de instituciones de características similares a las del Club El Nogal.

- En fin, no existe aspecto alguno que permita inferir negligencia en el proceso de selección y admisión de socios, respecto de la sociedad Invernar Invernaderos Ltda., el cual, por lo demás, fue acometido por una sociedad diferente a la Corporación Club El Nogal.

Con todo ello queda entonces claro que mi representada procedió con absoluta diligencia en relación con los hechos que motivan la presente *litis.* Ninguna negligencia puede endilgársele y, en consecuencia, ninguna responsabilidad se le puede atribuir.

Las anteriores razones son suficientes para descartar la responsabilidad de mi representada en el presente evento. Resulta evidente, se reitera, que el Club el Nogal actuó con la diligencia exigida para este tipo de establecimientos, así como que contaba con el esquema de seguridad más avanzado entratándose de sitios a los que asistían un número elevado de personas, por lo que se debe descartar cualquier argumentación encausada a endilgar un comportamiento negligente al Club.

Ciertamente, no solo se puede concluir que no concurren en este caso ninguno de los presupuestos que exige la legislación colombiana para comprometer la responsabilidad civil de un sujeto particular, sino que, además, se evidencia la diligencia, probidad y pericia con que procedió y ha procedido mi representada frente a la materia de la *litis.*

En este orden de ideas, si el *a quo* hubiese acertado al aplicar el régimen de responsabilidad de culpa probada, necesariamente hubiera absuelto a mi prohijada frente a las demandas que fueron presentadas en su contra, por lo que la decisión deberá ser revocada y, en su lugar, se deberán negar las pretensiones formuladas en las distintas demandas.

5. QUINTO REPARO: CAUSA EXTRAÑA / INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL / PRESENCIA DE CAUSALES EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD / CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR / HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

La sentencia de primera instancia se equivocó al no declarar probada la causa extraña (caso fortuito, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero) en el caso que nos ocupa. Al respecto, brevemente sintetizo este numeral con las siguientes consideraciones de ineludible análisis para el juzgador de segunda instancia:

Como se expresó antes, todo análisis de responsabilidad civil debe contener el necesario estudio de uno de los tres elementos indispensables para que surja la obligación de responsabilidad civil, sin cuya presencia no nace a la vida jurídica: me refiero al nexo de causalidad entre la conducta del demandado y el daño alegado y causado al demandante. Es claro, pues, que la ausencia de dicho nexo, producida por la ocurrencia de una causa extraña, conlleva necesariamente a la inexistencia de responsabilidad.

Sea lo primero mencionar que en el presente evento se da la presencia de la causa extraña, con la virtualidad para quebrantar el nexo causal pretendido, representada por el hecho del tercero que perpetró el acto terrorista dirigido contra el Club el Nogal, delito atroz que organizaron y ordenaron las FARC. Este inocultable hecho que conoce y rechaza el país entero está plenamente acreditado dentro del proceso.

A tal efecto, la Corte Suprema de Justicia ha establecido al respecto de forma elocuente que:

> *"[…] autoría y calificación de la conducta, difieren, no pudiéndose sostener que una persona es autor de un daño y a la vez que no lo es; así, cuando el daño acontece por fuerza mayor, caso fortuito, intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, no puede imputarse a quien se sindica de autor; simplemente en estos eventos,* ***el daño es fruto de un elemento extraño y, en cuanto tal, el sujeto no es autor y, por esto, en estos casos, no hay lugar a responsabilidad porque el daño no es imputable a quien se acusa como autor****"*[33] (Negrilla fuera del texto original).

Resulta evidente que el suceso acaecido el 7 de febrero de 2003 tuvo como autor a un grupo terrorista al margen de la ley, sin que pueda atribuirse ninguna omisión que instituya un proceder culposo del Club el Nogal sino que, por el contrario, la actuación de las FARC-EP constituye la causa única y determinante del daño. La presencia del caso fortuito y la fuerza mayor, como causal eximente de responsabilidad, debe conllevar al *ad quem* a declararla acreditada, como en efecto lo está, con el acervo probatorio que obra en el expediente del proceso que ocupa nuestra atención en este memorial.

---

[33] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009. M.P. William Namén Vargas.

Las notas características de la noción de fuerza mayor son su irresistibilidad y su imprevisibilidad. Ciertamente, se afirma que se está ante un hecho constitutivo de esta causal de exoneración, cuando se verifica que dicho hecho ha sido imprevisible e irresistible.

5.1. El acto terrorista perpetrado era imprevisible.

La condición de imprevisibilidad de una causa extraña no se predica en el sentido que la ocurrencia de dicho evento fuera de impensable acontecer, sino que ello corresponde a un evento cuya ocurrencia es poco probable por escapar a la razonable previsión del acto en contra de quien se hace la respectiva reflexión.

En lo que se refiere al caso concreto, es claro que esta clase de atentados terroristas no solían estar dirigidos contra instalaciones privadas en Bogotá según se acotó previamente y quedó plenamente acreditado en el proceso, por lo cual este evento resultó totalmente sorpresivo para el Club, el país y el mismo Estado. Aunado a lo anterior, la posibilidad de realización de un atentado de esa naturaleza, así como el éxito del mismo, era bastante reducida en consideración a la ausencia de historial previo de la ciudad sobre atentados terroristas contra clubes sociales, amén de la seguridad disuasiva con que contaba el Club el Nogal para la época que, como varios testigos lo declararon bajo juramento, era muy superior a la que manejaban otros establecimientos de similares características, actividades y objeto. **Es más, debe tenerse especial consideración la circunstancia de que, de haberse descubierto la presencia de los explosivos al interior del vehículo en la entrada del Club, el siniestro no habría podido ser evitado y sus consecuencias habrían sido de mayor significación en vidas humanas, lesiones personales y de daño y destrucción material de las instalaciones del Club y de las construcciones vecinas. Sobre este particular deben tenerse en cuenta testimonios calificados expresados alrededor de esta hipótesis. Recuérdese que la explosión fue activada exteriormente por control remoto a los pocos minutos de haber ingresado el vehículo a la zona de parqueo del Club, con lo cual puede apreciarse también la irresistibilidad del atentado terrorista perpetrado conta El Nogal, entidad que nunca fue amenazada o advertida por persona u órgano alguno sobre actos delictuosos en su contra. Mucho menos de actos terroristas perpetrados por grupos organizados al margen de la ley.**

Resulta sencillo entender, con el empleo de la razón y el buen juicio resultante de la consideración y análisis del abundante material probatorio que obra en el expediente, que la ocurrencia de un atentado como el que tuvo lugar el 7 de febrero de 2003 en el Club el Nogal fue un evento imprevisible tanto para la demandada como para el propio Estado. No se puede partir del equivocado supuesto que, en virtud del deber general de conducta que se le atribuye al Club con base en sus estatutos sociales, debía prever cualquier posible hecho que afectara en menor o mayor medida la integridad de quienes se encontraban al interior de sus instalaciones, dejando de lado el elemento de razonabilidad a que se hizo mención precedentemente.

Justificar la supuesta previsibilidad del acto terrorista en el hecho consistente en que el Club El Nogal contaba con medidas de seguridad superiores a las de establecimientos sociales y comerciales similares, lleva a la absurda conclusión de que ser más diligente que los pares resulta ser un elemento adicional para facilitar una condena de responsabilidad civil. La conclusión, como es apenas obvio, debe ser diametralmente distinta: la persona diligente que desarrolla un estándar de

conducta superior al de sus pares tiene necesariamente una menor exposición a la responsabilidad civil y a la declaratoria de la misma.

A la luz de la tesis esgrimida por el *a quo* se generan incentivos perversos pues la falta de diligencia sería un elemento que permitiría alegar la imprevisibilidad con mayor facilidad. Tal enfoque, a la luz de nuestro criterio, es abiertamente equivocado y contradictorio.

Debe decirse con toda claridad: el atentado terrorista perpetrado por las FARC-EP el 7 de febrero de 2003 en contra de las instalaciones del Club El Nogal era imprevisible y ello se encuentra plenamente demostrado en el proceso.

5.2. El acto terrorista era irresistible.

Una de las características del atentado que permiten pregonar su irresistibilidad es justamente el alto nivel de sofisticación técnica y logística que emplearon las FARC para cumplir exitosamente la repudiable y espantosa tarea terrorista[34], infiltrando un miembro de su organización, desconocido como tal por las autoridades, como beneficiario de una acción corporativa y burlando las medidas de seguridad de El Nogal.

En adición a lo anterior, debe insistirse y reiterarse por su importancia que, de haberse detectado la bomba en la puerta de ingreso al Club y si la misma hubiese sido detonada en ese sitio, las consecuencias de daño en vidas humanas, lesiones personales y destrucción material habrían sido mucho mayores a las que tuvieron lugar ese funesto día. Lo anterior en tanto que en la portería de la carrera 5[35] se encontraban ubicados los depósitos de ACPM del Club, las calderas del edificio y

---

[34] Respecto de la conducta terrorista, la JEP, en providencia reciente, concluyó que el atentado terrorista contra las instalaciones del Club El Nogal constituye un crimen de guerra. Esta circunstancia y calificación demuestra que el hecho fue irresistible para mi representada, según se ha alegado desde el momento en que se contestó la demanda. Al respecto, puede tenerse en cuenta, entre otros apartes de la referida sentencia, los siguientes:

"61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad ***por constituir graves crímenes de guerra****…" (se destaca).*

"69. En consecuencia, el asunto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS será remitido al caso nro. 10 de la SRVR para que sea estudiado dentro de los patrones de conductas no amnistiables cometidas en la conducción de hostilidades y de aquellas agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos, las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, por las que fueron condenados los comparecientes en sentencia del 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ***y recalificadas preliminarmente para efectos de este pronunciamiento como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional*** *según el artículo 8.e.1) del Estatuto de Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000"* (se destaca).

- Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.

[35] Sitio por el que ingresó el vehículo cargado con explosivos camuflados que impedían su detección por el ojo humano y con elementos o productos que les fueron agregados para que el canino no pudiera olfatearlos.

las bielas de las habitaciones[36]. Por ello, en caso de que se hubiese detectado la bomba a la entrada del Club, no solo no se hubiera evitado la consumación del atentado terrorista, sino que el daño que este habría producido, se repite, habría sido de una magnitud mucho mayor.

Dado que desde el momento de ingreso del carro bomba al instante en que se produjo su explosión activada por control remoto[37] no transcurrieron más de cinco minutos, no existe duda para concluir la irresistibilidad del atentado terrorista pues la hipotética identificación del vehículo como un carro bomba no habría impedido su detonación y las mayúsculas consecuencias destructivas.

En suma, el concepto de fuerza mayor o caso fortuito se refiere a un evento irresistible e imprevisible que da lugar a una consecuencia dañosa desvirtúa el nexo causal en una determinada imputación de responsabilidad civil, lo cual inhibe al juzgador para declarar obligación indemnizatoria alguna frente a quien no tuvo participación en el acto o hecho que se alega como causante del perjuicio. Esto fue, precisamente, lo que sucedió en el caso de autos. En efecto, además de lo reseñado en acápites precedentes, existe suficiente material probatorio en el expediente que da cuenta de que el hecho del cual fue víctima el Club El Nogal fue irresistible e imprevisible.

Sin embargo, si por cualquier circunstancia no se encontrase demostrado el caso fortuito o la fuerza mayor, el perjuicio causado al demandante y a las demás personas que se encontraban en las instalaciones del Club no le es imputable a mi mandante sino a un tercero, por lo que respecto del Club el actuar de los terroristas, dada su irresistibilidad, constituyó un hecho exclusivo y determinante de un tercero[38], cuestión que rompe el nexo de causalidad y conlleva a la necesaria revocatoria del fallo de primera instancia.

5.3. Referencias probatorias que demuestran el reparo formulado bajo este acápite.

En suma, según se acotó previamente, el concepto de fuerza mayor o caso fortuito se refiere a un evento irresistible e imprevisible que da lugar a una consecuencia dañosa y que, por esa misma razón, desvirtúa el nexo causal en una determinada imputación de responsabilidad civil, con lo cual impide cualquier atribución de la obligación de indemnizar.

Pues bien, si se aplica lo anterior al caso de marras se encuentra que aquí concurren los elementos de la fuerza mayor. En efecto, además del reseñado en otros acápites,

---

[36] Al respecto pueden consultarse los testimonios de los ingenieros Alejandro Perez Silva y Luis Enrique García Reyes.

[37] El vehículo cargado con explosivos fue detonado por control remoto desde el exterior de las instalaciones del Club El Nogal, por lo que nada ni nadie habría podido intervenir para que no fuera accionado en el parqueadero o en la portería de acceso. De haberse producido la detonación en este último punto, el desastre hubiera sido de consecuencias muy superiores a las que lamentablemente acontecieron, según declaración rendida por Alejandro Pérez Silva (ingeniero civil, Magister Diseño en Ingeniería Civil, quien realizó los cálculos y diseño de la estructura y sede del Club El Nogal con su empresa Proyectos y Diseños Ltda.).

[38] A idéntica conclusión llegó el Consejo de Estado en la sentencia adoptada en relación con el atentado al Club el Nogal al disponer: *"Como no se probó omisión por parte de las autoridades en el deber de protección y, por el contrario, quedó probado que* ***esa acción armada contra el Club el Nogal era imprevisible e irresistible, se configuró el hecho exclusivo de un tercero****. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada"* (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque). (Las negrillas no son del texto).

existe suficiente material probatorio en el expediente que da cuenta de que el hecho enfrentado por el Club El Nogal era absolutamente irresistible e imprevisible –aspecto éste último frente al cual, en todo caso, ya se transcribieron varios testimonios que reflejan que no existían mayores elementos para prever que el atentado terrorista tendría lugar-. Dentro de tales pruebas cumple destacar las siguientes:

- El testimonio técnico rendido el 1 de febrero de 2005 por el Jefe de la Unidad de Explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señor Jairo Arturo Parra Cuadrado ante el Juzgado 13 Civil del Circuito. En esta prueba, el testigo fue elocuente al explicar el mencionado grado de sofisticación que utilizaron los terroristas para "armar" el carro bomba empleado en el atentado terrorista y la consecuente dificultad que se presenta en la detección de los explosivos, lo que hacía que el hecho fuera realmente irresistible. En ese sentido indica que:

  > **"PREGUNTADO No. 1:** Indíquele al Despacho cuál es su experiencia en el desarrollo de la labores de antiexplosivos o investigación de antiexplosivos? **CONTESTO**: Desde el año 85 me desempeño como técnico en antiexplosivos y son 19 años ejerciendo como técnico en desactivación y pos-investigación. **PREGUNTADO No. 2:** Dígale al Despacho si usted participó de las labores de pos-investigación que se llevaron a cabo con ocasión del atentado perpetrado en el CLUB EL NOGAL DE BOGOTA, el día 7 de febrero de 2003? **CONTESTO:** Sí, participamos como auxiliadores o colaboradores al grupo de explosivos del CTI, y a la fiscal que conoció el caso y nuestra labor fue tratar de desarrollar búsquedas de evidencias, fue por espacio más o menos de cinco días, y todo lo que se halló en ese lugar para tratar de identificar el tipo de artefacto, ubicación del mismo, y posibles autores, todo le fue entregado al CTI que fue quien continuó la investigación, y esa fue nuestra función de colaboración, pero no continuamos con la investigación (...). **PREGUNTADO No. 4:** Indíquele al Despacho en relación con el atentado en mención, qué tipo de información llegó a su conocimiento acerca de la modalidad del atentado, cantidad de explosivo utilizado u otros factores relacionados con él? **CONTESTO:** En la pos-investigación que se realizó se logró determinar que se trataba de un vehículo RENAULT MEGANE, en este momento no recuerdo bien el color, creo que rojo, ya que muchas de las partes del miso fueron encontradas esparcidas, y que posteriormente de haber escogido muchas de ellas, se llegó a ese tipo de conclusión, en cuanto a la cantidad de explosivo y sistema utilizado en el momento no pudimos determinarlo porque no teníamos los informes de laboratorio que nos indicaran los resultados del mismo, y así haciendo un cálculo de los daños podíamos llegar a calcular que cantidad aproximada se utilizó, se que el CTI continuó con la investigación y lograron obtener algunas trazas de explosivos, y creo que ellos determinaron la cantidad que se utilizó. PREGUNTADO No. 5: Indíquele al Despacho si de acuerdo con su experiencia como técnico anti-explosivos un vehículo RENAULT MEGANE cargado con 20 arrobas del explosivo ANFO presentaría alguna alteración física detectables a simple vista, cuando esta siendo ocupado por dos personas de talla normal. **CONTESTO: Si el vehículo presenta algunas caletas ubicadas en puntos estratégicos tales como espaldar, tableros de las puertas, espacio del mamparo contra incendios del vehículo, o sea, el espacio que hay entre el motor y la cabina del vehículo, no presentaría ningún tipo de anormalidad ya que tuvimos la oportunidad de atender un caso en el barrio SUBA donde se encontró un vehículo de similares características y a este le habían hecho una caleta en el espaldar de la silla trasera, que si no era analizada cuidadosamente no era de fácil detección. PREGUNTADO No. 6:** Al hacer referencia a alteración física en la pregunta anterior, me refería al hecho de que un vehículo de las condiciones descritas, cargado con 20 arrobas de explosivos, aun en las condiciones descritas por usted, no esta más cerca del piso que un vehículo que no contenga la carga en mención. **CONTESTO: Como lo dije anteriormente cuando se ubica en los puntos que describí el peso queda muy bien repartido y efectivamente alcanza a presentar un acercamiento hacía el suelo, pero que lo descubriría una persona que esté entrenada y que tenga algo de malicia y conozca el nivel normal de este tipo de vehículos; en cuanto a peso excesivo si se hubiese colocado en un solo**

punto si tendría que presentar ese tipo de acercamiento del chasis al suelo que sería de fácil detección. PREGUNTADO No. 7: Indíquele al Despacho hasta que cantidad del explosivo denominado ANFO es posible ubicar en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE, en los sitios que usted hizo referencia en respuesta anterior? **CONTESTO:** La verdad pecaría si le diera una cantidad exacta, ya que personalmente no hemos hecho la prueba de cuanto podríamos nosotros encaletar en estos sitios, pero imagino que estos si tuvieron esa cantidad a al cual el Doctor hace referencia, que supongo es la cantidad deben calcularlos expertos del CTI quienes fueron los que continuaron con la investigación, la debieron de haber tomado conociendo el dictamen del laboratorio, los elementos de prueba encontrados en el lugar de la explosión y cálculos efectuados por ellos mismos en un vehículo de similares características. **PREGUNTADO No. 8**: De acuerdo con su experiencia es posible ubicar veinte arrobas del explosivo conocido como ANFO en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE en los sitios en que usted indico en respuesta anterior sin que ello sea detectable a simple vista? **CONTESTO: Si es posible; en alguna ocasión, y estoy hablando de conocimiento propio, tuvimos un caso en donde un RENAULT CUATRO ubicaron en la parte de atrás y el cual fue desactivo afortunadamente 200 kilos de BENCLO, y realmente no es un espacio muy grande el que tiene un RENAULT CUATRO, por lo cual pienso que si es posible,** no se como tendrían ese carro ese día, porque en algunas modalidades que nosotros también hemos encontrado es que también acostumbran a rellenar las sillas, pero en el caso que hace referencia el Doctor que es el atentado al NOGAL no le podría yo afirmar que ese vehículo tenía esa cantidad ya que nosotros no continuamos con la investigación, pero si lo puede decir el grupo de explosivos del CTI quienes fueron los que culminaron la investigación. (...). En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien manifiesta: **PREGUNTADO No. 1:** Señor PARRA: en consideración a su experiencia y conocimiento técnico en materia de explosivo, podría usted ilustrar al Juzgado sobre los progresos en conocimientos, estrategia, y nivel tecnología de la FARC y ELN comparándolo con los inicios de estos grupos al margen de la ley en esa materia? **CONTESTO**: **Cuando yo me inicie en el campo de los explosivos en el año 85, teníamos bombas relativamente sencillas, las cuales eran ubicadas en puntos donde pudiesen hacer daño a organismos gubernamentales, y muchas de ellas eran bombas activadas mediante sistema in eléctrico, para hacer claridad al despacho me refiero a explosivo, una cápsula detonante in eléctrica, un pedazo de mecha lenta o de seguridad, y lo único que tenían que hacer era aplicar una chispa o fuego y dependiendo del largo de la mecha daban tiempo para retirase y colocarse en un punto de seguridad mientras la detonación, eran sistemas que no necesitaban de ningún tipo de tecnología, o utilizaban un reloj despertador bastante grande que en muchas ocasiones lográbamos nosotros desactivar debido a que le colocaban mucho tiempo; hoy en día utilizan ingenieros para realizar sus propias tarjetas para la activación de artefactos explosivos, para lo cual nos hemos visto obligados a capacitarnos mucho más para poder sobrepasar ese nivel y así lograr neutralizar ese tipo de elementos. PREGUNTADO No. 2:** Dada su participación en la investigación que se desarrollo por parte del DAS con posterioridad a la explosión del carro bomba en el club EL NOGAL, infórmele al Juzgado cuál fue el resultado que se obtuvo con ocasión de las pesquisas y delaciones de las personas capturadas con ocasión del mismo? **CONTESTO:** Lo que nosotros normalmente hacemos en estos casos es la parte técnica, la parte investigativa la realiza el grupo de seguridad publica y antiterrorismo; pero por lo que se adelantaba ese día se decía que era el mismo sitio donde se había preparado el carro para el atentado de EL NOGAL, y me estoy refiriendo al allanamiento efectuado en el barrio SUBA, donde se encontró un RENAUL MEGANE **con una caleta en la parte del espaldar de la silla trasera con un forro que lo hacía pasar como si fuera parte de la silla, al igual que el alojamiento normal donde va la batería había sido retirada de ahí y dejado ese espacio vacío que es a lo que yo hacía referencia cuando hablaba del mamparo contra incendios, y la batería que iba alojada ahí ubicada a un costado en la parte frontal del vehículo**, en cuanto a la investigación en si no la tenemos. **PREGUNTADO No. 3:** Quisiera preguntarle señor PARRA sobre qué influencia tienen los elementos de sorpresa e indefensión, entre otros, en el objetivo que

persiguen los delincuentes que pretenden colocar un carro bomba. **CONTESTO:** en cuanto a mi concepto personal y tratándose de un club donde imagino que existía un monitoreo de la entrada de los vehículos, donde imagino existían unos guías caninos en detección de explosivos, y donde si la persona que va a ingresar este tipo de elemento es concordial, efectivamente se le hace una revisión pero con la ventaja de que al ser socio, esa revisión no se tan exhaustiva y si el elemento o artefacto esta bien camuflado puede pasar desapercibido. **PREGUNTADO No. 4:** Qué grado de éxito tienen este tipo de acciones criminales a nivel nacional según la experiencia que usted ha tenido? **CONTESTO**: Yo pienso que un alto porcentaje por lo que anteriormente describí (...) **PREGUNTADO No. 6:** Dentro de la experiencia que usted ha tenido en el DAS en materia de atentados con explosivos, informe al Juzgado si conoce eventos de esta naturaleza perpetrados contra clubes sociales. **CONTESTO: <u>Contra clubes sociales no</u>**, o no recuerdo en este momento (...)" (resaltados nuestros).

- La declaración rendida el 7 de abril de 2003 por Alipio Murillo en el proceso penal adelantado con ocasión del atentado terrorista contra el Club el Nogal (Fl. 616-621 Exp. 2005-076), quien resultó involucrado en los hechos y el juicio criminal, cobra especial significación dado que el nombrado señor Murillo era propietario del taller en donde se armó el carro bomba. En su declaración, él narra cómo los terroristas utilizan ajo machacado mezclado con aceite para motores para esparcirlo y mezclarlo con el explosivo que fue encaletado en el carro bomba con el objeto de desviar el olfato de los caninos especialmente entrenados para esos efectos.

  "**PREGUNTADO:** Díganos si usted tuvo conocimiento o se pudo enterar que en su taller se hay preparado el carro Megane rojo que detonó en el Club Nogal. **CONTESTO:** Nunca. Si me hubiera enterado que iban a hacer eso de alguna manera lo hubiera informado a la policía. **PREGUNTADO:** Díganos si durante el tiempo que usted tuvo el taller en alguna oportunidad trabajó o manipuló pintura de color rojo, en caso afirmativo para que? **CONTESTO: <u>si claro</u>**, pintura roja se utilizó en el taller para arreglar una parte de un bus de servicio público, le arreglé el filtro de aire y lo pinté, no se de quien sería el bus, pero lo que si recuerdo es que cuando yo llegue de viajar que regresé al taller el 30 de diciembre había un tarrito con pintura roja, un rojo medio, ni muy oscuro ni muy claro, era un tarro de un cuarto, estaba un poquito mas de la mitad de lleno, **<u>otra de las cosas que encontré ajo molido con aceite</u>** y habían dos relojes pequeños de esos como despertadores, había uno que las dos manecillas estaban amarradas con un alambre de cobre muy finito y estaban paradas señalando las doce en punto, vi un poco de cosas, alambres, cintas, cables, esto me pareció muy raro y recogí todo lo bote a la basura, supongo que si el Megane estuvo allí en el taller le tuvieron que haber hecho solamente la caleta, porque me parece imposible que hubieran armado el carro incompleto con los explosivos desde diciembre para que después hubiera sido detonado en febrero. (...) **<u>PREGUNTADO: Usted nos ha dicho que encontró en su taller ajo molido con aceite, díganos si usted sabe o se enteró para que utilizan esta mezcla. CONTESTO: Se que esta mezcla de aja machacado con aceite se utiliza para despistar a los perros cuando hay droga o cuando hay explosivos, eso me lo confirmó HERMINSUL, cuando me lo encontré en la zona de distensión y me preguntó que si le había echado algo a la caleta de la chiva por dentro, yo le dije que no, él me dijo que machacara ajo con aceite o solo el sumo del ajo y le abriera unos dos huecos a la capota de la chiva y la impregnara con esto</u>**. [39] (Resaltados y subrayas nuestros)

- El conocimiento y experiencia de los terroristas sobre las condiciones especiales que se requerían para ejecutar su crimen sin que los explosivos fueran detectados por los caninos, quedó demostrado con el testimonio del

[39] Ampliación de la declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación por Alipio Murillo (radicado 59.535), rendida el (24) de abril del dos mil tres (2003). Obra en el expediente copia auténtica de la misma (folio 108 a 112 Cuaderno 1 y 341 a 346 del Cuaderno 1A Exp. 2003-712).

aludido señor Murillo y fue corroborado con la respuesta del 11 de mayo de 2005 de la Fiscalía General de la Nación al oficio 0315 del Juzgado 13 Civil del Circuito, como sigue:

> "En el numeral 2, solicita complementar la respuesta a la letra B, "que contando con un Buen entrenamiento del equipo cinofilo (guía y peno) en condiciones normales tiene que ser detectada a que la cantidad de sustancia es muy significativa", en el sentido de explicar:
>
> "A: ¿Que significa la expresión "condiciones normales". Esta expresión se utiliza para determinar las situaciones en que el equipo cinofilo puede operar normalmente, sin ser afectado por circunstancias como:
> **"- Que el vehículo no contenga ninguna sustancia que distorsione el olor del explosivo dificultándose su detección**.
> "- Que el canino esté en óptimas condiciones de entrenamiento y salud (moquillo).
> "- Que el canino este bien asociado para la detección de la clase de explosivo.
> "- Buena disposición y entendimiento por parte del guía.
> "- Periodo de trabajo del equipo.
> "- Método de registro del vehículo. (detallado o superficial) (...)". (*el destacado es nuestro*).

- En relación con la imprevisibilidad del hecho y, además, con la inexistencia de circunstancias anteriores que permitieran intuir la perpetración de un atentado terrorista –lo que también enerva cualquier imputación de negligencia-, es elocuente el informe rendido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fechado el 18 de diciembre de 2006 y remitido a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –incorporado al expediente del presente proceso en el folio 889 a 892 C1B Exp. 2005-176-. En dicho informe se indica que:

> "d) [En relación con] el original o copia auténtica de los informes o investigaciones que se hayan realizado con ocasión de la publicación del comunicado del 23 de diciembre de 2002, emitido por el estado mayor central de las FARC, y colgado en la página de internet (…) la subdirección de análisis en oficio DGIN.SANA.GIDR. No.274593, manifestó lo siguiente: 'Es de señalar que con referencia a este comunicado en particular, no se realizaron trabajos estratégicos debido a que al someterlo al proceso analítico de la información, los elementos de información obtenidos **no dejaron entrever posibles acciones terroristas que afecten el orden público, ya que son directrices de carácter general'.**
>
> (…)
>
> g) Informe si tenía conocimiento de la existencia de amenazas o indicios del atentado en contra del Club El Nogal de Bogotá, para los años 2002 a 2003. **El DAS no conoció por ningún medio sobre la existencia de amenazas o indicios del atentado en contra del Club El Nogal de Bogotá para los años 2002 a 2003**" (Fls.1006-1007 C1 2003-712).

- Finalmente, queremos llamar nuevamente la atención del Juzgado en el sentido de que los terroristas planearon cuidadosa la infiltración en el grupo humano que conforma el Club El Nogal, tal y como lo afirma la propia autoridad judicial en la Resolución de acusación de primera instancia proferida el 19 de julio de 2004 por la Fiscalía General de la Nación, confirmada posteriormente en segunda instancia (Cuadernos de copias remitidas por el Juzgado 8° Penal del Circuito).

> "10. Fue así como se dispuso para el designio criminal de toda la infraestructura financiera, logística especializada y de recurso humano, para cumplir con la actividad previa de crear una empresa "FACHADA" (INVERNAR—INVERNADEROS) por medio de la cual se lograra la infiltración (a través de la

compra de una acción corporativa) en el “OBJETIVO MILITAR” a atacar, aptos en el aprovisionamiento y la administración de recursos, tales como el transporte de dinero en efectivo, explosivos, acondicionamiento de vehículos con caletas, expertos en mecánica automotriz y apenas obvio con sofisticados conocimientos y adiestramiento en el manejo de explosivos; todo ello orquestado y dirigido por alias “OSCAR MONTERO” Ó “EL PAISA”, quien al ser aprobado el plan por el secretariado de las FARC, organizó el plan y lo supervisó a través de medios de comunicación como teléfonos satelitales y celulares.

“11. Otra inferencia extractable de la investigación, es que las FARC es amplia conocedora de la existencia en el mundo de un sistema invisible para financiar la logística de los actos terroristas (Hawala), conoce los espacios libres del sistema de prevención del lavado de activos en Colombia, de la misma manera que Mohammed Atta y Al Quaeda conocía los propios de los Estados Unidos. Este conocimiento le permitió a la citada organización ilegal, utilizar su sucio dinero para financiar el plan terrorista, de manera intangible para el sistema financiero Colombiano, evadiendo las luces rojas encendidas por la sospecha. Para su ejecución, los señores JHON FREDDY, OSWALDO, HERMINSUL y FERNANDO ARELLÁN, como pasos precisos para la ejecución del delito, conformaron a empresa “INVERNAR — INVERNADEROS”, con un capital social de $44’000.000.oo la cual fue debidamente registrada en Cámara del Comercio e incluso arrendaron y amoblaron un inmueble ubicado en la Avenida carrera 68 N°19-52, Of. 203, así como que suscribieron contrato para cumplir con su “FUNCIÓN SOCIAL” con la empresa FLORES ROSAMINA”, en Tabio (Cund.), por la suma de $56'768.315.oo; fachada que le permitió al primero de los nombrados, en calidad de representante legal de la empresa, comprar una acción en el Club El Nogal en septiembre de 2002, cinco meses antes de la explosión del coche — bomba (...), averiguación que no se pudo hacer ni prevenir sus consecuencias, porque el Club el Nogal no tenía la obligación legal de reportar a las autoridades la persona que adquirió de contado una acción por $40’000.000. Porque tampoco la empresa "AUTONAL" estaba en la obligación de referenciar a la misma persona que, bajo identidad y con documentación falsa, adquirió el Renault Megane usado para el atentado en dos contados de $19’000.000.oo en efectivo. El representante de ventas de este distribuidor de vehículos automotores OSCAR HERNANDO RODRÍGUEZ FONSECA, reconoció en esta investigación que ARELLÁN ZÚÑIGA y quien bajo otra identidad adquirió el Renault Megane Rojo donde se armó la bomba, son la misma persona.

- Otro aspecto que resulta de interés es que en el proceso se acreditó, además, que si el explosivo hubiera sido detectado en la portería del Club El Nogal por la que accedió el vehículo y, en consecuencia, detonado en dicho lugar, las consecuencias habrían sido aún peores. Al respecto son elocuentes las declaraciones de los ingenieros ALEJANDRO PEREZ SILVA y LUIS ENRIQUE GARCÍA REYES (Fl.316-319 C 1 Exp. 2003-712 y Fl. 321-325C 1 Exp. 2003-712), respectivamente:

  “PREGUNTADO SOBRE GENERALES DE LEY. CONTESTO: Es mi nombre ALEJANDRO PEREZ SILVA, me identifico con la C. C. No. 19.275.196 de Bogotá, tengo 49 años de edad, soy natural de Bogotá, casado, soy ingeniero civil, Magister Diseño en Ingeniería Civil, me dedico al cálculo y diseño de estructuras, trabajo con mi propia empresa PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA, resido en la Carrera 5 A No 108 A-55 Apartamento 404 de esta ciudad. PREGUNTADO. Conoce a la señora CATALINA ARANGO SALAZAR y a la menor CAMILA ARANGO ARANGO. En caso afirmativo diga como y cuando las conoció y que tipo de nexo tiene con las citadas. CONTESTO: No las conozco. PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: Sí, si he tenido nexos con la CORPORACION CLUB EL NOGAL, desde el año 1989 con lo que entonces era la PROMOTORA CLUB EL NOGAL, fuimos contratados para la ejecución del cálculo y diseño de la estructura y sede del CLUB EL NOGAL, posteriormente, en año 2003 a raíz del atentado terrorista de febrero fuimos contactados para realizar los diseños que requería la estructura averiada. Cundo (sic) digo fuimos me refiero a mi empresa. Actualmente soy socio,

a raíz de un canje o arreglo que hicimos con ocasión de los diseños de la reparación, soy socio del club desde, aproximadamente, agosto de 2003. Se deja la constancia de que trata el numeral 2° del Art. 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual CONTESTO: No conocí al señor JORGE ANDRÉS ARANGO. GÁRAVITO. La estructura, diseño de cimentación, columnas, vigas, entrepisos, diseño estructural, para efectos de realizar el diseño estructural, para ese entonces existía el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes Decreto 1400 do Junio 7 de 1984, el cual era de obligatorio cumplimiento para todos los diseños estructurales que se realizaran en el territorio nacional, desde luego el CLUB, mejor dicho la sede del CLUB, cumple con todos estos requisitos. Estos requisitos indican materiales a utilizar, dimensiones mínimas de columnas, vigas, entrepisos, espectro sísmico de diseño, detallado de la estructura, en fin, hicimos el trabajo siguiendo las normas del Código. Posteriormente durante la construcción del CLUB, asistimos a múltiples reuniones y comités durante la construcción del mismo con el objeto de aclarar dudas que se presentaron sobre los planos ejecutados por nosotros. (…)
PREGUNTADO. De acuerdo al diseño y estructuras de la construcción en la que se encontraba ubicado el CLUB EL NOGAL, para el momento de los trágicos acontecimientos del 7 de febrero de 2003, en su criterio, satisfacía las exigencias que hicieran previsible custodiar tanto la construcción como a los ocupantes que en cualquier momento se encontraran en sus instalaciones. CONTESTO: La estructura se diseño para cargas gravitacionales o verticales, para cargas provenientes de un sismo y para cargas de viento, empujes de tierras, pero no se diseño para un evento terrorista. En la actualidad, ningún código de construcciones a nivel mundial consagra hipótesis de carga provenientes de eventos terroristas o explosivos. (…)
Se concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de la demandada, concedida manifestó: PREGUNTADO POR LA MISMA: Informe al despacho de manera breve pero completa su hoja de vida profesional. CONTESTO: Soy ingeniero civil egresado de la universidad de los Andes en el año 1980 y Magíster en Diseño de ingeniería Civil de la misma universidad del año 1985 desde el año 1977, cuando cursaba mis estudios de ingeniería he estado dedicado al diseño de estructuras de concreto y acero parta edificios y puentes, desde el año 1977 hasta comienzos de 1984 trabajé para JAIME PABON CARRIÑO y COMPÁÑIA LIMITADA y desde 1984 a la fecha como socio de la firma PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA. Durante toda mi actividad profesional a lo largo de casi 30 años he estado dedicado a la consultoría de estructuras. PRFGUNTADO: En su declaración usted informa al despacho cual fue su participación como profesional experto en la ingeniería en el proceso de diseño estructural del CLUB EL NOGAL y mencionó brevemente su participación en el proceso de reconstrucción del mismo después de ocurrido el atentado terrorista el 7 de febrero de 2003. Podría precisarle al despacho con todo detalle su intervención en su calidad de ingeniero una vez ocurrido el atentado terrorista. CONTESTO: Desde el mismo día del atentado alrededor de las diez de la noche, fui contactado por las Directivas del CLUB con el objeto de inspeccionar de una manera breve y segura el estado de la estructura con posterioridad a la explosión. Hacía las diez y treinta de la noche llegue a las instalaciones me desplace con un equipo de bomberos y socorristas por la sede y rendí un informe en forma verbal en el cual establecía que la estructura del Club no estaba en peligro de colapso, pero que los daños ocasionados por la explosión habían roto muchísimas vigas, viguetas, placas de entrepiso y en general elementos no estructurales que podrían desprenderse en cualquier momento y causar daños a personas que estuvieran dentro de la sede en ese momento, por lo tanto mi recomendación fue de autorizar únicamente el ingreso de los socorristas al rescate de posibles heridos, teniendo en cuenta que no se disponía de luz natural ni luz eléctrica en ese momento. Posteriormente hicimos un inventario pormenorizado de los daños, una revisión detallada, unos diseños para efectuar la reparación de la estructura y un acompañamiento permanente durante la reconstrucción del Club. PREGUNTADO: En una respuesta anterior a una pregunta efectuada por el despacho, usted aludido que el área afectada en estructura del edificio era de 6000 metros cuadrado. Podría precisarle al despacho cuál era el área total de la estructura del edificio. CONTESTO: El edificio sede el CLUB consta aproximadamente de 34.000 metros cuadrados construidos. (…)

PREGUNTADO: Teniendo en cuanta (sic) la referencia a la que se encontraba el artefacto explosivo, es de público conocimiento que el carro bomba ingreso a las instalaciones del CLUB EL NOGAL, en su condición de experto infórmenos cuales habrían sido las consecuencias en pérdidas tanto materiales como de vidas humanas si el carro bomba no hubiera explotado al interior del parqueadero sino en la portería de acceso de vehículos ubicado en la carrera 5. **CONTESTO: Daños materiales y pérdidas de vidas humanas hubiera sido de una magnitud mayor, debido a la vecindad de los cuartos técnicos de la portería de la carrera 5 donde entro otros se encuentran ubicados los depósitos de ACPM. las calderas y bielas las habitaciones hoteleras que tiene el CLUB.** PREGUNTADO: Con base en la información a la que usted tuvo acceso personalmente momentos después de sucedido el atentado terrorista y durante los días subsiguientes al mismo en su intervención como ingeniero estructural del Club, podría informarle al Juzgado aproximadamente cuanto tiempo transcurrió entre el momento en que el carro bomba traspaso la portería de ingreso al Club y la explosión del vehículo. CONTESTO. **Creo que no fueron más de cinco minutos, entra por la carrera quinta, se parquea en el nivel cuarto, no tuvo que tomar rampas hacía niveles interiores, carreteos de cincuenta metros, supe eso por el sitio donde estaba el carro, lo del tiempo se sabe por los, registros de ingreso del carro y la explosión y la misma crónica periodística donde se relata que el personaje no había abandonado el parqueadero. (…)**" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En cuanto al testimonio del señor García Reyes:

"PREGUNTADO SOBRE GENERALES DE LEY CONTESTO: Es mi nombre LUIS ENRIQUE GARCIA REYES, me identificó con la C.C. No. 19.065.520 de Bogotá D.C, tengo 57 años de edad, soy natural de Bogotá, soy casado, **soy ingeniero civil de la universidad de los andes y tengo un master in science de la universidad de Illinois de Estados Unidos, ejerzo mi profesión**, resido en la Carrera 1ª NO. 75-14 Apartamento 201 de Bogotá. PREGUNTADO: Conoce a la Señora CATALINA ARANGO SALAZAR y a la menor CAMILA ARANGO ARANGO. En caso afirmativo diga como y cuando las conoció y que tipo de nexo tiene con las citadas. CONTESTO: No. PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO. Ninguno, fuímos los ingenieros diseñadores de la estructura del Club en su construcción original y realizamos los diseños de reconstrucción después del evento de febrero 7 de 2003. Soy socio de la firma PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA, firma que hizo estos trabajos. Tengo un socio creo que lo conocieron ayer, de resto son del orden de 60 empleados, quienes hacen diferentes labores de esta complejidad bajo la dirección de los socios, a la larga el que firma es uno. Se deja constancia de que se trata el numeral 2º del Art. 228 del C. de P.C. indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual CONTESTO: No conocí al señor JORGE ANDRÉS ARANGO GARAVITO. El inicio de la participación nuestra, hablo de la firma PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA. P Y D LTDA., en el proyecto del CLUB EL NOGAL, consistió en la realización de los diseños y planos estructurales de la edificación, lo que recurso es que iniciamos en el año ochenta y ocho y terminamos en el año noventa y uno. El diseño de la estructura se realizó cumpliendo los requisitos del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes Decreto 1400 de Junio 7 de 1984, el cuál era obligatorio en todo el territorio nacional en el momento del diseño inicial. La estructura es una estructura de concreto reforzado, está dividida en dos edificios, uno sobre la carrera séptima, que tiene once pisos y un sótano y una sobre la carrera quinta que tienen seis pisos y un sótano, las dos edificaciones están separadas con una junta (es un espacio de unos centímetros que separan una edificación de otra), la de la carrera séptima con respecto a la de la carrera quinta tienen una diferencia de quince metros y esta es la razón por la cual el primero piso de la edificación de la carrera quinta corresponde al cuarto piso de la edificación de la carrera séptima, por lo tanto todos los pisos inferiores del edificio de la carrera séptima están rodeados por un muro de contención que se encarga de sostener el empuje de la tierra de los lotes vecinos y del mismo edificio de la carrera quinta. Volviendo a los requisitos de diseño, es importante anotar que el edificio fue diseñado

sismorresistente para los requisitos del Decreto 1400 del ochenta y cuatro para la ciudad de Bogotá, lo cual requería diseñarlo para unas fuerzas horizontales causadas por el mismo del orden del veinte por ciento del peso de la edificación. El diseño sismorresistente, además, de dar resistencia ante estas fuerzas exige un detallado especial de la estructura que le permite resistir fuerzas en algunos casos mayores que las de diseño y la razón de esto es la incertidumbre que se tiene sobre la magnitud de los eventos sísmicos que realmente ocurren, **esto mismo tuvo consecuencias importantes en el comportamiento estructural observado a raíz del evento del 7 de febrero del 2003.** (…)hay informes elaborados por está firma que da recuento de todas las actividades realizadas durante la construcción de la estructura, incluyendo registro de los ensayos de control de calidad de los materiales utilizados, avance semanal de la construcción e inclusive un registro fotográfico de este avance, ellos producían un informe por cada mes de la construcción, esta misma firma, interplan Ltda., recibió de los constructores la estructura a satisfacción respecto al cumplimiento de los planos y especificaciones elaborados por PYD LTDA. A raíz del incidente del 7 febrero del 2003, fuímos llamados por el CLUB EL NOGAL, para hacer una evaluación del estado de la estructura y los diseños de la reparación, para llevarla a un estado de seguridad equivalente al que tenía antes del incidente. En ese momento no estaba en el País, pero presumo que fue ese día. Para el efecto se desplazó un equipo de ingenieros de la oficina que realizó un levantamiento detallado de las afectaciones causadas por la explosión por medio del cual se logro hacer una evaluación que esto tuvo en la seguridad de la estructura y que consistió en la base de los diseños de la reconstrucción. (…)
PREGUNTADO: En su condición de experto en la materia, informe al Juzgado cuales habrían sido las consecuencias en perdidas de vidas humanas, lesiones personales y daños a la edificación CLUB EL NOGAL y a los edificios vecinos en hipótesis en que carro bomba no hubiera explota en el interior del parqueadero del Club, sino en la portería de acceso de vehículos ubicada en la carrera quinta del dicha edificación **CONTESTO: la honda explosiva del atentado afecto hacía los pisos por encima y por debajo de donde estuvo ubicada. La rampa de acceso de vehículos de la carrera quinta del CLUB EL NOAL, esta sobre el terreno, lo cual en el caso de una explosión hubiera hecho que le energía se extendiera con mayor intensidad en todas las otras direcciones, en la vecindad de la portería de acceso vehicular de la carrera quinta como estaba al momento de la explosión es aledaña al sótano de servicios del edificio de la carrera quinta donde esta localizado a muy pocos metros el tanque de combustible de la caldera, separado únicamente por un muro muy delgado de mampostería, el efecto combinado de la explosión con el combustible aledaño es probable que hubiera producido mayor número de víctimas por un efecto de incendio colateral a la explosión alimentado por el combustible de la caldera.”** (los destacados no son del texto).

Así las cosas, si en gracia de discusión se admitiese el supuesto hipotético, contrario a la evidencia probatoria existente en el expediente y a la cual nos hemos referido precedentemente, de que los vigilantes encargados del ingreso vehicular al Club hubieran podido detectar en la portería respectiva los explosivos escondidos en el carro bomba, no es dudoso que el atentado terrorista tampoco habría podido evitarse y muy posiblemente habría causado aún más destrozos y daños en las personas y cosas, dada la cercanía del depósito de combustible y la caldera existente en las instalaciones del club en ese sitio de acceso, y a que no transcurrieron más de cinco minutos desde el ingreso del vehículo al Club y la explosión del mismo que fue accionada por control remoto (como la propia parte demandante y sus apoderados lo afirman en la demanda), mínimo lapso que no permitió siquiera que los autores materiales del ilícito escaparan con vida. Con esto queda plenamente demostrada la irresistibilidad del hecho.

De todo lo antes expuesto resultan evidentes las siguientes conclusiones:

- Que no existe un nexo causal entre el daño y la conducta observada por el Club, por lo cual puede afirmarse que éste no infirió daños a los

demandantes, en los términos y para los efectos del artículo 2341 del Código Civil.

- Que el perjuicio causado al demandante y a las demás personas que se encontraban en las instalaciones del Club no le es imputable a mi mandante sino a un tercero, por lo que respecto del Club el actuar de los terroristas, dada su irresistibilidad e imprevisibilidad, constituyó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, también en los términos y para los efectos de los artículos 63 último inciso, 64 y 1604 del Código Civil colombiano.

5.4. La causa extraña ya fue reconocida judicialmente.

Aunque lo indicado en las líneas precedentes es más que suficiente para revocar la decisión de primera instancia, no debe perderse de vista que la causa extraña ya ha sido reconocida judicialmente. En efecto, el asunto fue resuelto de forma definitiva por el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, en la que se reconoció que el atentado obedeció a un hecho exclusivo de un tercero:

> *"El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible.*
>
> *"El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración.*
>
> *"Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios. Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general*. …
>
> *"No se allegaron pruebas -conforme a lo probado- que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, hoy pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios.*
>
> *"El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones de orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su*

capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo"[40].

Lo anterior confirma que en el presente caso nos encontramos en presencia de una causa extraña que rompe cualquier nexo de causalidad en la inadecuada imputación de responsabilidad que se le ha efectuado al Club El Nogal. Si el Estado no es responsable por los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003, mucho menos puede considerarse que el Club el Nogal, como particular que es, tuviera la obligación de repeler la agresión y evitar sus consecuencias destructivas y de intencional daño cuando el mismo Estado no se encontraba en el deber ni en la capacidad de prevenirlo o reprimirlo.

Según se expresó previamente, no puede equipararse el deber constitucional de seguridad en cabeza del Estado, quien detenta el monopolio del ejercicio de la fuerza y la obligación de proteger a la ciudadanía con el deber propio de una entidad de derecho privado destinada a labores sociales y deportivas. Resulta a todas luces desproporcionado endilgar a mi representada la obligación de anticipar y reprimir cualquier ataque terrorista que pudiese presentarse, máxime considerando que dicha pretensión no es exigible ni al mismo Estado, como lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia del 30 de marzo de 2022[41].

Es más: en reciente providencia la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el atentado terrorista cometido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club El Nogal constituía un crimen de guerra, todo lo cual refuerza que el hecho del tercero se configura como causa extraña para el análisis del caso que nos ocupa. Al respecto, la JEP manifestó lo siguiente:

"41. (…) la explosión ocurrida el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá fue planeada y realizada por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Es así como luego de examinar los elementos de juicio vertidos en el proceso, el juzgador concluyó que "está demostrado que el secretariado de las FARC (sic) [ordenó] el atentado contra el club El nogal, conducta que fue planeada y dirigida por el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', quien era el enlace directo con la dirigencia del grupo alzado en armas". Conforme a esta conclusión el juzgador estableció que "los miembros del secretariado de las FARC (sic) tuvieron conocimiento y voluntad de los resultados típicos que se ocasionaron […] pues contaban a su disposición con la columna móvil 'Teófilo Forero' la cual había preparado hombres con conocimiento en explosivos y con la firme convicción de realizar atentados terroristas. …

"42. Conforme a lo anterior, es posible para este despacho advertir que el conflicto armado fue la causa directa o indirecta de esta conducta punible ocurrida el 7 de febrero de 2003, que este contexto influyó en los autores, en su decisión de cometerla, en la capacidad para hacer el atentado y en la selección del objetivo…

"44. De acuerdo con el literal a del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no podrán ser objeto de amnistía, entre otros, aquellas conductas consideradas graves crímenes de guerra. Por ello, en este caso se pasará a realizar un examen de la conducta en la que participaron HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a la luz de los principios del Derecho

[40] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque.

[41] Téngase en cuenta, adicionalmente, que los señores Julio Martín Otálora Cano, Luz Constanza Prado Restovich, Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado participaron en el referido proceso judicial fallado por el Consejo de Estado, cuestión que refuerza el hecho consistente en que el atentado terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003 tiene su causa en el hecho del tercero, razón por la cual no resulta jurídicamente viable, como tampoco aceptable, desplazar la responsabilidad en cabeza del Club El Nogal por estos hechos.

Internacional Humanitario (DIH) con el propósito de verificar si es viable continuar con el trámite de amnistía o es necesario declarar su no amnistiabilidad, al menos de forma preliminar. El DIH es el marco jurídico que regula la conducta de las partes que participan en hostilidades y la protección a las personas y bienes que no participan en ese escenario.

"45. En primer lugar, se analizarán los principios de distinción y precaución en el caso concreto y, en segundo lugar, se hará un examen del ataque en contra del Club el Nogal a la luz de la prohibición de ataques indiscriminados por el Estatuto de Roma y las normas del DIH compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"46. En lo que refiere al primer asunto, se tiene en cuenta que el principio de distinción constituye un fundamento del DIH. A este principio se refieren las primeras normas de DIH compiladas por el CICR, así la Norma 1 indica que "[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados".

"47. Este principio se ha consagrado en normas de los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo Adicional II 1977 a estos convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13 reglamenta la protección general de la población civil respecto de operaciones militares y establece "[n]o serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".

"48. Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8.2.e).i) consagra como crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales el "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.". En ese orden, los ataques permitidos en el marco del DIH deben dirigirse exclusivamente en contra de objetivos militares; así lo consagra la Norma 7 del DIH del CICR. Al respecto, la Norma 8 del DIH indica que los bienes que pueden ser considerados objetivos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida".

"49. En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil. …

"61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad ***por constituir graves crímenes de guerra…"***[42] *(se destaca).*

[42] Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.

En fin, como se verá también en el siguiente reparo, existen múltiples decisiones judiciales que, con razón, han descartado la responsabilidad en cabeza del Club El Nogal, todo lo cual se ve reforzado con las recientes providencias emitidas por el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), citadas precedentemente.

Sobre el particular, me permito transcribir a continuación lo señalado por el Dr. Jorge Santos Ballesteros en su concepto jurídico, en relación con esta temática:

> *"5.11. En este asunto, es ineludible y debe tenerse en cuenta, la sentencia del Consejo de Estado, de 30 de marzo de 2022, de la Sección Tercera Subsección C, que al decidir una acción de reparación directa conta la Nación Ministerio de Defensa, por el ataque terrorista contra el Club El Nogal del 7 de febrero de 2002, absolvió a las demandadas, por encontrar plenamente acreditado el hecho del tercero, las FARC, sin dubitación alguna; en efecto, a juicio de esa Alta Corporación de Justicia, 'El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible. El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración. Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios. Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general.'*
>
> *"También, según esta sentencia, 'No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios. El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo'*
>
> *"5.12. Igualmente, para efectos de determinar la causa del hecho dañoso en cuestión, hay que considerar igualmente que la Sala de Amnistía e Indulto, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en sentencia de 24 de agosto de 2023, considera*

que, 'En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal37 de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil.'. Así mismo, determina esta sentencia que , 'Además de las graves violaciones a los principios de distinción y precaución del DIH, el ataque perpetrado en el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 fue parte de una política de las antiguas FARC-EP, según lo estableció la JPO. Al respecto, se debe señalar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional castiga los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes'. En este instrumento internacional, se entiende por graves violaciones al artículo 3 común a los cuatro Convenios de ginebra de 1949, entre otros, "[l]os atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura"; asimismo, se castigan como "otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional", (art. 8.e.i) "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades'

"5.13. De acuerdo con lo expuesto, entonces, no puede ponerse en duda que, el ataque terrorista contra el Club El Nogal, para todos los efectos, debe considerarse como hecho de un tercero, perpetrado por las FARC, y no puede ser desconocido por ninguna jurisdicción, pues de hacerse rompería con la preceptiva, entre otros, de la obligatoriedad de respetar el precedente judicial, consagrado en la Constitución Política, y respecto del cual, vale decir, que la Corte Constitucional lo ha definido en reiteradas oportunidades, como "la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo" .

"Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares. Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.'[43]"

6. <u>SEXTO REPARO</u>: DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTES JUDICIALES.

Rememórese que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado sobre un caso relacionado con el atentado terrorista del que fue víctima el Club El Nogal, concluyendo que mi mandante no era responsable frente a tales

[43] Sentencia U- 354 de 25 de mayo de 2017.

hechos. Es más, el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, reconoció que el atentado obedeció a un hecho exclusivo de un tercero y que no podía imputársele responsabilidad al Estado por dicho hecho. Si ello es así, mucho menos puede considerarse que el Club el Nogal, como particular que es, tuviera la obligación de repeler la agresión y evitar sus consecuencias destructivas y de intencional daño cuando el mismo Estado no se encontraba en el deber ni en la capacidad de prevenirlo o reprimirlo. Al respecto también podrá tenerse en cuenta lo indicado por el Dr. Jorge Santos Ballesteros en el concepto que se aporta como parte de la presente sustentación y que fue citado en el reparo inmediatamente anterior, cuya cita empleada precedentemente debe entenderse también incorporada bajo este reparo.

Debe señalarse que la Corporación Club el Nogal interpuso acción de tutela contra la sentencia SC4427 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia del 29 de agosto de 2014 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, la cual fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y se encuentra pendiente de decisión.

Dicho sea con todo respeto y comedimiento, la referida sentencia SC4427 de 2020 tiene un enfoque abiertamente equivocado, incurriendo así en i) desconocimiento del precedente horizontal y vertical de la jurisprudencia civil ordinaria sobre la materia; ii) defecto sustantivo y iii) defecto fáctico.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que ya varias sentencias han coincido en cuanto a la absoluta inexistencia de responsabilidad de la Corporación Club El Nogal por los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003. Ciertamente, en otras demandas impetradas por esta misma circunstancia, los jueces de primera instancia e incluso el Tribunal Superior de Bogotá, han coincidido al concluir que la actuación de mi representada frente a los mencionados hechos, en modo alguno fue constitutiva de negligencia. También han señalado que no existe prueba de la relación causal, lo que enerva cualquier pretensión de responsabilidad.

- Proceso de Leonor Cruz de Caicedo vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2005-281. Tribunal Superior de distrito Judicial de Bogotá Sala Civil MP. Germán Valenzuela Valbuena.

El Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito, determinando que por más que los atentados del 7 de febrero de 2003 constituían una causa extraña -con todas las implicaciones que esto conlleva-, no se vislumbra en el proceso negligencia alguna por parte del Club. En este sentido se pronunció en los siguientes términos:

> "En cuanto al segundo de los presupuestos (de la responsabilidad), debe advertirse que en el presente juicio no es posible establecer la existencia de una conducta negligente atribuible al Club en los precisos términos indicados por la parte actora en su demanda, pues no se acreditó que la muerte de Cesar Augusto Caicedo Cruz fuera consecuencia de no haberse implementado por el Club las medidas necesarias para proteger a 'los socios e invitados' de cualquier situación que amenazara su integridad personal. **Por el contrario, debe decirse que, en los términos del art. 1° de la ley 95 de 1890, los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003 configuraron una situación imprevista que de manera alguna era posible de resistir, lo que en efecto constituye una causa extraña, sustentada en 'fuerza mayor o caso fortuito', que le permite al Club el Nogal exonerarse de la responsabilidad que se le quiso atribuir**" (se destaca).

- Proceso de Álvaro Ruiz León y otros vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2004-643. Tribunal Superior de distrito Judicial de Bogotá Sala Civil MP. Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano.

En este caso, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que dentro del respectivo proceso no obra prueba alguna de negligencia por parte del Club El Nogal y, por el contrario, se evidencian una serie de medidas más que óptimas y eficientes para el mantenimiento de la seguridad en las instalaciones de mi representada, de sus socios e invitados. Dijo el Tribunal:

> "Luce diamantino de lo expuesto, que no se evidencia negligencia de aquellas que constituya el elemento culpa como quiera que no se probó que el sistema de seguridad del Club El Nogal fuese inferior al que debe prestar no se omitió el deber de cuidado exigido al momento de inspeccionar el vehículo. De tal manera, no es posible predicar responsabilidad del agente que aún ajeno a la causación del daño, omite actuar teniendo la obligación legal o contractual de hacerlo, pues como se demostró si se contaban con los elementos necesarios para la seguridad de sus socios y sus invitados"

- Proceso de Leonor Cruz de Caicedo vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2005-281. Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.

El Juzgado 19 Civil del Circuito, por su parte, exoneró totalmente de responsabilidad al Club luego de hacer un análisis cuidadoso de todo el acervo probatorio, de donde concluye el diligente actuar de la demandada, así como, la ausencia de prueba frente a la supuesta negligencia que en las respectivas demandas se le pretendía endilgar. Dice la sentencia:

> "(…) encuentra el Despacho que el demandante, en absoluto, pudo acreditar su reclamo, esto es, no logró probar los supuestos hechos invocados como fundamento de las pretensiones, así como tampoco, uno de los presupuestos de la acción –la culpa del demandado-…
>
> "En lo que concierne a la presunta falla de El Club El Nogal, para las vísperas de la explosión, encuentra el despacho que le competía al extremo demandante demostrar los supuestos de hecho en que fundaron sus pretensiones, es decir, les incumbía acreditar, a través de cualquier medio probatorio idóneo para atribuirle culpa a la Corporación demandada, por el atentado terrorista que aconteció en sus instalaciones, circunstancias que no se reconocieron por ninguno de los medios probatorios establecidos."
>
> Y posteriormente resalta: "A guisa de antecedente, debe advertirse que el referido acto terrorista responde a las condiciones de ser imprevisto e irresistible, porque el acontecimiento no era susceptible de ser humanamente previsto".

- Proceso de Rodrigo Márquez Tejado vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2005-094. Juez 20 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá.

Este despacho estableció que no hay vestigio de culpa por parte de El Nogal, estableciendo a su vez que:

> "En cuanto al segundo de los elementos atrás señalados, o sea, el elemento de culpabilidad o dolo, de que se inviste la conducta desplegada en la producción del daño, puede señalarse que, si bien es cierto la seguridad estaba a cargo de la

pluricitada entidad, no por ello se le puede endilgar culpa alguna frente al acto terrorista perpetrado por las FARC, más aun cuando conforme a la documental adosada aparece el contrato de prestación de servicios con la compañía de seguridad ATEMPI LTDA, igualmente con la sociedad CANINOS PROFESIONALES LTDA, la que contaba con perros antiexplosivos, esto es, la administración obraba diligentemente frente a tal aspecto, contrario a lo señalado por los actores".

- Proceso de Mónica Cecilia Echeverry vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2006-402. Juez 1 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá.

En esta oportunidad, el despacho judicial también absolvió de responsabilidad al Club El Nogal e indicó lo siguiente:

"4.4. Conforme con lo anterior, es evidente que la parte actora no logró demostrar la culpa que enrostra a la demandada en los términos expuestos en la demanda, mucho menos, que el daño que aduce se le causó haya sido como consecuencia de un actuar negligente por parte de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL en el cumplimiento de sus deberes de protección, seguridad y vigilancia el 7 de febrero de 2003, data en la que se le accionó un carro bomba dentro de las instalaciones del club y por medio de la cual se produjo el deceso fatal de …, entre otras víctimas mortales y lesionados".

"…

"4.4.4. Así las cosas, para el juzgado es Claro que la demandante no logró demostrar el actuar negligente y culposo que le achacó a su antagonista, para lo cual, recuérdese que el artículo 1757 del Código Civil presenta la regla general según la cual '[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta', principio que encuentra correspondencia en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil al señalar que '[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen', recordándose en este punto que, le correspondía al extremo activo acreditar los hechos en que fundó su acción; empero, valorando en su conjunto el material probatorio recaudado, diáfanamente emerge que no satisfizo ese deber y por ende, no pueden atenderse las súplicas reclamadas en el libelo demandatorio".

En consecuencia, para preservar, entre otros, el principio de igualdad de raigambre constitucional debe declararse la ausencia de responsabilidad de mi representada por los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003 y, en consecuencia, revocarse la sentencia de primera instancia.

7. <u>SÉPTIMO REPARO</u>: INDEBIDA VALORACIÓN Y CÁLCULO DEL PERJUICIO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE.

La valoración del perjuicio en la modalidad de lucro cesante fue indebidamente calculada por el *a quo*, razón por la cual, en el evento en que se confirme la sentencia de primera instancia, el mismo deberá ser objeto de disminución, según se expone a continuación.

7.1. En cuanto al lucro cesante de Catalina Arango Salazar y Camila Arango Arango.

El *a quo* se equivocó al realizar el cálculo pues no tuvo en cuenta los siguientes factores:

- Debe destacarse que a las demandantes les fue reconocida pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Jorge Andrés Garavito, por valor mensual de $5.741.098, según se observa en la certificación del 7 de julio de 2009 expedida por la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con la que se anexó el reconocimiento correspondiente fechado el 13 de mayo de 2003 (Fls. 1159 a 1161 Exp. 2005-076). Así mismo, en el interrogatorio de parte se reconoció lo propio al responder la pregunta No. 3 formulada en la diligencia practicada el 27 de octubre de 2005.

- En adición a lo anterior, debe acotarse que los ingresos laborales del Sr. Arango Garavito se otorgaron en la modalidad de salario integral. Frente a esto debe precisarse que, de conformidad con lo preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo, un 30% de dicho monto corresponde a la carga prestacional[44], por lo que, en el remoto evento en que H. Tribunal Superior de Bogotá confirme la declaratoria de responsabilidad en cabeza de mi representada, deberá descontarse dicho porcentaje del ingreso para efectos de adelantar el cálculo matemático.

- Adicionalmente, debe efectuarse una deducción del 25% correspondiente a la presunción de gastos personales del fallecido.

Por lo anterior, en el evento en que se confirme la sentencia de primera instancia, el *ad quem* deberá ajustar el cálculo con las deducciones mencionadas.

7.2. En cuanto al lucro cesante de Luz Constanza Prado e hijos.

Una vez revisada la sentencia de primera instancia se denota que esta incurrió en un error al tomar como salario base para el cálculo del lucro cesante el valor de $15.801.842 (valor incluso superior al que se establecía en la certificación laboral expedida por Point de Colombia LTDA), en tanto la certificación laboral indica que *"El señor SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ SALAME identificado con cédula de Ciudadanía No 19.480.886 trabajo en esta compañía desde el 1 de Noviembre de 2002, al 7 de febrero de 2003 desempeñando el cargo de GERENTE DE VENTAS, devengando un salario integral mensual de $15.212.500".* Lo anterior evidencia que, esta certificación no resulta demostrativa de que el señor Muñoz Salame recibiera un ingreso cierto, periódico y constante en tanto únicamente da cuenta de una vinculación laboral de apenas 3 meses. Además, se trata de un salario integral, por lo cual se entiende que por estipulación expresa de la normatividad laboral[45] el 30% de dicho concepto corresponde al factor prestacional y un 70% al factor salarial propiamente.

De igual manera, junto con la demanda se aportaron las certificaciones de ingreso y retención en la fuente del señor Muñoz Salame cuando se encontraba vinculado a la empresa Point de Colombia Ltda de los años 2002 (1 de enero al 31 de diciembre) y 2003 (1 de enero al 28 de febrero), señalando como monto anual de los salarios las sumas de $30.425.000 y $26.339.988, respectivamente. Lo anterior confirma que el supuesto ingreso 15 millones mensuales no corresponde con la

[44] Al respecto el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo indica: "*En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía […]".*

[45] El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo indica: "*En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía […]".*

realidad. Además, se aportaron las declaraciones de ingresos y retenciones del señor Muñoz Salame de los años gravables 1997, 1998, 1999 y 2000 de la empresa Proficol S.A., arrojando ingresos anuales totales (gravables y no gravables) de $21.259.488 (promedio mensual de $1.771.624); $40.142.620 (promedio mensual de $3.345.218), $74.227.430 (promedio mensual de $6.185.619) y $92.305.163 (promedio mensual de $7.692.096), respectivamente.

La cifra empleada por el *a quo* tampoco coincide con las declaraciones de renta del señor Muñoz Salame para los años 2001 y 2002[46], en tanto, si se compara esta cifra con la reportada como "salarios y demás ingresos laborales" para el año 2001 tuvo un total de $101.243.000 que arrojaría un promedio mensual de $8.436.916, cifra muy inferior a la tomada por el *a quo*. Lo propio ocurre al revisar la declaración de renta relativa al año 2002 la cual en el mismo rubro de salarios y demás ingresos laborales señala un monto de $133.079.000, lo cual daría un promedio mensual de $11.089.916, se reitera, cifra también muy inferior a la aplicada en primera instancia.

De otro lado, no debe dejarse de lado que en la demanda se confesó de forma expresa que monto de los gastos de manutención del señor Muñoz Salame correspondía al 40% de su salario[47] y no al 25% como fue empleado equivocadamente en la sentencia de primera instancia.

Otro aspecto que debe señalarse consiste en que la señora Luz Constanza Prado y sus dos hijos perciben pensión de sobrevivientes concedida por el Seguro Social[48], mediante resolución No.0449 del 11 de agosto de 2003 (fls.944-951). Esta pensión se deriva del sistema de riesgos profesional, como quiera el deceso del señor Muñoz Salame se presentó en el marco de un accidente de trabajo. Pues bien, las cuantías de estas pensiones deben ser descontadas de los respectivos ingresos base de liquidación que se emplean para tasar el lucro cesante de cada reclamante, teniendo en lo previsto por el artículo 12 del decreto 1771 de 1994. Los pagos derivados del sistema de riesgos profesionales no pueden ser acumulados con otras fuentes, en virtud, entre otras, de la existencia de subrogación señalada en dicha norma, por lo que su deducción del ingreso debe ser realizada. Al respecto, habrá de tenerse en cuenta que la cifra reconocida en favor de Luz Constanza Prado fue de $2.216.447 (folios 941), Felipe Muñoz Prado $1.108.271 (folio 942) y Juana Muñoz Prado $1.108.271 (folio 942), todo lo cual debe descontarse de un eventual cálculo de lucro cesante.

Por lo anterior, en el remoto evento en que el H. Tribunal considere que le asiste algún tipo de responsabilidad a mi representada y se acceda a la condena por el monto del lucro cesante para estos demandantes (que no resultaría procedente por los argumentos dados a lo largo de esta sustentación), no podrá utilizarse la base salarial que fue empleada en primera instancia, sino que la misma deberá descontarse conforme a las declaraciones de ingresos y retenciones, sus declaraciones de renta, la connotación del salario integral, el monto real de gastos propios del señor Muñoz Salame (40%, según fue confesado en la demanda) y los montos de pensión que fueron concedidos en favor de los demandantes.

---

[46] FL. 28-29 Exp. 2005-176.

[47] Fl. 495 Exp. 2005-176.

[48] Lo que también fue reconocido en el marco de la diligencia de interrogatorio de parte desarrollada el 2 de agosto de 2006 (preguntas 4 y 5, folio 809).

IV. ANEXOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS COMO PARTE DE LA SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN.

Como parte de la sustentación de los reparos presentados en contra de la sentencia de primera instancia y para que sean considerados y tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Bogotá en la decisión de segunda instancia, nos permitimos anexar los siguientes documentos:

1- Providencia proferida por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque
2- Providencia proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.
3- Concepto del exmagistrado del la Sala Civil de la CSJ, tratadista de responsabilidad y profesor universitario en la materia por varias décadas, doctor Jorge Santos Ballesteros, fechado el 7 de septiembre de 2023.

V. SOLICITUD

De conformidad con lo expuesto a lo largo del presente escrito, de manera respetuosa solicito que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de las demandas que dieron inicio a los procesos acumulados de la referencia.

Notificaciones y comunicaciones electrónicas: gpardo@spjlaw.com y también epardo@spjlaw.com

Del Tribunal, con toda atención y respeto,

GABRIEL PARDO OTERO
CC. # 437.570
T.P. # 12.938 C. S. de la J.

Nota: En virtud de lo preceptuado por el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022, el presente memorial no requiere de 'firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos'.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00440-01(65853)

Actor: JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

COMPETENCIA DEL SUPERIOR-Se decide sin limitación por apelación de ambas partes. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. ORDEN PÚBLICO-El Presidente como jefe de las Fuerzas Armadas dispone de la fuerza pública y conserva en todo el territorio nacional el orden público. FUERZA PÚBLICA-El gobernador es agente del Presidente de la Republica para mantener el orden público. FUERZA PÚBLICA-El alcalde conserva el orden público del municipio según la ley y las instrucciones del presidente y del gobernador. DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-No es absoluto pues el Estado no es un asegurador general. DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-Debe tenerse en cuenta la capacidad de las autoridades públicas. ACTOS TERRORISTAS DIRIGIDOS DE FORMA INDISCRIMINADA CONTRA LA POBLACIÓN-Para responsabilizar al Estado se requiere de solicitud de protección o que las condiciones de orden público permitan concluir la ocurrencia del hecho y el Estado tenga la capacidad de detener el ataque. ACTOS TERRORISTAS DIRIGIDOS EN FORMA INDISCRIMINADA CONTRA LA POBLACION-Falla relativa del servicio. FALLA DEL SERVICIO RELATIVA-El Estado no es un asegurador general contra daños. RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN EN ACTOS TERRORISTAS-Falla relativa del servicio. ATENTADOS TERRORISTAS-Improcedencia de imputación por daño especial o riesgo excepcional. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS- Valor probatorio de los documentos privados de contenido declarativo, art. 277.2 CPC. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. HECHO DEL TERCERO-Causal de exoneración de responsabilidad. IRRESISTIBILIDAD E IMPREVISIBILIDAD-Concepto. ATENTADOS TERRORISTAS-Hecho exclusivo y determinante de un tercero. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe

La Sala, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 que adicionó el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 9 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de febrero de 2003, las FARC explotó un «carrobomba» en el cuarto piso del Club El Nogal en la ciudad de Bogotá. Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio

Alejandro Muñoz Salame murieron como consecuencia de la explosión. La parte demandante alega omisión en el deber de seguridad y protección, pues existían indicios que permitían prever un atentado contra ese club.

ANTECEDENTES

Proceso nº. 2005-00440: El 4 de febrero de 2005, Julio Martín Otálora Cano, a través de apoderado judicial, formuló **demanda de reparación directa** contra la Nación-Ministerio de Defensa y otros. Solicitó $1.165.699.471 por daños materiales, 100 SMLMV por daño moral y lo que resultara probado por daño en la vida de relación y por vulneración de los «bienes de su personalidad» Pidió que se declarara que el atentado violó derechos constitucionales.

Proceso nº. 2005-00449: El 4 de febrero de 2005, Luz Constanza Prado Restovich y otros, a través de apoderado judicial, formularon **demanda de reparación directa** contra la Nación-Ministerio de Defensa y otros. Solicitaron $1 313.287.639,4 por daños materiales, 100 SMLMV por daño moral y lo que resultara probado por daño en la vida de relación y por vulneración de los «bienes de su personalidad». Pidieron que se declarara que el atentado violó derechos constitucionales.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que las demandadas omitieron sus deberes de vigilancia, protección y seguridad, pues existían indicios que permitían prever un atentado contra el Club El Nogal. El 10 de marzo de 2005 (Rad nº. 2005-00440) y el 5 de mayo de 2005 (Rad nº. 2005-00449) se admitieron las demandas y se ordenó su notificación. La parte demandante adicionó las demandas y el 22 de julio de 2005 (Rad nº. 2005-00440) y el 15 de diciembre de 2005 (Rad nº. 2005-00449) fueron aceptadas. En el escrito de **contestación de la demanda**, la Nación-Ministerio de Defensa alegó hecho de un tercero y que la obligación de protección era de medio y no de resultado La Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad-DAS señalaron que no tenían deberes de protección frente a toda la población y hecho de un tercero. El 17 de julio de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, la Nación-Fiscalía General de la Nación (Rad nº. 2005-00449) y la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional (Rad nº. 2005-00440) fueron aceptadas como **sucesores**

procesales del DAS, respectivamente. **El** 15 de septiembre de 2015 (Rad n°. 2005-00440) y el 4 de septiembre de 2018 (Rad n°. 2005-00449) se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para **alegar de conclusión** y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que el atentado era previsible, pues las demandadas tenían información de inteligencia sobre su ocurrencia y el Club El Nogal y sus socios estuvieron expuestos a un riesgo superior que no tenían el deber de soportar. La Nación-Fiscalía General de la Nación adujo que los funcionarios de Policía Judicial actuaron en el marco de sus competencias. La Nación-Ministerio de Defensa y la Nación-Ministerio de Defensa. Policía Nacional, reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que el ataque fue indiscriminado e imprevisible **El** 30 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la **acumulación de los procesos** con número de radicado 2005-00440 y 2005-00449.

El 9 de octubre de 2019. el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la **sentencia** accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que las demandadas no adelantaron investigación alguna, aunque tenían información que hubiera permitido prevenir el atentado. Consideró que las constantes reuniones de funcionarios públicos en el club pusieron a sus socios y empleados en un riesgo que no estaban en el deber de soportar. Estimó que, aunque el Club El Nogal no fue demandado, la condena debía reducirse en un 70%, pues también era patrimonialmente responsable. Las partes y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE interpusieron **recurso de apelación,** que fueron concedidos el 23 de enero de 2020 y admitidos el 8 de abril siguiente. La ANDJE esgrimió que con la información que tenían las autoridades no era posible prever, ni resistir el atentado en el Club El Nogal y que las noticias no prueban los hechos contenidos en ellas. La Nación-Ministerio de Defensa señaló que no hubo amenaza alguna contra el club y el atentado no estaba dirigido contra un agente o establecimiento del Estado. La Nación-Fiscalía General de la Nación adujo que no se acreditó que el atentado era previsible. La Nación-Ministerio de Defensa. Policía Nacional. sostuvo que se configuró hecho de tercero. La parte demandante solicitó la indexación de la condena y adujo que no podía disminuirse en un 70%, pues se debía aplicar el «precedente» y el Club El Nogal no había sido parte del proceso. El 7 de mayo de 2021 se corrió traslado para **alegar de conclusión en segunda instancia**. La Nación-Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación

reiteraron lo expuesto La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la ANDJE y el Ministerio Público afirmaron que no se configuró título de imputación alguno. Sostuvieron que la sentencia de tutela SU-353 de 2020 dejó sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 27 de mayo de 2019, que fundamentó la sentencia de primera instancia. La parte demandante reiteró lo expuesto y agregó que la sentencia de tutela SU-353 de 2020 era inconvencional.

CONSIDERACIONES

I. Impedimento

El Consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo 150 1 CPC, pues como socio activo del Club El Nogal la decisión que se adopte podría afectarlo o beneficiarlo El artículo 150.1 CPC dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento del proceso por tener interés directo o indirecto en el proceso. Como los hechos en los cuales se funda el impedimento manifestado se subsumen en la causal invocada, porque el Consejero es socio activo del club en el que ocurrieron los hechos, se aceptará el impedimento.

II. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20 2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es. $190.750.000[1].

[1] Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2005, $381 500, por 500.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo[2], en este caso por una omisión que se imputa a varias entidades públicas (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Las demandas alegan que se configuró falla del servicio. porque las entidades demandadas omitieron el deber de protección. Las demandas se interpusieron en tiempo –4 de febrero de 2005–, pues las FARC detonaron un «carrobomba» en el Club El Nogal el 7 de febrero de 2003 [hecho probado 10.1], circunstancia que según la demanda concretó el incumplimiento de ese deber.

Legitimación en la causa

4.1 *Proceso n° 2005-00440*: Julio Martin Otálora Cano es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conformaba el núcleo familiar de Luisa Fernanda Solarte Angulo, quien murió en el atentado contra el Club El Nogal [hecho probado 10.9]. *Proceso n°. 2005-00449*: Luz Constanza Prado Restovich, Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado son las persona sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conformaban el núcleo familiar de Sergio Alejandro Muñoz Salame, quien murió en el atentado contra el Club El Nogal [hecho probado 10.10]

[2] Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 17 de junio de 1993. Rad. 7 303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007. Rad. 16 421 [fundamento jurídico 3], en *Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 745 y 747, disponible en https://bit.ly/3g3duK.

4.2 La Nación-Ministerio de Defensa está legitimada en la causa por pasiva, pues el Ejército Nacional y la Policía Nacional hacen parte de esta entidad (art. 1 Decreto 49 de 2003) y a estas les corresponde asegurar la convivencia pacífica y la defensa del orden constitucional (arts. 217, 218, 303 y 315.2 CN. 1 de la Ley 62 de 1993 y 2 de la Ley 48 de 1993, hoy Ley 1861 de 2017). La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, porque le corresponde dirigir y coordinar las funciones de policía judicial (art 250.8 CN). La Nación-DAS (que fue sucedido procesalmente por la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional –Rad nº. 2005-00440– y la Nación-Fiscalía General de la Nación –Rad nº 2005-00449–) está legitimado en la causa por pasiva, ya que era el encargado de obtener la inteligencia necesaria para garantizar la seguridad nacional interna del Estado (art. 3.1 Decreto 218 de 2000).

III. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la detonación de un artefacto explosivo dirigido de forma indiscriminada contra la población en un club social es atribuible a la falla del servicio por incumplimiento del deber de seguridad y protección o al hecho de un tercero.

III. Análisis de la Sala

5 Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 CPC

Hechos probados

6 Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio[3].

7. En el expediente obran recortes de prensa (f. 8-219 c. 10, c. 21 y f. 71-280 c. 22). Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre

[3] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad 25.022 (fundamento jurídico 1). El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015 Rad. 26 984. Estas providencias se pueden consultar en *Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363 364 y 385 respectivamente, disponible en https://bit.ly/3qjdJK.

los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso[4]

8. Las fotografías aportadas al proceso (f. 2 c. 12) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo. modo y lugar en las que fueron tomadas[5].

9 Al proceso se aportó, como prueba trasladada, el proceso penal por el ataque terrorista contra el Club El Nogal (c.15). Conforme al artículo 185 CPC. las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro. siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba. una en la demanda y la otra en el escrito de contestación[6]. Como las pruebas testimoniales practicadas en la investigación penal fueron solicitadas por la parte demandante (f. 199 c. 1 y 236 c. 3) y en el proceso primitivo se practicaron con audiencia de la parte demandada (f. 298-318 c.15), serán valoradas. Como los documentos no fueron tachados de falsos, los documentos trasladados de ese proceso penal también serán valorados.

10. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

---

[4] Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16 587 [fundamento jurídico 3.2] Estas providencias se pueden consultar en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo 8*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjduK.

[5] Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad 28 832 [fundamento jurídico 9.1].

[6] Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2.17] en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo 8*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disponible en https://bit.ly/3gjduK

10.1 El 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8:11 p.m., las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de «anfo» en el cuarto piso del Club El Nogal. En la explosión murieron 36 personas, incluidas Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de defunción (f. 415 c. 1 y f. 6 c. 22), de los protocolos de necropsia nº. bog-2003-004322 y nº. bog-2003-004295 (f. 833-839 c. 5 y f. 383-388 c. 10) y del informe nº 96 DAS.SC.GOPE.1679 elaborado por el DAS (f. 22-33 c. 23).

10.2 Para ingresar el «carrobomba» al Club El Nogal, Fernando Arellán Barajas, Oswaldo Arellán Barajas y John Fredy Arellán Zúñiga constituyeron la sociedad Invernar Invernaderos Ltda. y a través de esa sociedad compraron una acción empresarial, que les dio acceso al club. El día del atentado Oswaldo Arellán Barajas ingresó el vehículo al parqueadero del cuarto piso del club minutos antes de la explosión, según da cuenta copia simple del registro de entrada de socios (f 1 CD s020103, s020406, s020709, s021012, s030103 c. 12), del estudio que realizó el Club El Nogal para aceptar a Invernar Invernaderos Ltda. (f. 39-72 c. 24), del informe nº. 96 DAS.SC.GOPE.1679 elaborado por el DAS (f. 22-33 c. 23) y del informe nº. 839 FGN-CTI-GV-IJ-5039 elaborado por la Fiscalía General de la Nación (f. 53-61 c. 23).

10.3 En 2002 y 2003, las FARC realizaron diez atentados con artefactos explosivos en la ciudad de Bogotá, según da cuenta copia simple de la respuesta al oficio nº. 2014-LTC-418 enviada por el DAS (f. 1000-1002, 1007-1013 y 1149-1354 c. 6).

10.4 Entre 2002 y 2003, el DAS, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inició veinte investigaciones relacionadas con los delitos de tráfico de armas y explosivos, rebelión, concierto para delinquir, terrorismo, entre otros, según da cuenta copia simple de la respuesta al oficio nº. 06 CAV 428 enviada por el DAS (f. 406-409 c. 1).

10.5 El 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Herminsul Arallán Barajas por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión por los hechos del 7 de febrero de 2003. Conforme a la sentencia, Herminsul Arallán Barajas fue el encargado de instalar los explosivos en el vehículo que ingresó al club. La sentencia

fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, según da cuenta copia simple de las sentencias (c. 16 y 18).

10.6 El DAS y la Policia Nacional no conocieron sobre la existencia de amenazas o indicios de atentado contra el Club El Nogal para los años 2002 y 2003. ni recibieron solicitudes de protección, según da cuenta copia simple de las respuestas a los oficios n°. 06 CAV 428 (f. 406-409 c. 1) y n°. 2006-RJPG-0205 enviadas por el DAS (f. 523-527 c. 2) y del oficio n° 1275 GRUNE-803 enviada por la Policía Nacional (f. 421 y 423 c.10).

10.7 Fernando Londoño Hoyos –entonces Ministro del Interior y de Justicia en 2002 y 2003– era socio del Club El Nogal desde abril de 1995 y fue presidente de su junta directiva hasta el 6 de agosto de 2002, según da cuenta original de la certificación de la gerente general del club (f. 93 c. 11).

10.8 Martha Lucia Ramirez –entonces Ministra de Defensa– se hospedó en el hotel del Club El Nogal en tres ocasiones en 2002. según da cuenta copia simple del registro de huéspedes de 2002-2003 (f. 1-41 c. 14).

10.9 Luisa Fernanda Solarte Angulo era esposa de Julio Martin Otálora Cano, según da cuenta copia auténtica del registro de matrimonio (f. 414 c. 10).

10.10 Sergio Alejandro Muñoz Salame era esposo de Luz Constanza Prado Restovich y padre de Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio (f. 2-5 c. 19).

Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros dirigidos en forma indiscriminada contra la población

11. El articulo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los articulos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra. bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CN)[7].

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 48 de 1993, retomado por el mismo artículo de la Ley 1861 de 2017 y en concordancia con los artículos 2 y 217 CN, dispone que las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886[8] –que corresponde al artículo 2 CN– concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un «asegurador general»[9] contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática derivada exclusivamente de la afectación de un derecho[10] y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Se trata, pues, de una falla relativa del servicio[11].

El Estado es responsable patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad frente actos terroristas de terceros dirigidos de forma indiscriminada contra la población, cuando: i) se solicita protección especial,

---

[7] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Rad. 34.776 (fundamento jurídico 17), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 499, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

[8] Introducido por el artículo 9 del Acto Legislativo n°. 1 de 1936 que, a su vez, corresponde con el artículo 19 original de la Constitución de 1886.

[9] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 1969, Rad. 541, párr. 62, en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 60, disponible en https://bit.ly/3gjjduK

[10] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 1990, Rad. 5.737 (fundamento jurídico 2), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 68, disponible en https://bit.ly/3gjjduK

[11] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 1998, Rad. 10.747, (fundamento jurídico 6), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 88, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

con justificación en las especiales condiciones de riesgo ante un acto de esta naturaleza y las autoridades, competentes y con la capacidad para contener el ataque, omiten ese deber o brindan las condiciones de seguridad de forma insuficiente o tardía y ii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas, no obstante, el acto terrorista era previsible en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque teniendo la capacidad de hacerlo[12].

12. La Sala en algunas decisiones ha sostenido que si el acto terrorista se dirige contra una institución representativa del Estado, procede la condena con fundamento en el daño especial[13] El daño especial, cuyo fundamento se encuentra en la desigualdad derivada de la alteración de las cargas públicas, supone que el daño antijurídico es consecuencia de una actuación legítima del Estado que, no obstante, lesiona un bien jurídico cuyo titular no se encuentra en el deber de soportar. Esto impone un estudio de la relación de causalidad material para poder imputar responsabilidad.

La acción legítima del Estado debe ser la causa del perjuicio. Una «causalidad abstracta» –que impute el daño por los deberes jurídicos generales de las autoridades públicas– implicaría, en el fondo, una atribución ilimitada de responsabilidad: del ámbito de la responsabilidad civil del Estado, propio del juzgador, se trasladaría al de la solidaridad, el aseguramiento y la equidad, propios de la formulación de políticas públicas, y ajenos al juez de la administración

13. La Sala también ha imputado responsabilidad por actos terroristas con fundamento en el riesgo excepcional[14]. La imputación con fundamento en ese título de imputación tiene su origen en el ejercicio de actividades peligrosas, que reportan

---

[13] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 2017, Rad. 18.860 (fundamento jurídico 14), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 493-494, disponible en https://bit.ly/3gLdJK

[12] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 1990, Rad. 5.417, p. 4 y sentencia de 8 de febrero de 1999, Rad. 10.731 (fundamento jurídico 1), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 478 y 481, disponible en https://bit.ly/3qFJI0n.

[14] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de octubre de 2005, Rad. AG-2001-00948-01 (fundamento jurídico 5.2), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 484, disponible en https://bit.ly/3gJduK.

beneficios a quienes las ejercen y que justifican la obligación de indemnizar perjuicios cuando con ellas se ocasionen daños.

Si las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra. bienes, creencias y demás derechos y libertades (artículo 2 CN), no resulta coherente estimar que su presencia constituya por sí misma un riesgo indemnizable. La sola presencia de funcionarios del Estado en establecimientos públicos y privados –en el ejercicio de sus funciones o fuera del ámbito de ellas– no puede considerarse como una fuente creadora de riesgo.

14. Según la demanda, las demandadas incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de seguridad y protección por el atentado terrorista en el Club El Nogal, pues había indicios que hacían previsible el ataque.

Está acreditado que el 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8 11 p.m.. las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de «anfo» en el cuarto piso del Club El Nogal En la explosión murieron 36 personas, incluidas Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame [hecho probado 10.1]. Para ingresar el «carrobomba» al Club El Nogal, Fernando Arellán Barajas, Oswaldo Arellán Barajas y John Fredy Arellán Zúñiga constituyeron la sociedad Invernar Invernaderos Ltda. y a través de esa sociedad compraron una acción empresarial, que les dio acceso al club. Oswaldo Arellán Barajas ingresó el vehículo al parqueadero del cuarto piso del club minutos antes de la explosión [hecho probado 10.2]. Herminsul Arellán Barajas fue condenado por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión por instalar los explosivos en el vehículo que ingresó al club [hecho probado 10. 5].

Entre 2002 y 2003, las FARC realizaron diez atentados terroristas con artefactos explosivos en la ciudad de Bogotá [hecho probado 10.3]. En esos años, el DAS –en coordinación con la Fiscalía General de la Nación– inició veinte investigaciones relacionadas con los delitos de tráfico de armas y explosivos, rebelión. concierto para delinquir. terrorismo, entre otros [hecho probado 10.4]. El DAS y la Policía Nacional no conocieron sobre la existencia de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección [hecho probado 10 6]

15. Según el articulo 252 CPC, un documento privado es auténtico cuando (i) ha sido reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido, (ii) fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; (iii) habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente: (iv) ha sido reconocido implícitamente de conformidad con el articulo 276; o (v) se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el articulo 274 CPC.

Conforme al articulo 277 CPC, los documentos privados emanados de terceros sólo se estimarán por el juez (i) cuando sean auténticos de conformidad con el artículo 252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente representativa y (ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite.

15.1 Obra en el expediente el comunicado de las FARC denominado «saludo de año nuevo» El documento dejó consignado unos puntos que «quedaron claros» ese año con el «aparatoso despliegue militar, los empalagosos elogios de los medios al presidente y la aristocrática arrogancia del ministro del interior». Conforme al comunicado, el gobierno de la época como sus antecesores desarrollaba la «estrategia paramilitar del Estado» y seguia «(..) abriendo las puertas de la nueva institucionalidad al sicariato paramilitar facilitándole los clubes del norte de Bogotá para sus reuniones con jefes políticos y empresariales sin que ninguna autoridad los incomode» (f. 366-368 c. 3).

15.2 Obra en el expediente la denuncia del 10 de febrero de 2003 presentada por Llimi Diaz Torres –que afirmó ser exfuncionario del DAS– ante la Fiscalia General de la Nación. Conforme a la denuncia, le «informó» a uno de los detectives de esa entidad –no reveló su identidad para protegerlo– que la primera semana de enero un informante le habia contado sobre un presunto testaferro de las FARC que habia sido vinculado como socio del Club El Nogal para identificar futuras victimas. Según el documento, le entregó el nombre del testaferro, direcciones de la empresa fachada y números telefónicos (f. 24-25 c. 19)

El comunicado de las FARC y la denuncia presentada por Llimi Díaz Torres –que hacían parte de la investigación penal– son documentos privados emanados de terceros de contenido declarativo, que pueden ser valorados. El comunicado acredita que la guerrilla de las FARC hizo una serie de críticas al gobierno y a los funcionarios de la época. Sin embargo, no evidencia una amenaza directa contra alguna institución pública o privada. La denuncia presentada por Llimi Díaz Torres acredita que este denunció ante las autoridades unos hechos que podían tener relación con algunas conductas delictivas, pero no la veracidad de las afirmaciones contenidas en ese documento. Al proceso no se aportó la investigación penal que se inició con esa denuncia, ni documento alguno que permita constatar esas afirmaciones.

16. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC.

Obra en el expediente la respuesta al oficio n°. 06 CAV 428 elaborado por el DAS el 12 de febrero de 2006. Conforme al documento, en el oficio DGIN.SANA.GIDR n°. 274593 quedó consignado que frente al comunicado de las FARC de fin de año no se realizaron «trabajos estratégicos», pues al «someterlo al proceso analítico de la información» no se evidenciaron «posibles ataques terroristas» que pudieran afectar el orden público, ya que se trataba de «directrices de carácter general» (f. 406-409 c. 1).

El oficio elaborado por el DAS es un documento público que acredita que esa entidad hizo un análisis del comunicado de fin de año de las FARC y determinó que no contenía amenazas contra el orden público por tratarse de directrices generales. Se presume auténtico, porque no se tachó de falso (art. 252 CPC) y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas.

17 Sobre posibles «informaciones de inteligencia» relacionadas con el atentado en el Club El Nogal, Jaime Quiñónez Rodríguez –informante– declaró en el proceso penal [núm. 9] que conoció a los autores del atentado. Afirmó que conoció a alias «El Flaco» –que alegó era Herminsul Arellán– y este le contó que había perdido a dos hermanos «nogaliando». Sostuvo que, veinte días antes de que ocurriera el atentado al Club El Nogal, «El Flaco» le dijo que le «ardían» las fosas nasales porque estaba «picando» más o menos veinte arrobas de explosivos. Comunicó esos hechos a funcionarios del «SIA» –Sección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación– y a Helena Zorrilla –investigadora del CTI–, con quienes ya había trabajado como informante para impedir un secuestro. Les contó que alias «El Flaco» era el mismo «Javier Paz» y que sabía esto porque «El Flaco» le había preguntado si el retrato hablado de Javier Paz se parecía a él. Afirmó que «El Flaco» en ese momento le dijo que quería «atentar contra el alcalde de San Vicente del Caguán» –que estaba en Bogotá– y que le pidió que consiguiera información sobre dónde vivía ese funcionario. Declaró que le suministró el número de «Herminsul» a las autoridades y no hicieron nada (f. 298-304 c. 15).

Helena Zorrilla Parga –Investigadora del CTI– declaró que conoció a Jaime Quiñónez Rodríguez, porque se presentó en su oficina en septiembre de 2002 y le informó que las FARC iban a secuestrar al director de la Clínica del Country. Afirmó que el informante fue a su oficina nuevamente el 21 de enero de 2003 a decirle que se había involucrado con las FARC, que conocía al que llamaban «Javier Paz» –según los retratos hablados de los medios– y que podía ayudar a capturar a alias «El Paisa» –comandante de la columna Teófilo Forero–. Sostuvo que el informante mencionó que esa mañana «El Flaco» había picado explosivos y que las FARC iban a hacer un atentado contra «un político, un parlamentario, pero no iba a suministrar el nombre hasta que no le confirmaran si la información les interesaba». Afirmó que Quiñónez exigió el pago de $150.000.000 como recompensa y fue entrevistado por funcionarios del «RIME 7» –Regional de Inteligencia Militar– y después por funcionarios del SIA del nivel central. Las entrevistas fueron grabadas y el informante suministró unos números de celular que «supuestamente» usaba alias «El Flaco» o «Javier Paz». Después de eso esperó a que los funcionarios de la SIA Nacional se comunicaran y como no obtuvo respuesta envió el proceso al grupo de verificación de la seccional Bogotá. Afirmó que las demás informaciones que había

dado el informante estaban relacionadas con disparos contra el edificio del Congreso o el Palacio de Justicia y la intención de «gemelear» una camioneta de un político para ingresarla al parqueadero de ese «edificio». Esas informaciones fueron incluidas en los informes de apreciación que hacía semanalmente (f. 306-318 c. 15).

Las declaraciones de los testigos sobre la forma en que se conocieron, la ocurrencia de una entrevista el 21 de enero de 2003 y el contenido de esa entrevista es completo y verosímil. Los testigos coincidieron en los aspectos importantes, pues ambos afirmaron que en esa entrevista se denunció que alias «El Flaco» estaba detrás de algunos atentados terroristas en Bogotá y tenía la intención de atentar contra «parlamentarios» y «alcaldes».

Estas declaraciones son –además– coincidentes con algunos documentos que hicieron parte del proceso penal y que fueron aportados al proceso. En efecto, conforme al informe de la Sección de Información y Análisis del CTI denominado «proceso de información n°. 0020-2003» del 21 de enero de 2003, Jaime Alberto Quiñónez tenía información sobre Javier Paz alias «El Flaco» y exigía $150.000.000 de recompensa (f. 336-339 c. 15). Además, según el informe de «apreciación de orden público en Bogotá» del 23 de enero de 2002, se venían «fraguando varios planes para realizar atentados contra líderes políticos, principalmente parlamentarios y alcaldes», grupos guerrilleros tenían en su poder explosivos para prepararlos como «carrosbomba» y «piensan "gemelear" una camioneta Toyota de los adscritos congresistas, para ingresarla al parqueadero del congreso de la república» (f. 323-326 c. 15). Estos informes son documentos públicos que acreditan que el testigo Jaime Quiñónez Rodriguez efectivamente alertó a las autoridades sobre un eventual plan terrorista contra congresistas y alcaldes.

18. Luke Pujana Angoita –gerente del Club El Nogal– declaró que Fernando Londoño Hoyos, ministro para la época de los hechos, era socio del club desde su fundación en 1995. Afirmó que múltiples personajes de la «élite política o económica» frecuentaban el club para asistir a distintos eventos y que cuando funcionarios –como el presidente– visitaban el club se hacían avanzadas de seguridad. Declaró que «el club no recibió ninguna amenaza, ni fui enterada de

amenaza para el club, no hubo ninguna novedad de seguridad antes del atentado» El dicho de la declarante fue preciso y detallado. Su versión es seria, verosímil y no se aprecian inconsistencias, ni lagunas en su versión de lo sucedido. Narró exclusivamente los hechos que le constaban y fue precisa en aclarar cuándo se tomaban medidas de seguridad especiales en las instalaciones del club y si conoció de amenazas (f. 472-473 c. 10 y f. 462-464 c. 22).

19. El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible[15].

El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración.

Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios.

Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios

---

[15] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1989 Rad. 5693 [fundamento jurídico párrafos 24 y siguientes], en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017* Sección Tercera Tomo 8, Bogotá. Imprenta Nacional. 2018, pp 238. disponible en disponible en: https://bit.ly/3xgduK

por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, Llimi Díaz, días después del atentado, denunció ante la Fiscalía General de la Nación que había informado a un detective del DAS sobre un presunto testaferro de las FARC, que había sido vinculado al Club El Nogal. Esa denuncia no evidencia que las demandadas conocían sobre un posible atentado terrorista contra el Club El Nogal. No se probó que los hechos contenidos en la denuncia eran ciertos y que efectivamente un funcionario del DAS recibió esa información en los términos descritos por el denunciante.

En el proceso también quedó probado que Jaime Quiñónez Rodríguez conoció a alias «El Flaco» –que aseguró era Hermínsul Arellán– y que el 21 de enero de 2003 le informó a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que esa persona preparaba un ataque contra parlamentarios y alcaldes en Bogotá. Las autoridades recibieron la información y alertaron sobre esos hechos en los informes de apreciación de orden público. Conforme a las pruebas, no se acreditó que el informante hubiera señalado que las FARC iban a atentar contra el Club El Nogal, ni tampoco que la información dada sobre alias El Flaco y su relación con los atentados terroristas era veraz. La declaración de Jaime Alberto Quiñónez no evidencia una amenaza real y concreta contra el Club El Nogal, pues nunca mencionó un posible atentado contra esta institución. Por el contrario, quedó probado que sólo hizo referencia a ataques contra parlamentarios, alcaldes, el Congreso y el Palacio de Justicia.

No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no

había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios.

El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo.

La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades militares estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de ataques sucedan. El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades.

Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones[18]. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no se probó omisión por parte de las autoridades en el deber de protección

[18] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico parr. 10] en *Gaceta Judicial*, *Tomo XLIII* nº. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV parr. 4] en *Gaceta Judicial*, *Tomo CXXXVIII* nº 2340 a 2345 p. 24

y, por el contrario, quedó probado que esa acción armada contra el Club El Nogal era imprevisible e irresistible, se configuró el hecho exclusivo de un tercero. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada.

20. La parte demandante alegó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado el daño especial en ataques terroristas contra la población civil. Como para que se configure el daño especial la acción legítima del Estado debe ser la causa del daño o perjuicio [núm. 12] y quedó acreditado que el ataque terrorista fue planeado y ejecutado por la guerrilla de las FARC, no es procedente atribuirle responsabilidad al Estado bajo ese título de imputación

21. Según la demandante, la presencia habitual de funcionarios del Estado creó un riesgo superior para el club, sus socios y empleados. Conforme a lo probado, Fernando Londoño Hoyos –entonces Ministro del Interior y de Justicia en 2002 y 2003– era socio del Club El Nogal desde abril de 1995 y frecuentaba las instalaciones del club. Martha Lucía Ramírez –entonces Ministra de Defensa– se hospedó en el hotel del Club El Nogal en tres ocasiones en el año 2002. Como la presencia de funcionarios del Estado en establecimientos públicos o privados no constituye un riesgo excepcional [núm.13], no es procedente atribuirle responsabilidad al Estado bajo ese título de imputación.

22. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el Consejero Nicolás Yepes Corrales, para intervenir en este caso y, en consecuencia, **SEPÁRASE** del conocimiento del presente proceso.

SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia del 9 de octubre de 2019 profenda por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: **NIÉGANSE** las pretensiones.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Tribunal

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

EDF-OAO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SALAS DE JUSTICIA
SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

RESOLUCIÓN SAI-AOI-RC-DVL-316-2023

Expediente LEGALi:	**1501255-73.2021.0.00.0001**
Asunto:	**Resolución que declara anticipadamente la no amnistiabilidad, requiere suscribir el régimen de condicionalidad y el formato F-1, ordena suspender el proceso de cobro coactivo y remite por competencia a otra Sala de Justicia**
Solicitante:	**HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS**
Documento de identificación:	**C.C. nro. 19.449.357**
Solicitante:	**FERNANDO ARELLÁN BARAJAS**
Documento de identificación:	**C.C. nro. 19.223.167**

I. ASUNTO POR RESOLVER

Este despacho de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronuncia sobre el trámite de beneficios de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS y la solicitud de suspensión de cobro coactivo adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS e impone el régimen de condicionalidad aplicable a los comparecientes, previas las siguientes consideraciones:

II. IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS COMPARECIENTES

1. HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C., nació en Icononzo, Tolima el 16 de agosto de 1961. Fue conocido como 'Pedro' en las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

2. FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., nació en Fusagasugá, Cundinamarca el 1 de febrero de 1954.

3. Los interesados son hermanos y fueron condenados por la justicia penal ordinara (JPO) por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo. Con ocasión de la multa impuesta en esa condena, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) adelanta un proceso de cobro coactivo en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS.

4. Los ciudadanos ARELLÁN BARAJAS fueron acreditados como exintegrantes de las antiguas FARC-EP por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), recibieron el beneficio transicional de libertad condicionada por la condena impuesta en la JPO y suscribieron actas de compromiso ante la JEP.

III. ANTECEDENTES

Proceso ante la Justicia Penal Ordinaria

5. El 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00[1] condenó a[2] HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS,

[1] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, págs. 250 a 392.

[2] En esta sentencia también fueron condenadas las siguientes personas: Rodrigo Londoño Echeverri, Luciano Marín Arango, Noel Mata Mata, Jorge Briceño Suarez, Diego Alexander Piñeros como autores de los delitos de terrorismo en concurso heterogéneo con los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo; Alipio Murillo como coautor del delito de terrorismo en concurso heterogéneo con los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo; José Gustavo Muños y Adela Jiménez Álvarez como autores de los delitos de tráfico de armas de fuego o municiones agravado y rebelión; y Fernando Guerrero Reina como autor del delito de tráfico de armas de fuego o municiones agravado. En sentencia del 26 de agosto de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá decretó la cesación del proceso seguido en contra de Fernando Guerrero Reina, José Gustavo Muños y Adela Jiménez Álvarez. Respecto de Diego Alexander Piñeros y Alipio Murillo otro despacho de la SAI, en resoluciones SAI-AOI-D-XBM-016-2022 del 30 de marzo de 2022 y SAI-AOI-D-XBM-009-2022 del 31 de mayo de 2022 respectivamente, remitió por competencia el asunto a

como coautores responsables del concurso heterogéneo de delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo y rebelión por los siguientes hechos:

> El 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8:05 de la noche, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (*sic*) detonaron en uno de los parqueaderos de las instalaciones de la "CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL" (en adelante club El Nogal), ubicado en la carreta 7ª con calle 78 de esta ciudad, un artefacto explosivo acondicionado en un vehículo con el que se causó la muerte a 36 personas, y se atentó contra la vida de 158 más, así como daños materiales (sic) a la misma edificación, a edificaciones aledañas y a decenas de vehículos. // Los aquí procesados fueron acusados por la Fiscalía porque, según su criterio, participaron de una u otra forma en el hecho referido.

6. Respecto de los ciudadanos ARELLÁN BARAJAS la imputación fáctica por el delito de homicidio con fines de terrorismo en concurso homogéneo consistió "en que como consecuencia de la explosión que es achacada a los encartados en este proceso murieron […] 36 personas". En el mismo sentido la imputación por la conducta de tentativa de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo se concretó porqué "se atentó contra la vida de […] 158 personas" y por el delito de terrorismo, según la sentencia condenatoria, la imputación fáctica existió en tanto:

> […] el grupo insurrecto denominado FARC (*sic*), por intermedio de miembros de la columna móvil 'Teófilo Forero', explotó un carro bomba dentro de las instalaciones del club El Nogal, el cual contó con la activa participación de JHON FREDDY ARELLÁN ZÚNIGA [quien murió] y sus tíos HERMINSUL, OSWALDO y FERNANDO […] quienes realizaron las siguientes actividades:
>
> 1. **HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS:** presentó al comandante de la columna móvil 'Teófilo forero' de las FARC (*sic*) (alias 'Oscar Montero' o 'el Paisa' el plan de atentar contra el club El Nogal, toda vez que su sobrino †Jhon Fredy Arellán Zúñiga, en su calidad de instructor y jugador profesional de squash, tenía fácil acceso a dicho lugar.
> 2. Alias 'Oscar Monero' o 'el Paisa' acogió con entusiasmo la propuesta de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, la cual a su vez, presentó como 'proyecto revolucionario' al secretariado de las FARC (sic).
>
> […]

la SRVR respecto de esta condena de la JPO. Los demás condenados en este caso, a excepción de Jorge Briceño Suarez quien murió, comparecen ante la SRVR.

5. <u>FERNANDO ARELLÁN BARAJAS:</u> realizó algunos pasos previos para la ejecución del delito de terrorismo, pues junto con otras personas, entre ellas †Oswaldo Arellán Barajas, conformaron una empresa fachada denominada 'invernar – invernaderos' y se realizaron actos que les permitió comprar, por intermedio de † Jhon Fredy Arellán Barajas, una acción en el club El Nogal en septiembre de 2002.

El segundo de los mencionados en el ítem anterior, junto con **<u>HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS</u>** transportaron desde San Vicente del Caguán, en una caleta de un bus tipo escalera denominado 'la Chiva Rumbera', 20 arrobas de explosivos *anfo* que fueron usadas en el atentado al club El Nogal.
[…]
7. **<u>HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS:</u>** alias 'Pedro' acondicionó con explosivos el vehículo Renault Megane roja, el cual explotó el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club El Nogal.

8. El Juzgado concluyó respecto de la responsabilidad de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS que:

Este despacho tiene certeza de que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS realizó actos de puesta en peligro concreto de la vida e integridad física de personas, mediante la elaboración de un carro bomba como medio que causó estragos y creó un estado de zozobra y terror en la población colombiana. Adicionalmente, como su conducta causó decenas de muertes y puso en peligro cientos de vidas más, este Despacho lo condenará por el concurso homogéneo de delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, y tentativa de homicidio agravada en concurso homogéneo, toda vez que ninguna causal de ausencia de responsabilidad se advirtió en el análisis probatorio, no habiendo duda, entonces, respecto de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta.
[…]
En las pruebas que reposan en el expediente aparece FERNANDO ARELLÁN BARAJAS mintiendo por todos los medios posibles, tratando de convencer que nada tenía que ver con el atentado al club El Nogal; sin embargo, su participación en la constitución de la empresa 'Invernar – invernaderos', el ser el propietario del vehículo en el que transportaban los explosivos, su cercanía al lugar de los hechos, así como la frecuente comunicación que mantuvo con †Jhon Fredy Arellán Zúñiga minutos antes de la explosión y los intentos de ponerse en contacto vía telefónica con él minutos después, aunado al grado de confianza que mantenía no solo con él, sino con su hermano, permiten tener certeza de su responsabilidad como coautor en el atentado al club El Nogal, pues realizó actos esenciales de la conducta de puesta en peligro concreto de la vida, integridad física y libertad de las personas que se encontraban al alcance del carro bomba (medio idóneo) introducido en el club El Nogal, el cual generó

> un estado de zozobra y terror en la población colombiana, razón por la cual este Despacho lo condenará por el concurso homogéneo de delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravada en concurso homogéneo, toda vez que no se advirtió ninguna causal de ausencia de responsabilidad y este procesado actuó consciente de la ilicitud de la conducta desplegada y con capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión.

9. En esa sentencia, el Juzgado impuso a los procesados una pena de 480 meses de prisión, multa de 1055 S.M.L.M.V. e inhabilidad para el ejercicio de los derechos y las funciones públicas por un tiempo de 20 años.

10. En pronunciamiento del 26 de agosto de 2010[3], el Tribunal Superior de Bogotá decretó la cesación de procedimiento por el delito de rebelión por el que habían sido condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS debido a que había prescrito la acción penal respecto de este delito. El Tribunal consideró que desde la ejecutoria de la providencia que confirmó la resolución de acusación, esto es desde el 20 de octubre de 2004, hasta la fecha del pronunciamiento de segunda instancia habían pasado más de 5 años y ls pena por rebelión es de 6 a 9 años operó el fenómeno de prescripción previsto en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000. En consecuencia, en segunda instancia se estableció una pena de 466 meses y 5 días de prisión, multa de 1000 S.M.L.M.V. y 233 meses de inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por los delitos de terrorismo y los concursos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravada.

11. La Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 11 de abril de 2012, decidió no casar la sentencia del 26 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá[4], por lo cual la decisión quedó en firme.

Beneficios transicionales concedidos por la JPO

12. En providencia del 5 de mayo de 2017[5], el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. concedió a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS el beneficio de libertad condicionada respecto de los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en

[3] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, págs. 393 a 486.
[4] Ídem., págs. 487 a 509.
[5] Sistema de Gestión Documental Conti, documento nro. 20171500051052.

concurso homogéneo por los cuales fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00. Ese juzgado consideró que (i) los hechos objeto de condena ocurrieron con anterioridad del Acuerdo Final de Paz; y (ii) de la sentencia condenatoria se deduce que el interesado fue militante o colaborador de las antiguas FARC-EP, lo cual fue corroborado por la OACP al acreditarlo como exintegrante de dicha organización mediante resolución 01 del 27 de febrero de 2017.

13. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Boyacá, en auto interlocutorio del 3 de agosto de 2017[6], concedió el beneficio de libertad condicionada a FERNANDO ARELLÁN por las conductas por las que fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00, considerando que el interesado (i) fue condenado por su pertenencia a las antiguas FARC-EP y acreditado por las OACP como exintegrante de esa guerrilla mediante resolución 03 del 18 de abril de 2017; y (ii) había firmado acta de compromiso ante la JEP.

14. HERMINSUL ARELLÁN, el 10 de marzo de 2017, suscribió el Acta de Compromiso de Libertad Condicional nro. 100496 y el 9 de enero de 2018, el Acta de Compromiso – Reincorporación Política, Social y Económica nro. 500975 ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz[7]. De igual forma, FERNANDO ARELLÁN suscribió dichas actas de compromiso nro. 101660 el 20 de abril de 2017 y nro. 500983 el 1 de septiembre de 2018, respectivamente ante la JEP.

Trámite ante la JEP

15. En escrito del 6 de noviembre de 2020[8], HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, por intermedio de apoderado judicial, el abogado José Fernando Borja Pérez, inscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), solicitó la suspensión del cobro coactivo[9] realizado en su contra por parte de la UARIV con ocasión de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

---

[6] Sistema de Gestión Documental Conti, documento nro. 20171510061352.
[7] Expediente digital LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 6.
[8] Expediente digital LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001, folios 2 – 4.
[9] Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 1820 de 2016, "*EFECTOS DE LA AMNISTÍA. La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas*", la solicitud de suspensión de cobro coactivo realizada por el señor Herminsul Arellán Barajas se entenderá como de amnistía.

16. A fin de contar con información sobre la situación jurídica del señor ARELLÁN BARAJAS, este despacho consultó en el "Sistema Público de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial"[10], el cual registró los siguientes procesos:

- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Radicado 11001070400820050000501. Fiscalía Doce Especializada de Bogotá. Delito: Homicidio.
- Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Radicado 11001310700820050000501. Recurso Extraordinario de Casación.

17. Este despacho también consultó el registro de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación en el cual se indica únicamente la condena impuesta por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante providencia del 28 de noviembre de 2008[11]. Así mismo, este despacho revisó la página de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia y obtuvo como respuesta que "el resultado de su consulta no puede ser generado"[12].

18. También, este despacho constató la existencia y vigencia del Acta de Compromiso de Libertad Condicional nro. 100496 del 10 de marzo de 2017 y del Acta de Reincorporación Social, Política y Económica nro. 500975 del 9 de enero de 2018[13] ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente, este despacho consultó el sistema de registro de la población carcelaria del INPEC y no aparecen datos a nombre de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS[14].

19. Mediante resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022 del 17 de junio de 2022, este despacho amplió información respecto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y ofició a la OACP, al Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) del Ministerio de Defensa Nacional, a las autoridades judiciales a cargo de los procesos

[10] Rama Judicial de Colombia. Sistema para la Gestión de Procesos Judiciales de la Rama Judicial del Poder Público. Consultado el 16 de junio de 2022 en el siguiente enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

[11] Procuraduría General de la Nación. Consulta de Antecedentes. Consultado el 16 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023. Certificado ordinario nro. 224366203.

[12] Policía Nacional de Colombia. Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales. Consultado el 16 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023.

[13] Plataforma CONTI/consultas/actas.

[14] Registro de la Población Privada de la Libertad. INPEC. Consultada el 16 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023.

relacionados al interesado, a la UIA, al interesado y a la UARIV para conocer la situación jurídica del solicitante. Además, reconoció personería jurídica al abogado del SAAD, JOSÉ FERNANDO BORJA PÉREZ.

20. En cumplimiento de la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022, se allegaron a este despacho las siguientes respuestas:

(i) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá[15] indicó que el expediente se encontraba en el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por lo que remitió la solicitud de la SAI a ese Juzgado;
(ii) En oficio del 22 de junio de 2022[16], la OACP informó que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP mediane resolución nro. 01 del 27 de febrero de 2017;
(iii) El Coordinador del Grupos de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa indicó, mediante oficio del 1 de julio de 2022[17], que no se había encontrado registro de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS como desmovilizado individual de algún grupo organizado la margen de la ley.
(iv) La Fiscalía Especializada Contra las Organizaciones Criminales informó[18] que no contaba con el expediente adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por los hechos ocurridos en el atentado al Club El Nogal ya que fue remitido a los Jueces Penales del Circuito;
(v) El abogado José Fernando Borja Pérez remitió respuesta el 12 de julio de 2022[19] sobre los requerimientos realizados por este despacho en la cual informó que: (a) HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS no ha sido investigado o condenado por otros delitos diferentes a los conocidos por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dentro del radicado nro. 11001310700820050000500; (b) el interesado estuvo privado de la libertad por ese proceso desde el 5 de marzo de 2011 hasta el año 2017 cuando le otorgaron el beneficio transicional de libertad condicionada; (c) en el último año ha tenido dificultades en recibir "sus giros a que tiene derechos como reincorporado debido a que está suspendido como consecuencia de la condena inicial" (*sic*); y (d) "debido al incremento de asesinatos

[15] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 83 a 85.
[16] Oficio OFI22-00060718/IDM 13020001, expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 119 a 120.
[17] Oficio RS20220701063221, expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 179 a 180.
[18] Oficio DECOC-20120 del 6 de julio de 2022, expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 181 a 187.
[19] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 180 a 190.

de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz en Colombia, prefiere tomar sus propias medidas de seguridad por lo tanto la comunicación con el reincorporado tarda algunos días en responder, pero está comprometido a cualquier llamado, requerimiento que le hiciera el Sistema Integral de Justicia o cualquier Sala de la Jurisdicción Especial de Paz";
(vi) La UARIV informó[20] que, con ocasión de la condena impuesta a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dentro del radicado nro. 11001310700820050000500 en la que se impuso una multa por valor de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, "equivalentes a QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($566.700.000) M/cte".
(vii) El 6 de julio de 2022, el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá remitió copia digital del proceso penal con radicado nro. 11001310700820050000500 adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 29 de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
(viii) El 2 de octubre de 2022, la UIA informó que no se encontraron registros de HERMINSUL ARELLÁN en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) ni en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) y que solo se encontró registro del proceso nro. 11001310700820050000500 en contra del interesado.

21. Al revisar la información allegada a este despacho en cumplimiento de la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022, se advirtió que respecto de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS la JEP no había conocido el trámite por beneficios transicionales sobre el proceso nro. 11001310700820050000500 por lo cual se verificó su situación jurídica. Para ello, este despacho consultó el registro de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación en el cual se indica que el interesado "NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES"[21]. Así mismo, este despacho consultó la página de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia y obtuvo como respuesta que "ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA"[22].

[20] *Ídem*., folio 191 a 195.
[21] Procuraduría General de la Nación. Consulta de Antecedentes. Certificado ordinario nro. 224366326. Consultado el 1 de junio de 2023.
[22] Policía Nacional de Colombia. Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales. Consultado el 1 de junio de 2023.

22. Este despacho constató la vigencia de las actas de compromiso nro. 101660 del 20 de abril de 2017 y nro. 500983 del 1 de septiembre de 2018[23] ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP suscritas por FERNANDO ARELLÁN BARAJAS. Finalmente, este despacho consultó el sistema de registro de la población carcelaria del INPEC y no aparecen datos a nombre de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS[24].

23. Además, este despacho encontró que a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS se le ha concedido en dos oportunidades la autorización de salida del país por otro despacho de la SAI[25].

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Problema jurídico y asuntos que se abordan en esta decisión

24. Este despacho debe determinar el trámite a seguir respecto de los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00. Los hechos objeto de esta condena ocurrieron el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. cuando integrantes de las antiguas FARC-EP detonaron un artefacto explosivo en el Club el Nogal de Bogotá.

25. A fin de establecer dicho trámite, este despacho se referirá a cuatro asuntos pertinentes en el caso bajo estudio:
(i) la competencia de la SAI, la declaratoria anticipada de no amnistiabilidad y la remisión por competencia a otras Salas de Justicia de la JEP;
(ii) el régimen de condicionalidad aplicable a los beneficios transicionales;
(iii) la competencia prevalente de la JEP y la solicitud de la suspensión del cobro coactivo adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por parte de la UARIV; y
(iv) la notificación de víctimas en este trámite.

[23] Plataforma CONTI/consultas/actas.
[24] Registro de la Población Privada de la Libertad. INPEC. Consultada el 1 de junio de 2023.
[25] Expedientes LEGALi 9002572-32.2018.0.00.0001 y 1500220-44.2022.0.00.0001.

(i) Competencia de la SAI, declaratoria anticipada de no amnistiabilidad y remisión por competencia a otras Salas de Justicia de la JEP

26. De conformidad con la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz[26], los despachos de la SAI deben resolver de manera definitiva y no solo provisional la situación jurídica del procesado al interior de la JEP[27]. Para ello, deberá seguir la siguiente ruta:

> (i) Evaluar si la JEP podría tener competencia en el asunto o si, por el contrario, es ostensible que carece completamente de ella, para lo cual podrá decretar – al menos preliminarmente – las pruebas que considere necesarias y con fundamento en ellas decidir si continúa con el trámite o rechaza de plano la solicitud, según proceda. Esto lo hará en un trámite unificado de los beneficios de amnistía o indulto y de libertad condicionada;
> (ii) Examinar, en una etapa temprana del procedimiento, si procede conceder la amnistía de *iure* cuando ello sea jurídicamente posible, y en los demás casos, decidir de oficio o por solicitud de parte el beneficio provisional de la libertad condicionada, para que con fundamento en dicha decisión se defina la suerte que ha de correr el trámite del beneficio definitivo del procesado.
> (iii) Determinar la pertinencia de continuar con el estudio de la amnistía de Sala según la naturaleza del delito, así en los casos que se advierta que se trata de delitos no amnistiables ni indultables se abstendrá de avocar conocimiento y dispondrá su remisión al órgano competente de la JEP; y
> (iv) Avocar conocimiento, cuando sea viable, de la amnistía o el indulto conforme al procedimiento fijado en el artículo 46 de la ley 1922 de 2018.

27. Como lo indica este trámite, para definir la situación jurídica de los solicitantes al interior de la JEP, la SAI debe realizar un estudio preliminar para establecer si el asunto es de su competencia y, para ello, deberá verificar el cumplimiento de los factores de competencia personal, temporal y material.

28. En consecuencia, para agotar el componente (i) de la ruta planteada, en la evaluación de la competencia de la JEP se deberá verificar la concurrencia de los

[26] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 2019 del 9 de octubre de 2019.
[27] *Ibid*. Párr. 133.

factores temporal, personal y material. El ámbito temporal indica que la Jurisdicción "conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016"[28].

29. El factor personal de competencia implica que la persona debió participar en el conflicto armado como combatiente, tercero civil o agente del Estado diferente a miembro de la fuerza pública y, si fue miembro de un grupo armado, tuvo que serlo de las antiguas FARC-EP al ser este grupo el que suscribió "un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional". En relación con el factor de competencia personal para ex integrantes de las antiguas FARC-EP que aspiran a beneficios transicionales, ya sean provisionales o definitivos, los artículos 17, 22 y 29 de la ley 1820 de 2016 y el artículo 6 del decreto 277 de 2017 señalan con fines similares[29], los siguientes requisitos de manera alternativa:

a. Que el solicitante haya sido procesado, investigado o condenado por pertenecer o colaborar con las FARC-EP y así conste en decisión judicial;
b. Que el solicitante haya sido incorporado a los listados entregados por los representantes designados por las FARC EP y verificados por la OACP, aunque no haya sido procesado, investigado o judicializado por su pertenencia a esta organización.
c. Que la sentencia condenatoria en contra del solicitante indique su pertenencia a las FARC-EP, aunque no se le condene por un delito político, siempre que el delito cumpla los requisitos de conexidad;
d. Que el solicitante haya sido investigado, procesado o condenado por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fue investigado o procesado por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP.

30. Adicionalmente, el artículo 23 del Acto Legislativo 01 de 2017 refiere la existencia de dos criterios para examinar el cumplimiento del factor material de competencia que han de tenerse en cuenta en los diferentes estados del trámite:

i) Que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible o,

[28] Ley 1957 de 2019, ley estatutaria de la JEP (LEJEP), artículo 8.
[29] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 152 del 24 de abril de 2019.

ii) Que la existencia del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, en cuanto a:

a) Su capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta.

b) Su decisión para cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla.

c) La manera en que fue cometida, es decir, a que, producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla.

d) La selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito.

31. Ahora bien, como lo ha fijado la SA, cuando "en los casos que se adviertan, de entrada, como no amnistiables ni indultables, deberá abstenerse de avocar conocimiento de dichos beneficios definitivos y disponer la remisión inmediata a la actuación del órgano competente"[30]. Al respecto en el capítulo II de la Ley 1820 establece las características de los asuntos susceptibles de amnistía de Sala. Respecto a los criterios de conexidad los cuales sirven para definir los delitos conexos al delito político sobre el cual se concederá la amnistía, el parágrafo del artículo 23 establece que no serán susceptibles de estos beneficios cuando se trata de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra grave privación de la libertad, tortura, etc.

32. Según lo establecido por la SA en la Sentencia Interpretativa (SENIT) 2, al estudiar la competencia de la SAI en un caso particular y cuando, *prima facie*, se advierta que el asunto se enmarca en uno de los casos priorizados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conducta (SRVR) se remitirá el expediente a dicha Sala de Justicia para que estudie si lo integra al mismo[31].

33. Por su parte, el artículo 23 la Ley 1957 de 2019 (LEJEP) consagra cual será el derecho aplicable en el SIVJRNR e indica que las Salas de Justicia de la JEP podrá n hacer una calificación jurídica propia:

[30] *Ibid*.
[31] *Ibid.,* párr. 142.

> […] respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en las normas de la parte general y especial del Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad
> La calificación resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el Derecho Internacional.

34. De acuerdo a lo anterior, en sentencia TP-SA-AM 316 del 20 de octubre de 2022, la SA estableció que, por decisión de ponente, la SAI tiene la competencia excepcional para recalificar, al menos preliminarmente, y declarar de manera anticipada la no amnistiabilidad de una conducta evidentemente excluida de ese beneficio definitivo transicional. Si bien, por regla general le corresponde a la SAI decidir sobre el otorgamiento o no de la amnistía una vez se agote el procedimiento del artículo 46 de la Ley 1922 de 2018, con observancia de los principios de estricta temporalidad y de economía procesal que rigen los trámites ante la JEP, en aquellos casos de especial gravedad en los que no hay controversias fácticas o jurídicas razonables un magistrado o magistrada de la SAI puede recalificar jurídicamente la conducta al verificar que la conducta se encuentra excluida del beneficio de amnistía. Estos casos pueden presentarse según la SA cuando

> los hechos son manifestaciones paradigmáticos de comportamientos graves contemplados en la ley transicional, o porque existe un notorio desarrollo jurisprudencial –en la SAI, en la SRVR o en el Tribunal– que ha tornado evidente la no amnistiabilidad con fundamento en las categorías de la legislación aplicable[32].

35. En esa sentencia TP-SA-AM 316, la SA estudió el asunto de una compareciente acreditada como exintegrante de las antiguas FARC-EP que fue condenada como coautora de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y terrorismo por haber participado en el atentado cometido por medio de un carro bomba contra la sede de Caracol Radio en Bogotá el 12 de agosto de 2010. En este asunto, la SA confirmó que en decisión de ponente de la SAI era posible recalificar la conducta:

[32] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP-SA-AM 316 del 20 de octubre de 2022. Cfr. Auto TP-SA 888 de 2021, párr. 32 y auto TP-SA 944 de 2021, párr. 14.1.

> […] es evidente que al hacer parte del patrón de macrocriminalidad descrito por la SRVR dentro del auto de apertura del macrocaso 10, las conductas penalmente atribuidas a la compareciente –terrorismo y homicidio agravado en grado de tentativa– alcanzan el umbral de gravedad necesario para ser excluidas del beneficio de amnistía y para ser recalificadas, al menos preliminarmente, como un crimen de guerra resultado de una grave infracción al principio de distinción.

Caso concreto

36. En el caso bajo examen, este despacho pasa a verificar si, con fundamento en la información recabada en este trámite y la información disponible en los sistemas de gestión documental y judicial de la JEP, concurren los factores competenciales respecto de las conductas conocidas en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

37. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá estableció que los hechos conocidos en el mencionado proceso tenían que ver con el atentado con explosivos ocurrido el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá a las 8:05 p.m. aproximadamente por parte de integrante de las antiguas FARC-EP. Es decir, que los hechos que dieron lugar a la condena por terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo ocurrieron antes de la firma del Acuerdo Final de Paz el 1 de diciembre de 2016 y, por lo tanto, **se cumple con el factor temporal de competencia** de la JEP.

38. Respecto del factor personal de competencia establecido en los artículos 17, 22 y 29 de la ley 1820 de 2016 y el artículo 6 del decreto 277 de 2017, en ese caso la sentencia condenatoria del 28 de noviembre de 2008 estableció que el atentado del 7 de febrero de 2003 en el Club el Nogal fue planeado y ejecutado por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Además, en esta sentencia se estableció que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, conocido como 'Pedro' en esa guerrilla, participó en la planeación del atentado junto a comandantes de la mencionada estructura y acondicionó los explosivos en el vehículo que luego detonó en el club El Nogal, y por ello lo condenó por el delito de rebelión, respecto del cual concluyó:

> […] las actividades de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS tipifican el delito de rebelión pues de ellas se infiere que estaba totalmente comprometido con la cusa rebelde; por un lado, fue visto con uniforme militar y portando fusil en zona de

> influencia subversiva y, por otro lado, quedó demostrada su relación con el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', 'alias 'Oscar Montero' o 'el paisa', a quien le cumplió órdenes (transportar explosivos en la 'chiva rumbera') y con posterioridad buscó para solicitar ayuda para su familia AREALLAN (sic), lo que indica su pertenencia a las FARC (sic)[33].

39. En cuanto a la pertenencia de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a las FARC-EP la JPO estableció que según las declaraciones de otro integrante de la guerrilla es posible corroborar "lo que ya era inferido a propósito de la participación de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS en el atentado contra el club El Nogal: su pertenencia a las FARC y su labor como miliciano"[34]. En el proceso, la JPO estableció que el compareciente participó activamente en los pasos previos para ejecutar el atentado, incluyendo comprar una acción del club y disponer de su automóvil para realizar la detonación de explosivos. En ese orden el juzgador concluyó que "de los medios probatorios expuestos antes se puede concluir con grado de certeza que FERNANDO ARELLÁN BARAJAS era miembro de las FARC"[35].

40. Adicional a lo anterior, HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS fueron incluidos en los listados entregados por delegados de las antiguas FARC-EP y verificados por la OACP mediante resolución nro. 01 del 27 de febrero de 2017 y resolución 03 del 18 de abril de 2017, respectivamente. En ese orden, en este asunto este despacho evidencia que **se corrobora el factor de competencia personal respecto de los interesados**.

41. Respecto del análisis del factor de competencia material, este despacho encuentra que la sentencia condenatoria fue clara en indicar que la explosión ocurrida el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá fue planeada y realizada por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Es así como luego de examinar los elementos de juicio vertidos en el proceso, el juzgador concluyó que "está demostrado que el secretariado de las FARC (sic) [ordenó] el atentado contra el club El nogal, conducta que fue planeada y dirigida por el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', quien era el enlace directo con la dirigencia del grupo alzado en armas". Conforme a esta conclusión el juzgador estableció que "los miembros del secretariado de las FARC (sic) tuvieron conocimiento y voluntad de los resultados típicos que se ocasionaron […] pues

[33] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, pág. 329.
[34] *Ibid*., pág. 348.
[35] *Ibid*., pág. 349.

contaban a su disposición con la columna móvil 'Teófilo Forero' la cual había preparado hombres con conocimiento en explosivos y con la firme convicción de realizar atentados terroristas". En ese orden, el juzgador resaltó que este hecho se enmarcó en una política de la antigua guerrilla:

> Es claro que una orden que produjera tan nefastas consecuencias solamente podía ser emitida desde el nivel más alto y no una decisión autónoma de un comandante que se entendiera como rueda suelta de toda la estructura jerárquica de la organización. Es más, no hay ninguna declaración que apunte en este sentido; por el contrario, alias 'Oscar Montero' o 'el Paisa' celebró la forma en la que se ejecutó el atentado, tanto que quería realizar uno de las mismas características por intermedio de los hermanos Carrillo Hernández en Bogotá. Este hecho se debe entender, tal y como lo refirió la representante del Ministerio Público, como una política de las FARC de atentar sistemáticamente contra las ciudades, la cual es atribuible al máximo órgano de dicha organización al margen de la ley: a los miembros del secretariado. (subrayado fuera de original).

42. Conforme a lo anterior, es posible para este despacho advertir que el conflicto armado fue la causa directa o indirecta de esta conducta punible ocurrida el 7 de febrero de 2003, que este contexto influyó en los autores, en su decisión de cometerla, en la capacidad para hacer el atentado y en la selección del objetivo. Es decir, se verifica la **existencia del ámbito material de competencia.**

43. Ahora bien, al estudiar el ámbito material y establecido que se trata de un asunto de competencia de la JEP, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016 han definido las conductas que pueden ser conocidas por la SAI específicamente por su naturaleza amnistiable. De acuerdo con ese marco normativo, las conductas amnistiables serán aquellas que sean delitos políticos o delitos comunes conexos al delito político que no hayan sido expresamente excluidos por el legislador de este beneficio transicional definitivo. Al respecto, el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 menciona una lista no taxativa de conductas no amnistiables, luego en el artículo 25 de esa norma se indica que de no proceder el beneficio de amnistía la SAI podrá remitir el asunto a otras Salas de Justicia de la JEP.

44. De acuerdo con el literal a del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no podrán ser objeto de amnistía, entre otros, aquellas conductas consideradas graves crímenes de guerra. Por ello, en este caso se pasará a realizar un examen de la conducta en la que participaron HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y

FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a la luz de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) con el propósito de verificar si es viable continuar con el trámite de amnistía o es necesario declarar su no amnistiabilidad, al menos de forma preliminar. El DIH es el marco jurídico que regula la conducta de las partes que participan en hostilidades y la protección a las personas y bienes que no participan en ese escenario.

45. En primer lugar, se analizarán los principios de distinción y precaución en el caso concreto y, en segundo lugar, se hará un examen del ataque en contra del Club el Nogal a la luz de la prohibición de ataques indiscriminados por el Estatuto de Roma y las normas del DIH compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

46. En lo que refiere al primer asunto, se tiene en cuenta que el principio de distinción constituye un fundamento del DIH. A este principio se refieren las primeras normas de DIH compiladas por el CICR, así la Norma 1 indica que "[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados"[36].

47. Este principio se ha consagrado en normas de los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo Adicional II 1977 a estos convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13 reglamenta la protección general de la población civil respecto de operaciones militares y establece "[n]o serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".

48. Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8.2.e).i) consagra como crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales el "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.". En ese orden, los ataques permitidos en el marco del DIH deben dirigirse exclusivamente en contra de objetivos militares; así lo consagra la Norma 7 del DIH del CICR. Al respecto, la Norma 8 del DIH indica que los bienes que pueden ser considerados

[36] CICR. (Primera edición: 2007) El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I: Normas.

objetivos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida".

49. En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal[37] de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil.

50. Al respecto, la sentencia condenatoria de la JPO reconoció que la rebelión tiene límites que deben respetar el DIH y procurar el respeto del principio de distinción encaminado a proteger a la población civil:

> En segundo lugar, Este Despacho no desconoce, como lo dice la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que los actos de rebelión no se agotan solamente en el enfrentamiento armado con los miembros de la fuerza pública, (…) [pues] el tipo delictivo también encuentra realización en la sola pertenencia del sujeto agente al grupo subversivo y que por dicha razón le sean encomendadas labores de cualquier naturaleza"
> Sin embargo, se reitera, las labores de cualquier naturaleza encomendadas a los integrantes del grupo alzado en armas tienen límites y no pueden cobijar, por ejemplo, actos de terrorismo en contra de población protegida por el Derecho Internacional Humanitario[38].

51. Ese ataque también constituyó una violación al principio de precaución el cual, según la Norma 14 del DIH implica que "[l]as operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar

[37] Cfr. Página web del Club El Nogal, https://www.clubelnogal.com/el-club/.
[38] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, pág. 317.

incidentalmente". Así mismo, la Norma 17 dispone que "las partes en conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de guerra para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y de heridos entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente". Al contrario de estos mandatos, la fecha y hora en la que ocurrió el ataque al Club el Nogal dejan ver que no se tomó ninguna precaución para evitar daños a civiles y bienes de carácter civil y se causó la muerte de 36 personas y se lesionaron otras 158, asimismo, este ataque dejó múltiples afectaciones materiales al mismo Club, a vehículos y a edificaciones aledañas.

52. La vulneración a los principios de distinción y precaución también quedaron evidenciados en lo establecido en la sentencia condenatoria cuando estudió la imputación del delito de terrorismo:

> […] debido a la puesta en peligro concreto de la vida de las personas que se encontraban dentro del club EI Nogal se materializó con un medio capaz de causar estragos (especialmente de las 158 personas que resultaron en peligro de muerte, lo que se encuentra plenamente demostrado en el proceso y se puede constatar por la clase de lesiones que ellas tuvieron), se puede inferir los fines terroristas en la realización de la conducta, razón por la cual se configura el delito de tentativa de homicidio con fines terroristas, pues la explosión del carro Renault Megane rojo fue un acto idóneo e inequívocamente dirigido a causar la muerte de todas las personas que se encontraran dentro de la onda explosiva, es decir, de todos los asistentes al club El Nogal en la noche del 7 de febrero de 2003, lo que significa que la consumación del delito de homicidio no se dio debido a circunstancias ajenas a la voluntad de los autores del delito[39].

53. Además de las graves violaciones a los principios de distinción y precaución del DIH, el ataque perpetrado en el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 fue parte de una política de las antiguas FARC-EP, según lo estableció la JPO.

54. Al respecto, se debe señalar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional castiga los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes"[40]. En este instrumento internacional, se entiende por graves violaciones al

[39] *Ibid.*, pág. 286.
[40] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998, artículo 8.

artículo 3 común a los cuatro Convenios de ginebra de 1949, entre otros, "[l]os atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura"; asimismo, se castigan como "otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional", (art. 8.e.i) "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades". De acuerdo con la Norma 12 del DIH son ataques indiscriminados aquellos:

> a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
> b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o
> c) en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional humanitario; y que, en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil[41].

55. Se destaca por este despacho que la SAI ya ha utilizado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para recalificar conductas cuando se corresponden con la lista de crímenes de guerra prevista en el artículo 8.2 literales c) y e) del ER[42].

56. En este caso, como se estableció en párrafos anteriores, el ataque no se dirigió contra un objetivo militar, sino en contra de un club social y empresarial. Por ello, este despacho pasa a referirse a los medios y métodos empleados para este ataque, en concreto el carro bomba. Al respecto, cuando la SA estudió el caso de un carro bomba que estalló frente a las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, indicó que los carros bombas pueden considerarse prohibidos a la luz del DIH, así:

> […] si bien los carros-bomba no están proscritos *per se* como armas de guerra conforme al DIH[43], su utilización en este caso no estaba permitida porque tuvo efectos previsiblemente indiscriminados y buscaba generar terror entre la población civil. Además, fue empleado exclusivamente como instrumento de ataque contra personas y bienes de carácter civil, lo cual está prohibido de forma expresa por el artículo 3.7 del Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas

[41] Comité Internacional de la Cruz Roja, *El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I: Normas*, Norma 12, p. 46.
[42] Cfr. Resolución SAI-AOI-D-ASM-051-2019 y resolución SAI-SUBA-AOI-D-075-2020.
[43] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP-SA-AM 273 de 2020, párr. 66.10.1.6.

trampa y otros artefactos[44] de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW por sus siglas en inglés)[45].

57. En el caso del ataque al Club El Nogal se puede ver que se dirigió en contra de población civil y dejó pérdidas humanas y materiales significativas. Al respecto, la JPO estableció:

> En el caso sub examen, no hay dificultad para establecer que la explosión ocurrida en el club El Nogal causó la muerte a 36 personas, lo que se encuentra plenamente demostrado en el proceso en los cuadernos anexos de inspección a cadáveres en donde reposan actas de levantamiento de cadáver de 36 cuerpos,' (véase también supra §4; II; A), hecho que configuró el delito de homicidio en concurso homogéneo con fines terroristas, pues el medio y el lugar utilizado para realizar la conducta hace ostensible y evidente que la misma, desde una valoración ex ante, generaría terror, zozobra y alarma colectiva. Las circunstancias conocidas ex post confirman lo que ex ante era previsible: la forma en la que las personas perdieron la vida generó terror y zozobra a nivel nacional, por las imágenes escalofriantes de personas con quemaduras de tercer grado que dejó sus tejidos carbonizados y, en general, por la sorpresa de la explosión en un lugar público, ajeno a la disputa bélica que padece internamente el Estado colombiano[46].

58. En ese orden de ideas, el ataque produjo muertes y lesiones de civiles que no eran objetivos militares y gozaban de protección a la luz del DIH. Al analizar esas conductas dentro del ordenamiento jurídico nacional se encuentra concordancia con lo establecido en el Código Penal colombiano – Ley 599 de 2000 que, en los artículos 135 y 136 contenidos en el título de delitos contra Personas y Bienes Protegidos por

---

[44] La norma prohíbe *"en todas las circunstancias"*, emplear minas, armas trampa u otros artefactos, *"sea como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia contra la población civil propiamente dicha o contra personas civiles o bienes de carácter civil"*. En los términos del artículo 2.5 del mismo Protocolo, el concepto *"otros artefactos"* comprende *"las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado"*. Los carros-bomba –ha dicho la SA– integran la categoría *"otros artefactos"* en tanto se trata de un *"artilugio improvisado que se acondiciona con material explosivo para que su deflagración cause daño y cuya ignición se realiza, generalmente, por medio de un control remoto o con temporizadores"*. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP-SA-AM 273 de 2020, párr. 66.10.1.2.

[45] Colombia aprobó la CCW, el Protocolo II de 1980 y el Protocolo II enmendado en la Ley 469 de 1998.

[46] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, pág. 285.

el Derecho Internacional Humanitario, tipifica las conductas de homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida respectivamente.

59. Según el artículo 135 estos homicidios se presentan cuando "[e]l que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia"; mientras que se incurre en el delito de las lesiones en persona protegida cuando "con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cause daño a la integridad física o a la salud de persona protegida conforme al Derecho Internacional Humanitario". Además, el parágrafo del artículo 135 indica que, para efectos de la aplicación de esas normas, se entenderá "por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario: 1. Los integrantes de la población civil; 2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa […]".

60. En este caso es claro que, *al menos de forma preliminar*, los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, podrán ser calificados en esta instancia como graves violaciones al DIH a la luz de los principios de distinción y precaución, y están excluidos del beneficio de amnistía. En consecuencia, al examinar en concreto los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fueron condenados los comparecientes en el proceso penal con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00, este despacho evidencia que pueden ser calificados, para efectos de este pronunciamiento y de forma preliminar, como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de conformidad con los artículos 135 y 136 del Código Penal colombiano. Además, el ataque con carro bomba al Club el Nogal puede constituir, en el examen inicial realizado en esta instancia, un ataque contra la población civil castigado por el artículo 8.e.i) del Estatuto de Roma y por la Norma 11 del DIH.

61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad por

constituir graves crímenes de guerra excluidos de este beneficio definitivo por el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016.

62. Conforme a esta determinación, la SA ha señalado que, si se advierte en el asunto "que el caso analizado por la SAI se enmarque, *prima facie*, en alguno de los priorizados por la SRVR, el expediente deberá ser remitido a dicha sala para que decida sobre su integración al mismo"[47].

63. Así, este despacho encuentra que los hechos por los cuales fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS en el proceso penal nro. 11001310700820050000500 pueden ser competencia de la SRVR en el marco del caso nro. 10 "Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano".

64. El 11 de julio de 2022, mediante Auto SRVR no. 102, la SRVR avocó conocimiento del caso nro. 10 en el cual convergen varias líneas de investigación de patrones de macro criminalidad entre los cuales se fijaron: (i) patrón de conductas no amnistiables cometidos en ejercicio del control social y territorial que incluye hechos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado y violencia sexual; (ii) patrón de conductas no amnistiables cometidas en el desarrollo de las hostilidades que agrupa acciones relacionadas con uso de medios y métodos ilícitos de guerra, así como hechos de violencia sexual, masacres y otros que ocurran en el contexto de un ataque; y (iii) patrón de conductas no amnistiables agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos en el que se agrupan hechos relacionados con homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, y otros atentados a personas y bienes civiles con explosivos, así como homicidios selectivos y atentados a civiles cometidos por o con el apoyo de redes urbanas de las FARC-EP.

65. En ese orden, los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003, cuando se realizó un atentado con explosivos en el club El Nogal en Bogotá por parte de integrantes de las antiguas FARC-EP, lo que ocasionó la muerte de 36 personas y se atentó en contra de la vida de otras 158, así como se ocasionaron daños materiales a ese club y a las edificaciones aledañas y a vehículos, se puede enmarcar en los patrones de macrocriminalidad (ii) y (iii) avocados por la SRVR en el caso nro. 10.

[47] Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, Sentencia Interpretativa SENIT 2, párr. 142.

66. De hecho, el mismo Auto SRVR no. 102 indica que la Sala de Reconocimiento avoca el caso nro. 10 en atención a la orden de tutela emitida por la SA el 2 de febrero de 2022[48], presentada por Martha Dolores López de Vargas, quien había solicitado en el 2019 su acreditación como víctima del atentado perpetrado por las FARC-EP en el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, así como la priorización de este hecho en un macrocaso sobre el mismo, o en alguno de los macrocasos actualmente en curso. En esa sentencia de tutela se ordenó resolver sobre la segunda ronda de priorización. Por ello, en el auto de la SRVR mencionado se indicó:

> La SA afirmó que la Sala de Reconocimiento tiene el deber de resolver sobre la segunda ronda de priorización, para que las víctimas puedan ser acreditadas y pueda despejar la inquietud de la tutelante respecto de si se analizará su caso de manera particular o como parte de un macrocaso que abra la Sala y en el cual pueda ser incluido el caso del club El Nogal[49].

67. En ese orden, considerando que HERMINSUL y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS fueron condenados por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo en el proceso penal nro. 11001310700820050000500 por los hechos ocurridos en el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, no cabe duda para este despacho que el expediente conocido en este trámite de la SAI debe ser remitido para el conocimiento de la SRVR en el marco del caso nro. 10.

68. Además, se advierte que, respecto de la ruta descrita en el trámite ante la SAI, se verifica en este caso concreto que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS recibieron el beneficio transicional provisional de libertad condicionada por parte de la JPO respecto de las conductas conocidas en proceso penal nro. 11001310700820050000500 y no procede respecto de las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo el beneficio de amnistía de *iure.* Si bien, en la sentencia de primera instancia los comparecientes fueron condenados por el delito de rebelión, en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá decretó la cesación de procedimiento por este delito, según el fallo del 26 de agosto de 2010.

[48] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Sentencia TP-SA 287 de 2022.
[49] JEP. SRVR. Auto SRVR no. 102, párr. 27.

69. En consecuencia, el asunto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS será remitido al caso nro. 10 de la SRVR para que sea estudiado dentro de los patrones de conductas no amnistiables cometidas en la conducción de hostilidades y de aquellas agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos, las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, por las que fueron condenados los comparecientes en sentencia del 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y recalificadas preliminarmente para efectos de este pronunciamiento como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional según el artículo 8.e.1) del Estatuto de Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000.

(ii) Sobre los beneficios transicionales conferidos por la Jurisdicción Penal Especial de Justicia y Paz y el régimen de condicionalidad aplicable

70. En la ley 1820 de 2016 se previeron varios beneficios para quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, entre ellos la amnistía y la libertad condicionada. Cuando empezó a operar esa legislación la competencia para conocer de las solicitudes de libertad condicionada estaba en cabeza de las autoridades judiciales ordinarias, de acuerdo con la mencionada ley y el decreto 277 de 2017. Sobre el particular la SA, en la Sentencia Interpretativa 2 (SENIT 2) de octubre de 2019, precisó:

> *ii) Las autoridades judiciales inicialmente competentes para conceder el beneficio definitivo de amnistía de iure y los provisionales de libertad condicionada o traslado a ZVTN*
>
> 46. Es de anotar que los dos cuerpos normativos que se ocuparon de la concesión de dichos beneficios antes de la entrada en funcionamiento de la JEP –la Ley 1820 y el Decreto 277–, también fijaron en cabeza de las autoridades judiciales ordinarias la competencia inicial para otorgarlos sin excluir que, a la postre, esta jurisdicción asumiría parte de esas atribuciones, aunque, en principio, lo haría sólo de manera residual. […]
>
> 47. Pero es fundamentalmente de la cronología de los beneficios que se desprende que, en principio, lo esperable era que dichos beneficios fueran resueltos por la jurisdicción ordinaria, de modo que la JEP se limitara a conocer de las peticiones rezagadas. En

> efecto, dado que las solicitudes podían elevarse desde la promulgación de la Ley 1820, esto es, desde el 30 de diciembre de 2016 y que, de acuerdo con los términos allí previstos y posteriormente aclarados en el Decreto 277 de 17 de febrero de 2017, dichas decisiones debían ser adoptadas en un término máximo de 10 días hábiles, era razonable prever que la mayoría de las solicitudes se presentarían y resolverían en el primer semestre de 2017, época para la cual la JEP aun no entraría en funcionamiento.

71. Ahora bien, el Acto Legislativo 01 del 2017 establece que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición "no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades"[50].

72. A partir de esta noción de relaciones de condicionalidad entre beneficios y obligaciones, la Corte Constitucional elaboró el concepto de "Régimen de Condicionalidad" en la Sentencia C-674 de 2017, estableciendo una serie de obligaciones genéricas que deben ser cumplidas por quienes pretenden recibir y mantener los tratamientos penales especiales contemplados en las normas que desarrollan el Acuerdo Final de Paz[51]. Para la Corte, la imposición, supervisión y seguimiento del régimen deben ser realizados por la JEP, bajo los siguientes parámetros:

> i) El régimen es *integral y comprensivo*, en tanto que se extiende a todos los beneficios y medidas sancionatorias especiales y es transversal a todos los componentes del Sistema Integral (JEP, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas);
>
> ii) Se extiende tanto al acceso como al mantenimiento de los beneficios, por lo que el incumplimiento de condiciones no solo impide el acceso a los tratamientos diferenciales, sino que puede implicar su suspensión o pérdida de forma proporcional a la falta y
>
> iii) Debe estructurarse bajo los *principios de proporcionalidad y gradualidad*, "en el sentido de que el nivel de contribución a la verdad, a la reparación y a la no repetición determina, al menos parcialmente, la magnitud de los beneficios susceptibles de ser

[50] Acto Legislativo nro. 01 del 4 de abril de 2017, artículo transitorio 1°.
[51] Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017, apartado 5.5.1.1.

> otorgados, y en el sentido de que la dimensión y la gravedad del incumplimiento de las condiciones determina el alcance de la pérdida del tratamiento especial"[52].

73. Estos desarrollos fueron recogidos en el artículo 20 de la ley 1957 de 2019 (Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP- LEJEP) que definió de manera más precisa las obligaciones que debe contener el régimen, así como, las consecuencias de su incumplimiento. El parágrafo 3 de ese artículo citado debe leerse en concordancia con el artículo 67 de la ley 1922 de 2018 según el cual las faltas en que incurran los comparecientes originarán la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

74. El Acto Legislativo 01 del 2017 también prevé que para acceder al tratamiento especial del componente de Justicia del SIVJRNR, los comparecientes deberán aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición[53]. Esto, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 1820 del 2016, según el cual la concesión de los beneficios previstos en esa norma "no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz"[54]. Para ello, las Salas y Secciones cuentan con la posibilidad de implementar mecanismos tales como el formato F-1 o la convocatoria a diligencias de aporte a la verdad.

75. Para tal efecto, teniendo en cuenta que las Salas deben contar con instrumentos para desplegar aquella tarea y considerando que este no solo debe contener el compromiso de aportar la verdad sobre las conductas propias y las de otras personas, sino también dar información exhaustiva y detallada para esclarecer fenómenos de macro criminalidad y victimización por medio de datos de orden personal y de contexto, que contribuyan a descubrir de un modo completo estas estructuras, redes, nexos, forma de financiación y patrones, la SA creó el anexo o formato F-1. Según lo descrito en la Sentencia Interpretativa, el formato F-1 es una planilla de recolección de información que tiene como fin práctico la "aplicación homogénea de los principios que justifican la transición" y la gestión adecuada de la interacción restaurativa y el ejercicio de las competencias de la JEP. Así mismo,

[52] *Ídem.*
[53] Acto Legislativo nro. 01 del 4 de abril de 2017, artículo transitorio 5°.
[54] Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, Sentencia Interpretativa 1 TP-SA-SENIT 1 de 2019.

debe ser suscrita cuando la persona se presenta ante la JEP o en cualquier momento a partir de entonces.

76. Este formato F-1 ha sido considerado, de acuerdo con la jurisprudencia de la SA, como "un mecanismo de carácter obligatorio, diseñado con varios propósitos, entre ellos, recoger aportes preliminares a la satisfacción de los derechos de las víctimas y, en especial, a la verdad, de forma sistematizada y propicia para nutrir las bases de datos de la JEP y posibilitar así el cruce de información"[55].

Análisis del caso concreto

77. Respecto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS este despacho advierte que fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP en la OACP en la resolución nro. 01 del 27 de febrero de 2017; recibió el beneficio de LC el 5 de mayo de 2017 por parte del Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

78. En lo que tiene que ver con FERNANDO ARELLÁN BARAJAS este despacho encontró que también fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP mediante resolución 03 del 18 de abril de 2017 expedida por la OACP, y recibió el beneficio de LC en decisión del 3 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Boyacá en relación con las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

79. En consecuencia, el mantenimiento del beneficio transicional de LC por parte de los comparecientes HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS quedará sometido al siguiente régimen de condicionalidades que por medio de esta providencia impone este despacho de la SAI de la JEP; sin perjuicio de que, luego de su firma, se pueda llamar a los comparecientes para que continúen cumpliendo el compromiso de contribuir a la verdad mediante la presentación de una entrevista u otros mecanismos. Así, los comparecientes deberán:

[55] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 607 de 2020, párr. 38.

1. Informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Secretaría Ejecutiva.
2. No salir del país sin previa autorización de la Sala de Amnistía o Indulto.
3. Garantizar la dejación de armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de delitos contemplados en nuestra legislación penal.
4. Participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas.
5. Comparecer ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas o ante la JEP cuando sea requerida, aportando verdad plena.
6. Comparecer ante la JEP cuando sea requerido en trámites judiciales, incluidos, pero no limitados, a los que usted adelante en causa propia.
7. Contribuir por escrito al esclarecimiento de la verdad para que informe sobre hechos y conductas de las que tenga conocimiento para efectos de determinar máximos responsables políticos y militares en las antiguas FARC-EP de las que fue integrante.
8. Diligenciar de manera íntegra y exhaustiva el formato F-1 que se pondrá en su conocimiento.

80. Conforme a lo expuesto, HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS deberán, con el acompañamiento de su abogado o abogada de confianza, o en caso de no contar con uno, con un profesional del derecho adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP, remitir por vía electrónica, el acta de Régimen de Condicionalidad que se adjunta a la presente resolución. Esta acta servirá como constancia de su entendimiento sobre las obligaciones a las cuales están sometidos en relación con esta jurisdicción especial y el SIVJRNR.

81. Además, en concordancia con la jurisprudencia de la SA y como materialización de la obligación contenida en los numerales 7 y 8 del Régimen de Condicionalidad que les será comunicado a los comparecientes, se espera contar con el formato F-1 debidamente diligenciado.

82. En el caso de FERNANDO ARELLÁN con ocasión de la autorización de salida del país concedida por la SAI, mediante resolución SAI-SP-D-MGM-117-2022 del 4 de marzo de 2022, el interesado allegó el formato F-1 diligenciado. Por ello, se tendrá en cuenta dicho formato sin perjuicio de que FERNANDO ARELLÁN remita a este

despacho una versión actualizada o completa del formato F-1 que sirva para este trámite concreto.

83. Por su parte, HERMINSUL ARELLÁN deberá, con el acompañamiento de su abogado o abogada de confianza, remitir debidamente diligenciado el mencionado formato F-1 dentro de los veinte (20) hábiles siguientes a la notificación de esta resolución. El incumplimiento injustificado de esta obligación podría implicar una infracción al Régimen de Condicionalidad, con la subsiguiente imposición de sanciones que pueden derivarse de un incidente de incumplimiento. En este formato F-1 el interesado deberá referirse en particular y de manera detallada a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se dio su pertenencia a las FARC-EP y que llevaron a la comisión de los hechos por los que fue condenado por el ataque al club El Nogal del 7 de febrero de 2003.

(iii) La competencia prevalente de la JEP y la solicitud de la suspensión del cobro coactivo realizado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por parte de la UARIV

84. De acuerdo con el apartado 5.1.2 *justicia* del Acuerdo Final para la Paz la JEP ejercerá competencia de forma prevalente sobre actuaciones penales, disciplinarias o administrativas cuando se trata de conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, así:

> El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.
>
> Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos. […]

85. Esta misma disposición se encuentra en el artículo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2017. De igual, forma el artículo 36 de la Ley 1957 de 2019 (LEJEP) establece la prevalencia de la JEP.

86. El numeral 3.2 del Acuerdo Final para la Paz "Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses", pone de presente que el proceso de reincorporación tiene:

> [C]arácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

87. Acorde a ello, el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 2017 estableció que para efectos de la reincorporación las penas impuestas en la JPO por delitos de competencia de la JEP quedarán en efecto suspensivo en los siguientes términos:

> Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia.

88. Al estudiar esta norma, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del precepto en sentencia C-674 de 2017, e indicó que estas medidas de dejar en efecto suspensivo las sanciones penales derivadas de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado:

> [S]e orientan a materializar las exigencias inherentes a la terminación del conflicto armado y al principio de participación política como eje esencial del ordenamiento superior, en cualquier caso deben ser articuladas con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario […]

> En efecto, la reincorporación a la vida pública de quienes han intervenido en el conflicto armado constituye un elemento decisivo y determinante del proceso de paz, teniendo en cuenta, por un lado, que una de las razones que han esgrimido quienes han participado en los escenarios de violencia generalizada y sistemática del país es la carencia de espacios de participación democrática para canalizar las necesidades, los intereses y las expectativas de todo el conglomerado social, y por otro lado, que la disposición de los grupos armados al margen de la ley para entregar las armas ha estado condicionada a que se abran estos espacios de participación política, para "sustituir las armas por la política". De este modo, la reincorporación a la vida pública de quienes intervinieron en el conflicto armado, particularmente de los grupos armados al margen de la ley, constituye un elemento crucial en el proceso de construcción de una paz estable y duradera[56].

89. En aplicación de esta norma, la Subsección segunda de Tutelas de la Sección de Revisión del Tribunal Para la Paz al estudiar la acción de tutela interpuesta por una exintegrante de las antiguas FARC-EP, compareciente ante la SRVR, en contra de quien se adelantaba un proceso de cobro coactivo por la UARIV, indicó en sentencia SRT-ST-090/2023 del 25 de mayo de 2023 que:

> […] aquellas sanciones que se deriven de delitos de competencia de esta jurisdicción quedaron en efecto suspensivo para efectos de la reincorporación de los firmantes, es decir, no se produce una extinción sino una suspensión respecto de los efectos de la condena sobre estos delitos
> […]
> Por otra parte, se evidencia que la UARIV desconoce que de conformidad con el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 2017, aquellas sanciones que se deriven de delitos de competencia de esta jurisdicción quedaron en efecto suspensivo para efectos de la reincorporación de los firmantes.

90. Por lo anterior, la Sección de Revisión ordenó a la UARIV "determinar la suspensión del cobro coactivo en todo o parte" para lograr la exitosa reincorporación de la firmante.

91. En consecuencia, es posible conceder la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por la UARIV respecto de una condena impuesta por la JPO de delitos que son competencia de la JEP y cuando se trate de un compareciente al cual no se le ha resuelto definitivamente su situación ante esta jurisdicción a fin de lograr

[56] Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

su proceso de reincorporación, considerando que este es un pilar esencial del Acuerdo Final de Paz.

92. Ahora bien, esta suspensión deberá observar los compromisos adquiridos ante el sistema Integral para la Paz (o SIVJRNR) y el principio de continua adaptación de la comparecencia. Según la Sentencia Interpretativa 2 (SENIT 2) este principio se constituye como un:

> [E]stándar que sintetiza la necesidad institucional de adaptar la realidad de los comparecientes que disfrutan beneficios provisionales de la transición, de la manera que mejor se ajuste a los objetivos del Sistema. Esto supone la necesidad de mantener o fomentar la confianza construida a través de mecanismos provisionales de acceso a la libertad, sin perder de vista el imperativo de asegurar una efectiva contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. No puede pasarse por alto, entonces, que el ajuste en las condiciones de comparecencia es indispensable para lograr que los mecanismos de justicia transicional cumplan efectivamente con los estándares y normas internacionales en la materia. El Estado debe garantizar que se investiguen y sancionen las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; que se repare a las víctimas; y que se conozca la verdad de lo acontecido. Por tanto, la primera obligación del sistema es asegurar que las personas comparezcan de verdad y realmente para que cumplan ante la sociedad y las víctimas los compromisos adquiridos.

93. En ese orden, la suspensión del proceso de cobro coactivo ante la UARIV tiene el propósito de facilitar el proceso de reincorporación del compareciente, así como su proceso de comparecencia a la JEP, el desarrollo del régimen de condicionalidad y el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

Caso concreto

94. En el caso de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, el interesado solicitó a la JEP la suspensión del cobro coactivo adelantado por la UARIV en su contra como consecuencia de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00. En esa solicitud (ver *supra* párr. 15), HERMINSUL ARELLÁN hizo referencia a la competencia prevalente de la JEP respecto de sanciones penales,

disciplinarias o administrativas respecto de conductas ocurridas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, incluyendo la facultad de extinguir o anular la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta, así como a su vinculación al proceso de reincorporación. Además, el solicitante indicó respecto del cobro realizado por la UARIV que "no cuenta con fundamento jurídico y es una clara vía de hecho de la administración, en tanto se trata de un asunto de competencia prevalente de la JEP. En sustento de su petición remitió copia de un documento emitido por el Banco Agrario de Colombia que evidencia el embargo a la cuenta de ese banco del interesado por parte de la UARIV por un valor de $1.133.400.000. Por lo anterior, solicitó:

> La suspensión económica y traslado a la JEP del expediente emitido por el Juzgado Octavo (8) Penal Del Circuito Especializado De Bogotá D.C, de radicado 11000131070082005-0005, por parte de la Unidad de Víctimas (Oficina de Cobro coactivo – por la suma de 1´133.400.000 mil ciento treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos), toda vez que el Juzgado ya lo hizo y dio traslado a la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP. La presente solicitud fundamentada con lo establecido en literal b) del artículo 79 de la ley 1957 de 2019, que establece la obligación de las autoridades judiciales y administrativas del Estado Colombiano de trasladar las sentencias e investigaciones que se fundamenten en conductas que se relacionen directa o indirectamente con el conflicto armado.

95. Por lo anterior, en resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022 del 17 de junio de 2022, este despacho requirió a la UARIV para que informara acerca de los cobros coactivos realizados al interesado. En atención a ello, la UARIV indicó que la multa de 1.000 S.M.L.M.V, equivalentes a quinientos sesenta y seis millones setecientos mil pesos por la que fue condenado HERMINSUL ARELLÁN en la sentencia del 28 de noviembre de 2008 proferida por la JPO:

> […] se constituyó una obligación clara, expresa y actualmente exigible, susceptible de ser cobrada por jurisdicción coactiva por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
>
> […] dentro del mismo procedimiento, se avocó conocimiento mediante Auto 590 del 08 de julio de 2014, ordenando iniciar [la] etapa de cobro persuasivo; el 19 de abril de 2017, se emitió [el] mandamiento de pago y, finalmente se [decretaron] medidas cautelares el 18 de julio de 2017 a través del Auto 7755.

> Asimismo, le manifestamos que, el señor Herminsul Arellán Barajas, interpuso acción de tutela por derecho de petición en el mes de marzo de 2022, ante el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, la cual no prosperó.
>
> Ahora bien, es preciso mencionar, que la forma de dar terminación a este tipo de proceso es el pago total de la multa y, de esta manera, levantar las medidas cautelares que fueron decretadas sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria […]. Por otra parte, puede presentar una propuesta de acuerdo de pago previa garantía de la obligación o, por orden judicial donde se determine que operó la extinción de las penas tanto de prisión como de multa, esta última, de vital interés para nosotros.
>
> Finalmente, esta institución indicó "que la Unidad para las Víctimas se encuentra en total disposición, a fin de generar articulación con su respetado despacho, para abordar este tema"[57].

96. Con el propósito de verificar la vinculación al proceso de reincorporación liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), este despacho consultó el Sistema de Apoyo para la Reincorporación (SARA) el 6 de junio de 2023, en el cual se reporta que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS se desmovilizó colectivamente, ha completado el ciclo 6 de formación agropecuaria y se encuentra activo en el proceso de reincorporación.

97. En ese orden, en aplicación del artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional, es procedente ordenar la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por la UARIV en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS. Para ello, este despacho considera que en este caso debe tenerse en cuenta que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS:

(i) fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP por la OACP;
(ii) recibió el beneficio de LC por la JPO por la condena impuesta el 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00;
(iii) suscribió el Acta de Compromiso de Libertad Condicional nro. 100496 el 10 de marzo de 2017 y el 9 de enero de 2018, el Acta de Compromiso – Reincorporación Política, Social y Económica nro. 500975 ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP, las cuales aparecen vigentes en el sistema de gestión documental CONTi de la JEP;

[57] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 191 a 195.

(iv) se evidencia en esta decisión que los hechos condenados en esa sentencia mencionada son competencia de la JEP y serán remitidos por este despacho a la SRVR para que sean conocidos dentro del caso nro. 10;
(v) con ocasión del beneficio provisional de LC concedido por la JPO, mediante esta decisión se impone el régimen de condicionalidad al interesado y se le requiere para diligencia de manera exhaustiva el formato F-1; y
(vi) se encuentra vinculado al proceso de reincorporación a cargo de la ARN en el cual se encuentra activo.

98. Por lo anterior, en ejercicio de la competencia prevalente de la JEP, al tratarse de un firmante de paz, compareciente ante la JEP y respecto de quien la definición de su situación jurídica quedará bajo la competencia de la SRVR, se ordenará la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por parte de la UARIV en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS con el propósito de cumplir con los fines de su reincorporación en atención al principio de continua adaptación de la comparecencia. Por ello, esta decisión considerará el debido cumplimiento del régimen de condicionalidad y la materialización de los derechos de las víctimas. En consecuencia, esta suspensión operará una vez el compareciente suscriba el régimen de condicionalidad y remita diligenciado de forma exhaustiva el formato F-1.

99. Además, la suspensión del proceso de cobro coactivo por parte de la UARIV no implicará el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el marco de ese proceso.

100. La renta básica de la que trata el artículo 8 del decreto 899 de 2017, modificado por el artículo 284 de la ley 1955 de 2019, de la cual se beneficia quien cumpla con la ruta de reincorporación y considerando, como lo establece la norma citada, que "este beneficio no será considerado fuente de generación de ingresos" deberá brindarse al compareciente a través de una nueva cuenta bancaria a fin de cumplir y facilitar su proceso de reincorporación. Para ello, se le solicitará a la ARN que informe a este despacho sobre esa asignación mensual en favor del interesado, así como el cumplimiento de sus compromisos en el proceso de reincorporación.

101. Esta suspensión del cobro coactivo estará condicionada a que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS cumpla con sus compromisos ante el SIVRJR, entre ellos su efectiva reincorporación. En consecuencia, también se le solicitará a la ARN que

informe sobre cualquier incumplimiento o limitante del proceso de reincorporación del compareciente.

102. Estas condiciones en las que se concede la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por la UARIV buscan facilitar el proceso de comparecencia y reincorporación del interesado, así como garantizar los derechos de las víctimas y su centralidad en los trámites ante la JEP.

(iv) Participación de las víctimas en este trámite

103. La participación de las víctimas en los trámites adelantados ante la JEP es un derecho amparado constitucionalmente. El artículo 12 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 exige que las normas en las cuales se desarrolla el procedimiento ante la JEP garanticen la "participación de las víctimas como intervinientes según los estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el Acuerdo Final". Así mismo, la Corte Constitucional estableció que "la garantía de los derechos de las víctimas es el fundamento y finalidad esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz"[58]. Por ello, este despacho procurará concretar el ejercicio del derecho a participar de las víctimas en el trámite adelantado ante la JEP respecto de los ciudadanos HERMINSUL y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS.

104. Como lo ha establecido la SA, la intervención de las víctimas en todos los procedimientos ante la JEP es una condición que posibilita el óptimo funcionamiento del Sistema Integral para la Paz. Las víctimas son quienes mejor conocen la dimensión del daño causado y recuerdan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos[59]. En esta Jurisdicción, según lo fijado por la SA, "la notificación es la manera de dar a conocer las providencias a los sujetos procesales, intervinientes especiales o a quienes tienen un interés jurídico concreto en la actuación"[60].

105. La SA, en la Sentencia Interpretativa 3 de 2022 (SENIT 3), estableció que el trámite ante la SAI debe ser notificado a todas las víctimas que puedan ser identificadas o individualizadas, según las piezas procesales del expediente "al margen de que se desconozcan sus datos específicos de identificación (nombres, apellidos o documento de identidad)". En ese orden, las víctimas que deben ser

[58] Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018.
[59] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa 1 de 2019, párr. 69.
[60] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa 3 de 2022, párr. 169.

notificadas de estos trámites son "las personas que, a partir de los elementos obrantes en el expediente, puedan identificarse o individualizarse como que han sufrido menoscabos en sus derechos como consecuencia de los hechos, al margen de que se desconozcan sus datos de identificación completos". Estas personas, según la SENIT 3, pueden ser determinadas si es que se conoce al menos sus nombres y apellidos e indeterminadas si se desconoce los datos de identidad o se tienen incompletos. Por ello, a continuación, se presentan las victimas identificadas en el proceso nro. 11001310700820050000500 en primera instancia:

(i) víctimas de homicidio agravado[61]:

1. Oscar Enrique Barbosa Peña,
2. Juan Pablo Jiménez Pinzón,
3. Andrés Ruiz Arizabaleta,
4. Hugo Silva Parrado,
5. Alejandro Ujueta Amorocho,
6. Manuel Antonio Ferro Cruz,
7. Marco Tulio Hernández Leguizamón,
8. Alejandro Guzmán Cruz,
9. Iván Jiménez Cuervo,
10. Ana María Arango Castro,
11. Jorge Andrés Arango Garavito,
12. Germán Alexander Munévar Cardenas,
13. Bella Nancy Méndez Díaz,
14. Yesid Osiros Castiblanco Roa,
15. Mauricio Domínguez Peñaloza,
16. Dora Nelsy Izquierdo Rodríguez,
17. María Gladys Quiroga Cuadros
18. Juan Sebastián Carrillo Sarria,
19. Catalina Muñoz Toffoli,
20. Luisa Fernanda Solarte Angulo,
21. Jesús Manuel Díaz Moreno,
22. Gustavo Adolfo Forero Rubio,
23. Luisa Fernanda Mugno Varela,
24. Diego Salazar Peláez,
25. Rafael Eduardo Amaya Zambrano,
26. Hugo Oswaldo Silva Parrado,
27. Milton Ricardo Martínez,
28. Luis Eduardo Mutis Rodríguez,
29. Edgar Fernando Sarmiento Manrique,
30. Mariana García Mugno,
31. Sergio Alejandro Muñoz Salame,
32. Marco Alfonso Baracaldo Jiménez,
33. Juan Manual García Posada,
34. César Augusto Caicedo Cruz,
35. Julio Antonio Robayo Ferro,
36. Jhon Fredy Arellán Zúñiga,
37. Oswaldo Arellán Barajas

(ii) víctimas de tentativa de homicidio[62]:

[61] Cfr. Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 206 a 207.
[62] *Ibid*.

1. Adalberto Gutiérrez,
2. Adolfo Murillo,
3. Alejandra Guzmán,
4. Alejandro Pérez Gamboa,
5. Alexander Lemus Pulido,
6. Alexander Pérez,
7. Alfonso Adat,
8. Alfonso Cortez (sic),
9. Álvaro Chaparro,
10. Amalia Saade,
11. Amilker Parada,
12. Amparo Ortega,
13. Ana Mercedes Gómez,
14. Andrés Ceballos,
15. Andrés Rodríguez,
16. Ángela García,
17. Ariolfo Joya,
18. Arlin Gara de Gómez,
19. Armando Acosta,
20. Bertha Lucía Frías,
21. Camilo Mantilla,
22. Camilo Rodríguez,
23. Carlos Alberto Botero,
24. Carlos Alberto Rancel,
25. Carlos Arturo Martínez,
26. Carlos Augusto González,
27. Carlos Carrillo,
28. Carlos Cortés Rodriguez,
29. Carlos Vargas,
30. Catalina Peláez Franco,
31. Ciro Acosta,
32. Claudia Martínez,
33. Conor Colleary,
34. Cristina Penagos,
35. Daniel Pacheco Vásquez,
36. Diego García,
37. Diego Ramírez,
38. Doris Acosta,
39. Edgar Augusto Pamplona,
40. Edgar García,
41. Edmundo del Castillo,
42. Eduardo García,
43. Eduardo Ramírez,
44. Edwin Tapias Camargo,
45. Elizabeth Alwets Ochoa,
46. Erick Suárez,
47. Esperanza Cantor,
48. Estefan Espinos,
49. Fabián Silva,
50. Fabio Castro,
51. Fernando Galindo,
52. Flaminio Solano,
53. Frederick Hoyos Schryver,
54. Fredy Medina,
55. Germán Bobadilla,
56. Gilberto Rincón González,
57. Gladys Martínez,
58. Guillermo Botero,
59. Guillermo Sánchez,
60. Héctor Andrés Vega,
61. Henry Mejía,
62. Hernán Darío Botero,
63. Heydi Durán de López,
64. Ivonne Ahuchar Agudelo,
65. Ivonne Hause,
66. Jacinto Aponte,
67. Jairo Ramírez,
68. Javier Antonio Salazar,
69. Javier Espitia,
70. Javier Gutiérrez Parra,
71. Johanna Romero,
72. Jorge Monroy,

73. José Farfán,
74. José Luis Palacios,
75. José Manuel Patiño,
76. José Tafur,
77. Joya Aliorfo,
78. Juan Carlos Bejarano,
79. Juan Carlos Ruiz,
80. Juan Carlos Villamizar,
81. Juan Cristóbal Pérez,
82. Juan David Restrepo,
83. Juan Jareyi Zambrano,
84. Juan Ujueta Amorocho,
85. Julián Amaya,
86. Julián Vásquez,
87. Juliana Diaz,
88. Juliana Mazuera Mejía,
89. Kyu Whon,
90. Laura García,
91. Libardo Moreno,
92. Luis Aldalvis Fúquene,
93. Luis Yage Jimeno,
94. Luz Ángela Merino,
95. Luz Marina Vásquez Uribe,
96. Manuel Pinilla,
97. María Luisa Rincón Silva,
98. María Morales de Barrios,
99. Maria Teresa Bohórquez,
100. Marión García,
101. Martha Myriam Mendoza Ávila
102. Marcela Catalina Zambrano,
103. Marcelo Mariano Muñoz,
104. Mauricio Rubio García,
105. Margarita del Río,
106. María Adelaida Jaramillo,
107. María Alejandra Naranjo Vallejo
108. María Andrea Domínguez,
109. María Camila García,
110. María Camila Silva,
111. María Constanza Cediel,
112. María Cristina de Salazar,
113. María Inés Trujillo,
114. María Leonor Díaz,
115. Miltón Rodríguez,
116. Milton Vera,
117. Mónica Echeverry Palacio,
118. Mónica Garcia,
119. Natalia Arboleda Tamayo,
120. Nelson Acosta,
121. Nelson Acosta Pinto,
122. Nelson Carrillo,
123. Nelson Siabato,
124. Nicolás Libos Sad,
125. Octavio Salvador Yepes,
126. Oscar Gómez Villa,
127. Oscar Rosales,
128. Otto Shool,
129. Paola Carrillo,
130. Pilar Hurtado,
131. Rafael Carvajal,
132. Ramón Mazot,
133. Reimundo Patiño,
134. Ricardo López,
135. Ricardo Sotelo,
136. Roberto Pardo,
137. Rodrigo Márquez,
138. Ruth Adriana Blanco,
139. Sandra Martínez,
140. Sandra Durán,
141. Sandra Moreno,
142. Santiago García,
143. Sandra Herrera Pérez,
144. Sebastián Baena,
145. Sergio Caicedo,

146. Sergio Mejia,
147. Sonia Barsowe,
148. Susana Berón,
149. Tatiana Petrano,
150. Tomás García,
151. Valentina Rendón Escobar,
152. Víctor Mauricio Sinisterra,
153. Víctor Santiesteban,
154. Vivian Vargas,
155. Viviana Moreno,
156. Wilfredo Rodríguez Benavides,
157. Yaneth Gamboa y
158. Yesid Gutiérrez.

106. El apoderado de la Corporación El Nogal intervino en la segunda instancia y solicitó que se condenara a los interesados "por los daños y perjuicios derivados de las conductas punibles por las que fueron procesados". Por ello, también se notificará de este trámite al club El Nogal.

107. Ahora bien, en las piezas procesales remitidas por el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, así como las que allegó la UIA en el informe final rendido el 2 de octubre de 2022, este despacho no encontró información adicional sobre la identificación de las víctimas, datos de contacto o ubicación, o información sobre su representación judicial. Además, la UIA tampoco remitió la información sobre la identificación y ubicación de las víctimas solicitada por este despacho en la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022.

108. En consecuencia, se reiterará la orden dada a la UIA de la JEP para que adelante todas las gestiones necesarias a fin de allegar la información pertinente sobre la identificación y ubicación de las víctimas identificadas en el proceso penal con radicado 11001-31-07-008-2005-00005-00 y se le solicitará a la Secretaría Judicial de la SAI seguir la ruta fijada en la Sentencia Interpretativa SENIT 3 de 2022, para lograr su notificación, para lo cual tendrá a disposición los procesos penales que reposan en el expediente digital de la referencia y podrá solicitar la colaboración de las autoridades judiciales correspondientes.

109. Además, se le solicitará al Departamento de Atención a Víctimas de la JEP (DAV) que realice el acompañamiento a las víctimas y les preste asesoría en este trámite que continuará ante la SRVR, a menos que dicha Sala de Justicia disponga algo diferente.

110. Las víctimas podrán acceder en todo caso a los estados electrónicos para enterarse de las providencias que se expidan posteriormente y, si llegaren a realizar algún tipo de manifestación de la que se infiera su interés de participar, se les podrá acreditar[63] para lo cual se espera contar con el acompañamiento del DAV.

111. Finalmente, siguiendo lo establecido en la Sentencia Interpretativa SENIT TP-SA 3 de 2022, una vez agotados los esfuerzos para lograr ubicar y notificar a las víctimas en este asunto, se dispondrá su emplazamiento con los canales digitales establecidos en la SENIT 3 de 2022 o, a falta de ellos, según lo fijado en el artículo 10 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022.

V. DECISIÓN

112. En mérito de lo expuesto, este despacho de la Sala de Amnistía o Indulto,

RESUELVE

PRIMERO: RECALIFICAR de forma preliminar como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional según el artículo 8.e.1) del Estatuto de Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000, los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., en sentencia del 28 de noviembre de 2008, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

SEGUNDO: DECLARAR LA NO AMNISTIABILIDAD anticipada de los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, recalificados en esta instancia de forma preliminar como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional según el artículo 8.e.1) del Estatuto de

[63] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. TP-SA-SENIT 3 del 21 de diciembre de 2022, párr. 200.

Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000, por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C. en sentencia del 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

TERCERO: REMITIR POR COMPETENCIA al Caso nro. 10 de la SRVR "Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC- EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano" al patrón de conductas no amnistiables agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos en el que se agrupan hechos relacionados con homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, y otros atentados a personas y bienes civiles con explosivos, así como homicidios selectivos y atentados a civiles cometidos por o con el apoyo de redes urbanas de las FARC-EP, el expediente LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001 correspondiente al trámite del ciudadano HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y, que según está decisión también se refiere a la situación del ciudadano FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, para que en el marco de sus competencias, se pronuncie sobre los hechos y conductas por las cuales fueron condenados en el proceso penal ordinario nro.11001-31-07-008-2005-00005-00 conocido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá.

CUARTO: Por Secretaría Judicial, **NOTIFICAR** esta resolución a los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C. y a sus abogados[64], según la ruta fijada en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022. Además, **REQUERIRLOS**:

(i) para que, con asistencia de su apoderado y ante la Secretaría Judicial de esta Sala, **DILIGENCIEN** y **SUSCRIBAN** el Acta de Régimen de Condicionalidad que se adjunta y la **REMITAN** a este despacho dentro de los

[64] En el expediente LEGALi 1500220-44.2022.0.00.0001, en el cual se tramitó la solicitud de salida del país de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS se reconoció personería al abogado Juan David Bonilla Quintero, adscrito al SAAD, con correo electrónico jbonilla@contratista.oei.org.co.

diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución. Los comparecientes deberán remitir una imagen digital del acta debidamente diligenciada al correo electrónico info@jep.gov.co. En caso de que esto no fuera posible mediante abogado y sin necesidad de que las diligencias ingresen al despacho, **COMISIONAR** a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, para que, a través del enlace territorial del lugar más cercano al domicilio de los interesados, en el término de cinco (5) días hábiles, proceda al cumplimiento de la esta orden, y en dicho acto los solicitantes procedan a **SUSCRIBIR** el régimen de condicionalidad anexo a la presente resolución.

(ii) a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS para que **DILIGENCIE** de manera exhaustiva el formato F-1 que se adjunta a esta providencia, como cumplimiento del deber de contribuir a la verdad del conflicto armado. El compareciente deberá **REMITIR** a este despacho el mencionado formato en el término perentorio de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión. El compareciente deberá remitir una imagen digital del formato debidamente diligenciada al correo electrónico info@jep.gov.co. Así mismo, se instará a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS para que complete y ajuste, según considere, el formato F-1 allegado a esta Jurisdicción en cumplimiento de la resolución SAI-SP-D-MGM-117-2022 del 4 de marzo de 2022, que le autorizó la salida del país, para efectos de este trámite. Para ello, FERNANDO ARELLÁN BARAJAS deberá **REMITIR** a este despacho el mencionado formato en el término perentorio de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión.

QUINTO: Por Secretaría Judicial, **PREVENIR** a los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS que el incumplimiento injustificado de las obligaciones en el Régimen de Condicionalidad que aquí se comunica, puede llevar a la apertura de un incidente de incumplimiento en su contra, con las eventuales sanciones que puedan derivarse de este.

SEXTO: Por Secretaría Judicial, **INFORMAR** a Migración Colombia que, con fundamento en esta resolución, los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., no podrán salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz.

SÉPTIMO: Por Secretaría Judicial de la Sala, teniendo en cuenta el Acuerdo AOG nro. 039 del 17 de septiembre de 2020, **COMUNICAR** al Departamento de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, en su calidad de administrador de la herramienta tecnológica "Vista Materializada", el oficio que se remita a Migración Colombia, para lo de su competencia.

OCTAVO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **INCLUIR** en los datos del expediente LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001 como compareciente a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C. junto a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS.

NOVENO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **REITERAR** la orden dada a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el numeral octavo de la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022 que decía:

> **OCTAVO: COMISIONAR** a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que establezca la información pertinente sobre la identificación y ubicación de las víctimas de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS en el atentado terrorista por el cual fue condenado en el marco del proceso con radicado 11001-31-07-008-2005-00005-00.

Esta reiteración implica que la UIA debe adelantar todas las diligencias, incluida la búsqueda selectiva en bases de datos, tendrá a disposición los procesos penales que reposan en el expediente digital de la referencia y podrá solicitar la colaboración de las autoridades judiciales correspondientes. Para el cumplimiento de esta orden la UIA *tendrá quince (15) días* a partir de la comunicación de esta decisión. Por ello, este despacho advierte a la UIA que, si el término llegare a vencerse sin que se cumpla el objeto de la comisión, deberá informar a este despacho las razones por las cuales se hizo necesario realizar lo ordenado extemporáneamente y deberá continuar las gestiones hasta su cumplimiento en el menor tiempo posible, sin que sea necesario emitir un nuevo pronunciamiento de sustanciación por parte de este despacho.

DÉCIMO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **NOTIFICAR** esta decisión a las víctimas directas e indirectas identificadas en el proceso penal proceso nro. 11001310700820050000500 según los párrafos 103 a 111 de esta decisión, siguiendo la ruta fijada en la en Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022 y según la información remitida por la UIA en cumplimiento de la comisión reiterada en esta decisión. En consecuencia, la Secretaría deberá advertirles en el oficio de notificación que podrán intervenir de manera voluntaria, por sí mismas o a través de apoderado,

en el trámite de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, y podrán acceder a asistencia psicosocial y jurídica. Además, la Secretaría deberá indicarles que, si se encuentran interesadas en intervenir, deberán informarlo al correo electrónico info@jep.gov.co y solicitar ser contactadas por el Departamento de Atención a Víctimas de la JEP (DAV). En caso de no lograr su notificación, una vez agotadas las labores de la UIA y del DAV ordenadas en esta resolución, se procederá a emplazarlas en los términos del párrafo 111 de esta decisión.

DÉCIMO PRIMERO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **SOLICITAR** al Departamento de Atención a Víctimas de la JEP (DAV) que, en un término de quince (15) días contados desde la comunicación de esta resolución, (i) informe si cuenta con información sobre las víctimas del ataque al Club el Nogal ocurrido el 7 de febrero de 2003 y conocido en el expediente penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00 y ayuden en las labores para lograr ubicar y contactar a esas víctimas referidas en los párrafos 104 y 105 a fin de notificarles esta decisión; y (ii) preste acompañamiento y asesoría psicojurídica a las víctimas para que logran participar en el trámite ante la SRVR.

DÉCIMO SEGUNDO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **ORDENAR** a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) **SUSPENDER** el proceso de cobro coactivo nro. 20131127703762 que se adelanta en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS con ocasión de la multa impuesta dentro del proceso penal nro. 11001310700820050000500. Esta suspensión operara, según los párrafos 104 a 105 de esta decisión, bajo las siguientes circunstancias:

A. se debe verificar que el compareciente suscribió el Régimen de Condicionalidad impuesto y comunicado en esta resolución y diligenció el formato F-1,
B. se debe verificar que el compareciente está cumpliendo con el proceso de reincorporación a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN),
C. con ocasión de esta suspensión, no se levantarán las medidas cautelares impuestas dentro de ese proceso como garantía de los derechos de las víctimas hasta que la SRVR se pronuncié al respecto.

DÉCIMO TERCERO: Por Secretaría Judicial, **GENERAR** las contraseñas de acceso al expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001 a los comparecientes HERMINSUL

ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS y a sus apoderados judiciales, con el fin de que puedan revisar el expediente. Las contraseñas estarán habilitadas hasta la finalización del trámite o de la representación judicial para los apoderados, según el caso.

DÉCIMO CUARTO: Mediante la Secretaría Judicial de la SAI, **NOTIFICAR** esta resolución a la Procuraduría Delegada para la Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, según la ruta fijada en la en Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022.

DÉCIMO QUINTO: Por Secretaría Judicial de la SAI, **OFICIAR** a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para que informe si los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., (i) se encuentran registrados en algún programa a su cargo y dé a conocer el desarrollo, así como avances de este; (ii) si conocen sobre el o los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR en los que estuvieron o están los interesados y reporte la información al respecto; y (iii) si HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS actualmente recibe la renta básica de la que trata el artículo 8 del decreto 899 de 2017, modificado por el artículo 284 de la ley 1955 de 2019 y si se conoce que sobre ella exista alguna medida cautelar decretada por la UARIV.

DÉCIMO SEXTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y de apelación en virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de la ley 1922 de 2018 y de conformidad con la interpretación sistemática de fuentes de derecho, así como la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

(firmado digitalmente)
DIANA MARÍA VEGA LAGUNA
Magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto

SNCB

SANTOS BALLESTEROS & ASESORES LEGALES S.A.S.
Nit. 900791910-5

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2023

Doctor
Gabriel Pardo Otero
Ciudad

Referencia: Proceso Ordinario (declarativo)
Rad.: 1100131030-13-**2003-00712**-02 (procesos acumulados)
Demandante: Alexandra Hoyos Cuartas y otros
Demandado: Corporación Club El Nogal

Asunto: Sustentación recurso de apelación.

Estimado Dr. Pardo**:**

A continuación, me permito presentar a Usted, con destino a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a la atención del **Magistrado Ponente, Doctor Germán Valenzuela Valbuena**, un concepto jurídico que amablemente me ha solicitado, alrededor de distintos aspectos jurídicos atinentes al caso de la referencia.

Para estos efectos, he divido este concepto, que recoge mi exclusiva opinión profesional, en los siguientes acápites:

1. Introducción

1.1. Mi nombre es **Jorge Santos Ballesteros**, de nacionalidad colombiana, Abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Mi domicilio es Calle 69 A No 4 – 31 de Bogotá, teléfono (+57) 601 3462668.

1.2. El Doctor Gabriel Pardo Otero, como apoderado judicial de la Corporación Club El Nogal, ha solicitado mis servicios profesionales para dar un concepto en relación con los fundamentos y principios aplicables de responsabilidad civil extracontractual en ley colombiana, al caso de la referencia.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

1.3. El Doctor Pardo actúa en nombre y representación de la entidad demandada, dentro de los procesos acumulados, a raíz de los sensibles y dolorosos hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003, por razón del atentado terrorista de que fuera víctima la Corporación Club El Nogal, en sus instalaciones físicas ubicadas en la ciudad de Bogotá.

1.4. Los distintos demandantes que integran la parte actora pretenden que a la Corporación Club El Nogal se le declare "… *civil y extracontractualmente responsable por los daños y perjuicios que se le ocasionaron …*" por el fallecimiento de César Augusto Caicedo Cruz (q. e. p. d.), Luisa Fernanda Solarte Angulo (q. e. p. d.), Sergio Alejandro Muñoz Salame (q. e. p. d.) y Jorge Andrés Arango Garavito (q. e. p. d.).

2. Cualificación y Experiencia

2.1. Soy Abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), en la cual fui profesor desde 1976 a 2007, en el área de Derecho Privado, y especialmente en la cátedra de Responsabilidad Civil desde 1979. En esta Universidad igualmente fui Director de las Especializaciones en Derecho Comercial y Sociedades Comerciales; actualmente soy profesor en la Maestría de Seguros. Así mismo fui profesor en la Especialización en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario de Bogotá y en la Especialización en Derecho Penal, (cátedra de Responsabilidad Civil) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia).

2.2. Fui Magistrado Titular de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el 1º de julio de 1996 a julio de 2003, en donde oficié como Presidente de la Sala de Casación Civil en 1998.

2.3. En la actualidad ejerzo en forma independiente la profesión de abogado en litigios, Árbitro en Tribunales Arbitrales, recursos de casación civil, exequátur, asesorías y consultorías, en Seguros, Derecho Civil, Comercial y Financiero, siendo Árbitro integrante de la Lista "A" de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

3. Libros Publicados

3.1. EL ABUSO DEL DERECHO: Editorial Venus Bogotá 1973.

3.2. INSTITUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL: TOMO I. Editorial Javergraf. 1996. Segunda edición: diciembre de 2006; TOMO II. Editorial Javergraf. Septiembre de 2004. Segunda edición mayo de 2007. TOMO III. Editorial Javergraf enero de 2006.

3.3. RESPONSABILIDAD CIVIL. Editorial Temis Bogotá. Tomos I y II. Año 2012.

3.4. RESPONSABILIDAD CIVIL. Editorial Temis. Tomos I y II Parte General. Bogotá. 2023. Cuarta Edición.

3.5. He publicado diversos artículos sobre Responsabilidad Civil en la Revista Vniversitas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y he sido conferencista invitado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre Responsabilidad Civil y Derecho Privado.

3.6. Además, Editorial Ibáñez y la Universidad Unaula de Medellín, publicaron en 2022 el libro *"Instituciones de Responsabilidad Civil. Homenaje al Maestro Jorge Santos Ballesteros"*, en dos Tomos, con la contribución de más de cuarenta (40) destacados expositores nacionales y extranjeros, y cuya edición académica estuvo a cargo de los profesores doctores Alejandro Gaviria Cardona y Saúl Uribe García.

4. Aspectos jurídicos relevantes aplicables a este caso

4.1. Sobre la causalidad adecuada.

4.1.1. Para referirme a este aspecto de la responsabilidad, considero conveniente hacer una breve exposición de cómo ha abordado la jurisprudencia civil colombiana el tópico de la relación de causalidad, y así entender cabalmente lo que se denomina la *causalidad adecuada.*

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

En el ordenamiento jurídico colombiano es requisito indispensable para la configuración de la responsabilidad civil y la consecuente obligación indemnizatoria que de ella surge, la existencia de una relación o vínculo de causalidad entre el daño o detrimento sufrido por una persona, en forma de interés jurídicamente tutelado, y la conducta o el hecho realizado por otra de carácter antijurídico. Las normas fundamentales en este sentido son los artículos 2341 y 1616 del Código Civil: conforme con el primero de los citados, es obligado a la indemnización quien, por haber cometido delito o culpa, ha inferido daño a otro, al paso que, de acuerdo con el segundo, los perjuicios, tanto los previsibles como los imprevisibles, deben ser consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación, o de haberse demorado su cumplimiento.

4.1.2. En sentencia de 17 de septiembre de 1935 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia G.J. No 1907, pág. 35 se señaló que, "para que pueda decirse que la culpa de una persona ha sido efectivamente la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una *relación necesaria* entre dicha culpa y el perjuicio; es decir, una relación tal, que si la culpa no hubiera ocurrido, el perjuicio no se habría producido. En este caso, como siempre que en cuestiones jurídicas se habla de causa, se requiere el elemento de *necesidad* en la relación. Si una culpa que parece relacionada con el perjuicio está plenamente demostrada, pero se establece que el perjuicio se habría causado, aunque esa culpa no se hubiera cometido, no habrá *relación de causalidad* ni consiguiente derecho por parte del perjudicado a la reparación".

4.1.3. En otra sentencia de 8 de octubre de 1992, que involucraba el hecho de tercero como causal de exoneración de responsabilidad, se indicó: "jurídicamente no es cualquier hecho e intervención de tercero lo que constituye la causa de exoneración de responsabilidad; es necesario, entre otras condiciones, que el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una *relación de causalidad exclusiva e inmediata* con el daño causado, caso en el cual la responsabilidad, anexa a la noción de culpa se desplaza del autor del daño hacia

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

el tercero en seguimiento de la *causalidad* que es uno de los elementos jurídicos esenciales e integrantes de la responsabilidad civil"[1].

4.1.4. A propósito de una concurrencia de culpas, señaló la Corte en sentencia de 30 de abril de 1976: "Ciertamente no son infrecuentes los casos en que un daño resulta de la conjunción de varios acontecimientos. Dícese entonces que todos esos aconteceres son la causa del perjuicio, pero en el sentido de que la ausencia de uno de ellos habría bastado para que el daño no se hubiera producido. En tales supuestos, empero, para deducir la responsabilidad la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre las concurrentes, *ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio.* De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas....En la hipótesis indicada, sólo es responsable, por tanto, la parte que, por último, tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo"[2].

4.1.5. En sentencia de 23 de noviembre de 1990, G.J. Tomo CCIV, No. 2443, pág. 72, al precisar el alcance del factor extraño como causal de exoneración de responsabilidad, se manifestó así la Corte Suprema: " no se requieren en verdad mayores argumentaciones teóricas para sostener que en orden a determinar la responsabilidad patrimonial de alguien en el terreno extracontractual, necesario es que exista conexión causal *jurídicamente relevante* entre un evento dañoso que lesiona a quien exige ser reparado, y como causa u origen de ese mismo evento dañoso, un factor legal de atribución de responsabilidad a cargo de ese agente contra el que es reclamada dicha indemnización. Pues bien, una de las consecuencias de esta doctrina por cierto no la de menor importancia entre las varias que de ellas se siguen, es que el aparente autor integral de un perjuicio puede verse exento de la obligación de resarcirlo si acredita que entre su actividad y el resultado dañoso ha mediado un hecho extraño que no le es imputable,

[1] Cas. Civ. 8 de octubre de 1992. G.J. Tomo CCXIX. No 2458. Pág. 524.
[2] Cas. Civ. 30 de abril de 1976. Tomo CLII. No 2393. Pág. 108.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

acontecimiento que en cuanto ha de ser exterior y ajeno al ámbito de acción del demandado, tendrá que ser así mismo de tal naturaleza y entidad que haga que aquella – la actividad – deba considerarse irrelevante....” .

4.1.6. Sobresale entre todas las teorías acogidas por la jurisprudencia civil colombiana *la tesis de la causalidad adecuada*: “Para determinar la relación de causalidad, cuando media pluralidad de hechos o de culpas, cuestión que en ocasiones suele presentar serias dificultades, la doctrina dominante acoge el criterio de las *consecuencias adecuadas*, expuesto por Von Kries a fines del siglo pasado, sin excluir otros criterios, que no es del caso relacionar, pero que no siempre conducen a resultados equitativos. Según el criterio de la *causalidad adecuada* tan sólo pueden estimarse efectos de una causa aquellos que según las reglas del sentido común y de la experiencia sueles ser su resultado normal. Se acude pues a las reglas naturales.....Analizadas en abstracto las circunstancias en que se produjo un daño, se determina en concreto cuál o cuáles de ellas, según el normal devenir de las cosas, fueron *causa eficiente* del daño, descartando aquellas que sólo favorecieron la producción del resultado o que eliminaron un obstáculo para el mismo, denominadas en el lenguaje de Pirson Et de Villé, citado por Jorge Peirano Facio, con el nombre de condiciones u ocasiones”[3].

4.1.7. En sentencia de 22 de febrero de 1995, se precisó: “Por ser esa la doctrina sobre la cual descansa sin duda el artículo 2341 del C.C., se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclame a su vez indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar, en principio, el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un *nexo adecuado de causalidad* entre ambos factores”[4].

4.1.8. Ya de una manera sistemática, la formulación de la *teoría de la causalidad adecuada*, se precisa de modo amplio y coherente, en sentencia de 26 de

[3] Cas. Civ. 30 de marzo de 1993. G.J. Tomo CCXXII. No 2461. Pág. 294.
[4] Cas. Civ. 22 de febrero de 1995. G.J. Tomo CCXXXIV. No 2473. Pág. 258.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

septiembre de 2002[5]: "en la indagación que se haga -obviamente luego de ocurrido el daño debe realizarse una *prognosis* que dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos *per se* para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud".

4.1.9. En Sentencia 13925 de 30 de septiembre de 2016, se señaló, en forma general que, "El daño jurídicamente relevante debe ser atribuido al agente como obra suya, pero no como simple causalidad natural, sino como mecanismo de *imputación* de la acción (o inactividad) a un sujeto. No puede desconocerse que la 'causalidad natural' es uno de los elementos que el juez suele tomar en cuenta para hacer la labor de atribución de un hecho a un sujeto; sin embargo, la valoración de un hecho como causa física de un efecto es sólo un aspecto de la imputación. Cuando en el lenguaje común y corriente se toma un hecho como generador de una consecuencia jurídica, normalmente se está en presencia de un concepto normativo y no naturalista de causa, sin que esta distinción se haga explícita en la mayoría de los casos por fuerza de la costumbre. "A continuación, esta sentencia se detiene en fijar los términos de la imputación: "La imputación, por tanto, parte de un objeto del mundo material o de una situación dada pero no se agota en tales hechos, sino que se configura al momento de juzgar: el *hecho jurídico* que da origen a la responsabilidad extracontractual sólo adquiere tal estatus en el momento de hacer la atribución. El imputante, al aislar una acción entre el flujo causal de los fenómenos, la valora, le imprime sentido con base en sus preconcepciones jurídicas, y esa valoración es lo que le permite seleccionar un hecho relevante según el sistema normativo para efectos de cargarlo a un agente como suyo y no a otra causa." Precisa la sentencia que, "la *causalidad adecuada* que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la conducta de un agente, debe ser entendida en términos de '*causa jurídica*' o imputación, y no simplemente como un nexo de causalidad natural. La '*causa jurídica*' o imputación es el razonamiento por medio

[5] Cas. Civ. 26 de septiembre de 2002. Sin publicar. Exp. 6878

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

del cual se atribuye el resultado dañoso a un agente a partir de un marco de sentido jurídico. Mediante la imputación del hecho se elabora un juicio que permite considerar a alguien como artífice de una acción (u omisión), sin hacer aún ningún juicio de reproche. A partir de entonces la conducta a la que se atribuye la consecuencia lesiva asume el significado de hecho jurídicamente relevante imputable a un agente que tenía el deber de actuar de acuerdo con la función que el ordenamiento le asigna (*imputatio facti*), pero aún no se dice nada sobre cómo debió ser esa acción u omisión (*imputatio iuris*), ni sobre cuál es la consecuencia jurídica que ha de imponerse en virtud de la constatación del supuesto de hecho previsto en la norma (*applicatio legis*)".

A juicio de la Corte, en la sentencia que se viene de citar, "Para establecer si una conducta (activa u omisiva) se puede atribuir a un agente hay que partir de categorías jurídicas como el deber de actuar, las acciones y omisiones relevantes, la posición de garante, el concepto de 'guardián de la cosa', las obligaciones de seguridad, etc. (que no llevan implícitos juicios de reproche), las cuales no se constatan directamente sino que se atribuyen a partir de un marco de sentido jurídico que permite la construcción de pruebas inferenciales."

4.1.10. En síntesis, la tesis de la causalidad adecuada es la tesis dominante por parte de la jurisprudencia civil tal como se evidencia en Sentencia 3460 de 18 de agosto de 2021, página 23: "*Un ejercicio en principio válido para investigar si determinado evento ocasionó el daño, es suprimirlo mentalmente. Si de todas formas se produce, de ello se vale la teoría de la conditio sine qua non para descartar, con ciertas previsiones, antecedentes probables. El ejercicio es permitido y de ahí parte la teoría de la causalidad adecuada, en tanto, eliminado, hipotéticamente, el hecho o la conducta generadora del daño y si éste permanece, se trata de una circunstancia que se puede tener como idónea o apta para causar el resultado"; así entonces, dice la Corte, la causalidad adecuada, "propugna identificar ex pos-facto las condiciones sine qua non en la producción del daño, pero no a todas les atribuye igual importancia. Solo las determinantes son consideradas causas y las demás meras condiciones. Las reglas de la experiencia, de la lógica y de la ciencia, y los juicios de probabilidad y de razonabilidad, sirven a dicho propósito*".

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

Como complemento a esta exposición, creo también conveniente señalar cómo la jurisprudencia civil ha abordado el aspecto de la prueba de la relación causal:

4.2. **Acerca de la prueba de la relación causal**.

4.2.1. Ha sostenido la Corte que, por regla general, corresponde a quien solicita la indemnización; así lo sostuvo, entre otras, en sentencia de 17 de mayo de 1982: "*Con fundamento en el principio de derecho universalmente aceptado, según el cual quien con una falta suya cause perjuicios a otro, está en el deber de repáraselo, la legislación colombiana consagra en el titulo 34 del libro cuarto del Código Civil, la responsabilidad por los delitos y las culpas. De acuerdo con dicha normación positiva, quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpas suyas, queda jurídicamente obligado a resarcirlo; y según los principios reguladores de la carga de la prueba, quien en tal supuesto demande la indemnización corre con el deber de demostrar, en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de éste y el perjuicio sufrido por aquél*"[6].

4.2.2. En la sentencia de 30 de septiembre de 2016, ya mencionada arriba, se señaló que, "*Para que el juez declare que un hecho es obra de un agente, deberá estar probado en el proceso (sin importar a quien corresponda aportar la prueba), que el hecho desencadenante del daño ocurrió bajo su esfera de control y que actuó o dejó de actuar teniendo el deber jurídico de evitar el daño. El juicio de imputación del hecho quedará desvirtuado si se demuestra que el demandado no tenía tal deber de actuación. Por supuesto que la causalidad natural desempeñará un papel importante en los eventos en los que se debate una responsabilidad directa por acción, en cuyo caso la atribución del hecho al convocado a juicio se podría refutar si se demuestra que su conducta no produjo el daño (no teniendo el deber jurídico de evitarlo), sino que éste se debió a una causa extraña a su obrar, como por ejemplo un caso fortuito, el acto de un tercero o el acto de la propia víctima*".

[6] Cas. Civ. 17 de mayo de 1982. G.J. Tomo CLXV. No 2406. Pág. 98.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

4.2.3. En términos generales cabe decir, entonces, que no puede desconocerse que el fenómeno de la causalidad jurídica se produce en el doble sentido que menciona Santos Briz: "*por un lado, la conducta del agente realiza el supuesto de hecho de la norma que sanciona la responsabilidad (causalidad como fundamento); por otro, el daño producido ha de ser precisamente una consecuencia de la infracción prevista en dicho supuesto (causalidad como complemento)*".[7] En ese doble sentido, entonces, no se puede prescindir, en el análisis de la causalidad, del hecho natural o físico, y por supuesto de las consecuencias normativas o de imputación jurídica, que ese hecho conlleva, sin poder abandonarse sólo a un aspecto del mismo, y ya puestos en el caso concreto, se deben abandonar fórmulas rígidas, o abstractas, o divagaciones complejas, y sí considerar, todas las circunstancias que inciden en la producción del resultado, con apreciaciones si se quiere más de sentido lógico, o de experiencia frecuente, que de posturas doctrinales aplicadas a ultranza, y estimar así al nexo causal como una cuestión de hecho, sometida al concepto de causalidad propio de la Lógica y de las Ciencias Naturales, y con las consecuencias jurídicas previstas en la norma.

4.3. **Sobre la causa extraña**.

4.3.1. **La causa extraña**. De acuerdo con la jurisprudencia colombiana, el demandado en un evento especialmente de responsabilidad por actividad peligrosa puede desvirtuar su responsabilidad si logra acreditar un factor extraño. Así, en sentencia de 24 de agosto de 2009, señaló la Corte: "El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, *ratio* y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente

[7] Santos Briz, Jaime. La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal, 4ª edición, Editorial Montecorvo, Madrid, 1986, pág. 223.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño. Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extraña, esto es, la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjuicio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo, la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (C. de Co., art. 1880), más sí el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. Forzoso es concluir que toda persona que en ejercicio de una actividad peligrosa cause un daño está en la imperiosa obligación de repararlo y solo podrá eximirse probando la causa extraña, esto es, demostrando que no es autor, en tanto el daño no pueda imputarse al ejercicio de su actividad peligrosa ni a su conducta"[8].

4.3.2. **La fuerza mayor o caso fortuito**. Según el artículo 1º de la Ley 95 de 1890: "*se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.*" De esta definición legal surgen con toda nitidez los dos caracteres de la fuerza mayor o caso fortuito, a saber: imprevisto e irresistible. Según la Corte Suprema: "**Prever**, que en el lenguaje usual significa ver con anticipación, tiene en tecnología culposa la acepción de conocer lo que vendrá y precaverse de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, daño o peligro, guardarse de él y evitarlo. De ahí que cuando una persona, jurídica o natural, no evita el daño evitable, se dice que no lo previó ni lo previno, lo cual la inhibe para alegarlo como causa de liberación, pues entonces la culpa precede y contribuye a su advenimiento. La persona no ha empleado toda la inteligencia y pericia necesarias para evitar los efectos de la fuerza irresistible. Si no se previó el accidente pero se le puede resistir, no habrá caso fortuito. Ejemplo: cualquiera

[8] Cas. Civ., sent. de 24 de agosto de 2009, exp. 11001-3103-038-2001-01054-01.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

fuerza física o moral sin suficiente violencia para ser irresistible, aunque no se haya pensado en ella. Si el accidente es irresistible pero debió preverse, tampoco habrá caso fortuito: Ejemplo: cualquiera fuerza física o moral, a que no pueda resistirse pero que pudo evitarse en sus consecuencias." (sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 26 de mayo de 1936. G.J. XLIII. Pág. 584. Y en el mismo sentido, sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 31 de agosto de 1942, 20 de noviembre de 1989, entre otras). La unificación en cuanto a sus efectos de estos dos factores de exoneración en el derecho colombiano mediante el artículo 1º de la ley 85 de 1890 -según lo visto-, ha sido sostenida por la jurisprudencia colombiana a lo largo de su devenir histórico. En efecto, en sentencia de 7 de marzo de 1939 se sostuvo que: "*tanto en el Código Civil francés como en el colombiano (artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el 64 del Código), se tomaron las excepciones caso fortuito y fuerza mayor como sinónimas significando indiferentemente toda causa extraña al deudor que pone un obstáculo a la ejecución de la obligación*" (Cas. Civ. 7 de marzo de 1939. G.J. Tomo XLVII. No 1940. Pág. 707).

Al estimarse que la contemplación jurídica de un evento como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, es una cuestión que debe ser analizada en el caso concreto, es decir, en cada situación específica, se deben ponderar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que envolvieron el acontecimiento acompasadas con las del propio agente, sin que sea posible por supuesto armar un catálogo o elenco de fenómenos que revistan tal carácter: "*Si sólo puede calificarse como tal, ha precisado la Corte, el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodearon el hecho*"[9].

[9] Cas. Civ. 9 de octubre de 1998. G.J. Tomo CCLV. No 2494. Pág. 776.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

4.3.3. **En cuanto al hecho de un tercero**, como eximente de responsabilidad en sentencia de 25 de noviembre de 1943 indicó la Sala Civil de la Corte Suprema que, "*jurídicamente no es cualquier hecho o intervención de un tercero lo que constituye la causa de exoneración de responsabilidad; es necesario entre otras condiciones que el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una relación de causalidad exclusiva e inmediata con el daño causado, caso en el cual la responsabilidad, anexa a la noción de culpa, se desplaza del autor del daño hacia el tercero, en seguimiento de la causalidad, que es uno de los elementos jurídicos esenciales integrantes de la responsabilidad civil*".

4.3.4. En relación con la **culpa de la víctima,** es decir, la actuación temeraria de la víctima en la producción del hecho dañoso, la jurisprudencia nacional tiene dicho que: "*para que la culpa de la víctima tenga la relevancia jurídica apuntada, o sea para que constituya un eximente de responsabilidad civil al demandado, es preciso que ella haya sido la causa exclusiva del daño; que absorba de alguna manera, pero integralmente la imprudencia y el descuido del demandado, los cuales por consiguiente no tendrán ya ninguna trascendencia en la producción del perjuicio*". (Cas. Civ. 17 de mayo de 1982. G.J. Tomo CLXV, página 98).

4.4. Sobre que los daños deben ser "reales, ciertos, no contingentes o hipotéticos/especulativos"

4.4.1. **Postulados generales**: Para responder a estas cuestiones, previamente debe señalarse que la responsabilidad civil extracontractual en Colombia se fundamenta esencialmente en dos principios generales, consagrados en el artículo 2341del Código Civil: **1.)** La persona que causa un daño a otra está en la obligación de repararlo. Se trata de hacer efectivo el derecho de toda persona de obtener una justa indemnización; al respecto la Corte Suprema ha señalado que: "Se trata de cargar el perjuicio sufrido por la víctima a una persona que queda obligada a indemnizar las pérdidas antijurídicas que se le atribuyen, en razón de la exigencia general de respeto y conservación de la esfera de intereses ajenos. La responsabilidad civil, por tanto, tiene por finalidad imponer a un agente la obligación de resarcir el daño que se le imputa" (S.C. 13925 de 30 de septiembre

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

de 2016 página 22). Desde luego que la Corte siempre ha resaltado la importancia de este principio de tiempo atrás, como se observa en sentencia de 5 de marzo de 1940: "*el principio general, ya expresado, nemo laederi, en tratándose de la responsabilidad civil, se bifurca, porque el perjuicio puede venir, de un acto contractual, violación o incumplimiento de un contrato, ley de las partes, o de un hecho extracontractual, voluntario o no, que perjudique a terceros*" (citada en sentencia SC5170 de 3 de diciembre de 2018, página 21). **2.)** La indemnización a la víctima debe ser integral. Este principio implica que la indemnización debe dirigirse, en lo posible, a dejar a la víctima como estaba previamente a la ocurrencia de la lesión, no a sancionar al victimario. En estos términos, la ley colombiana no prevé una tipología de hechos ilícitos (torts) que dan lugar a la obligación de indemnizar, sino que cualquier situación que genere un perjuicio es susceptible de ser reparada.

4.4.2. **Daños materiales**: En lo fundamental, el daño es la lesión que un sujeto sufre en un interés jurídicamente protegido por la ley. Este interés puede recaer sobre bienes patrimoniales, lo que origina el denominado daño material, o sobre bienes no patrimoniales lo que origina el daño moral, distinción que, desde luego, parte del interés jurídico afectado. En relación con el daño patrimonial, este comprende, según el artículo 1614 del Código Civil, el daño emergente y el lucro cesante; a juicio de la Corte Suprema, "*en lo que hace al daño patrimonial, se ha clasificado ese menoscabo en dos modalidades: daño emergente y lucro cesante. En efecto, responden, el primero, a la idea de disminución o detrimento, por salida o egreso pasado, presente o futuro de derechos patrimoniales. Y el segundo, a la frustración de un efecto patrimonial favorable, por el fracaso de ingresos que no entraron o no entrarán al patrimonio de la persona*" (SC 4843 de 2 de noviembre de 2021, página 21). Así, por ejemplo, cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, el valor de ese bien constituye el daño emergente, y la renta o beneficios que producía ese bien, que se dejan de percibir, constituye el lucro cesante.

4.4.3. **El perjuicio, para que sea indemnizable, debe ser real y cierto, aunque futuro, siempre y cuando sea consecuencia, en este último caso, de situaciones**

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

presentes que se consoliden en su desarrollo. La carga de su prueba corresponde en todos los eventos al demandante, salvo situaciones excepcionales como la prevista en el artículo 1617, numeral 2 ("el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo"); y el evento de cláusula penal indicado en el artículo 1599 del Código Civil ("habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio"), situaciones en las que se presume el daño y por consiguiente su valoración, sin que quepa la prueba en contrario.

En este sentido, ha sentenciado la Corte: "*Para que un perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que ser directo y cierto: "lo primero, porque solo corresponde indemnizar el daño que se presenta como consecuencia inmediata de la culpa; y lo segundo, porque si no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de producirse, no entra en el concepto jurídico de daño indemnizable*"[10]. Allí mismo indicó que "*de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, a quien demanda judicialmente la indemnización del perjuicio que ha sufrido le incumbe demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación depreca y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento patrimonial sufrido por la víctima*".

4.4.4. **En cuanto a la valoración del daño futuro**, la Corte colombiana ha señalado que "*el perjuicio debe ser reparado en toda su extensión en que sea cierto. No solo el perjuicio actual es cierto, sino también el perjuicio futuro, pero no lo es el perjuicio simplemente hipotético. La jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo, cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio actual. La Corte francesa de Casación —dice CAPUZ en su obra citada— se ha esforzado en ciertas sentencias por enunciar esta doctrina en términos no dudosos y ha declarado que, si no es posible decretar la reparación de un perjuicio puramente eventual, sucede de otro modo cuando el perjuicio,*

[10] Cas. Civ., sent. de 10 de agosto de 1976, "G. J.", núm. 2393, pág. 320.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

aunque futuro, aparece al juez como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual que es susceptible de evaluación inmediata"[11].

Para la Corte, conforme reiterada jurisprudencia, entonces, "Se debe diferenciar el perjuicio denominado actual en contraposición del distinguido como futuro, según el momento en el que se le aprecie, que corresponde, por regla, a la fecha de la sentencia. Aquel equivale al daño efectivamente causado o consolidado y éste al que con certeza o, mejor, con un 'alto grado de probabilidad objetiva' sobre su ocurrencia, según expresión reiterada en la jurisprudencia de la Sala, habrá de producirse. En tratándose del lucro cesante, el actual es la ganancia o el provecho que, se sabe, no se reportó en el patrimonio del afectado; y el futuro es la utilidad o el beneficio que, conforme el desenvolvimiento normal y ordinario de los acontecimientos, fundado en un estado actual de cosas verificable, se habría de producir, pero que, como consecuencia del hecho dañoso, ya no se presentará.[12] Según esta postura, "El daño futuro, con todo, para ser jurídicamente considerado, debe revestir la condición de cierto, característica que, conforme se ha enseñado de vieja data, no puede ser tomada en forma estricta, sino 'en un sentido relativo, por lo que, respecto de su producción futura no podrá exigirse una certidumbre absoluta.

4.4.5. **Ahora bien, la certeza del perjuicio se opone a su incertidumbre** o eventualidad, entendiendo por tal, la que depende de acontecimientos imposibles de conocer antes de su realización, lo que permite inferir que será indemnizable el daño futuro, con los requisitos vistos, pero no el hipotético o eventual. Para efectos de determinar cuándo se está en presencia de un daño futuro, habrá de acudirse al momento en que se realiza el juicio de valoración del daño, es decir, a partir de la sentencia, siendo actual el que existe y se realiza en dicha fase y el futuro el que se presenta a partir de aquella.

4.5. Sobre la culpa civil y el reproche culpabilístico.

[11] Cas. Civ., sent. de 11 de mayo de 1976, "G. J.", núm. 2393, pág. 143.
[12] SC11575-2015. 31 ago. 2015. Rad. 2006-00514-01. Reiterado en STC11416-2019

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

4.5.1. Criterio general: La culpa civil es, en general, falta de prudencia y exige voluntariedad, entendía esta como obrar imputable a un sujeto de derecho en la órbita de su actuar. Según la Corte Suprema: "*La falta de prudencia o moderación es el obrar por exceso o por defecto: por defecto, cuando se incurre en desidia, descuido, negligencia, ignorancia, despreocupación o impericia; por exceso, cuando se actúa con precipitación, impertinencia, necedad, atrevimiento, temeridad, indiscreción, insensatez, irreflexión o ligereza. La inobservancia de reglas o normas preestablecidas de conducta es imprudencia in re ipsa, es decir que implica un juicio automático de culpa cuando tiene una correlación jurídica con el daño resarcible*" (Sentencia 13925 de 30 de septiembre de 2016).

4.5.2. Sobre cómo evaluar si hubo culpa, de acuerdo con la doctrina corrientemente aceptada de la Corte Suprema, para apreciar la culpa, "es necesario un criterio objetivo o abstracto. Este criterio abstracto aprecia la culpa teniendo en cuenta el modo de obrar de un hombre prudente y diligente considerado como arquetipo" (Cas. Civ. Sentencia 2 de junio de 1958)".

4.6. **Sobre la responsabilidad civil contractual y extracontractual**.

4.6.1. Es importante precisar, como lo hace la Corte Suprema en la sentencia de 11 de septiembre de 2002, que la jurisprudencia siempre ha tenido el tino de no confundir una y otra responsabilidad, "*porque no es indiferente el régimen legal ni la naturaleza de la acción, ni las consecuencias de una u otra, como tampoco lo concerniente a la prueba, al tratamiento de la culpa o a los términos de prescripción*".

4.6.2. A juicio de la Corte Suprema, por lo demás, la responsabilidad civil "Tradicionalmente ha sido concebida en una dimensión dual, esto es, contractual y extracontractual. La primera se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. La segunda surge de incumplir el mandato legal y genérico de no causar daño a otro, previsto en el artículo 2341 del Código Civil. Se

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

produce sin previo pacto y por virtud de un encuentro fortuito entre los relacionados con el daño; en otros términos, de un hecho jurídico que puede ser una conducta punible (hecho jurídico humano voluntario ilícito) o un ilícito civil (hecho jurídico humano involuntario ilícito), siempre al margen de un incumplimiento obligacional previo y vinculante. La función esencial de ambos tipos de responsabilidad es la reparación de un perjuicio causado injustamente; sin embargo, en sistemas jurídicos como el nuestro, cada uno de ellos tiene su propio ámbito normativo, tanto en lo puramente sustancial como en algunos aspectos de orden procesal. Así, mientras la contractual tiene su fuente legal en los preceptos 1602 a 1604 del Código Civil, que pueden calificarse de rectoras en esta precisa materia, además de los términos pactados por las partes del acuerdo, la convención o el contrato, sin perjuicio de las reglas sobre la materia; en la extracontractual, en cambio, su marco regulatorio lo contienen los artículos 2341 a 2358 *ejusdem*. Como se vé, son dos regímenes jurídicos enteramente distintos, con sus propias regulaciones normativas, a pesar de lo cual su identificación no está exenta de debates en casos concretos, lo que ha dado lugar a las denominadas "zonas grises" que revelan insuficiencia de cada una de estas modalidades de responsabilidad civil, si se les considera en su rígida estructura tradicional. Precisamente por ello, tal estado de cosas ha dado lugar a figuras como la denominada *"obligación de seguridad"* en materia negocial. En sana lógica, no parece procedente juzgar un asunto cuyo rango atañe puramente a este último, con las reglas que corresponden a la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, la complejidad propia de la dinámica social, económica y jurídica de hoy, ha dado lugar a examinar con mayor detenimiento los ámbitos propios de cada una de las referidas tipologías de la responsabilidad civil, hallando que no todos los elementos de aquella le pertenecen de modo exclusivo; tal es el caso de la presunción de culpa"[13].

4.6.3. Por supuesto que en la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, surgen obligaciones de resultado a cargo del guardián de la actividad, entendiendo por tal, según la Corte Suprema, "*la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño, un poder*

[13] SC 1819 de 28 de mayo de 2019.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

efectivo e independiente de dirección, gobierno o control"[14]. Por consiguiente, el agente responsable por daños originados en actividades peligrosas tiene un deber jurídico, verdadera obligación de custodia, que recae sobre las cosas empleadas o utilizadas, deber jurídico que conlleva la necesidad de conservar las cosas en estado de no generar perjuicios y de no producir peligros para los terceros. En esta clase de daños surge por supuesto una obligación se seguridad.

4.6.4. Por lo demás, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, la determinación de si una actividad – sin cosas o con cosas, inactivas o en movimiento – es peligrosa lo dicta por lo general la razón natural, y no es por consiguiente una suposición a la que se llega sin más. La actividad peligrosa es pues, aquella que, según la Corte Suprema, genera más probabilidades de daño y capacidad de destrozo mayor, y cuyos efectos se vuelven incontrolables.[15]

5. Apreciaciones relevantes en el caso concreto.

5.1. Fundamentos generales de la sentencia de primera instancia.

Según se lee en la página 17 de la sentencia proferida el día 29 de mayo de 2023, por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, "*es evidente que la responsabilidad endilgada a la parte demandada se abre paso, pues habiendo quedado sentado por línea jurisprudencial que la obligación de seguridad por ella ofrecida, la que es de las denominadas de resultado, no fue cumplida por parte del Club al no haber impedido el ingreso del vehículo cargado con explosivos habiéndolo podido hacer y con ello se configuró una concurrencia de culpa y no habiendo logrado demostrar con los medios exceptivos planteados un eximente de responsabilidad, habrá de declararse como civilmente responsable causado a los demandantes, con ocasión del fallecimiento de sus esposos y familiares y, consecuentemente habrá lugar a reconocer la indemnización de perjuicios demandada*".

5.2. Estructuración de los elementos de la responsabilidad civil.

[14] Cas. Civ., 4 de junio de 1992. Gaceta Judicial, T. CCXVI, n° 2455, pág. 506
[15] Sentencia 5686 de 14 de diciembre de 2018.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

Por sabido se tiene que para que surja la responsabilidad civil a cargo de un sujeto de derecho por el daño antijurídico que se le imputa, debe existir un perjuicio, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, una conducta positiva u omisiva atribuible al sujeto, y por supuesto, una relación de causalidad que enlace ambos extremos. En este asunto, en lo sustancial, por parte de la sentencia de primera instancia se le achaca al Club El Nogal, haber incumplido una supuesta obligación de seguridad, previamente asumida, sin haber acreditado algún eximente de responsabilidad constitutivo de un factor extraño, por tratarse de una obligación de resultado.

5.3. Ante todo, se advierte que, en este evento, no se está en presencia del desarrollo de una actividad peligrosa, aserto que brota con la sola lectura del objeto social de la Corporación Club El Nogal, por lo que es indubitable la ausencia de las características propias para que la actividad desarrollada por la Corporación demandada se repute como peligrosa[16].

5.4. Por consiguiente, no es dable deducir la existencia o estructuración de una obligación de seguridad, con contornos propios y definidos, como lo hace el juzgado de instancia, de los estatutos de la Corporación, ni menos que esta supuesta obligación se enmarque en una responsabilidad extracontractual, pues esto equivale a desconocer el ámbito y los contornos de una y otra responsabilidad, como ya se ha puesto de presente.

5.5. Así entonces, es claro que, en este caso no se está en presencia de una arquetípica responsabilidad contractual, sino de una responsabilidad extracontractual y por consiguiente no existe presunción de culpa y por ende, tampoco una obligación de seguridad claramente delimitada, y por tanto, le corresponde a los demandantes probar, fehacientemente, todos los elementos de la responsabilidad civil, es decir, una culpa, un daño y la relación de causalidad entre ambos extremos.

[16] Así quedó asentado además en la sentencia de casación **SC9788-2015 de** fecha veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), que constituye, por consiguiente, un precedente judicial.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

5.6. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los tiempos, y antecedente de la anterior doctrina es el fallo de 14 de marzo de 1938,[17] que no solo señaló la distinción entre los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, sino que concluyó que si por regla general la carga de la prueba en materia extracontractual corresponde al demandante, por excepción, como cuando se trata de la responsabilidad por el daño de las cosas inanimadas que están bajo el cuidado de los hombres, "*la prueba se desplaza del demandante para recaer sobre el demandado por la presunción de culpa que establece la ley en varios textos como los artículos 2346 y 2356 del Código Civil...*" y aludiendo a esta última norma y su razón de ser, agregó que "*mal puede reputarse como repetición de aquél (el 2341), ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento, los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de que casos que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es, todo el que 'puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona'. Exige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse*"[18].

5.7. Precisado lo anterior, en todos los asuntos de responsabilidad civil en el ordenamiento colombiano, es requisito ineludible probar suficientemente la causa, origen, o fuente del perjuicio. Al decir de la Corte Suprema de Justicia, solo puede tener la categoría de causa, *"(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más 'adecuado', el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo*"[19].

[17] Cas. Civ. 14 de marzo de 1938.
[18] Sent. 2 de diciembre de 1943 -G.J. LVI Pág. 320- igual sentido Sent. 18 noviembre de 1940. G.J. L, pág. 440, Sents. 31 mayo 1938, junio 24 de 1942, 7 de julio de 1977.
[19] CSJ. Civil. Sentencia de 15 de enero de 2008, expediente 67300, citando precedentes.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

5.8. Lo anterior significa entonces que en tanto no se acredite en forma objetiva, fehacientemente, la causa del perjuicio, a cargo del demandado, o el hecho generador del daño, no puede surgir el débito de responsabilidad civil. Acerca de la prueba de la relación causal, ha sostenido la Corte, además, que, por regla general, corresponde a quien solicita la indemnización, según se indicó al inicio de estas consideraciones.

5.9. En el pensamiento del destacado autor alemán Karl Larenz, en el análisis de la causa juega un papel importante el criterio de imputación objetiva ya que "*una consecuencia no adecuada al acaecimiento base de la responsabilidad no puede ser imputada al obligado a indemnizar, y, por tanto, no ha de ser tenida en cuenta al indagar la extensión del daño indemnizable. Y esto quizá, no porque el hecho generador de la responsabilidad no fuese causal según el resultado, sino porque aunque lo sea, en esta relación causal, puesto que es inadecuada, no puede fundarse ninguna responsabilidad. Al responsable del hecho solamente le pueden ser imputadas y tenidas en cuenta en la determinación del daño aquellas consecuencias adecuadas al hecho generador de la responsabilidad. Se trata, por consiguiente, de una imputación objetiva de las consecuencias producidas, no de una imputación subjetiva a título de culpa*"[20].

5.10. En términos generales entonces puede afirmarse que la decisión sobre la existencia o no de la relación de causalidad es una cuestión de hecho, técnicamente acreditada, libre de valoraciones subjetivas o de conjeturas o de teorías, o de supuestos no comprobables, como en este caso ocurre. Dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad de la Corporación Club El Nogal en este caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal, técnicamente soportada, que condujo a la producción del daño deprecado, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada, que no es otra que una responsabilidad directa regida bajo el régimen de culpa probada, como

[20] Larenz Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo I. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1958. Pág. 200.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

se ha explicado anteriormente.

5.11. En este asunto, es ineludible y debe tenerse en cuenta, la sentencia del Consejo de Estado, de 30 de marzo de 2022, de la Sección Tercera Subsección C, que al decidir una acción de reparación directa contra La Nación Ministerio de Defensa, por el ataque terrorista contra el Club El Nogal del 7 de febrero de 2002, absolvió a las demandadas, por encontrar plenamente acreditado el hecho del tercero, las FARC, sin dubitación alguna; en efecto, a juicio de esa Alta Corporación de Justicia, "*El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible. El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración. Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios. Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general*".

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

También, según esta sentencia, "*No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios. El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo*".

5.12. Igualmente, para efectos de determinar la causa del hecho dañoso en cuestión, hay que considerar igualmente que la Sala de Amnistía e Indulto, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en sentencia de 24 de agosto de 2023, considera que, "*En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil"*. Así mismo, determina esta sentencia que, "*Además de las graves violaciones a los principios de distinción y precaución del DIH, el ataque perpetrado en el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 fue parte de una política de las antiguas FARC-EP, según lo estableció la JPO. Al respecto, se debe señalar que el Estatuto de Roma*

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

de la Corte Penal Internacional castiga los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes". En este instrumento internacional, se entiende por graves violaciones al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, entre otros, "[l]os atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura"; asimismo, se castigan como "otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional", (art. 8.e.i) "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades".

5.13. De acuerdo con lo expuesto, entonces, no puede ponerse en duda que, el ataque terrorista contra el Club El Nogal, para todos los efectos, debe considerarse como hecho de un tercero, perpetrado por las FARC, y no puede ser desconocido por ninguna jurisdicción, pues de hacerse rompería con la preceptiva, entre otros, de la obligatoriedad de respetar el precedente judicial, consagrado en la Constitución Política, y respecto del cual, vale decir, que la Corte Constitucional lo ha definido en reiteradas oportunidades, como "la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo"[21].

Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio *stare decisis* o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares[22]. Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a

[21] Sentencia SU-053 de 2015.
[22] "El Precedente Constitucional teoría y praxis", Editorial Ibáñez S.A.S, 2013. Definición citada en la sentencia T-460 de 2016.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia[23]. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima[24], sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales"[25].

5.14. Finalmente, en torno al reconocimiento de los daños materiales o patrimoniales, consignados en la sentencia, desde luego que no basta con enunciarlos, ni tampoco con hacer referencias aisladas y genéricas acerca de su producción, ni cálculos o ilusiones de ocurrencia, sino que deben estar fehacientemente acreditados, sin ningún ánimo de especulación, por más doloroso que haya sido para los demandantes la pérdida de seres queridos en una tragedia tan desgarradora. Para su reconocimiento, por tanto, se deben seguir los lineamientos trazados con anterioridad.

En los anteriores términos, dejo expuesto el concepto por Usted solicitado.

Con toda atención,



Jorge Santos Ballesteros
C. C. 19.084.391 de Bogotá
T. P. 11.210 del C.S de la J.
E-mail RNA: santosballesterosjorge@gmail.com

[23] Sentencia T-460 de 2016.
[24] Sentencia T-049 de 2007.
[25] Sentencia U- 354 de 25 de mayo de 2017.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: M.P., Dr. Germán Valenzuela Valbuena / Alexandra Hoyos Cuartas y otros vs. Club El Nogal / Rad. 11001310301320030071202 (procesos acumulados) / Sustentación recurso de apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/09/2023 9:58

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

4 archivos adjuntos (4 MB)

Sustentacion recurso apelacion caso Club el Nogal sept-2023 VF.pdf; Anexo 1 - sentencia CE responsabilidad atentado Club El Nogal marzo-2022.pdf; Anexo 2 - 667243643-JEP-cataloga-como-crimen-de-guerra-atentado-en-El-Nogal.pdf; Anexo 3 - Concepto Legal Temas de Responsabilidad Civil (Jorge Santos Ballesteros).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Gabriel Pardo <gpardo@spjlaw.com>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 9:49
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: herreraabogados@hotmail.com <herreraabogados@hotmail.com>; benderrsr@hotmail.com <benderrsr@hotmail.com>; devisabogados@devisabogados.com <devisabogados@devisabogados.com>; epardo@spjlaw.com <epardo@spjlaw.com>
Asunto: M.P., Dr. Germán Valenzuela Valbuena / Alexandra Hoyos Cuartas y otros vs. Club El Nogal / Rad. 11001310301320030071202 (procesos acumulados) / Sustentación recurso de apelación

11 de septiembre de 2023

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
MP: DR: GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
E. S. D.
Enviado por correo electrónico a: secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Proceso Ordinario (declarativo)

Demandante: Alexandra Hoyos Cuartas y otros
Demandado: Corporación Club El Nogal
Rad.: 11001310301320030071202 (procesos acumulados)
Asunto: **Sustentación recurso de apelación**

GABRIEL PARDO OTERO, en mi condición de apoderado principal de la Corporación Club el Nogal, de manera oportuna, me permito sustentar el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia fechada el 29 de mayo de 2023, solicitando que el H. Tribunal Superior de Bogotá proceda a revocarla y, en consecuencia, a absolver de responsabilidad a mi representada.

Adjunto se remiten el memorial contentivo de la sustentación, así como los tres anexos que en el mismo se indican.

En copia incluyo a los apoderados de la parte actora.

Notificaciones y comunicaciones electrónicas: gpardo@spjlaw.com y también epardo@spjlaw.com

Muy atentamente,

GABRIEL PARDO OTERO
C.C. 437570
T.P. 12.938

Nota: En virtud de lo preceptuado por el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022, el presente memorial no requiere de '*firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos*'.

11 de septiembre de 2023

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
MP: DR: GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
E. S. D.
Enviado por correo electrónico a: secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Proceso Ordinario (declarativo)
Demandante: Alexandra Hoyos Cuartas y otros
Demandado: Corporación Club El Nogal
Rad.: 11001310301320030071202 (procesos acumulados)
Asunto: **Sustentación recurso de apelación**

GABRIEL PARDO OTERO, en mi condición de apoderado principal de la Corporación Club el Nogal, de manera oportuna[1], me permito sustentar el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia fechada el 29 de mayo de 2023, solicitando que el H. Tribunal Superior de Bogotá proceda a revocarla y, en consecuencia, a absolver de responsabilidad a mi representada.

I. CUESTION PREVIA.

La Corporación Club El Nogal reitera sus más sinceras condolencias y su sentimiento de solidaridad para con las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003. Mi representada también fue víctima de estos hechos y, por esa misma razón, comparte el dolor y la angustia que ese negro 7 de febrero produjo en tantos hogares. Sea esta la oportunidad para dejar constancia de ello y, además, para indicar que la defensa que aquí se ejerce en nada opaca los sentimientos de solidaridad y el profundo respeto por los accionantes y sus seres queridos.

En el curso del proceso mi representada demostró cabalmente la total e indefectible ausencia de responsabilidad civil de su parte. Ciertamente, como podrá observarse en la presente sustentación, no concurren en este caso, ni por asomo, los presupuestos que se requieren para proferir una condena de indemnización, particularmente en lo que se refiere al factor de atribución (culpa o negligencia) y a la relación de causalidad. Lo propio incluso desde el fundamento mismo de la responsabilidad civil, esto es, desde la óptica de la justicia correctiva y la antijuridicidad. Así mismo, es jurídicamente errado establecer a cargo del Club una obligación de seguridad que el *a quo* califica de resultado en su fallo y como tal extraña a la responsabilidad civil extracontractual invocada como fundamento de las demandas decididas en primera instancia y, por si fuera poco, imprimirle tal categoría a un deber general y abstracto de comportamiento señalado por los estatutos de la Corporación demandada con base en un análisis interpretativo descontextualizado y carente de razonabilidad y proporcionalidad.

[1] El auto admisorio del recurso de apelación fue notificado por estado electrónico del 30 de agosto de 2023. Por lo tanto, el término para sustentar el recurso de alzada vence el 11 de septiembre de 2023, razón por la cual este escrito se radica de manera oportuna ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En materia de derecho de daños impera el principio *'casum sentit dominus',* por virtud del cual, *prima facie,* cada individuo debe soportar las consecuencias lesivas de que sea víctima en su vivir cotidiano[2], particularmente en eventos de terrorismo al que todos estamos expuestos. Ciertamente, la intervención de la responsabilidad civil, aún en los regímenes más estrictos, es una intervención marginal, en el sentido de que, en principio, es cada individuo quien debe cargar con los perjuicios que sufra sobre sus bienes o sobre su patrimonio[3], cuestión ésta última que es ratificada por normas como el artículo 2341 del Código Civil colombiano o, incluso, por novísimos instrumentos en materia de daños, como son, a modo de ejemplo, los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (artículo 1:101) y el difundido Marco Común de Referencia (Libro VI – artículo 1:101).

La consecuencia lógica de lo anterior es, entonces, que solamente en determinadas hipótesis definidas por el ordenamiento, el daño padecido por un sujeto puede ser trasladado al patrimonio de otro, esto es, puede serle imputado para efectos de que proceda a indemnizarlo. Puesto en otros términos, mientras que no concurran los presupuestos o razones que prevé el derecho de la responsabilidad, el daño que sufrió un determinado individuo deberá ser asumido por ese individuo y no podrá trasladarse o endilgarse a un sujeto diferente[4].

Ahora, como es sabido, dentro de los mencionados presupuestos, además de la existencia de un daño que sea cierto y directo –como se afirma, por regla general, en la doctrina-, es preciso que concurran el factor de atribución de responsabilidad que, en casos como este, está dado por la culpa o el dolo, y la relación de causalidad. A falta de cualquiera de los anteriores, no puede condenarse a la responsabilidad del sujeto al que se le pretende endilgar[5].

Pues bien, esto es justamente lo que sucede frente a los hechos del caso que aquí se analiza. A diferencia de lo sostenido en las diferentes demandas que integran el presente contradictorio, el material probatorio no da cuenta de que la Corporación Club El Nogal hubiere incurrido en culpa alguna –particularmente en lo tocante con las revisiones de seguridad- ni, tampoco, de que su proceder hubiere sido el detonante causal de los perjuicios que se reclaman. Muy por el contrario, en el expediente obran pruebas suficientes de la diligencia con que actuó mi representada y de la configuración de una causa extraña, que es la que generó los perjuicios en el caso de marras. Por esa razón, ninguna responsabilidad puede imputársele al Club El Nogal, lo que conduce a que se imponga su exoneración y se revoque la sentencia recurrida.

---

[2] Cfr.: Moisset De Espanés, *Et.Al.,* Responsabilidad por daños. T.I. 1990. p.101; Le Tourneau, Philippe. La responsabilité civile. Dalloz. París. 2004. p.409.

[3] De Ángel Yagüez, Ricardo. La responsabilidad civil. Bilbao. 1989. pp.324 y ss.

[4] Cfr. Pascual Estevil, Luís. Hacia un concepto actual de responsabilidad civil. Bosch. Barcelona. 1989. pp.68-70.

[5] Como bien lo ha indicado la jurisprudencia, "… para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona –natural o jurídica- se requiere, como bien es sabido, que haya cometido una culpa (lato sensu) y que de ésta sobrevengan perjuicios al reclamante. O sea la concurrencia de los tres elementos que la doctrina predominante ha sistematizado bajo los rubros de culpa, daño y relación de causalidad entre aquella y éste…" (Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. Sentencia de junio 10 de 1963). Sobre este particular, dos autores son especialmente elocuentes en torno a la necesidad de la concurrencia de los denominados –en forma desafortunada-, elementos axiológicos de la responsabilidad, a saber: Santos Ballesteros, Instituciones de responsabilidad civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2008. pp.22-49; Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Op.Cit., pp.187 y ss. Desde el punto de vista comparado, lo anterior es constantemente reiterado. Al respecto, vid. Le Tourneau, Philippe. La responsabilidad civil. Legis. Bogotá. 2007.

II. BREVE REFERENCIA A LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO 45 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

La sentencia de primera instancia señaló que los distintos integrantes de la parte actora presentaron demanda judicial en contra de mi representada con el objeto de que a esta se le declare "… *civil y extracontractualmente responsable por los daños y perjuicios que se le ocasionaron …*" por el fallecimiento de César Augusto Caicedo Cruz (q.e.p.d.), Luisa Fernanda Solarte Angulo (q.e.p.d.), Sergio Alejandro Muñoz Salame (q.e.p.d.) y Jorge Andrés Arango Garavito (q.e.p.d.).

Luego de efectuar algunas observaciones sobre la responsabilidad civil contractual y aquella de estirpe contractual, el Despacho señaló que en ambos escenarios "*deben acreditarse suficientemente los siguientes elementos: A) la ocurrencia del hecho dañino; B) el daño causado; C) la relación de causalidad entre el hecho y el daño, además; D) la culpa del demandado y E) el monto del daño o perjuicio causado. Esos elementos deben estar debidamente probados, si se quiere acoger en todo o en parte las súplicas introductorias*".

Posteriormente, el *a quo* inició el análisis del caso particular señalando que se encuentra demostrado el fallecimiento de las personas indicadas precedentemente en el atentado terrorista ocurrido el 7 de febrero de 2003, así como los grados de parentesco con los demandantes.

Sentado lo anterior, la sentencia continuó con el estudio del asunto y encontró responsable a la demandada con fundamento en las siguientes consideraciones:

- El señor Juez de primera instancia indicó que dentro de las obligaciones del Club El Nogal se encontraba "*… el deber de seguridad frente a sus socios, personas amparadas por acciones empresariales e invitados", obligación de resultado al comprometerse y velar por garantizarles una estadía en condiciones de seguridad dentro del Club*".

- Según la providencia objeto de apelación, al ser catalogada como una obligación de resultado, la demandada solo podía excusar su responsabilidad demostrando la presencia de una causa extraña (caso fortuito, fuerza mayor, hecho o culpa de la víctima o el hecho de un tercero), "*quedando en un segundo plano el haber actuado con diligencia o cuidado, lo cual de por si no lo exime de cumplir con dicha obligación de seguridad*".

- Para el *a quo,* en el caso de autos no se configuraron los elementos constitutivos de una causa extraña, vale decir la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

- En lo que tiene que ver con el hecho exclusivo del tercero, el Despacho señaló que el mismo no se encuentra configurado frente al atentado terrorista del 7 de febrero de 2003 pues consideró que "*concurrió con el hecho defectuoso de la obligación de seguridad por parte del Club, convirtiendo el proceder de la demandada en una culpa concurrente, lo de (sic) que desemboca en que se esté en presencia de una obligación solidaria tal y como lo establece el artículo 1571 del C. Civil*".

- Finalmente, la providencia procedió con el cálculo de los perjuicios frente a cada uno de los procesos acumulados, accediendo en todos al daño moral y en dos de ellos a la petición de indemnización por concepto de lucro cesante. Así mismo, se condenó en costas a mi representada y en la parte resolutiva

se indicó el valor de las agencias en derecho concedidas en favor de cada demandante.

III. DESARROLLO DE LOS REPAROS PRESENTADOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los reparos que fueron formulados en primera instancia en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, planteados con la interposición del recurso de apelación, razón por la cual emplearemos el mismo orden utilizado en el respectivo escrito:

1. PRIMER REPARO: INDEBIDA APLICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO – LAS OBLIGACIONES DE RESULTADO SON PROPIAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTRACTUAL.

La sentencia de primera instancia señaló que el presente caso se enmarca dentro de la responsabilidad civil extracontractual. No obstante ello, para la resolución del asunto aplicó un régimen jurídico propio de la responsabilidad civil contractual. En efecto, el Juzgado estimó que mi mandante era responsable frente a los actores por la infracción de una obligación contenida en sus estatutos sociales y, además, categóricamente concluyó que era de resultado y no de medios.

Lo anterior es un claro yerro en la sustentación de la sentencia de primera instancia, toda vez que la jurisprudencia patria, con buen tino, ha admitido la distinción entre obligaciones de medios y de resultado, pero en el campo de la responsabilidad contractual.

Para ratificar lo anterior, es de mencionar que en sentencia de fecha 5 de noviembre de 2013, la Corte puntualizó sobre este el particular:

> *"5.3. La clasificación de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado no se encuentra consagrada en las codificaciones que siguieron el hito planteado por el derecho francés con el Code Civil en 1804, y fue desarrollada por los juristas de principios del siglo veinte para solucionar algunas dificultades encontradas en orden a determinar las diferentes tipologías que puede asumir el contenido de la obligación, para definir la forma en la que se puede dar cumplimiento al compromiso asumido por el deudor, así como para comprender adecuadamente los requisitos exigibles en materia de responsabilidad contractual, específicamente el relacionado con la prueba de la culpa como factor de atribución de la responsabilidad, así como la posibilidad de acreditar o no la diligencia empleada como medio al alcance del deudor para exonerarse de la obligación indemnizatoria.*
>
> *"En Francia, particularmente, la adopción de esta clasificación, allí atribuida a los planteamientos del jurista René Demogue, tuvo como propósito armonizar las disposiciones contenidas en los artículos 1137 y 1147 del Código Civil, en cuanto a la admisibilidad de la prueba de la diligencia o cuidado como mecanismo para obtener la exoneración del deudor en diversos supuestos de responsabilidad contractual.*
>
> *"En el contexto antes descrito, y con especial referencia a las obligaciones de hacer, se ha señalado, en términos simples, que en algunas ocasiones el compromiso del deudor consiste en desplegar una conducta, actividad o comportamiento, con diligencia, sin garantizar que el acreedor obtenga un logro concreto o específico –*

obligaciones de medio o de medios-, al paso que en otros eventos la satisfacción del titular del derecho de crédito estará dada porque con el comportamiento debido se obtenga un resultado o efecto preciso y determinado –obligaciones de resultado-.

"5.4. En el planteamiento clásico de la teoría se consideró que el criterio de distinción para establecer si se está en presencia de una u otra clase de obligaciones, luego de evaluar, obviamente, la voluntad de las partes, se encuentra en la aleatoriedad del resultado esperado. En ese sentido, se señaló que en las obligaciones de medio el azar o el acaso es parte constitutiva de su contenido, y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación diligente del deudor, mientras que, por el contrario, en las obligaciones de resultado lo contingente está presente en una mínima proporción, de manera que la conducta del obligado debe ser suficiente para obtener el logro esperado por el titular del derecho de crédito.

"En la actualidad, como un desarrollo de las ideas antes esbozadas y sin perjuicio de que se puedan considerar varios factores para adoptar la determinación respectiva (cfr. art. 5.1.5. de los Principios Unidroit), el criterio más aceptado para distinguir uno y otro tipo de obligación se encuentra en la incidencia que en el concepto de cumplimiento pueda tener el que con la conducta debida se realice el interés primario del acreedor, es decir, que éste efectivamente obtenga el resultado útil o la finalidad práctica que espera lograr. ***En algunas obligaciones, el deudor asume el compromiso de desarrollar una conducta determinada en favor del acreedor, con el propósito de satisfacer el resultado esperado por éste; no obstante, si tal resultado también depende de factores cuyo control es ajeno al comportamiento del deudor, v.gr. elementos aleatorios o contingentes, la obligación, en dichos eventos, es de medio o de medios****, y el deudor cumple su compromiso si obra con la diligencia que corresponda, aunque no se produzca la satisfacción del interés primario del acreedor. Por su parte, en otras obligaciones, las de resultado, el interés primario del titular del derecho crediticio sí se puede obtener con el comportamiento o conducta debida, toda vez que en ellas la presencia del componente aleatorio o de azar es exigua, y, por ende, el deudor sí puede garantizar que el acreedor obtenga el resultado o logro concreto que constituye dicho interés primario.*

"Ahora bien, no se puede desconocer que el comportamiento del deudor, teniendo presente que la obligación es una relación de cooperación para la satisfacción de necesidades, siempre estará enderezado a la realización del interés del acreedor: v.gr., el médico siempre tendrá como finalidad de su actuación la curación del paciente y el ingeniero se trazará como propósito de su conducta contractual la adecuada y completa culminación y entrega de la obra encargada. Lo que ocurre es que en el primer caso, el médico no puede garantizar que el resultado esperado y querido se realice, pues no se encuentra totalmente a su alcance que ello ocurra (existen circunstancias físicas, anímicas, ambientales, etc., que pueden condicionar y determinar el resultado esperado), mientras que en el contrato de obra, por regla general, para el deudor es factible lograr u obtener que el acreedor reciba efectivamente la obra encargada. En la obligación de medio el deudor cumplirá su deber de conducta desplegando la actividad o comportamiento esperado, aun cuando no se obtenga el resultado o fin práctico perseguido por el acreedor; por el contrario, si la obligación es de resultado, sólo habrá cumplimiento si el acreedor obtiene el logro o propósito concreto en el que fundó sus expectativas.

"5.5. Es suficientemente conocido que la jurisprudencia civil acogió la distinción entre obligaciones de medio y de resultado en las sentencias de 30 de noviembre de 1935 (G.J. 1905 y 1906) y de 31 de mayo de 1938 (G.J. 1936, págs. 566 y ss.), como una clasificación complementaria a la de dar, hacer y no hacer, y con un énfasis particular respecto de su trascendencia para solucionar los problemas de la prueba de la culpa en la responsabilidad civil contractual. Señaló la Corte en esta última ocasión que "[s]entado que al acreedor incumbe en términos generales la

prueba de la culpa contractual, se distingue para los efectos de su rigor entre las obligaciones de resultado y la obligaciones de medios. Siendo -el incumplimiento del contrato- un hecho, todos los medios de prueba son hábiles para establecerlo. Por lo tanto, cuando la obligación es de resultado, es suficiente la prueba del contrato (…) porque prácticamente, en el momento de la valoración del material probatorio, queda demostrada la culpa del deudor ante la ausencia de toda prueba en contrario. La prueba de lo contrario en esta clase de obligaciones no libera al deudor si se refiere a la ausencia de culpa sino que debe versar sobre el caso fortuito, la fuerza mayor o la existencia de una causa extraña que no le sea imputable (…). Respecto de la obligación de medios, se hace indispensable para el demandante, no sólo acreditar la existencia del contrato, sino afirmar también cuáles fueron los actos de inejecución, porque el demandado no podría de otra manera contrarrestar los ataques que le dirige el actor, debido precisamente a la naturaleza de su prestación que es de lineamientos esfumados. Afirmado el acto de inejecución, incumbe al demandado la prueba de su diligencia y cuidado, conforme al inciso 3° del art. 1604, prueba suficiente para liberarlo, porque en esta clase de obligaciones basta para exonerar al deudor de su responsabilidad acreditando cualquiera de esos dos elementos (…)".

"En términos generales, el planteamiento original de la Corte se ha mantenido hasta el presente, destacándose en los pronunciamientos de la Corporación la trascendencia de la clasificación de que se trata, particularmente respecto de la determinación del contenido de las obligaciones, para la definición de su cumplimiento o incumplimiento, así como en lo atinente a su influencia en las cargas probatorias de las partes.

"No obstante, la Sala no es ajena a la evolución que al respecto se ha presentado en el derecho contemporáneo, en donde no pocas críticas se le han realizado, por la amplitud y generalidad que se le pretende dar, porque su origen se encuentra en la necesidad de solucionar problemas legislativos existentes en algunos países europeos que no necesariamente se presentan en estas latitudes, por la dificultad que en ocasiones existe para encuadrar las obligaciones en uno u otro tipo, o, incluso, por el surgimiento en la doctrina de otras clases de obligaciones, como las de garantía o las de seguridad, que difícilmente se ubican en los dos moldes tradicionales.

"Pero, a pesar de las observaciones antes reseñadas, estima la Corte que la clasificación de las obligaciones en de medio y de resultado sigue siendo una herramienta útil para el juzgador en orden a determinar el comportamiento que deben asumir ***los contratantes*** *y contribuye a encontrar criterios aplicables a la definición de las cargas probatorias en la responsabilidad civil* ***contractual.*** *Sin embargo, como también lo ha señalado la Sala luego de censurar indebidas generalizaciones, lo fundamental está en identificar el contenido y alcance del contrato celebrado en el caso concreto, así como los particulares deberes de prestación que de él hayan surgido"* (se subraya y resalta).

En este orden de ideas, como ha quedado visto, la clasificación de las obligaciones de medio y de resultado ha sido admitida por la Corte en el terreno contractual. Por lo tanto, resulta claro que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, toda vez que empleó un régimen jurídico indebido para la resolución de la controversia judicial, cuestión que necesariamente vicia la conclusión a la que llegó el *a quo*.

En lo que tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual, las obligaciones de resultado han sido consideradas en un plano excepcional y limitado, cuando quiera que se está en presencia del desarrollo de actividades peligrosas. Al respecto, en concepto emitido por el Dr. Jorge Santos Ballesteros, profesor universitario, doctrinante en temas de responsabilidad civil y exmagistrado de la

Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Sala Civil de la misma corporación, que se adjunta como parte de la presente sustentación, claramente se indicó lo siguiente:

> *"Es importante precisar, como lo hace la Corte Suprema en la sentencia de 11 de septiembre de 2002, que la jurisprudencia siempre ha tenido el tino de no confundir una y otra responsabilidad, "porque no es indiferente el régimen legal ni la naturaleza de la acción, ni las consecuencias de una u otra, como tampoco lo concerniente a la prueba, al tratamiento de la culpa o a los términos de prescripción'.*
>
> *"4.6.2. A juicio de la Corte Suprema, por lo demás, la responsabilidad civil 'Tradicionalmente ha sido concebida en una dimensión dual, esto es, contractual y extracontractual. La primera se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. La segunda surge de incumplir el mandato legal y genérico de no causar daño a otro, previsto en el artículo 2341 del Código Civil. Se produce sin previo pacto y por virtud de un encuentro fortuito entre los relacionados con el daño; en otros términos, de un hecho jurídico que puede ser una conducta punible (hecho jurídico humano voluntario ilícito) o un ilícito civil (hecho jurídico humano involuntario ilícito), siempre al margen de un incumplimiento obligacional previo y vinculante. La función esencial de ambos tipos de responsabilidad es la reparación de un perjuicio causado injustamente; sin embargo, en sistemas jurídicos como el nuestro, cada uno de ellos tiene su propio ámbito normativo, tanto en lo puramente sustancial como en algunos aspectos de orden procesal. Así, mientras la contractual tiene su fuente legal en los preceptos 1602 a 1604 del Código Civil, que pueden calificarse de rectoras en esta precisa materia, además de los términos pactados por las partes del acuerdo, la convención o el contrato, sin perjuicio de las reglas sobre la materia; en la extracontractual, en cambio, su marco regulatorio lo contienen los artículos 2341 a 2358 ejusdem. Como se vé, son dos regímenes jurídicos enteramente distintos, con sus propias regulaciones normativas, a pesar de lo cual su identificación no está exenta de debates en casos concretos, lo que ha dado lugar a las denominadas "zonas grises" que revelan insuficiencia de cada una de estas modalidades de responsabilidad civil, si se les considera en su rígida estructura tradicional. Precisamente por ello, tal estado de cosas ha dado lugar a figuras como la denominada "obligación de seguridad" en materia negocial. En sana lógica, no parece procedente juzgar un asunto cuyo rango atañe puramente a este último, con las reglas que corresponden a la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, la complejidad propia de la dinámica social, económica y jurídica de hoy, ha dado lugar a examinar con mayor detenimiento los ámbitos propios de cada una de las referidas tipologías de la responsabilidad civil, hallando que no todos los elementos de aquella le pertenecen de modo exclusivo; tal es el caso de la presunción de culpa'.*[6]
>
> *"4.6.3. Por supuesto que en la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, surgen obligaciones de resultado a cargo del guardián de la actividad, entendiendo por tal, según la Corte Suprema, 'la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño, un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control'*[7] *Por consiguiente, el agente responsable por daños originados en actividades peligrosas tiene un deber jurídico, verdadera obligación de custodia, que recae sobre las cosas empleadas o utilizadas, deber Jurídico que conlleva la necesidad de conservar las cosas en estado de no generar perjuicios y de no producir peligros para los terceros. En esta clase de daños surge por supuesto una obligación se seguridad.*
>
> *"4.6.4. Por lo demás, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, la determinación de si una actividad – sin cosas o con cosas, inactivas o en movimiento – es peligrosa lo dicta por lo general la razón natural, y no es por consiguiente una suposición a la*

[6] SC 1819 de 28 de mayo de 2019.

[7] Cas. Civ., 4 de junio de 1992. Gaceta Judicial, t. CCXVI, n° 2455, pág. 506

que se llega sin más. La actividad peligrosa es pues, aquella que, según la Corte Suprema, genera más probabilidades de daño y capacidad de destrozo mayor, y cuyos efectos se vuelven incontrolables".

"5.3. Ante todo, se advierte que, en este evento, no se está en presencia del desarrollo de una actividad peligrosa, aserto que brota con la sola lectura del objeto social de la Corporación Club El Nogal, por lo que es indubitable la ausencia de las características propias para que la actividad desarrollada por la Corporación demandada se repute como peligrosa[8].

"5.4. Por consiguiente, no es dable deducir la existencia o estructuración de una obligación de seguridad, con contornos propios y definidos, como lo hace el juzgado de instancia, de los estatutos de la Corporación, ni menos que esta supuesta obligación se enmarque en una responsabilidad extracontractual, pues esto equivale a desconocer el ámbito y los contornos de una y otra responsabilidad, como ya se ha puesto de presente".

Así las cosas, resulta claro que la sentencia de primera instancia efectuó una aplicación indebida del régimen jurídico al caso de autos, razón por la cual debe ser revocada. Se insiste, en el presente caso no puede endilgarse una obligación de resultado en cabeza de el Club El Nogal pues ellas son propias de la responsabilidad contractual o, de manera excepcional y limitada, de la responsabilidad extracontractual en el marco del desarrollo de actividades peligrosas, lo cual no es aplicable a mi representada, conforme ya ha sido definido judicialmente.

2. SEGUNDO REPARO[9]: INDEBIDA APRECIACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OBLIGACIÓN EN CABEZA DEL CLUB EL NOGAL / ELLA CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE MEDIOS Y NO DE RESULTADO.

Dentro del fundamento aducido por el juez de primera instancia para declarar la responsabilidad del Club el Nogal en el presente caso, se indicó que éste había incumplido con su obligación de seguridad, derivada de los estatutos sociales, a la que se le atribuyó el carácter de obligación de resultado, según se acotó previamente.

La obligación que se desprende de la lectura de los estatutos sociales del Club el Nogal da lugar a una razonable obligación de medio, atada al objeto social del Club y en atención a su naturaleza privada, que, como es natural, se enmarca en el parámetro general de conducta aplicable a esta clase de establecimientos, esto es, totalmente ajena a una obligación de resultado, pues la responsabilidad que surge a su cargo estará regida y, desde luego, reservada a una falta a la diligencia debida.

La sentencia recurrida se fundamenta en los Estatutos del Club, particularmente, en el numeral V del artículo 55 que establece como funciones del gerente del Club El Nogal, "*velar por la seguridad de las personas en el Club y por los bienes de la corporación*". En ese sentido, toma tal previsión, cuya naturaleza es de carácter general y abstracto e infiere, a partir de allí, la existencia de una obligación que cataloga como de resultado, sin mayores consideraciones en relación con el contenido y alcance de la misma.

---

[8] Así quedó asentado además en la sentencia de casación SC9788-2015 de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), que constituye, por consiguiente, un precedente judicial.

[9] Se formula sin perjuicio del primer reparo.

Al respecto es importante señalar, en primer lugar, que es cierto que el Club El Nogal consagra en sus estatutos una previsión relacionada con la protección de los individuos que hacen parte del mismo. Sin embargo, dicha previsión debe ser entendida en su justa dimensión. La formulación genérica que allí se hace refleja justamente que el compromiso asumido por el Club El Nogal no corresponde a una arquetípica obligación, con las características de concreción y ejecución propias de este tipo de figuras, sino que, en realidad, se trata de un deber genérico de comportamiento que, en esa medida, compromete la actuación de mi representada pero se circunscribe estrictamente a los medios que razonablemente están a su disposición y, naturalmente, a las posibilidades jurídicas y fácticas en cuyo marco mi representada operaba, especialmente comparada con establecimientos similares sin descontextualizarla y de conformidad con las circunstancias del momento que no hacían previsible la perpetración de un atentado terrorista contra un club social como el que ocurrió el 7 de febrero de 2003, el cual no tenía precedente alguno en Colombia, ni estaba precedido de amenazas dirigidas a mi poderdante.

Puesto en otros términos, como el fundamento de la sentencia de primera instancia parte de la existencia de una obligación de seguridad que se estimó como de resultado, hay que resaltar que el contenido del débito que sustentó la decisión no es lo suficientemente concreto y específico como para alcanzar el *status* propio de una obligación de tal naturaleza. En realidad, se trata de un deber que, en su condición de tal, implica una prestación genérica, que no puede tratarse como se trata una obligación de resultado.

Eso es justamente lo que sucede con el deber en cabeza del Club El Nogal. Es cierto que la Corporación debe velar por el bienestar y por la seguridad de sus socios y, en general, de las personas que se encuentran en sus instalaciones. Sin embargo, de allí no puede derivarse una arquetípica obligación de resultado, con las características de concreción y especificidad necesarias para ello. En efecto, la propia formulación que de este débito contienen los estatutos, permite entrever que se trata de un deber genérico de comportamiento cuyo alcance no puede ser extendido al punto de una obligación de resultado. Al llevarlo a tal nivel, la sentencia desfiguró los estatutos en esta materia, ya que, en últimas, la prestación que se le atribuyó al Club rebasó la de velar por el bienestar y la seguridad de quienes se encuentran en sus instalaciones para, en su lugar, convertirla en una obligación de resultado frente a actos terroristas perpetrados por organizaciones criminales que el propio Estado no ha podido reprimir, teniendo bajo su exclusivo resorte la seguridad y el monopolio del uso de las armas. El enfoque de la sentencia de primera instancia, dicho sea con todo respeto, desborda toda razonabilidad e impone unas cargas excesivas en cabeza de los particulares, las cuales son completamente ajenas al objeto social del Club[10].

Puesto en otros términos, si se analiza bien la prestación que figura en los estatutos del Club El Nogal, se encuentra que lo que allí se plasma no es una obligación por la que se asume un resultado específico, sino una formulación claramente genérica sin especificidad concreta.

Es más: si se considera jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, se encuentra que la prestación de seguridad que se le atribuye a mi representada, no puede ser calificada, bajo ninguna circunstancia, como una prestación de resultado, sino solamente como uno deber genérico de comportamiento. En efecto, la jurisprudencia de la citada corporación tiene establecido que para determinar si un débito es de medios o de resultado, se

[10] El cual incluso fue expresamente citado en la sentencia al señalar que el Club El Nogal es un "establecimiento de '*naturaleza cultural, social y deportiva, dirigido fundamentalmente a hombres y mujeres de empresa de trabajo'*".

> "… *suelen tomar en consideración (…) diversos criterios, habida cuenta de la insuficiencia o complejidad de uno solo de ellos; afloran entonces pautas tales como la aleatoriedad del fin último perseguido por el acreedor, conforme a la cual suele considerarse la obligación de seguridad como un mero deber general de prudencia en aquellas hipótesis en las que la conducta del deudor se orienta a la "satisfacción de un interés de obtención incierta", vale decir, cuando la consecución del desenlace deseado por el acreedor no depende ordinariamente, ni de manera exclusiva de la diligencia del deudor, pues puede acontecer que a pesar de su esmerado empeño no se obtenga el desenlace querido por aquél, por causa de la frecuente intervención de factores de distinta estirpe que se escapan a su control. Contrariamente, si son mínimas las circunstancias azarosas que pueden frustrar el propósito anhelado por el acreedor, ese "riesgo despreciable" permite atribuirle al deudor una obligación de seguridad determinada o de resultado. Del mismo modo, y estrechamente ligada con lo anteriormente dicho, la participación más o menos activa del acreedor en el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor ha sido otro de los criterios tenidos en cuenta para efectos de resaltar la anotada distinción, de modo que si aquél (el acreedor) juega un papel eminentemente pasivo en los hechos es posible entender que el deber de seguridad a cargo del deudor suba de punto, inclusive, hasta poder ser calificado como obligación determinada o de resultado, al paso que si interviene activamente, dado que disminuye el poder de control del deudor, se podría estar ante una obligación genérica de prudencia o diligencia. Más adelante se verá cómo este criterio ha sido tenido en cuenta por esta Corporación en circunstancias similares a las de este asunto. En todo caso, valga la pena subrayarlo, suele decirse que si la obligación de que se trate no es susceptible de una graduación "de más o de menos", no puede concebirse como de mera prudencia y diligencia …"*[11] (se subraya).

Nótese entonces cómo se acude a dos criterios predominantes para establecer la naturaleza de un débito como de resultado o de medios: (i) la aleatoriedad o lo azarosa que resulta la obtención del resultado por parte del deudor, toda vez que si están presentes –en el sentido, por ejemplo, de que intervienen factores extraños-, mal podría afirmarse que ese deudor está obligado al resultado –ya que ello sería casi como obligarlo a lo imposible-; y, (ii) la participación más o menos activa del acreedor, en la medida en que si éste tiene una injerencia importante en la realización de la prestación, tampoco resultaría razonable que se cargue al deudor con la absoluta consecución del resultado.

---

[11] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de octubre de 2005. Exp. 14491. En dicha ocasión –que, por lo demás, demuestra que en Colombia existe relativa aceptación de la distinción entre los medios y los resultados-, se afirmó además que "…dada la innegable dificultad de elaborar soluciones dogmáticas generales y abstractas e, inclusive, la de establecer un criterio único o uniforme, corresponderá al juzgador analizar las particularidades de cada caso con miras a adoptar cualquiera de tales pautas que considere idónea para distinguir si la obligación de seguridad a cargo del deudor contiene únicamente un deber genérico de diligencia o, por el contrario, el de evitar cualquier accidente **en el cumplimiento del contrato** que lesione a la persona del acreedor o a sus bienes, todo esto, claro está, cuando las partes o la ley no lo señalen expresamente …" (Ibíd). Ahora bien, no sobra advertir que son disímiles los criterios para determinar si una prestación es de medios o de resultado. Se han acudido a aspectos como la intención de los contratantes, la naturaleza intrínseca de la actuación debida o la equidad. Emilio Betti, por ejemplo, señala que la consabida naturaleza intrínseca permitirá determinar si "… la prestación no consiste en el simple despliegue de una actividad, pues lo que es debido es el resultado útil del propio obrar. Si ese resultado falta, por más grande que haya podido ser el esfuerzo desplegado por el deudor, no hay cumplimiento del contrato (…) faltando el resultado, falta también la prestación …" (Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones. Tomo I. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1960. p.39). Allí se miran aspectos como la aleatoriedad de la prestación, como factor decisivo para determinar la tipología frente a la cual se está. Sin embargo, ello tampoco ha estado exento de debates. Boris Starck, por ejemplo, sostiene que el parámetro de la aleatoriedad no corresponde la realidad: "… la repartición de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado es hecha por los tribunales en función de numerosos criterios. El *alea* puede ser considerado, en ciertos casos, en asocio de otros factores que intervienen. El examen de la jurisprudencia hace ver que la intención de las partes y la economía general del contrato, juegan frecuentemente un papel determinante …" (Starck, Boris. Obligations. p.406). En fin, otros, por su parte, acuden a la equidad como criterio determinante (Cfr. Fraga, Jordano. Obligaciones de medios y de resultado. Op.Cit., p.10).
Obsérvese que el análisis doctrinal está referido a la responsabilidad contractual.

Pues bien, si se analiza a la luz de lo anterior la obligación del Club El Nogal, se observa que en modo alguno puede concluirse que ella sea una obligación de resultado. Y ello es así por cuanto la aleatoriedad de un posible ataque terrorista es significativa, particularmente si se tienen en cuenta las diferentes formas que para la época adoptaba el crimen organizado. En ese sentido, la esfera de control del deudor era abiertamente restringida y, por esa misma razón, se limitaba a poner los medios razonables a su disposición operantes en esa época. Lo anterior, con más veras, si se tiene en cuenta la sofisticación del actuar terrorista existente para el momento en que ocurrieron los hechos –como imprevisible e irresistiblemente lo tuvo que soportar mi representada-, circunstancia que definitivamente hacía que las posibilidades de control efectivo del terrorismo por parte de un organismo privado como es la Corporación Club El Nogal, fueran prácticamente nulas.

En adición a lo anterior, debe señalarse que ni de la lectura aislada de la disposición estatuaria a la que hizo referencia la sentencia de primera instancia, ni de la lectura integrada de los estatutos, ni por la naturaleza privada y social del Club, se puede concluir válidamente, sin transgredir la sana crítica, la razonabilidad y la proporcionalidad, que el deber que le corresponde al Club el Nogal equivale a una obligación de resultado.

El deber contenido en el artículo 55 literal v de los estatutos, debe ser leído de forma sistemática con lo que también dispone el artículo 14 de los mismos, al señalar:

> *"Artículo 14. Son obligaciones de los Corporados o Socios de El Club, en cualquiera de sus categorías:*
>
> *(...)*
>
> *"PARÁGRAFO. **El Club tomará las medidas que estén a su alcance para hacer segura la estadía de cuantos lo visiten**. Sin embargo, los socios aceptan que algunas de las actividades que cumplirán en sus instalaciones suponen cierto riesgo, que asumen por su cuenta. Tales son: la piscina, el gimnasio, los aeróbicos, el polígono (...), y en general todas las facilidades deportivas. El club no tendrá responsabilidad alguna por daño o accidente causado por culpa de quien lo sufra o por circunstancia fortuita o de fuerza mayor"* (Negrilla fuera del texto original).

La redacción de dicha disposición confirma que, conforme a su objeto social, el Club el Nogal no está instituido para asegurar, a toda costa, la seguridad de las personas que ingresan a sus instalaciones, sino que se enfoca en las actividades prestadas por el Club, cuestión que enfatiza la condición de deber genérico de conducta a su cargo, que no es, no debe ni puede serlo, de obligación de resultado.

Téngase en cuenta, además, que dicho deber genérico se encuentra previsto para situaciones que se encuentren en el control del Club, esto es, garantizar el mantenimiento y buen estado de la infraestructura física, contar con los elementos de seguridad debidos (botiquines de primeros auxilios, extintores, entre otros), tener previstos planes de evacuación ante distintas contingencias (incendios, terremotos…), etc., pero no para condiciones completamente externas, como un atentado terrorista, conducta delictiva completamente ajena al Club que para él revistió, además, la calidad de imprevisible e irresistible, según se indicará más adelante, por lo que no puede comprometer su responsabilidad.

Por todo lo anterior, es dable entonces concluir que el deber a cargo del Club El Nogal no podía catalogarse como una obligación de resultado. Su contenido, así como la aleatoriedad de su consecución, conducen a la indefectible conclusión de que este era un deber de diligencia y prudencia. Un deber genérico de comportamiento que, en su condición de tal, supone que el régimen aplicable a la

presente controversia es el de la culpa probada. En consecuencia, el pretender enmarcar el deber de mi representada como una obligación de resultado conlleva a una desnaturalización del mismo, consecuencia de una interpretación indebida e irrazonable del juez de primera instancia, la cual deberá ser corregida por el *ad quem* para, en su lugar, negar las pretensiones del libelo introductorio.

3. TERCER REPARO: LA SENTENCIA IMPLICA UNA CARGA EXCESIVA PARA LOS PARTICULARES FRENTE A ATENTADOS TERRORISTAS, QUIENES NO ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE ASUMIRLA.

No puede trasladarse una obligación propia del Estado a una entidad civil, cuyo objeto social es completamente ajeno a la protección de personas a nivel policivo, militar, de inteligencia, contrainteligencia, etc.

Al respecto puede tenerse en cuenta que, por el atentado terrorista perpetrado por las FARC el 7 de febrero de 2003, se formularon distintas demandas de responsabilidad en contra del Estado [Fiscalía General de la Nación el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Policía Nacional y el Ministerio de Defensa]. El asunto fue resuelto de forma definitiva por el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, en la que se reconoció que el atentado obedeció a un hecho exclusivo de un tercero y que no podía imputársele responsabilidad al Estado por dicho hecho. Si ello es así, mucho menos puede considerarse que el Club el Nogal, como particular que es, tuviera la obligación de repeler la agresión y evitar sus consecuencias destructivas y de intencional daño cuando el mismo Estado no se encontraba en el deber ni en la capacidad de prevenirlo o reprimirlo.

No puede equipararse el deber constitucional de seguridad en cabeza del Estado, quien detenta el monopolio del ejercicio de la fuerza y la obligación de proteger a la ciudadanía con el deber propio de una entidad de derecho privado destinada a labores sociales y deportivas. Resulta a todas luces desproporcionado endilgar a mi representada la obligación de anticipar y reprimir cualquier ataque terrorista que pudiese presentarse, máxime considerando que dicha pretensión no es exigible ni al mismo Estado, como lo estableció el Consejo de Estado en la referida sentencia del 30 de marzo de 2022:

> *"La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades militares estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de ataques sucedan. El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades"*[12].

Es, pues, evidente que si la previsión y contención del ataque terrorista que da lugar al presente proceso no le puede ser endilgada al Estado, quien, a la postre, cuenta con entidades profesionales y equipos altamente especializados para dicho propósito, mucho menos ella resulta ser atribuible a un particular como el Club el

[12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque.

Nogal. Un razonamiento contrario, como el que contiene el fallo atacado, obedece, a no dudarlo, a un análisis desmesurado, huérfano de asidero jurídico.

Bajo este entendido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado en materia de atentados terroristas al señalar que, en dichos eventos, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, esto es, un sistema de culpa probada. Este evento resulta relevante a efectos de señalar que no resulta viable, aún para el Estado, asumir un deber de seguridad con la connotación de obligación de resultado[13].

Si la anterior doctrina es aplicable frente al Estado, quien tiene por disposición constitucional la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos y habitantes de Colombia, ¿Cómo puede trasladarse razonable y válidamente a El Nogal, club social sin ánimo de lucro, una obligación de protección como la que se esboza en el fallo recurrido?

Téngase en cuenta, adicionalmente, que los señores Julio Martín Otálora Cano, Luz Constanza Prado Restovich, Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado participaron en el referido proceso judicial fallado por el Consejo de Estado, cuestión que refuerza el hecho consistente en que el atentado terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003 tiene su causa en el hecho del tercero, razón por la cual no resulta jurídicamente viable, como tampoco aceptable, desplazar la responsabilidad en cabeza del Club El Nogal por estos hechos. En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que pretender que el Club El Nogal, quien también fue víctima del atentado terrorista, sea el centro de imputación de responsabilidad en este caso implicaría no solo una absoluta desconexión jurídica, sino, además, una carga excesiva en cabeza de los particulares. Se insiste: ¡si el Estado no es responsable por los hechos perpetrados en la noche del 7 de febrero de 2003 por las FARC, mucho menos lo puede ser un particular (en este caso, el Club El Nogal)!

Es más: en reciente providencia la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el atentado terrorista cometido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club El Nogal constituía un crimen de guerra. Al respecto, la JEP manifestó lo siguiente:

> *"41. (…) la explosión ocurrida el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá fue planeada y realizada por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Es así como luego de examinar los elementos de juicio vertidos en el proceso, el juzgador concluyó que "está demostrado que el secretariado de las FARC (sic) [ordenó] el atentado contra el club El nogal, conducta que fue planeada y dirigida por el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', quien era el enlace directo con la dirigencia del grupo alzado en armas". Conforme a esta conclusión el juzgador estableció que "los miembros del secretariado de las FARC (sic) tuvieron conocimiento y voluntad de los resultados típicos que se ocasionaron […] pues contaban a su disposición con la columna móvil 'Teófilo Forero' la cual había preparado hombres con conocimiento en explosivos y con la firme convicción de realizar atentados terroristas. …*
>
> *"42. Conforme a lo anterior, es posible para este despacho advertir que el conflicto armado fue la causa directa o indirecta de esta conducta punible ocurrida el 7 de*

[13] El Consejo de Estado en sentencia del 27 de marzo de 2014 señaló: "***pues a las autoridades estatales no puede exigírseles lo imposible, como adoptar medidas fuera de su alcance en cuanto a recursos económicos se refiere para repeler la acción de mentes desquiciadas y criminales****; con las limitaciones que tiene la administración en países como el nuestro, no se puede pedir que para cada ciudadano o frente a cada bien que pudiera resultar vulnerado, se disponga de un agente policial o vigilancia especial con el objeto de contrarrestar los atentados de la delincuencia organizada, so pena de resultar comprometida la responsabilidad patrimonial de la administración"* (Negrilla fuera del texto original).

febrero de 2003, que este contexto influyó en los autores, en su decisión de cometerla, en la capacidad para hacer el atentado y en la selección del objetivo…

"44. De acuerdo con el literal a del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no podrán ser objeto de amnistía, entre otros, aquellas conductas consideradas graves crímenes de guerra. Por ello, en este caso se pasará a realizar un examen de la conducta en la que participaron HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a la luz de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) con el propósito de verificar si es viable continuar con el trámite de amnistía o es necesario declarar su no amnistiabilidad, al menos de forma preliminar. El DIH es el marco jurídico que regula la conducta de las partes que participan en hostilidades y la protección a las personas y bienes que no participan en ese escenario.

"45. En primer lugar, se analizarán los principios de distinción y precaución en el caso concreto y, en segundo lugar, se hará un examen del ataque en contra del Club el Nogal a la luz de la prohibición de ataques indiscriminados por el Estatuto de Roma y las normas del DIH compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"46. En lo que refiere al primer asunto, se tiene en cuenta que el principio de distinción constituye un fundamento del DIH. A este principio se refieren las primeras normas de DIH compiladas por el CICR, así la Norma 1 indica que "[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados".

"47. Este principio se ha consagrado en normas de los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo Adicional II 1977 a estos convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13 reglamenta la protección general de la población civil respecto de operaciones militares y establece "[n]o serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".

"48. Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8.2.e).i) consagra como crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales el "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.". En ese orden, los ataques permitidos en el marco del DIH deben dirigirse exclusivamente en contra de objetivos militares; así lo consagra la Norma 7 del DIH del CICR. Al respecto, la Norma 8 del DIH indica que los bienes que pueden ser considerados objetivos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida".

"49. En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil. …

"61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO

*ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad **por constituir graves crímenes de guerra…**"*[14] *(se destaca).*

Así las cosas, resulta claro que no puede endilgarse la responsabilidad a un particular, en este caso el Club el Nogal, **por un atentado terrorista que reviste la condición de crimen de guerra**[15]. Declarar a la demandada responsable por los hechos que dan base a la presente acción judicial representa un escenario abiertamente desproporcionado en relación con las cargas que debe asumir un particular, quien, no se olvide, también fue directamente afectado por el acto terrorista que se calificó como acto de guerra. Un particular afectado por un conflicto no es responsable patrimonialmente por las consecuencias de daño que sufran otras personas en virtud de crímenes de guerra.

Los anteriores razonamientos, pues, deben conducir al Tribunal Superior de Bogotá a revocar la sentencia de primera instancia pues la decisión recurrida implica una carga excesiva para los particulares frente a atentados terroristas, quienes no están en la obligación de asumirla, máxime cuando los mismos constituyen crímenes de guerra.

4. CUARTO REPARO: EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE ES EL DE CULPA PROBADA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DEL CLUB EL NOGAL / AUSENCIA DEL ELEMENTO CULPA / ACTUACIÓN DILIGENTE DEL CLUB EL NOGAL.

4.1. El régimen aplicable al caso de autos es el de culpa probada; estándar de conducta; medidas de seguridad; referencias iniciales.

La sentencia de primera instancia se equivocó en el régimen de responsabilidad aplicable al caso de autos; la definición de este proceso debe analizarse a la luz del régimen de responsabilidad por culpa probada. En efecto, como regla general dentro del sistema jurídico colombiano, se tiene que la culpa debe probarse por quien la invoca[16]. Así las cosas, el régimen de responsabilidad civil es predominantemente subjetivo, manteniendo el régimen objetivo de responsabilidad como un caso excepcional y bajo parámetros legales y jurisprudencialmente

---

[14] Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.

[15] Respecto a la definición de un crimen de guerra la Corte Constitucional al momento de realizar el control sobre la Ley aprobatoria del Estatuto de Roma señaló: *"El artículo 8 del Estatuto consagra los crímenes de guerra, categoría que recoge violaciones a los principios y usos fundamentales de la guerra consagradas en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, de Ginebra de 1925, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales, así como definiciones consagradas en otras normas convencionales sobre el uso de ciertas armas de guerra.*
[…]
*1) Infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, en otras palabras que los actos que a continuación se señalan, se cometan contra los heridos, enfermos, náufragos de las fuerzas armadas, prisioneros de guerra o **civiles:***
i) Matar intencionalmente;
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar contra la integridad física o la salud;" (Se destaca).

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda.

[16] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de enero de 1967.

definidos. Esto da lugar a que, ante la ausencia del desarrollo de actividades peligrosas[17], el régimen de culpa aplicable al *sub lite* es el de culpa probada.

Así, solo puede endilgase responsabilidad a la Corporación Club El Nogal si se verifica una acción u omisión culposa y relevante en cabeza de ésta última y de cara a la necesaria y consecuente causación de daño derivada de tal omisión. En ese sentido, debe analizarse la actuación del Club frente al estándar de conducta exigible para dilucidar, a partir de allí, si efectivamente se incumplió. **En este caso, dicho estándar de conducta está dado por el proceder que habría adoptado una corporación como el Club El Nogal para la época en que ocurrieron los hechos**. De este modo, únicamente si se evidencia que el Club El Nogal no adoptó las medidas que habrían tomado sus pares en aquella época, se podrá concluir que actuó culposamente.

Se insiste: el régimen de responsabilidad que impera en este caso es, a no dudarlo, el de la culpa probada. No existen fundamentos o razones por las cuales pueda afirmarse que el Club El Nogal está sujeto a un régimen de culpa presunta y, mucho menos, a uno de responsabilidad objetiva.

Por lo anterior, resulta indispensable considerar primeramente los elementos estructurales que deben presentarse para que resulte jurídicamente factible la declaratoria de responsabilidad civil en cabeza de una persona particular: un daño, una culpa y un nexo causal entre estos. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 2341 de nuestro Código Civil *"el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido"*. En relación con el elemento culpa, debe indicarse que el sistema de responsabilidad que rige la actuación del Club el Nogal en el presente evento es la de culpa probada, según se acotó, que se desprende del ya mencionado artículo 2341 del Código Civil, por lo que para pretender endilgar la responsabilidad a mi representada deberá acreditarse que ésta obró fuera del deber de diligencia que le asistía para la época, comparado con la conducta adoptada por sus pares.

A este respecto recuérdese que la culpa, como factor subjetivo de atribución de responsabilidad civil, consiste en un *error de conducta tal que no habría sido cometido por una persona prudente y diligente, situada en las mismas circunstancias que aquel cuya conducta se evalúa*[18]. De este modo, para encontrar probada la culpa de mi representada en el caso de autos, el demandante tenía la carga de demostrar que su actuar no encajaba en el estándar de conducta que le era exigible a este tipo de entidad.

Como bien fue señalado en la contestación de la demanda, en los alegatos de primera instancia y reconocido expresamente en la sentencia de primera instancia que se recurre, la Corporación Club el Nogal cumplía con todos los estándares de

---

[17] Téngase en cuenta que el Club El Nogal no ejerce actividades peligrosas, según lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada en proceso en que fue parte y se adujeron por la actora los mismos hechos del presente litigio: *"La actividad desarrollada por la opositora no es peligrosa, como se extrae de su objeto social, sin que las particulares condiciones de seguridad personal de los socios o invitados, por los cargos que desempeñan, tengan alguna incidencia en ese sentido"* (Sentencia de 29 de julio de 2015. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez).

Por ello, resulta claro que mi representada no se encontraba en ejercicio de una actividad peligrosa y, en consecuencia, el régimen de responsabilidad aplicable no es el derivado del artículo 2346 del Código Civil, de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas, sino el de culpa probada propio del artículo 2341 del mismo código, según se acotó.

[18] Cfr. Alessandri Rodríguez, Arturo. Derecho Civil. Teoría de las Obligaciones. El Esfuerzo. Santiago de Chile. 1981, p.8; Weill, Alex y Terré, François. Droit Civil. Les obligations. Dalloz. París. 1980. Num.395.

seguridad razonables implementados por los establecimientos de similares condiciones para la época. Es más, superaba con creces las medidas de seguridad implementadas en ese entonces por otros clubes y centros comerciales de la capital del país, razón por la cual es equivocado señalar que existió una culpa concurrente en cabeza de mi representada.

Téngase en cuenta que el Club El Nogal no incurrió en negligencia alguna respecto de sus sistemas de vigilancia y control de seguridad. Ciertamente, para el desarrollo de su objeto social y para este específico efecto, el Club contaba para la época de los hechos con un apreciable número de empleados y personal suministrado por contratistas con conocimientos específicos, especializados y altamente técnicos. Dentro de tales contratistas, El Nogal tenía personal de vigilancia suministrado por una firma especializada en la prestación de este tipo de servicios de seguridad que cumplía con los protocolos y procedimientos establecidos por el Club. De hecho, el sistema con el que contaba el Club El Nogal para el año 2003, era reconocido como el mejor y más completo, tanto por los otros clubes sociales de la ciudad, como por empresas de similar naturaleza que utilizaban los servicios de este tipo y por la Aseguradora de Riesgos Profesionales -ARP Liberty- en su informe respecto del siniestro.

Como puede comprobarse con las distintas pruebas allegadas al proceso y que serán indicadas con mayor detenimiento posteriormente, el Club el Nogal adoptó, entre otras medidas, porterías de acceso vehicular; soporte canino y técnico (circuito integrado de televisión); contratación de personal especializado e infraestructura de última tecnología.

Lo anterior confirma y prueba plenamente la diligencia debida con que el Club El Nogal adoptó, para la época del atentado terrorista, en relación con el esquema de seguridad implementado y el apoyo tecnológico y humano que tenía a su cargo para desarrollarlo. **Es que nada habría impedido la explosión del carro bomba en las instalaciones del Club El Nogal aun así hubiese sido detectado que el vehículo se encontraba cargado con explosivos**. Basta una lectura a las distintas pruebas testimoniales que fueron practicadas para concluir las siguientes aseveraciones:

- El Club El Nogal tenía implementadas las citadas medidas de seguridad, como de manera afirmativa y concluyente lo declararon distintos testigos[19], a los que, precisamente, hace alusión la sentencia de primera instancia que se recurre, medidas que superaban las de sus pares.

- El vehículo fue cargado con explosivos de manera planeada para que no fueran detectados visualmente por los guardias de seguridad, ni olfativamente por el canino que pudiera actuar para ese efecto en las rondas

[19] Entre otros, en el expediente obran como prueba las declaraciones de varios testigos que afirmaron categóricamente que El Nogal era un Club "modelo" en materia de medidas de seguridad, comparado con otras instituciones de similar naturaleza, lo que descarta, *in radice,* que se pudiera hablar de la existencia de alguna culpa, impericia o negligencia en cabeza de mi representada. Así, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva de Unicentro, el gerente del Gun Club, el gerente del Club Metropolitan y dos expertos en la industria de seguridad, fueron claros y contundentes a este respecto, por lo que la valoración adecuada y razonable de estas pruebas, ineludiblemente habría conllevado al *a quo* a considerar que las medidas de seguridad de mi representada eran más que razonables, pues superaban ampliamente las que se podrían encontrar en cualquier otro establecimiento de similares características en nuestro país.

A su vez, pueden tenerse en cuenta los testimonios de Fernando Ruíz Llano (ex Presidente de la Junta Directiva del Club El Nogal), Fernando Zarta Arizabaleta (representante legal de Mapfre Seguros para la época), Carlos Eduardo Balaguera (abogado y consultor en materia de seguridad) y del informe rendido por la ARP Liberty, los cuales daban cuenta de las sobresalientes condiciones de seguridad con las que contaba el Club para la época del atentado.

realizadas[20]. Sobre este último particular, hay que tener en cuenta y en especial consideración que para la época del atentado ni siquiera existía regulación sobre procedimientos y estándares técnicos de seguridad con caninos. El Club El Nogal, a diferencia de sus pares, y como medida disuasiva, contaba con este elemento, el cual no era exigible desde un punto de vista regulatorio, como tampoco de conducta debida.

- **El vehículo cargado con explosivos fue detonado por control remoto desde el exterior de las instalaciones del Club El Nogal, por lo que nada ni nadie habría podido intervenir para que no fuera accionado en el parqueadero o en la portería de acceso. De haberse producido la detonación en este último punto de la edificación, el desastre hubiera sido de consecuencias muy superiores a las que lamentablemente acontecieron, según declaraciones rendidas por Alejandro Pérez Silva (ingeniero civil, Magister Diseño en Ingeniería Civil) y Luis Enrique García Reyes (ingeniero civil de la Universidad de los Andes y master *in science* de la universidad de Illinois de Estados Unidos), quienes realizaron los cálculos y diseño de la estructura y sede del Club El Nogal con su empresa Proyectos y Diseños Ltda., para la construcción del mismo.**

Por lo anterior y según se observa con el recuento probatorio que se presenta a continuación, la condena impuesta en primera instancia deberá ser revocada por el *ad quem*, para proceder a negar las pretensiones de la demanda.

Con todo, antes de proceder a la exposición del mencionado material probatorio, es oportuno precisar, para efectos de las pruebas a las que se hará referencia en lo sucesivo, que ellas corresponden a las aportadas o practicadas en los diferentes procesos que se acumularon en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Descongestión mediante auto del 7 de julio de 2010 (Folio 981, cuaderno principal -subcarpeta 03CdPrinciaplContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital). Ahora bien: teniendo en cuenta lo señalado por el *a quo* en el auto del 22 de abril de 2013, debe entenderse que tales medios demostrativos constituyen pruebas idóneas para los aquí intervinientes ya que, como se indicó en primera instancia, todos ellas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas desde el momento mismo de la acumulación. Ciertamente, en los términos del citado auto del 22 de abril de 2013 se indicó que "*… habida cuenta que las pruebas judiciales que obran establecidas en las actuaciones que aquí yacen acumuladas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas por unos y otros intervinientes procesales desde el momento mismo en que se admitió y se llevó a cabo la acumulación de procesos, lo que no implicaba o hacía necesario volver a resolver de cara a cada cuestión particular …*" (folio 463 a 468 cuaderno principal -subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital). Es claro, pues, que con ocasión de la citada providencia, la cual fue notificada a todos los intervinientes y cobró legal ejecutoria frente a ellos, debe entenderse que las pruebas obrantes en el expediente antes y después de la acumulación tienen tal calidad y, en esa medida, deben ser valoradas por el *ad quem*[21].

Para mayor claridad sobre este asunto, podrán tenerse en cuenta las siguientes actuaciones procesales:

---

[20] A este respecto, podrá tenerse en cuenta, entre otros, la declaración de Jairo Arturo Parra Cuadrado, Jefe de la Unidad de Explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

[21] Como es natural, esto es predicable de todas las pruebas del expediente, esto es, de las que se refieren a la diligencia, la causalidad, los perjuicios, entre otras.

- Por medio de auto de 10 de octubre de 2011, notificado por estado el 1 del mismo mes y año, el Juzgado 15 Civil del Circuito de Descongestión corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (foliatura anterior 1051, foliatura nueva 110, cuaderno principal – subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Frente a ese auto, el Club El Nogal interpuso recurso de reposición solicitando que, en su lugar, "*se ordene poner en conocimiento de las partes las distintas pruebas allegadas al expediente*" (folio 111 cuaderno principal – subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- También, el Club el Nogal al momento de descorrer el traslado del recurso de reposición y en subsidio apelación formulado por el apoderado de los demandantes Julio Martín Otálora Cano y Luz Constanza Prado contra el auto del 10 de octubre de 2011, señaló: "*Lo que procede en el caso que nos ocupa, tal como fue señalado en el recurso de reposición interpuesto por mi representada contra el auto de 10 de octubre de 2011, consiste en correr traslado a las partes de las pruebas que se encuentran practicadas e incorporadas en los procesos acumulados*" (folios 131-132 cuaderno principal –subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- El Despacho, en providencia fechada el 17 de noviembre de 2011, resolvió en el sentido de que " *las documentales que obran en el plenario, se habrán de entender como agregadas al proceso, pudiendo las partes efectuar pronunciamiento sobre aquellas siempre que lo consideren pertinente, sin que por el hecho de no existir una mención formal que ordene poner en conocimiento de los sujetos dichos elementos se pueda predicar que estos no forman parte del proceso, máxime cuando han sido solicitados decretados conforme a los ritos procesales que gobiernan su trámite*". No hizo referencia el Juzgado a los demás medios de prueba obrantes en el expediente (folios 133-137 cuaderno principal –subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Posteriormente, el 17 de septiembre de 2012, El Nogal solicitó al despacho poner en conocimiento las pruebas testimoniales practicadas en los procesos acumulados y, adicionalmente, pidió requerir a las partes para que se pronuncien respecto de estas (folio 429 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- El 11 de diciembre de 2012 el Club el Nogal solicitó al despacho resolver la anterior solicitud (fl. 429) que fue radicada el 17 de septiembre de 2012 (folio 436 cuaderno principal – subcarpeta 05CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Mediante auto del 4 de febrero de 2013, el Juzgado 15 Civil del Circuito de Descongestión resolvió la solicitud planteada por el Club el Nogal en los siguientes términos: "*En relación a la solicitud visible a Fl.429 del expediente es de tener en cuenta que por existir plena identidad respecto de la parte demandada en todas las actuaciones aquí acumuladas, es más que evidente que todas las pruebas que han sido recaudadas, fueron o estuvieron en posibilidad de ser debidamente conocidas y rebatidas por el extremo demandado durante su adjunción procesal, y con mayor razón a lo largo del proceso, lo que por ende antes que obedecer a un umbral legalista, se ajusta*

a los principios constitucionales que rigen la aplicación del derecho en estas materias". Esto es, se refirió únicamente al "extremo demandado" pero no hubo pronunciamiento sobre las demás partes del proceso (folios 437-438 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Contra esta decisión el Club El Nogal interpuso recurso de reposición, radicado el 11 de febrero de 2013, en el que se señaló: "*frente al extremo activo es necesario que el Juzgado se pronuncie sobre la contradicción de los testimonios, teniendo en cuenta el cabal y completo conocimiento que de los mismos han tenido LAS PARTES, así como el manifiesto desinterés de dichos demandantes sobre la aludida contradicción que se sustenta en su elocuente silencio sobre el tema*", señalando que de no acceder a esta petición se requiriera a los apoderados de los demandantes para que "*indiquen si requieren de la ratificación de alguno de los testimonios en los que no hayan participado, so pena de que se entiendan controvertidos y se proceda a alegar de conclusión*" (folio 439-441 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

- Por último, mediante auto del 22 de abril de 2013, el despacho resolvió el recurso impetrado por mi representada el 11 de febrero de 2013 y señaló: "*De igual modo y en cuanto concierne a la solicitud impetrada por la pasiva, hay que tener en cuenta que las pruebas judiciales que obran establecidas en las actuaciones que aquí yacen acumuladas tuvieron la oportunidad de ser controvertidas por unos y otros intervinientes procesales desde el momento mismo en que se admitió y llevó a cabo la acumulación de procesos, lo que no implicaba o hacía necesario volver a resolver de cara a cada cuestión en particular, por cuanto lisa y llanamente ello equivaldría a reabrir y en forma injustificada una y otra actuación lo que de así haberse considerado haría interminable su resolución*" (folios 463-648 cuaderno principal – subcarpeta 04CdPrincipalContinuacion en carpeta 01CdPrincipal200300712- del expediente digital).

Esta providencia fue notificada por estado el 24 de abril de 2013 y contra la misma no se interpusieron recursos, por lo que la decisión cobró ejecutoria el 29 de abril de la misma anualidad[22].

Resulta, entonces, diáfano que la totalidad de las pruebas recaudadas y practicadas en los procesos acumulados pueden y deben ser valoradas de forma integral por el *ad quem,* en tanto las mismas fueron incorporadas regularmente y así fue reconocido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Descongestión.

4.2. <u>Ausencia de responsabilidad civil en cabeza del Club El Nogal; ausencia del elemento culpa; actuación diligente del Club El Nogal.</u>

Si algo resulta claro en el material probatorio del presente proceso es que la Corporación Club El Nogal no violó, en modo alguno, los parámetros de diligencia, pericia y cuidado que le eran exigibles. Se procede, entonces, a exponer la

[22] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil (aplicable al momento en que se profirió la decisión), que al respecto señala: *"**<u>ARTÍCULO 331. EJECUTORIA.</u>** Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva".*

evidencia que da cuenta de la diligencia de mi representada, con lo cual se descarta el elemento de culpa y, por contera, cualquier tipo de responsabilidad de mi representada frente al atentado terrorista perpetrado por las FARC.

El Club El Nogal no incurrió en negligencia alguna respecto de sus sistemas de vigilancia y control de seguridad. Ciertamente, para el desarrollo de su objeto social, el Club contaba para la época de los hechos con un apreciable número de empleados y personal suministrado por contratistas con conocimientos específicos, especializados y altamente técnicos, que hacen posible una esmerada atención a la gran cantidad de personas que visitan sus instalaciones. Dentro de los contratistas, El Nogal tenía un personal de vigilancia suministrado por una firma especializada en la prestación de este tipo de servicios que, para la fecha del lamentable insuceso, estaba cumpliendo con todos los protocolos y procedimientos establecidos por el Club. De hecho, el sistema con el que contaba el Club El Nogal para 2003, era reconocido como el mejor y más completo, tanto por los otros clubes sociales de la ciudad, como por empresas de similar naturaleza que utilizaban los servicios de éste y por la Aseguradora de Riesgos Profesionales -ARP Liberty- en su informe respecto del siniestro.

En el expediente obran como prueba las declaraciones de varios testigos que afirmaron categóricamente que El Nogal era un Club "modelo" en materia de medidas de seguridad, comparado con otras instituciones de similar naturaleza, lo que descarta, *in radice,* que se pudiera hablar de la existencia de alguna culpa, impericia o negligencia en cabeza de mi representada. Así, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva de Unicentro, el gerente del Gun Club, el gerente del Club Metropolitan y dos expertos en la industria de seguridad, fueron claros y contundentes a este respecto. En efecto:

- En el testimonio de HERNÁN MONTOYA (Fl. 339 – 343 C1 Exp. 2003-712), Presidente junta directiva UNICENTRO y socio muy activo de la Corporación Club El Nogal, se deja constancia de la rigurosidad y pericia del sistema de seguridad del Club El Nogal. Dice el testimonio:

> **"**Se deja la constancia de que trata el numeral 2 del Art. 228 del C de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales de versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual **CONTESTO: He sido presidente de la junta directiva de Unicentro, corno también miembro de las juntas directivas de los clubes Guaymaral, la Pradera de Potosí, Anapoima Club Campestre. Para la época del atentado de febrero de 2003 era miembro de la junta directiva del Club Guaymaral y vicepresidente de la junta directiva del Club la Pradera de Potosí, así mismo era presidente de la junta directiva del Centro comercial Unicentro. Igualmente era socio de la CORPORACION CLUB EL NOGAL. Casi todos los días para la época del atentado visitaba las instalaciones del CLUB EL NOGAL. Las instalaciones, del CLUB EL NOGAL, tienen y tenían para la época sistemas de seguridad bastante sofisticados, comparados con el resto de Clubes sociales y Centros comerciales de la ciudad, por ejemplo, poseía y posee unos sistemas de circuito cerrado de televisión, con tecnología de punta, así como unos muy bien dispuestos controles para accesos peatonales y vehiculares, incluyendo aparatos para detección de explosivos, y armas. (…) en ningún club social hasta ese momento o por lo menos, los que yo frecuentaba, implementaban este tipo de revisión, es decir guía y canino, por cuanto en los demás clubes, solamente bastaba, identificamos con el carné respectivo. No conocí equipos, y procedimientos en Colombia, que se usaran para acceder a las instalaciones, de algún Club social.** No se usaban. Posteriormente al atentado del 7 de febrero, conocí de estudios, profundos y sofisticados, que se hicieron tanto en el NOGAL, como en otros clubes sociales y Centro comerciales, para prevenir

atentados como el ya mencionado. Ya que las precauciones se incrementaron y los procedimientos se volvieron más complejos, para el ingreso. Hoy por hoy, se hace una doble revisión vehicular, por parte del guía con su canino así como la utilización de sistemas que permiten detectar rastros de materiales explosivos, a través de sistemas electrónicos complejos. Se concede la palabra al Apoderado de la parte demanda, para que interrogue, concedido manifestó: PREGUNTADO: Cuales eran las medidas de seguridad, que tenían implementadas Unicentro, para febrero de 2003. **CONTESTO: Unicentro desde su inicio hace 30 año, (sic) ha diseñado esquemas de seguridad importantes, para la época del atentado del CLUB EL NOGAL, Unicentro recibía, aproximadamente 15000 mil vehículos diarios, en sus 18 porterías, a demás de el acceso de 100.000 personas aproximadamente a pie y simplemente dejábamos entrar los vehículos, sin revisiones puntuales de guías y caninitos, por cuanto el volumen de ingreso de vehículos no lo permitía, sin embargo cuando estaban ya los vehículos parqueados en el parqueadero, recorríamos, con vigilantes guía y caninos toda la zona, en busca de detectar posibles explosivos.** PREGUNTADO: Haciendo una comparación objetiva de las medidas de seguridad, implementadas por Unicentro, para febrero de 2003, con las del CLUB EL NOGAL, para la época, que apreciación le merecen estas últimas. **CONTESTO: Los procedimientos del CLUB EL NOGAL, para el 7 de Febrero de 2003, eran notablemente más efectivas y con dispositivos más confiables, que el control que se hacia en Unicentro. Si se pudieran calificar en cuanto a eficiencia de uno a diez, yo diría que el CLUB EL NOGAL, tenería (sic) nueve, y Unicentro seis.** (…) PREGUNTADO: en su conocimiento en los clubes sociales y Centros Comerciales que frecuentaba, previo al 7 de febrero de 2003, en alguno de ellos se utilizaba, sistemas electrónicos para la detección de rastros de materiales explosivos. **CONTESTO: No, que yo haya sabido.** PREGUNTADO: Mientras ha ocupado el cargo de presidente de la junta directiva de Unicentro, han tenido la oportunidad de detectar carros bomba, en caso afirmativo, indique en que época y como ello posible. CONTESTO: No mientras he estado en la presidencia de la junta, hace unos 18 años, detectamos un vehículo con explosivos en el parqueadero de Unicentro, que fue desactivado por lo organismos de seguridad de Estado. Se detecto, por que amaneció un vehículo dentro del parqueadero, cosa inusual y procedimos a alertar a las autoridades sobre este hecho. El apoderado de la parte demandada manifiesta, que no desea interrogar más a la testigo. Seguidamente se le concede la palabra al apoderado de la parte demandante, concedida expreso: (…) PREGUNTADO: Acorde con su respuesta anterior y otras que ha dado al despacho, infórmenos su criterio objetivo, respecto de este tipo de revisión, precisando si ha incidido de manera directa, en que el centro Comercial Unicentro, no halla sido objeto de ningún atentado terrorista, con explosivos, durante el tiempo que usted ha sido presidente de su junta directiva. **CONTESTO: Creo, que los dispositivos usados, por Unicentro durante mi presidencia, objetivamente hablando han sido efectivos. No descartamos la posibilidad de que pueda existir un atentado terrorista con explosivos, en el centro Comercial y pongo como ejemplo la carga explosiva que estallo hace menos de un año, en el corazón de las fuerzas militares de Colombia, en el CANTON NORTE, precisamente en la escuela SUPERIOR DE GUERRA, donde se supone deberían existir todos los dispositivos para que esto no sucediera,** (…) PREGUNTADO: Afirmo en una respuesta inicial, que los caninos destacados en el CLUB EL NOGAL, para al (sic) fecha del atentado, eran entrenados para la detección de explosivos. Infórmenos como conoció de tal entrenamiento. CONTESTO: La compañía que prestaba los servicios de seguridad y vigilancia en el NOGAL, era o había sido la misma que contrato UNICENTRO, para las mismas labores, es decir CANINOS PROFESIONALES, y digo que conocí de su entrenamiento por que fueron varias las demostraciones que nos hicieron durante su permanencia en Unicentro y en la cual, demostraron así mismo, la efectividad, en la detección de explosivos dentro de los varios simulacros que se hicieron, dentro de esos simulacros se incluyeron vehículos automotores. PREGUNTADO: Asistió usted al CLUB EL NOGAL, el día del atentado terrorista, de que se da cuanta en al (sic) proceso, y en caso afirmativo infórmenos como fue el procedimiento de revisión de los automotores para la detección de explosivos. **CONTESTO. Estuve creo que en dos oportunidades, el 7 de febrero de 2003, en el club y los procedimientos,**

de seguridad al acceso vehicular, fueron los mismos de siempre. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de JOAQUIN RICAURTE JARAMILLO (Fl. 349 a 351 C1 Exp. 2003-712), gerente general del GUN CLUB de Bogotá, también es claro en cuanto al alto grado de sofisticación y pericia con que se hacían las revisiones en el Club El Nogal, contrario a toda noción de culpa. Por lo demás, deja también claro que los posibles ataques terroristas no eran una situación previsible para los clubes de la época, lo que matiza también el examen de diligencia. Dice el testigo que:

"PREGUNTADO SOBRE CENERALES DE LEY: Es mi nombre JOAQUIN RICAURTE JARAMILLO, tengo la C.C. No. 79.146.984 DE Usaquén, Nací en Bogotá, soy casado, tengo 51 años. **Soy hotelero de profesión, soy Gerente General del GUN CLUB**, desde el año 1991 (…).

Se deja la constancia de que trata el numeral 2º. Del Artículo 228 del C. de P.C. indicándole sucintamente al deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración haga un relato claro y detallado de lo que le conste sobre el particular, sobre lo cual CONTESTO. **Si, si conocía el CLUB EL NOGAL, lo visité varias veces aproximadamente unas 15 oportunidades, donde se observaban unas medidas de seguridad muy buenas en su momento**, (…). Antes del atentado. El GUN CLUB y e (sic) CLUB EL NOGAL, tenían unas medidas de seguridad para poder ingresar a los mismos. Esto nos diferencia de cualquier hotel o restaurante donde los comensales ingresan libremente. Debido a que los clubes son exclusivos se realiza un registro de cada uno de los invitados que ingresan al Club. **En su momento las medidas de seguridad que se hacían en los clubes como EL NOGAL, EL GUN, EL JOCKEY, eran unas medidas prestadas por personas externas de vigilancia privada en cada uno de los accesos al club, después del triste incidente del CLUB EL NOGAL, en lo que se refiere al GUN CLUB, se reforzó las medidas de seguridad, tanto en seguridad humana como equipos y cámaras, en mi experiencia como Gerente de estos clubes en 16 años, nunca habíamos tenido amenazas ni intentos de carros bomba como lo que se vivió en el CLUB EL NOGAL.**

(…) PREGUNTADO: Considera usted, en su condición de Gerente de clubes de alta categoría, con una amplia trayectoria como la ha indicado, adecuados los sistemas de seguridad que se empleaban en la CORPORACION CLUB EL NOGAL para la época del atentado, adecuados, dada la especial condición, para nadie desconocida, de las personas que a el asistían como invitados y socios, pertenecientes a las altas esferas de la vida social, económica y política del país, atendida la circunstancia especial de violencia generada de vieja data por las organizaciones guerrilleras, paramilitares y relacionadas con el tráfico de drogas. **CONTESTO:** Si, teniendo en cuenta lo que usted menciona de la calidad de visitantes de nuestros Clubes, TANTO EL NOGAL, como EL GUN, **el club que más había invertido en tecnología en el tema no solo de operación sino de seguridad, era EL CLUB EL NOGAL, debido a que es un Club hecho o construido con a (sic) ultima tecnología en lo que a club se refiere, era para nosotros un ejemplo en todo su diseño y organización, Yo fui Gerente del JOCKEY CLUB del año 82 al 88 y en el GUN CLUB del 91 a la fecha, 14 años.** PREGUNTADO: Indique al Juzgado si en alguna oportunidad se trato en las reuniones de gerentes de clubes de esa categoría en esta ciudad, el tema relacionado, concretamente con la posibilidad de ingreso de material explosivo a las instalaciones de los mismos, con fines de perpetrar atentados contra las personas que allí se encontraran y contra las edificaciones, antes del mes de febrero de 2003. **CONTESTO: No, en las reuniones que se llevaban a cabo con ASOGECLUB, nunca se tocó el tema que usted anteriormente menciona.** Se concede la palabra al apoderado de la demandada. PREGUNTADO POR EL MISMO: (…) PREGUNTADO: Por favor ilustre al juzgado sobre la afectación que genero el atentado al CLUB EL NOGAL en torno a las medidas de seguridad de ingreso al Club que usted Gerencia y en general a los clubes sobre los que tenga conocimiento. **CONTESTO: Después del atentado del CLUB EL NOGAL en el tema de**

seguridad en el caso nuestro nos tocó dar un vuelco de 360 grados en el tema de seguridad y el ingreso de socios e invitados. Llegamos a cotizar equipos electrónicos para la revisión de los carros que ingresan a los parqueaderos del club y de los diferentes equipos de control para los invitados que ingresan al club, pero lamentablemente, debido a la falta de experiencia en el manejo de estos se resolvió la contratación de guías caninos con perros antiexplosivos, que como ya lo dije anteriormente, no utilizábamos. Debido a que en el país no habían equipos para esta clase de análisis de explosivos como de revisión, nos tocó usar personal humano y de perros, no habían equipos, empezaron a utilizar equipos como pesas para pesar los vehículos y por medio de un Software controlar el peso original del carro y había alguna variación entrar a revisar profundamente el vehículo, lo tuvimos en demostración pero lamentablemente estos equipos no funcionaron. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si usted tiene o tuvo conocimiento de atentados explosivos a clubes sociales con anterioridad al 7 de febrero de 2003. **CONTESTO: No, como lo dije anteriormente, jamás tuvimos o en el caso mío ninguna amenaza de esta índole en nuestras instalaciones.**

(…) **PREGUNTADO: A raíz de las visitas permanentes de las personalidades que usted acaba de mencionar, recibió usted por parte de las autoridades recomendaciones especiales en torno a las medidas de seguridad que tenía adoptadas el GUN CLUB, antes de 7 de febrero de 2003. CONTESTO: No, solo cuando eran personalidades del alto Gobierno como Presidente o primera Dama, donde, con un tiempo prudencial antes de la visita de estos al Club, enviaban una avanzada para verificar la seguridad del Club, en los otros casos, de las personalidades ingresaban sin ninguna medida de seguridad adicional**. (…)" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de JOSE DANIEL GALVIS VALDERRAMA (Fl. 344-348 C1. Exp. 2003-712), gerente del METROPOLITAN CLUB, en el cual se confirma lo señalado en las declaraciones anteriores.

"(...) PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: **Si, soy socio del Club, y conozco la historia del Club, soy socio desde 1999 o 2000, no recuerdo la fecha exacta, y había sido usuario del Club cunado (sic) trabajaba en el Banco Uconal, y era usuario de la acción empresarial, tengo nexos con el Club porque fui gerente del CLUB METROPOLITAN, entre enero de 2001 y marzo o abril de 2003, y como tal compartía mucha información y había colegaje con las directivas del CLUB EL NOGAL**. Se deja la constancia de que trata el numeral 2º. del Artículo 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente al deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, sobre lo cual CONTESTO: **En primer lugar como usuario del CLUB EL NOGAL, antes del 7 de febrero de 2003, consideraba que las medidas de seguridad y el acceso al CLUB EL NOGAL, era muy dispendioso, engorroso, aburrido, dado que implicaba someterse a una requisa del vehículo, aceptar que unos perros olfatearan el interior de la cabina del carro, pasar por detector de metales, en fin, daba pereza a veces ir al CLUB EL NOGAL, y contrastaba a otros clubes, que yo frecuentaba, incluso el que yo manejaba, en los cuales bastaba la sola presentación del carné, y a veces sin el si podía acceder, sin que se le revisara a uno el vehículo, no pasaba uno por detector de metales, no habían circuitos cerrados de televisión ni en el CLUB METROPILITAN, ni otros que yo frecuentaba como EL GUN, EL JOCKEY, GUAYMARAL, y mucho menos los de fuera de Bogotá, entonces puedo afirmar, que de lejos el CLUB EL NOGAL, para la época del atentado, y desde su fundación, era el más completo en sistema de seguridad, preventivos y correctivos. En detalle puedo decir que el CLUB METROPOLITAN, no tenía antes del 7 de febrero del 2003 medidas de seguridad tales como, circuito cerrado de televisión, perros antiexplosivos, sensores de humo, sistema de huella digital, señalización de evacuación, luces de emergencia, planes de simulacros, capacitación de emergencias, botiquines de seguridad, temas todos estos que hasta después del atentado del CLUB EL NOGAL, se fueron implantando paulatinamente en el METROPILITAN y en otros clubes sociales.**

Incluso recuerdo que en dos oportunidades visité el área de seguridad del CLUB EL NOGAL, para observar el funcionamiento y tratar de tomar de la experiencia de ellos, datos de proveedores y sistemas preventivos que pudieran servirnos para ser implementados en el club que yo dirigía, También quisiera hacer énfasis, que en cuanto a la selección de socios en el club METROPOLITAN, bastaba que un socio activo presentara a un candidato para ser aceptado, mientras que en el club EL NOGAL, había varios filtros para obtener la calidad de socio,. PREGUNTADO: Precise si tiene conocimiento de las medidas adoptadas por los directivos de la corporación CLUB EL NOGAL, para que una persona natural o jurídica accediera a la calidad de socio, para la época inmediatamente anterior al atentado terrorista del que ha hablado. **CONTESTO: En detalle exacto no lo conocí, sin embargo se me exigió cuando fui a hacer socio carta de recomendación de dos socios activos, y recuerdo que verificaron mis datos por que llamaron al sitio de mi trabajo y me enteré que se pasó por dos comités antes de que se me aceptara como socio por allá en el año 1999 o 2000.** Se concede de la palabra al apoderado de la parte demandada. PREGUNTADO POR EL MISMO. (…) PREGUNTADO: Informe al juzgado si usted tiene conocimiento de atentados con explosivos a clubes sociales en Colombia con anterioridad al 7 de Febrero de 2003. En caso afirmativo precise al juzgado los eventos de esa naturaleza que usted conozca. **CONTESTO: En absoluto tengo conocimientos de atentados contra clubes sociales antes del 7 de febrero de 2003.** PREGUNTADO: Informe al juzgado de que tipo de personalidades asistían con frecuencia al CLUB METROPILITAN que usted gerenciaba con anterioridad al 7 de febrero de 2003 **CONTESTO: Los asistentes al CLUB METROPILITAN, abarcaban desde el presidente de la República, Ministros, Cuerpo Diplomático, Autoridades civiles, Militares, Religiosos, Farándula, hasta Presidentes de Multinacionales, y empresarios en general.** PREGUNTADO: Que tipo de eventos realizaba el CLUB METROPILITAN en sus instalaciones durante la gestión Gerencial que usted desarrolló para esa institución. **CONTESTO: El CLUB efectuaba eventos, tanto para socios como para no socios, tales como conferencias, matrimonios, aniversarios, para 400 o 500 personas, que incluso podrían involucrar hospedaje.** (…) PREGUNTADO: Durante la época en que usted fue gerente del CLUB METROPILITA (sic), recibió recomendaciones especiales en torno a las medidas de seguridad que tenía adoptadas esa institución. **CONTESTO: En ningún momento tuve de parte, ni de los directivos ni de los usuarios del Club, ningún tipo de observación, recomendación o sugerencia, en materia de seguridad, tan solo después del atentado del CLUB EL NOGAL, se iniciaron planes preventivos, encabezados por la misma Junta directiva del Club, en resumen puedo decir que la historia se partió en dos, en materia de seguridad en los clubes sociales, después del atentado del CLUB EL NOGAL.**

- El testimonio de LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA (Fl. 326 a 330 C1 Exp. 2003-712), ex Coronel de la Policía y gerente de una empresa de seguridad denominada ISVI LIMITADA[23], en el que se dijo que:

  PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: Si, soy, socio desde hace diecinueve años y he prestado algunos servicios de asesoría en seguridad recientemente al mismo Club. Se deja la constancia de que se trata el numeral 2° del Art. 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que se consta sobre el particular, a lo cual **CONTESTO: Si tenía de los sistemas que operaban en el club, puesto que allí abogábamos ejecutivos las compañías que protegíamos o llevábamos a cabo varios eventos que requerían de un máximo nivel de seguridad. Los sistemas de seguridad que operaban para esa época consistían en circuitos cerrados de televisión, controles de acceso, constituidos tanto por personal de vigilancia como por**

[23] ISVI LIMITADA, es una empresa de seguridad que se encarga de prestar servicios de seguridad a varias compañías petroleras e industriales, personas naturales o jurídicas, de carácter nacional o extranjeras.

caninos y procedimientos de control del tipo de personal que podían ingresar al CLUB. Los sistemas de circuito cerrado de televisión, permitían identificar a las personas que ingresaban al CLUB por diferentes accesos, sino que supervisaban que el personal de la vigilancia estuviera cumpliendo las misiones que se les habían asignado. Los perros olfateaban vehículos o paquetes que ingresaban también por la (sic) diferentes porterías y una red de vigilantes que controlaba tanto la parte perimetrica como los controles de ingreso de personas o salida de elementos.

(…) PREGUNTADO. Refiera al juzgado, de que tiempo data su experiencia en temas de seguridad, señalando concretamente si hay un ámbito especial de ella, en la que tenga mayores conocimientos y experiencia. CONTESTO: Mi experiencia en aspectos de seguridad data de 25 años como oficial de la policía y 25 años como asesor de seguridad en empresas nacionales y multinacionales como la Occidental, Petrobrás, BP, Texas, Chevrom, Corferias, varios laboratorios y empresas industriales tanto de Bogotá como de otras ciudades. Soy certificado como CPP, significa Profesional Certificado en Protección por la American Society Of Security de los Estados Unidos, director del Instituto de Seguridad Integral Sicurex durante 20 años y profesor de cátedras de seguridad en las Universidades Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali, Pontificia Bolivariana de Medellín, Universidad de Cartagena. Mi campo específico ha sido el de la seguridad integral, o sea, el relacionado con la seguridad de personas, bienes y servicios, que incluye tanto los aspectos de seguridad física, lógica y sicológica. (…) PREGUNTADO. Para la época de los hechos visitaba usted las instalaciones del CLUB EL NOGAL en esta ciudad. En caso afirmativo en que calidad lo hacía y con que frecuencia concurría. **CONTESTO: En mi calidad de socio, fui de los fundadores, fui de los primeros socios, concurría normalmente dos veces por mes, pero en mi calidad de asesor en seguridad lo hacía con mayor frecuencia para revisar las posibilidades de riesgo o vulnerabilidades que pudieran presentarse para las personas que protegía o para los eventos que tenía que cubrir como asesor de seguridad, (…).**

PREGUNTADO: dado que no es desconocido para la mayoría de los habitantes de esta ciudad, que tanto quienes accedían a la CORPORACION CLUB EL NOGAL, en calidad de socios, e igualmente, de invitados a sus instalaciones, pertenecían a las altas esferas de la vida social, económica y política, cuál es su opinión concreta sobre los sistemas de seguridad que empleaba esa entidad para el día 7 de febrero de 2003, habida las circunstancias espacialísima de perturbación social que ha vivido y vive la patria desde ya hace tiempo por la combatiente actitud de las organizaciones guerrilleras, paramilitares y aquellas que tienen que ver con el narcotráfico. **CONTESTO: Para antes de esa fecha los dispositivos de seguridad del club sobrepasaban por su calidad a cualquier otro de similares circunstancias en el País, pues como se recordará en el Club, no solamente se revisaban los vehículos, se indagaba por las identidades de las personas, se hacían los recorridos de control por todo el interior de las instalaciones, sino que se desarrollaba una serie de actividades en el interior de las instalaciones que satisfacían el nivel de amenaza que podría existir para esa época. Precisamente a raíz de los acontecimientos del Clun (sic), fue que se hizo conciencia del grado de violencia que podría afectar a ciertas instalaciones en el País, lo cual llevo a endurecer todas las medidas de seguridad tanto en edificios públicos y privados, más o menos como sucedió en los estados unidos después de los ataques a las torres gemelas, hasta ese momento no había sospecha de nivel de agresión del terrorismo hacía ese tipo de instalaciones. (…)**

PREGUNTADO. En respuesta anterior, usted hizo alusión a varias importantes empresas nacionales y multinacionales a las cuales usted le prestaba su asesoría en seguridad. Los ejecutivos de esas importantes empresas visitaban la CORPORACION CLUB EL NOGAL y en caso afirmativo que opinión daba usted como experto en seguridad para que ellos accedieran con tranquilidad a las instalaciones del CLUB. **CONTESTO. Después de mis visitas al CLUB e indagar por el estado de la seguridad, expresaba la conveniencia de las medidas de protección que autorizaban la asistencia de mis clientes a las instalaciones del CLUB. Nunca encontré alguna situación que me llevara a opinar negativamente respecto de la posibilidad de visita de alguno de mis**

protegidos. PREGUNTADO. Con ocasión se la visita de esos ejecutivos que laboraban para las empresas que usted prestaba asesoría en seguridad o con ocasión de eventos que implicara la asistencia o permanencia de los mismos en las instalaciones del CLUB EL NOGAL, se efectuaban por parte de la compañía de seguridad suya inspecciones previas a las visitas de los mencionados ejecutivos. **CONTESTO. Sí, efectuábamos inspecciones sobre los dispositivos de seguridad y nunca hayamos vulnerabilidades que permitieran sospechar de una atentado de esa magnitud.** PREGUNTADO. Efectúo usted con alguna anterioridad al 7 de febrero de 2003, como experto en seguridad, algún tipo de recomendación en esta materia a la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo informe al despacho en que consistieron esas recomendaciones y si el CLUB procedió a implementarlas. **CONTESTO: No hubo necesidad de hacer recomendaciones especiales, puesto que el grado de seguridad comparativamente con el de otros clubes era superior y hasta ese momento no dejaba nada que desear. (…)**
PREGUNTADO. En respuesta anterior, también a una pregunta formulada por el despacho usted hizo referencia a que para la época de los hechos no existían en el País detectores de explosivos, podría precisarle al despacho que tipo de detectores de explosivos existen en este momento que puedan garantizar que no ingrese un carro bomba a las instalaciones de una dependencia pública o privada. **CONTESTO. Hasta donde tengo conocimiento al momento no existe en ninguna parte del mundo un elemento que pueda garantizar el no ingreso de un material explosivo dentro de una rutina de tráfico público, los sistemas que actualmente muestran mayor eficacia son susceptibles aun de ser vulnerados, no solamente por el medio ambiente si no por contaminantes que portan los vehículos y que hacen que su prueba no sea el cien por ciento garantizada.**
PREGUNTADO: Tuvo usted conocimiento de cual fue el comportamiento de los empleados del club que se encontraban en las instalaciones del mismo el día del atentado terrorista, fundamentalmente enfocado a la evacuación de las personas que allí se encontraban ese día. **CONTETO. Por indagaciones que realice con personal de mi empresa que se encontraba la noche de los acontecimientos en el CLUB, tuve conocimiento que el personal obro conforme a los planes para manejo de emergencias que disponía el club y que su conducto (sic) fue meritoria pues, a pesar de los riesgos que corrían a sumieron (sic) una actitud de socorro y de atención que no dejaba nada que desear y lo cual permitió atenuar muchos de los efectos que hubieran podido ocurrir después del estallido de la bomba.** PREGUNTADO. Esa conducta o ese comportamiento que asumieron los empleados de la CORPORACION CLUB EL NOGAL, tiene algún grado de relevancia para efectos de analizar en nivel de seguridad de un establecimiento. **CONTESTO: Tiene una espacial relevancia, puesto que denota el grado de concientización que se le había impartido al personal para responder de la manera como lo hicieron.** PREGUNTADO: Los ejecutivos de las empresas a los que usted prestaba seguridad, asistían a otros clubes de la ciudad de Bogotá del nivel de la CORPORACION DEL CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo, como eran las medidas de seguridad de esas instituciones para la época en que ocurrieron los hechos. **CONTESTO: Mis clientes, frecuentaban otros clubes como el club de los lagartos, el Jockey Club, el club metropolitan, club militar, club de ejecutivos, club de golf, cuyas medidas de seguridad eran similares pero de inferior calidad a la que se ofrecía en el NOGAL, pues no había el celo como se desarrollaban los controles de ingreso o las rondas al interior del club e incluso no recuerdo que hayan tenido para esta época servicios caninos."** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de SONIA BEATRIZ ANDRADE DE BURGOS (Fl 852- 858 C2 Exp. 2005-176), experta en seguridad, consultora de seguridad privada y trabajó para la empresa de seguridad denominada ISVI LIMITADA. De su declaración cumple destacar los siguientes aspectos: (i) que el esquema de seguridad del Club para la época del atentado era muy completo, incluso superaba el esquema de seguridad de muchas entidades del mismo tipo; (ii) el alcance del terrorismo es ilimitado, es por ello que no existe un mecanismo de seguridad completamente infalible que garantice la frustración de un atentado; (iii) el comportamiento de

los empelados del Club El Nogal en la atención de la emergencia fue ejemplar, con lo cual se evidencia la solidez del esquema de seguridad del Club; (iv) la obligación de seguridad es de medio y no de resultado; (v) el atentado del Club El Nogal constituyó un hito en materia de seguridad en Colombia; y (vi) los grupos terroristas escogen su blanco no dependiendo de la facilidad en su realización sino en el impacto que se pueda generar en la comunidad. Para una mayor ilustración, a continuación se transcribe algunos apartes de la declaración rendida por la testigo:

> "GENERALES DE LEY. CONTESTO: Es mi nombre SONIA BEATRIZ ANDRADE DE BURGOS, me identifico con la C.C. No 41.532.233 de Bogotá, tengo 55 años de edad, soy separada, soy natural de Bogotá, soy odontóloga, **soy consultora de seguridad privada, en este momento independiente, desde el año noventa y cuatro trabajo en seguridad, soy especializada en alta dirección en seguridad de la Universidad Alcalá De Henares de España, Administradora de Seguridad de la Universidad Javeriana y de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Colombia, con certificación CPP de la American Society For Industrial Security de los Estados Unidos**, resido en la Calle 71 Bis No 125-35 Casa de esta Cuidad. (…) PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: No, solamente he ido al CLUB por invitación y por aspectos profesionales. Trabajaba con la empresa ISVI LIMITADA, entre el año noventa y cuatro y dos mil tres, allí me dedicaba a los estudios de seguridad y análisis de riesgos para personas e instalaciones. Para estructurar los esquemas de protección de nuestros clientes como el Banco Santander, Hocol, Norton Gruomonp, cuando ellos necesitaban reunirse o visitar algún sitio debíamos hacer unas inspecciones previas de seguridad y emitir conceptos verbales, los conceptos nunca son escritos en el caso de inspección por seguridad. Esas inspecciones eran porque nuestros protegidos asistían al NOGAL, unos en calidad de socios y otros en calidad de invitados. ISVI era socia del CLUB y como tal organizaba eventos de capacitación para sus clientes y abiertos, para personas que no eran clientes de ISVI. Se deja la constancia de que trata el numeral 2º. del Art. 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual CONTESTO: La inspección, consiste en un recorrido de observación para evaluar las condiciones de seguridad de las instalaciones y los eventos que iban a realizar en el club. La seguridad del CLUB EL NOGAL, tenía un esquema de protección que estaba conformado por seguridad humana, de una empresa de seguridad reconocida y legal, la empresa se llama ATEMPI, ellos lo que tenían eran guardas que hacían control perimetral y control de acceso vehicular. Igualmente, había un sistema de control de acceso para las personas, había previa identificación y se debía llegar con invitación o acompañado de un socio. Los socios firmaban un libro, los invitados quedaban registrados en el libro, también cuando se hacía un evento se tenía que enviar la lista con anterioridad. (…) Había un circuito cerrado de televisión y caninos, no se cuantos perros tenían. La seguridad en Colombia cambio, una cosa era antes del siniestro del CLUB y otra después del siniestro del CLUB, el procedimiento que se aplicaba en ese momento en el CLUB, **era un procedimiento más estricto del que se hacía en el Común, de lugares similares que podrían tener el mismo nivel de riesgo. (…)**
>
> PREGUNTADA. Indíquele al despacho, que opinión en su calidad de experta, le merecen las medidas de seguridad que tenía implementado del CLUB EL NOGAL para la época del atentado terrorista (7 de febrero de 2003), haciendo para ello una comparación objetiva de dichas medidas con las que tenían implementadas otras instituciones que usted haya conocido de la misma naturaleza. **CONTESTO: El CLUB EL NOGAL, siempre ha sido considerado en el medio de la seguridad como una instalación de alta condición de seguridad. Para la época de los hechos y aún hoy sigue siendo escogido como un lugar donde se pueden generar unas condiciones de seguridad aceptadas por los expertos como buenas, la razón que me merece esta calificación es que para la época de los hechos el análisis de la seguridad se basaba en la probabilidad de la ocurrencia de los hechos, no se conocían evidencias específicas que**

mostraran antecedentes de hechos similares en instalaciones privadas, por eso los riesgos de atentado en ese tipo de instalaciones se calificaban con porcentajes medios o bajos, después de los eventos del CLUB EL NOGAL y las torres gemelas, se entró a valorar el concepto de posibilidad que es mucho más amplia, ahora tenemos que pensar en lo probable o improbables, antes no se hacía así. Al momento en que se hacía la valoración no se pensaba en un atentado terrorista de esa naturaleza. PREGUNTADA. Infórmele al despacho, si antes de ocurrido el atentado terrorista en el CLUB EL NOGAL, la empresa de seguridad para la que usted trabajaba, le vetaba a sus protegidos la asistencia a determinados sitios o eventos, por razones de seguridad. En caso afirmativo, indíquenos si el CLUB EL NOGAL, fue objeto de veto para que los ejecutivos protegidos por su empresa visitaran sus instalaciones. **CONTESTO: Si se vetaban algunos sitios por recomendaciones de la empresa ISVI, por recomendaciones de las empresas contratantes o por la embajada Americana y otras Embajadas, pero el CLUB EL NOGAL, nunca estuvo incluido en ese veto, que yo lo supiera, al contrario, en los eventos de seguridad, de profesionales de seguridad, se presentaba como una opción de elección para personas de alto riesgo. (…)**

PREGUNTADA. Tiene usted conocimiento de hechos en el País en los cuales se haya podido detectar y desmantelar un carro bomba y en caso afirmativo, cuales fueron los mecanismos de seguridad que permitieron la detección de los mismos. **CONTESTO**. Tengo conocimiento por referencias indirectas que se realizan durante los conversatorios y capacitaciones sobre terrorismo y amenazas de bomba y por información de los medios de comunicación. **Generalmente, los positivos se logran por denuncias de informantes, se habla de un intento de ingresar a la Fiscalía el vehículo de una Fiscal que había sido cargado con explosivos y fue detectado por un informante que aviso, eso lo cuentan en las capacitaciones, no me consta directamente. El explosivo se mimetiza en lugares obviamente poco inspeccionables y los procedimientos que se aplican tienen un nivel racionabilidad, es decir no podemos desbaratar un vehículo para saber si tiene un explosivo. Lo otro es que no hay sistemas ni medios de seguridad vulnerables, repito, la seguridad no puede garantizar los medios y los procedimientos es para hacer un aseguramiento de variables, pero pueden quedar por fuera muchas variables, por fuera del análisis la inversión en seguridad es limitada y lo mismo la competencia, nosotros en seguridad privada tenemos un límite del que no nos podemos salir. Ayer en batallón de artillería de Usme, detectaron un carro bomba que había superado el primer anillo y lo descubrieron por un informante.** PREGUNTADA. Tuvo usted conocimiento de cual fue el comportamiento de los empleados del club el día del atentado terrorista, tendiente a evacuar a las personas que se encontraban en sus instalaciones con el objeto de preservar la vida e integridad de los que allí se encontraba. **CONTESTO. Sí, la reacción motorizada de la empresa ISVI tuvo la oportunidad de llegar muy pronto al NOGAL, estamos ubicados en la Calle 78 con carrera 11, igualmente escoltas de nuestra empresa asignados al servicio del Banco Santander que se encontraban en el CLUB en el momento del atentado y siempre han destacado el comportamiento de los empleados del CLUB durante y después del atentado. (…)**

PREGUNTADA: El tipo de conductas asumidas por los empleados del CLUB, muestra algún grado de importancia para efectos del análisis de seguridad de un establecimiento. **CONTESTO. Definitivamente sí, el compromiso de los emplcados es componente fundamental de la cultura de la seguridad que es la base del éxito de la seguridad. Ese nivel de respuesta puede demostrar niveles de concientización logrados a través de procesos sistemáticos. (…)**

PREGUNTADO POR EL DESPACHO. Desea agregar algo más a su declaración. **CONTESTO: Deseo reiterar que para el momento del atentado el CLUB DEL NOGAL, contaba con un sistema de seguridad acorde a lo establecido para esa época, que había conciencia de tener un responsable específico en seguridad, que no era usual para esa época en los clubes y en estos sitios y que había un criterio de seguridad en las personas que hacían los contratos para los eventos. (…)"** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de FERNANDO LONDOÑO HOYOS (Fl. 859 a 868 C2 Exp. 2005-176), Presidente de la Junta Directiva de la Promotora del Club El Nogal durante casi todo el tiempo que duró su construcción. En su declaración resaltó que el tema de la seguridad siempre fue una prioridad para el Club El Nogal, incluso desde su fundación. Y fue precisamente en función de dicha prioridad que el esquema de seguridad montado para el Club siempre sobresalió entre los esquemas de seguridad montados en otros clubes nacionales e internacionales. Sobre el particular sostuvo el testigo:

  "PREGUNTADO: Con anterioridad a la tragedia que menciona, qué tipo de vinculación tuvo usted con la corporación club el nogal. CONTESTO. Yo fui presidente de la junta directiva de la Promotora del Club el Nogal durante casi todo el tiempo de la construcción de su edificio. (…) PREGUNTADO: Tuvo usted conocimiento de los sistemas de seguridad que se implementaron en el momento de la construcción de la sede que menciona y que fue objeto de atentado. CONTESTO: Si. En la Junta de la promotora nos ocupamos de todo el sistema de seguridad de los equipos y del edificio mismo, tales como, alarmas contra incendio, estructuras antisísmicas, seguridad de los sistemas eléctricos e hidráulicos, etc. Cuando empezamos a contratar el personal para la corporación nos ocupamos de todo el sistema de seguridad del club, en sus distintos aspectos. Además de las medidas de la seguridad física de la planta, organizamos un departamento de seguridad que estuvo a cargo de un especialista, mayor retirado de la policía, quien tuvo el diseño de todo el sistema de seguridad, tanto en sus aspectos internos como en la seguridad externa o periférica del club. (…) En eso fuimos particularmente exigentes. **Creo que sería muy difícil encontrar otra institución que hubiera hecho mayores esfuerzos por conseguir que las personas que visitaban el club y los empleados estuvieran en un ambiente de seguridad plena en todos los aspectos**. (…) PREGUNTADO: Describa en su conocimiento cuáles eran las políticas y procedimientos de seguridad implementados en el Club el Nogal para la fecha de ocurrencia del atentado el 7 de febrero de 2003. CONTESTO. Supongo que eran los mismos vigentes en mayo del año anterior, cuando deje de se presidente del club y casi no volví a visitarlo. Como lo dije al principio la seguridad era casi una obsesión para nosotros. (…) El mantenimiento de todos nuestros equipos eléctricos, electrónicos, hidráulicas, era hasta donde se puede, perfectos, teníamos un equipo dirigido por un excelente ingeniero, que comprendía expertos en electrónica, electricistas y personal capaz para atender cualquier dificultad. (…). **PREGUNTADO: Comparativamente con otros clubes sociales de Bogotá, como calificaría usted las medidas de seguridad que había implementado el club el Nogal para la fecha del atentado terrorista. CONTESTO: Insisto en que me refiero siempre a mayo de 2002, que es lo que me consta. Nuestras medidas de seguridad, en todos los órdenes, superaban largamente las que estuvieran vigentes en cualquier club del país y de Suramérica. Voy a explicarle por qué estoy tan seguro de lo que le digo. Para garantizar la excelencia en todos sus aspectos, emprendimos la tarea de conseguir la calificación ISO 9002, con ICONTEC, lo que nos exigía que todos los departamentos y servicios del club pasaran un examen riguroso de confiabilidad. Tuvimos una grata sorpresa cuando la señora gerente del club y la auditora de gestión, una empleada que hay en muy pocas instituciones en Colombia y que verifica el cumplimiento de todas las reglas operativas de servicios, asistieron a una reunión de clubes de toda América en los Estados Unidos. Allá se supo que el único club de toda América que tenía calificación ISO 9002, era el club el nogal de Bogotá. Después de nosotros, sé que otros clubes colombianos estaban en la misma tarea y les prestamos la asistencia ayuda para esa difícil prueba. Por eso puedo asegurarle que en el tema en que usted me pregunta éramos pioneros y estábamos más avanzados que cualquier otro club colombiano.**" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- El testimonio de FERNANDO RUÍZ LLANO (Fl. 808 a 811 C1A Exp. 2003-712), ex Presidente de la Junta Directiva del Club El Nogal, quien describió los sistemas de seguridad con que contaba el Club El Nogal, los cuales, según el

testigo, eran sobresalientes en comparación con el utilizado por otros clubes. De igual manera hizo el declarante un análisis del caso concreto y especificó que el nivel de sofisticación utilizado por los terroristas sirvió para burlar el elaborado esquema de seguridad que tenía el Club, y que, como muestra de ello, en el registro de los videos de seguridad se observa que el vehículo utilizado para perpetuar el atentado fue revisado de manera debida. Para una mayor ilustración, estos son unos de los apartes de la declaración rendida por el señor Ruíz:

> "PREGUNTADO POR EL DESPACHO: sabe usted por qué fue citado a este despacho. CONTESTO: Si, para rendir testimonio sobre los hechos de febrero de 2002, en el club el Nogal, sobre estos hechos manifiesto: En febrero de 2002, yo era el presidente de la junta directiva del club el nogal; **el sistema de seguridad del club para esa época era superior a los estándares normales para otros clubes, contaba con cámaras de seguridad, seguridad canina, supervisores de seguridad con un jefe que dependía directamente de la gerencia general del club**; lo importante era el conjunto y lo podríamos llamar que este conjunto hacía que la seguridad fuera disuasiva. PREGUNTADO: Cuál era el propósito de la seguridad canina. CONTESTO: La seguridad canina hacía parte del todo en materia de seguridad e iba encaminada a determinar sustancias que por su olor pudieran detectarse. (…) **PREGUNTADO: La formación en el aspecto de seguridad de los empleados del club tuvo impacto o relevancia en la disminución de las víctimas fatales una vez ocurrido el atentado. CONTESTO: Si, la formación en aspectos de seguridad llevó a que el día del siniestro los empleados salvaran muchas vidas. PREGUNTADO: Para la época del atentado los otros clubes sociales que frecuentaba adelantaba chequeo visual de vehículos con apoyo de caninos como lo hacía el club el nogal. CONTESTO: No, para la época del atentado los clubes que frecuentaba no realizaban chequeo visual con apoyo de caninos. (…) PREGUNTADO: En su conocimiento de las investigaciones penales presentada a raíz del atentado tuvo usted conocimiento de si los terroristas mezclaban las sustancias explosivas con otras sustancias olorosas con el fin de hacer ineficaz el apoyo de seguridad canina. CONTESTO: Si, dentro del expediente, existe una declaración creo recordar que de una persona de apellido Murillo en la que narra como la mezcla con otras sustancias en este caso creo recordar con otras sustancias hacía ineficaz el trabajo de los perros. (…) EL DESPACHO PREGUNTA: Desea agregar o corregir algo: Tal vez en la parte de la seguridad, se me olvidó comentar la revisión manual de los baúles de los vehículos que ingresaban al club como parte procedimiento. En el caso del vehículo que entro ese día con los explosivos de acuerdo a la gerente general del club que vio la filmación en la fiscalía fue revisado y abierto su baúl.**" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- El testimonio de FERNANDO ZARTA ARIZABALETA (Fl. 334 a 337 C1. Exp. 2003-712), quien para la época de los hechos era el representante legal de MAPFRE SEGUROS -compañía que tuvo a su cargo la gestión del siniestro acaecido en el Club El Nogal-. En su declaración, el señor Zarta manifiesta que:

> "PREGUNTADO No.4: dentro de la conducta del club a la que usted ha hecho referencia, le pediría el favor de que precisara si con ocasión de la investigación del siniestro que adelantó el ajustador de seguro designado para ello, éste reportó a MAPFRE algún grado de negligencia por parte del club en materia de seguridad, entendiendo por esta los aspectos relativos al ingreso del carro bomba, y a la evacuación de las víctimas y de personas que se encontraban en la edificación, que en su gran mayoría salvaron sus vidas después del atentado? CONTESTO: **La respuesta es negativa, toda vez, que el ajustador designado al efecto no manifestó en ninguno de sus informes negligencia u omisión del club en punto a la seguridad de sus instalaciones y de las personas que lo frecuentaban en uso de sus servicios** …".

- El testimonio de CARLOS EDUARDO BALAGUERA (Fl. 462 a 465 C1A Exp. 2003-712), abogado y consultor en materia de seguridad, Jefe de Seguridad de

Cafam, quien tuvo la oportunidad de conocer muy bien el sistema de seguridad ofrecido por el Club El Nogal por haber coordinado en diversas ocasiones distintos eventos en las instalaciones del aludido Club. En su declaración se resalta, en primer lugar, cómo las condiciones de seguridad del Club El Nogal superaban las ofrecidas por otros clubes; en segundo lugar, la gran trascendencia que tuvo el atentado en materia de seguridad; en tercer lugar, el excelente manejo que le dieron los empleados del Club a la atención de la emergencia; y en cuarto lugar, que no existe en el mundo un sistema de seguridad totalmente infalible y menos cuando los atentados son perpetuados con altos niveles de sofisticación y técnica como lo fue el atentado del Club El Nogal, como sigue:

> "Preguntado sobre sus generales de ley manifestó: (…) soy abogado y consultor en seguridad (…). PREGUNTADO: Sabe Usted por qué fue citado a este despacho. Haga un relato de lo que le conste. CONTESTÓ. Fui invitado a rendir un concepto técnico especializado en relación con los sistemas de seguridad con los que contaba el Club El Nogal para la época del atentado terrorista (…). Los sistemas de seguridad con los que contaba el Club para la época del atentado, como usuario corporativo en razón a que en mi calidad de jefe de seguridad de Cafam tuve que coordinar en esas instalaciones varios eventos de la compañía incluso en varios de ellos contamos con la presencia de la primera dama de la nación, miembros del cuerpo diplomático e importantes empresarios del país. Para cada uno de estos eventos cumpliendo con los protocolos de seguridad se evaluaba antes y durante en evento las condiciones de los sistemas de protección del Club que para la época consistían en un circuito cerrado de televisión, cerca de 40 vigilantes y guías caninos para el control del ingreso vehicular, en líneas generales **este club ofrecía uno de los estándares más altos comparado con otros importantes clubes de la capital**. Quiero resaltar que al Club El Nogal asistían y lo hacen actualmente importantes personalidades de la vida política, como el Presidente de la República y Ministros del despacho entre otros, quienes cuentan con equipos altamente profesionales de seguridad quienes auditan en forma profesional y exhaustiva, valga la redundancia las condiciones de riesgo y los medios de protección, sin ese requisito no podrían asistir estos personajes. Podemos decir además que estas llamadas auditorías de seguridad al club se hacían periódicamente por organismos de seguridad del Estado y del sector privado también, vale recordar y fue publicado en los medios de información que para la época del atentado se encontraba hospedada en el hotel del Club El Nogal, la doctora MARTHA LUCÍA RAMÍREZ quien para ese entonces ocupaba el cargo de Ministra de Defensa, cargo de alto riesgo. (…) PREGUNTADO: Con anterioridad a esa fecha [fecha del atentado] cuántas veces cumplió con las funciones de seguridad que menciona y cuál fue la más cercana a ese hecho. CONTESTO: Antes del atentado en unas 6 oportunidades en un período de 4 o 5 años realicé labores encaminadas a verificar los niveles de riesgo y protección del Club especialmente en lo relacionado con el evento "Premio Mujer Cafam" reunión anual que se hizo durante unos 5 años en dicho Club y la última vez pocos meses antes del atentado. PREGUNTADO. Cuando se iban a realizar los eventos que usted menciona, usted como jefe de seguridad de Cafam, exactamente qué hacía con relación al sistema de seguridad del Club El Nogal. CONTESTÓ. La labor de seguridad de un jefe, de un departamento que cumple estas funciones es coordinar la labor de un equipo especializado en las labores de evaluación de riesgos y prestación de los servicios de protección, igualmente representaba la de hacer un recorrido por las instalaciones para verificar en el terreno estas condiciones inclusive en ocasiones se hizo de manera discreta al acompañar al equipo organizador sin mencionar el rol de seguridad para garantizar una mayor objetividad en este análisis. El orden es el siguiente: Primero, se participa en las reuniones de organización del evento en donde se determina quienes van a participar, horarios, invitados especiales, vehículos, temas de protocolo y una vez conocidos estos temas en línea general los organizadores del evento, en este caso Cafam interactúan con los coordinadores del Club el Nogal para los temas de logística, donde el tema de seguridad es un capítulo especial en el cual, se determinan vías de acceso, personal de apoyo, control de visitantes, vías de evacuación, seguridad de la presidencia de la república, todos estos temas en coordinación con el personal de seguridad del

Club. (…). PREGUNTADO. Informe al despacho cuál es su experiencia profesional en materia de seguridad y cómo ha acreditado esta experiencia ante las autoridades competentes en el país. CONTESTÓ. Actualmente cuento con la credencial de consultor expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 14 años de experiencia en el campo de la seguridad empresarial, profesional certificado en protección por la Asociación Americana de la Industria, ASIS, he adelantado cursos en estas materias en Israel, España y USA., Igualmente soy docente de la Universidad Sergio Arboleda en posgrados de recursos humanos y conferencista en temas de seguridad integral. He sido presidente en varias oportunidades de la Asociación de Jefes de Seguridad de Centros Comerciales y grandes superficies de Bogotá. PREGUNTADO. Si tuvo la oportunidad de conocer el comportamiento de los empleados del Club con ocasión del atentado en las tareas de evacuación y salvamento, indique al despacho qué nivel de conciencia sobre seguridad integral denotó en el comportamiento de dichos empleados. **CONTESTÓ. El atentado del Club lo puedo catalogar y varios colegas coinciden en lo mismo, como un hito en la historia de la seguridad de Bogotá y por tal razón ha sido un caso estudio y análisis de los profesionales del gremio y se ha reconocido como el actuar de los empleados del Club, varios de ellos brigadistas permitió salvar varias vidas humanas que se encontraban en la instalación, podemos decir que sin esta labor heroica de estas personas las pérdidas hubieran podido ser mayores**. **PREGUNTADO. Sírvase ilustrar al despacho si el manejo y los procedimientos relativos a la seguridad en el país se modificaron sustancialmente a raíz del atentado y en qué sentido. CONTESTÓ. Como lo referí anteriormente, estos hechos relacionados con el atentado significaron partir en dos la historia de la seguridad en Bogotá y en las grandes ciudades del país. Esta situación obligó a las empresas importantes de la ciudad, ejemplo, Centros Comerciales, Supermercados, Clubes y demás que pudieran ser blanco del actuar terrorista a revisar y reforzar en algunos casos estos sistemas de protección.** PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho, cuál o cuáles instrumentos de seguridad son los más idóneos para detectar el ingreso de explosivos. CONTESTÓ. En el campo de la seguridad se combinan diferentes componentes para construir y consolidar un sistema de protección. En este campo principalmente están los guardas de seguridad, los circuitos cerrados de televisión y en el campo de detección de explosivos se encuentran los perros entrenados y equipos más sofisticados que detectan partículas de componentes que pueden integrar una bomba. **No existe en el mundo un sistema 100% infalible, en este atentado participó uno de los grupos terroristas más avanzados del mundo quienes utilizaron técnicas para la construcción de carro – bomba provenientes del IRA de Irlanda.** PREGUNTADO. Manifiéstele al despacho si conoce el dato de la clase de explosivo que hicieron detonar en el Club El Nogal y qué cantidad del mismo se utilizó para ello. CONTESTÓ. La respuesta exacta a es pregunta sólo la podrían contestar los cerebros del atentado, lo que si le puedo decir y ha sido divulgado por los entes investigadores es que **el explosivo utilizado en buena parte incluía ANFO y el cual fue incorporado dentro de los elementos o partes del vehículo, un trabajo bastante sofisticado y de alta peligrosidad.**" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

- En fin, téngase en cuenta también el informe rendido por la administradora de riesgos profesionales a la que le correspondió el caso –ARP Liberty-, sobre el atentado terrorista sufrido por el CLUB EL NOGAL, cuyos apartes más significativos transcribimos como corroboración de las declaraciones precedentes (Fl.548-550 C2 Exp. 2005-0176):

"(...) **4. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE Y/O INCIDENTE.**

"1. Una explosión ocurrida a las 8:15 p.m. del viernes 7 de febrero en las instalaciones del club El Nogal de Bogotá, ubicado entre las calles 78 y 79 con Carrera Séptima, dejó por lo menos 35 personas muertas y aproximadamente 200 heridas.

"2. Como consecuencia del atentado terrorista fueron reconocidos los cuerpos de los señores VER LISTADO ANEXO (...).

"5. DESCRIPCION DE LOS HECHOS.

"1. En efecto, en la fecha y hora antes mencionadas se consumó en el interior del Club el Nogal una explosión exclusivamente atribuible a un atentado terrorista, bajo la modalidad de carro bomba, causando, según ya se dijo, la muerte y lesiones en su salud a muchas personas, así como daños a la propiedad de la Corporación y a los bienes de las personas que allí se encontraban en ese momento.

"2. Dicho acto Terrorista, del cual fue víctima El Club, produjo la muerte de 10 empleados de la Corporación, así como un gran número de heridos, con diferentes grados de severidad, quienes estaban realizando labores en varias actividades propias del club, tales como parqueo, recepción, seguridad, cocina, restaurante, taberna, bolos, gimnasio y servicios generales.

"3. Dadas las características del atentado, se inició por parte de las autoridades competentes las investigaciones correspondientes, que a la fecha se adelantan, por la Fiscalía General de la Nación.

"6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION.

"1. Los trabajadores VER LISTADO ANEXO, identificados con cédulas de ciudadanía No. VER LISTADO ANEXO, se encontraban vinculados a la Empresa Corporación Club El Nogal, con la descripción del Cargo: VER LISTADO ANEXO. (funciones estipuladas en las competencias), y según consta en el Contrato Laboral Firmado por las partes. (VER LISTADO ANEXO).

"2. En el momento del accidente (Explosión), desempeñaba funciones propias de su cargo (ejecución de órdenes y tareas asignadas), en las instalaciones y/o perímetros asignados y dentro del horario laboral establecido.

"3. Se califica como ACCIDENTE DE TRABAJO por OCASIÓN.

- "VIOLENCIA LABORAL CAUSADA POR HECHOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA.

"**7. RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION.**

"1. Se deja constancia de que para la fecha del atentado terrorista, la Corporación Club El Nogal disponía de uno de los mejores sistemas de seguridad integral que estaba conformado por un plan general de seguridad en los aspectos de prevención, emergencia y evacuación. **Para su implementación, se contaba con una dotación de alta sofisticación técnica (sistema de grabación digital, sistemas contra incendios, radios y alarmas), así como con el soporte de una firma de vigilancia especializada, la cual fue objeto de un proceso de selección, de cara a las distintas compañías que participaron en una licitación privada que hizo el Club. Como mecanismo de seguridad complementaria y de excepcional empleo para un club social en la fecha en que ocurrieron los hechos, el Nogal contaba con un soporte de seguridad canina.**

"2. **No obstante lo anterior, un atentado terrorista como el perpetrado contra el Club, que no tenía antecedentes en el país, dada su destructiva y cobarde naturaleza,** ilustró al club El Nogal para realizar una revisión detallada de los procedimientos y sistemas de seguridad, medida que comparte esta ARP con el objeto de:

"A. Continuar el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Integral del Club.

"B. Continuar dentro del Programa de Salud Ocupacional, con el manejo integral del Plan de Emergencias, Planes de Contingencia y Plan de Manejo de Crisis.

"C. Continuar con programa de información a empleados, socios e invitados, en temas como evacuación, sistema de alarmas, zonas de circulación y detección precoz de posibles emergencias (paquetes extraños y/o mal ubicados, personas desconocidas, comportamientos extraños, etc.)

"D. Continuar con la capacitación y mantenimiento de las Brigadas de Emergencia.

"E. Continuar el protocolo de manejo de contratistas y en especial en el proceso de reconstrucción el cumplimiento de las normas y procedimientos de salud ocupacional.

"F. Perseverar, durante la etapa de Reconstrucción de Instalaciones del Club, en las siguientes actividades: Capacitación continuada del personal operativo en: Seguridad en Obras de Construcción, Trabajo en Alturas, Manejo de Herramientas Manuales, Uso de Elementos de Protección Personal, Trabajo en Espacios Confinados, Movimiento de Cargas, Prevención, Atención y Mitigación de Emergencias, entre otros. Programas de Inspecciones Planeadas, Programas de Señalización y delimitación de Áreas.

"G. Continuar con la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente referente a las labores de construcción, sistemas de protección a la propiedad y las personas". (Las negrillas y subrayados son nuestros).

Las pruebas anteriormente reseñadas dan cuenta de la pericia y diligencia con que procedió la Corporación Club El Nogal. Como expresamente lo señalan las declaraciones antes transcritas, el sistema de seguridad que utilizaba mi representaba para la época del atentado terrorista, era bastante superior al estándar de seguridad de que se valían los demás clubes. El autorizado dicho de los testigos -Presidente de la Junta Directiva del Centro Comercial Unicentro, el del gerente del Gun Club y ex-gerente del Jockey Club, el del ex-gerente del Club Metropolitan y el de dos expertos en la industria de la seguridad privada-, describe, de manera uniforme, las medidas de seguridad que regían para ese tipo de establecimientos antes del 7 de febrero de 2003, fecha del atentado terrorista, y su comparación con las que en ese entonces tenía adoptadas el Club El Nogal, para concluir que las de éste último eran bastante más sofisticadas y rigurosas: portería de control para el acceso vehicular, de socios e invitados; soporte canino y técnico (circuito integrado de televisión); contratación de personal muy especializado e infraestructura de última tecnología.

Adicionalmente declaran que atentados como el que sufrió el Club el Nogal no tenía precedentes en la ciudad de Bogotá ni en el resto del país. Que las diferentes avanzadas de seguridad practicadas por entidades de seguridad estatal (por visitas del Presidente, Ministros del Despacho y otros altos funcionarios del Gobierno) y privada (por visitas de presidentes de compañías y entidades nacionales y extranjeras, de distintas actividades, embajadores, etc.) nunca ofrecieron duda sobre la seguridad del Club y su implementación. Por el contrario, fueron calificadas siempre por distintos expertos en seguridad participantes en ellas como sobresalientes, en comparación con sus entidades pares (otros clubes del mismo nivel y centros comerciales). Que el atentado terrorista del Club El Nogal, dividió la seguridad del país en dos y dio lugar a cambios y nuevas regulaciones tendientes a progresar en esa materia. Que toda medida de seguridad es susceptible de ser vulnerada y no ofrece nunca el resultado deseado con su implementación por rigurosa y severa que sea.

Así, no es dudoso que mi representada no solo cumplía en aquella época con las medidas de seguridad estándares de los clubes sociales bogotanos –que, en rigor,

era el estándar de conducta exigible a mi representada, a la luz del parámetro de diligencia antes acuñado-, sino que las superaba ampliamente. Se demostró suficientemente, pues, su diligencia en este tema[24].

Lo anterior, por lo demás, es también corroborado por las pruebas documentales. Así, por ejemplo, en la diligencia de inspección judicial que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá llevó a cabo en las instalaciones del Club El Nogal (diligencia que se surtió el 12 de octubre de 2006, en el proceso instaurado por Luz Constanza Prado e hijos contra mi representada), se pudo encontrar copiosa documentación que daba cuenta de las medidas de seguridad adoptadas por la Corporación Club El Nogal en relación, por ejemplo, con el servicio de vigilancia privada prestado por ATEMPI, el uso de caninos proveídos por la empresa Caninos Ltda., los equipos de seguridad y el personal encargado de la misma.

También se pueden encontrar en el expediente varios documentos emanados de la Fiscalía General de la Nación que acreditan el correcto funcionamiento de las cámaras de video que registraban el ingreso de los vehículos al Club y que prestaban soporte a todo el sistema de seguridad con que contaba El Nogal para el 7 de febrero de 2.003, así como la correcta actualización de las bitácoras de ingreso de personas. Sobre el particular se destacan:

- La respuesta del 8 de julio de 2005 de la Fiscalía General de la Nación al derecho de petición del Club el Nogal para que se confirme que las cámaras de video instaladas en los accesos vehiculares al Club funcionaron normalmente el día del atentado terrorista. En dicho documento se lee que:

  > "El análisis de los discos duros de vídeo — imágenes de monitoreo del El Club El Nogal, fueron de gran importancia para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los acontecimientos aquí investigados, así mismo orientaron la investigación hacia el descubrimiento de la identidad de los presuntos responsables del atentado terrorista".

- Lo dicho en el documento citado se corrobora con lo expresado por la Fiscalía General de la Nación en la resolución de acusación del 19 de julio de 2004 cuyo aparte también se transcribe:

  > "(...) Respecto de **este acontecimiento, debe recordarse que en los controles de ingreso al Club, quedó registrado que inicialmente ingresó, media hora antes, JHON FREDDY y, con posterioridad, lo hizo OSWALDO,** con una identidad y carnet de socio falsas a bordo del Megane rojo; indicando todo que el primero ubicó el campero Toyota Land Cruiser, 4.5, azul marfil, modelo 2001, de placa BXN 261, en el sitio donde debía efectuarse la explosión, para luego, cuando ingresó su. tío OSWALDO, mover ese carro, cediéndole el espacio al Reanult Mégane Rojo cargado con los explosivos, **que fuera detonado cuando estas dos personas acababan de descender de los vehículos, sin darles los quince a veinte minutos que les habían anunciado para escabullirse del Club antes de la explosión.** Respecto de FERNANDO, no se sabe por qué no ingresó, como dicen los testigos, dado que sí permaneció cerca del Club, como se pudo establecer por la celda o panel que transfirió llamada celular de éste con OSWALDO, minutos antes

[24] Todo sistema de seguridad, por bueno que sea, no es perfecto y está llamado a ser burlado por los delincuentes. ¿Qué mejor prueba de este aserto que el ataque terrorista contra el Pentágono de los EUA y la torres gemelas en Nueva York? Así lo resaltaron los testigos expertos en materia de seguridad, los señores Luis Enrique La Rotta y Sonia Andrade, quienes afirmaron que no existe un sistema infalible capaz de detener un atentado terrorista; como muestra de ello, las instalaciones propias del Estado, tales como la Fiscalía o las Fuerzas Militares, no escapan de los estragos del terrorismo; **Incluso, se ha establecido que los sistemas de seguridad resultan inoperantes al momento de tratar de detectar un artefacto explosivo, pues sólo a través de otros medios, tales como la intervención oportuna de un informante, es posible percibir la inminencia de un ataque de este tipo.**

de la explosión y cuando ya tanto el piloto como el coche -bomba estaban en el interior del edificio objeto del ataque.(...)" (resaltado y subrayado fuera de texto)

Lo transcrito en las páginas precedentes confirma y prueba plenamente la diligencia debida con que el Club El Nogal procedió la noche del atentado terrorista en materia de seguridad, razón por la cual procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia. No puede, pues, endilgársele al Club que represento, una de las muchas víctimas del atentado terrorista, responsabilidad alguna por los eventuales daños materiales y morales sufridos por los demandantes. Ninguno de los antecedentes del caso permiten imputarle al Club la autoría del daño. Por el contrario, ellos ponen de presente el particular esmero con que actuó mi representada en temas atinentes a la seguridad de sus socios y de terceros, hasta el punto de haber reforzado sus propias medidas de seguridad con los servicios de personas particularmente entrenadas para esos efectos y de contar con documentados procedimientos de seguridad integral avalados y verificados por una aseguradora de riesgos profesionales de amplia trayectoria nacional e internacional.

Ahora bien, para evitar cualquier equívoco, es preciso hacer una breve referencia a dos informes que obran en el expediente y que ameritan algunas precisiones específicas:

a. En primer lugar, el informe rendido por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, fechado el 14 de diciembre de 2004 y por medio del cual se daba respuesta a los oficios 1658 y 2008 que, en su momento, expidió el Juzgado Trece Civil del Circuito para el proceso iniciado por Alexandra Hoyos Duque y María Camila Caicedo Hoyos en contra de mi representada. En ese informe se afirma que "… contando con un buen entrenamiento del equipo cinofilo (guía y perro), en condiciones normales tiene que ser detectada (la carga explosiva) ya que la cantidad de sustancia es muy significativa …" (Fl.142) (subrayado y paréntesis no originales). Esto pareciera ser contradictorio frente a lo que se viene sosteniendo en la presente alegación. Sin embargo, no es así. Y no lo es porque mediante informe del 11 de mayo de 2005 de la Fiscalía General de la Nación –en respuesta al oficio No.0315 del Juzgado Trece Civil del Circuito-, se aclaró la anterior afirmación en el sentido de que la posibilidad de detección del explosivo se condicionaba a circunstancias normales que, entre otras, incluyen que "… el vehículo no contenga ninguna sustancia que distorsione el olor del explosivo dificultándose su detección" (Fl.470 a 473 C1A Exp. 2003-712). En este caso, está demostrado que ello fue justamente lo que sucedió: como ya se puso de presente, los terroristas alteraron el olor del explosivo, con lo cual su detección se hizo imposible. En ese sentido, no puede decirse que era factible identificar la carga en el vehículo empleado por las FARC, como quiera que, en realidad, se estaba bajo una circunstancia de anormalidad que no lo permitía.

b. En segundo lugar, el informe elaborado también por el DAS (funcionario John Jairo Marín Barragán), para el proceso de Luz Constanza Prado e Hijas contra mi representada, e identificado con la referencia DGO.SIE.PJU.EXPL 737644-4 (Fl.1213 a 1218 C3 Exp. 2005-176). Este informe señala, de manera por demás escueta y superficial, que el personal de seguridad y los caninos del Club El Nogal debían estar en posibilidad de detectar la carga explosiva que se detonó el 7 de febrero de 2003. En concreto, sostiene que la inclinación del vehículo, dado el peso de los explosivos, permitía su fácil identificación; además, señala que caninos suficientemente entrenados habrían estado en capacidad de identificar los 250 kilogramos de mezcla de C4 y nitrato de amonio; para cerrar, asevera entonces que una implementación *adecuada* de las medidas de seguridad habría permitido

minimizar o contrarrestar el atentado terrorista de que fue víctima mi representada.

Pues bien, frente a este informe, **que no dictamen**, a la luz de las severas exigencias legales que deben tenerse en consideración para que tenga la virtualidad de ser calificado como tal –que fue oportunamente objetado por error grave (Fl.1276 a 1290 C3 Exp. 2005-176)-, debe decirse que la absoluta carencia de rigor técnico y de fundamento conduce indefectiblemente a que no deba ser valorado por el Tribunal al que respetuosa y comedidamente me dirijo. Ciertamente, sus conclusiones no solamente se derivan de la transcripción y análisis de pruebas ajenas al presente proceso, sino que, como podrá observarlo el sentenciador, desconocen de forma palmaria y ostensible toda una serie de variables que estuvieron involucradas en los hechos del Club El Nogal y que simplemente se pretermiten para efectos de las pruebas de que da cuenta dicho informe.

De hecho, con el propósito de no trascribir el texto de la objeción presentada contra el citado informe, es importante simplemente señalar tres aspectos que no dejan de llamar la atención: a) en primer lugar, la inexistencia de un razonamiento técnico que soporte las conclusiones del funcionario del DAS. Podrá observarse que sus conclusiones provienen de aseveraciones que, por decir lo menos, son lacónicas y se basan en meras intuiciones, para nada fundamentadas en la técnica o la ciencia. Todo lo contrario: son el producto del querer caprichoso del susodicho técnico, que simplemente se ocupó de afirmar sin fundamentar; b) además, el contenido de su escueto informe de cuatro folios, contradice abiertamente lo establecido en el resto de probanzas a las que ya se ha hecho alusión en el presente alegato y que, con pleno rigor técnico, experiencia y conocimiento de causa, destacan la imposibilidad de detectar los explosivos y la diligencia de la Corporación Club El Nogal. Ninguna credibilidad se le puede atribuir a un informe cuando, sin dar razones, va en contra del criterio de personal especializado y conocedor del sector; mucho menos cuando incluso va en contra del propio criterio expuesto en otros informes del DAS, como el enunciado en el punto inmediatamente anterior (informe del 14 de diciembre de 2004, referido en la letra *a, supra*).

Dentro de la mencionada objeción mi representada trajo a colación distintos argumentos que desvirtuaban la credibilidad del informe presentado por el técnico del DAS. Entre ellos, se recuerdan en este escrito, los siguientes:

i) Que los puntos a y b[25] de informe se respondieron *“mediante la "trascripción" de los resultados de una investigación realizada en otro proceso relacionado con el atentado del Club El Nogal sin especificar en qué consistió la solicitud de la prueba efectuada en su momento ni los detalles básicos del proceso para el que fue elaborada la supuesta investigación”*[26]*;* por lo cual *“no se tiene certeza de si lo solicitado en su momento en el otro proceso guarda relación con la solicitud de la*

[25] Correspondientes a las preguntas:

“*a) Si un vehículo Renault Megane cargado con cerca de 250 kilogramos de una mezcla de C4 y nitrato de amonio, que vaya ocupado por una sola persona, sufre alguna alteración física exterior que pueda ser notada a simple*
vista.
b) Si un vehículo Renault Megane cargado con cerca de 250 kilogramos de una mezcla de C4 y nitrato de amonio, sería detectado normalmente por perros especializados en labores anti explosivos”. Fl. 529 (antes 113) Exp. 2005-176.

[26] Objeción por error grave; Fl. 1276 Exp.2005-176.

prueba que en la presente oportunidad nos ocupa ni cuales fueron las objeciones formuladas en su momento en contra de dicho informe, para efectos de poder verificar hasta qué punto podría considerarse válida la "trascripción" que efectúa el perito. Por otra parte, tampoco se tiene certeza cual fue la "trascripción realizada, en la medida en que no se utilizaron comillas"[27].

ii) El informe concluyó que, en las pruebas realizadas en 2006, el personal de seguridad privada y los caninos podrían detectar una carga de explosivos similar a la empleada en el atentado. Frente a este punto se indicó que el dictamen no tuvo en cuenta las condiciones que rodearon el caso del Club el Nogal, en tanto el explosivo empleado en el atentado del 7 de febrero de 2003 era de muy difícil detección aún a pesar de las superiores condiciones de seguridad con las que contaba mi representada y que fueron ampliamente probadas en el proceso.

iii) El mencionado informe no tuvo en cuenta que la regulación de los caninos en materia de seguridad, especialmente los de búsqueda de explosivos, se dio con ocasión del atentado sufrido en las instalaciones del Club el Nogal. Por ello, *"el funcionario del DAS incurre en sendos y gravísimos errores al contestar varias de los puntos solicitados (por ejemplo, el punto "c" "d", "e", "h" e "*), en la medida en que no se tiene en cuenta, o por lo menos no se precisa, que hay que distinguir entre las exigencias normativas en materia de entrenamientos y procedimientos de vigilancia y seguridad canina para la época del atentado (7 de febrero de 2003) y las exigencias previstas en la actualidad"*[28].

iv) A su vez, mi representada puntualizó que los elementos dispuestos para realizar las pruebas sobre la posibilidad de detección de los artefactos explosivos no representan las condiciones que en su momento fueron dadas en el atentado del Club El Nogal. De tal suerte que i) el vehículo utilizado en las pruebas no corresponde con el empleado en el atentado (Renault Megane) ni se explica si es justificable el cambio sobre el mismo; ii) en el atentado la carga de los explosivos de distribuyó en distintos puntos a lo largo del vehículo, mientras que en las pruebas realizadas la carga fue colocada en un mismo punto; iii) al momento de realizar las pruebas no se tuvo en cuenta la utilización de elementos o sustancias destinadas a distraer o dificultar las labores de detección por parte de los caninos (cuestión que se encuentra acreditada en el caso de autos).

Por todo lo anterior, este informe no tiene, ni por asomo, la virtualidad de ser considerado como dictamen y, mucho menos aún, derruir o desvirtuar las demás pruebas que se practicaron en el curso del proceso y que, de manera conteste, inequívoca y uniforme, dejan claro que mi representada actuó con plena diligencia y esmero.

De hecho, conviene destacar el testimonio técnico rendido por el señor Jairo Arturo Parra Cuadrado ante el Juzgado 13 Civil del Circuito. En esta declaración, el señor Parra Cuadrado, en su calidad de Jefe de la Unidad de Explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –y, de contera, de jefe del funcionario que suscribe el informe DGO.SIE.PJU.EXPL 737644-4-, deja claro que era prácticamente imposible detectar el explosivo que fue detonado en el Club El Nogal y, en consecuencia, que ninguna

[27] *Ibídem.*

[28] Objeción por error grave; Fl. 1286 Exp. 2005-176.

negligencia le es atribuible a la Corporación Club El Nogal. Sostuvo el mencionado testigo que:

"PREGUNTADO No. 1: Indíquele al Despacho cuál es su experiencia en el desarrollo de las labores de antiexplosivos o investigación de antiexplosivos? **CONTESTO**: Desde el año 85 me desempeño como técnico en antiexplosivos y son 19 años ejerciendo como técnico en desactivación y pos-investigación. **PREGUNTADO No. 2:** Dígale al Despacho si usted participó de las labores de pos-investigación que se llevaron a cabo con ocasión del atentado perpetrado en el CLUB EL NOGAL DE BOGOTA, el día 7 de febrero de 2003? **CONTESTO:** Sí, participamos como auxiliadores o colaboradores al grupo de explosivos del CTI, y a la fiscal que conoció el caso y nuestra labor fue tratar de desarrollar búsquedas de evidencias, fue por espacio más o menos de cinco días, y todo lo que se halló en ese lugar para tratar de identificar el tipo de artefacto, ubicación del mismo, y posibles autores, todo le fue entregado al CTI que fue quien continuó la investigación, y esa fue nuestra función de colaboración, pero no continuamos con la investigación (...). **PREGUNTADO No. 4:** Indíquele al Despacho en relación con el atentado en mención, qué tipo de información llegó a su conocimiento acerca de la modalidad del atentado, cantidad de explosivo utilizado u otros factores relacionados con él? **CONTESTO:** En la pos-investigación que se realizó se logró determinar que se trataba de un vehículo RENAULT MEGANE, en este momento no recuerdo bien el color, creo que rojo, ya que muchas de las partes del miso fueron encontradas esparcidas, y que posteriormente de haber escogido muchas de ellas, se llegó a ese tipo de conclusión, en cuanto a la cantidad de explosivo y sistema utilizado en el momento no pudimos determinarlo porque no teníamos los informes de laboratorio que nos indicaran los resultados del mismo, y así haciendo un cálculo de los daños podíamos llegar a calcular que cantidad aproximada se utilizó, se que el CTI continuó con la investigación y lograron obtener algunas trazas de explosivos, y creo que ellos determinaron la cantidad que se utilizó. PREGUNTADO No. 5: Indíquele al Despacho si de acuerdo con su experiencia como técnico anti-explosivos un vehículo RENAULT MEGANE cargado con 20 arrobas del explosivo ANFO presentaría alguna alteración física detectables a simple vista, cuando esta siendo ocupado por dos personas de talla normal. **CONTESTO: Si el vehículo presenta algunas caletas ubicadas en puntos estratégicos tales como espaldar, tableros de las puertas, espacio del mamparo contra incendios del vehículo, o sea, el espacio que hay entre el motor y la cabina del vehículo, no presentaría ningún tipo de anormalidad ya que tuvimos la oportunidad de atender un caso en el barrio SUBA donde se encontró un vehículo de similares características y a este le habían hecho una caleta en el espaldar de la silla trasera, que si no era analizada cuidadosamente no era de fácil detección. PREGUNTADO No. 6:** Al hacer referencia a alteración física en la pregunta anterior, me refería al hecho de que un vehículo de las condiciones descritas, cargado con 20 arrobas de explosivos, aun en las condiciones descritas por usted, no esta más cerca del piso que un vehículo que no contenga la carga en mención. **CONTESTO: Como lo dije anteriormente cuando se ubica en los puntos que describí el peso queda muy bien repartido y efectivamente alcanza a presentar un acercamiento hacía el suelo, pero que lo descubriría una persona que esté entrenada y que tenga algo de malicia y conozca el nivel normal de este tipo de vehículos; en cuanto a peso excesivo si se hubiese colocado en un solo punto si tendría que presentar ese tipo de acercamiento del chasis al suelo que sería de fácil detección. PREGUNTADO No. 7:** Indíquele al Despacho hasta que cantidad del explosivo denominado ANFO es posible ubicar en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE, en los sitios que usted hizo referencia en respuesta anterior? **CONTESTO:** La verdad pecaría si le diera una cantidad exacta, ya que personalmente no hemos hecho la prueba de cuanto podríamos nosotros encaletar en estos sitios, pero imagino que estos si tuvieron esa cantidad a al cual el Doctor hace referencia, que supongo es la cantidad deben calcularlos expertos del CTI quienes fueron los que continuaron con la investigación, la debieron de haber tomado conociendo el dictamen del laboratorio, los elementos de prueba encontrados en el lugar de la explosión y cálculos efectuados por ellos mismos en un vehículo de similares características. **PREGUNTADO No. 8**: De acuerdo con su experiencia es posible ubicar veinte arrobas del explosivo conocido

como ANFO en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE en los sitios en que usted indico en respuesta anterior sin que ello sea detectable a simple vista? **CONTESTO: Si es posible; en alguna ocasión, y estoy hablando de conocimiento propio, tuvimos un caso en donde un RENAULT CUATRO ubicaron en la parte de atrás y el cual fue desactivo afortunadamente 200 kilos de BENCLO, y realmente no es un espacio muy grande el que tiene un RENAULT CUATRO, por lo cual pienso que si es posible,** no se como tendrían ese carro ese día, porque en algunas modalidades que nosotros también hemos encontrado es que también acostumbran a rellenar las sillas, pero en el caso que hace referencia el Doctor que es el atentado al NOGAL no le podría yo afirmar que ese vehículo tenía esa cantidad ya que nosotros no continuamos con la investigación, pero si lo puede decir el grupo de explosivos del CTI quienes fueron los que culminaron la investigación. (...). En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien manifiesta: **PREGUNTADO No. 1:** Señor PARRA: en consideración a su experiencia y conocimiento técnico en materia de explosivo, podría usted ilustrar al Juzgado sobre los progresos en conocimientos, estrategia, y nivel tecnología de la FARC y ELN comparándolo con los inicios de estos grupos al margen de la ley en esa materia? **CONTESTO**: **Cuando yo me inicie en el campo de los explosivos en el año 85, teníamos bombas relativamente sencillas, las cuales eran ubicadas en puntos donde pudiesen hacer daño a organismos gubernamentales, y muchas de ellas eran bombas activadas mediante sistema in eléctrico, para hacer claridad al despacho me refiero a explosivo, una cápsula detonante in eléctrica, un pedazo de mecha lenta o de seguridad, y lo único que tenían que hacer era aplicar una chispa o fuego y dependiendo del largo de la mecha daban tiempo para retirase y colocarse en un punto de seguridad mientras la detonación, eran sistemas que no necesitaban de ningún tipo de tecnología, o utilizaban un reloj despertador bastante grande que en muchas ocasiones lográbamos nosotros desactivar debido a que le colocaban mucho tiempo; hoy en día utilizan ingenieros para realizar sus propias tarjetas para la activación de artefactos explosivos, para lo cual nos hemos visto obligados a capacitarnos mucho más para poder sobrepasar ese nivel y así lograr neutralizar ese tipo de elementos. PREGUNTADO No. 2:** Dada su participación en la investigación que se desarrollo por parte del DAS con posterioridad a la explosión del carro bomba en el club EL NOGAL, infórmele al Juzgado cuál fue el resultado que se obtuvo con ocasión de las pesquisas y delaciones de las personas capturadas con ocasión del mismo? **CONTESTO:** Lo que nosotros normalmente hacemos en estos casos es la parte técnica, la parte investigativa la realiza el grupo de seguridad publica y antiterrorismo; pero por lo que se adelantaba ese día se decía que era el mismo sitio donde se había preparado el carro para el atentado de EL NOGAL, y me estoy refiriendo al allanamiento efectuado en el barrio SUBA, donde se encontró un RENAUL MEGANE **con una caleta en la parte del espaldar de la silla trasera con un forro que lo hacía pasar como si fuera parte de la silla, al igual que el alojamiento normal donde va la batería había sido retirada de ahí y dejado ese espacio vacío que es a lo que yo hacía referencia cuando hablaba del mamparo contra incendios, y la batería que iba alojada ahí ubicada a un costado en la parte frontal del vehículo**, en cuanto a la investigación en si no la tenemos. **PREGUNTADO No. 3:** Quisiera preguntarle señor PARRA sobre qué influencia tienen los elementos de sorpresa e indefensión, entre otros, en el objetivo que persiguen los delincuentes que pretenden colocar un carro bomba. **CONTESTO:** en cuanto a mi concepto personal y tratándose de un club donde imagino que existía un monitoreo de la entrada de los vehículos, donde imagino existían unos guías caninos en detección de explosivos, y donde si la persona que va a ingresar este tipo de elemento es concordial, efectivamente se le hace una revisión pero con la ventaja de que al ser socio, esa revisión no se tan exhaustiva y si el elemento o artefacto esta bien camuflado puede pasar desapercibido. **PREGUNTADO No. 4:** Qué grado de éxito tienen este tipo de acciones criminales a nivel nacional según la experiencia que usted ha tenido? **CONTESTO**: Yo pienso que un alto porcentaje por lo que anteriormente describí (...) **PREGUNTADO No. 6:** Dentro de la experiencia que usted ha tenido en el DAS en materia de atentados con explosivos, informe al Juzgado si conoce eventos de esta naturaleza perpetrados contra clubes sociales.

CONTESTO: <u>Contra clubes sociales no</u>, o no recuerdo en este momento (...)" (resaltados nuestros).

Presentada la anterior argumentación no es dudoso, entonces, que la Corporación Club El Nogal contaba con medidas de seguridad altamente calificadas. Cosa distinta es que, debido al nivel de sofisticación utilizado por los terroristas, ni con esmerada diligencia podría detectarse la presencia de los explosivos. Ciertamente, los terroristas calcularon y planearon el montaje del carro bomba de modo tal que burlara los más sofisticados sistemas de seguridad: introdujeron los explosivos de manera disimulada y balanceada a lo largo y ancho de la carrocería del automóvil con el cual se perpetró el ilícito[29] y emplearon mecanismos de engaño para el instinto olfativo de los caninos entrenados para esos efectos. De este modo, ni aún con pericia, el Club El Nogal podía defenderse[30], lo que no incide solamente desde la perspectiva de la diligencia, sino también de la causalidad, como se apreciará en un punto ulterior.

En este punto resulta relevante destacar que a la fecha de los hechos no existía regulación relacionada con el uso de caninos para vigilancia. Es más: la misma tan solo surgió con posterioridad a la ocurrencia del atentado terrorista que tuvo lugar el 7 de febrero de 2003. En efecto, esta materia fue regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de las Resoluciones 025993[1] y 026013[2] del 1 de diciembre de 2003, esto es, con posterioridad al 7 de febrero de 2003. De tal suerte que no resulta admisible imponer cargas a mi representada o exigirle actuar conforme a un estándar de conducta que ni siquiera se encontraba regulado para el momento en que ocurrieron los hechos.

Esa particular y especialísima sevicia y habilidad de los terroristas impidió que las medidas de seguridad implementadas por mi representada detectaran el ingreso del carro bomba. Así, el problema no era de culpa. Era la consecuencia inevitable de la invencible sofisticación de los terroristas. **<u>De hecho, como consta en las</u>**

---

[29] Es determinante en cuanto a la distribución balanceada del explosivo dentro del vehículo utilizado lo manifestado como conocimiento de primera mano por Jairo Arturo Parra Cuadrado en su testimonio rendido el 1 de febrero de 2005 ante el Juzgado 13 Civil del Circuito (diligencia que se aporta mediante el presente escrito), pues se explica como encontraron las autoridades el explosivo camuflado en el carro bomba gemelo dispuesto para ser utilizado en contra del Hospital Militar: **"Si el vehículo presenta algunas caletas ubicadas en puntos estratégicos tales como espaldar, tableros de las puertas, espacio del mamparo contra incendios del vehículo, o sea el espacio que hay entre el motor y la cabina del vehículo…"** Esta distribución tenía como fin único hacer imperceptible la existencia de la carga explosiva e impedir su detección mediante inspección visual.

[30] **Tome nota el despacho lo manifestado por el terrorista Alipio Murillo, a cargo del montaje de los carros bomba, en sus declaraciones ante la Fiscalía respecto de la utilización de aceite y ajo machacado para distraer el olfato del apoyo canino. (Ver en particular la declaración rendida el 24 de abril de 2003 a folios 619 al 623 C2 Exp. 2005 - 176). Véase sobre el particular, incidencia de la alteración del olor del explosivo, lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación en el informe técnico del 11 de mayo de 2005 aportado mediante el presente escrito.**

[31] *"Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones para el desarrollo de los programas de capacitación y entrenamiento del ciclo de Manejador Canino y de Adiestramiento de Caninos, y se fijan los requisitos y normas para las escuelas y departamentos de capacitación en la modalidad del área canina".*

A su vez, dentro del acápite "Considerando" de esta resolución se indicó: *"Que en virtud de la creación de las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana conformadas por las personas, empresas y servicios de vigilancia y seguridad privada, se hace necesario capacitarlas a fin de apoyar a la fuerza pública en la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados con el terrorismo"*.

[32] *"Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medio canino y se adoptan disposiciones en materia de carnetización y registro de caninos".*

declaraciones rendidas por los señores ingenieros ALEJANDRO PEREZ SILVA y LUIS ENRIQUE GARCÍA REYES, si se hubiese detectado la bomba en el ingreso del vehículo Renault Megane a las instalaciones del Club El Nogal y, como estaba previsto, los terroristas la hubiesen detonado en ese lugar, las consecuencias habrían sido mucho peores: el incendio de los tanques cercanos habría agravado las consecuencias del siniestro. De este modo, no puede afirmarse que mi representada fue negligente o que incurrió en impericia o error de conducta alguno, como pretenden hacerlo ver los accionantes.

4.3. La selección y admisión de los socios no se encontraba a cargo de la Junta Directiva del Club El Nogal

De otro lado, aunque no resulta de particular relevancia para el análisis de responsabilidad, como tampoco se erigiría como causal para su declaratoria, la sentencia de primera instancia incurrió en error al señalar de manera general que la Junta Directiva del Club El Nogal controlaba la admisión de los socios. A este respecto, habrá de tenerse en cuenta que la selección y admisión de los socios se encontraba a cargo de la Promotora Club el Nogal, persona jurídica independiente y sin ningún tipo de relación de subordinación con mi representada.

De este hecho dejan constancia, entre otros, los testimonios de Fernando Londoño Hoyos y Fernando Ruíz Llano, y el interrogatorio de parte absuelto por Luke Pujana Angota. En lo que se refiere a éste último, a modo de ejemplo, allí la señora Pujana Angota, gerente del Club El Nogal para la época de los hechos, deja constancia de que "… la promotora Club El Nogal fue la entidad desarrolladora del proyecto y la encargada de colocar los derechos en los actuales socios del club el nogal …" (Fl. 788 a 790 C1A Exp. 2003-712).

De hecho, obran en el expediente distintos documentos que acreditan que el ingreso como socio al Club El Nogal de Invernar Invernaderos Ltda., y la aceptación de los dos beneficiarios designados por ésta para usufructuar la acción respectiva, fue surtida directamente por la Promotora Club El Nogal. Ello es corroborado también por la carta que remitió la Corporación Club El Nogal a la sociedad Invernar Invernaderos Ltda., el 18 de septiembre de 2002, mediante la cual *comunicaba* que *"... la Junta Directiva de la Promotora Club El Nogal S.A. en Liquidación, impartió su aprobación a la solicitud que ustedes presentaron como socios del Club El Nogal ..."* (Fl.283 C1A. Exp. 2003-712), de donde se infiere de manera clara que fue la Promotora y no mi representada quien concedió dicha autorización, lo que es también confirmado por la carta del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual el liquidador de la Promotora Club El Nogal especifica que fue esa sociedad la que impartió autorización a favor de Invernar Invernaderos Ltda.

Es más: en varias certificaciones como las arriba citadas y como la expedida el 2 de agosto de 2001, el Club El Nogal informa que el trámite para acceder a una acción empresarial de dicha Corporación debía adelantarse ante la Promotora Club El Nogal, la cual, debe reiterarse, constituye una persona jurídica distinta del Club El Nogal. Lo anterior debido a que para el año 2002 y 2003 la Promotora Club El Nogal era dueña de los derechos y de las acciones que se encontraban inactivas y por vender. En consecuencia, era esta misma empresa la encargada de vender las prenotadas acciones, señalar los requisitos para el ingreso de socios y proceder con la compilación y confirmación de la información pertinente.

En el caso de marras, ese fue el trámite que se surtió: la Promotora Club El Nogal vendió directamente a la sociedad Invernar Invernaderos Ltda., la acción empresarial y solicitó la información básica que se pedía a todo interesado en pertenecer al Club con el propósito de considerar y aprobar el ingreso de un nuevo

socio del Club. Este mismo procedimiento se empleó para aceptar la solicitud de Invernar Invernaderos Ltda. y el del resto de los socios admitidos con anterioridad.

Así las cosas, la gestión que pretende atribuírsele a mi representada, fue realmente realizada por una sociedad diferente y completamente independiente, respecto de la cual no existía subordinación alguna, razón por la cual no puede atribuírsele responsabilidad por las actuaciones de dicha sociedad.

4.4. Conclusión del presente acápite.

En conclusión, las pruebas testimoniales y documentales transcritas corroboran la indiscutible veracidad de los siguientes hechos:

- Que el Club el Nogal contaba con un sistema de seguridad altamente calificado y estructurado que cumplía a cabalidad con los parámetros de diligencia que eran razonables para la época.

- Que las medidas de seguridad con que contaba el Club superaban los estándares de seguridad de otras instituciones privadas de igual o similar naturaleza y objeto, por lo cual, en estricto rigor, se puede afirmar que eran medidas que superaban el estándar de comportamiento exigible a mi representada.

- Que las medidas de seguridad con que contaba el Club El Nogal para la época de los hechos funcionaron adecuadamente el día del atentado. (cámaras de video, revisión de vehículos, vigilancia interna y externa, soporte canino, etc).

- Que los terroristas emplearon para ejecutar su acto criminal altos niveles de sofisticación destinados a burlar la seguridad de El Nogal, los cuales excedían aún a la más esmerada diligencia, que fue la empleada por mi representada.

- La ausencia de antecedentes de atentados terroristas perpetuados de manera semejante en contra de instituciones de características similares a las del Club El Nogal.

- En fin, no existe aspecto alguno que permita inferir negligencia en el proceso de selección y admisión de socios, respecto de la sociedad Invernar Invernaderos Ltda., el cual, por lo demás, fue acometido por una sociedad diferente a la Corporación Club El Nogal.

Con todo ello queda entonces claro que mi representada procedió con absoluta diligencia en relación con los hechos que motivan la presente *litis.* Ninguna negligencia puede endilgársele y, en consecuencia, ninguna responsabilidad se le puede atribuir.

Las anteriores razones son suficientes para descartar la responsabilidad de mi representada en el presente evento. Resulta evidente, se reitera, que el Club el Nogal actuó con la diligencia exigida para este tipo de establecimientos, así como que contaba con el esquema de seguridad más avanzado entratándose de sitios a los que asistían un número elevado de personas, por lo que se debe descartar cualquier argumentación encausada a endilgar un comportamiento negligente al Club.

Ciertamente, no solo se puede concluir que no concurren en este caso ninguno de los presupuestos que exige la legislación colombiana para comprometer la responsabilidad civil de un sujeto particular, sino que, además, se evidencia la diligencia, probidad y pericia con que procedió y ha procedido mi representada frente a la materia de la *litis.*

En este orden de ideas, si el *a quo* hubiese acertado al aplicar el régimen de responsabilidad de culpa probada, necesariamente hubiera absuelto a mi prohijada frente a las demandas que fueron presentadas en su contra, por lo que la decisión deberá ser revocada y, en su lugar, se deberán negar las pretensiones formuladas en las distintas demandas.

5. QUINTO REPARO: CAUSA EXTRAÑA / INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL / PRESENCIA DE CAUSALES EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD / CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR / HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

La sentencia de primera instancia se equivocó al no declarar probada la causa extraña (caso fortuito, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero) en el caso que nos ocupa. Al respecto, brevemente sintetizo este numeral con las siguientes consideraciones de ineludible análisis para el juzgador de segunda instancia:

Como se expresó antes, todo análisis de responsabilidad civil debe contener el necesario estudio de uno de los tres elementos indispensables para que surja la obligación de responsabilidad civil, sin cuya presencia no nace a la vida jurídica: me refiero al nexo de causalidad entre la conducta del demandado y el daño alegado y causado al demandante. Es claro, pues, que la ausencia de dicho nexo, producida por la ocurrencia de una causa extraña, conlleva necesariamente a la inexistencia de responsabilidad.

Sea lo primero mencionar que en el presente evento se da la presencia de la causa extraña, con la virtualidad para quebrantar el nexo causal pretendido, representada por el hecho del tercero que perpetró el acto terrorista dirigido contra el Club el Nogal, delito atroz que organizaron y ordenaron las FARC. Este inocultable hecho que conoce y rechaza el país entero está plenamente acreditado dentro del proceso.

A tal efecto, la Corte Suprema de Justicia ha establecido al respecto de forma elocuente que:

> *"[…] autoría y calificación de la conducta, difieren, no pudiéndose sostener que una persona es autor de un daño y a la vez que no lo es; así, cuando el daño acontece por fuerza mayor, caso fortuito, intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, no puede imputarse a quien se sindica de autor; simplemente en estos eventos,* ***el daño es fruto de un elemento extraño y, en cuanto tal, el sujeto no es autor y, por esto, en estos casos, no hay lugar a responsabilidad porque el daño no es imputable a quien se acusa como autor****"*[33] (Negrilla fuera del texto original).

Resulta evidente que el suceso acaecido el 7 de febrero de 2003 tuvo como autor a un grupo terrorista al margen de la ley, sin que pueda atribuirse ninguna omisión que instituya un proceder culposo del Club el Nogal sino que, por el contrario, la actuación de las FARC-EP constituye la causa única y determinante del daño. La presencia del caso fortuito y la fuerza mayor, como causal eximente de responsabilidad, debe conllevar al *ad quem* a declararla acreditada, como en efecto lo está, con el acervo probatorio que obra en el expediente del proceso que ocupa nuestra atención en este memorial.

---

[33] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de agosto de 2009. M.P. William Namén Vargas.

Las notas características de la noción de fuerza mayor son su irresistibilidad y su imprevisibilidad. Ciertamente, se afirma que se está ante un hecho constitutivo de esta causal de exoneración, cuando se verifica que dicho hecho ha sido imprevisible e irresistible.

5.1. El acto terrorista perpetrado era imprevisible.

La condición de imprevisibilidad de una causa extraña no se predica en el sentido que la ocurrencia de dicho evento fuera de impensable acontecer, sino que ello corresponde a un evento cuya ocurrencia es poco probable por escapar a la razonable previsión del acto en contra de quien se hace la respectiva reflexión.

En lo que se refiere al caso concreto, es claro que esta clase de atentados terroristas no solían estar dirigidos contra instalaciones privadas en Bogotá según se acotó previamente y quedó plenamente acreditado en el proceso, por lo cual este evento resultó totalmente sorpresivo para el Club, el país y el mismo Estado. Aunado a lo anterior, la posibilidad de realización de un atentado de esa naturaleza, así como el éxito del mismo, era bastante reducida en consideración a la ausencia de historial previo de la ciudad sobre atentados terroristas contra clubes sociales, amén de la seguridad disuasiva con que contaba el Club el Nogal para la época que, como varios testigos lo declararon bajo juramento, era muy superior a la que manejaban otros establecimientos de similares características, actividades y objeto. **Es más, debe tenerse especial consideración la circunstancia de que, de haberse descubierto la presencia de los explosivos al interior del vehículo en la entrada del Club, el siniestro no habría podido ser evitado y sus consecuencias habrían sido de mayor significación en vidas humanas, lesiones personales y de daño y destrucción material de las instalaciones del Club y de las construcciones vecinas. Sobre este particular deben tenerse en cuenta testimonios calificados expresados alrededor de esta hipótesis. Recuérdese que la explosión fue activada exteriormente por control remoto a los pocos minutos de haber ingresado el vehículo a la zona de parqueo del Club, con lo cual puede apreciarse también la irresistibilidad del atentado terrorista perpetrado conta El Nogal, entidad que nunca fue amenazada o advertida por persona u órgano alguno sobre actos delictuosos en su contra. Mucho menos de actos terroristas perpetrados por grupos organizados al margen de la ley.**

Resulta sencillo entender, con el empleo de la razón y el buen juicio resultante de la consideración y análisis del abundante material probatorio que obra en el expediente, que la ocurrencia de un atentado como el que tuvo lugar el 7 de febrero de 2003 en el Club el Nogal fue un evento imprevisible tanto para la demandada como para el propio Estado. No se puede partir del equivocado supuesto que, en virtud del deber general de conducta que se le atribuye al Club con base en sus estatutos sociales, debía prever cualquier posible hecho que afectara en menor o mayor medida la integridad de quienes se encontraban al interior de sus instalaciones, dejando de lado el elemento de razonabilidad a que se hizo mención precedentemente.

Justificar la supuesta previsibilidad del acto terrorista en el hecho consistente en que el Club El Nogal contaba con medidas de seguridad superiores a las de establecimientos sociales y comerciales similares, lleva a la absurda conclusión de que ser más diligente que los pares resulta ser un elemento adicional para facilitar una condena de responsabilidad civil. La conclusión, como es apenas obvio, debe ser diametralmente distinta: la persona diligente que desarrolla un estándar de

conducta superior al de sus pares tiene necesariamente una menor exposición a la responsabilidad civil y a la declaratoria de la misma.

A la luz de la tesis esgrimida por el *a quo* se generan incentivos perversos pues la falta de diligencia sería un elemento que permitiría alegar la imprevisibilidad con mayor facilidad. Tal enfoque, a la luz de nuestro criterio, es abiertamente equivocado y contradictorio.

Debe decirse con toda claridad: el atentado terrorista perpetrado por las FARC-EP el 7 de febrero de 2003 en contra de las instalaciones del Club El Nogal era imprevisible y ello se encuentra plenamente demostrado en el proceso.

5.2. El acto terrorista era irresistible.

Una de las características del atentado que permiten pregonar su irresistibilidad es justamente el alto nivel de sofisticación técnica y logística que emplearon las FARC para cumplir exitosamente la repudiable y espantosa tarea terrorista[34], infiltrando un miembro de su organización, desconocido como tal por las autoridades, como beneficiario de una acción corporativa y burlando las medidas de seguridad de El Nogal.

En adición a lo anterior, debe insistirse y reiterarse por su importancia que, de haberse detectado la bomba en la puerta de ingreso al Club y si la misma hubiese sido detonada en ese sitio, las consecuencias de daño en vidas humanas, lesiones personales y destrucción material habrían sido mucho mayores a las que tuvieron lugar ese funesto día. Lo anterior en tanto que en la portería de la carrera 5[35] se encontraban ubicados los depósitos de ACPM del Club, las calderas del edificio y

---

[34] Respecto de la conducta terrorista, la JEP, en providencia reciente, concluyó que el atentado terrorista contra las instalaciones del Club El Nogal constituye un crimen de guerra. Esta circunstancia y calificación demuestra que el hecho fue irresistible para mi representada, según se ha alegado desde el momento en que se contestó la demanda. Al respecto, puede tenerse en cuenta, entre otros apartes de la referida sentencia, los siguientes:

"61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad ***por constituir graves crímenes de guerra****…" (se destaca).*

"69. En consecuencia, el asunto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS será remitido al caso nro. 10 de la SRVR para que sea estudiado dentro de los patrones de conductas no amnistiables cometidas en la conducción de hostilidades y de aquellas agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos, las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, por las que fueron condenados los comparecientes en sentencia del 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ***y recalificadas preliminarmente para efectos de este pronunciamiento como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional*** *según el artículo 8.e.1) del Estatuto de Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000"* (se destaca).

- Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.

[35] Sitio por el que ingresó el vehículo cargado con explosivos camuflados que impedían su detección por el ojo humano y con elementos o productos que les fueron agregados para que el canino no pudiera olfatearlos.

las bielas de las habitaciones[36]. Por ello, en caso de que se hubiese detectado la bomba a la entrada del Club, no solo no se hubiera evitado la consumación del atentado terrorista, sino que el daño que este habría producido, se repite, habría sido de una magnitud mucho mayor.

Dado que desde el momento de ingreso del carro bomba al instante en que se produjo su explosión activada por control remoto[37] no transcurrieron más de cinco minutos, no existe duda para concluir la irresistibilidad del atentado terrorista pues la hipotética identificación del vehículo como un carro bomba no habría impedido su detonación y las mayúsculas consecuencias destructivas.

En suma, el concepto de fuerza mayor o caso fortuito se refiere a un evento irresistible e imprevisible que da lugar a una consecuencia dañosa desvirtúa el nexo causal en una determinada imputación de responsabilidad civil, lo cual inhibe al juzgador para declarar obligación indemnizatoria alguna frente a quien no tuvo participación en el acto o hecho que se alega como causante del perjuicio. Esto fue, precisamente, lo que sucedió en el caso de autos. En efecto, además de lo reseñado en acápites precedentes, existe suficiente material probatorio en el expediente que da cuenta de que el hecho del cual fue víctima el Club El Nogal fue irresistible e imprevisible.

Sin embargo, si por cualquier circunstancia no se encontrase demostrado el caso fortuito o la fuerza mayor, el perjuicio causado al demandante y a las demás personas que se encontraban en las instalaciones del Club no le es imputable a mi mandante sino a un tercero, por lo que respecto del Club el actuar de los terroristas, dada su irresistibilidad, constituyó un hecho exclusivo y determinante de un tercero[38], cuestión que rompe el nexo de causalidad y conlleva a la necesaria revocatoria del fallo de primera instancia.

5.3. Referencias probatorias que demuestran el reparo formulado bajo este acápite.

En suma, según se acotó previamente, el concepto de fuerza mayor o caso fortuito se refiere a un evento irresistible e imprevisible que da lugar a una consecuencia dañosa y que, por esa misma razón, desvirtúa el nexo causal en una determinada imputación de responsabilidad civil, con lo cual impide cualquier atribución de la obligación de indemnizar.

Pues bien, si se aplica lo anterior al caso de marras se encuentra que aquí concurren los elementos de la fuerza mayor. En efecto, además del reseñado en otros acápites,

---

[36] Al respecto pueden consultarse los testimonios de los ingenieros Alejandro Perez Silva y Luis Enrique García Reyes.

[37] El vehículo cargado con explosivos fue detonado por control remoto desde el exterior de las instalaciones del Club El Nogal, por lo que nada ni nadie habría podido intervenir para que no fuera accionado en el parqueadero o en la portería de acceso. De haberse producido la detonación en este último punto, el desastre hubiera sido de consecuencias muy superiores a las que lamentablemente acontecieron, según declaración rendida por Alejandro Pérez Silva (ingeniero civil, Magister Diseño en Ingeniería Civil, quien realizó los cálculos y diseño de la estructura y sede del Club El Nogal con su empresa Proyectos y Diseños Ltda.).

[38] A idéntica conclusión llegó el Consejo de Estado en la sentencia adoptada en relación con el atentado al Club el Nogal al disponer: *"Como no se probó omisión por parte de las autoridades en el deber de protección y, por el contrario, quedó probado que* ***esa acción armada contra el Club el Nogal era imprevisible e irresistible, se configuró el hecho exclusivo de un tercero****. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada"* (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque). (Las negrillas no son del texto).

existe suficiente material probatorio en el expediente que da cuenta de que el hecho enfrentado por el Club El Nogal era absolutamente irresistible e imprevisible –aspecto éste último frente al cual, en todo caso, ya se transcribieron varios testimonios que reflejan que no existían mayores elementos para prever que el atentado terrorista tendría lugar-. Dentro de tales pruebas cumple destacar las siguientes:

- El testimonio técnico rendido el 1 de febrero de 2005 por el Jefe de la Unidad de Explosivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señor Jairo Arturo Parra Cuadrado ante el Juzgado 13 Civil del Circuito. En esta prueba, el testigo fue elocuente al explicar el mencionado grado de sofisticación que utilizaron los terroristas para "armar" el carro bomba empleado en el atentado terrorista y la consecuente dificultad que se presenta en la detección de los explosivos, lo que hacía que el hecho fuera realmente irresistible. En ese sentido indica que:

  > **"PREGUNTADO No. 1:** Indíquele al Despacho cuál es su experiencia en el desarrollo de la labores de antiexplosivos o investigación de antiexplosivos? **CONTESTO**: Desde el año 85 me desempeño como técnico en antiexplosivos y son 19 años ejerciendo como técnico en desactivación y pos-investigación. **PREGUNTADO No. 2:** Dígale al Despacho si usted participó de las labores de pos-investigación que se llevaron a cabo con ocasión del atentado perpetrado en el CLUB EL NOGAL DE BOGOTA, el día 7 de febrero de 2003? **CONTESTO:** Sí, participamos como auxiliadores o colaboradores al grupo de explosivos del CTI, y a la fiscal que conoció el caso y nuestra labor fue tratar de desarrollar búsquedas de evidencias, fue por espacio más o menos de cinco días, y todo lo que se halló en ese lugar para tratar de identificar el tipo de artefacto, ubicación del mismo, y posibles autores, todo le fue entregado al CTI que fue quien continuó la investigación, y esa fue nuestra función de colaboración, pero no continuamos con la investigación (...). **PREGUNTADO No. 4:** Indíquele al Despacho en relación con el atentado en mención, qué tipo de información llegó a su conocimiento acerca de la modalidad del atentado, cantidad de explosivo utilizado u otros factores relacionados con él? **CONTESTO:** En la pos-investigación que se realizó se logró determinar que se trataba de un vehículo RENAULT MEGANE, en este momento no recuerdo bien el color, creo que rojo, ya que muchas de las partes del miso fueron encontradas esparcidas, y que posteriormente de haber escogido muchas de ellas, se llegó a ese tipo de conclusión, en cuanto a la cantidad de explosivo y sistema utilizado en el momento no pudimos determinarlo porque no teníamos los informes de laboratorio que nos indicaran los resultados del mismo, y así haciendo un cálculo de los daños podíamos llegar a calcular que cantidad aproximada se utilizó, se que el CTI continuó con la investigación y lograron obtener algunas trazas de explosivos, y creo que ellos determinaron la cantidad que se utilizó. PREGUNTADO No. 5: Indíquele al Despacho si de acuerdo con su experiencia como técnico anti-explosivos un vehículo RENAULT MEGANE cargado con 20 arrobas del explosivo ANFO presentaría alguna alteración física detectables a simple vista, cuando esta siendo ocupado por dos personas de talla normal. **CONTESTO: Si el vehículo presenta algunas caletas ubicadas en puntos estratégicos tales como espaldar, tableros de las puertas, espacio del mamparo contra incendios del vehículo, o sea, el espacio que hay entre el motor y la cabina del vehículo, no presentaría ningún tipo de anormalidad ya que tuvimos la oportunidad de atender un caso en el barrio SUBA donde se encontró un vehículo de similares características y a este le habían hecho una caleta en el espaldar de la silla trasera, que si no era analizada cuidadosamente no era de fácil detección. PREGUNTADO No. 6:** Al hacer referencia a alteración física en la pregunta anterior, me refería al hecho de que un vehículo de las condiciones descritas, cargado con 20 arrobas de explosivos, aun en las condiciones descritas por usted, no esta más cerca del piso que un vehículo que no contenga la carga en mención. **CONTESTO: Como lo dije anteriormente cuando se ubica en los puntos que describí el peso queda muy bien repartido y efectivamente alcanza a presentar un acercamiento hacía el suelo, pero que lo descubriría una persona que esté entrenada y que tenga algo de malicia y conozca el nivel normal de este tipo de vehículos; en cuanto a peso excesivo si se hubiese colocado en un solo**

punto si tendría que presentar ese tipo de acercamiento del chasis al suelo que sería de fácil detección. PREGUNTADO No. 7: Indíquele al Despacho hasta que cantidad del explosivo denominado ANFO es posible ubicar en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE, en los sitios que usted hizo referencia en respuesta anterior? **CONTESTO:** La verdad pecaría si le diera una cantidad exacta, ya que personalmente no hemos hecho la prueba de cuanto podríamos nosotros encaletar en estos sitios, pero imagino que estos si tuvieron esa cantidad a al cual el Doctor hace referencia, que supongo es la cantidad deben calcularlos expertos del CTI quienes fueron los que continuaron con la investigación, la debieron de haber tomado conociendo el dictamen del laboratorio, los elementos de prueba encontrados en el lugar de la explosión y cálculos efectuados por ellos mismos en un vehículo de similares características. **PREGUNTADO No. 8**: De acuerdo con su experiencia es posible ubicar veinte arrobas del explosivo conocido como ANFO en caletas elaboradas en un vehículo RENAULT MEGANE en los sitios en que usted indico en respuesta anterior sin que ello sea detectable a simple vista? **CONTESTO: Si es posible; en alguna ocasión, y estoy hablando de conocimiento propio, tuvimos un caso en donde un RENAULT CUATRO ubicaron en la parte de atrás y el cual fue desactivo afortunadamente 200 kilos de BENCLO, y realmente no es un espacio muy grande el que tiene un RENAULT CUATRO, por lo cual pienso que si es posible,** no se como tendrían ese carro ese día, porque en algunas modalidades que nosotros también hemos encontrado es que también acostumbran a rellenar las sillas, pero en el caso que hace referencia el Doctor que es el atentado al NOGAL no le podría yo afirmar que ese vehículo tenía esa cantidad ya que nosotros no continuamos con la investigación, pero si lo puede decir el grupo de explosivos del CTI quienes fueron los que culminaron la investigación. (...). En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien manifiesta: **PREGUNTADO No. 1:** Señor PARRA: en consideración a su experiencia y conocimiento técnico en materia de explosivo, podría usted ilustrar al Juzgado sobre los progresos en conocimientos, estrategia, y nivel tecnología de la FARC y ELN comparándolo con los inicios de estos grupos al margen de la ley en esa materia? **CONTESTO**: **Cuando yo me inicie en el campo de los explosivos en el año 85, teníamos bombas relativamente sencillas, las cuales eran ubicadas en puntos donde pudiesen hacer daño a organismos gubernamentales, y muchas de ellas eran bombas activadas mediante sistema in eléctrico, para hacer claridad al despacho me refiero a explosivo, una cápsula detonante in eléctrica, un pedazo de mecha lenta o de seguridad, y lo único que tenían que hacer era aplicar una chispa o fuego y dependiendo del largo de la mecha daban tiempo para retirase y colocarse en un punto de seguridad mientras la detonación, eran sistemas que no necesitaban de ningún tipo de tecnología, o utilizaban un reloj despertador bastante grande que en muchas ocasiones lográbamos nosotros desactivar debido a que le colocaban mucho tiempo; hoy en día utilizan ingenieros para realizar sus propias tarjetas para la activación de artefactos explosivos, para lo cual nos hemos visto obligados a capacitarnos mucho más para poder sobrepasar ese nivel y así lograr neutralizar ese tipo de elementos. PREGUNTADO No. 2:** Dada su participación en la investigación que se desarrollo por parte del DAS con posterioridad a la explosión del carro bomba en el club EL NOGAL, infórmele al Juzgado cuál fue el resultado que se obtuvo con ocasión de las pesquisas y delaciones de las personas capturadas con ocasión del mismo? **CONTESTO:** Lo que nosotros normalmente hacemos en estos casos es la parte técnica, la parte investigativa la realiza el grupo de seguridad publica y antiterrorismo; pero por lo que se adelantaba ese día se decía que era el mismo sitio donde se había preparado el carro para el atentado de EL NOGAL, y me estoy refiriendo al allanamiento efectuado en el barrio SUBA, donde se encontró un RENAUL MEGANE **con una caleta en la parte del espaldar de la silla trasera con un forro que lo hacía pasar como si fuera parte de la silla, al igual que el alojamiento normal donde va la batería había sido retirada de ahí y dejado ese espacio vacío que es a lo que yo hacía referencia cuando hablaba del mamparo contra incendios, y la batería que iba alojada ahí ubicada a un costado en la parte frontal del vehículo**, en cuanto a la investigación en si no la tenemos. **PREGUNTADO No. 3:** Quisiera preguntarle señor PARRA sobre qué influencia tienen los elementos de sorpresa e indefensión, entre otros, en el objetivo que

persiguen los delincuentes que pretenden colocar un carro bomba. **CONTESTO:** en cuanto a mi concepto personal y tratándose de un club donde imagino que existía un monitoreo de la entrada de los vehículos, donde imagino existían unos guías caninos en detección de explosivos, y donde si la persona que va a ingresar este tipo de elemento es concordial, efectivamente se le hace una revisión pero con la ventaja de que al ser socio, esa revisión no se tan exhaustiva y si el elemento o artefacto esta bien camuflado puede pasar desapercibido. **PREGUNTADO No. 4:** Qué grado de éxito tienen este tipo de acciones criminales a nivel nacional según la experiencia que usted ha tenido? **CONTESTO**: Yo pienso que un alto porcentaje por lo que anteriormente describí (...) **PREGUNTADO No. 6:** Dentro de la experiencia que usted ha tenido en el DAS en materia de atentados con explosivos, informe al Juzgado si conoce eventos de esta naturaleza perpetrados contra clubes sociales. **CONTESTO: <u>Contra clubes sociales no</u>**, o no recuerdo en este momento (...)" (resaltados nuestros).

- La declaración rendida el 7 de abril de 2003 por Alipio Murillo en el proceso penal adelantado con ocasión del atentado terrorista contra el Club el Nogal (Fl. 616-621 Exp. 2005-076), quien resultó involucrado en los hechos y el juicio criminal, cobra especial significación dado que el nombrado señor Murillo era propietario del taller en donde se armó el carro bomba. En su declaración, él narra cómo los terroristas utilizan ajo machacado mezclado con aceite para motores para esparcirlo y mezclarlo con el explosivo que fue encaletado en el carro bomba con el objeto de desviar el olfato de los caninos especialmente entrenados para esos efectos.

  "**PREGUNTADO:** Díganos si usted tuvo conocimiento o se pudo enterar que en su taller se hay preparado el carro Megane rojo que detonó en el Club Nogal. **CONTESTO:** Nunca. Si me hubiera enterado que iban a hacer eso de alguna manera lo hubiera informado a la policía. **PREGUNTADO:** Díganos si durante el tiempo que usted tuvo el taller en alguna oportunidad trabajó o manipuló pintura de color rojo, en caso afirmativo para que? **CONTESTO: <u>si claro</u>**, pintura roja se utilizó en el taller para arreglar una parte de un bus de servicio público, le arreglé el filtro de aire y lo pinté, no se de quien sería el bus, pero lo que si recuerdo es que cuando yo llegue de viajar que regresé al taller el 30 de diciembre había un tarrito con pintura roja, un rojo medio, ni muy oscuro ni muy claro, era un tarro de un cuarto, estaba un poquito mas de la mitad de lleno, **<u>otra de las cosas que encontré ajo molido con aceite</u>** y habían dos relojes pequeños de esos como despertadores, había uno que las dos manecillas estaban amarradas con un alambre de cobre muy finito y estaban paradas señalando las doce en punto, vi un poco de cosas, alambres, cintas, cables, esto me pareció muy raro y recogí todo lo bote a la basura, supongo que si el Megane estuvo allí en el taller le tuvieron que haber hecho solamente la caleta, porque me parece imposible que hubieran armado el carro incompleto con los explosivos desde diciembre para que después hubiera sido detonado en febrero. (...) **<u>PREGUNTADO: Usted nos ha dicho que encontró en su taller ajo molido con aceite, díganos si usted sabe o se enteró para que utilizan esta mezcla. CONTESTO: Se que esta mezcla de aja machacado con aceite se utiliza para despistar a los perros cuando hay droga o cuando hay explosivos, eso me lo confirmó HERMINSUL, cuando me lo encontré en la zona de distensión y me preguntó que si le había echado algo a la caleta de la chiva por dentro, yo le dije que no, él me dijo que machacara ajo con aceite o solo el sumo del ajo y le abriera unos dos huecos a la capota de la chiva y la impregnara con esto</u>**. [39] (Resaltados y subrayas nuestros)

- El conocimiento y experiencia de los terroristas sobre las condiciones especiales que se requerían para ejecutar su crimen sin que los explosivos fueran detectados por los caninos, quedó demostrado con el testimonio del

[39] Ampliación de la declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación por Alipio Murillo (radicado 59.535), rendida el (24) de abril del dos mil tres (2003). Obra en el expediente copia auténtica de la misma (folio 108 a 112 Cuaderno 1 y 341 a 346 del Cuaderno 1A Exp. 2003-712).

aludido señor Murillo y fue corroborado con la respuesta del 11 de mayo de 2005 de la Fiscalía General de la Nación al oficio 0315 del Juzgado 13 Civil del Circuito, como sigue:

> "En el numeral 2, solicita complementar la respuesta a la letra B, "que contando con un Buen entrenamiento del equipo cinofilo (guía y peno) en condiciones normales tiene que ser detectada a que la cantidad de sustancia es muy significativa", en el sentido de explicar:
>
> "A: ¿Que significa la expresión "condiciones normales". Esta expresión se utiliza para determinar las situaciones en que el equipo cinofilo puede operar normalmente, sin ser afectado por circunstancias como:
> **"- Que el vehículo no contenga ninguna sustancia que distorsione el olor del explosivo dificultándose su detección**.
> "- Que el canino esté en óptimas condiciones de entrenamiento y salud (moquillo).
> "- Que el canino este bien asociado para la detección de la clase de explosivo.
> "- Buena disposición y entendimiento por parte del guía.
> "- Periodo de trabajo del equipo.
> "- Método de registro del vehículo. (detallado o superficial) (...)". (*el destacado es nuestro*).

- En relación con la imprevisibilidad del hecho y, además, con la inexistencia de circunstancias anteriores que permitieran intuir la perpetración de un atentado terrorista –lo que también enerva cualquier imputación de negligencia-, es elocuente el informe rendido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fechado el 18 de diciembre de 2006 y remitido a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –incorporado al expediente del presente proceso en el folio 889 a 892 C1B Exp. 2005-176-. En dicho informe se indica que:

> "d) [En relación con] el original o copia auténtica de los informes o investigaciones que se hayan realizado con ocasión de la publicación del comunicado del 23 de diciembre de 2002, emitido por el estado mayor central de las FARC, y colgado en la página de internet (…) la subdirección de análisis en oficio DGIN.SANA.GIDR. No.274593, manifestó lo siguiente: 'Es de señalar que con referencia a este comunicado en particular, no se realizaron trabajos estratégicos debido a que al someterlo al proceso analítico de la información, los elementos de información obtenidos **no dejaron entrever posibles acciones terroristas que afecten el orden público, ya que son directrices de carácter general'.**
>
> (…)
>
> g) Informe si tenía conocimiento de la existencia de amenazas o indicios del atentado en contra del Club El Nogal de Bogotá, para los años 2002 a 2003. **El DAS no conoció por ningún medio sobre la existencia de amenazas o indicios del atentado en contra del Club El Nogal de Bogotá para los años 2002 a 2003**" (Fls.1006-1007 C1 2003-712).

- Finalmente, queremos llamar nuevamente la atención del Juzgado en el sentido de que los terroristas planearon cuidadosa la infiltración en el grupo humano que conforma el Club El Nogal, tal y como lo afirma la propia autoridad judicial en la Resolución de acusación de primera instancia proferida el 19 de julio de 2004 por la Fiscalía General de la Nación, confirmada posteriormente en segunda instancia (Cuadernos de copias remitidas por el Juzgado 8° Penal del Circuito).

> "10. Fue así como se dispuso para el designio criminal de toda la infraestructura financiera, logística especializada y de recurso humano, para cumplir con la actividad previa de crear una empresa "FACHADA" (INVERNAR—INVERNADEROS) por medio de la cual se lograra la infiltración (a través de la

compra de una acción corporativa) en el “OBJETIVO MILITAR” a atacar, aptos en el aprovisionamiento y la administración de recursos, tales como el transporte de dinero en efectivo, explosivos, acondicionamiento de vehículos con caletas, expertos en mecánica automotriz y apenas obvio con sofisticados conocimientos y adiestramiento en el manejo de explosivos; todo ello orquestado y dirigido por alias “OSCAR MONTERO” Ó “EL PAISA”, quien al ser aprobado el plan por el secretariado de las FARC, organizó el plan y lo supervisó a través de medios de comunicación como teléfonos satelitales y celulares.

“11. Otra inferencia extractable de la investigación, es que las FARC es amplia conocedora de la existencia en el mundo de un sistema invisible para financiar la logística de los actos terroristas (Hawala), conoce los espacios libres del sistema de prevención del lavado de activos en Colombia, de la misma manera que Mohammed Atta y Al Quaeda conocía los propios de los Estados Unidos. Este conocimiento le permitió a la citada organización ilegal, utilizar su sucio dinero para financiar el plan terrorista, de manera intangible para el sistema financiero Colombiano, evadiendo las luces rojas encendidas por la sospecha. Para su ejecución, los señores JHON FREDDY, OSWALDO, HERMINSUL y FERNANDO ARELLÁN, como pasos precisos para la ejecución del delito, conformaron a empresa “INVERNAR — INVERNADEROS”, con un capital social de $44’000.000.oo la cual fue debidamente registrada en Cámara del Comercio e incluso arrendaron y amoblaron un inmueble ubicado en la Avenida carrera 68 N°19-52, Of. 203, así como que suscribieron contrato para cumplir con su “FUNCIÓN SOCIAL” con la empresa FLORES ROSAMINA”, en Tabio (Cund.), por la suma de $56'768.315.oo; fachada que le permitió al primero de los nombrados, en calidad de representante legal de la empresa, comprar una acción en el Club El Nogal en septiembre de 2002, cinco meses antes de la explosión del coche — bomba (...), averiguación que no se pudo hacer ni prevenir sus consecuencias, porque el Club el Nogal no tenía la obligación legal de reportar a las autoridades la persona que adquirió de contado una acción por $40’000.000. Porque tampoco la empresa "AUTONAL" estaba en la obligación de referenciar a la misma persona que, bajo identidad y con documentación falsa, adquirió el Renault Megane usado para el atentado en dos contados de $19’000.000.oo en efectivo. El representante de ventas de este distribuidor de vehículos automotores OSCAR HERNANDO RODRÍGUEZ FONSECA, reconoció en esta investigación que ARELLÁN ZÚÑIGA y quien bajo otra identidad adquirió el Renault Megane Rojo donde se armó la bomba, son la misma persona.

- Otro aspecto que resulta de interés es que en el proceso se acreditó, además, que si el explosivo hubiera sido detectado en la portería del Club El Nogal por la que accedió el vehículo y, en consecuencia, detonado en dicho lugar, las consecuencias habrían sido aún peores. Al respecto son elocuentes las declaraciones de los ingenieros ALEJANDRO PEREZ SILVA y LUIS ENRIQUE GARCÍA REYES (Fl.316-319 C 1 Exp. 2003-712 y Fl. 321-325C 1 Exp. 2003-712), respectivamente:

  “PREGUNTADO SOBRE GENERALES DE LEY. CONTESTO: Es mi nombre ALEJANDRO PEREZ SILVA, me identifico con la C. C. No. 19.275.196 de Bogotá, tengo 49 años de edad, soy natural de Bogotá, casado, soy ingeniero civil, Magister Diseño en Ingeniería Civil, me dedico al cálculo y diseño de estructuras, trabajo con mi propia empresa PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA, resido en la Carrera 5 A No 108 A-55 Apartamento 404 de esta ciudad. PREGUNTADO. Conoce a la señora CATALINA ARANGO SALAZAR y a la menor CAMILA ARANGO ARANGO. En caso afirmativo diga como y cuando las conoció y que tipo de nexo tiene con las citadas. CONTESTO: No las conozco. PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO: Sí, si he tenido nexos con la CORPORACION CLUB EL NOGAL, desde el año 1989 con lo que entonces era la PROMOTORA CLUB EL NOGAL, fuimos contratados para la ejecución del cálculo y diseño de la estructura y sede del CLUB EL NOGAL, posteriormente, en año 2003 a raíz del atentado terrorista de febrero fuimos contactados para realizar los diseños que requería la estructura averiada. Cundo (sic) digo fuimos me refiero a mi empresa. Actualmente soy socio,

a raíz de un canje o arreglo que hicimos con ocasión de los diseños de la reparación, soy socio del club desde, aproximadamente, agosto de 2003. Se deja la constancia de que trata el numeral 2° del Art. 228 del C. de P.C., indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual CONTESTO: No conocí al señor JORGE ANDRÉS ARANGO. GÁRAVITO. La estructura, diseño de cimentación, columnas, vigas, entrepisos, diseño estructural, para efectos de realizar el diseño estructural, para ese entonces existía el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes Decreto 1400 do Junio 7 de 1984, el cual era de obligatorio cumplimiento para todos los diseños estructurales que se realizaran en el territorio nacional, desde luego el CLUB, mejor dicho la sede del CLUB, cumple con todos estos requisitos. Estos requisitos indican materiales a utilizar, dimensiones mínimas de columnas, vigas, entrepisos, espectro sísmico de diseño, detallado de la estructura, en fin, hicimos el trabajo siguiendo las normas del Código. Posteriormente durante la construcción del CLUB, asistimos a múltiples reuniones y comités durante la construcción del mismo con el objeto de aclarar dudas que se presentaron sobre los planos ejecutados por nosotros. (…)
PREGUNTADO. De acuerdo al diseño y estructuras de la construcción en la que se encontraba ubicado el CLUB EL NOGAL, para el momento de los trágicos acontecimientos del 7 de febrero de 2003, en su criterio, satisfacía las exigencias que hicieran previsible custodiar tanto la construcción como a los ocupantes que en cualquier momento se encontraran en sus instalaciones. CONTESTO: La estructura se diseño para cargas gravitacionales o verticales, para cargas provenientes de un sismo y para cargas de viento, empujes de tierras, pero no se diseño para un evento terrorista. En la actualidad, ningún código de construcciones a nivel mundial consagra hipótesis de carga provenientes de eventos terroristas o explosivos. (…)
Se concede el uso de la palabra a la apoderada judicial de la demandada, concedida manifestó: PREGUNTADO POR LA MISMA: Informe al despacho de manera breve pero completa su hoja de vida profesional. CONTESTO: Soy ingeniero civil egresado de la universidad de los Andes en el año 1980 y Magíster en Diseño de ingeniería Civil de la misma universidad del año 1985 desde el año 1977, cuando cursaba mis estudios de ingeniería he estado dedicado al diseño de estructuras de concreto y acero parta edificios y puentes, desde el año 1977 hasta comienzos de 1984 trabajé para JAIME PABON CARRIÑO y COMPÁÑIA LIMITADA y desde 1984 a la fecha como socio de la firma PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA. Durante toda mi actividad profesional a lo largo de casi 30 años he estado dedicado a la consultoría de estructuras. PRFGUNTADO: En su declaración usted informa al despacho cual fue su participación como profesional experto en la ingeniería en el proceso de diseño estructural del CLUB EL NOGAL y mencionó brevemente su participación en el proceso de reconstrucción del mismo después de ocurrido el atentado terrorista el 7 de febrero de 2003. Podría precisarle al despacho con todo detalle su intervención en su calidad de ingeniero una vez ocurrido el atentado terrorista. CONTESTO: Desde el mismo día del atentado alrededor de las diez de la noche, fui contactado por las Directivas del CLUB con el objeto de inspeccionar de una manera breve y segura el estado de la estructura con posterioridad a la explosión. Hacía las diez y treinta de la noche llegue a las instalaciones me desplace con un equipo de bomberos y socorristas por la sede y rendí un informe en forma verbal en el cual establecía que la estructura del Club no estaba en peligro de colapso, pero que los daños ocasionados por la explosión habían roto muchísimas vigas, viguetas, placas de entrepiso y en general elementos no estructurales que podrían desprenderse en cualquier momento y causar daños a personas que estuvieran dentro de la sede en ese momento, por lo tanto mi recomendación fue de autorizar únicamente el ingreso de los socorristas al rescate de posibles heridos, teniendo en cuenta que no se disponía de luz natural ni luz eléctrica en ese momento. Posteriormente hicimos un inventario pormenorizado de los daños, una revisión detallada, unos diseños para efectuar la reparación de la estructura y un acompañamiento permanente durante la reconstrucción del Club. PREGUNTADO: En una respuesta anterior a una pregunta efectuada por el despacho, usted aludido que el área afectada en estructura del edificio era de 6000 metros cuadrado. Podría precisarle al despacho cuál era el área total de la estructura del edificio. CONTESTO: El edificio sede el CLUB consta aproximadamente de 34.000 metros cuadrados construidos. (…)

PREGUNTADO: Teniendo en cuanta (sic) la referencia a la que se encontraba el artefacto explosivo, es de público conocimiento que el carro bomba ingreso a las instalaciones del CLUB EL NOGAL, en su condición de experto infórmenos cuales habrían sido las consecuencias en pérdidas tanto materiales como de vidas humanas si el carro bomba no hubiera explotado al interior del parqueadero sino en la portería de acceso de vehículos ubicado en la carrera 5. **CONTESTO: Daños materiales y pérdidas de vidas humanas hubiera sido de una magnitud mayor, debido a la vecindad de los cuartos técnicos de la portería de la carrera 5 donde entro otros se encuentran ubicados los depósitos de ACPM. las calderas y bielas las habitaciones hoteleras que tiene el CLUB.** PREGUNTADO: Con base en la información a la que usted tuvo acceso personalmente momentos después de sucedido el atentado terrorista y durante los días subsiguientes al mismo en su intervención como ingeniero estructural del Club, podría informarle al Juzgado aproximadamente cuanto tiempo transcurrió entre el momento en que el carro bomba traspaso la portería de ingreso al Club y la explosión del vehículo. CONTESTO. **Creo que no fueron más de cinco minutos, entra por la carrera quinta, se parquea en el nivel cuarto, no tuvo que tomar rampas hacía niveles interiores, carreteos de cincuenta metros, supe eso por el sitio donde estaba el carro, lo del tiempo se sabe por los, registros de ingreso del carro y la explosión y la misma crónica periodística donde se relata que el personaje no había abandonado el parqueadero. (…)**" (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En cuanto al testimonio del señor García Reyes:

"PREGUNTADO SOBRE GENERALES DE LEY CONTESTO: Es mi nombre LUIS ENRIQUE GARCIA REYES, me identificó con la C.C. No. 19.065.520 de Bogotá D.C, tengo 57 años de edad, soy natural de Bogotá, soy casado, **soy ingeniero civil de la universidad de los andes y tengo un master in science de la universidad de Illinois de Estados Unidos, ejerzo mi profesión**, resido en la Carrera 1ª NO. 75-14 Apartamento 201 de Bogotá. PREGUNTADO: Conoce a la Señora CATALINA ARANGO SALAZAR y a la menor CAMILA ARANGO ARANGO. En caso afirmativo diga como y cuando las conoció y que tipo de nexo tiene con las citadas. CONTESTO: No. PREGUNTADO: Tiene algún nexo con la CORPORACION CLUB EL NOGAL. En caso afirmativo diga cuál y desde cuando. CONTESTO. Ninguno, fuímos los ingenieros diseñadores de la estructura del Club en su construcción original y realizamos los diseños de reconstrucción después del evento de febrero 7 de 2003. Soy socio de la firma PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA, firma que hizo estos trabajos. Tengo un socio creo que lo conocieron ayer, de resto son del orden de 60 empleados, quienes hacen diferentes labores de esta complejidad bajo la dirección de los socios, a la larga el que firma es uno. Se deja constancia de que se trata el numeral 2º del Art. 228 del C. de P.C. indicándole sucintamente a la deponente los hechos sobre los cuales debe versar su declaración, solicitándole haga un relato claro y detallado de lo que le consta sobre el particular, a lo cual CONTESTO: No conocí al señor JORGE ANDRÉS ARANGO GARAVITO. El inicio de la participación nuestra, hablo de la firma PROYECTOS Y DISEÑOS LIMITADA. P Y D LTDA., en el proyecto del CLUB EL NOGAL, consistió en la realización de los diseños y planos estructurales de la edificación, lo que recurso es que iniciamos en el año ochenta y ocho y terminamos en el año noventa y uno. El diseño de la estructura se realizó cumpliendo los requisitos del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes Decreto 1400 de Junio 7 de 1984, el cuál era obligatorio en todo el territorio nacional en el momento del diseño inicial. La estructura es una estructura de concreto reforzado, está dividida en dos edificios, uno sobre la carrera séptima, que tiene once pisos y un sótano y una sobre la carrera quinta que tienen seis pisos y un sótano, las dos edificaciones están separadas con una junta (es un espacio de unos centímetros que separan una edificación de otra), la de la carrera séptima con respecto a la de la carrera quinta tienen una diferencia de quince metros y esta es la razón por la cual el primero piso de la edificación de la carrera quinta corresponde al cuarto piso de la edificación de la carrera séptima, por lo tanto todos los pisos inferiores del edificio de la carrera séptima están rodeados por un muro de contención que se encarga de sostener el empuje de la tierra de los lotes vecinos y del mismo edificio de la carrera quinta. Volviendo a los requisitos de diseño, es importante anotar que el edificio fue diseñado

sismorresistente para los requisitos del Decreto 1400 del ochenta y cuatro para la ciudad de Bogotá, lo cual requería diseñarlo para unas fuerzas horizontales causadas por el mismo del orden del veinte por ciento del peso de la edificación. El diseño sismorresistente, además, de dar resistencia ante estas fuerzas exige un detallado especial de la estructura que le permite resistir fuerzas en algunos casos mayores que las de diseño y la razón de esto es la incertidumbre que se tiene sobre la magnitud de los eventos sísmicos que realmente ocurren, **esto mismo tuvo consecuencias importantes en el comportamiento estructural observado a raíz del evento del 7 de febrero del 2003.** (…)hay informes elaborados por está firma que da recuento de todas las actividades realizadas durante la construcción de la estructura, incluyendo registro de los ensayos de control de calidad de los materiales utilizados, avance semanal de la construcción e inclusive un registro fotográfico de este avance, ellos producían un informe por cada mes de la construcción, esta misma firma, interplan Ltda., recibió de los constructores la estructura a satisfacción respecto al cumplimiento de los planos y especificaciones elaborados por PYD LTDA. A raíz del incidente del 7 febrero del 2003, fuímos llamados por el CLUB EL NOGAL, para hacer una evaluación del estado de la estructura y los diseños de la reparación, para llevarla a un estado de seguridad equivalente al que tenía antes del incidente. En ese momento no estaba en el País, pero presumo que fue ese día. Para el efecto se desplazó un equipo de ingenieros de la oficina que realizó un levantamiento detallado de las afectaciones causadas por la explosión por medio del cual se logro hacer una evaluación que esto tuvo en la seguridad de la estructura y que consistió en la base de los diseños de la reconstrucción. (…)
PREGUNTADO: En su condición de experto en la materia, informe al Juzgado cuales habrían sido las consecuencias en perdidas de vidas humanas, lesiones personales y daños a la edificación CLUB EL NOGAL y a los edificios vecinos en hipótesis en que carro bomba no hubiera explota en el interior del parqueadero del Club, sino en la portería de acceso de vehículos ubicada en la carrera quinta del dicha edificación **CONTESTO: la honda explosiva del atentado afecto hacía los pisos por encima y por debajo de donde estuvo ubicada. La rampa de acceso de vehículos de la carrera quinta del CLUB EL NOAL, esta sobre el terreno, lo cual en el caso de una explosión hubiera hecho que le energía se extendiera con mayor intensidad en todas las otras direcciones, en la vecindad de la portería de acceso vehicular de la carrera quinta como estaba al momento de la explosión es aledaña al sótano de servicios del edificio de la carrera quinta donde esta localizado a muy pocos metros el tanque de combustible de la caldera, separado únicamente por un muro muy delgado de mampostería, el efecto combinado de la explosión con el combustible aledaño es probable que hubiera producido mayor número de víctimas por un efecto de incendio colateral a la explosión alimentado por el combustible de la caldera.”** (los destacados no son del texto).

Así las cosas, si en gracia de discusión se admitiese el supuesto hipotético, contrario a la evidencia probatoria existente en el expediente y a la cual nos hemos referido precedentemente, de que los vigilantes encargados del ingreso vehicular al Club hubieran podido detectar en la portería respectiva los explosivos escondidos en el carro bomba, no es dudoso que el atentado terrorista tampoco habría podido evitarse y muy posiblemente habría causado aún más destrozos y daños en las personas y cosas, dada la cercanía del depósito de combustible y la caldera existente en las instalaciones del club en ese sitio de acceso, y a que no transcurrieron más de cinco minutos desde el ingreso del vehículo al Club y la explosión del mismo que fue accionada por control remoto (como la propia parte demandante y sus apoderados lo afirman en la demanda), mínimo lapso que no permitió siquiera que los autores materiales del ilícito escaparan con vida. Con esto queda plenamente demostrada la irresistibilidad del hecho.

De todo lo antes expuesto resultan evidentes las siguientes conclusiones:

- Que no existe un nexo causal entre el daño y la conducta observada por el Club, por lo cual puede afirmarse que éste no infirió daños a los

demandantes, en los términos y para los efectos del artículo 2341 del Código Civil.

- Que el perjuicio causado al demandante y a las demás personas que se encontraban en las instalaciones del Club no le es imputable a mi mandante sino a un tercero, por lo que respecto del Club el actuar de los terroristas, dada su irresistibilidad e imprevisibilidad, constituyó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, también en los términos y para los efectos de los artículos 63 último inciso, 64 y 1604 del Código Civil colombiano.

5.4. La causa extraña ya fue reconocida judicialmente.

Aunque lo indicado en las líneas precedentes es más que suficiente para revocar la decisión de primera instancia, no debe perderse de vista que la causa extraña ya ha sido reconocida judicialmente. En efecto, el asunto fue resuelto de forma definitiva por el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, en la que se reconoció que el atentado obedeció a un hecho exclusivo de un tercero:

> *"El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible.*
>
> *"El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración.*
>
> *"Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios. Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general*. …
>
> *"No se allegaron pruebas -conforme a lo probado- que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, hoy pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios.*
>
> *"El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones de orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su*

capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo"[40].

Lo anterior confirma que en el presente caso nos encontramos en presencia de una causa extraña que rompe cualquier nexo de causalidad en la inadecuada imputación de responsabilidad que se le ha efectuado al Club El Nogal. Si el Estado no es responsable por los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003, mucho menos puede considerarse que el Club el Nogal, como particular que es, tuviera la obligación de repeler la agresión y evitar sus consecuencias destructivas y de intencional daño cuando el mismo Estado no se encontraba en el deber ni en la capacidad de prevenirlo o reprimirlo.

Según se expresó previamente, no puede equipararse el deber constitucional de seguridad en cabeza del Estado, quien detenta el monopolio del ejercicio de la fuerza y la obligación de proteger a la ciudadanía con el deber propio de una entidad de derecho privado destinada a labores sociales y deportivas. Resulta a todas luces desproporcionado endilgar a mi representada la obligación de anticipar y reprimir cualquier ataque terrorista que pudiese presentarse, máxime considerando que dicha pretensión no es exigible ni al mismo Estado, como lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia del 30 de marzo de 2022[41].

Es más: en reciente providencia la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el atentado terrorista cometido el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club El Nogal constituía un crimen de guerra, todo lo cual refuerza que el hecho del tercero se configura como causa extraña para el análisis del caso que nos ocupa. Al respecto, la JEP manifestó lo siguiente:

"41. (…) la explosión ocurrida el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá fue planeada y realizada por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Es así como luego de examinar los elementos de juicio vertidos en el proceso, el juzgador concluyó que "está demostrado que el secretariado de las FARC (sic) [ordenó] el atentado contra el club El nogal, conducta que fue planeada y dirigida por el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', quien era el enlace directo con la dirigencia del grupo alzado en armas". Conforme a esta conclusión el juzgador estableció que "los miembros del secretariado de las FARC (sic) tuvieron conocimiento y voluntad de los resultados típicos que se ocasionaron […] pues contaban a su disposición con la columna móvil 'Teófilo Forero' la cual había preparado hombres con conocimiento en explosivos y con la firme convicción de realizar atentados terroristas. …

"42. Conforme a lo anterior, es posible para este despacho advertir que el conflicto armado fue la causa directa o indirecta de esta conducta punible ocurrida el 7 de febrero de 2003, que este contexto influyó en los autores, en su decisión de cometerla, en la capacidad para hacer el atentado y en la selección del objetivo…

"44. De acuerdo con el literal a del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no podrán ser objeto de amnistía, entre otros, aquellas conductas consideradas graves crímenes de guerra. Por ello, en este caso se pasará a realizar un examen de la conducta en la que participaron HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a la luz de los principios del Derecho

[40] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque.

[41] Téngase en cuenta, adicionalmente, que los señores Julio Martín Otálora Cano, Luz Constanza Prado Restovich, Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado participaron en el referido proceso judicial fallado por el Consejo de Estado, cuestión que refuerza el hecho consistente en que el atentado terrorista perpetrado el 7 de febrero de 2003 tiene su causa en el hecho del tercero, razón por la cual no resulta jurídicamente viable, como tampoco aceptable, desplazar la responsabilidad en cabeza del Club El Nogal por estos hechos.

Internacional Humanitario (DIH) con el propósito de verificar si es viable continuar con el trámite de amnistía o es necesario declarar su no amnistiabilidad, al menos de forma preliminar. El DIH es el marco jurídico que regula la conducta de las partes que participan en hostilidades y la protección a las personas y bienes que no participan en ese escenario.

"45. En primer lugar, se analizarán los principios de distinción y precaución en el caso concreto y, en segundo lugar, se hará un examen del ataque en contra del Club el Nogal a la luz de la prohibición de ataques indiscriminados por el Estatuto de Roma y las normas del DIH compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"46. En lo que refiere al primer asunto, se tiene en cuenta que el principio de distinción constituye un fundamento del DIH. A este principio se refieren las primeras normas de DIH compiladas por el CICR, así la Norma 1 indica que "[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados".

"47. Este principio se ha consagrado en normas de los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo Adicional II 1977 a estos convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13 reglamenta la protección general de la población civil respecto de operaciones militares y establece "[n]o serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".

"48. Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8.2.e).i) consagra como crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales el "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.". En ese orden, los ataques permitidos en el marco del DIH deben dirigirse exclusivamente en contra de objetivos militares; así lo consagra la Norma 7 del DIH del CICR. Al respecto, la Norma 8 del DIH indica que los bienes que pueden ser considerados objetivos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida".

"49. En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil. …

"61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad ***por constituir graves crímenes de guerra…"***[42] *(se destaca).*

[42] Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.

En fin, como se verá también en el siguiente reparo, existen múltiples decisiones judiciales que, con razón, han descartado la responsabilidad en cabeza del Club El Nogal, todo lo cual se ve reforzado con las recientes providencias emitidas por el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), citadas precedentemente.

Sobre el particular, me permito transcribir a continuación lo señalado por el Dr. Jorge Santos Ballesteros en su concepto jurídico, en relación con esta temática:

> *"5.11. En este asunto, es ineludible y debe tenerse en cuenta, la sentencia del Consejo de Estado, de 30 de marzo de 2022, de la Sección Tercera Subsección C, que al decidir una acción de reparación directa conta la Nación Ministerio de Defensa, por el ataque terrorista contra el Club El Nogal del 7 de febrero de 2002, absolvió a las demandadas, por encontrar plenamente acreditado el hecho del tercero, las FARC, sin dubitación alguna; en efecto, a juicio de esa Alta Corporación de Justicia, 'El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible. El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración. Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios. Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general.'*
>
> *"También, según esta sentencia, 'No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios. El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo'*
>
> *"5.12. Igualmente, para efectos de determinar la causa del hecho dañoso en cuestión, hay que considerar igualmente que la Sala de Amnistía e Indulto, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en sentencia de 24 de agosto de 2023, considera*

que, 'En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal37 de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil.'. Así mismo, determina esta sentencia que , 'Además de las graves violaciones a los principios de distinción y precaución del DIH, el ataque perpetrado en el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 fue parte de una política de las antiguas FARC-EP, según lo estableció la JPO. Al respecto, se debe señalar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional castiga los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes'. En este instrumento internacional, se entiende por graves violaciones al artículo 3 común a los cuatro Convenios de ginebra de 1949, entre otros, "[l]os atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura"; asimismo, se castigan como "otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional", (art. 8.e.i) "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades'

"5.13. De acuerdo con lo expuesto, entonces, no puede ponerse en duda que, el ataque terrorista contra el Club El Nogal, para todos los efectos, debe considerarse como hecho de un tercero, perpetrado por las FARC, y no puede ser desconocido por ninguna jurisdicción, pues de hacerse rompería con la preceptiva, entre otros, de la obligatoriedad de respetar el precedente judicial, consagrado en la Constitución Política, y respecto del cual, vale decir, que la Corte Constitucional lo ha definido en reiteradas oportunidades, como "la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo" .

"Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares. Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.'[43]"

6. <u>SEXTO REPARO</u>: DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTES JUDICIALES.

Rememórese que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado sobre un caso relacionado con el atentado terrorista del que fue víctima el Club El Nogal, concluyendo que mi mandante no era responsable frente a tales

[43] Sentencia U- 354 de 25 de mayo de 2017.

hechos. Es más, el Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, reconoció que el atentado obedeció a un hecho exclusivo de un tercero y que no podía imputársele responsabilidad al Estado por dicho hecho. Si ello es así, mucho menos puede considerarse que el Club el Nogal, como particular que es, tuviera la obligación de repeler la agresión y evitar sus consecuencias destructivas y de intencional daño cuando el mismo Estado no se encontraba en el deber ni en la capacidad de prevenirlo o reprimirlo. Al respecto también podrá tenerse en cuenta lo indicado por el Dr. Jorge Santos Ballesteros en el concepto que se aporta como parte de la presente sustentación y que fue citado en el reparo inmediatamente anterior, cuya cita empleada precedentemente debe entenderse también incorporada bajo este reparo.

Debe señalarse que la Corporación Club el Nogal interpuso acción de tutela contra la sentencia SC4427 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia del 29 de agosto de 2014 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, la cual fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y se encuentra pendiente de decisión.

Dicho sea con todo respeto y comedimiento, la referida sentencia SC4427 de 2020 tiene un enfoque abiertamente equivocado, incurriendo así en i) desconocimiento del precedente horizontal y vertical de la jurisprudencia civil ordinaria sobre la materia; ii) defecto sustantivo y iii) defecto fáctico.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que ya varias sentencias han coincido en cuanto a la absoluta inexistencia de responsabilidad de la Corporación Club El Nogal por los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003. Ciertamente, en otras demandas impetradas por esta misma circunstancia, los jueces de primera instancia e incluso el Tribunal Superior de Bogotá, han coincidido al concluir que la actuación de mi representada frente a los mencionados hechos, en modo alguno fue constitutiva de negligencia. También han señalado que no existe prueba de la relación causal, lo que enerva cualquier pretensión de responsabilidad.

- Proceso de Leonor Cruz de Caicedo vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2005-281. Tribunal Superior de distrito Judicial de Bogotá Sala Civil MP. Germán Valenzuela Valbuena.

El Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito, determinando que por más que los atentados del 7 de febrero de 2003 constituían una causa extraña -con todas las implicaciones que esto conlleva-, no se vislumbra en el proceso negligencia alguna por parte del Club. En este sentido se pronunció en los siguientes términos:

> "En cuanto al segundo de los presupuestos (de la responsabilidad), debe advertirse que en el presente juicio no es posible establecer la existencia de una conducta negligente atribuible al Club en los precisos términos indicados por la parte actora en su demanda, pues no se acreditó que la muerte de Cesar Augusto Caicedo Cruz fuera consecuencia de no haberse implementado por el Club las medidas necesarias para proteger a 'los socios e invitados' de cualquier situación que amenazara su integridad personal. **Por el contrario, debe decirse que, en los términos del art. 1° de la ley 95 de 1890, los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003 configuraron una situación imprevista que de manera alguna era posible de resistir, lo que en efecto constituye una causa extraña, sustentada en 'fuerza mayor o caso fortuito', que le permite al Club el Nogal exonerarse de la responsabilidad que se le quiso atribuir**" (se destaca).

- Proceso de Álvaro Ruiz León y otros vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2004-643. Tribunal Superior de distrito Judicial de Bogotá Sala Civil MP. Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano.

En este caso, el Tribunal Superior de Bogotá estableció que dentro del respectivo proceso no obra prueba alguna de negligencia por parte del Club El Nogal y, por el contrario, se evidencian una serie de medidas más que óptimas y eficientes para el mantenimiento de la seguridad en las instalaciones de mi representada, de sus socios e invitados. Dijo el Tribunal:

> "Luce diamantino de lo expuesto, que no se evidencia negligencia de aquellas que constituya el elemento culpa como quiera que no se probó que el sistema de seguridad del Club El Nogal fuese inferior al que debe prestar no se omitió el deber de cuidado exigido al momento de inspeccionar el vehículo. De tal manera, no es posible predicar responsabilidad del agente que aún ajeno a la causación del daño, omite actuar teniendo la obligación legal o contractual de hacerlo, pues como se demostró si se contaban con los elementos necesarios para la seguridad de sus socios y sus invitados"

- Proceso de Leonor Cruz de Caicedo vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2005-281. Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.

El Juzgado 19 Civil del Circuito, por su parte, exoneró totalmente de responsabilidad al Club luego de hacer un análisis cuidadoso de todo el acervo probatorio, de donde concluye el diligente actuar de la demandada, así como, la ausencia de prueba frente a la supuesta negligencia que en las respectivas demandas se le pretendía endilgar. Dice la sentencia:

> "(…) encuentra el Despacho que el demandante, en absoluto, pudo acreditar su reclamo, esto es, no logró probar los supuestos hechos invocados como fundamento de las pretensiones, así como tampoco, uno de los presupuestos de la acción –la culpa del demandado-…
>
> "En lo que concierne a la presunta falla de El Club El Nogal, para las vísperas de la explosión, encuentra el despacho que le competía al extremo demandante demostrar los supuestos de hecho en que fundaron sus pretensiones, es decir, les incumbía acreditar, a través de cualquier medio probatorio idóneo para atribuirle culpa a la Corporación demandada, por el atentado terrorista que aconteció en sus instalaciones, circunstancias que no se reconocieron por ninguno de los medios probatorios establecidos."
>
> Y posteriormente resalta: "A guisa de antecedente, debe advertirse que el referido acto terrorista responde a las condiciones de ser imprevisto e irresistible, porque el acontecimiento no era susceptible de ser humanamente previsto".

- Proceso de Rodrigo Márquez Tejado vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2005-094. Juez 20 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá.

Este despacho estableció que no hay vestigio de culpa por parte de El Nogal, estableciendo a su vez que:

> "En cuanto al segundo de los elementos atrás señalados, o sea, el elemento de culpabilidad o dolo, de que se inviste la conducta desplegada en la producción del daño, puede señalarse que, si bien es cierto la seguridad estaba a cargo de la

pluricitada entidad, no por ello se le puede endilgar culpa alguna frente al acto terrorista perpetrado por las FARC, más aun cuando conforme a la documental adosada aparece el contrato de prestación de servicios con la compañía de seguridad ATEMPI LTDA, igualmente con la sociedad CANINOS PROFESIONALES LTDA, la que contaba con perros antiexplosivos, esto es, la administración obraba diligentemente frente a tal aspecto, contrario a lo señalado por los actores".

- Proceso de Mónica Cecilia Echeverry vs. Corporación Club El Nogal. Radicado 2006-402. Juez 1 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá.

En esta oportunidad, el despacho judicial también absolvió de responsabilidad al Club El Nogal e indicó lo siguiente:

"4.4. Conforme con lo anterior, es evidente que la parte actora no logró demostrar la culpa que enrostra a la demandada en los términos expuestos en la demanda, mucho menos, que el daño que aduce se le causó haya sido como consecuencia de un actuar negligente por parte de la CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL en el cumplimiento de sus deberes de protección, seguridad y vigilancia el 7 de febrero de 2003, data en la que se le accionó un carro bomba dentro de las instalaciones del club y por medio de la cual se produjo el deceso fatal de …, entre otras víctimas mortales y lesionados".

"…

"4.4.4. Así las cosas, para el juzgado es Claro que la demandante no logró demostrar el actuar negligente y culposo que le achacó a su antagonista, para lo cual, recuérdese que el artículo 1757 del Código Civil presenta la regla general según la cual '[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta', principio que encuentra correspondencia en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil al señalar que '[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen', recordándose en este punto que, le correspondía al extremo activo acreditar los hechos en que fundó su acción; empero, valorando en su conjunto el material probatorio recaudado, diáfanamente emerge que no satisfizo ese deber y por ende, no pueden atenderse las súplicas reclamadas en el libelo demandatorio".

En consecuencia, para preservar, entre otros, el principio de igualdad de raigambre constitucional debe declararse la ausencia de responsabilidad de mi representada por los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003 y, en consecuencia, revocarse la sentencia de primera instancia.

7. <u>SÉPTIMO REPARO</u>: INDEBIDA VALORACIÓN Y CÁLCULO DEL PERJUICIO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE.

La valoración del perjuicio en la modalidad de lucro cesante fue indebidamente calculada por el *a quo*, razón por la cual, en el evento en que se confirme la sentencia de primera instancia, el mismo deberá ser objeto de disminución, según se expone a continuación.

7.1. En cuanto al lucro cesante de Catalina Arango Salazar y Camila Arango Arango.

El *a quo* se equivocó al realizar el cálculo pues no tuvo en cuenta los siguientes factores:

- Debe destacarse que a las demandantes les fue reconocida pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Jorge Andrés Garavito, por valor mensual de $5.741.098, según se observa en la certificación del 7 de julio de 2009 expedida por la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con la que se anexó el reconocimiento correspondiente fechado el 13 de mayo de 2003 (Fls. 1159 a 1161 Exp. 2005-076). Así mismo, en el interrogatorio de parte se reconoció lo propio al responder la pregunta No. 3 formulada en la diligencia practicada el 27 de octubre de 2005.

- En adición a lo anterior, debe acotarse que los ingresos laborales del Sr. Arango Garavito se otorgaron en la modalidad de salario integral. Frente a esto debe precisarse que, de conformidad con lo preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo, un 30% de dicho monto corresponde a la carga prestacional[44], por lo que, en el remoto evento en que H. Tribunal Superior de Bogotá confirme la declaratoria de responsabilidad en cabeza de mi representada, deberá descontarse dicho porcentaje del ingreso para efectos de adelantar el cálculo matemático.

- Adicionalmente, debe efectuarse una deducción del 25% correspondiente a la presunción de gastos personales del fallecido.

Por lo anterior, en el evento en que se confirme la sentencia de primera instancia, el *ad quem* deberá ajustar el cálculo con las deducciones mencionadas.

7.2. En cuanto al lucro cesante de Luz Constanza Prado e hijos.

Una vez revisada la sentencia de primera instancia se denota que esta incurrió en un error al tomar como salario base para el cálculo del lucro cesante el valor de $15.801.842 (valor incluso superior al que se establecía en la certificación laboral expedida por Point de Colombia LTDA), en tanto la certificación laboral indica que *"El señor SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ SALAME identificado con cédula de Ciudadanía No 19.480.886 trabajo en esta compañía desde el 1 de Noviembre de 2002, al 7 de febrero de 2003 desempeñando el cargo de GERENTE DE VENTAS, devengando un salario integral mensual de $15.212.500".* Lo anterior evidencia que, esta certificación no resulta demostrativa de que el señor Muñoz Salame recibiera un ingreso cierto, periódico y constante en tanto únicamente da cuenta de una vinculación laboral de apenas 3 meses. Además, se trata de un salario integral, por lo cual se entiende que por estipulación expresa de la normatividad laboral[45] el 30% de dicho concepto corresponde al factor prestacional y un 70% al factor salarial propiamente.

De igual manera, junto con la demanda se aportaron las certificaciones de ingreso y retención en la fuente del señor Muñoz Salame cuando se encontraba vinculado a la empresa Point de Colombia Ltda de los años 2002 (1 de enero al 31 de diciembre) y 2003 (1 de enero al 28 de febrero), señalando como monto anual de los salarios las sumas de $30.425.000 y $26.339.988, respectivamente. Lo anterior confirma que el supuesto ingreso 15 millones mensuales no corresponde con la

[44] Al respecto el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo indica: "*En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía […]".*

[45] El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo indica: "*En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía […]".*

realidad. Además, se aportaron las declaraciones de ingresos y retenciones del señor Muñoz Salame de los años gravables 1997, 1998, 1999 y 2000 de la empresa Proficol S.A., arrojando ingresos anuales totales (gravables y no gravables) de $21.259.488 (promedio mensual de $1.771.624); $40.142.620 (promedio mensual de $3.345.218), $74.227.430 (promedio mensual de $6.185.619) y $92.305.163 (promedio mensual de $7.692.096), respectivamente.

La cifra empleada por el *a quo* tampoco coincide con las declaraciones de renta del señor Muñoz Salame para los años 2001 y 2002[46], en tanto, si se compara esta cifra con la reportada como "salarios y demás ingresos laborales" para el año 2001 tuvo un total de $101.243.000 que arrojaría un promedio mensual de $8.436.916, cifra muy inferior a la tomada por el *a quo*. Lo propio ocurre al revisar la declaración de renta relativa al año 2002 la cual en el mismo rubro de salarios y demás ingresos laborales señala un monto de $133.079.000, lo cual daría un promedio mensual de $11.089.916, se reitera, cifra también muy inferior a la aplicada en primera instancia.

De otro lado, no debe dejarse de lado que en la demanda se confesó de forma expresa que monto de los gastos de manutención del señor Muñoz Salame correspondía al 40% de su salario[47] y no al 25% como fue empleado equivocadamente en la sentencia de primera instancia.

Otro aspecto que debe señalarse consiste en que la señora Luz Constanza Prado y sus dos hijos perciben pensión de sobrevivientes concedida por el Seguro Social[48], mediante resolución No.0449 del 11 de agosto de 2003 (fls.944-951). Esta pensión se deriva del sistema de riesgos profesional, como quiera el deceso del señor Muñoz Salame se presentó en el marco de un accidente de trabajo. Pues bien, las cuantías de estas pensiones deben ser descontadas de los respectivos ingresos base de liquidación que se emplean para tasar el lucro cesante de cada reclamante, teniendo en lo previsto por el artículo 12 del decreto 1771 de 1994. Los pagos derivados del sistema de riesgos profesionales no pueden ser acumulados con otras fuentes, en virtud, entre otras, de la existencia de subrogación señalada en dicha norma, por lo que su deducción del ingreso debe ser realizada. Al respecto, habrá de tenerse en cuenta que la cifra reconocida en favor de Luz Constanza Prado fue de $2.216.447 (folios 941), Felipe Muñoz Prado $1.108.271 (folio 942) y Juana Muñoz Prado $1.108.271 (folio 942), todo lo cual debe descontarse de un eventual cálculo de lucro cesante.

Por lo anterior, en el remoto evento en que el H. Tribunal considere que le asiste algún tipo de responsabilidad a mi representada y se acceda a la condena por el monto del lucro cesante para estos demandantes (que no resultaría procedente por los argumentos dados a lo largo de esta sustentación), no podrá utilizarse la base salarial que fue empleada en primera instancia, sino que la misma deberá descontarse conforme a las declaraciones de ingresos y retenciones, sus declaraciones de renta, la connotación del salario integral, el monto real de gastos propios del señor Muñoz Salame (40%, según fue confesado en la demanda) y los montos de pensión que fueron concedidos en favor de los demandantes.

---

[46] FL. 28-29 Exp. 2005-176.

[47] Fl. 495 Exp. 2005-176.

[48] Lo que también fue reconocido en el marco de la diligencia de interrogatorio de parte desarrollada el 2 de agosto de 2006 (preguntas 4 y 5, folio 809).

IV. ANEXOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS COMO PARTE DE LA SUSTENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN.

Como parte de la sustentación de los reparos presentados en contra de la sentencia de primera instancia y para que sean considerados y tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Bogotá en la decisión de segunda instancia, nos permitimos anexar los siguientes documentos:

1- Providencia proferida por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Guillermo Sánchez Luque
2- Providencia proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sala de Amnistía o Indulto. Resolución SAI-AOI-RC-DVL-316-2023 del 24 de agosto de 2023.
3- Concepto del exmagistrado del la Sala Civil de la CSJ, tratadista de responsabilidad y profesor universitario en la materia por varias décadas, doctor Jorge Santos Ballesteros, fechado el 7 de septiembre de 2023.

V. SOLICITUD

De conformidad con lo expuesto a lo largo del presente escrito, de manera respetuosa solicito que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de las demandas que dieron inicio a los procesos acumulados de la referencia.

Notificaciones y comunicaciones electrónicas: gpardo@spjlaw.com y también epardo@spjlaw.com

Del Tribunal, con toda atención y respeto,

GABRIEL PARDO OTERO
CC. # 437.570
T.P. # 12.938 C. S. de la J.

Nota: En virtud de lo preceptuado por el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022, el presente memorial no requiere de 'firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos'.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00440-01(65853)

Actor: JULIO MARTÍN OTÁLORA CANO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

COMPETENCIA DEL SUPERIOR-Se decide sin limitación por apelación de ambas partes. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. RECORTES DE PRENSA-Valor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. ORDEN PÚBLICO-El Presidente como jefe de las Fuerzas Armadas dispone de la fuerza pública y conserva en todo el territorio nacional el orden público. FUERZA PÚBLICA-El gobernador es agente del Presidente de la Republica para mantener el orden público. FUERZA PÚBLICA-El alcalde conserva el orden público del municipio según la ley y las instrucciones del presidente y del gobernador. DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-No es absoluto pues el Estado no es un asegurador general. DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-Debe tenerse en cuenta la capacidad de las autoridades públicas. ACTOS TERRORISTAS DIRIGIDOS DE FORMA INDISCRIMINADA CONTRA LA POBLACIÓN-Para responsabilizar al Estado se requiere de solicitud de protección o que las condiciones de orden público permitan concluir la ocurrencia del hecho y el Estado tenga la capacidad de detener el ataque. ACTOS TERRORISTAS DIRIGIDOS EN FORMA INDISCRIMINADA CONTRA LA POBLACION-Falla relativa del servicio. FALLA DEL SERVICIO RELATIVA-El Estado no es un asegurador general contra daños. RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN EN ACTOS TERRORISTAS-Falla relativa del servicio. ATENTADOS TERRORISTAS-Improcedencia de imputación por daño especial o riesgo excepcional. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS- Valor probatorio de los documentos privados de contenido declarativo, art. 277.2 CPC. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. HECHO DEL TERCERO-Causal de exoneración de responsabilidad. IRRESISTIBILIDAD E IMPREVISIBILIDAD-Concepto. ATENTADOS TERRORISTAS-Hecho exclusivo y determinante de un tercero. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe

La Sala, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 que adicionó el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 9 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de febrero de 2003, las FARC explotó un «carrobomba» en el cuarto piso del Club El Nogal en la ciudad de Bogotá. Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio

Alejandro Muñoz Salame murieron como consecuencia de la explosión. La parte demandante alega omisión en el deber de seguridad y protección, pues existían indicios que permitían prever un atentado contra ese club.

ANTECEDENTES

Proceso nº. 2005-00440: El 4 de febrero de 2005, Julio Martín Otálora Cano, a través de apoderado judicial, formuló **demanda de reparación directa** contra la Nación-Ministerio de Defensa y otros. Solicitó $1.165.699.471 por daños materiales, 100 SMLMV por daño moral y lo que resultara probado por daño en la vida de relación y por vulneración de los «bienes de su personalidad» Pidió que se declarara que el atentado violó derechos constitucionales.

Proceso nº. 2005-00449: El 4 de febrero de 2005, Luz Constanza Prado Restovich y otros, a través de apoderado judicial, formularon **demanda de reparación directa** contra la Nación-Ministerio de Defensa y otros. Solicitaron $1 313.287.639,4 por daños materiales, 100 SMLMV por daño moral y lo que resultara probado por daño en la vida de relación y por vulneración de los «bienes de su personalidad». Pidieron que se declarara que el atentado violó derechos constitucionales.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que las demandadas omitieron sus deberes de vigilancia, protección y seguridad, pues existían indicios que permitían prever un atentado contra el Club El Nogal. El 10 de marzo de 2005 (Rad nº. 2005-00440) y el 5 de mayo de 2005 (Rad nº. 2005-00449) se admitieron las demandas y se ordenó su notificación. La parte demandante adicionó las demandas y el 22 de julio de 2005 (Rad nº. 2005-00440) y el 15 de diciembre de 2005 (Rad nº. 2005-00449) fueron aceptadas. En el escrito de **contestación de la demanda**, la Nación-Ministerio de Defensa alegó hecho de un tercero y que la obligación de protección era de medio y no de resultado La Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad-DAS señalaron que no tenían deberes de protección frente a toda la población y hecho de un tercero. El 17 de julio de 2014 y el 15 de septiembre de 2015, la Nación-Fiscalía General de la Nación (Rad nº. 2005-00449) y la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional (Rad nº. 2005-00440) fueron aceptadas como **sucesores**

procesales del DAS, respectivamente. **El** 15 de septiembre de 2015 (Rad n°. 2005-00440) y el 4 de septiembre de 2018 (Rad n°. 2005-00449) se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para **alegar de conclusión** y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante alegó que el atentado era previsible, pues las demandadas tenían información de inteligencia sobre su ocurrencia y el Club El Nogal y sus socios estuvieron expuestos a un riesgo superior que no tenían el deber de soportar. La Nación-Fiscalía General de la Nación adujo que los funcionarios de Policía Judicial actuaron en el marco de sus competencias. La Nación-Ministerio de Defensa y la Nación-Ministerio de Defensa. Policía Nacional, reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó que el ataque fue indiscriminado e imprevisible **El** 30 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la **acumulación de los procesos** con número de radicado 2005-00440 y 2005-00449.

El 9 de octubre de 2019. el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la **sentencia** accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que las demandadas no adelantaron investigación alguna, aunque tenían información que hubiera permitido prevenir el atentado. Consideró que las constantes reuniones de funcionarios públicos en el club pusieron a sus socios y empleados en un riesgo que no estaban en el deber de soportar. Estimó que, aunque el Club El Nogal no fue demandado, la condena debía reducirse en un 70%, pues también era patrimonialmente responsable. Las partes y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE interpusieron **recurso de apelación,** que fueron concedidos el 23 de enero de 2020 y admitidos el 8 de abril siguiente. La ANDJE esgrimió que con la información que tenían las autoridades no era posible prever, ni resistir el atentado en el Club El Nogal y que las noticias no prueban los hechos contenidos en ellas. La Nación-Ministerio de Defensa señaló que no hubo amenaza alguna contra el club y el atentado no estaba dirigido contra un agente o establecimiento del Estado. La Nación-Fiscalía General de la Nación adujo que no se acreditó que el atentado era previsible. La Nación-Ministerio de Defensa. Policía Nacional. sostuvo que se configuró hecho de tercero. La parte demandante solicitó la indexación de la condena y adujo que no podía disminuirse en un 70%, pues se debía aplicar el «precedente» y el Club El Nogal no había sido parte del proceso. El 7 de mayo de 2021 se corrió traslado para **alegar de conclusión en segunda instancia**. La Nación-Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación

reiteraron lo expuesto La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la ANDJE y el Ministerio Público afirmaron que no se configuró título de imputación alguno. Sostuvieron que la sentencia de tutela SU-353 de 2020 dejó sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 27 de mayo de 2019, que fundamentó la sentencia de primera instancia. La parte demandante reiteró lo expuesto y agregó que la sentencia de tutela SU-353 de 2020 era inconvencional.

CONSIDERACIONES

I. Impedimento

El Consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo 150 1 CPC, pues como socio activo del Club El Nogal la decisión que se adopte podría afectarlo o beneficiarlo El artículo 150.1 CPC dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento del proceso por tener interés directo o indirecto en el proceso. Como los hechos en los cuales se funda el impedimento manifestado se subsumen en la causal invocada, porque el Consejero es socio activo del club en el que ocurrieron los hechos, se aceptará el impedimento.

II. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20 2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es. $190.750.000[1].

[1] Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2005, $381 500, por 500.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo[2], en este caso por una omisión que se imputa a varias entidades públicas (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Las demandas alegan que se configuró falla del servicio. porque las entidades demandadas omitieron el deber de protección. Las demandas se interpusieron en tiempo –4 de febrero de 2005–, pues las FARC detonaron un «carrobomba» en el Club El Nogal el 7 de febrero de 2003 [hecho probado 10.1], circunstancia que según la demanda concretó el incumplimiento de ese deber.

Legitimación en la causa

4.1 *Proceso n° 2005-00440*: Julio Martin Otálora Cano es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conformaba el núcleo familiar de Luisa Fernanda Solarte Angulo, quien murió en el atentado contra el Club El Nogal [hecho probado 10.9]. *Proceso n°. 2005-00449*: Luz Constanza Prado Restovich, Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado son las persona sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que conformaban el núcleo familiar de Sergio Alejandro Muñoz Salame, quien murió en el atentado contra el Club El Nogal [hecho probado 10.10]

[2] Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 17 de junio de 1993. Rad. 7 303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007. Rad. 16 421 [fundamento jurídico 3], en *Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 745 y 747, disponible en https://bit.ly/3g3duK.

4.2 La Nación-Ministerio de Defensa está legitimada en la causa por pasiva, pues el Ejército Nacional y la Policía Nacional hacen parte de esta entidad (art. 1 Decreto 49 de 2003) y a estas les corresponde asegurar la convivencia pacífica y la defensa del orden constitucional (arts. 217, 218, 303 y 315.2 CN. 1 de la Ley 62 de 1993 y 2 de la Ley 48 de 1993, hoy Ley 1861 de 2017). La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, porque le corresponde dirigir y coordinar las funciones de policía judicial (art 250.8 CN). La Nación-DAS (que fue sucedido procesalmente por la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional –Rad nº. 2005-00440– y la Nación-Fiscalía General de la Nación –Rad nº 2005-00449–) está legitimado en la causa por pasiva, ya que era el encargado de obtener la inteligencia necesaria para garantizar la seguridad nacional interna del Estado (art. 3.1 Decreto 218 de 2000).

III. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la detonación de un artefacto explosivo dirigido de forma indiscriminada contra la población en un club social es atribuible a la falla del servicio por incumplimiento del deber de seguridad y protección o al hecho de un tercero.

III. Análisis de la Sala

5 Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 CPC

Hechos probados

6 Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio[3].

7. En el expediente obran recortes de prensa (f. 8-219 c. 10, c. 21 y f. 71-280 c. 22). Las informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre

[3] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad 25.022 (fundamento jurídico 1). El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015 Rad. 26 984. Estas providencias se pueden consultar en *Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363 364 y 385 respectivamente, disponible en https://bit.ly/3qjdJK.

los hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas condiciones serán valoradas en este proceso[4]

8. Las fotografías aportadas al proceso (f. 2 c. 12) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo. modo y lugar en las que fueron tomadas[5].

9 Al proceso se aportó, como prueba trasladada, el proceso penal por el ataque terrorista contra el Club El Nogal (c.15). Conforme al artículo 185 CPC. las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro. siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba. una en la demanda y la otra en el escrito de contestación[6]. Como las pruebas testimoniales practicadas en la investigación penal fueron solicitadas por la parte demandante (f. 199 c. 1 y 236 c. 3) y en el proceso primitivo se practicaron con audiencia de la parte demandada (f. 298-318 c.15), serán valoradas. Como los documentos no fueron tachados de falsos, los documentos trasladados de ese proceso penal también serán valorados.

10. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

---

[4] Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16 587 [fundamento jurídico 3.2] Estas providencias se pueden consultar en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo 8*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjduK.

[5] Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad 28 832 [fundamento jurídico 9.1].

[6] Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2.17] en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo 8*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disponible en https://bit.ly/3gjduK

10.1 El 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8:11 p.m., las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de «anfo» en el cuarto piso del Club El Nogal. En la explosión murieron 36 personas, incluidas Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de defunción (f. 415 c. 1 y f. 6 c. 22), de los protocolos de necropsia nº. bog-2003-004322 y nº. bog-2003-004295 (f. 833-839 c. 5 y f. 383-388 c. 10) y del informe nº 96 DAS.SC.GOPE.1679 elaborado por el DAS (f. 22-33 c. 23).

10.2 Para ingresar el «carrobomba» al Club El Nogal, Fernando Arellán Barajas, Oswaldo Arellán Barajas y John Fredy Arellán Zúñiga constituyeron la sociedad Invernar Invernaderos Ltda. y a través de esa sociedad compraron una acción empresarial, que les dio acceso al club. El día del atentado Oswaldo Arellán Barajas ingresó el vehículo al parqueadero del cuarto piso del club minutos antes de la explosión, según da cuenta copia simple del registro de entrada de socios (f 1 CD s020103, s020406, s020709, s021012, s030103 c. 12), del estudio que realizó el Club El Nogal para aceptar a Invernar Invernaderos Ltda. (f. 39-72 c. 24), del informe nº. 96 DAS.SC.GOPE.1679 elaborado por el DAS (f. 22-33 c. 23) y del informe nº. 839 FGN-CTI-GV-IJ-5039 elaborado por la Fiscalía General de la Nación (f. 53-61 c. 23).

10.3 En 2002 y 2003, las FARC realizaron diez atentados con artefactos explosivos en la ciudad de Bogotá, según da cuenta copia simple de la respuesta al oficio nº. 2014-LTC-418 enviada por el DAS (f. 1000-1002, 1007-1013 y 1149-1354 c. 6).

10.4 Entre 2002 y 2003, el DAS, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inició veinte investigaciones relacionadas con los delitos de tráfico de armas y explosivos, rebelión, concierto para delinquir, terrorismo, entre otros, según da cuenta copia simple de la respuesta al oficio nº. 06 CAV 428 enviada por el DAS (f. 406-409 c. 1).

10.5 El 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a Herminsul Arallán Barajas por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión por los hechos del 7 de febrero de 2003. Conforme a la sentencia, Herminsul Arallán Barajas fue el encargado de instalar los explosivos en el vehículo que ingresó al club. La sentencia

fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, según da cuenta copia simple de las sentencias (c. 16 y 18).

10.6 El DAS y la Policia Nacional no conocieron sobre la existencia de amenazas o indicios de atentado contra el Club El Nogal para los años 2002 y 2003. ni recibieron solicitudes de protección, según da cuenta copia simple de las respuestas a los oficios n°. 06 CAV 428 (f. 406-409 c. 1) y n°. 2006-RJPG-0205 enviadas por el DAS (f. 523-527 c. 2) y del oficio n° 1275 GRUNE-803 enviada por la Policía Nacional (f. 421 y 423 c.10).

10.7 Fernando Londoño Hoyos –entonces Ministro del Interior y de Justicia en 2002 y 2003– era socio del Club El Nogal desde abril de 1995 y fue presidente de su junta directiva hasta el 6 de agosto de 2002, según da cuenta original de la certificación de la gerente general del club (f. 93 c. 11).

10.8 Martha Lucia Ramirez –entonces Ministra de Defensa– se hospedó en el hotel del Club El Nogal en tres ocasiones en 2002. según da cuenta copia simple del registro de huéspedes de 2002-2003 (f. 1-41 c. 14).

10.9 Luisa Fernanda Solarte Angulo era esposa de Julio Martin Otálora Cano, según da cuenta copia auténtica del registro de matrimonio (f. 414 c. 10).

10.10 Sergio Alejandro Muñoz Salame era esposo de Luz Constanza Prado Restovich y padre de Felipe Muñoz Prado y Juana Muñoz Prado, según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio (f. 2-5 c. 19).

Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros dirigidos en forma indiscriminada contra la población

11. El articulo 1 de la Ley 62 de 1993, en consonancia con los articulos 2 y 218 CN, dispone que la Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra. bienes, creencias y demás derechos y libertades, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, dirige la fuerza pública (artículo 189.3 CN) y le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo cuando sea perturbado (artículos 189.4 y 213 y siguientes CN). A su vez, el gobernador es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público (artículo 303 CN). En consonancia, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y le corresponde conservar el orden público de éste, de conformidad con la ley y las instrucciones que reciba del presidente de la República y del gobernador (artículo 315.2 CN)[7].

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 48 de 1993, retomado por el mismo artículo de la Ley 1861 de 2017 y en concordancia con los artículos 2 y 217 CN, dispone que las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La jurisprudencia, en vigencia del artículo 16 de la Constitución de 1886[8] –que corresponde al artículo 2 CN– concluyó que estos deberes no implican que el Estado sea un «asegurador general»[9] contra daños, tampoco entrañan una responsabilidad automática derivada exclusivamente de la afectación de un derecho[10] y encuentran su límite en los recursos materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y, en últimas, garantizar la seguridad e integridad. Se trata, pues, de una falla relativa del servicio[11].

El Estado es responsable patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad frente actos terroristas de terceros dirigidos de forma indiscriminada contra la población, cuando: i) se solicita protección especial,

---

[7] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Rad. 34.776 (fundamento jurídico 17), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 499, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

[8] Introducido por el artículo 9 del Acto Legislativo n°. 1 de 1936 que, a su vez, corresponde con el artículo 19 original de la Constitución de 1886.

[9] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 1969, Rad. 541, párr. 62, en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 60, disponible en https://bit.ly/3gjjduK

[10] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 1990, Rad. 5.737 (fundamento jurídico 2), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 68, disponible en https://bit.ly/3gjjduK

[11] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 1998, Rad. 10.747, (fundamento jurídico 6), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 88, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

con justificación en las especiales condiciones de riesgo ante un acto de esta naturaleza y las autoridades, competentes y con la capacidad para contener el ataque, omiten ese deber o brindan las condiciones de seguridad de forma insuficiente o tardía y ii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas, no obstante, el acto terrorista era previsible en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque teniendo la capacidad de hacerlo[12].

12. La Sala en algunas decisiones ha sostenido que si el acto terrorista se dirige contra una institución representativa del Estado, procede la condena con fundamento en el daño especial[13] El daño especial, cuyo fundamento se encuentra en la desigualdad derivada de la alteración de las cargas públicas, supone que el daño antijurídico es consecuencia de una actuación legítima del Estado que, no obstante, lesiona un bien jurídico cuyo titular no se encuentra en el deber de soportar. Esto impone un estudio de la relación de causalidad material para poder imputar responsabilidad.

La acción legítima del Estado debe ser la causa del perjuicio. Una «causalidad abstracta» –que impute el daño por los deberes jurídicos generales de las autoridades públicas– implicaría, en el fondo, una atribución ilimitada de responsabilidad: del ámbito de la responsabilidad civil del Estado, propio del juzgador, se trasladaría al de la solidaridad, el aseguramiento y la equidad, propios de la formulación de políticas públicas, y ajenos al juez de la administración

13. La Sala también ha imputado responsabilidad por actos terroristas con fundamento en el riesgo excepcional[14]. La imputación con fundamento en ese título de imputación tiene su origen en el ejercicio de actividades peligrosas, que reportan

---

[13] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de junio de 2017, Rad. 18.860 (fundamento jurídico 14), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 493-494, disponible en https://bit.ly/3gLdJK

[12] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 1990, Rad. 5.417, p. 4 y sentencia de 8 de febrero de 1999, Rad. 10.731 (fundamento jurídico 1), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 478 y 481, disponible en https://bit.ly/3qFJI0n.

[14] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de octubre de 2005, Rad. AG-2001-00948-01 (fundamento jurídico 5.2), en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B*, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 484, disponible en https://bit.ly/3gJduK.

beneficios a quienes las ejercen y que justifican la obligación de indemnizar perjuicios cuando con ellas se ocasionen daños.

Si las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra. bienes, creencias y demás derechos y libertades (artículo 2 CN), no resulta coherente estimar que su presencia constituya por sí misma un riesgo indemnizable. La sola presencia de funcionarios del Estado en establecimientos públicos y privados –en el ejercicio de sus funciones o fuera del ámbito de ellas– no puede considerarse como una fuente creadora de riesgo.

14. Según la demanda, las demandadas incurrieron en falla del servicio por omisión al deber de seguridad y protección por el atentado terrorista en el Club El Nogal, pues había indicios que hacían previsible el ataque.

Está acreditado que el 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8 11 p.m.. las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de «anfo» en el cuarto piso del Club El Nogal En la explosión murieron 36 personas, incluidas Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame [hecho probado 10.1]. Para ingresar el «carrobomba» al Club El Nogal, Fernando Arellán Barajas, Oswaldo Arellán Barajas y John Fredy Arellán Zúñiga constituyeron la sociedad Invernar Invernaderos Ltda. y a través de esa sociedad compraron una acción empresarial, que les dio acceso al club. Oswaldo Arellán Barajas ingresó el vehículo al parqueadero del cuarto piso del club minutos antes de la explosión [hecho probado 10.2]. Herminsul Arellán Barajas fue condenado por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión por instalar los explosivos en el vehículo que ingresó al club [hecho probado 10. 5].

Entre 2002 y 2003, las FARC realizaron diez atentados terroristas con artefactos explosivos en la ciudad de Bogotá [hecho probado 10.3]. En esos años, el DAS –en coordinación con la Fiscalía General de la Nación– inició veinte investigaciones relacionadas con los delitos de tráfico de armas y explosivos, rebelión. concierto para delinquir. terrorismo, entre otros [hecho probado 10.4]. El DAS y la Policía Nacional no conocieron sobre la existencia de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección [hecho probado 10 6]

15. Según el articulo 252 CPC, un documento privado es auténtico cuando (i) ha sido reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido, (ii) fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; (iii) habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente: (iv) ha sido reconocido implícitamente de conformidad con el articulo 276; o (v) se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el articulo 274 CPC.

Conforme al articulo 277 CPC, los documentos privados emanados de terceros sólo se estimarán por el juez (i) cuando sean auténticos de conformidad con el artículo 252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente representativa y (ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite.

15.1 Obra en el expediente el comunicado de las FARC denominado «saludo de año nuevo» El documento dejó consignado unos puntos que «quedaron claros» ese año con el «aparatoso despliegue militar, los empalagosos elogios de los medios al presidente y la aristocrática arrogancia del ministro del interior». Conforme al comunicado, el gobierno de la época como sus antecesores desarrollaba la «estrategia paramilitar del Estado» y seguia «(..) abriendo las puertas de la nueva institucionalidad al sicariato paramilitar facilitándole los clubes del norte de Bogotá para sus reuniones con jefes políticos y empresariales sin que ninguna autoridad los incomode» (f. 366-368 c. 3).

15.2 Obra en el expediente la denuncia del 10 de febrero de 2003 presentada por Llimi Diaz Torres –que afirmó ser exfuncionario del DAS– ante la Fiscalia General de la Nación. Conforme a la denuncia, le «informó» a uno de los detectives de esa entidad –no reveló su identidad para protegerlo– que la primera semana de enero un informante le habia contado sobre un presunto testaferro de las FARC que habia sido vinculado como socio del Club El Nogal para identificar futuras victimas. Según el documento, le entregó el nombre del testaferro, direcciones de la empresa fachada y números telefónicos (f. 24-25 c. 19)

El comunicado de las FARC y la denuncia presentada por Llimi Díaz Torres –que hacían parte de la investigación penal– son documentos privados emanados de terceros de contenido declarativo, que pueden ser valorados. El comunicado acredita que la guerrilla de las FARC hizo una serie de críticas al gobierno y a los funcionarios de la época. Sin embargo, no evidencia una amenaza directa contra alguna institución pública o privada. La denuncia presentada por Llimi Díaz Torres acredita que este denunció ante las autoridades unos hechos que podían tener relación con algunas conductas delictivas, pero no la veracidad de las afirmaciones contenidas en ese documento. Al proceso no se aportó la investigación penal que se inició con esa denuncia, ni documento alguno que permita constatar esas afirmaciones.

16. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC.

Obra en el expediente la respuesta al oficio n°. 06 CAV 428 elaborado por el DAS el 12 de febrero de 2006. Conforme al documento, en el oficio DGIN.SANA.GIDR n°. 274593 quedó consignado que frente al comunicado de las FARC de fin de año no se realizaron «trabajos estratégicos», pues al «someterlo al proceso analítico de la información» no se evidenciaron «posibles ataques terroristas» que pudieran afectar el orden público, ya que se trataba de «directrices de carácter general» (f. 406-409 c. 1).

El oficio elaborado por el DAS es un documento público que acredita que esa entidad hizo un análisis del comunicado de fin de año de las FARC y determinó que no contenía amenazas contra el orden público por tratarse de directrices generales. Se presume auténtico, porque no se tachó de falso (art. 252 CPC) y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas.

17 Sobre posibles «informaciones de inteligencia» relacionadas con el atentado en el Club El Nogal, Jaime Quiñónez Rodríguez –informante– declaró en el proceso penal [núm. 9] que conoció a los autores del atentado. Afirmó que conoció a alias «El Flaco» –que alegó era Herminsul Arellán– y este le contó que había perdido a dos hermanos «nogaliando». Sostuvo que, veinte días antes de que ocurriera el atentado al Club El Nogal, «El Flaco» le dijo que le «ardían» las fosas nasales porque estaba «picando» más o menos veinte arrobas de explosivos. Comunicó esos hechos a funcionarios del «SIA» –Sección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación– y a Helena Zorrilla –investigadora del CTI–, con quienes ya había trabajado como informante para impedir un secuestro. Les contó que alias «El Flaco» era el mismo «Javier Paz» y que sabía esto porque «El Flaco» le había preguntado si el retrato hablado de Javier Paz se parecía a él. Afirmó que «El Flaco» en ese momento le dijo que quería «atentar contra el alcalde de San Vicente del Caguán» –que estaba en Bogotá– y que le pidió que consiguiera información sobre dónde vivía ese funcionario. Declaró que le suministró el número de «Herminsul» a las autoridades y no hicieron nada (f. 298-304 c. 15).

Helena Zorrilla Parga –Investigadora del CTI– declaró que conoció a Jaime Quiñónez Rodríguez, porque se presentó en su oficina en septiembre de 2002 y le informó que las FARC iban a secuestrar al director de la Clínica del Country. Afirmó que el informante fue a su oficina nuevamente el 21 de enero de 2003 a decirle que se había involucrado con las FARC, que conocía al que llamaban «Javier Paz» –según los retratos hablados de los medios– y que podía ayudar a capturar a alias «El Paisa» –comandante de la columna Teófilo Forero–. Sostuvo que el informante mencionó que esa mañana «El Flaco» había picado explosivos y que las FARC iban a hacer un atentado contra «un político, un parlamentario, pero no iba a suministrar el nombre hasta que no le confirmaran si la información les interesaba». Afirmó que Quiñónez exigió el pago de $150.000.000 como recompensa y fue entrevistado por funcionarios del «RIME 7» –Regional de Inteligencia Militar– y después por funcionarios del SIA del nivel central. Las entrevistas fueron grabadas y el informante suministró unos números de celular que «supuestamente» usaba alias «El Flaco» o «Javier Paz». Después de eso esperó a que los funcionarios de la SIA Nacional se comunicaran y como no obtuvo respuesta envió el proceso al grupo de verificación de la seccional Bogotá. Afirmó que las demás informaciones que había

dado el informante estaban relacionadas con disparos contra el edificio del Congreso o el Palacio de Justicia y la intención de «gemelear» una camioneta de un político para ingresarla al parqueadero de ese «edificio». Esas informaciones fueron incluidas en los informes de apreciación que hacía semanalmente (f. 306-318 c. 15).

Las declaraciones de los testigos sobre la forma en que se conocieron, la ocurrencia de una entrevista el 21 de enero de 2003 y el contenido de esa entrevista es completo y verosímil. Los testigos coincidieron en los aspectos importantes, pues ambos afirmaron que en esa entrevista se denunció que alias «El Flaco» estaba detrás de algunos atentados terroristas en Bogotá y tenía la intención de atentar contra «parlamentarios» y «alcaldes».

Estas declaraciones son –además– coincidentes con algunos documentos que hicieron parte del proceso penal y que fueron aportados al proceso. En efecto, conforme al informe de la Sección de Información y Análisis del CTI denominado «proceso de información n°. 0020-2003» del 21 de enero de 2003, Jaime Alberto Quiñónez tenía información sobre Javier Paz alias «El Flaco» y exigía $150.000.000 de recompensa (f. 336-339 c. 15). Además, según el informe de «apreciación de orden público en Bogotá» del 23 de enero de 2002, se venían «fraguando varios planes para realizar atentados contra líderes políticos, principalmente parlamentarios y alcaldes», grupos guerrilleros tenían en su poder explosivos para prepararlos como «carrosbomba» y «piensan "gemelear" una camioneta Toyota de los adscritos congresistas, para ingresarla al parqueadero del congreso de la república» (f. 323-326 c. 15). Estos informes son documentos públicos que acreditan que el testigo Jaime Quiñónez Rodriguez efectivamente alertó a las autoridades sobre un eventual plan terrorista contra congresistas y alcaldes.

18. Luke Pujana Angoita –gerente del Club El Nogal– declaró que Fernando Londoño Hoyos, ministro para la época de los hechos, era socio del club desde su fundación en 1995. Afirmó que múltiples personajes de la «élite política o económica» frecuentaban el club para asistir a distintos eventos y que cuando funcionarios –como el presidente– visitaban el club se hacían avanzadas de seguridad. Declaró que «el club no recibió ninguna amenaza, ni fui enterada de

amenaza para el club, no hubo ninguna novedad de seguridad antes del atentado» El dicho de la declarante fue preciso y detallado. Su versión es seria, verosímil y no se aprecian inconsistencias, ni lagunas en su versión de lo sucedido. Narró exclusivamente los hechos que le constaban y fue precisa en aclarar cuándo se tomaban medidas de seguridad especiales en las instalaciones del club y si conoció de amenazas (f. 472-473 c. 10 y f. 462-464 c. 22).

19. El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible[15].

El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración.

Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios.

Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios

---

[15] Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1989 Rad. 5693 [fundamento jurídico párrafos 24 y siguientes], en *Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017* Sección Tercera Tomo 8, Bogotá. Imprenta Nacional. 2018, pp 238. disponible en disponible en: https://bit.ly/3xgduK

por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general.

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, Llimi Díaz, días después del atentado, denunció ante la Fiscalía General de la Nación que había informado a un detective del DAS sobre un presunto testaferro de las FARC, que había sido vinculado al Club El Nogal. Esa denuncia no evidencia que las demandadas conocían sobre un posible atentado terrorista contra el Club El Nogal. No se probó que los hechos contenidos en la denuncia eran ciertos y que efectivamente un funcionario del DAS recibió esa información en los términos descritos por el denunciante.

En el proceso también quedó probado que Jaime Quiñónez Rodríguez conoció a alias «El Flaco» –que aseguró era Hermínsul Arellán– y que el 21 de enero de 2003 le informó a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que esa persona preparaba un ataque contra parlamentarios y alcaldes en Bogotá. Las autoridades recibieron la información y alertaron sobre esos hechos en los informes de apreciación de orden público. Conforme a las pruebas, no se acreditó que el informante hubiera señalado que las FARC iban a atentar contra el Club El Nogal, ni tampoco que la información dada sobre alias El Flaco y su relación con los atentados terroristas era veraz. La declaración de Jaime Alberto Quiñónez no evidencia una amenaza real y concreta contra el Club El Nogal, pues nunca mencionó un posible atentado contra esta institución. Por el contrario, quedó probado que sólo hizo referencia a ataques contra parlamentarios, alcaldes, el Congreso y el Palacio de Justicia.

No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no

había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios.

El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo.

La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades militares estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de ataques sucedan. El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades.

Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones[18]. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no se probó omisión por parte de las autoridades en el deber de protección

[18] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico parr. 10] en *Gaceta Judicial*, *Tomo XLIII* nº. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV parr. 4] en *Gaceta Judicial*, *Tomo CXXXVIII* nº 2340 a 2345 p. 24

y, por el contrario, quedó probado que esa acción armada contra el Club El Nogal era imprevisible e irresistible, se configuró el hecho exclusivo de un tercero. Por ello, la Sala revocará la sentencia apelada.

20. La parte demandante alegó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado el daño especial en ataques terroristas contra la población civil. Como para que se configure el daño especial la acción legítima del Estado debe ser la causa del daño o perjuicio [núm. 12] y quedó acreditado que el ataque terrorista fue planeado y ejecutado por la guerrilla de las FARC, no es procedente atribuirle responsabilidad al Estado bajo ese título de imputación

21. Según la demandante, la presencia habitual de funcionarios del Estado creó un riesgo superior para el club, sus socios y empleados. Conforme a lo probado, Fernando Londoño Hoyos –entonces Ministro del Interior y de Justicia en 2002 y 2003– era socio del Club El Nogal desde abril de 1995 y frecuentaba las instalaciones del club. Martha Lucía Ramírez –entonces Ministra de Defensa– se hospedó en el hotel del Club El Nogal en tres ocasiones en el año 2002. Como la presencia de funcionarios del Estado en establecimientos públicos o privados no constituye un riesgo excepcional [núm.13], no es procedente atribuirle responsabilidad al Estado bajo ese título de imputación.

22. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el Consejero Nicolás Yepes Corrales, para intervenir en este caso y, en consecuencia, **SEPÁRASE** del conocimiento del presente proceso.

SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia del 9 de octubre de 2019 profenda por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: **NIÉGANSE** las pretensiones.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Tribunal

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

EDF-OAO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SALAS DE JUSTICIA
SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

RESOLUCIÓN SAI-AOI-RC-DVL-316-2023

Expediente LEGALi:	**1501255-73.2021.0.00.0001**
Asunto:	**Resolución que declara anticipadamente la no amnistiabilidad, requiere suscribir el régimen de condicionalidad y el formato F-1, ordena suspender el proceso de cobro coactivo y remite por competencia a otra Sala de Justicia**
Solicitante:	**HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS**
Documento de identificación:	**C.C. nro. 19.449.357**
Solicitante:	**FERNANDO ARELLÁN BARAJAS**
Documento de identificación:	**C.C. nro. 19.223.167**

I. ASUNTO POR RESOLVER

Este despacho de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronuncia sobre el trámite de beneficios de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS y la solicitud de suspensión de cobro coactivo adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS e impone el régimen de condicionalidad aplicable a los comparecientes, previas las siguientes consideraciones:

II. IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS COMPARECIENTES

1. HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C., nació en Icononzo, Tolima el 16 de agosto de 1961. Fue conocido como 'Pedro' en las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

2. FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., nació en Fusagasugá, Cundinamarca el 1 de febrero de 1954.

3. Los interesados son hermanos y fueron condenados por la justicia penal ordinara (JPO) por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo. Con ocasión de la multa impuesta en esa condena, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) adelanta un proceso de cobro coactivo en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS.

4. Los ciudadanos ARELLÁN BARAJAS fueron acreditados como exintegrantes de las antiguas FARC-EP por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), recibieron el beneficio transicional de libertad condicionada por la condena impuesta en la JPO y suscribieron actas de compromiso ante la JEP.

III. ANTECEDENTES

Proceso ante la Justicia Penal Ordinaria

5. El 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00[1] condenó a[2] HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS,

[1] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, págs. 250 a 392.

[2] En esta sentencia también fueron condenadas las siguientes personas: Rodrigo Londoño Echeverri, Luciano Marín Arango, Noel Mata Mata, Jorge Briceño Suarez, Diego Alexander Piñeros como autores de los delitos de terrorismo en concurso heterogéneo con los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo; Alipio Murillo como coautor del delito de terrorismo en concurso heterogéneo con los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo; José Gustavo Muños y Adela Jiménez Álvarez como autores de los delitos de tráfico de armas de fuego o municiones agravado y rebelión; y Fernando Guerrero Reina como autor del delito de tráfico de armas de fuego o municiones agravado. En sentencia del 26 de agosto de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá decretó la cesación del proceso seguido en contra de Fernando Guerrero Reina, José Gustavo Muños y Adela Jiménez Álvarez. Respecto de Diego Alexander Piñeros y Alipio Murillo otro despacho de la SAI, en resoluciones SAI-AOI-D-XBM-016-2022 del 30 de marzo de 2022 y SAI-AOI-D-XBM-009-2022 del 31 de mayo de 2022 respectivamente, remitió por competencia el asunto a

como coautores responsables del concurso heterogéneo de delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo y rebelión por los siguientes hechos:

> El 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8:05 de la noche, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (*sic*) detonaron en uno de los parqueaderos de las instalaciones de la "CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL" (en adelante club El Nogal), ubicado en la carreta 7ª con calle 78 de esta ciudad, un artefacto explosivo acondicionado en un vehículo con el que se causó la muerte a 36 personas, y se atentó contra la vida de 158 más, así como daños materiales (sic) a la misma edificación, a edificaciones aledañas y a decenas de vehículos. // Los aquí procesados fueron acusados por la Fiscalía porque, según su criterio, participaron de una u otra forma en el hecho referido.

6. Respecto de los ciudadanos ARELLÁN BARAJAS la imputación fáctica por el delito de homicidio con fines de terrorismo en concurso homogéneo consistió "en que como consecuencia de la explosión que es achacada a los encartados en este proceso murieron […] 36 personas". En el mismo sentido la imputación por la conducta de tentativa de homicidio con fines terroristas en concurso homogéneo se concretó porqué "se atentó contra la vida de […] 158 personas" y por el delito de terrorismo, según la sentencia condenatoria, la imputación fáctica existió en tanto:

> […] el grupo insurrecto denominado FARC (*sic*), por intermedio de miembros de la columna móvil 'Teófilo Forero', explotó un carro bomba dentro de las instalaciones del club El Nogal, el cual contó con la activa participación de JHON FREDDY ARELLÁN ZÚNIGA [quien murió] y sus tíos HERMINSUL, OSWALDO y FERNANDO […] quienes realizaron las siguientes actividades:
>
> 1. **HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS:** presentó al comandante de la columna móvil 'Teófilo forero' de las FARC (*sic*) (alias 'Oscar Montero' o 'el Paisa' el plan de atentar contra el club El Nogal, toda vez que su sobrino †Jhon Fredy Arellán Zúñiga, en su calidad de instructor y jugador profesional de squash, tenía fácil acceso a dicho lugar.
> 2. Alias 'Oscar Monero' o 'el Paisa' acogió con entusiasmo la propuesta de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, la cual a su vez, presentó como 'proyecto revolucionario' al secretariado de las FARC (sic).
>
> […]

la SRVR respecto de esta condena de la JPO. Los demás condenados en este caso, a excepción de Jorge Briceño Suarez quien murió, comparecen ante la SRVR.

5. <u>FERNANDO ARELLÁN BARAJAS:</u> realizó algunos pasos previos para la ejecución del delito de terrorismo, pues junto con otras personas, entre ellas †Oswaldo Arellán Barajas, conformaron una empresa fachada denominada 'invernar – invernaderos' y se realizaron actos que les permitió comprar, por intermedio de † Jhon Fredy Arellán Barajas, una acción en el club El Nogal en septiembre de 2002.

El segundo de los mencionados en el ítem anterior, junto con **<u>HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS</u>** transportaron desde San Vicente del Caguán, en una caleta de un bus tipo escalera denominado 'la Chiva Rumbera', 20 arrobas de explosivos *anfo* que fueron usadas en el atentado al club El Nogal.
[…]
7. **<u>HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS:</u>** alias 'Pedro' acondicionó con explosivos el vehículo Renault Megane roja, el cual explotó el 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del Club El Nogal.

8. El Juzgado concluyó respecto de la responsabilidad de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS que:

Este despacho tiene certeza de que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS realizó actos de puesta en peligro concreto de la vida e integridad física de personas, mediante la elaboración de un carro bomba como medio que causó estragos y creó un estado de zozobra y terror en la población colombiana. Adicionalmente, como su conducta causó decenas de muertes y puso en peligro cientos de vidas más, este Despacho lo condenará por el concurso homogéneo de delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, y tentativa de homicidio agravada en concurso homogéneo, toda vez que ninguna causal de ausencia de responsabilidad se advirtió en el análisis probatorio, no habiendo duda, entonces, respecto de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta.
[…]
En las pruebas que reposan en el expediente aparece FERNANDO ARELLÁN BARAJAS mintiendo por todos los medios posibles, tratando de convencer que nada tenía que ver con el atentado al club El Nogal; sin embargo, su participación en la constitución de la empresa 'Invernar – invernaderos', el ser el propietario del vehículo en el que transportaban los explosivos, su cercanía al lugar de los hechos, así como la frecuente comunicación que mantuvo con †Jhon Fredy Arellán Zúñiga minutos antes de la explosión y los intentos de ponerse en contacto vía telefónica con él minutos después, aunado al grado de confianza que mantenía no solo con él, sino con su hermano, permiten tener certeza de su responsabilidad como coautor en el atentado al club El Nogal, pues realizó actos esenciales de la conducta de puesta en peligro concreto de la vida, integridad física y libertad de las personas que se encontraban al alcance del carro bomba (medio idóneo) introducido en el club El Nogal, el cual generó

> un estado de zozobra y terror en la población colombiana, razón por la cual este Despacho lo condenará por el concurso homogéneo de delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravada en concurso homogéneo, toda vez que no se advirtió ninguna causal de ausencia de responsabilidad y este procesado actuó consciente de la ilicitud de la conducta desplegada y con capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión.

9. En esa sentencia, el Juzgado impuso a los procesados una pena de 480 meses de prisión, multa de 1055 S.M.L.M.V. e inhabilidad para el ejercicio de los derechos y las funciones públicas por un tiempo de 20 años.

10. En pronunciamiento del 26 de agosto de 2010[3], el Tribunal Superior de Bogotá decretó la cesación de procedimiento por el delito de rebelión por el que habían sido condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS debido a que había prescrito la acción penal respecto de este delito. El Tribunal consideró que desde la ejecutoria de la providencia que confirmó la resolución de acusación, esto es desde el 20 de octubre de 2004, hasta la fecha del pronunciamiento de segunda instancia habían pasado más de 5 años y ls pena por rebelión es de 6 a 9 años operó el fenómeno de prescripción previsto en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000. En consecuencia, en segunda instancia se estableció una pena de 466 meses y 5 días de prisión, multa de 1000 S.M.L.M.V. y 233 meses de inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por los delitos de terrorismo y los concursos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravada.

11. La Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 11 de abril de 2012, decidió no casar la sentencia del 26 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá[4], por lo cual la decisión quedó en firme.

Beneficios transicionales concedidos por la JPO

12. En providencia del 5 de mayo de 2017[5], el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. concedió a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS el beneficio de libertad condicionada respecto de los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en

[3] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, págs. 393 a 486.
[4] Ídem., págs. 487 a 509.
[5] Sistema de Gestión Documental Conti, documento nro. 20171500051052.

concurso homogéneo por los cuales fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00. Ese juzgado consideró que (i) los hechos objeto de condena ocurrieron con anterioridad del Acuerdo Final de Paz; y (ii) de la sentencia condenatoria se deduce que el interesado fue militante o colaborador de las antiguas FARC-EP, lo cual fue corroborado por la OACP al acreditarlo como exintegrante de dicha organización mediante resolución 01 del 27 de febrero de 2017.

13. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Boyacá, en auto interlocutorio del 3 de agosto de 2017[6], concedió el beneficio de libertad condicionada a FERNANDO ARELLÁN por las conductas por las que fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00, considerando que el interesado (i) fue condenado por su pertenencia a las antiguas FARC-EP y acreditado por las OACP como exintegrante de esa guerrilla mediante resolución 03 del 18 de abril de 2017; y (ii) había firmado acta de compromiso ante la JEP.

14. HERMINSUL ARELLÁN, el 10 de marzo de 2017, suscribió el Acta de Compromiso de Libertad Condicional nro. 100496 y el 9 de enero de 2018, el Acta de Compromiso – Reincorporación Política, Social y Económica nro. 500975 ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz[7]. De igual forma, FERNANDO ARELLÁN suscribió dichas actas de compromiso nro. 101660 el 20 de abril de 2017 y nro. 500983 el 1 de septiembre de 2018, respectivamente ante la JEP.

Trámite ante la JEP

15. En escrito del 6 de noviembre de 2020[8], HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, por intermedio de apoderado judicial, el abogado José Fernando Borja Pérez, inscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), solicitó la suspensión del cobro coactivo[9] realizado en su contra por parte de la UARIV con ocasión de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

---

[6] Sistema de Gestión Documental Conti, documento nro. 20171510061352.
[7] Expediente digital LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 6.
[8] Expediente digital LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001, folios 2 – 4.
[9] Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 1820 de 2016, "*EFECTOS DE LA AMNISTÍA. La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas*", la solicitud de suspensión de cobro coactivo realizada por el señor Herminsul Arellán Barajas se entenderá como de amnistía.

16. A fin de contar con información sobre la situación jurídica del señor ARELLÁN BARAJAS, este despacho consultó en el "Sistema Público de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial"[10], el cual registró los siguientes procesos:

- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Radicado 11001070400820050000501. Fiscalía Doce Especializada de Bogotá. Delito: Homicidio.
- Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Radicado 11001310700820050000501. Recurso Extraordinario de Casación.

17. Este despacho también consultó el registro de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación en el cual se indica únicamente la condena impuesta por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante providencia del 28 de noviembre de 2008[11]. Así mismo, este despacho revisó la página de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia y obtuvo como respuesta que "el resultado de su consulta no puede ser generado"[12].

18. También, este despacho constató la existencia y vigencia del Acta de Compromiso de Libertad Condicional nro. 100496 del 10 de marzo de 2017 y del Acta de Reincorporación Social, Política y Económica nro. 500975 del 9 de enero de 2018[13] ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente, este despacho consultó el sistema de registro de la población carcelaria del INPEC y no aparecen datos a nombre de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS[14].

19. Mediante resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022 del 17 de junio de 2022, este despacho amplió información respecto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y ofició a la OACP, al Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) del Ministerio de Defensa Nacional, a las autoridades judiciales a cargo de los procesos

[10] Rama Judicial de Colombia. Sistema para la Gestión de Procesos Judiciales de la Rama Judicial del Poder Público. Consultado el 16 de junio de 2022 en el siguiente enlace: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

[11] Procuraduría General de la Nación. Consulta de Antecedentes. Consultado el 16 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023. Certificado ordinario nro. 224366203.

[12] Policía Nacional de Colombia. Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales. Consultado el 16 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023.

[13] Plataforma CONTI/consultas/actas.

[14] Registro de la Población Privada de la Libertad. INPEC. Consultada el 16 de junio de 2022 y el 1 de junio de 2023.

relacionados al interesado, a la UIA, al interesado y a la UARIV para conocer la situación jurídica del solicitante. Además, reconoció personería jurídica al abogado del SAAD, JOSÉ FERNANDO BORJA PÉREZ.

20. En cumplimiento de la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022, se allegaron a este despacho las siguientes respuestas:

(i) la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá[15] indicó que el expediente se encontraba en el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por lo que remitió la solicitud de la SAI a ese Juzgado;
(ii) En oficio del 22 de junio de 2022[16], la OACP informó que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP mediane resolución nro. 01 del 27 de febrero de 2017;
(iii) El Coordinador del Grupos de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa indicó, mediante oficio del 1 de julio de 2022[17], que no se había encontrado registro de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS como desmovilizado individual de algún grupo organizado la margen de la ley.
(iv) La Fiscalía Especializada Contra las Organizaciones Criminales informó[18] que no contaba con el expediente adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por los hechos ocurridos en el atentado al Club El Nogal ya que fue remitido a los Jueces Penales del Circuito;
(v) El abogado José Fernando Borja Pérez remitió respuesta el 12 de julio de 2022[19] sobre los requerimientos realizados por este despacho en la cual informó que: (a) HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS no ha sido investigado o condenado por otros delitos diferentes a los conocidos por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dentro del radicado nro. 11001310700820050000500; (b) el interesado estuvo privado de la libertad por ese proceso desde el 5 de marzo de 2011 hasta el año 2017 cuando le otorgaron el beneficio transicional de libertad condicionada; (c) en el último año ha tenido dificultades en recibir "sus giros a que tiene derechos como reincorporado debido a que está suspendido como consecuencia de la condena inicial" (*sic*); y (d) "debido al incremento de asesinatos

[15] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 83 a 85.
[16] Oficio OFI22-00060718/IDM 13020001, expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 119 a 120.
[17] Oficio RS20220701063221, expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 179 a 180.
[18] Oficio DECOC-20120 del 6 de julio de 2022, expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 181 a 187.
[19] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 180 a 190.

de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz en Colombia, prefiere tomar sus propias medidas de seguridad por lo tanto la comunicación con el reincorporado tarda algunos días en responder, pero está comprometido a cualquier llamado, requerimiento que le hiciera el Sistema Integral de Justicia o cualquier Sala de la Jurisdicción Especial de Paz";
(vi) La UARIV informó[20] que, con ocasión de la condena impuesta a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dentro del radicado nro. 11001310700820050000500 en la que se impuso una multa por valor de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, "equivalentes a QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($566.700.000) M/cte".
(vii) El 6 de julio de 2022, el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá remitió copia digital del proceso penal con radicado nro. 11001310700820050000500 adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado 29 de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
(viii) El 2 de octubre de 2022, la UIA informó que no se encontraron registros de HERMINSUL ARELLÁN en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) ni en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) y que solo se encontró registro del proceso nro. 11001310700820050000500 en contra del interesado.

21. Al revisar la información allegada a este despacho en cumplimiento de la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022, se advirtió que respecto de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS la JEP no había conocido el trámite por beneficios transicionales sobre el proceso nro. 11001310700820050000500 por lo cual se verificó su situación jurídica. Para ello, este despacho consultó el registro de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación en el cual se indica que el interesado "NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES"[21]. Así mismo, este despacho consultó la página de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia y obtuvo como respuesta que "ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA"[22].

[20] *Ídem*., folio 191 a 195.
[21] Procuraduría General de la Nación. Consulta de Antecedentes. Certificado ordinario nro. 224366326. Consultado el 1 de junio de 2023.
[22] Policía Nacional de Colombia. Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales. Consultado el 1 de junio de 2023.

22. Este despacho constató la vigencia de las actas de compromiso nro. 101660 del 20 de abril de 2017 y nro. 500983 del 1 de septiembre de 2018[23] ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP suscritas por FERNANDO ARELLÁN BARAJAS. Finalmente, este despacho consultó el sistema de registro de la población carcelaria del INPEC y no aparecen datos a nombre de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS[24].

23. Además, este despacho encontró que a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS se le ha concedido en dos oportunidades la autorización de salida del país por otro despacho de la SAI[25].

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Problema jurídico y asuntos que se abordan en esta decisión

24. Este despacho debe determinar el trámite a seguir respecto de los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00. Los hechos objeto de esta condena ocurrieron el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. cuando integrantes de las antiguas FARC-EP detonaron un artefacto explosivo en el Club el Nogal de Bogotá.

25. A fin de establecer dicho trámite, este despacho se referirá a cuatro asuntos pertinentes en el caso bajo estudio:
(i) la competencia de la SAI, la declaratoria anticipada de no amnistiabilidad y la remisión por competencia a otras Salas de Justicia de la JEP;
(ii) el régimen de condicionalidad aplicable a los beneficios transicionales;
(iii) la competencia prevalente de la JEP y la solicitud de la suspensión del cobro coactivo adelantado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por parte de la UARIV; y
(iv) la notificación de víctimas en este trámite.

[23] Plataforma CONTI/consultas/actas.
[24] Registro de la Población Privada de la Libertad. INPEC. Consultada el 1 de junio de 2023.
[25] Expedientes LEGALi 9002572-32.2018.0.00.0001 y 1500220-44.2022.0.00.0001.

(i) Competencia de la SAI, declaratoria anticipada de no amnistiabilidad y remisión por competencia a otras Salas de Justicia de la JEP

26. De conformidad con la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz[26], los despachos de la SAI deben resolver de manera definitiva y no solo provisional la situación jurídica del procesado al interior de la JEP[27]. Para ello, deberá seguir la siguiente ruta:

> (i) Evaluar si la JEP podría tener competencia en el asunto o si, por el contrario, es ostensible que carece completamente de ella, para lo cual podrá decretar – al menos preliminarmente – las pruebas que considere necesarias y con fundamento en ellas decidir si continúa con el trámite o rechaza de plano la solicitud, según proceda. Esto lo hará en un trámite unificado de los beneficios de amnistía o indulto y de libertad condicionada;
> (ii) Examinar, en una etapa temprana del procedimiento, si procede conceder la amnistía de *iure* cuando ello sea jurídicamente posible, y en los demás casos, decidir de oficio o por solicitud de parte el beneficio provisional de la libertad condicionada, para que con fundamento en dicha decisión se defina la suerte que ha de correr el trámite del beneficio definitivo del procesado.
> (iii) Determinar la pertinencia de continuar con el estudio de la amnistía de Sala según la naturaleza del delito, así en los casos que se advierta que se trata de delitos no amnistiables ni indultables se abstendrá de avocar conocimiento y dispondrá su remisión al órgano competente de la JEP; y
> (iv) Avocar conocimiento, cuando sea viable, de la amnistía o el indulto conforme al procedimiento fijado en el artículo 46 de la ley 1922 de 2018.

27. Como lo indica este trámite, para definir la situación jurídica de los solicitantes al interior de la JEP, la SAI debe realizar un estudio preliminar para establecer si el asunto es de su competencia y, para ello, deberá verificar el cumplimiento de los factores de competencia personal, temporal y material.

28. En consecuencia, para agotar el componente (i) de la ruta planteada, en la evaluación de la competencia de la JEP se deberá verificar la concurrencia de los

[26] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 2019 del 9 de octubre de 2019.
[27] *Ibid*. Párr. 133.

factores temporal, personal y material. El ámbito temporal indica que la Jurisdicción "conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016"[28].

29. El factor personal de competencia implica que la persona debió participar en el conflicto armado como combatiente, tercero civil o agente del Estado diferente a miembro de la fuerza pública y, si fue miembro de un grupo armado, tuvo que serlo de las antiguas FARC-EP al ser este grupo el que suscribió "un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional". En relación con el factor de competencia personal para ex integrantes de las antiguas FARC-EP que aspiran a beneficios transicionales, ya sean provisionales o definitivos, los artículos 17, 22 y 29 de la ley 1820 de 2016 y el artículo 6 del decreto 277 de 2017 señalan con fines similares[29], los siguientes requisitos de manera alternativa:

a. Que el solicitante haya sido procesado, investigado o condenado por pertenecer o colaborar con las FARC-EP y así conste en decisión judicial;
b. Que el solicitante haya sido incorporado a los listados entregados por los representantes designados por las FARC EP y verificados por la OACP, aunque no haya sido procesado, investigado o judicializado por su pertenencia a esta organización.
c. Que la sentencia condenatoria en contra del solicitante indique su pertenencia a las FARC-EP, aunque no se le condene por un delito político, siempre que el delito cumpla los requisitos de conexidad;
d. Que el solicitante haya sido investigado, procesado o condenado por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fue investigado o procesado por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP.

30. Adicionalmente, el artículo 23 del Acto Legislativo 01 de 2017 refiere la existencia de dos criterios para examinar el cumplimiento del factor material de competencia que han de tenerse en cuenta en los diferentes estados del trámite:

i) Que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible o,

[28] Ley 1957 de 2019, ley estatutaria de la JEP (LEJEP), artículo 8.
[29] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TP-SA 152 del 24 de abril de 2019.

ii) Que la existencia del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, en cuanto a:

a) Su capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta.

b) Su decisión para cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla.

c) La manera en que fue cometida, es decir, a que, producto del conflicto armado, el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla.

d) La selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito.

31. Ahora bien, como lo ha fijado la SA, cuando "en los casos que se adviertan, de entrada, como no amnistiables ni indultables, deberá abstenerse de avocar conocimiento de dichos beneficios definitivos y disponer la remisión inmediata a la actuación del órgano competente"[30]. Al respecto en el capítulo II de la Ley 1820 establece las características de los asuntos susceptibles de amnistía de Sala. Respecto a los criterios de conexidad los cuales sirven para definir los delitos conexos al delito político sobre el cual se concederá la amnistía, el parágrafo del artículo 23 establece que no serán susceptibles de estos beneficios cuando se trata de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra grave privación de la libertad, tortura, etc.

32. Según lo establecido por la SA en la Sentencia Interpretativa (SENIT) 2, al estudiar la competencia de la SAI en un caso particular y cuando, *prima facie*, se advierta que el asunto se enmarca en uno de los casos priorizados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conducta (SRVR) se remitirá el expediente a dicha Sala de Justicia para que estudie si lo integra al mismo[31].

33. Por su parte, el artículo 23 la Ley 1957 de 2019 (LEJEP) consagra cual será el derecho aplicable en el SIVJRNR e indica que las Salas de Justicia de la JEP podrá n hacer una calificación jurídica propia:

[30] *Ibid*.
[31] *Ibid.,* párr. 142.

> […] respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en las normas de la parte general y especial del Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad
> La calificación resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el Derecho Internacional.

34. De acuerdo a lo anterior, en sentencia TP-SA-AM 316 del 20 de octubre de 2022, la SA estableció que, por decisión de ponente, la SAI tiene la competencia excepcional para recalificar, al menos preliminarmente, y declarar de manera anticipada la no amnistiabilidad de una conducta evidentemente excluida de ese beneficio definitivo transicional. Si bien, por regla general le corresponde a la SAI decidir sobre el otorgamiento o no de la amnistía una vez se agote el procedimiento del artículo 46 de la Ley 1922 de 2018, con observancia de los principios de estricta temporalidad y de economía procesal que rigen los trámites ante la JEP, en aquellos casos de especial gravedad en los que no hay controversias fácticas o jurídicas razonables un magistrado o magistrada de la SAI puede recalificar jurídicamente la conducta al verificar que la conducta se encuentra excluida del beneficio de amnistía. Estos casos pueden presentarse según la SA cuando

> los hechos son manifestaciones paradigmáticos de comportamientos graves contemplados en la ley transicional, o porque existe un notorio desarrollo jurisprudencial –en la SAI, en la SRVR o en el Tribunal– que ha tornado evidente la no amnistiabilidad con fundamento en las categorías de la legislación aplicable[32].

35. En esa sentencia TP-SA-AM 316, la SA estudió el asunto de una compareciente acreditada como exintegrante de las antiguas FARC-EP que fue condenada como coautora de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y terrorismo por haber participado en el atentado cometido por medio de un carro bomba contra la sede de Caracol Radio en Bogotá el 12 de agosto de 2010. En este asunto, la SA confirmó que en decisión de ponente de la SAI era posible recalificar la conducta:

[32] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP-SA-AM 316 del 20 de octubre de 2022. Cfr. Auto TP-SA 888 de 2021, párr. 32 y auto TP-SA 944 de 2021, párr. 14.1.

> […] es evidente que al hacer parte del patrón de macrocriminalidad descrito por la SRVR dentro del auto de apertura del macrocaso 10, las conductas penalmente atribuidas a la compareciente –terrorismo y homicidio agravado en grado de tentativa– alcanzan el umbral de gravedad necesario para ser excluidas del beneficio de amnistía y para ser recalificadas, al menos preliminarmente, como un crimen de guerra resultado de una grave infracción al principio de distinción.

Caso concreto

36. En el caso bajo examen, este despacho pasa a verificar si, con fundamento en la información recabada en este trámite y la información disponible en los sistemas de gestión documental y judicial de la JEP, concurren los factores competenciales respecto de las conductas conocidas en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

37. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá estableció que los hechos conocidos en el mencionado proceso tenían que ver con el atentado con explosivos ocurrido el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá a las 8:05 p.m. aproximadamente por parte de integrante de las antiguas FARC-EP. Es decir, que los hechos que dieron lugar a la condena por terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo ocurrieron antes de la firma del Acuerdo Final de Paz el 1 de diciembre de 2016 y, por lo tanto, **se cumple con el factor temporal de competencia** de la JEP.

38. Respecto del factor personal de competencia establecido en los artículos 17, 22 y 29 de la ley 1820 de 2016 y el artículo 6 del decreto 277 de 2017, en ese caso la sentencia condenatoria del 28 de noviembre de 2008 estableció que el atentado del 7 de febrero de 2003 en el Club el Nogal fue planeado y ejecutado por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Además, en esta sentencia se estableció que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, conocido como 'Pedro' en esa guerrilla, participó en la planeación del atentado junto a comandantes de la mencionada estructura y acondicionó los explosivos en el vehículo que luego detonó en el club El Nogal, y por ello lo condenó por el delito de rebelión, respecto del cual concluyó:

> […] las actividades de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS tipifican el delito de rebelión pues de ellas se infiere que estaba totalmente comprometido con la cusa rebelde; por un lado, fue visto con uniforme militar y portando fusil en zona de

> influencia subversiva y, por otro lado, quedó demostrada su relación con el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', 'alias 'Oscar Montero' o 'el paisa', a quien le cumplió órdenes (transportar explosivos en la 'chiva rumbera') y con posterioridad buscó para solicitar ayuda para su familia AREALLAN (sic), lo que indica su pertenencia a las FARC (sic)[33].

39. En cuanto a la pertenencia de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a las FARC-EP la JPO estableció que según las declaraciones de otro integrante de la guerrilla es posible corroborar "lo que ya era inferido a propósito de la participación de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS en el atentado contra el club El Nogal: su pertenencia a las FARC y su labor como miliciano"[34]. En el proceso, la JPO estableció que el compareciente participó activamente en los pasos previos para ejecutar el atentado, incluyendo comprar una acción del club y disponer de su automóvil para realizar la detonación de explosivos. En ese orden el juzgador concluyó que "de los medios probatorios expuestos antes se puede concluir con grado de certeza que FERNANDO ARELLÁN BARAJAS era miembro de las FARC"[35].

40. Adicional a lo anterior, HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS fueron incluidos en los listados entregados por delegados de las antiguas FARC-EP y verificados por la OACP mediante resolución nro. 01 del 27 de febrero de 2017 y resolución 03 del 18 de abril de 2017, respectivamente. En ese orden, en este asunto este despacho evidencia que **se corrobora el factor de competencia personal respecto de los interesados**.

41. Respecto del análisis del factor de competencia material, este despacho encuentra que la sentencia condenatoria fue clara en indicar que la explosión ocurrida el 7 de febrero de 2003 en el club El Nogal de Bogotá fue planeada y realizada por integrantes de la columna móvil 'Teófilo Forero' de las extintas FARC-EP. Es así como luego de examinar los elementos de juicio vertidos en el proceso, el juzgador concluyó que "está demostrado que el secretariado de las FARC (sic) [ordenó] el atentado contra el club El nogal, conducta que fue planeada y dirigida por el comandante de la columna móvil 'Teófilo Forero', quien era el enlace directo con la dirigencia del grupo alzado en armas". Conforme a esta conclusión el juzgador estableció que "los miembros del secretariado de las FARC (sic) tuvieron conocimiento y voluntad de los resultados típicos que se ocasionaron […] pues

[33] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, pág. 329.
[34] *Ibid*., pág. 348.
[35] *Ibid*., pág. 349.

contaban a su disposición con la columna móvil 'Teófilo Forero' la cual había preparado hombres con conocimiento en explosivos y con la firme convicción de realizar atentados terroristas". En ese orden, el juzgador resaltó que este hecho se enmarcó en una política de la antigua guerrilla:

> Es claro que una orden que produjera tan nefastas consecuencias solamente podía ser emitida desde el nivel más alto y no una decisión autónoma de un comandante que se entendiera como rueda suelta de toda la estructura jerárquica de la organización. Es más, no hay ninguna declaración que apunte en este sentido; por el contrario, alias 'Oscar Montero' o 'el Paisa' celebró la forma en la que se ejecutó el atentado, tanto que quería realizar uno de las mismas características por intermedio de los hermanos Carrillo Hernández en Bogotá. Este hecho se debe entender, tal y como lo refirió la representante del Ministerio Público, como una política de las FARC de atentar sistemáticamente contra las ciudades, la cual es atribuible al máximo órgano de dicha organización al margen de la ley: a los miembros del secretariado. (subrayado fuera de original).

42. Conforme a lo anterior, es posible para este despacho advertir que el conflicto armado fue la causa directa o indirecta de esta conducta punible ocurrida el 7 de febrero de 2003, que este contexto influyó en los autores, en su decisión de cometerla, en la capacidad para hacer el atentado y en la selección del objetivo. Es decir, se verifica la **existencia del ámbito material de competencia.**

43. Ahora bien, al estudiar el ámbito material y establecido que se trata de un asunto de competencia de la JEP, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1820 de 2016 han definido las conductas que pueden ser conocidas por la SAI específicamente por su naturaleza amnistiable. De acuerdo con ese marco normativo, las conductas amnistiables serán aquellas que sean delitos políticos o delitos comunes conexos al delito político que no hayan sido expresamente excluidos por el legislador de este beneficio transicional definitivo. Al respecto, el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 menciona una lista no taxativa de conductas no amnistiables, luego en el artículo 25 de esa norma se indica que de no proceder el beneficio de amnistía la SAI podrá remitir el asunto a otras Salas de Justicia de la JEP.

44. De acuerdo con el literal a del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no podrán ser objeto de amnistía, entre otros, aquellas conductas consideradas graves crímenes de guerra. Por ello, en este caso se pasará a realizar un examen de la conducta en la que participaron HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y

FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a la luz de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) con el propósito de verificar si es viable continuar con el trámite de amnistía o es necesario declarar su no amnistiabilidad, al menos de forma preliminar. El DIH es el marco jurídico que regula la conducta de las partes que participan en hostilidades y la protección a las personas y bienes que no participan en ese escenario.

45. En primer lugar, se analizarán los principios de distinción y precaución en el caso concreto y, en segundo lugar, se hará un examen del ataque en contra del Club el Nogal a la luz de la prohibición de ataques indiscriminados por el Estatuto de Roma y las normas del DIH compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

46. En lo que refiere al primer asunto, se tiene en cuenta que el principio de distinción constituye un fundamento del DIH. A este principio se refieren las primeras normas de DIH compiladas por el CICR, así la Norma 1 indica que "[l]as partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados"[36].

47. Este principio se ha consagrado en normas de los Convenios de Ginebra de 1949. El Protocolo Adicional II 1977 a estos convenios, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13 reglamenta la protección general de la población civil respecto de operaciones militares y establece "[n]o serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil".

48. Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 8.2.e).i) consagra como crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales el "dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.". En ese orden, los ataques permitidos en el marco del DIH deben dirigirse exclusivamente en contra de objetivos militares; así lo consagra la Norma 7 del DIH del CICR. Al respecto, la Norma 8 del DIH indica que los bienes que pueden ser considerados

[36] CICR. (Primera edición: 2007) El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I: Normas.

objetivos militares son aquellos que "por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida".

49. En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal[37] de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil.

50. Al respecto, la sentencia condenatoria de la JPO reconoció que la rebelión tiene límites que deben respetar el DIH y procurar el respeto del principio de distinción encaminado a proteger a la población civil:

> En segundo lugar, Este Despacho no desconoce, como lo dice la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que los actos de rebelión no se agotan solamente en el enfrentamiento armado con los miembros de la fuerza pública, (…) [pues] el tipo delictivo también encuentra realización en la sola pertenencia del sujeto agente al grupo subversivo y que por dicha razón le sean encomendadas labores de cualquier naturaleza"
> Sin embargo, se reitera, las labores de cualquier naturaleza encomendadas a los integrantes del grupo alzado en armas tienen límites y no pueden cobijar, por ejemplo, actos de terrorismo en contra de población protegida por el Derecho Internacional Humanitario[38].

51. Ese ataque también constituyó una violación al principio de precaución el cual, según la Norma 14 del DIH implica que "[l]as operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar

[37] Cfr. Página web del Club El Nogal, https://www.clubelnogal.com/el-club/.
[38] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, pág. 317.

incidentalmente". Así mismo, la Norma 17 dispone que "las partes en conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de guerra para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y de heridos entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente". Al contrario de estos mandatos, la fecha y hora en la que ocurrió el ataque al Club el Nogal dejan ver que no se tomó ninguna precaución para evitar daños a civiles y bienes de carácter civil y se causó la muerte de 36 personas y se lesionaron otras 158, asimismo, este ataque dejó múltiples afectaciones materiales al mismo Club, a vehículos y a edificaciones aledañas.

52. La vulneración a los principios de distinción y precaución también quedaron evidenciados en lo establecido en la sentencia condenatoria cuando estudió la imputación del delito de terrorismo:

> […] debido a la puesta en peligro concreto de la vida de las personas que se encontraban dentro del club EI Nogal se materializó con un medio capaz de causar estragos (especialmente de las 158 personas que resultaron en peligro de muerte, lo que se encuentra plenamente demostrado en el proceso y se puede constatar por la clase de lesiones que ellas tuvieron), se puede inferir los fines terroristas en la realización de la conducta, razón por la cual se configura el delito de tentativa de homicidio con fines terroristas, pues la explosión del carro Renault Megane rojo fue un acto idóneo e inequívocamente dirigido a causar la muerte de todas las personas que se encontraran dentro de la onda explosiva, es decir, de todos los asistentes al club El Nogal en la noche del 7 de febrero de 2003, lo que significa que la consumación del delito de homicidio no se dio debido a circunstancias ajenas a la voluntad de los autores del delito[39].

53. Además de las graves violaciones a los principios de distinción y precaución del DIH, el ataque perpetrado en el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 fue parte de una política de las antiguas FARC-EP, según lo estableció la JPO.

54. Al respecto, se debe señalar que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional castiga los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes"[40]. En este instrumento internacional, se entiende por graves violaciones al

[39] *Ibid.*, pág. 286.
[40] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998, artículo 8.

artículo 3 común a los cuatro Convenios de ginebra de 1949, entre otros, "[l]os atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura"; asimismo, se castigan como "otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional", (art. 8.e.i) "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades". De acuerdo con la Norma 12 del DIH son ataques indiscriminados aquellos:

> a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;
> b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o
> c) en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho internacional humanitario; y que, en consecuencia pueden alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil[41].

55. Se destaca por este despacho que la SAI ya ha utilizado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para recalificar conductas cuando se corresponden con la lista de crímenes de guerra prevista en el artículo 8.2 literales c) y e) del ER[42].

56. En este caso, como se estableció en párrafos anteriores, el ataque no se dirigió contra un objetivo militar, sino en contra de un club social y empresarial. Por ello, este despacho pasa a referirse a los medios y métodos empleados para este ataque, en concreto el carro bomba. Al respecto, cuando la SA estudió el caso de un carro bomba que estalló frente a las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, indicó que los carros bombas pueden considerarse prohibidos a la luz del DIH, así:

> […] si bien los carros-bomba no están proscritos *per se* como armas de guerra conforme al DIH[43], su utilización en este caso no estaba permitida porque tuvo efectos previsiblemente indiscriminados y buscaba generar terror entre la población civil. Además, fue empleado exclusivamente como instrumento de ataque contra personas y bienes de carácter civil, lo cual está prohibido de forma expresa por el artículo 3.7 del Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas

[41] Comité Internacional de la Cruz Roja, *El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I: Normas*, Norma 12, p. 46.
[42] Cfr. Resolución SAI-AOI-D-ASM-051-2019 y resolución SAI-SUBA-AOI-D-075-2020.
[43] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP-SA-AM 273 de 2020, párr. 66.10.1.6.

trampa y otros artefactos[44] de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW por sus siglas en inglés)[45].

57. En el caso del ataque al Club El Nogal se puede ver que se dirigió en contra de población civil y dejó pérdidas humanas y materiales significativas. Al respecto, la JPO estableció:

> En el caso sub examen, no hay dificultad para establecer que la explosión ocurrida en el club El Nogal causó la muerte a 36 personas, lo que se encuentra plenamente demostrado en el proceso en los cuadernos anexos de inspección a cadáveres en donde reposan actas de levantamiento de cadáver de 36 cuerpos,' (véase también supra §4; II; A), hecho que configuró el delito de homicidio en concurso homogéneo con fines terroristas, pues el medio y el lugar utilizado para realizar la conducta hace ostensible y evidente que la misma, desde una valoración ex ante, generaría terror, zozobra y alarma colectiva. Las circunstancias conocidas ex post confirman lo que ex ante era previsible: la forma en la que las personas perdieron la vida generó terror y zozobra a nivel nacional, por las imágenes escalofriantes de personas con quemaduras de tercer grado que dejó sus tejidos carbonizados y, en general, por la sorpresa de la explosión en un lugar público, ajeno a la disputa bélica que padece internamente el Estado colombiano[46].

58. En ese orden de ideas, el ataque produjo muertes y lesiones de civiles que no eran objetivos militares y gozaban de protección a la luz del DIH. Al analizar esas conductas dentro del ordenamiento jurídico nacional se encuentra concordancia con lo establecido en el Código Penal colombiano – Ley 599 de 2000 que, en los artículos 135 y 136 contenidos en el título de delitos contra Personas y Bienes Protegidos por

---

[44] La norma prohíbe *"en todas las circunstancias"*, emplear minas, armas trampa u otros artefactos, *"sea como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia contra la población civil propiamente dicha o contra personas civiles o bienes de carácter civil"*. En los términos del artículo 2.5 del mismo Protocolo, el concepto *"otros artefactos"* comprende *"las municiones y artefactos colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar daños, y que sean accionados manualmente, por control remoto o de manera automática con efecto retardado"*. Los carros-bomba –ha dicho la SA– integran la categoría *"otros artefactos"* en tanto se trata de un *"artilugio improvisado que se acondiciona con material explosivo para que su deflagración cause daño y cuya ignición se realiza, generalmente, por medio de un control remoto o con temporizadores"*. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencia TP-SA-AM 273 de 2020, párr. 66.10.1.2.

[45] Colombia aprobó la CCW, el Protocolo II de 1980 y el Protocolo II enmendado en la Ley 469 de 1998.

[46] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, pág. 285.

el Derecho Internacional Humanitario, tipifica las conductas de homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida respectivamente.

59. Según el artículo 135 estos homicidios se presentan cuando "[e]l que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia"; mientras que se incurre en el delito de las lesiones en persona protegida cuando "con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cause daño a la integridad física o a la salud de persona protegida conforme al Derecho Internacional Humanitario". Además, el parágrafo del artículo 135 indica que, para efectos de la aplicación de esas normas, se entenderá "por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario: 1. Los integrantes de la población civil; 2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa […]".

60. En este caso es claro que, *al menos de forma preliminar*, los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, podrán ser calificados en esta instancia como graves violaciones al DIH a la luz de los principios de distinción y precaución, y están excluidos del beneficio de amnistía. En consecuencia, al examinar en concreto los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fueron condenados los comparecientes en el proceso penal con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00, este despacho evidencia que pueden ser calificados, para efectos de este pronunciamiento y de forma preliminar, como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de conformidad con los artículos 135 y 136 del Código Penal colombiano. Además, el ataque con carro bomba al Club el Nogal puede constituir, en el examen inicial realizado en esta instancia, un ataque contra la población civil castigado por el artículo 8.e.i) del Estatuto de Roma y por la Norma 11 del DIH.

61. Para realizar esta calificación propia del SIVJRNR, de forma preliminar, este despacho tuvo en cuenta los elementos de juicio considerados por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá al emitir la sentencia condenatoria, así como los principios y normas de DIH aplicables. En consecuencia, se hará una calificación propia del SIVJRNR y preliminar de las conductas por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS a efectos de declarar anticipadamente su no amnistiabilidad por

constituir graves crímenes de guerra excluidos de este beneficio definitivo por el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016.

62. Conforme a esta determinación, la SA ha señalado que, si se advierte en el asunto "que el caso analizado por la SAI se enmarque, *prima facie*, en alguno de los priorizados por la SRVR, el expediente deberá ser remitido a dicha sala para que decida sobre su integración al mismo"[47].

63. Así, este despacho encuentra que los hechos por los cuales fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS en el proceso penal nro. 11001310700820050000500 pueden ser competencia de la SRVR en el marco del caso nro. 10 "Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano".

64. El 11 de julio de 2022, mediante Auto SRVR no. 102, la SRVR avocó conocimiento del caso nro. 10 en el cual convergen varias líneas de investigación de patrones de macro criminalidad entre los cuales se fijaron: (i) patrón de conductas no amnistiables cometidos en ejercicio del control social y territorial que incluye hechos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado y violencia sexual; (ii) patrón de conductas no amnistiables cometidas en el desarrollo de las hostilidades que agrupa acciones relacionadas con uso de medios y métodos ilícitos de guerra, así como hechos de violencia sexual, masacres y otros que ocurran en el contexto de un ataque; y (iii) patrón de conductas no amnistiables agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos en el que se agrupan hechos relacionados con homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, y otros atentados a personas y bienes civiles con explosivos, así como homicidios selectivos y atentados a civiles cometidos por o con el apoyo de redes urbanas de las FARC-EP.

65. En ese orden, los hechos acaecidos el 7 de febrero de 2003, cuando se realizó un atentado con explosivos en el club El Nogal en Bogotá por parte de integrantes de las antiguas FARC-EP, lo que ocasionó la muerte de 36 personas y se atentó en contra de la vida de otras 158, así como se ocasionaron daños materiales a ese club y a las edificaciones aledañas y a vehículos, se puede enmarcar en los patrones de macrocriminalidad (ii) y (iii) avocados por la SRVR en el caso nro. 10.

[47] Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, Sentencia Interpretativa SENIT 2, párr. 142.

66. De hecho, el mismo Auto SRVR no. 102 indica que la Sala de Reconocimiento avoca el caso nro. 10 en atención a la orden de tutela emitida por la SA el 2 de febrero de 2022[48], presentada por Martha Dolores López de Vargas, quien había solicitado en el 2019 su acreditación como víctima del atentado perpetrado por las FARC-EP en el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, así como la priorización de este hecho en un macrocaso sobre el mismo, o en alguno de los macrocasos actualmente en curso. En esa sentencia de tutela se ordenó resolver sobre la segunda ronda de priorización. Por ello, en el auto de la SRVR mencionado se indicó:

> La SA afirmó que la Sala de Reconocimiento tiene el deber de resolver sobre la segunda ronda de priorización, para que las víctimas puedan ser acreditadas y pueda despejar la inquietud de la tutelante respecto de si se analizará su caso de manera particular o como parte de un macrocaso que abra la Sala y en el cual pueda ser incluido el caso del club El Nogal[49].

67. En ese orden, considerando que HERMINSUL y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS fueron condenados por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo en el proceso penal nro. 11001310700820050000500 por los hechos ocurridos en el club El Nogal el 7 de febrero de 2003, no cabe duda para este despacho que el expediente conocido en este trámite de la SAI debe ser remitido para el conocimiento de la SRVR en el marco del caso nro. 10.

68. Además, se advierte que, respecto de la ruta descrita en el trámite ante la SAI, se verifica en este caso concreto que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS recibieron el beneficio transicional provisional de libertad condicionada por parte de la JPO respecto de las conductas conocidas en proceso penal nro. 11001310700820050000500 y no procede respecto de las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo el beneficio de amnistía de *iure.* Si bien, en la sentencia de primera instancia los comparecientes fueron condenados por el delito de rebelión, en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá decretó la cesación de procedimiento por este delito, según el fallo del 26 de agosto de 2010.

[48] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Sentencia TP-SA 287 de 2022.
[49] JEP. SRVR. Auto SRVR no. 102, párr. 27.

69. En consecuencia, el asunto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS será remitido al caso nro. 10 de la SRVR para que sea estudiado dentro de los patrones de conductas no amnistiables cometidas en la conducción de hostilidades y de aquellas agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos, las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, por las que fueron condenados los comparecientes en sentencia del 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y recalificadas preliminarmente para efectos de este pronunciamiento como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional según el artículo 8.e.1) del Estatuto de Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000.

(ii) Sobre los beneficios transicionales conferidos por la Jurisdicción Penal Especial de Justicia y Paz y el régimen de condicionalidad aplicable

70. En la ley 1820 de 2016 se previeron varios beneficios para quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, entre ellos la amnistía y la libertad condicionada. Cuando empezó a operar esa legislación la competencia para conocer de las solicitudes de libertad condicionada estaba en cabeza de las autoridades judiciales ordinarias, de acuerdo con la mencionada ley y el decreto 277 de 2017. Sobre el particular la SA, en la Sentencia Interpretativa 2 (SENIT 2) de octubre de 2019, precisó:

> *ii) Las autoridades judiciales inicialmente competentes para conceder el beneficio definitivo de amnistía de iure y los provisionales de libertad condicionada o traslado a ZVTN*
>
> 46. Es de anotar que los dos cuerpos normativos que se ocuparon de la concesión de dichos beneficios antes de la entrada en funcionamiento de la JEP –la Ley 1820 y el Decreto 277–, también fijaron en cabeza de las autoridades judiciales ordinarias la competencia inicial para otorgarlos sin excluir que, a la postre, esta jurisdicción asumiría parte de esas atribuciones, aunque, en principio, lo haría sólo de manera residual. […]
>
> 47. Pero es fundamentalmente de la cronología de los beneficios que se desprende que, en principio, lo esperable era que dichos beneficios fueran resueltos por la jurisdicción ordinaria, de modo que la JEP se limitara a conocer de las peticiones rezagadas. En

> efecto, dado que las solicitudes podían elevarse desde la promulgación de la Ley 1820, esto es, desde el 30 de diciembre de 2016 y que, de acuerdo con los términos allí previstos y posteriormente aclarados en el Decreto 277 de 17 de febrero de 2017, dichas decisiones debían ser adoptadas en un término máximo de 10 días hábiles, era razonable prever que la mayoría de las solicitudes se presentarían y resolverían en el primer semestre de 2017, época para la cual la JEP aun no entraría en funcionamiento.

71. Ahora bien, el Acto Legislativo 01 del 2017 establece que los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición "no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades"[50].

72. A partir de esta noción de relaciones de condicionalidad entre beneficios y obligaciones, la Corte Constitucional elaboró el concepto de "Régimen de Condicionalidad" en la Sentencia C-674 de 2017, estableciendo una serie de obligaciones genéricas que deben ser cumplidas por quienes pretenden recibir y mantener los tratamientos penales especiales contemplados en las normas que desarrollan el Acuerdo Final de Paz[51]. Para la Corte, la imposición, supervisión y seguimiento del régimen deben ser realizados por la JEP, bajo los siguientes parámetros:

> i) El régimen es *integral y comprensivo*, en tanto que se extiende a todos los beneficios y medidas sancionatorias especiales y es transversal a todos los componentes del Sistema Integral (JEP, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas);
>
> ii) Se extiende tanto al acceso como al mantenimiento de los beneficios, por lo que el incumplimiento de condiciones no solo impide el acceso a los tratamientos diferenciales, sino que puede implicar su suspensión o pérdida de forma proporcional a la falta y
>
> iii) Debe estructurarse bajo los *principios de proporcionalidad y gradualidad*, "en el sentido de que el nivel de contribución a la verdad, a la reparación y a la no repetición determina, al menos parcialmente, la magnitud de los beneficios susceptibles de ser

[50] Acto Legislativo nro. 01 del 4 de abril de 2017, artículo transitorio 1°.
[51] Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017, apartado 5.5.1.1.

> otorgados, y en el sentido de que la dimensión y la gravedad del incumplimiento de las condiciones determina el alcance de la pérdida del tratamiento especial"[52].

73. Estos desarrollos fueron recogidos en el artículo 20 de la ley 1957 de 2019 (Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP- LEJEP) que definió de manera más precisa las obligaciones que debe contener el régimen, así como, las consecuencias de su incumplimiento. El parágrafo 3 de ese artículo citado debe leerse en concordancia con el artículo 67 de la ley 1922 de 2018 según el cual las faltas en que incurran los comparecientes originarán la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

74. El Acto Legislativo 01 del 2017 también prevé que para acceder al tratamiento especial del componente de Justicia del SIVJRNR, los comparecientes deberán aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición[53]. Esto, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 1820 del 2016, según el cual la concesión de los beneficios previstos en esa norma "no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz"[54]. Para ello, las Salas y Secciones cuentan con la posibilidad de implementar mecanismos tales como el formato F-1 o la convocatoria a diligencias de aporte a la verdad.

75. Para tal efecto, teniendo en cuenta que las Salas deben contar con instrumentos para desplegar aquella tarea y considerando que este no solo debe contener el compromiso de aportar la verdad sobre las conductas propias y las de otras personas, sino también dar información exhaustiva y detallada para esclarecer fenómenos de macro criminalidad y victimización por medio de datos de orden personal y de contexto, que contribuyan a descubrir de un modo completo estas estructuras, redes, nexos, forma de financiación y patrones, la SA creó el anexo o formato F-1. Según lo descrito en la Sentencia Interpretativa, el formato F-1 es una planilla de recolección de información que tiene como fin práctico la "aplicación homogénea de los principios que justifican la transición" y la gestión adecuada de la interacción restaurativa y el ejercicio de las competencias de la JEP. Así mismo,

[52] *Ídem.*
[53] Acto Legislativo nro. 01 del 4 de abril de 2017, artículo transitorio 5°.
[54] Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, Sentencia Interpretativa 1 TP-SA-SENIT 1 de 2019.

debe ser suscrita cuando la persona se presenta ante la JEP o en cualquier momento a partir de entonces.

76. Este formato F-1 ha sido considerado, de acuerdo con la jurisprudencia de la SA, como "un mecanismo de carácter obligatorio, diseñado con varios propósitos, entre ellos, recoger aportes preliminares a la satisfacción de los derechos de las víctimas y, en especial, a la verdad, de forma sistematizada y propicia para nutrir las bases de datos de la JEP y posibilitar así el cruce de información"[55].

Análisis del caso concreto

77. Respecto de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS este despacho advierte que fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP en la OACP en la resolución nro. 01 del 27 de febrero de 2017; recibió el beneficio de LC el 5 de mayo de 2017 por parte del Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

78. En lo que tiene que ver con FERNANDO ARELLÁN BARAJAS este despacho encontró que también fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP mediante resolución 03 del 18 de abril de 2017 expedida por la OACP, y recibió el beneficio de LC en decisión del 3 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Boyacá en relación con las conductas de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fue condenado en el proceso penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

79. En consecuencia, el mantenimiento del beneficio transicional de LC por parte de los comparecientes HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS quedará sometido al siguiente régimen de condicionalidades que por medio de esta providencia impone este despacho de la SAI de la JEP; sin perjuicio de que, luego de su firma, se pueda llamar a los comparecientes para que continúen cumpliendo el compromiso de contribuir a la verdad mediante la presentación de una entrevista u otros mecanismos. Así, los comparecientes deberán:

[55] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 607 de 2020, párr. 38.

1. Informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Secretaría Ejecutiva.
2. No salir del país sin previa autorización de la Sala de Amnistía o Indulto.
3. Garantizar la dejación de armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de delitos contemplados en nuestra legislación penal.
4. Participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas.
5. Comparecer ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas o ante la JEP cuando sea requerida, aportando verdad plena.
6. Comparecer ante la JEP cuando sea requerido en trámites judiciales, incluidos, pero no limitados, a los que usted adelante en causa propia.
7. Contribuir por escrito al esclarecimiento de la verdad para que informe sobre hechos y conductas de las que tenga conocimiento para efectos de determinar máximos responsables políticos y militares en las antiguas FARC-EP de las que fue integrante.
8. Diligenciar de manera íntegra y exhaustiva el formato F-1 que se pondrá en su conocimiento.

80. Conforme a lo expuesto, HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS deberán, con el acompañamiento de su abogado o abogada de confianza, o en caso de no contar con uno, con un profesional del derecho adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP, remitir por vía electrónica, el acta de Régimen de Condicionalidad que se adjunta a la presente resolución. Esta acta servirá como constancia de su entendimiento sobre las obligaciones a las cuales están sometidos en relación con esta jurisdicción especial y el SIVJRNR.

81. Además, en concordancia con la jurisprudencia de la SA y como materialización de la obligación contenida en los numerales 7 y 8 del Régimen de Condicionalidad que les será comunicado a los comparecientes, se espera contar con el formato F-1 debidamente diligenciado.

82. En el caso de FERNANDO ARELLÁN con ocasión de la autorización de salida del país concedida por la SAI, mediante resolución SAI-SP-D-MGM-117-2022 del 4 de marzo de 2022, el interesado allegó el formato F-1 diligenciado. Por ello, se tendrá en cuenta dicho formato sin perjuicio de que FERNANDO ARELLÁN remita a este

despacho una versión actualizada o completa del formato F-1 que sirva para este trámite concreto.

83. Por su parte, HERMINSUL ARELLÁN deberá, con el acompañamiento de su abogado o abogada de confianza, remitir debidamente diligenciado el mencionado formato F-1 dentro de los veinte (20) hábiles siguientes a la notificación de esta resolución. El incumplimiento injustificado de esta obligación podría implicar una infracción al Régimen de Condicionalidad, con la subsiguiente imposición de sanciones que pueden derivarse de un incidente de incumplimiento. En este formato F-1 el interesado deberá referirse en particular y de manera detallada a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se dio su pertenencia a las FARC-EP y que llevaron a la comisión de los hechos por los que fue condenado por el ataque al club El Nogal del 7 de febrero de 2003.

(iii) La competencia prevalente de la JEP y la solicitud de la suspensión del cobro coactivo realizado en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS por parte de la UARIV

84. De acuerdo con el apartado 5.1.2 *justicia* del Acuerdo Final para la Paz la JEP ejercerá competencia de forma prevalente sobre actuaciones penales, disciplinarias o administrativas cuando se trata de conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, así:

> El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.
>
> Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos. […]

85. Esta misma disposición se encuentra en el artículo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2017. De igual, forma el artículo 36 de la Ley 1957 de 2019 (LEJEP) establece la prevalencia de la JEP.

86. El numeral 3.2 del Acuerdo Final para la Paz "Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses", pone de presente que el proceso de reincorporación tiene:

> [C]arácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación.

87. Acorde a ello, el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 2017 estableció que para efectos de la reincorporación las penas impuestas en la JPO por delitos de competencia de la JEP quedarán en efecto suspensivo en los siguientes términos:

> Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia.

88. Al estudiar esta norma, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del precepto en sentencia C-674 de 2017, e indicó que estas medidas de dejar en efecto suspensivo las sanciones penales derivadas de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado:

> [S]e orientan a materializar las exigencias inherentes a la terminación del conflicto armado y al principio de participación política como eje esencial del ordenamiento superior, en cualquier caso deben ser articuladas con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario […]

> En efecto, la reincorporación a la vida pública de quienes han intervenido en el conflicto armado constituye un elemento decisivo y determinante del proceso de paz, teniendo en cuenta, por un lado, que una de las razones que han esgrimido quienes han participado en los escenarios de violencia generalizada y sistemática del país es la carencia de espacios de participación democrática para canalizar las necesidades, los intereses y las expectativas de todo el conglomerado social, y por otro lado, que la disposición de los grupos armados al margen de la ley para entregar las armas ha estado condicionada a que se abran estos espacios de participación política, para "sustituir las armas por la política". De este modo, la reincorporación a la vida pública de quienes intervinieron en el conflicto armado, particularmente de los grupos armados al margen de la ley, constituye un elemento crucial en el proceso de construcción de una paz estable y duradera[56].

89. En aplicación de esta norma, la Subsección segunda de Tutelas de la Sección de Revisión del Tribunal Para la Paz al estudiar la acción de tutela interpuesta por una exintegrante de las antiguas FARC-EP, compareciente ante la SRVR, en contra de quien se adelantaba un proceso de cobro coactivo por la UARIV, indicó en sentencia SRT-ST-090/2023 del 25 de mayo de 2023 que:

> […] aquellas sanciones que se deriven de delitos de competencia de esta jurisdicción quedaron en efecto suspensivo para efectos de la reincorporación de los firmantes, es decir, no se produce una extinción sino una suspensión respecto de los efectos de la condena sobre estos delitos
> […]
> Por otra parte, se evidencia que la UARIV desconoce que de conformidad con el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 2017, aquellas sanciones que se deriven de delitos de competencia de esta jurisdicción quedaron en efecto suspensivo para efectos de la reincorporación de los firmantes.

90. Por lo anterior, la Sección de Revisión ordenó a la UARIV "determinar la suspensión del cobro coactivo en todo o parte" para lograr la exitosa reincorporación de la firmante.

91. En consecuencia, es posible conceder la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por la UARIV respecto de una condena impuesta por la JPO de delitos que son competencia de la JEP y cuando se trate de un compareciente al cual no se le ha resuelto definitivamente su situación ante esta jurisdicción a fin de lograr

[56] Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

su proceso de reincorporación, considerando que este es un pilar esencial del Acuerdo Final de Paz.

92. Ahora bien, esta suspensión deberá observar los compromisos adquiridos ante el sistema Integral para la Paz (o SIVJRNR) y el principio de continua adaptación de la comparecencia. Según la Sentencia Interpretativa 2 (SENIT 2) este principio se constituye como un:

> [E]stándar que sintetiza la necesidad institucional de adaptar la realidad de los comparecientes que disfrutan beneficios provisionales de la transición, de la manera que mejor se ajuste a los objetivos del Sistema. Esto supone la necesidad de mantener o fomentar la confianza construida a través de mecanismos provisionales de acceso a la libertad, sin perder de vista el imperativo de asegurar una efectiva contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. No puede pasarse por alto, entonces, que el ajuste en las condiciones de comparecencia es indispensable para lograr que los mecanismos de justicia transicional cumplan efectivamente con los estándares y normas internacionales en la materia. El Estado debe garantizar que se investiguen y sancionen las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; que se repare a las víctimas; y que se conozca la verdad de lo acontecido. Por tanto, la primera obligación del sistema es asegurar que las personas comparezcan de verdad y realmente para que cumplan ante la sociedad y las víctimas los compromisos adquiridos.

93. En ese orden, la suspensión del proceso de cobro coactivo ante la UARIV tiene el propósito de facilitar el proceso de reincorporación del compareciente, así como su proceso de comparecencia a la JEP, el desarrollo del régimen de condicionalidad y el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

Caso concreto

94. En el caso de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, el interesado solicitó a la JEP la suspensión del cobro coactivo adelantado por la UARIV en su contra como consecuencia de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00. En esa solicitud (ver *supra* párr. 15), HERMINSUL ARELLÁN hizo referencia a la competencia prevalente de la JEP respecto de sanciones penales,

disciplinarias o administrativas respecto de conductas ocurridas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, incluyendo la facultad de extinguir o anular la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta, así como a su vinculación al proceso de reincorporación. Además, el solicitante indicó respecto del cobro realizado por la UARIV que "no cuenta con fundamento jurídico y es una clara vía de hecho de la administración, en tanto se trata de un asunto de competencia prevalente de la JEP. En sustento de su petición remitió copia de un documento emitido por el Banco Agrario de Colombia que evidencia el embargo a la cuenta de ese banco del interesado por parte de la UARIV por un valor de $1.133.400.000. Por lo anterior, solicitó:

> La suspensión económica y traslado a la JEP del expediente emitido por el Juzgado Octavo (8) Penal Del Circuito Especializado De Bogotá D.C, de radicado 11000131070082005-0005, por parte de la Unidad de Víctimas (Oficina de Cobro coactivo – por la suma de 1´133.400.000 mil ciento treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos), toda vez que el Juzgado ya lo hizo y dio traslado a la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP. La presente solicitud fundamentada con lo establecido en literal b) del artículo 79 de la ley 1957 de 2019, que establece la obligación de las autoridades judiciales y administrativas del Estado Colombiano de trasladar las sentencias e investigaciones que se fundamenten en conductas que se relacionen directa o indirectamente con el conflicto armado.

95. Por lo anterior, en resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022 del 17 de junio de 2022, este despacho requirió a la UARIV para que informara acerca de los cobros coactivos realizados al interesado. En atención a ello, la UARIV indicó que la multa de 1.000 S.M.L.M.V, equivalentes a quinientos sesenta y seis millones setecientos mil pesos por la que fue condenado HERMINSUL ARELLÁN en la sentencia del 28 de noviembre de 2008 proferida por la JPO:

> […] se constituyó una obligación clara, expresa y actualmente exigible, susceptible de ser cobrada por jurisdicción coactiva por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
>
> […] dentro del mismo procedimiento, se avocó conocimiento mediante Auto 590 del 08 de julio de 2014, ordenando iniciar [la] etapa de cobro persuasivo; el 19 de abril de 2017, se emitió [el] mandamiento de pago y, finalmente se [decretaron] medidas cautelares el 18 de julio de 2017 a través del Auto 7755.

> Asimismo, le manifestamos que, el señor Herminsul Arellán Barajas, interpuso acción de tutela por derecho de petición en el mes de marzo de 2022, ante el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá, la cual no prosperó.
>
> Ahora bien, es preciso mencionar, que la forma de dar terminación a este tipo de proceso es el pago total de la multa y, de esta manera, levantar las medidas cautelares que fueron decretadas sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria […]. Por otra parte, puede presentar una propuesta de acuerdo de pago previa garantía de la obligación o, por orden judicial donde se determine que operó la extinción de las penas tanto de prisión como de multa, esta última, de vital interés para nosotros.
>
> Finalmente, esta institución indicó "que la Unidad para las Víctimas se encuentra en total disposición, a fin de generar articulación con su respetado despacho, para abordar este tema"[57].

96. Con el propósito de verificar la vinculación al proceso de reincorporación liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), este despacho consultó el Sistema de Apoyo para la Reincorporación (SARA) el 6 de junio de 2023, en el cual se reporta que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS se desmovilizó colectivamente, ha completado el ciclo 6 de formación agropecuaria y se encuentra activo en el proceso de reincorporación.

97. En ese orden, en aplicación del artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional, es procedente ordenar la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por la UARIV en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS. Para ello, este despacho considera que en este caso debe tenerse en cuenta que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS:

(i) fue acreditado como exintegrante de las antiguas FARC-EP por la OACP;
(ii) recibió el beneficio de LC por la JPO por la condena impuesta el 28 de noviembre de 2008, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00;
(iii) suscribió el Acta de Compromiso de Libertad Condicional nro. 100496 el 10 de marzo de 2017 y el 9 de enero de 2018, el Acta de Compromiso – Reincorporación Política, Social y Económica nro. 500975 ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP, las cuales aparecen vigentes en el sistema de gestión documental CONTi de la JEP;

[57] Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 191 a 195.

(iv) se evidencia en esta decisión que los hechos condenados en esa sentencia mencionada son competencia de la JEP y serán remitidos por este despacho a la SRVR para que sean conocidos dentro del caso nro. 10;
(v) con ocasión del beneficio provisional de LC concedido por la JPO, mediante esta decisión se impone el régimen de condicionalidad al interesado y se le requiere para diligencia de manera exhaustiva el formato F-1; y
(vi) se encuentra vinculado al proceso de reincorporación a cargo de la ARN en el cual se encuentra activo.

98. Por lo anterior, en ejercicio de la competencia prevalente de la JEP, al tratarse de un firmante de paz, compareciente ante la JEP y respecto de quien la definición de su situación jurídica quedará bajo la competencia de la SRVR, se ordenará la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por parte de la UARIV en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS con el propósito de cumplir con los fines de su reincorporación en atención al principio de continua adaptación de la comparecencia. Por ello, esta decisión considerará el debido cumplimiento del régimen de condicionalidad y la materialización de los derechos de las víctimas. En consecuencia, esta suspensión operará una vez el compareciente suscriba el régimen de condicionalidad y remita diligenciado de forma exhaustiva el formato F-1.

99. Además, la suspensión del proceso de cobro coactivo por parte de la UARIV no implicará el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el marco de ese proceso.

100. La renta básica de la que trata el artículo 8 del decreto 899 de 2017, modificado por el artículo 284 de la ley 1955 de 2019, de la cual se beneficia quien cumpla con la ruta de reincorporación y considerando, como lo establece la norma citada, que "este beneficio no será considerado fuente de generación de ingresos" deberá brindarse al compareciente a través de una nueva cuenta bancaria a fin de cumplir y facilitar su proceso de reincorporación. Para ello, se le solicitará a la ARN que informe a este despacho sobre esa asignación mensual en favor del interesado, así como el cumplimiento de sus compromisos en el proceso de reincorporación.

101. Esta suspensión del cobro coactivo estará condicionada a que HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS cumpla con sus compromisos ante el SIVRJR, entre ellos su efectiva reincorporación. En consecuencia, también se le solicitará a la ARN que

informe sobre cualquier incumplimiento o limitante del proceso de reincorporación del compareciente.

102. Estas condiciones en las que se concede la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado por la UARIV buscan facilitar el proceso de comparecencia y reincorporación del interesado, así como garantizar los derechos de las víctimas y su centralidad en los trámites ante la JEP.

(iv) Participación de las víctimas en este trámite

103. La participación de las víctimas en los trámites adelantados ante la JEP es un derecho amparado constitucionalmente. El artículo 12 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 exige que las normas en las cuales se desarrolla el procedimiento ante la JEP garanticen la "participación de las víctimas como intervinientes según los estándares nacionales e internacionales y los parámetros establecidos en el Acuerdo Final". Así mismo, la Corte Constitucional estableció que "la garantía de los derechos de las víctimas es el fundamento y finalidad esencial de la Jurisdicción Especial para la Paz"[58]. Por ello, este despacho procurará concretar el ejercicio del derecho a participar de las víctimas en el trámite adelantado ante la JEP respecto de los ciudadanos HERMINSUL y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS.

104. Como lo ha establecido la SA, la intervención de las víctimas en todos los procedimientos ante la JEP es una condición que posibilita el óptimo funcionamiento del Sistema Integral para la Paz. Las víctimas son quienes mejor conocen la dimensión del daño causado y recuerdan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos[59]. En esta Jurisdicción, según lo fijado por la SA, "la notificación es la manera de dar a conocer las providencias a los sujetos procesales, intervinientes especiales o a quienes tienen un interés jurídico concreto en la actuación"[60].

105. La SA, en la Sentencia Interpretativa 3 de 2022 (SENIT 3), estableció que el trámite ante la SAI debe ser notificado a todas las víctimas que puedan ser identificadas o individualizadas, según las piezas procesales del expediente "al margen de que se desconozcan sus datos específicos de identificación (nombres, apellidos o documento de identidad)". En ese orden, las víctimas que deben ser

[58] Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018.
[59] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa 1 de 2019, párr. 69.
[60] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa 3 de 2022, párr. 169.

notificadas de estos trámites son "las personas que, a partir de los elementos obrantes en el expediente, puedan identificarse o individualizarse como que han sufrido menoscabos en sus derechos como consecuencia de los hechos, al margen de que se desconozcan sus datos de identificación completos". Estas personas, según la SENIT 3, pueden ser determinadas si es que se conoce al menos sus nombres y apellidos e indeterminadas si se desconoce los datos de identidad o se tienen incompletos. Por ello, a continuación, se presentan las victimas identificadas en el proceso nro. 11001310700820050000500 en primera instancia:

(i) víctimas de homicidio agravado[61]:

1. Oscar Enrique Barbosa Peña,
2. Juan Pablo Jiménez Pinzón,
3. Andrés Ruiz Arizabaleta,
4. Hugo Silva Parrado,
5. Alejandro Ujueta Amorocho,
6. Manuel Antonio Ferro Cruz,
7. Marco Tulio Hernández Leguizamón,
8. Alejandro Guzmán Cruz,
9. Iván Jiménez Cuervo,
10. Ana María Arango Castro,
11. Jorge Andrés Arango Garavito,
12. Germán Alexander Munévar Cardenas,
13. Bella Nancy Méndez Díaz,
14. Yesid Osiros Castiblanco Roa,
15. Mauricio Domínguez Peñaloza,
16. Dora Nelsy Izquierdo Rodríguez,
17. María Gladys Quiroga Cuadros
18. Juan Sebastián Carrillo Sarria,
19. Catalina Muñoz Toffoli,
20. Luisa Fernanda Solarte Angulo,
21. Jesús Manuel Díaz Moreno,
22. Gustavo Adolfo Forero Rubio,
23. Luisa Fernanda Mugno Varela,
24. Diego Salazar Peláez,
25. Rafael Eduardo Amaya Zambrano,
26. Hugo Oswaldo Silva Parrado,
27. Milton Ricardo Martínez,
28. Luis Eduardo Mutis Rodríguez,
29. Edgar Fernando Sarmiento Manrique,
30. Mariana García Mugno,
31. Sergio Alejandro Muñoz Salame,
32. Marco Alfonso Baracaldo Jiménez,
33. Juan Manual García Posada,
34. César Augusto Caicedo Cruz,
35. Julio Antonio Robayo Ferro,
36. Jhon Fredy Arellán Zúñiga,
37. Oswaldo Arellán Barajas

(ii) víctimas de tentativa de homicidio[62]:

[61] Cfr. Expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001, folio 206 a 207.
[62] *Ibid*.

1. Adalberto Gutiérrez,
2. Adolfo Murillo,
3. Alejandra Guzmán,
4. Alejandro Pérez Gamboa,
5. Alexander Lemus Pulido,
6. Alexander Pérez,
7. Alfonso Adat,
8. Alfonso Cortez (sic),
9. Álvaro Chaparro,
10. Amalia Saade,
11. Amilker Parada,
12. Amparo Ortega,
13. Ana Mercedes Gómez,
14. Andrés Ceballos,
15. Andrés Rodríguez,
16. Ángela García,
17. Ariolfo Joya,
18. Arlin Gara de Gómez,
19. Armando Acosta,
20. Bertha Lucía Frías,
21. Camilo Mantilla,
22. Camilo Rodríguez,
23. Carlos Alberto Botero,
24. Carlos Alberto Rancel,
25. Carlos Arturo Martínez,
26. Carlos Augusto González,
27. Carlos Carrillo,
28. Carlos Cortés Rodriguez,
29. Carlos Vargas,
30. Catalina Peláez Franco,
31. Ciro Acosta,
32. Claudia Martínez,
33. Conor Colleary,
34. Cristina Penagos,
35. Daniel Pacheco Vásquez,
36. Diego García,
37. Diego Ramírez,
38. Doris Acosta,
39. Edgar Augusto Pamplona,
40. Edgar García,
41. Edmundo del Castillo,
42. Eduardo García,
43. Eduardo Ramírez,
44. Edwin Tapias Camargo,
45. Elizabeth Alwets Ochoa,
46. Erick Suárez,
47. Esperanza Cantor,
48. Estefan Espinos,
49. Fabián Silva,
50. Fabio Castro,
51. Fernando Galindo,
52. Flaminio Solano,
53. Frederick Hoyos Schryver,
54. Fredy Medina,
55. Germán Bobadilla,
56. Gilberto Rincón González,
57. Gladys Martínez,
58. Guillermo Botero,
59. Guillermo Sánchez,
60. Héctor Andrés Vega,
61. Henry Mejía,
62. Hernán Darío Botero,
63. Heydi Durán de López,
64. Ivonne Ahuchar Agudelo,
65. Ivonne Hause,
66. Jacinto Aponte,
67. Jairo Ramírez,
68. Javier Antonio Salazar,
69. Javier Espitia,
70. Javier Gutiérrez Parra,
71. Johanna Romero,
72. Jorge Monroy,

73. José Farfán,
74. José Luis Palacios,
75. José Manuel Patiño,
76. José Tafur,
77. Joya Aliorfo,
78. Juan Carlos Bejarano,
79. Juan Carlos Ruiz,
80. Juan Carlos Villamizar,
81. Juan Cristóbal Pérez,
82. Juan David Restrepo,
83. Juan Jareyi Zambrano,
84. Juan Ujueta Amorocho,
85. Julián Amaya,
86. Julián Vásquez,
87. Juliana Diaz,
88. Juliana Mazuera Mejía,
89. Kyu Whon,
90. Laura García,
91. Libardo Moreno,
92. Luis Aldalvis Fúquene,
93. Luis Yage Jimeno,
94. Luz Ángela Merino,
95. Luz Marina Vásquez Uribe,
96. Manuel Pinilla,
97. María Luisa Rincón Silva,
98. María Morales de Barrios,
99. Maria Teresa Bohórquez,
100. Marión García,
101. Martha Myriam Mendoza Ávila
102. Marcela Catalina Zambrano,
103. Marcelo Mariano Muñoz,
104. Mauricio Rubio García,
105. Margarita del Río,
106. María Adelaida Jaramillo,
107. María Alejandra Naranjo Vallejo
108. María Andrea Domínguez,
109. María Camila García,
110. María Camila Silva,
111. María Constanza Cediel,
112. María Cristina de Salazar,
113. María Inés Trujillo,
114. María Leonor Díaz,
115. Miltón Rodríguez,
116. Milton Vera,
117. Mónica Echeverry Palacio,
118. Mónica Garcia,
119. Natalia Arboleda Tamayo,
120. Nelson Acosta,
121. Nelson Acosta Pinto,
122. Nelson Carrillo,
123. Nelson Siabato,
124. Nicolás Libos Sad,
125. Octavio Salvador Yepes,
126. Oscar Gómez Villa,
127. Oscar Rosales,
128. Otto Shool,
129. Paola Carrillo,
130. Pilar Hurtado,
131. Rafael Carvajal,
132. Ramón Mazot,
133. Reimundo Patiño,
134. Ricardo López,
135. Ricardo Sotelo,
136. Roberto Pardo,
137. Rodrigo Márquez,
138. Ruth Adriana Blanco,
139. Sandra Martínez,
140. Sandra Durán,
141. Sandra Moreno,
142. Santiago García,
143. Sandra Herrera Pérez,
144. Sebastián Baena,
145. Sergio Caicedo,

146. Sergio Mejia,
147. Sonia Barsowe,
148. Susana Berón,
149. Tatiana Petrano,
150. Tomás García,
151. Valentina Rendón Escobar,
152. Víctor Mauricio Sinisterra,
153. Víctor Santiesteban,
154. Vivian Vargas,
155. Viviana Moreno,
156. Wilfredo Rodríguez Benavides,
157. Yaneth Gamboa y
158. Yesid Gutiérrez.

106. El apoderado de la Corporación El Nogal intervino en la segunda instancia y solicitó que se condenara a los interesados "por los daños y perjuicios derivados de las conductas punibles por las que fueron procesados". Por ello, también se notificará de este trámite al club El Nogal.

107. Ahora bien, en las piezas procesales remitidas por el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, así como las que allegó la UIA en el informe final rendido el 2 de octubre de 2022, este despacho no encontró información adicional sobre la identificación de las víctimas, datos de contacto o ubicación, o información sobre su representación judicial. Además, la UIA tampoco remitió la información sobre la identificación y ubicación de las víctimas solicitada por este despacho en la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022.

108. En consecuencia, se reiterará la orden dada a la UIA de la JEP para que adelante todas las gestiones necesarias a fin de allegar la información pertinente sobre la identificación y ubicación de las víctimas identificadas en el proceso penal con radicado 11001-31-07-008-2005-00005-00 y se le solicitará a la Secretaría Judicial de la SAI seguir la ruta fijada en la Sentencia Interpretativa SENIT 3 de 2022, para lograr su notificación, para lo cual tendrá a disposición los procesos penales que reposan en el expediente digital de la referencia y podrá solicitar la colaboración de las autoridades judiciales correspondientes.

109. Además, se le solicitará al Departamento de Atención a Víctimas de la JEP (DAV) que realice el acompañamiento a las víctimas y les preste asesoría en este trámite que continuará ante la SRVR, a menos que dicha Sala de Justicia disponga algo diferente.

110. Las víctimas podrán acceder en todo caso a los estados electrónicos para enterarse de las providencias que se expidan posteriormente y, si llegaren a realizar algún tipo de manifestación de la que se infiera su interés de participar, se les podrá acreditar[63] para lo cual se espera contar con el acompañamiento del DAV.

111. Finalmente, siguiendo lo establecido en la Sentencia Interpretativa SENIT TP-SA 3 de 2022, una vez agotados los esfuerzos para lograr ubicar y notificar a las víctimas en este asunto, se dispondrá su emplazamiento con los canales digitales establecidos en la SENIT 3 de 2022 o, a falta de ellos, según lo fijado en el artículo 10 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022.

V. DECISIÓN

112. En mérito de lo expuesto, este despacho de la Sala de Amnistía o Indulto,

RESUELVE

PRIMERO: RECALIFICAR de forma preliminar como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional según el artículo 8.e.1) del Estatuto de Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000, los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo por los que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., en sentencia del 28 de noviembre de 2008, por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

SEGUNDO: DECLARAR LA NO AMNISTIABILIDAD anticipada de los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, recalificados en esta instancia de forma preliminar como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional según el artículo 8.e.1) del Estatuto de

[63] Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. TP-SA-SENIT 3 del 21 de diciembre de 2022, párr. 200.

Roma y las normas consuetudinarias 11 y 12 del Derecho Internacional Humanitario, y como homicidio en persona protegida y lesiones en persona protegida, de acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Ley 599 de 2000, por las que fueron condenados HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C. en sentencia del 28 de noviembre de 2008 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el proceso con radicado nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00.

TERCERO: REMITIR POR COMPETENCIA al Caso nro. 10 de la SRVR "Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC- EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano" al patrón de conductas no amnistiables agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en contextos urbanos en el que se agrupan hechos relacionados con homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, y otros atentados a personas y bienes civiles con explosivos, así como homicidios selectivos y atentados a civiles cometidos por o con el apoyo de redes urbanas de las FARC-EP, el expediente LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001 correspondiente al trámite del ciudadano HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y, que según está decisión también se refiere a la situación del ciudadano FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, para que en el marco de sus competencias, se pronuncie sobre los hechos y conductas por las cuales fueron condenados en el proceso penal ordinario nro.11001-31-07-008-2005-00005-00 conocido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá.

CUARTO: Por Secretaría Judicial, **NOTIFICAR** esta resolución a los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C. y a sus abogados[64], según la ruta fijada en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022. Además, **REQUERIRLOS**:

(i) para que, con asistencia de su apoderado y ante la Secretaría Judicial de esta Sala, **DILIGENCIEN** y **SUSCRIBAN** el Acta de Régimen de Condicionalidad que se adjunta y la **REMITAN** a este despacho dentro de los

[64] En el expediente LEGALi 1500220-44.2022.0.00.0001, en el cual se tramitó la solicitud de salida del país de FERNANDO ARELLÁN BARAJAS se reconoció personería al abogado Juan David Bonilla Quintero, adscrito al SAAD, con correo electrónico jbonilla@contratista.oei.org.co.

diez (10) días siguientes a la notificación de la presente resolución. Los comparecientes deberán remitir una imagen digital del acta debidamente diligenciada al correo electrónico info@jep.gov.co. En caso de que esto no fuera posible mediante abogado y sin necesidad de que las diligencias ingresen al despacho, **COMISIONAR** a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, para que, a través del enlace territorial del lugar más cercano al domicilio de los interesados, en el término de cinco (5) días hábiles, proceda al cumplimiento de la esta orden, y en dicho acto los solicitantes procedan a **SUSCRIBIR** el régimen de condicionalidad anexo a la presente resolución.

(ii) a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS para que **DILIGENCIE** de manera exhaustiva el formato F-1 que se adjunta a esta providencia, como cumplimiento del deber de contribuir a la verdad del conflicto armado. El compareciente deberá **REMITIR** a este despacho el mencionado formato en el término perentorio de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión. El compareciente deberá remitir una imagen digital del formato debidamente diligenciada al correo electrónico info@jep.gov.co. Así mismo, se instará a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS para que complete y ajuste, según considere, el formato F-1 allegado a esta Jurisdicción en cumplimiento de la resolución SAI-SP-D-MGM-117-2022 del 4 de marzo de 2022, que le autorizó la salida del país, para efectos de este trámite. Para ello, FERNANDO ARELLÁN BARAJAS deberá **REMITIR** a este despacho el mencionado formato en el término perentorio de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente decisión.

QUINTO: Por Secretaría Judicial, **PREVENIR** a los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS que el incumplimiento injustificado de las obligaciones en el Régimen de Condicionalidad que aquí se comunica, puede llevar a la apertura de un incidente de incumplimiento en su contra, con las eventuales sanciones que puedan derivarse de este.

SEXTO: Por Secretaría Judicial, **INFORMAR** a Migración Colombia que, con fundamento en esta resolución, los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., no podrán salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz.

SÉPTIMO: Por Secretaría Judicial de la Sala, teniendo en cuenta el Acuerdo AOG nro. 039 del 17 de septiembre de 2020, **COMUNICAR** al Departamento de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, en su calidad de administrador de la herramienta tecnológica "Vista Materializada", el oficio que se remita a Migración Colombia, para lo de su competencia.

OCTAVO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **INCLUIR** en los datos del expediente LEGALi nro. 1501255-73.2021.0.00.0001 como compareciente a FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C. junto a HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS.

NOVENO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **REITERAR** la orden dada a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el numeral octavo de la resolución SAI-AOI-AS-DVL-088-2022 que decía:

> **OCTAVO: COMISIONAR** a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que establezca la información pertinente sobre la identificación y ubicación de las víctimas de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS en el atentado terrorista por el cual fue condenado en el marco del proceso con radicado 11001-31-07-008-2005-00005-00.

Esta reiteración implica que la UIA debe adelantar todas las diligencias, incluida la búsqueda selectiva en bases de datos, tendrá a disposición los procesos penales que reposan en el expediente digital de la referencia y podrá solicitar la colaboración de las autoridades judiciales correspondientes. Para el cumplimiento de esta orden la UIA *tendrá quince (15) días* a partir de la comunicación de esta decisión. Por ello, este despacho advierte a la UIA que, si el término llegare a vencerse sin que se cumpla el objeto de la comisión, deberá informar a este despacho las razones por las cuales se hizo necesario realizar lo ordenado extemporáneamente y deberá continuar las gestiones hasta su cumplimiento en el menor tiempo posible, sin que sea necesario emitir un nuevo pronunciamiento de sustanciación por parte de este despacho.

DÉCIMO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **NOTIFICAR** esta decisión a las víctimas directas e indirectas identificadas en el proceso penal proceso nro. 11001310700820050000500 según los párrafos 103 a 111 de esta decisión, siguiendo la ruta fijada en la en Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022 y según la información remitida por la UIA en cumplimiento de la comisión reiterada en esta decisión. En consecuencia, la Secretaría deberá advertirles en el oficio de notificación que podrán intervenir de manera voluntaria, por sí mismas o a través de apoderado,

en el trámite de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, y podrán acceder a asistencia psicosocial y jurídica. Además, la Secretaría deberá indicarles que, si se encuentran interesadas en intervenir, deberán informarlo al correo electrónico info@jep.gov.co y solicitar ser contactadas por el Departamento de Atención a Víctimas de la JEP (DAV). En caso de no lograr su notificación, una vez agotadas las labores de la UIA y del DAV ordenadas en esta resolución, se procederá a emplazarlas en los términos del párrafo 111 de esta decisión.

DÉCIMO PRIMERO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **SOLICITAR** al Departamento de Atención a Víctimas de la JEP (DAV) que, en un término de quince (15) días contados desde la comunicación de esta resolución, (i) informe si cuenta con información sobre las víctimas del ataque al Club el Nogal ocurrido el 7 de febrero de 2003 y conocido en el expediente penal nro. 11001-31-07-008-2005-00005-00 y ayuden en las labores para lograr ubicar y contactar a esas víctimas referidas en los párrafos 104 y 105 a fin de notificarles esta decisión; y (ii) preste acompañamiento y asesoría psicojurídica a las víctimas para que logran participar en el trámite ante la SRVR.

DÉCIMO SEGUNDO: Por Secretaría Judicial de la Sala, **ORDENAR** a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) **SUSPENDER** el proceso de cobro coactivo nro. 20131127703762 que se adelanta en contra de HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS con ocasión de la multa impuesta dentro del proceso penal nro. 11001310700820050000500. Esta suspensión operara, según los párrafos 104 a 105 de esta decisión, bajo las siguientes circunstancias:

A. se debe verificar que el compareciente suscribió el Régimen de Condicionalidad impuesto y comunicado en esta resolución y diligenció el formato F-1,
B. se debe verificar que el compareciente está cumpliendo con el proceso de reincorporación a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN),
C. con ocasión de esta suspensión, no se levantarán las medidas cautelares impuestas dentro de ese proceso como garantía de los derechos de las víctimas hasta que la SRVR se pronuncié al respecto.

DÉCIMO TERCERO: Por Secretaría Judicial, **GENERAR** las contraseñas de acceso al expediente LEGALi 1501255-73.2021.0.00.0001 a los comparecientes HERMINSUL

ARELLÁN BARAJAS y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS y a sus apoderados judiciales, con el fin de que puedan revisar el expediente. Las contraseñas estarán habilitadas hasta la finalización del trámite o de la representación judicial para los apoderados, según el caso.

DÉCIMO CUARTO: Mediante la Secretaría Judicial de la SAI, **NOTIFICAR** esta resolución a la Procuraduría Delegada para la Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, según la ruta fijada en la en Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022.

DÉCIMO QUINTO: Por Secretaría Judicial de la SAI, **OFICIAR** a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) para que informe si los ciudadanos HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.449.357 de Bogotá D.C. y FERNANDO ARELLÁN BARAJAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.223.167 de Bogotá D.C., (i) se encuentran registrados en algún programa a su cargo y dé a conocer el desarrollo, así como avances de este; (ii) si conocen sobre el o los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR en los que estuvieron o están los interesados y reporte la información al respecto; y (iii) si HERMINSUL ARELLÁN BARAJAS actualmente recibe la renta básica de la que trata el artículo 8 del decreto 899 de 2017, modificado por el artículo 284 de la ley 1955 de 2019 y si se conoce que sobre ella exista alguna medida cautelar decretada por la UARIV.

DÉCIMO SEXTO: Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y de apelación en virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13 de la ley 1922 de 2018 y de conformidad con la interpretación sistemática de fuentes de derecho, así como la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

(firmado digitalmente)
DIANA MARÍA VEGA LAGUNA
Magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto

SNCB

SANTOS BALLESTEROS & ASESORES LEGALES S.A.S.
Nit. 900791910-5

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2023

Doctor
Gabriel Pardo Otero
Ciudad

Referencia: Proceso Ordinario (declarativo)
Rad.: 1100131030-13-**2003-00712**-02 (procesos acumulados)
Demandante: Alexandra Hoyos Cuartas y otros
Demandado: Corporación Club El Nogal

Asunto: Sustentación recurso de apelación.

Estimado Dr. Pardo**:**

A continuación, me permito presentar a Usted, con destino a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a la atención del **Magistrado Ponente, Doctor Germán Valenzuela Valbuena**, un concepto jurídico que amablemente me ha solicitado, alrededor de distintos aspectos jurídicos atinentes al caso de la referencia.

Para estos efectos, he divido este concepto, que recoge mi exclusiva opinión profesional, en los siguientes acápites:

1. Introducción

1.1. Mi nombre es **Jorge Santos Ballesteros**, de nacionalidad colombiana, Abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia). Mi domicilio es Calle 69 A No 4 – 31 de Bogotá, teléfono (+57) 601 3462668.

1.2. El Doctor Gabriel Pardo Otero, como apoderado judicial de la Corporación Club El Nogal, ha solicitado mis servicios profesionales para dar un concepto en relación con los fundamentos y principios aplicables de responsabilidad civil extracontractual en ley colombiana, al caso de la referencia.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

1.3. El Doctor Pardo actúa en nombre y representación de la entidad demandada, dentro de los procesos acumulados, a raíz de los sensibles y dolorosos hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003, por razón del atentado terrorista de que fuera víctima la Corporación Club El Nogal, en sus instalaciones físicas ubicadas en la ciudad de Bogotá.

1.4. Los distintos demandantes que integran la parte actora pretenden que a la Corporación Club El Nogal se le declare "… *civil y extracontractualmente responsable por los daños y perjuicios que se le ocasionaron …*" por el fallecimiento de César Augusto Caicedo Cruz (q. e. p. d.), Luisa Fernanda Solarte Angulo (q. e. p. d.), Sergio Alejandro Muñoz Salame (q. e. p. d.) y Jorge Andrés Arango Garavito (q. e. p. d.).

2. Cualificación y Experiencia

2.1. Soy Abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), en la cual fui profesor desde 1976 a 2007, en el área de Derecho Privado, y especialmente en la cátedra de Responsabilidad Civil desde 1979. En esta Universidad igualmente fui Director de las Especializaciones en Derecho Comercial y Sociedades Comerciales; actualmente soy profesor en la Maestría de Seguros. Así mismo fui profesor en la Especialización en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario de Bogotá y en la Especialización en Derecho Penal, (cátedra de Responsabilidad Civil) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia).

2.2. Fui Magistrado Titular de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el 1º de julio de 1996 a julio de 2003, en donde oficié como Presidente de la Sala de Casación Civil en 1998.

2.3. En la actualidad ejerzo en forma independiente la profesión de abogado en litigios, Árbitro en Tribunales Arbitrales, recursos de casación civil, exequátur, asesorías y consultorías, en Seguros, Derecho Civil, Comercial y Financiero, siendo Árbitro integrante de la Lista "A" de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

3. Libros Publicados

3.1. EL ABUSO DEL DERECHO: Editorial Venus Bogotá 1973.

3.2. INSTITUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL: TOMO I. Editorial Javergraf. 1996. Segunda edición: diciembre de 2006; TOMO II. Editorial Javergraf. Septiembre de 2004. Segunda edición mayo de 2007. TOMO III. Editorial Javergraf enero de 2006.

3.3. RESPONSABILIDAD CIVIL. Editorial Temis Bogotá. Tomos I y II. Año 2012.

3.4. RESPONSABILIDAD CIVIL. Editorial Temis. Tomos I y II Parte General. Bogotá. 2023. Cuarta Edición.

3.5. He publicado diversos artículos sobre Responsabilidad Civil en la Revista Vniversitas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y he sido conferencista invitado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre Responsabilidad Civil y Derecho Privado.

3.6. Además, Editorial Ibáñez y la Universidad Unaula de Medellín, publicaron en 2022 el libro *"Instituciones de Responsabilidad Civil. Homenaje al Maestro Jorge Santos Ballesteros"*, en dos Tomos, con la contribución de más de cuarenta (40) destacados expositores nacionales y extranjeros, y cuya edición académica estuvo a cargo de los profesores doctores Alejandro Gaviria Cardona y Saúl Uribe García.

4. Aspectos jurídicos relevantes aplicables a este caso

4.1. Sobre la causalidad adecuada.

4.1.1. Para referirme a este aspecto de la responsabilidad, considero conveniente hacer una breve exposición de cómo ha abordado la jurisprudencia civil colombiana el tópico de la relación de causalidad, y así entender cabalmente lo que se denomina la *causalidad adecuada.*

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

En el ordenamiento jurídico colombiano es requisito indispensable para la configuración de la responsabilidad civil y la consecuente obligación indemnizatoria que de ella surge, la existencia de una relación o vínculo de causalidad entre el daño o detrimento sufrido por una persona, en forma de interés jurídicamente tutelado, y la conducta o el hecho realizado por otra de carácter antijurídico. Las normas fundamentales en este sentido son los artículos 2341 y 1616 del Código Civil: conforme con el primero de los citados, es obligado a la indemnización quien, por haber cometido delito o culpa, ha inferido daño a otro, al paso que, de acuerdo con el segundo, los perjuicios, tanto los previsibles como los imprevisibles, deben ser consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación, o de haberse demorado su cumplimiento.

4.1.2. En sentencia de 17 de septiembre de 1935 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia G.J. No 1907, pág. 35 se señaló que, "para que pueda decirse que la culpa de una persona ha sido efectivamente la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una *relación necesaria* entre dicha culpa y el perjuicio; es decir, una relación tal, que si la culpa no hubiera ocurrido, el perjuicio no se habría producido. En este caso, como siempre que en cuestiones jurídicas se habla de causa, se requiere el elemento de *necesidad* en la relación. Si una culpa que parece relacionada con el perjuicio está plenamente demostrada, pero se establece que el perjuicio se habría causado, aunque esa culpa no se hubiera cometido, no habrá *relación de causalidad* ni consiguiente derecho por parte del perjudicado a la reparación".

4.1.3. En otra sentencia de 8 de octubre de 1992, que involucraba el hecho de tercero como causal de exoneración de responsabilidad, se indicó: "jurídicamente no es cualquier hecho e intervención de tercero lo que constituye la causa de exoneración de responsabilidad; es necesario, entre otras condiciones, que el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una *relación de causalidad exclusiva e inmediata* con el daño causado, caso en el cual la responsabilidad, anexa a la noción de culpa se desplaza del autor del daño hacia

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

el tercero en seguimiento de la *causalidad* que es uno de los elementos jurídicos esenciales e integrantes de la responsabilidad civil"[1].

4.1.4. A propósito de una concurrencia de culpas, señaló la Corte en sentencia de 30 de abril de 1976: "Ciertamente no son infrecuentes los casos en que un daño resulta de la conjunción de varios acontecimientos. Dícese entonces que todos esos aconteceres son la causa del perjuicio, pero en el sentido de que la ausencia de uno de ellos habría bastado para que el daño no se hubiera producido. En tales supuestos, empero, para deducir la responsabilidad la jurisprudencia no ha tomado en cuenta, como causa jurídica del daño, sino la actividad que, entre las concurrentes, *ha desempeñado un papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio.* De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpas....En la hipótesis indicada, sólo es responsable, por tanto, la parte que, por último, tuvo la oportunidad de evitar el daño y sin embargo no lo hizo"[2].

4.1.5. En sentencia de 23 de noviembre de 1990, G.J. Tomo CCIV, No. 2443, pág. 72, al precisar el alcance del factor extraño como causal de exoneración de responsabilidad, se manifestó así la Corte Suprema: " no se requieren en verdad mayores argumentaciones teóricas para sostener que en orden a determinar la responsabilidad patrimonial de alguien en el terreno extracontractual, necesario es que exista conexión causal *jurídicamente relevante* entre un evento dañoso que lesiona a quien exige ser reparado, y como causa u origen de ese mismo evento dañoso, un factor legal de atribución de responsabilidad a cargo de ese agente contra el que es reclamada dicha indemnización. Pues bien, una de las consecuencias de esta doctrina por cierto no la de menor importancia entre las varias que de ellas se siguen, es que el aparente autor integral de un perjuicio puede verse exento de la obligación de resarcirlo si acredita que entre su actividad y el resultado dañoso ha mediado un hecho extraño que no le es imputable,

[1] Cas. Civ. 8 de octubre de 1992. G.J. Tomo CCXIX. No 2458. Pág. 524.
[2] Cas. Civ. 30 de abril de 1976. Tomo CLII. No 2393. Pág. 108.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

acontecimiento que en cuanto ha de ser exterior y ajeno al ámbito de acción del demandado, tendrá que ser así mismo de tal naturaleza y entidad que haga que aquella – la actividad – deba considerarse irrelevante....” .

4.1.6. Sobresale entre todas las teorías acogidas por la jurisprudencia civil colombiana *la tesis de la causalidad adecuada*: “Para determinar la relación de causalidad, cuando media pluralidad de hechos o de culpas, cuestión que en ocasiones suele presentar serias dificultades, la doctrina dominante acoge el criterio de las *consecuencias adecuadas*, expuesto por Von Kries a fines del siglo pasado, sin excluir otros criterios, que no es del caso relacionar, pero que no siempre conducen a resultados equitativos. Según el criterio de la *causalidad adecuada* tan sólo pueden estimarse efectos de una causa aquellos que según las reglas del sentido común y de la experiencia sueles ser su resultado normal. Se acude pues a las reglas naturales.....Analizadas en abstracto las circunstancias en que se produjo un daño, se determina en concreto cuál o cuáles de ellas, según el normal devenir de las cosas, fueron *causa eficiente* del daño, descartando aquellas que sólo favorecieron la producción del resultado o que eliminaron un obstáculo para el mismo, denominadas en el lenguaje de Pirson Et de Villé, citado por Jorge Peirano Facio, con el nombre de condiciones u ocasiones”[3].

4.1.7. En sentencia de 22 de febrero de 1995, se precisó: “Por ser esa la doctrina sobre la cual descansa sin duda el artículo 2341 del C.C., se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa a otro daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclame a su vez indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar, en principio, el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un *nexo adecuado de causalidad* entre ambos factores”[4].

4.1.8. Ya de una manera sistemática, la formulación de la *teoría de la causalidad adecuada*, se precisa de modo amplio y coherente, en sentencia de 26 de

[3] Cas. Civ. 30 de marzo de 1993. G.J. Tomo CCXXII. No 2461. Pág. 294.
[4] Cas. Civ. 22 de febrero de 1995. G.J. Tomo CCXXXIV. No 2473. Pág. 258.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

septiembre de 2002[5]: "en la indagación que se haga -obviamente luego de ocurrido el daño debe realizarse una *prognosis* que dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos *per se* para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud".

4.1.9. En Sentencia 13925 de 30 de septiembre de 2016, se señaló, en forma general que, "El daño jurídicamente relevante debe ser atribuido al agente como obra suya, pero no como simple causalidad natural, sino como mecanismo de *imputación* de la acción (o inactividad) a un sujeto. No puede desconocerse que la 'causalidad natural' es uno de los elementos que el juez suele tomar en cuenta para hacer la labor de atribución de un hecho a un sujeto; sin embargo, la valoración de un hecho como causa física de un efecto es sólo un aspecto de la imputación. Cuando en el lenguaje común y corriente se toma un hecho como generador de una consecuencia jurídica, normalmente se está en presencia de un concepto normativo y no naturalista de causa, sin que esta distinción se haga explícita en la mayoría de los casos por fuerza de la costumbre. "A continuación, esta sentencia se detiene en fijar los términos de la imputación: "La imputación, por tanto, parte de un objeto del mundo material o de una situación dada pero no se agota en tales hechos, sino que se configura al momento de juzgar: el *hecho jurídico* que da origen a la responsabilidad extracontractual sólo adquiere tal estatus en el momento de hacer la atribución. El imputante, al aislar una acción entre el flujo causal de los fenómenos, la valora, le imprime sentido con base en sus preconcepciones jurídicas, y esa valoración es lo que le permite seleccionar un hecho relevante según el sistema normativo para efectos de cargarlo a un agente como suyo y no a otra causa." Precisa la sentencia que, "la *causalidad adecuada* que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la conducta de un agente, debe ser entendida en términos de '*causa jurídica*' o imputación, y no simplemente como un nexo de causalidad natural. La '*causa jurídica*' o imputación es el razonamiento por medio

[5] Cas. Civ. 26 de septiembre de 2002. Sin publicar. Exp. 6878

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

del cual se atribuye el resultado dañoso a un agente a partir de un marco de sentido jurídico. Mediante la imputación del hecho se elabora un juicio que permite considerar a alguien como artífice de una acción (u omisión), sin hacer aún ningún juicio de reproche. A partir de entonces la conducta a la que se atribuye la consecuencia lesiva asume el significado de hecho jurídicamente relevante imputable a un agente que tenía el deber de actuar de acuerdo con la función que el ordenamiento le asigna (*imputatio facti*), pero aún no se dice nada sobre cómo debió ser esa acción u omisión (*imputatio iuris*), ni sobre cuál es la consecuencia jurídica que ha de imponerse en virtud de la constatación del supuesto de hecho previsto en la norma (*applicatio legis*)".

A juicio de la Corte, en la sentencia que se viene de citar, "Para establecer si una conducta (activa u omisiva) se puede atribuir a un agente hay que partir de categorías jurídicas como el deber de actuar, las acciones y omisiones relevantes, la posición de garante, el concepto de 'guardián de la cosa', las obligaciones de seguridad, etc. (que no llevan implícitos juicios de reproche), las cuales no se constatan directamente sino que se atribuyen a partir de un marco de sentido jurídico que permite la construcción de pruebas inferenciales."

4.1.10. En síntesis, la tesis de la causalidad adecuada es la tesis dominante por parte de la jurisprudencia civil tal como se evidencia en Sentencia 3460 de 18 de agosto de 2021, página 23: "*Un ejercicio en principio válido para investigar si determinado evento ocasionó el daño, es suprimirlo mentalmente. Si de todas formas se produce, de ello se vale la teoría de la conditio sine qua non para descartar, con ciertas previsiones, antecedentes probables. El ejercicio es permitido y de ahí parte la teoría de la causalidad adecuada, en tanto, eliminado, hipotéticamente, el hecho o la conducta generadora del daño y si éste permanece, se trata de una circunstancia que se puede tener como idónea o apta para causar el resultado"; así entonces, dice la Corte, la causalidad adecuada, "propugna identificar ex pos-facto las condiciones sine qua non en la producción del daño, pero no a todas les atribuye igual importancia. Solo las determinantes son consideradas causas y las demás meras condiciones. Las reglas de la experiencia, de la lógica y de la ciencia, y los juicios de probabilidad y de razonabilidad, sirven a dicho propósito*".

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

Como complemento a esta exposición, creo también conveniente señalar cómo la jurisprudencia civil ha abordado el aspecto de la prueba de la relación causal:

4.2. **Acerca de la prueba de la relación causal**.

4.2.1. Ha sostenido la Corte que, por regla general, corresponde a quien solicita la indemnización; así lo sostuvo, entre otras, en sentencia de 17 de mayo de 1982: "*Con fundamento en el principio de derecho universalmente aceptado, según el cual quien con una falta suya cause perjuicios a otro, está en el deber de repáraselo, la legislación colombiana consagra en el titulo 34 del libro cuarto del Código Civil, la responsabilidad por los delitos y las culpas. De acuerdo con dicha normación positiva, quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpas suyas, queda jurídicamente obligado a resarcirlo; y según los principios reguladores de la carga de la prueba, quien en tal supuesto demande la indemnización corre con el deber de demostrar, en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de éste y el perjuicio sufrido por aquél*"[6].

4.2.2. En la sentencia de 30 de septiembre de 2016, ya mencionada arriba, se señaló que, "*Para que el juez declare que un hecho es obra de un agente, deberá estar probado en el proceso (sin importar a quien corresponda aportar la prueba), que el hecho desencadenante del daño ocurrió bajo su esfera de control y que actuó o dejó de actuar teniendo el deber jurídico de evitar el daño. El juicio de imputación del hecho quedará desvirtuado si se demuestra que el demandado no tenía tal deber de actuación. Por supuesto que la causalidad natural desempeñará un papel importante en los eventos en los que se debate una responsabilidad directa por acción, en cuyo caso la atribución del hecho al convocado a juicio se podría refutar si se demuestra que su conducta no produjo el daño (no teniendo el deber jurídico de evitarlo), sino que éste se debió a una causa extraña a su obrar, como por ejemplo un caso fortuito, el acto de un tercero o el acto de la propia víctima*".

[6] Cas. Civ. 17 de mayo de 1982. G.J. Tomo CLXV. No 2406. Pág. 98.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

4.2.3. En términos generales cabe decir, entonces, que no puede desconocerse que el fenómeno de la causalidad jurídica se produce en el doble sentido que menciona Santos Briz: "*por un lado, la conducta del agente realiza el supuesto de hecho de la norma que sanciona la responsabilidad (causalidad como fundamento); por otro, el daño producido ha de ser precisamente una consecuencia de la infracción prevista en dicho supuesto (causalidad como complemento)*".[7] En ese doble sentido, entonces, no se puede prescindir, en el análisis de la causalidad, del hecho natural o físico, y por supuesto de las consecuencias normativas o de imputación jurídica, que ese hecho conlleva, sin poder abandonarse sólo a un aspecto del mismo, y ya puestos en el caso concreto, se deben abandonar fórmulas rígidas, o abstractas, o divagaciones complejas, y sí considerar, todas las circunstancias que inciden en la producción del resultado, con apreciaciones si se quiere más de sentido lógico, o de experiencia frecuente, que de posturas doctrinales aplicadas a ultranza, y estimar así al nexo causal como una cuestión de hecho, sometida al concepto de causalidad propio de la Lógica y de las Ciencias Naturales, y con las consecuencias jurídicas previstas en la norma.

4.3. **Sobre la causa extraña**.

4.3.1. **La causa extraña**. De acuerdo con la jurisprudencia colombiana, el demandado en un evento especialmente de responsabilidad por actividad peligrosa puede desvirtuar su responsabilidad si logra acreditar un factor extraño. Así, en sentencia de 24 de agosto de 2009, señaló la Corte: "El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, *ratio* y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente

[7] Santos Briz, Jaime. La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal, 4ª edición, Editorial Montecorvo, Madrid, 1986, pág. 223.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño. Desde este punto de vista, tal especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extraña, esto es, la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjuicio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo, la fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (C. de Co., art. 1880), más sí el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. Forzoso es concluir que toda persona que en ejercicio de una actividad peligrosa cause un daño está en la imperiosa obligación de repararlo y solo podrá eximirse probando la causa extraña, esto es, demostrando que no es autor, en tanto el daño no pueda imputarse al ejercicio de su actividad peligrosa ni a su conducta"[8].

4.3.2. **La fuerza mayor o caso fortuito**. Según el artículo 1º de la Ley 95 de 1890: "*se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.*" De esta definición legal surgen con toda nitidez los dos caracteres de la fuerza mayor o caso fortuito, a saber: imprevisto e irresistible. Según la Corte Suprema: "**Prever**, que en el lenguaje usual significa ver con anticipación, tiene en tecnología culposa la acepción de conocer lo que vendrá y precaverse de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, daño o peligro, guardarse de él y evitarlo. De ahí que cuando una persona, jurídica o natural, no evita el daño evitable, se dice que no lo previó ni lo previno, lo cual la inhibe para alegarlo como causa de liberación, pues entonces la culpa precede y contribuye a su advenimiento. La persona no ha empleado toda la inteligencia y pericia necesarias para evitar los efectos de la fuerza irresistible. Si no se previó el accidente pero se le puede resistir, no habrá caso fortuito. Ejemplo: cualquiera

[8] Cas. Civ., sent. de 24 de agosto de 2009, exp. 11001-3103-038-2001-01054-01.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

fuerza física o moral sin suficiente violencia para ser irresistible, aunque no se haya pensado en ella. Si el accidente es irresistible pero debió preverse, tampoco habrá caso fortuito: Ejemplo: cualquiera fuerza física o moral, a que no pueda resistirse pero que pudo evitarse en sus consecuencias." (sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 26 de mayo de 1936. G.J. XLIII. Pág. 584. Y en el mismo sentido, sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 31 de agosto de 1942, 20 de noviembre de 1989, entre otras). La unificación en cuanto a sus efectos de estos dos factores de exoneración en el derecho colombiano mediante el artículo 1º de la ley 85 de 1890 -según lo visto-, ha sido sostenida por la jurisprudencia colombiana a lo largo de su devenir histórico. En efecto, en sentencia de 7 de marzo de 1939 se sostuvo que: "*tanto en el Código Civil francés como en el colombiano (artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el 64 del Código), se tomaron las excepciones caso fortuito y fuerza mayor como sinónimas significando indiferentemente toda causa extraña al deudor que pone un obstáculo a la ejecución de la obligación*" (Cas. Civ. 7 de marzo de 1939. G.J. Tomo XLVII. No 1940. Pág. 707).

Al estimarse que la contemplación jurídica de un evento como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, es una cuestión que debe ser analizada en el caso concreto, es decir, en cada situación específica, se deben ponderar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que envolvieron el acontecimiento acompasadas con las del propio agente, sin que sea posible por supuesto armar un catálogo o elenco de fenómenos que revistan tal carácter: "*Si sólo puede calificarse como tal, ha precisado la Corte, el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodearon el hecho*"[9].

[9] Cas. Civ. 9 de octubre de 1998. G.J. Tomo CCLV. No 2494. Pág. 776.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

4.3.3. **En cuanto al hecho de un tercero**, como eximente de responsabilidad en sentencia de 25 de noviembre de 1943 indicó la Sala Civil de la Corte Suprema que, "*jurídicamente no es cualquier hecho o intervención de un tercero lo que constituye la causa de exoneración de responsabilidad; es necesario entre otras condiciones que el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una relación de causalidad exclusiva e inmediata con el daño causado, caso en el cual la responsabilidad, anexa a la noción de culpa, se desplaza del autor del daño hacia el tercero, en seguimiento de la causalidad, que es uno de los elementos jurídicos esenciales integrantes de la responsabilidad civil*".

4.3.4. En relación con la **culpa de la víctima,** es decir, la actuación temeraria de la víctima en la producción del hecho dañoso, la jurisprudencia nacional tiene dicho que: "*para que la culpa de la víctima tenga la relevancia jurídica apuntada, o sea para que constituya un eximente de responsabilidad civil al demandado, es preciso que ella haya sido la causa exclusiva del daño; que absorba de alguna manera, pero integralmente la imprudencia y el descuido del demandado, los cuales por consiguiente no tendrán ya ninguna trascendencia en la producción del perjuicio*". (Cas. Civ. 17 de mayo de 1982. G.J. Tomo CLXV, página 98).

4.4. Sobre que los daños deben ser "reales, ciertos, no contingentes o hipotéticos/especulativos"

4.4.1. **Postulados generales**: Para responder a estas cuestiones, previamente debe señalarse que la responsabilidad civil extracontractual en Colombia se fundamenta esencialmente en dos principios generales, consagrados en el artículo 2341del Código Civil: **1.)** La persona que causa un daño a otra está en la obligación de repararlo. Se trata de hacer efectivo el derecho de toda persona de obtener una justa indemnización; al respecto la Corte Suprema ha señalado que: "Se trata de cargar el perjuicio sufrido por la víctima a una persona que queda obligada a indemnizar las pérdidas antijurídicas que se le atribuyen, en razón de la exigencia general de respeto y conservación de la esfera de intereses ajenos. La responsabilidad civil, por tanto, tiene por finalidad imponer a un agente la obligación de resarcir el daño que se le imputa" (S.C. 13925 de 30 de septiembre

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

de 2016 página 22). Desde luego que la Corte siempre ha resaltado la importancia de este principio de tiempo atrás, como se observa en sentencia de 5 de marzo de 1940: "*el principio general, ya expresado, nemo laederi, en tratándose de la responsabilidad civil, se bifurca, porque el perjuicio puede venir, de un acto contractual, violación o incumplimiento de un contrato, ley de las partes, o de un hecho extracontractual, voluntario o no, que perjudique a terceros*" (citada en sentencia SC5170 de 3 de diciembre de 2018, página 21). **2.)** La indemnización a la víctima debe ser integral. Este principio implica que la indemnización debe dirigirse, en lo posible, a dejar a la víctima como estaba previamente a la ocurrencia de la lesión, no a sancionar al victimario. En estos términos, la ley colombiana no prevé una tipología de hechos ilícitos (torts) que dan lugar a la obligación de indemnizar, sino que cualquier situación que genere un perjuicio es susceptible de ser reparada.

4.4.2. **Daños materiales**: En lo fundamental, el daño es la lesión que un sujeto sufre en un interés jurídicamente protegido por la ley. Este interés puede recaer sobre bienes patrimoniales, lo que origina el denominado daño material, o sobre bienes no patrimoniales lo que origina el daño moral, distinción que, desde luego, parte del interés jurídico afectado. En relación con el daño patrimonial, este comprende, según el artículo 1614 del Código Civil, el daño emergente y el lucro cesante; a juicio de la Corte Suprema, "*en lo que hace al daño patrimonial, se ha clasificado ese menoscabo en dos modalidades: daño emergente y lucro cesante. En efecto, responden, el primero, a la idea de disminución o detrimento, por salida o egreso pasado, presente o futuro de derechos patrimoniales. Y el segundo, a la frustración de un efecto patrimonial favorable, por el fracaso de ingresos que no entraron o no entrarán al patrimonio de la persona*" (SC 4843 de 2 de noviembre de 2021, página 21). Así, por ejemplo, cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, el valor de ese bien constituye el daño emergente, y la renta o beneficios que producía ese bien, que se dejan de percibir, constituye el lucro cesante.

4.4.3. **El perjuicio, para que sea indemnizable, debe ser real y cierto, aunque futuro, siempre y cuando sea consecuencia, en este último caso, de situaciones**

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

presentes que se consoliden en su desarrollo. La carga de su prueba corresponde en todos los eventos al demandante, salvo situaciones excepcionales como la prevista en el artículo 1617, numeral 2 ("el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo"); y el evento de cláusula penal indicado en el artículo 1599 del Código Civil ("habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio"), situaciones en las que se presume el daño y por consiguiente su valoración, sin que quepa la prueba en contrario.

En este sentido, ha sentenciado la Corte: "*Para que un perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que ser directo y cierto: "lo primero, porque solo corresponde indemnizar el daño que se presenta como consecuencia inmediata de la culpa; y lo segundo, porque si no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de producirse, no entra en el concepto jurídico de daño indemnizable*"[10]. Allí mismo indicó que "*de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, a quien demanda judicialmente la indemnización del perjuicio que ha sufrido le incumbe demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación depreca y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento patrimonial sufrido por la víctima*".

4.4.4. **En cuanto a la valoración del daño futuro**, la Corte colombiana ha señalado que "*el perjuicio debe ser reparado en toda su extensión en que sea cierto. No solo el perjuicio actual es cierto, sino también el perjuicio futuro, pero no lo es el perjuicio simplemente hipotético. La jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo, cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio actual. La Corte francesa de Casación —dice CAPUZ en su obra citada— se ha esforzado en ciertas sentencias por enunciar esta doctrina en términos no dudosos y ha declarado que, si no es posible decretar la reparación de un perjuicio puramente eventual, sucede de otro modo cuando el perjuicio,*

[10] Cas. Civ., sent. de 10 de agosto de 1976, "G. J.", núm. 2393, pág. 320.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

aunque futuro, aparece al juez como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual que es susceptible de evaluación inmediata"[11].

Para la Corte, conforme reiterada jurisprudencia, entonces, "Se debe diferenciar el perjuicio denominado actual en contraposición del distinguido como futuro, según el momento en el que se le aprecie, que corresponde, por regla, a la fecha de la sentencia. Aquel equivale al daño efectivamente causado o consolidado y éste al que con certeza o, mejor, con un 'alto grado de probabilidad objetiva' sobre su ocurrencia, según expresión reiterada en la jurisprudencia de la Sala, habrá de producirse. En tratándose del lucro cesante, el actual es la ganancia o el provecho que, se sabe, no se reportó en el patrimonio del afectado; y el futuro es la utilidad o el beneficio que, conforme el desenvolvimiento normal y ordinario de los acontecimientos, fundado en un estado actual de cosas verificable, se habría de producir, pero que, como consecuencia del hecho dañoso, ya no se presentará.[12] Según esta postura, "El daño futuro, con todo, para ser jurídicamente considerado, debe revestir la condición de cierto, característica que, conforme se ha enseñado de vieja data, no puede ser tomada en forma estricta, sino 'en un sentido relativo, por lo que, respecto de su producción futura no podrá exigirse una certidumbre absoluta.

4.4.5. **Ahora bien, la certeza del perjuicio se opone a su incertidumbre** o eventualidad, entendiendo por tal, la que depende de acontecimientos imposibles de conocer antes de su realización, lo que permite inferir que será indemnizable el daño futuro, con los requisitos vistos, pero no el hipotético o eventual. Para efectos de determinar cuándo se está en presencia de un daño futuro, habrá de acudirse al momento en que se realiza el juicio de valoración del daño, es decir, a partir de la sentencia, siendo actual el que existe y se realiza en dicha fase y el futuro el que se presenta a partir de aquella.

4.5. Sobre la culpa civil y el reproche culpabilístico.

[11] Cas. Civ., sent. de 11 de mayo de 1976, "G. J.", núm. 2393, pág. 143.
[12] SC11575-2015. 31 ago. 2015. Rad. 2006-00514-01. Reiterado en STC11416-2019

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

4.5.1. Criterio general: La culpa civil es, en general, falta de prudencia y exige voluntariedad, entendía esta como obrar imputable a un sujeto de derecho en la órbita de su actuar. Según la Corte Suprema: "*La falta de prudencia o moderación es el obrar por exceso o por defecto: por defecto, cuando se incurre en desidia, descuido, negligencia, ignorancia, despreocupación o impericia; por exceso, cuando se actúa con precipitación, impertinencia, necedad, atrevimiento, temeridad, indiscreción, insensatez, irreflexión o ligereza. La inobservancia de reglas o normas preestablecidas de conducta es imprudencia in re ipsa, es decir que implica un juicio automático de culpa cuando tiene una correlación jurídica con el daño resarcible*" (Sentencia 13925 de 30 de septiembre de 2016).

4.5.2. Sobre cómo evaluar si hubo culpa, de acuerdo con la doctrina corrientemente aceptada de la Corte Suprema, para apreciar la culpa, "es necesario un criterio objetivo o abstracto. Este criterio abstracto aprecia la culpa teniendo en cuenta el modo de obrar de un hombre prudente y diligente considerado como arquetipo" (Cas. Civ. Sentencia 2 de junio de 1958)".

4.6. **Sobre la responsabilidad civil contractual y extracontractual**.

4.6.1. Es importante precisar, como lo hace la Corte Suprema en la sentencia de 11 de septiembre de 2002, que la jurisprudencia siempre ha tenido el tino de no confundir una y otra responsabilidad, "*porque no es indiferente el régimen legal ni la naturaleza de la acción, ni las consecuencias de una u otra, como tampoco lo concerniente a la prueba, al tratamiento de la culpa o a los términos de prescripción*".

4.6.2. A juicio de la Corte Suprema, por lo demás, la responsabilidad civil "Tradicionalmente ha sido concebida en una dimensión dual, esto es, contractual y extracontractual. La primera se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válido. La segunda surge de incumplir el mandato legal y genérico de no causar daño a otro, previsto en el artículo 2341 del Código Civil. Se

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

produce sin previo pacto y por virtud de un encuentro fortuito entre los relacionados con el daño; en otros términos, de un hecho jurídico que puede ser una conducta punible (hecho jurídico humano voluntario ilícito) o un ilícito civil (hecho jurídico humano involuntario ilícito), siempre al margen de un incumplimiento obligacional previo y vinculante. La función esencial de ambos tipos de responsabilidad es la reparación de un perjuicio causado injustamente; sin embargo, en sistemas jurídicos como el nuestro, cada uno de ellos tiene su propio ámbito normativo, tanto en lo puramente sustancial como en algunos aspectos de orden procesal. Así, mientras la contractual tiene su fuente legal en los preceptos 1602 a 1604 del Código Civil, que pueden calificarse de rectoras en esta precisa materia, además de los términos pactados por las partes del acuerdo, la convención o el contrato, sin perjuicio de las reglas sobre la materia; en la extracontractual, en cambio, su marco regulatorio lo contienen los artículos 2341 a 2358 *ejusdem*. Como se vé, son dos regímenes jurídicos enteramente distintos, con sus propias regulaciones normativas, a pesar de lo cual su identificación no está exenta de debates en casos concretos, lo que ha dado lugar a las denominadas "zonas grises" que revelan insuficiencia de cada una de estas modalidades de responsabilidad civil, si se les considera en su rígida estructura tradicional. Precisamente por ello, tal estado de cosas ha dado lugar a figuras como la denominada *"obligación de seguridad"* en materia negocial. En sana lógica, no parece procedente juzgar un asunto cuyo rango atañe puramente a este último, con las reglas que corresponden a la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, la complejidad propia de la dinámica social, económica y jurídica de hoy, ha dado lugar a examinar con mayor detenimiento los ámbitos propios de cada una de las referidas tipologías de la responsabilidad civil, hallando que no todos los elementos de aquella le pertenecen de modo exclusivo; tal es el caso de la presunción de culpa"[13].

4.6.3. Por supuesto que en la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, surgen obligaciones de resultado a cargo del guardián de la actividad, entendiendo por tal, según la Corte Suprema, "*la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño, un poder*

[13] SC 1819 de 28 de mayo de 2019.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

efectivo e independiente de dirección, gobierno o control"[14]. Por consiguiente, el agente responsable por daños originados en actividades peligrosas tiene un deber jurídico, verdadera obligación de custodia, que recae sobre las cosas empleadas o utilizadas, deber jurídico que conlleva la necesidad de conservar las cosas en estado de no generar perjuicios y de no producir peligros para los terceros. En esta clase de daños surge por supuesto una obligación se seguridad.

4.6.4. Por lo demás, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, la determinación de si una actividad – sin cosas o con cosas, inactivas o en movimiento – es peligrosa lo dicta por lo general la razón natural, y no es por consiguiente una suposición a la que se llega sin más. La actividad peligrosa es pues, aquella que, según la Corte Suprema, genera más probabilidades de daño y capacidad de destrozo mayor, y cuyos efectos se vuelven incontrolables.[15]

5. Apreciaciones relevantes en el caso concreto.

5.1. Fundamentos generales de la sentencia de primera instancia.

Según se lee en la página 17 de la sentencia proferida el día 29 de mayo de 2023, por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, "*es evidente que la responsabilidad endilgada a la parte demandada se abre paso, pues habiendo quedado sentado por línea jurisprudencial que la obligación de seguridad por ella ofrecida, la que es de las denominadas de resultado, no fue cumplida por parte del Club al no haber impedido el ingreso del vehículo cargado con explosivos habiéndolo podido hacer y con ello se configuró una concurrencia de culpa y no habiendo logrado demostrar con los medios exceptivos planteados un eximente de responsabilidad, habrá de declararse como civilmente responsable causado a los demandantes, con ocasión del fallecimiento de sus esposos y familiares y, consecuentemente habrá lugar a reconocer la indemnización de perjuicios demandada*".

5.2. Estructuración de los elementos de la responsabilidad civil.

[14] Cas. Civ., 4 de junio de 1992. Gaceta Judicial, T. CCXVI, n° 2455, pág. 506
[15] Sentencia 5686 de 14 de diciembre de 2018.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

Por sabido se tiene que para que surja la responsabilidad civil a cargo de un sujeto de derecho por el daño antijurídico que se le imputa, debe existir un perjuicio, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, una conducta positiva u omisiva atribuible al sujeto, y por supuesto, una relación de causalidad que enlace ambos extremos. En este asunto, en lo sustancial, por parte de la sentencia de primera instancia se le achaca al Club El Nogal, haber incumplido una supuesta obligación de seguridad, previamente asumida, sin haber acreditado algún eximente de responsabilidad constitutivo de un factor extraño, por tratarse de una obligación de resultado.

5.3. Ante todo, se advierte que, en este evento, no se está en presencia del desarrollo de una actividad peligrosa, aserto que brota con la sola lectura del objeto social de la Corporación Club El Nogal, por lo que es indubitable la ausencia de las características propias para que la actividad desarrollada por la Corporación demandada se repute como peligrosa[16].

5.4. Por consiguiente, no es dable deducir la existencia o estructuración de una obligación de seguridad, con contornos propios y definidos, como lo hace el juzgado de instancia, de los estatutos de la Corporación, ni menos que esta supuesta obligación se enmarque en una responsabilidad extracontractual, pues esto equivale a desconocer el ámbito y los contornos de una y otra responsabilidad, como ya se ha puesto de presente.

5.5. Así entonces, es claro que, en este caso no se está en presencia de una arquetípica responsabilidad contractual, sino de una responsabilidad extracontractual y por consiguiente no existe presunción de culpa y por ende, tampoco una obligación de seguridad claramente delimitada, y por tanto, le corresponde a los demandantes probar, fehacientemente, todos los elementos de la responsabilidad civil, es decir, una culpa, un daño y la relación de causalidad entre ambos extremos.

[16] Así quedó asentado además en la sentencia de casación **SC9788-2015 de** fecha veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), que constituye, por consiguiente, un precedente judicial.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

5.6. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los tiempos, y antecedente de la anterior doctrina es el fallo de 14 de marzo de 1938,[17] que no solo señaló la distinción entre los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, sino que concluyó que si por regla general la carga de la prueba en materia extracontractual corresponde al demandante, por excepción, como cuando se trata de la responsabilidad por el daño de las cosas inanimadas que están bajo el cuidado de los hombres, "*la prueba se desplaza del demandante para recaer sobre el demandado por la presunción de culpa que establece la ley en varios textos como los artículos 2346 y 2356 del Código Civil...*" y aludiendo a esta última norma y su razón de ser, agregó que "*mal puede reputarse como repetición de aquél (el 2341), ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento, los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de que casos que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es, todo el que 'puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona'. Exige, pues, tan solo que el daño pueda imputarse*"[18].

5.7. Precisado lo anterior, en todos los asuntos de responsabilidad civil en el ordenamiento colombiano, es requisito ineludible probar suficientemente la causa, origen, o fuente del perjuicio. Al decir de la Corte Suprema de Justicia, solo puede tener la categoría de causa, *"(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más 'adecuado', el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo*"[19].

[17] Cas. Civ. 14 de marzo de 1938.
[18] Sent. 2 de diciembre de 1943 -G.J. LVI Pág. 320- igual sentido Sent. 18 noviembre de 1940. G.J. L, pág. 440, Sents. 31 mayo 1938, junio 24 de 1942, 7 de julio de 1977.
[19] CSJ. Civil. Sentencia de 15 de enero de 2008, expediente 67300, citando precedentes.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

5.8. Lo anterior significa entonces que en tanto no se acredite en forma objetiva, fehacientemente, la causa del perjuicio, a cargo del demandado, o el hecho generador del daño, no puede surgir el débito de responsabilidad civil. Acerca de la prueba de la relación causal, ha sostenido la Corte, además, que, por regla general, corresponde a quien solicita la indemnización, según se indicó al inicio de estas consideraciones.

5.9. En el pensamiento del destacado autor alemán Karl Larenz, en el análisis de la causa juega un papel importante el criterio de imputación objetiva ya que "*una consecuencia no adecuada al acaecimiento base de la responsabilidad no puede ser imputada al obligado a indemnizar, y, por tanto, no ha de ser tenida en cuenta al indagar la extensión del daño indemnizable. Y esto quizá, no porque el hecho generador de la responsabilidad no fuese causal según el resultado, sino porque aunque lo sea, en esta relación causal, puesto que es inadecuada, no puede fundarse ninguna responsabilidad. Al responsable del hecho solamente le pueden ser imputadas y tenidas en cuenta en la determinación del daño aquellas consecuencias adecuadas al hecho generador de la responsabilidad. Se trata, por consiguiente, de una imputación objetiva de las consecuencias producidas, no de una imputación subjetiva a título de culpa*"[20].

5.10. En términos generales entonces puede afirmarse que la decisión sobre la existencia o no de la relación de causalidad es una cuestión de hecho, técnicamente acreditada, libre de valoraciones subjetivas o de conjeturas o de teorías, o de supuestos no comprobables, como en este caso ocurre. Dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad de la Corporación Club El Nogal en este caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal, técnicamente soportada, que condujo a la producción del daño deprecado, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada, que no es otra que una responsabilidad directa regida bajo el régimen de culpa probada, como

[20] Larenz Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo I. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1958. Pág. 200.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

se ha explicado anteriormente.

5.11. En este asunto, es ineludible y debe tenerse en cuenta, la sentencia del Consejo de Estado, de 30 de marzo de 2022, de la Sección Tercera Subsección C, que al decidir una acción de reparación directa contra La Nación Ministerio de Defensa, por el ataque terrorista contra el Club El Nogal del 7 de febrero de 2002, absolvió a las demandadas, por encontrar plenamente acreditado el hecho del tercero, las FARC, sin dubitación alguna; en efecto, a juicio de esa Alta Corporación de Justicia, "*El hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la Administración y que su acción sea imprevisible e irresistible. El hecho de un tercero es imprevisible cuando su ocurrencia es improbable. La conducta debe ser imprevisible para la Administración, ya que si puede ser evitada o anticipada le debe ser imputada dada su obligación de impedir el resultado. La imprevisibilidad no significa que la autoridad deba imaginarse todo aquello que puede ocurrir, pues bajo ese supuesto nada es imprevisible. Por su parte, el hecho de un tercero es irresistible cuando el cumplimiento cuidadoso y diligente de los deberes de la Administración es insuficiente para evitar el hecho dañoso. El hecho debe ser irresistible puesto que si la entidad puede oponérsele válidamente no lo puede alegar como causal de exoneración. Según lo probado, el 7 de febrero de 2003 las FARC detonaron un «carrobomba» con más de 150 kilos de explosivo en el Club El Nogal. En la explosión murieron Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame. El DAS y la Policía Nacional no conocieron de amenazas contra el Club El Nogal, ni recibieron solicitudes de protección. El Club El Nogal tampoco recibió amenazas contra sus instalaciones, su personal o sus socios. Conforme a las pruebas, las FARC –en diciembre de 2002– emitieron un comunicado en el que hicieron una serie de críticas al gobierno y a los empresarios por su relación con el «paramilitarismo». En ese comunicado se hizo una referencia a los «clubes del norte de Bogotá», pero no se mencionó un club en específico, ni se anunció acciones contra alguno. El DAS después de analizar su contenido, no evidenció posibles acciones terroristas, ya que consideró que se trataba de directrices de carácter general*".

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

También, según esta sentencia, "*No se allegaron pruebas –conforme a lo probado– que acreditaran que el atentado contra el Club El Nogal era previsible. Antes de la ocurrencia del acto terrorista no se presentaron amenazas concretas contra el Club El Nogal, sus socios o empleados. No era posible para la fuerza pública prever que grupos ilegales actuarían en contra de la población civil en un establecimiento privado, pues no había indicios conocidos que permitieran concluir que el club iba a ser víctima de un ataque terrorista en las circunstancias en las que ocurrió. La guerrilla de las FARC no mencionó directamente al Club El Nogal en sus comunicaciones y la información de inteligencia que recibieron las autoridades sobre posibles acciones terroristas se refería a ataques contra la sede del Congreso y contra alcaldes y parlamentarios. El ataque guerrillero contra el Club El Nogal tampoco podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad. Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo*".

5.12. Igualmente, para efectos de determinar la causa del hecho dañoso en cuestión, hay que considerar igualmente que la Sala de Amnistía e Indulto, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en sentencia de 24 de agosto de 2023, considera que, "*En este caso, el Club El Nogal situado en una zona comercial y residencial de Bogotá se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida. Además, las personas víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado. Así, es claro que el ataque al Club social y empresarial El Nogal de Bogotá ocurrido el 7 de febrero de 2003 a las 8:05 p.m. desconoció gravemente el principio de distinción al afectar directamente a personas civiles protegidas y a bienes de carácter civil"*. Así mismo, determina esta sentencia que, "*Además de las graves violaciones a los principios de distinción y precaución del DIH, el ataque perpetrado en el Club el Nogal el 7 de febrero de 2003 fue parte de una política de las antiguas FARC-EP, según lo estableció la JPO. Al respecto, se debe señalar que el Estatuto de Roma*

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

de la Corte Penal Internacional castiga los crímenes de guerra "en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes". En este instrumento internacional, se entiende por graves violaciones al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, entre otros, "[l]os atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura"; asimismo, se castigan como "otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional", (art. 8.e.i) "Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades".

5.13. De acuerdo con lo expuesto, entonces, no puede ponerse en duda que, el ataque terrorista contra el Club El Nogal, para todos los efectos, debe considerarse como hecho de un tercero, perpetrado por las FARC, y no puede ser desconocido por ninguna jurisdicción, pues de hacerse rompería con la preceptiva, entre otros, de la obligatoriedad de respetar el precedente judicial, consagrado en la Constitución Política, y respecto del cual, vale decir, que la Corte Constitucional lo ha definido en reiteradas oportunidades, como "la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo"[21].

Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio *stare decisis* o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares[22]. Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a

[21] Sentencia SU-053 de 2015.
[22] "El Precedente Constitucional teoría y praxis", Editorial Ibáñez S.A.S, 2013. Definición citada en la sentencia T-460 de 2016.

Calle 69 A # 4 – 31
PBX: +57 (601) 3462668
Bogotá D. C., Colombia

las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia[23]. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima[24], sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales"[25].

5.14. Finalmente, en torno al reconocimiento de los daños materiales o patrimoniales, consignados en la sentencia, desde luego que no basta con enunciarlos, ni tampoco con hacer referencias aisladas y genéricas acerca de su producción, ni cálculos o ilusiones de ocurrencia, sino que deben estar fehacientemente acreditados, sin ningún ánimo de especulación, por más doloroso que haya sido para los demandantes la pérdida de seres queridos en una tragedia tan desgarradora. Para su reconocimiento, por tanto, se deben seguir los lineamientos trazados con anterioridad.

En los anteriores términos, dejo expuesto el concepto por Usted solicitado.

Con toda atención,



Jorge Santos Ballesteros
C. C. 19.084.391 de Bogotá
T. P. 11.210 del C.S de la J.
E-mail RNA: santosballesterosjorge@gmail.com

[23] Sentencia T-460 de 2016.
[24] Sentencia T-049 de 2007.
[25] Sentencia U- 354 de 25 de mayo de 2017.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYAZO PERNETH RV: REF: 015-2012-00273-02 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 5/09/2023 12:19 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (120 KB)
TRASLADO DE SUSTENTACION 05-09.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYAZO PERNETH

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 12:14
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: abogadosenfamilia@hotmail.com <abogadosenfamilia@hotmail.com>
Asunto: RV: REF: 015-2012-00273-02 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: ABOGADOS EN FAMILIA <abogadosenfamilia@hotmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 12:02
Para: Despacho 04 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C.
<des04ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota

<secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REF: 015-2012-00273-02 SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
ATT. MAGISTRADA STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
des04ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

RADICADO: 015-2012-00273-02
REFERENCIA: DECLARACIÓN DE PERTENENCIA
DEMANDANTE: GONZALO MARTÍNEZ PEREZ
DEMANDADO: HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARIA DE JESUS MARTINEZ

ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la parte actora, señor, Gonzalo Martinez Perez, me dirijo muy respetuosamente a la H. Magistrada, para dar cumplimiento a su auto de fecha 29 de agosto de 2023, por medio del siguiente escrito, y encontrándome dentro del término indicado del inciso 2° del artículo 12 de la ley 2213, proceso a **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN,** adjunto PDF.

Favor acusar recibido, gracias.
Cordialmente.

Abogados Consultores
Dr. Samuel Pérez Cárdenas
C.C 19'257.408
T.P 46.571 Del C.S.J
Tel: 2869481-2840620 Cel: 310-2556203. 310-2338768
Correo: abogadosenfamilia@hotmail.com

SEÑORES
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
ATT. MAGISTRADA STELLA MARÍA AYAZO PERNETH
des04ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

RADICADO:	**015-2012-00273-02**
REFERENCIA:	**DECLARACIÓN DE PERTENENCIA**
DEMANDANTE:	**GONZALO MARTÍNEZ PEREZ**
DEMANDADO:	**HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARIA DE JESUS MARTINEZ**
ASUNTO:	**SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN**

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la parte actora, señor, Gonzalo Martinez Perez, me dirijo muy respetuosamente a la H. Magistrada, para dar cumplimiento a su auto de fecha 29 de agosto de 2023, por medio del presente escrito, y encontrándome dentro del término indicado del inciso 2° del artículo 12 de la ley 2213, proceso a **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN,** que a bien su despacho tuvo en admitir, para lo cual me permito manifestar lo siguiente:

1. Inicialmente, he de manifestar, Honorable Magistrada, que doy por inserto lo expuesto ante la Señora Juez A quo, en escrito mediante el cual sustente el presente recurso.

2. Ahora bien, adicionalmente he de precisar, que la sentencia de instancia, proferida el 1 de junio de 2023, por el Juzgado 46 Civil Del Circuito, y que es objeto de apelación, incurrió en el denominado **DEFECTO FACTICO** de carácter constitucional, al haberse dado un valor caprichoso y arbitrario, a las pruebas que no fueron tachadas, ni redargüidas de falsas.

   En efecto, nuestra legislación, así como los más altos tribunales, y en especial la H. Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades ha precisado, el deber que tienen las autoridades de valorar las pruebas en conjunto, conforme a la sana critica, con lógica sensatez, a fin de no vulnerar el debido proceso, que origina un fallo por fuera de lo probado, como ocurre en el caso de estudio.

   Así las cosas, del material probatorio que compone el expediente, se puede fácilmente advertir, que la Señora Juez A quo, efectuó una valoración probatoria equivocada, al no valorar en debida forma la documental aportada, y en especial, la escritura pública que aparece registrada, en el folio de matrícula inmobiliaria del bien, del cual se pide la cuota parte en pertenencia, en favor de mi cliente, quien es propietario inscrito del 88.9%, del predio desde el año 1987, es decir

que ha adquirido el 11.1% por prescripción, conforme se demostró con las declaraciones, que en tal sentido rindieron los deponentes.

3. En el mismo sentido, la Señora Juez A quo, incurrió en una completa desviación en la valoración probatoria, al haber omitido e ignorado que el inmueble no es divisible, no se puede advertir cual es el espacio del bien que corresponde al pretendido en pertenencia y, que origina que siendo mi cliente la persona que posee el total del bien inmueble, es obvio, que el porcentaje del inmueble que se pretende en pertenencia (es decir 11.1%) lo ostenta, lo tiene y lo posee mi patrocinado, con ánimo de señor y dueño, situación que fue ignorada por completo, aun existiendo pruebas que en conjunto así lo demuestran.

   Como quiera que, al no haberse dado el valor probatorio en conjunto, bajo particulares consideraciones es evidente, que la sentencia apelada debe ser revocada, pues con su decisión, no solo se ha dejado de lado el deber legal, como la justa valoración del material probatorio en ligado, sino que se vulnera incluso derechos fundamentales como el debido proceso.

4. En el mismo sentido H. Magistrada, debo precisar que a la presente acción de pertenencia concurre sus componentes axiológicos, como son:

   A. Posesión material en el demandante.
   B. Que la posesión se prolongue por el tiempo de ley.
   C. Que la posesión ocurra ininterrumpidamente.
   D. Que la cosa o derecho sobre la cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por prescripción.

   Que, aplicados al caso en estudio, junto con el material probatorio recaudado, solo pueden dar como consecuencia, la acogida de las pretensiones invocadas, razón por la cual, reitero ante su señoría, mi solicitud de **REVOCATORIA** de la sentencia de primera instancia y consecuencialmente acceder a las pretensiones del libelo.

En los términos que anteceden dejo sustentado el recurso de apelación interpuesto.

De la H. Magistrada,

Cordialmente,

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS
C.C. N°19.257.408 De Bogotá D.C.
T.P. N°46.571 del C.S. de la J.
abogadosenfamilia@hotmail.com
Teléfonos: 310 233 8768 – 286 9481

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA GALVIS VERGARA RV: 11001310301520180002003

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 7/09/2023 9:47 AM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (310 KB)
Recurso Apelación Tribunal.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA GALVIS VERGARA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: ANGEL ANGEL <angelangelabogados@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 9:25
Para: Despacho 11 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des11ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; secsctribunalsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <secsctribunalsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: cooservicta@gmail.com <cooservicta@gmail.com>; maria.almonacid@almonacidasoaciados.com <maria.almonacid@almonacidasoaciados.com>; oegomez@yahoo.com <oegomez@yahoo.com>
Asunto: 11001310301520180002003

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
Magistrada Ponente: Dra. RUTH ELENA GALVIS VERGARA
SALA CIVIL
E. S. D.

Referencia: Proceso Verbal No. 11001310301520180002003
JUZGADO QUINCE (15) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
JUZGADO DIECISÉIS (16) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
De: ALMA CECILIA HOYOS ISAZA
Vs: COSERVI C.T.A. EDIFICIO TERRAZAS DEL RINCON P.H. Y OTROS

RAFAEL ANGEL AMAYA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma y actuando como apoderado de la parte ACTORA, anexo el siguiente RECURSO DE REPOSICIÓN y en subsidio RECURSO DE APELACIÓN en formato PDF, para que sea tenida en cuenta por su despacho.

Del Señor Juez,

RAFAEL ANGEL AMAYA
CC 19.350.031 de Bogotá D.C.
TP.63.225 del C.S.de la J.

A&A
ANGEL & ANGEL
ABOGADOS ASOCIADOS
Carrera 8 No. 38-33 Oficina 702
Tel: 4559315 - Cel:310-8801321
Email: angelangelabogados@gmail.com
Bogotá D.C.

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C
Magistrada Ponente: Doctora: RUTH ELENA GALVIS VERGARA
SALA CIVIL
Email: des11ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
secsctribunalsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

Referencia: Proceso Verbal No: 11001310301520180002003
JUZGADO QUINCE (15) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
JUZGADO DIECISEIS (16) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
De: **ALMA CECILIA HOYOS ISAZA**
Vs: **COSERVI C.T.A. EDIFICIO TERRAZAS DEL RINCON P.H. Y OTROS**

RAFAEL ANGEL AMAYA, mayor de edad, vecino y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía, Nº 19.350.031 de Bogotá abogado en ejercicio, con tarjeta profesional Nº 63.225 del C.S. de la J. actuando como apoderado Judicial de ALMA CECILIA HOYOS ISAZA, dentro del proceso de la referencia, Interpongo el RECURSO DE REPOSICION y en subsidio el RECURSO DE APELACION en contra del auto que decidido no pronunciarse al recurso de reposición interpuesto el día 18 de agosto de 2023 por considerarlo extemporáneo el cual sustento así:

Si bien es cierto, que existen canales digitales para la atención al publico tal como lo afirma su señoría, para el día 17 de agosto de 2023 una vez sucedió el movimiento telúrico, todos los despachos judiciales cerraron su atención al publico y desalojaron las entidades, tanto público como funcionarios con el fin y de acuerdo con el protocolo para estos eventos, es decir si no están los funcionarios no hay servicio, pues las herramientas tecnológicas son un canal más, por lo que no se puede decir que es la prestación del servicio.

A&A
ANGEL & ANGEL
ABOGADOS ASOCIADOS
Carrera 8 No. 38-33 Oficina 702
Tel: 4559315 - Cel:310-8801321
Email: angelangelabogados@gmail.com
Bogotá D.C.

El acuerdo 4035 del 15 de mayo de 2007 establece los horarios de atención al publico para la ciudad de Bogotá D.C., esto quiere decir que en el horario allí establecido estarán los funcionarios atendiendo, pues a pesar que exista el canal una vez son las 5: 00 PM y los funcionarios salen o dejan de prestar la atención al público, este canal sigue funcionando pero no por ello quiere decir que se este prestando el servicio como su señoría lo dice es una herramienta, pero no es la prestación del servicio.

Por lo anterior, solicito se le dé el trámite correspondiente al recurso de reposición interpuesto el día 18 de agosto de 2023 teniendo en cuenta que ante el movimiento telúrica del día 17 de agosto de 2023 es un hecho de fuerza mayor o caso fortuito y que por ello los funcionarios tuvieron que ausentarse y los despachos suspendieron el servicio, hecho de conocimiento público tanto así que las audiencias que se estaban llevando a cabo como las citadas en horas de la tarde fueron suspendidas y por seguridad jurídica no se puede suspender el servicio para ciertos actos y otros no cuando en Bogotá D.C., fue de carácter general.

Por lo anterior ruego a su señoría, se sirva darle tramite al recurso interpuesto por las razones expuestas.

De la señora Magistrada con mi respeto acostumbrado,

RAFAEL ANGEL AMAYA
C.C. No. 19. 350.031 de Bogotá
T.P. No. 63.225 del C.S. de J.

Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

maria.almonacid@almonacidasociados.com
cooservicta@gmail.com
oegomez@yahoo.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYALA PULGARIN RV: RECURSO DE SUPLICA PROCESO 11000131030162010004310 1

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 13/09/2023 12:33

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

2 archivos adjuntos (1 MB)
RECURSO DE SUPLICA.pdf; APELACION SENTENCIA.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA AYALA PULGARIN

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 12:10
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: gerencia@agenciajuridica.com <gerencia@agenciajuridica.com>
Asunto: RV: RECURSO DE SUPLICA PROCESO 11000131030162010004310 1

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: Jaime Nel Gomez Herrera <gerencia@agenciajuridica.com>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 10:37
Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: RECURSO DE SUPLICA PROCESO 11000131030162010004310 1

Saludos Cordiales,

Jaime Nel Gómez Herrera

Representante Legal

AGENCIA JURIDICA
• Celular.: **3108739238**
gerencia@agenciajuridica.com •www.agenciajuridica.com

¡Justicia, Equidad y Ética!

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

"La información contenida en esta comunicación es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley 1273 del 5 de enero de 2009. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Agencia Jurídica, a la dirección de correo electrónico que se lo envió, y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo".

---------- Forwarded message ---------
De: **Jaime Nel Gomez Herrera** <gerencia@agenciajuridica.com>
Date: mié, 13 sept 2023 a las 10:20
Subject: RECURSO DE SUPLICA PROCESO 11000131030162010004310 1
To: <secsctribusupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Allego RECURSO DE SUPLICA.

Saludos Cordiales,

Jaime Nel Gómez Herrera

Representante Legal

AGENCIA JURIDICA
• Celular.: **3108739238**
gerencia@agenciajuridica.com •www.agenciajuridica.com

¡Justicia, Equidad y Ética!

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

"La información contenida en esta comunicación es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona natural o jurídica a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje, se encuentra prohibida y sancionada por la ley 1273 del 5 de enero de 2009. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Agencia Jurídica, a la dirección de correo electrónico que se lo envió, y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo".

Honorable Magistrada
ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADA TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
E. S. D.

REF	**: PROCESO RAD. No. 11000131030162010004310 1**
DE	**: ANA MILENA RAMIREZ BARRERA Y OTRA**
CONTRA	**: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA**
ASUNTO	**: RECURSO DE SUPLICA**

LUIS ENRIQUE MURILLO MONTAÑA, en mi condición de apoderado de las DEMANDANTES **ANA MILENA RAMIREZ BARRERA y MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ BARRERA**, respetuosamente dentro del término legal establecido en el Artículo 331 del Código General del Proceso, manifiesto que interpongo **RECURSO DE SUPLICA**, contra el auto del pasado 7 de septiembre de 2023, mediante el cual DECLARO DESIERTO el recurso interpuesto contra la sentencia calendada 11 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, por no haberlo sustentado dentro del término de traslado.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Sea la primero precisar que efectivamente no sustento dentro del término de traslado, toda vez que esta carga procesal, se cumplió a cabalidad al momento de INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, contra la sentencia, donde se expresaron los motivos de inconformidad ampliamente, en escrito enviado al Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, el 17 de enero de 2023, siendo confirmado el recibido por el Despacho el 25 de enero de 2023.

Esta situación se encuentra ampliamente acreditada en el expediente digital que fuera enviado al Honorable Tribunal, en donde obra la SUSTENTACION DEL RECURSO.

En el auto proferido el 07 de Septiembre de 2023, dentro del proceso de la referencia, se vislumbra un error de digitación al invocar el artículo 14 de la Ley 2213 de 2021, como fundamento para declarar desierto el recurso de apelación perpetrado por el suscrito y sustentado por escrito, contra la sentencia del 11 de Enero de 2023.

El artículo 14 de la Ley 2213 de 2021, consagra:

"ARTÍCULO 14. En el informe anual que presenta la Rama Judicial al Congreso de la República se dispondrá de un capítulo especial sobre el estado de avance que se tiene del proceso de transformación digital".

Así las cosas, el artículo que considera lo aplicado por el Ad – Quem, es el artículo 12 de la Ley 2213 de 2021.

Ahora bien, el Ad – Quem, no puede pretermitir que la parte actora dentro del término, expuso por escrito el recurso de apelación contra la sentencia del 11 de Enero de 2023, ante el Ad – Quo, expresando las inconformidades y reparos concretos a la providencia.

Esta exposición por escrito las inconformidades y reparos concretos a la providencia del 11 de enero de 2023, cumple las finalidades de la sustentación del recurso de apelación, a saber:

- *HABILITA LA COMPETENCIA DEL AD – QUEM*, porque si el suscrito no hubiera realizado la sustentación del recurso de apelación contra la providencia del 11 de Enero de 2023, el Ad – Quem, no lo hubiera admitido por incumplimiento al precepto de sustentación.

- *LA CONTRAPARTE EJERZA SU DERECHO DE CONTRADICCIÓN,* toda vez que con esa sustentación la contraparte conoce cuales son las inconformidades y reparos concretos objeto del recurso, para edificar su defensa técnica. El apelante está atado a esa sustentación inicial ante el Ad – Quo, porque no puede considerar otras razones que las allí expuestas.

Si estas finalidades se satisfacen en las etapas procesales, como ocurrió en el presente caso, donde sustente por escrito el recurso de apelación contra la sentencia del 11 de Enero de 2023; resulta irrazonable declarar desierto el recurso de apelación – que fue materialmente sustentado – por el silencio dentro de los cinco (5)

días siguientes, a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la solicitud de pruebas , lo que, por lo demás, puede constituir un escenario de denegación de justicia. ***MÁXIME CUANDO NINGUNA DE LAS NORMAS DEL CGP PREVÉ UNA PROHIBICIÓN DE SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN ANTES DE LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN Y FALLO.***

INTERPRETACIÓN IRRAZONABLE ACERCA DEL ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 322 Y 327 DEL CGP, LA CUAL, POR LO DEMÁS, DESCONOCE EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS (ART. 228 DE LA CP).

Conforme al artículo 12 de Ley 2213 de 2021, el recurso deberá sustentarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la solicitud de pruebas.

Situación que sería plausible siempre que el Ad – Quem, desconociera por completo las inconformidades y reparos concretos contra la sentencia del 11 de Enero de 2023, situación que no ocurre en el presente caso, porque la parte actora cumplió con esa carga procesal.

EXCESO RITUAL MANIFIESTO. La jurisprudencia constitucional ha definido el exceso ritual manifiesto como la "renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales" (T-268 de 2010). En estos términos, la aplicación irreflexiva de la declaratoria de desierto del recurso de apelación por la NO SUSTENTACIÓN POR ESCRITO, dentro de los cinco (5) días siguientes, a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la solicitud de pruebas; prevista por el artículo 12 de Ley 2213 de 2021, implica un ritualismo excesivo en el cumplimiento de las formas procesales, que desconoce la finalidad del recurso de apelación como instrumento para asegurar la efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso (defensa, contradicción y doble instancia) y de acceso a la administración de justicia. Esto, en atención a las finalidades de la sustentación del recurso de apelación y el objeto de la sanción de declaratoria de desierto de este recurso.

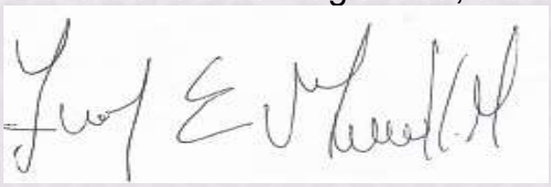
DESCONOCIMIENTO DEL OBJETO DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL RECURSO DE APELACIÓN. La declaratoria de desierto del recurso sanciona la no sustentación del recurso. El artículo 322 del CGP prevé que "[e]*l juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado*". En este sentido, la disposición no impone dicha sanción a la parte que guarda silencio dentro de los cinco (5) días siguientes, a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la solicitud de pruebas, sino a aquella que no expone con claridad y suficiencia las inconformidades y reparos concretos a la providencia apelada. Si lo que se pretende con dicha sanción es reprochar la conducta de la parte apelante que no comparece a la audiencia, existen otros medios que logran esa finalidad, sin comprometer la eficacia de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por ejemplo, mediante la compulsa de copias al apoderado judicial.

Sancionar el silencio de la parte apelante con la declaratoria de desierto del recurso, como lo determinó el Ad – Quem, "implica *un formalismo y ritualismo excesivo que desconoce el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas*, que sacrifica los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por el cumplimiento de una simple formalidad que, en todo caso, no está prevista por las normas procesales" (Salvamento de Voto SU – 418/2019. M.P. CARLOS BERNAL PULIDO).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sentencia SU – 418/2019. Salvamento de Voto M.P. CARLOS BERNAL PULIDO.

De la Honorable Magistrada, atentamente,



LUIS ENRIQUE MURILLO MONTAÑA
C. C. No. 74.370.675 de Duitama
T.P. No. 140.403 del C. S. de la J.

Señores
JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
E. S. D.

REF	**: PROCESO ORDINARIO No. 2010 – 431-045**
DE	**: ANA MILENA RAMIREZ BARRERA Y OTRA**
CONTRA	**: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA**
ASUNTO	**: APELACION SENTENCIA**

LUIS ENRIQUE MURILLO MONTAÑA, en mi condición de apoderado de las DEMANDANTES **ANA MILENA RAMIREZ BARRERA y MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ BARRERA**, respetuosamente dentro del término legal, manifiesto que interpongo recurso de apelación, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por su despacho, el 11 de Enero de 2023, dentro del proceso de la referencia, fundamental por A **INDEBIDA VALORACION PROBATORIA**, que se refleja en la escueta sentencia recurrida, así:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El Ad – Quo, en su providencia del 11 de Enero de 2023, dio por terminado el presente litigio, dando aplicación a la cosa juzgada con base en la valoración de dos contratos de transacción, a saber:

- Contrato de Reconocimiento de Daños, Avalúo, Transacción y Pago de fecha 8 de enero de 2008.
- Contrato de Reconocimiento de Daños, Avalúo, Transacción y Pago de fecha 13 Enero de 2009.

SEGUNDA. Los documentos relacionados en el epígrafe anterior, fueron allegados por el suscrito al momento de presentación de la demanda, en virtud del postulado de ***LEALTAD PROCESAL***. Pues en ningún momento se pretendió desconocer su existencia, lo que se buscaba era presentar al juzgador todas las pruebas para que a través de la Litis se llegará a la verdad real o por lo menos a una aproximación de esa verdad.

TERCERA. En los documentos:

- Contrato de Reconocimiento de Daños, Avalúo, Transacción y Pago de fecha 8 de enero de 2009.
- Contrato de Reconocimiento de Daños, Avalúo, Transacción y Pago de fecha 13 Enero de 2009.

La empresa **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA,** no solo se comprometió a pagar sumas de dinero, como se evidenció en el desarrollo del presente proceso, sino que se comprometió a descontaminar un área aproximada de 8.900 metros cuadrados, lo que a nuestros días no se ha cumplido. Obligación que pretermitió el fallador en primera instancia en la valoración probatoria.

El daño dentro de la responsabilidad civil extracontractual no solo se repara a través del pago de sumas de dinero como ocurrió en el presente caso, sino que la legislación nacional e internacional exige del causante del daño, la realización de un programa de mitigación permanente al recurso natural afectado. Situación que no se ha realizado y la que motivo la presentación de la demanda.

CUARTO. El Ad – quo no tuvo en cuenta dentro de la providencia recurrida, el hecho de que la parte demandada, ***NUNCA ACREDITO LA CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE*** dentro de los predio **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA,** que fundara la legalidad de su proceder dentro la finca **EL PALMAR,** propiedad de mis mandantes.

Así las cosas, a mis prohijadas no les asiste el deber de soportar las consecuencias de la presencia de un **OLEODUCTO** de propiedad de **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA,** que fue construido sin su consentimiento y con pleno desconocimiento a los daños ambientales coetáneos a su funcionamiento.

Los dineros pagados en virtud del cumplimiento de los contratos de transacción no se compadecen al pago integral de los daños acaecidos en el predio **EL PALMAR,** solo comportan una parte del daño emergente, pero desconoce el lucro cesante.

QUINTO. El Ad –Quo pasó por alto en la valoración probatoria el dictamen pericial – rendido por **FRANCISCO DE LA HOZ -**, ni si quiera se detuvo en su sentencia a mencionar la magnitud de los daños y el

plan de recuperación del predio **EL PALMAR,** es como si la labor del perito fuese más un saludo a la bandera, que como un medio de prueba pleno.

SEXTO. Hoy día se ha superado la inquisición de la tarifa legal y el juez para la valoración probatoria debe aplicar la sana crítica, de la que adoleció la sentencia recurrida, por cuanto:

"Sana crítica, libre convicción o convicción sincera, significan, es cierto, que el magistrado no está sometido a ataduras o preconceptos legales que le fijen a priori el valor de la prueba, pero la apreciación que haga sobre ese valor debe ser razonada o exteriorizada. (p. 145)

"Por otro lado, Couture (1958), sobre la sana crítica afirmó: La sana crítica que domina el común de nuestros códigos es, sin duda, el método más eficaz de valoración de la prueba. Sin los excesos de la prueba legal, que llevan muchas veces a consagrar soluciones contrarias a la convicción del juez, pero también sin los excesos a que la arbitrariedad del magistrado podría conducir en el método de la libre convicción tomado en un sentido absoluto, reúne las virtudes de ambos, atenuando sus demasías. (p. 276).

"No obstante, en las diferentes sentencias, se aprecia que se afirma que para apreciar el material probatorio se utilizaron las reglas de la sana crítica, entonces

¿Qué son las reglas de la sana crítica?, Couture (1958), al respecto manifestó: Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

"El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería 12 sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. (p. 270, 271)"(

https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4387/Sistemas_valoraci%C3%B3n_probatoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

SEPTIMO. De los referidos contratos:

- Contrato de Reconocimiento de Daños, Avalúo, Transacción y Pago de fecha 8 de enero de 2008.
- Contrato de Reconocimiento de Daños, Avalúo, Transacción y Pago de fecha 13 Enero de 2009.

Se puede predicar **ausencia de proporcionalidad del acuerdo transaccional,** que se explica**:**

- El oleoducto de propiedad de **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA** que pasa por **EL PALMAR,** ha generado un sin número de daños ambientales – suelos e hídricos -, de los que no se ha realizado acciones tendientes a mitigar los daños futuros.
- La presencia del oleoducto carece de causa lícita, por cuanto no emerge de una limitación legítima del derecho de dominio de mis representadas, es decir, adolece de constitución de servidumbre.
- Que la suma pagada por **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA,** a mis mandantes no amortiza los daños presentes y futuros del predio – certificados por dictamen pericial plenamente controvertido dentro del presente plenario y desconocidos por el Ad – Quo-.
- Que **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA,** no cumplió con la descontaminación de 8.900 metros cuadrados.

LA SUMA DE DINERO PAGADA A MIS PODERDANTES NO INDEMNIZA LOS DAÑOS OCASIONADOS Y NO EXCLUYE EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE DESCONTAMINACIÓN DE 8.900 METROS CUADRADOS.

Fíjese señor Juez-Ad quem, que la misma empresa **MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD,** mediante acta de reunión que data del pasado 28 de marzo de 2012, que obra en el expediente, suscrito entre mis poderdantes y la operadora, se comprometió a la **BIORREMEDIACION DE LOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (1350 M^2)**, circunstancia que nunca ha llevado a cabo, o me pregunto, ¿existe alguna prueba dentro del plenario que demuestre que efectivamente se realizo?, la respuesta obviamente es

un **NO ROTUNDO**, puesto que la operada jamás cumplió a su compromiso.

Esta situación se encuentra más que acreditada por el señor perito **FRANCISCO DE LA HOZ**, quien acredita ampliamente su experiencia en materia de HIDROCARBUROS, y con su amplió y acucioso dictamen pericial.

En consecuencia, solicito al señor Juez Ad-Quem, se revoque en su integridad la sentencia recurrida, y se acojan la totalidad de las pretensiones solicitadas en el libelo demandatorio, o en su defecto, actualizar a los precios de hoy, el costo total que cuesta la **BIORREMEDIACION**, que dictaminara el señor perito **FRANCISCO DE LA HOZ**, atendiendo que desde la fecha en que se presento, a hoy en día, el precio del DÓLAR ha variado ostensiblemente.

Del señor Juez, atentamente,



LUIS ENRIQUE MURILLO MONTAÑA
C. C. No. 74.370.675 de Duitama
T.P. No. 140.403 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO RV: sustentación apelación

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 08/09/2023 16:58

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (485 KB)
RECURSO DE APELACIÓN STELLA 08-09-23 CHAPARRO.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ACOSTA BUITRAGO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 16:53
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: duqueyelile@yahoo.com <duqueyelile@yahoo.com>
Asunto: RV: sustentación apelación

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: Yelile Duque <duqueyelile@yahoo.com>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 16:51
Para: Despacho 00 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá D.C. <des00sctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;

Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; jurismarce257@yahoo.es <jurismarce257@yahoo.es>; oquendo.oscar@hotmail.com <oquendo.oscar@hotmail.com>

Asunto: sustentación apelación

Cordial saludo respetados magistrados, procedo a sustentar el recurso de apelación dentro del termino correspondiente, en el proceso de la referencia

REF: PROCESO DE PERTENENCIA
DEMANDANTE: LUZ STELLA CHAPARRO PERALTA
DEMANDADOS: ANA ALEXNDRA PERALTA OTIZ Y OTROS
RADICADO No. 11001310301620180009002
ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

Atentamente,

YALILE DUQUE SANCHEZ
ABOGADA MAGISTER
3158889933

YALILE DUQUE SANCHEZ
A B O G A D A
Correo: duqueyelile@yahoo.com
Duqueabogados.asociados10@gmail.com

SEÑORES MAGISTRADOS
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO, SALA CIVIL DE BOGOTA, D.C.
MAGISTRADO PONENTO: DR RICARDO ACOSTA BUITRAGO

E. S. D.

REF: PROCESO DE PERTENENCIA
DEMANDANTE: LUZ STELLA CHAPARRO PERALTA
DEMANDADOS: ANA ALEXNDRA PERALTA OTIZ Y OTROS
RADICADO No. 11001310301620180009002
ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

YALILE DUQUE SANCHEZ, mayor de edad, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderada de las señoras **LUZ STELLA CHAPARRO PERALTA,** manifiesto que procedo a **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** contra la sentencia de primera instancia**,** a fin de que sea revocada y como consecuencia se acceda a las pretensiones en el proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, lo cual hago en los siguientes términos:

I. PROVIDENCIA RECURRIDA

Se trata de la providencia de fecha 25 de julio de 2023 por medio de la cual se dictó sentencia que puso fin a la primera instancia y se negaron las pretensiones en el proceso de pertenencia, con el presente recurso se pretende sea revocada en su totalidad la SENTENCIA DICTADA

II. REPAROS PARA QUE SE REVOQUE LA PROVIDENCIA

Delanteramente solicitamos que la sentencia de primera instancia sea revocada y como consecuencia de esto, se acceda a las pretensiones de la demandante, en el proceso de pertenencia por la señora **LUZ STELLA CHAPARRO PERALTA,** Con base en los siguientes reparos o con mejores argumentos que el A-Quem tenga para resolver este asunto.

2.1 LA INTERVERSIÓN DEL TÍTULO

> "la interversión del título o de la causa puede definirse como aquella acción que genera la transformación, cambio o mutación en la causa con la que posee o detenta el ocupante del predio para hacer disposición, uso y disfrute de este para su beneficio propio, pasando a poseerlo con animus domini, desconociendo las de otros poseedores y/o propietarios, y exteriorizando los actos posesorios con la finalidad de poder usucapir el bien.
>
> "interversión de título", que en simples palabras es el cambio o transformación de la calidad con la cual el sujeto posee o detenta el predio pasando de esta a ostentar la calidad de poseedor con intenciones de usucapir". (Alberto MENESES GÓMEZ http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0004668)

"Los poseedores en concepto de distinto pueden ser poseedores para conservar la cosa o derecho, es decir, en interés de otro (depositario, administrador, gestor de negocios); o para disfrutarlos, es decir, en interés propio (usufructuario, usuario, arrendatario, comodatario); o simplemente detentadores (precario).

El poseedor en un concepto determinado puede pasar a poseer en otro concepto (por ejemplo, el que posee en concepto de arrendatario a poseedor en concepto de dueño). Este fenómeno es conocido con el nombre de inversión o interversión de la posesión. Se produce por los mismos modos por los que el poseedor adquiere –si intensifica el concepto- o pierde – si disminuye la entidad del concepto- la posesión, siempre que cambie el propio comportamiento inequívoco del poseedor en relación con los interesados en la cosa" (Peña Bernaldo De Quirós, 1986, p. 80)

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados y haciendo el análisis en el caso que nos ocupa, mi poderdante la señor LUZ STELLA CHAPARRO PERALTA, si demostró la intervesión del título, dejando de ser heredera, para convertirse en poseedora, con el acervo probatorio aportado y practicado en el desarrollo proceso.

Presupuestos

"De acuerdo con lo antes indicado y en esta línea de pensamiento, consideramos que los presupuestos necesarios para que se pueda materializar la interversión de título son:

a. Ser tenedor, servidor, ocupante, poseedor u otro de un determinado predio.

b. Realizar actos de posesión claros y concretos, no solo uno.

c. Generar publicidad de los actos de posesión que se ejerce, que puedan ser conocidos por el propietario y/o poseedor y/o terceros.

d. Desconocer y/o rechazar al anterior propietario y/o anterior poseedor y/o terceros, impidiéndole disponer, usar y/o disfrutar del predio.

e. Posesión efectiva del predio.

f. Posesión para disponer, usar y disfrutar del predio.

g. Posesión con animus domini.

h. Haber transformado su causa posesoria por acto unilateral o con intermediación de un tercero, de ser el caso.

Debemos anotar que consideramos que todos los requisitos tienen que ser concurrentes para que se pueda presentar esta figura legal". (Alberto MENESES GÓMEZ http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0004668)

De otra parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en la Sentencia S.C. 28-11-2013-1100131030131999-07559-01, dijo:

> "La interversión del título sobre los bienes identificados con las matrículas inmobiliarias antes detalladas, expresó el tribunal, no fue debidamente probada y como, las diferentes versiones entremezclan la posición de la señora Guerrero Niño y su padre, el señor Santiago Guerrero Garzón, quien falleció en 1964, a más que, iterase, se habló siempre de actos posesorios compartidos, refirió el juzgador de segundo grado que no hay certidumbre acerca del momento en que mutó su título herencial para convertirse en poseedora.
>
> Pues bien, tratándose del heredero que alega haber ganado el dominio por prescripción de un bien que corresponde a la masa sucesoral, debe probar que lo posee, en forma inequívoca, pública y pacíficamente, no como sucesor del difunto, sino que lo ha poseído para así, como dueño y único, sin reconocer dominio ajeno, ejerciendo como señor exclusivo con ánimo de propietario de la cosa.

YALILE DUQUE SANCHEZ
A B O G A D A
Correo: duqueyelile@yahoo.com
Duqueabogados.asociados10@gmail.com

Ha sido esa la posición de la sala, al enseñar, incluso en el también proceso de pertenencia promovido antes por la aquí actora principal María Inés Guerrero, que*: "Pero como además del desconocimiento del derecho ajeno al poseer la cosa como dueño, vale decir,* ***con exclusividad,*** *es necesario que concurra otro elemento para usucapir, cual es el que se complete el mínimo de tiempo exigido, (…). Por lo tanto, en este evento debe entonces el heredero que alegue la prescripción extraordinaria, acreditar primeramente el momento preciso en que pasó la interversión del título de heredero, esto es, el momento en que hubo cambio de la posesión material que obstenta como sucesor o heredero, por la posesión material del propietario del bien; (…), hay que concluir que mientras se posea legal y materialmente un bien como heredero, el tiempo de esta posesión herencial no resuelta apto para usucapir esa cosa singular del causante, pues en tal evento si se tiene el ánimo de heredero, se carece el ánimo de señor y dueño" (Cas. Civ. Sentencia de 24 de junio de 1997, expediente 4843)"*

Si entramos ha hacer un análisis exhaustivo de la interverción del título, como lo es el caso que nos ocupa, se puede evidenciar que uno los puntos o razones más relevantes es el momento en que se da mutación del título de la accionante, y con base a los medios probatorios aportados y practicados en el desarrollo el proceso quedó claramente demostrado, como fue la constitución del contrato de cesión de los derechos herenciales entre la señora LUZ STELLA CHAPARRO PERALTA Y EL SEÑOR LUIS EDUARDO CHAPARRO, a principios del 2009, época en la que la accionante toma la continuidad de poseedora para ejercer los actos de señora y dueña.

Prescripción de herencia

El artículo 757 CC se refiere a la posesión de bienes herenciales y dispone que "en el momento de deferirse la herencia la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero". Pero el heredero no puede disponer de esta mientras no precede un decreto judicial que le dé la posesión efectiva y el registro de este y los títulos que le confieran el dominio.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 19 de diciembre de 2018, rad. 25754-31-03-001-2013-00062-01, se pronuncia dando claridad respecto del tema. Explica que la sucesión es la forma como el patrimonio de una persona se transmite luego de su fallecimiento a sus herederos, entendiendo patrimonio como el conjunto de todos los bienes y obligaciones apreciables en dinero. Se reputa que el heredero ha sucedido al causante en el dominio aun cuando entre la delación y la partición el heredero no goce de la propiedad singular en los bienes de la herencia, la cual sólo adquiere una vez se liquida y se le adjudican los bienes.

El art. 783 del CC se refiere a la posesión de la herencia y establece que se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. Entonces, no se requieren los elementos de la posesión común porque es conferida por la ley desde que fallece el causante. Como ya se mencionó, de lo que se lee en el artículo 757 ídem, esto no lo habilita para disponer de los inmuebles porque como la doctrina lo ha indicado, la posesión legal del heredero es una ficción legal, una posesión ficticia diferente a la posesión verdadera. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia argumenta lo siguiente en la misma referencia relacionada anteriormente:

"Es indiscutible que la "posesión de la herencia" no es incompatible con la "posesión material", en la medida que ambas pueden concurrir en un mismo individuo, pero puede ocurrir también que se escindan, en procura de obtener el dominio por modo distinto a la sucesión mortis causa, como es la prescripción adquisitiva.

Resaltado fuera del texto

Ciertamente, es posible que abierta la sucesión se concurra a la adquisición del patrimonio del causante por el modo de la sucesión, al amparo de la condición de heredero teniendo así mientras permanezca la universalidad la posesión legal de herencia (posesión ficticia) hasta el momento en que se apruebe la partición que materialice la adquisición por este especifico modo, pero puede

ocurrir que ese heredero paralelamente accione con miras a obtener el reconocimiento de la posesión material que ha ejercicio *motu proprio* sobre determinado bien de la herencia para que se declare su dominio por el modo de la prescripción, evento en el cual ha dicho esta Corte, que «tratándose del heredero que alega haber ganado el dominio por prescripción de un bien que corresponde a la masa sucesoral, debe probar que lo posee, en forma inequívoca, pública y pacíficamente, no como sucesor del difunto, sino que lo ha poseído para sí, como dueño único, sin reconocer dominio ajeno, ejerciendo como señor exclusivo y con ánimo de propietario de la cosa"

Sobre este punto es relevante anotar que, en cualquier caso, esta potestad podrá ser ejercida por cualquier tercero poseedor frente a los bienes de la masa herencial, cuando quiera que satisfaga las demás exigencias de ley, sin que en todo caso puedan confundirse el derecho de herencia con el derecho de dominio, ambos derechos reales[74].

https://red.uexternado.edu.co/algunas-anotaciones-sobre-la-prescripcion-adquisitiva#_ftn74

Se distingue de esta manera, la posesión legal de la herencia que adquiere el heredero derivado de la delación de la herencia como modo derivativo de adquirir el dominio como ficción legal, de la posesión material como aprehensión material de la cosa con ánimo de señor y dueño para adquirir ese dominio por el modo originario de la prescripción. Así, la Corte indica que:

"La sucesión por causa de muerte da nacimiento al derecho de herencia, que es un derecho real que tiene la peculiaridad de ser, universal, en lo cual se diferencia del derecho real de dominio que versa sobre cosas singulares. La herencia, aunque es comprensiva de ellos, es un derecho distinto de los bienes mismos que la integran o componen. Por la muerte de un individuo su heredero adquiere *per universitatem* el dominio de los bienes de la sucesión, pero no la propiedad singular de cada uno de ellos mientras no se realice la liquidación y adjudicación del acervo herencial de acuerdo con la ley. Son cosas distintas la adquisición del derecho de herencia, que versa sobre una universalidad jurídica con la esperanza de concretarse en el dominio de uno o más bienes especiales y que tiene por título la ley o la voluntad del causante, y la adquisición de las cosas hereditarias singularmente, cuyo título es la correspondiente adjudicación"[75].

https://red.uexternado.edu.co/algunas-anotaciones-sobre-la-prescripcion-adquisitiva#_ftn75

Ahora bien, revisando la prescripción de la herencia como lo define el Código Civil en los artículos 757 y 783 y ss., se puede evidenciar que la accionante señora LUZ STELLA CHAPARRO, dejo de ser heredera para convertirse en poseedora, debido a la desidia, abandono que tuvieron los hermanos y posteriormente sus sobrinos, en relación a los derechos adquiridos por la causante **ANA RITA PERALTA (Q.E.P.D),** que si bien es cierte les asistía un derecho la ley y los pronunciamientos de la *Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil*, auto de 19 de diciembre de 2018, rad. 25754-31-03-001-2013-00062-01, se ha pronunciado sobre la extinción del derecho, como lo argumenta la apoderada de la parte demandada que iniciaron un proceso de sucesión, de acuerdo con el material probatorio aportado por ellos, fue posterior al proceso de pertenencia, que como ya se mencionó anteriormente, ya habían pasado más de 23 años del fallecimiento de la señora Ana Rita Peralta (Q.E.P.D.)

Los argumentos que dieron en sus interrogatorios fueron muy poco convincentes, porque siempre mencionaron tener consideración por el señor Chaparro, diciendo que siempre lo vieron y quisieron como un padre, pero la verdad es que ellos no se comportaron ni como hijos o hijastros y por supuesto, ni como nietos de crianza, ya que se demostró un abandono total, tanto al inmueble en mención des pues del fallecimiento de la señora Ana Rita Peralta (Q.E.P.D), y a su supuesto padrastro y abuelastro.
Para el momento de radicar la demanda de pertenencia por parte de mi poderdante, ya habían transcurrido aproximadamente 22 años del fallecimiento de la causante señora Ana Rita Peralta (Q.E.P.D), lo que indica el abandono de sus derechos que pudiesen haber tenido.

Mi poderdante en ningún momento actúo de mala fe frente a sus hermanos o sobrinos, como lo quiso hacer ver la abogada de la parte demandada, todos estaban en igual condición de derechos

para accionar, pero no les asistió el interés de hacerlo, ya que se demostró con las pruebas practicadas en el desarrollo del proceso el abandono total.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

El Aquo, en la sentencia objeto de impugnación, no le dio el valor probatorio a los medios de pruebas aportados y practicados dentro del proceso, como fueron pruebas documentales, donde la accionante ejerció el animus y corpus, como señora y dueña del porcentaje del inmueble objeto de litigio, como fue la interversión del título de heredera ha poseedora, en efecto, (i) existe la confesión de la demanda Claudia Yolima Lizarazo, heredera de la señora Ana Rita Peralta (Q.E.P.D.), Por representación de la señora Blanca Mayorga de Lizarazo (Q.E.PD.), quien durante un periodo aproximado de siete (7) años tuvo un contrato de arrendamiento con el señor Luis Eduardo Chaparro y posteriormente con la señora Stella Chaparro; (ii) quedó demostrado la interversión con el contrato de cesión de derechos de posesión celebrado entre los señores Luis Eduardo Chaparro y Stella Chaparro, pues de el se deduce que la demandante seguía comportándose como poseedora y sumando la posesión del cedente con respecto a la cesionaria (suma de posesiones); Dejó de valorar el indicio de la **inexistencia** de mandato o administración del bien objeto del proceso.

2.2 DEMOSTRACIÓN DE LOS ACTOS DE POSESIÓN

La juez de primera instancia no dio el valor probatorio adecuado a los siguientes medios probatorios que demuestran los actos de posesión con ánimo de señora y dueña respecto del bien objeto de la presente acción, por parte de la actora, los cuales me permito relacionar y analizar:

Testimonios. En el desarrollo del proceso fueron decretadas las pruebas testimoniales de los señores:

JOSE BERNARDO DIAZ MUÑOZ, Quien manifestó tener constancia de conocer a los señores Luis Eduardo Chaparro, y a la señora Luz Stella Chaparro, por ser vecino de estos, aproximadamente desde el año 1975, quien también manifestó ser maestro de obra y por tal razón realizó algunas reformas y arreglos locativos, en el inmueble objeto del litigio, siendo responsable del pago de sus servicios como maestro de obra, la demandante señora STELLA CHAPARRO, indicó reconocer como poseedora a la accionante por los actos que hace de señora y dueña. Salta a la vista que el juzgador de primera instancia erró en la valoración de esta prueba, ya que, el testigo si manifestó ser vecino y conocer desde hace muchos años a la demandante y al cedente de la posesión.

DIANA PATRICIA CALDAS: La señora Diana indicó al despacho tener conocimiento de los actos de señorío del señor Luis Eduardo Chaparro y la señora Luz Stella, quien adquirió los derechos derivados de la posesión del primero y ésta continúo con los actos de posesión desde inicios del 2009, como fueron dar en arriendo parcialmente el inmueble, pago de impuestos, reformas y construcciones dentro del inmueble, arreglos locativos, como también lo declaro el testigo señor GEMAIL GONZALEZ, el informe aportado por el perito Carlos Arturo Cadena.

MARTHA LUCIA DEVIA: Manifestó al despacho conocer a los señores Luis Eduardo Chaparro y Luz Stella Chaparro, por haber sido arrendataria en el inmueble desde el año 2001 al año 2015, desde el año 2001 al año 2009, pagó los cánones de arrendamiento al señor Luis Chaparro; y a partir de esta fecha hasta el año 2015, la arrendadora del inmueble fue la señora Stella, también indicó que la señora Stella Chaparro a partir del año 2009, fue quien se ocupó de los pagos en los arreglos locativos, impuestos, y demás.

HUMBERTO MARQUEZ: Indicó ser vecino de los señores Luis Eduardo Chaparro y Luz Stella Chaparro, por ser muy allegado a las hijas de la accionante, también manifestó tener conocimiento

que la señora Stella, es quien realiza el pago de los impuestos y las reformas hechas al inmueble, arreglos locativos, servicios públicos.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

WALTER ADRIAN PEREZ URREGO: Manifestó conocer a los señores Luis Eduardo Chaparro y Luz Stella Chaparro, por ser vecino cercano, por lo tanto, tuvo un trato más cercano con ellos a partir del momento que llegó a vivir allí como arrendatario en el año 2017, que firmó el contrato de arrendamiento con la accionante, también dejo constancia de ser la señora Stella, quien ejercía la posesión y por lo tanto quien realizaba los pagos de arreglos locativos y demás del inmueble.

LUNEY DE MARQUEZ: Vecina de los señores Luis Eduardo Chaparro y Luz Stella Chaparro, dijo conocerlos hace aproximadamente hace 20 años y manifestó reconocer como dueña y poseedora a la señora STELLA CHAPARRO accionante.

Con base en el grupo de testigos de la parte demandada: El testimonio del señor GEMAY GONZALEZ, manifiesta que la señora Claudia Yolima, quien es su cónyuge, nieta de la causante ANA RITA PERALTA, siempre reconoció dueño ajeno ya que durante un periodo de 7 años tuvo parte del inmueble en arriendo como fue un garaje. También se pudo evidenciar que el testimonio del señor Gemay estuvo soportado con las declaraciones de los anteriores testigos, ya que de una u otra forma escucho las declaraciones de los anteriores testimonios e interrogatorios, su testimonio fue de oídas porque no ha estado presente en los hechos, enfatizo que la accionante no regreso a vivir, nuevamente en el año 2009, pero es de anotar que la materialidad de la cosa se puede ejercer sin necesidad de habitar la cosa, con actos de señora y dueña, como fue dar en arrendamiento parcialmente el inmueble. También dijo ser conocedor de la construcción hecha en la tercera planta del inmueble objeto de litigio, actos de señorío por parte de mi representada

MARÍA OFELIA, El testimonio de la señora María Ofelia, esposa del señor Gustavo Peralta, se basó más en suposiciones que en tener claridad de los hechos de la demanda

RENE RUJELES VALENZUELA: Es un testimonio de oídas, ya que no visita el inmueble aproximadamente 10 años para el 2021, él pudo declarar por comentarios del causante GUSTAVO PERALTA. Desde el año 1984

MARTHA ISABEL ORTIZ: Manifestó que el señor Gustavo Peralta vivió en el inmueble objeto de ligio pagando arriendo por lo tanto reconociendo dueño ajeno, declaró saber que el inmueble se ha dado en arriendo, pero que no ingresa al mismo aproximadamente hace 20 años.

MARIA GARZON: Testimonio de oídas sin relevancia para el **proceso**

PRUEBA DOCUMENTAL, se aportaron los recibos de los pagos de impuestos del inmueble en mención, que en un inicio fueron cancelados por el señor Luis Eduardo Chaparro Cedente de la Posesión, posterior a ello la señora Luz Stella, también fueron aportadas declaraciones extrajucio de los vecinos de la accionante, señores Luis Jaime Ladino Rivera, María Luney González de Márquez y Humberto Márquez González, 49 recibos de facturas de compra de materiales de la construcción hecha en la tercera planta del inmueble en mención, construcción que fue ratificada con el testimonio del señor Gemail, el informe pericial y la inspección judicial, copia del contrato de cesión de los derechos de posesión que se constituyó entre la accionante y el señor Luis Eduardo Chaparro, que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, en *ARTICULO 1502. Del C.C., <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:*

1o.) que sea legalmente capaz.

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.

4o.) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.

Para inicios del año 2009, época en la que se constituyo el contra de cesión de derechos de posesión entre la señora Estella Chaparro y el señor Luis Eduardo Chaparro, se encontraba en plena capacidad mental, tenía algunos quebrantos de salud, pero, que no le impedían disponer de sus derechos patrimoniales, razón por la cual es un negocio jurídico que cumple con todos sus requisitos exigidos en la ley y además la parte demanda por medio de su abogada no presentó ninguna objeción sobre la misma, solo se dedicó a especular sobre la misma en los alegatos de conclusión. Con base en lo anteriormente expuesto se demuestran la suma de posesiones con el contrato de cesión de derechos de posesión por el señor Luis Eduardo Chaparro a la señora Luz Stella Chaparro, fecha en la que se da la interversión o cambio de título de mi poderdante para pasar de ser heredera a convertirse en poseedora sumando la posesión que traía el señor Luis Chaparro.

2.3 CONDUCTA ABULICA DE LOS DEMANDADOS RESPECTO DEL INMUEBLE INTERROGATORIOS DEMANDADOS.

Los demandados en los interrogatorios de parte confesaron no tener una comunicación con el señor Luis Eduardo Chaparro, quienes todos coincidieron en reconocerlo como abuelastro, a partir del fallecimiento de la señora Ana Rita Peralta (Q.E.P.D**.),** casi todos los demandaos desconocían como se realizaban los pagos de las obligaciones derivadas del inmueble, agregaron no haber realizado pago alguno por ningún concepto generado del inmueble. Esta conducta demuestra el desgano, abandono y abulia en ejercer algún derecho el inmueble objeto de este proceso, es anotar que transcurrieron 25 años aproximadamente, desde el fallecimiento de la señora Ana Rita Peralta (Q.E.P.D), hasta el momento de radicarse la presente demanda. Con dicha conducta se demuestra que reconocían como poseedora a la demandante y al cedente de la posesión a favor de esta.

2.4 INEXISTENCIA DE LA CALIDAD DE ADMINISTRADORA O MANDATARIA

La señora **LUZ STELLA CHAPARRO**, siempre ejerció actos de señora y dueño en el inmueble en litigio, además agregó a su posesión la posesión que le cedió el señor LUIS EDUARDO CHAPARRO, mediante el contrato privado de cesión de Derecho de posesión, y brilla por ausencia de prueba la existencia de contrato de mandato o administración en cabeza de la demandante, razón por la cual, nunca estuvo en calidad de administradora y en consecuencia teneedora como se quiso hacer ver o argumentar por parte de la abogada de los demandados.

2.5 SUMA DE POSESIONES

La funcionaria de primera instancia pretermitió valorar las pruebas documentales que acreditaron las sumas de posesiones como son: El contrato de cesión de derechos de posesión, que en ningún momento ha sido o fue reargüido de falso y por tal razón emerge de la expresión de la voluntad de las partes cumpliendo el requisito de demostrar los actos de posesión del cedente a favor de la cesionaria. Contrato de Cesión que cumple con todos los elementos del contrato y si bien es cierto que para la época en que se tramito la audiencia el estado de salud del señor LUIS EDUARDO CHAPARRO, había desmejorado, esto no indica que para el momento de la constitución del contrato de cesión se encontraba en uso de sus plenas facultades

2.6 VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

El Aquo con la providencia recurrida transitó por la violación al debido proceso ya que dejo de valorar medios probatorios legalmente aportados al proceso con los cuales se demostró la

interversión del título y la posesión de la demandante y si no hubiese ocurrido lo anterior otra hubiera sido la decisión a la que se hubiese llegado al resolver el asunto.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

3. Error del A-Quo por dejar de aplicar una norma sustancial:

El Aquo dejo aplicar las normas sustanciales que regulan la suma de posesiones y los elementos de la posesión. En efecto el juzgador no dio por probado el ánimo y corpus que regula la posesión.

4. EXONERACIÓN CONDENA EN COSTAS

En el evento remoto e incierto que la sentencia no se revocada, por lo menos sí deberá ser la condena en costa, dado que el juzgado de primera instancia no entro a analizar excepciones y no encontró probado los elementos de la posesión, por lo tanto, no procederá condena en costas.

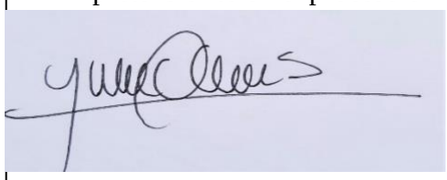
CONCLUSIONES EN GENERAL

En conclusión, tenemos que la sentencia en el proceso de pertenencia debe ser revocada y, en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demanda.

III. PETICIÓN EN CONCRETO

Respetuosamente solicito:

1. Se sirva revocar la providencia atacada por el juez de primera instancia que denegó las pretensiones en el proceso en litigio.



YALILE DUQUE SANCHEZ
C. C. 39.667.194
T. P. 184.011del C. S. de la J

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR FERREIRA VARGAS RV: ALLEGA SUSTENTACIÓN RECURSO APELACIÓN SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA RAD. No.11001310301620190080302

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 5/09/2023 10:01 AM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (147 KB)

SUSTENTACION RECURSO APELACION SENTENCIA CASO CIATRAN TRIBUNAL.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR FERREIRA VARGAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Lina Marcela Medina Miranda <lina.medinam@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 9:58
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; JUAN CARLOS ROJAS CERON <jucaroce@hotmail.com>; Notificaciones <notificaciones@holdingvml.com>; Juancarlos.rojas@holdingvml.com <Juancarlos.rojas@holdingvml.com>; Luis.mora@holdingvml.com <Luis.mora@holdingvml.com>; Margarita Parrado Velasquez <mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ALLEGA SUSTENTACIÓN RECURSO APELACIÓN SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA RAD. No.11001310301620190080302

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
Bogotá D.C.
E. S. D.

Ref. sustentación recurso de apelación contra la sentencia proferida/ demanda principal 11001310301620190080302
Demandante: Global Fianzas S.A.S.
Demandado: Ciatran S.A.S.

LINA MARCELA MEDINA MIRANDA, Abogada en ejercicio, mayor identificada civilmente con la cedula de ciudadanía No. 1.022.946.711 y portadora de la tarjeta profesional No. 203.674 del C.S.J., obrando en mi condición de apoderada especial de la parte demandante principal en el proceso de la referencia señores GLOBAL FIANZAS S.A.S., por medio del presente, y dentro del término establecido para el efecto por la Ley 2213 de

2022, en concordancia con lo ordenado por su honorable despacho, la suscrita se permite sustentar el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia interpuesto en audiencia de fecha 25 de julio de 2023, y que se identifica en su despacho con el radicado 11001310301620190080302, en los términos del escrito adjunto.

Del honorable tribunal,

--

Lina Marcela Medina Miranda
Abogada
Cel. 316- 4939712

Honorable
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
Bogotá D.C.
E. S. D.

Ref. sustentación recurso de apelación contra la sentencia proferida/ demanda principal 11001310301620190080302
Demandante: Global Fianzas S.A.S.
Demandado: Ciatran S.A.S.

LINA MARCELA MEDINA MIRANDA, Abogada en ejercicio, mayor identificada civilmente con la cedula de ciudadanía No. 1.022.946.711 y portadora de la tarjeta profesional No. 203.674 del C.S.J., obrando en mi condición de apoderada especial de la parte demandante principal en el proceso de la referencia señores GLOBAL FIANZAS S.A.S., por medio del presente, y dentro del término establecido para el efecto por la Ley 2213 de 2022, en concordancia con lo ordenado por su honorable despacho, la suscrita se permite sustentar el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia interpuesto en audiencia de fecha 25 de julio de 2023, y que se identifica en su despacho con el radicado 11001310301620190080302, en los siguientes términos:

Las razones que me llevan a apartarme respetuosamente del fallo que se apela son las siguientes:

La Juez Dieciséis Civil del Circuito de esta ciudad, encuentra probadas las excepciones planteadas por los demandados respecto de la demanda principal, y que se intitulan inexistencia del derecho reclamado, excepción de contrato no cumplido y falta de legitimación en la causa, habida cuenta y en resumen, dado a que en la cláusula octava del contrato de arrendamiento, las partes se sirvieron establecer que si con una antelación no mayor a tres meses ninguna de las partes, ponía de presente a la otra su intención de terminación, este, el contrato de arrendamiento, se entendería prorrogado, agregando que a su juicio lo allí establecido guarda correspondencia con lo establecido en el artículo 520 del código de comercio y los numerales 2 y 3 del articulo 518 de la misma codificación, resaltando además que si bien las partes plantearon un termino menor que el establecido en dichas normatividades, dicha postura no resulta violatoria de precepto legal alguno (minuto 13:00 a 15:13 del fallo proferido en audiencia).

Sobre lo allí expuesto, y que sirve de motivación para el fallo de primera instancia, se aparta de manera enérgica y respetuosa mi procurada y la suscrita, pues dicha consideración de aparta de nuestra codificación mercantil, haciendo que el recurrido fallo incurra en defecto sustantivo y del amplio precedente judicial que se ha emitido frente a dicha materia por las razones que me permito exponer:

El articulo 524 del Código de Comercio y contrario a la señalado por la operadora judicial, a la letra señala: "***ARTÍCULO 524. <CARÁCTER IMPERATIVO DE ESTAS NORMAS>.*** *Contra las normas previstas en los artículos 518 a 523, inclusive, de este Capítulo, no producirá efectos ninguna estipulación de las partes."* (En comillas fuera del texto original y subrayado de la suscrita) Por lo que, resulta errada la postura de la Juez de instancia cuando impone un término de caducidad a la facultad que se le confiere a mis procurados, frente a la renovación establecida en el articulo 519 del Código de Comercio. Asi como en lo por ella expuesto respecto de que lo establecido por las partes en la cláusula octava, sobre términos para su prorroga (figura jurídica que entre otras cosas tampoco es la debatida en el asunto de marras, pues corresponde a los términos en los que se debe dar la renovación del contrato entre las partes) no trasgreda precepto alguno, pues se véase que lo señalado en dicho articulado, si tiene prevalencia sobre cualquier convención.

En efecto y al respecto téngase, que, el articulo 519 del Codigo de Comercio, establece: "***ARTÍCULO 519. <DIFERENCIAS EN LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO>.*** *Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la*

renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos." (En comillas fuera del texto original y subrayado de la suscrita)

En ese sentido se ha manifestado la jurisprudencia desde cuando la Sala Plena de la Corte, en sentencia de 29 de noviembre de 1971, recién expedido el Decreto 410 de 1971 -Código de Comercio actualmente vigente-, sostuvo la constitucionalidad de los artículos 518, 520, 521, 522 y 524 del mencionado estatuto. Dijo en aquella oportunidad la Corporación, después de reconocer la renovación como un mecanismo sobresaliente dentro del "…sistema de protección del derecho del arrendatario…", que esa figura no implica la posibilidad de una prórroga y que, por tanto, no es el "…primitivo contrato el que va a seguir rigiendo, sino uno nuevo, que puede acordarse o celebrarse con sujeción a las circunstancias, especialmente en cuanto a precio y condiciones de utilización de la cosa arrendada…".

Al respecto y en amplio precedente jurisprudencial se ha reseñado:

"*Contrastando los fundamentos de dicha decisión con la intelección que ha dado la Corte sobre los preceptos citados con antelación y las pruebas obrantes en el expediente del litigio criticado, advierte la Sala que la Corporación acusada incurrió en los defectos atrás demarcados, comoquiera que, distraídamente, entendió que del canon 519 del Código de Comercio se podía extraer un término de caducidad para reclamar ante los jueces la resolución de las discrepancias que pudieran surgir entre los contratantes una vez operara la renovación del contrato de arrendamiento a que alude el artículo 518 de ese mismo estatuto, cuando la jurisprudencia de esta Sala ha dejado claro que para el ejercicio de esa prerrogativa es ineludiblemente necesario la presencia de los desacuerdos, precedidos del ejercicio del derecho de renovación exclusivo del arrendatario, y que la misma es potestativa de las partes, lo cual quiere significar que únicamente se activa en presencia de tales presupuestos, y puede ser o no utilizada por éstos, es decir, nada los puede obligar a ejercitarla, así existan discrepancias entre ellos; en otras palabras, del referido precepto no se puede colegir caducidad alguna."*

"En ese sentido, para la Corte es evidente que la arrendadora ejercitó la facultad consagrada en el artículo 519 del Estatuto Mercantil, conforme los presupuestos precisados en líneas precedentes, pues, como antes se explicó, una vez fue declarado por los jueces que operó la renovación de que trata el canon anterior, fue cuando ésta se mostró inconforme o interesada en modificar el clausulado del contrato de arrendamiento renovado, en lo atinente a precio y duración del mismo, y ante la falta de consenso con la compañía arrendataria, procedió a iniciar respectivo juicio verbal; luego, entonces, mal hizo la Colegiatura acusada en cobrarle una caducidad que no consagra la norma, actuación que indudablemente transgredió los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la promotora del resguardo." (En comillas tomado de la sentencia T - 1100102030002020-01028-00)

Asi mismo y en el mismo sentido se ha ratificado jurisprudencialmente:

"De manera liminar, comporta memorar, que la destinación del inmueble objeto de la presente Litis se concentra en desarrollar actividad de índole comercial, misma que a voces de lo regulado por el Código de Comercio, goza de protección especial cuando se ejecuta en un predio adquirido bajo la calidad de tenedor en virtud de un contrato de arrendamiento, habida cuenta que al haberse ocupado por un lapso mínimo de dos (02) años1 , desencadena un reconocimiento y permanencia de la empresa, el cual no puede desconocerse sin exigencia alguna para el arrendador, pues el comerciante ha proyectado una organización y estrategia de mercado para traer consigo una clientela sólida que impone prosperidad frente la estabilidad económica de su actividad; ello sin perjuicio, de las excepciones consagradas en citada normatividad frente el incumplimiento del arrendatario; necesidad del propietario para emplear el bien para su propia habitación o establecimiento con destinación

distinta a la del arrendatario; cuando el inmueble requiere de construcción o reparación que amerite al entrega o desocupación del mismo. No obstante, cabe anotar, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia, que referida prerrogativa no traduce de modo ineludible la facultad de continuar con el uso del inmueble bajo los mismos términos y condiciones pactadas previamente, pues la naturaleza del derecho de renovación permite ante la existencia de controversia y falta de acuerdo entre las partes, la intervención judicial a fin de establecer los nuevos escenarios que permitan el desarrollo del contrato de forma equitativa y justa para las partes, pues se advierte que la garantía existente a favor del empresario se predica para salvaguardar el statu quo de su negocio, protegiendo su propiedad comercial, cual ha desempeñado en el bien adquirido en arrendamiento. En tal sentido, enunciado derecho no es absoluto, siendo sostenido por La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al referirse respecto el Artículo 518 del Código de Comercio, en Sentencia del 31 de Octubre de 1994 –Expediente 3868- lo siguiente "…discutir las condiciones en que debe producirse la renovación, y si no llega al respecto a un acuerdo con el arrendatario, le queda expedita la vía judicial con tal fin, vía a la que también debe acudir el arrendatario, en su caso, según se desprende del artículo 519 ib. …" A su turno, de igual manera sostuvo que "…no implica imposición a quien arrienda el inmueble de todas las estipulaciones iniciales de la relación convencional, sino que le permite, a modo de contrapartida natural, la libre discusión de las nuevas reglas que en adelante gobernarán el vínculo, desde luego que esa renovación no sólo supone la posibilidad de extender en el tiempo la utilización del local a voluntad del arrendatario, sino también la de discutir abiertamente la regulación de tal uso, pues no sería justo que, verbi gratia, a pesar del evidente proceso inflacionario experimentado en la mayoría de los países, los cánones antiguos pudieran seguir vigentes después de vencido el periodo inicialmente pactado, de donde emana la permisión para deliberar entre las partes inclusive por el sendero del proceso judicial si es que por efecto de la ausencia de acuerdo entre ellas fuera menester, el nuevo estatuto que las habrá de regir, de conformidad con el artículo 519 ídem…"

Bajo tal panorama, emerge necesario precisar que todo vínculo jurídico creado por sujetos de derecho a fin de satisfacer sus necesidades materializa " la autonomía privada", la cual recibe el respaldo de la Ley en el entendido que quienes intervienen en determinado acto no pueden modificarlo unilateralmente, pues su límite se encuentra dado por el orden público y las buenas costumbre, por ello, como memoró la pasiva el Artículo 1602 del Código Civil prevé: "…Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales", normatividad que en consonancia con el principio que alude Pacta Sunt Servanda, dotan de seguridad jurídica al acuerdo convenido. No obstante, lo anterior no traduce la hermenéutica amañada y reiterada por el extremo procesal pasivo, como quiera que la obligación creada no escinde para la situación en ciernes el espectro dispositivo de la Ley, toda vez que la intervención judicial está dada en aras de establecer nuevas condiciones bajo la equidad y justicia contractual, a saber, tales principios comprenden en dar a cada quien lo suyo, a cada quien lo que corresponde; por ello, el legislador sin pasar por alto los derechos inmateriales del comerciante, contempló en el Artículo 519 del Código de Comercio, que las diferencias originadas al ser renovado el contrato se decidirán a través de proceso verbal, habida cuenta las reglas de la sana crítica no permiten inferir que el contexto económico respecto de determinado negocio puedan perviven en el tiempo en idéntico sentido, más aun cuando el pacto primigenio deviene desde hace más de diecisiete (17) años. Puestas así las cosas, no converge este Juzgador, con la sostenida tesis de la pasiva, dado que, al tenor de lo regulado en el canon 1602 del C. Civil el consenso NO HA SIDO INVALIDADO; no se ha sido desconocido de forma unilateral, como tampoco se ha pasado por alto el principio que alude, pues a riesgo de ser reiterativos conforme la Jurisprudencia el derecho de renovación no es absoluto, encontrándose dotada nuestra normatividad de herramienta judicial para zanjar las controversias existentes entre las partes, de manera que, en escenario alguno podría colegirse el A-quo desbordó su competencia al dirimir el presente asunto en la forma desarrollada.

Aunado a lo expuesto, contrario a toda lógica denota este Juzgador, la teoría del inconforme en lo atinente a la "anticipación de las partes a futuras controversias con base en el ajuste del canon conforme el IPC", dado que, en primer lugar, tal

eventualidad se origina de forma anual y no por la renovación de la convención; en segundo lugar, sentido semejante se logra siquiera inferir de la cláusula cuarta, parágrafo primero y segundo; en tercer lugar, aun en ejercicio de la autonomía de la voluntad al haberse contemplado por los contratantes enunciada circunstancia, no podría otorgarse validez in limine al clausulado, dado que atenta contra legislación vigente frente al procedimiento a seguir cuando surjan controversias en la renovación del contrato, pues el paso del tiempo en la ejecución de un negocio determinado bajo condiciones inalteradas no blinda lo previsto por la Ley, admitir tal hipótesis que no ha sido planteada siquiera sumariamente por nuestro máximo tribunal de cierre, podría desencadenar que contratos en circunstancias paralelas aun cuando su objeto o causa sea ilícito, deriven todos los efectos. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Civil- en sentencia del 27 de Abril de 2.010, sostuvo "… al tiempo que el legislador entrega al inquilino, en beneficio del interés general, el derecho de renovar el contrato para permanecer con la empresa sin que pueda el arrendador resistirse a ello, también le otorga a las partes el derecho de discutir, una vez conocida la voluntad del locatario de mantenerse en el bien, las reglas que gobernarán la relación naciente y el de acudir, si lo consideran útil, a los mecanismos judiciales para lograr la definición del litigio planteado cuando no adviene el arreglo entre los dos. En síntesis, si al término del contrato en que el arrendatario ha cumplido cabalmente sus obligaciones, quien arrendó no lo ha desahuciado con los seis meses de anticipación de que trata el artículo 520 y aquél pretende la continuidad de su establecimiento en el local, la renovación se produce de manera automática y, por ello, el locatario permanece en el uso del inmueble, pero a favor del alquilador y del propio arrendatario, nace la posibilidad de discusión en torno de las estipulaciones que habrán de regir en el futuro la relación sustancial a que los dos se han vinculado y de obtener, en su caso, que en proceso verbal el Juez defina los aspectos materia de controversia." De manera que, los reparos que concentra frente al desconocimiento al principio de buena fe y deberes secundarios de conducta por no haberse entregado a su criterio, en un término prudencial la comunicación que exponía la discrepancia en el estipulación para el pago del canon; tratarse de mera oferta y no controversia al no haberse rechazado o aceptado lo manifestado por el arrendador, carece de todo soporte jurídico, jurisprudencial y de buen juicio, pues en el presente asunto, el vínculo contractual se encuentra en ejecución, no está en etapa preliminar para que nazca obligación determinada; los seis (06) días que contempla el Código de Comercio en el Artículo 851, son relativos a oferta escrita de MERCADERÍAS, donde si bien el presente asunto, versa sobre relación por el arrendamiento de inmueble que desempeña una actividad comercial, lo cierto es que, la contraprestación no se asimila siquiera de forma parcial al objeto y desarrollo de la normatividad que alude, siendo necesario advertir, como bien señaló el A-quo no existe termino taxativo para el nacimiento de diferencias contractuales en la renovación del contrato, pues el imperativo legal solo exige que se originen "en el momento de la renovación" 6 , por ello, al no haber comunicación alguna por el arrendatario que demuestre su intención de terminar el vínculo existente, con facilidad se concluye el contrato sería renovado, habida cuenta, sin ello no tendría origen discusión alguna, máxime si lo pretendido por el demandante, NO es la regulación del canon de la renovación comprendida del 2.016 al 2.019 o lapso anterior, si no de la ejecución que se avecinaba a partir del 1º de Enero de 2.019." (En comillas fuera del texto original tomado de la sentencia T- 068 (2a. Instancia), JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 2019-00537-01)

De los argumentos antes esbozados se tiene entonces su señoría que la tesis aplicada para el presente asunto por la Juez 16 Civil del Circuito de la ciudad de Bogota, en la sentencia proferida el pasado 25 de Julio de 2023, no se ajusta a derecho, y desconoce los presupuestos sustanciales establecidos en los articulo 519 del Codigo de Comercio, concordante su turno con lo señalado por el articulo 524 de la misma codificación, y la amplia jurisprudencia emitida sobre la misma materia, queriendo como lo hizo imponer términos de caducidad, frente a las diferencias en la renovación de las partes, insistiéndose, se colige claramente de las precitadas normatividades y precedentes, que dichas diferencias se suscitan al momento de la renovación del contrato, presupuestos que claramente se cumplen para el caso objeto de estudio, por lo que, la postura y motivación de la Juez de primera instancia a fin de despachar de manera desfavorable las pretensiones de la demanda interpuesta por mis procurados se hallan contrarias a derecho.

En mérito de lo expuesto solicito al administrador de justicia de segunda instancia revocar la sentencia objeto de la presente alzada, tener como no probadas las excepciones de fondo propuestas por la pasiva, y en su reemplazo y en fallo de segunda instancia declarar la prosperidad de las pretensiones de la demanda principal.

Por último, la suscrita abogada se permite ratificar su correo electrónico de notificación lina.medinam@gmail.com, así como sus números telefónicos de contacto 7460301 Ext. 114/ 316 – 4939712.

Del señor Juez, con toda atención.



LINA MARCELA MEDINA MIRANDA
C.C. 1.022.946.711 de Bogotá
T.P. 203.674 del C.S.J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR FERREIRA VARGAS RV: RAD. 2019-00803-02 - SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 5/09/2023 2:47 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (145 KB)

2019-00803-02 - SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR FERREIRA VARGAS

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juan Carlos Rojas Cerón <jucaroce@hotmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 14:42
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: lina.medinam@gmail.com <lina.medinam@gmail.com>
Asunto: RAD. 2019-00803-02 - SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
Atn. H.M. JORGE EDUARDO FERRERIRA VARGAS

Asunto:	**SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**
Referencia:	PROCESO DE REGULACIÓN DE CANON DE ARRENDAMIENTO
Demandante:	GLOBAL FINANZAS S.A.S.
Demandados:	CIATRAN S.A.S.
Radicado:	110013103016-**2019-00803**-02

Cordial saludo,

En mi calidad de apoderado de la parte demandada (principal) y demandante (reconvención), me permito radicar el siguiente memorial al proceso de la referencia, a través de mensaje de datos, en PDF adjuntos:

- **2019-00803 - PRECISION DE LOS REPAROS CONCRETOS DEL RECURSO DE APELACION (pdf) (1 página)**

Agradezco acusar recibo e impartirle el trámite correspondiente.

Copio el presente a la contraparte de conformidad con el deber consagrado en el numeral 14 del artículo 78 del C.G.P. en concordancia con el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022.

Cordialmente,

Juan Carlos Rojas Cerón
C.C. No. 7.543.706 de Armenia
T.P. No. 95.214 del C. S. de la J.

Honorable Magistrado
Jorge Eduardo Ferreira Vargas.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL
Bogotá D.C.
E. S. D.

Ref. sustentación recurso de apelación contra la sentencia proferida/ demanda principal 11001310301620190080302
Juzgado de origen: **16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**
Demandante: Global Fianzas S.A.S.
Demandado: Ciatran S.A.S.

Su Señoría,

JUAN CARLOS ROJAS CERÓN, apoderado de CIATRAN SAS reconocido en el proceso del rubro, actuando en oportunidad, mediante este escrito, con el respeto que me es usual en la oportunidad prevista en art. 12 de la Ley 2213 de 2022, sustento el recurso de apelación contra la sentencia, en los siguientes términos:

1. Es indiscutible que en este caso operó la prórroga automática del contrato y que no es aplicable el art. 519 del CCo, punto que queda por fuera del recurso.

2. La demandante inicial y demandada en reconvención cita en su sustentación los arts. 519 y 524 del CCo, la sentencia de tutela de 20 de mayo de 2020 (T-1100102030002020-01028-00, STC 2020) y una sentencia del Juez 8º Civil del Circuito de Cali, **que claramente no son precedente vinculante a este caso en los términos del art. 7 del CGP**.

Pero, aún en gracia de discusión, la contraparte omite que en el fallo de tutela STC 2020 que invoca, la Corte claramente precisó:

> "… la alternativa de discutir ante el juez las diferencias suscitadas, de conformidad con el artículo 519 del Código de Comercio, supone necesariamente la presencia de los desacuerdos así como del ejercicio de la renovación por parte del arrendatario, sin el cual no habría lugar a las divergencias, ni, por tanto, a la posibilidad de pedir a la jurisdicción el despliegue de su actividad" (subrayado fuera del original).

Nuevamente, una cosa es prórroga automática y otra, bien distinta, renovación del contrato.

3. Sin embargo, el reparo es contra la decisión de negar las pretensiones de la demanda de reconvención, porque CIATRAN SAS **si** demostró el desequilibrio en la relación contractual, en los términos del art. 868 del CCo.

De acuerdo con el avalúo aportado por CIATRAN SAS, que si cumple los requisitos de ley, el valor de la renta del inmueble en cuestión para 2020 (año en que se radicó la demanda, sin tener en cuenta las afectaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria por Covid19) ascendía a diez millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos seis pesos ($10.556.806).

Entonces: (i) de acuerdo con la fórmula para incremento del precio del arriendo estipulada en la cláusula sexta del contrato objeto de este proceso, (ii) hasta octubre de 2020 (1 mes antes de la presentación de esta demanda de reconvención y fecha del avalúo), (iii) contra el valor facturado por la demandante y pagado por la demandada y demandante en reconvención, se tiene como resultado que el valor pagado en exceso por CIATRAN SAS asciende a ciento cincuenta millones quinientos dieciséis mil novecientos setenta y nueve pesos ($150.516.979). La suma debe actualizarse con base en los parámetros descritos al momento en que se dicte la sentencia y se pague efectivamente lo debido.

La sentencia apelada sólo se limitó a decir que no se probó el desequilibrio económico en el contrato, pero ni siquiera precisó por qué.

Por el contrario, fueron suficientemente probados los presupuestos del art. 868 del CCo, a saber:

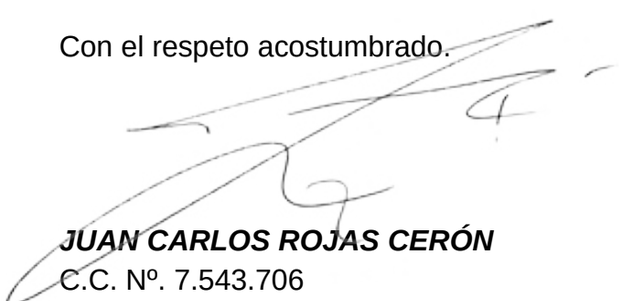
- **i.** La ocurrencia de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de arrendamiento,
- **ii.** Que dichas circunstancias alteraron o agravaron la prestación a cargo de CIATRAN SAS arrendataria,
- **iii.** La alteración resultó excesivamente onerosa, a tal punto de un desequilibrio que ascendía a $150.516.979 al momento de la demanda de reconvención.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.

Solicitud

Usías, con base en estas razones lo procedente es revocar la sentencia apelada y, en su lugar, confirmar la negación de las pretensiones de la demanda principal y acceder a las de la reconvención.

Con el respeto acostumbrado.



JUAN CARLOS ROJAS CERÓN
C.C. Nº. 7.543.706
T.P. N°. 95.214 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: SE RADICA SUSTENTACION DE RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL - PROCESO NO. 2020-49

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 05/09/2023 14:39

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (488 KB)

SUSTENTACION RECURSSO DE APELACION SENTENCIA JDO 16 CTO LIBERTY VS LUBRICOMBRAS.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones OYP <notificaciones@oypabogados.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 14:26
Para: jecheonalubri@gmail.com <jecheonalubri@gmail.com>; gerencia@jcvabogados.com <gerencia@jcvabogados.com>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones Tutelas Secretaria Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogotá <ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SE RADICA SUSTENTACION DE RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL - PROCESO NO. 2020-49

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL
Magistrado Ponente Dr. GERMAN VALENZUELA VALVUENA
E S. D.

REF: Ejecutivo
De: LIBERTY SEGUROS S.A.
Contra: LUBRICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEIROS S.A
Proceso No. 11001310301620200049
Proveniente: JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

SE ADJUNTA (1) ARCHIVO PDF.



O&P ABOGADOS SAS - DESDE 2004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
3003705967 - 3002014259 - 3115306053
Bogotá- Colombia

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL
Magistrado Ponente Dr. GERMAN VALENZUELA VALVUENA
E S. D.

REF: Ejecutivo De: LIBERTY SEGUROS S.A.
Contra: LUBRICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEIROS S.A
Proceso No. 11001310301620200049
Proveniente: JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

HOSMAN FABRICIO OLARTE MAHECHA, en mi calidad de apoderado de la parte actora, y estando dentro del término para **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto en contra de la **SENTENCIA DE PRIMER GRADO**, de acuerdo a los precisos reparos en los que se fundamento el recurso en la primera instancia,[1] en forma respetuosa me permito **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACION**, en los siguientes términos:

SON RAZONES DEL RECURSO DE APELACION:

La SENTENCIA APELADA, tiene varios **ERRORRES DE HECHO Y DERECHO**, que quedaran desvelados, en las siguientes líneas, los que indefectiblemente generarán el quiebre de la **SENTENCIA DE PRIMER GRADO**:

La Señora **JUEZ DE PRIMER GRADO,** sustentó su sentencia, negando las **PRETENSIONES DE LA DEMANDA,** sosteniendo que el **TITULO VALOR (PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES)**, base de la presente acción, al haber sido creado en una fecha anterior a la de la póliza de seguros que garantizaba el contrato, a pesar de tratarse de una **RENOVACIÓN**, que amparaba la vigencia del contrato primigenio, que era modificada su vigencia a través de **OTROS SI**; además indico, sin respaldo probatorio y legal alguno, que cada póliza de seguro de cumplimiento tenía que tener su propia contragarantía a saber pagare y carta de instrucciones.; Desconociendo los principios de la libertad y voluntad contractual, que las contragarantías en los seguros de cumplimiento, no es obligatoria, ninguna ley, decreto, circular externa exige este requisito para la su expedición.

El sustentó de la negación de las pretensiones se basó en los siguientes:

La Señora JUEZ argumenta su decisión en el sentido que hubo **AUSENCIA DE CAUSA**, **FALTA DE CAUSA ONEROSA**, con la siguiente argumentación:

Después de hacer un recuento del proceso, la negación de las pretensiones se inicia desde el minuto 33:45 y siguientes así:

Minuto 33:45 Pagare suscrito **aparentemente** surgió de la póliza No. 2987963, expedida del 22 de Noviembre de 2018. (La negrilla es mía)

Minuto 35:29 Para el 10 de Agosto de 2016 fecha que se firmó el pagare, no se conocía ni se había firmado el contrato de seguros con LIBERTY SEGUROS, para garantizar el CONTRATO DE SUMINISTRO.

[1] Nral 3 del Artículo 322 del C.G.P

Minuto: 36:03 Pagare fue suscrito por los demandados el 10 de Agosto de 2016 teniendo demás espacios en blanco, **que no podrían ser diligenciados para el cobro de la póliza de seguros No 2987963, porque fue posterior al caratular**, contrariando la carta de instrucciones carente de sustento necesario para una vía ejecutiva. Que el JUEZ, puede verificar las particularidades del título, incluso después de los términos de que trata el Art 430 del C.G.P., a pesar que la ejecutada no atacó los requisitos formales mediante el recurso de reposición contra el mandamiento de pago. (La negrilla es mía)

Minuto: 38:10 **Resumen la acción que se apoya en el pagaré 2987963 del 10 de agosto de 2016, y que para el 10 de agosto de 2016, no existía la póliza para el respaldo del contrato de suministro de fecha 10 de Enero de 2014**, entre PETROBRAS y LUBRICOMBRAS se abrían pasó las excepciones propuestas. (La negrilla es mía)

ERRORES DE HECHO y DERECHO DE LA SENTENCIA ATACADA

La sentencia se enmarca exactamente en los errores de hecho y derecho, existen en la normatividad actual, que para mayor claridad me permito transcribir la definición que hace la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, así:

> "En punto de la violación de la ley sustancial por la vía indirecta, la Sala tiene precisado que "por ser lo trascendental en ésta hipótesis, la incorrecta percepción de los hechos, cuyo conocimiento el juez adquiere solamente a través de los elementos de juicio recaudados en el proceso, el quebranto de que se trata puede darse como consecuencia de dos diversas clases de error: de hecho y de derecho. Aquel consiste en la suposición de una prueba, o en la pretermisión de la que sí obra en el litigio o en la tergiversación del contenido objetivo de la que se valora y en que, como consecuencia de ello, se da por acreditado un hecho en verdad no demostrado, o se ignora el que sí se comprobó, o se altera su contenido. En el yerro de derecho, el sentenciador, producto de la aplicación que hace de las normas de disciplina probatoria, pese a apreciar objetivamente la prueba, le niega su valor demostrativo, o le concede uno que no tiene, o cambia el que posee", (…)"[2]

La sentencia atacada, se enmarca exactamente dentro de los **ERRORES DE HECHO Y DERECHO**, que en primera medida la señora Jueza, comete el error de **DERECHO**, por cuando abordó impropiamente las siguientes, normas e instituciones del **DERECHO COMERCIAL, CIVIL Y PROCESAL**:

ERROR DE DERECHO DE LA SENTENCIA / OMITIR LA VALORACION DE LA PRUEBA [3]VISTA PDF 62 DONDE LIBERTY SEGUROS DA RESPUESTA AL OFICIO 128 DEL 3 MARZO DE 2023

La Sentencia dejo de valorar la respuesta que **LIBERTY SEGUROS**, dio al oficio Nro. 128, expedido por el Juzgado, prueba solicitada por la ejecutada, (Vista a PDF 62 del expediente digital) que, si hubiera la **SENTENCIA,** realizado un ejercicio profundo de la valoración probatoria, habría encontrado y analizado la respuesta que hizo la **ASEGURADORA**, en los siguientes términos:

Como ya advertimos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la vía indirecta en la

[2] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil once (2011).-Ref.: 11001-3103-034-1999-03339-01

[3] **Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-18532018 (11001310303020080014801), May. 29/18.**

modalidad de error de hecho en la valoración probatoria sucede cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de las pruebas, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma en que se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado.

Por lo anterior se dan los requisitos del error de derecho en la valoración probatoria, como pasara a demostrarse:

La señora JUEZA omitió valorar la prueba contenida en la respuesta dada por la **Dra KATHERINE YOHANA TRIANA ESTRADA,** como apoderada de LIBERTY SEGUROS, al oficio 128 (vista a Pdf 62):

> " En cuanto al segundo punto, dentro del oficio No. 128, enviado por esta autoridad judicial, me permito indicar que la sociedad LUBRIFICANTES Y COMBUSTIVELES BRASILEROS, tomo en calidad de asegurado las siguientes pólizas:
>
> 1. **POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2707150, expedida el 13 de septiembre de 2016.**
>
> 2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2836987, expedida 01 de septiembre de 2017.
>
> 3. Anexo a la POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2836987, expedida el 31 de octubre de 2018.
>
> 4. POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2987963, expedida el 22 de noviembre de 2018.
>
> En relación con las Pólizas de Cumplimiento para Particulares, **tenemos que es un producto que ofrece diferentes amparos en virtud de las garantías que surte dentro de los contratos específicos que tenga el cliente, en cuanto a las contragarantías para las pólizas de cumplimiento para particulares, se solicita por parte de la compañía la suscripción de un pagaré y carta de instrucciones, contragarantía que tiene validez para la póliza inicial y las posteriores pólizas o renovaciones que tome el mismo cliente con la compañía LIBERTY SEGUROS S.A., así pues, el cliente al tomar algunas pólizas posteriores, no se requiere para la suscripción de nuevas contragarantías como (pagare y carta de instrucciones), es por ello que se firma un pagaré en blanco con carta de instrucciones, desde la adquisición de la primera póliza de cumplimiento para particulares**.
>
> Cabe aclarar que dentro de la respuesta del derecho de petición del pasado 04 de noviembre de 2020 se manifestó que las pólizas adquiridas por LUBRIFICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEROS S.A. (LUBRICOMPRAS), no generaron pagaré teniendo en cuenta que las pólizas las pagaron en efectivo, en efecto hacen referencia a que no hay pagaré teniendo en cuenta que el pago de las primas se realizó de en efectivo y no financiadas.
>
> **Por lo anterior, el único pagaré y carta de instrucciones (contragarantia), fue en virtud de la expedición de la primera póliza No. 2707150 el día 13 de septiembre de 2016, surtiendo efecto esta de garantía para los amparos adquiridos dentro de las póliza inicial y las que se pudieran tomar posterior a la adquisición de la primera**

póliza. (La negrilla y el sombreado es mío)

Si la señora **JUEZA**, hubiera hecho una valoración debida, como era su deber a esta respuesta, no hubiera incurrido en el error que se reclama.

Esta respuesta es clara y contundente, dentro de la cual se informó dando respuesta a una prueba solicitada por la parte ejecutada donde se indica que el **UNICO PAGARE, Y CARTA DE INSTRUCCIONES**, fue solicitado como consecuencia de la expedición de la **PRIMERA POLIZA,** es decir la expedida el día 13 de SEPTIEMBRE DE 2016, surtiendo efectos esta contragarantía para esta póliza y las que se tomen con posterioridad.

En efecto es totalmente claro que la **CONTRAGARANTIA PAGARE ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, fueron diligenciados el día 10 de Agosto de 2016, la expedición de la **PRIMERA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2707150**, fue expedida días siguientes a saber el día 13 de Septiembre 2016.

Es más la anterior respuesta de **LIBERTY SEGUROS,** es consecuente en los mismos términos con la confesión que hace el apoderado de la ejecutada (Art 193 del C.G.P.), en la **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, (Pdf 59 pag 5), al afirmar:

> **"El pagaré base de la presente acción y su correspondiente carta de instrucciones, fueron firmados y entregados el 10 de agosto de 2016 como contragarantía para amparar la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES BO- 2707150 con vigencia desde 2016-09-13 00:00 hasta 2017-09-13 24:00**, la cual feneció sin reclamación alguna…" (La negrilla es mía)

Entonces, se tiene que se encuentra demostrado que el **PAGARE BASE DE LA EJECUCIÓN**, es un **PAGARE**, tipo **ABIERTO, con CARTA DE INSTRUCCIONES**, y por ello el error del **JUZGADO** se evidencia, al omitir la valoración de estas dos pruebas (respuesta oficio por parte de LIBERTY), y la confesión contenida en la **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, ya que de su análisis la sentencia sería de **SEGUIR ADELNATE LA EJECUCION**, y no como lastimosa y erradamente se pronunció.

Por ello la SENTENCIA deberá ser revocada.

LA CAUSA QUE ORIGINO LA SUSCRIPCION DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES NACE DE LA CONTRAGARANTIA DE UNA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ERROR DE LA SENTENCIA ESTUDIO DE PAGARE CERRADO A PESAR QUE EL ALLEGADO AL PLENARIO ES UN PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES

El seguro de cumplimiento nace en Colombia con la expedición de la Ley 225 de 1938, hoy contenido en el Artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero.

Bajo el Seguro de cumplimiento el Asegurador asumió el riesgo de incumplimiento, de una o varias obligaciones contractuales adquiridas en este caso por **LUBRICOMBRAS**, y por ende al haber incumplido el **COMPRADOR**, sus obligaciones en el **CONTRATO DE SUMINISTRO**; **LIBERTY SEGUROS** indemnizó al acreedor **PETROBRAS**, el incumplimiento causado por el contratante incumplido **LUBRICOMBRAS.**

LIBERTY SEGUROS, en ejercicio de la facultad de subrogación en los derechos del acreedor-

asegurado contra el deudor incumplido, con apoyo del inciso 2 del artículo 1099 del C. de Co, en concordancia con el numeral 3 del Artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero, inicio esta acción judicial, con el fin que el incumplido/ **LUBRICOMBRAS** y su codeudor, le reembolse la suma que se vio obligada a pagar a título de indemnización derivada del contrato de seguros.

En la etapa precontractual cualquier **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, habilitada en Colombia, para la venta y comercialización de **SEGUROS DE CUMPLIMIENTO,** cuenta con la **FACULTAD**, de exigir al **TOMADOR,** el otorgamiento de una **CONTRAGARANTIA**, bajo el imperio de la **AUTONOMINA DE LA VOLUNTAD PRIVADA**, y la **FACULTAD** de selección del riesgo, y las condiciones con las que desea asumirlo (Art 1056 del C. de Co).

La CONTRAGARANTIA se define como cualquier herramienta que exige al **ASEGURADOR AL CONTRATISTA- TOMADOR** con el fin de facilitar la recuperación de lo pagado en caso que el asegurador se vea obligado a pagar al asegurado la indemnización derivada del seguro de cumplimiento.

En consecuencia, la exigencia de **CONTRAGARANTIA**, es una herramienta eficaz para que la **ASEGURADORA,** restablezca efectivamente su patrimonio, en el evento que se vea obligada a pagar una indemnización, como en efecto sucedió en este asunto.

La **CONTRAGARANTIA** exigida por **LIBERTY SEGUROS**, fue el otorgamiento de un **PAGARE ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, el que la señora J**UEZ EN LA SENTENCIA**, entro a su estudio con una hipótesis errónea al tratar al **PAGARE** otorgado, como **UN PAGARE CERRADO**, cuando el pagare otorgado por el contratista y su codeudor, es un **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCIONES**, es decir, esta **CONTRAGARANTIA**, garantiza y respalda, el pago de las sumas de dinero que **LIBERTY SEGUROS**, hizo en favor del **ASEGURADO/ PETROBRAS**, como indemnización tal y como se demostró dentro del proceso, y por ello se abrió paso a la ejecución y el ejercicio de la subrogación.

Por tratarse de **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, allí se estableció en su numeral 4 , donde autoriza llenar el espacio en blanco de **LA CUANTIA**, la que será igual al monto de todas las sumas de dinero al momento de ser diligenciado el **PAGARE**, respecto de la póliza de **CUMPLIMIENTO**, y por tratarse de **UNA CONTRAGARANTIA,** el **NUMERO DE LA POLIZA DE RENOVACION**, estaba en blanco, para que la **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, determiné la **POLIZA DE SEGUROS**, que fue afectada como consecuencia del siniestro.

Y la **SENTENCIA** obvio y pasó por alto, la razón porque dentro de **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** en su parte superior se encuentra la leyenda:

> "(El número de pagaré y de la póliza serán diligenciados por la Aseguradora)"

Lo que a todas luces se ve con suficiencia que la **SENTENCIA**, abordo el estudio del **PAGARE**, base de la ejecución, como si ese fuera cerrado, y como se demostró el **PAGARE ES ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, espacios en blanco que fueron diligenciados estrictamente con dichas autorizaciones.

EL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES BASE DE LA PESENTE ACCION REUNE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY

El **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** base de la presente acción reúne los requisitos generales enlistados en el artículo 621 del Código de Comercio y los esenciales especiales del art 709 ibídem, además cumple con los requisitos de que trata el Artículo 422 del C.G.P., los que se desconocieron en la decisión recurrida.

DEFINICION DE LOS TITULOS VALORES

El Artículo 619 del C.G.P, define los títulos valores como bienes mercantiles, y son documentos para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, y por ello habilitan al tenedor, conforme la ley de circulación, para perseguir su cobro a través de la acción cambiaria.

ELEMENTOS ESCENCIALES DE LOS TITULOS VALORES

Los elementos esenciales de los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.

LA INCORPORACION

Significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título.

Es un vínculo inseparable entre el documento y el crédito contenido en el.

LA LITERALIDAD

Este elemento, está relacionado con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado, descrito en el artículo 626 del C. do Co., señala:

> *"suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia"*.

LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO SUBYACENTE NO AFECTAN EL DERECHO INCORPORADO EN EL TITULO

Las condiciones y características del negocio jurídico subyacente, no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado en el título valor

LA LEGITIMACION

Siendo esta una característica del título valor, según el cual el tenedor del mismo se encuentra jurídicamente habilitado para exigir, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación crediticia contenida en el documento, conforme a las condiciones de literalidad e incorporación antes descritas.

LA AUTONOMIA

Consiste en el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo.

EL PAGARE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Además de los requisitos de que trata el Art 621 del C de Co, el pagare debe contener los siguientes requisitos contenidos en el Artículo 709 del C. de co

- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero
- El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago
- La indicación de ser pagadero a la orden o al portador
- La forma de vencimiento.

REQUISITOS DE LOS TITULOS EJECUTIVOS

Para considerarse un documento como título ejecutivo, debe provenir del deudor donde conste una obligación clara, expresa y exigible, tal y como se describe en el Artículo 422 del C.G.P.

LA CLARIDAD

Consiste que la obligación contenida en el título sea inequívoca, que no genere ninguna confusión y su alcance. Que los elementos de la obligación se encuentre incorporada, los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico.

QUE SEA EXPRESO

Se refiere a que la obligación deber ser explicita, que no sea presunta ni implícita.

QUE SEA EXIGIBLE

Cuando la obligación es pura o simple, de plazo o de condición cumplida

EL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES BASE DE LA EJECUCION CUMPLE CON CADA UNO DE LOS REQUISTOS SEÑALADOS

Después de hacer un análisis de todos estos requisitos frente al **PAGARE,** base de la ejecución se tiene que este cumple a satisfacción cada uno de ellos, como más adelante se estudiara.

REQUISITOS FORMALES DE LOS TITULOS SOLO PUEDEN DISCUTIRSE MEDIANTE RECURSOD E REPOSICION EN CONTRA DE LA ORDEN DE PAGO

La Sentencia, da un alcance que no corresponde a los parámetros fijados en el Artículo 430 del C.G.P, el que señala que los requisitos formales del título pueden discutirse únicamente mediante recurso de reposición, en desarrollo de los principios de la preclusión o eventualidad, (superada una etapa procesal no se podrá volver a discutir la relación factico o jurídica superada esta) y la seguridad jurídica. De acuerdo a lo anterior todas y cada una de las condiciones para librar la orden de pago no se vieron alteradas y quedando incólumes.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD – TITULOS VALORES

Este principio está contemplado en los artículos 793 del C. de Co, en concordancia con el Inciso 4 del Artículo 244 del C.G.P., es prueba suficiente contra el ejecutado, respecto del derecho crédito incorporado.

La ejecutada no presentó tacha alguna del título valor, dando al traste la sentencia, con las instituciones de la autenticidad, autonomía de los títulos valores.

Por ende incumbe a la ejecutada, a través de los elementos de prueba desvirtuar su autenticidad.

CARGA DE LA PRUEBA DEL EJECUTANTE – LIBERTY SEGUROS DEMOSTRO EL DERECHO CREDITICIO RECLAMADO.

Dentro de la acción judicial se exhibió y allegó con la demanda el **PAGARE BASE DE LA EJECUCION**, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por los artículos 167 del C.G.P. en concordancia con el Artículo 1757 del C.C.

EXCEPCIONES QUE SE PUEDEN PROPONER CONTRA LA ACCION CAMBIARIA

Contra la acción cambiaria se pueden proponer las excepciones de que trata el Artículo 784 del C. de Co, ninguna de las propuestas por los ejecutados y la declarada en la **SENTENCIA ATACADA**, se encuentra allí enlistada.

SE DEMOSTRO QUE EL NEGOCIO CAUSAL QUE DIO ORIGEN A LA FIRMA DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES COMO GARANTIA

El negocio causal, que dio origen a la **SUSCRIPCIÓN DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** exigido por **LIBERTY SEGUROS S.A**., como contragarantía, nace en el momento que el **TOMADOR, / COMPRADOR/ EJECUTADA / LUBRICOMBRAS**, dentro del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, le fuera exigida por el **PRODUCTOR/ PETROBRAS**, la garantía con el otorgamiento de una póliza de seguros de cumplimiento.

LIBERTY SEGUROS S.A., le expide la póliza de seguros de cumplimiento requerida por el **TOMADOR/ LUBROCOMBRAS,** como garantía para el **CONTRATO DE SUMINISTRO.**

YERRO DE DERECHO DE LA SENTENCIA
APLICACION ERRONEA A LOS ARTICULOS 1499 DEL CC. Y EL NRAL 12 DEL ARTICULO 784 DEL C DE CO.
ERROR DE LA SENTENCIA CONFUNDE QUE LOS CONCEPTOS DE UN PAGARE ABIERTO Y CERRADO

UN PAGARÉ ABIERTO es un título valor el cual contiene en su carta de instrucciones la indicación de ser efectivo para cualquier póliza que haya sido expedida por **LIBERTY SEGUROS S.A.,** a favor de los tomadores.

El pagaré cerrado es un título valor de contenido crediticio que respalda una póliza de seguros en específico.

El yerro **DEL JUZGADO**, es haberle dado las condiciones de **PAGARE CERRADO**, aun **PAGARE ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, que fuera firmado por sus creadores, giradores u otorgantes, aquí ejecutados.

Dentro del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** aportado, de los hechos demanda, de las excepciones propuestas, se infiere que entre **LIBERTY SEGUROS y LUBRICOMBRA**S, existe un **NEGOCIO CAUSAL**, que dio origen a la firma del pagaré base de la ejecución.

Y por ende la ejecución se basa del ejercicio de la **ACCION CAMBIARIA** derivada del **TITULO VALOR ABIERTO**, otorgado por los demandados en favor de **LIBERTY SEGUROS,** de conformidad con el Numeral 12 del Art 784 del C. de co, a los ejecutadas le correspondía plantear excepciones derivadas en contra del NEGOCIO JURIDICO que le **DIO ORIGEN** a la creación del **TITULO**, llámense **INEXISTENCIA, INEFICIACIA DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA O RELATIVA, SIMULACION, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.**

La Sentencia atacada, no tuvo reparo alguno frente al **NEGOCIO CAUSAL,** que dio origen a la firma del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES BASE DE LA EJECUCION**, y por el contrario se confirmó y así quedo probado la existencia del **CONTRATO DE SUMINISTRO, LAS POLIZAS DE SEGUROS, Y LA EXISTENCIA DEL PAGARE**.

Frente a la relación de **LUBRICOMBRAS Y LIBERTY SEGUROS**, no se ha pregonado su inexistencia o ineficacia, nulidad absoluta o relativa, simulación, o cualquier otra situación que afecte su esencia.

El YERRO, del juzgado inicia, cuando pasa por alto, que solo existe un solo **CONTRATO PRINCIPAL DE SUMNISTRO / GARANTIZADO** , y que fue modificado únicamente su vigencia por **SUS OTROS SI (**Confesión del Rte legal de **LUBRICOMBRAS INTERROGATORIO DE PARTE** Minuto 13:26 y ss) que fueron garantizados mediante las pólizas de seguros, expedidas por **LIBERTY SEGUROS S.A.**

Entonces, existió un **SOLO CONTRATO DE SUMINISTRO**, y sus **MODIFICACIONES** a través de **OTROS SI**, tal y como lo confesara el representante legal de **LUBRICOMBRAS**, en el interrogatorio de parte así:

> Minuto 13:26 y ss "…Contratos se renovaron con unos otros si, con diferente póliza por cada otro si" " por cada otro si existía una respectiva póliza"
>
> Minuto 14:29 y ss " …ultima renovación del otro si y expedición póliza 2987963, no se firmaron pagare ni carta de instrucciones"

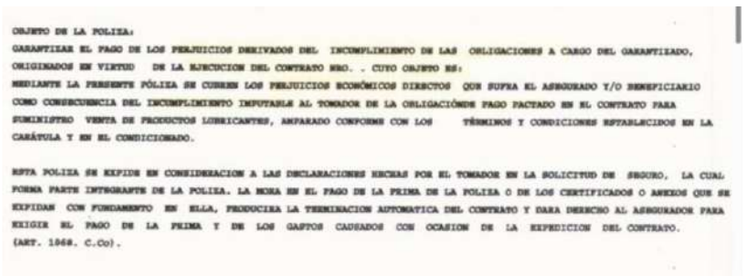
De lo anterior **LA SENTENCIA y LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS**, carecen de sustento al afirmar que se trataron de varios **CONTRATOS DE SUMINISTRO**, ya que, a voces del **REPRESENTANTE LEGAL DE LUBRICOMBRAS,** quien bajo la gravedad del juramento nos contó que existió un **UNICO CONTRATO DE SUMINISTRO,** fechado del 1 de diciembre de 2013, y que los demás fueron **OTROS SI,** y que las pólizas eran simplemente **RENOVACIONES.**

Esta información se encuentra confirmada, con la prueba adosada por la parte **EJECUTADA**, en la contestación de la demanda **(PDF 07 ACTA DE LIQUIDACION),** donde se enumeran la existencia de dos (2) **CONTRATOS PRINCIPALES**, y varios **OTROS SI** suscritos frente a estos.

Hay que relievar **HONORABLES MAGISTRADOS**, que **LIBERTY SEGUROS S.A.,** no hizo parte de la **RELACION NEGOCIAL PRIMIGENIA**, ni sus **OTROS SI,** suscritos entre

PETROBRAS Y LUBRICOMBRAS, sino que **LIBERTY SEGUROS S.A**, llega como **SUBROGATARIO** de **PETROBRAS**, y dentro de la documental aportada para el momento del **SINIESTRO,** por parte de P**ETROBRAS** no se allegaron dichos otros **SI**, y la parte ejecutada que si fue parte de la relación contractual principal y además los suscribió, y aunque era su deber legal de **LEALTAD , PROVIDAD, BUENA FE NEGOCIAL**, no los presenta, y por el contrario en el debate procesal, indujo en **ERROR A LA FUNCIONARIA JUDICIAL**, aduciendo en su contestación que la **CONTRAGARANTIA (PAGARE BASE DE LA EJECUCION),** fue presentada para otros negocios diferentes, tal y como lo afirmara en el Nral 5 de la sustentación de la **EXCEPCION INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURÍDICO FUNDAMENTAL QUE DIERA ORIGEN AL PAGARE:**

Si observamos el **OBJETO DE LA POLIZA DE SEGUROS No. BO. 2707150**, es coincidente con el **OBJETO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS BO. 2836987**, y **BO 2987963,** las tres (3) contienen los mismos amparos, es decir que se tratan de **RENOVACIONES,** que amparaban el mismo contrato de suministro suscrito entre **PETROBRAS (PRODUCTOR) Y COMPRADOR (LUBRICOMBRAS)**



OBJETO DE LA POLIZA:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. . CUYO OBJETO ES:
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE CUBREN LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS DIRECTOS QUE SUFRA EL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR DE LA OBLIGACIÓNDE PAGO PACTADO EN EL CONTRATO PARA SUMINISTRO VENTA DE PRODUCTOS LUBRICANTES, AMPARADO CONFORME CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA Y EN EL CONDICIONADO.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN LA SOLICITUD DE SEGURO, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ART. 1068. C.Co).

Existiendo la unidad en el **OBJETO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS**, se tiene que las **POLIZAS DE SEGUROS**, fueron el resultado **DE RENOVACIONES** Y **MODIFICACIONES**, que amparan el mismo **NEGOCIO JURIDICO/ CONTRATO DE SUMINISTRO** firmado entre **PETROBRAS y LUBRICOMBRAS**, que fue renovado por la suscripción de varios **OTRO SI**, y que allí solo fueron modificadas sus vigencias.

Así las cosas, se tiene que la **EXPEDICION DE TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS,** por **LIBERTY SEGUROS**, al tener el **MISMO OBJETO**, son **RENOVACIONES,** que ampliaban simplemente la **VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGUROS Y EL CONTRATO PRINCIPAL DE SUMINISTRO**, y por ende no existen relaciones **JURIDICAS** diferentes, como lo dijo **la SENTENCIA**, y como así se lo hizo hacer creer los **EJECUTADAS**, para evadir el pago del recobro y la **INDEMNIZACION** pagada por **LIBERTY SEGUROS**, en razón del amparo afectado.

No existe discusión en el plenario frente a la existencia y validez del acuerdo de voluntades /**CONTRATO DE SUMINISTRO, Y POLIZAS DE SEGUROS, SUSCRIPCION DEL PAGARE**, el **ERROR DE HECHO Y DERECHO DE LA SENTENCIA**, nace cuando, le quita toda la fuerza **EJECUTIVA AL TITULO VALOR BASE DE LA EJECUCION,** con el simple argumento, que el pagare tiene fecha de elaboración del 10 de Agosto de 2016, y que la póliza de seguros Nro. 2987963, fue expedida en el 22 de Noviembre de 2018, entonces para la **SENTENCIA,** esta disparidad de fechas, hace que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, del que la ejecutada no **TACHO DE FALSO**, y no derribó su fuerza ejecutiva, dentro de la oportunidad de que trata el Artículo 430 del C.G.P., por la no interposición del recurso de **REPOSICION,** en contra del **MANDAMIENTO DE PAGO**, es decir para la **SEÑORA JUEZ**, **EL PAGARE**, perdió su **FUERZA COERCITIVA**, y con este simple argumento, carente de soporte factico y jurídico deniega las pretensiones de la demanda.

Como ya vimos al inicio de este escrito, los elementos generales y particulares del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** fueron perfectamente cumplidos con el **TITULO VALOR BASE DE LA EJECUCION**, y ahora se demostrará que la disparidad de **FECHAS DEL PAGARE,** que hace notar la **SENTENCIA**, no lo hace **CARENTE DE CAUSA, INEXISTENTE, INEJECUTABLE, o QUE PIERDA SU CAPACIDAD EJECUTIVA,** como lo mal entendió la **SENTENCIA**, por las siguientes razones fácticas y jurídicas, que traen el quiebre de la **SENTENCIA**, por los **YERROS DE HECHO Y DERECHO**, que se evidencian.

Ya vimos que las **POLIZAS DE SEGUROS BO. 2707150, BO. 2836987 y BO 2987963,** son **RENOVACIONES**, ya que comparten las tres (3) el mismo **OBJETO** cual es el garantizar el cumplimiento del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, comparten el mismo **TOMADOR: LUBRICOMBRAS**, el mismo **ASEGURADO Y BENEFICIARIO: PETROBRAS,** el mismo **VALOR ASEGURADO $1.000.000.000.oo**, lo único que las difiere una de la otra, es su fecha de expedición y vigencia.

La fecha de expedición de la póliza de seguros BO. 2707150 data del 13 de Septiembre de 2016, y su vigencia está comprendida entre 13 de Septiembre de 2016 hasta 13 de Septiembre de 2017

La fecha de expedición de la póliza de seguros BO. 2836987 data del 13 de Septiembre de 2017, y su vigencia está comprendida entre 13 de Septiembre de 2017 hasta 13 de Septiembre de 2018

La fecha de expedición de la póliza de seguros BO 2987963 data del 22 de Noviembre de 2018, y su vigencia está comprendida entre 13 de Septiembre de 2018 hasta 13 de Septiembre de 2019

Entonces se ve claramente que al coincidir todas el mismo **OBJETO, TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO, VALOR ASEGURADO,** que solo su diferencia es su vigencia, y adicionamos que solo se suscribe un **CONTRATO DE SUMINISTRO**, y sus modificaciones a través de **OTROS SI**, es absolutamente claro que las **POLIZAS DE SEGUROS: BO. 2707150, BO. 2836987 y BO 2987963** son **RENOVACIONES**, entones el primer argumento de la sentencia queda desvirtuado, al decir que se trataban de relaciones contractuales diferentes, por ello la sentencia debe ser revocada.

El PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES, BASE DE LA EJECUCION, tiene fecha de creación del 10 de Agosto de 2016, ninguna de las pólizas BO. 2707150, BO. 2836987, BO 2987963, coinciden con la fecha de la creación del título (10 DE Agosto de 2016), por ende no se puede afirmar que el pagare estaba atado a una de ellas, o afirmar impropiamente que solo garantizaba una póliza de seguros específicamente, ya que esta afirmación va en contravía de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y además **LIBERTY SEGUROS**, exigió la **CONTRAGARANTIA – PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** con el fin de ejercer la acción de recobró, contra los obligados cambiarios, por los pagos de la indemnización como consecuencia de los siniestros, los que se encuentran debidamente soportados, los que se realizaron en favor del **ASEGURADO – PETROBRAS**.

Entonces, descartando la tesis de la sentencia, que baso su teoría en el hecho que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, estaba atado a una póliza de seguros, **(CERRADO)** lo que no es cierto, ya que las **POLIZAS DE SEGUROS BO. 2707150, BO. 2836987, BO 2987963** , fueron expedidas respecto de las **RENOVACIONES**, y las prórrogas

del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, a través de los **OTROS SI**, no existen relaciones contractuales diferentes, sino simplemente modificaciones de su vigencia.

Siguiendo con el estudio del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, se tiene que este no se **ALTERO**, o modificó, como lo mal entiende **LA SENTENCIA**, sino que este se llenó estrictamente a las autorizaciones contenidas en la **CARTA DE INSTRUCCIONES**, como pasara a estudiarse.

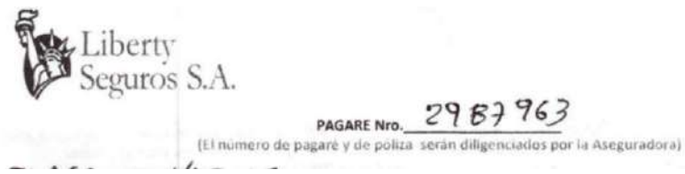
El numeral 4 de la CARTA DE INSTRUCCIONES, señala:

> 4. Espacio destinado a la cantidad adeudada: La cuantía que de antemano tiene mi (nuestra) aceptación, será igual al monto de todas las sumas que al momento de ser diligenciado el pagare le este(mos) adeudando a **LIBERTY SEGUROS S.A.**, identificada con NIT 860.839.988-0 por concepto de la póliza de seguro de cumplimiento Nro. 2987963, tales como el valor de la indemnización pagada como consecuencia de la efectividad de dicha póliza de cumplimiento (incluyendo sus anexos y/o certificados de modificación y/o renovaciones)expedidas por **LIBERTY SEGUROS S.A.**, así como honorarios y gastos de cobranza (judicial y extrajudicial) de las contragarantías otorgadas por el tomador y/o afianzado y los honorarios

En este Numeral, es totalmente claro, donde autoriza llenar el espacio en blanco de **LA CUANTIA**, la que será igual al monto de todas las sumas de dinero al momento de ser diligenciado el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** respecto de la póliza de **CUMPLIMIENTO**, y por tratarse de **UNA CONTRAGARANTIA,** el **NUMERO DE LA POLIZA DE RENOVACION**, estaba en blanco, para que la **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, determiné la **POLIZA DE SEGUROS**, que fue afectada como consecuencia del siniestro.

Si como lo dice impropiamente la **SENTENCIA**, que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, como **CONTRAGARANTIA**, estaba atado a una especifica **POLIZA DE SEGUROS**, pues este espació en banco, no tendría razón de ser.

Y la **SENTENCIA** obvio y pasó por alto, la razón porque dentro de **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** en su parte superior se encuentra la leyenda “(El número de pagaré y de la póliza serán diligenciados por la Aseguradora)”


Liberty Seguros S.A.

PAGARE Nro. 2987963

(El número de pagaré y de poliza serán diligenciados por la Aseguradora)

Reitérese que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** es una **CONTRAGARANTIA**, exigida por **LIBERTY SEGUROS,** a sus clientes para garantizar las sumas pagadas por esta, por la ocurrencia de siniestro en las **POLIZAS DE CUMPLIMIENTO**, entonces que la fecha sea anterior de la **POLIZA RENOVADA**, no **ALTERA el TITULO**, no lo hace inexigible, **NO AFECTA SU CAUSA,** tal y como lo señala el Art 631 del C. de co.

Obviamente el **TITULO VALOR**, como **CONTRAGARANTIA**, es solicitado por **LIBERTY SEGUROS**, con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, y que no es cierto que **LIBERTY SEGUROS**, tenga la obligación de solicitar una **CONTRAGARANTIA**, por cada una de las **RENOVACIONES DE LAS POLIZAS**, incluso por cada **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO,** pedir la contragarantía está bajo su libertad y autonomía contractual, no existe norma, resolución, circular externa de la Superfinanciera que exija el requisito echado de menos por la **SENTENCIA**, que por cada **RENOVACION DE LA POLIZA**, se exija una contragarantía, y por ello **LIBERTY SEGUROS** exige un **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** para ser diligenciado por todas las sumas que la aseguradora, se vea

obligada a pagar por razón de los siniestros amparados del **TOMADOR,** derivadas por supuesto de **POLIZAS DE CUMPLIMIENTO .**

Es más, la **CONTRAGARANTIA**, está en la voluntad autónoma y personal de **LIBERTY SEGUROS S.A**, de solicitarla o no, en el caso en particular existiendo ya una **CONTRAGARANTIA**, entregada por **EL TOMADOR/ COMPRADOR**, del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, para la expedición de la **RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, NO** era necesaria la petición de otra **CONTRAGARANTIA,** pues como ya se vio la carta de instrucciones autoriza el lleno de la **CUANTIA DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, será el valor adeudado por el **DEUDOR**, por todas las sumas que **LOS DEUDORES**, estén adeudando en favor de **LIBERTY SEGUROS**, para el momento de diligenciar el pagaré, entonces, se ratifica que la **CONTRAGARANTIA/ PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, no se encuentra atada a una póliza de seguros en particular.

Por estas razones, la **SENTENCIA DEBERA REVOCARSE**.

ERROR DE HECHO OCURRE CUANDO SE PRETERMITE LA PRUEBA O SE DISTORSIONA PARA DARLE UN SIGNIFICADO QUE NO CONTIENE[4].
ES TOTALMENTE FALSO QUE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LIBERTY SEGUROS EN SU INTERROGATORIO DE PARTE (Archivo 46) HAYA CONFESADO QUE SE LE HAYA EXIGIDO A EXPEDICION DE LA POLIZA DE SEGUROS B02987963 LA FIRMA DE PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES

La Sentencia por inducción del error por parte del apoderado de la ejecutada, a la FALLADORA, que le hace decir impropiamente en la SENTENCIA en la que afirmar que frente a la póliza se había exigido a LUBRICOMPRAS la suscripción del pagare.

A este prueba la SENTENCIA, la distorsionó dándole un significado que no contiene.

No es cierto que la **REPRESENTANTE LEGAL**, haya hecho tal afirmación, como pasara a demostrarse, esto si tenemos que dentro del interrogatorio de parte afirmó:

PREGUNTA EL APODERADO DE LA EJECUTADA:

> 17:54 Si para la expedición de la póliza de cumplimiento para particulares B02987963 con vigencia 9 sept de 2018 al 13 de Septiembre 2019, la sociedad demanda lubricombras suscribió un pagare con carta de instrucciones

LA RESPUESTA DE LA RTE LEGAL DE LIBERTY:

> Minuto 18:21: Efectivamente de suscripción siempre que hacen una póliza esta es una póliza de cumplimiento para particulares siempre tiene pagares y carta instrucciones. **En el caso en particular creo que venían con varias pólizas entonces la compañía está en libertad de pedir las garantías que considere necesarias** (La negrilla es mía)

Afirmación del apoderado donde induce en error a la falladora:

Minuto 18:49 **“Entonces si lo suscribió” ¡¡¡**

[4] **Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-18532018 (11001310303020080014801), May. 29/18.**

Luego la representante de LIBERTY, aclara lo siguiente:

19:35 la compañía esta en potestad, como venían con varias pólizas de pedir las garantías que a bien tengan no le puedo contestar de fechas, no pertenezco al área de suscripción eso ya es a discreción de la compañía tener las pólizas de cumplimiento y los pagares y las cartas de instrucciones
Por lo anterior, y de todo el material probatorio, la SENTENCIA, cuando a demás en tratándose de un título ejecutivo, donde la prueba es netamente documentales, y en este diligenciamiento, la sentencia con la inducción del apoderado de la ejecutada, al descontextualizar una respuesta de la representante legal, hace una afirmación que solo esta en el imaginario del apoderado de la pasiva, que la señora juez dio por cierta, más aún, que ni siquiera se trataba de una pregunta asertiva, y que la representante legal nunca hizo la afirmación con la que se pretende soportar la sentencia censurada.

La afirmación contenida en la Sentencia, fue una indebida interpretación, que no puede derivar la ejecutabilidad del título, la presunción de autenticidad del título, ya que entre otras la representante legal de la ejecutante, informó enfáticamente que ella no pertenecía al área de suscripciones, y sobre todo que era potestad de LIBERTY SEGUROS de solicitar garantías, más aun cuando la ASEGURADORA, ya había expedido pólizas por este mismo negocio, como garantías del contrato de suministro, y es consecuente con que el PAGARE ERA ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIÓN, por la relación comercial que venia de tiempo atrás, de solicitar nuevas contragarantías al mismo TOMADOR, y referido al mismo contrato amparado esto es el de SUMINISTRO.

Ahora bien, aceptar la pobre teoría de la parte pasiva, respecto de la fuerza ejecutiva de un pagare, solicitado como contragarantía, dizque porque, según su imaginario, las compañías de seguros “deben” pedir contragarantías cada vez que expiden pólizas de cumplimiento, es como, exigir a los bancos que por la cesión de los derechos de hipoteca, el deudor deba expedir nuevas contragarantía, ya sean hipotecas o pagares, es echar por la borda, todos los principios de DE LA CREACION, LITERALIDAD, LEGITIMACION, AUTONOMIA, INCORPORACION, INCONDICIONALIDAD, NEGICIABILIDAD, PRESUNCION DE AUTENTICIDAD, todos estos principios fueron desconocidos pro la sentencia, por ello esta debe revocarse, y consecuencialmente, solicito al H. Tribunal se sirva proferir la SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION.

PETICION SENTENCIA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION

Habiéndose derivada la **SENTENCIA DE PRIMERA GRADO,** solicito al **HONORABLE TRIBUNAL**, se sirva proferir **LA SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION**, porque los elementos generales y esenciales del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** cumple estrictamente, además se demostró que los amparos estaban amparados por **LIBERTY SEGUROS**, que el asegurado demostró la ocurrencia del siniestro su cuantía, que **LIBERTY SEGUROS,** diligenció el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** siguiendo estrictamente estas.

PETICION

Por todas las anteriores consideraciones solicito al **HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA CIVIL**, se sirva:

1- Revocar en su integridad la Sentencia proferida.
2- Consecuencialmente a dicha determinación solicito en forma respetuosa, se sirva proferir **SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION.**
3- Se sirva condenar en costas a la parte ejecutada.

Del H TRIBUNAL, atentamente.,

HOSMAN FABRICIO OLARTE MAHECHA
CC. 79´137384 de Bogotá.
Tp.93.148 del C.S.J.

De conformidad con los preceptos del inciso 2 del Artículo 2 de la Ley 2213 de 2022: "… las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales…" en consecuencia no es necesaria de firma alguna.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: SE RADICA SUSTENTACION DE RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL - PROCESO NO. 2020-49

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 05/09/2023 14:39

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (488 KB)

SUSTENTACION RECURSSO DE APELACION SENTENCIA JDO 16 CTO LIBERTY VS LUBRICOMBRAS.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones OYP <notificaciones@oypabogados.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 14:26
Para: jecheonalubri@gmail.com <jecheonalubri@gmail.com>; gerencia@jcvabogados.com <gerencia@jcvabogados.com>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones Tutelas Secretaria Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogotá <ntssctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SE RADICA SUSTENTACION DE RECURSO DE APELACION - TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL - PROCESO NO. 2020-49

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL
Magistrado Ponente Dr. GERMAN VALENZUELA VALVUENA
E S. D.

REF: Ejecutivo
De: LIBERTY SEGUROS S.A.
Contra: LUBRICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEIROS S.A
Proceso No. 11001310301620200049
Proveniente: JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

SE ADJUNTA (1) ARCHIVO PDF.



O&P ABOGADOS SAS - DESDE 2004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
3003705967 - 3002014259 - 3115306053
Bogotá- Colombia

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL
Magistrado Ponente Dr. GERMAN VALENZUELA VALVUENA
E S. D.

REF: Ejecutivo De: LIBERTY SEGUROS S.A.
Contra: LUBRICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEIROS S.A
Proceso No. 11001310301620200049
Proveniente: JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

HOSMAN FABRICIO OLARTE MAHECHA, en mi calidad de apoderado de la parte actora, y estando dentro del término para **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto en contra de la **SENTENCIA DE PRIMER GRADO**, de acuerdo a los precisos reparos en los que se fundamento el recurso en la primera instancia,[1] en forma respetuosa me permito **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACION**, en los siguientes términos:

SON RAZONES DEL RECURSO DE APELACION:

La SENTENCIA APELADA, tiene varios **ERRORRES DE HECHO Y DERECHO**, que quedaran desvelados, en las siguientes líneas, los que indefectiblemente generarán el quiebre de la **SENTENCIA DE PRIMER GRADO**:

La Señora **JUEZ DE PRIMER GRADO,** sustentó su sentencia, negando las **PRETENSIONES DE LA DEMANDA,** sosteniendo que el **TITULO VALOR (PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES)**, base de la presente acción, al haber sido creado en una fecha anterior a la de la póliza de seguros que garantizaba el contrato, a pesar de tratarse de una **RENOVACIÓN**, que amparaba la vigencia del contrato primigenio, que era modificada su vigencia a través de **OTROS SI**; además indico, sin respaldo probatorio y legal alguno, que cada póliza de seguro de cumplimiento tenía que tener su propia contragarantía a saber pagare y carta de instrucciones.; Desconociendo los principios de la libertad y voluntad contractual, que las contragarantías en los seguros de cumplimiento, no es obligatoria, ninguna ley, decreto, circular externa exige este requisito para la su expedición.

El sustentó de la negación de las pretensiones se basó en los siguientes:

La Señora JUEZ argumenta su decisión en el sentido que hubo **AUSENCIA DE CAUSA**, **FALTA DE CAUSA ONEROSA**, con la siguiente argumentación:

Después de hacer un recuento del proceso, la negación de las pretensiones se inicia desde el minuto 33:45 y siguientes así:

Minuto 33:45 Pagare suscrito **aparentemente** surgió de la póliza No. 2987963, expedida del 22 de Noviembre de 2018. (La negrilla es mía)

Minuto 35:29 Para el 10 de Agosto de 2016 fecha que se firmó el pagare, no se conocía ni se había firmado el contrato de seguros con LIBERTY SEGUROS, para garantizar el CONTRATO DE SUMINISTRO.

[1] Nral 3 del Artículo 322 del C.G.P

Minuto: 36:03 Pagare fue suscrito por los demandados el 10 de Agosto de 2016 teniendo demás espacios en blanco, **que no podrían ser diligenciados para el cobro de la póliza de seguros No 2987963, porque fue posterior al caratular**, contrariando la carta de instrucciones carente de sustento necesario para una vía ejecutiva. Que el JUEZ, puede verificar las particularidades del título, incluso después de los términos de que trata el Art 430 del C.G.P., a pesar que la ejecutada no atacó los requisitos formales mediante el recurso de reposición contra el mandamiento de pago. (La negrilla es mía)

Minuto: 38:10 **Resumen la acción que se apoya en el pagaré 2987963 del 10 de agosto de 2016, y que para el 10 de agosto de 2016, no existía la póliza para el respaldo del contrato de suministro de fecha 10 de Enero de 2014**, entre PETROBRAS y LUBRICOMBRAS se abrían pasó las excepciones propuestas. (La negrilla es mía)

ERRORES DE HECHO y DERECHO DE LA SENTENCIA ATACADA

La sentencia se enmarca exactamente en los errores de hecho y derecho, existen en la normatividad actual, que para mayor claridad me permito transcribir la definición que hace la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, así:

> "En punto de la violación de la ley sustancial por la vía indirecta, la Sala tiene precisado que "por ser lo trascendental en ésta hipótesis, la incorrecta percepción de los hechos, cuyo conocimiento el juez adquiere solamente a través de los elementos de juicio recaudados en el proceso, el quebranto de que se trata puede darse como consecuencia de dos diversas clases de error: de hecho y de derecho. Aquel consiste en la suposición de una prueba, o en la pretermisión de la que sí obra en el litigio o en la tergiversación del contenido objetivo de la que se valora y en que, como consecuencia de ello, se da por acreditado un hecho en verdad no demostrado, o se ignora el que sí se comprobó, o se altera su contenido. En el yerro de derecho, el sentenciador, producto de la aplicación que hace de las normas de disciplina probatoria, pese a apreciar objetivamente la prueba, le niega su valor demostrativo, o le concede uno que no tiene, o cambia el que posee", (…)"[2]

La sentencia atacada, se enmarca exactamente dentro de los **ERRORES DE HECHO Y DERECHO**, que en primera medida la señora Jueza, comete el error de **DERECHO**, por cuando abordó impropiamente las siguientes, normas e instituciones del **DERECHO COMERCIAL, CIVIL Y PROCESAL**:

ERROR DE DERECHO DE LA SENTENCIA / OMITIR LA VALORACION DE LA PRUEBA [3]VISTA PDF 62 DONDE LIBERTY SEGUROS DA RESPUESTA AL OFICIO 128 DEL 3 MARZO DE 2023

La Sentencia dejo de valorar la respuesta que **LIBERTY SEGUROS**, dio al oficio Nro. 128, expedido por el Juzgado, prueba solicitada por la ejecutada, (Vista a PDF 62 del expediente digital) que, si hubiera la **SENTENCIA,** realizado un ejercicio profundo de la valoración probatoria, habría encontrado y analizado la respuesta que hizo la **ASEGURADORA**, en los siguientes términos:

Como ya advertimos, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la vía indirecta en la

[2] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil once (2011).-Ref.: 11001-3103-034-1999-03339-01

[3] **Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-18532018 (11001310303020080014801), May. 29/18.**

modalidad de error de hecho en la valoración probatoria sucede cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de las pruebas, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma en que se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado.

Por lo anterior se dan los requisitos del error de derecho en la valoración probatoria, como pasara a demostrarse:

La señora JUEZA omitió valorar la prueba contenida en la respuesta dada por la **Dra KATHERINE YOHANA TRIANA ESTRADA,** como apoderada de LIBERTY SEGUROS, al oficio 128 (vista a Pdf 62):

> " En cuanto al segundo punto, dentro del oficio No. 128, enviado por esta autoridad judicial, me permito indicar que la sociedad LUBRIFICANTES Y COMBUSTIVELES BRASILEROS, tomo en calidad de asegurado las siguientes pólizas:
>
> 1. **POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2707150, expedida el 13 de septiembre de 2016.**
>
> 2. POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2836987, expedida 01 de septiembre de 2017.
>
> 3. Anexo a la POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2836987, expedida el 31 de octubre de 2018.
>
> 4. POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2987963, expedida el 22 de noviembre de 2018.
>
> En relación con las Pólizas de Cumplimiento para Particulares, **tenemos que es un producto que ofrece diferentes amparos en virtud de las garantías que surte dentro de los contratos específicos que tenga el cliente, en cuanto a las contragarantías para las pólizas de cumplimiento para particulares, se solicita por parte de la compañía la suscripción de un pagaré y carta de instrucciones, contragarantía que tiene validez para la póliza inicial y las posteriores pólizas o renovaciones que tome el mismo cliente con la compañía LIBERTY SEGUROS S.A., así pues, el cliente al tomar algunas pólizas posteriores, no se requiere para la suscripción de nuevas contragarantías como (pagare y carta de instrucciones), es por ello que se firma un pagaré en blanco con carta de instrucciones, desde la adquisición de la primera póliza de cumplimiento para particulares**.
>
> Cabe aclarar que dentro de la respuesta del derecho de petición del pasado 04 de noviembre de 2020 se manifestó que las pólizas adquiridas por LUBRIFICANTES E COMBUSTIVELES BRASILEROS S.A. (LUBRICOMPRAS), no generaron pagaré teniendo en cuenta que las pólizas las pagaron en efectivo, en efecto hacen referencia a que no hay pagaré teniendo en cuenta que el pago de las primas se realizó de en efectivo y no financiadas.
>
> **Por lo anterior, el único pagaré y carta de instrucciones (contragarantia), fue en virtud de la expedición de la primera póliza No. 2707150 el día 13 de septiembre de 2016, surtiendo efecto esta de garantía para los amparos adquiridos dentro de las póliza inicial y las que se pudieran tomar posterior a la adquisición de la primera**

póliza. (La negrilla y el sombreado es mío)

Si la señora **JUEZA**, hubiera hecho una valoración debida, como era su deber a esta respuesta, no hubiera incurrido en el error que se reclama.

Esta respuesta es clara y contundente, dentro de la cual se informó dando respuesta a una prueba solicitada por la parte ejecutada donde se indica que el **UNICO PAGARE, Y CARTA DE INSTRUCCIONES**, fue solicitado como consecuencia de la expedición de la **PRIMERA POLIZA,** es decir la expedida el día 13 de SEPTIEMBRE DE 2016, surtiendo efectos esta contragarantía para esta póliza y las que se tomen con posterioridad.

En efecto es totalmente claro que la **CONTRAGARANTIA PAGARE ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, fueron diligenciados el día 10 de Agosto de 2016, la expedición de la **PRIMERA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. 2707150**, fue expedida días siguientes a saber el día 13 de Septiembre 2016.

Es más la anterior respuesta de **LIBERTY SEGUROS,** es consecuente en los mismos términos con la confesión que hace el apoderado de la ejecutada (Art 193 del C.G.P.), en la **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, (Pdf 59 pag 5), al afirmar:

> **"El pagaré base de la presente acción y su correspondiente carta de instrucciones, fueron firmados y entregados el 10 de agosto de 2016 como contragarantía para amparar la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES BO- 2707150 con vigencia desde 2016-09-13 00:00 hasta 2017-09-13 24:00**, la cual feneció sin reclamación alguna…" (La negrilla es mía)

Entonces, se tiene que se encuentra demostrado que el **PAGARE BASE DE LA EJECUCIÓN**, es un **PAGARE**, tipo **ABIERTO, con CARTA DE INSTRUCCIONES**, y por ello el error del **JUZGADO** se evidencia, al omitir la valoración de estas dos pruebas (respuesta oficio por parte de LIBERTY), y la confesión contenida en la **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, ya que de su análisis la sentencia sería de **SEGUIR ADELNATE LA EJECUCION**, y no como lastimosa y erradamente se pronunció.

Por ello la SENTENCIA deberá ser revocada.

LA CAUSA QUE ORIGINO LA SUSCRIPCION DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES NACE DE LA CONTRAGARANTIA DE UNA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ERROR DE LA SENTENCIA ESTUDIO DE PAGARE CERRADO A PESAR QUE EL ALLEGADO AL PLENARIO ES UN PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES

El seguro de cumplimiento nace en Colombia con la expedición de la Ley 225 de 1938, hoy contenido en el Artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero.

Bajo el Seguro de cumplimiento el Asegurador asumió el riesgo de incumplimiento, de una o varias obligaciones contractuales adquiridas en este caso por **LUBRICOMBRAS**, y por ende al haber incumplido el **COMPRADOR**, sus obligaciones en el **CONTRATO DE SUMINISTRO**; **LIBERTY SEGUROS** indemnizó al acreedor **PETROBRAS**, el incumplimiento causado por el contratante incumplido **LUBRICOMBRAS.**

LIBERTY SEGUROS, en ejercicio de la facultad de subrogación en los derechos del acreedor-

asegurado contra el deudor incumplido, con apoyo del inciso 2 del artículo 1099 del C. de Co, en concordancia con el numeral 3 del Artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero, inicio esta acción judicial, con el fin que el incumplido/ **LUBRICOMBRAS** y su codeudor, le reembolse la suma que se vio obligada a pagar a título de indemnización derivada del contrato de seguros.

En la etapa precontractual cualquier **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, habilitada en Colombia, para la venta y comercialización de **SEGUROS DE CUMPLIMIENTO,** cuenta con la **FACULTAD**, de exigir al **TOMADOR,** el otorgamiento de una **CONTRAGARANTIA**, bajo el imperio de la **AUTONOMINA DE LA VOLUNTAD PRIVADA**, y la **FACULTAD** de selección del riesgo, y las condiciones con las que desea asumirlo (Art 1056 del C. de Co).

La CONTRAGARANTIA se define como cualquier herramienta que exige al **ASEGURADOR AL CONTRATISTA- TOMADOR** con el fin de facilitar la recuperación de lo pagado en caso que el asegurador se vea obligado a pagar al asegurado la indemnización derivada del seguro de cumplimiento.

En consecuencia, la exigencia de **CONTRAGARANTIA**, es una herramienta eficaz para que la **ASEGURADORA,** restablezca efectivamente su patrimonio, en el evento que se vea obligada a pagar una indemnización, como en efecto sucedió en este asunto.

La **CONTRAGARANTIA** exigida por **LIBERTY SEGUROS**, fue el otorgamiento de un **PAGARE ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, el que la señora J**UEZ EN LA SENTENCIA**, entro a su estudio con una hipótesis errónea al tratar al **PAGARE** otorgado, como **UN PAGARE CERRADO**, cuando el pagare otorgado por el contratista y su codeudor, es un **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCIONES**, es decir, esta **CONTRAGARANTIA**, garantiza y respalda, el pago de las sumas de dinero que **LIBERTY SEGUROS**, hizo en favor del **ASEGURADO/ PETROBRAS**, como indemnización tal y como se demostró dentro del proceso, y por ello se abrió paso a la ejecución y el ejercicio de la subrogación.

Por tratarse de **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, allí se estableció en su numeral 4 , donde autoriza llenar el espacio en blanco de **LA CUANTIA**, la que será igual al monto de todas las sumas de dinero al momento de ser diligenciado el **PAGARE**, respecto de la póliza de **CUMPLIMIENTO**, y por tratarse de **UNA CONTRAGARANTIA,** el **NUMERO DE LA POLIZA DE RENOVACION**, estaba en blanco, para que la **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, determiné la **POLIZA DE SEGUROS**, que fue afectada como consecuencia del siniestro.

Y la **SENTENCIA** obvio y pasó por alto, la razón porque dentro de **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** en su parte superior se encuentra la leyenda:

> "(El número de pagaré y de la póliza serán diligenciados por la Aseguradora)"

Lo que a todas luces se ve con suficiencia que la **SENTENCIA**, abordo el estudio del **PAGARE**, base de la ejecución, como si ese fuera cerrado, y como se demostró el **PAGARE ES ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, espacios en blanco que fueron diligenciados estrictamente con dichas autorizaciones.

EL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES BASE DE LA PESENTE ACCION REUNE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY

El **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** base de la presente acción reúne los requisitos generales enlistados en el artículo 621 del Código de Comercio y los esenciales especiales del art 709 ibídem, además cumple con los requisitos de que trata el Artículo 422 del C.G.P., los que se desconocieron en la decisión recurrida.

DEFINICION DE LOS TITULOS VALORES

El Artículo 619 del C.G.P, define los títulos valores como bienes mercantiles, y son documentos para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, y por ello habilitan al tenedor, conforme la ley de circulación, para perseguir su cobro a través de la acción cambiaria.

ELEMENTOS ESCENCIALES DE LOS TITULOS VALORES

Los elementos esenciales de los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.

LA INCORPORACION

Significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título.

Es un vínculo inseparable entre el documento y el crédito contenido en el.

LA LITERALIDAD

Este elemento, está relacionado con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado, descrito en el artículo 626 del C. do Co., señala:

> *"suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia"*.

LAS CONDICIONES DEL NEGOCIO SUBYACENTE NO AFECTAN EL DERECHO INCORPORADO EN EL TITULO

Las condiciones y características del negocio jurídico subyacente, no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado en el título valor

LA LEGITIMACION

Siendo esta una característica del título valor, según el cual el tenedor del mismo se encuentra jurídicamente habilitado para exigir, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación crediticia contenida en el documento, conforme a las condiciones de literalidad e incorporación antes descritas.

LA AUTONOMIA

Consiste en el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo.

EL PAGARE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Además de los requisitos de que trata el Art 621 del C de Co, el pagare debe contener los siguientes requisitos contenidos en el Artículo 709 del C. de co

- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero
- El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago
- La indicación de ser pagadero a la orden o al portador
- La forma de vencimiento.

REQUISITOS DE LOS TITULOS EJECUTIVOS

Para considerarse un documento como título ejecutivo, debe provenir del deudor donde conste una obligación clara, expresa y exigible, tal y como se describe en el Artículo 422 del C.G.P.

LA CLARIDAD

Consiste que la obligación contenida en el título sea inequívoca, que no genere ninguna confusión y su alcance. Que los elementos de la obligación se encuentre incorporada, los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico.

QUE SEA EXPRESO

Se refiere a que la obligación deber ser explicita, que no sea presunta ni implícita.

QUE SEA EXIGIBLE

Cuando la obligación es pura o simple, de plazo o de condición cumplida

EL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES BASE DE LA EJECUCION CUMPLE CON CADA UNO DE LOS REQUISTOS SEÑALADOS

Después de hacer un análisis de todos estos requisitos frente al **PAGARE,** base de la ejecución se tiene que este cumple a satisfacción cada uno de ellos, como más adelante se estudiara.

REQUISITOS FORMALES DE LOS TITULOS SOLO PUEDEN DISCUTIRSE MEDIANTE RECURSOD E REPOSICION EN CONTRA DE LA ORDEN DE PAGO

La Sentencia, da un alcance que no corresponde a los parámetros fijados en el Artículo 430 del C.G.P, el que señala que los requisitos formales del título pueden discutirse únicamente mediante recurso de reposición, en desarrollo de los principios de la preclusión o eventualidad, (superada una etapa procesal no se podrá volver a discutir la relación factico o jurídica superada esta) y la seguridad jurídica. De acuerdo a lo anterior todas y cada una de las condiciones para librar la orden de pago no se vieron alteradas y quedando incólumes.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD – TITULOS VALORES

Este principio está contemplado en los artículos 793 del C. de Co, en concordancia con el Inciso 4 del Artículo 244 del C.G.P., es prueba suficiente contra el ejecutado, respecto del derecho crédito incorporado.

La ejecutada no presentó tacha alguna del título valor, dando al traste la sentencia, con las instituciones de la autenticidad, autonomía de los títulos valores.

Por ende incumbe a la ejecutada, a través de los elementos de prueba desvirtuar su autenticidad.

CARGA DE LA PRUEBA DEL EJECUTANTE – LIBERTY SEGUROS DEMOSTRO EL DERECHO CREDITICIO RECLAMADO.

Dentro de la acción judicial se exhibió y allegó con la demanda el **PAGARE BASE DE LA EJECUCION**, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por los artículos 167 del C.G.P. en concordancia con el Artículo 1757 del C.C.

EXCEPCIONES QUE SE PUEDEN PROPONER CONTRA LA ACCION CAMBIARIA

Contra la acción cambiaria se pueden proponer las excepciones de que trata el Artículo 784 del C. de Co, ninguna de las propuestas por los ejecutados y la declarada en la **SENTENCIA ATACADA**, se encuentra allí enlistada.

SE DEMOSTRO QUE EL NEGOCIO CAUSAL QUE DIO ORIGEN A LA FIRMA DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES COMO GARANTIA

El negocio causal, que dio origen a la **SUSCRIPCIÓN DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** exigido por **LIBERTY SEGUROS S.A**., como contragarantía, nace en el momento que el **TOMADOR, / COMPRADOR/ EJECUTADA / LUBRICOMBRAS**, dentro del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, le fuera exigida por el **PRODUCTOR/ PETROBRAS**, la garantía con el otorgamiento de una póliza de seguros de cumplimiento.

LIBERTY SEGUROS S.A., le expide la póliza de seguros de cumplimiento requerida por el **TOMADOR/ LUBROCOMBRAS,** como garantía para el **CONTRATO DE SUMINISTRO.**

YERRO DE DERECHO DE LA SENTENCIA
APLICACION ERRONEA A LOS ARTICULOS 1499 DEL CC. Y EL NRAL 12 DEL ARTICULO 784 DEL C DE CO.
ERROR DE LA SENTENCIA CONFUNDE QUE LOS CONCEPTOS DE UN PAGARE ABIERTO Y CERRADO

UN PAGARÉ ABIERTO es un título valor el cual contiene en su carta de instrucciones la indicación de ser efectivo para cualquier póliza que haya sido expedida por **LIBERTY SEGUROS S.A.,** a favor de los tomadores.

El pagaré cerrado es un título valor de contenido crediticio que respalda una póliza de seguros en específico.

El yerro **DEL JUZGADO**, es haberle dado las condiciones de **PAGARE CERRADO**, aun **PAGARE ABIERTO**, con **CARTA DE INSTRUCCIONES**, que fuera firmado por sus creadores, giradores u otorgantes, aquí ejecutados.

Dentro del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** aportado, de los hechos demanda, de las excepciones propuestas, se infiere que entre **LIBERTY SEGUROS y LUBRICOMBRA**S, existe un **NEGOCIO CAUSAL**, que dio origen a la firma del pagaré base de la ejecución.

Y por ende la ejecución se basa del ejercicio de la **ACCION CAMBIARIA** derivada del **TITULO VALOR ABIERTO**, otorgado por los demandados en favor de **LIBERTY SEGUROS,** de conformidad con el Numeral 12 del Art 784 del C. de co, a los ejecutadas le correspondía plantear excepciones derivadas en contra del NEGOCIO JURIDICO que le **DIO ORIGEN** a la creación del **TITULO**, llámense **INEXISTENCIA, INEFICIACIA DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA O RELATIVA, SIMULACION, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.**

La Sentencia atacada, no tuvo reparo alguno frente al **NEGOCIO CAUSAL,** que dio origen a la firma del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES BASE DE LA EJECUCION**, y por el contrario se confirmó y así quedo probado la existencia del **CONTRATO DE SUMINISTRO, LAS POLIZAS DE SEGUROS, Y LA EXISTENCIA DEL PAGARE**.

Frente a la relación de **LUBRICOMBRAS Y LIBERTY SEGUROS**, no se ha pregonado su inexistencia o ineficacia, nulidad absoluta o relativa, simulación, o cualquier otra situación que afecte su esencia.

El YERRO, del juzgado inicia, cuando pasa por alto, que solo existe un solo **CONTRATO PRINCIPAL DE SUMNISTRO / GARANTIZADO** , y que fue modificado únicamente su vigencia por **SUS OTROS SI (**Confesión del Rte legal de **LUBRICOMBRAS INTERROGATORIO DE PARTE** Minuto 13:26 y ss) que fueron garantizados mediante las pólizas de seguros, expedidas por **LIBERTY SEGUROS S.A.**

Entonces, existió un **SOLO CONTRATO DE SUMINISTRO**, y sus **MODIFICACIONES** a través de **OTROS SI**, tal y como lo confesara el representante legal de **LUBRICOMBRAS**, en el interrogatorio de parte así:

> Minuto 13:26 y ss "…Contratos se renovaron con unos otros si, con diferente póliza por cada otro si" " por cada otro si existía una respectiva póliza"
>
> Minuto 14:29 y ss " …ultima renovación del otro si y expedición póliza 2987963, no se firmaron pagare ni carta de instrucciones"

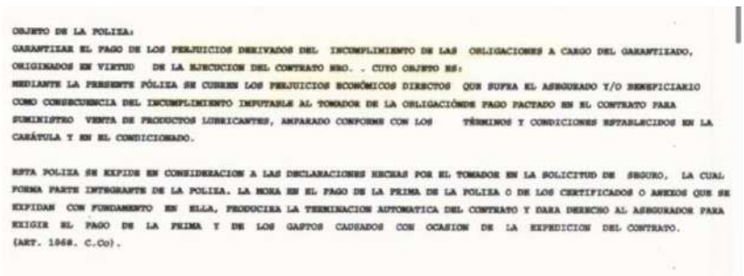
De lo anterior **LA SENTENCIA y LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS**, carecen de sustento al afirmar que se trataron de varios **CONTRATOS DE SUMINISTRO**, ya que, a voces del **REPRESENTANTE LEGAL DE LUBRICOMBRAS,** quien bajo la gravedad del juramento nos contó que existió un **UNICO CONTRATO DE SUMINISTRO,** fechado del 1 de diciembre de 2013, y que los demás fueron **OTROS SI,** y que las pólizas eran simplemente **RENOVACIONES.**

Esta información se encuentra confirmada, con la prueba adosada por la parte **EJECUTADA**, en la contestación de la demanda **(PDF 07 ACTA DE LIQUIDACION),** donde se enumeran la existencia de dos (2) **CONTRATOS PRINCIPALES**, y varios **OTROS SI** suscritos frente a estos.

Hay que relievar **HONORABLES MAGISTRADOS**, que **LIBERTY SEGUROS S.A.,** no hizo parte de la **RELACION NEGOCIAL PRIMIGENIA**, ni sus **OTROS SI,** suscritos entre

PETROBRAS Y LUBRICOMBRAS, sino que **LIBERTY SEGUROS S.A**, llega como **SUBROGATARIO** de **PETROBRAS**, y dentro de la documental aportada para el momento del **SINIESTRO,** por parte de P**ETROBRAS** no se allegaron dichos otros **SI**, y la parte ejecutada que si fue parte de la relación contractual principal y además los suscribió, y aunque era su deber legal de **LEALTAD , PROVIDAD, BUENA FE NEGOCIAL**, no los presenta, y por el contrario en el debate procesal, indujo en **ERROR A LA FUNCIONARIA JUDICIAL**, aduciendo en su contestación que la **CONTRAGARANTIA (PAGARE BASE DE LA EJECUCION),** fue presentada para otros negocios diferentes, tal y como lo afirmara en el Nral 5 de la sustentación de la **EXCEPCION INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURÍDICO FUNDAMENTAL QUE DIERA ORIGEN AL PAGARE:**

Si observamos el **OBJETO DE LA POLIZA DE SEGUROS No. BO. 2707150**, es coincidente con el **OBJETO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS BO. 2836987**, y **BO 2987963,** las tres (3) contienen los mismos amparos, es decir que se tratan de **RENOVACIONES,** que amparaban el mismo contrato de suministro suscrito entre **PETROBRAS (PRODUCTOR) Y COMPRADOR (LUBRICOMBRAS)**



OBJETO DE LA POLIZA:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. . CUYO OBJETO ES:
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE CUBREN LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS DIRECTOS QUE SUFRA EL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR DE LA OBLIGACIÓNDE PAGO PACTADO EN EL CONTRATO PARA SUMINISTRO VENTA DE PRODUCTOS LUBRICANTES, AMPARADO CONFORME CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA Y EN EL CONDICIONADO.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN LA SOLICITUD DE SEGURO, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ART. 1068. C.Co).

Existiendo la unidad en el **OBJETO DE LAS POLIZAS DE SEGUROS**, se tiene que las **POLIZAS DE SEGUROS**, fueron el resultado **DE RENOVACIONES** Y **MODIFICACIONES**, que amparan el mismo **NEGOCIO JURIDICO/ CONTRATO DE SUMINISTRO** firmado entre **PETROBRAS y LUBRICOMBRAS**, que fue renovado por la suscripción de varios **OTRO SI**, y que allí solo fueron modificadas sus vigencias.

Así las cosas, se tiene que la **EXPEDICION DE TODAS LAS POLIZAS DE SEGUROS,** por **LIBERTY SEGUROS**, al tener el **MISMO OBJETO**, son **RENOVACIONES,** que ampliaban simplemente la **VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGUROS Y EL CONTRATO PRINCIPAL DE SUMINISTRO**, y por ende no existen relaciones **JURIDICAS** diferentes, como lo dijo **la SENTENCIA**, y como así se lo hizo hacer creer los **EJECUTADAS**, para evadir el pago del recobro y la **INDEMNIZACION** pagada por **LIBERTY SEGUROS**, en razón del amparo afectado.

No existe discusión en el plenario frente a la existencia y validez del acuerdo de voluntades /**CONTRATO DE SUMINISTRO, Y POLIZAS DE SEGUROS, SUSCRIPCION DEL PAGARE**, el **ERROR DE HECHO Y DERECHO DE LA SENTENCIA**, nace cuando, le quita toda la fuerza **EJECUTIVA AL TITULO VALOR BASE DE LA EJECUCION,** con el simple argumento, que el pagare tiene fecha de elaboración del 10 de Agosto de 2016, y que la póliza de seguros Nro. 2987963, fue expedida en el 22 de Noviembre de 2018, entonces para la **SENTENCIA,** esta disparidad de fechas, hace que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, del que la ejecutada no **TACHO DE FALSO**, y no derribó su fuerza ejecutiva, dentro de la oportunidad de que trata el Artículo 430 del C.G.P., por la no interposición del recurso de **REPOSICION,** en contra del **MANDAMIENTO DE PAGO**, es decir para la **SEÑORA JUEZ**, **EL PAGARE**, perdió su **FUERZA COERCITIVA**, y con este simple argumento, carente de soporte factico y jurídico deniega las pretensiones de la demanda.

Como ya vimos al inicio de este escrito, los elementos generales y particulares del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** fueron perfectamente cumplidos con el **TITULO VALOR BASE DE LA EJECUCION**, y ahora se demostrará que la disparidad de **FECHAS DEL PAGARE,** que hace notar la **SENTENCIA**, no lo hace **CARENTE DE CAUSA, INEXISTENTE, INEJECUTABLE, o QUE PIERDA SU CAPACIDAD EJECUTIVA,** como lo mal entendió la **SENTENCIA**, por las siguientes razones fácticas y jurídicas, que traen el quiebre de la **SENTENCIA**, por los **YERROS DE HECHO Y DERECHO**, que se evidencian.

Ya vimos que las **POLIZAS DE SEGUROS BO. 2707150, BO. 2836987 y BO 2987963,** son **RENOVACIONES**, ya que comparten las tres (3) el mismo **OBJETO** cual es el garantizar el cumplimiento del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, comparten el mismo **TOMADOR: LUBRICOMBRAS**, el mismo **ASEGURADO Y BENEFICIARIO: PETROBRAS,** el mismo **VALOR ASEGURADO $1.000.000.000.oo**, lo único que las difiere una de la otra, es su fecha de expedición y vigencia.

La fecha de expedición de la póliza de seguros BO. 2707150 data del 13 de Septiembre de 2016, y su vigencia está comprendida entre 13 de Septiembre de 2016 hasta 13 de Septiembre de 2017

La fecha de expedición de la póliza de seguros BO. 2836987 data del 13 de Septiembre de 2017, y su vigencia está comprendida entre 13 de Septiembre de 2017 hasta 13 de Septiembre de 2018

La fecha de expedición de la póliza de seguros BO 2987963 data del 22 de Noviembre de 2018, y su vigencia está comprendida entre 13 de Septiembre de 2018 hasta 13 de Septiembre de 2019

Entonces se ve claramente que al coincidir todas el mismo **OBJETO, TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO, VALOR ASEGURADO,** que solo su diferencia es su vigencia, y adicionamos que solo se suscribe un **CONTRATO DE SUMINISTRO**, y sus modificaciones a través de **OTROS SI**, es absolutamente claro que las **POLIZAS DE SEGUROS: BO. 2707150, BO. 2836987 y BO 2987963** son **RENOVACIONES**, entones el primer argumento de la sentencia queda desvirtuado, al decir que se trataban de relaciones contractuales diferentes, por ello la sentencia debe ser revocada.

El PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES, BASE DE LA EJECUCION, tiene fecha de creación del 10 de Agosto de 2016, ninguna de las pólizas BO. 2707150, BO. 2836987, BO 2987963, coinciden con la fecha de la creación del título (10 DE Agosto de 2016), por ende no se puede afirmar que el pagare estaba atado a una de ellas, o afirmar impropiamente que solo garantizaba una póliza de seguros específicamente, ya que esta afirmación va en contravía de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y además **LIBERTY SEGUROS**, exigió la **CONTRAGARANTIA – PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** con el fin de ejercer la acción de recobró, contra los obligados cambiarios, por los pagos de la indemnización como consecuencia de los siniestros, los que se encuentran debidamente soportados, los que se realizaron en favor del **ASEGURADO – PETROBRAS**.

Entonces, descartando la tesis de la sentencia, que baso su teoría en el hecho que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, estaba atado a una póliza de seguros, **(CERRADO)** lo que no es cierto, ya que las **POLIZAS DE SEGUROS BO. 2707150, BO. 2836987, BO 2987963** , fueron expedidas respecto de las **RENOVACIONES**, y las prórrogas

del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, a través de los **OTROS SI**, no existen relaciones contractuales diferentes, sino simplemente modificaciones de su vigencia.

Siguiendo con el estudio del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, se tiene que este no se **ALTERO**, o modificó, como lo mal entiende **LA SENTENCIA**, sino que este se llenó estrictamente a las autorizaciones contenidas en la **CARTA DE INSTRUCCIONES**, como pasara a estudiarse.

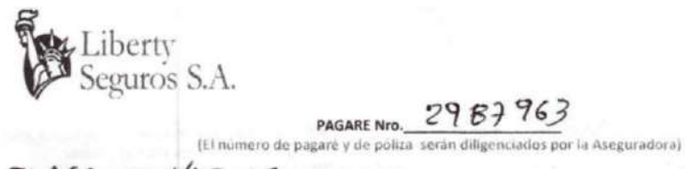
El numeral 4 de la CARTA DE INSTRUCCIONES, señala:

> 4. Espacio destinado a la cantidad adeudada: La cuantía que de antemano tiene mi (nuestra) aceptación, será igual al monto de todas las sumas que al momento de ser diligenciado el pagare le este(mos) adeudando a **LIBERTY SEGUROS S.A.**, identificada con NIT 860.839.988-0 por concepto de la póliza de seguro de cumplimiento Nro. 2987963, tales como el valor de la indemnización pagada como consecuencia de la efectividad de dicha póliza de cumplimiento (incluyendo sus anexos y/o certificados de modificación y/o renovaciones)expedidas por **LIBERTY SEGUROS S.A.**, así como honorarios y gastos de cobranza (judicial y extrajudicial) de las contragarantías otorgadas por el tomador y/o afianzado y los honorarios

En este Numeral, es totalmente claro, donde autoriza llenar el espacio en blanco de **LA CUANTIA**, la que será igual al monto de todas las sumas de dinero al momento de ser diligenciado el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** respecto de la póliza de **CUMPLIMIENTO**, y por tratarse de **UNA CONTRAGARANTIA,** el **NUMERO DE LA POLIZA DE RENOVACION**, estaba en blanco, para que la **COMPAÑÍA DE SEGUROS**, determiné la **POLIZA DE SEGUROS**, que fue afectada como consecuencia del siniestro.

Si como lo dice impropiamente la **SENTENCIA**, que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, como **CONTRAGARANTIA**, estaba atado a una especifica **POLIZA DE SEGUROS**, pues este espació en banco, no tendría razón de ser.

Y la **SENTENCIA** obvio y pasó por alto, la razón porque dentro de **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** en su parte superior se encuentra la leyenda “(El número de pagaré y de la póliza serán diligenciados por la Aseguradora)”


Liberty Seguros S.A.

PAGARE Nro. 2987963

(El número de pagaré y de poliza serán diligenciados por la Aseguradora)

Reitérese que el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES** es una **CONTRAGARANTIA**, exigida por **LIBERTY SEGUROS,** a sus clientes para garantizar las sumas pagadas por esta, por la ocurrencia de siniestro en las **POLIZAS DE CUMPLIMIENTO**, entonces que la fecha sea anterior de la **POLIZA RENOVADA**, no **ALTERA el TITULO**, no lo hace inexigible, **NO AFECTA SU CAUSA,** tal y como lo señala el Art 631 del C. de co.

Obviamente el **TITULO VALOR**, como **CONTRAGARANTIA**, es solicitado por **LIBERTY SEGUROS**, con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, y que no es cierto que **LIBERTY SEGUROS**, tenga la obligación de solicitar una **CONTRAGARANTIA**, por cada una de las **RENOVACIONES DE LAS POLIZAS**, incluso por cada **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO,** pedir la contragarantía está bajo su libertad y autonomía contractual, no existe norma, resolución, circular externa de la Superfinanciera que exija el requisito echado de menos por la **SENTENCIA**, que por cada **RENOVACION DE LA POLIZA**, se exija una contragarantía, y por ello **LIBERTY SEGUROS** exige un **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** para ser diligenciado por todas las sumas que la aseguradora, se vea

obligada a pagar por razón de los siniestros amparados del **TOMADOR,** derivadas por supuesto de **POLIZAS DE CUMPLIMIENTO .**

Es más, la **CONTRAGARANTIA**, está en la voluntad autónoma y personal de **LIBERTY SEGUROS S.A**, de solicitarla o no, en el caso en particular existiendo ya una **CONTRAGARANTIA**, entregada por **EL TOMADOR/ COMPRADOR**, del **CONTRATO DE SUMINISTRO**, para la expedición de la **RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS, NO** era necesaria la petición de otra **CONTRAGARANTIA,** pues como ya se vio la carta de instrucciones autoriza el lleno de la **CUANTIA DEL PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, será el valor adeudado por el **DEUDOR**, por todas las sumas que **LOS DEUDORES**, estén adeudando en favor de **LIBERTY SEGUROS**, para el momento de diligenciar el pagaré, entonces, se ratifica que la **CONTRAGARANTIA/ PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES**, no se encuentra atada a una póliza de seguros en particular.

Por estas razones, la **SENTENCIA DEBERA REVOCARSE**.

ERROR DE HECHO OCURRE CUANDO SE PRETERMITE LA PRUEBA O SE DISTORSIONA PARA DARLE UN SIGNIFICADO QUE NO CONTIENE[4].
ES TOTALMENTE FALSO QUE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LIBERTY SEGUROS EN SU INTERROGATORIO DE PARTE (Archivo 46) HAYA CONFESADO QUE SE LE HAYA EXIGIDO A EXPEDICION DE LA POLIZA DE SEGUROS B02987963 LA FIRMA DE PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES

La Sentencia por inducción del error por parte del apoderado de la ejecutada, a la FALLADORA, que le hace decir impropiamente en la SENTENCIA en la que afirmar que frente a la póliza se había exigido a LUBRICOMPRAS la suscripción del pagare.

A este prueba la SENTENCIA, la distorsionó dándole un significado que no contiene.

No es cierto que la **REPRESENTANTE LEGAL**, haya hecho tal afirmación, como pasara a demostrarse, esto si tenemos que dentro del interrogatorio de parte afirmó:

PREGUNTA EL APODERADO DE LA EJECUTADA:

> 17:54 Si para la expedición de la póliza de cumplimiento para particulares B02987963 con vigencia 9 sept de 2018 al 13 de Septiembre 2019, la sociedad demanda lubricombras suscribió un pagare con carta de instrucciones

LA RESPUESTA DE LA RTE LEGAL DE LIBERTY:

> Minuto 18:21: Efectivamente de suscripción siempre que hacen una póliza esta es una póliza de cumplimiento para particulares siempre tiene pagares y carta instrucciones. **En el caso en particular creo que venían con varias pólizas entonces la compañía está en libertad de pedir las garantías que considere necesarias** (La negrilla es mía)

Afirmación del apoderado donde induce en error a la falladora:

Minuto 18:49 **“Entonces si lo suscribió” ¡¡¡**

[4] **Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-18532018 (11001310303020080014801), May. 29/18.**

Luego la representante de LIBERTY, aclara lo siguiente:

19:35 la compañía esta en potestad, como venían con varias pólizas de pedir las garantías que a bien tengan no le puedo contestar de fechas, no pertenezco al área de suscripción eso ya es a discreción de la compañía tener las pólizas de cumplimiento y los pagares y las cartas de instrucciones
Por lo anterior, y de todo el material probatorio, la SENTENCIA, cuando a demás en tratándose de un título ejecutivo, donde la prueba es netamente documentales, y en este diligenciamiento, la sentencia con la inducción del apoderado de la ejecutada, al descontextualizar una respuesta de la representante legal, hace una afirmación que solo esta en el imaginario del apoderado de la pasiva, que la señora juez dio por cierta, más aún, que ni siquiera se trataba de una pregunta asertiva, y que la representante legal nunca hizo la afirmación con la que se pretende soportar la sentencia censurada.

La afirmación contenida en la Sentencia, fue una indebida interpretación, que no puede derivar la ejecutabilidad del título, la presunción de autenticidad del título, ya que entre otras la representante legal de la ejecutante, informó enfáticamente que ella no pertenecía al área de suscripciones, y sobre todo que era potestad de LIBERTY SEGUROS de solicitar garantías, más aun cuando la ASEGURADORA, ya había expedido pólizas por este mismo negocio, como garantías del contrato de suministro, y es consecuente con que el PAGARE ERA ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIÓN, por la relación comercial que venia de tiempo atrás, de solicitar nuevas contragarantías al mismo TOMADOR, y referido al mismo contrato amparado esto es el de SUMINISTRO.

Ahora bien, aceptar la pobre teoría de la parte pasiva, respecto de la fuerza ejecutiva de un pagare, solicitado como contragarantía, dizque porque, según su imaginario, las compañías de seguros “deben” pedir contragarantías cada vez que expiden pólizas de cumplimiento, es como, exigir a los bancos que por la cesión de los derechos de hipoteca, el deudor deba expedir nuevas contragarantía, ya sean hipotecas o pagares, es echar por la borda, todos los principios de DE LA CREACION, LITERALIDAD, LEGITIMACION, AUTONOMIA, INCORPORACION, INCONDICIONALIDAD, NEGICIABILIDAD, PRESUNCION DE AUTENTICIDAD, todos estos principios fueron desconocidos pro la sentencia, por ello esta debe revocarse, y consecuencialmente, solicito al H. Tribunal se sirva proferir la SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION.

PETICION SENTENCIA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION

Habiéndose derivada la **SENTENCIA DE PRIMERA GRADO,** solicito al **HONORABLE TRIBUNAL**, se sirva proferir **LA SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION**, porque los elementos generales y esenciales del **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** cumple estrictamente, además se demostró que los amparos estaban amparados por **LIBERTY SEGUROS**, que el asegurado demostró la ocurrencia del siniestro su cuantía, que **LIBERTY SEGUROS,** diligenció el **PAGARE ABIERTO CON CARTA DE INSTRUCCIONES,** siguiendo estrictamente estas.

PETICION

Por todas las anteriores consideraciones solicito al **HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA – SALA CIVIL**, se sirva:

1- Revocar en su integridad la Sentencia proferida.
2- Consecuencialmente a dicha determinación solicito en forma respetuosa, se sirva proferir **SENTENCIA DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION.**
3- Se sirva condenar en costas a la parte ejecutada.

Del H TRIBUNAL, atentamente.,

HOSMAN FABRICIO OLARTE MAHECHA
CC. 79´137384 de Bogotá.
Tp.93.148 del C.S.J.

De conformidad con los preceptos del inciso 2 del Artículo 2 de la Ley 2213 de 2022: "… las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales…" en consecuencia no es necesaria de firma alguna.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: SUSTENTA REPAROS - APELACIÓN RAD. 11001310301720210025102

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 15:31

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (1 MB)

SUSTENTA REPAROS - APELACIÓN RAD. 11001310301720210025102.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Carlos R. <carlosrugeles@hotmail.com>
Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 15:27
Para: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; litigios juandevis <litigios.juandevis@devisfraija.com>
Cc: Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUSTENTA REPAROS - APELACIÓN RAD. 11001310301720210025102

Hon. Magistrado Ponente
Dr. GERMAN VALENZUELA VALBUENA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL 19
Bogotá DC

REF. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR.
DTE. OPEN MINERAL COLOMBIA S.A.S.
DDO. VICTOR VEGA ALMONDO.
REC. APELACIÓN – SUSTENTACIÓN.
RAD. 11001310301720210025102.

CARLOS M. RUGELES GONZALEZ, abogado titulado, mayor de edad y capaz, con domicilio y residencia en esta ciudad de Cartagena de Indias (Bol), identificado con la CC. 73.578.722 de Cartagena (Bol.) y TP. 121.243 del H. C.S. de la J., quien recibe notificaciones en el correo electrónico carlosrugeles@hotmail.com, actuando en calidad de apoderado judicial de la parte demandada; el señor **VICTOR VEGA ALMONDO**, por lo que concurro ante Ud muy respetuosamente, dentro del término legal para ello para **SUSTENTAR MIS REPAROS CONCRETOS** relacionados con la **APELACIÓN DE LA SENTENCIA** de Primera Instancia de la siguiente manera:

SE ADJUTA PDF CON EL MEMORIAL COMPLETO.

CARLOS M. RUGELES GONZALEZ
Abogado Asesor y Litigante
Cel. 300-8013141
Cartagena de Indias - Colombia

Hon. Magistrado Ponente
Dr. GERMAN VALENZUELA VALBUENA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL
Bogotá DC

REF. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR.
DTE. OPEN MINERAL COLOMBIA S.A.S.
DDO. VICTOR VEGA ALMONDO.
REC. APELACIÓN – SUSTENTACIÓN.
RAD. 11001310301720210025102.

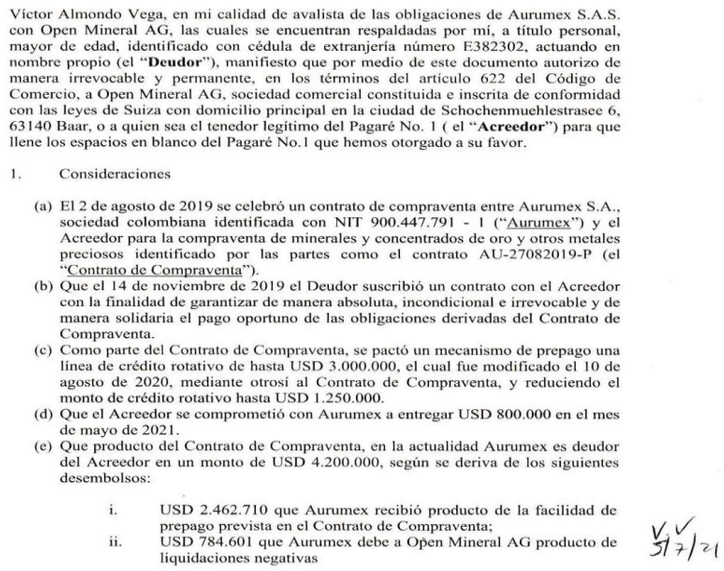
CARLOS M. RUGELES GONZALEZ, abogado titulado, mayor de edad y capaz, con domicilio y residencia en esta ciudad de Cartagena de Indias (Bol), identificado con la CC. 73.578.722 de Cartagena (Bol.) y TP. 121.243 del H. C.S. de la J., quien recibe notificaciones en el correo electrónico carlosrugeles@hotmail.com, actuando en calidad de apoderado judicial de la parte demandada; el señor **VICTOR VEGA ALMONDO**, por lo que concurro ante Ud muy respetuosamente, dentro del término legal para ello para **SUSTENTAR MIS REPAROS CONCRETOS** relacionados con la **APELACIÓN DE LA SENTENCIA** de Primera Instancia de la siguiente manera:

SUSTENTACIÓN APELACIÓN PRIMER REPARO CONCRETO:

INDEBIDA INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN PROBATORIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES CONTENTIVAS EN LA CARTA DE INSTRUCCIONES DEL PAGARE.

Considero que el Aquo se equivoca al desconocer, considerando insuficiente, el claro y evidente incumplimiento *que resultó probado* respecto de las condiciones que contiene la Carta de Instrucciones, del Pagaré.

Es más que claro señores Magistrados que las instrucciones contenidas en la carta de Instrucciones que obra dentro del expediente; y que es la orden para llenar el respectivo Pagaré, no se cumplió de forma deliberada por parte de OPEN MINERAL, y lo anterior está plenamente probado mediante la confesión del representante legal de la sociedad demandante, que el valor correspondiente a los US800.000 dólares que se obligaban a transferir al Sr. VICTOR VEGA y que incluyeron en el valor total del Pagaré nunca fueron transferidos, generando con ello incluso un *"cobro de lo no debido"*, pues claramente en las instrucciones; que están disfrazadas como *"consideraciones"* de la carta se parte de la base que dicho monto efectivamente sería entregado, y por ello esta incorporado al monto de capital de U$4.200.000,oo. ***Img. Literal (d)***.



Víctor Almondo Vega, en mi calidad de avalista de las obligaciones de Aurumex S.A.S. con Open Mineral AG, las cuales se encuentran respaldadas por mí, a título personal, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería número E382302, actuando en nombre propio (el "**Deudor**"), manifiesto que por medio de este documento autorizo de manera irrevocable y permanente, en los términos del artículo 622 del Código de Comercio, a Open Mineral AG, sociedad comercial constituida e inscrita de conformidad con las leyes de Suiza con domicilio principal en la ciudad de Schochenmuehlestrasee 6, 63140 Baar, o a quien sea el tenedor legítimo del Pagaré No. 1 (el "**Acreedor**") para que llene los espacios en blanco del Pagaré No.1 que hemos otorgado a su favor.

1. Consideraciones

(a) El 2 de agosto de 2019 se celebró un contrato de compraventa entre Aurumex S.A., sociedad colombiana identificada con NIT 900.447.791 - 1 ("Aurumex") y el Acreedor para la compraventa de minerales y concentrados de oro y otros metales preciosos identificado por las partes como el contrato AU-27082019-P (el "Contrato de Compraventa").
(b) Que el 14 de noviembre de 2019 el Deudor suscribió un contrato con el Acreedor con la finalidad de garantizar de manera absoluta, incondicional e irrevocable y de manera solidaria el pago oportuno de las obligaciones derivadas del Contrato de Compraventa.
(c) Como parte del Contrato de Compraventa, se pactó un mecanismo de prepago una línea de crédito rotativo de hasta USD 3.000.000, el cual fue modificado el 10 de agosto de 2020, mediante otrosí al Contrato de Compraventa, y reduciendo el monto de crédito rotativo hasta USD 1.250.000.
(d) Que el Acreedor se comprometió con Aurumex a entregar USD 800.000 en el mes de mayo de 2021.
(e) Que producto del Contrato de Compraventa, en la actualidad Aurumex es deudor del Acreedor en un monto de USD 4.200.000, según se deriva de los siguientes desembolsos:

i. USD 2.462.710 que Aurumex recibió producto de la facilidad de prepago prevista en el Contrato de Compraventa;
ii. USD 784.601 que Aurumex debe a Open Mineral AG producto de liquidaciones negativas

VV 5/7/21

Incluso el señor Juez se contradice en su fallo al considerar que el punto a tener en cuenta solo es la Literalidad del título valor, pero a su vez desconoce de manera expresa y contradictoria de la Literalidad de la carta de instrucciones, que dispuso como requisito para el diligenciamiento del pagaré la transferencia de los US800 mil dólares y el hecho de no haberse realizado la misma, no sólo desconoce las instrucciones de dicho pagaré sino que genera; además de los dicho anteriormente, un enriquecimiento sin causa de la parte demandante que está cobrando un valor incluido en el pagaré que no se causó, hecho que incluso el señor Juez da por probado; pues todos los involucrados incluyendo demandante, demandado y testigos afirman que dicho valor no se entregó, más grave aún, que su no entrega fue totalmente deliberada, por lo que es más que claro señores Magistrados que se incumplieron voluntariamente las instrucciones contenidas en dicha Carta de Instrucciones, y que el deudor aquí demandado, fue inducido en error mediante engaños para que aceptara y suscribiera el Pagare que aquí nos ocupa.

El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los *"documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora"*. *A partir de esa definición legal, la doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos valores son la* ***incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía***.

LA INCORPORACIÓN significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título y conforme a la ley de circulación que se predique del título en razón de su naturaleza (al portador, nominativo o a la orden).

En otras palabras, la incorporación es una manifestación de la convención legal, de acuerdo **con la cual existe un vínculo inescindible entre el crédito y el documento constitutivo de título valor**. Esto implica que la transferencia, circulación y exigibilidad de ese derecho de crédito exija, en todos los casos, la tenencia material del documento

que constituye título cambiario. Es por esto que la doctrina especializada sostiene que el derecho de crédito incorporado al título valor tiene naturaleza *cartular*, pues no puede desprenderse del documento correspondiente.

LA LITERALIDAD, en cambio, está relacionada con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado. **Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del título valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones *extracartulares*, que no consten en el cuerpo del mismo**. Esta característica responde a la índole negociable que el ordenamiento jurídico mercantil confiere a los títulos valores.

Así, lo que pretende la normatividad es que esos títulos, en sí mismos considerados, expresen a plenitud el derecho de crédito en ellos incorporados, de forma tal que, en condiciones de seguridad y certeza jurídica, sirvan de instrumentos para transferir tales obligaciones, con absoluta prescindencia de otros documentos o convenciones distintos al título mismo. En consonancia con esta afirmación, el art. 626 del Código de Comercio sostiene que el ***"suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia"***. Ello implica que el contenido de la obligación crediticia corresponde a la delimitación que de la misma haya previsto el título valor que la incorpora.

Esto implica que las características y condiciones del negocio subyacente no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado al título valor. Ello, por supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de que entre el titular del mismo y el deudor puedan alegarse las excepciones personales o derivadas del negocio causal. Empero, esto no conlleva que las consideraciones propias de ese tipo de contratos o convenciones incidan en la literalidad del crédito que contiene el título valor.

A este respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, intérprete judicial autorizado de las normas legales del derecho mercantil, enseña que:

"[l]a literalidad, en particular, determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos del documento, sin que, por regla general, puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surjan. Es de ver, con todo, que por cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su circulación, es obvio que ella está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias."[44]

LA LEGITIMACIÓN es una característica propia del título valor, según la cual el tenedor de este, se encuentra jurídicamente habilitado para exigir, judicial o extrajudicialmente,

el cumplimiento de la obligación crediticia contenida en el documento, conforme a las condiciones de literalidad e incorporación antes descritas.

Por lo tanto, cuando el tenedor exhibe el título valor al deudor cambiario y, además, ha cumplido con la ley de circulación predicable del mismo, queda revestido de todas las facultades destinadas al cobro del derecho de crédito correspondiente.

En consonancia con lo expuesto, la Sala de Casación Civil ha establecido que:

*"…**el poseedor del título, amparado por la apariencia de titularidad que le proporciona la circunstancia de ser su tenedor en debida forma, está facultado, frente a la persona que se obligó a través de la suscripción, para exigirle el cumplimiento de lo debido."*** [45] Apoyada en doctrina especializada sobre ese mismo tópico, esta corporación consideró que ***"la legitimación es la situación en que, con un grado mayor o menor de fuerza el derecho objetivo atribuye a una persona, con cierta verosimilitud, el trato de acreedor y ello no sólo a efectos de prueba, sino de efectiva realización del derecho. La legitimación consiste, pues, en la posibilidad de que se ejercite el derecho por el tenedor, aun cuando no sea en realidad el titular jurídico del derecho conforme a las normas del derecho común; equivale, por consiguiente, a un abandono de cualquier investigación que pudiera realizarse sobre la pertenencia del derecho***."* [46]

Por último, **EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA** versa sobre el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo.

Ello implica *(i)* la posibilidad de transmitir el título a través del mecanismo de endoso; y *(ii)* el carácter autónomo del derecho que recibe el endosatario por parte de ese tenedor. Sobre la materia, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil prevé que:

*"…**en definitiva, las dos notas características y esenciales de los títulos en sus distintas formas son: el título sirve para transferir el crédito incorporado, es decir para hacer adquirir el derecho del* **'tradens'** ***al* 'accipiens'** ***con eficacia respecto a los terceros y particularmente respecto al deudor. En los títulos se sustituye la notificación propia de la cesión ordinaria por la tradición del documento – sola o acompañada del endoso o de la inscripción –, y el título tiene la particular de hacer adquirir al* accipiens *de buena fe el derecho incorporado, aunque no perteneciese al cedente. Este segundo carácter se suele expresar con la fórmula de atribución* "al poseedor de un derecho autónomo frente al emitente"***. En el conflicto de intereses entre el deudor o emitente y el adquirente de buena fe, la ley favorece a este último con base en el principio de derecho: 'quien emite un título forma un aparato que genera la apariencia de su obligación; las exigencias de la circulación determinan que el riesgo de esta conducta pese sobre sus hombros***."* [47]

Para el presente **REPARO** señor Magistrado me detengo en el principio de la Literalidad que en mi concepto el a-quo Interpretó y aplicó de manera Errónea, toda vez que la

Carta de instrucciones hace parte de la literalidad del título porque precisamente son las instrucciones que el deudor le da al acreedor para pueda llenar el pagaré.

En este caso, sucede que parte de las instrucciones fue que el Acreedor debía transferir al deudor la suma de US800 mil dólares los cuales se incluían en el valor del pagaré con lo cual es claro que se viola la disposición del art 626 del C. Comercio y es inexplicable que el a-quo concluya que a pesar que se encuentra probado la inexistencia de esa entrega y/o transferencia de dinero, no encuentra un óbice para ello impida el diligenciamiento del pagaré, sin entrar a estudiar que dicho valor se incluyó en el valor por el cual se llenó el pagaré y de manera equivocada, en mi sentir, interpreta de manera parcial la mencionada carta de instrucciones al considerar que la consignación de dicho valor estaba en la parte considerativa de la carta y no en la instructiva, como si ello no correspondiere a la misma Carta de Instrucciones.

Finalmente, durante las dos audiencias se escuchó, claramente y sin lugar duda alguna, al representante legal de la demandante; OPEN MINERAL SAS, y al testigo BORIS ECKER, como representante legal de OPEN MINERAL AG, afirmar que dicha entrega de dinero, no tenia la intención de ser trasferida, lo cual evidentemente demuestra una actitud de engaño y manipulación con el fin de obtener un resultado, lo que claramente vicia el consentimiento del Sr. VICTOR VEGA, pues fue inducido en Error.

SUSTENTACIÓN APELACIÓN SEGUNDO REPARO CONCRETO:

OBTENCIÓN DEL PAGARE MEDIANTE ERROR Y ENGAÑO QUE LO HACE INEXISTENTE JURÍDICAMENTE.

El a-quo considera que el presente pagaré es autónomo y literal, y le da plena validez a la Carta de Instrucciones, pero lo hace sin tener en cuenta las pruebas aportadas y recavadas, todas las cuales señalan que dicho Pagaré solo se suscribió bajo la promesa engañosa de que se le entregaría la suma de **US800 mil dólares** para continuar con el negocio previo para extracción y venta de oro, y por el contrario no considera como una condición para el cumplimiento de las instrucciones del pagaré, hubiere sido necesario el giro de los **U$800 mil dólares**, lo que es una clara **VÍA DE HECHO**.

Señores Magistrados, como lo evidencié en la sustentación del anterior reparo, que es una complementación del presente, está probado claramente que mi representado fue engañado con la falsa promesa de transferirle US800 mil dólares, para que suscribiera un Pagaré por unos valores que no estaba definidos aún, porque los posibles valores debían resolverse una vez se definiera lo concerniente a las cantidades de oro vendidas y recibidas, porque es claro y así está probado e incluso el mismo Juez lo tienen como tal, que mi cliente le vendió y envío material de oro a la Sociedad OPEN MINERAL por

unos valores que todavía NO se habian liquidado y que NO ascienden a los valores demandados, por lo que no era posible que llenaran el pagaré por el valor que aparece demandado, como si no se le hubiere enviado ningún material.

Ahora, en cuanto a la cantidad de **U$784.601,oo** que afirman que se le debe a **OPEN MINERAL AG** producto de liquidaciones negativas, ello no se encuentra acreditado ni liquidado en parte alguna de este proceso, conforme lo pactado en el contrato de venta y por ende el valor de **U$155.397,oo** de intereses no deben existir como consecuencia, **pues este seria fruto accesorio de la suma principal, la cual como se dijo, no está acreditada**.

Como se observa, no existe una causa legal que de origen a la supuesta deuda de **U$4.200.000,oo** y **U$107.100,oo OTROS CONCEPTOS** por los cuales aparece llenado el pagaré objeto de esta demanda, y que mi cliente alega no deberlos.

Además, los contratos de venta de oro suscritos; aportados el expediente, y reconcidos por OPEN MINERAL, no han sido terminados y/o liquidados por las partes vinculadas, siguen vigentes y no existe Acta de Liquidación suscrita entre ambas partes que origine o determine un saldo final, que se pueda reputar como adeudado al demandante

SUSTENTACIÓN APELACIÓN TERCER REPARO CONCRETO:

DEMOSTRACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO QUE DIO ORIGEN A LA CREACIÓN O TRANSFERENCIA DEL TÍTULO E INCUMPLIMIENTO DEL MISMO COMO REQUISITO NECESARIO PARA LA FIRMA Y EXISTENCIA DEL PAGARE.

Considero que el a-quo se equivoca en su apreciación de que no se probó el negocio jurídico previo o subyacente que dio origen a la creación o transferencia del título valor. Considera el a-quo; a mi parecer de manera equivocada, que no entra a Juzgar si hubo o no contrato, o si hubo o no negocios, porque en su sentir, en principio eso no era el objeto de este proceso, a pesar de que está probado completamente la existencia del mismo; aceptado y reconocido por ambas partes, por lo cual es una apreciación errada.

Sí está probada, incluso con los testimonios rendidos y el interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandante que, entre las aquí partes, **si existió un Negocio Jurídico Subyacente, que se encuentra acreditado documentalmente, que no está tachado de Falso**, que está reconocido por las partes y que no ha sido Liquidado y que fue el origen de la creación del pagaré objeto de esta demanda, suscrito en blanco y que fue llenado contrario a las instrucciones dada por mi cliente. Este contrato es el contrato de venta de Oro **AU 20052019-P.**

Respecto a esta excepción, la Corte Constitucional al recoger varios pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo en la **sentencia T-310 de 2009**, lo siguiente:

El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los "documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora". A partir de esa definición legal, la doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.

La incorporación significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título y conforme a la ley de circulación que se predique del título en razón de su naturaleza (al portador, nominativo o a la orden). En otras palabras, la incorporación es una manifestación de la convención legal, de acuerdo con la cual existe un vínculo inescindible entre el crédito y el documento constitutivo de título valor. Esto implica que la transferencia, circulación y exigibilidad de ese derecho de crédito exija, en todos los casos, la tenencia material del documento que constituye título cambiario. Es por esto que la doctrina especializada sostiene que el derecho de crédito incorporado al título valor tiene naturaleza cartular, pues no puede desprenderse del documento correspondiente.

La literalidad, en cambio, está relacionada con la condición que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado. Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del título valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones extracartulares, que no consten en el cuerpo del mismo.

Esta característica responde a la índole negociable que el ordenamiento jurídico mercantil confiere a los títulos valores. Así, lo que pretende la normatividad es que esos títulos, en sí mismos considerados, expresen a plenitud el derecho de crédito en ellos incorporados, de forma tal que en condiciones de seguridad y certeza jurídica, sirvan de instrumentos para transferir tales obligaciones, con absoluta prescindencia de otros documentos o convenciones distintos al título mismo. En consonancia con esta afirmación, el artículo 626 del Código de Comercio sostiene que el «suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia». Ello implica que el contenido de la obligación crediticia corresponde a la delimitación que de la misma haya previsto el título valor que la incorpora.

Esto implica que las características y condiciones del negocio subyacente no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado al título valor. Ello, por supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de que entre el titular del mismo y el deudor -y solamente entre esas partes, lo que excluye a los demás tenedores de buena fe- puedan alegarse las excepciones personales o derivadas del negocio causal. Empero, esto no conlleva que las consideraciones propias de ese tipo de contratos o convenciones incidan en la literalidad del crédito que contiene el título valor.

A este respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, intérprete judicial autorizado de las normas legales del derecho mercantil, enseña que «[l]a literalidad, en particular, determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos del documento, sin que, por regla general, puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surjan. Es de ver, con todo, que por cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su circulación, es obvio que ella está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias» Los principios anotados tienen incidencia directa en las particularidades propias de los procesos judiciales de ejecución. En efecto, estos procedimientos parten de la

exhibición ante la jurisdicción civil de un título ejecutivo, esto es, la obligación clara, expresa y exigible, contenida en documentos que provengan del deudor o de su causante, y que constituyan plena prueba contra él (Art. 488 C. de P.C.). Por ende, los títulos valores, revestidos de las condiciones de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía, constituyen títulos ejecutivos por antonomasia, en tanto contienen obligaciones cartulares, que en sí mismas consideradas conforman prueba suficiente de la existencia del derecho de crédito y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo. Bajo esta lógica el artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad de la acción cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, para que pueda reclamar el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del vencimiento, los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra, si a ello hubiera lugar. A su vez, habida consideración de las características particulares de los títulos valores, la normatividad mercantil establece un listado taxativo de excepciones que pueda oponer el demandado al ejercicio de la acción cambiaria, contenido en el artículo 784. Para el asunto de la referencia, es importante recabar en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Este mecanismo de defensa del deudor cambiario se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligación, en los términos del artículo 782 del Código de Comercio.

Es evidente que la prosperidad de la excepción fundada en el negocio causal o subyacente tiene efectos directos en la distribución de la carga probatoria en el proceso ejecutivo: si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor. Como se indicó en el fundamento jurídico 15 de esta decisión, los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción".

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, es posible concluir que:

a. En virtud de los principios de autonomía y literalidad que caracterizan los títulos valores, a la luz de los artículos 626 y 627 del Código de Comercio, lo que en ellos se expresa resulta del todo vinculante para el deudor cambiario, quien, luego de imponer su firma en el cartular, debe atender el crédito allí incorporado, en los términos que se plasman en el documento.

b. De forma excepcional, el tenor literal del título valor, con todo y su fuerza vinculante, podría dejarse de lado, para acudir a la realidad del negocio jurídico causal celebrada entre las partes. Precisamente, cuando el título aún no ha circulado y permanece en manos del acreedor inicial, es posible que el

deudor traspase los límites del documento mismo y de su tenor literal, para hacer valer las excepciones derivadas del negocio causal. Dicho de otro modo, en ese preciso evento, la ley comercial autoriza al deudor para que desvele cuál fue el negocio jurídico del que surgió la obligación contenida en el título valor y, una vez probado ello, ataque esa fuente, ya sea demostrando que la deuda no existe, que fue esta contraída en diferentes términos, que su contraparte incumplió primero o de cualquier otro fenómeno que impida la ejecución.

c. Y, además, le corresponde al demandado demostrar fehacientemente el contrato que dio origen a la obligación cambiaria y las razones por las cuales ésta no es exigible, a la luz de lo normado en el artículo 167 del C. G. del P., lo cual se demostró en este proceso.

Señores Magistrados, hago estas acotaciones iniciales para concluir, atendiendo la jurisprudencia que se ha proferido sobre la materia y como quiera que el pagaré que sirvió de base para la ejecución no había circulado y permanecía en manos de su acreedor inicial, era posible que se dejara de lado la literalidad del título, para develar cual fue el negocio jurídico del que surgió la obligación pretendida y determinar si la misma en verdad existió porque a pesar de que se endosó por parte de OPEN MINERAL AG A OPEN MINERAL SAS, es obvio y claro que se trata de la misma sociedad.

Ahora bien, en torno a los aspectos facticos que dieron origen al referido pagaré, es posible tener por probados los siguientes:

i) Que el día **20 de marzo de 2019**, se celebró contrato de venta de Oro **AU 20052019-P** entre las partes que aquí actúan.

ii) Que a través de varias cadenas de correos electrónicos; todas las cuales están aportadas a este expediente, las cuales nunca fueron tachadas como prueba documental, cruzadas con el funcionario encargado de **OPEN MINERAL AG** se evidencia claramente **que esto no se trató un Préstamo y que existía un negocio causal** y le insisten que para poder transferirle los **U$800.000,oo** dólares es necesario que firme el pagaré y la carta de instrucciones en Blanco.

iii) Interrogatorio de parte del representante legal de OPEN MINERAL SAS, JUAN SANCHEZ quien inicialmente al absolver el interrogatorio de parte del señor Juez manifestó; extrañamente, que no conocía de ninguna relación comercial contractual anterior origen del pagaré objeto de la demanda, pero al momento de absolver el interrogatorio del suscrito afirmó que sí conoció al señor JORGE VILLAMIZAR que era el gerente de AURUMEX y que cruzó correos con el señor Jorge Villamizar y con el demandado VÍCTOR VEGA sobre dicho contrato y el desembolso de los US800 mil dólares que se prometieron transferir para firmar dicho pagaré hecho que confiesa que el giro no se dio.

iv) Que la suma de U$4.200.000,oo se trató de justificar a partir de la pregunta que se le hizo sobre si el señor JUAN SANCHEZ intermedió con el señor JORGE VILLAMIZAR para la suscripción del Pagaré con la obligación de girar US800 mil dólares al señor VICTOR VEGA contestó que: Si porque como él trabaja para la empresa OPEN MINERAL AG y que parte de su trabajo era tratar de llegar a una solución amigable con AURUMEX debido a la deuda de U$4.2 millones de dólares y que por lo tanto sus esfuerzos fueron enfocados en eso, lo cual señor magistrado, evidencia además que tanto OPEN MINERAL AG como OPEN MINERAL SAS en realidad son la misma empresa, lo cual también demostró la misma parte al aportar las Actas donde ceden sus acciones.

SUSTENTACIÓN APELACIÓN CUARTO REPARO CONCRETO:

CONTRA LA DECISIÓN DE NO TENER COMO PROBADO LOS PAGOS DE U$1.250.000,oo DÓLARES.

El despacho del a-quo considera de inmediato que los comprobantes correspondientes a las transferencias por los valores antes mencionados, no se aceptan porque no fueron traducidos de conformidad con lo dispuesto en el **art. 251 del C.G.P.**, lo cual considero violatorio del derecho sustancial y probatorio, al no armonizar dichas pruebas; que nuca fueron objetadas y/o tachadas en su momento, con las demás pruebas decretadas y practicadas dentro de este proceso.

Además, señores Magistrados, todas las transferencias que nos ocupan, se aprecia y observan claramente: en los valores, fechas realizadas, beneficiarios y consignatarios, aunado a las diferentes testimonios e interrogatorios rendidos en el proceso. Siendo una prueba numérica, es antitécnico y desproporcionado exigir traducción para ello.

SUSTENTACION APELACION QUINTO REPARO CONCRETO:

INEXISTENCIA DEL ENDOSO POR AUSENCIA DE LA PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD OPEN MINERAL AG, ENDOSANTE DEL TITULO.

Su señoría al negarnos como probada esta excepción, ha invertido la carga de la prueba de la representación legal objeto de controversia, que radica en que el señor **BORIS EYKHER** afirmaba actuar en representación de la sociedad **OPEN MINERAL AG** pero nunca acreditó tal calidad, ni la capacidad jurídica para hacer el mencionado endoso, lo que hace al mismo inexistente.

Por lo tanto, esta es una negación indefinida que no requiere prueba de mi parte y por el contrario si es un requisito *sine qua non* de la parte demandante, que debió acreditarlo y que no hizo procesalmente, ya que el a-quo tampoco se refirió a la existencia de la persona jurídica extranjera **OPEN MINERAL AG**.

Afirma el señor Juez sobre este punto que la declaración del Testigo confirmó que el señor BORIS EYKHER Sí tenía las facultades para el endoso, sin que se acreditara la obligación como tal que obliga la norma que transcribo a continuación:

En efecto el **artículo 663 del Código de Comercio** que a su letra dice:

> ***"…cuando el endosante de un título obre en calidad de representante, mandatario u otro similar, deberá acreditar tal calidad…"***

En el caso que examinamos tenemos que el señor **BORIS EYKHER** afirmó actuar en representación de la sociedad **OPEN MINERAL AG** pero ni acreditó tal calidad ni la capacidad jurídica para hacer el mencionado endoso, lo que hace al mismo inexistente.

Por otra parte, el **artículo 58 del Código General del Proceso** nos indica cómo deben representarse las entidades extranjeras y Organismos no gubernamentales sin ánimo de lucro, es decir cómo deben comparecer al proceso y por conducto de quién.

Así vemos que la representación de Sociedades Extranjeras con negocios permanentes en Colombia se regirá por las normas del código de comercio y las demás personas jurídicas que tengan domicilio en el exterior y deseen desarrollar su objeto social en Colombia o establezcan negocios en nuestro país **deberán constituir apoderados con capacidad para representarlos judicialmente** y para ello deben protocolizar en una Notaría la prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del poder correspondiente, el cual se deberá registrar en la Cámara de Comercio.

Y las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia estarán representadas por el apoderado que constituyan con las formalidades previstas en el C.G.P. hecho que no fueron acreditados en este proceso y es claro que la Ley le impone dicha carga a la persona que quiere acreditar ese hecho, por ninguna manera se invierte la misma a la parte contraria como erradamente, en mi concepto lo decidió el a-quo para negar probada esta excepción.

Por otra parte, honorable magistrado, no es menos sospechoso, como lo manifesté en la excepciones perentorias propuestas, el que aquí se haya Endosado en Propiedad este Pagaré a una sociedad creada con tan solo 20 días de anterioridad a dicho endoso, y que además denominaron de la misma manera que la sociedad Endosante **OPEN MINERAL COLOMBIA S.A.S.** y lo más sospechoso; **con un Capital Autorizado de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000,oo) SUSCRITO de Un Millón de**

pesos ($1.000.000,oo) y PAGADO DE CERO PESOS. Por supuesto, de esta forma el capital Autorizado no genera ningún tipo de costo y/o tasa en la constitución en Cámara de Comercio.

Claramente aquí se está instrumentalizando la figura societario de las SAS colombiana para facilitar la presentación de esta demanda ejecutiva con desconocimiento de los presupuestos del negocio causal que dio origen el Pagare, que aquí se usa de forma irregular y ventajosa por parte del demandante, más aún con la confesión del señor JUAN SANCHEZ cuando manifestó que OPEN MINERAL AG se convirtió en accionista de OPEN MINERAL SAS con el aporte del valor correspondiente al pagaré y que posteriormente se le devolvió el mismo, lo cual es evidente una simulación. Esto, debería analizarse con detalle, pues es evidente que se esta induciendo en error a la rama judicial.

SUSTENTACIÓN APELACIÓN SEXTO REPARO CONCRETO:

AUSENCIA TOTAL DE LA JURISDICCIÓN DE LA JUSTICIA COLOMBIANA.

Considero que yerra su señoría al considerar que, si es Competente para conocer de este proceso al interpretar de manera equívoca que por estipularse unos artículos del código de comercio en el pagaré, sí sería competente, sin hacer una valoración de lo expresamente pactado por las partes de darle validez a la cláusula de Jurisdicción de la Corte Arbitral de Londres, lo cual incluso genera una Causal de Nulidad funcional Insanable. Así en este caso tenemos que esta demanda se inicia por el cobro de un Pagaré llenado con una carta de instrucciones que no reúne los requisitos legales y que tiene un negocio jurídico de compraventa de oro que dio origen a la creación de dicho título, hecho que está probado en este proceso con los documentos aportados y las declaraciones e Interrogatorios rendidos, contrato celebrado entre dos (2) personas extranjeras; **OPEN MINERAL AG (suiza)** y **AURUMEX LLC** y **VICTOR VEGA** , todos extranjeros, en el cual se pactó en la cláusula o artículo **21 de LEY APLICABLE Y ARBITRAJE**, exactamente en el sub numeral **21.1.** del contrato que se anexa que:

> "**21.1.** El contrato y su interpretación, validez, ejecución y cualquier obligación no contractual relacionada con el mismo se regirá por la ley inglesa."

Por lo que cualquier clase de disputa que surge con respecto al presente contrato y/o interpretación, validez o ejecución deberá ser resuelta definitivamente bajo las reglas del arbitraje de la **London Court Of International Arbitration (LCIA)**. La Corte será conformada por tres árbitros y cada parte tendrá el derecho de nombrar uno; el tercer árbitro será nombrado por la LCIA. El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje será la ciudad de Londres Inglaterra. El idioma del arbitraje será el inglés. Todo lo cual esta reglado en los sub numerales **21.3.** y **21.2.** de la misma clausula **21**.

Como se observa, la Jurisdicción colombiana se encuentra de manera expresa excluida para conocer de este litigio ya que las partes definieron expresamente que las disputas con relación a la Interpretación, validez o **EJECUCION** del mismo sería resuelta por el tribunal de Arbitraje que ellos escogieron, que es el LCIA de Londres y la legislación aplicable seria la Inglesa, excluyéndose por lo tanto la Jurisdicción Colombiana y no puede aceptarse la excusa que hace el a-quo de que el título valor establece unas normas del código de Comercio colombiano como justificación para determinar que sí es el competente, aupándose, en mi concepto, facultades que no tiene para conocer de este litigio.

De esta manera dejo **SUSTENTADOS** todos los reparos concretos expuestos en la Apelación de la Sentencia de Primera Instancia, solicitado a este Tribunal se sirva REVOCAR en todas sus partes la mencionada Sentencia y se declaren Probadas las Excepciones Perentorias formuladas condenando en costas a la parte demandante en ambas instancias.

De los señores Magistrados, atentamente.



CARLOS M. RUGELES GONZALEZ
CC.#73.578.722
TP.# 121.243 HCS de la J
carlosrugeles@hotmail.com

REPARTO QUEJA 020-2010-00469-04 DR OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 14/09/2023 12:05

Para:**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**;Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (483 KB)

F11001310302020100046904Caratula20230914120251.pdf; 7979.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

Rama Judicial
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO
ASIGNACION POR CONOCIMIENTO PREVIO

11001310302020100046904

FECHA DE IMPRESION 14/09/2023 PAGINA 1

GRUPO **RECURSOS DE OUEJA**

REPARTIDO AL MAGISTRADO	DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA	011	7979	14/09/2023

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	PARTE
210673811	CONSTANZA EUGENIA AVILA TRIANA	DEMANDANTE
192551061	JORGE LUIS ROPERO GUERRERO	DEMANDADO

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
PRESIDENTE

Elaboró: dlopezr
BOG305SR

11001310302020100046904

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA**

Procedencia : 020 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310302020100046904
Instancia : Segunda Instancia
Clase de Juicio : Divisorios
Recurso : Queja
Grupo : 32
Repartido_Abonado : ABONADO
Demandante : CONSTANZA EUGENIA AVILA TRIANA
Demandado : JORGE LUIS ROPERO GUERRERO
Fecha de reparto : 14/09/2023

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 47 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j47cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 9:41
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO DE QUEJA PROCESO 20-2010-00469

Señor
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO IVISORIO
RADICACION: No. 11001 31 03 0 20 **2010 00469** 00

Por medio del presente se envía el link del proceso citado en la referencia y el oficio de remisión, con su respectiva constancia, a fin de surtir recurso de **QUEJA.**

De igual forma se adjunta el formato del índice electrónico de acuerdo a los protocolos de digitalización, todo lo anterior en el siguiente link: 11001310302020100046900

Atentamente,

Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá
Carrera 9 No. 11-45 Piso 6º Edificio Virrey Torre Central

Las notificaciones por correo electrónico son realizadas de conformidad con la el Articulo 197 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Artículo 612 del Código General del Proceso; a saber: las entidades Públicas de todos los niveles, las Privadas que cumplan Funciones Públicas y el Ministerio Público, (o directamente a las personas naturales según el caso) deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

ANGARITA ASOCIADOS S.A.
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES.
NIT. 830.088.114 D.V.0

324

SEÑOR JUEZ 49 CIVIL DEL CIRCUITO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. y
H. TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL DE BOGOTA D.C.
E.S.D.

Asunto: SUSTENTACION RECURSO DE APELACION
Accionante: ASCENSION MONROY DE FORERO
Accionado; COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A
Radicado No ORIGUEN 21 -2009-581

DORY MALLERLY TORRES YARA en calidad de apoderada judicial de la demandante dentro de la acción de la referencia me permito presentar la sustentación del recurso de apelación impetrado por la actora ante la sentencia denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

El juzgador de esta instancia fundamento jurídicamente la decisión de denegar las pretensiones y condenar en costas a la demandante con sustento factico en una avizorada nulidad de la cláusula octava del contrato de arriendo objeto de esta discusión que, aunque no fue alegada por las partes en ninguna instancia, él podría decretar de oficio en un principio, mas sin embargo con fundamento en la Sentencia C-345/17 no sería posible pues, el que el contrato de arriendo contenga la firma y/o aceptación de las dos partes asienta su intención y conformidad de lo pactado, así las cosas no tuvo en cuenta ninguno de los argumentos y declaro el fracaso de la acción, liberando al demandado de cancelar la totalidad del contrato, los daños y perjuicios ocasionados y la cláusula penal pactada por su incumplimiento.

El anterior reparo es concreto para acudir a la valoración de segunda instancia habida cuenta que la estimación de las pruebas que indico el juzgador para tomar esta decisión, no fue apreciada de manera correcta, si bien es cierto la demandante aporto como prueba a la presente acción, la comunicación de 18 de febrero de 2008 en la cual la demandada daba por terminado el contrato, este se hizo con la intención de demostrar que la demandada la hizo DESPUES de que

había retirado los insumos instalados en la terraza de mi mandante, los cuales fueron retirados poco a poco, en donde también se aportó una planilla, con las firmas de las varias visitas que hicieron los técnicos de COMCEL S.A. con excusas diferentes de reparaciones y mantenimientos que debían hacer estos a los materiales que constituían las antenas y nunca con la intensión de terminar el contrato, estos insumos nunca se retiraron con la intención de desmontar toda la instalación, y terminar el contrato, porque si hubiese sido así mi mandante no lo hubiera permitido hasta no estar de acuerdo con la demandada, mas sin embargo permitió las varias entradas de los técnicos porque en su ingenuidad creía que estaban haciendo mantenimiento, controles y reparaciones a las antenas, no obstante se encontró con la gran sorpresa que la demandada unilateralmente le termino el contrato y esta comunicación de fecha 18 de febrero de 2008 nunca llego a sus manos hasta que en derecho de petición enviado el 21 de julio de 2008 a la demandada solicitando una explicación de lo sucedido y la solicitud de cancelar la totalidad del contrato por incumplimiento así como la cláusula penal, esta misma contesto manifestando que habían enviado esta carta, más si embargo no tiene firma de recibido de ninguna persona, porque nadie la recibió, esa carta nunca fue enviada, no fue aceptada, no hay correo certificado que lo demuestre tampoco, es evidente que la crearon mucho tiempo después para poder aportar a la contestación del derecho de petición invocado por mi mandante el cual se negaron a contestar y fue mucho tiempo después de haberlo solicitado que dieron explicación alguna. En tal razón, hay una indebida valoración de esta prueba porque la obtención de la misma se realizó mucho tiempo después, solicitando una explicación de la terminación del contrato y no como lo hizo ver el juzgador de primera instancia el cual adujo que en interrogatorio de parte realizado a mi mandante ella admitió el conocimiento de la carta, es irrebatible que lo conoce porque se enteró del mismo en la respuesta al derecho de petición, no porque la hubiese recibido alguna vez, claramente hay un mal obrar de la demandada, hay mala fe, su intención siempre fue terminar el contrato con maniobras fraudulentas sin el consentimiento de mi mandante.

De los daños ocasionados a mi mandante se probó que por esta terminación unilateral, se inició proceso ejecutivo en contra de la Señora ASCENCION MONROY

325

DE FORERO, el cual también se aportó al expediente, habida cuente que ella realizo un préstamo para poder adecuar la terraza a fin de cumplir con las exigencias de la demandada y poder firmar el contrato de arriendo, préstamo el cual cancelaba con el canon de arrendamiento que percibía de COMCEL S.A., el mismo que no pudo volver a pagar por la cancelación unilateral del contrato; a este argumento se le alego al juez que tuviera en cuenta el artículo 2003 del código civil, colombiano: *"Cuando por culpa del arrendatario se pone término al arrendamiento, será el arrendatario obligado a la indemnización de perjuicios, y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta el día en que desahuciando hubiera podido hacer cesar el arriendo, o en que el arriendo hubiera terminado sin desahucio.*

Podrá, con todo, eximirse de este pago proponiendo, bajo su responsabilidad, persona idónea que le sustituya por el tiempo que falte, y prestando, al efecto, fianza u otra seguridad competente."

Lastimosamente es aquí cuando el juzgador manifiesta que no es posible que se declare una nulidad en la cláusula 8 del contrato por contravenir una afectación patrimonial y solo ser exigible para una de las partes, no compromete a las dos, más sin embargo los vicios de consentimiento (fuerza, error y dolo) presentan una dificultad para ser declarados de oficio. Ellos afectan el fuero interno del sujeto y, en esa medida, tiene sentido que los que puedan alegarlos sean quienes tienen o tuvieron la voluntad viciada.

En tal razón al no poder decretar la nulidad oficiosamente deniega las pretensiones de la actora sin menos cabos. El juzgador enfoca su decisión sin tener en cuenta la conducción del proceso, es evidente que ninguna de las partes alego la nulidad de la cláusula porque estuvieron de acuerdo en pactarla, por ende el juzgador no podría fallar en un sentido contraventor, debía fallar aplicando la realidad y la primacía de la voluntad de las partes, claramente estas ratificaron la existencia de la misma, lo que se alega aquí, es el incumplimiento de ella, pues no es de interés declararla nula sino probar que termino unilateralmente en principio, pero no como se pactó en la cláusula 8 del contrato, esto es cumplimento los parámetros o la condición de realizar previo aviso a mi mandante, esto NUNCA SE HIZO, este aviso

se debía realizar con 30 días de antelación a la terminación del contrato, si el objeto del contrato era de alquilar la terraza de mi mandante para colocar las antenas de COMCEL S.A., pues al no estar las antenas instaladas, no habría objeto, el contrato se habría terminado, por ende la comunicación se tenía que haber realizado con anterioridad a la alzada de las antenas, simplemente tomaron la decisión de retirar todos los insumos colocados para la ejecución del contrato en la casa de mi mandante y no volvieron nunca más, su comunicación de terminación NUNCA llego, no se probó que la hubiesen enviado y que alguien la hubiese recibido, desde ahí es que comienza este conflicto.

Por lo anteriormente expuesto es que ruego a su H. tribunal superior que revoque la sentencia dictada por el juzgador de primera instancia el juzgado 49 civil del circuito de Bogotá D.C. y en consecuencia condene a la demandada a la indemnización de perjuicios alegada, esto es declarando el incumplimiento del contrato por no cumplirse los presupuestos aceptados en el contrato de arriendo celebrado entre las partes, para terminarlo unilateralmente.

De Usted,

DORY MALLERLY TORRES YARA

C.C. 1024501223 DE BOGOTA D.C.
T.P. 309472 DEL C. S. DE LA J.
TEL: 3154770803
E-MAIL: angaritaasociados@gmail.com
DIRECCION: CARRERA 8 No. 19-08 oficina 301

326 462 165 165

SUSTENTACION RECURSO APELACION

Jose Hernando Angarita Berdugo <angaritaasociados@gmail.com>

Lun 19/10/2020 11:12 AM

Para: Juzgado 49 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <j49cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (370 KB)

SUSTENTACION RECURSO APELACION A. MONROY.pdf;

REFERENCIA: 2009-581
DEMANDANTE: ASCENSIÓN MONROY DE FORERO
DEMANDADA: COMCEL S.A.

Buenas tardes, por medio del presente, actuando en nombre de apoderada judicial de la demandadnte en el proceso de la referencia, allego a su despacho sustentación del recurso de apelación impetrado por la actora el 14 de octubre de 2020 ante la sentencia dictada en audiencia. Termino otorgado por el Despacho. Agradezco su atención.

De Usted,

DORY MALLERLY TORRES YARA
C.C. 1024501223 DE BOGOTA D.C.
T.P. 309472 DEL C. S. DE LA J.
TEL. 3154770803

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA RV: REFERENCIA: EJECUTIVO DEMANDANTE: ALBERTO OCHOA MARULANDA DEMANDADO: IVAN RAMIRO MARTÍNEZ PAYAN RADICADO: 11001310302320190027101 ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN.

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 07/09/2023 14:44

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (1 MB)
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN EJECUTIVO IVAN MARTINEZ-2.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Oscar Aldana <oe.aldana10@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 14:38
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; secsctribsup@cendoj.ramajudicial.gov.co <secsctribsup@cendoj.ramajudicial.gov.co>; JARABITAR@HOTMAIL.COM <JARABITAR@HOTMAIL.COM>; alberto@microm.com.co <alberto@microm.com.co>
Asunto: REFERENCIA: EJECUTIVO DEMANDANTE: ALBERTO OCHOA MARULANDA DEMANDADO: IVAN RAMIRO MARTÍNEZ PAYAN RADICADO: 11001310302320190027101 ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN.

BOGOTÁ D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
SEÑORES: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C. SALA SEXTA DE DECISIÓN CIVIL
E. S. D.
REFERENCIA: EJECUTIVO
DEMANDANTE: ALBERTO OCHOA MARULANDA
DEMANDADO: IVAN RAMIRO MARTÍNEZ PAYAN
RADICADO: 11001310302320190027101
ASUNTO: SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN.

OSCAR EDUARDO ALDANA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.493.693 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 367.092 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la parte demandada, por medio del presente escrito, procedo a SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto el 24 de

julio de 2023 contra la sentencia de primera instancia proferida al interior del proceso de la referencia, de conformidad con el documento adjunto.

Cordialmente,

Oscar Eduardo Aldana G.

BOGOTÁ D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SEÑORES:
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
SALA SEXTA DE DECISIÓN CIVIL
E. S. D.

REFERENCIA:	EJECUTIVO
DEMANDANTE:	ALBERTO OCHOA MARULANDA
DEMANDADO:	IVAN RAMIRO MARTÍNEZ PAYAN
RADICADO:	11001310302320190027101
ASUNTO:	SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN.

OSCAR EDUARDO ALDANA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.493.693 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 367.092 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la parte demandada, por medio del presente escrito, procedo a **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto el 24 de julio de 2023 contra la sentencia de primera instancia proferida al interior del proceso de la referencia, con los siguientes fundamentos:

1. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD

La Ley 2213 en su artículo 12 indica en relación con la apelación de sentencias, lo siguiente:

> *ARTÍCULO 12. APELACIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIA. El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia se tramitará así:*
>
> *(…)*
>
> *Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado.*

Ahora bien, teniendo en cuenta que el auto que admitió el recurso de apelación fue notificado por estado el 31 de agosto de 2023, el auto quedó ejecutoriado el día (05) de septiembre de 2023 por lo que los cinco (05) días que trata el artículo antes citado para sustentar el recurso presentado se contabilizan desde el 06 de septiembre de 2023 hasta el 12 de septiembre siguiente. Por lo tanto, el presente escrito se radica dentro de la oportunidad correspondiente.

2. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El día 14 de julio de 2023 mediante auto notificado por estado el 19 de julio de 2023, el JUZGADO VEINTITRÉS (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. profirió sentencia mediante la cual resolvió lo siguiente:

*"**PRIMERO:** Declarar frustráneos los medios exceptivos propuestas por el ejecutado en esta causa.*

***SEGUNDO: ORDENAR** seguir adelante la ejecución en la forma y términos indicados en el mandamiento de pago.*

***TERCERO: AVALUAR** y posteriormente rematar los bienes acá embargados y secuestrados y de aquellos que en el futuro fueren objeto de dichas medidas.*

***CUARTO: PRACTICAR** la liquidación del crédito, en la forma y términos señalados por el artículo 446 del C.G.P.*

***QUINTO: CONDENAR** en costas al ejecutado, las que serán liquidadas en su oportunidad por la secretaría, incluyendo $19'000.000M.Cte., como agencias en derecho, según lo prevé el artículo 366 ibídem. (...)"*

Teniendo en cuenta las excepciones propuestas por el aquí demandado de inexistencia de un contrato de mutuo e inexistencia del título ejecutivo, mala fe en el diligenciamiento del pagaré respecto a la existencia de carta de instrucciones, cobro de lo no debido en razón a transacciones posteriores a la fecha de vencimiento del pagaré ocasionando un enriquecimiento sin causa, dación en pago, anatocismo y nulidad del pagaré por objeto ilícito por configurarse el delito de usura, que fueron sustentadas en todas y cada una de las etapas procesales del presente proceso, se hace necesario resaltar que estas debían prosperar en la medida de que los argumentos utilizados para sustentar tales medios exceptivos eran lo suficientemente válidos para que el Juez de primera instancia los tuviera como probados.

Por lo anteriormente expuesto, considera este extremo que existieron distintos errores de hecho y derecho que deben ser revisados por el superior jerárquico, para que la decisión que se adopte dentro del proceso de la referencia esté ajustada al fundamento legal y probatorio.

Contra las decisiones tomadas por el Despacho y descritas anteriormente, este extremo presentó recurso de apelación el día 24 de julio de 2023, el cual fue concedido en efecto devolutivo mediante auto notificado por estado el 04 de agosto de 2023; en el cual se manifestó que el Juez de primera instancia efectuó una indebida interpretación de las excepciones de mérito presentadas por la parte ejecutada; de igual manera, se considera que no valoró las pruebas allegadas al expediente o bien no las valoró en debida forma y en forma integral.

Lo anterior conlleva a que las conclusiones a las que llegó el a quo sean erradas respecto al debate propuesto por el accionado puesto que si bien las pruebas son relacionadas en la sentencia, es claro que soslaya aspectos sustanciales de las relaciones obligacionales de las partes, que se demuestran tanto en los documentos como en los testimonios aportados y que dan fe del desarrollo del negocio jurídico causal por el cual se firmó el pagaré base de ejecución, se demuestra la violación de la carta de instrucciones para el diligenciamiento del pagaré y la indebida valoración probatoria respecto al cobro de lo no debido.

Los anteriores aspectos serán desarrollados en los acápites subsecuentes con el fin de sustentar los mismos, así:

2.1. DE LA IMPORTANCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO CAUSAL QUE DIO ORIGEN AL PAGARÉ.

El Despacho consideró en el auto de fecha 14 de julio de 2023 notificado por estado el 19 de julio de 2023 mediante el cual ordenó seguir adelante con la ejecución que:

> *"En tal virtud, debemos acotar que en este caso no estamos ante un proceso ordinario para demostrar la existencia o no de un contrato de inversión u otro contrato verbal presumiblemente acordado entre las partes trenzadas en esta acción ejecutiva y en tal virtud, la discusión sobre la que debemos centrarnos recae sobre la existencia, validez y eficacia del pagaré traído a recaudo, si este cumple con los requisitos para ser cobrado judicialmente de cara a las previsiones del artículo 422 del código General del Proceso y en especial, si cumple con los requisitos dispuestos en nuestra codificación mercantil según sea el caso."*

Al respecto, se hace necesario mencionar que en el proceso de la referencia nunca fue propuesto por este extremo que el presente proceso se desarrollará mediante un proceso declarativo sino que se hizo uso de las excepciones señaladas en el artículo 784 del Código de Comercio, dentro las cuales se encuentran las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio; así mismo, es importante señalar que para el diligenciamiento del pagaré, conforme a la carta de instrucciones, debe mediar incumplimiento del negocio comercial celebrado por las partes (el cual no es otro que el proyecto de inversión).

Ahora bien, sobre la procedencia de la interposición de las excepciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia de un título valor, la Corte Constitucional[1], reseñando pronunciamientos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al respectó, esbozó los lineamientos de su prosperidad y carga probatoria en los siguientes términos:

> *"La incorporación significa que el título valor incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título y conforme a la ley de circulación que se predique del título en razón de su naturaleza (al portador, nominativo o a la orden). En otras palabras, la incorporación es una manifestación de la convención legal, de acuerdo con la cual existe un vínculo inescindible entre el crédito y el documento constitutivo de título valor. Esto implica que la transferencia, circulación y exigibilidad de ese derecho de crédito exija, en todos los casos, la tenencia material del documento que constituye título cambiario. Es por esto por lo que la doctrina especializada sostiene que el derecho de crédito incorporado al título valor tiene naturaleza cartular, pues no puede desprenderse del documento correspondiente. La literalidad, en cambio, está relacionada con la condición de que tiene el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él incorporado. Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el contenido crediticio del título valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones extracartulares, que no consten en el cuerpo del mismo. Esta característica responde a la índole negociable que el ordenamiento jurídico mercantil confiere a los títulos valores. Así, lo que pretende la normatividad es que esos títulos, en sí mismos considerados, expresen a plenitud el derecho de crédito en ellos incorporados, de forma tal que, en condiciones de seguridad y certeza jurídica, sirvan de instrumentos para transferir tales obligaciones, con absoluta prescindencia de otros documentos o convenciones distintos al título mismo. En consonancia con esta afirmación, el artículo 626 del Código de Comercio sostiene que el "suscriptor de un título quedará obligado*

[1] Corte Constitucional. Sentencia T-310 de 2009. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia". Ello implica que el contenido de la obligación crediticia corresponde a la delimitación que de la misma haya previsto el título valor que la incorpora."

De igual manera, dicha Corporación[2] sostuvo que, cuando el deudor formule una excepción personal derivada de las condiciones del acto jurídico subyacente -defensa que solo es dable enervar contra el tenedor primigenio-, aquel corre con la ineludible carga de acreditar suficientemente los términos de la negociación, y su vinculación al título, so pena de que haya que acogerse a su tenor literal, así:

"…las características y condiciones del negocio subyacente no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado al título valor. Ello, por supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de que entre el titular del mismo y el deudor –y solamente entre esas partes, lo que excluye a los demás tenedores de buena fe– puedan alegarse las excepciones personales o derivadas del negocio causal.

Empero, esto no conlleva que las consideraciones propias de ese tipo de contratos o convenciones incidan en la literalidad del crédito que contiene el título valor. A este respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, intérprete judicial autorizado de las normas legales del derecho mercantil, enseña que "[l]a literalidad, en particular, determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos del documento, sin que, por regla general, puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surjan. Es de ver, con todo, que por cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su circulación, es obvio que ella está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias."

Por ende, los títulos valores, revestidos de las condiciones de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía, constituyen títulos ejecutivos por antonomasia, en tanto contienen obligaciones cartulares, que en sí mismas consideradas conforman prueba suficiente de la existencia del derecho de crédito y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo.

Bajo esta lógica el artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad de la acción cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, para que pueda reclamar el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del vencimiento, los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra, si a ello hubiera lugar. A su vez, habida consideración de las características particulares de los títulos valores, la normatividad mercantil establece un listado taxativo de excepciones que pueda oponer el demandado al ejercicio de la acción cambiaria, contenido en el artículo 784 ejusdem.

Para el asunto de la referencia, es importante recabar en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Este mecanismo de defensa del deudor cambiario se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligación, en los términos del artículo 782 del Código de Comercio.

Es evidente que la prosperidad de la excepción fundada en el negocio causal o subyacente tiene efectos directos en la distribución de la carga probatoria en el proceso ejecutivo: si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el

[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de abril de 1993.

estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor."

En ese sentido, al haber sido propuesta tal excepción por parte del extremo demandado, debió el Juez de primera instancia descender al negocio jurídico causal para así determinar si se reúnen los requisitos de exigibilidad del título ejecutivo, puesto que el pagaré se dio en garantía del negocio que las partes del proceso celebraron el 04 de noviembre de 2016, negocio que se ha desarrollado y sobre el cual no existe incumplimiento por parte del ejecutado, REQUISITO SIN EL CUAL NO ES POSIBLE DILIGENCIAR LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGAR; sin embargo, tal autoridad se negó a estudiar a fondo la excepción por considerar que correspondía a una actuación de un proceso declarativo, negando la posibilidad de estudiar todas las pruebas que conducen fehacientemente a demostrar que no se encuentra debidamente probada la literalidad, incorporación y autonomía del título valor y sólo manifestó que contaba con los requisitos propios para hacer ejecutable este último, así:

(...) aun, si en gracia de discusión lo analizamos desde la arista que plantea el ejecutado, al decir que el pagaré no fue creado como contrato de mutuo, sino como garantía de un contrato verbal de inversión, cuya existencia, sea dicho de paso, se encuentra en tela de juicio por lo discurrido por el juzgado 3 civil del circuito de Bogotá en sentencia emitida en junio 14 de 2023 dentro del proceso 11001310300320190057700, mírese que no pone en duda siquiera el ejecutado, que en efecto emitió y suscribió el pagaré 002, el que se constituye como un título valor, al cumplir los requisitos generales del artículo 621 del código de Comercio (...)

En el caso que nos apropia, se observa que el extremo demandado propuso la excepción de mérito de conformidad a lo establecido en el artículo 784 del Código de Comercio el cual indica lo siguiente:

ARTÍCULO 784. EXCEPCIONES DE LA ACCIÓN CAMBIARIA. *Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones:*

12) *Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa.*

No obstante, la anterior ley no fue tenida en cuenta al momento de valorar las excepciones propuestas y las pruebas presentadas, ley que es fundamental en el caso que nos ocupa ya que es necesario remontarse al negocio jurídico causal que dio lugar a la suscripción del pagaré.

De conformidad con la excepción propuesta, es claro que el pagaré firmado por Iván Martínez Payan no corresponde a una deuda de este con Alberto Ochoa Marulanda, sino que garantiza unas sumas de dineros a este último respecto al contrato de inversión que verbalmente tenían las partes y en este sentido lo cobrado por la parte demandante, a través de ese título valor constituye una agresión hacia mi poderdante, configurándose mala fe y en todo sentido siendo cobrado sin las facultades que hubiesen sido legales y válidas para tal actuación generan una condición malintencionada y no ajustada a derecho.

El pagaré 002 constituye una garantía del dinero que Alberto Ochoa Marulanda se comprometió a entregar a Iván Martínez Payán por su calidad de socio y por una

participación equivalente a una hectárea de tierra del Proyecto Inmobiliario EntreMares. Alberto Ochoa Marulanda, a la fecha de presentación de la demanda no había pagado el valor total de los mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000), los cuales el Iván Martínez NO LE ADEUDA, sino que han sido invertidos por el mismo Alberto Ochoa Marulanda para el proyecto inmobiliario.

El hecho que el demandante utilice el pagaré para cobrar un dinero que no le adeudan, desconcierta y deja clara la mala fe con la que ha actuado desde un inicio Alberto Ochoa Marulanda o, su abogado si la información suministrada fue la correcta, porque debió informar a su cliente que no existía un título ejecutivo para el cobro, sino una discusión sobre cumplimiento del contrato de sociedad de hecho que debía debatirse por un proceso ordinario declarativo.

La entrega de dinero de Alberto Ochoa Marulanda a Iván Martínez Payán simplemente se basa en un contrato verbal de inversión el cual tenía la finalidad de obtener cierto presupuesto para la implementación del Proyecto Inmobiliario y a cambio de esto se le daba al inversionista la calidad de socio y la obtención de cierta cantidad de tierra de acuerdo con lo que se invertía o bien una participación porcentual en el futuro proyecto equivalente a la hectárea dentro de las 21 hectáreas disponibles para el desarrollo del proyecto.

Ahora bien, para corroborar que se trató de una sociedad de hecho de inversión en un proyecto inmobiliario y no un dinero entregado en mutuo, Alberto Ochoa Marulanda ofreció al Arquitecto Didier Rincón, persona que actualmente viene desarrollando el proyecto inmobiliario ENTREMARES, su porcentaje de participación y estuvieron incluso reunidos para establecer los términos de una eventual cesión.

Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de lo establecido en la carta de instrucciones del Pagaré No. 002 la cual indica que se faculta para que, **en caso de incumplimiento** en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que se han adquirido, derivadas de los negocios comerciales y contractuales bien sean verbales o escritos, proceda a llevar los espacios del pagaré y el negocio realizado entre las partes (aquí explicado), es claro que para que exista incumplimiento del negocio comercial celebrado y se entienda que el título base de ejecución es exigible DEBE EL DEMANDANTE SOLICITAR SU DECLARATORIA EN PROCESO DECLARATIVO O DEMOSTRAR DENTRO DEL PRESENTE PROCESO QUE EL SEÑOR IVÁN MARTINEZ SE SUSTRAJO DEL ACUERDO DEL NEGOCIO CAUSAL, SI NO ES DIÁFANO DICHO INCUMPLIMIENTO POR AUSENCIA DE ACUERDO ESCRITO DE LAS PARTES RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL NEGOCIO COMERCIAL CELEBRADO, debe el ejecutante prima facie acudir al proceso declarativo.

No atender que, para el diligenciamiento del título base de ejecución, era necesario que mediara incumplimiento del negocio comercial celebrado entre las partes es pasar por alto la voluntad de las partes e inaplicar por completo el artículo 622 del Código de Comercio.

Resultado de omitir el análisis de las excepciones derivadas del negocio jurídico causal, el Juzgado de primera instancia erradamente no interpreta en debida forma que el pagaré no deriva de un contrato de mutuo, como el ejecutante mencionó en reiteradas ocasiones dentro del proceso, basta remitirse al interrogatorio de parte de Alberto Ochoa Marulanda. Por lo tanto, el incumplimiento no se da por la no devolución de la cifra supuestamente mutuada.

En consecuencia, el juez de primera instancia omitió establecer el origen del pagaré, esto es, determinar si era o no derivado de un negocio comercial de inversión en un proyecto inmobiliario, o si la voluntad de las partes radica en un mero préstamo entre particulares. Que el pagaré derivaba o se originaba en un acuerdo comercial, como lo es el proyecto de inversión Entremares resalta en toda la prueba del proceso, pero pese a lo anterior el juzgador en su fallo considera que ello no es necesario en el análisis del título valor. Que simplemente reunidas las formalidades del título es suficiente para su exigibilidad completa. Craso error y grave para las relaciones obligacionales Inter partes en nuestro concepto, por cuanto se lleva de carrera toda la tesis de la causa y finalidad del título valor.

Veamos la consideración de la sentencia atacada:

> *Por tanto, como se ha iterado, aquí no se está discutiendo un derecho incierto como puede ser la existencia de un contrato verbal entre las partes, sino una obligación clara, expresa y exigible que consta en un pagaré que cumple los requisitos generales y especiales del código de Comercio para ser cobrado forzosamente y a cuyo texto debe sujetarse el deudor, literalidad consagrada taxativamente en el artículo 626 Op, así:*
>
> *«ARTÍCULO 626. <OBLIGATORIEDAD DEL TENOR LITERAL DE UN TÍTULO-VALOR>. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia.»*
>
> *Por último, no puede dejarse de lado, como lo hace el ejecutado al alegar en esta exceptiva que el título no existe porque no corresponde a un mutuo, que además de haber confesado él mismo que lo emitió y que diligenció el espacio del valor que allí se incorporó -lo que de suyo, desvirtúa su tesis de la inexistencia del título-, que para pregonar válidamente la existencia de un título valor, se insiste, basta con que el documento respectivo reúna las formalidades generales y especiales que exige el código mercante patrio y en este caso, probado está que el pagaré de marras, llena esas formalidades de los artículos 621 y 709 de esa compilación normativa; pero además, digno es de tener en cuenta para sellar la suerte adversa de esta excepción, que, acorde con la teoría obligacional de la causa, prevista en el artículo 1524 del código Civil, la mera liberalidad o aun la beneficencia, constituyen causa suficiente, de donde se sigue, que no es menester, para obligarse cambiariamente, que tal obligación sea producto de un contrato de mutuo.*

Se concluye entonces que el fallador deja de lado el análisis del negocio jurídico causal y como se ha mencionado de forma previa no desarrolla un análisis adecuado respecto al diligenciamiento del pagaré para tener por cumplida o no la exigibilidad del título ejecutivo.

Lo que se cuestiona por parte del suscrito es que, AL NO DILIGENCIAR EL PAGARÉ CONFORME A LA CARTA DE INSTRUCCIONES, según lo que se ha explicado anteriormente, EXISTIÓ UNA INTEGRACIÓN ABUSIVA DEL TÍTULO EJECUTIVO Y, EN CONSECUENCIA, CARECE DE EXIGIBILIDAD, PUES LA

FECHA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGARÉ NO RESPETÓ EL ARTÍCULO 622 DEL C.CO. Y, POR ENDE, AL NO REUNIR EL REQUISITO DE EXIGIBILIDAD, REQUISITO SINE QUA NON DEL TÍTULO VALOR, ESTE CARECE DE VALIDEZ. Lo anterior no permite arribar resultado distinto que a negar el mandamiento de pago.

2.2. DE LA VIOLACIÓN DE LA CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PAGARÉ.

De acuerdo con la carta de instrucciones del pagaré objeto de controversia, para el diligenciamiento de la fecha de vencimiento tenía que mediar el incumplimiento por parte de Iván Martínez Payán de los negocios contractuales o comerciales que tiene con Alberto Ochoa, que no es otro que el proyecto inmobiliario Entremares.

Al revisar la carta de instrucciones, la misma señala que:

> *"por medio del presente escrito manifiesto que le faculto a usted, de manera permanente e irrevocable para que, en caso de incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que hemos adquirido con usted, derivadas de los negocios comerciales y contractuales bien sean verbales o escritos; sin previo aviso, proceda a llenar los espacios en blanco del pagaré. (...)"*

De lo anterior se desprende que, el incumplimiento señalado nunca ocurrió, en principio porque el propio título valor, ni la carta de instrucciones, ni los acuerdos verbales a los que llegaron Alberto Ochoa Marulanda e Iván Martínez Payán, determinaron condiciones objetivas o causales específicas de incumplimiento. Por lo tanto, ante la falta de claridad respecto a qué es posible entender por el término "incumplimiento" – según la mención de la carta de instrucciones, es necesario que exista declaración previa de ese hecho, antes de entrar a diligenciar el pagaré en blanco. Al respecto, no se evidencia la existencia de incumplimiento de Iván Martínez Payán para que opere la condición prevista en la carta de instrucciones y pudiese así ser diligenciado el respectivo pagaré.

De igual forma, no aplicó en debida forma las normas que rigen los títulos valores y pese a no reunir el título base de ejecución las condiciones para su exigibilidad, como lo es el diligenciamiento de este conforme a la carta de instrucciones, ordenaron erróneamente seguir adelante la ejecución.

Para que el pagaré pudiese ser exigible ejecutivamente debe reunir el requisito de exigibilidad y para el efecto, debía darse la constitución en mora de cumplir del deudor. Del mismo modo, si bien en el escrito de pagaré se excusó de la necesidad de constitución en mora, no menos cierto que debía operar la prueba del incumplimiento. El demandante Alberto Ochoa Marulanda no da cuenta de la ocurrencia de dicho incumplimiento y, por el contrario, mi mandante demuestra que cumplió con el contrato y que, por consiguiente, no habría lugar a la exigibilidad del pagaré elemento fundante del título ejecutivo.

No obstante, el Juzgado Veintitrés (23) Civil del Circuito de Bogotá D.C. resta importancia a la carta de instrucciones para el diligenciamiento de la fecha de

exigibilidad dentro del pagaré base de ejecución y, en consecuencia, en la sentencia se lee:

> *"Ahora, se enrostra que el ejecutante actuó de mala fe al desatender las instrucciones referidas y colocar en el pagaré una fecha de exigibilidad que no se adecuara a la realidad, pues dice que el vencimiento debía ser la fecha en que se supiera que no habría proyecto de inversión inmobiliario y se disolviera la sociedad de hecho previa solicitud o retiro de dinero; sin embargo, tal instrucción no se encuentra expresada en el documento reconocido por las partes, se hace mención de forma general que «en caso de incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que hemos adquirido con usted, derivadas de los negocios comerciales y contractuales bien sea verbales o escritos», sin indicar siquiera que se trataba específicamente de los compromisos referentes al proyecto inmobiliario que presuntamente acordaron con el señor Alberto Ochoa o de la sociedad de hecho que se conformaría; recuérdese que en el expediente no se encuentra demostrada la existencia del contrato verbal tantas veces alegado por el ejecutado, ni de su ejecución práctica por las partes, mucho menos de su eficacia y oponibilidad al ejecutante; por el contrario, ya el juzgado 3 homólogo en proceso ordinario que involucra a estas mismas partes, en torno a la conformación y existencia de tal sociedad de hecho, dispuso tener por no probada la conformación de tal sociedad que es de la que se habla en la contestación de la demanda (fls 480/484).*
>
> *Por todo lo anterior, fuerza es concluir que las instrucciones no están ancladas a una situación fáctica que permita afirmar válidamente y de forma contundente, cuando debían tenerse por incumplidas las obligaciones recogidas en el pagaré, pues estas no fueron lo suficientemente específicas como para identificar que el pagaré hacía parte íntegra del supuesto negocio por ellos convenido o de la sociedad de hecho, por lo que no puede salir avante la mala fe que se pregona por la pasiva, con todo, porque le correspondía a la parte ejecutada demostrar la mala fe con la que dice, actuó su acreedor, pues en las relaciones comerciales como las del título valor que se cobra, la buena fe se presume, tal como lo dispone el artículo 871 del código de Comercio."*

Es así como, poco o nada interesa al fallador la orden dentro de la carta de instrucciones de que el pagaré únicamente podía diligenciarse una vez hubiese existido incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que Iván Martínez Payán contrajo con Alberto Ochoa Marulanda, producto de los negocios contractuales que sostenían los dos, en el presente caso el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

De esta manera, para el debido diligenciamiento del pagaré, conforme a la carta de instrucciones, debe mediar incumplimiento del negocio comercial celebrado por las partes, por lo que, al no existir incumplimiento por parte del ejecutado, no es posible diligenciar la fecha de exigibilidad del pagaré. Si bien Iván Martínez Payán se comprometió a pagar suma cierta conforme se indica en el pagaré y que él lo suscribió, no menos cierto es que solo se obligó a hacerlo en caso de incumplimiento del negocio comercial.

Al respecto, no se evidencia la existencia de incumplimiento de Iván Martínez Payán para que opere la condición prevista en la carta de instrucciones y pudiese así ser diligenciado el respectivo pagaré.

Sobre el particular, la Jurisprudencia[3] ha manifestado que "*el título valor suscrito en blanco deberá ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones escritas o verbales que acordaron las partes*" reglas que están siendo omitidas totalmente por Alberto Ochoa Marulanda al no haber tenido en cuenta las instrucciones dadas en la autorización para llenar los espacios en blanco y, por el contrario, llenar los espacios en blanco como él consideró y a conveniencia de este.

Aunado a lo anterior, el Tribunal Superior de Medellín[4] adelante ha establecido que:

> *"De conformidad con la mencionada normativa y sólo en relación con los títulos valores creados con espacios en blanco, debe quedar claro que la norma autoriza al tenedor legítimo para llenarlos exclusivamente bajo las instrucciones que haya dejado su creador, las cuales pueden constar por escrito o en forma verbal, atendiendo a que no existe instrucción precisa al respecto. Es válido advertir según lo ha indicado la máxima Corporación, que la carta de instrucciones como tal no pertenece al título valor mismo, ni pasa a ser un apéndice de él para conformar un todo inescindible con el cartular, pues semejante exageración argumentativa repugna a la teoría autónoma de los títulos valores, amén que de conformidad con el artículo 422 del CGP, basta con que un documento preste mérito ejecutivo para que se deba librar por el juez una orden coercitiva de pago; sin embargo y muy a pesar de que la carta de instrucciones no forme parte del título valor como tal, sí es fuente obligada de consulta para que pueda establecerse si el título valor fue llenado bajo las órdenes estrictas dadas en la carta de instrucciones, pues de lo contrario el deudor podría oponer a su acreedor las excepciones personales o cambiarias pertinentes, entre las que se cuenta precisamente la de haber sido llenado el título de manera abusiva o sin estricto apego a las instrucciones dadas por el creador."*

Es por esto por lo que, cuando se firma un título valor en blanco, se debe elaborar una carta de instrucciones, que es el documento que orienta al tenedor del título, cuando este deba llenarlo, según lo establecido por el Código de Comercio en su artículo 622. En efecto, dicho artículo establece que:

> *"Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello..."*

Normas que están siendo omitidas totalmente por el juez de primera instancia al no haber tenido en cuenta las instrucciones dadas en la autorización para llenar los espacios en blanco; de esta manera, la doctrina[5] ha explicado en relación con los títulos valores en blanco que:

> *"Son aquellos en los que el suscriptor sólo ha implantado su firma, dejando en forma deliberada, total o parcialmente, espacios en blanco para ser llenados por el tenedor legítimo, de acuerdo con instrucciones dadas a este último. El legislador colombiano se refiere al tenedor legítimo, es decir, aquella persona que según la ley puede*

---

[3] Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira. Radicado. 66170-31-03-001-2012-00003-01. M.P. Jaime Alberto Zaraza Naranjo.
[4] Tribunal Superior de Medellín. Sala Tercera de Decisión Civil. Sentencia No. 034. Radicado. 050013103015 2017 00005 01. M.P. José Gildardo Ramírez Giraldo.
[5] Peña Nosa, Lisandro y otro. Curso de títulos valores, cuarta edición. Editorial Temis, 1992. Pág. 37.

ejercer los derechos incorporados en el título y, por consiguiente, esté autorizado a llenar los espacios en blanco, lo que no sucede con el tenedor ilegítimo, o sea quien hurtó el documento para llenarlo, contra el cual el deudor puede perfectamente oponer la excepción de mala fe. Que también se hace extensiva al tenedor legítimo, cuando este ha desatendido las Instrucciones del suscriptor del título al momento de llenarlo".

El artículo 622 del Código de Comercio ha venido siendo interpretado con distintos alcances por la doctrina y la jurisprudencia nacional, en donde en caso de presentarse la desatención de las instrucciones se recogerán las verdaderas intenciones acordadas por las partes, incluso algunos jueces civiles se apartan de este precedente, y en algunos declaran la ineficacia del título valor. De acuerdo con esto se puede considerar los casos existencia de una integración abusiva del título valor en este caso, porque el título valor, el pagaré 002, se diligenció desatendiendo las estrictas instrucciones verbales o escritas, otorgadas por el suscriptor del instrumento cambial, aquí Iván Martínez Payán.

De acuerdo con lo anterior, es importante manifestar que conforme a la carta de instrucciones del pagaré objeto de este proceso, se establecen los siguientes requisitos para el diligenciamiento del pagaré, los cuales no fueron ni atendidos al momento de diligenciarse el pagaré, ni demostrados por el demandante en el curso del proceso como atendidos, estos son:

i) El pagare únicamente podía diligenciarse una vez hubiese existido incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que Iván Martínez contrajo con Alberto Ochoa, producto de los negocios contractuales que sostenían los dos, en el presente caso el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

Se ha mencionado a lo largo del proceso que no existe tal incumplimiento ni se encuentra demostrado que haya existido este, pues dicho proyecto inmobiliario se encuentra en desarrollo y no existe incumplimiento cierto de las obligaciones de Iván Martínez Payán en dicho proyecto. Tampoco existe un pronunciamiento judicial en dicho sentido; esto es, declarando incumplido al demandado.

ii) Por otra parte, el espacio correspondiente a “suma cierta” debía ser llenado de acuerdo con la contabilidad del acreedor, aspecto faltante al momento de diligenciar el pagaré y que no se ajusta a la suma allegada y los valores consignados por el aquí demandante a favor del señor Iván Martínez. ESTO DETERMINADA AL MENOS UNA PRUEBA SUMARIA que debía ser allegada con la demanda.

De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Que el pagaré objeto de ejecución no tiene como causa un mutuo de dinero, el cual tuviera que ser cancelado por Iván Martínez Payán en una fecha cierta, sino que el pagaré tiene como finalidad la de garantizar una inversión en un proyecto inmobiliario.

2. Como consecuencia lógica de lo anterior, el diligenciamiento del pagaré debía operar el incumplimiento de las obligaciones de Iván Martínez Payán dentro del

proyecto de inversión para poder proceder al diligenciamiento del título valor y además con base en las cuentas contables ciertas de las sumas aportadas del negocio celebrado entre las partes, pues así lo exige la carta de instrucciones.

De esta manera es importante señalar la Sentencia T-673 de 2010, la cual expresa lo siguiente:

> *"La carta de instrucciones puede constar en un documento escrito o de manera verbal, al no existir una norma que exija alguna formalidad. (…)*
>
> *En conclusión, los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron."*

Lo anterior, aplicado al caso en cuestión permite afirmar que existió, por parte del aquí demandante, una integración abusiva del título valor, puesto que el pagaré se diligenció desatendiendo las estrictas instrucciones escritas otorgadas por el suscriptor del instrumento cambiario.

Es así como, esta parte procesal cumplió con la carga de demostrar que el título valor no fue diligenciado conforme a la carta de instrucciones y, por ende, no presta mérito ejecutivo conforme a la normativa comercial; pues, de un lado, no se dio y no existió un incumplimiento de las obligaciones del demandado para hacer exigible el pagaré dado en garantía y, de otro lado, el pagaré debía llenarse conforme a las sumas que por contabilidad se habían desarrollado entre las partes fruto de las relaciones comerciales y pudo demostrarse con total certeza en el transcurso del proceso, que esos valores contablemente fueron menores a la cifra abusiva solicitada por el actor y sobre todo habida consideración que para la fecha de elaboración del pagaré sólo se habían entregado por parte del demandado la suma de: mil trescientos veintidós millones de pesos ($1.322.000.000) y no mil novecientos millones de pesos ($1.900.000.000) como pretende el demandante.

Corolario de lo anterior, probada la existencia de unas instrucciones claras y que el pagaré no se llenó de acuerdo a la carta de instrucciones, se entiende que; el pagaré se suscribió sin atender la respectiva carta de instrucciones, la cual es indispensable para su exigibilidad de conformidad al artículo 620 del Código de Comercio. Por lo tanto, debido a la falta de exigibilidad del pagaré objeto del presente proceso se resta el carácter ejecutivo de dicho documento y la acción cambiaria carece de asidero.

2.3. DEL NEGOCIO COMERCIAL AL QUE REFIERE LA CARTA DE INSTRUCCIONES.

Sea lo primero a indicar en el acápite que aquí se desarrolla, es que en la carta de instrucciones del pagaré que aquí se ejecuta se estableció que "*en caso de incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que hemos adquirido con usted, derivadas de los negocios comerciales y contractuales bien sean verbales o escritos (...)*"; se debe considerar que sea cual sea el negocio desarrollado entre las partes; ninguno se encuadra en los denominados comerciales

descritos en el artículo 20 del Código de Comercio; teniendo en cuenta que ni Alberto Ochoa Marulanda y tampoco Iván Martínez Payán ostentan la calidad de comerciantes, de conformidad al artículo 13 del Código de Comercio; así:

> ***ARTÍCULO 13. PRESUNCIÓN DE ESTAR EJERCIENDO EL COMERCIO.*** *Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos:*
> *1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil;*
> *2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y*
> *3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.*

En tal sentido, se advierte que el negocio suscrito por las partes de esta demanda no puede denominarse como comercial dado que ninguna de las partes ostenta la calidad de comerciante; lo que hace que los negocios que éstos suscriban no tengan tal calidad; en ese sentido, se vuelve oscura la instrucción contenida en la carta de instrucciones haciendo que esta vuelva inexigible el pagaré 002 al no poderse llenar este con tales instrucciones.

Ahora bien, en gracia de discusión de que se considere comercial el negocio realizado por las partes; se debe manifestar que el demandante Alberto Ochoa Marulanda durante el desarrollo del proceso ha manifestado que el pagaré tiene como negocio jurídico causal un mutuo de dinero que él realizó a favor de Iván Martínez Payán; no obstante, dicha manifestación es del todo falaz, por las siguientes razones.

1. Alberto Ochoa Marulanda manifiesta que el pagaré fue diligenciado por Iván Martínez Payán, salvo en su fecha de vencimiento, esto es cierto; no obstante, es contrasentido que para la fecha de creación del pagaré, 2 de mayo de 2017, el señor Martínez haya recibido del señor Alberto Ochoa la suma de mil novecientos millones de pesos ($1.900.000.000) millones de pesos, pues de acuerdo a la relación de pagos aportada por el mismo demandante para la fecha de creación del título únicamente el señor Alberto Ochoa había pagado al señor Iván Martínez la suma de quinientos veintisiete millones de pesos ($527.000.000).

2. De acuerdo con la grabación de la reunión del 4 de noviembre de 2016, aportada en dos oportunidades y con base en los testimonios de la señora Rosario Bedoya e Iván Martínez, se puede determinar que Alberto Ochoa consignó esos quinientos veintisiete millones de pesos ($527.000.000) como ADELANTO de su obligación de cancelar tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) antes del fin del año de 2016, dineros cuya finalidad es la de participar como inversionista en el proyecto inmobiliario Entremares. (Remitirse a la grabación a la 1:34:15 a 1:37:00). Prueba completamente válida al ser pública la intención de grabar la reunión.

3. Como prueba fehaciente de que los dineros aportados por Alberto Ochoa Marulanda a Iván Martínez Payán son para la realización de un proyecto de inversión inmobiliaria en el terreno de propiedad de Iván Martínez Payán en la isla de Barú, se encuentran las manifestaciones inequívocas de Alberto Ochoa como inversionista activo y propositivo dentro del proyecto, pues basta ver los correos electrónicos realizados con posterioridad al 16 de noviembre de 2016,

fechados el 28 de noviembre de 2016 y 12 de diciembre de 2016, (página 40 del cuaderno principal) donde claramente Alberto Ochoa Marulanda ya actúa como socio dentro del proyecto, prueba que refuta lo dicho por el señor Alberto Ochoa en su interrogatorio respecto a que siempre se negó a participar del proyecto Entremares.

4. Es así como, la carta de instrucciones del pagaré suscrito por Iván Martínez Payán, la cual ha reconocido Alberto Ochoa Marulanda, cuando refiere a los negocios comerciales y contractuales refiere al proyecto de inversión Entremares. El ejecutante no allega prueba de que los dineros entregados respondan a un mutuo de dinero más que su interrogatorio, por el contrario teniendo en cuenta la cronología de los pagos, los testimonios aquí presentados bajo la gravedad de juramento, el cruce de comunicaciones entre el señor Alberto Ochoa y el señor Iván Martínez, además de la grabación de la reunión del 4 de noviembre de 2016, se entiende que la actividad comercial o el negocio jurídico causal que dio lugar al surgimiento del pagaré objeto de controversia es la realización de un proyecto inmobiliario.

5. El señor Alberto Ochoa es inversionista del proyecto Entremares, esto tiene fundamento tanto en las pruebas antedichas, como en el Testimonio rendido por el señor Didier Rincón, quien para el año 2018, año posterior a la fecha de suscripción del pagaré y posterior al supuesto vencimiento de este, el señor Alberto Ochoa ofreció al señor Didier en venta su participación dentro del proyecto Entremares.

6. Así mismo, frente a terceros Alberto Ochoa Marulanda actuó como inversionista dentro del proyecto inmobiliario Entremares, esto se demuestra con la gestión realizada ante el Arquitecto Rafael Sampolas Castillo, quien remite oferta de servicios para el desarrollo del proyecto Entremares y la carta se encuentra dirigida tanto al señor Iván Martínez como al señor Alberto Ochoa; tal como se evidencia en la documental aportada con la contestación de la demanda.

7. Por otra parte, el 21 de febrero de 2018 (Cuaderno principal F.37 Declarativo) en correo enviado por el señor Alberto Ochoa a Iván Martínez se lee claramente que:

> **Desde que Dios me dio a oportunidad de conocerlos, creo que tuve una buena empatía con Don Iván y la Sra. Rosario, Comenzamos una relación de amistad, y a la ves con la posibilidad de poder efectuar un gran negocio juntos, llegando a unos acuerdos iniciales, los cuales pude aportar a algunos compromisos que ustedes tenían en el momento y con miras a poder participar de mi parte en el desarrollo de un proyecto con ustedes en Baru.**
> **Posteriormente analizando más profundamente sobre los alcances de dicha inversión, (Muchas veces se deja llevar uno en el momento por la emoción más que por la razón), decidí desistir de dicho proyecto como se lo manifesté sobre el mes de marzo del año anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo a un análisis dicho proyecto demandaba más recursos de los que yo podría aportar en determinado momento. Y le manifesté desistir.**

Es más que evidente que el señor Alberto Ochoa Marulanda reconoce que invirtió en el proyecto Entremares, él se reconoce como socio, se lee que desistió, UNO NO DESISTE DE ALGO QUE NO SE HA ACEPTADO Y EL DESISTIR NO DEJA DE SER UN INCUMPLIMIENTO Y SUSTRACCIÓN DE LOS COMPROMISOS

ADQUIRIDOS. En el correo enviado por Alberto Ochoa Marulanda se reafirma su calidad de socio, reconoce las distintas etapas por las que ha pasado el proyecto y manifiesta su punto de vista de no construir distintas aseveraciones que no realizaría una persona que solo prestó un dinero para un proyecto.

Por otra parte, téngase en cuenta que nadie está en mora de cumplir lo pactado mientras la parte que alega la supuesta sustracción de las prestaciones contractuales se halle en incumplimiento previo. Lo anterior es una máxima jurídica que encuentra asidero en el artículo 1609 del Código Civil el cual contempla: "*En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir lo pactado mientras el otro por su parte no lo haga, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos*", norma fundamental de la actividad contractual que se relaciona directamente con la buena fe contractual, reconocida como principio general del derecho y canon elevado a rango constitucional en el artículo 83 de la Constitución Política.

Nótese que previo al supuesto vencimiento del pagaré Alberto Ochoa Marulanda se encontraba en situación de incumplimiento, dado que este ya había incumplido el contrato de forma previa; en consecuencia, el aquí ejecutado no estaría en mora porque no incumplió el contrato e inclusive, en caso de haberlo incumplido, la mora de Alberto Ochoa Marulanda purga la Mora que se arroga a Iván Martínez Payán.

2.4. DE LA INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA RESPECTO AL COBRO DE LO NO DEBIDO.

En la sentencia objeto de este recurso se lee:

> *"Sobre el COBRO DE LO NO DEBIDO EN RAZÓN A TRANSACCIONES POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGARÉ OCASIONANDO UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, debemos recordar que fue el aquí deudor quien por su propia voluntad suscribió el pagaré por $1.900'000.000 al imponer esa cifra, para que fuera cobrada por el acreedor, reconociéndose así en el interrogatorio surtido bajo la gravedad de juramento, lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 del código General del Proceso, constituye una confesión que no aparece infirmada fehacientemente por los demás medios suasorios adosados al instructivo; por ende, como en la demanda el ejecutante adujo que a la fecha de vencimiento no se había honrado la obligación contenida en el pagaré, tratándose de una negación definida que de conformidad con el artículo 167 del código General del Proceso no requiere prueba, lo que le imponía al deudor la carga de desvirtuar, demostrando el cabal cumplimiento de la obligación, lo que no logró, pues del material probatorio recogido en el presente trámite, no solo se demostró que el señor Iván Martínez recibió $1.322'000.000 del señor Alberto Ochoa con las trasferencias bancarias que hiciese desde la empresa del ejecutante a la empresa del ejecutado, sin embargo, también es cierto que el ejecutado se obligó a asumir la deuda de esposo de su hija, representada en un cheque, puesto que si bien esto lo niega el deudor y los testigos, los indicios conducen a tener por cierto que si la asumió, puesto que las pruebas señalan que el deudor, su esposa y su hijo fueron a pedirle dinero prestado al señor Ochoa a finales de 2017, para cubrir una deuda del apartamento de su hija y de su esposo; además, que aun cuando el señor Agudelo Cano Andrés, afirmó que había pagado toda o casi toda esa deuda y se comprometió ante este estrado a aportar las pruebas de las consignaciones que así lo comprobarán, no las aportó; todo ello, sumado a que el deudor confesó que debía cancelar $1.900'000.000 porque «yo le puse la fecha, mi nombre, el valor y lo firme»; se encuentra entonces atado a cumplir con dicha acreencia; pues se itera, el título*

valor goza de plena eficacia al no haberse tachado de falso, y el deudor se encuentra «obligado conforme al tenor literal del mismo."

Es preocupante que el juez de por cierto la afirmación de que Iván Martínez Payán se obligó a asumir la deuda del esposo de su hija para cubrir la deuda de un apartamento de la hija, brilla por su ausencia prueba de tal afirmación; y es que no existe prueba alguna de subrogación de la deuda y de que Iván Martínez Payán haya asumido acreencia de un tercero o los motivos para asumir tal crédito.

No es claro respecto a qué apartamento se refiere el demandante, su identificación y mucho menos que el juez se haya esforzado en comprobar tal aseveración o existencia de tal apartamento, pues como me lo informa mi mandante dicho apartamento no existe.

Ahora bien, conforme a la contabilidad y las pruebas aportadas, la sumatoria de los abonos realizados por el señor Alberto Ochoa como partícipe del proyecto Entremares fue únicamente de mil trescientos veintidós millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000), aspecto soslayado por el juez y que de reconocer un mayor valor favorece un enriquecimiento sin causa del demandante al respecto es necesario realizar un relacionamiento de las transferencias que realizó el ejecutante.

Fecha de consignación	Concepto	Valor
Noviembre 16 de 2016	*«Abono cuenta Panamá»*	$527'000.000
Mayo 2 de 2017	*«Abono a Techcomex»*	$250'000.000
Junio 6 de 2017	*«Abono Consignación Cheque a Techcomex»*	$55'000.000
Junio 9 de 2017	*«Abono Consignación SB a Techcomex»*	$60'000.000
Junio 16 de 2017	*«Abono consignación Cheque a Techcomex»*	$80'000.000
Agosto 4 de 2017	*«Abono Consignación SB a Techcomex»*	$50'000.000
Agosto 30 de 2017	*«Abono consignación Microm a Techcomex»*	$100'000.000
Septiembre 27 de 2017	*«Abono consignación Microm a Techcomex»*	$50'000.000
Septiembre 27 de 2017	*«Abono consignación Santiago a Techcomex»*	$50'000.000
Noviembre 27 de 2017	*«Abono Transferencia a Techcomex»*	$50'000.000
Diciembre 1 de 2017	*«Abono Transferencia a Techcomex»*	$50'000.000

- A folio 68 obra una tabla en la que relacionan los dineros entregados a Iván Ramírez Payan desde noviembre 16 de 2016 hasta diciembre 1 de 2017, para un total de mil trescientos veintidós millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000).

- A folio 69 están relacionados los dineros entregados a Iván Ramírez Payan desde noviembre 16 de 2016 hasta diciembre 17 de 2017.

- A folio 70 obra copia simple del comprobante de egreso de Microm Internacional SAS por cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000).

- A folio 71 se aprecia la trasferencia a Bancolombia relacionada como «pago a proveedores» de la empresa «MICROM DE COLOMBIA» a favor de «Techcomex Servicio» por cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000) en noviembre 27 de 2017.

- A folio 72 obra copia de una parte de la consignación a Bancolombia de doscientos cincuenta millones de pesos m/cte. ($250.000.000) en mayo 2 de 2017 a favor la cuenta 66611977559, en la que se reportan la firma y apelativo de Iván Martínez. EJFR Página 11 de 27.

- A folio 73 está copia simple de la consignación a Bancolombia.

- A folio 74 obra copia de una parte de la consignación a Bancolombia de sesenta millones de pesos m/cte. ($60.000.000) en junio 9 de 2017 a favor de la cuenta 66611977559.

- A folio 75 está en copia simple la consignación a Bancolombia de ochenta millones de pesos m/cte. ($80.000.000) a favor de Techcomex Servicios; sin embargo, no es posible apreciar en debida forma la fecha en que fue realizado el movimiento bancario.

- A folio 76 obra copia de una parte de la consignación a Bancolombia de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000) en agosto 4 de 2017 a favor de la cuenta 66611977559, en la que se encuentra inscrita «Don Iván Ramírez 04-Ago-17».

- A folio 77 obra copia simple del comprobante de egreso de Microm International SAS por cien millones de pesos m/cte. ($100.000.000).

- El folio 78 está en copia simple, la consignación a Bancolombia de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000) a favor de Techcomex Servicios Logísticos en septiembre 21 de 2017 con la inscripción «recibí» y la firma de Iván Ramiro Martínez Payan.

- A folio 79 obra copia de la consignación a Bancolombia de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000), no es posible apreciar en debida forma le fecha en que fue realizado el movimiento bancario, de igual forma se encuentra inscrita «recibí» y la firma de Iván Ramiro Martínez Payan.

- A folio 80 obra copia simple del comprobante de egreso de Microm Internacional SAS por cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000).

- A folio 81 se aprecia la transferencia de Bancolombia relacionada como «pago a proveedores» de la empresa «MICROM DE COLOMBIA» a favor de «Techcomex Servicio» por cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000) en diciembre 1 de 2017.

Bajo este sustento probatorio, es desconcertante que el juez de primera instancia reconozca un mayor valor de la obligación en el mandamiento de pago y en la

decisión de ordenar seguir la ejecución, cuando en gracia discusión esta sería de mil trescientos millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000), ampliamente quedó demostrado que Alberto Ochoa Marulanda únicamente transfirió a Iván Martínez Payán mil trescientos millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000). Lo anterior aunado al hecho de que Alberto Ochoa Marulanda en interrogatorio de parte (1:20:41)[6] confesó que la suma girada al señor Iván Martínez fue de mil trescientos millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000) en la forma como se aprecia en el folio 33 del expediente.

Y de allí que, si el valor faltante para llegar a mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000) se pueda sustentar en aparentes intereses, fuerza es concluir que el demandante cobró intereses de usura y debe ser penalizado por ese hecho si a esa conclusión pudiese llegar el fallador, sin alejarse de los hechos.

Por lo que para este extremo es inconcebible y llama la atención es que, aún bajo la hipótesis de la eventual autonomía del título valor y la posible legalidad de este pese a todo lo dicho, es la nula consideración del a quo sobre los valores que en forma más que probada fueron efectivamente recibidos por parte de mi patrocinados y efectivamente entregados por el demandante – confesado además por este sin discusión alguna-, generando una enriquecimiento sin causa y patrocinando por ende también, una actuación de presuntamente de mala fe por parte del ejecutante y proceder a una ejecución de un valor que no tenía asidero factual.

Sobre las actuaciones emanadas por el extremo demandante se hace necesario señalar que a consideración de esta parte el cobro de lo indebido se debe a que la suma de dinero entregada a Iván Martínez Payán, de acuerdo con el contrato verbal de inversión, no llegó nunca a ser mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000) y que, de acuerdo con las pruebas anexas, a la fecha de vencimiento del pagaré, sólo se había recibido por parte de Alberto Ochoa Marulanda la suma anotada.

El cobro de lo no debido es una manifestación del enriquecimiento injusto, esto es, de un supuesto en el que se produce un desplazamiento patrimonial a favor de determinada persona sin causa que justifique dicho desplazamiento, y en este sentido más allá del cobro de lo no debido estaríamos hablando de enriquecimiento sin causa por parte de Alberto Ochoa Marulanda. Pero en este caso es mucho más grave, por cuanto la actuación de mala fe es manifiesta y debe ser sancionada al momento de efectuarse el respectivo fallo.

La jurisprudencia colombiana ha precisado que son tres los requisitos que deben probarse para que se declare la existencia de un enriquecimiento de esta índole y se ordene la devolución de los bienes correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico[7]; y en el caso concreto es justo lo que va a suceder si se permite el pago de lo manifestado por el demandante dado que efectivamente el patrimonio de este va a

---

[6] Audiencia de fecha 15 de octubre de 2021, archivo 003 del expediente digital del proceso 2019-00271.

[7] Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

aumentar considerablemente por el cobro de un dinero que él no ha entregado de ninguna manera con mi poderdante; el mandamiento de pago a Iván Martínez Payan basándonos en la suma de dinero de mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000) ocasiona un detrimento económico a este último sin razón legal para ello, puesto que con lo excepcionado aquí se puede confirmar que el dinero recibido por mi poderdante es con ocasión a un contrato verbal de inversión que había sido acordado en mil novecientos millones de pesos, pero que inclusive a la fecha no ha sido pagada esta suma de dinero por parte del demandante, el cual está tergiversando toda la información, con la finalidad de obtener un dinero que legalmente no le corresponde.

2.5. ANATOCISMO Y USURA.

Retomando el tema de la existencia de la carta de instrucciones del pagaré 002 y de todo lo manifestado en el presente escrito, está expresa en su contenido que “el espacio correspondiente a "la suma cierta de" se llenará por una suma igual a la que resulte pendiente de pago de todas las obligaciones contraídas con el acreedor, por concepto de capital, intereses, seguros, cobranza extrajudicial, según la contabilidad del acreedor a la fecha en que sea llenado el pagaré”, en este sentido se entiende que los mil novecientos millones de pesos m/cta. ($1.900.000.000) que se encuentra descrita en el pagaré 002, incluye los interés que el capital ha causado a la fecha pero, si se trae a colación las pretensiones de la parte demandante se puede evidenciar que se está pretendiendo intereses sobre la suma de mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000) y basados en la mencionada carta de instrucciones existente se puede concluir que Alberto Ochoa Marulanda está cobrando intereses a los intereses ya incluidos en la suma descrita en el pagaré.

Respecto a este tema, la Corte Constitucional[8] ha expresado que el cobro de intereses sobre intereses, conocido como anatocismo, se encuentra prohibido en nuestra legislación civil, por ser una conducta lesiva para el deudor, ya que se constituye un cobro de intereses sobre intereses por un mismo capital adeudado, durante el mismo plazo.

Así mismo, el artículo 2235 del Código Civil, tajantemente dispone: *“Se prohíbe estipular intereses de intereses."* De esta forma, una primera conclusión, es la de que el anatocismo está absolutamente prohibido en las relaciones civiles, esto es, en los negocios entre no comerciantes.

Ahora bien, también es importante resaltar que se considera relevante el estudio de la nulidad del pagaré por objeto ilícito al configurarse presuntamente usura; sobre el tema, debemos advertir que si bien en el ejercicio de la autonomía de la voluntad los contratantes pueden señalar las tasas de los intereses aplicables al negocio que celebren en particular, no es lícito pactar intereses moratorios o remuneratorios que excedan del máximo autorizado por la ley.

[8] Corte Constitucional Sentencia C-364-00 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En ese sentido, se tiene que en materia civil el artículo 2231 del código dispone que *"El interés convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor"*. Del precepto antedicho se deducen dos reglas: la primera, que es jurídicamente viable estipular una tasa de interés remuneratorio que no exceda en una mitad al interés que se probare haber sido el corriente al momento de la convención; y, la segunda, que, si se viola tal límite, a petición del deudor, el juez puede imponer al acreedor una sanción consistente en la reducción del interés remuneratorio pactado a la tasa de interés corriente.

En el caso concreto Alberto Ochoa Marulanda tan solo desembolso en el mejor de los casos la suma de mil trescientos veintidós millones de pesos m/cte. ($1.322.000,000) y pretende cobrar intereses por la suma de mil novecientos millones de pesos ($1.900.000.000) a sabiendas que inclusive esa cifra de dinero debería incluir los intereses y en esta situación el demandante estaría cobrando intereses sobre intereses; pero además de esto, a la hora de solicitarle el dinero a Iván Martínez Payán, el demandante pretende que se le devuelva el dinero más intereses en 4% dado que así los ha pagado él. En este sentido, los intereses desembocaban en el delito de usura, al punto que subió con los intereses la pretensión de la suma de mil novecientos millones de pesos ($1.900.000.000), valor neto, más intereses del 4.0% EA, que se causen desde el 2 de septiembre de 2017. Algo completamente no ajustado a derecho y que nos lleva a un ilícito que debe ser apreciado por el Juez al momento de fallar.

Y es que si se realiza el ejercicio de la liquidación de los intereses del pagaré por un valor de capital de mil trescientos veintidós millones de pesos m/cte. ($1.322.000,000) con fecha de exigibilidad el día 03 de septiembre de 2017 y fecha final, la fecha en la que se presentó la demanda, esto es el día 28 de marzo de 2019; se tiene un valor total de mil ochocientos setenta y un ochocientos ocho mil setecientos veintiséis pesos con veintiocho centavos($1.871.808.726,28); lo cual tampoco habilitaba al demandante para ejecutar el pagaré en cuestión por la suma total de mil novecientos millones de pesos ($1.900.000.000). (Se adjunta tabla de liquidación del ejercicio antes mencionado).

Por lo tanto, de acuerdo con la normatividad citada, es completamente claro que Alberto Ochoa Marulanda incurrió presuntamente en el delito de usura al plasmar unas pretensiones de pago exorbitantes al valor real de la supuesta deuda y que determinan el cobro de intereses superiores al 50% anual.

Para concluir esta defensa se hace necesario precisarla en los dos siguientes puntos:

1. De lo antes manifestado es claro que, a consideración de esta parte, se deben declarar probabas las excepciones de mérito por el aquí demandado de inexistencia de un contrato de mutuo e inexistencia del título ejecutivo, mala fe en el diligenciamiento del pagaré respecto a la existencia de carta de instrucciones, cobro de lo no debido en razón a transacciones posteriores a la fecha de vencimiento del pagaré ocasionando un enriquecimiento sin causa, dación en pago, anatocismo y nulidad del pagaré por objeto ilícito por

configurarse el delito de usura, que fueron sustentadas en todas y cada una de las etapas procesales del presente proceso y que en este escrito se estructuran y sustenta de igual manera; esto teniendo en cuenta la debida valoración probatoria que realice esta segunda instancia a todas las pruebas que obran en el expediente de este proceso.

2. En caso de que se considere que el título ejecutivo objeto de esta demanda es válido y ejecutable, se deberá tener en cuenta que para proferir el auto que ordenar seguir adelante con la ejecución puede resolverse el cuestionamiento del valor del pagaré, puesto que:

2.1. Si se toma el valor por concepto de capital la suma de mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000), a sabiendas que la entrega de este dinero no se dio de manera completa por parte del demandante por lo que no podría indicarse que este valor constituye totalmente capital; se tendría que establecer que junto con el capital estarían incluidos los intereses como se estableció en la carta de instrucciones del pagaré; e inmediatamente se puede concluir que el demandante cobró intereses de usura.

2.2. Si se toma el valor por concepto de capital la suma de mil trescientos millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000), como ampliamente quedó demostrado de que Alberto Ochoa Marulanda únicamente transfirió a Iván Martínez Payán tal suma de dinero. Lo anterior aunado al hecho de que Alberto Ochoa Marulanda en interrogatorio de parte (1:20:41)[9] confesó que la suma girada al señor Iván Martínez fue de mil trescientos millones de pesos m/cte. ($1.322.000.000).

De todas maneras, lo que es cierto es que no se debe establecer que el valor del dinero como capital adeudado por parte de Iván Martínez Payán a Alberto Ochoa Marulanda no podrá ser bajo ninguna razón la suma de mil novecientos millones de pesos m/cte. ($1.900.000.000) puesto que de acuerdo con las pruebas anexas, a la fecha de vencimiento del pagaré, sólo se había recibido por parte de Alberto Ochoa Marulanda la suma anotada y no tener en cuenta esta situación configuraría un enriquecimiento ilícito a favor del extremo demandante.

SOLICITUD

De conformidad con lo anteriormente establecido, solicito al Despacho de forma respetuosa, lo siguiente:

1. **REVOCAR** en su totalidad el auto del 19 de julio de 2023 por medio del cual el Despacho dictó sentencia de primera instancia en el proceso de la referencia.

2. **DECLARAR** por probadas las excepciones de mérito interpuestas por la parte la demanda del proceso de la referencia.

---

[9] Audiencia de fecha 15 de octubre de 2021, archivo 003 del expediente digital del proceso 2019-00271.

PRUEBAS

- Las que se encuentran en el expediente de primera instancia del proceso de referencia.
- Tabla de liquidación.

NOTIFICACIONES

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, el suscrito apoderado **OSCAR EDUARDO ALDANA** recibirá notificaciones en la Calle 67 No. 4A - 41 en la ciudad de Bogotá, y en los correos electrónicos: oe.aldana10@gmail.com dependencia.judicial@naranjoabogados.com

Respetuosamente,



OSCAR EDUARDO ALDANA GONZÁLEZ
CC. No. 1.032.493.693 de Bogotá D.C.
T.P. 367.092 del C. S. de la J.

Radicar recurso de reposición y en subsidio apelación

Administrativo Páez Martín Abogados S.A.S <administrativo@paezmartin.com>

Mar 8/11/2022 3:14 PM

Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.
<ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>;notijudicial@accion.com.co
<notijudicial@accion.com.co>;gallomedina@gallomedinaabogados.com
<gallomedina@gallomedinaabogados.com>;srojas@gallomedinaabogados.com
<srojas@gallomedinaabogados.com>;akrell@paladinrp.com <akrell@paladinrp.com>;notificaciones
<notificaciones@grupograma.com>;crh@o4icolombia.com
<crh@o4icolombia.com>;elizabeth.parraga@fundacionmasrural.org
<elizabeth.parraga@fundacionmasrural.org>;jsuescun@suescunlaw.com
<jsuescun@suescunlaw.com>;qc@quinonescruz.com
<qc@quinonescruz.com>;ldebrigard@dbmabogados.com
<ldebrigard@dbmabogados.com>;gbermudez@bstlegal.com <gbermudez@bstlegal.com>;LUIS FELIPE
BOTERO <fbotero@bstlegal.com>;Julián Mauricio Morales Valencia
<jmmorales@bstlegal.com>;horaciocruztejada@yahoo.com.mx
<horaciocruztejada@yahoo.com.mx>;CARITOVALDERRUTEN@hotmail.com
<CARITOVALDERRUTEN@hotmail.com>

Señor
JUEZ VEINTITRÉS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia:	Proceso verbal de mayor cuantía
Radicación:	11001310302320190072600
Demandante:	Corporación Finanzas de América Corfiamérica S.A.S.
Demandadas:	Acción Sociedad Fiduciaria y otros.
Asunto:	**Recurso de reposición y en subsidio apelación contra auto del 2 de noviembre de 2022**

Carlos Páez Martín, apoderado judicial de la sociedad Corporación Finanzas de América Corfiamérica S.A.S., por medio del presente escrito me permito interponer recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto proferido por Su Despacho el 2 de noviembre de 2022, notificado en estado del 3 de noviembre de 2022.

--

Enrique Martínez Reyes
Abogado Socio
Páez Martín Abogados

(571) 4577079 | (571) 315 7512218
emartinez@paezmartin.co
www.paezmartin.com
Calle 93 #17-45, Oficina 702

PÁEZ MARTÍN

Señor
JUEZ VEINTITRÉS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia:	Proceso verbal de mayor cuantía
Radicación:	11001310302320190072600
Demandante:	Corporación Finanzas de América Corfiamérica S.A.S.
Demandadas:	Acción Sociedad Fiduciaria y otros.
Asunto:	**Recurso de reposición y en subsidio apelación contra auto del 2 de noviembre de 2022**

Carlos Páez Martín, apoderado judicial de la sociedad Corporación Finanzas de América Corfiamérica S.A.S., por medio del presente escrito me permito interponer recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto proferido por Su Despacho el 2 de noviembre de 2022, notificado en estado del 3 de noviembre de 2022.

I. ANTECEDENTES

1. En uno de los proveídos dictados por su despacho el 13 de septiembre de 2022 se revocó el numeral 2.1. del auto del 16 de febrero que había decretado una medida cautelar innominada porque, en sentir del juzgado, no se halla consagrada en las eventualidades previstas en los literales a) y b) del artículo 590 del Código General del Proceso.

2. El numeral 2.1. mencionado había ordenado la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre los derechos fiduciarios de los fideicomisos que son objeto del proceso.

3. Contra la anterior decisión interpuse recurso de apelación, el cual es procedente porque el auto atacado es susceptible de ese medio de impugnación, según el numeral 8° del artículo 321 del Código General del Proceso y porque la decisión acusada no había sido recurrida, toda vez que la revocatoria de la medida cautelar era una decisión novedosa.

4. Mediante auto del 2 de noviembre de 2022 el Señor Juez adicionó el auto del 13 de septiembre, en el sentido de revocar, además, la medida cautelar de inscripción de la demanda en el folio de matrícula del inmueble objeto del litigio.

5. En el mismo auto del 2 de noviembre de 2022 se rechazó de plano la "reposición" que interpuse contra el auto del 13 de septiembre de 2022 en lo que respecta a la revocación de las medidas cautelares porque, en sentir del juzgado, no procede reposición de reposición según los lineamientos del inciso 4° del artículo 318 del Código General del Proceso.

6. La anterior decisión incurrió en error porque el recurso que interpuse contra el auto que revocó una medida cautelar no fue de reposición, como interpretó el Juzgado, sino de apelación; y esta última no fue concedida ni negada.

7. En todo caso, no era procedente el rechazo de plano del aludido recurso porque tal consecuencia solo es aplicable cuando se interpone recurso contra un auto que ha decidido un recurso anterior, sin resolver puntos nuevos. Así lo previene el inciso 4° del artículo 318 del Código General del Proceso:

> *"El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso,* ***salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos"****.*

8. Pero cuando el auto atacado resuelve por primera vez un punto que no había sido decidido con anterioridad, tal como ocurrió en el auto del 13 de septiembre de 2022 que revocó por primera vez el decreto de una medida cautelar, nada obsta para que se interpongan recursos (de reposición o apelación) contra esa nueva decisión.

9. Ahora bien, en el auto del 2 de noviembre de 2022 el juzgado tomó una nueva decisión: revocar la medida cautelar de inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria del predio que es objeto de la controversia.

10. Por lo anterior, es procedente el recurso de reposición y en subsidio la apelación contra el auto del 2 de noviembre de 2022, pues esta decisión no resolvió la apelación contra el auto del 13 de septiembre de 2022 que revocó una medida cautelar; y, además, revocó la otra medida cautelar que se había decretado en auto del 16 de febrero de 2022.

11. Negar al demandante el derecho a recurrir una decisión que se tomó por primera vez solo porque las decisiones acusadas también resolvieron recursos de reposición interpuestos por otros sujetos procesales sobre varias materias, sería violar al actor su derecho de defensa, contradicción y debido proceso.

762

II. RAZONES EN QUE SE SUSTENA EL RECURSO

1. En el auto del 13 de septiembre de 2022, el Señor Juez revocó la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre los derechos fiduciarios de los Fideicomisos El Genovés FA-1973 e Inversionistas Derechos El Genovés FA-2000, administrados por Acción Sociedad Fiduciaria, porque –en su sentir– no se halla consagrada en las eventualidades previstas en los literales a) y b) del artículo 590 del Código General del Proceso.

Sin embargo, el error en que incurrió el sentenciador se muestra ostensible al primer golpe de vista, toda vez que la medida cautelar solicitada se sustentó en el literal c) de la mencionada disposición procesal y no en los literales a) y b) como supuso el señor juez.

De hecho, precisamente por ello se trata de una medida cautelar innominada, pues corresponde a "*cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión*", como textualmente reza la norma que la consagra.

De manera que negar la medida cautelar innominada bajo la excusa de que "*no está contemplada en los literales a) y b) del artículo 590 del Código General del Proceso*", se muestra a todas luces como una decisión incongruente, contradictoria, desenfocada y alejada del propósito que el legislador se propuso al prever la posibilidad de decretar cautelas distintas a las taxativamente enlistadas en la ley adjetiva.

Una cosa completamente distinta es que la práctica de la medida cautelar mencionada quede condicionada a la prestación de la caución respetiva, lo cual habrá de determinarse al momento en que se decida la solicitud de amparo de pobreza propuesta por la demandante.

Lo anterior se estima suficiente para que el Tribunal Superior de Bogotá revoque la decisión acusada y, en su lugar, ordene mantener incólume el numeral 2.1 del auto proferido el 16 de febrero de 2022.

2. Con relación a la revocatoria de la medida cautelar de inscripción de la ademada en el folio de matrícula inmobiliaria número 040-491993 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, correspondiente al Lote El Genovés II, así como en los respectivos folios de matrícula que se desenglobaron del mismo, la misma se pidió con base en el literal b) del artículo 590 del estatuto procesal, que prevé esa cautela *"cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual"*.

Como resulta fácil corroborar a partir de una simple lectura del libelo inicial, en la demanda se persigue la indemnización de perjuicios derivados de responsabilidad contractual o extracontractual de las demandadas. Por lo tanto, esta medida cautelar es perfectamente procedente.

Una cosa completamente distinta es que la práctica de la medida cautelar decretada quede condicionada a la prestación de la caución respetiva, lo cual habrá de determinarse al momento en que se decida la solicitud de amparo de pobreza propuesta por la demandante.

Lo anterior se estima suficiente para que el Tribunal Superior de Bogotá revoque la decisión acusada y, en su lugar, ordene mantener incólume el numeral 2.2 del auto proferido el 16 de febrero de 2022.

III. PETICIÓN

Por las razones expresadas con precedencia, me permito solicitar al Señor Juez, con el mayor respeto, se sirva revocar en su integridad el auto del 2 de noviembre de 2022 y, en su lugar, se sirva ordenar:

PRIMERO. Reponer el auto del 13 de septiembre de 2022 que negó la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre los derechos fiduciarios de los Fideicomisos El Genovés FA-1973 e Inversionistas Derechos El Genovés FA-2000, administrados por Acción Sociedad Fiduciaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 590, literal c) del Código General del Proceso.

SEGUNDO. Reponer el auto del 2 de noviembre de 2022 que negó la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre los derechos fiduciarios de la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria número 040-491993 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, correspondiente al Lote El Genovés II, así como en los respectivos folios de matrícula que se desenglobaron del mismo, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 590 del Código General del Proceso.

TERCERO. Mantener incólumes los numerales 2.1 y 2.2 del auto proferido del 16 de febrero de 2022.

CUARTO. Pronunciarse sobre la concesión del recurso de apelación formulado contra las decisiones del 13 de septiembre de 2022 y 2 de noviembre de 2022, para tener la posibilidad de acudir a ese medio de defensa en caso de que se nieguen sendas reposiciones.

263

Del Señor Juez, respetuosamente,

Carlos Páez Martín
C.C. 80.049.563 de Bogotá
T.P. 152.563 del Consejo Superior de la Judicatura
Correo inscrito en el RNA:
administrativo@paezmartin.com

De conformidad con lo previsto en los artículos 3° y 9° de la Ley 2213 de 2022, el presente memorial y sus anexos se envían a la dirección de notificación judicial electrónica de los demandados:

notijudicial@accion.com.co ; gallomedina@gallomedinaabogados.com ; srojas@gallomedinaabogados.com ; akrell@paladinrp.com ; notificaciones@grupograma.com ; crh@o4icolombia.com ; elizabeth.parraga@fundacionmasrural.org ; jsuescun@suescunlaw.com ; qc@quinonescruz.com ; ldebrigard@dbmabogados.com gbermudez@bstlegal.com ; fbotero@bstlegal.com ; jmmorales@bstlegal.com horaciocruztejada@yahoo.com.mx ; CARITOVALDERRUTEN@hotmail.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: EXPEDIENTE: 2022 - 00051 - 01 / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 07/09/2023 16:13

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (420 KB)
SUSTENTACIÓN RECURSO APELACIÓN SERVITECA.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: RINCON LAITON ABOGADOS S.A.S. <rinconlaitonabogados@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 16:04
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: EXPEDIENTE: 2022 - 00051 - 01 / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá, septiembre cuatro (04) de 2023.

Señor
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL
Mg. JAIME CHAVARRO MAHECHA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ciudad

EXPEDIENTE: **2022 - 00051 - 01**

DEMANDANTE: **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**

DEMANDADOS: **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL**

ENERGY CARS S.A.S.

ASUNTO: **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.**

FARID FRANCISCO RINCON CUELLAR, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.651.043 de Ubaté y Tarjeta Profesional de Abogado No. 254.641 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de **APODERADO ESPECIAL** de la parte **DEMANDANTE** dentro del proceso de la referencia, fundado en el **ARTICULO 322 Y 323 DEL C.G.P.** por medio de la presente y atendiendo al auto proferido por su Honorable Señoría de fecha treinta (30) de agosto de 2023, procedo a interponer **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos invocados en el documento adjunto.

FARID FRANCISCO RINCON
CC. 1.076.651.043 de Ubaté
T.P. No. 254.641 del C. S. de la J.

Bogotá, septiembre cuatro (04) de 2023.

Señor
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL
Mg. JAIME CHAVARRO MAHECHA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ciudad

EXPEDIENTE: **2022 - 00051 - 01**
DEMANDANTE: **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**
DEMANDADOS: **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL ENERGY CARS S.A.S.**

ASUNTO: **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.**

FARID FRANCISCO RINCON CUELLAR, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.076.651.043 de Ubaté y Tarjeta Profesional de Abogado No. 254.641 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de **APODERADO ESPECIAL** de la parte **DEMANDANTE** dentro del proceso de la referencia, fundado en el **ARTICULO 322 Y 323 DEL C.G.P.** por medio de la presente y atendiendo al auto proferido por su Honorable Señoría de fecha treinta (30) de agosto de 2023, procedo a interponer **SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE (09) DE JUNIO DE 2023 PROFERIDA POR EL JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos incoados y los siguientes:

HECHOS

1. El día doce (12) de junio de 2007, la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.538.896, suscribió **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** ubicado en la Avenida Primero de Mayo No. 72 Q-72 en la ciudad de Bogotá e identificado con **MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 50S-1073040**, dicho contrato se suscribió con la empresa **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA**, identificada con NIT No. 900.108.046-9, compañía esta, la cual es representada legalmente por el señor **JUAN CARLOS JARAMILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.501.265 de Cali, dicho contrato, estipuló entre otras cláusulas, las siguientes:

"***CUARTA. – Vigencia:*** *El arrendamiento tendrá una duración de tres (3) años contados a partir del 12 de junio de 2007. No obstante lo anterior, el termino del arrendamiento se prorrogara automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año, si ninguna de las Partes con una antelación de seis (6) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este contrato. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el Articulo 518 del Código de Comercio."*

2. Que en fecha veinticuatro (24) de agosto de 2015, bajo la aceptación tácita de la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**, aconteció la **CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL**, dicha cesión realizada entre la empresa **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA (CEDENTE)** y la compañía **ENERGY CARS S.A.S. (CESIONARIO)**, identificada con NIT No. 900.351.721 - 2.

3. El **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** suscrito inicialmente entre la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA** con la empresa **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA** y que posteriormente, a razón de la cesión anteriormente mencionada, se llevaría a cabo con la compañía **ENERGY CARS S.A.S,** tenía un **TÉRMINO INICIAL** de tres (3) años, dicho **TERMINO INICIAL** el cual venció el día once (11) de junio del año 2010 y que, como consecuencia este se vendría prorrogando de la siguiente forma:

a) TERMINO INCIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

- Este iba desde el doce (12) de junio de 2007, a el once (11) de junio de 2010.

b) RENOVACIÓN DEL CONTRATO (ART. 518 CODIGO DE COMERCIO)

- Este iba desde el doce (12) de junio de 2010, a el once (11) de junio de 2013.

c) PRORROGAS AUTOMATICAS

- Este iba desde el doce (12) de junio del 2013, a el once (11) de junio del 2014.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2014, a el once (11) de junio del 2015.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2015, a el once (11) de junio del 2016.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2016, a el once (11) de junio del 2017.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2017, a el once (11) de junio del 2018.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2018, a el once (11) de junio del 2019.

4. El día treinta (30) de noviembre de 2018, la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA** envió comunicado escrito dirigida a las empresas **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL** y **ENERGY CARS**, ante las direcciones de notificaciones comerciales y judiciales descritas en sus Certificados de Existencia y Representación Legal, mencionado comunicado, a través del cual se les informaba la **TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** suscrito el doce (12) de junio de 2007; dicha terminación y escrito enviado con una antelación de seis (06) meses al vencimiento de una de las prórrogas que se venían dando dentro del contrato, esto tal como se indicaba dentro del tenor literal del mismo.

5. La mencionada comunicación escrita a través de la cual se le informaba a las demandadas la **TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** suscrito en fecha doce (12) de junio de 2007 fue enviada a través de la empresa de mensajería INTERRAPIDISIMO, esto tal cual se evidencia dentro de la **GUIA DE ENVIO No. 700022508289** y envió este, el cual fue entregada exitosamente, esto tal cual se acredita con el **CERTIFICADO DE ENTREGA DE LA GUIA DE ENVIO No. 700022508289**.

6. El día treinta (30) de mayo de 2019 la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA** envió comunicado escrito dirigida a las empresas **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL** y **ENERGY CARS**, ante las direcciones de notificaciones comerciales y judiciales descritas en sus Certificados de Existencia y Representación Legal, mencionado comunicado, a través se les informaba que la entrega del **LOCAL COMERCIAL** objeto de la Lid debía ser entregado el día once (11) de junio de 2019.

7. La mencionada comunicación escrita a través de la cual se le informaba a las demandadas la **ENTREGA DE LOCAL COMERCIAL** fue enviada a través de la empresa de mensajería INTERRAPIDISIMO, esto tal cual se evidencia dentro de la **GUIA DE ENVIO No. 700026186643** y envió este, el cual fue entregada exitosamente, esto tal cual se acredita con el **CERTIFICADO DE ENTREGA DE LA GUIA DE ENVIO No. 700026186643**.

8. Una vez llegada y acontecida la fecha once (11) de junio de 2019, las empresas **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL** y **ENERGY CARS** no restituyeron el **LOCAL COMERCIAL** a favor de mi poderdante, razón por la cual se radico demanda con el fin de obtener la **RESTITUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE ARRENDADO** y la cual por reparto le fue asignada al juzgado veintinueve (29) civil del circuito de Bogotá.

9. El día nueve (09) de junio del año en curso, el juzgado veintinueve (29) civil del circuito de Bogotá llevo a cabo el trámite de audiencia de que trata el Art. 372 del C.G.P., diligencia está, dentro de la cual se llevó a cabo la fase de conciliación, se rindieron interrogatorios, se fijó litigio, se realizó control de legalidad, se concedió plazo para alegar de conclusión y se dictó fallo, el cual

resolvió **NEGAR** las pretensiones de la demanda, esto, fundando la decisión resuelta por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá en el pleno derecho y la condición especial de la que gozan los empresarios que a título de renta ocuparan un inmueble y/o local comercial por un periodo superior a dos (02) años consecutivos.

10. Que dentro del trámite de la mencionada audiencia, actuando en mi calidad de APODERADO de la parte demandante y al no estar de acuerdo con el sentido del mencionado fallo, me permití interponer **RECURSO DE APELACIÓN** en contra del mismo y el cual sustento en los siguientes:

FUNDAMENTOS DEL DERECHO

Es importante iniciar precisando que tal como se pudo establecer dentro del trámite de la audiencia de la que trata el Art. 372 del C.G.P; es indiscutible que en fecha veinticuatro (24) de agosto de 2015, bajo la aceptación tácita de la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**, aconteció la **CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** objeto de la Lid, dicha cesión realizada entre la empresa **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA (CEDENTE)** y la compañía **ENERGY CARS S.A.S. (CESIONARIO).**

Sin embargo, si bien existe la mencionada **CESIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL,** esta cesión se debe regir bajo los mismos parámetros, derechos, términos, obligaciones y condiciones establecidas y bajo las cuales se obligó el **ARRENDATARIO** inicial para con mi poderdante, no pudiendo desconocerse que un contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, independientemente de que el mismo sea cedido más adelante.

Así las cosas, nos debemos ceñir y su vez desvirtuar en el fundamento y consideración que tuvo en cuenta su Honorable Señoría para terminar resolviendo el fallo en el sentido anteriormente precitado, este, el cual se centra en lo dispuesto dentro del artículo 518 del Código de Comercio, el cual establece:

> ***"ARTÍCULO 518. DERECHO DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO****. El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos:*
>
> ***1.*** *Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato;*

2. *Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y*

3. *Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva***."**

Frente a esto, debemos analizar cuidadosamente el texto en el que el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá funda jurídicamente la decisión tomada, estableciendo así, que si bien por regla general la renovación de los contratos de cualquier tipo incluido el de arrendamiento depende de la voluntad de las partes, en el caso de arrendamiento de locales comerciales la ley impone su renovación bajo los mismos términos del inicialmente pactado en determinadas circunstancias que contempla la citada norma.

Regla general esta, la cual señala que luego de dos (02) años de arrendamiento el arrendatario adquiere el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento, y el arrendatario la obligación de renovarlo, siendo así, que si el comerciante lleva menos de dos (02) años de arrendamiento, el propietario del local no está obligado por la ley a renovarle el contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos precisar cuáles fueron los lapsos de tiempo en los cuales estuvo vigente el termino inicial y las prórrogas del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** objeto de la Lid**,** esto, con el fin de identificar si efectivamente existe o existió lugar a la renovación de la que trata el artículo 518 del Código de Comercio, lapsos estos los cuales ya se habían mencionado y que se dieron de la siguiente forma:

d) TERMINO INCIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

- Este iba desde el doce (12) de junio de 2007, a el once (11) de junio de 2010.

e) RENOVACIÓN DEL CONTRATO (ART. 518 CODIGO DE COMERCIO)

- Este iba desde el doce (12) de junio de 2010, a el once (11) de junio de 2013.

f) PRORROGAS AUTOMATICAS

- Este iba desde el doce (12) de junio del 2013, a el once (11) de junio del 2014.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2014, a el once (11) de junio del 2015.

- Este iba desde el doce (12) de junio del 2015, a el once (11) de junio del 2016.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2016, a el once (11) de junio del 2017.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2017, a el once (11) de junio del 2018.
- Este iba desde el doce (12) de junio del 2018, a el once (11) de junio del 2019.

Ante esto, no existe lugar a equivocación concerniente a que para junio del año 2010, la empresa **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL** llevaba más de dos (02) años ocupando a título de arrendamiento el bien inmueble objeto de la Lid, es así, que si tenemos de precedente que el mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** era por un término inicial de tres (03) años, el arrendatario efectivamente tenía el derecho a la **RENOVACIÓN** del mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** por el mismo término que el inicialmente pactado.

Por lo cual y teniendo en cuenta que el termino inicial del mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** objeto de la Lid **FINALIZO** el once (11) de junio de 2010, era a partir del día siguiente de esta fecha en la que entraba a regir no la voluntad de las partes y/o lo establecido dentro del mencionado contrato, sino, lo establecido en el tenor literal del artículo 518 del Código de Comercio protegiendo los derechos plenos del comerciante.

Constituyéndose así la **RENOVACIÓN** del mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** de pleno derecho y por una única vez por el mismo término del inicialmente pactado, esto es, que la **RENOVACIÓN** tuvo una vigencia desde el doce (12) de junio de 2010 y hasta el once (11) de junio de 2013, fecha esta del 2013 desde la cual cesaban los efectos especiales adquiridos por el arrendatario en gozo y protección de lo impartido en artículo 518 del Código de Comercio.

Es así, que desde la fecha doce (12) de junio de 2013 y ya habiéndose hecho uso de la protección especial de **RENOVACIÓN** de la que gozaba la empresa **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL** a razón de lo establecido en el artículo 518 del Código de Comercio, el **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** se debía ceñir, regir y actuar únicamente acorde a lo establecido dentro del mismo, en especial en su cláusula **CUARTA:**

> ***"CUARTA. – Vigencia:*** *El arrendamiento tendrá una duración de tres (3) años contados a partir del 12 de junio de 2007. No obstante lo anterior, el termino del arrendamiento se prorrogara automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año,* ***si ninguna de las Partes con una antelación de seis (6) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este contrato****. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el Articulo 518 del Código de Comercio."* (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, atendiendo al tenor literal del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** y teniendo en cuenta que ya había cesado el término inicialmente pactado y el derecho de **RENOVACIÓN,** el mismo contrato tuvo vigencia hasta la fecha once (11) de junio del 2019, esto a razón de las distintas y ya mencionadas prórrogas automáticas que se dieron dentro del mismo.

Por esto, atendiendo ya solamente a lo ceñido, regido y estipulado dentro de la cláusula cuarta del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,** mi poderdante en fecha treinta (30) de noviembre de 2018, envió comunicado escrito dirigida a las empresas **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL** y **ENERGY CARS**, mencionado comunicado a través del cual se les informaba la **TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL**, dicha terminación y escrito enviado con una antelación de seis (06) meses al vencimiento de una de las prórrogas que se venían dando dentro del contrato, esto tal como se indicaba dentro del tenor literal del mismo.

Ante esto, desafortunadamente y a favor de las demandadas mal interpreta el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá la norma en aplicación del artículo 518 del Código de Comercio, esto, pues infiere que al encontrarse frente a una **CESIÓN DE CONTRATO** el "**CESIONARIO"** que para el caso que nos ocupa es **ENERGY CARS S.A.S.,** nuevamente adquiere, desde cero, como si fuera un NUEVO CONTRATO, los derechos que ya fueron gozados por el "**CEDENTE**" y suscriptor original del mismo, estos derechos, dentro de los cuales se incluye el derecho de **RENOVACIÓN** del que ya hizo goce en el lapso de tiempo comprendido entre el doce (12) de junio de 2010 y hasta el once (11) de junio de 2013.

Al respecto, es indiscutible que amparado en el artículo 518 del código de comercio la sociedad **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE)** tenía el derecho a que por una ÚNICA (01) vez se le fuera renovado el **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** por un periodo igual al plazo del vencimiento del inicialmente pactado, es decir, tenía el derecho a que se le renovara nuevamente el contrato por tres (03) años más, teniendo como fecha de renovación el día doce (12) de junio de 2010 y fecha de finalización del once (11) de junio del 2013, esto tal cual aconteció como se menciono en los hechos anteriores.

Ahora bien, ya establecidas las fechas en las cuales se dio la **RENOVACIÓN** (Art 518 del C. Co) del mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** y las fechas en las cuales se prorrogo a razón de lo establecido dentro del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL,** debemos precisar cuáles son las facultades que se entienden por "**CESIÓN",** para lo cual nos debemos remitir al artículo 2004 del Código Civil el cual estipula:

> "***ARTICULO 2004. FACULTADES SOBRE CESION Y SUBARRIENDO****. El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que se le haya expresamente concedido;* ***pero en este caso no***

podrá el cesionario *o subarrendatario* ***usar o gozar de la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo.***"

Según lo preceptuado y tipificado en la norma aplicable en la materia, el contrato que sea **CEDIDO** se ejecutara en los mismos e iguales términos que los estipulados con el contratante y/o contratista cedido, es decir, para el caso que nos ocupa, la sociedad **ENERGY CARS SAS (CECIONARIO)** debe y debió cumplir el **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** bajo las mismas condiciones del celebrado entre la sociedad **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE)** y **CLAUDIA PATRICIA VARGAS (CONTRATANTE CEDIDO).**

Por lo cual, la **CESIÓN** significa que **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE)** renuncia a algo (derecho, contrato, acción o **beneficio)** en favor de **ENERGY CARS SAS (CESIONARIO),** esta última quien ocupara el lugar del cedente, haciéndose acreedor de los beneficios, derechos, obligaciones y deudas de los que el cedente goce y/o HUBIERA podido gozar, sustituyéndolo en todo y para todo efecto.

La Sala Civil, mediante sentencia CSJ SC, 19 oct. 2011, Exp. 2011 00847 01 se manifestó sobre la cesión de derechos, la cual puntualizo:

"El tercero cesionario toma el contrato y la relación jurídica en el estado en que se encuentra al instante de la cesión, convirtiéndose a partir de ésta, en parte, titular de los derechos y sujeto pasivo de las obligaciones en la misma situación existente entonces, sin producirse su alteración, modificación o extinción ***y, por ende, los derechos ejercidos y las prestaciones ya cumplidas no podrán ejercerse ni exigirse nuevamente, los pendientes se regularán por la ley y el contrato cedido y, las consecuencias nocivas de los incumplimientos.*** *(Subrayado y Negrilla fuera de texto). También aludió a la sentencia CSJ SC, 24 jul. 2012*

Por lo cual su señoría, es claro que la sociedad **ENERGY CARS SAS (CESIONARIO)** ya **NO** puede invocar el derecho de **RENOVACIÓN** del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL** consagrado en el artículo 518 del Código de Comercio y muchos menos el Juez podrá concedérselo de oficio, pues este mismo ya había sido gozado por parte de la sociedad **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE)** y al realizarse la **CESIÓN** del mencionado documento, los derechos ejercidos y las prestaciones ya cumplidas no pueden ejercerse ni exigirse nuevamente.

En otras palabras, se sustituyen o trasmiten totalmente las relaciones, obligaciones, derechos y vínculos contractuales tanto en su aspecto activo como en el pasivo, derivadas del mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL**, así, se cede toda la posición contractual de uno de los intervinientes contractuales originarios, lo que incluye los derechos y obligaciones derivadas del negocio

jurídico, así lo trajo a colación la Mg. Ponente Dolly Ocampo Caguasango en Sentencia 2829 del 2020, Exp. 63346:

> *"Se trata, en consecuencia, de la transmisión a favor de un tercero, el cesionario contractual "(…)* ***de toda la posición contractual de uno de los contratantes originarios (cedente), como complejo de derechos y obligaciones interdependientes que existían en cabeza del contratante (…)"*** *. Y no simplemente de la transmisión de un bien, sino de la condición de contratante de una las partes a un tercero, como función económico social, en un contrato bilateral."* (Subrayado y Negrilla fuera de Texto).

De igual forma, mediante Providencia de 22 de mayo de 1995, CCXXXIV-916, la Honorable Corte señaló:

> *"(…) cesión del contrato es una forma de sustitución contractual atípica en los convenios civiles que presupone el traspaso que, con el consentimiento del otro -a menos, claro está, que exista disposición legal en contrario-,* ***un contratante hace a un tercero que pasa a ocupar en el contrato la misma situación jurídica del cedente, de los derechos y obligaciones emanados de un contrato bilateral*** *(…)". (Subrayado y Negrilla fuera de texto).*

Con esto su señoría, no se pretende más que hacer ver el error en que incurre el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, pues con todo lo anteriormente mencionado y trayendo a colación fundamentos jurídicos que si son objetivos al caso que nos ocupa, es irrefutable que la sociedad **ENERGY CARS SAS (CESIONARIO)** no puede gozar de los mimos derechos ejercidos y de las prestaciones **ya cumplidas** del mencionado **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL,** pues estas ya fueron exigidas, otorgadas, rozadas, ejercidas y cumplidas por la sociedad **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE),** por lo cual la primera no puede pretender que se le conceda **NUEVAMENTE** el derecho de renovación consagrado en el artículo 518 del Código de Comercio cuando el cedente ya realizo uso y goce de mencionados derechos.

De igual forma, no se puede menospreciar que el señor JUAN CARLOS JARAMILLO POSSO es y fue el Representante Legal Principal de las sociedades **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE)** y **ENERGY CARS SAS (CESIONARIO)** para el momento de la **CESIÓN** del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL,** por lo cual, este muy bien sabia de las condiciones, clausulas y obligaciones del mencionado documento y mucho más, de los derechos ya ejercidos y de las prestaciones ya cumplidas de las que se había beneficiado la sociedad **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL (CEDENTE).**

Para concluir, erra el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá al inferir que la **CESIÓN** del **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** otorga desde cero el derecho de **RENOVACIÓN** a favor del **CESIONARIO** a razón del artículo 518 del Código de Comercio, pues de ser así, esto se convertiría en algo **PERPETUO,** perjudicando así al propietario del inmueble y desconociendo su derecho de utilizar a su libre albedrío su patrimonio.

De igual forma y como se evidencio en la sentencia, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá interpreta que lo que se pretende con la impetración de la presente demanda era el **AUMENTO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO,** sin embargo, lo único que se pretende con la misma era la **RESTITUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE ARRENDADO** objeto de la Lid.

PRETENSIONES

Con base en los hechos antes expuestos y los fundamentos jurídicos expuestos, previo el reconocimiento de mi personería para actuar como apoderado de la parte demandante y una vez surtidos los trámites procesales, solicito:

1. Que se reponga el **FALLO** de fecha nueve (09) de junio del año 2023 proferido por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá y en consecuencia, se me concedan las siguientes pretensiones.

a. Que se decrete la **TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** del Local Comercial ubicado en la Avenida Primero de Mayo No. 72 Q-72 en la ciudad de Bogotá e identificado con Matrícula inmobiliaria No. 50S-1073040, suscrito el día 12 de junio de 2007, entre **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**, arrendadora y **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA (CEDENTE)** y la compañía **ENERGY CARS S.A.S. (CESIONARIO)** arrendatario.

b. Que, como consecuencia de la terminación del contrato, se ordene a las empresas **COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA (CEDENTE)** y la compañía **ENERGY CARS S.A.S. (CESIONARIO)** arrendatario, la **RESTITUCIÓN DEL LOCAL COMERCIAL** ubicado en la Avenida Primero de Mayo No. 72 Q-72 en la ciudad de Bogotá e identificado con Matrícula inmobiliaria No. 50S-1073040, a favor de la señora **CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA**, aquí Demandante.

c. Que de no efectuarse la entrega del inmueble dentro del término fijado por su despacho, se proceda a la práctica de la diligencia de lanzamiento, directamente por este juzgado o a través de comisionado.

d. Que se condene en costas del proceso al demandado.

NOTIFICACIONES

Para que se efectúen debidamente facilito las siguientes direcciones:

- La dirección de domicilio y de notificación de la sociedad COMERCIALIZADORA CAPITAL OIL LTDA puede ser notificada en Avenida Primero de Mayo No. 72 Q-72 en la ciudad de Bogotá, dirección electrónica ccapitaloil@gmail.com

- La dirección de domicilio y de notificación de la sociedad ENERGY CARS S.A.S. puede ser notificada en Avenida Primero de Mayo No. 72 Q-72 en la ciudad de Bogotá, dirección electrónica bateritecaenergy@hotmail.com

- La demandante sociedad CLAUDIA PATRICIA VARGAS ROA recibirá notificaciones en la Avenida Calle 24 No. 95 A – 80 Oficina 701 en esta ciudad, dirección electrónica patico2005@hotmail.com

- El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Calle 166 No. 49-20 Int. 214, en la ciudad de Bogotá, dirección electrónica rinconlaitonabogados@gmail.com celular 311 826 1520.

Señor Juez,



FARID FRANCISCO RINCON CUELLAR
CC. 1.076.651.043 de Ubaté
T.P. No. 254.641 del C. S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA GONZÁLEZ FLOREZ RV: recurso apelación 11001310303120180062601 gloria Ulloa conta Edgar Pedraza

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 8/09/2023 12:10 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

8 archivos adjuntos (1 MB)

proceso 11001310303120180062601 de gloria ulloa contra edgar dario pedraza aranda.pdf; certificado de libertad San Antonio Sur 2.pdf; Certificado de Liberta Lote 37 Jardines de Paz.pdf; Certificado de Liberta Lote 43 Jardines de Paz.pdf; certificado de libertad San Antonio Sur 1.pdf; certificado Apto Edificio Platino Venta 2019.pdf; certificado Apto EDIFICIO MIRADOR DEL CEDRO Venta 2020.pdf; certificado Apto EDIFICIO AZAHARA.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA GONZÁLEZ FLOREZ

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: JULIO CESAR SANCHEZ NUÑEZ <jucesanu2006@yahoo.es>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 12:06
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; melo_tovar@yahoo.com <melo_tovar@yahoo.com>; adrymartinsanchez@gmail.com <adrymartinsanchez@gmail.com>; Pedro Luis Ospina Sanchez <pedroluisospina@outlook.com>; danielbonillaserna@gmail.com <danielbonillaserna@gmail.com>
Asunto: recurso apelación 11001310303120180062601 gloria Ulloa conta Edgar Pedraza

01DOCTORA
FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ MAGISTRADA.
HONORABLE MAGISTRADA
TRIBUNAL SUPEROIOR DE BOGOTA SALA CIVIL
E.S.D.

Referencia: 11001310303120180062600

Proceso: Verbal de simulación
Demandante: GLORIA CONSUELO ULLOA ARANDA
Demandados: EDGAR DARÍO PEDRAZA ARANDA, JUDITH YAMILY PEDRAZA ARANDA, CONSTANZA PIEDAD PEDRAZA ARANDA, GRUPO EDIFIKAR SAS, HEREDEROS INDETERMINADOS DE ROSALBA ARANDA DE PEDRAZA, HEREDEROS INDETERMINADOS DE LAUREANO PEDRAZA ROSAS

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACION en contra de la Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá D.C., de fecha 17 de julio de 2023 notificada por Estado del 18 de julio de 2023.

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ NUÑEZ, obrando en mi condición de apoderado especial de la demandante, legalmente reconocido, comedidamente ocurro ante esa Honorable Corporación con el fin de manifestarle que, estando dentro de la oportunidad legal respectiva, por medio del presente escrito, sustento el recurso de apelación que se interpone contra la sentencia de primera instancia de fecha 17 de julio de 2023, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá D.C., cuya referencia del proceso es 201800626 en los siguientes términos:

La sentencia recurrida, al pronunciarse de fondo sobre el asunto, negó de forma parcial las súplicas de la demanda, al considerar, en síntesis, que no se demostró la simulación de la compraventa realizada entre el Grupo Edifikar SAS y los hermanos Pedraza Aranda (parte demandada), respecto del bien inmueble casa ubicada en Bogotá en la dirección carrera 52 No. 123B - 05 del barrio Batán, identificada con matrícula inmobiliaria 50N-635434 cuyo título se encuentra en la escritura pública No. 933 del 23 de julio de 2014 de la Notaría 10 del círculo de Bogotá D.C.

Es del caso señalar que el dueño de dicho inmueble era el señor Laureano Pedraza Rosas quien otorgó poder especial para esta venta a su hijo Edgar Darío Pedraza Aranda (uno de los demandados), el 8 de julio de 2014, pero falleció el 24 de julio de 2014 sin completarse el negocio jurídico encomendado y del cual se pretende la declaratoria de simulación.

Razones de la inconformidad con la providencia apelada:

A. Defecto sustantivo al no tener en cuenta normas aplicables:

A.1. La sentencia recurrida no tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 740 del Código Civil ya que en el análisis realizado señala que la prueba del contrato tildado de simulado se encuentra en la Escritura Pública No. 933 del 23 de julio de 2014 de la Notaría 10 del círculo de Bogotá D.C. por la cual Laureano Pedraza Rosas "*transfirió al Grupo Edifikar SAS el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en la Av. Carrera 52 No. 123B-05 barrio el BATAN de Bogotá identificado con matrícula inmobiliaria 50N-635434*"(página 11).

No obstante, mediante una escritura pública no se transfiere la propiedad de un inmueble, ya que el negocio requiere de dos elementos que no se pueden separar, siendo estos el título y el modo[1]. La escritura pública se constituye como el título, fuente de una obligación; y el modo, es la manera de adquirir el dominio, por lo tanto, siendo que el título se protocolizó con escritura pública No. 933 del 23 de julio de 2014, el modo se pretendió efectuar después, el 28 de julio de 2014, luego de la muerte del dueño del inmueble ocurrida el día 24 de julio de 2014, es decir, sin soporte jurídico, sin poder especial vigente, por lo tanto, en realidad no se transfirió el dominio de la casa ubicada en el barrio Batán y el comprador no adquirió el dominio, aunque la parte demandada, insiste en darle efectos jurídicos (de forma simulada), desacatando la ley que prescribió la forma como se adquiere el dominio en Colombia.

Esto demuestra no solo el desconocimiento de la Ley por parte de la parte demandada y la no aplicación de la misma en la sentencia recurrida, sino que fortalece los argumentos de simulación argüidos en la demanda y que se refieren en el presente escrito de apelación.

La venta que se pretende sea declarada simulada, no se ajustó a la ley y por lo tanto, al no contar con los efectos de ley, surge a la luz, la simulación en que incurrió la parte demandada al insistir en su eficacia, lo cual fue erradamente reconocido por la sentencia de primera instancia.

A.2. De la mano del anterior argumento, la sentencia no tomó en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2189 del Código Civil, así como tampoco lo dispuesto en los artículos 2194 y 2195 del mismo código, debido a que la parte demandada, particularmente el señor Edgar Darío Pedraza Aranda y el Grupo Edifikar SAS, siguieron utilizando un poder especial para venta, después de haber fallecido el otorgante, quien fue el señor Laureano Pedraza dueño del inmueble vendido.

[1] Corte Constitucional, Sentencia SU454/16.

Fue así como el poder especial otorgado por el señor Laureano Pedraza a su hijo Edgar Darío Pedraza Aranda el 8 de julio de 2014 para la venta del inmueble señalado, terminó con su muerte, ocurrida el 24 de julio de 2014, no obstante, las partes continuaron dándole efectos a futuro, luego de la muerte, lo cual es improcedente; las acciones adelantadas después de la muerte de quien otorgó el poder especial para venta, fueron:

i) la radicación de la solicitud de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos de la escritura pública de venta No. 933 del 23 de julio de 2014, realizada el 28 de julio de 2014, 4 días después del fallecimiento del señor Laureano Pedraza, lo cual demuestra la voluntad simulada de transferir un dominio de forma contraria a la ley.

ii) los pagos de dinero efectuados por el comprador – Grupo Edifikar SAS y recibidos por el apoderado Edgar Darío Pedraza Aranda y su madre Rosalba Aranda, terceros sin poder vigente para recibir el precio de la venta simulada. Estos pagos se efectuaron en las fechas 02 de septiembre, 22 de septiembre, 28 de octubre, 11 de noviembre, 27 de noviembre, 01 y 03 de diciembre de 2014, (relacionados en la tabla 2 de la página 23 de la sentencia recurrida), luego de varios meses de la muerte del poderdante señor Laureano Pedraza.
Aquí se destaca que la forma de pago también es un indicio del acuerdo simulado, porque las partes, hermanos Pedraza Aranda y Grupo Edifikar SAS ejecutaron acciones de dar y recibir, sin estar habilitados jurídicamente para hacerlo, dando apariencia simultánea en la medida en que trascurría el tiempo, que se había celebrado y finalizado un negocio jurídico conforme a ley, lo cual no fue así.

iii) Radicación de las solicitudes de anotación en la oficina de Instrumentos Públicos, de los bienes inmuebles que se determinaron como parte del pago de la venta de la casa, las cuales ocurrieron después del 24 de julio de 2014 cuando ocurrió la muerte del señor Laureano Pedraza, así:

*Frente al inmueble apartamento con matrícula inmobiliaria 50N-20722898 – Escritura Pública No. 934 del 23 de julio de 2014, la solicitud de inscripción se realizó el 31 de julio de 2014, 7 días después de la muerte del señor Laureano Pedraza.

*Frente al inmueble apartamento con matrícula inmobiliaria 50N-1180364 Escritura Pública No. 932 del 23 de julio de 2014, la solicitud de inscripción se realizó el 28 de julio de 2014, 4 días después de la muerte del señor Laureano Pedraza

*Cabe destacar que la parte demandada señaló que con los dineros en efectivo que fueron pagados por el Grupo Edifikar a los Hermanos Pedraza Aranda y a la señor Rosalba Aranda luego del fallecimiento del señor Laureano, compraron un tercer inmueble, a nombre de los mismos demandados, hermanos Pedraza Aranda, el cual

también corre la misma suerte de los demás al estar esta compra en conexión directa con el negocio de venta simulada de la casa del Batán. Este inmueble es el apartamento con matrícula inmobiliaria 50N-20668116 con Escritura Pública No. 12100 del 14 de noviembre de 2014 cuya solicitud de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos sucedió el 20 de noviembre de 2014.

iv) Cancelación de la hipoteca creada a favor del vendedor – Laureano Pedraza Rosas y a cargo del Grupo Edifikar SAS como comprador, realizada por escritura pública 1634 del 04 de diciembre de 2014 en la Notaría 10 de Bogotá, inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos el 09 de diciembre de 2014.

Al respecto, ha señalado la Corte Suprema de Justicia, que recibir dineros luego de la muerte del mandante o poderdante, aunque hayan sido destinados a favor del mandatario, contradice la ley, porque, al momento de la muerte, dichos dineros pasan a ser parte de los activos objeto de la liquidación de la sociedad conyugal y de los herederos y adicionalmente, el recibir esos dineros no tiene "conexión causal con la muerte de aquel"[2].

Por lo tanto, en la sentencia recurrida no se valoró que, por disposición legal, el señor Edgar Darío Pedraza Aranda no podía ejercer como mandatario de su padre fallecido, así como tampoco el Grupo Edifikar SAS podía reconocer jurídicamente a Edgar Darío Pedraza Aranda ni a ningún otro tercero como legitimado para recibir el precio de la venta simulada de la casa inmueble identificado al inicio del presente escrito.

En este sentido, la sentencia de primera instancia inobservó la invalidez e ineficacia de un poder especial conferido cuyo otorgante falleció antes de culminarse la venta simulada, lo que demuestra la conducta irregular de los demandados al usar un poder especial sin vigencia con el propósito de finalizar a toda costa un negocio simulado que jurídicamente no tiene validez.

En otras palabras, el pago irregular del negocio, luego de la muerte del dueño del inmueble, es indicio grave de la venta simulada pues no estaban habilitados jurídicamente para finalizar el negocio de venta pretendido. Los dineros pagados como parte del precio de la venta simulada, debían haber pasado a formar parte de la universalidad de bienes para liquidar la sociedad conyugal que sostuvo Laureano Pedraza con su esposa y madre de la demandante, Rosalba Aranda; no obstante la sentencia de primera instancia determinó que se trató de una venta cuyo precio fue "*efectivamente pagado*", observando "*certeza del negocio jurídico exteriorizado*" inobservando las normas del Código Civil citadas.

---

[2] Corte Suprema de Justicia de Colombia, SC14806-2017 Radicación n.° 08001-31-03-010-2010-00254-01, Sentencia del 20 de septiembre de 2017, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo

Hubo un negocio no perfeccionado, un negocio en donde no se transfirió el dominio conforme a las normas del código civil y a pesar de ello, la sentencia de primera instancia no tiene en cuenta estas normas al indicar que no hay prueba de la voluntad de simulación entre las partes. Pero contrario a lo observado en la sentencia recurrida, sí hay una "*declaración aparente*" y además persistente en los demandados, pues afirman que hubo un negocio con el lleno de los requisitos legales, pero jurídicamente no fue así porque nunca finalizó, lo cual demuestra voluntad de simulación.

B. Defectos fácticos, al no valorar de forma integral las pruebas obrantes en el proceso:

Los indicios que demuestran la simulación deben apreciarse de forma armónica, en su conjunto, para que salga a la luz la negociación oculta. Así, a continuación, se refieren los elementos probatorios que no fueron valorados en la sentencia recurrida, y que conducen de forma inequívoca a evidenciar con gravedad, la voluntad simulada o acuerdo para defraudar la sociedad conyugal que estuvo vigente entre Laureano Pedraza y Rosalba Aranda, así como los derechos herenciales de mi representada.

Las pruebas del acuerdo para fingir un contrato distinto al celebrado de forma simultánea a la realización del mismo, se evidencia en lo siguiente:

B.1. Contradicción no valorada en la sentencia recurrida: En la audiencia del 5 de abril de 2022, el señor Edgar Chavarro, representante legal del Grupo Edifikar SAS, afirmó que negoció con el señor "Aranda" refiriéndose al señor Pedraza, señalando que se veía en "*plenas condiciones*" adicionando que "*no se veía como una persona enferma ni nada de ese estilo*" y dijo que fue a la notaría con él "***y delante mío hizo el poder para su hijo***". Lo cual no concuerda con la historia clínica del señor Laureano Pedraza pues sufría parálisis en los miembros superiores, sobre todo en el lado izquierdo. Tampoco concuerda con el dicho del señor Edgar Darío Pedraza Aranda quien en la audiencia del 27 de abril de 2023 indicó que el poder que su padre le otorgó para el negocio demandado en simulación, lo hicieron el 8 de julio de 2014 cuando estaban ***los dos en el carro*** y según él, por iniciativa del señor Laureano, quien le habría dicho a su hijo en el carro, que de una vez fueran a hacer el poder. Claramente los dos relatos sobre la elaboración del poder especial para la venta simulada, son contrarios. (Minuto 42:20 y siguientes de la audiencia del 5-04-2022 Vs. Minuto 24:10 y siguientes de la audiencia del 27-04-2023)

B.2. Contradicción no valorada en la sentencia recurrida: En la audiencia del 27 de abril de 2023, la señora Yamily Pedraza afirmó que era una gran ilusión para el señor Laureano Pedraza que los inmuebles producto de la venta de la casa del Batán quedaran a nombre de tres hermanos Pedraza Aranda (Minuto 1:00:15 y siguientes). No obstante, dicha "*gran ilusión*" no fue expresada por el señor

Laureano cuando conoció los inmuebles en cuestión, pues según el dicho del señor Edgar Chavarro, se mantuvo **muy callado** (Minuto 1:34:50 y siguientes de la audiencia del 27-04-2023); en efecto, indicó que la negociación fue adelantada con el apoderado Edgar Darío Pedraza y con la señora Rosalba Aranda, quien identificó con determinación uno de los inmuebles que quería recibir como parte del precio de la venta.

B.3. Imprecisión en los elementos del negocio simulado que fueron obviados en la sentencia recurrida y que corresponden a indicios del acuerdo simulado:

B.3.1. Indicio del tiempo sospechoso del negocio: En la audiencia celebrada el 27 de abril de 2023, la parte demandada, conformada por los hermanos Pedraza y por el Representante Legal de la constructora Edifikar señor Edgar Chavarro, no señaló ninguna fecha ni ningún lapso en el cual se hubiera iniciado la negociación de la venta de la casa del Batán. No especificaron fechas ni refirieron temporada aproximada, la parte demandada se limitó a decir que la negociación fue "*de tiempo atrás*" sin especificar tiempos, lo que demuestra que hubo acuerdo previo entre todos los demandados para no especificar fechas, seguramente porque la negociación no fue tan extensa como lo quisieron dar a entender. Sin embargo, en la sentencia recurrida se afirma que la negociación fue de seis meses.

Así mismo, los hermanos Pedraza Aranda no aclararon cuándo supuestamente publicaron el aviso de venta en un periódico; No aportaron el aviso de periódico, por lo que no hay prueba de la realidad del dicho de la parte demandada, en sentido que fue por un aviso en el periódico que realizaron la compraventa, pero la sentencia recurrida tomó ese dicho por cierto. Sin perjuicio de ello, conforme a los documentos aportados al proceso, dicha negociación no fue tan larga en el tiempo como lo quieren hacer ver, de acuerdo con las siguientes fechas ciertas que tienen el respectivo soporte documental dentro del proceso:

8 de julio de 2014 cuando el señor Laureano Pedraza otorgó poder especial a su hijo Edgar Darío Pedraza Aranda para transferir el dominio de la casa del Batán. Fecha en la cual ya había sido diagnosticado de cáncer con compromiso neurovascular, parálisis progresiva, tomaba tramadol líquido todos los días y había tenido dos hospitalizaciones recientes a finales de mayo y comienzos de julio. Pero dicho opioide no era suficiente ante los dolores que padecía, pues el 14 de julio siguiente, tan solo 6 días después de haber otorgado poder especial, le suministraron morfina y nuevamente fue hospitalizado.

16 de julio de 2023 fecha en la que se firmó el contrato de promesa de compraventa, dos días después de una nueva hospitalización del señor Laureano Pedraza, donde se consignó como fecha de escrituración el ***25 de julio de 2014***. En este contrato de promesa de compraventa, se especificó los bienes inmuebles que se recibirían en parte de pago de la venta de la casa, pero en ningún lado se dice que dichos bienes serían a nombre de los tres hermanos Pedraza Aranda, es decir, es un indicio

más de la apropiación efectuada por ellos para el fraude a la sociedad conyugal y en consecuencia, a los derechos herenciales de la demandante.

23 de julio de 2014 fecha en la cual firmaron las escrituras de compraventa de la casa del Batán, en la Notaría 10 de Bogotá, **DOS DÍAS ANTES DE LO ACORDADO EN EL CONTRATO DE PROMESA DE VENTA** entre la parte vendedora y compradora. La sentencia recurrida no tomó en cuenta íntegramente la promesa de venta, ya que allí se consignó que la firma de la escritura sería el 25 de julio de 2014, no el 23 de julio de 2014 como ocurrió, un día antes de la muerte de Laureano Pedraza Rosas. Entonces, existe un vacío que, junto a los demás elementos descritos en el presente documento, conducen a la conclusión inequívoca de la voluntad de simulación por parte de los demandados, que no fue tenida en cuenta por la sentencia. ¿Por qué los demandados firmaron una escritura pública que es un acto solemne y que requiere de una planeación según la costumbre, antes de la fecha estipulada en la promesa, sin mediar documento alguno o manifestación externa sobre el particular? *Si las reglas del negocio estaban claras* conforme al razonamiento de la sentencia recurrida, ¿por qué se cambió para anticipar la fecha de la firma de la escritura pública? ¿Dichos cambios ameritan un tiempo de comunicación y de coordinación con la notaría respectiva?, esto muestra nuevamente camaradería entre los hermanos Pedraza Aranda y el grupo Edifikar SAS para llevar a cabo la venta de la casa del Batán a como diera lugar, lo cual no fue tenido en cuenta por la sentencia recurrida, como un indicio de afecto o camaradería entre los contratantes, entendiendo que el señor Laureano Pedraza en vida no participó de las negociaciones sino su hijo quien tuvo poder vigente meramente hasta el fallecimiento de su padre.

Este indicio de simulación se hace evidente al observar que, las fechas de los documentos que dan cuenta del negocio simulado son cortas en el tiempo, pues Edgar Darío Pedraza a los 8 días de haber firmado el poder, el 16 de julio de 2014 firmó la promesa de venta, estipulando como fecha de escrituración el 25 de julio, tan solo 9 días después, los cuales no se cumplieron, porque la escrituración sucedió el 23 de julio de 2014, a 7 días después de haber realizado la promesa de venta. Valga resaltar que no hay rastro del por qué adelantaron la fecha de escrituración, pero ante el contexto de enfermedad que padecía el poderdante, es lógico pensar que esa puede ser la causa de la anticipación de la fecha de la escrituración. Después de todo, una vez fallecido el señor Laureano Pedraza, el poder otorgado no podría ser usado de forma legítima para firmar una escritura pública y el entramado simulado no tendría efecto; de allí que para el caso en particular, el tiempo apremiaba, y anticiparon la suscripción de las escrituras sin explicación ni sustento razonable distinto al señalado.

La alianza del comprador Grupo Edifikar SAS con los hermanos Pedraza Aranda, como indicio de afecto o camaradería entre las partes, también es evidente pues aquel guarda silencio frente a las fechas de los negocios, y además, en su momento, acudió el 23 de julio de 2014 a suscribir las escrituras públicas, dos días antes de lo

estipulado en el contrato de promesa, sin decir nada ni aclarar nada, porque está presto a realizar lo que los hermanos Pedraza Aranda le indiquen.

B.3.2. En la audiencia del 27 de abril de 2023, el señor Edgar Chavarro señaló que no considera importante que en el poder otorgado el 8 de julio de 2014 se especifiquen las cosas o a nombre de quién quedan los bienes entregados en parte de pago, reiteró que el poder era para continuar el negocio y así el apoderado puede dar las instrucciones del negocio. (Minuto 1:44:55 y siguientes). Aunado a ello, señaló que dicho poder fue revisado por el área jurídica del Grupo Edifikar, encontrándolo bien, a efectos de finalizar el negocio, con las indicaciones o instrucciones del mandatario, señor Edgar Darío Pedraza Aranda.

No obstante, el poder otorgado por el señor Laureano Pedraza a su hijo Edgar Pedraza no fue un poder general para que el apoderado adelantara toda acción que considerase, sino que se trató de un poder especial para transferir el inmueble casa del Batán, pactar el precio, las formas de pago y firmar cualquier documento necesario para el cumplimiento del mandato, pero de ninguna manera el poder conferido habilitó al mandatario a determinar a nombre de quién debían quedar los inmuebles que fueron parte de pago, siendo lo lógico en las transacciones de este tipo, que los bienes parte de pago queden a nombre del poderdante, y no del apoderado ni de las hermanas del apoderado, situación que no fue tenida en cuenta por la sentencia recurrida. Más aún cuando falleció el poderdante señor Laureano Pedraza, el poder queda sin efectos como lo ordena la ley y el precio no podría ser pagado a un tercero favorecido sino que debía entrar a la masa que debía conformarse para liquidar la sociedad conyugal que se tuvo con la cónyuge supérstite, madrea de mi representada, como se mencionó anteriormente.

Pero este indicio no solo consiste en que los bienes que constituyeron parte del precio de la venta simulada, entraron a un patrimonio distinto al del dueño y a la universalidad que debía ser objeto de liquidación de la sociedad conyugal y luego masa sucesoral, sino que además, dichos bienes entran al patrimonio de los hijos del matrimonio, claro está, para excluir cualquier opción legítima de acceso sucesoral por parte de las hijas extramatrimoniales, tanto del señor Laureano Pedraza como de la señora Rosalba Aranda y a quien represento como parte demandante. Situación que para los ojos de la señora Rosalba Aranda al parecer estaba bien, ya que siempre quiso favorecer a sus hijos del matrimonio, situación desconocida por la sentencia de primera instancia, con los hechos relatados en la demanda y que no fueron controvertidos por los demandados.

En el proceso también se indicó que con el dinero que obró como pago en efectivo, los hermanos adquirieron el dominio del tercer inmueble señalado, con matrícula inmobiliaria 50N-20668116, confirmando nuevamente la intensión de beneficio exclusivo a los hijos matrimoniales, sin tener en cuenta los derechos patrimoniales de Rosalba Aranda, pues la intensión conjunta fue defraudar la sociedad conyugal

que estuvo vigente entre el señor Laureano Pedraza y Rosalba Aranda, madre de la demandante.

El monto del dinero efectivo que recibió Rosalba Aranda por la venta de la casa ubicada en el barrio BATAN, según los soportes relacionados en la página 23 de la sentencia recurrida, no corresponde con la suma que ella habría recibido de haberse respetado que el precio de la venta simulada debió entrar a la universalidad que debía ser objeto de liquidación de la sociedad conyugal, al momento de la muerte del señor Laureano Pedraza.

EL fallo recurrido destaca que el señor Edgar Chavarro del Grupo Edifikar SAS dijo que "*desconocía la situación familiar del vendedor*" y que solo "*verificó*" que "*la persona que vendía pudiera vender*" y "*que no requería de la autorización de alguien más*"; no obstante, el fallo no valoró el dicho del mismo representante legal cuando señaló que las personas con las que negoció no fue con el señor Laureano sino con Edgar Darío Pedraza y Rosalba Aranda, adicional a que el señor Laureano se mostraba callado. En esta línea argumentativa, si el Grupo Edifikar SAS verificó quien vendía podía vender, ¿por qué no verificó que al morir el señor Laureano, el modo no se podía dar, o acaso lo omitió por su voluntad simulada de llevar a cabo un negocio a como diera lugar? ¿Aunque no existiera jurídicamente un poder especial vigente ante la ley?

B.3.3. Ausencia de necesidad de realizar la venta por parte del señor Laureano Pedraza Rosas, como indicio del acuerdo simulado que no fue observado por la sentencia de primera instancia.

Según el dicho de los hermanos Pedraza Aranda en audiencia surtida el 27 de abril de 2023 en interrogatorio de parte, la venta de la casa ubicada en el Batán se debió a que era "*inhabitable*" por filtraciones y/o goteras, lo cual es contrario al propio dicho de los mismos hermanos en el sentido de cuidar mucho a sus padres, pues ante la presunta aparición de una gotera, el hijo arquitecto Edgar Darío Pedraza Aranda tenía la facilidad de arreglarla inmediatamente; es decir, sin esperar a problemas mayores de supuestas filtraciones y daños en el inmueble.

La motivación del negocio también fue el alto valor comercial de uno de los bienes inmuebles más representativos en valor para la sociedad conyugal, sin consideración a que el duelo, el señor Laureano estaba enfermo y en tal condición, no se observa necesidad de vender la casa en la que vivió por muchos años y estar en las gestiones demandantes y desgastantes de los trasteos, pues lo más razonable sería que una vez se recuperara de la última hospitalización, el dueño regresara a descansar a su casa. Por ende, este acto de aprovechamiento demuestra fehacientemente la intención de defraudar a terceros, pues el dueño no tenía ninguna necesidad de vender la casa donde vivía.

A gracia de discusión este negocio implicaba que, en caso de recuperarse el señor Laureano, habría sido "sacado de su casa, de su hogar" por parte de sus hijos (él

habría llegado a vivir a alguno de los apartamentos apropiados por sus tres (3) hijos Pedraza Aranda, situación que no ocurrió por el deceso acaecido el 24 de julio de 2014.

B.3.4. Los inmuebles adquiridos por los tres hermanos en el año 2014 como producto del negocio de venta de la casa del Batán cuyo propietario era el señor Laureano Pedraza Rosas con sociedad conyugal vigente y cuya simulación se solicita sea declarada por su Señoría, fueron vendidos por los hermanos en el transcurso del presente proceso judicial, lo cual consolidó la simulación demandada y así defraudaron a la sociedad conyugal y escondieron otros bienes, tal como se observa en la siguiente tabla, información que se soporta con los certificados de libertad actualizados que se aportan con el presente documento, para conocimiento del Despacho Judicial.

Dirección	**Matrícula inmobiliaria**	**Escritura Pública de compra-venta**	**Notaría**	**Valor de la compraventa $**	**Partes del negocio:**	**NUEVA VENTA Durante el proceso judicial de simulación:**
Apartamento 301 Calle 142 No. 15 – 08 – 24 Edificio Mirador del Cedro Garajes 11 y 31 Depósito 22	50N-20722898 Con AREA de 65.86M2 privada	No. 934 del 23 de julio de 2014	No. 10 de Bogotá	260.000.000	Del Grupo Edifikar A: Edgar Darío, Judith Yamily y Constanza Piedad Pedraza Aranda	De: Edgar Darío Pedraza Aranda **A:** Judith Yamily y Constanza Piedad Pedraza Aranda **ESCRITURA 1069** del **29-10-2020** NOTARIA SEGUNDA de BUGA Sin precio
Apartamento 301 Carrera 20 No. 125 – 46 // Transversal 27 No. 125 – 46 Edificio Azahara I Garajes 7 y 8 Depósito	50N-1180364 AREA PRIVADA CONSTRUIDA :120.6288 MTS.2	No. 932 del 23 de julio de 2014	No. 10 de Bogotá	350.000.000	De: Garzón Osorio Adriana y Osorio DE Garzón María Beatriz A: Edgar Darío, Judith Yamily y Constanza Piedad Pedraza Aranda	De: Edgar Darío, Judith Yamily y Constanza Piedad Pedraza Aranda **A:** Forero De Gonzalez Ana Purificación **ESCRITURA 60** del **14-01-2022** NOTARIA TREINTA Y NUEVE de BOGOTA Precio: $540,000,000
Apartamento 406 Carrera 18 No. 114 A – 10 – 20	50N-20668116	No. 12100 del 14 de noviembre de 2014	No. 72 de Bogotá	214.492.000	De: Agarwal Amitt y Garg Vidhushree A:	De: Edgar Darío, Judith Yamily y Constanza Piedad Pedraza Aranda

Edificio Platino Santa Bárbara PH Parqueadero 38 Depósito 14	CON AREA DE 48.05 MTS2				Edgar Darío, Judith Yamily y Constanza Piedad Pedraza Aranda	**A:** Guzman De Salgado Hermencia **ESCRITURA 2018** del **21-06-2019** NOTARIA CUARENTA Y CUATRO de BOGOTA Precio: $320,000,000

De esta forma, nuevamente se corrobora sin duda, la voluntad de venta simulada que recayó sobre la casa del Batán, pues los hermanos vendieron los inmuebles con el fin de esconderlos para manejar parte del patrimonio de la sociedad conyugal a su antojo.

A diferencia de lo considerado en la sentencia recurrida, sí es importante observar en la venta simulada, a quién se efectuó el pago del precio, primero porque como se señaló, el comprador no podría pagar a terceros del negocio, así fueran hermanas o familiares del mandatario negociante; el negocio no se perfeccionó porque no se realizó el modo cuando vivía el dueño del inmueble, teniendo que para la fecha en que se practicó la tradición irregular, los pagos pertenecían jurídicamente a la universalidad de activos para liquidar la sociedad conyugal que se defraudó, y antecede a esta venta simulada, un notorio desprecio de los hermanos Pedraza Aranda, para con mi representada Ulloa Aranda, de años atrás.

Esto último, también constituye un indicio grave de simulación *per sé*, pues las expresiones desobligantes y las actitudes en audiencia de los hermanos Pedraza Aranda así lo demuestran, desprecio a la demandante quien durante muchos años les sirvió a los dos hermanos mayores en todos los quehaceres diarios y de limpieza. Allí está la causa simulandi o móvil que impulsó a los hermanos Pedraza Aranda a fraguar como fuere, la venta de la casa del Batán, presentando la venta como una simple venta cuando en realidad querían defraudar los intereses de la demandante.

Se aportan los certificados de libertad actualizados a 30 de abril de 2023 de los inmuebles referidos en la anterior tabla, como prueba y soporte de los argumentos expuestos en el presente escrito.

B.4. Otras inconsistencias en las declaraciones dadas en las audiencias celebradas dentro del proceso, los días 5 de abril de 2022 y 27 de abril de 2023 que no fueron tenidas en cuenta ni valoradas en la sentencia de primera instancia que se recurre y que también conducen a la conclusión de que hubo un negocio no finalizado que pretendió engañar a terceros, en este caso, defraudar la sociedad conyugal y con ello, los derechos herenciales de mi representada:

B.4.1. En la audiencia del 5 de abril de 2022, el señor Edgar Pedraza indicó que se enteró de tener una hermana hija del señor Laureano Pedraza con otra persona, al momento de radicar los documentos respectivos en la UGPP enterándose de que ya habían "*cobrado*" la primera mesada pensional, refiriendo que "*ya estaban seguramente el acecho*", expresión descalificativa que lo único que indica es que quien estaba "*al acecho*" económico o patrimonial es justamente quien lo reseña. (Minuto 41:10 y siguientes)

B.4.2. En la audiencia del 5 de abril de 2022, la señora Yamily señaló que la demandante tiene derecho a la herencia de Rosalba pero no en cuanto a otros bienes porque los padres "*pueden disponer de su patrimonio en el momento que lo quisieran porque ellos lo construyeron*", lo cual corresponde al usual discurso del simulador, quien no cuenta con otras doctrinas que puedan soportar los hechos que no pudo explicar ni especificar, como son, desde cuándo se estaba negociando el inmueble casa del Batán y por qué el señor Laureano Pedraza no habría querido recibir el pago de la venta de su casa, ni donde consta la aparente decisión del señor Laureano de que los inmuebles recibidos en permuta estuvieran a nombre de sus tres hijos matrimoniales y de nadie más. Todo ello no cuenta con soporte documental, por lo cual la historia relatada por los hermanos más parece ser lejana a la realidad de lo que ocurrió.

B.4.3. En la audiencia del 5 de abril de 2022, la señora Constanza Pedraza refiriéndose a la niña Laura Sofía Pedraza, su hermana menor, dijo que "*ha estado en el proceso de sucesión de la herencia de Laureano Pedraza*", a quien "*se le ha tratado como una persona más*" (Minuto 1:44:40 y siguientes). Entonces, el suscrito se pregunta, si hubo sucesión del señor Pedraza, se habría tenido que liquidar la sociedad conyugal que perduró en el matrimonio de Laureano Pedraza y Rosalba Aranda, liquidación que a la fecha también estarían ocultando los hermanos Pedraza Aranda, ya que el tiempo transcurrido desde la muerte de la señora Rosalba coadyuva a la consumación de la simulación cuya declaratoria aquí se pretende. Así mismo, si realmente hubo una sucesión de la herencia del señor Laureano Pedraza, no se entiende cómo, a la fecha, 30 de abril de 2023 aun figuran varios inmuebles a nombre del señor Laureano, como son:

**Nro Matrícula: 50N-1002394 - LOTE 37, MANZANA 22, SECTOR 26, AREA 3.00 M2 ubicado en el PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE PAZ, Bogotá D.C.*

**Nro Matrícula: 50N-1002395 - LOTE 43, MANZANA 22, SECTOR 26. AREA 3.00 M2 ubicado en el PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE PAZ, Bogotá D.C.*

**Nro Matrícula: 50S-49505 - CASA DE HABITACION ubicada en CALLE 33 SUR 24-A-11, (Hoy es un edificio) Bogotá D.C.*

**Nro Matrícula: 50S-1089992 - LOTE DE TERRENO JUNTO CON LA CASA EN EL LEVANTADA, UBICADO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO ubicada en la CARRERA 24A 33-50 S (Hoy es un edificio), Bogotá D.C.*

Documentos que se aportan con el presente escrito como prueba y soporte de los argumentos expuestos en el presente escrito.

B.4.4. En la audiencia del 27 de abril de 2023, el señor Edgar Pedraza señaló que nunca le preguntó a su padre qué medicamentos tomaba para el dolor (Minuto 41:40 y siguientes), afirmación que resulta INVEROSÍMIL, pues lo más natural y lo que señala la costumbre es que los hijos que se preocupan por sus padres, mínimo preguntan qué medicamentos toma y en qué horario. Es inconcebible que un hijo que observa a su padre con parálisis progresiva y adolorido, no le pregunte qué medicamentos le fueron ordenados o qué está tomando. Lo que intenta el demandado con dicha frase, es aminorar el grave estado de salud en el que se encontraba su padre al momento en que se le otorgó poder especial para venta y fechas subsiguientes.

B.4.5. En la audiencia del 27 de abril de 2023, la señora Constanza Pedraza señaló que el señor Laureano Pedraza era consciente y lúcido (minuto 1:13:33 y siguientes), situación sobre la cual no se ha pronunciado la parte demandante, pues a lo que se ha hecho referencia es al grave estado de salud del señor Laureano Pedraza que cada día empeoraba. Manifestación de la señora Constanza Pedraza que intenta desviar la atención del objeto del pleito y/o aminorar el grave estado de salud del señor Laureano conforme a la historia clínica aportada al proceso.

B.4.6. Adicional a la "*gran ilusión*" que dice la señora Yamily que tuvo el señor Laureano para que los tres hermanos Pedraza Aranda fueran los dueños de los inmuebles recibidos en parte de pago de la venta de la casa del Batán, la señora Constanza en la misma audiencia refirió la ilusión de la señora Rosalba Aranda de vivir en uno de dichos inmuebles, el ubicado en la carrera 20 con calle 125 en Bogotá (Minuto 1:17:34 y siguientes), pero luego de una supuesta "gran ilusión" de unos padres porque sus hijos fueran dueños de unos inmuebles, a la fecha los hijos LOS HAN VENDIDO, es decir, los hermanos Pedraza NO FUERON FIELES A LA SUPUESTA "GRAN ILUSIÓN" DE SUS PADRES, O EN SU CAMBIO, DICHA "GRAN ILUSIÓN" NO EXISTIÓ. Más se podría pensar en que dicha "gran ilusión" no existió, cuando ninguno de los hermanos Pedraza Aranda en declaración de parte lograron explicarla ni fundamentarla.

Con todo lo anterior, se solicita respetuosamente valorar que la sentencia recurrida dice que hubo una "*venta real del inmueble*" pero no tiene en cuenta que no se dio una venta conforme a la ley, y a dicho intento de negocio lo rodean varios indicios graves de simulación. Así mismo, hay prueba de las contradicciones y falta de especificaciones por parte del Grupo Edifikar SAS, emitidas en las audiencias celebradas dentro del proceso y finalmente, el negocio simulado culminó omitiéndose los requisitos legales para el mismo y a pesar de ello, se determinó en la sentencia de primera instancia que la compra-venta fue válida.

Esto, junto a todas las contradicciones e imprecisiones expresadas demuestra que la parte demandada quisieron dar apariencia de compraventa a un negocio que no

existió, quisieron imprimir como voluntad del dueño unas afirmaciones sin soporte y mostraron frente a terceros, entre ellos mi representada que solo se trataba de una compraventa, cuando en realidad se estaba defraudando a la sociedad conyugal, todos los indicios llevan a la misma conclusión.

La utilidad de los demandados con el negocio simulado fue en extenso notoria, lo cual es otro indicio *per sé*, ya que sacaron de la sociedad conyugal uno de los bienes con mayor valor económico para impedir que entrara en el universo de bienes para liquidarla y los hermanos Pedraza elevaron sus patrimonios de forma ostensible, tal como se observa con el aporte de las declaraciones de renta presentadas por los Hermanos Pedraza Aranda ante la DIAN, donde, por ejemplo, en el caso del señor Edgar Darío, aumentó del año 2013 al 2014, en aproximadamente 611 millones de pesos, sin haber contado con ingresos representativos, en el año inmediatamente anterior. Por su parte, el Grupo Edifikar SAS también obtuvo sus réditos económicos al pagar a quien no debía e intentar culminar un negocio con un bien de una persona fallecida sin compraventa perfeccionada, al demoler la casa del Batán y construir el proyecto de vivienda que actualmente obra en la dirección donde quedaba la casa.

Para finalizar se solicita revocar la orden de pago en costas y agencias en derecho para la parte demandante, contenida en el artículo sexto de la providencia recurrida, dado que no existe mala fe ni prueba de ello que pueda ser atribuida a la demandante al incoar esta causa, pues al contrario, acudió a la administración de justicia en ejercicio de un derecho legítimo, al no contar con otro mecanismo para la protección de sus derechos y de acceso a la justicia y no ha efectuado conductas dilatorias del proceso, por lo tanto con su actuar no se hace acreedora de condena en costas ni de agencias en derecho.

Con fundamento en los planteamientos que anteceden, solicito se sirva revocar parcialmente la sentencia recurrida, dictando en su lugar la que en derecho deba reemplazarla, al reunirse una sumatoria de indicios graves que conducen a la necesaria conclusión de que hubo una venta simulada, particularmente, revocar el artículo tercero y sexto de la providencia recurrida.

PETICIÓN.

por lo anteriormente expuesto solicito.

1- Se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el señor JUEZ TREINTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO frente a la no prosperidad de declaración de simulación respecto del bien inmueble casa ubicada en Bogotá en la dirección carrera 52 No. 123B - 05 del barrio Batán, identificada con matrícula inmobiliaria 50N-635434 cuyo título se encuentra en la escritura

pública No. 933 del 23 de julio de 2014 de la Notaría 10 del círculo de Bogotá D.C.

2- se declare prosperas las pretensiones de la demanda que niega el Aquo. HONORABLES MAGISTRADOS

Me suscribo de Su señoría,

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ NUÑEZ
C.C 79.255.446 DE BOGOTA
T.P 88.937 DEL C. S. J
APODERADO PARTE DEMANDANTE

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430806576033779 **Nro Matrícula: 50S-1089992**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50S - BOGOTA ZONA SUR DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 18-08-1987 RADICACIÓN: 87-198548 CON: HOJAS DE CERTIFICADO DE: 10-08-1987
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE DE TERRENO JUNTO CON LA CASA EN EL LEVANTADA, UBICADO EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO, CON UNACABIDA DE 229.69 V2 Y LINDA: FRENTE CON EL LOTE N.13 MANZANA G CALLEJON PRIVADO DE POR MEDIO FONDO CON TERRENOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA UN COSTADO CON EL LOTE N.6 OTRO COSTADO CON EL LOTE N.8MANZANA H.

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
2) CARRERA 24A 33-56 S
1) CARRERA 24A 33-50 S

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 24-09-1965 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 3110 del 10-09-1965 NOTARIA 1 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 101 VENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: RAMIREZ C. ARMANDO

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO CC# 1119827 X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 27-09-1965 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 3110 del 10-09-1965 NOTARIA 1 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ROSAS LAUREANO CC# 1119827 X

A: CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 30-01-1969 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 7522 del 30-12-1968 NOTARIA 5 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ROSAS LAUREANO CC# 1119827 X

A: CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 11-05-1992 Radicación: 1992-27655

Doc: ESCRITURA 2825 del 10-04-1992 NOTARIA 29 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

Se cancela anotación No: 2

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827 X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 11-05-1992 Radicación: 1992-27655

Doc: ESCRITURA 2825 del 10-04-1992 NOTARIA 29 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

Se cancela anotación No: 3

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827 X**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 11-05-1992 Radicación: 1992-27659

Doc: ESCRITURA 2075 del 21-04-1992 NOTARIA 18 de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $33,000,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA ABIERTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ROSAS LAUREANO CC# 1119827 X

A: CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA "LAS VILLAS"

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 11-05-1992 Radicación: 1992-27662

Doc: ESCRITURA 3350 del 30-04-1992 NOTARIA 29 de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 360 CONSTITUCION REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827 X**

ANOTACION: * ESTA ANOTACION NO TIENE VALIDEZ *** Nro 008** Fecha: 25-06-2013 Radicación: 2013-60180

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

Doc: ESCRITURA 1861 del 12-06-2013 NOTARIA SESENTA Y SIETE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $1,000,000

Se cancela anotación No: 6

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION DE HIPOTECA ABIERTA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. **NIT# 8600358275**

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *8*

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

7 -> 40102578GARAJE N.1.
7 -> 40102579GARAJE N.2.
7 -> 40102580GARAJE N.3.
7 -> 40102581APARTAMENTO 101.
7 -> 40102582APARTAMENTO 201.
7 -> 40102583APARTAMENTO 202.
7 -> 40102584APARTAMENTO 301.
7 -> 40102585APARTAMENTO 302.
7 -> 40102586APARTAMENTO 401.
7 -> 40102587APARTAMENTO 402.
7 -> 40102588APARTAMENTO 501.
7 -> 40102589APARTAMENTO 502.

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 8 Nro corrección: 1 Radicación: CI2013-446 Fecha: 22-08-2013

INSCRIPCION CARECE DE EFECTO JURIDICO POR CORRESPONDER UNICAMENTE AL FOLIO 40102578 SI VALE LEY 1579/12 ART.59 OGF.COR32

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430806576033779 **Nro Matrícula: 50S-1089992**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:44 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

* * *

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-172585 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR ORIP

El Registrador: LUIS ORLANDO GARCIA RAMIREZ

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR ORIP

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430750476033642 **Nro Matrícula: 50N-1002394**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 09:55:22 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 24-09-1986 RADICACIÓN: 86=96456 CON: DOCUMENTO DE: 28-04-1993
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
LOTE 37,MANZANA 22,SECTOR 26, AREA 3.00 M2.CON DIMENSIONES DE 1.20 MTS.DE ANCHO POR 2.50 MTS.DE LARGO,Y CUYOS LINDEROS OBRAN EN LA ESCRITURA N. 1318 DEL 20 06 86 NOTARIA 20A.DE BOGOTA,SEGUN DECRETO 1711 DEL 06 DE JULIO DE 1.984.

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN
1) SIN DIRECCION LOTE 37 MANZANA 22 SECTOR 26 PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE PAZ

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50N - 620494

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 08-09-1986 Radicación: 1986-96456

Doc: ESCRITURA 1318 del 20-06-1986 NOTARIA 20A. de BOGOTA VALOR ACTO: $126,000

ESPECIFICACION: : 101 VENTA ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: DINERS CLUB DE COLOMBIA S A **NIT# 60031619**

A: PEDRAZA ROSAS, LAUREANO **CC# 1119827 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430750476033642 **Nro Matrícula: 50N-1002394**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 09:55:22 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-219616 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430316776033783 **Nro Matrícula: 50N-1002395**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:48 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 24-09-1986 RADICACIÓN: 86=96456 CON: DOCUMENTO DE: 28-04-1993
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
LOTE 43,MANZANA 22,SECTOR 26. AREA 3.00 M2. CON DIMENSIONES DE 1.20 DE ANCHO,POR 2.50 MTS.DE LARGO, Y CUYOS LINDEROS OBRAN EN LA ESCRITURA 1318 DEL 20 06 86 NOTARIA 20 DE BOGOTA,SEGUN DECRETO 1711 DEL 06 DE JULIO DE 1.984.

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN
1) SIN DIRECCION LOTE 43 MANZANA 22 SECTOR 26 PARQUE CEMENTERIO JARDINES DE PAZ

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50N - 620494

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 08-09-1986 Radicación: 86=96456

Doc: ESCRITURA 1318 del 20-06-1986 NOTARIA 20A. de BOGOTA VALOR ACTO: $126,000

ESPECIFICACION: : 101 VENTA ESTE Y OTRO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: DINERS CLUB DE COLOMBIA S.A **NIT# 60031629**

A: PEDRAZA ROSAS, LAUREANO **CC# 1119827 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)
Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2007-OI403 Fecha: 19-11-2007
MATRICULA MATRIZ NO VALIDA CORREGIDA VALE, ART 35 DL 1250/70,DEPURACION BASE DE DATOS.C2007-OI403

* * *
* * *
* * *

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430316776033783 **Nro Matrícula: 50N-1002395**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:48 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-219619 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430860676033780 **Nro Matrícula: 50S-49505**

Pagina 1 TURNO: 2023-172586

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:45 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50S - BOGOTA ZONA SUR DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 08-06-1972 RADICACIÓN: 72-024553 CON: HOJAS DE CERTIFICADO DE: 01-06-1972
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

CASA DE HABITACION JUNTO CON EL LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE HALLA EDIFICADA CON TODAS SUS ANEXIDADES DEPENDENCIAS USOS,COSTUMBRES ,Y DEMAS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN CON AREA DE 256.09 VARAS CUADRADAS Y ESTA COMPRENDIDO DENTRO DE LOS SIGUIENTES LINDEROS : POR ELNORTE EN 21.00MTRS CON EL LOTE #27 DE LA MISMA MANZANA Y URBANIZACION POR EL SUR EN 21.00MTRS CON EL LOTE NUMERO 29DE LA MISMA MANZANAY URBANIZACION POR EL ORIENTE EN 7.50 MTRS CON LA CALLE 33 SUR QUE ES EL FRENTE Y POR EL OCCIDENTE EN 7.50MTRS CO EL LOTE NUMERO 23 DE LA MSMA MANZANA Y URBANIZACION".-

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
2) CALLE 33 SUR 24-11.
1) CALLE 33 SUR 24-A-11 (ACTUAL)

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 09-04-1958 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 3268 del 18-11-1957 NOTARIA 6 de BOGOTA VALOR ACTO: $1,476.54

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORREDOR Z. RAMON CC# 3939113

A: CASTRO ABEL DE JESUS X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 20-10-1960 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 3067 del 14-10-1960 NOTARIA 6 de BOGOTA VALOR ACTO: $5,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CASTRO ABEL DE JESUS

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

A: MORA DE RODRIGUEZ ANA CELMIRA **X**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 06-02-1962 Radicación: SN

Doc: ESCRITURA 269 del 26-01-1962 NOTARIA 3 de BOGOTA VALOR ACTO: $5,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: MORA DE RODRIGUEZ ANA CELMIRA

A: LOPEZ DE CASTRO ARACELI ROSA MARIA **CC# 20106557** **X**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 16-02-1993 Radicación: 1993-9700

Doc: ESCRITURA 298 del 10-02-1993 NOTARIA 33 de BOGOTA VALOR ACTO: $3,000,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: LOPEZ DE CASTRO ARACELI ROSA MARIA CC# 20106557

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827** **X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 17-12-1993 Radicación: 1993-87065

Doc: ESCRITURA 11159 del 07-12-1993 NOTARIA 29 de BOGOTA VALOR ACTO: $45,000,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA ABIERTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ROSAS LAUREANO CC# 1119827 X

A: CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 31-05-1994 Radicación: 1994-37003

Doc: ESCRITURA 4237 del 17-05-1994 NOTARIA 29 de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: : 360 REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL B.B.1063898-A

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827** **X**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 25-02-2015 Radicación: 2015-17055

Doc: ESCRITURA 1638 del 25-03-2011 NOTARIA VEINTICUATRO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. **NIT# 8600358275**

A: PEDRAZA ROSAS LAUREANO **CC# 1119827** **X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR

CERTIFICADO DE TRADICION

MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430860676033780 **Nro Matrícula: 50S-49505**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 10:08:45 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CON BASE EN LA PRESENTE SE ABRIERON LAS SIGUIENTES MATRICULAS

6 -> 40184758GARAJE # 1
6 -> 40184759GARAJE # 2
6 -> 40184760GARAJE # 3
6 -> 40184761APARTAMENTO 101
6 -> 40184762APARTAMENTO 201
6 -> 40184763APARTAMENTO 202
6 -> 40184764APARTAMENTO 301
6 -> 40184765APARTAMENTO 302
6 -> 40184766APARTAMENTO 401
6 -> 40184767APARTAMENTO 402
6 -> 40184768APARTAMENTO 501
6 -> 40184769APARTAMENTO 502

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR ORIP

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 20-07-1994
EN DESCRIPCION: EN LINDEROS SUR: CON EL LOTE 29 VALE T.C. 5046 18-11-93 COD. 703/LMGV.....
Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: Fecha: 20-07-1994
EN DIRECCION: CALLE 33 SUR N. 24A-11 (ACTUAL) VALE T.C. 698 10-02-94 COD. 703/LMGV.....
Anotación Nro: 5 Nro corrección: 1 Radicación: Fecha: 20-07-1994
VALOR DEL ACTO $ 45.000.000.00 VALE T.C 86 12-01-94 COD. 703/ LMGV

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR ORIP

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

* * *
= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-172586 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: LUIS ORLANDO GARCIA RAMIREZ

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430900276036981 **Nro Matrícula: 50N-20668116**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 09-02-2012 RADICACIÓN: 2012-6808 CON: ESCRITURA DE: 30-01-2012
CODIGO CATASTRAL: **AAA0233RTXR**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 26 de fecha 05-01-2012 en NOTARIA 48 de BOGOTA D.C. APARTAMENTO 406 con area de 48.05 MTS2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:
BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA ADQUIRIO PARTE DE ESTE ENGLOBE POR COMPRA DE EL CORCEL S. EN C., MEDIANTE ESCRITURA # 7152 DE 25-08-2010 NOTARIA 47 BOGOTA D.C., ESTA ADQUIRIO POR COMPRA DE MEJIA DE CASTILLO MERCEDES, MEDIANTE ESCRITURA # 4396 DE 20-12-2005 NOTARIA 34 DE BOGOTA, ESTA ADQUIRIO POR COMPRA DE ARENAS CASANOVA ALBA PATRICIA, MEDINATE ESCRITURA # 1167 DE 14-07-1999 NOTARIA 15 DE BOGOTA, ESTA ADQUIRIO POR COMPRA DE CANO MURCIA FLOR MARIA, MEDIANTE ESCRITURA # 439 DE 25-02-1991 NOTARIA 34 DE BOGOTA, ESTA ADQUIRIO POR COMPRA DE RODRIGUEZ PE/A JOSE EDGAR, MEDIANTE ESCRITURA # 8325 DE 20-12-1985 NOTARIA 2 DE BOGOTA, RADICADA EL 06-08-1986 AL FOLIO 50N-569616. BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA ADQUIRIO OTRA PARTE DE ESTE ENGLOBE POR COMPRA DE EL CORCEL S. EN C., MEDIANTE ESCRITURA # 7152 DE 25-08-2010 NOTARIA 47 BOGOTA D.C., ESTA ADUIRIO POR COMPRA DE BARRIGA DE SILVA LEONOR, SILVA BARRIGA GUIOMAR, SILVA BARRIGA JORGE ENRIQUE, SILVA BARRIGA FRANCISCO JOSE Y SILVA BARRIGA JUAN CARLOS, MEDIANTE ESCRITURA # 5804 DE 28-11-2003 NOTARIA 18 BOGOTA D.C., ESTOS ADQUIRIERON POR COMPRA DE SILVA SILVA JOAQUIN, MEDIANTE ESCRITURA # 2285 DE 29-08-2001 NOTARIA 24 DE BOGOTA, ESTA ADQUIRIO POR COMPRA DE NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA LIMITADA., MEDIANTE ESCRITURA # 2985 DE 30-06-1965 NOTARIA 6 BOGOTA, RADICADA EL 16-08-1965 AL FOLIO 50N-20253530.*AMMA*.

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
2) KR 18 114A 10 AP 406 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CARRERA 18 #114 A - 10 APARTAMENTO 406 EDIFICIO PLATINO SANTA BARBARA P.H

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50N - 20665981

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 31-08-2010 Radicación: 2010-73746

Doc: ESCRITURA 7152 del 25-08-2010 NOTARIA 47 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430900276036981 **Nro Matrícula: 50N-20668116**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

DE: BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA **NIT# 8305145808 X**

A: BANCO CAJA SOCIAL S.A. **NIT# 8600073354**

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 30-01-2012 Radicación: 2012-6808

Doc: ESCRITURA 26 del 05-01-2012 NOTARIA 48 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO PLATINO SANTA BARBARA PROPIEDAD HORIZONTAL.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA **NIT# 8305145808 X**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 17-07-2012 Radicación: 2012-54273

Doc: ESCRITURA 2113 del 25-04-2012 NOTARIA 48 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $7,484,129.24

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL HIPOTECA ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO CAJA SOCIAL S.A. **NIT# 8600073354**

A: BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA **NIT# 8305145808**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 17-07-2012 Radicación: 2012-54273

Doc: ESCRITURA 2113 del 25-04-2012 NOTARIA 48 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $159,031,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA **NIT# 8305145808**

A: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NIT# 8600343137 X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 02-10-2012 Radicación: 2012-76476

Doc: ESCRITURA 2953 del 04-06-2012 NOTARIA CUARENTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ACLARACION ART 24 ESC 26 DEL 05-01-2012 NOT 48 BGTA SEGUN RESOL 12-3-0438 DEL 31-05-2012 CURADURIA URB 3 DE BGTA CORRIGE Y CITA COMPLETA LAS AREAS DE LOS APTOS 201-207-208-301-307-308-401-407-408-501-507-508-605-606.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA **NIT# 8305145808**

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 02-10-2012 Radicación: 2012-76480

Doc: ESCRITURA 3616 del 10-07-2012 NOTARIA CUARENTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: ACLARACION: 0901 ACLARACION ESC 2953 DEL 04-06-2012 NOT 48 DE BOGOTA EN CUANTO A CITAR LA MATRICULA MATRIZ

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430900276036981 **Nro Matrícula: 50N-20668116**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CORRECTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: BALUARTE CONSTRUCCIONES Y DISE/OS LTDA **NIT# 8305145808**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 02-12-2013 Radicación: 2013-91536

Doc: ESCRITURA 14202 del 20-11-2013 NOTARIA VEINTINUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $165,488,150

ESPECIFICACION: TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE LEASING HABITACIONAL DE VIVIENDA FAMILIAR: 0168 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE LEASING HABITACIONAL DE VIVIENDA FAMILIAR ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NIT# 8600343137**

A: AGARWAL AMITT **CE# 316953 X**

A: SHREE GARG VIDHU **CE# 320493 X**

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 20-11-2014 Radicación: 2014-81837

Doc: ESCRITURA 12100 del 14-11-2014 NOTARIA SETENTA Y DOS de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $214,492,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: AGARWAL AMITT CE# 316953 C.E. 316953

DE: GARG VIDHUSHREE C.E. 320493

A: PEDRAZA ARANDA CONSTANZA PIEDAD **CC# 52006127 X**

A: PEDRAZA ARANDA EDGAR DARIO **CC# 19324159 X**

A: PEDRAZA ARANDA JUDITH YAMILY **CC# 51642208 X**

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 02-07-2019 Radicación: 2019-40434

Doc: ESCRITURA 2018 del 21-06-2019 NOTARIA CUARENTA Y CUATRO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $320,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ARANDA CONSTANZA PIEDAD CC# 52006127

DE: PEDRAZA ARANDA EDGAR DARIO CC# 19324159

DE: PEDRAZA ARANDA JUDITH YAMILY CC# 51642208

A: GUZMAN DE SALGADO HERMENCIA **CC# 20283162 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *9*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2013-5126 Fecha: 21-05-2013

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350 DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430900276036981 **Nro Matrícula: 50N-20668116**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:15 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

* * *

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-219714 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430300076036983 **Nro Matrícula: 50N-1180364**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:23 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 06-06-1988 RADICACIÓN: 1988-1934 CON: SIN INFORMACION DE: 02-12-1992
CODIGO CATASTRAL: **AAA0106WDWF**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
APARTAMENTO NUMERO TRESCIENTOS UNO (301):-ESTA SITUADO EN EL TERCER PISO DE LA EDIFICACION, TRANSVERSAL 27 #125-46,DE LA NOMENCLATURA URBANA DE BOGOTA. AREA PRIVADA CONSTRUIDA : 120.6288 MTS.2.-CON UN COEFICIENTE DE : 2.79197%,CUYOS LINDEROS, DEPENDENCIAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN LA ESCRITURA N.3059 DE 18 DE AGOSTO DE 1988,NOTARIA 14 DE BOGOTA,SEGUN DECRETO 1711 DEL 6 DE JULIO DE 1.984.-----

AREA Y COEFICIENTE
AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:
QUE CONSTRUCCIONES CARIBE LTDA.,ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION POR COMPRA A MU\OZ SANCHEZ GUSTAVO MARIO, POR ESCRITURA # 6366 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1987 NOTARIA 1A. DE BOGOTA. ESTA SOCIEDAD ADQUIRIO POR COMPRA A INVERSIONES ROLDICHA LTDA.,POR ESCRITURA # 1899 DE 9 DE ABRIL DE 1987 NOTARIA 1A. DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIO DE NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA LTDA., POR ESCRITURA # 2302 DE 30 DE MAYO DE 1972, NOTARIA 4A. DE BOGOTA, REGISTRADA EN EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA # 050-0080383. ESTA ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION POR APORTE DE ALVARO GONZALEZ SIERRA Y OLGA GONZALEZ DE ANTONIADI, POR ESCRITURA # 2041 DE 24 DE MAYO DE 1957 NOTARIA 7A. DE BOGOTA. -------------

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
3) KR 20 125 46 AP 301 (DIRECCION CATASTRAL)
2) CARRERA 20 #125-46 AP 301
1) TRANSVERSAL 27 125-46 APARTAMENTO 301 PISO 3 EDIFICIO "AZAHARA I."

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
50N - 80383

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 11-03-1988 Radicación: 1988-40439

Doc: ESCRITURA 0755 del 01-03-1988 NOTARIA 14A. de BOGOTA VALOR ACTO: $10,000,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONSTRUCCIONES OLARTE LTDA. X

A: CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA.

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 24-08-1988 Radicación: 1988-1934

Doc: ESCRITURA 3509 del 18-08-1988 NOTARIA 14 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 360 REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CONSTRUCCIONES CARIBE LTDA NIT# 80016068 X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 28-09-1988 Radicación: 7277

Doc: RESOLUCION ADMINISTRATIVA 1139 del 13-09-1988 ALCALDIA MAYOR de BOGOTA VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 999 PERMISO A LA SOCIDAD CONSTRUCCIONES CARIBE LIMITADA PARA ANUNCIAR Y ENAJENAR 24 ARATAMENTOS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CONSTRUCCIONES CARIBE LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 24-08-1989 Radicación: 32568

Doc: ESCRITURA 2770 del 21-06-1989 NOTARIA. 14A. de BOGOTA. VALOR ACTO: $29,541,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA. ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONSTRUCCIONES CARIBE LTDA.

A: COMERCIAL R. Y R. LTDA. X

A: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA CC# 24322933 X

A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ CC# 35499967 X

A: RAMIREZ RESTREPO RESTREPO CARLOS RICARDO X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 24-08-1989 Radicación: 32568

Doc: ESCRITURA 2770 del 21-06-1989 NOTARIA. 14A. de BOGOTA. VALOR ACTO: $18,315,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA. ABIERTA ESTE Y DOS MAS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: COMERCIAL R. Y R. LTDA.

DE: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA CC# 24322933 X

DE: RAMIREZ CARLOS RICARDO CC# 141173 X

A: CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA.

A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ CC# 35499967 X

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 006 Fecha: 24-08-1989 Radicación: 32569

Doc: ESCRITURA 3442 del 28-07-1989 NOTARIA. 14A. de BOGOTA. VALOR ACTO: $0

ESPECIFICACION: : 999 ACLARACION ESCRITURA 2770 DE 21-06-89 NOTARIA 14A. DE BOGOTAEN CUANTO A LA CALIDAD CON QUE COMPARECE EN LA HIPOTECA EL SE\OR CARLOS RICARDO RAMIREZ RESTREPOR.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

A: CORMERCIAL R. Y R. LTDA.		**X**
A: COSTRUCCIONES. CARIBE LTDA.		
A: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA	**CC# 24322933**	**X**
A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ	**CC# 35499967**	**X**
A: RAMIREZ CARLOS RICARDO	**CC# 141173**	**X**

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 24-08-1989 Radicación: 32570

Doc: ESCRITURA 2949 del 30-06-1989 NOTARIA. 14A. de BOGOTA. VALOR ACTO: $6,000,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: COMERCIAL R. Y R. LTDA.		
DE: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA	CC# 24322933	X
DE: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ	CC# 35499967	X
DE: RAMIREZ CARLOS RICARDO	CC# 141173	X
A: CONSORCIO CARIBE LIMITADA.		

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 08-06-1990 Radicación: 22497

Doc: ESCRITURA 1700 del 26-04-1990 NOTARIA 14 de BOGOTA VALOR ACTO: $0

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: : 650 LIBERACION PARCIAL GRAVAMEN HIPOTECARIO ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORPORACION CAFETEREA DE AHORRO Y VIVIENDA

A: CONSTRUCCIONES CARIBE LTDA

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 27-11-1990 Radicación: 1990-53156

Doc: ESCRITURA 3254 del 02-08-1990 NOTARIA 14 de BOGOTA VALOR ACTO: $6,000,000

Se cancela anotación No: 7

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION HIPOTECA ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONSORCIO CARIBE LIMITADA

A: COMERCIAL R.Y R LTDA		
A: RAMIREZ ARANDA JANNETTE CRISTINA		**X**
A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ	**CC# 35499967**	**X**
A: RAMIREZ CARLOS RICARDO	**CC# 141173**	**X**

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 22-04-1992 Radicación: 19572

Doc: OFICIO 325 del 12-03-1992 JUZG.22.C.CTO de SA/FEDEBGTA VALOR ACTO: $0

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

ESPECIFICACION: : 402 EMBARGO HIPOTECARIO ESTE Y DOS MAS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA. CONCASA.

A: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA CC# 24322933 X

A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ CC# 35499967 X

A: RAMIREZ. RESTREPO CARLOS RICARDO X

A: SOCIEDAD COMERCIAL R. Y R. LTDA X

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 15-12-1992 Radicación: 1992-668255

Doc: OFICIO 1677 del 11-12-1992 JUZGADO 22C.CTO de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $

Se cancela anotación No: 10

ESPECIFICACION: : 791 CANCELACION EMBARGOS CON ACCION REAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORPORACION CAFETRA DE AHORRO Y VIVIENDA CONCASA.

A: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA CC# 24322933 X

A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ CC# 35499967 X

A: RAMIREZ CARLOS RICARDO CC# 141173 X

A: SOCIEDAD COMERCIAL R.Y.R.LTDA. X

ANOTACION: Nro 012 Fecha: 29-01-1993 Radicación: 1993-4883

Doc: ESCRITURA 040 del 14-01-1993 NOTARIA 42 de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: : 999 MODIFICACION REGLAMENTO DE COPROPIEDAD EN CUANTO A QUE SE ACOGEN A LA LEY 16 DE 1985 Y D.R. 1365 Y SEPARAN LA ADMINISTRACION EN DOS BLOQUES: VIVIENDA (APARTAMENTOS) Y OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: "COMPA/IA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS LA FORTALEZA" CONEFOR LTDA. COMO REPRESENTANTE LEGAL

ANOTACION: Nro 013 Fecha: 19-03-1993 Radicación: 1993-15641

Doc: ESCRITURA 3137 del 18-12-1992 NOTARIA 41 de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $34,000,000

ESPECIFICACION: : 101 COMPRAVENTA ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: COMERCIAL R Y R LTDA.

DE: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA CC# 24322933

DE: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ CC# 35499967

DE: RAMIREZ CARLOS RICARDO CC# 141173

A: VARGAS CORNEJO BERTHA CC# 20190958 X

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430300076036983 **Nro Matrícula: 50N-1180364**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:23 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

A: VARGAS DE CORTES CECILIA **CC# 20166409 X**

A: VARGAS DE URIBE ALICIA **CC# 20049193 X**

ANOTACION: Nro 014 Fecha: 05-07-1995 Radicación: 1995-43398

Doc: ESCRITURA 3035 del 07-06-1995 NOTARIA 14 de SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: $18,315,000

Se cancela anotación No: 5

ESPECIFICACION: : 650 CANCELACION HIPOTECA ESTE Y DOS MAS.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA CONCASA

A: COMERCIAL R Y R LTDA.

A: RAMIREZ ARANDA JEANNETTE CRISTINA

A: RAMIREZ ARANDA MARTHA BEATRIZ

A: RAMIREZ RESTREPO CARLOS RICARDO

ANOTACION: Nro 015 Fecha: 02-10-1996 Radicación: 1996-66159

Doc: ESCRITURA 2471 del 15-08-1996 NOTARIA 35 de SANTAFE DE BOGOTA, D. C. VALOR ACTO: $17,000,000

ESPECIFICACION: : 351 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA SOBRE 1/3 PARTE ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: VARGAS CORNEJO BERTHA CC# 20190958

DE: VARGAS DE CORTES CECILIA CC# 20166409

A: VARGAS ALVAREZ FERNANDO **CC# 19234886 X**

ANOTACION: Nro 016 Fecha: 10-04-1997 Radicación: 1997-21849

Doc: ESCRITURA 571 del 06-03-1997 NOTARIA 40 de SANTAFE DE BOGOTA, D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: VARGAS ALVAREZ FERNANDO CC# 19234886 X

DE: VARGAS DE URIBE ALICIA CC# 20049193 X

A: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NIT# 8600343137**

ANOTACION: Nro 017 Fecha: 10-04-1997 Radicación: 1997-21851

Doc: ESCRITURA 927 del 08-04-1997 NOTARIA 40 de SANTAFE DE BOGOTA, D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: : 999 SIN INFORMACION ACLARACION A ESC.P #571 DE FECHA 06-03-97 DE LA NOTARIA 40 EN RELACION A LAS PERSONAS QUE HIPOTECAN

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: VARGAS ALVAREZ FERNANDO **CC# 19234886 X**

A: VARGAS DE URIBE ALICIA **CC# 20049193 X**

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

A: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NIT# 8600343137**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 018 Fecha: 16-12-2004 Radicación: 2004-97629

Doc: ESCRITURA 2234 del 05-11-2004 NOTARIA 9 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

ESCR.3509/1988 NOT.14 BOG. EN CUANTO AJUSTARLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 675/2001.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: EDIFICIO AZAHARA I - PH

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 019 Fecha: 18-04-2005 Radicación: 2005-26962

Doc: ESCRITURA 2543 del 31-03-2005 NOTARIA 18 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $20,000,000

Se cancela anotación No: 16

ESPECIFICACION: CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0776 CANCELACION HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NIT# 8600343137**

A: VARGAS ALVAREZ FERNANDO **CC# 19234886 X**

A: VARGAS DE URIBE ALICIA **CC# 20049193 X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 020 Fecha: 08-11-2006 Radicación: 2006-96875

Doc: ESCRITURA 7512 del 24-10-2006 NOTARIA 37 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $175,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: VARGAS ALVAREZ FERNANDO CC# 19234886

DE: VARGAS DE URIBE ALICIA CC# 20049193

A: GARZON OSORIO ADRIANA **CC# 35422491 X**

A: OSORIO DE GARZON MARIA BEATRIZ **CC# 41418788 X**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 021 Fecha: 08-11-2006 Radicación: 2006-96875

Doc: ESCRITURA 7512 del 24-10-2006 NOTARIA 37 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: GARZON OSORIO ADRIANA CC# 35422491 X

DE: OSORIO DE GARZON MARIA BEATRIZ CC# 41418788 X

A: BANCOLOMBIA S.A. **NIT# 8909039388**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE ORIP

ANOTACION: Nro 022 Fecha: 27-11-2006 Radicación: 2006-103146

Doc: CERTIFICADO 1081498 del 09-10-2006 CATASTRO de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

ESPECIFICACION: ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA: 0904 ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

ANOTACION: Nro 023 Fecha: 23-04-2013 Radicación: 2013-28358

Doc: ESCRITURA 2490 del 12-04-2013 NOTARIA TREINTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $122,500,000

Se cancela anotación No: 21

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES HIPOTECA, ESTE Y DOS MAS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. COMO CESIONARIA DE BANCOLOMBIA S.A.

A: GARZON OSORIO ADRIANA **CC# 35422491**

A: OSORIO DE GARZON MARIA BEATRIZ **CC# 41418788**

ANOTACION: Nro 024 Fecha: 28-07-2014 Radicación: 2014-52083

Doc: ESCRITURA 932 del 23-07-2014 NOTARIA DECIMA de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $350,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: GARZON OSORIO ADRIANA CC# 35422491

DE: OSORIO DE GARZON MARIA BEATRIZ CC# 41418788

A: PEDRAZA ARANDA CONSTANZA PIEDAD **CC# 52006127** **X**

A: PEDRAZA ARANDA EDGAR DARIO **CC# 19324159** **X**

A: PEDRAZA ARANDA JUDITH YAMILY **CC# 51642208** **X**

ANOTACION: Nro 025 Fecha: 03-03-2022 Radicación: 2022-15800

Doc: ESCRITURA 60 del 14-01-2022 NOTARIA TREINTA Y NUEVE de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $540,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ARANDA CONSTANZA PIEDAD CC# 52006127

DE: PEDRAZA ARANDA EDGAR DARIO CC# 19324159

DE: PEDRAZA ARANDA JUDITH YAMILY CC# 51642208

A: FORERO DE GONZALEZ ANA PURIFICACION. **CC# 41486921** **X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *25*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2007-9489 Fecha: 18-08-2007

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 19 Nro corrección: 1 Radicación: C2006-8387 Fecha: 13-09-2006

SECCION ANOTACIONES CANCELADAS NUMERO CORREGIDO VALE.ART.35 DL.1250/70. ECL.C2006-8387

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-219716 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230430188376036982 **Nro Matrícula: 50N-20722898**

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:17 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA ZONA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.
FECHA APERTURA: 29-01-2014 RADICACIÓN: 2014-5949 CON: ESCRITURA DE: 28-01-2014
CODIGO CATASTRAL: **AAA0240WXCN**COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

= =

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

APARTAMENTO 301 CON AREA DE 65.86M2 PRIVADA CON COEFICIENTE DE 3.05% CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.1710 DE FECHA 21-12-2013 EN NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D. C. (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

GRUPO EDIFIKAR S.A.S. ADQUIRIO DOS PARTES, UNA PARTE POR COMPRA DE DIAYUHIT LTDA, MEDIANTE ESCRITURA 1524 DEL 22-08-2011, NOTARIA 10 DE BOGOTA, ESTE ADQUIRIO POR COMPRA A ROMERO GARCIA LUIS ENRIQUE, MEDIANTE ESCRITURA 2438 DEL 12-10-2007, NOTARIA 41 DE BOGOTA, ESTE ADQUIRIO POR COMPRA DERECHOS DE CUOTA DE WILSON LONDO/O PATRICIA MEDIANTE ESCRITURA 13104 DEL 29-10-1990, NOTARIA 27 DE BOGOTA, ESTA ADQUIRIO JUNTO CON ROMERO GARCIA LUIS ENRIQUE POR COMPRA A WILSON SARMIENTO JOSE IVAN, MEDIANTE ESCRITURA 4776 DEL 24-07-1985, NOTARIA 6. DE BOGOTA, REGISTRADA AL FOLIO 50N-11011... OTRA PARTE ADQUIRIO GRUPO EDIFIKAR S.A.S. POR COMPRA A ALMONACID SANCHEZ ALVARO Y RONDON DE ALMONACID FLOR CECILIA, MEDIANTE ESCRITURA 1344 DEL 05-05-2011, NOTARIA 17 DE BOGOTA, ESTOS ADQUIRIERON POR COMPRA A RODRIGUEZ EUGENIO, MEDIANTE ESCRITURA 4861 DEL 26-12-1990, NOTARIA 32 DE BOGOTA, REGISTRADA AL FOLIO 50N-132549.MMP.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO
2) CL 142 15 08 AP 301 (DIRECCION CATASTRAL)
1) CALLE 142 #15-08/24 EDIFICIO MIRADOR DEL CEDRO APARTAMENTO 301

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50N - 20661407

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 06-06-2012 Radicación: 2012-43638

Doc: ESCRITURA 798 del 29-05-2012 NOTARIA 10 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA: 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: GRUPO EDIFIKAR S.A.S. **NIT# 900031929 X**

A: BANCO CAJA SOCIAL S.A. **NIT# 8600073354**

La validez de este documento podrá verificarse en la página certificados.supernotariado.gov.co

Impreso el 30 de Abril de 2023 a las 03:56:17 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-01-2014 Radicación: 2014-5949

Doc: ESCRITURA 1710 del 21-12-2013 NOTARIA DECIMA de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: GRUPO EDIFIKAR S.A.S. **NIT# 900031929 X**

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 31-07-2014 Radicación: 2014-52972

Doc: ESCRITURA 934 del 23-07-2014 NOTARIA DECIMA de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $6,854,828

Se cancela anotación No: 1

ESPECIFICACION: CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: 0843 CANCELACION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES LIBERACION PARCIAL DE HIPOTECA EN MAYOR EXTENSION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: BANCO CAJA SOCIAL NIT. 8600073354

A: GRUPO EDIFIKAR S.A.S. **NIT. 9000319294**

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 31-07-2014 Radicación: 2014-52972

Doc: ESCRITURA 934 del 23-07-2014 NOTARIA DECIMA de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: $260,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA CON EL USO EXCLUSIVO DE LOS GARAJES 11 Y 31, Y EL DEPOSITO NO. 22

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: GRUPO EDIFIKAR S.A.S. **NIT# 900031929** **NIT. 9000319294**

A: PEDRAZA ARANDA CONSTANZA PIEDAD **CC# 52006127 X**

A: PEDRAZA ARANDA EDGAR DARIO **CC# 19324159 X**

A: PEDRAZA ARANDA JUDITH YAMILY **CC# 51642208 X**

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 29-12-2020 Radicación: 2020-57099

Doc: ESCRITURA 1069 del 29-10-2020 NOTARIA SEGUNDA de BUGA VALOR ACTO: $

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA EQUIVALENTE AL 33.33%

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: PEDRAZA ARANDA EDGAR DARIO CC# 19324159

A: PEDRAZA ARANDA CONSTANZA PIEDAD **CC# 52006127 X**

A: PEDRAZA ARANDA JUDITH YAMILY **CC# 51642208 X**

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *5*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: C2015-3873 Fecha: 05-05-2015

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350 DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

Anotación Nro: 5 Nro corrección: 1 Radicación: C2021-907 Fecha: 04-02-2021

C2021-907.DGG.SECCION ANOTACIONES, NUMERO DE OFICINA DE ORIGEN Y CIUDAD CORREGIOD DE ACUERDO AL TITULO VALE ART 59 DE LEY 1579 DE 2012.

= =

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-219715 **FECHA: 30-04-2023**

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO RV: Sustentación Recurso de Apelación - 110013103031 - 20190040501

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 07/09/2023 12:40

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (192 KB)
SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN - TRIBUNAL.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA LOZANO RICO

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Cristian Sánchez B. <cristiansanchezb@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 12:25
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Sustentación Recurso de Apelación - 110013103031 - 20190040501

Buenas tardes, Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Por medio de la presente y dentro de los términos de Ley, me permito presentar la sustentación al recurso de apelación solicitado en días pasados al despacho de primera instancia.

Gracias,

Cristian Sánchez Bocachica
Abogado Especialista Der. Laboral y Seguridad Social
Máster HSEQ (SIG)
Máster en Derecho de la Empresa
Cel. 304 2421928

SERVIMOS ASESORANDO

Bogotá D.C., 07 de Septiembre de 2023

Señor Magistrado
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL
E. S. D.

Ref. SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN
Expediente No 110013103031 – 20190040501
PROCESO VERBAL ABREVIADO DE RESPONSABILIDAD MEDICA DE JAIRO HUMBERTO AGUDELO REYES CONTRA INVERSIONES CREAR RAMA S.A. - DENTISALUD

CRISTIAN SÁNCHEZ BOCACHICA, actuando como apoderado de la parte demandante dentro del proceso en curso, con el acostumbrado respeto, me permito presentar ante su despacho la respectiva sustentación al **RECURSO DE APELACIÓN** al fallo expedido por el **JUZGADO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ** mediante el cual negó todas y cada de las pretensiones de la demanda.

Del señor juez,

CRISTIAN SÁNCHEZ BOCACHICA
C.C. No. 80.777.434 de Bogotá D.C.
T.P. No. 167.350 del C.S. de La J.

Bogotá D.C., 07 de Septiembre de 2023

Señoría Magistrado:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BOGOTÁ – SALA CIVIL

E. S. D.

Ref. SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN
Expediente No 11001310303120190040500
PROCESO VERBAL ABREVIADO DE RESPONSABILIDAD MEDICA DE JAIRO HUMBERTO AGUDELO REYES CONTRA INVERSIONES CREAR RAMA S.A. - DENTISALUD

CRISTIAN SÁNCHEZ BOCACHICA, actuando como apoderado de la parte demandante dentro del proceso en curso, con el acostumbrado respeto, me permito presentar ante su despacho la respectiva sustentación al **RECURSO DE APELACIÓN** al fallo expedido por el **JUZGADO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ** mediante el cual negó todas y cada de las pretensiones de la demanda, dentro de los siguientes términos:

1) **No existe firma del contrato mencionado por parte del A-quo**

Es importante al respecto mencionar que el A-quo advierte en su fallo que la razón fundamental del fallo se debe a la observancia estricta del contrato celebrado por las partes.

Al respecto es importante resaltar que de manera equivoca el Juez menciona y tiene en cuenta el contrato referido, ya que el mismo NUNCA fue firmado por parte de mi

poderdante por lo que no podía haberse tenido en cuenta dicho contrato, toda vez que este no es oponible a terceros, cuando no ha sido reconocido y mucho menos firmado por parte de mi poderdante.

En los folios que hacen parte del expediente y en los adjuntos de la contestación de la demanda aportada por la parte demandada, se observa con claridad que el contrato de prestación de servicios adolece de la firma de mi poderdante y todo ello, debido a que la demandada nunca se comprometió con mi poderdante a prestar sus servicios de manera legal sino de manera práctica, sin comprometer su marca y nombre para con este.

Adicionalmente es importante observar que los requisitos de validez del contrato exigen como mínimo el reconocimiento de las partes, contrato mencionado que no cumple con dichas condiciones, toda vez que nunca este se firmó por parte de mi poderdante.

2) **El procedimiento no es FUNCIONAL es ESTÉTICO.**

El A-quo menciona que el procedimiento realizado a mi poderdante se trató de un procedimiento FUNCIONAL, al respecto es importante resaltar que en ningún momento para el caso en marras se trató de un asunto FUNCIONAL teniendo en cuenta que mi poderdante asistió de manera voluntaria y sin presión de consentimiento a la demandada para que le ayudará de la manera más profesional con la colocación de unas coronas dentales, que en para nada mejoraban su condición principal, ya que para ese momento su condición era buena.

Así que el procedimiento siempre busco mejorar su aspecto físico y además darle una mejor visión a su sonrisa, que era tan necesaria para su profesión liberal como contador público.

Así que se aleja de la realidad el A-quo al indicar que el procedimiento era **FUNCIONA**L, como si con el tratamiento contratado se buscará satisfacer una necesidad biológica necesaria, como comer.

Ya que como se resalto es criterio es ilógico y alejado de la realidad.

3) Higiene Oral

Aunque el A-quo tomo en cuenta los conceptos emitidos por parte de la Secretaria de Salud, que fueron adversos en contra de la demandada por temas estrictamente procesales, también lo es que en el fallo de primera instancia se indico que se observaba que el paciente no había sido objeto del proceso de praxis de higiene oral requerida para un procedimiento como el que se estaba solicitando, por esta razón era que se imponía la sanción, debido a que se habían vulnerado los protocolos de higiene del paciente en este caso, situación esta que nunca fue desvirtuada por la parte demandada.

4) Mala fe de la demandada

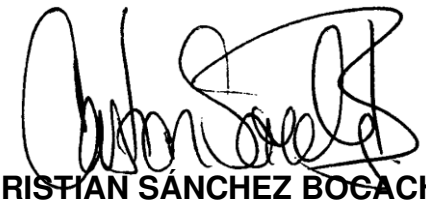
El demandado busco siempre proceder de mala fe en el trascurso del proceso y durante todas las instancias que se han realizado, dentro del mismo, la audiciencia de conciliación, planteamiento de pruebas, audiencias del proceso y alegatos de

conclusión, donde brillo por su abandono y desidia total por el sistema judicial y el despacho de primera instancia.

SOLICITUD

Por lo anteriormente manifestado me permito solicitarle a su Señoría, se permita modificar el fallo de primera instancia y en su lugar dispone reconocer la responsabilidad médica en cabeza de la demandada y el resarcimiento del daño en cabeza de mi poderdante.

Del señor magistrado,



CRISTIAN SÁNCHEZ BOCACHICA
C.C. No. 80.777.434 de Bogotá D.C.
T.P. No. 167.350 del C.S. de La J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: ALEGATOS EXP. 11001310303120220022601 RICARDO MUÑOZ VANEGAS VS GIOVANNI ANDRÉS HERRERA GUASCA

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 05/09/2023 16:09

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (278 KB)
SUSTENTACION RECURSO DE APELACION 2022-226.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: B IG DATA ANALYTICS SAS <bigdatanalyticsas@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 15:54
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Alejandro Herrera <alejandroherrera@bdalegal.net>; Dependencia Judicial <dependenciajudicial@bdalegal.net>
Asunto: ALEGATOS EXP. 11001310303120220022601 RICARDO MUÑOZ VANEGAS VS GIOVANNI ANDRÉS HERRERA GUASCA

Buenas tardes respetados
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL

Remito a continuación, el escrito de alegatos para que obren dentro del expediente de la referencia.

Cordialmente

--

Dependencia Jurídica
Litigios | BDA - Compliance (GRC) Solutions

+57 322 6856741 | +57 316 4687055

bigdatanalyticsas@gmail.com

www.bdalegalabogados.com

Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2023

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL – SALA CIVIL
E. S. D.

Proceso: Ejecutivo Singular de Mayor Cuantía
Radicación: 11001-31-03-031-2022-00226-01
Demandante: Ricardo Muñoz Vanegas
Demandado: Giovanni Andrés Herrera Guasca

Asunto: Sustentación Recurso de Apelación contra Sentencia de Primera Instancia

MILTON GONZÁLEZ RAMÍREZ, mayor y vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, con C.c. No. 79.934.115 portador de la tarjeta profesional No. 171.844 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado judicial de **GIOVANNI ANDRÉS HERRERA GUASCA,** estando en términos legales otorgados por el artículo 12º de la Ley 2213 de 2022, respetuosamente me permito sustentar el recurso de apelación presentado en contra la sentencia de primera instancia dentro de la demanda de referencia:

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El A quo hace un análisis de la interrupción de la prescripción, no obstante, aplicar la prescripción de la acción cambiaria en lugar de la interrupción natural de la prescripción en el ámbito de los instrumentos financieros, como los pagarés y las letras de cambio, puede tener beneficios significativos tanto para la certeza jurídica como para la eficiencia del sistema financiero y legal, esto por cuanto:

1. **Certidumbre Legal y Estabilidad en Transacciones:** La prescripción de la acción cambiaria se basa en plazos predefinidos y claros. Esto brinda certeza jurídica a las partes involucradas en las transacciones comerciales y financieras, permitiéndoles planificar y tomar decisiones con confianza. La interrupción natural de la prescripción, por otro lado, puede generar incertidumbre debido a la imprevisibilidad de los eventos que podrían interrumpir el plazo de prescripción.

2. **Incentivo a la Eficiencia y Prontitud:** La prescripción de la acción cambiaria fomenta que los tenedores de instrumentos financieros actúen con diligencia para hacer valer sus derechos. Los plazos establecidos por la ley motivan a los acreedores a emprender acciones legales oportunamente, evitando retrasos y litigios prolongados. La interrupción natural podría incentivar la procrastinación, ya que las partes podrían esperar eventos imprevistos para prolongar la validez de sus reclamaciones.

3. **Prevención de Abuso Legal:** La interrupción natural de la prescripción podría potencialmente abrir la puerta a prácticas abusivas, como la manipulación de eventos o circunstancias para prolongar artificialmente las reclamaciones. Estos

comportamientos podrían perjudicar la confianza en el sistema legal y socavar la integridad de las transacciones financieras.

4. **Promoción de la Eficiencia Judicial:** La aplicación uniforme y predecible de la prescripción de la acción cambiaria simplifica los procedimientos judiciales y evita la necesidad de determinar la idoneidad de cada evento natural como motivo de interrupción. Esto puede contribuir a la eficiencia general del sistema judicial al reducir la carga de casos que necesitan ser evaluados individualmente.

5. **Equidad Entre las Partes:** La prescripción de la acción cambiaria establece un marco equitativo y uniforme para todas las partes involucradas en transacciones financieras. La interrupción natural podría beneficiar a una parte en detrimento de otra, lo que podría generar desequilibrios y conflictos adicionales.

En resumen, aplicar la prescripción de la acción cambiaria en lugar de la interrupción natural de la prescripción ofrece ventajas considerables en términos de certeza jurídica, eficiencia, prevención de abuso y equidad en las relaciones financieras y comerciales. Estos factores contribuyen a un sistema más estable y equitativo para todas las partes involucradas en transacciones que impliquen instrumentos financieros.

En suma, debe revocarse la sentencia recusada, por ser su motivación contraria a los postulados procesales.

De los(as) Honorables Magistrados(as),



MILTON GONZÁLEZ RAMÍREZ
C.C.79.934.115
T.P.171 .844 del C.S.J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA RV: ALEGATOS EXP. 11001310303120220022601 RICARDO MUÑOZ VANEGAS VS GIOVANNI ANDRÉS HERRERA GUASCA

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 05/09/2023 16:09

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (278 KB)
SUSTENTACION RECURSO DE APELACION 2022-226.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR VALENZUELA VALBUENA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: B IG DATA ANALYTICS SAS <bigdatanalyticsas@gmail.com>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 15:54
Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Alejandro Herrera <alejandroherrera@bdalegal.net>; Dependencia Judicial <dependenciajudicial@bdalegal.net>
Asunto: ALEGATOS EXP. 11001310303120220022601 RICARDO MUÑOZ VANEGAS VS GIOVANNI ANDRÉS HERRERA GUASCA

Buenas tardes respetados
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL

Remito a continuación, el escrito de alegatos para que obren dentro del expediente de la referencia.

Cordialmente

--

Dependencia Jurídica
Litigios | BDA - Compliance (GRC) Solutions

+57 322 6856741 | +57 316 4687055

bigdatanalyticsas@gmail.com

www.bdalegalabogados.com

Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2023

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL – SALA CIVIL
E. S. D.

Proceso: Ejecutivo Singular de Mayor Cuantía
Radicación: 11001-31-03-031-2022-00226-01
Demandante: Ricardo Muñoz Vanegas
Demandado: Giovanni Andrés Herrera Guasca

Asunto: Sustentación Recurso de Apelación contra Sentencia de Primera Instancia

MILTON GONZÁLEZ RAMÍREZ, mayor y vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, con C.c. No. 79.934.115 portador de la tarjeta profesional No. 171.844 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado judicial de **GIOVANNI ANDRÉS HERRERA GUASCA,** estando en términos legales otorgados por el artículo 12º de la Ley 2213 de 2022, respetuosamente me permito sustentar el recurso de apelación presentado en contra la sentencia de primera instancia dentro de la demanda de referencia:

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El A quo hace un análisis de la interrupción de la prescripción, no obstante, aplicar la prescripción de la acción cambiaria en lugar de la interrupción natural de la prescripción en el ámbito de los instrumentos financieros, como los pagarés y las letras de cambio, puede tener beneficios significativos tanto para la certeza jurídica como para la eficiencia del sistema financiero y legal, esto por cuanto:

1. **Certidumbre Legal y Estabilidad en Transacciones:** La prescripción de la acción cambiaria se basa en plazos predefinidos y claros. Esto brinda certeza jurídica a las partes involucradas en las transacciones comerciales y financieras, permitiéndoles planificar y tomar decisiones con confianza. La interrupción natural de la prescripción, por otro lado, puede generar incertidumbre debido a la imprevisibilidad de los eventos que podrían interrumpir el plazo de prescripción.

2. **Incentivo a la Eficiencia y Prontitud:** La prescripción de la acción cambiaria fomenta que los tenedores de instrumentos financieros actúen con diligencia para hacer valer sus derechos. Los plazos establecidos por la ley motivan a los acreedores a emprender acciones legales oportunamente, evitando retrasos y litigios prolongados. La interrupción natural podría incentivar la procrastinación, ya que las partes podrían esperar eventos imprevistos para prolongar la validez de sus reclamaciones.

3. **Prevención de Abuso Legal:** La interrupción natural de la prescripción podría potencialmente abrir la puerta a prácticas abusivas, como la manipulación de eventos o circunstancias para prolongar artificialmente las reclamaciones. Estos

comportamientos podrían perjudicar la confianza en el sistema legal y socavar la integridad de las transacciones financieras.

4. **Promoción de la Eficiencia Judicial:** La aplicación uniforme y predecible de la prescripción de la acción cambiaria simplifica los procedimientos judiciales y evita la necesidad de determinar la idoneidad de cada evento natural como motivo de interrupción. Esto puede contribuir a la eficiencia general del sistema judicial al reducir la carga de casos que necesitan ser evaluados individualmente.

5. **Equidad Entre las Partes:** La prescripción de la acción cambiaria establece un marco equitativo y uniforme para todas las partes involucradas en transacciones financieras. La interrupción natural podría beneficiar a una parte en detrimento de otra, lo que podría generar desequilibrios y conflictos adicionales.

En resumen, aplicar la prescripción de la acción cambiaria en lugar de la interrupción natural de la prescripción ofrece ventajas considerables en términos de certeza jurídica, eficiencia, prevención de abuso y equidad en las relaciones financieras y comerciales. Estos factores contribuyen a un sistema más estable y equitativo para todas las partes involucradas en transacciones que impliquen instrumentos financieros.

En suma, debe revocarse la sentencia recusada, por ser su motivación contraria a los postulados procesales.

De los(as) Honorables Magistrados(as),



MILTON GONZÁLEZ RAMÍREZ
C.C.79.934.115
T.P.171 .844 del C.S.J.

REPARTO QUEJA 033-2017-00493-01 DRA MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 12/09/2023 11:18 AM

Para:Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>;**Reparto Sala Civil <repartotutelassalacivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

3 archivos adjuntos (870 KB)

2017-00493- CONCEDE RECURSO QUEJA - OK.pdf; F11001310303320170049301Caratula20230912111539.pdf; 7892.pdf;

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito recurso de queja, para los fines pertinentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Página 1

Fecha : 12/sept./2023

GRUPO RECURSOS DE QUEJA

CD. DESP	SECUENCIA	FECHA DE REPARTO
026	7892	12/sept./2023

REPARTIDO AL DOCTOR (A)
MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO

IDENTIFICACIO	NOMBRE	APELLLIDO	PARTE
86051256001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SAS		01
86000255481	PRIMAX COLOMBIA S.A.		02

OBSERVACIONES: 11001310303320170049301

BOG305SR
dlopezr

FUNCIONARIO DE REPARTO

11001310303320170049301

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
S E C R E T A R I A
SALA CIVIL
Avenida Calle 24 No. 53 – 28 Oficina 305 C
Teléfono: 4233390

Magistrado : **MARTHA ISABEL GARCIA SERRANO**

Procedencia : 033 Civil Circuito

Código del Proceso : 11001310303320170049301

Instancia : Segunda Instancia

Clase de Juicio : Verbal

Recurso : Queja

Grupo : 32

Repartido_Abonado : REPARTIDO

Demandante : DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DICOL SAS

Demandado : PRIMAX COLOMBIA SA

Fecha de reparto : 12/09/2023

C U A D E R N O : 2

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

KATHERINE ANGEL VALENCIA
Oficial Mayor
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil
Dirección: Av. Calle 24 No. 53-28 - Torre C - Oficina 305
Teléfono: 4233390 Ext. 8349.
Fax: Ext. 8350 - 8351
Bogotá, Colombia.
E-mail: kangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Juzgado 33 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 12 de septiembre de 2023 8:24
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE////NO SE ACUSA RECIBIDO////RV: REMISION 2017-00493

Rama Judicial
República de Colombia
Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá

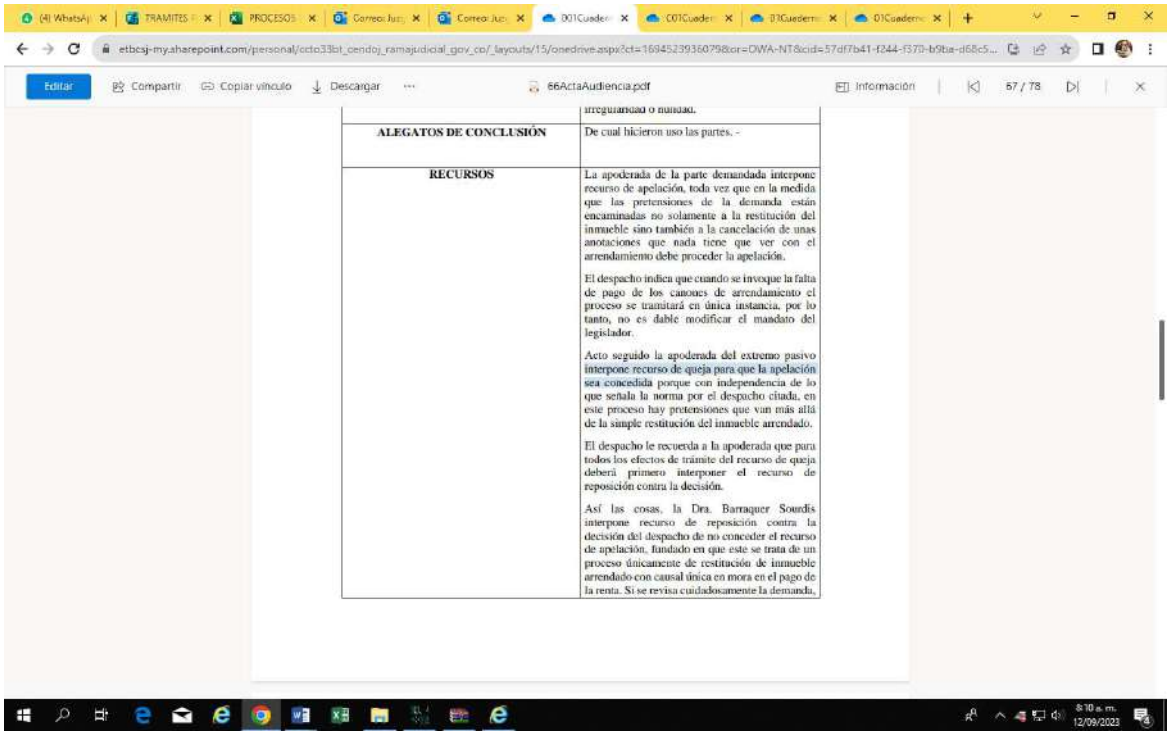
Carrera 10 No. 14 – 33 Piso 2 Telefax 2821242
Ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordial Saludo.

Por medio del presente, y dando respuesta a su devolucion me permito informarle que efectivamente se trata de un **RECURSO DE QUEJA,** interpuesto por la apoderada de la parte demandada dentro de la audiencia de que trata el articulo 372 y 373 del C.G.P., efectuada el 25 de mayo de 2023, toda vez que le fue negada la apelacion dentro de la misma.

Así mismo se procede a indicar lo anterior dentro de las observaciones del oficio remisorio.

me permito anexar pantallazo del acta de audiencia donde se encuentra consignado el referido recurso.



irregularidad o nulidad.	
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN	De cual hicieron uso las partes. -
RECURSOS	La apoderada de la parte demandada interpone recurso de apelación, toda vez que en la medida que las pretensiones de la demanda están encaminadas no solamente a la restitución del inmueble sino también a la cancelación de unas anotaciones que nada tiene que ver con el arrendamiento debe proceder la apelación. El despacho indica que cuando se invoque la falta de pago de los canones de arrendamiento el proceso se tramitará en única instancia, por lo tanto, no es dable modificar el mandato del legislador. Acto seguido la apoderada del extremo pasivo interpone recurso de queja para que la apelación sea concedida porque con independencia de lo que señala la norma por el despacho citada, en este proceso hay pretensiones que van más allá de la simple restitución del inmueble arrendado. El despacho le recuerda a la apoderada que para todos los efectos de trámite del recurso de queja deberá primero interponer el recurso de reposición contra la decisión. Así las cosas, la Dra. Barraquer Sourdis interpone recurso de reposición contra la decisión del despacho de no conceder el recurso de apelación, fundado en que este se trata de un proceso únicamente de restitución de inmueble arrendado con causal única en mora en el pago de la renta. Si se revisa cuidadosamente la demanda,

Atentamente,

Stefanny Ortiz Zamora
Asistente Judicial

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 8:49 a. m.
Para: Juzgado 33 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE////NO SE ACUSA RECIBIDO////RV: REMISION 2017-00493



Rama Judicial

JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
CARRERA 10 No. 14 – 33 PISO 2º. TELÉFONO 282 12 42
ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Oficio No.23-00800
Fecha: 27 DE JUNIO DE 2023

Señor
Secretario Sala Civil
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Ciudad

RADICACIÓN DEL PROCESO: 11001310303320170049300

TIPO DE PROCESO: VERBAL

CLASE Y SUBCLASE DE PROCESO: RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO

TIPO DE RECURSO: QUEJA

CLASE DE PROVIDENCIA RECURRIDA: AUTO ___ SENTENCIA X

FECHA DE LA PROVIDENCIA: 25 DE MAYO DE 2023.

FOLIOS Y CUADERNO DE LA PROVIDENCIA: ARCHIVO PDF 66 DEL CUADERNO PRINCIPAL

NÚMERO DE CUADERNOS Y FOLIOS REMITIDOS: 2 CUADERNOS DIGITALES CON 78 Y 1 ARCHIVOS EN FORMATO PDF.

DEMANDANTE(S): C.C. O NIT, DIRECCIÓN Y TELÉFONO: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A.S. DICOL NIT. 860.512.560-0. DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIÓN: CRA 84 C No. 58 C 02 SUR, BOGOTÁ D.C., CORREO ELECTRÓNICO: dicolsas.eds@gmail.com. -

APODERADO: C.C., T.P., DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ANDRÉS FELIPE CEPEDA PUENTES C.C.1.031.122.060 DE BOGOTÁ Y T.P. 248.260 DEL C.S.J., DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIÓN: CARRERA 72 A No. 55 – 28, BOGOTÁ D.C., CORREO ELECTRÓNICO: Andres.cepeda@grupoca.co. -

DEMANDADO(S): C.C. O NIT, DIRECCIÓN Y TELÉFONO: EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. hoy PRIMAX COLOMBIA S.A. NIT. 860.002.554-8, DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIÓN: CLL 90 19 C 32, BOGOTÁ D.C., CORREO ELECTRÓNICO: Notificaciones@primax.com.co. -

APODERADA: C.C., T.P., DIRECCIÓN Y TELÉFONO: EUGENIA BARRAQUER SOURDIS C.C. 39.784.892 Y T.P. 80.584 DEL C.S.J. DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIÓN: CALLE 69 No. 4 – 48, OFICINA 502, BOGOTÁ D.C., CORREO ELECTRÓNICO: ebarraquer@rattlf.com. -

Cordial saludo. No se acusa recibido del asunto referenciado, por cuanto, el oficio remisorio está mal dirigido, pues ya se expuso que se trata de un RECURSO DE QUEJA y no una APELACIÓN DE SENTENCIA, pues de nuevo se indica en el mismo oficio que se remite *QUEJA y SENTENCIA*.

JAIME HILDEBRANDO VEGA CARRIZALES
CITADOR IV - SECRETARÍA SALA CIVIL TSB

De: Juzgado 33 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 11 de septiembre de 2023 8:00
Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: REMISION 2017-00493

Rama Judicial
República de Colombia
Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá

Carrera 10 No. 14 – 33 Piso 2 Telefax 2821242
Ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir a ustedes el proceso de la referencia para los fines pertinetes.

se anexa oficio de remisión y link del expediente.

11001310303320170049300
Atentamente,

Stefanny Ortiz Zamora
Asistente Judicial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener

consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

LINK DEL PROCESO 033- 2017- 00493 01 DRA GARCIA 11001310303320170049301

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA RV: CamScanner 07-09-2023 11.17.pdf

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 07/09/2023 11:32

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (945 KB)
CamScanner 07-09-2023 11.17.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 11:29
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: carlos pineda <cpinedaabogado1@gmail.com>
Asunto: RV: CamScanner 07-09-2023 11.17.pdf

Cordial saludo,

Se remite por competencia a OSCAR CELIS FERREIRA - SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL, cualquier inquietud sobre su proceso debe dirigirla al correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON
Secretaria Administrativa de la Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá
PBX 6013532666 Ext. 8378
Línea gratuita nacional 018000110194
secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Calle 24A No. 53-28, Of. 305 C
Bogotá D.C.

De: carlos pineda <cpinedaabogado1@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 11:25

Para: Secretaria Sala Civil Tribunal Superior -Seccional Bogota <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CamScanner 07-09-2023 11.17.pdf

Buenos Días. Adjunto encontrará escrito de sustentación recurso de apelación. Dentro del proceso de pertenencia de Inversiones Monbol SAS. Contra RAFAEL NAVARRETE Y OTROS. Exp. 2018-00086. Juzgado de origen 33 C.C. Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA. Cordial saludo Carlos Pineda apoderado del actor

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

SEÑORES:
H.H. MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
ATENCION MAGISTRADO PONENTE:
OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA.
E. S. D.

REF: Pertenencia: INVERSIONES MONBOL SAS.
Contra: RAFAEL NAVARRETE PRIETO Y OTROS.
Proceso No 2018- 00086. (Juzgado de origen 33 C.C.).

CARLOS ALBERTO PINEDA TORRADO, obrando en mi carácter de apoderado de la sociedad demandante **INVERSIONES MONBOL SAS,** dentro del asunto de la referencia; Por medio del presente escrito, me permito **SUSTENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN,** Propuesto contra el fallo de Primera instancia, emitido por el juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, de fecha 17 de mayo de 2023. Por medio del cual **SE RESUELVE NEGAR LA DECLARACIÓN DE PERTENENCIA PROMOVIDA POR EL ACTOR, DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE MERITO DENOMINADA INDETERMINACIÓN DEL POSEEDOR ACTUAL, DECRETAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y CONDENAR EN COSTAS AL DEMANDANTE.** Para tal efecto procedo a sustentar el recurso en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Se indica por el a quo, que el proceso que nos ocupa versa sobre el 16.67% del bien inmueble ubicado en la calle 163 A # 8 A- 74 de Bogotá, donde funciona el plantel educativo COLEGIO CASA BLANCA.

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

El porcentaje antes descrito del derecho posesorio, objeto de declaración de pertenencia, se encuentra en cabeza de los demandados RAFAEL, MANUEL EDUARDO, CLARA INES Y MARIA CRISTINA NAVARRETE.

Los derechos posesorios que pretende para el caso concreto el actor, se derivan de la escritura de compraventa suscrita en la notaría 30 del círculo de Bogotá, número 3031 de fecha 21 de noviembre de 2014, por medio de la cual las señoras MARIA CRISTINA, CLARA INES, HELENA NAVARRETE Y ARACELY ROMERO DE NAVARRETE, Transfieren a titulo de venta el domino y posesión real del 83.33 % del lote de terreno 1, ubicado en la calle 163 A # 8 A – 74 de esta ciudad a La sociedad INVERSIONES MONBOL SAS. Y los derechos litigiosos de posesión que ejercen sobre el restante 16.67% del inmueble

El a-quo advierte en la parte motiva en concordancia con la resolutiva del fallo objeto de impugnación; Que para el evento que nos ocupa, si bien es cierto se reúnen los requisitos de los artículos 2512 y S.S. del C.C. Que trata de la adquisición por prescripción de las cosas ajenas. Como también señala, que se encuentra el tiempo requerido por suma de posesiones dispuesto por el art. 2521 del C.C. **Pero repara el hecho de que la vendedora de los derechos posesorios del 16.67% del predio señora CLARA INES NAVARRETE DE ORJUELA, no contaba con poder o autorización escrita de sus hermanas MARIA CRISTINA NAVARRETE DE MORENO Y HELENA NAVARRETE DE GARRIDO para disponer a nombre de estas del derecho posesorio vendido a la sociedad INVERSIONES MONBOL SAS.** Y por consiguiente la venta de derechos litigiosos posesorios no es valida y tal como lo propone el curador ad liten de los demandados y herederos indeterminados, no se tiene certeza de los poseedores actuales del inmueble y consecuentemente por esta razón se deben declarar imprósperas las pretensiones del demandante y se declara como probada la excepción de fondo propuesta denominada INDETERMINACIÓN DEL POSEEDOR ACTUAL.

A continuación, presento a consideración de LOS H.H. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. SALA –CIVIL, las razones por las cuales no comparto el fallo de primera instancia impugnado.

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

CONSIDERACIONES DEL RECURRENTE

Honorables Magistrados, lo primero que solicito respetuosamente al juzgador de esta instancia, tal y como lo manifesté ante el juzgador de primera instancia, dentro del traslado para proponer el recurso de alzada que nos atañe, es la solicitud al superior, de que se revise y analice todas y cada una de las pruebas aportadas en este proceso en su integridad y no de forma separada, por cuanto del análisis individual desprevenido de estas, se puede incurrir en imprecisiones que interfieren en la conclusión definitiva y objetiva del litigio que nos atañe.

Ahora bien, es importante tener en cuenta el contexto que obra en la escritura de compraventa suscrita en la notaría 30 del círculo de Bogotá, número 3031 de fecha 21 de noviembre de 2014, por medio de la cual las señoras MARIA CRISTINA, CLARA INES, HELENA NAVARRETE Y ARACELY ROMERO DE NAVARRETE, Transfieren a título de venta el domino y posesión real del 83.33 % del lote de terreno 1, ubicado en la calle 163 A # 8 A – 74 de esta ciudad a La sociedad INVERSIONES MONBOL SAS. Y los derechos litigiosos de posesión que ejercen sobre el restante 16.67% del inmueble. Donde claramente se puede establecer que las hermanas NAVARRETE, no solo transferían el 83.33% del derecho de posesión real y efectiva del inmueble objeto de declaración de pertenencia, sino que además le vendían el 16.67% de los derechos litigiosos que ostentan sobre el mismo, Para un total del 100% del predio. A pesar de que en el literal C. De la escritura de compraventa pagina 0000 014. Se dispuso textualmente "**así mismo CLARA INES NAVARRETE DE ROMERO DE ORJUELA transfiere LOS DERECHOS LITIGIOSOS sobre el 16.67%, todo ello vinculado sobre el inmueble que a continuación se determina junto con sus anexidades, mejoras, usos y costumbres...**". Es importante relacionarlo con lo pactado en el PARAGRAFO TERCERO DEL MISMO DOCUMENTO QUE obra en la pagina 0000 015 que dice- "**Los derechos litigiosos que se transfieren son los inscritos sobre la demanda en proceso ordinario que actualmente se tramita en el juzgado Treinta y SEIS (36) Civil del Circuito de Bogotá, D.C., comunicados a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos mediante oficio 2057 de fecha dieciocho (18 de diciembre de dos mil trece (2013(. Derecho de cuota y demanda debidamente inscritos al folio 50N-370101.** ***Igualmente se entienden transferidos a cualquier titulo de posesión, litigiosos o de propiedad que tengan que ver con el inmueble aquí determinado, de tal manera que debe tenerse como transferido cualquier derecho real o***

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

eventual derecho que pudieran tener las vendedoras sobre el inmueble". *El subrayado es mío. Todo lo anterior concuerda con la entrega real y material del 100% del predio junto con los bienes y anexidades que lo conforman. De igual forma la escritura de venta fue suscrita y firmada por las 3 hermanas NAVARRETE, tal y como obra a folios 0000 024 y 0000 25.* ***LOS OTORGANTES MARIA CRISTINA NAVARRETE DE MORENO, CLARA INES NAVARRETE DE ORJUELA Y HELENA NAVARRETE DE GARRIDO.*** Cedentes de todos sus derechos incluso de los posesorios.

Lo pactado en el documento de venta concuerda con las pruebas practicadas y decretadas por el juzgado de primera instancia y la solicitada en segunda instancia. Pues veamos:

De la testimonial rendida por la señora CLARA INES NAVARRETE DE ORJUELA, realizada dentro de la diligencia de inspección judicial efectuada en el inmueble objeto de declaración de pertenencia, el día 17 de mayo de 2023, por el a quo, la cual reposa en el audio 002. Parte 2MVI-0327 MP4 Y 003 Parte 3MVI 0328 MP4. La declarante narra la forma como se adquirió la posesión del inmueble y su venta a la sociedad MONBOL SAS. En la parte 002 minuto 31.25.

A la pregunta del señor juez que le indiqué la forma como le vendió a MONBOL, la señora CLARA NAVARRETE RESPONDIO: ***Les vendí, pues como representante de la familia, pues el negocio está en mis manos, les vendí este terreno más el proceso de pertenencia que yo había comenzado junto con mis hermanas... se vendió todo junto con el colegio en el 2014...***

Ahora bien, en la parte 0003 minuto 4.03. La testigo a la intervención del juez a la pregunta formulada por el apoderado del actor, este le indica; ***cuando usted habla de ese pedacito de seguro que cuando llegue su declaración al tribunal en apelación se va decir a que pedacito hace referencia, porque no tenemos esa plena identificación de ese pedacito, RESPONDIÓ, a nosotros nos correspondió el 11 11 y 11 de las hermanas NAVARRETE del 50% porque el otro 50% era de mi madre..... PREGUNTADO; QUE FUE LO QUE VENDIO ENTONCES. REPONDIO. LA PERTENENCIA.PREGUNTADO: DE QUE PARTE. CONTESTO. DE LA PARTE QUE LE PERTENECIA A ELLOS. PREGUNTADO. DE LA PARTE QUE LE PERTENECIA A ELLOS....." La posesión era publica, porque yo estaba representando a todos, entonces yo era la que aparecía como si fuera mío, por ser representante porque me dieron el poder, mis hermanas me dieron poder, me dijeron para que tenemos que estar juntas siempre las tres, que sea siempre CLARA, Yo hice el negocio propiamente con los MONBOL, Por eso me dieron el poder para que yo tomara las decisiones la firma y todo el proceso....."***

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

Ahora bien, a la pregunta del curador ad liten. PREGUNTADO. MANIFIETELE AL DESPACHO A QUIEN REPRESENTABA USTED. CONTESTO. ***YO REPRESENTABA A HELENA NAVARRETE DE GARRIDO LE DOY LA CEDULA Y MARIA CRISTINA NAVARRETE ROMERO MIS HERMANAS Y YO.....***"

La anterior declaración concuerda con la versión rendida por la testigo MARTHA URBINA, quien señala lo siguiente, PREGUNTADO POR EL DESPACHO. QUE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE LA VENTA QUE SE HALLA REALIZADO SAS EN EL PREDIO OBJETO DE ESTE PROCESO. **CONTESTO. PUES TENGO CONOCIMENTO QUE EL 2014 HACIA FINALES MAS O MENOS OCTUBRE NOVIEMBRE LAS ANTIGUAS DUEÑAS LA SEÑORA CLARA NAVARRETE Y SUS HERMANAS NOS REUNIERON EN SALA DE PROFESORES Y NOS INDICARON QUE ELLOS HABIAN HECHO LA VENTA A INVERSIONES MONBOL EN REPRESENTACION DE DON GONZALO MONROY Y DON ALBENIO BOLIVAR, QUE ELLOS HIBAN HACER LOS NUEVOS DUEÑOS DEL COLEGIO CON EL PREDIO EN EL QUE ESTA EL COLEGIO.....". PREGUNTADO. USTED SABE QUIENES ERAN O SON LAS HERMANAS DE CLARA. CONTESTO. SI PUES ELLAS TENIAN CARGOS DENTRO DEL COLEGIO, LA SEÑORA CLARA ERA LA RECTORA, LA SEÑORA HELENA NAVARRETE ERA LA CORDINADORA ACADEMICA Y LA SEÑORA MARIA CRISTINA ERA LA GERENTE ADMINISTRATIVA,.....**"

Ahora bien, dentro de las alegaciones presentadas por el CURADOR AD LITEM del extremo pasivo, que obran al minuto 3.06. del audio 005.parte 5MVI-0330 este afirma:

" frente al otro aspecto se pudo determinar de cierta forma, ya que habrá que valorar de la forma verbal se puede valorar esa cesión frente a la venta que se hizo, porque en la escritura habla únicamente del 83.36 como venta real, allí no habla de la posesión como tal , es de aclarar que no es doña clara la que vende su parte su cuota parte dentro de esa misma posesión y lo decía ella que dentro esa misma venta vendía los de sus hermanas también, ósea que quienes venden la posesión de los derecho del 16.66, son las tres hermanas contando con doña clara también, no solamente es doña clara, porque he visto que es una cuestión de semántica o de orden que se diga que fue doña clara, la que tenía única y exclusivamente la posesión del 16.66, cuando eran las tres hermanas y tal como sea visto en los testimonios vemos que en el ultimo dela psicóloga. Hablaba que todas ejercían la posesión, así una no viviera, pero venia acá..... "quería hacer estas precisiones, precisamente con el 2521 había que aclarar deforma fehaciente, si esas tres personas si vendieron esa posesión, para poder hacer las sumatorias de las posesiones como tal, *sin embargo como curador no tuve el alcance de haber hablado con otras personas*, para poder

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

investigado mucho más y tomar otras posiciones, por eso solicito que en mis contestaciones y hechos que se prueben estos, porque al suscrito por sustracción de materia le fue imposible, digamos dilucidar esto, sin embargo a través del proceso se vio que se dieron algunas circunstancias que nos demuestran que la familia de clara Navarrete sus hermanas tuvieron esta posesión hasta el año 2014, toda vez porque es un bien común y proindiviso, no se puede ubicar o localizar un pedazo de tierra como tal, porque jurídicamente no se puede todos son dueños de todos en su porcentaje, entonces si estuvieron haciendo uso……."lo único que digamos que me queda con la duda, es que para mí no es coherente, es precisamente ese elemento de conexión o ese pegante, que el ir a sumar una posesión con la otra, la forma en que se dio esa cesión de derechos litigiosos, pues la verdad es que no vi en el proceso o se me paso si existe algún tipo de contrato donde dijera vendemos los derechos a otra persona, ASI FUERA UNA PREBA SUMARIA, Hasta el momento quela tendíamos que probar, de acuerdo a lo dicho por doña clara Navarrete……."El subrayado es mío.

Finalmente, como se puede observar dentro del proceso, con la prueba sumaria allegada al proceso como tal, la venta de la posesión del predio objeto de declaración de pertenencia y cesión de derechos litigiosos, en el porcentaje del 16.67% fue realizado por la señora CLARA NAVARRERTE, con LA ANUENCIA, AURORIZACION Y EL AVAL de sus dos hermanas MARIA CRISTINA NAVARRETE DE MORENO Y HELENA NAVARRETE DE GARRIDO, Tal y como se puede constatar con la declaración Extra juicio, de fecha 25 de agosto de 2023, ante la notaría 40 del círculo de Bogotá, donde las 2 hermanas NAVARRETE **manifiestan , aclaran y avalan la venta de la posesión , que en su porcentaje del 16.67% ostentaban en el inmueble materia de este proceso. De la cual autorizaron a su hermana CLARA INES NAVARRETE ROMERO, paraque realizara el negocio con la sociedad INVERSIONES MONBOL SAS. Y que no van a disputar, ni ofertar dicha posesión.**

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que se reúnen los presupuestos facticos y jurídicos para DECLARAR LA PERTENCIA DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, comedidamente solicito A LOS H.H. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL, se sirvan revocar el fallo de primera instancia, proferido por el juzgado 33 civil del circuito de esta ciudad y en su lugar acceder a todas y cada una de las pretensiones de la parte demandante.

C. PINEDA & CIA
ABOGADOS
Carlos Alberto Pineda Torrado

Carrera 19 No. 33-44. Ofi 202 Barrio Teusaquillo.
Teléfonos: (601) 4- 272310
Cel: 315- 2407784 – 305-2334575
Bogotá, D.C. (Colombia)
E-mail : capitoabogado@hotmail.com
cpinedaabogado1@gmail.com

De los H.H. MAGISTRADOS, con sentimiento de respeto:

CARLOS ALBERTO PINEDA TORRADO
C.C. 79.340.919 de Bogotá.
T.P. 44.487 del C. S. J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA RV: RATIFICACION SUSTENTACIÓN APELACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 30/08/2023 12:25

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

2 archivos adjuntos (406 KB)
RATIFICACIÓN APELACIÓN.pdf; APELACION SENTENCIA.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: ROLFY FORERO CUADRADO <rolfy.forero@gmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2023 11:59
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; JOHANNA GRACIA <PAOLAGRACIA@GMAIL.COM>; legalmenteasesorias@gmail.com <legalmenteasesorias@gmail.com>; notificaciones@solidaria.com.co <notificaciones@solidaria.com.co>; ÓSCAR HERNÁNDEZ <hernandezchavarroasociados@gmail.com>; Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Asunto: RATIFICACION SUSTENTACIÓN APELACIÓN

Señores
SALA DE DECISIÓN CIVIL TRIBUNAL
SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE
Bogotá, D.C.
E. S. D.

Ponente : Dr. OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Proceso : Declarativo
Radicado : 2020-315-01
Demandante : CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S.
Demandado : EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Asunto : Ratificación sustentación de apelación presentada

Buenas tardes, por medio del presente me permito remitir en dos archivos pdf memorial y anexo de ratificación de sustentación de recurso de apelación, agradezco el trámite pertinente y el acuse de recibido por este medio.

Dando cumplimiento a los artículos 3° y 8° de la Ley 2213 de 2022 y numeral 14 del Artículo 78 del Código General del Proceso se copia al correos de:
La apoderada de Holding de Seguridad Doctora Paola Garcia Bautista
a saber paolagracia@gmail.com
La apoderada de Edificio Arcadia Doctora Luz Mireya Amado P. legalmenteasesorias@gmail.com
La demandada Aseguradora Solidaria notificaciones@solidaria.com.co
El apoderado de la señora Maria Leonor Mantilla Doctor Jaime
Enrique Hernandez hernandezchavarroasociados@gmail.com
A la llamada en garantía Aseguradora SBS Seguros Colombia
S.A. notificaciones.sbseguros@sbseguros.co

Atentamente,

ROLFY FORERO CUADRADO
ABOGADO
CALLE 19 # 4-88 OF. 802
+57 3102241704
rolfy.forero@gmail.com
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

Señores
SALA DE DECISION CIVIL TRIBUNAL
SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE
Bogotá, D.C.
E. S. D.

Ponente : *Dr. OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA*
Proceso : *Declarativo*
Radicado : *2020-315*
Demandante : *CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S.*
Demandado : *EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA*
Asunto : *Ratificación sustentación de apelación presentada*

En mi condición de procurador judicial de la señora CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S. demandantes dentro del proceso de la referencia, ante ustedes Honorables Magistrados teniendo en cuenta el auto del 29 de agosto de los corrientes, en relación con la sustentación de la apelación me ratifico en lo expuesto ante el inferior en escrito presentado el pasado 18 de julio de 2023 el cual se adjunta y se solicita sea tenido en cuenta para todos los efectos legales pertinentes.

Atentamente,

ROLFY FORERO CUADRADO
C. C. No. 19.295.429 de Bogotá
T. P. No. 70.325 del C. S. de la J.

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Tels. 286 30 50 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

Señor
JUEZ TREINTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá, D.C.
E. S. D.

Proceso : *Verbal Declarativo*
Radicado : *2020 – 315*
Demandante : *CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S.*
Demandado : *EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE ENTIDAD COOPERATIVA*
Asunto : *Sustentación apelación.*

En mi condición de procurador judicial de las demandantes CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S., encontrándome dentro del término establecido en el al inciso segundo numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, me permito presentar ante usted no solamente la enunciación sucinta sobre los puntos que versará la apelación, sino que, de una vez presento la sustentación definitiva, conservándome el derecho de ampliarla en su debida oportunidad, de considerarlo necesario, a lo cual procedo en los siguientes términos:

1. En relación con la decisión adoptada y los argumentos expuestos frente a los denominados presupuestos procesales, la legitimación en causa de las partes, la acumulación subjetiva y objetiva de pretensiones, así como de los presupuestos de la acción, exceptuando lo relativo al daño, no tengo reparo alguno, por considerar que los argumentos expuestos en la sentencia se compaginan con la realidad jurídica y procesal, por lo que básicamente la apelación se centrará en el análisis probatorio, para demostrar la existencia del daño.
2. En relación con el daño, la sentencia recurrida señala: ““*Tal tópico nos lleva inexorablemente a señalar que daño, se dijo antes, constituye el elemento base de la responsabilidad civil, sin el daño la obligación de indemnizar a favor de la víctima en cabeza del responsable no podría surgir. En este sentido, los criterios, nociones y conceptos que se utilicen para definir al daño no pueden ser escogidos por mera casualidad, pues a decir del entendimiento que se tenga sobre el daño, es que se define el alcance y la*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

esfera de protección de la responsabilidad civil en su función resarcitoria indemnizatoria o compensatoria.'

'Para que el daño sea resarcible, indemnizable o llamado a compensar, debe ser cierto y real, contrario a todo daño meramente hipotético o eventual. La certeza del daño afirma el profesor Javier Tamayo Jaramillo, puede ser tanto absoluta como virtual, pues la certeza no sólo se deriva de aquel daño que ya ocurrió o que está ocurriendo, sino que también es posible hablar sobre la certeza de un daño futuro, lo que importa es que, a partir de un análisis global del caso, teniendo en cuenta pruebas, indicios, peritados, testimonios, entre otros, el juez logre quedar con la convicción de que el daño existió, existe o existirá.'

'Al caso, la pretensión señala que las demandantes ambas perdieron $1.838'983.000.00 con ocasión del eventual hurto que sucedió en el apartamento 601 del edificio Arcadia PH, por lo que piden su reembolso, más la corrección monetaria desde el 19/11/2019 hasta cuando el pago se verifique y de suyo se dijo textualmente en la demanda que: "por lo engorroso de la demostración de la preexistencia, pues la demandante no poseen factura de compra, no se incluye el valor de la colección de relojes, de las joyas, ni de las carteras". A su vez, señaló la demandante que: "en virtud de la actividad comercial que desarrolla la mencionada empresa a diario, por conducto de su representante legal, mueve fuertes, sumas de dinero entre mil y dos mil millones de pesos más o menos, puesto que tiene que estar vendiendo y comprando diferentes mercancías en efectivo, motivo por el cual por economía, por facilidad y por comodidad no depositan ni manejan tales dineros bancariamente, sino que se repite, lo manejan en efectivo", y, además, "Por seguridad, tales dineros lo depositaba la señora siendo Jazmín y Losada Guzmán en su apartamento 601 del edificio Arcadia PH, situado en la carrera 17 a No. 116-97 de la ciudad de Bogotá, distrito capital, a donde incluso en algunas oportunidades se traslada a efectuar pagos a proveedores". Más seguro. "Para los días 17 18 y 19 de noviembre de 2019 tenía guardada en el mencionado apartamento la suma de $1.838'983.000.00 disponible para efectuar pagos en giro normal de los negocios de su empresa". Lo cual se explicó en la demanda. "Una vez que revisa la documentación correspondiente en la empresa, constata que la suma perdida corresponde exactamente a $1.838'983.000.00, por lo que el día 28/11/2019 procede a ampliar la denuncia e informar a la Fiscalía la suma exacta que se perdió en el hurto".'

'Tales hechos, que corresponden a la imputación fáctica de la responsabilidad contractual, dejan ver que la demandante Cielo Losada Guzmán, no padeció daño alguno, pues fue dinero de Comercializadora Quiral S.A.S. el que eventualmente se perdió durante los hechos delictivos ocurridos entre el 18 y 19 de noviembre de 2019.'

'Lo anterior se suma a que la misma demandante, Cielo Losada Guzmán, durante su interrogatorio de parte devertido en él consecutivo 56 del expediente digital desde el minuto 36, señaló con plena y absoluta claridad. 1. Que la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S. no tenía asiento o

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

domicilio en el edificio Arcadia PH. 2. Que son de la completa y absoluta propiedad de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., la suma de $1.838'983.000.00. 3. Que partir del impuesto a las bebidas azucaradas y a la obligación de factura electrónica, decidieron dejar en disponible dinero en efectivo para el pago a proveedores fabricantes de gaseosas y cervezas en orden a obtener descuento. 4. Que tenía caja fuerte en el apartamento 601 del edificio arcadia, dañada días antes del 19 de noviembre de 2019. 5. Sin embargo, desde hace más de 20 años tenía la costumbre de guardar dinero en efectivo en sus diferentes viviendas, sin que lo hubiese sucedido algo con anterioridad. 6. Luego llevaban el dinero a la sede de los proveedores como Bavaria, Postobón y Coca Cola, o directamente en la sede de Comercializadora Quiral S.A.S. 7. A su turno, señaló que la sede de Comercializadora Quiral S.A.S. era insegura y estaba en remodelación o adecuación. 8. Que la empleada de servicio Rosmeri no tenía conocimiento de las operaciones en efectivo o las cantidades que depositaba la señora Cielo Losada Guzmán en el apartamento 601 del edificio Arcadia. 9. Cielo Losada Guzmán vivía sola en el apartamento 601 del edificio Arcadia, al que solo iba 1 o 2 veces por semana dado que tenía otro apartamento en el que se quedaba cuando no estaba de viaje. 10. Quien conocía los valores y movimientos en efectivo correspondientes a la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S. efectuados por Cielo Lozada Guzmán era el señor Armando Perdomo, porque además de ser su mejor amigo, colaborador, empleado, la acompañó incluso a dejar el dinero dentro del apartamento 601 del edificio Arcadia, dentro de la caja fuerte, y llegó a tener llave del apartamento 601 para retirar el dinero. 11. En caso de que Cielo Losada Guzmán requiriese viajar, dejaba el dinero en efectivo en otros lugares diferentes a la caja fuerte para que sus colaboradores lo retirasen del apartamento 601 del edificio arcadia para pagar los proveedores de Comercializadora Quiral S.A.S.'

'Tal declaración perdió contrastación con la noticia criminal que allegó al dossier la Fiscalía 14 local en donde se lee: "Relato de los hechos; haga un relato de los hechos teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, contestó. Para el sábado en las horas del mediodía llegó al apartamento junto con mi empleada Rosmery, donde nosotras traíamos unas bolsas de plata por un valor de $1.200'000.000.00 y los guardo en la caja fuerte, la cual está dañada y queda en el estudio, y otra parte en unas cajas que están en el estudio, luego a eso de las 3:30 de la tarde, salgo del apartamento con mi esposo ya que él vino a recogerme. Para el día de hoy, a eso de las 4:30 de la tarde y me dice: Hola Cielo, me dice que teníamos un inconveniente, que esta mañana a eso de la 1:30 de la mañana se habían entrado los ladrones y que se habían robado el DVR de las cámaras y que habían amordazado al portero. Yo le pregunto que, si había pasado algo a mi apartamento y me dice que al parecer sí, ya que la empleada estaba dentro del apartamento, y que ella decía que todo estaba revolcado y desordenado, yo cuelgo con la administradora, yo de

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

inmediato llamo a la empleada Rosmery y le manifiesto que era lo que había sucedido y ella me dice que todo lo que estaba dentro del apartamento estaba revolcado y desordenado, que los cajones del clóset, colchones, ropa y demás cosas estaban tirados en el piso. Colgamos y salgo de inmediato hacia el apartamento, es cuando llamo nuevamente a la empleada y esta no me contesta, a lo cual yo llamé en varias ocasiones, llamo a la portería y no contestaban, hablé con mi esposo a manifestarle lo sucedido y me da el número del portero José y le pregunto, que era lo que había pasado y le digo que me pasara a Rosmery, y yo le pregunto que si habían robado todo y ella me dice que todo lo del estudio estaba revolcado y unas cajas tiradas en el piso. Yo le digo a Rosmery que subiera y mirara todo lo al interior del apartamento y ella me dice que no podía entrar, ya que habían llamado a la policía y a la Sijin y que no podía entrar. Yo llego al apartamento a eso de las 9:20 de la noche, entro al apartamento y es cuando observo que efectivamente, todo lo del estudio estaba desordenado, faltándome el dinero en efectivo $1.200'000.000.00 que estaban guardados en la caja fuerte y en las cajas del estudio, de igual forma, en las habitaciones me hace falta mis joyas en oro, diamantes y esmeraldas entre cadenas, anillos, relojes por un valor de mil millones de pesos. Posteriormente llegan ustedes y les manifiesto lo sucedido. Preguntado: Manifieste al despacho qué elementos le fueron hurtados Indicando características y cuantía, contestó: dinero en efectivo por $1.200'000.000.00, mis joyas en oro, diamantes y esmeraldas entre cadenas, anillos, relojes por un valor de mil millones de pesos, todo por un valor de $2.200.000.000, de igual forma, esperando que realice o recoja el desorden y verifique si me falta más elementos me acercaré a la fiscalía para rendir entrevista y aumentar el valor de lo robado. Preguntado, manifieste a esta diligencia qué personas viven en la residencia donde suceden los hechos, materia de investigación. Contestó: Yo vivo aquí sola, ya que mis hijos están en el exterior y mi esposo vive en otro apartamento, el cual no le gusta venir aquí porque siempre hay mucho trancón. Preguntado. Manifieste a este despacho cuántas entradas o puertas de acceso hay a esta residencia contestado: solo una, la principal. Preguntado manifieste este despacho con qué tipo de seguridad cuenta el hogar y mencione si le fue violentada o alterado los mismos, contestó la puerta es de seguridad y esta no presenta ningún tipo de violación o daño. Preguntado, manifieste el despacho si el sector o inmueble cuenta con cámaras de seguridad por circuito cerrado de televisión, contestó, sí señor alrededor de la casa hay cámaras. Preguntado manifieste el despacho, quién es el propietario de los elementos hurtados. Contestó: La Plata de la empresa comercializadora quiral D y las joyas mías. Preguntado, manifieste al despacho si los elementos hurtados se encuentran asegurados, de ser así, con qué póliza y número contestó, no señor. Preguntado manifieste el despacho si los elementos mencionados tienen algún tipo de marca o contraseña en particular, contestó, parte de los billetes tienen un sello en forma de corona, como también eran billetes de la denominación de $50.000 y las joyas relojes normales de fábrica. Preguntado manifieste a este despacho en qué lugar específico estaban guardados los elementos que le hurtaron, contestó, estaban dentro del apartamento. Preguntado, manifieste al despacho, qué personas tienen acceso al inmueble, contestó mi empleada Rosmery, un amigo Armando Perdomo, y yo, nadie más. Preguntado, manifieste al despacho si tiene conocimiento cuántas personas cometieron el hecho y si sabe las características físicas, contestó: No, no, señor. Preguntado, manifieste al despacho si ya había sucedido estos hechos con anterioridad en el lugar, contestó, es la primera vez. Preguntado manifieste al despacho, si existen testigos presenciales de los hechos, contestó No, no, señor. Preguntado manifieste a este despacho si usted presume de alguien o tiene sospecha alguna persona que haya cometido el hurto o participado en él en el mismo contestó No, no, señor, eran las únicas 2 personas que han estado al apartamento son las antes mencionadas. Preguntado manifiesta el despacho en cuánto estima los daños y perjuicios. Contestó, Este valor lo dejó por establecer. Preguntado este valor, lo dejo por establecer, ya que requiero hablar y reunirme con mi contadora y realizar la suma de la pérdida y el interés de la plata. Preguntado manifiesta esta diligencia, si usted cuenta con empleadas de servicio, contestó, sí, señor, manifiesta esta diligencia si alguna persona salió lesionada producto en los hechos, contestó, No, no, señor manifieste esta diligencia si la empleada de servicio tiene llaves del apartamento. Contestó, Sí, sí, señor. Preguntado manifieste esta diligencia hace cuánto tiempo trabaja la señora Rosmery como empleada de servicio. Contestó hace como 1 año y medio aproximadamente. Preguntado manifieste esta diligencia cómo usted contrata a la señora Rosmery como empleada del servicio, contestó por medio de una prima de ella de nombre María Elena Manrique. Preguntado manifiesta esta diligencia, si el señor Armando Perdomo tenía llave del apartamento, contestó, él tenía la llave, pero él dejó de trabajar conmigo hasta el mes de agosto y me la DEVOLVIÓ, pero a finales del mes de agosto le pedí el favor al señor Armando Perdomo que recogiera una plata que estaba dentro del apartamento ya que yo estaba viajando. Preguntado manifieste esta diligencia, qué personas sabían que el dinero antes mencionado se encontraba dentro del apartamento. Contestó, solo yo y mi esposo Germán Espitia, pero él no sabía cuánto era el monto. Preguntado manifieste esta diligencia, si alguna persona, del apartamento, se le ha perdido o extraviado, la llave del apartamento contestó, No, no señor, es más, la chapa está cambiada hace cuatro meses aproximadamente. Preguntado manifieste esta diligencia, si alguna persona o empleado sabía que

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

usted guardaba constantemente dinero dentro del apartamento. Contestó, No, no, señor nadie, ya que ellos saben que yo tengo 2 apartamentos y no sabían nada. Preguntado manifieste a esta diligencia si el señor Armando Perdomo sabía con exactitud de que usted guardaba grandes sumas de dinero en el apartamento, contestó, Sí, sí, sí, sí, señor, porque él se daba cuenta de cuándo la empacábamos y la transportábamos. Preguntado manifieste esta diligencia, si usted tuvo algún tipo de inconveniente o problema con el señor Armando Perdomo, contestó, No, no, señor nada. Preguntado manifiesta, esta diligencia si el edificio cuenta con seguridad privada. Contestó. Sí, sí, señor. Preguntado manifieste esta diligencia, si usted le mencionó a la empresa de seguridad que usted estaría de viaje o fuera de la ciudad contestó, Sí, sí, señor, al que estaba de turno el día sábado. Preguntado manifiesta esta diligencia, si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia, contestó, Sí, sí, señor que se me hace extraño que la empresa de seguridad no avise hasta hoy en la tarde y no me avise más temprano que se me hace imposible que ellos se den cuenta que nos habían robado y hasta las horas de la tarde de hoy, nada más. No siendo nada más el motivo de la presente se da por terminada y firman quienes en ella intervinieron."

'Sobre lo acotado hay que decir: a) Un apartamento no está dado para custodiar sumas de dinero como las que, como las aquí comentadas; b) La demandante empleo el apartamento 601 del edificio arcadia básicamente para guardar dinero en efectivo sin anunciar a ello a la seguridad del edificio y en cambio, exponiendo a los copropietarios a incidentes de seguridad. c) Es cierto en la casa de cada cual se está en libertad de guardar los objetos que, sin infringir la ley, se puedan guardar, sin embargo, de esa libertad implica adoptar medidas de seguridad suficientes, anunciar a la administración y precaver los riesgos asociados a ello. Ahora, ya decantado que Cielo Losada Guzmán en términos de la demanda no perdió suma alguna de dinero porque los $1.838'983.000.00 son de la entera propiedad de Comercializadora Quiral S.A.S. queda claro, solo esta sociedad puede ser la llamada con ocasión del eventual perjuicio a dirigir la acción de responsabilidad extracontractual.'

'No obstante, y bajo la misma línea, el daño no logró demostrarse por parte de Comercializadora Quiral S.A.S.. De un lado, la pérdida de $1.838'983.000.00 no ha sido contabilizada, lo que se corrobora con los estados financieros aportados en curso de la exhibición documental que se indicó fue incompleta, parcial y adulterada por haberse introducido y retirado documentos de repositorio digital que, indicó el apoderado actor.'

'Tal y como quedó dicho en la sesión del día de ayer, a su vez lo corroboró el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, quien es el revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S. A su turno, quedó claro de lo hasta ahora discernido que la misma demandante, Cielo Losada Guzmán, no tenía clara la cantidad de dinero en efectivo que guardó en el apartamento 601 del edificio arcadia, propiedad de Comercializadora Quiral S.A.S., pues, son más de $600'000.000.00, la diferencia entre la noticia criminal, su ampliación y la presente demanda.'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'Y, a su vez, llama la atención que la pérdida de 1.000 millones de pesos en joyas resulte fácilmente o miscibles o despreciables por la dificultad para probar su preexistencia.'

'Ahora bien, las declaraciones recaudadas disponibles en él consecutivo 77 y más concretamente, la versión rendida por parte del señor Javier Enrique Tula Garzón, que se califica como ambigua y poco asertiva, dejó entrever que aunque es confuso en su relato, aseguró que transportó a Cielo Lozada Guzmán desde la sede del domicilio de la Comercializadora Quiral S.A.S., en dos ocasiones en un vehículo marca Renault de su propiedad con destino al edificio Arcadia PH, sin saber que con ella llevaba dinero en efectivo y menos la cantidad. Con todo, no señaló el testigo que en esas 2 ocasiones fuesen en el mes de noviembre de 2019.'

'También se extrae que ese testigo se desempeña como conductor del camión Chevrolet de placas BSÚ 847 para la sociedad demandante, en donde en diversas ocasiones traslado dinero en efectivo a la sede de Postobón y en el banco dentro de dicha sede, pago facturas a Postobón.'

'Seguidamente, la testigo Daniela Cortez Velázquez, ex auxiliar contable de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., fue enfática en señalar que por un lado Cielo Losada Guzmán filtraba que llevaría dinero en efectivo a su casa, al equipo de contabilidad de Comercializadora Quiral S.A.S., lo cual sabía también Javier Enrique Tula Garzón, Andreína Delgado Cárdenas y Armando Perdomo. A su turno señaló el valor de $1.838'933.000.00, logro decantarlo tras "Un arqueo de ventas", encontrando que correspondía al monto neto vendido entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. Pero no tenía claro el Estado de la cartera, es decir, solo tuvo en cuenta las ventas brutas dentro de su arqueo, no así la cartera en mora, que la hay, según los datos que reflejan los estados financieros de la sociedad demandante.'

'Aseguró la señora Cielo Losada Guzmán salió de viaje a atender una calamidad familiar en el mes de noviembre de 2019, cuando la misma señora Losada Guzmán indicó que fue a celebrar un contrato de compraventa sobre un predio ubicado en campo alegre huila. En todo caso, reiteró, porque se le reiteró la cuestión varias veces, que el monto de lo perdido por quiral correspondía al cruce entre el precio de lo vendido, que era el ingreso de Quiral y lo eventualmente sustraído, el apartamento 601 del edificio arcadia a la señora Cielo Losada, lo que permitió determinar el monto de la pérdida de quiral. Aseguró la testigo, además que en promedio se tenía un volumen de ventas para los meses de noviembre y diciembre

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

por ser temporada alta fácilmente alcanzaba 300 o 400 millones de pesos al día en promedio. Contó la testigo, fue enfática en señalar que no le consta el monto que la señora Cielo Lozada Guzmán se llevó el apartamento 601 del edificio Arcadia. Tampoco sabe cómo se transportaba ese dinero y menos sabe la cantidad porque nunca la acompañó o contó el dinero.'

'Ahora el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., dejó en claro que en dicha sociedad no se ha implementado el sarláf muy a pesar de los volúmenes de operaciones en efectivo. Acotó el valor de $1.838'983.000.00 corresponden al cruce de ingresos y egresos alcanzados entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. El testigo señaló que no despertó en él como revisor fiscal, ninguna inquietud relacionada con que siendo el monto perdido equivalente al 10% de las ventas totales de la sociedad, esta siguiesen facturando entre el 8 y el 16 de noviembre de 2019. También indicó que no revisó soporte de operaciones, sino memorias contables y documentos de trabajo de su antecesor y del Departamento de Contabilidad de la Sociedad Comercializadora Quiral S.A.S.'

'En todo caso, señaló, no le consta que la señora Cielo Losada Guzmán se llevara el dinero de la Comercializadora Quiral S.A.S. al apartamento 601 del edificio Arcadia PH. Tampoco el monto o la forma como lo transportaba.'

'Significa lo anterior que, ciertamente anda huérfano de prueba el daño cierto y directo con relación a la eventual culpa que pueda recaer en las demandadas, dados los hechos sucedidos entre el 18 y 19 de noviembre de 2019 en el edificio Arcadia PH, que hubiese originado un perjuicio a la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., pues las declaraciones se contradicen en lo medular.'

'Puestas, así las cosas, como en verdad lo son, se hace claro el fracaso de la acción contractual y extracontractual promovida por las demandantes, pero además, atendiendo la prohibición del artículo 361 y el numeral primero del artículo 365, ambos del Código General del Proceso, en consonancia con el numeral primero del artículo 5° del Acuerdo PSAA 1050054 del 05/08/2016 emanado de la sala administrativa del Consejo Superior de la judicatura, se condenará también en costas a las demandantes."

3. Tal como aparece consignado en las diferentes salidas procesales de la parte que represento, la acción incoada está dirigida a que las demandadas EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, se les declare civil y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que soportan CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S., por causa y razón del hurto o sustracción de bienes materiales de su propiedad causados el día martes 19 de noviembre de 2019 aproximadamente a la 01:30 horas de la madrugada; en el apartamento número 601 del EDIFICIO ARCADIA P.H., situado en la carrera 17 A número 116 – 97 de la ciudad de Bogotá, D.C., POR CULPA CIVIL CONTRACTUAL DIRECTA de manera principal frente a las dos demandantes y de forma subsidiaria en igual sentido con relación a la señora CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y CULPA EXTRACONTRACTUAL frente a la sociedad COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S., al fallar en el ejercicio de vigilancia por intermedio de sus agentes; y que como consecuencia de ello se les condene a pagarles a las demandantes el monto de la indemnización proveniente de la substracción del dinero como bien material que fue objeto de la misma felonía consumada, en cuantía de UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.838’983.000.00); con los intereses comerciales moratorios sobre dicha suma, liquidados mes a mes a la tasa más alta vigente certificada por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) para el interés bancario corriente más un cincuenta por ciento, conforme a las fluctuaciones o variaciones que han tenido desde el día diecinueve (19) de noviembre de 2019 hasta la fecha en que el pago se verifique, al tenor de lo preceptuado en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el artículo 305 del Código Penal y el artículo 72 de la Ley 45 de 19901; y por el valor de la corrección monetaria sobre la cantidad determinada en los puntos anteriores desde el 19 de noviembre de 2019 hasta cuando se realice el pago, tomando como base el índice de precios al consumidor.

4. Ciertamente, como se sabe y así lo ha establecido la doctrina y jurisprudencia patria, se estructura la responsabilidad civil de la existencia de un hecho que vulnere el derecho ajeno, de lo cual emergen las acciones que ocupan nuestra atención tendientes a que se le resarzan a los demandantes los perjuicios sufridos como afectados con el hecho

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

generador del daño, sin importar que este provenga del incumplimiento de obligaciones contractuales, en cuyo caso nos encontraríamos frente a una responsabilidad contractual, o que su origen surja de un comportamiento no enmarcado dentro de un contrato, que da lugar a la responsabilidad extracontractual o también denominada aquiliana.

5. Conforme con el principio general de la responsabilidad civil consagrado en el Libro 4º, Títulos 12 y 34 del Código Civil, el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo, eventos en los cuales corresponde al demandante demostrar la culpa del demandado y el perjuicio padecido y su cuantía.
6. Con base en lo anteriormente expuesto y no existiendo duda que nos encontramos ante las dos acciones tanto contractual como extracontractual, respecto de la cual la jurisprudencia y doctrina patria han determinado que para su prosperidad, deben coexistir y estar plenamente probados los siguientes elementos: a) la existencia de una conducta culposa del demandado, por la inejecución o cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones; b) que se acredite legalmente que existe un daño cierto y directo y c) la existencia de una relación de causalidad entre la conducta culposa del demandado y el daño sufrido por el demandante.
7. Sería el caso entrar al estudio de tales presupuestos en el orden señalado, pero, atendiendo la sustentación de la sentencia recurrida y las razones por las cuales se negaron las pretensiones, primeramente, nos detendremos en lo relacionado con el daño.
8. La referida culpabilidad tiene que ver con el actuar positivo u omisivo del demandado contrario a la ley determinante de la causación del daño injusto demandado por el accionante, quien no se está obligado a soportarlo. Al respecto la jurisprudencia ha señalado "*...el daño o perjuicio es la primera condición de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontracontractual, pues la ley, la doctrina y la jurisprudencia unánime y constantemente enseñan que no puede haber responsabilidad sin daño; y esta última ha pregonado, de manera insistente y uniforme que, para que el daño sea objeto de reparación tiene que ser cierto y directo, por cuanto corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado, y como consecuencia inmediata de la culpa o delito; y ha puntualizado así mismo, que de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido, le corresponde demostrar, en*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

todo caso, el daño cuya reparación persigue y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima"[1]

9. La sustracción o hurto del dinero se demuestra con las denuncias y los reportes obrantes en diligencias, así como con los testimonios que se recaudaron en el curso del proceso, con los cuales, además, con ellos se demostró la preexistencia del dinero hurtado y su posterior desaparición, como son, ANDREINA DELGADO CARDENAS, JAVIER ENRIQUE TULA GARZÓN, les consta que en el apartamento las demandantes guardaban dinero, pues si bien es cierto, no presenciaron la llevada del dinero, ni su cuantía, si les consta que de la empresa sacaban gruesas sumas de dinero en efectivo y las trasladaban al apartamento, este último, incluso en algunas oportunidades traslado tales bolsas.

   Resulta una prueba imposible tratar, como lo pretende la sentencia censurada, que estas personas con certeza les conste la suma exacta de dinero guardada en el apartamento, ellos solamente pueden declarar que les consta el traslado de algunas sumas de dinero, sin que tampoco se les pueda exigir que les conste, las cuantías exactas que se trasladaban, pues, para que les conste la suma exacta sería exigirles que cuando iban a trasladar el dinero lo contaran, estas declaraciones para demostrar la cuantía deben ser interpretadas de manera conjunta con la contabilidad de la empresa, la cual, contrario a lo sostenido por el fallo apelado, la contabilidad aportada al plenario da cuenta de la suma extraviada, en cuantía de UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.838’983.000.00), el hecho que algunos de los archivos de manera inexplicable, quizá por lo pesado de los mismos, se hubieran borrado o no hubieren pasado, no constituye mala fe de mis poderdantes, ni le resta el valor probatorio a la contabilidad, pues, lo esencial de ella aparece incorporado a los autos.

   La contabilidad llevada en debida forma, según los mandamientos del código de comercio, el decreto 2649 y algunas normas tributarias, constituye prueba válida contra terceros, incluso, de la Administración de impuestos.

   La contabilidad presentada en el curso del proceso se sujeta a las prescripciones del Título IV del Libro I, del Código de Comercio y: 1. Muestra fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las

[1] *Corte Suprema de Justicia, sentencia del 29 de marzo de 1990.*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

operaciones correspondientes se encuentran especificadas de modo preciso con los comprobantes externos que respaldan los valores anotados. 2. Cumple todos y cada uno de los requisitos señalados por el Gobierno mediante reglamentos en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, hace posible ejercer un control efectivo y refleja en los libros presentados, la situación económica y financiera de la empresa.

Los libros de contabilidad presentados son prueba suficiente, puesto que reúnen los siguientes requisitos: 1. Están registrados en la Cámara de Comercio; 2. Están respaldados por comprobantes internos y externos; 3. Reflejan completamente la situación de la empresa; 4. No han sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos; 5. No se encuentran incursos en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio. (No se lleva Doble contabilidad)

Acorde con lo dicho encontramos que los libros de comercio y la contabilidad presentada tienen la fuerza probatoria para demostrar la pérdida del dinero reclamado, en la medida en que la contabilidad está llevada en debida forma, con el cumplimiento total de los requisitos legales.

La corte constitucional en sentencia C-062 del 30 de enero de 2008 ha hecho una magistral exposición respecto a las condiciones que debe cumplir la contabilidad para que constituya plena prueba, prueba que es válida tanto en aspectos comerciales, civiles, tributarios, etc.:

"*Ahora bien, el hecho de que los libros de comercio que se exhiben entre comerciantes constituyan plena prueba no significa que la aducción de los mismos sea absoluta o esté desprovista de reglas. El concepto de plena prueba debe matizarse en los siguientes sentidos.'*

'En primer lugar, tal como lo indica el doctrinante Gabino Pinzón, la eficacia probatoria de los libros de comercio se encuentra subordinada al cumplimiento de ciertos requisitos:'

'a) Para que los libros de contabilidad sean eficaces como prueba en litigio, se requiere que sean llevados en debida forma. En otras palabras, la contabilidad que puede hacerse valer como medio probatorio es la que cumple con las especificaciones de la ley. Una contabilidad que no satisfaga las exigencias legales o no lleve los libros indicados por la ley no puede considerarse fidedigna y, por tanto, no puede constituir prueba de lo que en ella se consigna. (…)'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla.'

'b) El carácter de plena prueba de los libros de comercio se predica de ellos en su totalidad indivisible, sin que le sea permitido al contendor solicitar la exhibición de los mismos, al tiempo que descalifica registros específicos o libros concretos. Así, quien solicita la exhibición de los libros no puede posteriormente formular reservas parciales, pues aquellos se suponen plena prueba de lo que pretende acreditarse.'

'Así lo prevé el artículo 72 al advertir que "la fe debida a los libros es indivisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su adversario estará obligada a pasar por todas las enunciaciones prejudiciales que ellos contengan, si se ajusta a las prescripciones legales y no se comprueba fraude".'

'c) El contenido de los libros de comercio constituye una confesión del comerciante que los lleva e impide que el mismo pruebe en contrario de lo que ha consignado en ellos. Este principio se vincula con aquél que sólo confiere valor de plena prueba a los libros llevados de manera regular, por lo que debe entenderse que sólo la contabilidad que se lleva de manera regular constituye plena prueba. Así se deriva del mismo inciso primero del artículo 271 del C.P.C. previamente citado.'

'Sobre la base de los principios generales expuestos, el régimen comercial nacional ha diseñado un complejo sistema de reglas que dan al juez instrucciones acerca de cómo hacer valer el valor probatorio de los libros de comercio en un proceso, de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de llevar libros de comercio.'

'a) En primer lugar, el artículo 70 del C.Co. establece que, si los libros de comercio están llevados de forma adecuada y concuerdan con los asientos contables, deberá decidirse de conformidad con su contenido y asiento. En esta hipótesis, la ley parte del supuesto de que los comerciantes trabados en contienda son cumplidos en su deber de llevar en forma regular los libros de comercio. Por ello la ley confiere a los libros de comercio el máximo de certeza posible. Como la obligación legal se cumple en debida forma, la ley admite el carácter de plena prueba del contenido de los libros de ambos. La información fidedigna que soportan los asientos contables permite extraer de ellos la información litigiosa.'

'b) Si los libros están debidamente diligenciados, pero no coinciden con los asientos contables, la ley da por cierto el contenido de los libros y papeles

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

de comercio, pues, por disposición del artículo 70 citado, aquellos constituyen confesión. Al respecto, afirma Rocco, que "los asientos de los libros constituyen una confesión escrita extrajudicial hacia la parte contraria", por lo que, en verdad, en esta hipótesis, los libros no pueden desecharse.'

'(…)"

10. La Corte Constitucional dentro de la Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 70 del Código de Comercio, con radicado D-6867, siendo Demandante: Mónica Gabriela Rosero Muñoz y Magistrado Ponente el doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA, de fecha treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008), sostuvo: "*La obligación de llevar cuenta y razón de los actos y operaciones tanto de contenido comercial como civil ha sido exigida tradicionalmente a los comerciantes como garantía de seriedad del ejercicio profesional, pues ello permite medir, identificar y registrar la información económica de su oficio. El Estado, los particulares y el mismo comerciante reciben beneficio directo del registro de los actos de comercio en los libros correspondientes.'*

'(…)'

'Los libros de comercio ofrecen un beneficio directo para el propio comerciante, porque le permiten estar al tanto del manejo y desarrollo de sus negocios. Esto le garantiza un conocimiento del estado financiero de su actividad y facilita la planeación de su gestión mercantil. ***De igual manera, desde el punto de vista del comerciante, el manejo correcto de los libros de constituye prueba idónea para hacer valer en los procesos judiciales que puedan surgir en desarrollo de su actividad comercial; pero, además, garantiza los derechos de los acreedores y permite reconstruir la conducta del comerciante****, de manera que es posible detectar posibles fraudes en su actividad o la comisión de conductas reprochables desde el punto de vista del código de ética. Ello, en últimas, constituye una herramienta de protección de su propio buen nombre, pues el buen desempeño profesional queda registrado en los libros con destino a posibles procesos judiciales. Gracias al manejo adecuado de los libros de comercio, los datos y archivos consignados se convierten en herramienta de innegable utilidad para el análisis de la empresa y para la planeación interna y externa de su gestión.'*

'(…)'

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

'Ahora bien, entre muchas de las funciones que cumplen los libros de comercio está la de llevar contabilidad de los negocios. La contabilidad es la técnica normatizada que le sirven de pauta al comerciante para registrar las transacciones que realiza y que le permite conocer en cualquier momento el estado de sus negocios. Es, en sentido estricto, la técnica que permite registrar, en forma cifrada, los movimientos de valores y bienes de una empresa, así como la apreciación de los resultados de la respectiva explotación.'

'La contabilidad cumple fundamentalmente dos funciones: permite que el comerciante tenga información relacionada con la marcha actual de sus asuntos, pero también comunica a terceros, ajenos al negocio, acerca del desenvolvimiento de los mismos. Así, la contabilidad tiene una función interna, que interesa exclusivamente al comerciante, pero se ve complementada por una función externa, que beneficia a la comunidad, es decir, a los bancos, los acreedores, los proveedores, los inversionistas, los organismos de vigilancia estatal, el aparato fiscal, los comerciantes con quienes pueden entablarse negocios o litigios y, en general, la comunidad toda.'

'Como se ha dicho, llevar la contabilidad regular de los negocios reporta un beneficio directo para el comerciante, porque le permite conocer en cualquier momento el estado de sus negocios, la magnitud de sus activos y pasivos y el grado de exigibilidad de los últimos; la velocidad de rotación del inventario, su posición frente a los proveedores y acreedores, la cuantía y estado de la cartera, el precio de costo de las mercancías que ofrece, etc.'

'También importa a los terceros porque permite que del estudio de los estados financieros de la empresa se determine el acceso a los créditos bancarios o se establezca el grado de responsabilidad del comerciante en caso de cesación de pagos o de incumplimiento de obligaciones. En efecto, la quiebra del comerciante afecta gravemente sus negocios, pero también tiene efectos en sus acreedores y, si la empresa es suficientemente importante, incluso puede extender sus efectos a toda la sociedad. De allí que las normas que regulan la contabilidad y que se reflejan en el correcto manejo de los libros se impongan no ya como obligaciones comerciales sino como mandato jurídico para beneficio particular y para precaver a los demás comerciantes y a la comunidad toda acerca de los efectos de una actividad en que la doctrina reconoce la administración de capitales ajenos.'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'De allí que el artículo 64 del Código de Comercio haya establecido, por ejemplo, que los "tribunales o jueces civiles podrán ordenar, de oficio o a instancia de parte, la exhibición y examen general de los libros y papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades".'

'(…)'

'En este contexto, el artículo 15 de la Carta Política indica que para "efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley". La disposición constitucional constata una vez más que las autoridades pueden acceder a dicha información para garantizar la cumplida ejecución de las obligaciones públicas, lo que no hace más que reforzar la idea de que los comerciantes deben cumplir con el deber de llevar los libros de contabilidad en aras del beneficio general.'

'(…)'

'En el derecho comercial existe la obligación de llevar libros de comercio pues estos son documentos vitales para el ejercicio de la actividad comercial en tanto que son punto de referencia para la comunidad respecto del desarrollo de la actividad mercantil del comerciante. ***En esa medida, si los comerciantes están obligados a llevar cuenta clara, completa y fidedigna de sus operaciones de comercio, resulta apenas entendible que los registros en ella contenidos constituyan prueba de su actividad y se les asigne un alto valor probatorio en caso de conflicto jurídico****.'*

'En otros términos, el alto nivel probatorio de los libros de comercio es resultado de la obligación precedente, que atiende a la satisfacción del interés público, de llevar adecuadamente este tipo de información.'

'El principio general en materia de valor probatorio de los libros de comercio se encuentra consignado en el artículo 68 del Código de Comercio, que hace parte del capítulo III dedicado al tema. El artículo en cita señala que los "libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente". El hecho de que los libros de comercio constituyan prueba plena en el debate entre comerciantes ha sido justificado así por la Corte Suprema de Justicia:'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

‘“La ley admite pruebas especiales en asuntos mercantiles, por altas razones: como la de atender las costumbres o sistemas universales que consultan necesidades del comercio; como la de sancionar con ineficacia probatoria los libros mal llevados; como la de reconocer que el comerciante conoce la verdad de lo atestiguado por él y tiene interés en evitar su propio engaño; como la de compensar con fe y crédito la diligencia de quien lleva sus libros regularmente; como la de hacer amable la obligación legal de tener libros; como la de interpretar se han otorgado tácitamente el mandato recíproco de asentar en orden cronológico y día por día sus operaciones, y como la de admitir que los libros son comunes a quienes ejercen el comercio, porque dan el resultado y constituyen la prueba de relaciones también comunes. Todo naturalmente sobre la base de que los libros sean llevados con la regularidad requerida.”. (Corte Suprema de Justicia. M.P. Miguel Moreno Jaramillo. Sentencia de Julio 23 de 1936)’

‘Debe aclararse, en primer lugar, que el valor probatorio de los libros de comercio opera de manera plena en las relaciones entre comerciantes. De allí que el artículo 69 del Código de Comercio precise que, en las cuestiones mercantiles con personas no comerciantes, los libros son principio de prueba, que puede ser complementado con otras pruebas legales.’

‘(…)’

‘El principio anterior fue recogido por el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil que en su inciso primero prescribe:’

‘“Art. 271 C.P.C. Modificado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1º Numeral 121. Libros de Comercio.’

‘“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Comercio, los libros de comercio hacen fe en los procesos entre comerciantes, siempre que estén llevados en legal forma.’

‘(…)’

‘Sobre la base de los principios generales expuestos, el régimen comercial nacional ha diseñado un complejo sistema de reglas que dan al juez instrucciones acerca de cómo hacer valer el valor probatorio de los libros de comercio en un proceso, de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de llevar libros de comercio.’

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'a) En primer lugar, el artículo 70 del C.Co. ***establece que, si los libros de comercio están llevados de forma adecuada y concuerdan con los asientos contables, deberá decidirse de conformidad con su contenido y asiento. En esta hipótesis, la ley parte del supuesto de que los comerciantes trabados en contienda son cumplidos en su deber de llevar en forma regular los libros de comercio. Por ello la ley confiere a los libros de comercio el máximo de certeza posible. Como la obligación legal se cumple en debida forma, la ley admite el carácter de plena prueba del contenido de los libros de ambos. La información fidedigna que soportan los asientos contables permite extraer de ellos la información litigiosa****.'*

'(…)" (Resaltados fuera de texto)

11. En este orden de ideas analizando las pruebas en su conjunto, esto es, los testimonios arrimados y la contabilidad se concluye inequívocamente que con las mismas se demuestra el daño ocasionado y su cuantía.

12. Señala la sentencia que "*Un apartamento no está dado para custodiar sumas de dinero como las que, como las aquí comentadas; b) La demandante empleo el apartamento 601 del edificio arcadia básicamente para guardar dinero en efectivo sin anunciar a ello a la seguridad del edificio y en cambio, exponiendo a los copropietarios a incidentes de seguridad. c) Es cierto en la casa de cada cual se está en libertad de guardar los objetos que, sin infringir la ley, se puedan guardar, sin embargo, de esa libertad implica adoptar medidas de seguridad suficientes, anunciar a la administración y precaver los riesgos asociados a ello.*"

    No encuentro en el ordenamiento jurídico nacional disposición alguna que prohíba guardar sumas de dinero en efectivo en una vivienda y que si se guarda deba informarse a la administración o seguridad del edificio y que si ello no se hace se expone a los copropietarios, es claro que en una vivienda se pueden guardar cualquiera bienes, que no estén prohibidos por la ley, como por ejemplo sustancias tóxicas, estupefacientes, en general las que en realidad generen riesgo para la comunidad y que se encuentren prohibidas expresamente, que en todo caso el dinero en efectivo no lo está y menos aun genera daño alguno para nadie, no entiende este servidor como y a qué pueden quedar expuestos los copropietarios de un edificio, cuando en una de sus unidades se guarda dinero, tampoco, el porqué deba informarse a la administración o a la seguridad, todo lo contrario, entre menos se informe es mejor para evitar tentaciones de los vigilantes,

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

además, la obligación de estos es vigilar, cuidar y salvaguardar todos y cada uno de los bienes que se guarden dentro de los apartamentos, sin importar que sea dinero, joyas, obras de arte, etc., la parte demandante tenia sus medidas de seguridad, tal como lo es tener una puerta de seguridad.

"*No obstante, y bajo la misma línea, el daño no logró demostrarse por parte de Comercializadora Quiral S.A.S.. De un lado, la pérdida de $1.838'983.000.00 no ha sido contabilizada, lo que se corrobora con los estados financieros aportados en curso de la exhibición documental que se indicó fue incompleta, parcial y adulterada por haberse introducido y retirado documentos de repositorio digital que, indicó el apoderado actor.'*

'Tal y como quedó dicho en la sesión del día de ayer, a su vez lo corroboró el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, quien es el revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S."

No es cierto que la suma de $1.838'983.000.00 no se encuentre contabilizada, esta suma si aparece contabilizada claramente y está plenamente demostrada en la contabilidad, tal como se puede evidenciar en los documentos exhibidos, el hecho de que algunos de los libros no hayan pasado, se repite por ser demasiado pesados, teniendo en cuenta su volumen, pero este hecho por si solo no le resta valor probatorio.

"*A su turno, quedó claro de lo hasta ahora discernido que la misma demandante, Cielo Losada Guzmán, no tenía clara la cantidad de dinero en efectivo que guardó en el apartamento 601 del edificio arcadia, propiedad de Comercializadora Quiral S.A.S., pues, son más de $600'000.000.00, la diferencia entre la noticia criminal, su ampliación y la presente demanda*."

Es verdad que ella no tenía clara la suma que allí guardaba, precisamente por ser una suma tan elevada y porque el dinero era llevado en diferentes oportunidades y cuantías, por ello, para determinar su cuantía exacta debería realizar un balance, como efectivamente lo hicieron para determinarla y es por ello por lo que en la denuncia manifestó expresamente, que una vez realizara la conciliación señalaría la suma exacta que estaba guardada en el apartamento.

"*Y, a su vez, llama la atención que la pérdida de 1.000 millones de pesos en joyas resulte fácilmente o miscibles o despreciables por la dificultad para probar su preexistencia*."

Contrario al sentido que le da la juez de primera instancia, esta actitud demuestra honorabilidad de parte de la demandante, pues, hubiera podido

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

conseguir facturas para demostrar su existencia, pero no, todo lo contrario, se resignó a perder definitivamente dicha suma porque legalmente no podía demostrar su preexistencia, puesto que son joyas que ha comprado en el extranjero y durante varios años, sin conservar las facturas o comprobantes de compra.

"*Ahora bien, las declaraciones recaudadas disponibles en él consecutivo 77 y más concretamente, la versión rendida por parte del señor Javier Enrique Tula Garzón, que se califica como ambigua y poco asertiva, dejó entrever que aunque es confuso en su relato, aseguró que transportó a Cielo Lozada Guzmán desde la sede del domicilio de la Comercializadora Quiral S.A.S., en dos ocasiones en un vehículo marca Renault de su propiedad con destino al edificio Arcadia PH, sin saber que con ella llevaba dinero en efectivo y menos la cantidad. Con todo, no señaló el testigo que en esas 2 ocasiones fuesen en el mes de noviembre de 2019.'*

'También se extrae que ese testigo se desempeña como conductor del camión Chevrolet de placas BSÚ 847 para la sociedad demandante, en donde en diversas ocasiones traslado dinero en efectivo a la sede de Postobón y en el banco dentro de dicha sede, pago facturas a Postobón."

Al igual que en lo anterior la juez se equivoca al analizar este testimonio, en primer lugar lo trata de ambigua y poco asertiva, sin explicar las razones por las cuales le da ese calificativo, por otra parte, si bien el testigo no menciona suma exacta alguna, ello no quiere decir que no le conste el transporte de dinero, pues, se repite, a los testigos solamente les consta que se transportaba dinero, pero no sus cuantías, porque por seguridad no se podía señalar su cuantía y para poder decir cuantía alguna deberían haber contado el dinero, acción que resulta ilógica, pues, siempre los conductores saben que transportan sus patronos, pero no las cuantías, ni las calidades o marcas de lo que llevan consigo.

"*Seguidamente, la testigo Daniela Cortez Velázquez, ex auxiliar contable de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., fue enfática en señalar que por un lado Cielo Losada Guzmán filtraba que llevaría dinero en efectivo a su casa, al equipo de contabilidad de Comercializadora Quiral S.A.S., lo cual sabía también Javier Enrique Tula Garzón, Andreína Delgado Cárdenas y Armando Perdomo. A su turno señaló el valor de $1.838'933.000.00, logro decantarlo tras "Un arqueo de ventas", encontrando que correspondía al monto neto vendido entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. Pero no tenía claro el Estado de la cartera, es decir, solo tuvo en cuenta las ventas brutas*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

dentro de su arqueo, no así la cartera en mora, que la hay, según los datos que reflejan los estados financieros de la sociedad demandante.'

'Aseguró la señora Cielo Losada Guzmán salió de viaje a atender una calamidad familiar en el mes de noviembre de 2019, cuando la misma señora Losada Guzmán indicó que fue a celebrar un contrato de compraventa sobre un predio ubicado en campo alegre huila. En todo caso, reiteró, porque se le reiteró la cuestión varias veces, que el monto de lo perdido por quiral correspondía al cruce entre el precio de lo vendido, que era el ingreso de Quiral y lo eventualmente sustraído, el apartamento 601 del edificio arcadia a la señora Cielo Losada, lo que permitió determinar el monto de la pérdida de quiral. Aseguró la testigo, además que en promedio se tenía un volumen de ventas para los meses de noviembre y diciembre por ser temporada alta fácilmente alcanzaba 300 o 400 millones de pesos al día en promedio. Contó la testigo, fue enfática en señalar que no le consta el monto que la señora Cielo Lozada Guzmán se llevó el apartamento 601 del edificio Arcadia. Tampoco sabe cómo se transportaba ese dinero y menos sabe la cantidad porque nunca la acompañó o contó el dinero."

En relación con esta testigo tienen igual fuerza lo argumentado para el anterior, además, ella sabía que el dinero lo llevaban para el apartamento de Cielo Lozada, pero no le consta las cuantías porque ella no manejaba dinero, ella solo registraba los asientos contables, lo cual le otorga autoridad para señalar el valor perdido, pues, en esos asientos contables es a donde consta la suma perdida.

En cuanto al estado de cartera, debe tenerse en cuenta que si no se tuvo en cuenta es porque todas las ventas son de contado y en efectivo, como aparece probado en autos.

El por qué y a qué viajó la señora Cielo Lozada, es un hecho intranscendente para el caso que ocupa nuestra atención, pues da lo mismo que haya viajado por una calamidad doméstica, a firmar una escritura o a realizar un negocio, este hecho ni le quita ni le pone a los hechos materia del proceso, pero, además, ella no tenía porque saber a qué había viajado su patrona, porque esto es algo personal, máxime cuando, es una persona que viaja permanentemente.

"*Ahora el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., dejó en claro que en dicha sociedad no se ha implementado el sarlaft muy a pesar de los volúmenes de operaciones en efectivo. Acotó el valor de $1.838'983.000.00 corresponden al cruce de*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

ingresos y egresos alcanzados entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. El testigo señaló que no despertó en él como revisor fiscal, ninguna inquietud relacionada con que siendo el monto perdido equivalente al 10% de las ventas totales de la sociedad, esta siguiese facturando entre el 8 y el 16 de noviembre de 2019. También indicó que no revisó soporte de operaciones, sino memorias contables y documentos de trabajo de su antecesor y del Departamento de Contabilidad de la Sociedad Comercializadora Quiral S.A.S."

El hecho que no se haya implementado en la empresa el sarlaft, tampoco le resta credibilidad a la contabilidad ni a los testimonios, ni menos aún desvirtúa la existencia de la suma perdida y reclamada, puesto que no nos encontramos ante una investigación de lavado de activos o de financiación al terrorismo, casos en los cuales si tuviese relevancia jurídica este hecho.

Respecto de lo demás, es claro que este testigo para la época de los hechos no fungía como revisor fiscal, ni como empleado de ninguna de las demandadas, por tanto, él no tenía porque constarle los hechos materia del proceso y menos aún podía entrar a revisar lo actuado por sus antecesores, él, como es lógico, tenía que actuar con base en los registros contables existentes y con base en ello es que certificó la existencia del dinero perdido y extraviado.

Señala la sentencia que "*Tal declaración* (se refiere al interrogatorio de parte absuelto por la demandante Cielo Lozada) *perdió contrastación con la noticia criminal que allegó al dossier la Fiscalía 14 local en donde se lee*", pero de manera alguna señala de manera preciso porqué perdió contrastación, si dicha persona en una y otra salida procesal es coincidente, solamente difiere en lo relacionado con la cuantía, pero ella misma se reservó ese derecho de aclararla, porque como es lógico y como ya se repitió no podía señalar una cuantía exacta sin acudir a la contabilidad, tal como lo hizo.

En este orden de ideas y sin mas consideraciones, se extrae de lo dicho que contrario a lo sostenido en la sentencia materia de la alzada, si se encuentra plenamente demostrada la prexistencia del dinero sustraído en los hechos que originan el presente proceso, por ello, el juez de segunda instancia debe revocar la sentencia apelada y entrar al estudio de los demás aspecto, tal como a continuación se reseña.

13. Conforme con el precepto del artículo 1613 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante.

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

El daño emergente hace referencia a una disminución efectiva del patrimonio, incluyéndose en él la pérdida misma de elementos patrimoniales, tales como el dinero; mientras que el lucro cesante, lo constituye todas las ganancias ciertas que han dejado de percibiese o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho, para el caso de la pérdida de dinero en efectivo, tal como lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia patria, lo constituye los intereses de ésa suma de dinero que se presume su causación.

En consecuencia, para demostrar el daño emergente, basta con probar la propiedad y preexistencia del dinero y su pérdida a causa del hecho dañino, tal como se encuentra aprobado y conforme con lo atrás expuesto, mientras que, en relación con el lucro cesante, en tratándose de dinero este se presume.

A este respecto el tratadista Jorge Suescún Melo en disertación acerca de la prueba en responsabilidad contractual señala:

"Según el esquema básico y general de la responsabilidad contractual, al demandante le corresponde aportar la prueba de la existencia y la cuantía del daño.'

'Los únicos casos en los que el demandante está relevado de su tarea de demostrar los daños se presentan cuando la ley misma los establece, esto es, cuando hay "evaluación legal", o cuando las partes los tasan de antemano, a través de una cláusula penal o de un pacto de arras, es decir mediante "evaluación convencional" de los deméritos económicos.'

*'**Evaluación legal hay en el incumplimiento de obligaciones de dinero, supuesto en el cual los perjuicios se reparan con el pago de los intereses de mora**. Para ese efecto, tanto el artículo 1617 del Código Civil, como los artículos 883 y 884 del Código de Comercio, presumen la generación de un perjuicio por el mero hecho del incumplimiento y determinan la forma de repararlo. Esta presunción se basa en el carácter fructuario que la ley reconoce al dinero (artículo 717 del Código Civil), de manera que el demandante no está obligado a demostrar perjuicios, ni su cuantía. Este es uno de los pocos casos en que la reparación*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

no corresponde a un daño demostrado, por lo que el propio legislador determina el monto de resarcimiento, independientemente del perjuicio efectivamente sufrido.[2]

'(...)'

*'Por tanto, no puede el deudor pretender demostrar que el acreedor no hubiere invertido el dinero o lo hubiere hecho con rendimientos inferiores a los que le ofrece el interés de mora legal o convencional, según el caso. La situación probatoria del acreedor de obligaciones de dinero es entonces, particularmente favorable, ya que está relevado de demostrar el acaecimiento del perjuicio, su naturaleza y su monto. Si a esto se le suma el hecho de que en materia de responsabilidad civil contractual se presume, por regla general, la culpa del deudor incumplido -**presunción que ciertamente opera cuando se trata de obligaciones dinerarias- se tiene que el acreedor sólo estará obligado a demostrar la existencia de la obligación, y a declarar que el deudor no la pagó en el tiempo debido. Con esta mínima labor probatoria el acreedor podrá obtener el resarcimiento del daño experimentado mediante el reconocimiento de los intereses de mora pactados o de los que, en su defecto, haya fijado la ley.***"[3] (el resaltado y subrayado es del suscrito)

14. En consecuencia, al demostrar la propiedad y preexistencia del dinero y su perdida en el hurto que origina esta acción, quedan demostrados los perjuicios materiales, incluyendo en ellos el lucro cesante y el daño emergente, quedando claro que el lucro cesante no es otro que los intereses comerciales moratorios dejados de percibir por la suma de dinero hurtada, liquidados conforme lo ordena la ley, mes a mes a la tasa más alta vigente certificada por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) para el interés bancario corriente más un cincuenta por ciento, conforme a las fluctuaciones o variaciones que han

[2] *SUESCÚN MELO, Jorge, Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, Trabajo No 9, La Prueba en responsabilidad contractual (La presunción de culpa y los medios para desvirtuarla) Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad de los Andes, Tomo I, p. 402.*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

tenido desde el día diecinueve (19) de noviembre de 2019 hasta la fecha en que el pago se verifique, al tenor de lo preceptuado en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el artículo 305 del Código Penal y el artículo 72 de la Ley 45 de 19901.

15. Tal como quedó expuesto al analizar lo relativo a la legitimación en causa, la responsabilidad de la copropiedad EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, como de la administradora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ nace de su deber de vigilancia y cuidado en la ejecución del contrato de vigilancia, lo cual se desprende de lo siguiente: a) artículo 72 del reglamento de propiedad horizontal "*Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones se radican en cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del Reglamento de Propiedad Horizontal. PARAGRADO 1°. – Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuara como representante legal de la persona jurídica el presidente del Consejo de Administración o, cuando este no exista este órgano administrativo, el presidente de la Asamblea General que lo nombre. PARAGRAFO 2°. - En los casos de edificios residenciales, quien ejerza la administración directamente, o por encargo de una persona jurídica contratada para tal fin, deberá acreditar idoneidad para ocupar el cargo, que se demostrara en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. (…).*"

De lo anterior se concluye que era y sigue siendo obligación de la copropiedad, EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, por

[3] *Ibídem, Trabajo No 10, Comentarios sobre el régimen de tasas de interés, p. 592*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

conducto del consejo de administración y especialmente de su presidente, contratar a la administradora del edificio, para lo cual debería establecer su idoneidad y, por consiguiente, vigilar el cumplimiento y ejecución del contrato y si así no lo hizo, de ahí nace su culpa y por ende su responsabilidad de resarcir los perjuicios ocasionados con su omisión. Esto se deduce del artículo 10 del reglamento de propiedad horizontal cuando establece en relación con la persona jurídica que nace del mismo, que "*Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.*"

También resulta dicha responsabilidad de lo consagrado en el artículo 71 del Reglamento de propiedad horizontal que señala las funciones del consejo de administración, estableciendo que "*Al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, (…) c) Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso, (…) d) Asesorar al Administrador en todas las cuestiones relativas al mejor funcionamiento de la Copropiedad, ejecutar ampliamente el control de su gestión y cuando lo juzgue conveniente dar cuenta al respecto a la Asamblea General de Propietarios. h) Vigilar la Administración de este edificio residencial y dictar los reglamentos internos tendientes a que se mantenga el orden, el aseo de las zonas comunes y la armonía entre sus residentes. (…) i) Autorizar al Administrador para que realice las reparaciones materiales de carácter urgente para la higiene, seguridad*"

Por ahora se deja establecido cuáles son las responsabilidades y obligaciones de la copropiedad EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, como tal por conducto del Consejo de Administración, cual es, la de vigilancia y cuidado en la ejecución del contrato de administración y de la seguridad de la copropiedad, tanto en los bienes de uso común

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

como de los de las unidades privadas y más delante de manera global se señalará de manera concreta cuáles fueron las falencias.

En el contrato de prestación de servicios de administración celebrado entre el presidente del Consejo de Administración del EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL con la administradora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, en las cláusulas primera y quinta la administradora se comprometió a "*prestar sus servicios profesionales como ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO ARCADIA y a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio como administradora, los cuales debe realizar de conformidad con el reglamento de propiedad horizontal y las condiciones y clausulas adicionales del presente documento. (…) se obliga a cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con lo establecido en la ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal, y las cláusulas de este contrato.*"

Como el contrato de prestación de servicios de administración es tan ambiguo, quizá elaborado de esta manera para tratar de evadir responsabilidades, debemos acudir a lo que determina el reglamento de propiedad horizontal respecto del administrador para determinar claramente sus obligaciones y responsabilidades, encontrando al efecto que dicho reglamento establece en su artículo 74 como funciones del administrador "*(…) 15. Contratar y organizar previa autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea General, el personal necesario para la vigilancia, aseo y mantenimiento del edificio y mantenerlo bajo su directa dependencia y responsabilidad. (…)*"

Nótese bien como esta disposición determina de una manera diáfana que es obligación de la administradora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, no solamente contratar y organizar el personal necesario para la vigilancia del edificio, sino también la de mantener ese personal bajo su directa dependencia y responsabilidad, es decir, que no le bastaba con firmar el contrato de prestación de servicio de vigilancia, sino que, además, el personal continuaba bajo su dependencia y responsabilidad, es más,

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

según esta disposición si quiera podía delegar esta responsabilidad, como lo hizo en el caso presente, lo cual nos conlleva a concluir sin lugar a equívocos que también es responsable de su negligencia y de la prestación del servicio de manera equivocada e irresponsable, tal como más adelante se determina de manera puntual.

16. Ahora bien, en el contrato de prestación de servicios de vigilancia suscrito entre la administradora del EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, señora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ y la empresa de vigilancia y seguridad privada HOLDING DE SEGURIDAD LTDA en sus cláusulas primera y quinta se pactó que "*EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar el SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA en el EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal ubicado en la carrera 14 A No. 116-97 de esta ciudad, a partir del 20 de septiembre de 2009 para cubrir las veinticuatro horas del día durante todos los días de las semanas del mes (sic), por los trescientos sesenta y cinco días del año, prestado por hombres de seguridad. PARAGRADO: EL CONTRATISTA podrá aumentar el número de hombres para la prestación del servicio, previa autorización por escrito del CONTRATANTE la cual hará parte del presente contrato y el costo adicional se acordará entre las partes. (…)' 1. Prestar en forma directa o indirecta el servicio descrito en esta cláusula de objeto del presente contrato. 2. Asumir en forma directa las obligaciones que se deriven, (…) 4. Cumplir con las obligaciones contractuales que sus asociados que prestan el servicio. 5. En cuanto al servicio de vigilancia sin arma se compromete a prestarlo dentro del EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal y el acceso a los parqueaderos del mismo. Cumplir eficazmente con las labores encomendadas y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio*."

Para dar cumplimiento a lo convenido, la empresa de vigilancia HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, entre otros, durante la ejecución del contrato puso a disposición de la copropiedad EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL a sus empleados, EDUARD ALFONSO SUAREZ GARCIA, gerente de operaciones de la empresa de vigilancia demandada, quien coordinaba los servicios; a los vigilantes JOSE SANTOS CABRERA DIAS, quien se encontraba de servicio en el momento de los hechos materia del proceso; JOSE MAURICIO VALENCIA PARRA; JOSE NORBEY MURILLO

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

GIRALDO; WALTER JULIAN NAVARRO ROJAS; y, LUIS ALBERTO DUQUE MORALES.

Se es consciente que la obligación contraída por la empresa de vigilancia HOLDING DE SEGURIDAD LTDA es de "*medio y no de resultado*", pues, su compromiso fue – *prestar el SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA en el EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal - para cubrir las veinticuatro horas del dia durante todos los dias de las semanas del mes (sic), por los trescientos sesenta y cinco dias del año, prestado por hombres de seguridad - En cuanto al servicio de vigilancia sin arma se compromete a prestarlo dentro del EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal y el acceso a los parqueaderos del mismo* – con lo cual se estaba comprometiendo a adoptar las previsiones que fueran necesarias para mantener en óptimas condiciones de seguridad el edificio en general; lo que conllevaba a vigilar y cuidar la vida, honra y bienes de los residentes de la copropiedad, pues, incluso se comprometió a – *aumentar el numero de hombres para la prestación del servicio, previa autorización por escrito del CONTRATANTE la cual hará parte del presente contrato* –, esto es, que era tan amplia su responsabilidad que si lo consideraba necesario, conforme las necesidades que ella debía analizar, podía aumentar el personal; dentro del contrato se encuentra ínsita la obligación de cumplir con todas las normas y disposiciones que las leyes o reglamentos vigentes o que se expidan, contemplen respecto de la ejecución de la vigilancia. Lo que significa que su obligación se entiende cumplida con el hecho adelantar todas con profesionalismo las diligencias y gestiones requeridas para otorgar una adecuada y eficaz vigilancia al edificio residencial, adelantando en consenso con la administración y el consejo de administración las acciones necesarias para evitar, entre otros, hechos como el que da origen a la presente acción en la cual se hurtaron los bienes de uno de los residentes.

En palabras de la doctrina, citada por una de las Salas de decisión civil del Tribunal de Bogotá, en uno de sus fallos, la deudora se obligó —*a poner al servicio del acreedor los medios de los cuales dispone; de hacer toda diligencia para ejecutar el contrato -, por lo que su compromiso obligacional no fue —exactamente un hecho -, sino - el esfuerzo del hombre, un esfuerzo*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

constante, perseverante, tendiente a la adopción de una actitud frente a sus propias cualidades para aproximarse a la finalidad deseada[4] –.

17. Como se advirtió en el libelo introductorio, dentro de la investigación penal llevada a término por la denuncia formulada por la acá demandante, que se adelantaba en la Fiscalía ciento uno (101) Local de la fiscalía general de la Nación, con el número de radicado 110016108112201900752, se han realizado varias entrevistas, de cuyos dichos se extrae la responsabilidad de las demandadas.

    EDUARD ALFONSO SUAREZ GARCIA, gerente de operaciones de la empresa de vigilancia demandada, manifiesta que como cuatro meses atrás de los hechos el guarda de seguridad, que era relevante, le informó verbalmente que un sujeto que iba en bicicleta cerca al edificio a donde ocurrieron los hechos se le acercó y le ofreció mejorar su bienestar, pero que como no informó al edificio. Siendo el supervisor estaba en la obligación no solamente de informar al edificio, sino a sus superiores y él directamente adoptar las medidas necesarias para evitar que algo sucediera, como en efecto sucedió, de a donde nace la responsabilidad de la empresa de vigilancia, así como de la administradora y de la copropiedad.

    JOSE MAURICIO VALENCIA PARRA, ratifica lo anterior cuando manifiesta que un día había pasado en el puesto de trabajo del edificio Arcadia una persona que le ofreció dinero para que lo dejara ingresar a hurtar un apartamento sin decirle cual sin que él haya accedido, que luego de entregar el turno se encontró nuevamente al sujeto insistiéndole que lo dejara ingresar al edificio que no pasaba nada y que a medida que él no aceptaba le subía la oferta de dinero que le iba a dar para dejar ingresar a los ladrones, sin aceptar la propuesta lo empujó, lo cual le fue informado al jefe de operaciones EDUARD ALFONSO SUAREZ quien lo citó a las instalaciones administrativas y le dijo que si no renunciaba se encargaba de dañarle la tarjeta de ingreso a cualquier empresa de seguridad privada, motivo por el cual presentó la renuncia y hasta esa fecha laboró. Lo cual no solamente demuestra la responsabilidad de la empresa de vigilancia, sino que incluso, se podría inferir algo más.

    VICTOR JAIR GUZMAN SANTA, quien se desempeña como todero del edificio Arcadia, ratifica lo anteriormente dicho, quien manifiesta que se enteró que en días anteriores a los hechos, el vigilante JOSE NAVARRO le

[4] *Philippe Le Torneau. La Responsabilité Civile, 2ª ed. Paris. Ed. Dalloz, 1976, num. 1086. Citado por Tamayo Jaramillo*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

envió un mensaje por WhatsApp diciéndole que ya no iba a volver más al edificio y que después de esto le comentó CABRERA que habían abordado a NAVARRO unos señores preguntando por VALENCIA y que ellos requerían hablar con NAVARRO por un trabajo que tenían, porque VALENCIA les había recibido una plata “para darles puerta”, pero se les había torcido y que si él les aceptaba darles puertas y que si sacaban esa plata que había en ese apartamento, él iba a ganar muy buena plata para que dejara de ser un peón; que NAVARRO inmediatamente después que hablo con esos sujetos se fue para la empresa a HOLDING de esta novedad, procediendo la empresa a llamar a JOSE MURILLO y JOSE BARRERA y les preguntaron que si a ellos también los habían abordado, que no fueran a decir nada para no formar pánico en el edificio, que ellos se encargaban de la investigación. También informa que en la esquina del salón comunal del edificio hay instalada una cámara blanca que estaba conectada con la empresa de vigilancia vía wifi, pero que desde hacía más de un año estaba desconectada, de lo cual tenían conocimiento los vigilantes.

WALTER JULIAN NAVARRO ROJAS, manifiesta que en el mes de octubre de 2019 cuando se encontraba de turno en el edificio Arcadia se acercó una persona a la portería del edificio y después de varias artimañas logró que él le diera su número de celular, por lo que el sujeto lo llamo y le dijo que, si se podían ver y que lo invitaba a tomarse unas cervezas, sin acceder a ello. Días después, cuando entregó el turno de noche se lo volvió a encontrar, invitándolo a tomar tinto, ante lo cual se negó, fue cuando le dijo que ya le habían dado un dinero a VALENCIA para que lo dejara ingresar al edificio, que siendo sincero ellos tenían las llaves de un apartamento del edificio ARCADIA en el cual había una plata grande y que tocaba sacarla antes de diciembre, que trabajara con ellos ofreciéndole la suma de cuarenta millones de pesos para que los dejara ingresar , respondiéndole que con él se había equivocado, dejándolo plantado, procediendo de inmediato a trasladarse a la empresa HOLDIGN en donde habló con ADRIANA y EDUARD, exponiéndoles lo sucedido, solicitándoles que por su seguridad lo cambiaran de puesto.

Como se puede observar de los anteriores testimonios, tanto la administradora del edificio ARCADIA como la empresa de vigilancia HOLDING DE SEGURIDAD no fueron nada diligentes en la investigación

Javier. De la Responsabilidad Civil. T.I. Temis. Bogotá. 1999, pág. 290.

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

de los hechos, pues, prácticamente no hicieron nada, además, la empresa de vigilancia no realizó ninguna investigación sobre los hechos, a pesar que desde meses atrás tenía pleno conocimiento de las intenciones que existían de entrarse los ladrones a uno de los apartamentos a donde se guardaba dinero, no obstante, en lugar de informar a la administración del edificio para que esta tomara las medidas necesarias e informara a los copropietarios, todo lo contrario trató de acallar a los guardas que tenían esta información, en lugar de tomar las medidas necesarias para evitar que esto sucediera. Ante la evidente amenaza debió tomar medidas para evitar lo que era un hecho indiscutible que iba a suceder, pues lo sucedido, era como se dice “un hurto anunciado”.

Sabiendo que la cámara que conecta al edificio vía Wifi con la empresa de seguridad se encontraba desactivada no hicieron nada para restablecer su servicio.

De acuerdo con las anteriores declaraciones el EDIFICIO ARCADIA presentaba serias falencias de seguridad, pues carecía del funcionamiento de la cámara que conectaba el edificio con la empresa de seguridad, existiendo amenaza del hurto debieron instalar sistemas de seguridad, de circuito cerrado y de setos, incluso, debieron haber colocado más vigilantes, pues en el contrato de servicio de vigilancia se encontraba autorizado tal acontecimiento.

18. Por consiguiente, es preciso reconocer que, aunque contractual, la responsabilidad que se les atribuye a las demandadas, ésta tiene como fundamento “la culpa probada”, la que se encuentra demostrada, pues, probado se encuentra que aquellas incurrieron en acciones y en omisiones de tal entidad que fueron determinantes para que pudiera ser sustraído el dinero, es decir, se encuentra plenamente probado que pese a sus deberes contractuales, las demandadas no obraron con la diligencia y cuidado que les eran exigibles para garantizar la seguridad de los bienes de los copropietarios.
19. De lo anterior también se concluye sin lugar a equivocaciones que existe una relación de causalidad entre el comportamiento de las demandadas y la sustracción del dinero, pues, de seguro que, si cuando las demandadas se enteraron de las amenazas de hurto, alertados, no solamente por una sino por varias personas, hubieran adoptado las medidas necesarias para evitarlo, el hurto no hubiera ocurrido, puesto que las demandadas no tuvieron la debida *diligencia y cuidado*. Es que incluso, la empresa de

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

vigilancia tenía la obligación de informar de este hecho tanto a la administradora como al consejo de administración, para que estos adoptaran las medidas pertinentes, entre otras por ejemplo informar a los residentes para que adoptaran sus propias medidas de seguridad y como así no lo hizo es responsable del hecho dañino y ello directamente conllevó a que sucediera el insuceso, lo que corrobora la relación de causalidad, además, de contera, como se vio atrás, también hace responsables a las otras dos demandadas. Por tanto, como la regla general es que, "*quien debe una prestación nacida de una convención no puede justificar su incumplimiento sino con prueba de que éste ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito o por culpa de la víctima..., cuando la obligación es de medio, entonces podrá justificarlo demostrando diligencia y cuidado, es decir que no obstante haber sido cuidadoso y diligente, el resultado que de él se esperaba no se logró*".

20. En este orden de ideas y como se ha dicho a la saciedad, se encuentra probado que las demandadas no actuaron con diligencia y cuidado; tampoco existe una fuerza mayor o caso fortuito, y, contrario a lo sostenido por las demandadas no existe culpa de la víctima, pues, de una parte los residentes de un inmueble pueden guardar en él lo que quieran, exceptuando algunas sustancias y elementos prohibidos y su seguridad depende de la seguridad de todo el edificio, que es la misma de todos los residentes, sin que en Colombia esté prohibido guardar sumas de dinero en efectivo, por grandes que estas sean, pues a lo que se está obligado es a demostrar su lícita procedencia, no les es atribuibles a las demandantes ninguna tipo culpa, máxime cuando la propietaria del apartamento no fue informada que se encontraban planeando un hurto en alguno de los apartamentos del edificio, para que de esta manera si lo consideraba necesario adoptar las medidas que fueran necesarias, caso en el cual, de haber sido informada de este hecho, si se les hubiere podido atribuir culpa, pero como así no sucedió la culpa es atribuible exclusivamente a las demandadas.
21. Pero, en el supuesto que existiere algún grado de culpa, tal como veladamente lo señala la sentencia recurrida, que no lo existe, debe en consecuencia, entrar a analizar la responsabilidad compartida.
22. En consecuencia, encontrándose comprobado el *iter criminis* de hurto con las pruebas arrimadas con la demanda y con las contestaciones, así como

[5] *Consejo de Estado –Sección Tercera-; Sent. 5902 de 24 de octubre de 1990.*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

con las que se recauden en el decurso del proceso, quedando por demostrar el daño en el patrimonio de las demandantes, ya que se itera, se encuentra plenamente probada la culpa de las demandadas y la relación de causalidad entre el hurto acaecido y la pérdida del dinero, para que estén obligadas a resarcir los perjuicios causados, que se concretan a la suma de dinero hurtada, que lo son UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.838’983.000.00), cuya preexistencia y consecuente pérdida se encuentra también probada.

23. Basten las anteriores consideraciones para solicitar, con mi acostumbrado respeto, de los honorables Magistrados, se sirvan revocar la sentencia materia de la apelación y en su lugar, declarar la improsperidad de todas y cada una de las excepciones propuestas y en su lugar acceder a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, condenando en costas de las dos instancias a la parte demandada.

Atentamente,

ROLFY FORERO CUADRADO
C.C. No. 19’295.429 de Bogotá
T.P. No. 70.325 del C.S. de la J.

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA RV: RATIFICACION SUSTENTACIÓN APELACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 30/08/2023 12:25

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

2 archivos adjuntos (406 KB)
RATIFICACIÓN APELACIÓN.pdf; APELACION SENTENCIA.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR YAYA PEÑA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: ROLFY FORERO CUADRADO <rolfy.forero@gmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2023 11:59
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; JOHANNA GRACIA <PAOLAGRACIA@GMAIL.COM>; legalmenteasesorias@gmail.com <legalmenteasesorias@gmail.com>; notificaciones@solidaria.com.co <notificaciones@solidaria.com.co>; ÓSCAR HERNÁNDEZ <hernandezchavarroasociados@gmail.com>; Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Asunto: RATIFICACION SUSTENTACIÓN APELACIÓN

Señores
SALA DE DECISIÓN CIVIL TRIBUNAL
SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE
Bogotá, D.C.
E. S. D.

Ponente : Dr. OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Proceso : Declarativo
Radicado : 2020-315-01
Demandante : CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S.
Demandado : EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Asunto : Ratificación sustentación de apelación presentada

Buenas tardes, por medio del presente me permito remitir en dos archivos pdf memorial y anexo de ratificación de sustentación de recurso de apelación, agradezco el trámite pertinente y el acuse de recibido por este medio.

Dando cumplimiento a los artículos 3° y 8° de la Ley 2213 de 2022 y numeral 14 del Artículo 78 del Código General del Proceso se copia al correos de:
La apoderada de Holding de Seguridad Doctora Paola Garcia Bautista
a saber paolagracia@gmail.com
La apoderada de Edificio Arcadia Doctora Luz Mireya Amado P. legalmenteasesorias@gmail.com
La demandada Aseguradora Solidaria notificaciones@solidaria.com.co
El apoderado de la señora Maria Leonor Mantilla Doctor Jaime
Enrique Hernandez hernandezchavarroasociados@gmail.com
A la llamada en garantía Aseguradora SBS Seguros Colombia
S.A. notificaciones.sbseguros@sbseguros.co

Atentamente,

ROLFY FORERO CUADRADO
ABOGADO
CALLE 19 # 4-88 OF. 802
+57 3102241704
rolfy.forero@gmail.com
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA

Señores
SALA DE DECISION CIVIL TRIBUNAL
SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE
Bogotá, D.C.
E. S. D.

Ponente : *Dr. OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA*
Proceso : *Declarativo*
Radicado : *2020-315*
Demandante : *CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S.*
Demandado : *EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA*
Asunto : *Ratificación sustentación de apelación presentada*

En mi condición de procurador judicial de la señora CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S. demandantes dentro del proceso de la referencia, ante ustedes Honorables Magistrados teniendo en cuenta el auto del 29 de agosto de los corrientes, en relación con la sustentación de la apelación me ratifico en lo expuesto ante el inferior en escrito presentado el pasado 18 de julio de 2023 el cual se adjunta y se solicita sea tenido en cuenta para todos los efectos legales pertinentes.

Atentamente,

ROLFY FORERO CUADRADO
C. C. No. 19.295.429 de Bogotá
T. P. No. 70.325 del C. S. de la J.

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Tels. 286 30 50 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

Señor
JUEZ TREINTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá, D.C.
E. S. D.

Proceso : *Verbal Declarativo*
Radicado : *2020 – 315*
Demandante : *CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S.*
Demandado : *EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE ENTIDAD COOPERATIVA*
Asunto : *Sustentación apelación.*

En mi condición de procurador judicial de las demandantes CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S., encontrándome dentro del término establecido en el al inciso segundo numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, me permito presentar ante usted no solamente la enunciación sucinta sobre los puntos que versará la apelación, sino que, de una vez presento la sustentación definitiva, conservándome el derecho de ampliarla en su debida oportunidad, de considerarlo necesario, a lo cual procedo en los siguientes términos:

1. En relación con la decisión adoptada y los argumentos expuestos frente a los denominados presupuestos procesales, la legitimación en causa de las partes, la acumulación subjetiva y objetiva de pretensiones, así como de los presupuestos de la acción, exceptuando lo relativo al daño, no tengo reparo alguno, por considerar que los argumentos expuestos en la sentencia se compaginan con la realidad jurídica y procesal, por lo que básicamente la apelación se centrará en el análisis probatorio, para demostrar la existencia del daño.
2. En relación con el daño, la sentencia recurrida señala: ““*Tal tópico nos lleva inexorablemente a señalar que daño, se dijo antes, constituye el elemento base de la responsabilidad civil, sin el daño la obligación de indemnizar a favor de la víctima en cabeza del responsable no podría surgir. En este sentido, los criterios, nociones y conceptos que se utilicen para definir al daño no pueden ser escogidos por mera casualidad, pues a decir del entendimiento que se tenga sobre el daño, es que se define el alcance y la*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

esfera de protección de la responsabilidad civil en su función resarcitoria indemnizatoria o compensatoria.'

'Para que el daño sea resarcible, indemnizable o llamado a compensar, debe ser cierto y real, contrario a todo daño meramente hipotético o eventual. La certeza del daño afirma el profesor Javier Tamayo Jaramillo, puede ser tanto absoluta como virtual, pues la certeza no sólo se deriva de aquel daño que ya ocurrió o que está ocurriendo, sino que también es posible hablar sobre la certeza de un daño futuro, lo que importa es que, a partir de un análisis global del caso, teniendo en cuenta pruebas, indicios, peritados, testimonios, entre otros, el juez logre quedar con la convicción de que el daño existió, existe o existirá.'

'Al caso, la pretensión señala que las demandantes ambas perdieron $1.838'983.000.00 con ocasión del eventual hurto que sucedió en el apartamento 601 del edificio Arcadia PH, por lo que piden su reembolso, más la corrección monetaria desde el 19/11/2019 hasta cuando el pago se verifique y de suyo se dijo textualmente en la demanda que: "por lo engorroso de la demostración de la preexistencia, pues la demandante no poseen factura de compra, no se incluye el valor de la colección de relojes, de las joyas, ni de las carteras". A su vez, señaló la demandante que: "en virtud de la actividad comercial que desarrolla la mencionada empresa a diario, por conducto de su representante legal, mueve fuertes, sumas de dinero entre mil y dos mil millones de pesos más o menos, puesto que tiene que estar vendiendo y comprando diferentes mercancías en efectivo, motivo por el cual por economía, por facilidad y por comodidad no depositan ni manejan tales dineros bancariamente, sino que se repite, lo manejan en efectivo", y, además, "Por seguridad, tales dineros lo depositaba la señora siendo Jazmín y Losada Guzmán en su apartamento 601 del edificio Arcadia PH, situado en la carrera 17 a No. 116-97 de la ciudad de Bogotá, distrito capital, a donde incluso en algunas oportunidades se traslada a efectuar pagos a proveedores". Más seguro. "Para los días 17 18 y 19 de noviembre de 2019 tenía guardada en el mencionado apartamento la suma de $1.838'983.000.00 disponible para efectuar pagos en giro normal de los negocios de su empresa". Lo cual se explicó en la demanda. "Una vez que revisa la documentación correspondiente en la empresa, constata que la suma perdida corresponde exactamente a $1.838'983.000.00, por lo que el día 28/11/2019 procede a ampliar la denuncia e informar a la Fiscalía la suma exacta que se perdió en el hurto".'

'Tales hechos, que corresponden a la imputación fáctica de la responsabilidad contractual, dejan ver que la demandante Cielo Losada Guzmán, no padeció daño alguno, pues fue dinero de Comercializadora Quiral S.A.S. el que eventualmente se perdió durante los hechos delictivos ocurridos entre el 18 y 19 de noviembre de 2019.'

'Lo anterior se suma a que la misma demandante, Cielo Losada Guzmán, durante su interrogatorio de parte devertido en él consecutivo 56 del expediente digital desde el minuto 36, señaló con plena y absoluta claridad. 1. Que la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S. no tenía asiento o

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

domicilio en el edificio Arcadia PH. 2. Que son de la completa y absoluta propiedad de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., la suma de $1.838'983.000.00. 3. Que partir del impuesto a las bebidas azucaradas y a la obligación de factura electrónica, decidieron dejar en disponible dinero en efectivo para el pago a proveedores fabricantes de gaseosas y cervezas en orden a obtener descuento. 4. Que tenía caja fuerte en el apartamento 601 del edificio arcadia, dañada días antes del 19 de noviembre de 2019. 5. Sin embargo, desde hace más de 20 años tenía la costumbre de guardar dinero en efectivo en sus diferentes viviendas, sin que lo hubiese sucedido algo con anterioridad. 6. Luego llevaban el dinero a la sede de los proveedores como Bavaria, Postobón y Coca Cola, o directamente en la sede de Comercializadora Quiral S.A.S. 7. A su turno, señaló que la sede de Comercializadora Quiral S.A.S. era insegura y estaba en remodelación o adecuación. 8. Que la empleada de servicio Rosmeri no tenía conocimiento de las operaciones en efectivo o las cantidades que depositaba la señora Cielo Losada Guzmán en el apartamento 601 del edificio Arcadia. 9. Cielo Losada Guzmán vivía sola en el apartamento 601 del edificio Arcadia, al que solo iba 1 o 2 veces por semana dado que tenía otro apartamento en el que se quedaba cuando no estaba de viaje. 10. Quien conocía los valores y movimientos en efectivo correspondientes a la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S. efectuados por Cielo Lozada Guzmán era el señor Armando Perdomo, porque además de ser su mejor amigo, colaborador, empleado, la acompañó incluso a dejar el dinero dentro del apartamento 601 del edificio Arcadia, dentro de la caja fuerte, y llegó a tener llave del apartamento 601 para retirar el dinero. 11. En caso de que Cielo Losada Guzmán requiriese viajar, dejaba el dinero en efectivo en otros lugares diferentes a la caja fuerte para que sus colaboradores lo retirasen del apartamento 601 del edificio arcadia para pagar los proveedores de Comercializadora Quiral S.A.S.'

'Tal declaración perdió contrastación con la noticia criminal que allegó al dossier la Fiscalía 14 local en donde se lee: "Relato de los hechos; haga un relato de los hechos teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, contestó. Para el sábado en las horas del mediodía llegó al apartamento junto con mi empleada Rosmery, donde nosotras traíamos unas bolsas de plata por un valor de $1.200'000.000.00 y los guardo en la caja fuerte, la cual está dañada y queda en el estudio, y otra parte en unas cajas que están en el estudio, luego a eso de las 3:30 de la tarde, salgo del apartamento con mi esposo ya que él vino a recogerme. Para el día de hoy, a eso de las 4:30 de la tarde y me dice: Hola Cielo, me dice que teníamos un inconveniente, que esta mañana a eso de la 1:30 de la mañana se habían entrado los ladrones y que se habían robado el DVR de las cámaras y que habían amordazado al portero. Yo le pregunto que, si había pasado algo a mi apartamento y me dice que al parecer sí, ya que la empleada estaba dentro del apartamento, y que ella decía que todo estaba revolcado y desordenado, yo cuelgo con la administradora, yo de

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

inmediato llamo a la empleada Rosmery y le manifiesto que era lo que había sucedido y ella me dice que todo lo que estaba dentro del apartamento estaba revolcado y desordenado, que los cajones del clóset, colchones, ropa y demás cosas estaban tirados en el piso. Colgamos y salgo de inmediato hacia el apartamento, es cuando llamo nuevamente a la empleada y esta no me contesta, a lo cual yo llamé en varias ocasiones, llamo a la portería y no contestaban, hablé con mi esposo a manifestarle lo sucedido y me da el número del portero José y le pregunto, que era lo que había pasado y le digo que me pasara a Rosmery, y yo le pregunto que si habían robado todo y ella me dice que todo lo del estudio estaba revolcado y unas cajas tiradas en el piso. Yo le digo a Rosmery que subiera y mirara todo lo al interior del apartamento y ella me dice que no podía entrar, ya que habían llamado a la policía y a la Sijin y que no podía entrar. Yo llego al apartamento a eso de las 9:20 de la noche, entro al apartamento y es cuando observo que efectivamente, todo lo del estudio estaba desordenado, faltándome el dinero en efectivo $1.200'000.000.00 que estaban guardados en la caja fuerte y en las cajas del estudio, de igual forma, en las habitaciones me hace falta mis joyas en oro, diamantes y esmeraldas entre cadenas, anillos, relojes por un valor de mil millones de pesos. Posteriormente llegan ustedes y les manifiesto lo sucedido. Preguntado: Manifieste al despacho qué elementos le fueron hurtados Indicando características y cuantía, contestó: dinero en efectivo por $1.200'000.000.00, mis joyas en oro, diamantes y esmeraldas entre cadenas, anillos, relojes por un valor de mil millones de pesos, todo por un valor de $2.200.000.000, de igual forma, esperando que realice o recoja el desorden y verifique si me falta más elementos me acercaré a la fiscalía para rendir entrevista y aumentar el valor de lo robado. Preguntado, manifieste a esta diligencia qué personas viven en la residencia donde suceden los hechos, materia de investigación. Contestó: Yo vivo aquí sola, ya que mis hijos están en el exterior y mi esposo vive en otro apartamento, el cual no le gusta venir aquí porque siempre hay mucho trancón. Preguntado. Manifieste a este despacho cuántas entradas o puertas de acceso hay a esta residencia contestado: solo una, la principal. Preguntado manifieste este despacho con qué tipo de seguridad cuenta el hogar y mencione si le fue violentada o alterado los mismos, contestó la puerta es de seguridad y esta no presenta ningún tipo de violación o daño. Preguntado, manifieste el despacho si el sector o inmueble cuenta con cámaras de seguridad por circuito cerrado de televisión, contestó, sí señor alrededor de la casa hay cámaras. Preguntado manifieste el despacho, quién es el propietario de los elementos hurtados. Contestó: La Plata de la empresa comercializadora quiral D y las joyas mías. Preguntado, manifieste al despacho si los elementos hurtados se encuentran asegurados, de ser así, con qué póliza y número contestó, no señor. Preguntado manifieste el despacho si los elementos mencionados tienen algún tipo de marca o contraseña en particular, contestó, parte de los billetes tienen un sello en forma de corona, como también eran billetes de la denominación de $50.000 y las joyas relojes normales de fábrica. Preguntado manifieste a este despacho en qué lugar específico estaban guardados los elementos que le hurtaron, contestó, estaban dentro del apartamento. Preguntado, manifieste al despacho, qué personas tienen acceso al inmueble, contestó mi empleada Rosmery, un amigo Armando Perdomo, y yo, nadie más. Preguntado, manifieste al despacho si tiene conocimiento cuántas personas cometieron el hecho y si sabe las características físicas, contestó: No, no, señor. Preguntado, manifieste al despacho si ya había sucedido estos hechos con anterioridad en el lugar, contestó, es la primera vez. Preguntado manifieste al despacho, si existen testigos presenciales de los hechos, contestó No, no, señor. Preguntado manifieste a este despacho si usted presume de alguien o tiene sospecha alguna persona que haya cometido el hurto o participado en él en el mismo contestó No, no, señor, eran las únicas 2 personas que han estado al apartamento son las antes mencionadas. Preguntado manifiesta el despacho en cuánto estima los daños y perjuicios. Contestó, Este valor lo dejó por establecer. Preguntado este valor, lo dejo por establecer, ya que requiero hablar y reunirme con mi contadora y realizar la suma de la pérdida y el interés de la plata. Preguntado manifiesta esta diligencia, si usted cuenta con empleadas de servicio, contestó, sí, señor, manifiesta esta diligencia si alguna persona salió lesionada producto en los hechos, contestó, No, no, señor manifieste esta diligencia si la empleada de servicio tiene llaves del apartamento. Contestó, Sí, sí, señor. Preguntado manifieste esta diligencia hace cuánto tiempo trabaja la señora Rosmery como empleada de servicio. Contestó hace como 1 año y medio aproximadamente. Preguntado manifieste esta diligencia cómo usted contrata a la señora Rosmery como empleada del servicio, contestó por medio de una prima de ella de nombre María Elena Manrique. Preguntado manifiesta esta diligencia, si el señor Armando Perdomo tenía llave del apartamento, contestó, él tenía la llave, pero él dejó de trabajar conmigo hasta el mes de agosto y me la DEVOLVIÓ, pero a finales del mes de agosto le pedí el favor al señor Armando Perdomo que recogiera una plata que estaba dentro del apartamento ya que yo estaba viajando. Preguntado manifieste esta diligencia, qué personas sabían que el dinero antes mencionado se encontraba dentro del apartamento. Contestó, solo yo y mi esposo Germán Espitia, pero él no sabía cuánto era el monto. Preguntado manifieste esta diligencia, si alguna persona, del apartamento, se le ha perdido o extraviado, la llave del apartamento contestó, No, no señor, es más, la chapa está cambiada hace cuatro meses aproximadamente. Preguntado manifieste esta diligencia, si alguna persona o empleado sabía que

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

usted guardaba constantemente dinero dentro del apartamento. Contestó, No, no, señor nadie, ya que ellos saben que yo tengo 2 apartamentos y no sabían nada. Preguntado manifieste a esta diligencia si el señor Armando Perdomo sabía con exactitud de que usted guardaba grandes sumas de dinero en el apartamento, contestó, Sí, sí, sí, sí, señor, porque él se daba cuenta de cuándo la empacábamos y la transportábamos. Preguntado manifieste esta diligencia, si usted tuvo algún tipo de inconveniente o problema con el señor Armando Perdomo, contestó, No, no, señor nada. Preguntado manifiesta, esta diligencia si el edificio cuenta con seguridad privada. Contestó. Sí, sí, señor. Preguntado manifieste esta diligencia, si usted le mencionó a la empresa de seguridad que usted estaría de viaje o fuera de la ciudad contestó, Sí, sí, señor, al que estaba de turno el día sábado. Preguntado manifiesta esta diligencia, si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia, contestó, Sí, sí, señor que se me hace extraño que la empresa de seguridad no avise hasta hoy en la tarde y no me avise más temprano que se me hace imposible que ellos se den cuenta que nos habían robado y hasta las horas de la tarde de hoy, nada más. No siendo nada más el motivo de la presente se da por terminada y firman quienes en ella intervinieron."

'Sobre lo acotado hay que decir: a) Un apartamento no está dado para custodiar sumas de dinero como las que, como las aquí comentadas; b) La demandante empleo el apartamento 601 del edificio arcadia básicamente para guardar dinero en efectivo sin anunciar a ello a la seguridad del edificio y en cambio, exponiendo a los copropietarios a incidentes de seguridad. c) Es cierto en la casa de cada cual se está en libertad de guardar los objetos que, sin infringir la ley, se puedan guardar, sin embargo, de esa libertad implica adoptar medidas de seguridad suficientes, anunciar a la administración y precaver los riesgos asociados a ello. Ahora, ya decantado que Cielo Losada Guzmán en términos de la demanda no perdió suma alguna de dinero porque los $1.838'983.000.00 son de la entera propiedad de Comercializadora Quiral S.A.S. queda claro, solo esta sociedad puede ser la llamada con ocasión del eventual perjuicio a dirigir la acción de responsabilidad extracontractual.'

'No obstante, y bajo la misma línea, el daño no logró demostrarse por parte de Comercializadora Quiral S.A.S.. De un lado, la pérdida de $1.838'983.000.00 no ha sido contabilizada, lo que se corrobora con los estados financieros aportados en curso de la exhibición documental que se indicó fue incompleta, parcial y adulterada por haberse introducido y retirado documentos de repositorio digital que, indicó el apoderado actor.'

'Tal y como quedó dicho en la sesión del día de ayer, a su vez lo corroboró el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, quien es el revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S. A su turno, quedó claro de lo hasta ahora discernido que la misma demandante, Cielo Losada Guzmán, no tenía clara la cantidad de dinero en efectivo que guardó en el apartamento 601 del edificio arcadia, propiedad de Comercializadora Quiral S.A.S., pues, son más de $600'000.000.00, la diferencia entre la noticia criminal, su ampliación y la presente demanda.'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'Y, a su vez, llama la atención que la pérdida de 1.000 millones de pesos en joyas resulte fácilmente o miscibles o despreciables por la dificultad para probar su preexistencia.'

'Ahora bien, las declaraciones recaudadas disponibles en él consecutivo 77 y más concretamente, la versión rendida por parte del señor Javier Enrique Tula Garzón, que se califica como ambigua y poco asertiva, dejó entrever que aunque es confuso en su relato, aseguró que transportó a Cielo Lozada Guzmán desde la sede del domicilio de la Comercializadora Quiral S.A.S., en dos ocasiones en un vehículo marca Renault de su propiedad con destino al edificio Arcadia PH, sin saber que con ella llevaba dinero en efectivo y menos la cantidad. Con todo, no señaló el testigo que en esas 2 ocasiones fuesen en el mes de noviembre de 2019.'

'También se extrae que ese testigo se desempeña como conductor del camión Chevrolet de placas BSÚ 847 para la sociedad demandante, en donde en diversas ocasiones traslado dinero en efectivo a la sede de Postobón y en el banco dentro de dicha sede, pago facturas a Postobón.'

'Seguidamente, la testigo Daniela Cortez Velázquez, ex auxiliar contable de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., fue enfática en señalar que por un lado Cielo Losada Guzmán filtraba que llevaría dinero en efectivo a su casa, al equipo de contabilidad de Comercializadora Quiral S.A.S., lo cual sabía también Javier Enrique Tula Garzón, Andreína Delgado Cárdenas y Armando Perdomo. A su turno señaló el valor de $1.838'933.000.00, logro decantarlo tras "Un arqueo de ventas", encontrando que correspondía al monto neto vendido entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. Pero no tenía claro el Estado de la cartera, es decir, solo tuvo en cuenta las ventas brutas dentro de su arqueo, no así la cartera en mora, que la hay, según los datos que reflejan los estados financieros de la sociedad demandante.'

'Aseguró la señora Cielo Losada Guzmán salió de viaje a atender una calamidad familiar en el mes de noviembre de 2019, cuando la misma señora Losada Guzmán indicó que fue a celebrar un contrato de compraventa sobre un predio ubicado en campo alegre huila. En todo caso, reiteró, porque se le reiteró la cuestión varias veces, que el monto de lo perdido por quiral correspondía al cruce entre el precio de lo vendido, que era el ingreso de Quiral y lo eventualmente sustraído, el apartamento 601 del edificio arcadia a la señora Cielo Losada, lo que permitió determinar el monto de la pérdida de quiral. Aseguró la testigo, además que en promedio se tenía un volumen de ventas para los meses de noviembre y diciembre

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

por ser temporada alta fácilmente alcanzaba 300 o 400 millones de pesos al día en promedio. Contó la testigo, fue enfática en señalar que no le consta el monto que la señora Cielo Lozada Guzmán se llevó el apartamento 601 del edificio Arcadia. Tampoco sabe cómo se transportaba ese dinero y menos sabe la cantidad porque nunca la acompañó o contó el dinero.'

'Ahora el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., dejó en claro que en dicha sociedad no se ha implementado el sarláf muy a pesar de los volúmenes de operaciones en efectivo. Acotó el valor de $1.838'983.000.00 corresponden al cruce de ingresos y egresos alcanzados entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. El testigo señaló que no despertó en él como revisor fiscal, ninguna inquietud relacionada con que siendo el monto perdido equivalente al 10% de las ventas totales de la sociedad, esta siguiesen facturando entre el 8 y el 16 de noviembre de 2019. También indicó que no revisó soporte de operaciones, sino memorias contables y documentos de trabajo de su antecesor y del Departamento de Contabilidad de la Sociedad Comercializadora Quiral S.A.S.'

'En todo caso, señaló, no le consta que la señora Cielo Losada Guzmán se llevara el dinero de la Comercializadora Quiral S.A.S. al apartamento 601 del edificio Arcadia PH. Tampoco el monto o la forma como lo transportaba.'

'Significa lo anterior que, ciertamente anda huérfano de prueba el daño cierto y directo con relación a la eventual culpa que pueda recaer en las demandadas, dados los hechos sucedidos entre el 18 y 19 de noviembre de 2019 en el edificio Arcadia PH, que hubiese originado un perjuicio a la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., pues las declaraciones se contradicen en lo medular.'

'Puestas, así las cosas, como en verdad lo son, se hace claro el fracaso de la acción contractual y extracontractual promovida por las demandantes, pero además, atendiendo la prohibición del artículo 361 y el numeral primero del artículo 365, ambos del Código General del Proceso, en consonancia con el numeral primero del artículo 5° del Acuerdo PSAA 1050054 del 05/08/2016 emanado de la sala administrativa del Consejo Superior de la judicatura, se condenará también en costas a las demandantes."

3. Tal como aparece consignado en las diferentes salidas procesales de la parte que represento, la acción incoada está dirigida a que las demandadas EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, MARIA LEONOR

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

MANTILLA DE SANCHEZ, HOLDING DE SEGURIDAD LTDA y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, se les declare civil y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que soportan CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S., por causa y razón del hurto o sustracción de bienes materiales de su propiedad causados el día martes 19 de noviembre de 2019 aproximadamente a la 01:30 horas de la madrugada; en el apartamento número 601 del EDIFICIO ARCADIA P.H., situado en la carrera 17 A número 116 – 97 de la ciudad de Bogotá, D.C., POR CULPA CIVIL CONTRACTUAL DIRECTA de manera principal frente a las dos demandantes y de forma subsidiaria en igual sentido con relación a la señora CIELO JAZMINY LOSADA GUZMÁN y CULPA EXTRACONTRACTUAL frente a la sociedad COMERCIALIZADORA QUIRAL D. S.A.S., al fallar en el ejercicio de vigilancia por intermedio de sus agentes; y que como consecuencia de ello se les condene a pagarles a las demandantes el monto de la indemnización proveniente de la substracción del dinero como bien material que fue objeto de la misma felonía consumada, en cuantía de UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.838’983.000.00); con los intereses comerciales moratorios sobre dicha suma, liquidados mes a mes a la tasa más alta vigente certificada por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) para el interés bancario corriente más un cincuenta por ciento, conforme a las fluctuaciones o variaciones que han tenido desde el día diecinueve (19) de noviembre de 2019 hasta la fecha en que el pago se verifique, al tenor de lo preceptuado en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el artículo 305 del Código Penal y el artículo 72 de la Ley 45 de 19901; y por el valor de la corrección monetaria sobre la cantidad determinada en los puntos anteriores desde el 19 de noviembre de 2019 hasta cuando se realice el pago, tomando como base el índice de precios al consumidor.

4. Ciertamente, como se sabe y así lo ha establecido la doctrina y jurisprudencia patria, se estructura la responsabilidad civil de la existencia de un hecho que vulnere el derecho ajeno, de lo cual emergen las acciones que ocupan nuestra atención tendientes a que se le resarzan a los demandantes los perjuicios sufridos como afectados con el hecho

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

generador del daño, sin importar que este provenga del incumplimiento de obligaciones contractuales, en cuyo caso nos encontraríamos frente a una responsabilidad contractual, o que su origen surja de un comportamiento no enmarcado dentro de un contrato, que da lugar a la responsabilidad extracontractual o también denominada aquiliana.

5. Conforme con el principio general de la responsabilidad civil consagrado en el Libro 4º, Títulos 12 y 34 del Código Civil, el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo, eventos en los cuales corresponde al demandante demostrar la culpa del demandado y el perjuicio padecido y su cuantía.
6. Con base en lo anteriormente expuesto y no existiendo duda que nos encontramos ante las dos acciones tanto contractual como extracontractual, respecto de la cual la jurisprudencia y doctrina patria han determinado que para su prosperidad, deben coexistir y estar plenamente probados los siguientes elementos: a) la existencia de una conducta culposa del demandado, por la inejecución o cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones; b) que se acredite legalmente que existe un daño cierto y directo y c) la existencia de una relación de causalidad entre la conducta culposa del demandado y el daño sufrido por el demandante.
7. Sería el caso entrar al estudio de tales presupuestos en el orden señalado, pero, atendiendo la sustentación de la sentencia recurrida y las razones por las cuales se negaron las pretensiones, primeramente, nos detendremos en lo relacionado con el daño.
8. La referida culpabilidad tiene que ver con el actuar positivo u omisivo del demandado contrario a la ley determinante de la causación del daño injusto demandado por el accionante, quien no se está obligado a soportarlo. Al respecto la jurisprudencia ha señalado "*...el daño o perjuicio es la primera condición de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontracontractual, pues la ley, la doctrina y la jurisprudencia unánime y constantemente enseñan que no puede haber responsabilidad sin daño; y esta última ha pregonado, de manera insistente y uniforme que, para que el daño sea objeto de reparación tiene que ser cierto y directo, por cuanto corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado, y como consecuencia inmediata de la culpa o delito; y ha puntualizado así mismo, que de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido, le corresponde demostrar, en*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

todo caso, el daño cuya reparación persigue y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima"[1]

9. La sustracción o hurto del dinero se demuestra con las denuncias y los reportes obrantes en diligencias, así como con los testimonios que se recaudaron en el curso del proceso, con los cuales, además, con ellos se demostró la preexistencia del dinero hurtado y su posterior desaparición, como son, ANDREINA DELGADO CARDENAS, JAVIER ENRIQUE TULA GARZÓN, les consta que en el apartamento las demandantes guardaban dinero, pues si bien es cierto, no presenciaron la llevada del dinero, ni su cuantía, si les consta que de la empresa sacaban gruesas sumas de dinero en efectivo y las trasladaban al apartamento, este último, incluso en algunas oportunidades traslado tales bolsas.

   Resulta una prueba imposible tratar, como lo pretende la sentencia censurada, que estas personas con certeza les conste la suma exacta de dinero guardada en el apartamento, ellos solamente pueden declarar que les consta el traslado de algunas sumas de dinero, sin que tampoco se les pueda exigir que les conste, las cuantías exactas que se trasladaban, pues, para que les conste la suma exacta sería exigirles que cuando iban a trasladar el dinero lo contaran, estas declaraciones para demostrar la cuantía deben ser interpretadas de manera conjunta con la contabilidad de la empresa, la cual, contrario a lo sostenido por el fallo apelado, la contabilidad aportada al plenario da cuenta de la suma extraviada, en cuantía de UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.838’983.000.00), el hecho que algunos de los archivos de manera inexplicable, quizá por lo pesado de los mismos, se hubieran borrado o no hubieren pasado, no constituye mala fe de mis poderdantes, ni le resta el valor probatorio a la contabilidad, pues, lo esencial de ella aparece incorporado a los autos.

   La contabilidad llevada en debida forma, según los mandamientos del código de comercio, el decreto 2649 y algunas normas tributarias, constituye prueba válida contra terceros, incluso, de la Administración de impuestos.

   La contabilidad presentada en el curso del proceso se sujeta a las prescripciones del Título IV del Libro I, del Código de Comercio y: 1. Muestra fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las

[1] *Corte Suprema de Justicia, sentencia del 29 de marzo de 1990.*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

operaciones correspondientes se encuentran especificadas de modo preciso con los comprobantes externos que respaldan los valores anotados. 2. Cumple todos y cada uno de los requisitos señalados por el Gobierno mediante reglamentos en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, hace posible ejercer un control efectivo y refleja en los libros presentados, la situación económica y financiera de la empresa.

Los libros de contabilidad presentados son prueba suficiente, puesto que reúnen los siguientes requisitos: 1. Están registrados en la Cámara de Comercio; 2. Están respaldados por comprobantes internos y externos; 3. Reflejan completamente la situación de la empresa; 4. No han sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos; 5. No se encuentran incursos en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio. (No se lleva Doble contabilidad)

Acorde con lo dicho encontramos que los libros de comercio y la contabilidad presentada tienen la fuerza probatoria para demostrar la pérdida del dinero reclamado, en la medida en que la contabilidad está llevada en debida forma, con el cumplimiento total de los requisitos legales.

La corte constitucional en sentencia C-062 del 30 de enero de 2008 ha hecho una magistral exposición respecto a las condiciones que debe cumplir la contabilidad para que constituya plena prueba, prueba que es válida tanto en aspectos comerciales, civiles, tributarios, etc.:

"*Ahora bien, el hecho de que los libros de comercio que se exhiben entre comerciantes constituyan plena prueba no significa que la aducción de los mismos sea absoluta o esté desprovista de reglas. El concepto de plena prueba debe matizarse en los siguientes sentidos.'*

'En primer lugar, tal como lo indica el doctrinante Gabino Pinzón, la eficacia probatoria de los libros de comercio se encuentra subordinada al cumplimiento de ciertos requisitos:'

'a) Para que los libros de contabilidad sean eficaces como prueba en litigio, se requiere que sean llevados en debida forma. En otras palabras, la contabilidad que puede hacerse valer como medio probatorio es la que cumple con las especificaciones de la ley. Una contabilidad que no satisfaga las exigencias legales o no lleve los libros indicados por la ley no puede considerarse fidedigna y, por tanto, no puede constituir prueba de lo que en ella se consigna. (…)'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla.'

'b) El carácter de plena prueba de los libros de comercio se predica de ellos en su totalidad indivisible, sin que le sea permitido al contendor solicitar la exhibición de los mismos, al tiempo que descalifica registros específicos o libros concretos. Así, quien solicita la exhibición de los libros no puede posteriormente formular reservas parciales, pues aquellos se suponen plena prueba de lo que pretende acreditarse.'

'Así lo prevé el artículo 72 al advertir que "la fe debida a los libros es indivisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su adversario estará obligada a pasar por todas las enunciaciones prejudiciales que ellos contengan, si se ajusta a las prescripciones legales y no se comprueba fraude".'

'c) El contenido de los libros de comercio constituye una confesión del comerciante que los lleva e impide que el mismo pruebe en contrario de lo que ha consignado en ellos. Este principio se vincula con aquél que sólo confiere valor de plena prueba a los libros llevados de manera regular, por lo que debe entenderse que sólo la contabilidad que se lleva de manera regular constituye plena prueba. Así se deriva del mismo inciso primero del artículo 271 del C.P.C. previamente citado.'

'Sobre la base de los principios generales expuestos, el régimen comercial nacional ha diseñado un complejo sistema de reglas que dan al juez instrucciones acerca de cómo hacer valer el valor probatorio de los libros de comercio en un proceso, de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de llevar libros de comercio.'

'a) En primer lugar, el artículo 70 del C.Co. establece que, si los libros de comercio están llevados de forma adecuada y concuerdan con los asientos contables, deberá decidirse de conformidad con su contenido y asiento. En esta hipótesis, la ley parte del supuesto de que los comerciantes trabados en contienda son cumplidos en su deber de llevar en forma regular los libros de comercio. Por ello la ley confiere a los libros de comercio el máximo de certeza posible. Como la obligación legal se cumple en debida forma, la ley admite el carácter de plena prueba del contenido de los libros de ambos. La información fidedigna que soportan los asientos contables permite extraer de ellos la información litigiosa.'

'b) Si los libros están debidamente diligenciados, pero no coinciden con los asientos contables, la ley da por cierto el contenido de los libros y papeles

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

de comercio, pues, por disposición del artículo 70 citado, aquellos constituyen confesión. Al respecto, afirma Rocco, que "los asientos de los libros constituyen una confesión escrita extrajudicial hacia la parte contraria", por lo que, en verdad, en esta hipótesis, los libros no pueden desecharse.'

'(…)"

10. La Corte Constitucional dentro de la Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 70 del Código de Comercio, con radicado D-6867, siendo Demandante: Mónica Gabriela Rosero Muñoz y Magistrado Ponente el doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA, de fecha treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008), sostuvo: "*La obligación de llevar cuenta y razón de los actos y operaciones tanto de contenido comercial como civil ha sido exigida tradicionalmente a los comerciantes como garantía de seriedad del ejercicio profesional, pues ello permite medir, identificar y registrar la información económica de su oficio. El Estado, los particulares y el mismo comerciante reciben beneficio directo del registro de los actos de comercio en los libros correspondientes.'*

'(…)'

'Los libros de comercio ofrecen un beneficio directo para el propio comerciante, porque le permiten estar al tanto del manejo y desarrollo de sus negocios. Esto le garantiza un conocimiento del estado financiero de su actividad y facilita la planeación de su gestión mercantil. ***De igual manera, desde el punto de vista del comerciante, el manejo correcto de los libros de constituye prueba idónea para hacer valer en los procesos judiciales que puedan surgir en desarrollo de su actividad comercial; pero, además, garantiza los derechos de los acreedores y permite reconstruir la conducta del comerciante****, de manera que es posible detectar posibles fraudes en su actividad o la comisión de conductas reprochables desde el punto de vista del código de ética. Ello, en últimas, constituye una herramienta de protección de su propio buen nombre, pues el buen desempeño profesional queda registrado en los libros con destino a posibles procesos judiciales. Gracias al manejo adecuado de los libros de comercio, los datos y archivos consignados se convierten en herramienta de innegable utilidad para el análisis de la empresa y para la planeación interna y externa de su gestión.'*

'(…)'

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

'Ahora bien, entre muchas de las funciones que cumplen los libros de comercio está la de llevar contabilidad de los negocios. La contabilidad es la técnica normatizada que le sirven de pauta al comerciante para registrar las transacciones que realiza y que le permite conocer en cualquier momento el estado de sus negocios. Es, en sentido estricto, la técnica que permite registrar, en forma cifrada, los movimientos de valores y bienes de una empresa, así como la apreciación de los resultados de la respectiva explotación.'

'La contabilidad cumple fundamentalmente dos funciones: permite que el comerciante tenga información relacionada con la marcha actual de sus asuntos, pero también comunica a terceros, ajenos al negocio, acerca del desenvolvimiento de los mismos. Así, la contabilidad tiene una función interna, que interesa exclusivamente al comerciante, pero se ve complementada por una función externa, que beneficia a la comunidad, es decir, a los bancos, los acreedores, los proveedores, los inversionistas, los organismos de vigilancia estatal, el aparato fiscal, los comerciantes con quienes pueden entablarse negocios o litigios y, en general, la comunidad toda.'

'Como se ha dicho, llevar la contabilidad regular de los negocios reporta un beneficio directo para el comerciante, porque le permite conocer en cualquier momento el estado de sus negocios, la magnitud de sus activos y pasivos y el grado de exigibilidad de los últimos; la velocidad de rotación del inventario, su posición frente a los proveedores y acreedores, la cuantía y estado de la cartera, el precio de costo de las mercancías que ofrece, etc.'

'También importa a los terceros porque permite que del estudio de los estados financieros de la empresa se determine el acceso a los créditos bancarios o se establezca el grado de responsabilidad del comerciante en caso de cesación de pagos o de incumplimiento de obligaciones. En efecto, la quiebra del comerciante afecta gravemente sus negocios, pero también tiene efectos en sus acreedores y, si la empresa es suficientemente importante, incluso puede extender sus efectos a toda la sociedad. De allí que las normas que regulan la contabilidad y que se reflejan en el correcto manejo de los libros se impongan no ya como obligaciones comerciales sino como mandato jurídico para beneficio particular y para precaver a los demás comerciantes y a la comunidad toda acerca de los efectos de una actividad en que la doctrina reconoce la administración de capitales ajenos.'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'De allí que el artículo 64 del Código de Comercio haya establecido, por ejemplo, que los "tribunales o jueces civiles podrán ordenar, de oficio o a instancia de parte, la exhibición y examen general de los libros y papeles de un comerciante en los casos de quiebra y de liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades".'

'(…)'

'En este contexto, el artículo 15 de la Carta Política indica que para "efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley". La disposición constitucional constata una vez más que las autoridades pueden acceder a dicha información para garantizar la cumplida ejecución de las obligaciones públicas, lo que no hace más que reforzar la idea de que los comerciantes deben cumplir con el deber de llevar los libros de contabilidad en aras del beneficio general.'

'(…)'

'En el derecho comercial existe la obligación de llevar libros de comercio pues estos son documentos vitales para el ejercicio de la actividad comercial en tanto que son punto de referencia para la comunidad respecto del desarrollo de la actividad mercantil del comerciante. ***En esa medida, si los comerciantes están obligados a llevar cuenta clara, completa y fidedigna de sus operaciones de comercio, resulta apenas entendible que los registros en ella contenidos constituyan prueba de su actividad y se les asigne un alto valor probatorio en caso de conflicto jurídico****.'*

'En otros términos, el alto nivel probatorio de los libros de comercio es resultado de la obligación precedente, que atiende a la satisfacción del interés público, de llevar adecuadamente este tipo de información.'

'El principio general en materia de valor probatorio de los libros de comercio se encuentra consignado en el artículo 68 del Código de Comercio, que hace parte del capítulo III dedicado al tema. El artículo en cita señala que los "libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente". El hecho de que los libros de comercio constituyan prueba plena en el debate entre comerciantes ha sido justificado así por la Corte Suprema de Justicia:'

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

‘“La ley admite pruebas especiales en asuntos mercantiles, por altas razones: como la de atender las costumbres o sistemas universales que consultan necesidades del comercio; como la de sancionar con ineficacia probatoria los libros mal llevados; como la de reconocer que el comerciante conoce la verdad de lo atestiguado por él y tiene interés en evitar su propio engaño; como la de compensar con fe y crédito la diligencia de quien lleva sus libros regularmente; como la de hacer amable la obligación legal de tener libros; como la de interpretar se han otorgado tácitamente el mandato recíproco de asentar en orden cronológico y día por día sus operaciones, y como la de admitir que los libros son comunes a quienes ejercen el comercio, porque dan el resultado y constituyen la prueba de relaciones también comunes. Todo naturalmente sobre la base de que los libros sean llevados con la regularidad requerida.”. (Corte Suprema de Justicia. M.P. Miguel Moreno Jaramillo. Sentencia de Julio 23 de 1936)’

‘Debe aclararse, en primer lugar, que el valor probatorio de los libros de comercio opera de manera plena en las relaciones entre comerciantes. De allí que el artículo 69 del Código de Comercio precise que, en las cuestiones mercantiles con personas no comerciantes, los libros son principio de prueba, que puede ser complementado con otras pruebas legales.’

‘(…)’

‘El principio anterior fue recogido por el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil que en su inciso primero prescribe:’

‘“Art. 271 C.P.C. Modificado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1º Numeral 121. Libros de Comercio.’

‘“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Comercio, los libros de comercio hacen fe en los procesos entre comerciantes, siempre que estén llevados en legal forma.’

‘(…)’

‘Sobre la base de los principios generales expuestos, el régimen comercial nacional ha diseñado un complejo sistema de reglas que dan al juez instrucciones acerca de cómo hacer valer el valor probatorio de los libros de comercio en un proceso, de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de llevar libros de comercio.’

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

'a) En primer lugar, el artículo 70 del C.Co. ***establece que, si los libros de comercio están llevados de forma adecuada y concuerdan con los asientos contables, deberá decidirse de conformidad con su contenido y asiento. En esta hipótesis, la ley parte del supuesto de que los comerciantes trabados en contienda son cumplidos en su deber de llevar en forma regular los libros de comercio. Por ello la ley confiere a los libros de comercio el máximo de certeza posible. Como la obligación legal se cumple en debida forma, la ley admite el carácter de plena prueba del contenido de los libros de ambos. La información fidedigna que soportan los asientos contables permite extraer de ellos la información litigiosa****.'*

'(…)" (Resaltados fuera de texto)

11. En este orden de ideas analizando las pruebas en su conjunto, esto es, los testimonios arrimados y la contabilidad se concluye inequívocamente que con las mismas se demuestra el daño ocasionado y su cuantía.

12. Señala la sentencia que "*Un apartamento no está dado para custodiar sumas de dinero como las que, como las aquí comentadas; b) La demandante empleo el apartamento 601 del edificio arcadia básicamente para guardar dinero en efectivo sin anunciar a ello a la seguridad del edificio y en cambio, exponiendo a los copropietarios a incidentes de seguridad. c) Es cierto en la casa de cada cual se está en libertad de guardar los objetos que, sin infringir la ley, se puedan guardar, sin embargo, de esa libertad implica adoptar medidas de seguridad suficientes, anunciar a la administración y precaver los riesgos asociados a ello.*"

    No encuentro en el ordenamiento jurídico nacional disposición alguna que prohíba guardar sumas de dinero en efectivo en una vivienda y que si se guarda deba informarse a la administración o seguridad del edificio y que si ello no se hace se expone a los copropietarios, es claro que en una vivienda se pueden guardar cualquiera bienes, que no estén prohibidos por la ley, como por ejemplo sustancias tóxicas, estupefacientes, en general las que en realidad generen riesgo para la comunidad y que se encuentren prohibidas expresamente, que en todo caso el dinero en efectivo no lo está y menos aun genera daño alguno para nadie, no entiende este servidor como y a qué pueden quedar expuestos los copropietarios de un edificio, cuando en una de sus unidades se guarda dinero, tampoco, el porqué deba informarse a la administración o a la seguridad, todo lo contrario, entre menos se informe es mejor para evitar tentaciones de los vigilantes,

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

además, la obligación de estos es vigilar, cuidar y salvaguardar todos y cada uno de los bienes que se guarden dentro de los apartamentos, sin importar que sea dinero, joyas, obras de arte, etc., la parte demandante tenia sus medidas de seguridad, tal como lo es tener una puerta de seguridad.

"*No obstante, y bajo la misma línea, el daño no logró demostrarse por parte de Comercializadora Quiral S.A.S.. De un lado, la pérdida de $1.838'983.000.00 no ha sido contabilizada, lo que se corrobora con los estados financieros aportados en curso de la exhibición documental que se indicó fue incompleta, parcial y adulterada por haberse introducido y retirado documentos de repositorio digital que, indicó el apoderado actor.'*

'Tal y como quedó dicho en la sesión del día de ayer, a su vez lo corroboró el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, quien es el revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S."

No es cierto que la suma de $1.838'983.000.00 no se encuentre contabilizada, esta suma si aparece contabilizada claramente y está plenamente demostrada en la contabilidad, tal como se puede evidenciar en los documentos exhibidos, el hecho de que algunos de los libros no hayan pasado, se repite por ser demasiado pesados, teniendo en cuenta su volumen, pero este hecho por si solo no le resta valor probatorio.

"*A su turno, quedó claro de lo hasta ahora discernido que la misma demandante, Cielo Losada Guzmán, no tenía clara la cantidad de dinero en efectivo que guardó en el apartamento 601 del edificio arcadia, propiedad de Comercializadora Quiral S.A.S., pues, son más de $600'000.000.00, la diferencia entre la noticia criminal, su ampliación y la presente demanda*."

Es verdad que ella no tenía clara la suma que allí guardaba, precisamente por ser una suma tan elevada y porque el dinero era llevado en diferentes oportunidades y cuantías, por ello, para determinar su cuantía exacta debería realizar un balance, como efectivamente lo hicieron para determinarla y es por ello por lo que en la denuncia manifestó expresamente, que una vez realizara la conciliación señalaría la suma exacta que estaba guardada en el apartamento.

"*Y, a su vez, llama la atención que la pérdida de 1.000 millones de pesos en joyas resulte fácilmente o miscibles o despreciables por la dificultad para probar su preexistencia*."

Contrario al sentido que le da la juez de primera instancia, esta actitud demuestra honorabilidad de parte de la demandante, pues, hubiera podido

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

conseguir facturas para demostrar su existencia, pero no, todo lo contrario, se resignó a perder definitivamente dicha suma porque legalmente no podía demostrar su preexistencia, puesto que son joyas que ha comprado en el extranjero y durante varios años, sin conservar las facturas o comprobantes de compra.

"*Ahora bien, las declaraciones recaudadas disponibles en él consecutivo 77 y más concretamente, la versión rendida por parte del señor Javier Enrique Tula Garzón, que se califica como ambigua y poco asertiva, dejó entrever que aunque es confuso en su relato, aseguró que transportó a Cielo Lozada Guzmán desde la sede del domicilio de la Comercializadora Quiral S.A.S., en dos ocasiones en un vehículo marca Renault de su propiedad con destino al edificio Arcadia PH, sin saber que con ella llevaba dinero en efectivo y menos la cantidad. Con todo, no señaló el testigo que en esas 2 ocasiones fuesen en el mes de noviembre de 2019.'*

'También se extrae que ese testigo se desempeña como conductor del camión Chevrolet de placas BSÚ 847 para la sociedad demandante, en donde en diversas ocasiones traslado dinero en efectivo a la sede de Postobón y en el banco dentro de dicha sede, pago facturas a Postobón."

Al igual que en lo anterior la juez se equivoca al analizar este testimonio, en primer lugar lo trata de ambigua y poco asertiva, sin explicar las razones por las cuales le da ese calificativo, por otra parte, si bien el testigo no menciona suma exacta alguna, ello no quiere decir que no le conste el transporte de dinero, pues, se repite, a los testigos solamente les consta que se transportaba dinero, pero no sus cuantías, porque por seguridad no se podía señalar su cuantía y para poder decir cuantía alguna deberían haber contado el dinero, acción que resulta ilógica, pues, siempre los conductores saben que transportan sus patronos, pero no las cuantías, ni las calidades o marcas de lo que llevan consigo.

"*Seguidamente, la testigo Daniela Cortez Velázquez, ex auxiliar contable de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., fue enfática en señalar que por un lado Cielo Losada Guzmán filtraba que llevaría dinero en efectivo a su casa, al equipo de contabilidad de Comercializadora Quiral S.A.S., lo cual sabía también Javier Enrique Tula Garzón, Andreína Delgado Cárdenas y Armando Perdomo. A su turno señaló el valor de $1.838'933.000.00, logro decantarlo tras "Un arqueo de ventas", encontrando que correspondía al monto neto vendido entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. Pero no tenía claro el Estado de la cartera, es decir, solo tuvo en cuenta las ventas brutas*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

dentro de su arqueo, no así la cartera en mora, que la hay, según los datos que reflejan los estados financieros de la sociedad demandante.'

'Aseguró la señora Cielo Losada Guzmán salió de viaje a atender una calamidad familiar en el mes de noviembre de 2019, cuando la misma señora Losada Guzmán indicó que fue a celebrar un contrato de compraventa sobre un predio ubicado en campo alegre huila. En todo caso, reiteró, porque se le reiteró la cuestión varias veces, que el monto de lo perdido por quiral correspondía al cruce entre el precio de lo vendido, que era el ingreso de Quiral y lo eventualmente sustraído, el apartamento 601 del edificio arcadia a la señora Cielo Losada, lo que permitió determinar el monto de la pérdida de quiral. Aseguró la testigo, además que en promedio se tenía un volumen de ventas para los meses de noviembre y diciembre por ser temporada alta fácilmente alcanzaba 300 o 400 millones de pesos al día en promedio. Contó la testigo, fue enfática en señalar que no le consta el monto que la señora Cielo Lozada Guzmán se llevó el apartamento 601 del edificio Arcadia. Tampoco sabe cómo se transportaba ese dinero y menos sabe la cantidad porque nunca la acompañó o contó el dinero."

En relación con esta testigo tienen igual fuerza lo argumentado para el anterior, además, ella sabía que el dinero lo llevaban para el apartamento de Cielo Lozada, pero no le consta las cuantías porque ella no manejaba dinero, ella solo registraba los asientos contables, lo cual le otorga autoridad para señalar el valor perdido, pues, en esos asientos contables es a donde consta la suma perdida.

En cuanto al estado de cartera, debe tenerse en cuenta que si no se tuvo en cuenta es porque todas las ventas son de contado y en efectivo, como aparece probado en autos.

El por qué y a qué viajó la señora Cielo Lozada, es un hecho intranscendente para el caso que ocupa nuestra atención, pues da lo mismo que haya viajado por una calamidad doméstica, a firmar una escritura o a realizar un negocio, este hecho ni le quita ni le pone a los hechos materia del proceso, pero, además, ella no tenía porque saber a qué había viajado su patrona, porque esto es algo personal, máxime cuando, es una persona que viaja permanentemente.

"*Ahora el testigo Iván Ernesto Díaz Morales, revisor fiscal de la sociedad Comercializadora Quiral S.A.S., dejó en claro que en dicha sociedad no se ha implementado el sarlaft muy a pesar de los volúmenes de operaciones en efectivo. Acotó el valor de $1.838'983.000.00 corresponden al cruce de*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

ingresos y egresos alcanzados entre el 8 y 16 de noviembre de 2019. El testigo señaló que no despertó en él como revisor fiscal, ninguna inquietud relacionada con que siendo el monto perdido equivalente al 10% de las ventas totales de la sociedad, esta siguiese facturando entre el 8 y el 16 de noviembre de 2019. También indicó que no revisó soporte de operaciones, sino memorias contables y documentos de trabajo de su antecesor y del Departamento de Contabilidad de la Sociedad Comercializadora Quiral S.A.S."

El hecho que no se haya implementado en la empresa el sarlaft, tampoco le resta credibilidad a la contabilidad ni a los testimonios, ni menos aún desvirtúa la existencia de la suma perdida y reclamada, puesto que no nos encontramos ante una investigación de lavado de activos o de financiación al terrorismo, casos en los cuales si tuviese relevancia jurídica este hecho.

Respecto de lo demás, es claro que este testigo para la época de los hechos no fungía como revisor fiscal, ni como empleado de ninguna de las demandadas, por tanto, él no tenía porque constarle los hechos materia del proceso y menos aún podía entrar a revisar lo actuado por sus antecesores, él, como es lógico, tenía que actuar con base en los registros contables existentes y con base en ello es que certificó la existencia del dinero perdido y extraviado.

Señala la sentencia que "*Tal declaración* (se refiere al interrogatorio de parte absuelto por la demandante Cielo Lozada) *perdió contrastación con la noticia criminal que allegó al dossier la Fiscalía 14 local en donde se lee*", pero de manera alguna señala de manera preciso porqué perdió contrastación, si dicha persona en una y otra salida procesal es coincidente, solamente difiere en lo relacionado con la cuantía, pero ella misma se reservó ese derecho de aclararla, porque como es lógico y como ya se repitió no podía señalar una cuantía exacta sin acudir a la contabilidad, tal como lo hizo.

En este orden de ideas y sin mas consideraciones, se extrae de lo dicho que contrario a lo sostenido en la sentencia materia de la alzada, si se encuentra plenamente demostrada la prexistencia del dinero sustraído en los hechos que originan el presente proceso, por ello, el juez de segunda instancia debe revocar la sentencia apelada y entrar al estudio de los demás aspecto, tal como a continuación se reseña.

13. Conforme con el precepto del artículo 1613 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante.

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

El daño emergente hace referencia a una disminución efectiva del patrimonio, incluyéndose en él la pérdida misma de elementos patrimoniales, tales como el dinero; mientras que el lucro cesante, lo constituye todas las ganancias ciertas que han dejado de percibiese o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho, para el caso de la pérdida de dinero en efectivo, tal como lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia patria, lo constituye los intereses de ésa suma de dinero que se presume su causación.

En consecuencia, para demostrar el daño emergente, basta con probar la propiedad y preexistencia del dinero y su pérdida a causa del hecho dañino, tal como se encuentra aprobado y conforme con lo atrás expuesto, mientras que, en relación con el lucro cesante, en tratándose de dinero este se presume.

A este respecto el tratadista Jorge Suescún Melo en disertación acerca de la prueba en responsabilidad contractual señala:

"Según el esquema básico y general de la responsabilidad contractual, al demandante le corresponde aportar la prueba de la existencia y la cuantía del daño.'

'Los únicos casos en los que el demandante está relevado de su tarea de demostrar los daños se presentan cuando la ley misma los establece, esto es, cuando hay "evaluación legal", o cuando las partes los tasan de antemano, a través de una cláusula penal o de un pacto de arras, es decir mediante "evaluación convencional" de los deméritos económicos.'

*'**Evaluación legal hay en el incumplimiento de obligaciones de dinero, supuesto en el cual los perjuicios se reparan con el pago de los intereses de mora**. Para ese efecto, tanto el artículo 1617 del Código Civil, como los artículos 883 y 884 del Código de Comercio, presumen la generación de un perjuicio por el mero hecho del incumplimiento y determinan la forma de repararlo. Esta presunción se basa en el carácter fructuario que la ley reconoce al dinero (artículo 717 del Código Civil), de manera que el demandante no está obligado a demostrar perjuicios, ni su cuantía. Este es uno de los pocos casos en que la reparación*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

no corresponde a un daño demostrado, por lo que el propio legislador determina el monto de resarcimiento, independientemente del perjuicio efectivamente sufrido.[2]

'(...)'

*'Por tanto, no puede el deudor pretender demostrar que el acreedor no hubiere invertido el dinero o lo hubiere hecho con rendimientos inferiores a los que le ofrece el interés de mora legal o convencional, según el caso. La situación probatoria del acreedor de obligaciones de dinero es entonces, particularmente favorable, ya que está relevado de demostrar el acaecimiento del perjuicio, su naturaleza y su monto. Si a esto se le suma el hecho de que en materia de responsabilidad civil contractual se presume, por regla general, la culpa del deudor incumplido -**presunción que ciertamente opera cuando se trata de obligaciones dinerarias- se tiene que el acreedor sólo estará obligado a demostrar la existencia de la obligación, y a declarar que el deudor no la pagó en el tiempo debido. Con esta mínima labor probatoria el acreedor podrá obtener el resarcimiento del daño experimentado mediante el reconocimiento de los intereses de mora pactados o de los que, en su defecto, haya fijado la ley.***"[3] (el resaltado y subrayado es del suscrito)

14. En consecuencia, al demostrar la propiedad y preexistencia del dinero y su perdida en el hurto que origina esta acción, quedan demostrados los perjuicios materiales, incluyendo en ellos el lucro cesante y el daño emergente, quedando claro que el lucro cesante no es otro que los intereses comerciales moratorios dejados de percibir por la suma de dinero hurtada, liquidados conforme lo ordena la ley, mes a mes a la tasa más alta vigente certificada por la hoy Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) para el interés bancario corriente más un cincuenta por ciento, conforme a las fluctuaciones o variaciones que han

[2] *SUESCÚN MELO, Jorge, Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, Trabajo No 9, La Prueba en responsabilidad contractual (La presunción de culpa y los medios para desvirtuarla) Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad de los Andes, Tomo I, p. 402.*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

tenido desde el día diecinueve (19) de noviembre de 2019 hasta la fecha en que el pago se verifique, al tenor de lo preceptuado en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el artículo 305 del Código Penal y el artículo 72 de la Ley 45 de 19901.

15. Tal como quedó expuesto al analizar lo relativo a la legitimación en causa, la responsabilidad de la copropiedad EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, como de la administradora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ nace de su deber de vigilancia y cuidado en la ejecución del contrato de vigilancia, lo cual se desprende de lo siguiente: a) artículo 72 del reglamento de propiedad horizontal "*Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones se radican en cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Los administradores responderán por los perjuicios que, por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del Reglamento de Propiedad Horizontal. PARAGRADO 1°. – Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuara como representante legal de la persona jurídica el presidente del Consejo de Administración o, cuando este no exista este órgano administrativo, el presidente de la Asamblea General que lo nombre. PARAGRAFO 2°. - En los casos de edificios residenciales, quien ejerza la administración directamente, o por encargo de una persona jurídica contratada para tal fin, deberá acreditar idoneidad para ocupar el cargo, que se demostrara en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. (…).*"

De lo anterior se concluye que era y sigue siendo obligación de la copropiedad, EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, por

[3] *Ibídem, Trabajo No 10, Comentarios sobre el régimen de tasas de interés, p. 592*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

conducto del consejo de administración y especialmente de su presidente, contratar a la administradora del edificio, para lo cual debería establecer su idoneidad y, por consiguiente, vigilar el cumplimiento y ejecución del contrato y si así no lo hizo, de ahí nace su culpa y por ende su responsabilidad de resarcir los perjuicios ocasionados con su omisión. Esto se deduce del artículo 10 del reglamento de propiedad horizontal cuando establece en relación con la persona jurídica que nace del mismo, que "*Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.*"

También resulta dicha responsabilidad de lo consagrado en el artículo 71 del Reglamento de propiedad horizontal que señala las funciones del consejo de administración, estableciendo que "*Al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, (…) c) Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso, (…) d) Asesorar al Administrador en todas las cuestiones relativas al mejor funcionamiento de la Copropiedad, ejecutar ampliamente el control de su gestión y cuando lo juzgue conveniente dar cuenta al respecto a la Asamblea General de Propietarios. h) Vigilar la Administración de este edificio residencial y dictar los reglamentos internos tendientes a que se mantenga el orden, el aseo de las zonas comunes y la armonía entre sus residentes. (…) i) Autorizar al Administrador para que realice las reparaciones materiales de carácter urgente para la higiene, seguridad*"

Por ahora se deja establecido cuáles son las responsabilidades y obligaciones de la copropiedad EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, como tal por conducto del Consejo de Administración, cual es, la de vigilancia y cuidado en la ejecución del contrato de administración y de la seguridad de la copropiedad, tanto en los bienes de uso común

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

como de los de las unidades privadas y más delante de manera global se señalará de manera concreta cuáles fueron las falencias.

En el contrato de prestación de servicios de administración celebrado entre el presidente del Consejo de Administración del EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL con la administradora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, en las cláusulas primera y quinta la administradora se comprometió a "*prestar sus servicios profesionales como ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO ARCADIA y a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio como administradora, los cuales debe realizar de conformidad con el reglamento de propiedad horizontal y las condiciones y clausulas adicionales del presente documento. (…) se obliga a cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con lo establecido en la ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal, y las cláusulas de este contrato.*"

Como el contrato de prestación de servicios de administración es tan ambiguo, quizá elaborado de esta manera para tratar de evadir responsabilidades, debemos acudir a lo que determina el reglamento de propiedad horizontal respecto del administrador para determinar claramente sus obligaciones y responsabilidades, encontrando al efecto que dicho reglamento establece en su artículo 74 como funciones del administrador "*(…) 15. Contratar y organizar previa autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea General, el personal necesario para la vigilancia, aseo y mantenimiento del edificio y mantenerlo bajo su directa dependencia y responsabilidad. (…)*"

Nótese bien como esta disposición determina de una manera diáfana que es obligación de la administradora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ, no solamente contratar y organizar el personal necesario para la vigilancia del edificio, sino también la de mantener ese personal bajo su directa dependencia y responsabilidad, es decir, que no le bastaba con firmar el contrato de prestación de servicio de vigilancia, sino que, además, el personal continuaba bajo su dependencia y responsabilidad, es más,

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

según esta disposición si quiera podía delegar esta responsabilidad, como lo hizo en el caso presente, lo cual nos conlleva a concluir sin lugar a equívocos que también es responsable de su negligencia y de la prestación del servicio de manera equivocada e irresponsable, tal como más adelante se determina de manera puntual.

16. Ahora bien, en el contrato de prestación de servicios de vigilancia suscrito entre la administradora del EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL, señora MARIA LEONOR MANTILLA DE SANCHEZ y la empresa de vigilancia y seguridad privada HOLDING DE SEGURIDAD LTDA en sus cláusulas primera y quinta se pactó que "*EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar el SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA en el EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal ubicado en la carrera 14 A No. 116-97 de esta ciudad, a partir del 20 de septiembre de 2009 para cubrir las veinticuatro horas del día durante todos los días de las semanas del mes (sic), por los trescientos sesenta y cinco días del año, prestado por hombres de seguridad. PARAGRADO: EL CONTRATISTA podrá aumentar el número de hombres para la prestación del servicio, previa autorización por escrito del CONTRATANTE la cual hará parte del presente contrato y el costo adicional se acordará entre las partes. (…)' 1. Prestar en forma directa o indirecta el servicio descrito en esta cláusula de objeto del presente contrato. 2. Asumir en forma directa las obligaciones que se deriven, (…) 4. Cumplir con las obligaciones contractuales que sus asociados que prestan el servicio. 5. En cuanto al servicio de vigilancia sin arma se compromete a prestarlo dentro del EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal y el acceso a los parqueaderos del mismo. Cumplir eficazmente con las labores encomendadas y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio*."

Para dar cumplimiento a lo convenido, la empresa de vigilancia HOLDING DE SEGURIDAD LTDA, entre otros, durante la ejecución del contrato puso a disposición de la copropiedad EDIFICIO ARCADIA PROPIEDAD HORIZONTAL a sus empleados, EDUARD ALFONSO SUAREZ GARCIA, gerente de operaciones de la empresa de vigilancia demandada, quien coordinaba los servicios; a los vigilantes JOSE SANTOS CABRERA DIAS, quien se encontraba de servicio en el momento de los hechos materia del proceso; JOSE MAURICIO VALENCIA PARRA; JOSE NORBEY MURILLO

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

GIRALDO; WALTER JULIAN NAVARRO ROJAS; y, LUIS ALBERTO DUQUE MORALES.

Se es consciente que la obligación contraída por la empresa de vigilancia HOLDING DE SEGURIDAD LTDA es de "*medio y no de resultado*", pues, su compromiso fue – *prestar el SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA en el EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal - para cubrir las veinticuatro horas del dia durante todos los dias de las semanas del mes (sic), por los trescientos sesenta y cinco dias del año, prestado por hombres de seguridad - En cuanto al servicio de vigilancia sin arma se compromete a prestarlo dentro del EDIFICIO ARCADIA Propiedad Horizontal y el acceso a los parqueaderos del mismo* – con lo cual se estaba comprometiendo a adoptar las previsiones que fueran necesarias para mantener en óptimas condiciones de seguridad el edificio en general; lo que conllevaba a vigilar y cuidar la vida, honra y bienes de los residentes de la copropiedad, pues, incluso se comprometió a – *aumentar el numero de hombres para la prestación del servicio, previa autorización por escrito del CONTRATANTE la cual hará parte del presente contrato* –, esto es, que era tan amplia su responsabilidad que si lo consideraba necesario, conforme las necesidades que ella debía analizar, podía aumentar el personal; dentro del contrato se encuentra ínsita la obligación de cumplir con todas las normas y disposiciones que las leyes o reglamentos vigentes o que se expidan, contemplen respecto de la ejecución de la vigilancia. Lo que significa que su obligación se entiende cumplida con el hecho adelantar todas con profesionalismo las diligencias y gestiones requeridas para otorgar una adecuada y eficaz vigilancia al edificio residencial, adelantando en consenso con la administración y el consejo de administración las acciones necesarias para evitar, entre otros, hechos como el que da origen a la presente acción en la cual se hurtaron los bienes de uno de los residentes.

En palabras de la doctrina, citada por una de las Salas de decisión civil del Tribunal de Bogotá, en uno de sus fallos, la deudora se obligó —*a poner al servicio del acreedor los medios de los cuales dispone; de hacer toda diligencia para ejecutar el contrato -, por lo que su compromiso obligacional no fue —exactamente un hecho -, sino - el esfuerzo del hombre, un esfuerzo*

Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.

constante, perseverante, tendiente a la adopción de una actitud frente a sus propias cualidades para aproximarse a la finalidad deseada[4] –.

17. Como se advirtió en el libelo introductorio, dentro de la investigación penal llevada a término por la denuncia formulada por la acá demandante, que se adelantaba en la Fiscalía ciento uno (101) Local de la fiscalía general de la Nación, con el número de radicado 110016108112201900752, se han realizado varias entrevistas, de cuyos dichos se extrae la responsabilidad de las demandadas.

    EDUARD ALFONSO SUAREZ GARCIA, gerente de operaciones de la empresa de vigilancia demandada, manifiesta que como cuatro meses atrás de los hechos el guarda de seguridad, que era relevante, le informó verbalmente que un sujeto que iba en bicicleta cerca al edificio a donde ocurrieron los hechos se le acercó y le ofreció mejorar su bienestar, pero que como no informó al edificio. Siendo el supervisor estaba en la obligación no solamente de informar al edificio, sino a sus superiores y él directamente adoptar las medidas necesarias para evitar que algo sucediera, como en efecto sucedió, de a donde nace la responsabilidad de la empresa de vigilancia, así como de la administradora y de la copropiedad.

    JOSE MAURICIO VALENCIA PARRA, ratifica lo anterior cuando manifiesta que un día había pasado en el puesto de trabajo del edificio Arcadia una persona que le ofreció dinero para que lo dejara ingresar a hurtar un apartamento sin decirle cual sin que él haya accedido, que luego de entregar el turno se encontró nuevamente al sujeto insistiéndole que lo dejara ingresar al edificio que no pasaba nada y que a medida que él no aceptaba le subía la oferta de dinero que le iba a dar para dejar ingresar a los ladrones, sin aceptar la propuesta lo empujó, lo cual le fue informado al jefe de operaciones EDUARD ALFONSO SUAREZ quien lo citó a las instalaciones administrativas y le dijo que si no renunciaba se encargaba de dañarle la tarjeta de ingreso a cualquier empresa de seguridad privada, motivo por el cual presentó la renuncia y hasta esa fecha laboró. Lo cual no solamente demuestra la responsabilidad de la empresa de vigilancia, sino que incluso, se podría inferir algo más.

    VICTOR JAIR GUZMAN SANTA, quien se desempeña como todero del edificio Arcadia, ratifica lo anteriormente dicho, quien manifiesta que se enteró que en días anteriores a los hechos, el vigilante JOSE NAVARRO le

[4] *Philippe Le Torneau. La Responsabilité Civile, 2ª ed. Paris. Ed. Dalloz, 1976, num. 1086. Citado por Tamayo Jaramillo*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

envió un mensaje por WhatsApp diciéndole que ya no iba a volver más al edificio y que después de esto le comentó CABRERA que habían abordado a NAVARRO unos señores preguntando por VALENCIA y que ellos requerían hablar con NAVARRO por un trabajo que tenían, porque VALENCIA les había recibido una plata “para darles puerta”, pero se les había torcido y que si él les aceptaba darles puertas y que si sacaban esa plata que había en ese apartamento, él iba a ganar muy buena plata para que dejara de ser un peón; que NAVARRO inmediatamente después que hablo con esos sujetos se fue para la empresa a HOLDING de esta novedad, procediendo la empresa a llamar a JOSE MURILLO y JOSE BARRERA y les preguntaron que si a ellos también los habían abordado, que no fueran a decir nada para no formar pánico en el edificio, que ellos se encargaban de la investigación. También informa que en la esquina del salón comunal del edificio hay instalada una cámara blanca que estaba conectada con la empresa de vigilancia vía wifi, pero que desde hacía más de un año estaba desconectada, de lo cual tenían conocimiento los vigilantes.

WALTER JULIAN NAVARRO ROJAS, manifiesta que en el mes de octubre de 2019 cuando se encontraba de turno en el edificio Arcadia se acercó una persona a la portería del edificio y después de varias artimañas logró que él le diera su número de celular, por lo que el sujeto lo llamo y le dijo que, si se podían ver y que lo invitaba a tomarse unas cervezas, sin acceder a ello. Días después, cuando entregó el turno de noche se lo volvió a encontrar, invitándolo a tomar tinto, ante lo cual se negó, fue cuando le dijo que ya le habían dado un dinero a VALENCIA para que lo dejara ingresar al edificio, que siendo sincero ellos tenían las llaves de un apartamento del edificio ARCADIA en el cual había una plata grande y que tocaba sacarla antes de diciembre, que trabajara con ellos ofreciéndole la suma de cuarenta millones de pesos para que los dejara ingresar , respondiéndole que con él se había equivocado, dejándolo plantado, procediendo de inmediato a trasladarse a la empresa HOLDIGN en donde habló con ADRIANA y EDUARD, exponiéndoles lo sucedido, solicitándoles que por su seguridad lo cambiaran de puesto.

Como se puede observar de los anteriores testimonios, tanto la administradora del edificio ARCADIA como la empresa de vigilancia HOLDING DE SEGURIDAD no fueron nada diligentes en la investigación

Javier. De la Responsabilidad Civil. T.I. Temis. Bogotá. 1999, pág. 290.

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

de los hechos, pues, prácticamente no hicieron nada, además, la empresa de vigilancia no realizó ninguna investigación sobre los hechos, a pesar que desde meses atrás tenía pleno conocimiento de las intenciones que existían de entrarse los ladrones a uno de los apartamentos a donde se guardaba dinero, no obstante, en lugar de informar a la administración del edificio para que esta tomara las medidas necesarias e informara a los copropietarios, todo lo contrario trató de acallar a los guardas que tenían esta información, en lugar de tomar las medidas necesarias para evitar que esto sucediera. Ante la evidente amenaza debió tomar medidas para evitar lo que era un hecho indiscutible que iba a suceder, pues lo sucedido, era como se dice “un hurto anunciado”.

Sabiendo que la cámara que conecta al edificio vía Wifi con la empresa de seguridad se encontraba desactivada no hicieron nada para restablecer su servicio.

De acuerdo con las anteriores declaraciones el EDIFICIO ARCADIA presentaba serias falencias de seguridad, pues carecía del funcionamiento de la cámara que conectaba el edificio con la empresa de seguridad, existiendo amenaza del hurto debieron instalar sistemas de seguridad, de circuito cerrado y de setos, incluso, debieron haber colocado más vigilantes, pues en el contrato de servicio de vigilancia se encontraba autorizado tal acontecimiento.

18. Por consiguiente, es preciso reconocer que, aunque contractual, la responsabilidad que se les atribuye a las demandadas, ésta tiene como fundamento “la culpa probada”, la que se encuentra demostrada, pues, probado se encuentra que aquellas incurrieron en acciones y en omisiones de tal entidad que fueron determinantes para que pudiera ser sustraído el dinero, es decir, se encuentra plenamente probado que pese a sus deberes contractuales, las demandadas no obraron con la diligencia y cuidado que les eran exigibles para garantizar la seguridad de los bienes de los copropietarios.
19. De lo anterior también se concluye sin lugar a equivocaciones que existe una relación de causalidad entre el comportamiento de las demandadas y la sustracción del dinero, pues, de seguro que, si cuando las demandadas se enteraron de las amenazas de hurto, alertados, no solamente por una sino por varias personas, hubieran adoptado las medidas necesarias para evitarlo, el hurto no hubiera ocurrido, puesto que las demandadas no tuvieron la debida *diligencia y cuidado*. Es que incluso, la empresa de

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

vigilancia tenía la obligación de informar de este hecho tanto a la administradora como al consejo de administración, para que estos adoptaran las medidas pertinentes, entre otras por ejemplo informar a los residentes para que adoptaran sus propias medidas de seguridad y como así no lo hizo es responsable del hecho dañino y ello directamente conllevó a que sucediera el insuceso, lo que corrobora la relación de causalidad, además, de contera, como se vio atrás, también hace responsables a las otras dos demandadas. Por tanto, como la regla general es que, "*quien debe una prestación nacida de una convención no puede justificar su incumplimiento sino con prueba de que éste ocurrió por fuerza mayor o caso fortuito o por culpa de la víctima..., cuando la obligación es de medio, entonces podrá justificarlo demostrando diligencia y cuidado, es decir que no obstante haber sido cuidadoso y diligente, el resultado que de él se esperaba no se logró*".

20. En este orden de ideas y como se ha dicho a la saciedad, se encuentra probado que las demandadas no actuaron con diligencia y cuidado; tampoco existe una fuerza mayor o caso fortuito, y, contrario a lo sostenido por las demandadas no existe culpa de la víctima, pues, de una parte los residentes de un inmueble pueden guardar en él lo que quieran, exceptuando algunas sustancias y elementos prohibidos y su seguridad depende de la seguridad de todo el edificio, que es la misma de todos los residentes, sin que en Colombia esté prohibido guardar sumas de dinero en efectivo, por grandes que estas sean, pues a lo que se está obligado es a demostrar su lícita procedencia, no les es atribuibles a las demandantes ninguna tipo culpa, máxime cuando la propietaria del apartamento no fue informada que se encontraban planeando un hurto en alguno de los apartamentos del edificio, para que de esta manera si lo consideraba necesario adoptar las medidas que fueran necesarias, caso en el cual, de haber sido informada de este hecho, si se les hubiere podido atribuir culpa, pero como así no sucedió la culpa es atribuible exclusivamente a las demandadas.
21. Pero, en el supuesto que existiere algún grado de culpa, tal como veladamente lo señala la sentencia recurrida, que no lo existe, debe en consecuencia, entrar a analizar la responsabilidad compartida.
22. En consecuencia, encontrándose comprobado el *iter criminis* de hurto con las pruebas arrimadas con la demanda y con las contestaciones, así como

[5] *Consejo de Estado –Sección Tercera-; Sent. 5902 de 24 de octubre de 1990.*

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

con las que se recauden en el decurso del proceso, quedando por demostrar el daño en el patrimonio de las demandantes, ya que se itera, se encuentra plenamente probada la culpa de las demandadas y la relación de causalidad entre el hurto acaecido y la pérdida del dinero, para que estén obligadas a resarcir los perjuicios causados, que se concretan a la suma de dinero hurtada, que lo son UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($1.838’983.000.00), cuya preexistencia y consecuente pérdida se encuentra también probada.

23. Basten las anteriores consideraciones para solicitar, con mi acostumbrado respeto, de los honorables Magistrados, se sirvan revocar la sentencia materia de la apelación y en su lugar, declarar la improsperidad de todas y cada una de las excepciones propuestas y en su lugar acceder a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, condenando en costas de las dos instancias a la parte demandada.

Atentamente,

ROLFY FORERO CUADRADO
C.C. No. 19’295.429 de Bogotá
T.P. No. 70.325 del C.S. de la J.

*Calle 19 No. 4-88 Of. 802 * Cel. 310 224 17 04 * E-mail: rolfy.forero@gmail.com * Bogotá, D.C.*

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA RV: 11001310303620140048602 - SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 07/09/2023 15:37

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (92 KB)

SUSTENTACION APELACION SENTENCIA SEPTIEMBRE DE 2023- H.Carrillo.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR CHAVARRO MAHECHA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: HERNANDO VASQUEZ VALENZUELA <nandov28@hotmail.com>
Enviado: jueves, 7 de septiembre de 2023 15:36
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 11001310303620140048602 - SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Señores
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA DE DECISION CIVIL
Atte: Honorable Magistrado Dr. JAIME CHAVARRO MAHECHA
E. S. D.

PROCESO: PERTENENCIA
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO
DEMANDADO: MANUEL AURELIO CORAL BERNAL
RADICADO: 11001310303620140048602
INSTANCIA: SEGUNDA – APELACION SENTENCIA
ASUNTO: SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION

Anexo memorial en PDF para su trámite.

Del Honorable Magistrado muy respetuosamente,

HERNANDO VASQUEZ VALENZUELA
C. C. No. 19´329.798 de Bogotá
T. P. No. 61.766 del C. S de la J.

Dir: Carrera 10 No. 15-39 of:801
Cel: 3125428876
nandov28@hotmail.com

Señores
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA DE DECISION CIVIL
Atte: Honorable Magistrado Dr. JAIME CHAVARRO MAHECHA
E. S. D.

PROCESO: PERTENENCIA
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO
DEMANDADO: MANUEL AURELIO CORAL BERNAL
RADICADO: 11001310303620140048602
INSTANCIA: SEGUNDA – APELACION SENTENCIA
ASUNTO: SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION

HERNANDO VASQUEZ VALENZUELA, mayor y domiciliado en esta ciudad, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado judicial del señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, demandante dentro del referenciado radicado; a su señoría muy respetuosamente manifiesto que por el presente escrito y dentro del término de Ley sustento el Recurso de Apelación oportunamente presentado contra la Sentencia proferida por el juzgado 51 civil del circuito de esta ciudad, el 2 de mayo de 2023, a lo cual procedo de la siguiente forma:

Tal como lo manifesté al presentar el Recurso de apelación en la audiencia en la cual se profirió la sentencia impugnada, específicamente al relacionar los reparos a la misma, reitero Honorable Magistrado que me aparto plena y totalmente de la decisión emitida por el señor Juez a quo, inicialmente por cuanto no hizo en su conjunto una valoración equitativa y ajustada a la sana critica de todas las pruebas, pues si bien menciono algunas de las allegadas al proceso, solo tuvo en cuenta las allegadas por el demandado MANUEL AURELIO CORAL BERNAL, específicamente cuando hace mención a que al demandado CORAL BERNAL, el 30 de septiembre de 2010, se le adjudicó el 50% del inmueble objeto del proceso, en remate ordenado por el juzgado 31 civil municipal de Bogotá, pero omitiendo tener en cuenta que a dicho demandado en ningún momento se le realizo la entrega o posesión material del inmueble; tanto es así, que el mismo MANUEL AURELIO CORAL BERNAL, en el interrogatorio de parte que se le formulo EL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 dentro del proceso, específicamente, en el trámite de las excepciones previas que formulo dicho demandado de FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR ACTIVA Y COSA JUZGADA, manifestó que tenía demandado al señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, en proceso verbal reivindicatorio de la posesión del 50% del inmueble, proceso el cual cursa ante el juzgado 28 Civil del circuito de esta ciudad bajo el radicado 11001310302820160040400. Dicha prueba señoría no la tiene en cuenta el señor juez, pues la misma da certeza de la posesión ejercida por el señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, pues téngase en cuenta que al demandar la reivindicación del inmueble reconoce efectivamente la posesión ostentada por mi representado, hecho que como lo reitero se determina por la misma manifestación del demandado MANUEL AURELIO CORAL BERNAL, no obstante el señor juez 51 Civil del Circuito de esta ciudad, injustificadamente desconoce el derecho de mi poderdante, omitiendo tener en cuenta la evidente prueba que indico a su digno despacho.

Con lo indicado, considero respetuosamente que el señor Juez a quo falla contrario a lo establecido por el artículo 176 del C.G.P., pues no aprecia las pruebas allegadas al proceso en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana

critica, pues téngase no solo en cuenta lo anteriormente señalado, sino igualmente que no le da ningún tipo de valor a las pruebas documentales allegadas por la parte que represento oportunamente al proceso, como lo es el contrato de compraventa celebrado el 20 de abril del año 2004 entre HECTOR ALFONSO CASTELLANOS PRIETO como vendedor, con el señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO como comprador, respecto del inmueble Apartamento No. 804 interior 4, sometido al régimen de propiedad horizontal que forma parte de la Agrupación de vivienda SANTA MARIA DEL SALITRE ll Etapa, el cual es objeto de este proceso, contrato que es plena prueba y no fue tachado ni objeto de reparo alguno por parte de los demandados ni del despacho, no obstante se desconoce el motivo por el cual el señor juez a quo no lo tiene en cuenta al momento de proferir el fallo.

Igualmente el señor juez a quo, tampoco tiene en cuenta el certificado oportunamente allegado con la demanda, expedido por el señor RAFAEL BECERRA DEAQUIZ, quien como administrador del Conjunto residencial SANTA MARIA DEL SALITRE P. H., certificó el 10 de julio de 2014, que el señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO es poseedor y residente desde abril de 2004 y que se encontraba a paz y salvo por todo concepto ante la administración al 31 de julio de 2014 del apartamento 804 torre 4 de dicha copropiedad.

A más de lo anterior, si bien el señor juez A quo en la sentencia impugnada hace referencia a las pruebas testimoniales allegados oportunamente por la parte actora, esto es, los de los señores MARTHA INES GUTIERREZ DIAZ, DAIRO RICARDO RONCANCIO PEÑA Y YOLANDA CASTILLO RUIZ, quienes fueron enfáticos en reconocer como poseedor del inmueble objeto del proceso al señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, señalando el tiempo, las mejoras, el ánimo y actos de señor y dueño realizados por mi poderdante en el inmueble, el pago de impuestos y servicios realizados por el mismo, no obstante de manera por demás injustificada, el señor juez a quo cita una jurisprudencia sobre la diferencia entre posesión y tenencia, la cual considera la parte actora que no solo no viene al caso, pues no se vislumbra en las declaraciones de los mencionados testigos que hayan podido incurrir en error alguno, pues señalaron claramente los actos de posesión por parte del señor CARRILLO ALVARADO que no dejan lugar a duda de que hicieron referencia a la posesión ejercida por mi mandante, descalificando tácitamente el señor juez dichas pruebas y fallando contrario a las evidencias de las mismas.

Valga agregar Honorable Magistrado, que el señor juez a quo no hace valoración alguna de la prueba de Inspección judicial realizada por parte del despacho en la cual se pudo no solo identificar plenamente el inmueble objeto del proceso, sino igualmente observar la posesión de mi poderdante en el inmueble, el mantenimiento y utilización para vivienda del señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO y sus hijos, la posesión pública, pacifica e ininterrumpida que mi mandante ha tenido en el inmueble, y el hecho destacable que la diligencia se cumplió sin ningún tipo de oposición o circunstancia que perturbara la realización de la misma.

El señor juez a quo en la sentencia impugnada señala erróneamente que la señora NORMA PIEDAD GALEANO desconoció la posesión del señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, hecho que se descarta tanto así que en las diferentes diligencias al hacer la oposición se allego el documento de compraventa en la cual consta la compra de la propiedad y posesión por parte del señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO del inmueble aquí objeto de usucapión.

Además obsérvese que en la diligencia en la cual señala el señor Juez que HERNANDO CARRILLO rindió testimonio ante el Juez 38 Civil Circuito de Bogotá en pregunta anterior a la parte que hace referencia el Señor Juez cuando dicho Despacho le indaga al testigo LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO que haga un relato breve de los hechos que le consten, contestó "…Yo compré el apartamento, el 24 de abril de 2004 como reza el documento…" "…el cual lo pagué de la siguiente manera unas consignaciones hechas por mí nombre a BANCAFE que el Señor HECTOR CASTELLANOS le debía a BANCAFE y dos carros que le di, un Trooper y una Toyota RAV lo cual eso reza en el proceso, las consignaciones el contrato los datos de los dos carros, ahí demuestro como yo adquirí el apartamento y como se lo pague a don HECTOR CASTELLANOS…", lo anterior denota que desde el momento en que adquirió el inmueble de manos del Señor HECTOR CASTELLANOS tuvo la posesión tanto en el animus y el corpus y así lo acreditó ante los diferentes despachos judiciales, más aún cuando en dichos procesos siempre se allegó el contrato de compraventa del inmueble objeto de usucapión, lo cual desconoce de manera notoria e injustificada el señor Juez Aquo y por ende se hace procedente que se revoque la sentencia en su totalidad.

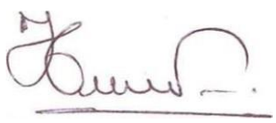
Además téngase en cuenta Honorable Magistrado que habiendo sido convocada como demandada en este proceso la señora NORMA PIEDAD GALEANO, la misma habiendo sido notificada debidamente, no hizo oposición alguna a las pretensiones y hechos de la demanda, hecho que contradice de sobremanera el criterio del señor juez a quo, quien pasa por alto incluso esta conducta de dicha demandada, ya que téngase en cuenta Honorable Magistrado que en las pretensiones de la demanda se solicita la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor de mi representado de la totalidad del inmueble (100%), es decir tanto del 50% del demandado MANUEL AURELIO CORAL BERNAL y el 50% de la demandada NORMA PIEDAD GALEANO, por lo que al no valorar la totalidad de las pruebas recaudadas en su conjunto el Señor Juez a quo solo hace pronunciamiento al parecer sobre la parte correspondiente a MANUEL AURELIO CORAL BERNAL, pero nada dice respecto a lo correspondiente a la demandada NORMA PIEDAD GALEANO, grave falencia que deja en evidencia el yerro significativo que realiza el Señor Juez a quo al emitir el fallo impugnado.

Mayor prueba que el Señor Juez aquo no hace una valoración conjunta y ajustada a la sana crítica de las pruebas allegadas al proceso, es importante señalar que el Señor Juez aquo en la sentencia recurrida hace alusión al proceso reivindicatorio de la posesión que se adelantó ante el juez 38 Civil Circuito de esta ciudad en la cual la demandada fue la Señora NORMA PIEDAD GALEANO, pero omite tener en cuenta la demanda reivindicatoria de la posesión que posteriormente instauro MANUEL AURELIO CORAL BERNAL contra LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, que se adelanta ante el Juzgado 28 Civil Circuito de esta ciudad, omisión grave dado que no se explica como si CORAL BERNAL reconocía a NORMA PIEDAD GALEANO como poseedora del inmueble, porque será que demanda a HERNANDO CARRILLO ALVARADO ante el JUZGADO 28 civil del Circuito de esta ciudad?, la razón es muy lógica Honorable Magistrado, y esta es que LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO siempre fue y ha sido el poseedor de la totalidad del inmueble objeto del proceso, y no obstante tener ese conocimiento inicialmente demandó a NORMA PIEDAD GALEANO a sabiendas que el poseedor en efecto es mi poderdante, lo cual desconoce tácitamente el Señor Juez a quo en detrimento de los legítimos derechos e intereses de mi representado.

Con todo lo anterior, debo indicar Honorable Magistrado, que lo indicado es suficiente para demostrar que el fallo del señor Juez a quo no corresponde a una valoración conjunta, lógica y ajustada a la sana critica de las pruebas recaudadas, e igualmente que dicho fallador yerra al desconocer que con las referidas pruebas la parte actora demostró en cabeza del señor LUIS HERNANDO CARRILLO ALVARADO, todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley, para adquirir por el modo de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el inmueble objeto del proceso, razón por la cual la impugnada sentencia debe ser revocada en su totalidad y debiéndose en su lugar acceder a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, tal como muy respetuosamente lo solicito.

En los anteriores respetuosos y breves términos dejo sustentado el Recurso de Apelación para que su señoría se sirva proveer de acuerdo a la Ley.

Del Honorable Magistrado muy respetuosamente,



HERNANDO VASQUEZ VALENZUELA
C. C. No. 19´329.798 de Bogotá
T. P. No. 61.766 del C. S de la J.
Dir: Carrera 10 No. 15-39 of:801
Cel: 3125428876
nandov28@hotmail.com

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: Ref.- Verbal - Declarativo Demandante: INDUSTRIAS METÁLICAS GRAG S.A.S. Demandados: CONSORCIO INTERDISEÑOS, INTERNACIONAL DE INGENIERÍA S.A.S., Y D & C INGENIERÍA S.A. Radicado: 11001310303920170028102

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 8/09/2023 3:30 PM

Para:**2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>**

1 archivos adjuntos (210 KB)

SUSTENTACIÓN APELACIÓN 11001310303920170028102[47925].pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

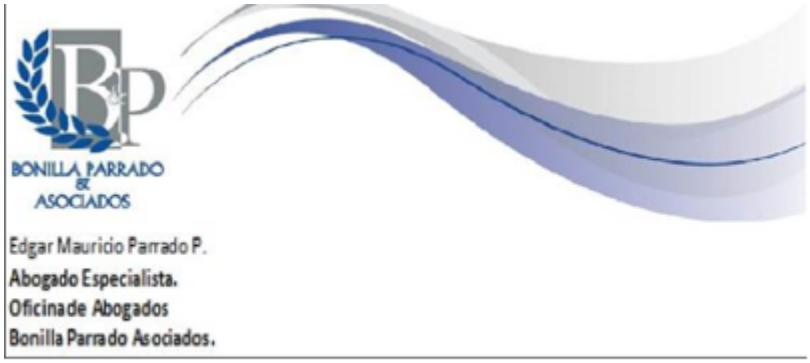
Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Edgar Mauricio Parrado Parrado <asesorparrado@gmail.com>
Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2023 15:27
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Ref.- Verbal - Declarativo Demandante: INDUSTRIAS METÁLICAS GRAG S.A.S. Demandados: CONSORCIO INTERDISEÑOS, INTERNACIONAL DE INGENIERÍA S.A.S., Y D & C INGENIERÍA S.A. Radicado: 11001310303920170028102 Asunto: Sustentación recurso de apelación

Respetados Doctores.

Por medio del presente adjunto sustentación del recurso de apelación dentro del proceso de la referencia.



Edgar Mauricio Parrado P.
Abogado Especialista.
Oficina de Abogados
Bonilla Parrado Asociados.

BONILLA PARRADO & ABOGADOS ASOCIADOS

Abogados Especializados

BonillaParradoAsociados@Outlook.com

Teléfono: Móvil 313 – 3959007 / 313 - 4897614

Bogota D.C. – Colombia

Honorable señor Magistrado:
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
Sala Civil.
M.P. Dr. Iván Darío Zuluaga Cardona
E. S. D.

Ref.- ***Verbal - Declarativo***
Demandante: INDUSTRIAS METÁLICAS GRAG S.A.S.
Demandados: CONSORCIO INTERDISEÑOS, INTERNACIONAL DE INGENIERÍA S.A.S., Y D & C INGENIERÍA S.A.
Radicado: 11001310303920170028102

Asunto: ***Sustentación recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia***

EDGAR MAURICIO PARRADO PARRADO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, D.C., abogado titulado, portador de la cédula de ciudadanía No. 80.222.705, de Bogotá, y de la Tarjeta Profesional No. 204.303, otorgada por el C. S. de la J., actuando en mi condición de apoderado de **INDUSTRIAS METÁLICAS GRAG S.A.S. ANTES LIMITADA,** en su condición de demandante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, encontrándome dentro del término legal, procedo a sustentar el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida el día 30 de junio de 2023 por el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá, en los siguientes términos:

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA PRESENTAR SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN A LA SENTENCIA

El artículo 12 de la ley 2213 de 2022, ha previsto el trámite para la sustentación del recurso de apelación de sentencias, así:

> *"Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes."*

Con base en lo anterior, dado que el auto admisorio de la apelación fue proferido el día 31 de agosto de 2023, notificado por estado el día 1° de septiembre de la misma anualidad, los términos de sustentación objeto de estudio son los siguientes:

Providencia de admisión de apelación:	31-08-2023
Notificación de providencia:	01-09-2023
Ejecutoria de la providencia:	06-09-2023
Inicio de término para sustentar:	07-09-2023
Finalización de término para sustentar:	13-09-2023

Así las cosas, este memorial de sustentación se presenta dentro de los términos legales.

FUNDAMENTOS DE LA SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN:

Teniendo en cuenta los reparos realizados a la sentencia al momento de la interposición del recurso, los fundamentos de la sustentación de la apelación son los siguientes:

A. Desconocimiento del sometimiento de los jueces al imperio de la Ley.

El sistema legal Colombiano ha sido previsto como uno de *Civil Law*, el cual no es otra cosa que el Derecho escrito, el cual busca garantizar la seguridad jurídica de sus administrados.

Es en desarrollo de lo anterior, que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 230, establece claramente que:

> *"Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley."*

Y que también, fue previsto como norma procesal en el artículo 7° del Código General del Proceso, delimitando el actuar del fallador en sus decisiones finales, a los parámetros de los artículos 280 y 281 del C.G. del P.

Por su parte el Legislador, garantizando, igualmente el principio de seguridad jurídica, desde la promulgación del Código Civil en el año 1873, dispuso en su artículo 27, que:

> *"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu."*

Postulados constitucionales, sustanciales y procesales, que fueron desatendidos por el fallador de instancia, por las razones que paso a explicar:

Para la causa litigiosa que se estudia, el Juzgador desconoció que el presupuesto principal fáctico exigido para la prosperidad de las pretensiones, corresponde al reglado en el canon 831 del Código de Comercio, que establece con claridad absoluta, que ***"Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro."*** y enfiló su estudio, a establecer la existencia de un título valor, para de esta forma determinar la existencia de una prescripción de la acción de enriquecimiento cambiario, desconociendo, que el canon 882 del mismo ordenamiento, con desconocimiento absoluto, de que el enriquecimiento injustificado, no solo puede ser reclamado antes del paso del tiempo, sino que el mismo también se deriva de aquellos títulos valores que traen "*implícita la condición resolutoria del pago,* ***en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera****."*

En el caso objeto de estudio, el Juez de Primer Grado, deniega las pretensiones incoadas, bajo el argumento de que, para la prosperidad del enriquecimiento sin causa, debe existir un título valor y que, ante la ausencia de la aceptación de las facturas aportadas al plenario por parte del acreedor, se torna improcedente la acción. Cimentando su posición en jurisprudencias disimiles del caso que nos ocupa.

La honorable sala debe tener en cuenta en el caso objeto de estudio, que:

1. La doctrina jurisprudencial aducida por el *A quo,* correspondiente a las sentencias SC 2343/18, STC 4293/18, y Sentencia de fecha 9/9/2013, únicamente hacen alusión a los términos prescriptivos de la acción de enriquecimiento cambiario, situación que no fue objeto de debate en el presente asunto, puesto que no se alegó dicho medio exceptivo, ni tampoco es procedente su decreto de manera oficiosa. Razón por la cual, dichos elementos jurisprudenciales son incongruentes como mecanismos auxiliares para la decisión censurada.

2. En cuanto a la sentencia proferida el día veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso 110013103043-2010-00202-02, con ponencia del Dr. **JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA,** debe tenerse en cuenta la interpretación errónea dada por el Juzgador de primer grado, quien si bien, trae a cita lo manifestado por el Tribunal, y establece con claridad, los requisitos de la acción de enriquecimiento sin causa, los pasa por alto en el asunto objeto de estudio, pues limita su análisis a los requisitos de existencia del título valor (facturas), desconociendo que él mismo, a minuto 20:33 de la diligencia aduce que la falta de aceptación de las facturas, conllevan como consecuencia que las mismas no tengan dicho carácter.

Así las cosas, analizados los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción incoada, se evidencia de manera prístina, que el Juzgador de Primera Instancia desconoció los imperativos de los postulados constitucionales, sustanciales y procesales, que limitan su actuar a la Ley, y que se encuentran contenidos en los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso, dando lugar a la prosperidad de la reclamación judicial en sede de apelación, puesto que:

(i) Ante el no pago de los bienes y servicios prestados por el demandante, los cuales quedaron probados con las documentales aportadas y obtenidas de manera oficiosa, el interrogatorio de parte al demandante y la testimonial, es evidente la existencia del enriquecimiento por parte de la pasiva;
(ii) Que el incumplimiento del pago de los bienes y servicios por parte del demandado a la actora, le conllevo a un empobrecimiento de ésta;
(iii) Que el enriquecimiento se tornó injusto o sin causa, pues no existió prueba alguna de una razón para la negativa de la parte demandada al pago;
(iv) Que ante la inexistencia de título valor, por la falta de aceptación de las facturas, como el mismo *A* quo lo reconoce, dejó al demandante sin ningún otro medio para obtener satisfacción de su derecho, más que la acción que nos ocupa;
(v) Que esta acción no se ejercitó contra una disposición imperativa de la ley.

(vi) Y no menos importante, que según lo previsto en el inciso primero del artículo 774 del C.Co, a pesar de la omisión de cualquiera de los requisitos de la factura, la validez del negocio jurídico que dio origen a la misma no se ve afectada.

Con base en lo anterior, solicito de manera respetuosa, se revoque la sentencia objeto de impugnación, y como consecuencia de lo anterior se acceda a las suplicas de la demanda.

B. Desconocimiento del principio de libertad probatoria.

El Derecho Probatorio Patrio, contempla como uno de sus principios la libertad probatoria, el cual ha sido definido por la doctrina, en los siguientes términos:

El maestro *Natan Nisimblat*, manifiesta:

"El principio de libertad o pro libertatis encuentra su fuente directa en la noción del Estado social de derecho, y se erige como solución a los casos dudosos, "pues ha de tener presente que la restricción es lo excepcional, y lo excepcional (la pena es un claro ejemplo) debe justificarse sin dejar margen de duda.

En materia penal o sancionatoria, aún civil o contencioso, cuando una interpretación restrinja el derecho de la persona deberá desecharse de plano para encontrar la que mejor proteja su libertad, la cual, para los efectos del derecho procesal y, por supuesto, para el proceso, debe entenderse ampliamente como un criterio de interpretación frente a la ampliación de las normas que consagran derechos tanto subjetivos como adjetivos y no solamente bajo el supuesto de la realización del derecho subjetivo a la "libertad personal".[1]

Por su parte, la doctrina clásica desarrollada por el Dr. Hernando Devis Echandia, preceptúa:

"Principio de la libertad de la prueba. Para que la prueba cumpla su fin de lograr la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso, en forma que se ajuste a la realidad, es indispensable otorgar libertad para las partes y el juez puedan obtener todas las que sean pertinentes, con la única limitación de que aquellas que por razones de moralidad versen sobre hechos que la ley no permite investigar, o que resulten inútiles por existir presunción legal que las hace innecesarias (en cuanto se persiga con ellas probar lo presumido; no cuando se intenta desvirtuar la presunción, a menos que en el último caso sea de derecho) o sean claramente impertinentes o inidóneas (cfr., punto 18 de este número) o aparezcan ilícitas por otro motivo (véase núm.137, m).

Dos aspectos tiene este principio: libertad de medios de prueba y libertad de objeto. Significa lo primero que la ley no debe limitar los medios admisibles, como sucede en algunos códigos de procedimiento, sino dejar al juez la calificación de si el aducido o solicitado tiene

[1] **NISIMBLAT Natan,** Derecho Probatorio técnicas de juicio oral, Ediciones Doctrina y Ley, pág. 128, Bogotá, D.C., 2017.

relevancia probatoria; lo segundo implica que puede probarse todo hecho que de alguna manera influya en la decisión del proceso y que las partes puedan intervenir en su práctica. El segundo puede existir sin el primero. En el Código de Procedimiento Civil colombiano hay libertad de medios de prueba.

El segundo de estos aspectos es fundamental, porque dentro de los medios aceptados, generalmente en los sistemas que señalan taxativamente (documentos, testimonios, indicios, peritación, inspecciones, confesión; las presunciones no son pruebas sino que eximen de prueba), puede comprenderse los más modernos métodos de investigación, si se tiene un criterio amplio. En cambio, ***limitar la actividad probatoria en forma caprichosa por el juez o con una absurda regulación previa de la ley, sería atentar contra los derechos de las partes, la debida defensa, la contradicción efectiva y la igualdad de oportunidades;*** *por este motivo no existen más restricciones que las señaladas en el punto siguiente.*

Al estudiar los sistemas de apreciación de la prueba vimos que para denominar el que regula previamente su valor debe hablarse más bien de tarifa legal y no de prueba legal, porque lo último significa que la ley señala los medios admisibles, y puede coexistir con una completa libertad para apreciar las pruebas aportadas al proceso (cfr., núm 27). El Código de Procedimiento Civil colombiano consagra ambas libertades."[2]

En la sentencia de primer grado, se vislumbra el resquebrajamiento de este principio por parte del Juzgador de Primera instancia, quien enunció como segundo cargo de la improsperidad de las pretensiones la ausencia de dictamen pericial que demostrara el detrimento del patrimonio del actor y el incremento del patrimonio del demandado, desconociendo que este principio solo se limita con la conducencia, pertinencia, utilidad, licitud y legalidad de las pruebas.

Por lo tanto, pretender imponer una carga probatoria determinada como lo es el dictamen pericial, sería volver al vetusto régimen de la tarifa legal, máxime, cuando el injusto detrimento del patrimonio del actor y el incremento del patrimonio del demandado, quedó plenamente demostrado a través de las medios de convicción arrimados al plenario, como son todas las documentales aportadas a instancia de la actora y las obtenidas como prueba de oficio, los testimonios, y el interrogatorio de parte.

Ahora bien, si bien es cierto los Juzgadores deben proferir su decisión con base en valoraciones prácticas a la luz de la sana crítica y la libre convicción, dicho actuar no puede estar por encima de los derechos fundamentales de los individuos, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando el Juzgador sin realizar un estudio basado en un criterio razonable del interrogatorio practicado al representante legal de la demandante, le resta valor a éste, esquivando así, su derecho a la honra consagrado en el artículo 21 de la Constitución Nacional, el cual desarrolla el postulado legal de la buena fe contemplado en el artículo 768 del Código Civil, y por ende

[2] **DEVIS Echandia,** Hernando, Teoría General de la Prueba, Editorial Temis, Sexta Edición, Tomo I, pág.123, Bogotá, D.C., 2012.

con una transgresión absoluta del debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia.

Sean estos argumentos suficientes, para derrumbar la sentencia de primer grado.

Con base en lo anterior, de manera respetuosa solicito al Despacho, se revoque la sentencia censurada, y como consecuencia de ello, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Con toda consideración y respeto,

De los señores Magistrados,

EDGAR MAURICIO PARRADO PARRADO
C. C. No. 80.222.705 de Bogotá
T. P. No. 204.303 del C. S. de la J.